ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS315/R
16 de junio de 2006

(06-2828)

Original: inglés

COMUNIDADES EUROPEAS - DETERMINADAS CUESTIONES ADUANERAS

Informe del Grupo Especial

ÍNDICE

Página

LISTA DE ANEXOS ..... **xviii**
CUADRO DE ASUNTOS CITADOS EN EL PRESENTE INFORME ..... **xx**
LISTA DE ABREVIACIONES ..... **xxiii**
I. INTRODUCCIÓN **1**
II. ASPECTOS FÁCTICOS **2**
A. MARCO LEGISLATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ADUANERA DE LAS CE 3
1. El Arancel Aduanero Común **3**
2. El Código Aduanero Comunitario **4**
3. El Reglamento de Aplicación **4**
B. INSTITUCIONES Y MECANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES ADUANERAS DE LAS CE 4
1. La Comisión **4**
2. Los Estados miembros **5**
a) Efectos jurídicos de la normativa aduanera de las CE en los Estados miembros 5
b) Aplicación de la normativa aduanera comunitaria 5
3. El Comité del Código Aduanero **6**
4. Los tribunales de las CE **8**
a) Cometido y funciones de los tribunales de los Estados miembros 8
b) Cometido y funciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 8
5. Colaboración entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión **9**
a) Reglamento (CE) Nº 515/97 del Consejo 9
b) Programas de acción 9
6. Formación **10**
7. Control presupuestario y financiero **10**
C. ESFERAS ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA A QUE SE REFIEREN LOS ESTADOS UNIDOS EN SUS COMUNICACIONES 10
1. Clasificación arancelaria **10**
a) Reglamentos de clasificación 11
b) Notas explicativas del SA y criterios de la OMA 11
c) Notas explicativas de la Nomenclatura Combinada 11
d) Dictámenes del Comité del Código Aduanero 12
e) Información arancelaria vinculante 12
2. Valoración en aduana **14**
3. Auditoría posterior al despacho a libre práctica **16**

4. Sanciones por infracciones de la normativa aduanera de las CE 16
5. Transformación bajo control aduanero 17
6. Procedimiento de domiciliación 18
7. Cobro de la deuda aduanera 18
D. REVISIÓN DE LAS DECISIONES ADUANERAS 18
1. Decisiones sobre el objeto de la revisión judicial 18
2. Revisión por las autoridades aduaneras y los tribunales de los Estados miembros 19
3. Recurso directo al Tribunal de Justicia 19
III. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES 20
A. ESTADOS UNIDOS 20
B. COMUNIDADES EUROPEAS 20
IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 20
A. PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS 20
1. Introducción 20
2. Las CE no aplican su derecho aduanero de manera uniforme 21
a) Clasificación aduanera 21
b) Valoración en aduana 23
c) Regímenes aduaneros 24
d) La Comisión, a través del Comité del Código Aduanero, no aporta uniformidad a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria 26
3. Las CE no mantienen tribunales o procedimientos para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras 27
4. Conclusión 29
B. PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 30
1. Introducción 30
2. Antecedentes fácticos 31
a) Principios generales del sistema jurídico comunitario 31
i) Las instituciones comunitarias y el proceso legislativo de las CE 31
ii) Las competencias de ejecución de la Comisión Europea 31
iii) Los efectos jurídicos del derecho comunitario 33
iv) La Comisión, los Estados miembros y la ejecución del derecho comunitario 33
b) La aplicación de la normativa aduanera comunitaria 35
i) Los principios básicos de la unión aduanera de las CE 35
ii) Los compromisos internacionales de las CE en la esfera de la administración aduanera y la cooperación 35
iii) El marco legislativo de la unión aduanera de las CE 36
iv) La Comisión, los Estados miembros y el Comité del Código Aduanero 37

v) *Clasificación arancelaria* *38*
vi) *Valoración en aduana* *41*
vii) *Transformación bajo control aduanero* *42*
viii) *Procedimiento de domiciliación* *43*
ix) *Sanciones por infracciones de la legislación aduanera* *44*
x) *Cooperación aduanera en las CE* *44*
xi) *Aspectos presupuestarios y financieros* *46*
xii) *La continua evolución de la normativa aduanera comunitaria* *46*
c) El control judicial en el derecho comunitario 47
i) *El sistema judicial de las CE* *47*
ii) *La protección judicial en el sistema jurídico de las CE* *48*
iii) *Decisiones prejudiciales: el Tribunal de Justicia y la interpretación y aplicación uniforme del derecho comunitario* *49*
iv) *Revisión judicial de las decisiones aduaneras* *50*
d) Comparación con el sistema de los Estados Unidos 51
i) *La aplicación del derecho aduanero estadounidense* *51*
ii) *La revisión de las decisiones aduaneras en el derecho estadounidense* *51*
3. Las alegaciones de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 52
a) Las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 52
i) *El párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras, y no a las propias leyes aduaneras* *52*
ii) *El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe la forma en que los Miembros de la OMC deben aplicar sus leyes aduaneras* *53*
iii) *El párrafo 3 a) del artículo X del GATT establece normas mínimas* *54*
iv) *El sentido de "aplicación uniforme"* *54*
b) La carga de la prueba 55
c) Cuestiones generales que subyacen a las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 56
i) *¿Es compatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT el hecho de que la normativa aduanera comunitaria sea aplicada por las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las CE?* *56*
ii) *Las CE cuentan con medidas para garantizar la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria en todas las CE* *57*
iii) *Algunas rectificaciones necesarias en relación con el cometido y el funcionamiento del Comité del Código Aduanero* *57*
iv) *La función del Tribunal de Justicia para garantizar la uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria* *58*
d) Alegaciones de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 59

i) *Clasificación arancelaria* *59*
El Tribunal de Justicia y la clasificación arancelaria 59
Información arancelaria vinculante 60
Supuestas divergencias en la práctica de clasificación de las CE 62
ii) *Valoración en aduana* *64*
La aplicación uniforme de las normas de valoración en las CE 64
El Informe 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE 66
El asunto Reebok 67
iii) *Transformación bajo control aduanero* *67*
iv) *Procedimiento de domiciliación* *67*
v) *Sanciones por infracciones del derecho aduanero* *68*
4. La alegación formulada por los Estados Unidos en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT 70
a) Las prescripciones del párrafo 3 b) del artículo X del GATT 70
b) Las CE proporcionan una pronta revisión de las decisiones aduaneras 71
i) *La alegación relativa a la inexistencia de un tribunal aduanero comunitario* *71*
ii) *Prontitud de la revisión* *72*
C. PRIMERA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 72
D. PRIMERA DECLARACIÓN ORAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 82
1. La importancia del caso 82
a) La importancia constitucional del caso para las CE 82
b) La importancia sistémica del caso para la OMC 82
2. La aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria 83
a) Los requisitos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 83
b) La carga de la prueba 84
c) Las alegaciones formuladas por los Estados Unidos 85
i) *Clasificación arancelaria* *85*
ii) *Valoración en aduana* *86*
iii) *Transformación bajo control aduanero y procedimiento de domiciliación* *87*
iv) *Sanciones por infracciones del derecho aduanero* *87*
3. La pronta revisión de las decisiones aduaneras en las CE 88
a) Las prescripciones del párrafo 3 b) del artículo X del GATT 88
b) La carga de la prueba 88
c) Las alegaciones formuladas por los Estados Unidos 89
i) *La inexistencia de un tribunal aduanero comunitario* *89*
ii) *La falta de prontitud de la revisión* *89*
E. SEGUNDA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS 90

1. Introducción 90

2. El párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no contiene una norma relativa específica de los Miembros 91

a) Las obligaciones del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no varían según las características concretas del sistema de administración aduanera de un Miembro. 91

b) Los Estados Unidos no pretenden la armonización de los sistemas de administración aduanera de los Miembros de la OMC 93

3. El párrafo 3 a) del artículo X no es una "disposición subsidiaria", "que establece normas mínimas", que se infringe únicamente cuando de la aplicación no uniforme de la legislación aduanera de un Miembro se desprende una pauta discernible 93

a) No existe fundamento para la caracterización del párrafo 3 a) del artículo X por las CE como "disposición subsidiaria", "que establece normas mínimas" 93

b) Los Estados Unidos no tienen la obligación de demostrar la existencia de una "pauta" de aplicación no uniforme para establecer que las CE han infringido su obligación dimanada del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 94

i) La obligación relativa a la "pauta" que reivindican las CE no tiene fundamento en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 94

ii) Las CE ni siquiera llegan a explicar lo que en su opinión han de establecer los Estados Unidos para cumplir el denominado requisito sobre la "pauta" 94

iii) La referencia a una "pauta" en el informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Acero laminado en caliente *no guarda relación con la presente diferencia 95*

c) Las CE reconocen la existencia de divergencias entre las autoridades de los Estados miembros en cuanto a la aplicación de la legislación aduanera de las CE 96

4. Los instrumentos que, según las CE, garantizan la aplicación uniforme no sirven para ello 96

a) La mayoría de los instrumentos que según las CE aseguran una aplicación uniforme no son vinculantes, son de uso discrecional o tienen una naturaleza sumamente general 96

b) La información arancelaria vinculante no garantiza la aplicación uniforme 97

i) El sistema de las CE permite la búsqueda de IAV favorable entre las autoridades aduaneras de los 25 Estados miembros 97

ii) La facultad de la autoridad aduanera de un Estado miembro de revocar IAV sobre la única base de su propia reconsideración de las normas de clasificación aplicables, como se afirma en la decisión Timmermans*, redunda en detrimento de la aplicación uniforme 98*

c) La posibilidad de revisión por los tribunales de los Estados miembros como medio "normal" de reconciliar divergencias en la aplicación de la legislación aduanera de las CE por los Estados miembros no cumple la obligación que corresponde a las CE en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 de aplicar su legislación aduanera de manera uniforme 99

5. Al argumentar que asuntos como las medidas que establecen sanciones y los procedimientos de auditoría son ajenos al ámbito de su obligación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, las CE se basan en una interpretación errónea de lo que significa "aplicar" la legislación aduanera 100

a) Las CE se basan en una interpretación errónea de lo que significa "aplicar" la legislación aduanera 101

b) Las sanciones y los procedimientos de auditoría desempeñan una función fundamental en la puesta en práctica de la legislación aduanera de las CE 102

c) Las medidas que establecen sanciones y los procedimientos de auditoría se caracterizan correctamente como instrumentos para la aplicación de la legislación aduanera de las CE 102

i) Una ley puede ser un instrumento para aplicar otras leyes 102

ii) Basar una alegación de aplicación no uniforme en las diferencias entre las leyes de los Estados miembros que son instrumentos para aplicar la legislación aduanera de las CE no es incompatible con la constatación del Órgano de Apelación de que una alegación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 debe concernir a la aplicación de la legislación aduanera y no al fondo de esa legislación 103

iii) Las constataciones del grupo especial en el asunto Argentina - Pieles y cueros guardan una relación directa con la presente diferencia. 103

d) La referencia a "sanciones" por "infracciones leves" que se hace en el párrafo 3 del artículo VIII del GATT de 1994 no sitúa las sanciones fuera del ámbito del párrafo 3 a) del artículo X 104

e) El argumento de los Estados Unidos no lleva implícito un requisito de armonización de todas las leyes subfederales de los Miembros de la OMC que guarden cualquier parecido a leyes federales en cuanto a la materia 105

6. Las decisiones de los tribunales de revisión en las CE no rigen la práctica de "los organismos" encargados de aplicar las medidas administrativas de la legislación aduanera de las CE, en contra de lo dispuesto en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 105

a) Las decisiones de los tribunales o procedimientos que un Miembro de la OMC mantenga en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 deben regir la práctica de "los organismos" encargados de aplicar las medidas administrativas de la legislación aduanera de los Miembros 105

b) El argumento de los Estados Unidos no significa la obligación de que cada Miembro de la OMC establezca un tribunal aduanero centralizado único 106

F. SEGUNDA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 108

1. Las medidas en litigio en la presente diferencia 108

2. Las alegaciones de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 109

a) Las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 109

i) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras, y no a las propias leyes aduaneras 109

ii) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe las maneras en las que los Miembros de la OMC deben aplicar su legislación aduanera 111

iii) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT establece normas mínimas 111

iv) El significado de "aplicación uniforme" 112

b) La carga de la prueba 112

c) Cuestiones generales que subyacen a las alegaciones de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 114

i) La argumentación de los Estados Unidos está destinada a obligar a las CE a crear un organismo aduanero comunitario 115

ii) *Los Estados Unidos interpretan erróneamente el sistema jurídico comunitario* *116*
d) Las alegaciones de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 117
i) *Clasificación arancelaria* *117*
Información arancelaria vinculante 117
El presunto riesgo del uso de la IAV más ventajosa 117
Las supuestas dificultades de detectar y rectificar IAV divergentes 117
La alegación de los Estados Unidos de que los Estados miembros no consideran vinculante la IAV emitida por otros Estados miembros 118
El efecto jurídico de la IAV 119
Presuntas divergencias en la práctica de clasificación de las CE 119
Forros opacos para cortinas 119
Monitores LCD 121
Otros ejemplos de presunta no uniformidad en la práctica de clasificación 123
ii) *Valoración en aduana* *124*
Informe 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE 124
El caso Reebok 125
iii) *Transformación bajo control aduanero* *127*
iv) *Procedimiento de domiciliación* *128*
v) *Sanciones por infracciones del derecho aduanero* *129*
Las disposiciones que establecen sanciones no están comprendidas en el ámbito del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 129
El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe la armonización de las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones 130
El derecho comunitario garantiza un grado suficiente de uniformidad de las disposiciones que establecen sanciones 130
3. La alegación de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 b) del artículo X del GATT 131
a) La naturaleza de la revisión: tribunales o procedimientos independientes 131
b) Prescripción relativa al plazo: prontitud de la revisión 135
G. SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 135
1. Las CE no están obligadas a crear un organismo aduanero ni un tribunal aduanero de las CE 135
2. Las alegaciones de los Estados Unidos basadas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT 138
a) Los Estados Unidos tergiversan las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 138
i) *El párrafo 3 a) del artículo X del GATT es una disposición no preceptiva que establece normas mínimas* *138*
ii) *El párrafo 3 a) del artículo X del GATT exige que los Estados Unidos demuestren la existencia de una pauta de aplicación no uniforme* *139*

b) Los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de que haya falta de uniformidad en la aplicación por las CE de sus leyes de aduanas 140

c) Las críticas de los Estados Unidos del sistema de administración aduanera de las CE no están justificadas y no demuestran ninguna incompatibilidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT 141

i) Orientación administrativa y el deber de cooperación 142

ii) El sistema EBTI/IAV 142

iii) Revisión judicial por los tribunales de los Estados miembros 143

d) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige que las CE armonicen las disposiciones de los Estados miembros sobre las sanciones 145

i) Las disposiciones que establecen sanciones no están incluidas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT 145

ii) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige que se armonicen las leyes que rigen en un Miembro de la OMC a nivel subfederal 145

iii) El derecho comunitario asegura un grado suficiente de uniformidad de las disposiciones que establecen sanciones 147

3. La alegación de los Estados Unidos basada en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT 147

a) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el requisito de pronta revisión 147

b) El requisito de que las decisiones de los tribunales deben regir la práctica de los organismos 148

c) La interpretación que los Estados Unidos hacen del párrafo 3 b) del artículo X del GATT, exige que, en cada Miembro de la OMC, se establezca un tribunal aduanero único y centralizado o un organismo aduanero único y centralizado 150

4. Declaración final 151

H. SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 157

1. Introducción 157

2. Las CE no refutan pruebas que respaldan las alegaciones de los Estados Unidos 158

a) Reconocimientos efectuados por las CE de aplicación no uniforme 158

b) No es obligatorio mostrar una "pauta" de aplicación no uniforme 159

c) La dificultad de determinadas cuestiones de práctica aduanera no refuta las pruebas de aplicación no uniforme y, de hecho, subraya el problema 159

d) La resolución de las divergencias entre los Estados miembros tras meses o años no refuta las pruebas de aplicación no uniforme 160

3. Casos recientes confirman que los procedimientos que según las CE garantizan una aplicación uniforme no lo hacen 160

4. Es oportuno que el Grupo Especial haga uso de las facultades que le confiere el artículo 13 del ESD 162

5. Las CE no refutan pruebas de que las normas de clasificación se aplican de manera no uniforme 162

a) La IAV no garantiza una aplicación uniforme 162

b) Monitores de cristal líquido (monitores LCD) 164

c) Forros opacos para cortinas 165

6. Las CE no refutan pruebas de que las normas de valoración se aplican de manera no uniforme 166

7. Las CE no refutan pruebas de que los regímenes aduaneros se aplican de manera no uniforme 166

a) Transformación bajo control aduanero 166

b) Sanciones 167

8. Los tribunales de los Estados miembros, cuyas decisiones rigen únicamente la práctica de las autoridades aduaneras de sus territorios respectivos, no cumplen la obligación establecida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 168

9. Declaración final 170

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS 173

A. COMUNICACIÓN ESCRITA DE CHINA EN CALIDAD DE TERCERO 173

1. Cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del párrafo 3 a) del artículo X 173

a) El ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 173

b) El significado de "uniforme" según se emplea en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 174

c) La norma de la uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 175

2. Conclusión 175

B. COMUNICACIÓN ESCRITA DEL JAPÓN EN CALIDAD DE TERCERO 175

1. Introducción 175

2. Compatibilidad de las medidas impugnadas con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT 175

a) El significado de la aplicación "uniforme" prevista en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 175

b) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe los medios específicos que un Miembro debe emplear para asegurar una aplicación uniforme de las leyes aduaneras; esa uniformidad se debe determinar en función de cada sistema aduanero concreto en su totalidad 177

3. Compatibilidad de las medidas impugnadas con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT 178

a) La medida en cuestión 178

b) La compatibilidad de la medida impugnada con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT 178

4. Conclusión 179

C. COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA REPÚBLICA DE COREA EN CALIDAD DE TERCERO 179

1. Introducción 179

2. Argumentos jurídicos 179

a) La aplicación no uniforme por parte de las CE de las leyes y los reglamentos relativos a la clasificación y valoración en aduana y otros procedimientos infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 179

b) La falta en el sistema judicial de las CE de un mecanismo viable para revisar con prontitud las medidas administrativas sobre cuestiones aduaneras representa una infracción del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 181

3. Conclusión 182

D. COMUNICACIÓN ESCRITA DEL TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU EN CALIDAD DE TERCERO 182

1. Introducción 182

2. Argumentos 183

3. Conclusión 185

E. DECLARACIÓN ORAL DE LA ARGENTINA EN CALIDAD DE TERCERO 185

1. Introducción 185

2. El vínculo entre el apartado b) y el apartado a) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 186

3. La "prontitud" dentro de las obligaciones del párrafo 3 b) del artículo X 186

F. DECLARACIÓN ORAL DE AUSTRALIA EN CALIDAD DE TERCERO 187

G. DECLARACIÓN ORAL DE CHINA EN CALIDAD DE TERCERO 188

1. El ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 188

2. El significado de "uniforme" según se emplea en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 189

3. La norma de la uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 189

H. DECLARACIÓN ORAL DEL JAPÓN EN CALIDAD DE TERCERO 190

1. Argumentos sobre la compatibilidad de las medidas impugnadas con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT 190

I. DECLARACIÓN ORAL DE LA REPÚBLICA DE COREA EN CALIDAD DE TERCERO 192

1. La administración no uniforme por parte de las CE de las leyes y reglamentos sobre la clasificación aduanera, la valoración en aduana y otros procedimientos infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 192

2. La falta en el sistema judicial de las CE de un mecanismo viable para revisar con prontitud las medidas administrativas sobre cuestiones aduaneras representa una infracción del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 193

VI. REEXAMEN INTERMEDIO 193

A. NUEVAS PRUEBAS A QUE SE HA HECHO REFERENCIA EN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS DURANTE LA ETAPA INTERMEDIA DE REEXAMEN 193

B. MANDATO DEL GRUPO ESPECIAL 194

1. Manera en que se lleva a cabo la aplicación 194

2. Impugnación del sistema de las CE en su conjunto/en general 195

3. Aplicación por las "autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros de las CE" de las "leyes, reglamentos, guías, manuales y prácticas administrativas" 195

4. Cuestiones temporales 196

a) Medidas que ya no están en vigor o medidas que no están aún en vigor en el momento del establecimiento del grupo especial 196

b) El ámbito temporal de la "aplicación" 197
c) "Actualmente" 198
5. Recaudación retroactiva de derechos de aduana 199
C. INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO 3 A) DEL ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994 199
1. "Objeto y fin" 199
2. "Medios de interpretación complementarios" 199
3. "Normas mínimas" 200
4. "Uniforme" 201
a) Naturaleza de la impugnación 201
b) "Plazo prudencial" 201
D. OBSERVACIONES DEL GRUPO ESPECIAL CON RESPECTO AL SISTEMA COMUNITARIO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA 202
E. CASOS CONCRETOS DE SUPUESTA INFRACCIÓN DEL PÁRRAFO 3 A) DEL ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994 203
1. Clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas 203
2. Clasificación arancelaria de los monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital 204
3. Revocación de IAV con respecto a candelabros y a frutas y frutos de cáscara conservados en el contexto del asunto *Timmermans* 205
4. Sanciones contra infracciones de la legislación aduanera de las CE 205
F. OBLIGACIONES DE LAS CE Y DE LOS ESTADOS MIEMBROS 206
G. OTRAS SOLICITUDES DE REEXAMEN 206
VII. CONSTATACIONES 207
A. ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994 207
B. EL MANDATO DEL GRUPO ESPECIAL 208
1. La(s) medida(s) en litigio 208
a) Resumen de los argumentos de las partes 208
b) Análisis por el Grupo Especial 210
i) Interpretación de la expresión "medidas en litigio" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD 210
ii) La(s) "medida(s) en litigio" a los efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 213
iii) La "medida en litigio" a efectos de la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en la presente diferencia 214
Manera en que se lleva a cabo la interpretación 214
"Leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994" 215
Esferas de la administración aduanera 216
iv) Resumen 218

2. Cuestiones temporales concernientes al mandato del Grupo Especial 218
a) Resumen de los argumentos de las partes 218
b) Análisis por el Grupo Especial 218
3. Alcance de la impugnación del sistema comunitario de administración aduanera por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 219
a) Resumen de los argumentos de las partes 219
b) Análisis por el Grupo Especial 220
4. Naturaleza de la impugnación del sistema comunitario de administración aduanera por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 223
a) Resumen de los argumentos de las partes 223
b) Análisis por el Grupo Especial 225
5. Conclusiones generales con respecto al mandato del Grupo Especial 229
C. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 229
1. Admisibilidad de determinadas pruebas 229
a) Pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva 229
b) Pruebas distintas de las contenidas en la sección III, citadas en diversas secciones de su Declaración oral en la segunda reunión sustantiva en las que se basan los Estados Unidos 232
c) Resumen y conclusiones 234
2. Peticiones de los Estados Unidos de que el Grupo Especial ejerza las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD 235
D. ALEGACIONES AL AMPARO DEL PÁRRAFO 3 A) DEL ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994 238
1. Párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 238
2. Constataciones solicitadas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 238
a) Resumen de los argumentos de las partes 238
b) Análisis por el Grupo Especial 240
3. Interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 241
a) Interpretación de "*administer*" (administrar, aplicar) 241
i) Resumen de los argumentos de las partes 241
Sentido corriente 241
Contenido y aplicación 242
Formas de aplicación 243
ii) Análisis por el Grupo Especial 244
Sentido corriente 244
Contexto 245
Interpretación del texto español y del texto francés del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 246

Resumen y conclusiones 246
b) Interpretación de "*uniform*" (uniforme) 249
i) Resumen de los argumentos de las partes 249
ii) Análisis por el Grupo Especial 249
Sentido corriente 249
Contexto 250
Medios de interpretación complementarios 251
Resumen y conclusiones 253
4. Pertinencia del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el contexto de la presente diferencia 254
a) Resumen de los argumentos de las partes 254
b) Análisis por el Grupo Especial 256
5. Carga de la prueba 258
a) Resumen de los argumentos de las partes 258
b) Análisis por el Grupo Especial 261
6. Supuestas infracciones específicas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 262
a) Aspectos pertinentes del sistema comunitario de administración aduanera 262
i) Aplicación por autoridades aduaneras en los Estados miembros de las CE 262
ii) Instituciones y mecanismos que intervienen en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria 262
Instituciones y mecanismos aplicables en general en todas las esferas de la administración aduanera 262
Comité del Código Aduanero 263
Artículo 10 del Tratado de la CE 265
Sistema de reenvío prejudicial 266
Procedimientos por incumplimiento 268
El Defensor del Pueblo Europeo 268
Reclamaciones a la Comisión de las CE 269
Restricciones a la adopción de medidas nacionales por las autoridades aduaneras de los Estados miembros 269
Consultas y asistencia recíproca entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros 270
Directrices sobre las mejores prácticas 271
Instituciones y mecanismos aplicables en esferas específicas de la administración aduanera citados en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos 272
Clasificación arancelaria 272
Valoración en aduana 274
Procedimientos aduaneros 276

Observaciones generales acerca de las instituciones y mecanismos que intervienen en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria 276

b) Alegaciones de aplicación no uniforme del Arancel Aduanero Común en la esfera de la clasificación arancelaria 277

i) Clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales 277

Resumen de los argumentos de las partes 277

Análisis del Grupo Especial 279

ii) Clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo 282

Resumen de los argumentos de las partes 282

Análisis del Grupo Especial 283

iii) Clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex 285

Resumen de los argumentos de las partes 285

Análisis del Grupo Especial 286

iv) Clasificación arancelaria de forros opacos para cortinas 287

Resumen de los argumentos de las partes 287

Pruebas de divergencia en la clasificación 287

¿Son iguales las mercancías en cuestión? 288

Nota explicativa de la subpartida 5907 del Sistema Armonizado 290

La ayuda interpretativa alemana 291

Compatibilidad con el dictamen de la OMA 293

Análisis del Grupo Especial 294

Consideraciones generales 294

Pruebas en que se basan los Estados Unidos para demostrar la existencia de divergencia en la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas 294

Características físicas de los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica, por un lado, y las autoridades aduaneras de Alemania, por el otro 299

Proceso administrativo conducente a decisiones de clasificación arancelaria del producto en cuestión de las autoridades aduaneras alemanas 303

La ayuda interpretativa alemana 303

Decisiones de clasificación arancelaria en otros Estados miembros 305

Conclusión 307

v) Clasificación arancelaria de los monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital (DVI) 307

Resumen de los argumentos de las partes 307

Pruebas de divergencia en la clasificación 307

Medidas adoptadas por las Comunidades Europeas para resolver la divergencia en la clasificación 308

Opinión del Comité del Código Aduanero 311

Análisis por el Grupo Especial 314

vi) Trato de la IAV en los Estados miembros que no sean el Estado miembro emisor 321

Resumen de los argumentos de las partes 321
Análisis por el Grupo Especial 324
vii) Negativa a retirar la revocación de una IAV relativa a las consolas PlayStation2 de Sony en el contexto del asunto PlayStation2 de Sony 328
Resumen de los argumentos de las partes 328
Análisis por el Grupo Especial 329
viii) Interpretación y aplicación de la modificación de una nota explicativa relativa a las videocámaras, en el asunto Videocámaras 332
Resumen de los argumentos de las partes 332
Análisis por el Grupo Especial 334
ix) Resumen y conclusiones 336
c) Alegaciones de aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y del Reglamento de Aplicación en la esfera de la valoración en aduana 337
i) Pagos de cánones 337
Resumen de los argumentos de las partes 337
Análisis por el Grupo Especial 338
ii) Valoración sobre una base distinta al valor de transacción de la última venta (o "venta sucesiva") 342
Resumen de los argumentos de las partes 342
Análisis por el Grupo Especial 344
iii) Costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía 346
Resumen de los argumentos de las partes 346
Análisis por el Grupo Especial 348
iv) Relación entre el importador comunitario y los fabricantes no comunitarios 352
Resumen de los argumentos de las partes 352
Análisis por el Grupo Especial 355
v) Resumen y conclusiones 358
d) Alegaciones de aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y del Reglamento de Aplicación en la esfera de los regímenes aduaneros 359
i) Auditoría posterior al despacho a libre práctica 359
Resumen de los argumentos de las partes 359
Análisis por el Grupo Especial 362
ii) Sanciones por incumplimiento de la legislación aduanera comunitaria 366
Resumen de los argumentos de las partes 366
Análisis por el Grupo Especial 370
iii) Transformación bajo control aduanero 372
Resumen de los argumentos de las partes 372
Análisis por el Grupo Especial 376
iv) Procedimientos de domiciliación 379

Resumen de los argumentos de las partes 379
Análisis por el Grupo Especial 383
v) Resumen y conclusiones 384
e) Alegaciones de aplicación no uniforme respecto del apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario 385
i) Resumen de los argumentos de las partes 385
ii) Análisis por el Grupo Especial 387
f) Observaciones generales sobre las alegaciones de los Estados Unidos de aplicación no uniforme en relación con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 389
E. ALEGACIONES EN RELACIÓN CON EL PÁRRAFO 3 B) DEL ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994 390
1. El párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 390
2. Constataciones solicitadas por los Estados Unidos en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 390
a) Resumen de los argumentos de las partes 390
b) Análisis por el Grupo Especial 391
3. Interpretación del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 392
a) Resumen de los argumentos de las partes 392
i) Características pertinentes de los órganos de revisión 392
ii) Alcance geográfico y efecto sustantivo de las decisiones de los órganos de revisión 393
Consideraciones generales 393
Significación de la expresión "regirán su práctica" 393
Significación de la referencia a "los organismos" 394
Significación de la referencia al derecho de "la administración central de tal organismo" a pedir la revisión del caso 395
Vínculo jurídico entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 396
Significación de la referencia a "tribunales" y "procedimientos" en plural 398
Decisiones 399
b) Análisis por el Grupo Especial 400
Sentido corriente 400
"Independientes" 400
El nivel de la revisión 401
"Tribunales o procedimientos" 402
"Organismos" 402
"Regirán [la] práctica" 403
Contexto 404
Relación jurídica entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 404
Artículo X del GATT de 1994 405
Resumen general y conclusiones 405

4. Supuestas infracciones específicas del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 406

b) Resumen de los argumentos de las partes 406

c) Análisis por el Grupo Especial 409

i) Cumplimiento de la obligación que corresponde a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 409

ii) Revisión de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras por las autoridades de los Estados miembros 411

iii) Resumen y conclusiones 412

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 412

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL Y LA OTRA PARTE DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA DEL GRUPO ESPECIAL

Índice		Página
Anexo A-1	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-2
Anexo A-2	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por las Comunidades Europeas después de la primera reunión sustantiva	A-51
Anexo A-3	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-53
Anexo A-4	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por los Estados Unidos después de la primera reunión sustantiva	A-97
Anexo A-5	Respuestas de la Argentina a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-100
Anexo A-6	Respuestas de China a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-105
Anexo A-7	Respuestas del Japón a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-107
Anexo A-8	Respuestas de Corea a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-115
Anexo A-9	Respuestas del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-121

ANEXO B

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL Y LA OTRA PARTE DESPUÉS DE LA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA DEL GRUPO ESPECIAL

Índice		Página
Anexo B-1	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva	B-2
Anexo B-2	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva	B-38
Anexo B-3	Observaciones de los Estados Unidos sobre las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva	B-68
Anexo B-4	Observaciones de las Comunidades Europeas sobre las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva	B-93

ANEXO C

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL EN RELACIÓN CON LA SECCIÓN III DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Índice		Página
Anexo C-1	Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial en relación con la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos	C-2
Anexo C-2	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas complementarias formuladas por el Grupo Especial en relación con la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos	C-23
Anexo C-3	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas complementarias formuladas por el Grupo Especial en relación con la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos	C-37

ANEXO D

SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL

Índice		Página
Anexo D-1	Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos (WT/DS315/8)	D-1

ANEXO E

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DEL GRUPO ESPECIAL

Índice		Página
Anexo E-1	Procedimiento de trabajo del Grupo Especial	E-1

ANEXO F

LISTAS DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS POR LAS PARTES

Índice		Página
Anexo F-1	Lista de pruebas documentales presentadas por los Estados Unidos	F-2
Anexo F-2	Lista de pruebas documentales presentadas por las Comunidades Europeas	F-8

CUADRO DE ASUNTOS CITADOS EN EL PRESENTE INFORME

Título abreviado	Título completo y referencia del asunto
Argentina - Calzado (CE)	Informe del Órgano de Apelación, *Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado*, WT/DS121/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000
Argentina - Pieles y cueros	Informe del Grupo Especial, *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, WT/DS155/R y Corr.1, adoptado el 16 de febrero de 2001
Argentina - Textiles y prendas de vestir	Informe del Órgano de Apelación, *Argentina - Medidas que afectan a las importaciones de calzado, textiles, prendas de vestir y otros artículos*, WT/DS56/AB/R y Corr.1, adoptado el 22 de abril de 1998
Brasil - Coco desecado	Informe del Órgano de Apelación, *Brasil - Medidas que afectan al coco desecado*, WT/DS22/AB/R, adoptado el 20 de marzo de 1997
Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano	Informe del Grupo Especial, *Canadá - Medidas relativas a las exportaciones de trigo y al trato del grano importado*, WT/DS276/R, adoptado el 27 de septiembre de 2004, confirmado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS276/AB/R
Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano	Informe del Órgano de Apelación, *Canadá - Medidas relativas a las exportaciones de trigo y al trato del grano importado*, WT/DS276/AB/R, adoptado el 27 de septiembre de 2004
Canadá - Monedas de oro	Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Medidas que afectan a la venta de monedas de oro*, L/5863, 17 de septiembre de 1985
CE - Banano III	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, WT/DS27/AB/R, adoptado el 25 de septiembre de 1997
CE - Equipo informático	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de determinado equipo informático*, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R; WT/DS68/AB/R, adoptado el 5 de febrero de 1998
CE - Hormonas	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas)*, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero de 1998
CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Estados Unidos)	Informe del Grupo Especial, *Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios, Reclamación de los Estados Unidos*, WT/DS174/R, adoptado el 20 de abril de 2005
CE - Preferencias arancelarias	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Condiciones para la concesión de preferencias arancelarias a los países en desarrollo*, WT/DS246/AB/R, adoptado el 20 de abril de 2004
CE - Productos avícolas	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la importación de determinados productos avícolas*, WT/DS69/AB/R, adoptado el 23 de julio de 1998
CE - Sardinas	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Denominación comercial de sardinas*, WT/DS231/AB/R, adoptado el 23 de octubre de 2002
CE - Trozos de pollo	Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados*, WT/DS/269/AB/R, WT/DS286/AB/R
CE - Trozos de pollo	Informe del Grupo Especial, *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados*, Reclamación de Tailandia, WT/DS286/R

Título abreviado	Título completo y referencia del asunto
CEE - Manzanas de mesa	Informe del Grupo Especial del GATT, *Comunidad Económica Europea - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa - Reclamación de Chile*, L/6491, adoptado el 22 de junio de 1989, IBDD S36/104
Corea - Productos lácteos	Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos*, WT/DS98/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000
Chile - Sistema de bandas de precios	Informe del Órgano de Apelación, *Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas*, WT/DS207/AB/R, adoptado el 23 de octubre de 2002
Estados Unidos - Acero al carbono	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Derechos compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes de Alemania*, WT/DS213/AB/R, adoptado el 19 de diciembre de 2002
Estados Unidos - Acero inoxidable	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y las hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea*, WT/DS179/R, adoptado el 1º de febrero de 2001
Estados Unidos - Acero laminado en caliente	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, WT/DS184/R, adoptado el 23 de agosto de 2001, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS184/AB/R
*Estados Unidos - Algodón americano (*upland*)*	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano (*upland*)*, WT/DS267/R, adoptado el 21 de marzo de 2005, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS267/AB/R
Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974*, WT/DS152/R, adoptado el 27 de enero de 2000
Estados Unidos - Bebidas alcohólicas y derivadas de la malta	Informe del Grupo Especial del GATT, *Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta*, adoptado el 19 de junio de 1992, IBDD S39/242
Estados Unidos - Camarones	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón*, WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998
Estados Unidos - Camisas y blusas	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India*, WT/DS33/AB/R y Corr.1, adoptado el 23 de mayo de 1997
Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón*, WT/DS244/AB/R, adoptado el 9 de enero de 2004
Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón*, WT/DS244/R, adoptado el 9 de enero de 2004, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS244/AB/R

Título abreviado	Título completo y referencia del asunto
Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina*, WT/DS268/AB/R, adoptado el 17 de diciembre de 2004
Estados Unidos - Gasolina	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996
Estados Unidos - Gasolina	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS2/AB/R
Estados Unidos - Juegos de azar	Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas*, WT/DS285/R, adoptado el 20 de abril de 2005, modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS285/AB/R
Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd)	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000*, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adoptado el 27 de enero de 2003
Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México*, WT/DS282/AB/R, adoptado el 28 de noviembre de 2005
Estados Unidos - Ropa interior	Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales*, WT/DS24/AB/R, adoptado el 25 de febrero de 1997
Guatemala - Cemento I	Informe del Órgano de Apelación, *Guatemala - Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente de México*, WT/DS60/AB/R, adoptado el 25 de noviembre de 1998
India - Patentes (EE.UU.)	Informe del Órgano de Apelación, *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, WT/DS50/AB/R, adoptado el 16 de enero de 1998
Japón - Bebidas alcohólicas II	Informe del Órgano de Apelación, *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996
Japón - Películas	Informe del Grupo Especial, *Japón - Medidas que afectan a las películas y el papel fotográficos de consumo*, WT/DS44/R, adoptado el 22 de abril de 1998
Japón - Productos agrícolas II	Informe del Órgano de Apelación, *Japón - Medidas que afectan a los productos agrícolas*, WT/DS76/AB/R, adoptado el 19 de marzo de 1999
Tailandia - Vigas doble T	Informe del Órgano de Apelación, *Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia*, WT/DS1222/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001

LISTA DE ABREVIATURAS

Acuerdo sobre la OMC	Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
Acuerdo sobre Valoración en Aduana	Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
Arancel	Arancel Aduanero Común, Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo
CAC	Código Aduanero Comunitario, Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo
CE	Comunidades Europeas
Comisión de las CE, Comisión Europea	Comisión de las Comunidades Europeas
Comité del Código Aduanero	Comité establecido en el apartado 1 del artículo 247 *bis* y el apartado 1 del artículo 48 *bis* del CAC
Consejo de las CE, Consejo Europeo	Consejo de la Unión Europea
Convenio de Kyoto	Convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros
Convenio sobre el SA	Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
Decisión sobre comitología	Decisión 1999/468/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión
Diario Oficial	Diario Oficial de la Unión Europea
EBTI/IAV	sistema europeo de información arancelaria vinculante
ESD	Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias
Estados miembros, Estados miembros de las CE	Estados miembros de la Unión Europea
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
IAV	información arancelaria vinculante
NC	Nomenclatura Combinada de las Comunidades Europeas
OMA	Organización Mundial de Aduanas
OMC	Organización Mundial del Comercio
OSD	Órgano de Solución de Diferencias
monitores con LCD con DVI	monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital

Reglamento de Aplicación, Reglamento de Aplicación del CAC	Reglamento (CEE) Nº 2454 de la Comisión de 2 de julio de 1993 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del CAC
RIL	Reebok International Limited
SA	Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
SIA	sistema de información aduanero
Taric	Arancel Integrado de las Comunidades Europeas
Tratado de la CE	Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
Tratado de la UE	Tratado de la Unión Europea
Tribunal de Justicia, Tribunal Europeo de Justicia, TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Tribunal de Primera Instancia	Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
USCIT	Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos
USTR	Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales

I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 21 de septiembre de 2004, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con las Comunidades Europeas (CE) de conformidad con los artículos 1 y 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD) y el párrafo 1 del artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) (WT/DS315/1).

1.2 En la solicitud se hacía referencia a la manera supuestamente no uniforme en que las Comunidades Europeas aplican sus leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones del tipo descrito en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 que se refieren a la clasificación y valoración en aduana de productos y a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación.

1.3 En la solicitud se señalaron las siguientes medidas: el Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, incluidos todos sus anexos, modificado (el "Código"); el Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, incluidos todos sus anexos, modificado (el "Reglamento de la Comisión"); el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, incluidos todos sus anexos, modificado (el "Reglamento del arancel"); el arancel integrado de las Comunidades Europeas, establecido en virtud del artículo 2 del Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, incluidos todos sus anexos, modificado (el "Taric"); y todas las modificaciones, medidas de aplicación y demás medidas conexas respecto de cada una de las leyes y reglamentos mencionados *supra*.

1.4 La solicitud se refería también al hecho de que las Comunidades Europeas supuestamente no hubieran instituido tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otras cosas, a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras.

1.5 Los Estados Unidos y las Comunidades Europeas celebraron consultas el 16 de noviembre de 2004, pero no llegaron a una solución mutuamente satisfactoria del asunto. En consecuencia, en una comunicación de fecha 13 de enero de 2005[1], los Estados Unidos solicitaron al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) que estableciera un grupo especial. En consecuencia, en su reunión de 21 de marzo de 2005, el OSD estableció el Grupo Especial con el mandato uniforme. El mandato del Grupo Especial es el siguiente:

> "Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por los Estados Unidos en el documento WT/DS315/8, el asunto sometido al OSD por los Estados Unidos en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

1.6 El 17 de mayo de 2005, los Estados Unidos solicitaron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del ESD. Dicho párrafo dispone lo siguiente:

[1] Documento WT/DS315/8, que figura en el anexo C.

> Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición.

1.7 El 27 de mayo de 2005, el Director General procedió en consecuencia a establecer la composición del Grupo Especial, que es la siguiente:

Presidente: Sr. Nacer Benjelloun-Touimi

Miembros: Sr. Mateo Diego-Fernández
Sr. Hanspeter Tschäni

1.8 La Argentina; Australia; el Brasil; China; Corea; Hong Kong, China; la India; el Japón y el Taipei Chino se reservaron el derecho de participar como terceros en las actuaciones del Grupo Especial.

1.9 El Grupo Especial celebró la primera reunión sustantiva con las partes los días 14 a 16 de septiembre de 2005. La sesión con los terceros tuvo lugar el 15 de septiembre de 2005. La segunda reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes se celebró los días 22 y 23 de noviembre de 2005.

1.10 El 10 de enero de 2005, el Grupo Especial emitió la parte expositiva de su informe. El 10 de febrero de 2006 se dio traslado del informe provisional a las partes y el 31 de marzo de 2006, del informe definitivo.

II. ASPECTOS FÁCTICOS

2.1 La presente diferencia concierne, entre otras, a la cuestión de si la manera en que las Comunidades Europeas aplican las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas descritas en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana de productos y a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación, se ajusta a la obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En particular, los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas no aplican las siguientes medidas de manera uniforme, con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X: a) el "Código Aduanero Comunitario" contenido en el Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992 ; b) el "Reglamento de Aplicación" que da aplicación al Código Aduanero Comunitario contenido en el Reglamento (CEE) de la Comisión Nº 2454/93 de 2 de julio de 1993; c) el "Arancel Aduanero Común" promulgado originariamente en el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo, pero que se actualiza anualmente en el Diario Oficial de las CE; d) el "Taric" o Arancel Integrado de las Comunidades Europeas, establecido en virtud del artículo 2 del Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 y d) las demás "medidas conexas". Los Estados Unidos alegan también que las Comunidades Europeas no han instituido la revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras de la forma prescrita por el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

A. MARCO LEGISLATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ADUANERA DE LAS CE

2.2 El Tratado de la CE establece una política comercial común. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 133 del Tratado, la política comercial común se basa en principios uniformes, particularmente por lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales, la consecución de la uniformidad de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las medidas de protección comercial y, entre ellas, las que deban adoptarse en caso de dumping y subvenciones. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha confirmado que la unión aduanera y la política comercial común, que incluye la aplicación de las cuestiones aduaneras, corresponden a la competencia exclusiva de las Comunidades Europeas.[2]

2.3 Los tres instrumentos principales que constituyen el marco legislativo de la administración aduanera en las Comunidades Europeas son: el Arancel Aduanero Común, el Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación. Todos ellos son reglamentos de las CE. Con arreglo al segundo apartado del artículo 249 del Tratado de la CE, son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro.

1. El Arancel Aduanero Común

2.4 El Arancel Aduanero Común fue establecido por el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 que abarca los aranceles aduaneros y la recopilación de las estadísticas del comercio internacional. A su vez, el Arancel Aduanero Común establece la Nomenclatura Combinada (NC). Las Comunidades Europeas, que son signatarias del Convenio sobre el SA, han basado la NC en el sistema armonizado (SA). En particular, el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento Nº 2658/87 dispone que la NC incluirá: a) la nomenclatura del sistema armonizado; b) las subdivisiones/subpartidas comunitarias de dicha nomenclatura (cuando se especifiquen los tipos de derechos correspondientes); y c) las disposiciones preliminares, las notas complementarias de secciones o de capítulos y las notas a pie de página que se refieran a las subpartidas. Las disposiciones preliminares contienen, entre otras, normas generales para la interpretación de la NC.

2.5 La nomenclatura arancelaria vigente se recoge en el Anexo del Reglamento Nº 2658/87, que se actualiza periódicamente conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento. La versión actual del Anexo se publicó el 7 de septiembre de 2004 y entró en vigor el 1º de enero de 2005 como Reglamento (CE) Nº 1810/2004 de la Comisión.

2.6 La NC tiene códigos de ocho cifras, en los que las seis primeras cifras corresponden a los códigos del SA (de la forma prescrita por el Convenio sobre el SA) y las dos últimas identifican las subpartidas NC. Además, puede haber una novena cifra reservada para su uso en las subdivisiones estadísticas nacionales y una décima y undécima cifras para el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas, conocido como "Taric".[3] De forma análoga al SA, la NC consta de 21 secciones, que comprenden 99 capítulos. Algunas secciones y capítulos de la NC están precedidos de notas.

[2] Dictamen 1/75, Norma sobre gastos locales, Recopilación de Jurisprudencia 1975, página 00375, (CE - Prueba documental 13).

[3] El artículo 2 del Reglamento Nº 2658/87 dispone que el Taric se basará en la NC. En la sección I del Taric se declara expresamente que éste incorpora, entre otras, a) las disposiciones del SA y b) las disposiciones de la NC. En Estados Unidos - Prueba documental 7 figura la versión actual del Taric.

2. El Código Aduanero Comunitario

2.7 El Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo establece el Código Aduanero Comunitario.[4] El Código comprende 253 artículos y está dividido en 9 títulos, que se ocupan de los siguientes temas: Título I: Ámbito de aplicación y definiciones de base; Título II: Elementos en que se basa la aplicación de los derechos de importación o de exportación y demás medidas previstas en el marco de los intercambios de mercancías; Título III: Disposiciones aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad en tanto no se les haya atribuido un destino aduanero; Título IV: Destinos aduaneros; Título V: Mercancías que salgan del territorio aduanero de la Comunidad; Título VI: Operaciones privilegiadas; Título VII: Deuda aduanera; Título VIII: Recursos; Título IX: Disposiciones finales.

3. El Reglamento de Aplicación

2.8 Conforme al artículo 247 del Código Aduanero Comunitario, las medidas necesarias para la aplicación del Código han de ser adoptadas por la Comisión. Sobre la base del artículo 247, la Comisión ha adoptado el Reglamento (CEE) Nº 2454 de 2 de julio de 1993 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario ("Reglamento de Aplicación").[5] El Reglamento de Aplicación establece en forma detallada las disposiciones necesarias para la aplicación del Código. Su estructura se ajusta en líneas generales a la del Código Aduanero Comunitario.

B. INSTITUCIONES Y MECANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES ADUANERAS DE LAS CE

1. La Comisión

2.9 Normalmente la Comisión no interviene directamente en la aplicación de la normativa aduanera de las CE. El artículo 211 del Tratado de la CE dispone que la Comisión "velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado". En general, en la esfera de la administración aduanera, la función de la Comisión Europea como guardiana del Tratado de conformidad con el artículo 211 consiste en supervisar la aplicación correcta y uniforme de las leyes aduaneras de las CE por los Estados miembros. Si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, puede, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 226 del Tratado de la CE, recurrir al Tribunal de Justicia. Esos "procedimientos por incumplimiento" pueden iniciarse en respuesta a una infracción del derecho comunitario por parte de un Estado miembro y pueden referirse también a la aplicación incorrecta del derecho comunitario por las administraciones de los Estados miembros. Además, hay un procedimiento normalizado para que los particulares presenten reclamaciones a la Comisión Europea con respecto a supuestas infracciones del derecho comunitario. Esas reclamaciones, que pueden referirse también a la aplicación del derecho comunitario por las administraciones nacionales, pueden llevar a la iniciación de un procedimiento por incumplimiento por la Comisión. De conformidad con el apartado 1 del artículo 228 del Tratado de la CE, si el Tribunal de Justicia declara que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de la CE, dicho Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia. Si el Estado miembro afectado incumple la sentencia, el Tribunal de Justicia puede imponerle una multa coercitiva, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 228 del Tratado.

[4] La versión actual del Código Aduanero Comunitario figura en Estados Unidos - Prueba documental 5.

[5] La versión actual del Reglamento de Aplicación figura en Estados Unidos - Prueba documental 6.

2.10 En el ejercicio de las funciones que les atribuye el Tratado de la CE, los funcionarios de la Comisión Europea se rigen por un código de buena conducta que forma parte del Reglamento de la Comisión, y que establece los principios de buena conducta administrativa a que ha de atenerse todo el personal de la Comisión.[6] En particular, la Parte 4 del Código de Buena Conducta dispone que se debe responder a todas las solicitudes de la manera más rápida posible, y establece plazos para responder a la correspondencia. Las reclamaciones relativas al incumplimiento del Código pueden presentarse a la Secretaría General de la Comisión. Además, la Comisión responde políticamente ante el Parlamento Europeo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 194 del Tratado de la CE, cualquier ciudadano tiene derecho a presentar al Parlamento Europeo una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Comunidad. Por último, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 195 del Tratado de la CE, el Parlamento Europeo ha nombrado un Defensor del Pueblo, que está facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios.

2. Los Estados miembros

a) Efectos jurídicos de la normativa aduanera de las CE en los Estados miembros

2.11 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido la primacía del derecho de la Comunidad Europea, incluida la normativa aduanera comunitaria, sobre el derecho nacional de los Estados miembros.[7] Este principio es aplicable a todas las disposiciones contenidas en el Tratado de la CE (derecho comunitario primario) y en los actos de las instituciones comunitarias (derecho comunitario derivado) con respecto a cualquier disposición del derecho nacional de cualquier nivel, incluidas las constituciones de los Estados miembros.[8] En la práctica, el principio de primacía del derecho comunitario significa que, siempre que un tribunal de un Estado miembro constate un conflicto entre una disposición del derecho comunitario y una disposición de su legislación nacional, debe prescindir de la disposición del Derecho nacional y aplicar únicamente el derecho comunitario.

2.12 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido también que el derecho comunitario surte efectos directos en los Estados miembros, lo que significa que el derecho comunitario puede generar derechos para los particulares, que éstos pueden invocar directamente en los procedimientos sustanciados ante los tribunales y organismos nacionales.[9] El principio de "eficacia directa" es aplicable tanto al derecho primario comunitario como al derecho comunitario derivado.

b) Aplicación de la normativa aduanera comunitaria

2.13 La ejecución del derecho aduanero de la Comunidad corresponde a las autoridades nacionales de los Estados miembros. Se denomina a este sistema "federalismo ejecutivo".[10] El principio de federalismo ejecutivo de las Comunidades Europeas refleja el principio de subsidiariedad, consagrado

---

[6] CE - Prueba documental 12.

[7] Asunto 6/64, *Costa/E.N.E.L.*, Recopilación de Jurisprudencia 1964, página 00099 (CE - Prueba documental 4); Asunto 106/77, *Simmenthal II*, Recopilación de Jurisprudencia 1978, página 00629, párrafos 17 y 18 (CE - Prueba documental 5).

[8] Asunto 11-70, *Internationale Handelsgesellschaft*, Recopilación de Jurisprudencia 1970, página 01125, párrafo 3 (CE - Prueba documental 6).

[9] Asunto 26-62, *Van Gend en Loos*, Recopilación de Jurisprudencia 1963, página 00333 (CE - Prueba documental 7).

[10] Koen Lenaerts/Piet van Nuffel, *Constitutional Law of the European Union*, 2ª edición, párrafo 14-047 (2005) (CE - Prueba documental 10).

en el segundo apartado del artículo 5 del Tratado de la CE, según el cual la Comunidad intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros.

2.14 El artículo 10 del Tratado de la CE impone a los Estados miembros la siguiente obligación con respecto a la aplicación por ellos, entre otras, de la normativa aduanera comunitaria:

> Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a ésta última el cumplimiento de su misión.
>
> Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado.

3. El Comité del Código Aduanero

2.15 El Comité del Código Aduanero ha sido establecido por el apartado 1 del artículo 247 *bis* y el apartado 1 del artículo 248 *bis* del Código Aduanero Comunitario. El Comité del Código Aduanero ha adoptado su propio Reglamento Interno[11], que está basado -con algunas modificaciones de importancia secundaria- en el reglamento interno estándar para los comités de comitología.[12]

2.16 De conformidad con el apartado 1 del artículo 1 de su Reglamento Interno, el Comité del Código Aduanero comprende las secciones siguientes: Sección de Legislación Aduanera General; Sección de Origen; Sección de Franquicias Aduaneras; Sección del Valor en Aduana; Sección de Depósitos Aduaneros y Zonas Francas; Sección de Regímenes Aduaneros Económicos; Sección de Tránsito; Sección del Documento Único Administrativo; Sección de los Reembolsos; Sección de la Nomenclatura Arancelaria y Estadística; Sección de la Circulación de Equipajes de Viajeros por Vía Aérea o Marítima; Sección de Asuntos de Economía Arancelaria; Sección de Falsificaciones y Sección de Tratamiento Arancelario Favorable (destino especial de las mercancías). El Comité del Código Aduanero está compuesto por representantes de todos los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.

2.17 Según el artículo 249 del Código Aduanero Comunitario, el Comité del Código Aduanero puede examinar cualquier cuestión relativa a la reglamentación aduanera planteada por su presidente, bien a iniciativa del mismo o a petición del representante de un Estado miembro. Una disposición análoga figura en el artículo 8 del Reglamento Nº 2658/87 que establece el Arancel Aduanero Común, según el cual el Comité podrá examinar cualquier cuestión planteada por su presidente, bien a iniciativa de éste, bien a instancia del representante de un Estado miembro, relativa a la NC o al Taric.

2.18 En la práctica, el Comité del Código Aduanero asume las siguientes funciones: emite criterios sobre las modificaciones del Código Aduanero Comunitario o la aplicación de medidas propuestas por la Comisión; examina las cuestiones relativas a la interpretación de las disposiciones aduaneras o las definiciones de los términos utilizados en la legislación aduanera; y ejerce las facultades atribuidas al mismo en virtud de la legislación aduanera específica, por ejemplo, el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Nº 265/87 en relación con: a) la modificación de la NC (incluida la creación de subpartidas a efectos estadísticos del Taric); b) el examen de los reglamentos

[11] Estados Unidos - Prueba documental 9. El Reglamento Interno del Comité está también a disposición del público en el sitio Web de la Comisión Europea:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/community_code/index_en.htm.

[12] Ese Reglamento estándar ha sido publicado en el Diario Oficial (CE - Prueba documental 2).

de clasificación; y c) la determinación de la posición de las Comunidades Europeas en el Comité del Sistema Armonizado. Los criterios del Comité del Código Aduanero no son jurídicamente vinculantes.[13]

2.19 Los artículos 247 *bis* y 248 *bis* del Código Aduanero Comunitario disponen que el Comité del Código Aduanero actuará como comité de reglamentación o de gestión. Según el artículo 247 del Código Aduanero Comunitario, las medidas necesarias para su aplicación se adoptan normalmente conforme al procedimiento de reglamentación. En determinados casos, incluidos los mencionados en el artículo 248 del Código, se aplica en su lugar el procedimiento de gestión.

2.20 Según el artículo 2 de la "Decisión sobre comitología" (Decisión 1999/468/CE [14]), el procedimiento de reglamentación deberá aplicarse para la adopción de "medidas de alcance general por las que se desarrollen los elementos esenciales de un acto de base". El artículo 5 de la Decisión sobre comitología dispone que la Comisión sólo puede adoptar una propuesta de medida por mayoría cualificada.[15] Si no se alcanza esa mayoría o si una mayoría cualificada se pronuncia contra la propuesta, ésta se somete al Consejo Europeo. El Consejo Europeo debe pronunciarse por mayoría cualificada y dentro de un plazo de tres meses, incluso para rechazar la medida de que se trate. En caso de que no se adopte ninguna decisión dentro de ese plazo, la Comisión adopta la medida propuesta.

2.21 El "procedimiento de gestión", aplicable a las "medidas de gestión"[16], se establece en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE. Conforme a ese artículo, con arreglo a este procedimiento, la Comisión puede adoptar una medida propuesta aun en el caso de disconformidad del Comité. No obstante, si el Comité emite un dictamen negativo por mayoría cualificada, la Comisión debe solicitar la intervención del Consejo Europeo, el cual puede tomar una decisión diferente por mayoría cualificada en el plazo de tres meses. La Comisión puede aplazar la aplicación de la medida en esos casos. Si el Consejo Europeo no adopta una decisión en el plazo de tres meses, la medida suspendida se convierte en aplicable.

2.22 Puede haber también remisiones al Comité del Código Aduanero en otros instrumentos jurídicos de la Comunidad distintos del Código Aduanero Comunitario. En tal caso, el procedimiento de adopción de decisiones aplicable se establece en la disposición que atribuye facultades de decisión a la Comisión. Un ejemplo a este respecto es el artículo 10 del Reglamento Nº 2658/87 que establece el Arancel Aduanero Común, con arreglo al cual el Comité del Código Aduanero asistirá a la Comisión de conformidad con el procedimiento de gestión.

[13] Asuntos acumulados 69 y 70-76, *Dittmeyer*, Recopilación de Jurisprudencia 1977, página 00231 (CE - Prueba documental 31).

[14] Estados Unidos - Prueba documental 10.

[15] Una decisión "por mayoría cualificada" implica una ponderación de los votos de los Estados miembros de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 205 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el artículo 3 del Protocolo sobre la Ampliación de la Unión Europea.

[16] El artículo 2 de la Decisión sobre comitología explica que las "medidas de gestión" abarcan las medidas relativas a la aplicación de la política agrícola común y la política pesquera común o a la ejecución de programas con implicaciones presupuestarias importantes.

4. Los tribunales de las CE

a) Cometido y funciones de los tribunales de los Estados miembros

2.23 Los tribunales de los Estados miembros desempeñan una doble función. Cuando resuelven una diferencia que se rige por el derecho nacional, son un elemento del ordenamiento jurídico nacional. En cambio, tienen la condición de tribunales comunitarios cuando resuelven un asunto que se rige por el derecho comunitario. Los tribunales de los Estados miembros son competentes para resolver cualquier diferencia cuando la competencia no está atribuida expresamente al Tribunal de Justicia ni al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. De conformidad con el artículo 234 del Tratado de la CE, los tribunales de los Estados miembros pueden someter cuestiones al Tribunal de Justicia.

b) Cometido y funciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

2.24 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas han sido establecidos por el Tratado de la CE y el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia anexo al mismo.[17] Ambos tribunales están compuestos por un juez por Estado miembro y adoptan normalmente sus decisiones en salas compuestas por tres o cinco jueces. El Tribunal de Justicia está asistido por ocho abogados generales, que emiten dictámenes sobre los asuntos.

2.25 Con arreglo al artículo 220 del Tratado de la CE, la función esencial del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia consiste en garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado. El Tribunal de Justicia podrá adoptar medidas directas contra los Estados miembros por incumplimiento de una obligación del derecho comunitario (artículos 226 a 228 del Tratado), para declarar nulo un acto de la Comunidad (artículos 230 y 231 del Tratado), en caso de que una institución comunitaria se abstenga de pronunciarse (artículo 232 del Tratado) y con respecto a los daños en el marco de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad (artículo 235 del Tratado).

2.26 Los procedimientos ante el Tribunal de Justicia pueden tener también su origen en un tribunal nacional de conformidad con el artículo 234 del Tratado de la CE. Con arreglo a ese artículo, los tribunales nacionales pueden someter al Tribunal de Justicia cualquier cuestión relativa a la interpretación del derecho comunitario. Con algunas excepciones, los tribunales de los Estados miembros cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial con arreglo al derecho interno, están obligados a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

2.27 El apartado 1 del artículo 225 del Tratado de la CE dispone que el Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer en primera instancia de los recursos de anulación, los recursos por abstención, los recursos basados en la responsabilidad extracontractual, los litigios de personal y los asuntos sometidos a una cláusula compromisoria en un contrato celebrado por la Comunidad, con excepción de los reservados al Tribunal de Justicia. Según el artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, los recursos interpuestos por los Estados miembros, por las instituciones de las Comunidades y por el Banco Central Europeo serán competencia del Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia podrá conocer de los recursos sobre cuestiones de derecho contra decisiones del Tribunal de Primera Instancia cuando dicho Tribunal sea competente en primera instancia.

[17] Estados Unidos - Prueba documental 42.

5. Colaboración entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión

a) Reglamento (CE) Nº 515/97 del Consejo

2.28 El Reglamento (CE) Nº 515/97 del Consejo relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión tiene por objeto asegurar la correcta aplicación de, entre otras cosas, la reglamentación aduanera.[18]

2.29 El título I de dicho Reglamento se ocupa de la prestación de asistencia previa petición entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros. El título II trata de la asistencia espontánea entre las autoridades aduaneras. El título III regula las relaciones entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros y la Comisión. El título V establece el sistema de información aduanero, que es un sistema automatizado de información que pueden utilizar las autoridades administrativas de los Estados miembros y la Comisión como instrumento que ayude a las autoridades aduaneras de las CE a prevenir, investigar y perseguir las operaciones que sean contrarias a la legislación aduanera.

b) Programas de acción

2.30 La Comunidad ha adoptado y aplicado sucesivos programas de acción para reforzar la aplicación efectiva de la unión aduanera de las CE. El actual programa de acción "Aduanas 2007" ha sido establecido para el período comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007 por la Decisión Nº 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.[19] Los objetivos de Aduanas 2007 se indican en el apartado 1 del artículo 3 de la Decisión Nº 253/2003. Según ese precepto, los objetivos del programa consisten en velar porque las administraciones aduaneras de los Estados miembros:

a) actúen de manera coordinada para garantizar que la actividad aduanera responda a las necesidades del mercado interior de la Comunidad mediante la aplicación de la estrategia establecida en la Comunicación de la Comisión y la Resolución del Consejo antes mencionadas sobre una estrategia para la unión aduanera;

b) se comuniquen entre sí y desempeñen sus funciones con tanta eficacia como si formaran una única administración y obtengan resultados equivalentes en todo el territorio aduanero de la Comunidad;

c) satisfagan las demandas que les impone la mundialización y el aumento de la actividad comercial y contribuyan a reforzar el entorno competitivo de la Unión Europea;

d) den la necesaria protección a los intereses financieros de la Unión Europea, y proporcionen un entorno estable y seguro a sus ciudadanos;

e) adopten las medidas necesarias para preparar la ampliación y apoyar la integración de los nuevos Estados miembros.

2.31 Aduanas 2007 prevé una serie de acciones del programa, que incluyen actividades en la esfera de los sistemas de comunicación e intercambio de información, análisis comparativos, intercambios de funcionarios, seminarios, talleres y grupos de proyecto, actividades de formación, acciones de seguimiento y acciones externas en forma de asistencia técnica y formación.

[18] CE - Prueba documental 42.

[19] CE - Prueba documental 43.

6. Formación

2.32 La formación de los funcionarios de aduanas de los Estados miembros tiene lugar fundamentalmente a nivel nacional. Además, en el contexto de Aduanas 2007 se ha preparado un programa común de formación aduanera.

7. Control presupuestario y financiero

2.33 Con arreglo al apartado 1 b) del artículo 2 de la Decisión del Consejo 2000/597/CE, Euratom, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas[20], constituirán "recursos propios" incorporados en el presupuesto de las Comunidades Europeas los derechos del Arancel Aduanero Común y otros derechos establecidos en los intercambios con países no miembros. El apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CE, Euratom) Nº 1150/2000 del Consejo[21] establece que los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para que los importes correspondientes a los derechos de la Comunidad se pongan a disposición de ésta de la forma especificada en ese Reglamento. De conformidad con el apartado 2 a) del artículo 18 del Reglamento Nº 1150/2000, los Estados miembros, a petición de la Comisión de las CE, deberán efectuar controles suplementarios, a los que se asociará a la Comisión, cuando ésta lo solicite. Con arreglo al apartado 3 del artículo 18 del Reglamento Nº 1150/2000, la Comisión podrá también proceder por sí misma a verificaciones *in situ*.

C. ESFERAS ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA A QUE SE REFIEREN LOS ESTADOS UNIDOS EN SUS COMUNICACIONES

1. Clasificación arancelaria

2.34 Según el apartado 6 del artículo 20 del Código Aduanero Comunitario, por "clasificación arancelaria" se entenderá la determinación a) bien de la subpartida de la nomenclatura combinada o de la subpartida de otra nomenclatura basada en ella, que con ulteriores subdivisiones, o sin ellas, se utilice para la aplicación de medidas comunitarias distintas de las arancelarias en el marco de los intercambios de mercancías (por ejemplo suspensiones arancelarias, preferencias arancelarias, derechos antidumping); b) bien de la subpartida de cualquier otra nomenclatura comunitaria basada en la nomenclatura combinada que, con ulteriores subdivisiones o sin ellas, se utilice para la aplicación de medidas distintas de las arancelarias en el marco de los intercambios de mercancías (por ejemplo contingentes de importación para productos textiles, restituciones a la exportación en el caso de los productos agropecuarios).

2.35 La obligación de clasificar las mercancías conforme al Código Aduanero Comunitario recae en las "autoridades aduaneras" a las que en el apartado 3 del artículo 4 del Código Aduanero Comunitario se define como las autoridades competentes, entre otras cosas, para la aplicación de la normativa aduanera. En el contexto de las Comunidades Europeas, que constituyen una unión aduanera y que tienen un Arancel Aduanero Común para los Estados miembros de las CE y los terceros países, las administraciones de los Estados miembros son responsables de todas las operaciones relativas a la aplicación cotidiana de la NC, incluida la adopción de decisiones en materia de clasificación.

2.36 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia establece que la clasificación arancelaria se lleva a cabo sobre la base de las características y propiedades objetivas de los productos que es posible

[20] CE - Prueba documental 44.

[21] CE - Prueba documental 45.

determinar cuando se procede al despacho de aduana.[22] Los instrumentos de clasificación que pueden ser aplicables en las Comunidades Europeas abarcan los reglamentos de clasificación, las notas explicativas y los criterios de clasificación del SA y las notas explicativas de las CE y los dictámenes del Comité del Código Aduanero y la información arancelaria vinculante.

a) Reglamentos de clasificación

2.37 De conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Nº 2658/87, la Comisión puede adoptar reglamentos sobre la clasificación de las mercancías. La Comisión adopta esos reglamentos con arreglo al procedimiento de gestión a que se hace referencia en el artículo 10 del Reglamento Nº 265/87. Los reglamentos de clasificación determinan la subpartida arancelaria que debe aplicarse a la mercancía específica descrita en el reglamento pero, por analogía, pueden resultar también pertinentes a productos similares a los descritos en él.[23] De conformidad con lo dispuesto en el segundo apartado del artículo 249 del Tratado de la CE, los reglamentos de clasificación son vinculantes en toda la Comunidad pero no pueden modificar la NC.[24]

b) Notas explicativas del SA y criterios de la OMA

2.38 Según el párrafo 1 b) del artículo 7 del Convenio sobre el SA, el Comité del SA puede redactar notas explicativas, criterios de clasificación y otros criterios para la interpretación del SA. El Tribunal de Justicia ha declarado en su jurisprudencia que, aunque estos instrumentos no son normalmente vinculantes en el derecho comunitario, las notas explicativas del SA y los criterios de clasificación de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) son importantes medios para la interpretación del Arancel Aduanero Común.[25] No obstante, el Tribunal de Justicia ha estimado también que una interpretación del SA aprobada por el Consejo de la OMA vincula a la Comunidad cuando refleja la práctica general seguida por los Estados miembros, salvo que sea incompatible con el texto de la partida de que se trate o exceda manifiestamente de las facultades discrecionales atribuidas a la OMA.[26]

c) Notas explicativas de la Nomenclatura Combinada

2.39 De conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Nº 2658/87, la Comisión puede publicar notas explicativas de la NC. La Comisión adopta esas notas explicativas con arreglo al procedimiento de gestión previsto en el artículo 10 del Reglamento. Las notas explicativas pueden aclarar cuestiones concretas de clasificación arancelaria que se plantean en la NC

[22] Asunto 38-76, *Luma*, Recopilación de Jurisprudencia 1976, página 02027, párrafo 7 (CE - Prueba documental 18); Asunto 233/88, *van de Kolk*, Recopilación de Jurisprudencia 1990, página I-00265, párrafo 12 (CE - Prueba documental 19).

[23] Asunto C-130/02, *Krings*, sentencia de 4 de marzo de 2004 (no incluida aún en los informes oficiales), párrafo 35 (CE - Prueba documental 20).

[24] Asunto C-401/93, *GoldStar*, Recopilación de Jurisprudencia 1994, página I-05587, párrafo 19 (CE - Prueba documental 21); Asunto C-265/89, *Vismans*, Recopilación de Jurisprudencia 1990, página I-03411, párrafo 13 (CE - Prueba documental 22).

[25] Asunto C-396/02, *DFDS*, sentencia de 16 de septiembre de 2004 (aún no publicada), párrafo 28 (CE - Prueba documental 25); Asunto 14/70, *Deutsche Bakels*, Recopilación de Jurisprudencia 1970, página 01001, párrafos 9 y 10 (CE - Prueba documental 26).

[26] Véase el Asunto 233/88, *van de Kolk*, Recopilación de Jurisprudencia 1990, página I-0265, párrafo 9 (CE - Prueba documental 19).

pero son distintas de las notas que introducen los capítulos de la NC.[27] Las notas explicativas de la NC carecen de fuerza vinculante en derecho y no pueden modificar la NC. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido en varias ocasiones que constituyen un medio importante de interpretación de la NC.[28]

d) Dictámenes del Comité del Código Aduanero

2.40 Sobre la base del artículo 8 del Reglamento Nº 2658/87, el Comité del Código Aduanero puede adoptar dictámenes sobre cuestiones relativas a la aplicación e interpretación de la NC. Esos dictámenes son distintos de los que el Comité adopta en el contexto de un procedimiento de comitología sobre medidas propuestas por la Comisión. Los dictámenes adoptados por el Comité no son jurídicamente vinculantes. No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que esos dictámenes constituyen un medio importante para garantizar la aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común por las autoridades de los Estados miembros y que, en tal concepto, pueden considerarse un instrumento válido para la interpretación del Arancel Aduanero Común.[29]

e) Información arancelaria vinculante

2.41 Las disposiciones básicas sobre información arancelaria vinculante ("IAV") se encuentran en el artículo 12 del Código Aduanero Comunitario. En el título II de la parte I del Reglamento de Aplicación (artículos 5 a 14) se recogen otras normas relativas a la información vinculante. Esas disposiciones adicionales se ocupan, concretamente, de los procedimientos de obtención de las informaciones arancelarias vinculantes, las medidas que han de adoptarse en los casos de información vinculante, los efectos jurídicos de esa información y el cese de validez de la misma. Además, la Comisión ha publicado directrices administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante (EBTI/IAV).[30]

2.42 La finalidad de la información vinculante es que los comerciantes puedan actuar con seguridad cuando existen dudas en cuanto a la clasificación o al origen de las mercancías, protegiéndolos así frente a posibles cambios posteriores de posición de las autoridades aduaneras.

2.43 Conforme al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de Aplicación, las solicitudes de información vinculante han de presentarse por escrito y dirigirse, ya sea a las autoridades aduaneras del Estado o los Estados miembros en el que o en los que se debe utilizar la información en cuestión, ya sea a las autoridades aduaneras competentes del Estado miembro en el que esté establecido el solicitante. De conformidad con el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento de Aplicación, se publica regularmente en el Diario Oficial la lista de las autoridades de los Estados miembros competentes para expedir IAV.[31]

---

[27] Asunto 183/73, *Osram*, Recopilación de Jurisprudencia 1974, página 00477, párrafo 12 (CE - Prueba documental 27); Asunto 149/73, *Witt*, Recopilación de Jurisprudencia 1973, página 01587, párrafo 3 (CE - Prueba documental 28).

[28] Asunto C-396/02, *DFDS*, sentencia de 16 de septiembre de 2004 (aún no publicada), párrafo 28 (CE - Prueba documental 25); Asunto C-259/97, *Clees*, Recopilación de Jurisprudencia 1998, página I-08127, párrafo 12 (CE - Prueba documental 29).

[29] Asuntos acumulados 69 y 70-76, *Dittmeyer*, Recopilación de Jurisprudencia 1977, página 00231, párrafo 4 (CE - Prueba documental 31).

[30] CE - Prueba documental 32.

[31] CE - Prueba documental 33.

2.44 La solicitud debe hacerse en un formulario normalizado conforme al modelo que figura en el Anexo 1*ter* del Reglamento de Aplicación. En el apartado 3 A) del artículo 6 del Reglamento de Aplicación se indican los datos que debe contener una solicitud de IAV. Según el apartado 3 A) j) de ese artículo, la solicitud debe incluir la indicación de si, a conocimiento del solicitante, le ha sido solicitada o facilitada en la Comunidad una IAV para una mercancía idéntica o similar.

2.45 El apartado 1 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación dispone que se remitirá a la Comisión una copia de la solicitud de IAV, una copia de la IAV notificada al solicitante y los datos recogidos en el ejemplar 4 del formulario de IAV. La transmisión se efectúa por vía telemática. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación, estos datos se conservan en una base de datos de la Comisión (base de datos EBTI/IAV). Hay dos versiones de esa base de datos. Una de ellas puede ser consultada por el público y la otra está reservada exclusivamente a la Comisión y a las autoridades aduaneras de los Estados miembros que expiden IAV. La versión pública permite realizar búsquedas de IAV válida por país emisor, fecha inicial y final de vigencia, referencia IAV, código INC, palabra clave o designación de la mercancía. La versión pública de esa base de datos puede consultarse en el sitio Web de la Comisión Europea.[32] La versión reservada a la Comisión y las autoridades aduaneras de los Estados miembros contiene información adicional de carácter confidencial, que no está a disposición del público (nombre y dirección del solicitante, titular y representante, en caso de que haya sido nombrado uno, y datos comerciales confidenciales relativos a las mercancías para las que se ha expedido la IAV, incluidos los nombres comerciales). La versión reservada a la Comisión y a las autoridades aduaneras que expiden la IAV contiene también todas las solicitudes de IAV presentadas a las autoridades aduaneras de los Estados miembros y la IAV cuya validez ha cesado.[33] Según las directrices administrativas emitidas por la Comisión sobre el sistema EBTI/IAV las autoridades aduaneras deben consultar la base de datos EBTI/IAV antes de expedir IAV siempre que existan dudas sobre la correcta clasificación o quepa considerar más de una partida.[34]

2.46 En cuanto a la cuestión de quién es competente para emitir IAV, la emisión de esa información corresponde a las autoridades aduaneras de los Estados miembros. En concreto, el artículo 12 del Código Aduanero Comunitario establece que las autoridades aduaneras de los Estados miembros facilitarán IAV, previa solicitud escrita. Cuando las autoridades aduaneras estén en posesión de todos los elementos necesarios para determinar la clasificación de las mercancías, la IAV deberá ser notificada al solicitante a la mayor brevedad posible, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de Aplicación.

2.47 El artículo 10 del Reglamento de Aplicación establece que la IAV sólo podrá ser invocada por el titular o su representante.[35] Según los artículos 5 y 11 del Reglamento de Aplicación, la IAV vincula a las administraciones de todos los Estados miembros. Además, de conformidad con el apartado 2 del artículo 12 del Código Aduanero Comunitario, la IAV tendrá carácter vinculante para las autoridades aduaneras frente al titular de la solicitud de información. El apartado 3 del artículo 12 del Código Aduanero Comunitario aclara que la IAV únicamente será vinculante respecto a la clasificación arancelaria de las mercancías que correspondan plenamente a las descritas en la información. El apartado 4 de ese mismo artículo indica que la IAV será válida durante seis años,

[32] http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/ebticau.htm.

[33] En la Prueba documental 34 presentada por las CE hay una copia del interfaz de búsqueda de la base de datos reservada a la Comisión y a las autoridades emisoras de los Estados miembros.

[34] CE - Prueba documental 32, página 7.

[35] El apartado 3 del artículo 5 del Reglamento de Aplicación define al "titular" de la IAV como "la persona en nombre de la cual se expide la información arancelaria vinculante". No es necesario que el "titular" de la IAV sea el "solicitante" de la misma.

pero podrá anularse si las autoridades aduaneras determinan que se ha emitido sobre la base de elementos inexactos o incompletos suministrados por el solicitante. En el apartado 5 del artículo 12 del Código Aduanero Comunitario se indican los casos en los que la IAV dejará de ser válida, que incluyen aquéllos en los que sea revocada o modificada de conformidad con el artículo 9. Este artículo, a su vez, prevé la revocación o modificación de la IAV cuando "no se hubieren cumplido o dejaren de cumplirse una o varias de las condiciones para su adopción". El Tribunal de Justicia ha declarado que la autoridad aduanera de un Estado miembro puede considerar que una de las condiciones establecidas para la emisión de IAV no se cumple ya y revocarla cuando, tras un examen más exhaustivo, llegue a la conclusión de que su interpretación inicial de las disposiciones legales aplicables a la clasificación arancelaria de las mercancías afectadas "es errónea, como consecuencia de un error de apreciación o de una evolución de los criterios en materia de clasificación arancelaria".[36]

2.48 En el artículo 9 del Reglamento de Aplicación se establece el procedimiento aplicable en caso de discrepancias en la IAV. En concreto, el Comité del Código Aduanero podrá examinar esas divergencias si la cuestión ha sido incluida en el orden del día de la siguiente reunión del Comité por la Comisión por propia iniciativa o a instancia del representante de un Estado miembro. A tenor de ese mismo artículo, habida cuenta de esas divergencias, la Comisión debe adoptar lo antes posible y a más tardar en los seis meses siguientes a la reunión del Comité del Código Aduanero en cuyo orden del día se haya incluido la divergencia una medida que garantice la aplicación uniforme de las normas de la NC. Las medidas previstas en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento de Aplicación pueden adoptar la forma de un reglamento de clasificación adoptado por la Comisión sobre la base de la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Nº 2658/87. De conformidad con el inciso i) del apartado 5 a) del artículo 12 del Código Aduanero Comunitario, cuando se adopte ese reglamento, la IAV que no se ajuste al mismo dejará de ser válida. Alternativamente, la Comisión puede, basándose en el inciso iii) del apartado 5 a) del artículo 12 del Código Aduanero Comunitario y el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento de Aplicación, adoptar una decisión por la que se obligue al Estado miembro que expidió la IAV a revocarla.

2. Valoración en aduana

2.49 Cuando los derechos de aduana se calculan *ad valorem* -es decir, cuando se expresan como un porcentaje del valor de la mercancía- la liquidación de los derechos adeudados debe incluir la valoración de la mercancía.

2.50 Las disposiciones básicas sobre valoración en aduana figuran en el capítulo 3 del Título II del Código Aduanero Comunitario (artículos 28 a 36). En el Título V del Reglamento de Aplicación (artículos 141 a 181 *bis*) se recogen disposiciones más detalladas. Ese título se divide en siete capítulos, que se refieren respectivamente a las disposiciones generales, los cánones y los derechos de licencia, el lugar de introducción en la Comunidad, los gastos de transporte, el tipo de cambio, los procedimientos simplificados relativos a determinadas mercancías perecederas y la declaración de elementos y presentación de los documentos correspondientes. Además, el Anexo 23 del Reglamento de Aplicación contiene notas explicativas para el cálculo del valor en aduana. El apartado 1 del artículo 141 del Reglamento de Aplicación obliga a los Estados miembros a aplicar las disposiciones del Código Aduanero Comunitario y del Reglamento de Aplicación con arreglo a esas notas.

[36] *Timmermans Transport & Logistics BV contra Inspecteur der Belastingdienst - Douanendistrict Rososendaal y Hoogenboom Production Lts. contra Inspecteur der Belastingdienst - Douanendistrict Rotterdam*, Asuntos acumulados C-133/02 y C-134/02, Recopilación de Jurisprudencia 2004, página 00000, párrafo 25 (Estados Unidos - Prueba documental 2).

2.51 Con arreglo al artículo 29 del Código Aduanero Comunitario, la base primaria para la determinación del valor en aduana en las Comunidades Europeas es el "valor de transacción", es decir, el precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas. El valor de transacción puede utilizarse para las mercancías importadas siempre que no sean aplicables ninguna de las restricciones o condiciones que dan lugar a que se no considere aceptable.

2.52 Conforme al artículo 32 del Código Aduanero Comunitario, para determinar el valor de transacción debe ajustarse el precio, *sumando* al mismo: a) las comisiones y los gastos de corretaje; b) el coste de los envases y de embalaje; c) los bienes y servicios suministrados por el comprador; d) los cánones y derechos de licencia relativos a las mercancías; e) el producto obtenido por el vendedor de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas; y f) los gastos de transporte, seguro, carga y manipulación en el país de exportación. En los artículos 157 a 159 del Reglamento de Aplicación se facilitan orientaciones complementarias acerca de lo que se entiende por "cánones" y de los casos en que deben incluirse en el valor de transacción. En virtud del artículo 33 del Código Aduanero Comunitario el valor de transacción debe ajustarse también *deduciendo* del precio, por ejemplo: a) los gastos de transporte dentro de las Comunidades Europeas; y b) los derechos de aduana, derechos antidumping y otros gravámenes pagaderos en las Comunidades Europeas como consecuencia de la importación o la venta de las mercancías.

2.53 El valor de transacción es el método preferido y fundamental de valoración y se utiliza en la mayoría de los casos. No obstante, de conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario, puede descartarse el valor de transacción, entre otras cosas, si existe "vinculación" entre comprador y vendedor. Según el artículo 143 del Reglamento de Aplicación, se considera que existe "vinculación" entre las partes: a) si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas y b) si una de ellos controla directa o indirectamente a la otra. El apartado 2 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario aclara que la existencia de una vinculación jurídica entre el comprador y el vendedor no significa necesariamente que no se considere aceptable el valor de transacción. Ello sólo será así cuando la vinculación influya en el precio. El Anexo 23 del Reglamento de Aplicación, que contiene las notas explicativas para el cálculo del valor en aduana, explica más detalladamente cuándo debe descartarse el valor de transacción debido a la vinculación entre comprador y vendedor.

2.54 El artículo 30 del Código Aduanero Comunitario establece que cuando no pueda utilizarse el valor de transacción, han de utilizarse otras bases alternativas para la valoración de forma sucesiva en el siguiente orden: a) el valor de transacción de mercancías idénticas; b) el valor de transacción de mercancías similares; c) el valor basado en el precio unitario al que se venda la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares importadas a personas que no estén vinculadas con los vendedores; y d) el valor calculado, igual a la suma del coste de producción, incluidos los gastos generales y una cantidad igual a la que suele cargarse en concepto de beneficios. El Anexo 23 del Reglamento de Aplicación facilita orientaciones adicionales acerca de los casos en que pueden utilizarse esos métodos alternativos.

2.55 El apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación dispone que, a efectos del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario, el hecho de que las mercancías objeto de una venta se declaren para su despacho a libre práctica deberá considerarse una indicación suficiente de que han sido vendidas para su exportación al territorio aduanero de la Comunidad y añade que en el caso de ventas sucesivas antes de la valoración, esta indicación sólo servirá respecto a la última venta a partir de la cual se introdujeron las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad, o respecto a una venta en el territorio aduanero de la Comunidad anterior al despacho a libre práctica de las mercancías.

2.56 Cuando haya necesidad de normas más detalladas sobre valoración, la Comisión podrá, con arreglo al procedimiento al que se hace referencia en el artículo 247 del Código Aduanero Comunitario, modificar las normas de valoración que figuran en el Reglamento de Aplicación, con

efecto vinculante en todos los Estados miembros. Además, de conformidad con el artículo 249 del Código Aduanero Comunitario, el Comité del Código Aduanero (en su Sección del Valor en Aduana) podrá examinar las cuestiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera de las CE en la esfera de la valoración. La Comisión ha publicado también un compendio de textos relativos al valor en aduana con observaciones preparadas por el Comité del Código Aduanero y conclusiones a las que ha llegado el Comité sobre cuestiones concretas de valoración en aduana basándose en el artículo 249 del Código Aduanero Comunitario y que contiene además extractos de sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia sobre cuestiones relativas a la valoración, así como índices de otros textos pertinentes.[37]

3. Auditoría posterior al despacho a libre práctica

2.57 El artículo 78 del Código Aduanero Comunitario autoriza a las autoridades aduaneras a proceder al control de los documentos y datos comerciales relativos a las operaciones de importación o de exportación de las mercancías de que se trate así como a las operaciones comerciales ulteriores relativas a las mismas mercancías. Estos controles ayudarán a las autoridades aduaneras a cerciorarse de la exactitud de los elementos contenidos en la declaración aduanera pertinente y podrán realizarse en los locales del declarante o de cualquier persona que intervenga directa o indirectamente en las operaciones antes citadas. Las autoridades aduaneras podrán proceder también al examen de las mercancías, cuando éstas todavía puedan ser presentadas.

2.58 Ninguna disposición del Código Aduanero Comunitario ni del Reglamento de Aplicación obliga a las autoridades aduaneras a realizar auditorías posteriores al despacho a libre práctica de las mercancías, ni impone obligación alguna sobre la forma en que han de llevarse a cabo dichas auditorías. Sin embargo, la Comisión de las CE, conjuntamente con los Estados miembros, ha elaborado una Guía comunitaria sobre auditorías de aduana[38], que establece un marco para los controles *a posteriori* y los controles por auditoría.

4. Sanciones por infracciones de la normativa aduanera de las CE

2.59 No hay en el Código Aduanero Comunitario ni en el Reglamento de Aplicación disposiciones que definan las sanciones aplicables por infracciones de la normativa aduanera comunitaria. En consecuencia, como regla general, la naturaleza y al alcance de esas sanciones, ya sean administrativas o penales, se regulan en las leyes nacionales de los Estados miembros. No obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado de la CE, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento y aplicación del derecho comunitario, con inclusión del establecimiento de sanciones por infracciones del derecho comunitario. En particular, los Estados miembros deben procurar que las infracciones del derecho comunitario sean sancionadas en condiciones análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional cuando tengan una índole y una importancia similares y que, en todo caso, confieran un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio a la sanción.[39] Lo anterior ha sido confirmado por la Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus

[37] CE - Prueba documental 37.

[38] CE - Prueba documental 90.

[39] Asunto C-68/88, *Comisión/Grecia*, Recopilación de Jurisprudencia 1989, página 02965, párrafos 23 a 25 (CE - Prueba documental 38); en sentido análogo, Asunto C-326/88, *Hansen*, Recopilación de Jurisprudencia 1990, página I-02911, párrafo 17 (CE - Prueba documental 39); Asunto C-36/94, *Siesse*, Recopilación de Jurisprudencia 1995, página I-03573, párrafo 20 (CE - Prueba documental 40); Asunto C-213/99, *Andrade*, Recopilación de Jurisprudencia 2000, página I-11083, párrafos 19 y 20 (Estados Unidos - Prueba documental 31).

disposiciones relativas al mercado interior, que, tras recordar la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, invita a los Estados miembros a velar por que se tomen las medidas que conduzcan "a una aplicación del derecho comunitario con una eficacia y un rigor equivalentes a los empleados en la aplicación de su Derecho nacional y [a] que en materia de sanciones adopten disposiciones cuyo carácter sea, en cualquier caso, efectivo, proporcionado y disuasorio".[40] Cuando un Estado miembro no establece esas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incumple las obligaciones que le impone el Tratado de la CE.[41]

5. Transformación bajo control aduanero

2.60 En el artículo 130 del Código Aduanero Comunitario se estipula que el régimen de transformación bajo control aduanero permitirá introducir en el territorio aduanero de la Comunidad mercancías no comunitarias para someterlas a operaciones que modifiquen su especie o estado sin estar sujetas a los derechos de importación ni a medidas de política comercial, y despachar a libre práctica los productos que resulten de esas operaciones con los derechos de importación correspondientes a los productos transformados.

2.61 El artículo 85 del Código Aduanero Comunitario establece que la posibilidad de acogerse al régimen de transformación bajo control aduanero (que se define como un régimen aduanero económico) está supeditada a la concesión de una autorización por las autoridades aduaneras a petición de la persona que lleva a cabo la transformación o se encarga de que se lleve a cabo. La autorización sólo se concederá si se cumplen determinadas condiciones. Una de ellas es la contenida en la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario.

2.62 Con arreglo la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario, antes de conceder la autorización a que se refiere el artículo 85, las autoridades aduaneras deben examinar las consecuencias económicas de la utilización del régimen de transformación bajo control aduanero, para determinar si éste contribuye o no a la creación y el mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en las Comunidades Europeas sin que se perjudiquen los intereses esenciales de los productores de mercancías similares. De conformidad con el apartado 3 del artículo 502 del Reglamento de Aplicación, con respecto al régimen de transformación bajo control aduanero, el examen deberá establecer si el recurso a fuentes de aprovisionamiento no comunitarias es susceptible de favorecer la creación o el mantenimiento de una actividad de transformación en la Comunidad.

2.63 El artículo 552 y la parte A del Anexo 76 del Reglamento de Aplicación establecen los casos en los que se consideran cumplidas las condiciones económicas, por lo que, en tales casos, no es necesario un examen de las condiciones económicas. Para los tipos de mercancías y las operaciones que figuran en la parte B del Anexo 76 del Reglamento de Aplicación y que no estén cubiertas en la parte A, el examen de las condiciones económicas debe realizarse a nivel de la Comunidad, con arreglo al procedimiento comunitario pertinente. En el caso de los tipos de mercancías y las operaciones que no figuran en el Anexo 76 del Reglamento de Aplicación, de conformidad con el apartado 1 del artículo 502 y el apartado 1 del 552 del Reglamento de Aplicación, el examen de las condiciones económicas se realizará a nivel nacional. Cuando los exámenes se realizan a nivel nacional, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión la información pertinente de conformidad con el artículo 522 del Reglamento de Aplicación. Además, de conformidad con los artículos 503 y 504 del Reglamento de Aplicación, cuando un Estado miembro formule objeciones en

[40] CE - Prueba documental 41.

[41] Asunto C-68/88, *Comisión/Grecia*, Recopilación de Jurisprudencia 1989, página 02965, párrafos 23 a 25 (CE - Prueba documental 38), en el que se constató que Grecia había violado sus obligaciones en virtud del artículo 10 del Tratado de la CE.

contra de una autorización expedida o las autoridades aduaneras interesadas deseen celebrar consultas antes o después de expedir una autorización, se podrá efectuar un examen de las condiciones económicas a nivel de la Comunidad.

6. Procedimiento de domiciliación

2.64 De conformidad con el artículo 263 del Reglamento de Aplicación, las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las CE pueden conceder, previa solicitud, la autorización para utilizar el "procedimiento de domiciliación" a cualquier solicitante que desee que se proceda al despacho a libre práctica de las mercancías en sus locales o en otros lugares designados. Dicho de otra forma, un importador puede conseguir que se proceda al despacho a libre práctica de las mercancías en sus propios locales o en determinados lugares designados determinados sin tener que presentar las mercancías en la aduana.

2.65 La disposición básica con respecto al procedimiento de domiciliación es la letra c) del apartado 1 del artículo 76 del Código Aduanero Comunitario. Además, cuando se utilice un procedimiento informático, se aplicará el artículo 77 del Código. En los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación se incluyen disposiciones más detalladas al respecto.

2.66 Conforme al artículo 263 del Reglamento de Aplicación, la autorización para utilizar el procedimiento de domiciliación se concederá a cualquier persona que desee que se proceda al despacho a libre práctica de las mercancías en sus propios locales o en los demás lugares designados o aprobados por las autoridades aduaneras con respecto a las mercancías sujetas a determinados regímenes (régimen de tránsito o régimen aduanero económico) o introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad con exención del requisito de ser presentadas en la aduana. El apartado 1 del artículo 264 del Reglamento de Aplicación dispone que se concederá la autorización para la domiciliación siempre que los documentos de la persona que presente la solicitud permitan a las autoridades aduaneras efectuar un control eficaz.

7. Cobro de la deuda aduanera

2.67 De conformidad con el apartado 1 b) del artículo 2 de la Decisión del Consejo 2000/597/CE, Euratom, los ingresos en concepto de derechos de importación y exportación basados en el Arancel Aduanero Común constituyen "recursos propios". Los artículos 217 a 220 del Código Aduanero Comunitario regulan la contracción en los Estados miembros y en consecuencia establecen la relación entre la obligación del deudor de pagar el derecho de importación o exportación a la administración aduanera nacional, de una parte, y la obligación de los Estados miembros de poner a disposición de las Comunidades Europeas los "recursos propios", de otra. De conformidad con el artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, desde el momento de su contracción, deberá comunicarse el importe de los derechos al deudor, según modalidades apropiadas. El apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario establece el plazo dentro del cual debe comunicarse la deuda al deudor.

D. REVISIÓN DE LAS DECISIONES ADUANERAS

1. Decisiones sobre el objeto de la revisión judicial

2.68 Por "decisión" se entiende, según el apartado 5 del artículo 4 del Código Aduanero Comunitario, "todo acto administrativo efectuado en virtud de la normativa aduanera que, al pronunciarse sobre un caso individual, surta efectos jurídicos sobre una o más personas determinadas o que pueden determinarse; éste término incluirá, entre otros aspectos, una información arancelaria vinculante a efectos del artículo 12 [del Código Aduanero Comunitario]". Además, el apartado 3 del artículo 6 del Código Aduanero Comunitario dispone que "las autoridades aduaneras deberán motivar las decisiones adoptadas por escrito que denieguen las solicitudes que les hayan sido dirigidas o

aquellas que tengan consecuencias desfavorables para las personas a las que vayan dirigidas. Deberán hacer mención del derecho de recurso previsto en el artículo 243".

2.69 El apartado 1 del artículo 243 del Código Aduanero Comunitario dispone que toda persona que estime que una *decisión* de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la normativa aduanera lesiona sus derechos tendrá derecho a recurrir contra la misma. También es posible el recurso cuando una decisión solicitada no haya sido adoptada dentro del plazo contemplado en el apartado 2 del artículo 6 del Código Aduanero Comunitario.

2. Revisión por las autoridades aduaneras y los tribunales de los Estados miembros

2.70 Según el apartado 1 del artículo 243 del Código Aduanero Comunitario, el recurso debe presentarse en el Estado miembro en que se haya adoptado o solicitado la decisión de que se trate. Además, en el artículo 245 del Código Aduanero Comunitario se estipula que "las disposiciones relativas a la implantación del procedimiento de recurso serán adoptadas por los Estados miembros", lo que significa que los procedimientos de recurso se establecen en las leyes nacionales de los Estados miembros.

2.71 El apartado 2 del artículo 243 indica que el derecho de recurso podrá ejercerse: a) en una primera fase, ante las autoridades aduaneras designadas al efecto por los Estados miembros; b) en una segunda fase, ante una autoridad independiente que podrá ser una autoridad judicial o un órgano especializado equivalente, con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro.

2.72 En lo que respecta a la revisión por autoridades aduaneras designadas en los Estados miembros, se requiere en la mayoría de los Estados miembros. No obstante en Bélgica, Estonia, Grecia, Chipre, Francia, Malta y Portugal las revisiones administrativas son voluntarias. Además, en Suecia, no hay una revisión administrativa y la decisión administrativa ha de recurrirse directamente ante los tribunales. Las autoridades administrativas de los Estados miembros pueden derogar, revocar, modificar o sustituir una decisión administrativa impugnada.

2.73 En lo que respecta al recurso a los tribunales de los Estados miembros, la mayor parte de esos tribunales sólo puede anular la decisión administrativa si considera que es contraria a derecho. No obstante, en algunos casos, los tribunales pueden reemplazar la decisión por una decisión suya en los casos relativos al pago de derechos. En un pequeño número de países, los tribunales nacionales están facultados para reemplazar o modificar la decisión administrativa impugnada: es el caso de Dinamarca, Eslovenia, Letonia, los Países Bajos y Suecia.

3. Recurso directo al Tribunal de Justicia

2.74 El artículo 230 del Tratado de la CE reconoce a los particulares el derecho de recurrir directamente al Tribunal de Primera Instancia en ciertos casos. El artículo 230, que se refiere a los recursos de anulación, se ocupa de la competencia del Tribunal de Justicia para controlar la legalidad de los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, de los actos de la Comisión Europea y del BCE, o de los actos del propio Consejo o del Parlamento destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. El recurso de anulación al amparo del artículo 230 no abarca los actos adoptados por una autoridad nacional ni se extiende al Tratado de la CE y a sus modificaciones.

III. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

A. ESTADOS UNIDOS[42]

3.1 Los Estados Unidos solicitan que el Grupo Especial:

a) constate que las Comunidades Europeas no se ajustan a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994;

b) recomiende que las Comunidades Europeas den prontamente cumplimiento a los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994.

B. COMUNIDADES EUROPEAS[43]

3.2 Las Comunidades Europeas solicitan que el Grupo Especial rechace las alegaciones formuladas por los Estados Unidos.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

4.1 Los argumentos de las partes se exponen en sus comunicaciones escritas y orales al Grupo Especial y en sus respuestas a las preguntas formuladas. En la presente sección se resumen los argumentos expuestos por las partes en sus comunicaciones, sobre la base de los resúmenes facilitados por ellas. Las respuestas escritas de las partes a las preguntas formuladas por el Grupo Especial y por cada una de las demás partes figuran en los anexos del presente informe (véase en la página … la lista de anexos).

A. PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS

1. Introducción

4.2 La presente diferencia plantea dos interrogantes. En primer lugar ¿aplican las Comunidades Europeas ("CE") sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general de manera uniforme, imparcial y razonable, como exige el párrafo 3 a) del artículo X del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* ("GATT de 1994")? En segundo lugar ¿mantienen las CE tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otras cosas, a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras, como requiere el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994? La respuesta a ambas preguntas es negativa.

4.3 En lugar de aplicar su normativa aduanera básica de manera uniforme, las CE la aplican de 25 maneras diferentes. Dado que la aplicación es competencia de cada uno de los Estados miembros, las cuestiones relativas a la clasificación y a la valoración pueden estar sujetas a 25 interpretaciones diferentes, y los comerciantes están sometidos a 25 procedimientos diferentes para conseguir el despacho de las mercancías a libre práctica en las CE. El resultado neto es una aplicación que no facilita el comercio, sino que lo distorsiona, y que impone costos de transacción que no existirían si la aplicación fuese uniforme.

[42] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 155, y Segunda comunicación escrita, párrafo 117.

[43] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 477, y Segunda comunicación escrita, párrafo 246.

4.4 La inexistencia de tribunales o procedimientos comunitarios para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras agrava este problema. Al igual que la aplicación de las medidas aduaneras de las CE, los recursos contra las decisiones aduaneras son competencia de cada uno de los Estados miembros. A consecuencia de ello, hay en las CE 25 regímenes de recurso diferentes, ninguno de los cuales puede dar lugar a una decisión que surta efectos en todo el ámbito de las CE, salvo y hasta que se someta una cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ("el Tribunal de Justicia").

4.5 En las CE los elementos básicos del sistema aduanero se establecen en tres textos legislativos: el Código Aduanero Comunitario ("CAC"), el Reglamento de Aplicación del Código Aduanero Comunitario ("Reglamento de Aplicación" o "Reglamento de Aplicación del CAC") y el Arancel Aduanero Común ("el arancel"). Esas medidas (así como las medidas conexas) son aplicadas independientemente por las autoridades aduaneras de cada uno de los 25 Estados miembros de las CE. Hay un Comité del Código Aduanero ("el Comité"), compuesto por representantes de cada uno de todos los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión. Aunque aparentemente una de sus funciones es conciliar las divergencias que se producen en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria en los Estados miembros, graves limitaciones institucionales le impiden cumplir esa función de forma sistemática.

4.6 Cuando un comerciante impugna una decisión de las autoridades aduaneras de un Estado miembro, sólo puede recurrir contra esa decisión ante los tribunales u otros órganos judiciales de revisión del Estado miembro de que se trate. No hay ningún foro comunitario ante el que pueda recurrir prontamente un comerciante contra una decisión de las autoridades aduaneras de un Estado miembro, incluida una decisión que difiera de las decisiones de las autoridades de otros Estados miembros.

4.7 Al ser Miembro de la OMC de pleno derecho, es decir, independientemente de los Estados miembros que las constituyen, las CE están obligadas a establecer disposiciones para la aplicación de sus leyes aduaneras y prever la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras de la forma prescrita respectivamente por los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT. La primera cuestión que plantea la presente diferencia es si las CE aplican su derecho aduanero de manera uniforme, como exige el párrafo 3 a) del artículo X. Teniendo en cuenta el sentido ordinario que ha de darse a los términos de ese precepto, la cuestión es si las CE gestionan, aplican o ejecutan sus leyes aduaneras de la misma manera en diferentes lugares o circunstancias, o en momentos diferentes. Particularmente pertinente a la presente diferencia es la uniformidad en relación con diferentes lugares.

4.8 Uno de los pocos grupos especiales que ha analizado con cierto detalle el párrafo 3 a) del artículo X es el Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados* ("*Argentina - Pieles y cueros*"). El informe del Grupo Especial que examinó esa diferencia apoya la tesis de que el requisito de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X incluye la uniformidad de la aplicación en todo el territorio de un Miembro de la OMC. Las CE no aplican su derecho aduanero de una manera uniforme en lugares diferentes de las CE, como exige el párrafo 3 a) del artículo X, sino que lo aplican de una manera que difiere de un Estado miembro a otro, y no establecen un mecanismo comunitario para conciliar sistemáticamente las diferencias.

2. Las CE no aplican su derecho aduanero de manera uniforme

a) Clasificación aduanera

4.9 Una esfera en la que las divergencias en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria son especialmente perturbadoras es la de la clasificación aduanera. No es sorprendente que cuando 25 autoridades distintas tienen la función de interpretar un sistema complejo de nomenclatura,

la posibilidad de que haya interpretaciones divergentes sea grande. De hecho, es evidente que las CE se pronunciaron de forma bastante abierta sobre este aspecto en su diferencia con Tailandia y el Brasil sobre la clasificación de los trozos de pollo deshuesados congelados (*Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados*). Ni el Código ni ninguna otra disposición del derecho comunitario de que tengan noticia los Estados Unidos exige que un Estado miembro siga la interpretación dada por otro al Arancel. Cuando un Estado miembro clasifica un producto en una subpartida arancelaria determinada, nada exige que otro lo clasifique en la misma subpartida. *A fortiori*, nada exige que otros Estados miembros sigan las razones que ha tenido el primer Estado miembro al clasificar mercancías *similares*.

4.10 Resulta esclarecedor el examen de la aplicación de la disposición de las CE relativa a decisiones anticipadas en materia de clasificación, conocidas con el nombre de información arancelaria vinculante ("IAV"). Conforme al sistema de información arancelaria vinculante, un importador u otra parte interesada solicita a las autoridades aduaneras de un Estado miembro que emitan IAV que confirme la clasificación que se dará a determinadas mercancías importadas en el territorio de ese Estado miembro. La solicitud puede ser hecha por el "titular" de la IAV (es decir, la persona en nombre de la cual se expide la información arancelaria vinculante), o por otro "solicitante" (cualquier persona que haya presentado una solicitud de IAV). El titular u otro solicitante elige el Estado miembro al que presentará la solicitud.

4.11 Una vez expedida, la información arancelaria vinculante "tendrá dicho carácter para las autoridades aduaneras frente al titular de la solicitud de información". En el artículo 11 del Reglamento de Aplicación se estipula que las informaciones arancelarias vinculantes facilitadas por las autoridades de un Estado miembro "obligarán a las autoridades competentes de todos los Estados miembros en las mismas condiciones". No obstante, en la práctica los Estados miembros no siempre tratan la IAV facilitada por otros Estados miembros como vinculante, y el sistema de la IAV no garantiza la aplicación uniforme de las clasificaciones aduaneras. Además, la IAV anterior emitida por un Estado miembro no impide a un solicitante que trate de convencer a otro Estado miembro de que la clasificación establecida en la IAV inicial era errónea. Ninguna disposición del Código o del Reglamento de Aplicación exige que al emitir la nueva IAV, las autoridades hagan suyas las constataciones recogidas en la IAV emitida anteriormente.

4.12 El sistema de la IAV no consigue una aplicación uniforme en lo que respecta a la clasificación por diversas razones. En primer lugar, da lugar a que se use la IAV más ventajosa. Teóricamente, la Comisión podría controlar este fenómeno ejerciendo sus facultades de conciliar IAV incompatibles. No obstante, existen varios obstáculos para que la Comisión cumpla esta función. En primer lugar, puede resultar difícil detectar si efectivamente existen informaciones vinculantes divergentes. La IAV está destinada específicamente al titular, por lo que es posible que dos titulares diferentes estén en posesión de IAV divergentes relativas a la misma mercancía. En ese caso la existencia de informaciones vinculantes divergentes no es patente a primera vista. Aun en el caso de que el mismo titular esté en posesión de IAV divergentes, la existencia del conflicto puede no resultar evidente a primera vista a la Comisión o al representante de un Estado miembro. El titular de la IAV puede optar por no señalar el conflicto a la atención del Comité. Otras personas interesadas en la conciliación de la diferencia (por ejemplo los competidores) pueden no tener conocimiento del conflicto. A la inversa, cuando un titular u otra persona interesada tiene conocimiento de la existencia de IAV divergentes y desea que se solucione el conflicto, no tiene derecho a someter la cuestión al Comité para que sea resuelta dentro de un plazo fijado.

4.13 Además, las diferencias entre Estados miembros en lo que respecta a la clasificación de mercancías idénticas no se manifiestan necesariamente mediante IAV divergentes. Cabe la posibilidad de que un solicitante obtenga una IAV desfavorable de un Estado miembro y se limite a importar las mercancías de que se trata a través de otro (probablemente con costos adicionales de envío, de distribución o de otro tipo) sin tratar necesariamente de obtener IAV de ese último Estado.

En ese caso, la existencia de una diferencia no se pondría necesariamente de manifiesto a la Comisión.

4.14 Las CE mantienen una base informática de datos a disposición del público para la búsqueda de IAV. Teóricamente, esa base podría utilizarse para determinar si Estados miembros diferentes han emitido IAV divergentes para productos idénticos. No obstante, en la práctica, una búsqueda de esa índole es sumamente difícil, si no imposible.

4.15 Además, la autonomía relativa que tiene cada Estado miembro con respecto a la revocación o modificación de IAV es una prueba más de la imposibilidad de lograr la aplicación uniforme del Arancel mediante el sistema de la IAV. En una reciente decisión, en el asunto *Timmermans*, el Tribunal de Justicia declaró que la autoridad aduanera de un Estado miembro puede revocar una IAV basándose en una reconsideración del Arancel (y no sólo en la revelación de hechos que no conocía cuando se emitió la IAV). El Tribunal llegó a esa conclusión a pesar de que el Abogado General había recomendado lo contrario y había señalado que "tal posibilidad de revocación resulta difícilmente compatible tanto con el objetivo de aplicación uniforme de la nomenclatura aduanera como con el objetivo de seguridad jurídica que se persigue mediante la creación de las IAV". De hecho, ése el precisamente el problema que se plantea desde la perspectiva del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. El hecho de que las revisiones de las IAV ni siquiera tengan un claro carácter "vinculante" socava aún más las posibilidades, por limitadas que éstas fueran, que tiene el sistema de las IAV de aportar un cierto grado de uniformidad dentro de las CE.

4.16 Por último, dos recientes casos, que no constituyen en absoluto dos ejemplos aislados, ilustran el problema de la falta de uniformidad en la aplicación del derecho comunitario en materia de clasificación aduanera. En el primero de ellos, las autoridades aduaneras alemanas clasificaron de forma diferente que otros Estados miembros un producto textil especial (forros opacos para cortinas) durante cinco años, sin que las instituciones comunitarias conciliaran la divergencia. En el segundo, que afectaba a los monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital, la cuestión de la clasificación divergente de esos productos (entre los Países Bajos, de un lado, y otros Estados miembros, de otro) fue sometida al Comité en 2004 y, en lo que respecta a una importante subcategoría del producto en cuestión sigue hoy sin resolver (y en lo que respecta al resto sólo se ha resuelto de forma provisional).

b) Valoración en aduana

4.17 En algunos aspectos, los problemas de la falta de uniformidad en la aplicación del derecho aduanero se han dejado sentir de forma aún más acusada en la esfera de la valoración aduanera que en la de la clasificación. A diferencia de lo que ocurre en el caso de la clasificación, la normativa aduanera comunitaria sobre valoración ni siquiera establece un sistema comparable al de la IAV -es decir un sistema de información claramente vinculante (aunque en forma muy limitada) y que podría al menos (en función de cómo fuera diseñado y aplicado) constituir un paso hacia el logro de una aplicación uniforme. En general, la capacidad de las instituciones comunitarias para colmar lagunas con el fin de conseguir la uniformidad es limitada. La Sección del Valor en Aduana del Comité no tiene facultades para examinar casos concretos con el fin de conciliar las diferencias entre Estados miembros en lo que respecta a la aplicación.

4.18 En un informe de diciembre de 2000 del Tribunal de Cuentas de las CE se clasificaban de forma muy detallada las formas que habían revestido las divergencias en la aplicación de las disposiciones sobre valoración en aduana del Código y el Reglamento de Aplicación entre diversos Estados miembros. Un punto destacado del informe del Tribunal es el trato diferente dado a los pagos en concepto de cánones. De conformidad con el la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código, al precio efectivamente pagado o por pagar han de sumarse los cánones y derechos de licencia relativos a la mercancía objeto de valoración, en la medida en que tales cánones y derechos de licencia no estén incluidos en él. El Tribunal constató que, en varios casos, diferentes Estados

miembros imputaban de forma diferente los cánones al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa. Merece la pena destacar que el Tribunal constató que en los casos identificados los Estados miembros en cuestión no señalaron a la atención del Comité la diferencia de trato, ni éste examinó la cuestión.

4.19 Otra cuestión que examinó el Tribunal fue la aplicación de la norma que permite utilizar para la valoración de las mercancías importadas, en determinados casos, una base distinta del valor de transacción de la última venta que dio lugar a la introducción de las mercancías en el territorio aduanero de las CE. El Tribunal constató que las autoridades de algunos Estados miembros, a diferencia de las de otros, exigían que los importadores obtuvieran una aprobación previa para utilizar una base de valoración distinta del valor de transacción de la última venta.

4.20 Una tercera cuestión identificada por el Tribunal fue el diferente trato otorgado a los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía. El Tribunal constató que al menos en un Estado miembro -Alemania- las autoridades aduaneras deducían del valor en aduana de los vehículos importados el valor de las reparaciones realizadas en el territorio de las CE y reembolsadas por el vendedor extranjero. Otros Estados miembros -en concreto Italia, los Países Bajos y el Reino Unido- habían denegado peticiones de deducciones similares en el valor en aduana. Hay que destacar especialmente que el Tribunal señaló que la Comisión había tenido conocimiento de la diferencia de trato entre los Estados miembros durante al menos 10 años y no había adoptado ninguna medida para conciliar las diferencias. En su respuesta, la Comisión señaló que desde 1997 había "intentado armonizar, por medio de la ejecución de legislación, prácticas divergentes de la Comunidad", pero no había podido conseguir la mayoría necesaria en el Comité.

4.21 Un caso reciente concerniente a la aplicación no uniforme de la normativa comunitaria en materia de valoración en aduana se refiere a la diferencia entre los enfoques adoptados para determinar si hay una relación de control entre un importador y sus proveedores extranjeros. En el caso de que se trata, las autoridades aduaneras españolas constataron que entre Reebok International Limited (RIL) y sus proveedores extracomunitarios hay una relación de control, basándose en sus contratos con esos proveedores, en tanto que otros Estados miembros (en particular, los Países Bajos) no constataron la existencia de esa relación. La diferencia de interpretación tiene importantes consecuencias. Las autoridades del Estado miembro que coincidieron con RIL en la inexistencia de una relación de control entre esta empresa y sus proveedores permitieron a RIL declarar el valor en aduana de sus mercancías sobre la base de la norma relativa al valor de transacción de la "venta para la exportación" establecida en el artículo 29 del Código. Por el contrario, las autoridades españolas exigieron a RIL que aplicara una metodología diferente. La consecuencia neta fue para RIL una deuda aduanera adicional de 350.000 euros al año (390.000 euros si se incluyen el impuesto sobre el valor añadido y los intereses).

4.22 En síntesis, en la esfera de la valoración, como en la de la clasificación, las CE no proceden a una aplicación uniforme de su normativa aduanera. Las autoridades de cada Estado miembro establecen su propia interpretación del Código y del Reglamento de Aplicación, y aun en los casos en los que se identifican diferencias entre los Estados miembros, las CE carecen de capacidad para conciliar sistemáticamente esas diferencias.

c) Regímenes aduaneros

4.23 Con respecto a los regímenes aduaneros, la falta de uniformidad en la aplicación es evidente en diversas fases del proceso. Ello se pone de manifiesto, por ejemplo, en las auditorías que las autoridades de los diferentes Estados miembros llevan a cabo después del despacho a libre práctica de las mercancías. Es bastante frecuente que las autoridades de un Estado miembro realicen una auditoría para verificar el valor que un importador ha declarado en relación con mercancías despachadas a libre práctica. El informe de diciembre de 2000 del Tribunal de Cuentas constató que

las autoridades de diferentes Estados miembros adoptaban enfoques diferentes en relación con esas auditorías de valoración, con importantes consecuencias para los importadores.

4.24 El Tribunal constató que en el caso de al menos un Estado miembro, las autoridades aduaneras no tienen derecho a proceder a auditorías posteriores a la importación, excepto en casos de fraude. El Tribunal constató que incluso entre los Estados en los que las autoridades podían realizar auditorías posteriores a la importación, existían diferencias en cuanto a las prácticas de trabajo, con inclusión del equilibrio entre los exámenes de las mercancías efectuados en el momento de la importación y las auditorías posteriores al despacho aduanero. Merece la pena destacar que el Tribunal constató que como consecuencia de la falta de unos métodos de trabajo comunes "las distintas autoridades aduaneras son reacias a aceptar las decisiones de los demás". El Tribunal subrayó a este respecto el caso de la emisión de decisiones escritas sobre el valor en aduana. En tanto que algunos Estados miembros emiten regularmente decisiones escritas con efecto vinculante para el futuro, otros las emiten en muy pocas ocasiones.

4.25 Otra esfera en la que la aplicación varía según los Estados miembros es la de las sanciones por infracción del derecho aduanero. Se trata de una esfera de divergencia sobre la que el Tribunal de Justicia ha llamado la atención en diversas ocasiones. La propia Comisión ha reconocido (en una nota explicativa que acompaña a una propuesta reciente de revisión del Código) que los operadores económicos llevan mucho tiempo quejándose de la falta de armonización en lo que respecta a las sanciones por infracciones de las normas aduaneras. En tanto que en un Estado miembro determinadas infracciones pueden considerarse un acto delictivo grave que puede llevar a una pena privativa de libertad, en otro ese mismo acto sólo puede dar lugar, en todo caso, a la imposición de una pequeña multa.

4.26 Otra esfera en la que la aplicación de la normativa aduanera comunitaria difiere según los Estados miembros es la relativa a la decisión de permitir lo que se denomina "transformación bajo control aduanero". Cuando se autoriza ese régimen, las mercancías pueden introducirse en las CE sin pagar derechos y transformarse en productos más elaborados en las CE, productos que se despachan a libre práctica con el derecho correspondiente. La autorización para proceder a la transformación bajo control aduanero está supeditada a una evaluación de las condiciones económicas, que diferentes Estados miembros aplican de forma diferente. En las directrices emitidas por las autoridades aduaneras del Reino Unido se afirma que esa prueba económica tiene "dos aspectos" y se exige que el solicitante aporte pruebas de las repercusiones de su actividad de transformación bajo control aduanero, así como de su repercusión sobre otros productores comunitarios de las mercancías importadas. Por el contrario, las normas reglamentarias francesas, por ejemplo, no imponen la prueba adicional de demostrar la inexistencia de perjuicio para los competidores en las CE.

4.27 Otra esfera en la que se hace patente la falta de uniformidad en la aplicación es la de los procedimientos de domiciliación. Con arreglo al procedimiento de domiciliación, un importador puede conseguir que se proceda al despacho a libre práctica de las mercancías en sus propios locales o en otros lugares determinados designados (en lugar de en los locales de la aduana). Aunque el Reglamento de Aplicación recoge las ideas generales acerca de la forma en que se prevé que funcione el procedimiento, los requisitos concretos varían según los Estados miembros, como pone claramente de manifiesto la información que los Estados miembros exigen que los importadores que se acojan a ese procedimiento faciliten a las autoridades aduaneras antes del despacho de las mercancías. Algunos exigen únicamente la transmisión electrónica de los datos del manifiesto. Otros requieren que se traduzcan o complementen esos datos. También se ponen de manifiesto diferencias en lo que respecta a la intervención de las autoridades aduaneras antes del despacho de las mercancías. Algunos Estados miembros recurren a auditorías posteriores al despacho, en tanto que otros se reservan el derecho a inspeccionar las mercancías antes del mismo. Los Estados miembros suelen exigir que se remita información complementaria a las autoridades aduaneras después de haberse procedido al despacho conforme al procedimiento de domiciliación, aunque también a este respecto varían las prescripciones. Por ejemplo, algunos Estados miembros exigen la remisión del formulario

de valoración DV1 de las CE, en tanto que otros no lo exigen. Algunos exigen la remisión de facturas, certificados y otros documentos justificantes, y otros no. Por último, el plazo durante el que deben conservarse los documentos justificantes de las importaciones tramitadas con arreglo a ese procedimiento varía ampliamente, y va desde un período de 4 años en el Reino Unido a un período de 10 en los Países Bajos.

4.28 Como señaló acertadamente el Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, "el párrafo 3 a) del artículo X requiere un examen de los efectos reales que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio" (párrafo 11.77). A tal fin, "es preciso que todos los exportadores e importadores puedan esperar el mismo trato en momentos *y lugares distintos* …" (párrafo 11.83; sin cursivas en el original). En consecuencia, ese párrafo establece una restricción frente a determinadas distorsiones del comercio a las que puede dar lugar una aplicación que varíe en función de factores tales como el punto de entrada en el territorio de un Miembro.

4.29 Un sistema que somete a los comerciantes a procedimientos diferentes y a interpretaciones distintas de las normas de clasificación y valoración según el Estado miembro a través del cual se importan las mercancías en el territorio de las CE está en contradicción con este principio básico o, como mínimo, hace difícil que un comerciante tenga expectativas razonables acerca del trato que se otorgará a las mercancías cuando se importan en las CE y puede dar lugar además a que los comerciantes adopten decisiones acerca de la forma de introducir las mercancías en las CE basadas en las diferencias entre Estados miembros de las que se tiene conocimiento.

d) La Comisión, a través del Comité del Código Aduanero, no aporta uniformidad a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria

4.30 El mecanismo previsto en el Código para que la Comisión aborde las cuestiones de aplicación de la normativa aduanera comunitaria es el Comité del Código Aduanero. El Comité está integrado por representantes de todos los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión. Los comerciantes individuales no pueden plantear cuestiones al Comité. Ese derecho está reservado al Presidente del Comité y a los representantes de los Estados miembros. Un comerciante puede pedir a un Estado miembro que someta una cuestión al Comité (aunque el Código no obliga a los Estados miembros a mantener un proceso de petición) pero el Estado miembro no está obligado a responder favorablemente a su petición.

4.31 Generalmente, el Comité actúa conforme al "procedimiento de reglamentación" establecido en la decisión sobre "comitología" de las CE. En las cuestiones relativas a las decisiones vinculantes anticipadas que los Estados miembros pueden emitir sobre la clasificación o el origen de las mercancías, así como en determinadas cuestiones concernientes al trato arancelario preferente, el Comité actúa conforme al "procedimiento de gestión" de la Decisión sobre comitología. Tanto con arreglo al procedimiento de reglamentación como con arreglo al procedimiento de gestión, la decisión del Comité requiere el apoyo de una mayoría de los representantes de los Estados miembros y de al menos 231 votos de un total de 321 (sobre la base de la ponderación por Estados miembros establecida en el Tratado de la CE) y la imposibilidad de llegar a una decisión puede dar lugar a que la cuestión se someta al Consejo de la Unión Europea, con consecuencias diferentes según cuál sea el procedimiento aplicable. No obstante, en la práctica, en lo que respecta a las cuestiones de administración aduanera, la Comisión sólo recurre al Consejo en muy pocas ocasiones. Dados los desincentivos institucionales para someter cuestiones al Consejo, éstas pueden permanecer indefinidamente en el ámbito del Comité mientras la Comisión trata de obtener la mayoría necesaria, lo que puede conducir a que en casos polémicos no se adopte ninguna decisión en absoluto.

4.32 El Código dispone que el Comité adopte su propio reglamento interno. Ese reglamento es importante a los efectos de la presente diferencia sobre todo por lo que *no* dice. En primer lugar, no establece ningún proceso para que un comerciante afectado por la aplicación del Código por un

Estado miembro dirija una petición al Comité. En segundo lugar, no establece la obligación de que el Comité haga público su orden del día antes de celebrar sus reuniones, con lo que un comerciante afectado por una cuestión sometida al Comité no tiene la seguridad de que se señalará a la atención del Comité que la cuestión está pendiente. En tercer lugar, aunque hay en el reglamento un artículo titulado "Admisión de terceras personas", ese artículo no establece el derecho de las partes que puedan resultar afectadas, no ya a presentar pruebas y exponer argumentos al Comité, sino ni siquiera a asistir a sus reuniones, y se limita a autorizar al Presidente del Comité a invitar a expertos a que expongan sus opiniones a éste y a permitir la asistencia a las reuniones del Comité de observadores de determinados terceros países u organismos terceros según lo indicado en otros instrumentos de las CE. Por último, no hay ninguna prescripción que exija la publicación de las actas del Comité. De hecho, el artículo 15 del Reglamento Interno dispone expresamente que corresponde a la Comisión la concesión o denegación del acceso público a los documentos del Comité y que en todo caso "las deliberaciones del Comité tendrán carácter confidencial".

4.33 Tanto los comerciantes como las instituciones de las CE han reconocido los límites de la capacidad del procedimiento del Comité para conciliar las diferencias en cuanto a la aplicación entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Por ejemplo, en el Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración se señaló que al recurrir a la Sección del Valor en Aduana del Comité, la Comisión "utiliza la discusión, la persuasión y la motivación como medios de conseguir un tratamiento común de los mismos problemas en todos los Estados miembros". La propia Comisión reconoció en su respuesta que el Comité "sólo puede encargarse de una pequeña parte de los asuntos importantes que se le presentan".

4.34 En resumen, el proceso del Comité a través del cual la Comisión actúa en las cuestiones relativas a la administración de aduanas no está destinado a conseguir de forma sistemática la aplicación uniforme cuando se pone de manifiesto la existencia de divergencias. Desde el punto de vista de "los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio" (que es la pertinente para examinar la obligación establecida en el párrafo 3 a) del artículo X, como indicó el Grupo Especial en el asunto el asunto *Argentina - Pieles y cueros*), un Miembro de la OMC no proporciona una aplicación uniforme cuando hay dudas acerca de si el mecanismo aparentemente disponible para aportar uniformidad funcionará o no en el caso de una divergencia determinada. El mecanismo teóricamente disponible para aportar uniformidad a la aplicación del derecho aduanero en las CE carece de un procedimiento para hacerlo sistemáticamente, y su inexistencia lleva a la conclusión de que las CE simplemente no proporcionan la aplicación uniforme exigida por el párrafo 3 a) del artículo X.

3. Las CE no mantienen tribunales o procedimientos para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras

4.35 El segundo aspecto de la alegación de los Estados Unidos concierne al hecho de que las CE no mantienen un tribunal u otro órgano comunitario ante el que pueda recurrirse prontamente contra una decisión aduanera de un Estado miembro. Con arreglo al sistema de las CE, puede obtenerse la revisión de una decisión aduanera de un Estado miembro en los tribunales de ese Estado. El único tribunal competente para adoptar decisiones que surtan efectos en toda la Comunidad sobre cuestiones de administración aduanera es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. No obstante, las cuestiones no se someten automáticamente al Tribunal de Justicia, e incluso cuando se somete a él una cuestión, el tiempo y los trámites necesarios desde que las autoridades de un Estado miembro adoptan inicialmente una decisión aduanera y la adopción de una decisión por el Tribunal de Justicia hace que la revisión en este órgano no sea en absoluto pronta.

4.36 La cuestión de la posibilidad de revisar las decisiones aduaneras está vinculada a la cuestión de la aplicación uniforme del derecho aduanero. En la medida en que la aplicación del derecho aduanero está fragmentada, la revisión en los tribunales de cada uno de los 25 Estados miembros no atenúa la fragmentación y puede incluso agravarla. Por el contrario, un único sistema de revisión

podría atenuar las diferencias entre los resultados iniciales que pueden producirse ocasionalmente en diferentes puntos.

4.37 La disposición del GATT de 1994 pertinente a la revisión en apelación de las decisiones aduaneras es el párrafo 3 b) del artículo X, que obliga a *cada* Miembro de la OMC a mantener o instituir "tan pronto como sea posible, tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos, destinados, entre otras cosas, a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras". Las CE son un Miembro de la OMC de pleno derecho al que es aplicable el párrafo 3 b) del artículo X. En consecuencia, las CE deben mantener los tribunales o procedimientos en cuestión.

4.38 Uno de los elementos contextuales pertinentes para interpretar el párrafo 3 b) del artículo X es el apartado inmediatamente anterior del párrafo en el que se recoge la obligación en cuestión. Ese apartado requiere la aplicación "uniforme, imparcial y razonable" de las leyes aduaneras. En consecuencia, las decisiones de los tribunales o procedimientos deben dar lugar a la revisión y rectificación de las decisiones en cuestiones aduaneras para todo el conjunto de las CE y no únicamente dentro de regiones geográficas limitadas de las Comunidades. La exigencia de que un comerciante que haya sido objeto de decisiones aduaneras desfavorables en tres Estados miembros distintos, cada una de ellas en contradicción con la interpretación aceptada de la normativa aduanera comunitaria en otros Estados miembros, entable sendos recursos en todos y cada uno de esos Estados es incompatible con el párrafo 3 b) del artículo X.

4.39 El Código Aduanero Comunitario no es suficientemente explícito acerca de la cuestión de los recursos. Se limita a establecer el derecho a recurrir contra las decisiones aduaneras precisando que los recursos podrán interponerse en primera instancia ante las autoridades aduaneras de un Estado miembro y posteriormente ante un tribunal u otro organismo independiente y dispone que, salvo en determinadas circunstancias concretas, "la interposición de recurso no suspenderá la ejecución de la decisión impugnada". Aparte de ello, el Código declara únicamente que "las disposiciones relativas a la implantación del procedimiento de recursos serán adoptadas por los Estados miembros".

4.40 Así pues, el Código deja a los diversos Estados miembros un amplio grado de discrecionalidad en relación con el establecimiento de los procedimientos de recurso contra las decisiones aduaneras, como pone de manifiesto la diversidad de procedimientos existentes de hecho en los diversos Estados miembros. De hecho, aun cuando pudiera aducirse (en contra de lo que sostienen los Estados Unidos) que las CE pueden cumplir la obligación que les impone el párrafo 3 b) del artículo X limitándose a exigir a los Estados miembros que mantengan procedimientos de recurso, merece la pena destacar que no hay en el Código ninguna disposición que requiera que la revisión de los tribunales del Estado miembro sea pronta. El Código guarda silencio a este respecto.

4.41 De hecho, los procedimientos de recurso varían según los Estados miembros en lo que respecta a factores tales como la existencia de una revisión inicial por las propias autoridades aduaneras, los plazos para esa revisión (cuando es obligatoria antes de entablar un procedimiento judicial), la obligación de constituir una garantía para evitar la ejecución inmediata de la decisión recurrida y la existencia de una revisión a cargo de órganos jurisdiccionales superiores. Por ejemplo, los plazos fijados para los exámenes en primera instancia a cargo de las autoridades aduaneras de los Estados miembros pueden variar mucho (de 30 días en Irlanda a un año en los Países Bajos). Además, las diferencias entre los procedimientos son aún más acusadas después de la primera fase de revisión.

4.42 En el vértice de la estructura de revisión está el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. A diferencia de las decisiones de los tribunales de los diversos Estados miembros, las decisiones del Tribunal de Justicia surten efectos en todo el territorio de las CE. Únicamente en esta etapa, una vez que ha llevado adelante su recurso a través del sistema judicial del Estado miembro, tiene el comerciante acceso a un órgano encargado de la revisión y rectificación de las medidas de las

propias CE. No obstante, dado el tiempo que inevitablemente se requiere para llegar a ese foro, difícilmente puede considerarse que se cumple de ese modo la obligación que incumbe a las CE en virtud del párrafo 3 b) del artículo X de mantener "tribunales o procedimientos … destinados … a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras".

4.43 Al comentar la solicitud de establecimiento de un grupo especial en la presente diferencia, las CE se refirieron al Tribunal de Justicia como la segunda institución [junto con la Comisión] que aplica "normas aduaneras y medidas institucionales y administrativas … con el propósito de evitar las prácticas divergentes". El hecho de que las CE consideren que el Tribunal de Justicia cumple esta función es esclarecedor y lleva a examinar la función que cumple realmente el Tribunal. El examen pone de manifiesto la existencia de importantes limitaciones institucionales de la capacidad del Tribunal de Justicia para "evitar las prácticas divergentes" así como el hecho de que el Tribunal no constituye un tribunal o procedimiento destinado a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras, como exige el párrafo 3 b) del artículo X. La principal vía por la que una cuestión relativa a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria por un Estado miembro puede llegar al Tribunal de Justicia es seguramente el reenvío por un tribunal de un Estado miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo 234 del Tratado de la CE. No obstante, salvo los tribunales de última instancia, la remisión de asuntos por parte de los tribunales de los Estados miembros es optativa. Además, aun en el caso de que se someta una cuestión al Tribunal de Justicia, la respuesta de éste no resuelve definitivamente el asunto, sino que se remite al tribunal que le sometió la cuestión, el cual adopta entonces su decisión sobre el asunto teniendo en cuenta las orientaciones del Tribunal de Justicia.

4.44 En su dictamen en el asunto *Wiener* de 1997 sometido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Abogado General de las CE instó a los tribunales de los Estados miembros a que actuaran con moderación al someter al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a las normas de clasificación aduanera. El Abogado General declaró que "está claro que la contribución del Tribunal de Justicia a la aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común mediante la decisión de la clasificación de productos determinados siempre será mínima". El razonamiento del Abogado General puede trasponerse fácilmente a la valoración en aduana y a otras esferas en las que puede haber diferencias en cuanto a la aplicación del derecho comunitario por los Estados miembros. Una lección fundamental del asunto *Wiener* es que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no reúne las condiciones apropiadas para ser el tribunal o procedimiento de las CE destinado a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras que requiere el párrafo 3 b) del artículo X. Su lugar en el sistema de las CE -como órgano superior de decisión en cuestiones de derecho comunitario- y la forma en que se le someten las cuestiones -generalmente mediante el reenvío voluntario por los tribunales de los Estados miembros- le incapacitan para cumplir esa función.

4.45 Dado que el Tribunal de Justicia no está destinado a ser un tribunal aduanero de las CE -y que, en todo caso, dado que el tiempo que requiere que una cuestión planteada en una decisión aduanera de un Estado miembro llegue a ser revisada por el Tribunal de Justicia difícilmente permite considerar que esa revisión sea una revisión pronta- lo que queda es un mosaico de autoridades aduaneras de Estados miembros cuya labor es revisada por los tribunales estatales, sin que haya ningún tribunal o procedimiento de las CE que facilite la pronta revisión y rectificación de las decisiones aduaneras de una manera que aporte uniformidad a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. En resumen, las CE no mantienen ningún tribunal o procedimiento destinado a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras, como exige el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

4. Conclusión

4.46 Por las razones expuestas en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, las CE no cumplen las obligaciones establecidas en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X

del GATT de 1994. Las Comunidades no aplican sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de manera uniforme, imparcial y razonable, ni mantienen tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. Los Estados Unidos solicitan al Grupo Especial que constate que las CE no se ajustan a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 y recomiende que den prontamente cumplimiento a esos preceptos.

B. PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1. Introducción

4.47 Los Estados Unidos alegan que las CE no cumplen las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT porque no aplican de manera uniforme sus leyes aduaneras. Además, alegan que las CE no cumplen las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 3 b) de ese mismo artículo porque no mantienen tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras.

4.48 Esas alegaciones de los Estados Unidos carecen de fundamento. Los Estados Unidos no aportan pruebas de que las CE no apliquen sus leyes aduaneras de manera uniforme, en contra de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Aparte de un pequeño número de ejemplos aislados, que inducen a error, engañosos, los Estados Unidos facilitan muy poca información acerca de la aplicación real de la normativa aduanera comunitaria. Al no aportar ninguna prueba de que las CE apliquen sus leyes aduaneras de manera no uniforme, los Estados Unidos no han establecido una presunción *prima facie* en apoyo de sus alegaciones.

4.49 Los argumentos de los Estados Unidos no se centran en la aplicación real de las normas aduaneras comunitarias, sino en el sistema de administración aduanera de las CE. Para decirlo claramente, los Estados Unidos ponen objeciones al hecho de que las CE apliquen las normas aduaneras comunitarias por medio de las administraciones nacionales de sus Estados miembros y no de un organismo aduanero comunitario. De forma análoga, ponen objeciones al hecho de que la revisión judicial de las decisiones aduaneras no se efectúe en las CE por "tribunales a nivel de las CE", sino por tribunales de los Estados miembros de las CE. Con esas alegaciones, los Estados Unidos ponen en tela de juicio elementos estructurales fundamentales del ordenamiento jurídico de las CE sin la más mínima prueba de que esos elementos estructurales sean en realidad incompatibles con las prescripciones de los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT.

4.50 La interpretación que los Estados Unidos hacen de los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT carece de base en el texto de esas disposiciones. Según los Estados Unidos, esos preceptos parecen prescribir detalladamente la forma en la que un Miembro de la OMC debe aplicar sus leyes aduaneras. Las CE no consideran que ése sea el objetivo al que responde el párrafo 3 del artículo X del GATT. El párrafo 3 del artículo X del GATT es una disposición que establece normas mínimas para la aplicación de la legislación aduanera y no una base jurídica para la armonización de los sistemas de administración aduanera de los Miembros de la OMC.

4.51 La tibia reacción de los comerciantes ante la reclamación de los Estados Unidos es otra muestra de la debilidad de sus tesis. En respuesta a la petición de contribuciones formulada por el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales después de la solicitud de celebración de consultas, el USTR sólo recibió tres comunicaciones. En la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos sólo se hace referencia a una de ellas. De las otras dos, una no estaba fundamentada y la otra no era de utilidad para la posición de los Estados Unidos, puesto que proporcionaba un ejemplo de la aplicación uniforme de las normas de clasificación de las CE.

2. Antecedentes fácticos

a) Principios generales del sistema jurídico comunitario

4.52 El avance de la integración europea se ha basado en gran medida en normas legislativas. A lo largo de varios decenios, las CE han establecido un extenso cuerpo de normas jurídicas comunitarias aplicables a una serie cada vez mayor de esferas políticas sobre la base de las facultades atribuidas a la Comunidad en sus tratados constitutivos.

4.53 El éxito de la integración europea se basa en la aplicación directa y uniforme del derecho comunitario en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros de la Comunidad. En consecuencia, la Comunidad Europea es, en una medida muy considerable, una Comunidad basada en el Estado de derecho, como reconoce expresamente el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la UE.

4.54 No obstante, con la excepción de un número reducido de esferas normativas, las CE no aplican el derecho comunitario por medio de una administración a nivel de las CE, sino que la ejecución de las leyes comunitarias se lleva a cabo por medio de las administraciones nacionales de los Estados miembros y, de forma análoga, por medio de los tribunales de esos Estados. Este principio de administración por medio de los Estados miembros puede calificarse de "federalismo ejecutivo".

4.55 Las críticas de los Estados Unidos al sistema de administración aduanera de las CE ponen directamente en tela de juicio principios fundamentales del derecho comunitario. Para situar esas cuestiones en el contexto adecuado, es necesaria una explicación más detenida de los principios básicos del derecho constitucional de las CE.

i) Las instituciones comunitarias y el proceso legislativo de las CE

4.56 De conformidad con el artículo 5 del Tratado de la CE, la Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el Tratado. Además, el artículo 5 del Tratado de la CE obliga a ésta a actuar de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El Tratado de la CE establece varias instituciones encargadas de realizar las funciones encomendadas a la Comunidad Europea. Las principales instituciones que intervienen en el proceso legislativo comunitario son el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea.

4.57 El procedimiento legislativo aplicable a la adopción de un acto jurídico determinado se establece en el fundamento jurídico específico que atribuye a la Comunidad las facultades necesarias para adoptar ese acto. En la gran mayoría de los casos, la adopción de un acto legislativo de la Comunidad requiere una propuesta de la Comisión Europea. En la mayor parte de los casos, el Tratado de la CE prevé que los actos legislativos sean adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, de conformidad con el procedimiento de codecisión establecido en el artículo 251 del Tratado de la CE. En la medida en que ello es así, puede considerarse que el Parlamento Europeo y el Consejo son los órganos legislativos fundamentales de las CE. En determinados casos, el Tratado prevé también la posibilidad de que el Consejo adopte por sí mismo actos legislativos, generalmente después de consultar al Parlamento Europeo.

ii) Las competencias de ejecución de la Comisión Europea

4.58 El tercer inciso del artículo 202 del Tratado de la CE estipula que el Consejo puede atribuir a la Comisión competencias de ejecución del derecho comunitario. Establece además que el Consejo puede someter el ejercicio de estas competencias a determinadas condiciones. Por último, en su última frase, el tercer inciso del artículo 202 del Tratado de la CE precisa que esas condiciones deben

ser "conformes a los principios y normas que el Consejo hubiere establecido previamente por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previo dictamen del Parlamento Europeo".

4.59 Sobre la base del tercer inciso del artículo 202 del Tratado de la CE el Consejo ha adoptado la Decisión 1999/468/CE. Esta decisión, conocida también como "Decisión sobre comitología" establece, en términos generales, los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución que el Consejo puede delegar en la Comisión.

4.60 La Decisión sobre comitología distingue tres tipos de procedimientos: el procedimiento consultivo, el procedimiento de gestión y el procedimiento de reglamentación. De conformidad con el artículo 2 de la Decisión, debe seguirse el procedimiento de reglamentación para la adopción de "las medidas de alcance general por el que se desarrollen los elementos esenciales de un acto de base". El procedimiento de gestión es aplicable a la adopción de "las medidas de gestión", tales como las relativas a la aplicación de la política agrícola común y la política pesquera común o a la ejecución de programas con implicaciones presupuestarias importantes. El procedimiento consultivo es aplicable en todos los demás casos en que resulte adecuado.

4.61 Los procedimientos específicos que han de seguirse se exponen respectivamente en los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión sobre comitología. En cada uno de esos procedimientos, la Comisión está asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión. La Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas.

4.62 Cuando sea aplicable el procedimiento consultivo, el Comité emitirá su dictamen por mayoría simple. En cambio, en los casos en que es aplicable el procedimiento de gestión o el procedimiento de reglamentación, el Comité emitirá su dictamen por mayoría cualificada, lo que implica una ponderación de los votos de los Estados miembros de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 205 del Tratado de la CE.

4.63 La principal diferencia entre los tres procedimientos estriba en las consecuencias de un dictamen negativo del Comité. En el caso del procedimiento consultivo descrito en el artículo 3 de la Decisión sobre comitología, la Comisión tendrá "en cuenta en la mayor medida posible" el dictamen emitido por el Comité, pero puede adoptar la medida aunque ésta no esté en conformidad con el dictamen del Comité.

4.64 En el caso del procedimiento de gestión descrito en el artículo 4 de la Decisión sobre comitología, la Comisión adopta medidas que serán inmediatamente aplicables. No obstante, si tales medidas no son conformes al dictamen emitido por el Comité, la Comisión las comunicará inmediatamente al Consejo. En este caso, la Comisión podrá aplazar la aplicación de las medidas que haya acordado durante el plazo que se fije en cada acto de base, que en ningún caso será superior a tres meses a partir de la fecha de dicha comunicación. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una decisión diferente dentro del plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión.

4.65 En el caso del procedimiento de reglamentación descrito en el artículo 5 de la Decisión sobre comitología, si la medida no es conforme al dictamen del Comité, la Comisión presentará al Consejo una propuesta relativa a las medidas que vayan a adoptarse. En tal caso, el procedimiento aplicable se establece en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión.

4.66 En consecuencia, los comités establecidos de conformidad con la Decisión sobre comitología cumplen una importante función en el proceso interno de adopción de decisiones de la Comunidad. En particular, en el contexto del procedimiento de gestión y del procedimiento de reglamentación, el dictamen del Comité puede determinar si la Comisión puede adoptar una medida, o ésta debe someterse al Consejo.

4.67 De conformidad con el apartado 1 del artículo 7 de la Decisión sobre comitología, cada comité aprobará su reglamento interno a propuesta de su Presidente, basándose en el reglamento interno estándar.

iii) Los efectos jurídicos del derecho comunitario

4.68 Sobre la base de las competencias atribuidas a la Comunidad Europea en el Tratado de la CE, las instituciones pueden adoptar una serie de actos legislativos y de otra naturaleza. Según el primer apartado del artículo 249 del Tratado de la CE las instituciones competentes pueden adoptar reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El segundo apartado de ese mismo artículo describe los efectos jurídicos de esos actos.

4.69 Según la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, el derecho de la Comunidad Europea prevalece sobre el derecho nacional de los Estados miembros. Esta primacía del derecho comunitario es un principio fundamental del ordenamiento jurídico de la Comunidad y es aplicable a todas las disposiciones del Tratado de la CE y de los actos de las instituciones comunitarias y frente a cualquier disposición del derecho nacional a cualquier nivel, incluidas las constituciones de los Estados miembros, lo que significa que en caso de que un tribunal de un Estado miembro constate la existencia de un conflicto entre una disposición del derecho comunitario y una disposición de su legislación nacional, debe prescindir de ésta última y aplicar únicamente el derecho comunitario.

4.70 Un segundo principio fundamental del derecho comunitario es el de la eficacia directa. Según la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, el derecho comunitario puede generar derechos para los particulares, que éstos pueden invocar directamente en los procedimientos que se sustancien ante los tribunales y autoridades nacionales. Esta eficacia directa afecta tanto a las disposiciones de los tratados constitutivos como a los actos del derecho comunitario derivado.

4.71 Considerados en su conjunto, los principios de primacía y de eficacia directa son esenciales para la aplicación efectiva y uniforme del derecho comunitario. Permiten a los particulares invocar las disposiciones del derecho comunitario en los procedimientos sustanciados ante los tribunales nacionales y, de ese modo, permiten que los jueces nacionales -en un diálogo constante con el Tribunal Europeo de Justicia a través del procedimiento de reenvío prejudicial- preserven el respeto del derecho comunitario.

4.72 Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que cuando concurren las condiciones en las que los particulares pueden basarse en las disposiciones del derecho comunitario ante los tribunales nacionales, todos los órganos de la administración, incluidos los organismos descentralizados, están obligados a aplicar esas disposiciones y, en caso necesario, deben prescindir directamente de las disposiciones del derecho nacional que estén en contradicción con el derecho comunitario.

iv) La Comisión, los Estados miembros y la ejecución del derecho comunitario

4.73 En general, el derecho comunitario es ejecutado por las administraciones nacionales de los Estados miembros. Sólo en un número reducido de ámbitos normativos la Comisión Europea lleva a cabo directamente la ejecución del derecho comunitario.

4.74 Con frecuencia se ha calificado al sistema de ejecución del derecho comunitario de "federalismo ejecutivo". El principio de federalismo ejecutivo dentro de las CE refleja también el principio de subsidiariedad, consagrado en el segundo apartado del artículo 5 del Tratado de la CE, con arreglo al cual la Comunidad intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros.

4.75 El federalismo ejecutivo de las CE es plenamente compatible con los requisitos de uniformidad de la interpretación y aplicación del derecho comunitario. A este respecto, los principios

de primacía y de eficacia directa desempeñan asimismo una importante función. En virtud de esos principios, el derecho comunitario vincula directamente a las administraciones nacionales y puede ser invocado frente a ellas, lo que permite al Tribunal Europeo de Justicia asegurar, a través del procedimiento de reenvío prejudicial, la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho comunitario.

4.76 Además, el artículo 10 del Tratado de la CE impone a los Estados miembros un deber de cooperación que es aplicable también a la ejecución por los Estados miembros del derecho comunitario.

4.77 Por otra parte, el primer inciso del artículo 211 del Tratado de la CE establece que la Comisión "velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado". En consecuencia, se hace frecuentemente referencia a la función de "guardiana del Tratado" de la Comisión.

4.78 Si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado, puede, de conformidad con los procedimientos del artículo 226 del mismo, recurrir al Tribunal de Justicia. Esos "procedimientos por incumplimiento" pueden iniciarse en respuesta a cualquier violación del derecho comunitario por parte de un Estado miembro y pueden referirse también a la aplicación incorrecta del derecho comunitario por la administración de los Estados miembros.

4.79 De conformidad con el apartado 1 del artículo 228 del Tratado de la CE, si el Tribunal de Justicia declara que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de la CE, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia. Si el Estado miembro en cuestión no ejecuta la sentencia, el apartado 1 del artículo 228 del Tratado abre la posibilidad de que el Tribunal de Justicia imponga al Estado miembro el pago de una multa.

4.80 Los particulares tienen una función esencial en la detección de las infracciones del derecho comunitario. Existe un procedimiento normalizado de presentación de reclamaciones a la Comisión Europea con respecto a las infracciones del derecho comunitario. Esas reclamaciones, que pueden referirse también a la aplicación del derecho comunitario por las administraciones nacionales, pueden conducir a la iniciación de un procedimiento por incumplimiento por la Comisión.

4.81 Los funcionarios de la Comisión Europea se rigen por un Código de Buena Conducta que forma parte del Reglamento Interno de la Comisión y en el que se establecen los principios de buena conducta administrativa que ha de observar todo el personal de la Comisión. El Código de Buena Conducta establece, en particular, la obligación de responder a las solicitudes de la manera más rápida posible y fija los plazos dentro de los que debe darse respuesta a la correspondencia. Podrán presentarse reclamaciones relativas al incumplimiento del Código de Buena Conducta ante la Secretaría General de la Comisión.

4.82 En el ejercicio de sus funciones la Comisión está sujeta también a otros controles. En particular responde políticamente ante el Parlamento Europeo. Además, de conformidad con el artículo 194 del Tratado de la CE, cualquier ciudadano puede presentar al Parlamento Europeo una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Comunidad. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Tratado de la CE, el Parlamento Europeo ha nombrado un Defensor del Pueblo, que está facultado para recibir las reclamaciones de los particulares relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios.

b) La aplicación de la normativa aduanera comunitaria

i) Los principios básicos de la unión aduanera de las CE

4.83 De conformidad con el apartado 1 del artículo 23 del Tratado de la CE, la Comunidad se basará en una unión aduanera que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana, de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.

4.84 Así pues, la unión aduanera de las CE tiene una doble dimensión interna y externa. En lo que respecta a la primera, el artículo 25 del Tratado de la CE prohíbe todos los derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente en el comercio entre los Estados miembros. En virtud de los artículos 28 y 29 del Tratado de la CE quedan prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación o a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

4.85 En lo que respecta a la dimensión externa, el Tratado de la CE establece una política comercial común. Con arreglo al apartado 1 del artículo 133 del Tratado de la CE, la política comercial común se basa en principios uniformes, particularmente por lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales, la consecución de la uniformidad de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las medidas de protección comercial y, entre ellas, las que deban adoptarse en caso de dumping y subvenciones. Como ha confirmado en numerosas ocasiones el Tribunal de Justicia, la unión aduanera y la política comercial común están comprendidas dentro del ámbito exclusivo de competencia de las CE.

4.86 La dimensión interna de la unión aduanera de las CE beneficia también a los productos procedentes de terceros países. De conformidad con el apartado 2 del artículo 23 del Tratado de la CE, las prohibiciones establecidas en los artículos 25, 28 y 29 del Tratado se aplicarán también a los productos procedentes de terceros países que se encuentren en libre práctica en los Estados miembros. Según el artículo 24 del Tratado de la CE, se considerarán en libre práctica los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto equivalente exigibles en el Estado miembro de que se trate, siempre que no se hubieren beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos. Dicho de otra forma, una vez que las mercancías procedentes de un tercer país se encuentran en libre práctica en las CE, reciben en todos los aspectos el mismo trato que los productos comunitarios similares, y se benefician de la libre circulación de productos en el mercado interno de la misma forma que los productos originarios de la Comunidad.

ii) Los compromisos internacionales de las CE en la esfera de la administración aduanera y la cooperación

4.87 Las CE son uno de los Miembros fundadores de la OMC. En tal condición, respetan y cumplen sus compromisos en virtud de los acuerdos abarcados. En particular, la normativa aduanera de las CE aplica y respeta plenamente los acuerdos pertinentes de la OMC, como el GATT, el Acuerdo sobre Valoración en Aduana o el Acuerdo sobre Normas de Origen.

4.88 Aunque las CE no son aún miembro de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), son parte en numerosos convenios negociados bajo los auspicios de la OMA. En especial, son parte en el Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías (Convenio sobre el SA) y el Convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros (Convenio de Kyoto).

4.89 Las CE han concluido además varios acuerdos bilaterales con terceros países sobre cooperación aduanera. En particular, han concluido un acuerdo de esa naturaleza con los Estados Unidos.

iii) El marco legislativo de la unión aduanera de las CE

4.90 Sobre la base de las competencias que les atribuye el Tratado de la CE, las instituciones comunitarias han adoptado una serie de actos legislativos que establecen el marco jurídico de la unión aduanera de las CE. Los tres instrumentos principales de la legislación aduanera comunitaria son el Arancel Aduanero Común, el Código Aduanero Comunitario (CAC) y el Reglamento de Aplicación. Merece la pena destacar que todos esos instrumentos son reglamentos que, en virtud del apartado 2 del artículo 249 del Tratado de la CE, son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro.

4.91 El Arancel Aduanero Común fue establecido por el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo. El Arancel Aduanero Común establece una nomenclatura combinada (NC) con una designación de las mercancías basada en un código de ocho cifras. La NC se basa en la nomenclatura de seis cifras del SA, a la que añade subdivisiones comunitarias, denominadas "subpartidas NC".

4.92 Además, la NC recoge disposiciones preliminares. Esas disposiciones preliminares contienen especialmente normas generales para la interpretación de la NC y otras disposiciones generales, así como disposiciones especiales para determinados tipos de mercancías. Además, la NC contiene también notas de secciones o de capítulos y notas de pie de página relativas a la aplicación de los derechos.

4.93 La NC figura en el Anexo I del Reglamento Nº 2658/87 del Consejo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de ese Reglamento, la Comisión adopta anualmente un reglamento que recoge la versión completa de la NC. La NC recoge los derechos convencionales aplicables a la importación en la Comunidad y, en su caso, los derechos autónomos más bajos.

4.94 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento Nº 2658/87, la Comisión establece un Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (Taric). El Taric se basa en la NC y contiene todas las medidas incorporadas a la NC, las subdivisiones comunitarias complementarias, denominadas "subpartidas Taric", necesarias para la aplicación de medidas específicas, y cualquier otro elemento informativo necesario para la aplicación o la gestión del Taric, así como los tipos de los derechos de aduana y de otros gravámenes de importación y de exportación aplicables, incluidos los tipos arancelarios preferenciales y las suspensiones de los derechos. Los códigos Taric incluyen los códigos NC de ocho cifras más una novena y una décima cifras. El Taric es establecido y actualizado continuamente por la Comisión, y puede consultarse en línea a través de Internet.

4.95 Los apartados b), d), e) y f) del párrafo 1 del artículo 9 del Reglamento 2658/87 dan además a la Comisión la posibilidad de modificar en determinados aspectos la nomenclatura combinada. Esas modificaciones deben adoptarse con arreglo al procedimiento de gestión a que se refiere el artículo 10 del Reglamento.

4.96 El Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo establece el Código Aduanero Comunitario (CAC). El CAC comprende 253 artículos y está dividido en nueve títulos. Conjuntamente con las disposiciones relativas a su aplicación constituye un código general de las normas relativas a la administración de aduanera en toda la Comunidad.

4.97 Con arreglo al artículo 247 del CAC, la Comisión debe adoptar las medidas necesarias para la aplicación del CAC de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 247 *bis* del CAC. Ese artículo se remite al artículo 5 de la Decisión sobre comitología.

4.98 Sobre la base del artículo 247 del CAC la Comisión ha adoptado el Reglamento (CEE) Nº 2454/93, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del CAC. El Reglamento de Aplicación es un texto voluminoso que comprende cerca de 800 artículos y más de 100 anexos, en el que se establecen detalladamente las disposiciones necesarias para la aplicación del CAC. Su estructura se ajusta en líneas generales a la del CAC.

iv) La Comisión, los Estados miembros y el Comité del Código Aduanero

4.99 Como ocurre generalmente en el derecho comunitario, el derecho aduanero de la Comunidad es ejecutado por las autoridades nacionales de los Estados miembros de la UE. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros están vinculadas por la normativa aduanera comunitaria, que se aplica de manera directa y uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario.

4.100 Como ocurre en otras esferas del derecho comunitario, normalmente la Comisión no interviene directamente en la aplicación de la normativa aduanera de las CE. Sólo en un número reducido de casos puede la Comisión adoptar decisiones relativas a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. En general, la función de guardiana de los tratados de la Comisión Europea consiste en supervisar la aplicación correcta y uniforme de la normativa aduanera comunitaria por los Estados miembros.

4.101 Un foro específico de la colaboración entre los Estados miembros y la Comisión es el Comité del Código Aduanero, establecido por el apartado 1 del artículo 247 *bis* y el apartado 1 del artículo 248 *bis* del CAC. El Comité está compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión. Ha adoptado su propio reglamento interno, basado en el reglamento interno estándar para los comités de comitología.

4.102 De conformidad con el apartado 1 del artículo 1 de su Reglamento Interno, el Comité del Código Aduanero comprende varias Secciones que abarcan esferas específicas del derecho aduanero y la administración de aduanas. El Comité del Código Aduanero tiene una serie de funciones atribuidas al mismo en la legislación comunitaria. Los artículos 247 *bis* y 248 *bis* prevén que el Comité del Código Aduanero actúe como comité de reglamentación o como comité de gestión en el sentido de la Decisión sobre comitología. El artículo 247 del CAC prevé que normalmente las medidas necesarias para la aplicación del CAC se adopten de conformidad con el procedimiento de reglamentación. En determinados casos, entre ellos los mencionados en el artículo 248 del CAC, se aplicará el procedimiento de gestión.

4.103 Otros actos jurídicos distintos del CAC pueden incluir también referencias al Comité del Código Aduanero. En tal caso, el procedimiento concreto aplicable se establece en la disposición correspondiente que atribuye la facultad de decisión a la Comisión. Un ejemplo a este respecto es el artículo 10 del Reglamento Nº 2658/87, por el que se establece el Arancel Aduanero Común, que dispone que la Comisión estará asistida por el Comité del Código Aduanero con arreglo al procedimiento de gestión.

4.104 Además, el artículo 249 del CAC dispone que el Comité podrá examinar cualquier cuestión relativa a la reglamentación aduanera planteada por su Presidente, bien a iniciativa del mismo o a petición del representante de un Estado miembro. Una disposición similar figura también en el artículo 8 del Reglamento Nº 2658/87 por el que se establece el Arancel Aduanero Común, que establece que el Comité podrá examinar cualquier cuestión planteada por su Presidente, bien a iniciativa de éste, bien a instancia del representante de un Estado miembro, relativa a la nomenclatura combinada o a la nomenclatura del Taric.

4.105 El Comité del Código Aduanero no es un mecanismo de revisión administrativa o judicial de las decisiones aduaneras, sino un elemento integrante del proceso de reglamentación de la Comunidad, a través del cual se integran los conocimientos de los Estados miembros en el proceso.

En consecuencia, las reclamaciones de los Estados Unidos se basan en una interpretación errónea de la naturaleza y funciones del Comité.

4.106 No obstante, cualquier particular que tenga una preocupación concerniente a la administración de las cuestiones aduaneras puede señalar la cuestión a la atención de la Comisión, que la examinará y dará respuesta a ella de conformidad con su Código de Buena Conducta. Si la Comisión estima que la cuestión exige su examen por el Comité, la incluirá en el orden del día de éste. De forma análoga, un particular afectado puede dirigirse también a la administración de un Estado miembro, la cual puede decidir asimismo plantear la cuestión en el Comité.

4.107 Además, el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Interno del Comité permite que el Presidente, por propia iniciativa o a petición de un miembro, invite a expertos a exponer su opinión acerca de aspectos concretos. Así pues, cuando la complejidad de una determinada cuestión lo justifique, el Comité puede también oír la opinión de representantes de la rama de producción afectada o de los comerciantes, y así lo ha hecho en el pasado.

v) Clasificación arancelaria

4.108 De conformidad con el apartado 1 del artículo 20 del CAC, los derechos legalmente devengados en caso de que se origine una deuda aduanera se basarán en el Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas. Con arreglo a una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, la clasificación arancelaria se efectúa sobre la base de las características y propiedades objetivas de los productos que pueden determinarse cuando se procede al despacho de aduana.

4.109 En principio, la clasificación de las mercancías incumbe a las autoridades aduaneras de los Estados miembros que llevan a cabo el despacho de aduana de las mercancías de que se trata. Además, hay varios instrumentos que garantizan una práctica de clasificación uniforme en toda la Comunidad. Entre esos instrumentos figuran los reglamentos de clasificación, las notas explicativas y criterios de clasificación del SA, las notas explicativas de las CE y los dictámenes del Comité del Código Aduanero. Además, el CAC prevé información vinculante sobre cuestiones de clasificación arancelaria. De esa forma, el derecho comunitario establece una serie escalonada de instrumentos adaptables a las circunstancias del caso concreto para garantizar una práctica de clasificación uniforme. Por último, las sentencias del Tribunal de Justicia son también un importante instrumento para garantizar una práctica de clasificación uniforme.

4.110 De conformidad con el primer inciso de la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Nº 2658/87, la Comisión puede adoptar reglamentos sobre la clasificación de las mercancías. Esos reglamentos son adoptados por la Comisión con arreglo al procedimiento de gestión a que se hace referencia en el artículo 10 del Reglamento Nº 2658/87.

4.111 Los reglamentos de clasificación determinarán la subpartida arancelaria aplicable a la mercancía concreta descrita en el Reglamento. El Tribunal de Justicia ha confirmado que, en determinadas circunstancias, los reglamentos de clasificación pueden ser también pertinentes por analogía a productos similares a los descritos en el reglamento. Un reglamento de clasificación es vinculante en toda la Comunidad de conformidad con el segundo apartado del artículo 249 del Tratado de la CE. Sin embargo, esos reglamentos no pueden modificar la NC, por lo que deben respetar el Arancel Aduanero Común.

4.112 Si un tribunal nacional tiene dudas acerca de la validez de un reglamento en materia de clasificación, puede someter la cuestión al Tribunal de Justicia de conformidad con el apartado 1 b) del artículo 234 del Tratado de la CE. Si la cuestión se plantea ante un tribunal nacional cuya decisión no es susceptible de un recurso ulterior, éste debe someterla al Tribunal de Justicia. Al determinar si la Comisión ha sobrepasado o no sus facultades, el Tribunal de Justicia ha tratado de establecer si la Comisión ha incurrido en un "error manifiesto de apreciación".

4.113 Por el contrario, al ser actos de aplicabilidad general, generalmente los reglamentos de clasificación no afectarán directa e individualmente a particulares, como requiere el apartado 4 del artículo 230 del Tratado de la CE, por lo que normalmente no podrán ser impugnados mediante un recurso directo de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia. Sólo en circunstancias excepcionales, cuando sea tan específico que únicamente afecte al solicitante debido a que determinados atributos son privativos del mismo, un reglamento de clasificación puede ser impugnado también directamente mediante un recurso de anulación.

4.114 La Comunidad es parte en el Convenio sobre el SA, y el arancel aduanero común se basa en la nomenclatura del SA. De conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 7 del Convenio sobre el SA, el Comité del SA puede redactar notas explicativas, criterios de clasificación y otros criterios para la interpretación del SA. Las CE consideran que las notas explicativas y criterios de clasificación de la OMA constituyen un importante instrumento para la uniformidad de la clasificación arancelaria, no sólo dentro de la Comunidad, si no también fuera de ella. Las CE participan activamente en la redacción de las notas explicativas y criterios de clasificación y han adoptado hasta ahora todas las medidas del SA.

4.115 El Tribunal de Justicia ha declarado en su jurisprudencia que, aunque normalmente no tienen fuerza vinculante en el derecho comunitario, las notas explicativas del SA y los criterios de clasificación de la OMA son medios importantes de interpretación del arancel aduanero de la Comunidad. En otros casos, el Tribunal de Justicia ha estimado también que una interpretación del SA aprobada por el Consejo de la OMA vincula a la Comunidad cuando se ajusta a la práctica general seguida por los Estados miembros, salvo que sea incompatible con el texto de la partida de que se trate o exceda claramente de las facultades discrecionales atribuidas al Consejo de Cooperación Aduanero.

4.116 De conformidad con el segundo inciso de la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Nº 2658/87, la Comisión puede emitir notas explicativas. Estas notas explicativas son adoptadas por la Comisión con arreglo al procedimiento de gestión previsto en el artículo 10 del Reglamento.

4.117 Las notas explicativas pueden asimismo aclarar cuestiones concretas de clasificación arancelaria que se plantean en la NC. Desde luego, es preciso distinguirlas de las notas introductorias de los capítulos de la NC, que forman parte integrante del arancel y no pueden ser modificadas por las notas explicativas. Las notas explicativas de las CE no tienen fuerza vinculante en derecho, ni pueden modificar la NC. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente que esas notas constituyen un medio importante de interpretación de la NC.

4.118 Sobre la base del artículo 8 del Reglamento Nº 2658/87, el Comité del Código Aduanero puede adoptar dictámenes sobre cuestiones relativas a la aplicación e interpretación de la nomenclatura combinada. Es preciso distinguir esos dictámenes de los dictámenes que el Comité adopta en el contexto de un procedimiento de comitología sobre medidas propuestas por la Comisión.

4.119 Los dictámenes adoptados por el Comité no son jurídicamente vinculantes. No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que esos dictámenes constituyen un medio importante para garantizar la aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común por las autoridades de los Estados miembros y como tal pueden considerarse un instrumento válido para la interpretación del Arancel.

4.120 Con arreglo al apartado 1 del artículo 12 del CAC, las autoridades aduaneras, previa solicitud escrita, facilitarán información arancelaria vinculante (IAV). Las disposiciones básicas sobre la información arancelaria vinculante se recogen en el artículo 12 del CAC. El título II de la parte I del Reglamento de Aplicación (artículos 5 a 14) contiene normas adicionales acerca de la información vinculante. Esas disposiciones adicionales se ocupan concretamente del procedimiento de obtención de las informaciones vinculantes, las medidas que han de adoptarse en el caso de información

arancelaria vinculante, los efectos jurídicos de esa información, y el cese de validez de las informaciones vinculantes. Además, para garantizar una aplicación armónica y uniforme de las normas sobre información arancelaria vinculante, la Comisión ha publicado directrices administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante (EBTI/IAV).

4.121 De conformidad con el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de Aplicación, la solicitud de información vinculante debe presentarse por escrito y dirigirse, ya sea a las autoridades aduaneras del Estado miembro o de los Estados miembros en el que o en los que se debe utilizar la información en cuestión, ya sea a las autoridades aduaneras competentes del Estado miembro en el que esté establecido el solicitante.

4.122 La solicitud debe realizarse mediante una solicitud normalizada conforme al modelo que figura en el anexo 1*ter* del Reglamento de Aplicación. En el apartado 3 a) del artículo 6 del Reglamento de Aplicación se indican las informaciones que debe incluir una solicitud de IAV. Según el inciso j) de ese apartado la solicitud debe incluir en particular la indicación de si, a conocimiento del solicitante, le ha sido solicitada o facilitada en la Comunidad una información arancelaria vinculante para una mercancía idéntica o similar. Cuando la aduana esté en posesión de todos los elementos que necesita para determinar la clasificación de las mercancías, la información vinculante se notificará al solicitante a la mayor brevedad posible, de conformidad con el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de Aplicación.

4.123 De conformidad con el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación, se remitirá a la Comisión una copia de la solicitud de IAV, una copia de la IAV notificada al solicitante y los datos recogidos en el ejemplar 4 del formulario de IAV. La transmisión se efectúa por vía telemática. De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación, los datos transmitidos se registran en una base de datos de la Comisión, denominada base de datos EBTI/IAV.

4.124 Esta base de datos tiene dos versiones. La primera puede ser consultada por el público y la segunda está reservada exclusivamente a la Comisión y a las autoridades emisoras de los Estados miembros. La primera de esas versiones permite búsquedas de IAV válidas por países emisores, fecha inicial y final de validez, referencia BTI, código NC, palabra clave o designación del producto. La versión pública de la base de datos EBTI/IAV puede consultarse en el sitio Web de la Comisión Europea.

4.125 La versión reservada a la Comisión y las autoridades aduaneras nacionales contiene información adicional de carácter confidencial que no pone a disposición del público (nombre y dirección del solicitante, el titular y el representante, en caso de que se haya nombrado, datos comerciales confidenciales relativos a las mercancías para las que se ha emitido la IAV, incluidos los nombres comerciales). La versión reservada a la Comisión y a las autoridades aduaneras emisoras contiene también todas las solicitudes de IAV presentadas a las administraciones de aduanas y la IAV que ha dejado de ser válida.

4.126 La base de datos EBTI/IAV es un importante instrumento para garantizar una práctica uniforme en materia de IAV. En particular, según las directrices administrativas publicadas por la Comisión sobre el sistema EBTI, las autoridades aduaneras deben consultar la base de datos EBTI/IAV antes de emitir IAV siempre que existan dudas sobre la correcta clasificación o quepa considerar más de una partida.

4.127 Según el apartado 2 del artículo 12 del CAC, la IAV vinculará a las autoridades aduaneras frente al titular de la IAV. De ese precepto y del inciso 1 del artículo 5 del Reglamento de Aplicación se desprende además que la IAV vincula no sólo a la administración que la haya emitido, sino a las administraciones de todos los Estados miembros.

4.128 Con arreglo al apartado 3 del artículo 12 del CAC, la IAV sólo será vinculante con respecto a la clasificación arancelaria de las mercancías que coincidan plenamente con las descritas en la información. De conformidad con el apartado 4 de ese mismo artículo, la IAV tendrá una validez de seis años. En los artículos 10 a 12 del Reglamento de Aplicación se precisan más los efectos jurídicos de la información vinculante.

4.129 El apartado 5 del artículo 12 del CAC enuncia los casos en que la IAV dejará de ser válida. Según el apartado 6 de ese artículo, el titular de una información vinculante que haya dejado de ser válida podrá continuar invocándola durante un período de seis meses siempre que, basándose en la IAV y antes de la adopción de la medida de que se trate, haya celebrado contratos de compra o venta de las mercancías en cuestión. En los artículos 13 y 14 del Reglamento de Aplicación se facilitan más detalles al respecto.

4.130 En caso de que a pesar de las cautelas procesales expuestas haya IAV divergentes, el apartado 1 del artículo 9 faculta a la Comisión para adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación uniforme de la NC. Las medidas previstas en el segundo inciso del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento de Aplicación pueden adoptar la forma de un reglamento de clasificación adoptado por la Comisión sobre la base de la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Nº 2658/87. De conformidad con el inciso i) del apartado 5 a) del artículo 12 del CAC, cuando se adopte el reglamento en cuestión, la IAV que no se ajuste al mismo dejará de ser válida. Alternativamente, la Comisión podrá también, sobre la base del inciso iii) del apartado 5 a) del artículo 12 y del segundo inciso del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento de Aplicación, adoptar una decisión por la que se obligue al Estado miembro que expidió la IAV a revocarla.

4.131 Las decisiones que exigen la revocación de IAV afectan directa e individualmente al titular de la información. En consecuencia, éste puede presentar un recurso directo para que la Comisión anule esa decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el apartado 4 del artículo 230 del Tratado de la CE. En cambio, ese recurso directo de anulación no puede interponerse normalmente contra un reglamento de clasificación. No obstante, la validez de la clasificación puede plantearse en el contexto de los procedimientos ante un tribunal nacional y en consecuencia puede someterse al Tribunal de Justicia de conformidad con el procedimiento de reenvío prejudicial.

vi) Valoración en aduana

4.132 La normativa aduanera comunitaria contiene una serie completa de normas de valoración en aduana en las CE. Las disposiciones básicas figuran en el capítulo 3 del título II del CAC (artículos 28 a 36). En el título V del Reglamento de Aplicación (artículos 141 a 181 *bis*) se recogen disposiciones más detalladas. El título V se subdivide en siete capítulos, que conciernen respectivamente a las disposiciones generales, los cánones y derechos de licencia, el lugar de introducción en la Comunidad, los gastos de transporte, el tipo de cambio, los procedimientos simplificados relativos a determinadas mercancías perecederas y la declaración de elementos y presentación de los documentos correspondientes.

4.133 Además, el Anexo 23 del Reglamento de Aplicación contiene notas explicativas para el cálculo del valor en aduana, que reflejan las notas interpretativas contenidas en el Anexo I del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. El apartado 1 del artículo 141 del Reglamento de Aplicación obliga a los Estados miembros a tener en cuenta las notas explicativas al aplicar las disposiciones del CAC y del Reglamento de Aplicación. Además, el apartado 2 del artículo 141 del Reglamento de Aplicación se remite al Anexo 24 del Reglamento, que establece los principios de contabilidad generalmente aceptados que han de aplicarse para determinar el valor en aduana. Por último, el Anexo 25 del Reglamento de Aplicación contiene detalles sobre el cálculo de los gastos de transporte aéreo que deben incluirse en el valor en aduana.

4.134 De conformidad con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, el apartado 1 del artículo 29 del CAC dispone que normalmente el valor en aduana de las mercancías importadas será su valor de transacción, es decir, el precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación con destino al territorio aduanero de la Comunidad. En la normativa comunitaria a que nos hemos referido figuran los detalles de esta regla y las excepciones a la misma, de conformidad con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.

4.135 La normativa aduanera comunitaria establece además una serie de mecanismos para garantizar la aplicación uniforme de las normas comunitarias sobre valoración en aduana. Esos instrumentos no son tan numerosos como los disponibles en el caso de la clasificación arancelaria, pero ello se debe a diferencias sustanciales entre clasificación arancelaria y valoración en aduana que es preciso tener presentes.

4.136 En primer lugar, hay que destacar que las normas comunitarias sobre valoración son sumamente detalladas. Debido a ello, el margen para interpretaciones complementarias específicas es relativamente escaso. En segundo lugar, dado que la valoración de las mercancías se basa normalmente en el valor de transacción, la valoración en aduana depende en una medida muy considerable de evaluaciones que es preciso realizar caso por caso, lo que significa que las normas sobre valoración suelen ser de carácter general y abstracto y no específicas por productos. Dicho de otra forma, en tanto que es posible decidir en abstracto la clasificación de un tipo determinado de mercancía, no es posible establecer de una vez por todas en abstracto el valor de una mercancía determinada.

4.137 Cuando hay necesidad de normas más detalladas sobre valoración, la Comisión puede, de conformidad con el procedimiento del artículo 247 del CAC, modificar las normas de valoración contenidas en el Reglamento de Aplicación. Esas modificaciones serán jurídicamente vinculantes en todos los Estados miembros. Desde este punto de vista, las modificaciones del Reglamento de Aplicación y sus Anexos pueden considerarse, en relación con cuestiones específicas, similares funcionalmente a los reglamentos de clasificación.

4.138 Además, de conformidad con el artículo 249 del CAC, el Comité del Código Aduanero (por medio de su Sección de Valor en Aduana) podrá examinar cualquier cuestión relativa a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria en la esfera de la valoración en aduana. Sobre esta base, el Comité puede emitir dictámenes sobre cuestiones específicas de aplicación de las normas de valoración comunitarias. Aunque esos dictámenes no son jurídicamente vinculantes, pueden constituir una orientación útil para la interpretación del derecho comunitario aplicable.

4.139 La Comisión ha publicado también un compendio de textos relativos al valor en aduana, que contiene comentarios preparados por el Comité del Código Aduanero y conclusiones del Comité sobre cuestiones específicas de valoración en aduana sobre la base del artículo 249 del CAC, así como extractos de sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia sobre cuestiones de valoración e índices de otros textos pertinentes.

4.140 Como en otras esferas de la normativa aduanera de las CE, el Tribunal de Justicia desempeña una importante función para garantizar la interpretación uniforme de las normas comunitarias de valoración. Cuando se produce una controversia entre un importador y las autoridades aduaneras de las CE sobre la interpretación y aplicación de las normas comunitarias de valoración, el tribunal nacional puede -y a veces debe- someter la cuestión al Tribunal de Justicia de conformidad con el artículo 234 del Tratado de la CE.

vii) Transformación bajo control aduanero

4.141 El régimen de transformación bajo control aduanero permite modificar la naturaleza o estado de mercancías no comunitarias sin que estas mercancías estén sujetas a los derechos de importación ni

a medidas de política comercial. Los productos que resulten de estas operaciones se despachan a libre práctica con los derechos de importación que correspondan a los productos transformados para beneficiarse de un derecho de importación menor o cumplir requisitos técnicos para la colocación de las mercancías en el mercado.

4.142 Las disposiciones detalladas que regulan ese régimen se establecen en los artículos 84 a 90 y 130 a 136 del CAC y en los artículos 496 a 523, 551 y 552 del Reglamento de Aplicación. La utilización del régimen requiere una autorización, que sólo se concede si se cumplen determinadas condiciones. La Primera comunicación escrita de los Estados Unidos se ocupa únicamente de un tipo de condiciones, las denominadas "condiciones económicas" que se describen en la letra e) del artículo 133 del CAC. El derecho comunitario garantiza la aplicación uniforme de la evaluación de las condiciones económicas por varios medios.

4.143 Para los tipos de mercancías y las operaciones que figuran en la parte A del Anexo 76 del Reglamento de Aplicación, que representan la mayoría de los casos, las condiciones económicas se considerarán cumplidas de conformidad con lo dispuesto en la primera parte del apartado 1 del artículo 552 del Reglamento de Aplicación, lo que significa que, en esos casos, las autoridades aduaneras no examinan las condiciones económicas.

4.144 Para los tipos de mercancías y las operaciones que figuran en la parte B del Anexo 76 del Reglamento de Aplicación y que no estén cubiertas en la parte A de dicho Anexo, el examen de las condiciones económicas tendrá lugar a nivel de la Comunidad, mediante el procedimiento pertinente del Comité, lo que significa que está garantizada una evaluación uniforme de las condiciones económicas en el caso de las denominadas mercancías sensibles, ya que el examen ha de tener lugar a nivel de la Comunidad.

4.145 En tercer lugar, para los tipos de mercancías y las operaciones no mencionados en el Anexo 76 del Reglamento de Aplicación, el examen de las condiciones económicas tendrá lugar a nivel nacional. Un examen a nivel nacional sólo se requiere en muy pocos casos porque, como se ha indicado antes, o bien se consideran cumplidas las condiciones económicas o bien el examen tiene lugar a nivel de la Comunidad. No obstante, en esos pocos casos la transparencia y la aplicación uniforme de la evaluación de las condiciones económicas está también garantizada porque los Estados miembros tienen que comunicar a la Comisión la información pertinente de conformidad con el artículo 522 del Reglamento de Aplicación. La Comisión pone esa información a la disposición de las administraciones aduaneras. Además, cuando un Estado miembro formula objeciones en contra de una autorización expedida o las autoridades aduaneras interesadas desean celebrar consultas antes o después de la expedición de una autorización, debe procederse a un examen de las condiciones económicas a nivel de la Comunidad.

viii) Procedimiento de domiciliación

4.146 Hay en la legislación aduanera comunitaria procedimientos simplificados para facilitar en la medida de lo posible el cumplimiento de los trámites para colocar las mercancías conforme a un procedimiento aduanero sin perjuicio de asegurar que las operaciones se realizan de manera adecuada. Uno de esos procedimientos simplificados es el procedimiento de domiciliación, conforme al cual un importador puede conseguir que las mercancías se despachen a libre práctica en sus propios locales o en determinados lugares designados sin tener que presentarlas en aduana.

4.147 La disposición básica para el procedimiento de domiciliación es la letra c) del apartado 1 del artículo 76 del CAC. Cuando se utiliza un procedimiento informático se aplica además el artículo 77 del CAC. En los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación se establecen disposiciones más detalladas.

4.148 De conformidad con el artículo 263 del Reglamento de Aplicación, la autorización para utilizar el procedimiento de domiciliación se concederá a cualquier persona que desee que se proceda al despacho a libre práctica de las mercancías en sus propios locales o en los demás lugares designados o autorizados por las autoridades aduaneras con respecto a las mercancías sometidas a determinados regímenes (tránsito o régimen aduanero económico) o introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad sin que hayan de ser presentadas en la aduana.

4.149 Con arreglo al artículo 267 del Reglamento de Aplicación, la autorización establecerá las modalidades prácticas de funcionamiento del procedimiento. El artículo 266 del Reglamento de Aplicación impone al titular de la autorización determinadas obligaciones para que las autoridades aduaneras puedan cerciorarse de la regularidad de las operaciones. En términos generales, esas obligaciones consisten en la notificación a las autoridades aduaneras de determinados hechos (como la llegada de las mercancías al lugar designado para el despacho o la voluntad del titular de que las mercancías se despachen a libre práctica) así como en la obligación de inscribir las mercancías en los documentos contables del titular.

ix) Sanciones por infracciones de la legislación aduanera

4.150 La normativa aduanera de las CE no establece expresamente las sanciones aplicables en caso de infracción por los particulares de disposiciones de la normativa aduanera comunitaria. En consecuencia, la naturaleza y alcance de esas sanciones, ya sean administrativas o penales, se determinan en las leyes nacionales de los Estados miembros.

4.151 No obstante, lo anterior no quiere decir que los Estados miembros gocen de una libertad absoluta para determinar el nivel apropiado de sanciones. En una constante jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Justicia ha declarado repetidamente que el artículo 10 del Tratado de la CE obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias para la aplicación adecuada del derecho comunitario, incluido el establecimiento de sanciones por infracciones del derecho comunitario.

4.152 De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, los Estados miembros están obligados a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias por infracciones del derecho comunitario. Si un Estado miembro no establece esas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incumple sus obligaciones en virtud del Tratado de la CE, como ha confirmado expresamente el Tribunal de Justicia en relación también con la aplicación de la normativa aduanera comunitaria.

4.153 Los principios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con la imposición de sanciones por infracciones del derecho comunitario pueden considerarse principios de derecho comunitario generalmente aceptados, como aclara la Resolución del Consejo de 29 de junio de 1995 sobre la aplicación uniforme y eficaz del derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior. Esa Resolución recuerda la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia e invita a los Estados miembros a velar por que se tomen las medidas que conduzcan a "una aplicación del derecho comunitario con una eficacia y un rigor equivalentes a los empleados en la aplicación de su Derecho nacional y que en materia de sanciones adopten disposiciones cuyo carácter sean, en cualquier caso, efectivo, proporcionado y disuasorio".

x) Cooperación aduanera en las CE

4.154 Un importante instrumento en la esfera de la cooperación aduanera en las CE es el Reglamento (CE) Nº 515/97 relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria.

4.155 El título I del Reglamento Nº 515/97 se ocupa de la asistencia prestada previa solicitud entre las autoridades de los Estados miembros. Según el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento, las autoridades aduaneras de las CE deben transmitirse, previa solicitud, toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la reglamentación aduanera de las CE. Las modalidades de esa asistencia se establecen en los artículos siguientes del Reglamento Nº 515/97. El artículo 7 establece que, a instancia de una autoridad aduanera, la autoridad requerida ejercerá o hará ejercer una vigilancia especial con respecto a determinadas personas, lugares, movimientos de mercancías o medios de transporte. El artículo 9 establece que las autoridades aduaneras, a instancia de otra autoridad aduanera, procederán o harán proceder a investigaciones sobre operaciones que parezcan ser contrarias a la reglamentación aduanera.

4.156 El título II se ocupa de la asistencia espontánea entre autoridades aduaneras. El artículo 15 establece en particular que las autoridades aduaneras de cada Estado de las CE deben facilitar a las de los demás espontáneamente toda información sobre las operaciones que parezcan ser contrarias a la reglamentación aduanera de las CE.

4.157 El título III trata de las relaciones entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros y la Comisión y obliga a los Estados miembros en particular a comunicar a la Comisión la información sobre todas las operaciones que parezcan contrarias a la reglamentación aduanera comunitaria. Según el apartado 3 del artículo 18 del Reglamento, a instancia motivada de la Comisión, las autoridades de los Estados miembros adoptarán las medidas previstas en los artículos 4 a 8 del Reglamento. De conformidad con el apartado 4 del artículo 18 del Reglamento, cuando la Comisión considere que se han cometido irregularidades, puede instar a un Estado miembro a que lleve a cabo una investigación, en la que podrán estar presentes agentes de la Comisión, en las condiciones que se establecen en el apartado 2 del artículo 9 y en el artículo 11 del Reglamento. Las autoridades del Estado miembro comunicarán a la Comisión, a la mayor brevedad, las conclusiones a las que se llegue como resultado de la investigación.

4.158 El título V establece el sistema de información aduanero (SIA). El SIA es un sistema automatizado de información destinado a las autoridades administrativas de los Estados miembros y de la Comisión. De conformidad con el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento, su objetivo es ayudar a las autoridades aduaneras de las CE a prevenir, investigar y perseguir las operaciones que sean contrarias a la reglamentación aduanera mediante una difusión más rápida de la información pertinente entre todas las autoridades aduaneras de las CE. Las condiciones del funcionamiento y la utilización del SIA se exponen detalladamente en los capítulos siguientes del título V del Reglamento.

4.159 Por último, es evidente que la cooperación aduanera es una esfera sujeta a una evolución constante, que refleja el cambio de las circunstancias y de las necesidades tecnológicas y prácticas. Por esta razón, la Comunidad ha adoptado y puesto en práctica sucesivos programas de acción destinados a fortalecer la aplicación efectiva de la unión aduanera de las CE. El programa de acción actualmente en curso es Aduanas 2007, vigente para el período comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007. El programa ha sido establecido por la Decisión Nº 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

4.160 Los objetivos de Aduanas 2007 se exponen en el apartado 1 del artículo 3 de la Decisión Nº 253/2003. Para alcanzarlos, Aduanas 2007 prevé una serie de actividades del programa, que incluyen acciones en la esfera de los sistemas de intercambio de comunicación e información, los análisis comparativos, los intercambios de funcionarios, seminarios, talleres y grupos de proyecto, actividades de formación, acciones de seguimiento y acciones externas en forma de asistencia técnica y formación. Según el artículo 14 de la Decisión, la dotación financiera para las operaciones que han de realizarse será de 133 millones de euros.

xi) Aspectos presupuestarios y financieros

4.161 La aplicación uniforme de la unión aduanera de las CE es también importante para las CE por razones presupuestarias y financieras. De conformidad con el apartado 1 b) del artículo 2 de la Decisión del Consejo Nº 2000/597/CE, Euratom sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, los derechos del arancel común y otros derechos fijados en los intercambios con países no miembros constituirán recursos propios incorporados en el presupuesto de las Comunidades Europeas. Con arreglo al apartado 3 del artículo 2 de la Decisión, los Estados miembros retendrán, del importe percibido, el 25 por ciento en concepto de gastos de recaudación. En consecuencia, la aplicación correcta de la normativa aduanera comunitaria tiene consecuencias directas para el presupuesto de las CE, y es también vigilada estrechamente por esa razón por las instituciones comunitarias, y en particular por la Comisión Europea.

4.162 El Reglamento (CE, Euratom) Nº 1150/2000 del Consejo establece ulteriores procedimientos para la aplicación de la Decisión relativa a los recursos propios. Ese Reglamento prevé nuevos instrumentos para la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria, por lo que merece la pena que lo analicemos. Con arreglo al apartado 1 del artículo 17 del Reglamento, los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para que los importes correspondientes a los derechos de la Comunidad sean puestos a disposición de ella en las condiciones previstas en el Reglamento. De conformidad con el apartado 2 a) del artículo 18 del Reglamento, los Estados miembros deben efectuar a petición de la Comisión controles suplementarios, a los que la Comisión será asociada cuando lo solicite. De conformidad con el apartado 3 del artículo 18 del Reglamento, la Comisión podrá además proceder por sí misma a verificaciones *in situ*.

4.163 El hecho de no poner a disposición de la Comunidad los recursos propios constituye una infracción del Tratado, que puede dar lugar a un procedimiento por incumplimiento contra el Estado miembro de que se trate. Cuando esa infracción sea consecuencia de una aplicación incorrecta de la normativa aduanera comunitaria, el procedimiento de infracción puede tener al mismo tiempo como resultado la constatación de que los Estados miembros han aplicado de forma incorrecta la normativa aduanera comunitaria.

xii) La continua evolución de la normativa aduanera comunitaria

4.164 Las instituciones de las CE mantienen bajo constante examen la normativa aduanera comunitaria para que las autoridades aduaneras de las CE puedan actuar en las mejores condiciones posibles.

4.165 El más reciente ejemplo a este respecto es la iniciación por la Comisión Europea de un proceso de consultas públicas con objeto de preparar un código aduanero modernizado. Los proyectos del código aduanero se han sometido a varias rondas de consultas públicas en las que se ha dado a los agentes económicos, las administraciones nacionales y los terceros países oportunidad de formular observaciones sobre las modificaciones previstas. Los Estados Unidos no han formulado observaciones en el contexto de esas consultas, a pesar de que podían haberlo hecho perfectamente.

4.166 Los Estados Unidos han declarado que "con frecuencia los que mayores críticas han expuesto verbalmente con respecto a las CE han sido sus propios funcionarios". No obstante, las declaraciones a las que se refieren los Estados Unidos reflejan simplemente el proceso en curso de reforma y revisión de la normativa aduanera comunitaria. De hecho, las CE no están satisfechas de su propio sistema y están decididas a seguir desarrollándolo al compás de la evolución de las necesidades y de las circunstancias, pero eso no demuestra que las CE incumplan en algún sentido las obligaciones que les incumben en virtud de los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT.

c) El control judicial en el derecho comunitario

i) El sistema judicial de las CE

4.167 En las CE todas las diferencias relativas a cuestiones reguladas por el derecho comunitario que no están sometidas a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (y al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas) son competencia de los tribunales nacionales. En consecuencia, los tribunales nacionales asumen el carácter de tribunales comunitarios de competencia general, por cuanto son competentes para resolver cualquier diferencia que no esté expresamente atribuida al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. En esas circunstancias, los tribunales nacionales cumplen una doble función. Al resolver una diferencia que se rige por el derecho nacional, siguen formando parte del ordenamiento jurídico nacional. Al resolver un asunto que se rige por el derecho comunitario, pertenecen desde el punto de vista funcional al ordenamiento jurídico comunitario. Desde el mismo momento de la constitución de la Comunidad Europea se consideró que la utilización de los tribunales nacionales para aplicar el derecho comunitario era el mejor modo de garantizar una justicia rápida y próxima a los ciudadanos.

4.168 El propio Tratado de la CE estableció la función de los tribunales nacionales en la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario, así como su alcance y consecuencias, en virtud de su artículo 234 relativo a los reenvíos de los tribunales nacionales al Tribunal de Justicia. La legislación comunitaria no puede contradecir esa función. En consecuencia, cualquier modificación de la delimitación de las competencias del Tribunal de Justicia y de los tribunales nacionales requeriría una modificación del Tratado de la CE.

4.169 El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas han sido establecidos en virtud del Tratado de la CE y el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia anexo al Tratado. Ambos tribunales están integrados por un juez por Estado miembro y adoptan normalmente sus decisiones en salas compuestas por tres o cinco jueces. Asisten al Tribunal de Justicia ocho Abogados Generales, que actúan de forma completamente imparcial e independiente y emiten un dictamen motivado individual en los asuntos en los que se requiere su intervención.

4.170 Con arreglo al artículo 220 del Tratado de la CE, la función central del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia es garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado. Esa función se lleva a cabo mediante diversos procedimientos, que delimitan la competencia de ambos tribunales europeos entre ellos y con respecto a los tribunales nacionales. El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia han de actuar en el marco de las competencias que les han sido atribuidas por los tratados constitutivos.

4.171 La principal división entre los diferentes tipos de procedimientos que se sustancian ante el Tribunal de Justicia es la división entre los que se inician y terminan ante el propio Tribunal y los que se inician y terminan ante los tribunales nacionales. Además, el Tribunal de Justicia es competente para conocer los recursos sobre cuestiones de derecho contra decisiones del Tribunal de Primera Instancia, en los casos en los que ese tribunal es competente en primera instancia.

4.172 Los principales procedimientos que se inician y terminan ante el Tribunal de Justicia son, entre otros, los recursos contra Estados miembros por incumplimiento de una obligación establecida por el derecho comunitario, los recursos de anulación de una medida de la Comunidad, los recursos por abstención de una institución comunitaria y el recurso por daños en el marco de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. La segunda categoría de los procedimientos que se someten al Tribunal de Justicia es la constituida por los recursos que se inician ante un tribunal nacional pero que se remiten al Tribunal de Justicia para que se pronuncie sobre la interpretación o validez de un aspecto del derecho comunitario.

4.173 El apartado 1 del artículo 225 del Tratado de la CE establece que el Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer en primera instancia del recurso de anulación, el recurso por abstención, el recurso por daños en el marco de la responsabilidad extracontractual, los litigios relativos al personal y los asuntos sometidos a una cláusula compromisoria en los contratos celebrados por la Comunidad, con excepción de los que el Estatuto reserva al Tribunal de Justicia. Dado que el Estatuto reserva al Tribunal los recursos de anulación y los recursos por abstención planteados por las instituciones o por los Estados miembros en algunos sectores, la competencia atribuida al Tribunal de Primera Instancia abarca prácticamente todos los recursos directos de personas físicas o jurídicas, así como los recursos directos de los Estados miembros que impugnan la acción ejecutiva de instituciones comunitarias. En esos ámbitos, el Tribunal de Primera Instancia tiene competencia exclusiva en primera instancia y sus decisiones sólo están sujetas a un recurso sobre cuestiones de derecho ante el Tribunal de Justicia.

ii) La protección judicial en el sistema jurídico de las CE

4.174 En su calidad de Comunidad basada en el Estado de derecho, la Comunidad reconoce el derecho de los particulares a la protección judicial. Ese derecho a la tutela judicial efectiva está, ante todo, reconocido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que refleja, de conformidad con el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la UE, las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Hay que subrayar además que todos los Estados miembros de las CE son partes en el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 14 de noviembre de 1950, que establece en el apartado 1 de su artículo 6 el derecho a un proceso equitativo ante un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley.

4.175 En el sistema jurídico de las CE, los tribunales nacionales garantizan este derecho cuando se impugna una decisión adoptada por las autoridades nacionales. Lo mismo ocurre con los actos de los Estados miembros mediante los cuales se aplica el derecho comunitario. Aunque la organización del poder judicial y los procedimientos judiciales de los Estados miembros son resultado de sus distintas tradiciones políticas, constitucionales y jurídicas, todos ellos ofrecen una protección jurídica completa en relación con las decisiones administrativas.

4.176 En lo que respecta a las decisiones de las instituciones comunitarias, el principal recurso para ejercer este derecho es el recurso de anulación. De conformidad con el artículo 230 del Tratado de la CE, el Tribunal controlará la legalidad de, entre otros, los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, los actos del Consejo y los actos de la Comisión que no sean recomendaciones o dictámenes. En general, puede presentarse un recurso de anulación en el caso de todas las medidas, de cualquier naturaleza o forma, adoptadas por las instituciones destinadas a producir efectos jurídicos. En cambio, esa competencia no se extiende a los actos adoptados por una autoridad nacional ni al Tratado y sus modificaciones.

4.177 De conformidad con el cuarto apartado del artículo 230 del Tratado de la CE, toda persona física o jurídica puede interponer recurso contra las decisiones de las que sea destinataria y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente. El Tribunal de Justicia ha interpretado que con el requisito de que "le afecten directamente" se pretende que el efecto de las medidas sobre los intereses de la persona no haya de depender del arbitrio de otra persona, incluido el Estado miembro pertinente de que se trate. El requisito de que las decisiones "le afecten individualmente" se cumple cuando la medida de que se trata afecta a determinadas personas físicas o jurídicas por razón de ciertos atributos privativos de ellas, o de una situación fáctica que les diferencia de todas las demás personas y las distingue individualmente de la misma forma que al destinatario.

iii) Decisiones prejudiciales: el Tribunal de Justicia y la interpretación y aplicación uniforme del derecho comunitario

4.178 El Tribunal de Justicia desempeña una función central en la interpretación y aplicación uniforme del derecho comunitario en la Comunidad por medio del procedimiento de reenvío prejudicial establecido en el artículo 234 del Tratado de la CE.

4.179 Cuando se plantee una cuestión de la naturaleza de las que se recogen en el artículo 234 ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de ese tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

4.180 No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que cuando se impugne la validez de un acto de la Comunidad ante un tribunal nacional, la competencia para declarar nulo el acto debe reservarse al Tribunal de Justicia. En consecuencia, cuando un tribunal nacional estime que un acto de una institución comunitaria es nulo, está obligado a efectuar un reenvío al Tribunal de Justicia. Este último ha justificado esta jurisprudencia por la necesidad de garantizar la aplicación uniforme de todos los actos de la Comunidad.

4.181 En un asunto reciente, el Tribunal de Justicia ha confirmado que el principio de la responsabilidad de los Estados miembros por infracción del derecho comunitario es aplicable también cuando la infracción sea imputable al tribunal de un Estado miembro por no haber sometido éste un asunto al Tribunal de Justicia. En tales casos, el reclamante afectado puede entablar otro procedimiento, lo que da al juez nacional que conozca de ese asunto la oportunidad de someter en la segunda ocasión la cuestión al Tribunal de Justicia.

4.182 En caso de reenvío prejudicial, el Tribunal de Justicia no ejerce una competencia para confirmar o anular en apelación resoluciones de los tribunales que le han sometido la cuestión, sino que ayuda al tribunal nacional a llegar a una decisión que no se ha adoptado aún en el momento en el que se efectúa el reenvío. La relación entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia no es una relación jerárquica, sino una relación de cooperación, basada en el reconocimiento de que cada tribunal tiene una función diferente, así como en la buena voluntad y el respeto mutuos.

4.183 El objetivo principal de este sistema de reenvío prejudicial es garantizar la interpretación y aplicación adecuadas y uniformes del derecho comunitario en todos los Estados miembros, evitando el establecimiento de un sistema lento y costoso de recursos ante el Tribunal de Justicia, lo que es de enorme importancia porque, en gran medida, son los Estados miembros y no las instituciones comunitarias los que llevan a cabo la administración de la Comunidad y porque la legislación comunitaria puede requerir que los órganos legislativos o ejecutivos nacionales adopten medidas de aplicación. El sistema de reenvío prejudicial permite evitar las divergencias dentro de los Estados miembros y entre ellos y garantizar la aplicación efectiva del derecho comunitario. Al mismo tiempo, ese procedimiento constituye el principal método mediante el cual se verifica la compatibilidad del derecho y las decisiones administrativas nacionales con el derecho comunitario.

4.184 Aparte de proporcionar un medio de garantizar la uniformidad en toda la Comunidad, las reclamaciones nacionales de los litigantes se someten al Tribunal de Justicia para establecer la validez o la interpretación de un acto de una institución comunitaria. Todas las partes en el procedimiento principal tienen derecho a participar en el procedimiento de reenvío prejudicial, al igual que los Estados miembros y las instituciones de la Comunidad. Es una práctica de la Comisión intervenir en todos los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, a consecuencia de su función como guardiana de los intereses comunitarios. La decisión prejudicial del Tribunal de Justicia vincula al tribunal nacional que conoce del asunto en el que se dicta esa decisión. Además, los órganos judiciales

nacionales siguen fielmente las decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia. Si un órgano jurisdiccional remitente no se atuviera a la decisión del Tribunal de Justicia, ese hecho constituiría un incumplimiento de las obligaciones que incumben al Estado miembro en virtud del Tratado, que podría someterse al Tribunal de Justicia al amparo de los artículos 226 a 228 del Tratado de la CE.

4.185 Una decisión prejudicial tiene también efectos en personas que no son partes en el asunto sometido al Tribunal. En *Simitzi contra Dimos Kos*, el Tribunal declaró que Grecia no podía ya seguir considerando razonablemente que un derecho era compatible con el derecho comunitario a partir de la fecha de la sentencia en la que se declaró que una exacción francesa comparable no lo era. En un reciente asunto, el Tribunal de Justicia ha hecho extensivo los efectos de las decisiones prejudiciales a determinadas situaciones de *cosa juzgada*. El Tribunal declaró que, habida cuenta de la obligación que incumbe a todas las autoridades de los Estados miembros de garantizar el respeto del derecho comunitario y dado el principio de cooperación que se desprende del artículo 10 del Tratado de la CE, un órgano administrativo puede estar obligado a revisar una decisión administrativa definitiva para tener en cuenta la interpretación dada por el Tribunal a la disposición pertinente en una decisión prejudicial dictada posteriormente.

iv) Revisión judicial de las decisiones aduaneras

4.186 El apartado 1 del artículo 243 del CAC dispone que toda persona tendrá derecho a recurrir contra decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras relativas a la aplicación de la normativa aduanera y que le afecten directa e individualmente. Establece además que también tendrá derecho a recurrir la persona que haya solicitado una decisión relativa a la aplicación de la normativa aduanera a las autoridades aduaneras pero que no haya conseguido que éstas se pronuncien sobre dicha solicitud en el plazo contemplado en el apartado 2 del artículo 6 del CAC. Por último, el apartado 1 del artículo 243 establece que el recurso deberá presentarse ante las autoridades del Estado miembro en el que se haya adoptado o solicitado la decisión.

4.187 Dado que son las autoridades aduaneras de los Estados miembros las que ejecutan la normativa aduanera comunitaria, el recurso se presenta ante un tribunal del Estado miembro cuyas autoridades aduaneras hayan emitido la decisión. De conformidad con el artículo 245 del CAC, las disposiciones relativas a la implantación del procedimiento de recurso serán adoptadas por los Estados miembros. El CAC no armoniza la legislación nacional sobre recursos administrativos y judiciales contra decisiones aduaneras, lo que refleja el hecho de que esas leyes de procedimiento suelen aplicarse uniformemente en todo el ámbito de la administración nacional, por lo que la armonización podría haber llevado a la fragmentación de procedimientos nacionales de recurso que eran uniformes hasta entonces.

4.188 Como se ha explicado ya antes, la función de los tribunales de los Estados miembros en la revisión judicial de las decisiones aduaneras es plenamente compatible con la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria. Los tribunales de los Estados miembros están obligados a aplicar el derecho comunitario conforme a la interpretación dada al mismo por el Tribunal de Justicia y a prescindir de cualquier disposición o medida nacional que sea incompatible con el derecho comunitario. Siempre que se plantee una cuestión de interpretación del derecho comunitario, esa cuestión debe someterse al Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Tratado de la CE. Cuando se trate de un tribunal nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial o cuando un tribunal nacional estime que la medida de la Comunidad es nula, el tribunal nacional de que se trate está obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

4.189 Por último, hay que señalar que en casos excepcionales, cabe también un derecho directo de recurso contra las decisiones aduaneras ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. Tal es el caso cuando la Comisión Europea adopte decisiones por las que se aplique la normativa aduanera comunitaria que afecten directa e individualmente a las personas en el sentido del cuarto apartado del artículo 230 del Tratado de la CE. Ejemplos de esas decisiones son las decisiones

de la Comisión por las que se revoca IAV. Otro ejemplo sería el de las decisiones de la Comisión sobre la devolución o condonación de derechos de importación por motivos de equidad sobre la base del artículo 907 del Reglamento de Aplicación.

d) Comparación con el sistema de los Estados Unidos

i) La aplicación del derecho aduanero estadounidense

4.190 En los Estados Unidos, la aplicación de las leyes aduaneras, que son leyes federales, corresponde esencialmente a la Oficina de Aduanas y Protección en Frontera de los Estados Unidos, que es un organismo del Gobierno Federal de los Estados Unidos que forma parte del Departamento de Seguridad Interior. La Oficina de Aduanas y Protección en Frontera de los Estados Unidos cuenta con 20 oficinas sobre el terreno que supervisan 317 puertos de entrada estadounidenses y 14 oficinas de inspección previa a la expedición.

4.191 No obstante, merece la pena señalar que el hecho de que un organismo federal aplique el derecho aduanero estadounidense no es una característica exclusiva de las cuestiones aduaneras, sino que responde, por el contrario, a una interpretación fundamental del derecho constitucional estadounidense con arreglo a la cual el Congreso no pude exigir a los Estados de los Estados Unidos que apliquen el derecho federal. Esa interpretación ha sido confirmada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto *Printz contra los Estados Unidos*.

4.192 El federalismo dual estadounidense es diametralmente opuesto a los principios básicos del ordenamiento jurídico de las CE. El sistema estadounidense se caracteriza por el principio de "soberanía dual" en los que no es posible "forzar" o "movilizar" a los Estados federados para que apliquen la legislación federal. El derecho comunitario se caracteriza por el principio del federalismo ejecutivo, en el que todo el derecho comunitario debe ser ejecutado por las autoridades nacionales de los Estados miembros, bajo la orientación y supervisión de las instituciones comunitarias.

4.193 Las CE no pretenden poner en tela de juicio las opciones constitucionales de los Estados Unidos. No obstante, en respuesta a las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, es importante subrayar que el federalismo ejecutivo de las CE es una opción constitucional tan esencial y legítima como el sistema estadounidense de soberanía dual. Las CE consideran que sus opciones constitucionales merecen el mismo respeto que las de los Estados Unidos.

ii) La revisión de las decisiones aduaneras en el derecho estadounidense

4.194 La revisión judicial en los Estados Unidos en lo que respecta a las cuestiones aduaneras y comerciales está atribuida en primera instancia al Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos ("USCIT"), que es un tribunal federal establecido en virtud del artículo III de la Constitución de los Estados Unidos. El USCIT es un tribunal del mismo rango que un tribunal federal de distrito.

4.195 En todo caso el conocimiento de los recursos contra las decisiones del USCIT corresponde al Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que es un tribunal de apelación especializado que tiene el rango de tribunal federal de apelación y competencia exclusiva para conocer de los recursos contra decisiones del USCIT así como de los recursos con respecto a un grupo diferente de cuestiones no sometidas al USCIT, en el que las apelaciones en materia de derechos de patente son las más frecuentes. En última instancia, puede presentarse una apelación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, mediante una petición de avocación.

4.196 Merece la pena señalar que esta revisión judicial centralizada en primera instancia a nivel federal por el USCIT es una opción política de los Estados Unidos. De conformidad con el derecho estadounidense, los tribunales estatales tienen también una función en la ejecución de las leyes

federales, como explicó claramente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto *Claflin contra Houseman*.

4.197 Las CE no pretenden poner en tela de juicio las opciones políticas de los Estados Unidos con respecto a la organización del poder judicial en relación con las cuestiones aduaneras. No obstante, en respuesta a las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 b) del artículo X del GATT es importante destacar que el sistema judicial de las CE responde a una opción constitucional tan esencial y legítima como el sistema estadounidense centralizado. Las CE consideran que sus opciones constitucionales merecen el mismo respeto que las de los Estados Unidos.

3. Las alegaciones de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

a) Las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

i) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras, y no a las propias leyes aduaneras

4.198 Las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT no se refieren a las propias leyes aduaneras, sino únicamente a su *aplicación*, como expuso claramente el Órgano de Apelación en *CE - Banano III*.

4.199 Esta distinción reviste suma importancia para el presente caso. Significa que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige una armonización de las leyes dentro de un Miembro en caso de que, por ejemplo, sean aplicables diferentes regímenes jurídicos en diferentes partes del territorio de un Miembro de la OMC.

4.200 Lo anterior es especialmente pertinente en el caso de todos los Miembros de la OMC que tienen una estructura federal. En un Estado o en una entidad federal, cabe la posibilidad de que en diferentes partes del territorio del Miembro de que se trate se apliquen leyes diferentes, según si la legislación sobre una cuestión determinada corresponde al nivel federal o al nivel subfederal.

4.201 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no se ocupa de la cuestión de si un determinado aspecto debe abordarse a nivel federal o a nivel subfederal, sino que se limita a garantizar que cualesquiera que sea la ley vigente, ésta debe aplicarse de manera uniforme. No obstante, cuando las leyes sólo son aplicables en una parte del territorio de un Miembro, esa prescripción se cumple siempre que esas leyes se apliquen de manera uniforme en la parte del territorio en la que son aplicables.

4.202 El párrafo 12 del artículo XXIV del GATT avala asimismo esta interpretación. En *Canadá - Monedas de oro*, el Grupo Especial constató que esta disposición tiene el "cometido de permitir que los Estados federales se adhieran al Acuerdo General sin tener que cambiar la distribución federal de las competencias". En consecuencia, cualquier interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT que afecte a la distribución interna de las competencias es incompatible con el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT.

4.203 Dicho de otro modo, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige que las leyes aduaneras estén reguladas a nivel central en todos los Miembros de la OMC. Los Acuerdos de la OMC respetan la estructura interna y la división de competencias de cada Miembro de la OMC. Así pues, cuando en un determinado Miembro de la OMC existen leyes subfederales, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la aplicación de esas leyes.

ii) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe la forma en que los Miembros de la OMC deben aplicar sus leyes aduaneras

4.204 El párrafo 3 a) del artículo X no prescribe la forma concreta en que los Miembros de la OMC deben aplicar sus leyes aduaneras; se limita a establecer la obligación de aplicar las leyes aduaneras de manera uniforme.

4.205 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es la única disposición de los acuerdos abarcados que se ocupa de la aplicación de las leyes aduaneras. De hecho, varios acuerdos incluidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC se ocupan de cuestiones concretas de administración aduanera, especialmente el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, el Acuerdo sobre Normas de Origen y el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación.

4.206 Cuando se consideró necesario establecer disciplinas específicas acerca de la forma en que los Miembros de la OMC debían administrar sus leyes aduaneras, se incluyeron las disposiciones apropiadas en los correspondientes acuerdos. Por ejemplo, el apartado h) del artículo 2 y el apartado f) del artículo 3 del Acuerdo sobre Normas de Origen exigen la emisión de dictámenes previos sobre el origen de las mercancías. Si se hubiera considerado necesario incluir obligaciones similares para la emisión de resoluciones previas sobre otras cuestiones, tales como la clasificación arancelaria o la valoración en aduana, podrían haberse incluido esas disposiciones en los acuerdos abarcados. Si no se hizo, se impone la conclusión de que los Miembros de la OMC no consideraron apropiadas esas obligaciones.

4.207 En consecuencia, no debe interpretarse que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT genera obligaciones en el marco de la OMC en aspectos en que los Miembros de la OMC deliberadamente se abstuvieron de establecerlas. Dicho de otra forma, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no constituye un fundamento jurídico para llevar a cabo una armonización del derecho aduanero y de las administraciones de aduanas de los Miembros de la OMC por medio del ESD.

4.208 El respeto a esos principios es especialmente necesario por cuanto la revisión del artículo X del GATT es actualmente objeto de las negociaciones en curso de Doha sobre la facilitación del comercio. En el contexto de esas negociaciones, los Miembros de la OMC han presentado gran número de propuestas con las que se pretende complementar y mejorar el artículo X del GATT, incluidas propuestas sobre cuestiones que son objeto de las alegaciones de los Estados Unidos. Ese es también el caso de los propios Estados Unidos, que han presentado varias propuestas en relación con el artículo X del GATT, incluida la de establecer una obligación de "publicar, a petición de los comerciantes y antes de que realicen una transacción comercial, resoluciones vinculantes en algunos ámbitos específicos (por ejemplo, en la clasificación arancelaria, la valoración en aduana, el aplazamiento del pago de derechos)". Otros países también han presentado propuestas sobre resoluciones anticipadas, limitadas no obstante en la mayoría de los casos a las cuestiones de clasificación arancelaria.

4.209 Esas negociaciones en curso ponen de relieve que en relación con las cuestiones sobre las que guarda actualmente silencio, el artículo X del GATT no contiene de hecho ninguna obligación. No resulta claro a las CE cómo los Estados Unidos pueden presentar propuestas para establecer nuevas obligaciones que vayan más allá de lo dispuesto en el artículo X del GATT y aducir al mismo tiempo que en virtud del artículo X, en sus términos actuales, son exigibles ya obligaciones muy similares.

4.210 Las motivaciones a que responde la reclamación de los Estados Unidos no son jurídicas, sino políticas. De hecho, los Estados Unidos lo han reconocido expresamente así en un comunicado de prensa del USTR para anunciar la petición de los Estados Unidos, en el que se indicaba que "la presión sobre un importante interlocutor en el comercio mundial para que aplique sus leyes y reglamentos aduaneros de manera uniforme contribuirá a hacer avanzar" las negociaciones de la

Ronda de Doha sobre facilitación del comercio. Ese intento de los Estados Unidos de instrumentalizar el ESD para influir en las negociaciones en curso de la Ronda de Doha preocupa gravemente a las CE .

iii) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT establece normas mínimas

4.211 En consonancia con lo expuesto, debe considerarse que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo establece normas mínimas y no obliga a los Miembros de la OMC a ajustarse a las normas más rigurosas que pueden cumplirse en un momento determinado. Este carácter de norma mínima del párrafo 3 a) del artículo X ha sido destacado por el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones*. El Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Pieles y cueros* advirtió también contra una interpretación excesivamente amplia del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.212 Además, no puede considerarse que diferencias administrativas de importancia secundaria en relación con el trato impliquen una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, como declaró expresamente el Grupo Especial del GATT que examinó el asunto *CE - Manzanas de mesa*, el cual confirmó que determinadas diferencias entre los Estados miembros de las CE en la aplicación de las licencias de importación (por ejemplo, en lo que respecta a la forma en que podían presentarse las solicitudes de certificado y la exigencia de facturas proforma) no constituían una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.213 Así pues, en su conjunto, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT es una disposición que establece normas mínimas y que sólo garantiza un cierto nivel mínimo de uniformidad en la aplicación. Además, ese párrafo no prohíbe las diferencias administrativas cuando esas diferencias son de importancia secundaria o no afectan significativamente a los intereses de los comerciantes.

iv) El sentido de "aplicación uniforme"

4.214 El sentido del requisito de "aplicación uniforme" debe establecerse a la luz de las observaciones precedentes. Además, deben tenerse en cuenta las circunstancias prácticas en las que tienen que desarrollar su actividad las administraciones aduaneras.

4.215 La aplicación de las leyes aduaneras en el mundo real entraña una serie de dificultades y retos. En primer lugar, la administración aduanera suele entrañar complejas cuestiones de hecho y de derecho. En segundo lugar, las circunstancias en las que operan las autoridades aduaneras evolucionan constantemente debido a los cambios que se producen en relación con los productos objeto de comercio o el comportamiento comercial, lo que exige la continua adaptación de las autoridades aduaneras a las nuevas realidades. En tercer lugar, la administración aduanera es una actividad en gran escala.

4.216 En consecuencia, la aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT requiere un cierto grado de realismo. El hecho de que las autoridades aduaneras se enfrenten a una nueva y compleja cuestión de hecho y de derecho no significa sin más que las autoridades del Miembro de que se trate no apliquen el derecho aduanero de manera uniforme. De forma análoga, el hecho de que se requiera cierto tiempo para llegar a una práctica establecida en relación con una cuestión nueva y compleja del derecho aduanero, no quiere decir que las leyes aduaneras se apliquen de manera no uniforme.

4.217 Ningún Miembro, ni aun aquellos que cuentan con los sistemas más eficientes de administración aduanera, puede lograr una uniformidad completa en la aplicación de las leyes aduaneras. En un país grande y con una burocracia considerable, es inevitable de hecho un grado mínimo de falta de uniformidad. Ello puede ser, por ejemplo, consecuencia del hecho de que en un caso concreto un comerciante no impugne una decisión determinada aunque ésta sea contraria a derecho. En tal caso, puede producirse a consecuencia de ello una falta de uniformidad, pero eso no quiere decir que el Miembro de que se trate no cumpla las obligaciones que le incumben en virtud del

párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Las CE señalan que los Estados Unidos parecen estar de acuerdo con esta afirmación, por cuanto manifiestan que el hecho de que se produzcan divergencias no entraña problemas en sí y por sí mismo.

4.218 La tesis de que la existencia de una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT no puede demostrarse por casos aislados de aplicación encuentra también apoyo en la jurisprudencia en el marco del ESD. En *CE - Productos avícolas*, el Órgano de Apelación confirmó ya que las medidas individuales de aplicación no están comprendidas en el ámbito del artículo X del GATT. En *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, el Grupo Especial declaró que era necesario que la parte reclamante, en lugar de basarse en casos individuales de aplicación, demostrara la existencia de una pauta del proceso de formulación de decisiones contraria a lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.219 En consecuencia, no es posible establecer si un Miembro determinado cumple el requisito de "uniformidad" atendiendo exclusivamente a un ejemplo individual de su práctica, sino que la uniformidad sólo puede evaluarse en función de una pauta global de la administración aduanera. Solamente en caso de que pueda demostrarse, sobre la base de esa pauta global, que la aplicación por un Miembro de la OMC de sus leyes aduaneras no es uniforme, habrá una infracción de la norma del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

b) La carga de la prueba

4.220 Es un principio establecido en la jurisprudencia en el marco del ESD que la carga de la prueba incumbe a la parte que formula una determinada alegación. En el presente caso, son los Estados Unidos los que alegan que las CE no aplican sus leyes aduaneras de manera uniforme. Por consiguiente, son los Estados Unidos los que deben aportar pruebas *prima facie* de que su alegación es cierta. Sólo si los Estados Unidos satisfacen esa carga se desplazará a las CE la carga de la prueba, y habrá de refutar los argumentos de los Estados Unidos.

4.221 Los Estados Unidos están muy lejos de haber satisfecho la carga de la prueba. De hecho, aportan muy pocas pruebas acerca de la aplicación real de la normativa aduanera comunitaria. Los ejemplos facilitados por los Estados Unidos en parte no son pertinentes, y en parte no son concluyentes y, en cualquier caso, no ponen de manifiesto una pauta general de aplicación no uniforme de la normativa aduanera comunitaria.

4.222 En lugar de aportar pruebas concretas acerca de la aplicación de la normativa aduanera comunitaria, los Estados Unidos tratan de basar sus argumentos en críticas sistémicas del sistema de administración aduanera de las CE, aduciendo, por ejemplo, que dado que el derecho comunitario es aplicado por las autoridades de 25 Estados miembros de las CE, es inevitable que se produzcan divergencias. No obstante, la afirmación de que esas divergencias son inevitables, que las CE rechazan firmemente, no puede sustituir a la prueba de que las divergencias se producen efectivamente.

4.223 Las referencias de los Estados Unidos a los efectos previstos de la ampliación de la UE con 10 nuevos Estados miembros el 1º de mayo de 2004 ilustran también la naturaleza totalmente especulativa de los argumentos de los Estados Unidos. En el comunicado de prensa del USTR en el que se anunció la presentación de la solicitud de establecimiento de un grupo especial por los Estados Unidos, se citaba como motivo fundamental para solicitar el establecimiento de un grupo especial los efectos previstos de la ampliación de la UE.

4.224 En el momento en que los Estados Unidos presentaron su solicitud de establecimiento de un grupo especial, hacía menos de ocho meses que se había producido la ampliación de la UE. Los Estados Unidos no han hecho referencia a ninguna falta de uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria por las administraciones de los 10 nuevos Estados miembros. Las

simples especulaciones acerca de la posible evolución futura no pueden sustituir a los hechos y las pruebas como base de alegaciones formuladas al amparo del ESD.

4.225 En sus esfuerzos para eludir la carga de la prueba que les incumbe, los Estados Unidos prefieren hacer referencia a declaraciones de funcionarios o instituciones de las CE, que, según los Estados Unidos, son los que "mayores críticas han expuesto verbalmente" con respecto al sistema de las CE. No obstante, esas referencias se han sacado de contexto y no apoyan las conclusiones que los Estados Unidos tratan de inferir de ellas. En todo caso, el deseo de hacer nuevos progresos es lógico en el contexto de un sistema racional de administración aduanera. Esas declaraciones no guardan ninguna relación con la cuestión de si las CE cumplen o no sus obligaciones en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, ni eximen a los Estados Unidos de la obligación de satisfacer la carga de la prueba que les corresponde.

4.226 Por último, la casi absolutamente falta de respuesta a la petición de contribuciones hecha por el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales después de la solicitud de celebración de consultas confirma claramente que la reclamación de los Estados Unidos no se basa realmente en una pauta de falta de uniformidad en la administración aduanera de las CE. Si existiera realmente esa pauta, como alegan los Estados Unidos, cabría esperar que los Estados Unidos no hubieran recibido sólo tres contribuciones, dos de las cuales ni siquiera eran pertinentes a la reclamación de los Estados Unidos.

c) Cuestiones generales que subyacen a las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

i) ¿Es compatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT el hecho de que la normativa aduanera comunitaria sea aplicada por las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las CE?

4.227 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no establece la forma en la que un Miembro de la OMC debe aplicar sus leyes aduaneras. Lo mismo puede decirse de la cuestión de las autoridades o administraciones de aduanas por medio de las que han de aplicarse las leyes. El párrafo 3 a) del artículo X no excluye en absoluto la posibilidad de que en un Estado o entidad federal o cuasi federal, las leyes aduaneras sean aplicadas por autoridades de nivel subfederal. A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, ese párrafo no prescribe el establecimiento de un organismo aduanero similar a la Oficina de Aduanas y Protección en Frontera de los Estados Unidos.

4.228 Además, cuando aplican la normativa aduanera comunitaria, los Estados miembros de las CE actúan como órganos de las CE. Así lo confirma el reciente informe del Grupo Especial que examinó el asunto *CE - Marcas de fábrica e indicaciones geográficas (Estados Unidos)*, en el que el Grupo Especial señaló que cuando los Estados miembros de las CE proceden a la ejecución de un determinado reglamento comunitario actúan como órganos de la Comunidad, por lo cual ésta es responsable con arreglo al derecho internacional público.

4.229 Por esta razón, los Estados Unidos yerran al afirmar que "no se puede hablar de una autoridad aduanera" comunitaria. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las CE, actuando conjuntamente con las instituciones competentes de las CE y bajo su supervisión, son la autoridad aduanera comunitaria. El hecho de que este sistema de administración aduanera sea diferente del de los Estados Unidos no es en absoluto pertinente, de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Hay que recordar además que los propios Estados Unidos han aceptado, en el acuerdo entre las CE y los Estados Unidos sobre cooperación aduanera, que los Estados miembros de las CE juntamente con la Comisión Europea constituyen la autoridad aduanera comunitaria.

4.230 Los Estados Unidos yerran también al afirmar que debido a la participación de los Estados miembros de las CE en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria "es inevitable que haya

divergencias". Como las CE han puesto ya de manifiesto, y volverán a recordar en la siguiente sección, las CE disponen de numerosos mecanismos para garantizar que la aplicación de la normativa aduanera comunitaria se realice de manera uniforme. Además, la declaración de los Estados Unidos según la cual en el sistema de las CE es inevitable la falta de uniformidad no está apoyada por los datos.

ii) Las CE cuentan con medidas para garantizar la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria en todas las CE

4.231 La alegación de los Estados Unidos de que las CE no prevén la conciliación sistemática de las divergencias en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria es falsa. Corresponde a una descripción sesgada e incompleta del sistema de las CE, en la que los Estados Unidos se centran en un pequeño número de instrumentos y prescinden de una amplia gama de instrumentos distintos que contribuyen también a la interpretación y aplicación uniformes de la normativa aduanera comunitaria. Además, los Estados Unidos no tienen en cuenta el contexto general del sistema jurídico de las CE y las formas en las que se garantiza la uniformidad dentro del sistema comunitario.

4.232 Sorprende a las CE que los Estados Unidos hagan afirmaciones tajantes acerca de la uniformidad del derecho comunitario sin mencionar siquiera principios tan fundamentales del mismo como la primacía y la eficacia directa del derecho comunitario, el deber de cooperación, los procedimientos por incumplimiento, los diversos instrumentos de cooperación aduanera de las CE o los aspectos relativos al control presupuestario.

4.233 Un ejemplo del enfoque sumamente selectivo de los Estados Unidos que llama especialmente la atención es el caso de la clasificación arancelaria, en la que los Estados Unidos se centran fundamentalmente en el sistema comunitario de IAV, sin tener en cuenta en absoluto los demás instrumentos que garantizan una práctica uniforme de clasificación en las CE, como los reglamentos en materia de clasificación, los instrumentos del SA, las notas explicativas comunitarias o los dictámenes del Comité del Código Aduanero. Aunque los Estados Unidos tienen en cuenta partes del sistema comunitario, presentan esas partes de forma muy distorsionada.

4.234 La cuestión de si las CE, a nivel sistemático, aplican la normativa aduanera comunitaria de manera uniforme no puede evaluarse teniendo en cuenta simplemente un solo instrumento considerado aisladamente. El sistema de las CE ha de ser evaluado en su conjunto, teniendo en cuenta todos los instrumentos pertinentes en el contexto adecuado.

4.235 Esa evaluación debe hacerse teniendo en cuenta los elementos estructurales del sistema jurídico de las CE y la historia y la experiencia globales de la integración europea. Los elementos estructurales que critican los Estados Unidos no son privativos de la aplicación de las leyes aduaneras, sino que son elementos estructurales de carácter general del orden constitucional comunitario. No puede prescindirse a la ligera de un proceso satisfactorio de integración europea de más de 50 años basado en el modelo de federalismo ejecutivo de las CE.

iii) Algunas rectificaciones necesarias en relación con el cometido y el funcionamiento del Comité del Código Aduanero

4.236 Los Estados Unidos aducen que el Comité del Código Aduanero no funciona de forma suficientemente eficaz y que en el marco de los procedimientos del Comité no se dan suficientes derechos a los comerciantes particulares. Esas críticas de los Estados Unidos carecen de fundamento.

4.237 En lo que respecta a la supuesta falta de eficacia del funcionamiento del Comité, los Estados Unidos se basan esencialmente en afirmaciones generales acerca de los "desincentivos institucionales" que impedirían que la Comisión sometiera a votación las cuestiones. Esas alegaciones acerca de los "desincentivos institucionales" carecen de fundamento y no están avaladas por datos. Además, los

Estados Unidos prescinden del hecho de que las circunstancias en las que el Presidente somete una cuestión a votación o puede aplazar la votación se establecen en el artículo 6 del Reglamento Interno del Comité.

4.238 El hecho de que en algunos casos el Comité pueda haberse ocupado más de una vez de la misma cuestión o de cuestiones conexas, no tiene nada que ver con los "desincentivos institucionales", sino que puede deberse a la complejidad de la cuestión de que se trata y a la necesidad de llegar a una comprensión plena de la situación fáctica antes de que pueda adoptarse una decisión.

4.239 Las referencias que los Estados Unidos hacen a los supuestos efectos negativos de la ampliación de la UE sobre la eficacia del Comité ilustra también el carácter totalmente especulativo de las alegaciones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos hacen esas referencias sin poder apoyarlas en ningún dato concreto.

4.240 En lo que respecta a los derechos de los comerciantes individuales en relación con los procedimientos del Comité, los Estados Unidos formulan los argumentos relativos a ellos en el contexto de un análisis de si las CE aplican sus leyes aduaneras de manera uniforme de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Las CE no entienden la pertinencia de esos argumentos acerca de los derechos de los comerciantes individuales ante el Comité a la cuestión de si la normativa aduanera comunitaria se aplica uniformemente en todas las CE.

4.241 Las alegaciones de los Estados Unidos parecen basarse en un error fundamental acerca de la función del Comité del Código Aduanero. El Comité no es un mecanismo destinado a la revisión administrativa o judicial de las decisiones aduaneras, sino un elemento integrante del proceso de reglamentación de la Comunidad, a través del cual se integran en ese proceso los conocimientos especializados de los Estados miembros. En consecuencia, no hay ningún fundamento para los amplios derechos de los comerciantes individuales que postulan los Estados Unidos.

4.242 Cualquier persona que tenga un problema en relación con la administración de cuestiones aduaneras puede señalarlo a la atención de la Comisión, que examinará la cuestión y dará respuesta a ella de conformidad con el Código de Buena Conducta de la Comisión. Si la Comisión considera que el asunto debe ser examinado por el Comité, lo incluirá en el orden del día de éste. De forma análoga, cualquier persona interesada puede dirigirse también a la administración de un Estado miembro, la cual puede igualmente optar por plantear la cuestión en el Comité.

4.243 En lo que respecta a la publicación de los órdenes del día o los informes del Comité, no existe ninguna obligación de publicarlos. Los Estados Unidos tampoco han formulado ninguna alegación al amparo del párrafo 1 del artículo X del GATT. En todo caso, las alegaciones de los Estados Unidos son de hecho erróneas. Los documentos relativos al Comité del Código Aduanero, incluidos los órdenes del día y las actas resumidas de las reuniones, pueden consultarse en el registro público de comitología de la Comisión Europea. Además, el acceso a los órdenes del día y a las actas del Comité se rige por las normas comunitarias relativas al acceso a los documentos establecidas en el Reglamento (CE) Nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

iv) La función del Tribunal de Justicia para garantizar la uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria

4.244 Los Estados Unidos niegan que el Tribunal de Justicia pueda garantizar la aplicación uniforme mediante los reenvíos prejudiciales de los tribunales nacionales. En apoyo de sus argumentos, los Estados Unidos se basan en el dictamen del Abogado General Jacobs en el asunto *Wiener*. No obstante, la posición del Abogado General Jacobs se desvía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y lo que es aún más importante, su posición en cuanto al ejercicio de una mayor autolimitación por el Tribunal o por los tribunales nacionales no fue avalada por el Tribunal.

4.245 El Abogado General Jacobs indicó al Tribunal que la cuestión sometida por el Bundesfinanzhof (Tribunal contencioso-administrativo federal en materia tributaria) debía resolverse mediante la remisión a los principios consagrados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con la clasificación aduanera. En contra de las conclusiones del Abogado General, el Tribunal de Justicia dio una respuesta concreta a la cuestión de la forma en que habían de clasificarse las mercancías en cuestión.

4.246 En lo que respecta a la recomendación de autolimitación de los tribunales nacionales del Abogado General Jacobs, la resolución del Tribunal de Justicia guarda completamente silencio al respecto. En consecuencia, el dictamen no vinculante del Abogado General Jacobs representa una posición doctrinal sin influencia en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

4.247 En lo que respecta a la afirmación del Abogado General Jacobs acerca de la supuesta contribución mínima del Tribunal a la aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común, es evidente que los Estados Unidos la han sacado de su contexto. Lo que destacó el Abogado General Jacobs en su dictamen es que, teniendo en cuenta el carácter detallado del Arancel Aduanero Común, había otras formas de garantizar la uniformidad en la esfera de la clasificación aduanera, y el Abogado General citaba como ejemplo los reglamentos de clasificación de la Comisión.

4.248 Para confirmar que los tribunales nacionales siguen la recomendación de autolimitación del Abogado General Jacobs, los Estados Unidos citan dos sentencias dictadas por dos tribunales distintos del Reino Unido. Así pues, los Estados Unidos sólo han podido encontrar apoyo a sus argumentos en dos asuntos en uno de los 25 Estados miembros de las CE. No se aportan pruebas sobre la posición adoptada por los órganos judiciales de los otros 24 Estados miembros en relación con el dictamen del Abogado General (en caso en que haya una posición al respecto). Las CE consideran que esos dos asuntos sustanciados en el Reino Unido no son suficientes para apoyar la alegación de los Estados Unidos.

4.249 Además, en *Anchor Foods Limited*, la Queen's Bench Division del Reino Unido no se basó en las conclusiones del Abogado General Jacobs para decidir que no había necesidad de recurrir al Tribunal de Justicia. En realidad, la Queen's Bench Division decidió no someter la cuestión al Tribunal de Justicia debido a la escasa entidad del asunto. Hay que señalar además que el tribunal inglés no actuó en este caso como un tribunal contra cuyas decisiones no cabe recurso ulterior, por lo que no estaba obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

d) Alegaciones de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

i) Clasificación arancelaria

El Tribunal de Justicia y la clasificación arancelaria

4.250 Los Estados Unidos aducen que el Tribunal de Justicia es una institución mal dotada para introducir la uniformidad en la aplicación del Arancel. Esta afirmación, que se basa únicamente en las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto Wiener, es errónea.

4.251 En relación concretamente con la función del Tribunal de Justicia en las diferencias sobre clasificación, las CE no comparten la opinión de los Estados Unidos de que, debido a la gran cantidad de elementos fácticos que hay que considerar en las cuestiones relativas a la clasificación, el Tribunal de Justicia no puede desempeñar una función útil para conseguir una aplicación uniforme de las normas comunitarias en materia de clasificación. Aun cuando las cuestiones de clasificación suelen depender de los elementos fácticos, ello no las diferencia sustancialmente de otras cuestiones de derecho, que entrañan también la aplicación de normas abstractas a situaciones de hecho.

4.252 Además, por su propia naturaleza, las cuestiones de clasificación se refieren a la clasificación de mercancías concretas. En qué medida la clasificación de determinadas mercancías puede transponerse por analogía a otras mercancías diferentes, aunque similares, es una cuestión compleja que sólo puede evaluarse caso por caso. No obstante, esa cuestión es también una cuestión general de clasificación, y no es algo que guarde relación específicamente con la función del Tribunal.

4.253 Por último, los intentos de los Estados Unidos de minimizar la función del Tribunal contrastan radicalmente con sus alegaciones de que las CE no actúan de manera uniforme. Las observaciones de los Estados Unidos parecerían arrojar dudas acerca de si es posible en absoluto regular las cuestiones relativas a la clasificación. Las preocupaciones expuestas por los Estados Unidos en relación con la gran cantidad de elementos fácticos de los que dependen las cuestiones de clasificación se plantean con independencia de que el órgano encargado de adoptar la decisión final sea un tribunal o un organismo administrativo.

4.254 En conjunto, la argumentación de los Estados Unidos suscita la perplejidad de las CE. Los Estados Unidos parecen alegar en la práctica que no es posible conseguir una clasificación uniforme para culpar después a las CE de no hacer lo bastante para conseguirla.

Información arancelaria vinculante

4.255 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT es una disposición que establece normas mínimas, y no prescribe los medios específicos que los Miembros deben emplear para asegurar una aplicación uniforme de las leyes aduaneras. Por esta razón, las normas de la OMC no imponen a un Miembro la obligación de aplicar un sistema de información arancelaria vinculante, como ponen además de manifiesto las propuestas de los Estados Unidos en el marco de las negociaciones sobre facilitación del comercio de la Ronda de Doha, en las que tratan de complementar el artículo X del GATT estableciendo la obligación de prever resoluciones anticipadas sobre cuestiones de clasificación.

4.256 Los Estados Unidos alegan que el sistema europeo de IAV alienta "que se use la IAV más ventajosa" y lleva por consiguiente a un aumento del riesgo de IAV divergentes. Esas alegaciones de los Estados Unidos se basan en numerosos errores acerca del sistema europeo de IAV. Los Estados Unidos alegan que el "titular u otro solicitante elige el Estado miembro al que presentará la solicitud". Esa afirmación es engañosa. La normativa aduanera comunitaria no permite a los solicitantes "elegir" el Estado miembro que expedirá la IAV. Según el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de Aplicación, las solicitudes de IAV deben dirigirse, ya sea a las autoridades competentes del Estado miembro o de los Estados miembros en el que o en los que se debe utilizar la información, ya sea a las autoridades aduaneras competentes del Estado miembro en el que esté establecido el solicitante.

4.257 Los Estados Unidos alegan también que una IAV "no vincula al titular, en el sentido de que no es necesario que éste la invoque". En primer lugar, eso no es totalmente cierto. De conformidad con el apartado 2 a) del artículo 10 del Reglamento de Aplicación, las autoridades aduaneras pueden exigir que el titular, en el momento en que efectúe los trámites aduaneros, indique a las mismas que se encuentra en posesión de una IAV para las mercancías que son objeto del despacho aduanero.

4.258 En segundo lugar, las CE no entienden cuál es la pertinencia práctica de esta cuestión desde el punto de vista de una práctica uniforme en materia de IAV. Los Estados Unidos afirman que una persona que haya obtenido una IAV desfavorable en un Estado miembro "puede prescindir de ella, no solicitar IAV en otro Estado y limitarse a tratar de importar la mercancía a través de otro Estado miembro intentando obtener la clasificación que le resulte más favorable sin basarse en absoluto en la IAV". Tal vez pueda ocurrir así, pero la situación no sería distinta en el caso de que no se hubiera emitido ninguna IAV. La IAV se emite en beneficio del titular. En consecuencia, en la situación descrita por los Estados Unidos sería más lógico que la persona que ha obtenido la IAV desfavorable la impugne, si cree que era errónea. Además, no hay ningún motivo para suponer que otras

autoridades aduaneras de la UE aplicarán una clasificación arancelaria distinta que la prevista en la IAV, solamente por el hecho de que no se invoque la IAV.

4.259 La alegación de los Estados Unidos de que un solicitante puede presentar una solicitud en un Estado miembro, y en caso de no obtener una IAV favorable, abstenerse de invocarla y solicitar una IAV en otro Estado miembro es errónea. Según lo dispuesto en el apartado 3 A) j) del artículo 6 del Reglamento de Aplicación, al solicitar la IAV, el solicitante debe indicar si, a su conocimiento, le ha sido solicitada o facilitada en la Comunidad una información arancelaria vinculante para una mercancía idéntica o similar. Además, en la undécima casilla del modelo de solicitud de IAV se pide al solicitante que declare si ha solicitado o le ha sido facilitada IAV para mercancías similares o idénticas. Los Estados Unidos no pueden tratar de poner de manifiesto deficiencias del sistema de las CE estableciendo hipótesis que se basan en violaciones flagrantes de las normas comunitarias. Además, el apartado 4 del artículo 12 del CAC dispone que se anulará la IAV basada en elementos inexactos o incompletos suministrados por el solicitante.

4.260 Los Estados Unidos aducen que cuando hay IAV divergentes, el sistema comunitario no dispone de mecanismos suficientes para rectificar esas divergencias. Las situaciones y las presuntas dificultades que describen los Estados Unidos para detectar IAV divergentes son en gran medida teóricas. Las diferencias de clasificación suelen producirse en los casos en los que cabe considerar varias partidas y la elección entre ellas no es absolutamente evidente. Esos casos no tardan demasiado en divulgarse. Son las propias autoridades aduaneras las que advierten en primer lugar la dificultad, y si no lo hacen, los comerciantes la ponen en su conocimiento al impugnar las decisiones que consideran desfavorables. Cuando se produce una impugnación, la cuestión puede someterse al Tribunal de Justicia, lo que en último término conducirá a la aclaración de la misma.

4.261 No obstante, con frecuencia las propias autoridades aduaneras nacionales plantean la cuestión en el Comité del Código Aduanero antes incluso de que se haya acudido a los tribunales o de que éstos hayan dictado las resoluciones correspondientes. Alternativamente, las autoridades aduaneras pueden someter la cuestión a la Comisión, la cual puede decidir someterla al Comité del Código Aduanero.

4.262 Con frecuencia, los comerciantes individuales se dirigen con problemas concretos de clasificación aduanera a la Comisión o a las autoridades de los Estados miembros, que pueden optar entonces por adoptar las medidas necesarias, incluido el planteamiento de la cuestión al Comité del Código Aduanero. En síntesis, los Estados Unidos exageran enormemente las dificultades para detectar IAV divergentes "ocultas"; en realidad, la experiencia pone de manifiesto que esas divergencias, cuando tienen consecuencias económicas, no permanecen ocultas durante mucho tiempo.

4.263 Las CE mantienen además la base de datos EBTI/IAV, que permite al público y a las autoridades aduaneras realizar búsquedas de todas las IAV. Esta base de datos constituye un importante instrumento de transparencia del sistema, que goza de gran aceptación entre los comerciantes y es frecuentemente utilizada: por ejemplo, en los primeros seis meses de 2005 la media de consultas por mes ascendió a 324.000.

4.264 Los Estados Unidos no están en lo cierto al aducir que la búsqueda podría ser difícil debido a la variación de las designaciones de los productos. En primer lugar, aunque es cierto que las designaciones de los productos pueden variar, es difícil que este hecho constituya un obstáculo para llevar a cabo una búsqueda. En la versión pública de la base de datos EBTI/IAV las búsquedas pueden realizarse utilizando diversos parámetros, y una selección cuidadosa de los criterios permitirá una búsqueda fructífera. Hay palabras clave en todos los idiomas oficiales de las CE. Hay además un servicio de traducción disponible para traducir las claves a cualquiera de los 19 idiomas. En consecuencia, el idioma no debe constituir una dificultad importante para realizar búsquedas.

4.265 Además, como han explicado también las CE, hay una versión de la base de datos EBTI/IAV a la que tienen acceso las autoridades aduaneras de los Estados miembros y la Comisión. Esta versión permite realizar búsquedas de IAV utilizando otros parámetros adicionales, entre los que pueden destacarse el nombre y la dirección del titular y del solicitante. Además, esta versión permite también realizar búsquedas de las solicitudes de IAV pendientes. En las directrices administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante publicadas por la Comisión Europea se incluyen también instrucciones detalladas dirigidas a las autoridades aduaneras de las CE sobre la forma de efectuar búsquedas.

4.266 No es cierto que las CE no dispongan de medios de detectar IAV divergentes. Es interesante señalar que los Estados Unidos, para ilustrar su alegación de existencia de prácticas divergentes de clasificación en el caso de los forros opacos para cortinas han facilitado como prueba documental extractos de la base de datos EBTI/IAV. De esa forma, los propios Estados Unidos desmienten su alegación de que resulta imposible utilizar la base de datos EBTI/IAV.

4.267 Las críticas estadounidenses de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-133/02, *Timmermans*, carecen de fundamento. No hay razón para suponer, como hacen los Estados Unidos, que una revocación de la IAV como la autorizada por el Tribunal en *Timmermans* pueda tener como consecuencia una menor uniformidad. Por el contrario, una revocación puede ser necesaria precisamente para tener en cuenta el hecho de que otras autoridades aduaneras han adoptado una práctica de clasificación diferente, que se confirma que es adecuada. Esto es lo que sucedió precisamente en el asunto *Timmermans*, en el que la revocación de la IAV se produjo porque "tras un examen más exhaustivo y como consecuencia de un acuerdo con las autoridades aduaneras de un distrito próximo sobre la interpretación de la nomenclatura aplicable, se puso de manifiesto que las mercancías afectadas debían clasificarse en" una subpartida diferente. El mismo razonamiento podía haberse aplicado también si la divergencia se hubiera producido en relación con la práctica de las autoridades de otro Estado miembro.

4.268 En todo caso, la sentencia del asunto *Timmermans* no se refiere fundamentalmente a la uniformidad de la aplicación, sino a la seguridad jurídica de los comerciantes. El Tribunal de Justicia declaró que los intereses legítimos de los comerciantes estaban suficientemente protegidos por las disposiciones del apartado 6 del artículo 12 del CAC, que permite en determinados casos seguir utilizando la IAV durante un período reducido de tiempo. Ello no entraña ningún problema en relación con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Supuestas divergencias en la práctica de clasificación de las CE

4.269 En apoyo de su alegación, los Estados Unidos han hecho referencia a dos casos en los que supuestamente las CE han aplicado sus normas en la esfera de la clasificación arancelaria de manera no uniforme. No obstante, esos casos no ponen de manifiesto ninguna falta de uniformidad en la aplicación realizada por las CE.

4.270 El primer caso de supuestas divergencias se refiere a la clasificación de los forros opacos para cortinas. No obstante, en ese caso, las mercancías examinadas por las autoridades aduaneras alemanas no eran idénticas a las descritas en la IAV, puesto que no estaban revestidas de una capa de tundizno. El hecho de que el producto esté revestido de una capa de tundizno constituye una diferencia importante, que justifica la clasificación diferente del producto. En consecuencia, dado que los Estados Unidos no han demostrado que los productos fueran idénticos en todos los aspectos pertinentes, no han probado que exista realmente ninguna contradicción.

4.271 Además, las CE desean recordar que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 del CAC, el titular de la IAV debe demostrar que la mercancía declarada coincide plenamente con la descrita en la información. Las mercancías descritas en la decisión de las autoridades aduaneras alemanas no parecen estar comprendidas en la designación que figura en las IAV.

4.272 Por otra parte, hay que señalar que según el apartado 3A) d) del artículo 6 del Reglamento de Aplicación, es el solicitante el que debe facilitar una descripción detallada de la mercancía que permita su identificación, así como determinar su clasificación en la nomenclatura aduanera. Por el contrario, los Estados Unidos no han facilitado información acerca de si se presentaron muestras a las autoridades que emitieron la IAV, y de si esas muestras eran de hecho idénticas a las que fueron analizadas por las autoridades alemanas.

4.273 Aun en caso de que se hubiera producido un error en la evaluación fáctica de los productos, ello no significa que no exista uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. En concreto, si el importador en cuestión consideraba que las autoridades alemanas habían incurrido en error al evaluar las mercancías de que se trata, podía haber recurrido contra la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen ante el Tribunal Fiscal de Bremen. Los Estados Unidos no han facilitado información acerca de si el importador en cuestión presentó un recurso. Si el importador optó por no recurrir, ese hecho no puede utilizarse para alegar una falta de uniformidad en el sistema de clasificación aduanera de las CE. Las CE desean también señalar que ni el importador ni el productor han señalado nunca la cuestión de la clasificación de los forros opacos para cortinas a la atención de la Comisión Europea.

4.274 Los instrumentos administrativos a que se refiere la oficina alemana de aduanas no contienen ninguna disposición contraria al derecho comunitario, y en todo caso se trata de una ayuda puramente interpretativa preparada con fines administrativos que no tiene ninguna fuerza de ley, y que no se desvía del derecho comunitario. El Tribunal Europeo de Justicia ha aclarado en el asunto *Binder* que los manuales, directrices u otras recopilaciones preparadas por los Estados miembros no tienen carácter jurídicamente vinculante en el derecho comunitario.

4.275 Por último, tiene cierto interés señalar que los Estados Unidos se han enfrentado a su vez con dificultades para clasificar los forros opacos para cortinas, y han tenido que revocar decisiones anteriores de clasificación relativas a este producto.

4.276 En lo que respecta al caso de los monitores planos de cristal líquido (LCD), la cuestión esencial es si han de clasificarse como monitores de ordenador o como videomonitores. La correcta clasificación de esos monitores es una cuestión relativamente reciente, que se ha planteado debido a la creciente convergencia entre la tecnología de la información y los productos electrónicos de consumo. Muchos monitores LCD, por su diseño y sus características técnicas, pueden servir como monitores de ordenador y como videomonitores, por lo que resulta difícil a las autoridades aduaneras establecer de forma objetiva la finalidad precisa a la que está destinada un determinado monitor.

4.277 Además, hay en el mercado una gran cantidad de tipos distintos de monitores LCD. Esos monitores difieren en varios aspectos, entre ellos su tamaño, la interfaz que poseen y las señales que pueden procesar, así como su diseño general. En la medida en que tales características tienen una repercusión en el uso, es posible que sea preciso también tener en cuenta esas diferencias entre los diferentes tipos de monitores.

4.278 Las alegaciones de los Estados Unidos de que las CE no garantizan una práctica de clasificación uniforme con respecto a los monitores LCD deben considerarse infundadas. De hecho, las instituciones comunitarias han sometido desde el principio a un examen muy estrecho esta cuestión concreta de clasificación, y han adoptado las medidas necesarias para garantizar una práctica de clasificación correcta y uniforme a este respecto.

4.279 La cuestión fue sometida por primera vez en abril de 2004 al Comité del Código Aduanero, que desde entonces ha examinado periódicamente la situación. Dado que la cuestión de clasificación requiere también la contribución técnica de la rama de producción, el Comité, de conformidad con el artículo 9 de su Reglamento Interno, ha oído a representantes del sector. En la reunión que celebró los días 30 de junio a 2 de julio de 2004, el Comité del Código Aduanero llegó a la conclusión de que,

salvo que un importador pueda demostrar que un monitor sólo será utilizable con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos (partida 8471), o como tablero indicador (partida 8531), el monitor deberá clasificarse en la partida 8528.

4.280 La alegación de que los Países Bajos clasificaron erróneamente los monitores LCD como videomonitores está por tanto fuera de lugar. En principio esa clasificación está en conformidad con la NC, como confirmó el Comité del Código Aduanero. Naturalmente, es preciso tener en cuenta que la clasificación efectiva de los monitores LCD depende del monitor concreto de que se trate.

4.281 Las instituciones comunitarias han adoptado medidas adicionales para garantizar una práctica uniforme. La primera de ellas es el Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo de 16 de marzo de 2005. La finalidad de este Reglamento es aportar seguridad en cuanto al tratamiento arancelario a los importadores interesados por medio de la suspensión de los derechos durante un período transitorio. Desde el punto de vista práctico, la suspensión de los derechos cumple exactamente la misma finalidad que un reglamento de clasificación, puesto que garantiza a los comerciantes que, con independencia de que las mercancías se clasifiquen dentro de la partida 8471 o dentro de la partida 8528, recibirán el mismo trato arancelario.

4.282 La alegación estadounidense de que el ejemplo de los videomonitores LCD pone de manifiesto que el Comité del Código Aduanero no es el órgano apropiado para conciliar las diferencias entre las interpretaciones de los Estados miembros está fuera de lugar. El Comité del Código Aduanero se ha mostrado perfectamente capaz de adoptar las conclusiones necesarias y sigue supervisando continuamente la situación.

4.283 Las CE han adoptado otra medida pertinente, en concreto el Reglamento Nº 634/2005, que clasifica los monitores LCD de un tipo determinado dentro de la partida 8528. Actualmente, la Comisión sigue supervisando la situación y podrá adoptar nuevos reglamentos de clasificación para esos monitores u otras medidas apropiadas siempre y cuando resulte necesario.

4.284 Las autoridades aduaneras de los Estados Unidos también han encontrado dificultades para clasificar adecuadamente los monitores LCD. Por ejemplo, en una resolución de 3 de junio de 2003, la Aduana de los Estados Unidos constató que no era posible determinar la función principal de un determinado tipo de monitores LCD y, en consecuencia, decidió clasificarlos dentro de la partida 8528, en aplicación de la nota general para la interpretación 3 c), que prevé la clasificación en la última partida por orden numérico.

4.285 Ninguno de los dos casos que han citado los Estados Unidos pone de manifiesto una falta de uniformidad en la aplicación por las CE de la clasificación aduanera. En ambos se plantean cuestiones de clasificación de gran complejidad técnica, con los que los propios Estados Unidos han tenido dificultades. En consecuencia, los Estados Unidos distan mucho de haber establecido la existencia de una pauta significativa de falta de uniformidad en la práctica comunitaria de clasificación arancelaria. Por el contrario, el análisis precedente ha puesto de manifiesto que la administración aduanera de las CE cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar la uniformidad de la clasificación arancelaria.

ii) Valoración en aduana

La aplicación uniforme de las normas de valoración en las CE

4.286 Las cuestiones relativas a la valoración se regulan en los artículos 28 a 36 del CAC y en los artículos 141 a 181 *bis* del Reglamento de Aplicación, que contiene más detalles al respecto en sus anexos 23 a 29. Estas disposiciones constituyen una regulación exhaustiva de la valoración en aduana, que en conjunto no deja margen a la actuación discrecional de las administraciones de los Estados miembros.

4.287 Las normas comunitarias se basan en todas las normas recogidas en el Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana y las incorporan plenamente. Según el tercer párrafo del preámbulo del Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana, el objetivo central del Acuerdo es "conseguir … una mayor uniformidad y certidumbre" en la aplicación de las normas de valoración. Las CE se preguntan cómo puede alcanzar este objetivo el Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana si, como aducen los Estados Unidos, deja a los Miembros de la OMC un "margen discrecional considerable" en lo que respecta a la valoración de las mercancías a efectos aduaneros.

4.288 Las normas de la OMC no imponen la obligación de establecer un sistema de información vinculante con respecto a las cuestiones de valoración. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe las formas concretas en que los Miembros de la OMC deben aplicar sus leyes aduaneras. Esto resulta especialmente evidente en la esfera de la valoración en aduana, que se rige por el Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana. Si los Miembros de la OMC hubieran deseado establecer la obligación específica de establecer o mantener sistemas de información vinculante sobre cuestiones de valoración, lo lógico habría sido que la incluyeran en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. El hecho de que los propios Estados Unidos, en el contexto de las negociaciones sobre facilitación del comercio de Doha, hayan propuesto que se complemente el artículo X del GATT estableciendo la obligación de emitir resoluciones anticipadas sobre cuestiones aduaneras, incluida la valoración en aduana, avala asimismo esta conclusión.

4.289 La conveniencia de una información vinculante en materia de valoración en aduana como instrumento para garantizar la uniformidad es mucho menos clara que en el caso de la información arancelaria vinculante. Las mercancías concretas no varían demasiado en el curso del tiempo, y son desde luego idénticas con independencia del lugar de importación. En cambio, la valoración en aduana se basa en series de datos que pueden cambiar de una transacción a otra y de un importador a otro, lo que hace difícil la comparabilidad directa entre transacciones y entre importadores. Además, los datos relativos a la valoración tienen un carácter relativamente temporal, por cuanto los contratos de venta, los precios y otros factores, como la relación existente entre las partes, y los aspectos concretos de los acuerdos relativos a los cánones y derechos de licencia pueden variar con gran frecuencia.

4.290 Por estas razones, el contenido de la información vinculante en materia de valoración habría de ser considerablemente diferente del contenido de la información arancelaria vinculante. En concreto, a diferencia de lo que ocurre con la información arancelaria, en la que es posible establecer en abstracto la clasificación de la mercancía a la que corresponde una determinada designación, no es posible establecer en abstracto el valor de una mercancía. La información vinculante sobre valoración habría de tener un carácter mucho más matizado y específico, y centrarse por ejemplo en la caracterización de elementos específicos inherentes a determinadas transacciones que se repiten entre las mismas partes.

4.291 Hay entre clasificación y valoración diferencias intrínsecas que es preciso tener en cuenta. En consecuencia, no es fácil transponer a la esfera de la valoración en aduana elementos tales como los reglamentos de clasificación y la información arancelaria vinculante. En lugar de ello, la Comisión puede hacer las aclaraciones necesarias mediante modificaciones del Reglamento de Aplicación. Puede considerarse que esas modificaciones cumplen una función bastante similar a la de los reglamentos de clasificación o las notas explicativas comunitarias. Además, el Comité del Código Aduanero, y especialmente su Sección del Valor en Aduana, tiene una función muy importante en la esfera de la valoración, y ha contribuido a la uniformidad en particular mediante la formulación de observaciones y conclusiones sobre numerosas cuestiones de actualidad concernientes a la aplicación de las normas de valoración.

4.292 Los mecanismos generales para garantizar una aplicación uniforme del derecho comunitario operan también en la esfera de la valoración en aduana. En primer lugar, si un comerciante considera que ha sido indebidamente tratado por una decisión de la autoridad aduanera de un Estado miembro,

puede recurrir contra ella ante el tribunal de ese Estado miembro. Si se plantea una cuestión que requiere la aclaración del derecho comunitario, esa cuestión puede, y en determinadas circunstancias debe, ser sometida al Tribunal Europeo de Justicia. De esta forma, el Tribunal de Justicia ha aclarado numerosas cuestiones de derecho comunitario en la esfera de la valoración en aduana.

4.293 En segundo lugar, si la Comisión constata que un Estado miembro aplica las disposiciones comunitarias en la esfera de la valoración en aduana de manera incorrecta, puede iniciar un procedimiento por incumplimiento contra ese Estado miembro, de conformidad con el artículo 226 del Tratado de la CE. No hay ninguna prueba en absoluto de que este sistema de administración no sea suficiente para garantizar una aplicación uniforme de las normas de valoración comunitarias.

4.294 Merece la pena destacar el hecho de que los Estados Unidos no han planteado nunca ningún problema con respecto a la aplicación de las normas comunitarias sobre valoración en el Comité de Valoración en Aduana de la OMC ni en el Comité Técnico. Además, nunca se ha presentado ninguna reclamación al amparo del ESD contra las CE por una violación del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.

El Informe 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE

4.295 El Tribunal de Cuentas es una institución que, con su actividad de examen y de presentación de informes, contribuye asimismo a la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria. En consecuencia, el Informe 23/2000 es una prueba de la capacidad del sistema de las CE de detectar las dificultades cuando éstas surgen.

4.296 El Informe 23/2000 constituye únicamente la expresión de las opiniones de una institución comunitaria, no compartidas necesariamente por las demás instituciones o por las CE en su conjunto. Además, es evidente que el informe del Tribunal de Cuentas contiene también determinadas apreciaciones políticas y técnicas cuya exactitud no hay que dar necesariamente por sentadas.

4.297 El objetivo del Tribunal de Cuentas es garantizar la percepción y utilización óptimas de los recursos propios de la Comunidad, lo que no guarda ninguna relación con la cuestión de si las CE cumplen o no lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. En consecuencia, no puede suponerse sin más, como parecen hacer los Estados Unidos, que una crítica formulada por el Tribunal de Cuentas en su informe refleje una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.298 El Informe 23/2000 se refiere a una serie de hechos examinados por el Tribunal en 1999-2000. Es sorprendente que en ninguna parte de su Primera comunicación escrita los Estados Unidos se pregunten qué podrían haber hecho las CE en respuesta a las críticas o sugerencias del Tribunal de Cuentas. Como pondrán de manifiesto las CE, las Comunidades han realizado de hecho una labor sistemática en relación con las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas, y en caso necesario han tomado medidas para garantizar la uniformidad. Un claro ejemplo a este respecto es la adopción del Reglamento Nº 44/2002, que aclara actualmente la cuestión de las garantías. En consecuencia, incluso en la medida en que realmente hubiera una cierta falta de uniformidad, no puede darse por supuesto que esa situación sigue existiendo actualmente.

4.299 El informe del Tribunal de Cuentas es un documento enormemente sintético, que refleja los resultados de una serie de auditorías efectuadas a la sazón por el Tribunal. En consecuencia, las conclusiones del informe del Tribunal tienen un cierto grado de generalidad. Esta es otra de las razones por las que no son adecuadas para abordar la cuestión del cumplimiento por las CE de sus obligaciones en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.300 En consecuencia, no debe permitirse que los Estados Unidos se basen en el informe del Tribunal de Cuentas, sino que es preciso exigirles que establezcan una presunción *prima facie*.

En todo caso, el Informe 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE no pone de manifiesto que las CE incumplan en algún sentido sus obligaciones en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

El asunto Reebok

4.301 El único ejemplo concreto que citan los Estados Unidos en apoyo de su alegación de falta de uniformidad en la aplicación de las normas comunitarias de valoración es el asunto relativo a Reebok International Limited (RIL). No obstante, ese asunto no avala la alegación de los Estados Unidos de que las CE no aplican sus normas de valoración de manera uniforme.

4.302 El asunto, que es relativamente complejo, está siendo actualmente examinado por la Comisión. Además, la Comisión sometió la cuestión al Comité del Código Aduanero (Sección del Valor en Aduana), donde se debatió en dos ocasiones, en octubre y diciembre de 2004. Sobre la base de la información facilitada por RIL, el Comité no estableció que hubiera ninguna incompatibilidad con el derecho comunitario ni ninguna falta de uniformidad entre los Estados miembros de las CE.

4.303 De cualquier modo, las CE señalan que en caso de error de las autoridades aduaneras españolas al evaluar las condiciones del apartado 1 e) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación, RIL tiene la posibilidad de recurrir contra esta decisión ante los tribunales españoles competentes, y que ese recurso está actualmente pendiente. Si se plantean cuestiones de derecho comunitario, esas cuestiones pueden someterse al Tribunal de Justicia mediante una solicitud de decisión prejudicial.

4.304 En conjunto, el asunto Reebok no respalda en forma alguna la alegación de los Estados Unidos de que las CE no aplican sus normas de valoración en aduana de manera uniforme. Las instituciones comunitarias han adoptado las medidas necesarias en respuesta a las preocupaciones de Reebok. Además, hay actualmente pendiente un recurso. El Comité del Código Aduanero no puede sustituir a los mecanismos normales de recurso ante los tribunales nacionales.

iii) Transformación bajo control aduanero

4.305 La alegación de los Estados Unidos de que las autoridades del Reino Unido aplican pruebas que sobrepasan los requisitos del derecho comunitario con respecto a la transformación bajo control aduanero es errónea. Los requisitos del Reino Unido son exactamente los establecidos por la letra e) del artículo 133 del CAC.

4.306 El apartado 3 del artículo 502 del Reglamento de Aplicación repite la primera parte de la frase en lo que hay que considerar que constituye una referencia abreviada a los requisitos establecidos en la letra e) del artículo 133 del CAC. No podía ser de otro modo habida cuenta de que este Reglamento, adoptado por la Comisión, es un reglamento de aplicación y no puede modificar los requisitos establecidos por el CAC.

4.307 En realidad, ambos instrumentos, el CAC y las directrices del Reino Unido, exigen las mismas dos condiciones (entre otras) para conceder una autorización para la transformación bajo control aduanero, a las que se califica de condiciones "económicas". Además, merece la pena señalar que, en contra de lo que afirman los Estados Unidos, el "Bulletin officiel des douanes" francés se refiere también a la prueba relativa a la inexistencia de perjuicio para los competidores en las CE. La alegación formulada por los Estados Unidos en relación con el párrafo 3 a) del artículo X carece de fundamento lo que respecta a la transformación bajo control aduanero.

iv) Procedimiento de domiciliación

4.308 La exposición de los Estados Unidos es deficiente por cuanto no distingue entre las tres etapas de la declaración sumaria, la declaración del procedimiento de domiciliación y la declaración complementaria. Todas las mercancías introducidas en el territorio aduanero de las CE han de

presentarse en aduana y la declaración sumaria es el acto mediante el que se formaliza esa presentación. En consecuencia, la presentación de la declaración sumaria no es un trámite que forme parte del procedimiento de domiciliación. Además, en contra de lo que alegan los Estados Unidos, todas esas declaraciones pueden presentarse por medios impresos o mediante un procedimiento electrónico.

4.309 Debido a esta confusión entre las obligaciones generales que derivan del cruce de la frontera y las obligaciones vinculadas al procedimiento de domiciliación, la descripción que se hace en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos de la situación en el Reino Unido no es exacta ni se corresponde con la situación real en ese Estado miembro.

4.310 En relación con la intervención de la aduana antes del despacho, el hecho de que, en la frontera, las verificaciones de admisibilidad y para luchar contra el contrabando se realicen electrónicamente no significa que no haya una intervención de la aduana. Además, en caso de que las mercancías no sean objeto de esas verificaciones, habrá un acto de la aduana (verificación física, decomiso, …). En consecuencia, es erróneo afirmar que en el Reino Unido no hay intervención de la aduana antes del despacho.

4.311 En relación con los requisitos posteriores al despacho, los Estados Unidos hacen una descripción engañosa de la utilización de los sistemas electrónicos de despacho frente a los sistemas basados en documentación impresa. Uno y otro sistema pueden utilizarse en todos los Estados miembros. En lo que respecta al procedimiento de domiciliación, en los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación figuran normas comunitarias detalladas para el despacho basado en documentación impresa. Cuando el sistema de despacho utilizado es electrónico, son aplicables normas adicionales que se recogen en los artículos 4 *bis* a 4 *quater* y en los artículos 222 a 224 de ese mismo Reglamento.

4.312 En lo que respecta a los documentos justificantes requeridos, todos los Estados miembros de las CE aplican normas idénticas. La cuestión planteada por los Estados Unidos relativa al formulario de valoración "DV1" tiene también origen en una confusión, puesto que todos los Estados miembros permiten a los operadores que mantienen intercambios comerciales regulares con los mismos proveedores que presenten una sola vez el DV1 pertinente junto con la solicitud inicial para beneficiarse del procedimiento de domiciliación.

4.313 En relación con los requisitos relativos a la conservación de documentos, la información que facilitan los Estados Unidos sobre los Países Bajos es errónea. Además, según el artículo 16 del CAC los documentos requeridos se conservarán durante un período mínimo de tres años, pero los Estados miembros podrán establecer períodos más largos teniendo en cuenta sus necesidades y prácticas administrativas y fiscales de carácter general. Las diferencias resultantes entre los Estados miembros de las CE en cuanto a los plazos de las que presentan pruebas los Estados Unidos no son esenciales. Además, las CE han explicado ya antes que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras y no a las propias leyes aduaneras y que esa disposición no impone la obligación de armonizar la legislación dentro de un Miembro de la OMC.

4.314 Además, a la luz de lo declarado en el informe del Grupo Especial del GATT que examinó el asunto *CEE - Manzanas de mesa*, las CE consideran que esas diferencias no tienen carácter sustancial y no suponen una falta de uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras contraria a lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

v) Sanciones por infracciones del derecho aduanero

4.315 La alegación de los Estados Unidos de que las CE violan las obligaciones que le incumben a tenor del párrafo 3 a) del artículo X del GATT al no proceder a una aplicación uniforme de las sanciones por violaciones del derecho aduanero debe rechazarse por tres razones. En primer lugar, el

párrafo 3 a) del artículo X del GATT no abarca las disposiciones que establecen sanciones. En segundo lugar, ese párrafo no exige la armonización de las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones. En tercer lugar, el derecho comunitario garantiza un grado suficiente de uniformidad de las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones.

4.316 La obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT concierne únicamente a la aplicación de las normas a las que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo X del GATT. A este respecto, es necesario distinguir entre las leyes aduaneras mismas y las disposiciones que establecen la naturaleza y alcance de la sanción aplicable por la violación de esas leyes, y ello con independencia de que la sanción sea penal o administrativa o de que implique una multa, una pena privativa de libertad o una sanción de otro tipo. En consecuencia, las disposiciones sancionadoras, que establecen una sanción en el caso de violación de una disposición de las leyes aduaneras, no son ellas mismas leyes aduaneras. Hay que señalar también que la imposición de sanciones atañe al comportamiento ilegal, es decir, a medidas ilegítimas y no al comercio lícito, que son el objeto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.317 Además, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere únicamente a la aplicación de las leyes aduaneras y no al contenido de las propias leyes aduaneras, lo que significa, en particular, que no establece una obligación de armonizar las leyes que puedan existir dentro de un Miembro de la OMC a nivel subfederal, sino que únicamente exige que esas leyes se apliquen de manera uniforme dentro del territorio en el que son aplicables.

4.318 Las sanciones aplicables en caso de violación de las leyes aduaneras se establecen en las leyes nacionales de los Estados miembros, las cuales deben respetar, desde luego, los principios establecidos por el derecho comunitario. En consecuencia, no es la aplicación de las disposiciones que establecen sanciones lo que varía dentro de las CE, sino que son las propias leyes las que son diferentes, aunque dentro de los límites establecidos por el derecho comunitario.

4.319 Los Estados Unidos no han demostrado que la aplicación de esas disposiciones que establecen sanciones varíe dentro de los Estados miembros que las han adoptado, sino que lo que solicitan en realidad es una armonización de las disposiciones que establecen sanciones en las CE. El párrafo 3 a) del artículo X no constituye una base jurídica para formular esa alegación.

4.320 El Tribunal Europeo de Justicia ha elaborado directrices claras con respecto a las disposiciones que establecen sanciones por infracciones de la normativa aduanera comunitaria, las cuales deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Esos principios han sido confirmados también por el Consejo de la Unión Europea.

4.321 En contra de lo que se indica en la comunicación de los Estados Unidos, en el asunto *Andrade* el Tribunal confirmó que los Estados miembros no pueden actuar de forma absolutamente discrecional al establecer disposiciones que establecen sanciones, sino que deben velar porque las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Dicho de otra forma, los Estados miembros están limitados en dos sentidos. No pueden establecer sanciones que sean excesivamente graves y violen en consecuencia el principio de proporcionalidad, ni tampoco establecer sanciones leves que carezcan de efecto disuasorio y no garanticen por ello la aplicación efectiva del derecho comunitario.

4.322 Esos principios fundamentales bastan para garantizar la uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras, como confirma también el párrafo 3 del artículo VIII del GATT, que se ocupa específicamente de la cuestión de las sanciones por infracciones de los reglamentos aduaneros, y se limita a establecer normas mínimas de proporcionalidad.

4. La alegación formulada por los Estados Unidos en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT

a) Las prescripciones del párrafo 3 b) del artículo X del GATT

4.323 El párrafo 3 b) del artículo X del GATT obliga a los Miembros de la OMC a mantener o instituir tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados principalmente a la pronta revisión y rectificación de las decisiones administrativas relativas a cuestiones aduaneras. Así pues, en la disposición se establecen cuatro condiciones: el ámbito sustantivo del control (decisiones administrativas de cuestiones aduaneras), la naturaleza (tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos), su finalidad (revisión y rectificación) y un requisito temporal (prontitud).

4.324 En relación con la naturaleza del control, la disposición deja un cierto margen de discrecionalidad a los Miembros de la OMC. El control puede consistir no sólo en tribunales, sino también en procedimientos, lo que implica que no hay obligación de establecer un órgano independiente que garantice el control. Además, la naturaleza del control puede ser arbitral o administrativa y no judicial. Pero lo que es especialmente importante en el asunto que nos ocupa es que el párrafo 3 b) del artículo X se refiere en plural a cada uno de esos controles: los Miembros de la OMC están obligados a mantener "tribunales o procedimientos", no "un tribunal" o "un procedimiento". Las versiones francesa e inglesa de la disposición utilizan también los términos equivalentes en plural. Es evidente que ello permite a los Miembros de la OMC mantener varios tribunales, cada uno de ellos en una parte de su geografía, con competencia para revisar las decisiones administrativas adoptadas por las oficinas de aduanas correspondientes.

4.325 Por último, la interpretación dada al artículo X del GATT por el Órgano de Apelación en los asuntos *CE - Productos avícolas* y *CE - Banano III* apoya también la idea de que esta disposición no impone una estructura específica para el sistema de revisión (un tipo concreto de tribunales o procedimientos, un determinado número de instancias, un grado determinado de centralización del sistema de revisión, …).

4.326 Las CE pueden también utilizar para cumplir su obligación en virtud del párrafo 3 b) del artículo X los tribunales de los Estados miembros, como reconoció ya el Grupo Especial que examinó el asunto *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Estados Unidos)*. El razonamiento de este Grupo Especial es aplicable, no sólo a las autoridades del poder ejecutivo, sino también a los órganos judiciales del Estado miembro cuando éstos aplican e interpretan el derecho comunitario.

4.327 En lo que se refiere al requisito temporal, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT exige una "pronta revisión y rectificación" (sin subrayar en el original). Aunque las versiones en los tres idiomas del párrafo 3 b) del artículo X no utilizan exactamente los mismos términos, un denominador común de todas ellas es que el plazo para revisar una decisión aduanera ha de ser razonablemente breve. Una mayor precisión en relación con esta cuestión requiere sin duda un análisis caso por caso.

4.328 Las CE no admiten el argumento de los Estados Unidos de que el contexto pertinente para la interpretación del párrafo 3 b) del artículo X del GATT incluye el apartado inmediatamente anterior que figura en el párrafo en el que aparece la obligación de que se trata y de que, en consecuencia, las decisiones de los tribunales o procedimientos deben proporcionar la revisión y la rectificación de las decisiones en cuestiones aduaneras para las CE en su conjunto y no sólo dentro de regiones geográficas limitadas de las CE. Los apartados a) y b) establecen obligaciones diferentes, una relativa a la aplicación uniforme y la otra relativa a los recursos. Desde el punto de vista jurídico, el párrafo 3 del artículo X del GATT no establece ninguna relación entre ambos apartados, que en consecuencia debe considerarse que establecen obligaciones distintas.

b) Las CE proporcionan una pronta revisión de las decisiones aduaneras

i) La alegación relativa a la inexistencia de un tribunal aduanero comunitario

4.329 Los Estados Unidos afirman que las CE "no mantienen un tribunal … comunitario ante el que pueda recurrirse prontamente contra una decisión aduanera de un Estado miembro". Esta afirmación es claramente errónea. El párrafo 3 b) del artículo X del GATT no exige un tribunal o un procedimiento central para recurrir contra las decisiones administrativas en cuestiones aduaneras. En virtud del GATT los Miembros de la OMC no están obligados a establecer un tribunal similar al Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Las decisiones de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, que se basan en el derecho comunitario, son revisadas por los órganos judiciales nacionales, que actúan como órganos judiciales ordinarios con respecto al derecho comunitario. Las decisiones aduaneras adoptadas por las instituciones comunitarias son revisadas por el Tribunal de Justicia (y en algunos casos, por el Tribunal de Primera Instancia) mediante recursos directos o decisiones prejudiciales sobre la validez. En consecuencia, hay en vigor un sistema completo de protección judicial.

4.330 Además, el análisis que hacen los Estados Unidos del sistema de revisión establecido por las CE y sus Estados miembros se apoya en una interpretación errónea del párrafo 3 b) del artículo X, basada en la existencia de una relación entre ese precepto y el párrafo 3 a) de ese mismo artículo. No obstante, esa relación no existe. Y aun suponiendo, a efectos de argumentación, que hubiera una relación entre esas dos disposiciones, el análisis de los Estados Unidos sería parcial y sesgado, porque no tiene en cuenta los mecanismos comunitarios para garantizar la aplicación uniforme en el sector aduanero.

4.331 La decisión en el asunto *Bantex* a que hacen referencia los Estados Unidos pone de manifiesto el análisis artificial que hace ese país. En ausencia de un problema real en el sistema de recursos de las CE, los Estados Unidos se basan en un caso individual y tratan de transformarlo en un problema sistémico basándose en dos hipótesis ("si las autoridades de otro Estado miembro hubieran clasificado correctamente los productos de *Bantex*" y "si un comerciante que se encontrara en la posición de *Bantex* invocara la IAV del Reino Unido en el territorio de otro Estado miembro"). Ninguna de esas dos situaciones se ha producido en el asunto *Bantex* y, en consecuencia, los argumentos de los Estados Unidos deben rechazarse por no basarse en hechos reales.

4.332 Por el contrario, el resultado final del asunto *Bantex* pone de manifiesto que los recursos jurídicos de las CE garantizan la aplicación uniforme en cuestiones aduaneras. A raíz del fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales decidió el 23 de marzo de 2004 revocar la IAV sobre la base del apartado 5 a) iii) del artículo 12 y el artículo 9 del CAC y a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Timmermans*. Este asunto pone de manifiesto que autoridades nacionales distintas de las que intervienen directamente en el caso concreto de que se trata tienen en cuenta las decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia y demuestra además que la sentencia del asunto *Timmermans* contribuye de hecho a la aplicación uniforme del derecho comunitario.

4.333 Los Estados Unidos interpretan erróneamente el sistema de las CE cuando alegan que "en el vértice de la estructura de revisión de la aplicación por las autoridades aduaneras de la normativa aduanera comunitaria está el Tribunal de Justicia", lo que no es cierto. El Tribunal Europeo de Justicia no revisa las decisiones de las administraciones nacionales de aduanas. En cambio, como ya hemos explicado repetidamente, ayuda a los tribunales nacionales a realizar esa revisión mediante el procedimiento de las decisiones prejudiciales. Ese procedimiento se basa en una relación de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales, y no en una relación jerárquica.

ii) Prontitud de la revisión

4.334 La Primera comunicación escrita de los Estados Unidos no expone argumentos sobre las razones por las que el recurso contra las decisiones aduaneras ante los tribunales nacionales de los Estados miembros de las CE no puede calificarse de "pronto". Lo único que argumentan los Estados Unidos es que "los plazos fijados para los exámenes en primera instancia a cargo de las autoridades aduaneras de los Estados miembros pueden variar mucho", a cuyo fin comparan el plazo para las revisiones administrativas en tres Estados miembros. En la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos se alude a otras tres posibles divergencias entre Estados miembros, pero los Estados Unidos no desarrollan esas alegaciones en su argumentación ni facilitan ejemplos concretos representativos en los Estados miembros mencionados.

4.335 Las CE recuerdan, ante todo, que corresponde a los Estados Unidos, en su calidad de reclamante, la carga de establecer una presunción *prima facie* en apoyo de su posición y que, en consecuencia, no es posible desplazar esa carga a las CE, que son la parte demandada, utilizando la táctica de formular afirmaciones generales y no fundamentadas.

4.336 En relación con los plazos para las revisiones administrativas realizadas en primera instancia por las autoridades aduaneras de los Estados miembros, la única alegación de los Estados Unidos consiste en que varían mucho en los tres Estados miembros a que se ha hecho antes referencia. Tampoco a este respecto exponen los Estados Unidos las razones para llegar a la conclusión de que los tres plazos no cumplen el requisito de una revisión "pronta" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT. Las diferencias en cuanto a los plazos no son contrarias a esa disposición, que no impone en el marco de la OMC la obligación de armonizar los plazos de las revisiones administrativas, judiciales o arbitrales de las decisiones administrativas en la esfera aduanera. Una interpretación distinta sería contraria a la propia naturaleza del artículo X del GATT, que, como se enuncia en su encabezamiento, es una disposición sobre la publicación y aplicación de los reglamentos comerciales, y no sobre su contenido.

C. PRIMERA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

4.337 En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos han demostrado que las Comunidades Europeas no aplican sus leyes aduaneras de la manera uniforme que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Los Estados Unidos han demostrado también que las CE no proporcionan los tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras que exige el párrafo 3 b) de ese artículo.

4.338 En parte, las CE han respondido a las alegaciones de los Estados Unidos modificando incorrectamente su sentido para darles el carácter de ataques generales al federalismo europeo o de reclamaciones limitadas acerca de los resultados concretos de determinados asuntos. En la medida en que las CE se han enfrentado directamente a los argumentos de los Estados Unidos, sus respuestas pueden clasificarse dentro de los cinco grupos siguientes: 1) el párrafo 3 a) del artículo X es una disposición de alcance limitado que establece obligaciones "mínimas"; 2) no se producen divergencias importantes en la aplicación por los Estados miembros de las leyes aduaneras o, cuando se producen divergencias, éstas son conciliadas sistemáticamente; 3) diversos principios, instrumentos e instituciones comunitarias garantizan la aplicación uniforme que exige el párrafo 3 a) del artículo X; 4) en los casos en que hay que admitir que existen ciertas diferencias importantes entre las prácticas de los Estados miembros, esas diferencias no conciernen en absoluto a la aplicación del derecho aduanero, sino a cuestiones del derecho administrativo general de los Estados miembros y 5) con respecto al párrafo 3 b) del artículo X, las CE cumplen su obligación, puesto que en cada Estado miembro hay un foro independiente para la revisión de las decisiones administrativas aduaneras.

4.339 Las alegaciones de los Estados Unidos son claras. Ambas parten del hecho de que las obligaciones establecidas en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X vinculan a las CE como Miembro de la OMC de pleno derecho, es decir como entidad distinta de los Estados miembros que las constituyen. En lo que respecta al párrafo 3 a) del artículo X, las CE prevén la aplicación de su derecho aduanero por cada uno de los 25 Estados miembros integrantes sin garantizar que los Estados miembros apliquen de manera uniforme ese derecho. No puede negarse que se producen divergencias entre los Estados miembros. Las propias CE lo admiten en su comunicación escrita. Se trata de un hecho que, al margen del contexto de la presente diferencia, ha sido reconocido por funcionarios de las CE y que ha dado lugar a quejas continuas de los comerciantes. Lo que los Estados Unidos alegan es que no hay ninguna institución comunitaria que proceda sistemáticamente a la conciliación de esas divergencias, para lograr la aplicación uniforme exigida por el párrafo 3 a) del artículo X.

4.340 Lo que los Estados Unidos alegan al amparo del párrafo 3 b) del artículo X es que las CE no establecen ningún foro para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas de las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Aunque las leyes de los diversos Estados miembros prevén la revisión, esa revisión no da cumplimiento a la obligación que incumbe a las CE en virtud del párrafo 3 b) del artículo X. La fragmentación de la revisión, que se realiza Estado miembro por Estado miembro, no es compatible con el párrafo 3 b) del artículo X. La obligación establecida en ese párrafo debe interpretarse teniendo en cuenta su contexto, que incluye el párrafo 3 a) del artículo X.

4.341 Las cuestiones que plantean esas alegaciones no son nuevas. En contra de lo que sugieren las CE, la presente diferencia no constituye la primera ocasión en la que los Estados Unidos han planteado esas cuestiones a las CE. De hecho, los Estados Unidos vienen planteándolas regularmente desde 1997 en el marco de los exámenes de la política comercial de las CE. Los Estados Unidos han planteado también esas cuestiones en otros marcos bilaterales y dentro de la OMC y han optado por formular sus alegaciones en el procedimiento de solución de diferencias precisamente porque los problemas subyacentes siguen existiendo a pesar de sus esfuerzos por abordarlos en otros foros.

4.342 Es importante aclarar lo que *no* es objeto de la presente diferencia. Los Estados Unidos no sostienen en su reclamación que la decisión de reservar la competencia en relación con la administración aduanera a las autoridades de los Estados miembros sea *per se* incompatible con la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X. Lo que alegan los Estados Unidos es que debido a que no va unido a la conciliación sistemática de las divergencias entre las autoridades de los Estados miembros, el mantenimiento de la competencia en materia de administración aduanera en manos de esas autoridades es incompatible con la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X. Las CE no están sujetas a una obligación de aplicación uniforme menos estricta que otro Miembro cualquiera de la OMC por la simple razón de que su estructura se base en un "federalismo ejecutivo".

4.343 La presente diferencia, al igual que no se refiere al derecho de las CE a adoptar el federalismo ejecutivo como sistema de gobierno, no se refiere tampoco a las decisiones concretas de autoridades de diversos Estados miembros en determinados casos. En su Primera comunicación, los Estados Unidos han ofrecido varios ejemplos para poner de manifiesto la falta de uniformidad en la aplicación del derecho aduanero en las CE. En su Primera comunicación, las CE tratan esos ejemplos, no como tales, si no como si fueran el objeto real de la presente diferencia. Lo que argumentan los Estados Unidos no es que una mercancía determinada deba clasificarse o valorarse de una u otra forma, sino que el sistema de aplicación del derecho aduanero en las CE no garantiza la uniformidad que exige el párrafo 3 a) del artículo X.

4.344 En su Primera comunicación, los Estados Unidos han identificado la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X y han explicado el alcance de esa obligación aplicando las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados del derecho internacional público. En particular, los Estados Unidos han analizado el sentido corriente de los términos dispositivos del párrafo 3 a) del artículo X en su contexto y habida cuenta del objeto y fin del GATT de 1994.

Aplicando esta regla, los Estados Unidos han identificado la cuestión pertinente como la cuestión de si las CE gestionan, dan aplicación o ejecutan su derecho aduanero de la misma manera en diferentes lugares o circunstancias, o en momentos diferentes. Los Estados Unidos han analizado también el informe del Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, que confirmó esta interpretación del concepto de aplicación uniforme.

4.345 En su Primera comunicación, las CE eluden completamente el sentido corriente de los términos dispositivos del párrafo 3 a) del artículo X. De forma reveladora, la exposición que hacen las CE bajo el epígrafe "El sentido de 'aplicación uniforme'" no analiza en realidad el sentido de esa expresión, sino las supuestas limitaciones de la obligación de aplicación uniforme. Así, las CE afirman que la obligación de aplicación uniforme debe matizarse teniendo en cuenta las "circunstancias prácticas", que "es inevitable de hecho un grado mínimo de falta de uniformidad" y que "… la uniformidad sólo puede evaluarse en función de una pauta global de la administración aduanera".

4.346 La explicación que dan las CE a la expresión "aplicación uniforme" no sólo está en contradicción con el sentido corriente de esas palabras, sino que las limitaciones que las CE postulan privarían de hecho de sentido a la obligación de aplicación uniforme. Por ejemplo, las CE señalan que hay una limitación en función de las "circunstancias prácticas", pero no indican ningún criterio conforme al cual pueda evaluarse esa limitación. De forma análoga, cuando afirman que "es inevitable de hecho un grado mínimo de falta de uniformidad", no proponen ningún criterio para apreciar el grado de falta de uniformidad que puede existir sin que entre en contradicción con el párrafo 3 a) del artículo X.

4.347 Además, la tesis de las CE de que la falta de uniformidad sólo es inadmisible cuando entraña una pauta de falta de uniformidad está enteramente fuera de lugar. Las CE deducen esa tesis de dos informes que no vienen en absoluto al caso. En primer lugar, pretenden basarse en el informe del Órgano de Apelación en el asunto *CE - Productos avícolas*. No obstante, la cuestión pertinente en ese asunto no era el sentido de "aplicación uniforme" sino si el artículo X es aplicable en absoluto a una determinada licencia de importación expedida con respecto a un envío determinado.

4.348 De forma análoga, en el informe del Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* en el que se basan las CE, el Grupo Especial no se ocupó de la cuestión del sentido de "aplicación uniforme". Como se desprende claramente de la frase inmediatamente precedente a la cita en la que se basan las CE, la cuestión pertinente era "[si] la medida antidumping definitiva que [el Grupo Especial] [había] de examinar en [esa] diferencia [podía] ser considerada una medida de 'general aplicación'".

4.349 Más importante aún es el hecho de que ninguno de los informes en los que las CE tratan de apoyarse se referían a la cuestión que plantea la presente diferencia, que es la falta de uniformidad geográfica en la aplicación de las leyes aduaneras de un Miembro. Con independencia de la pertinencia que pueda tener en otros contextos la demostración de una pauta de falta de uniformidad, las CE no han demostrado que sea pertinente para establecer la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X basada en la falta de uniformidad geográfica.

4.350 Los demás argumentos de las CE que tratan de limitar el alcance de la obligación de aplicación uniforme adolecen de vicios análogos. Por ejemplo, las CE afirman que la distinción entre el contenido de las leyes aduaneras y su aplicación reviste "suma importancia para el presente caso". Para atribuir tal importancia a esa distinción, las CE parecen basarse en que las diferencias entre las leyes de los Estados miembros -por ejemplo en la esfera de las sanciones- excederían del ámbito del párrafo 3 a) del artículo X, por cuanto se trata de diferencias sustantivas y no de diferencias de aplicación.

4.351 El problema que entraña este argumento es que prescinde de las diferentes formas que puede tener la aplicación. El argumento da por supuesto que las leyes no pueden ser instrumentos para aplicar otras medidas. Pero esa suposición es totalmente errónea. Las leyes aduaneras pueden ser aplicadas mediante instrumentos que son a su vez leyes. Tal es el caso de las leyes que establecen sanciones, que son instrumentos para aplicar las leyes aduaneras haciéndolas respetar. En la medida en que diversos Estados miembros aplican diversas medidas que establecen sanciones para hacer respetar las normas aduaneras de las CE, aplican de manera no uniforme las leyes aduaneras comunitarias.

4.352 El informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros* avala esta última observación. En esa diferencia, las CE impugnaron, por ser incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X, una medida de la Argentina que imponía la presencia de particulares durante el despacho de aduana para la exportación de determinadas mercancías. La defensa de la Argentina se basó en parte en que en realidad las CE formulaban una reclamación acerca del contenido sustantivo de una medida y no de su aplicación. Al rechazar el argumento de la Argentina, el Grupo Especial constató lo siguiente: "Desde luego, un Miembro de la OMC puede impugnar el contenido sustantivo de una medida al amparo del artículo X. La cuestión pertinente es si el contenido de esa medida es de naturaleza administrativa o implica cuestiones sustantivas reguladas más adecuadamente en otras disposiciones del GATT de 1994 …. Si aun en el caso de que una norma es de naturaleza administrativa, no pudiera impugnarse su contenido sustantivo, no se ve claramente qué podría impugnarse al amparo del artículo X …"

4.353 De forma análoga, en la presente diferencia la línea divisoria que trazan las CE entre contenido sustantivo y aplicación privaría de sentido al párrafo 3 a) del artículo X. Al calificar a todas las leyes, reglamentos y normas relativos a las cuestiones aduaneras de medidas sustantivas, las CE situarían todas las leyes, reglamentos y normas que son instrumentos de la administración aduanera fuera del alcance de las disciplinas que los Miembros han convenido en el párrafo 3 del artículo X. La sugerencia de que esa caracterización basta para eliminar una obligación en el marco de la GATT va en contra de toda lógica.

4.354 La segunda línea de argumentación de las CE consiste en la impugnación de la tesis de que en la aplicación del derecho aduanero surgen divergencias entre las autoridades de los Estados miembros y las CE no concilian sistemáticamente esas divergencias. En nuestra Primera comunicación hemos demostrado ese hecho con pruebas de manifestaciones de las CE en las que se reconoce y de declaraciones de comerciantes, así como con ejemplos de casos concretos en los que se han producido divergencias. Las CE, en su respuesta, no refutan esas pruebas.

4.355 Con respecto a los hechos reconocidos por las CE o por funcionarios de las CE, las CE no niegan que esas declaraciones se hayan producido. A lo sumo, se limitan a minimizarlas. Por ejemplo, las CE rechazan de forma sumaria una declaración del Comisario de las CE para Fiscalidad y Unión Aduanera en la que reconocía que el Código Aduanero Comunitario puede dar lugar a la aplicación divergente de las normas comunes como una declaración que refleja "el proceso en curso de reforma y revisión de la normativa aduanera comunitaria". De forma análoga se dejan de lado las declaraciones del Tribunal de Cuentas de las CE que identifican problemas sistémicos en la conciliación de la aplicación divergente de las normas de valoración en aduana como "la expresión de las opiniones de una institución comunitaria". Los hechos admitidos por las CE en el marco de otra diferencia reciente (*Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados*) en relación con las dificultades institucionales para supervisar las divergencias en la información arancelaria vinculante emitida por diferentes Estados miembros no se reconocen en absoluto.

4.356 A diferencia de las CE, los Estados Unidos consideran sumamente pertinentes a la cuestión que nos ocupa las declaraciones de instituciones y funcionarios de las CE. Esas declaraciones constituyen una admisión rotunda de la forma en que funciona el sistema de aplicación del derecho

aduanero hecha por personas que están en condiciones de contar con la información y experiencia necesarias para saberlo. No puede negarse que el mensaje general que subyace a las mismas es que hay un problema de divergencias en la aplicación y que no existe ningún mecanismo para conciliar sistemáticamente esas divergencias.

4.357 El trato que dan las CE a los ejemplos ilustrativos citados por los Estados Unidos tampoco contribuye más eficazmente a refutar este extremo. Por ejemplo, en su Primera comunicación, los Estados Unidos citaron como ejemplo las divergencias en la clasificación de los monitores LCD. Señalaron que un reglamento del Consejo de la Unión Europea suspendió los derechos sobre un subconjunto de esos monitores, pero los Estados miembros siguieran aplicando clasificaciones diferentes a otros monitores de ese tipo. En particular, los Estados Unidos indicaron que los Países Bajos seguían clasificando los monitores con una medida diagonal de más de 19 pulgadas como videomonitores, en tanto que otros Estados miembros los clasificaban como monitores de ordenadores. Las CE han respondido lacónicamente que la clasificación de las autoridades de los Países Bajos "está en conformidad con la NC, como confirmó el Comité del Código Aduanero".

4.358 Esa respuesta resulta bastante reveladora por tres razones al menos. En primer lugar, no niega la existencia de divergencias entre las autoridades de los Estados miembros a este respecto. En segundo lugar y en conexión con lo anterior, al manifestar que la clasificación de los Países Bajos "está en conformidad" con la NC, las CE sugieren que puede haber más de una clasificación que "se ajuste" a la NC. Pero éste es precisamente el sentido del ejemplo: cuando hay varias clasificaciones que "están en conformidad" con la NC, las CE no establecen un mecanismo para conciliar sistemáticamente las diferentes clasificaciones adoptadas por las autoridades de los diferentes Estados miembros. En tercer lugar, la conclusión del Comité del Código Aduanero con la que se supone que "está en conformidad" la clasificación de los Países Bajos no se ajusta a su vez a la nota de capítulo pertinente del Arancel Aduanero Común. En concreto, según la conclusión del Comité, sólo podría clasificarse un monitor como monitor de ordenador (dentro de la partida 8471 del Arancel) si el importador puede demostrar que se destina <u>únicamente</u> a su utilización con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, es decir con un ordenador. En cambio, con arreglo a las notas de capítulo pertinentes del Arancel, puede clasificarse como monitor de ordenador si es "del tipo utilizado exclusiva <u>o principalmente</u> en un sistema automático par el tratamiento o procesamiento de datos". La necesidad de conciliar notas del Arancel Aduanero Común que dicen una cosa con una conclusión del Comité del Código Aduanero que dice otra enteramente distinta no favorece precisamente la aplicación uniforme por parte de las autoridades de los Estados miembros.

4.359 Para referirse a otro ejemplo, en su Primera comunicación los Estados Unidos describían el ejemplo ilustrativo de la diferente aplicación de las normas de valoración en aduana de las CE con respecto a Reebok International Limited. Los Estados Unidos exponían una situación en la que las autoridades de diferentes Estados miembros habían llegado a conclusiones diferentes acerca de si los contratos de RIL con proveedores no comunitarios ponían de manifiesto una relación de control a efectos de valoración en aduana, y las instituciones comunitarias no habían conciliado la diferencia. Las CE despachan el caso diciendo que se trata de un asunto "relativamente complejo" y manifiestan, sin más explicación, que, tras examinar la cuestión, el Comité del Código Aduanero "no estableció que hubiera ninguna incompatibilidad con el derecho comunitario ni ninguna falta de uniformidad entre los Estados miembros de las CE". A continuación, las CE añaden que "el Comité del Código Aduanero no puede sustituir a los mecanismos normales de recurso ante los tribunales nacionales".

4.360 Esta respuesta merece destacarse al menos por dos razones. En primer lugar, las CE no niegan los hechos esenciales descritos en la Primera comunicación de los Estados Unidos. Se limitan a hablar de su "complejidad" y a declarar que el Comité del Código Aduanero no constató una falta de uniformidad. En segundo lugar, al subrayar que "el Comité del Código Aduanero no puede sustituir a los mecanismos normales de recurso ante los tribunales nacionales", las CE refuerzan de hecho la línea fundamental del argumento de los Estados Unidos: no hay ningún mecanismo comunitario que

garantice la aplicación uniforme. En cualquier caso, en muchas otras partes de su Primera comunicación, las CE reconocen sin reparos la existencia de divergencias entre los Estados miembros.

4.361 La tercera línea de argumentación de las CE consiste en impugnar la tesis de que no hay ningún mecanismo comunitario que garantice la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria. En su Primera comunicación, los Estados Unidos han demostrado que la normativa aduanera de las CE es aplicada por las autoridades de 25 Estados miembros distintos, lo que da lugar a divergencias de aplicación, y que no hay ninguna institución comunitaria que concilie sistemáticamente esas divergencias. Para demostrar este último extremo, los Estados Unidos se centraron en la función de la Comisión y del Tribunal de Justicia en las cuestiones de administración aduanera, y ello porque las CE habían afirmado ante el OSD que la aplicación uniforme se lleva a cabo mediante el funcionamiento de esas dos instituciones. Los Estados Unidos pusieron de manifiesto que ninguna de esas instituciones funciona de una manera que dé lugar a una aplicación uniforme. Su análisis de la función de la Comisión condujo lógicamente a los Estados Unidos a centrarse en el Comité del Código Aduanero, el cual, como reconocen las CE, "es un elemento integrante del proceso de reglamentación de la Comunidad".

4.362 Debido a que el Comité es un elemento de ese proceso, es importante entender cómo funciona. Los Estados Unidos han demostrado que diversos aspectos del funcionamiento del Comité lo hacen poco eficaz como mecanismo destinado a aportar sistemáticamente uniformidad a la aplicación del derecho aduanero. Entre esos aspectos figuran la inexistencia de un derecho del comerciante afectado por la aplicación del derecho por parte de un Estado miembro a formular peticiones al Comité y la dificultad de obtener respuesta a las cuestiones técnicas de divergencia en la administración aduanera de los Estados miembros cuando esa respuesta exige el apoyo de una mayoría cualificada de los representantes de 25 Estados miembros.

4.363 Con respecto al Tribunal de Justicia, los Estados Unidos han demostrado que las limitaciones de la posibilidad de que el Tribunal examine las cuestiones, los obstáculos procesales que deben superarse para ello y el tiempo que se requiere para que el Tribunal de Justicia dé respuesta a las cuestiones hacen que esta institución sea también un mecanismo ineficaz para aportar sistemáticamente uniformidad a la aplicación del derecho aduanero.

4.364 Las CE impugnan la forma en que los Estados Unidos interpretan el funcionamiento del derecho y de las instituciones comunitarios y sostienen que, al tratar de identificar los mecanismos comunitarios que garantizan la uniformidad de la aplicación, los Estados Unidos se han centrado de forma inadecuada en el Comité del Código Aduanero y han prestado una atención insuficiente tanto a principios del derecho comunitario como a instituciones e instrumentos de aplicación comunitarios. El principal problema que suscita este argumento es que un examen más atento permite apreciar que los diversos elementos que según las CE contribuyen a la aplicación uniforme no llegan a constituir un mecanismo que lleve sistemáticamente a una aplicación uniforme cuando la aplicación incumbe en primera instancia a las autoridades de 25 Estados miembros distintos.

4.365 Por ejemplo, las CE hacen referencia a la existencia de leyes sustantivas detalladas. Pero no cabe duda de que las leyes sustantivas por sí solas no garantizan una aplicación uniforme. De hecho, las propias CE subrayan la distinción entre contenido sustantivo y aplicación. Además, la relación de los casos de aplicación divergente en el informe sobre valoración en aduana del Tribunal de Cuentas de las CE (Estados Unidos - Prueba documental 14) demuestra que las leyes detalladas no pueden por sí solas sustituir a la aplicación uniforme.

4.366 En otros casos, los mecanismos que identifican las CE constituyen un ideal de aplicación uniforme al que aspiran las CE. Por ejemplo, las CE se refieren al "deber de cooperación" del artículo 10 del Tratado de la CE. También atribuyen importancia a los principios de primacía y de eficacia directa, a los que califican de "esenciales para la aplicación efectiva y uniforme del derecho comunitario". No obstante, no puede darse por sentado que la uniformidad de la aplicación se logre

necesariamente gracias al deber de cooperación o a las doctrinas de la primacía y la eficacia directa. En realidad, esos principios no dan respuesta a la cuestión de qué ocurre cuando hay varias maneras posibles de aplicar el propio derecho comunitario.

4.367 Otro instrumento para lograr la aplicación uniforme que describen las CE es la posibilidad de que los comerciantes planteen las cuestiones que les preocupan a la Comisión o a los representantes del Estado miembro, los cuales a su vez pueden o no plantearlas al Comité del Código Aduanero. Como las propias CE reconocen, la Comisión y los representantes del Estado miembro no están obligados a someter una determinada cuestión al Comité.

4.368 Las CE subrayan también la función que cumplen los recursos ante los tribunales nacionales, con la posibilidad de reenvíos al Tribunal de Justicia, como medio de garantizar la uniformidad de la aplicación. Cuando un comerciante se enfrenta a una falta de uniformidad en la aplicación, puede recurrir contra una o varias de las medidas divergentes ante un tribunal nacional, el cual (a no ser que se trate de un tribunal cuya decisión no sea susceptible de ulterior recurso) puede o no efectuar un reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia. Aun en este último caso, la decisión sobre la cuestión puede tardar aún años.

4.369 En síntesis, cuando un comerciante advierte una falta de uniformidad en la aplicación no puede recurrir a una institución comunitaria para que rectifique esa falta de uniformidad, sino que ha de actuar a través de "los mecanismos normales de recurso ante los tribunales nacionales" con la esperanza de que ello pueda conducir finalmente a la eliminación de la falta de uniformidad. La tesis de que el mecanismo normal de recurso es un instrumento fundamental de aplicación uniforme merece destacarse al menos por tres razones. En primer lugar, la vía contenciosa constituye un instrumento especialmente gravoso para conseguir la uniformidad operativa habitual en la aplicación que prevé el párrafo 3 a) del artículo X. En segundo lugar, la tesis de las CE a este respecto está en contradicción con la afirmación que hacen -al analizar la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 b) del artículo X- de que la obligación de aplicación uniforme y la obligación de proporcionar recursos contra las medidas administrativas son obligaciones diferenciadas entre las que no hay una relación intrínseca. Las CE dan ahora a entender que se trata de obligaciones entre las que, por su propia naturaleza, hay una estrecha interrelación. En tercer lugar, la insistencia de las CE en los mecanismos normales de recurso deja sin resolver la cuestión crítica de qué es lo que ocurre si un tribunal nacional o, en último término, el Tribunal de Justicia, constata que tanto la medida administrativa recurrida como la medida administrativa divergente con la que se compara son compatibles con la disposición aplicable de la normativa aduanera comunitaria. Dicho de otra forma, las CE no sostienen, ni pueden sostener, que la propia falta de uniformidad sea motivo para poder recurrir contra la medida administrativa y conseguir que se rectifique. En consecuencia, las CE, al hacer hincapié en el derecho de un comerciante de utilizar los "mecanismos normales de recurso", no dan respuesta en realidad a la cuestión de cómo se elimina la falta de uniformidad cuando el derecho comunitario permite la coexistencia de dos o más medidas no uniformes.

4.370 De forma análoga, la referencia de las CE a la competencia de la Comisión para incoar procedimientos por incumplimiento contra los Estados miembros que violan el derecho comunitario no es demasiado pertinente. Aunque puede haber casos en los que la divergencia en la aplicación del derecho comunitario sea tan acusada que dé lugar a un procedimiento por incumplimiento, este instrumento extraordinario es muy poco útil para conseguir la uniformidad de la aplicación cuando las prácticas divergentes no dan lugar a infracciones del derecho comunitario.

4.371 En síntesis, gran parte de la argumentación de las CE está dedicada a trazar un cuadro de la aplicación del derecho aduanero en las CE en el que se combinan diversos instrumentos para garantizar la uniformidad. Pero si se mira más de cerca ese cuadro, sus elementos no llegan a formar un mecanismo que permita la conciliación sistemática de las divergencias entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Lo que salta a la vista en él es la inexistencia de un mecanismo

comunitario para conciliar sistemáticamente las divergencias en las medidas administrativas de los Estados miembros.

4.372 La cuarta línea de argumentación de las CE consiste en que determinadas divergencias en la práctica de los Estados miembros -en particular las que afectan a las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de auditoría- no guardan en absoluto relación con la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. Las CE sostienen que se trata de cuestiones que forman parte del derecho administrativo general de cada uno de los Estados miembros. De ello se desprende, según el razonamiento de las CE, que las Comunidades no tienen ninguna obligación derivada del párrafo 3 a) del artículo X con respecto a ellas. La única obligación que establece el párrafo 3 a) del artículo X se aplica a los Estados miembros en que son aplicables las leyes de que se trate, según las CE.

4.373 Conforme a la lógica de las CE, podrían excluirse casi todas las obligaciones en el marco del párrafo 3 a) del artículo X. Cuando una divergencia de aplicación adopta la forma de medidas diferentes aplicables en regiones diferentes dentro del territorio de un Miembro, éste podría catalogar las medidas como medidas de derecho sustantivo y no como instrumentos de aplicación del derecho aduanero y eludir de esa forma por completo la obligación del párrafo 3 a) del artículo X. El Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Pieles y cueros* analizó exhaustivamente y rechazó un argumento similar.

4.374 El argumento de las CE en la presente diferencia es aún más preocupante que el que el Grupo Especial rechazó en *Argentina - Pieles y cueros*, porque las CE sugieren que la obligación de aplicación uniforme no se extiende necesariamente a los límites del territorio de cada uno de los Miembros de la OMC. Según las CE, se trata de una obligación de alcance variable. Con respecto a cualquier ley que haya de aplicarse, sólo es exigible dentro de los límites del territorio abarcado por esa ley. Conforme a esa lógica, no hay ninguna obligación de uniformidad en la aplicación entre una y otra región o incluso o entre una y otra localidad.

4.375 Este argumento carece de fundamento en el párrafo 3 a) del artículo X. Ese párrafo es aplicable a "cada Miembro". Como otras obligaciones en el marco del GATT, la obligación de aplicación uniforme es una obligación impuesta al Miembro, y no una obligación independiente impuesta a cada región o localidad del territorio del Miembro. De no ser así, podría rechazarse cualquier supuesto de aplicación no uniforme en diversas zonas geográficas simplemente subdividiendo el territorio del Miembro y tratando de forma independiente a cada una de las subdivisiones a efectos del párrafo 3 a) del artículo X.

4.376 Resulta especialmente desconcertante que las CE sostengan que las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de auditoría no están comprendidos en el ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X. Esos instrumentos son un elemento central de la forma en que se aplican las normas aduaneras sustantivas. De hecho, en la resolución del Consejo sobre las sanciones que se recoge en CE - Prueba documental 41 se reconoce que las sanciones son un instrumento crítico para la aplicación de las demás normas.

4.377 Las CE afirman también que las sanciones no están comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X porque atañen "a medidas ilegítimas y no al comercio lícito". Esa afirmación tergiversa tanto el artículo X como el concepto de sanciones. El artículo X no establece la distinción entre comercio legítimo e ilegítimo que postulan las CE. Incluso si la hubiera hecho, no es cierto que las sanciones sólo se apliquen al comercio ilegítimo. El asunto *de Andrade* citado en la Primera comunicación de los Estados Unidos constituye un ejemplo perfecto de la aplicación de una sanción en el contexto del comercio lícito. La única infracción en ese caso consistió en que no se procedió al despacho de aduana de las mercancías dentro del plazo especificado en el Código Aduanero Comunitario.

4.378 Las CE aducen subsidiariamente que aunque el párrafo 3 a) del artículo X se aplicara a las sanciones, principios fundamentales del derecho comunitario garantizan que las sanciones se ajusten a los requisitos de la aplicación uniforme. El principio fundamental al que se refieren las CE es el de que las sanciones han de ser " efectivas, proporcionadas y disuasorias". Pero ese principio de carácter muy general permite una amplia gama de prácticas de los Estados miembros. Como reconocen las propias CE, "determinadas infracciones pueden ser consideradas delitos graves en un Estado miembro que pueden ser sancionadas con penas de prisión, mientras que en otro Estado miembro ese mismo acto puede ser sancionado con una multa de menor cuantía, o ni siquiera esto".

4.379 El análisis que hacen las CE de las auditorías aduaneras adolece de los mismos vicios. La Primera comunicación de los Estados Unidos ha puesto de relieve las divergencias significativas en las prácticas de auditoría identificadas en el informe del Tribunal de Cuentas de las CE. En lo que respecta a las sanciones, las CE afirman lacónicamente que "las cuestiones relativas a la auditoría no forman parte de los regímenes aduaneros, y por lo tanto no conciernen a la aplicación de la legislación aduanera como tal". Las CE no aclaran en ningún lugar cuál es el fundamento de esa afirmación, que es enteramente inexacta. Al igual que las sanciones, las auditorías son instrumentos esenciales en la aplicación de las normas aduaneras sustantivas.

4.380 En la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos se ha explicado que, en relación con las auditorías, las autoridades de algunos Estados miembros facilitan a los comerciantes directrices vinculantes en materia de valoración en aduana en las que aquéllos pueden basarse en futuras transacciones, en tanto que las autoridades de otros no lo hacen. Las CE rechazan esta observación afirmando que "el hecho de que esas orientaciones puedan ser o no jurídicamente vinculantes es una cuestión del derecho administrativo general de los Estados miembros". Mediante una simple calificación, las CE pretenden de nuevo sustraer a una cuestión de la revisión de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X. Los Estados Unidos consideran que no existe ninguna base para esta afirmación de que los enfoques de los diferentes Estados miembros con respecto a las directrices en materia de valoración no son "significativos desde el punto de vista del párrafo 3 a) del artículo X".

4.381 Por último, los Estados Unidos se refieren al argumento de las CE relativo al párrafo 3 b) del artículo X. En su Primera comunicación, los Estados Unidos han demostrado que las CE no proporcionan tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. Cada uno de los Estados miembros cuenta con órganos destinados a la revisión de las decisiones aduaneras, pero la existencia de esos órganos no da cumplimiento a la obligación que incumbe a las CE, como Miembro de pleno derecho de la OMC. Los Estados Unidos han sostenido que la obligación establecida en el párrafo 3 b) del artículo X debe interpretarse en función de su contexto, que incluye el párrafo 3 a) del artículo X y que la fragmentación de la revisión de las decisiones aduaneras en el territorio de un Miembro es contraria a la obligación de aplicación uniforme contenida en esa disposición.

4.382 La afirmación de las CE de que no hay ninguna relación entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X y que no hay obligación de interpretar el último apartado a la luz del primero resulta especialmente sorprendente habida cuenta de la explicación que dan las CE de la forma en que se consigue en las Comunidades la uniformidad de la aplicación del derecho aduanero. Una idea que se repite a lo largo de la Primera comunicación de las CE es la de que los recursos contra las decisiones aduaneras ante los tribunales nacionales, unidos a la posibilidad de que éstos efectúen un reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia, constituyen un instrumento crítico para garantizar la aplicación uniforme del derecho aduanero. Dicho de otra forma, en su argumentación acerca del párrafo 3 a) del artículo X, las CE sostienen de hecho que la revisión de las decisiones aduaneras y la aplicación de las leyes aduaneras están estrechamente interrelacionadas. Esa posición apoya la interpretación de la obligación de establecer la revisión de las decisiones aduaneras a la luz de la obligación de aplicar uniformemente las leyes aduaneras.

4.383 Además, las CE simplemente están equivocadas cuando afirman que el párrafo 3 del artículo X "no establece ninguna relación" entre los apartados a) y b). La segunda frase de este último apartado declara expresamente que las decisiones de los tribunales o procedimientos mantenidos o instituidos de conformidad con el mismo "regirán [la] práctica" de "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas". La aplicación de las medidas administrativas, a su vez, es el objeto del apartado a).

4.384 La afirmación de las CE de que "es evidente" que la utilización del plural en el párrafo 3 b) del artículo X "permite" el establecimiento de tribunales de revisión distintos con jurisdicción en diferentes partes del territorio de un Miembro es también errónea. Con la utilización del plural en el párrafo 3 b) del artículo X puede permitirse que un Miembro establezca diferentes órganos para tipos distintos de revisiones. Por ejemplo, un Miembro puede establecer un tribunal administrativo para la revisión de decisiones en materia de clasificación y valoración en aduana y un órgano judicial independiente para la revisión de las decisiones que establecen sanciones. Esta interpretación da efecto a la utilización del plural en el párrafo 3 b) del artículo X sin incurrir en una contradicción con la obligación de interpretar esa disposición a la luz del contexto del párrafo 3 a) del artículo X.

4.385 Por último, las CE afirman que cumplen la obligación que le corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X porque los tribunales de los Estados miembros son tribunales comunitarios cuando aplican e interpretan el derecho comunitario. En apoyo de esa afirmación, las CE se remiten al informe del Grupo Especial *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Estados Unidos)*. En ese asunto, el Grupo Especial constató que en el ejercicio de determinadas funciones ejecutivas, las autoridades de los Estados miembros "actúan *de facto* como órganos de la Comunidad". Sin dar ninguna explicación, las CE afirman que el razonamiento del Grupo Especial en dicha diferencia es igualmente aplicable a las autoridades judiciales del Estado miembro que ejercen funciones decisorias.

4.386 La afirmación de las CE no se desprende de hecho de la declaración que citan del informe del Grupo Especial. En primer lugar, la cuestión sometida a ese Grupo Especial era sustancialmente distinta de la que se plantea en el presente caso. Esa cuestión no tenía nada que ver con las obligaciones de la CE, sino que se refería a las obligaciones de determinados Estados miembros. Lo que se planteaba era si un Estado miembro individual que ejecutaba un reglamento comunitario de una manera que establecía una discriminación entre personas de otros Estados miembros de las CE, de un lado, y personas de Estados que no eran miembros de las CE, de otro, violaba la obligación de la nación más favorecida. Este contexto, sumamente distinto, hace imposible extrapolar la constatación formulada en esa diferencia a la cuestión debatida en la presente diferencia.

4.387 En segundo lugar, por su propia naturaleza, la obligación del párrafo 3 b) del artículo X no puede cumplirse de manera geográficamente fragmentada dentro de un solo Miembro, como las CE. No puede darse por sentado que el reconocimiento por un grupo especial de las autoridades *ejecutivas* de los Estados miembros como autoridades comunitarias *de facto* a un determinado efecto en el contexto de una obligación concreta en el marco de la OMC signifique que otro grupo especial debe reconocer que las autoridades *judiciales* de los Estados miembros son autoridades comunitarias *de facto* a un efecto distinto y en el contexto de una obligación en el marco de la OMC enteramente distinta.

4.388 En síntesis, el hecho de que las CE puedan considerar que los tribunales de los Estados miembros actúan como tribunales comunitarios *de facto* cuando interpretan y aplican el derecho comunitario no significa que las CE mantengan los tribunales o procedimientos exigidos por el párrafo 3 b) del artículo X. Sigue siendo cierto que los tribunales de los Estados miembros interpretan y aplican el derecho dentro del territorio de sus respectivos Estados y sólo pueden vincular a los organismos administrativos dentro de ellos. Este sistema no da cumplimiento a la obligación que incumbe a las CE en virtud del párrafo 3 b) del artículo X.

D. PRIMERA DECLARACIÓN ORAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1. La importancia del caso

a) La importancia constitucional del caso para las CE

4.389 La reclamación de los Estados Unidos constituye un ataque sin precedentes a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de las CE. Al impugnar la intervención de las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las CE en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria, los Estados Unidos piden esencialmente a las CE que establezcan un organismo aduanero comunitario, lo que choca con el principio de federalismo ejecutivo del ordenamiento jurídico comunitario, conforme al cual, en general, la ejecución del derecho comunitario corresponde a las autoridades de los Estados miembros.

4.390 De forma análoga, la alegación de que las CE están obligadas a establecer la revisión judicial por "tribunales a nivel de las CE" es diametralmente opuesta a un principio estructural básico del sistema judicial de las CE conforme al cual la revisión judicial de las decisiones de las autoridades de los Estados miembros corresponde a los tribunales de los Estados miembros. Así pues, basándose únicamente en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT, los Estados Unidos solicitan de hecho a las CE que realicen una revisión completa de su sistema judicial, una tarea que requiere la modificación de los tratados constitutivos de las CE.

4.391 Las CE desean subrayar que reconocen y respetan plenamente las obligaciones que le incumben en virtud del artículo X del GATT. Las CE no sostienen que estén sujetas en modo alguno a obligaciones derivadas del artículo X del GATT distintas o menores que los demás Miembros de la OMC, pero consideran que su sistema constitucional para la aplicación de las leyes aduaneras y la revisión de las decisiones aduaneras es plenamente compatible con los Acuerdos de la OMC. De hecho, los Acuerdos de la OMC respetan y preservan la autonomía constitucional de los Miembros de la OMC. Por ello es motivo de grave preocupación el hecho de que en el presente caso, disposiciones constitucionales fundamentales sean en sí mismas objeto de un procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

4.392 De hecho, con su actual impugnación, los Estados Unidos parecen esperar que las CE establezcan un organismo aduanero y un tribunal aduanero similares a los que existen en los Estados Unidos. Las CE consideran que el párrafo 3 del artículo X del GATT no proporciona ninguna base jurídica para esa pretensión. Además, las CE respetan plenamente el derecho de los Estados Unidos a optar por un sistema centralizado de administración aduanera y de revisión judicial, pero consideran que su propia opción constitucional por un sistema basado en principios federales merece igual grado de respeto.

b) La importancia sistémica del caso para la OMC

4.393 El presente caso tiene gran importancia para los Miembros de la OMC en su conjunto. En realidad, en su crítica de instrumentos concretos de la administración aduanera de las CE, los Estados Unidos adoptan un enfoque maximalista que debe preocupar gravemente a los Miembros de la OMC.

4.394 Con ese enfoque, los Estados Unidos llevan las prescripciones jurídicas del párrafo 3 del artículo X del GATT más allá de todo límite. De hecho, lo que se dilucida en la presente diferencia es esencialmente si el párrafo 3 del artículo X del GATT debe constituir una base jurídica para la armonización de los sistemas de administración aduanera de los Miembros de la OMC a través del recurso al ESD.

4.395 Las CE están firmemente convencidas de que no debe ser así. El ESD no es un proceso de examen por los Miembros mediante el que pueda tratarse de conseguir el diseño óptimo de las administraciones aduaneras, sino que su finalidad, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, es preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados, y de ese modo prevenir la anulación y menoscabo de ventajas derivadas para los Miembros de esos acuerdos.

4.396 La coincidencia entre la presente diferencia y las negociaciones en curso sobre facilitación del comercio de la Ronda de Doha nos obligan a centrarnos de forma rigurosa en las obligaciones jurídicas. Según una declaración pública del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, uno de los objetivos esenciales de los Estados Unidos en la presente diferencia es reforzar las negociaciones sobre facilitación del comercio de Doha mediante "la presión sobre un importante interlocutor en el comercio mundial". La coincidencia entre alguna de las críticas formuladas por los Estados Unidos en el presente asunto y sus propias propuestas en el contexto de la Ronda de Doha ilustra también la motivación política de la reclamación de los Estados Unidos.

4.397 Las CE están plenamente comprometidas con el éxito de las negociaciones de la Ronda de Doha, incluidas las negociaciones sobre facilitación del comercio. No obstante, como ha señalado acertadamente el Japón en su comunicación escrita, las iniciativas concretas para garantizar una aplicación uniforme de las leyes aduaneras deben abordarse en las negociaciones de Doha y no mediante el procedimiento de solución de diferencias.

2. La aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria

a) Los requisitos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

4.398 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT obliga a los Miembros de la OMC a aplicar las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo X del GATT de manera uniforme. En su Primera comunicación los Estados Unidos exageran considerablemente las obligaciones que impone el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Además, los Estados Unidos prescinden casi completamente de la jurisprudencia existente sobre esa disposición.

4.399 En primer lugar, con arreglo a una jurisprudencia uniforme desde el informe del Órgano de Apelación en *CE - Banano*, el párrafo 3 a) del artículo X se refiere únicamente a la *aplicación* de las leyes y reglamentos y no a las propias leyes y reglamentos. Éste es un aspecto importante para los Miembros que tienen una estructura federal, y en los que algunas cuestiones se regulan a nivel subfederal. Cuando hay leyes y reglamentos a nivel subfederal, todo lo que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT es que esas leyes se apliquen de manera uniforme en la zona en la que son aplicables. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no impone ninguna obligación de armonizar las leyes subfederales dentro de un Miembro de la OMC.

4.400 En segundo lugar, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT obliga únicamente a los Miembros de la OMC a aplicar sus leyes y reglamentos de manera uniforme, pero es neutral en cuanto a los medios que los Miembros de la OMC utilicen a tal fin. Dicho de otra forma, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe los instrumentos y estructuras concretos que los Miembros de la OMC pueden utilizar en la aplicación de sus leyes aduaneras. En consecuencia, la finalidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es la armonización de las leyes y prácticas aduaneras de los Miembros de la OMC, y ese precepto no proporciona una base jurídica para alcanzar ese resultado por medio del ESD.

4.401 En tercer lugar, como ha destacado el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Camarones* y ha confirmado asimismo el Japón, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT es una disposición que establece normas mínimas. Es una disposición subsidiaria que proporciona a los Miembros de la OMC determinadas garantías mínimas de conformidad en la aplicación de las leyes y

reglamentos aduaneros. En los casos en que eran necesarias disciplinas más precisas y ambiciosas, se han establecido las obligaciones correspondientes en otras disposiciones de los acuerdos abarcados.

4.402 En cuarto lugar, dado el carácter de disposición que establece normas mínimas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, una diferencia de importancia secundaria en el derecho y la práctica legislativos no constituye una falta de uniformidad contraria al párrafo 3 a) del artículo X del GATT, como se desprende claramente del informe del Grupo Especial del GATT en *CE - Manzanas de mesa*, en el que el Grupo Especial declaró que determinadas diferencias entre Estados miembros de las CE en la aplicación del régimen de licencias de importación eran de importancia secundaria y por consiguiente no representaban una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Dicho de otra forma, hay un cierto umbral mínimo en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, lo que implica que para que constituyan una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT es preciso que las diferencias en la práctica administrativa tengan una repercusión importante en la aplicación de las leyes aduaneras.

4.403 En quinto lugar, es muy importante recordar las constataciones del Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, según las cuales no es posible establecer la falta de conformidad basándose exclusivamente en un supuesto de aplicación, sino que, como ha explicado convincentemente el Japón, es necesario establecer la existencia de una *pauta* de aplicación no uniforme con repercusiones importantes en la forma en que se aplican las leyes aduaneras. Esa interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT es especialmente necesaria habida cuenta de que las autoridades aduaneras tienen que actuar en circunstancias complejas y en rápida evolución, a las que necesitan adaptarse constantemente. Además, los sistemas de administración aduanera son complejos y sus resultados están determinados por numerosos factores, no todos los cuales pueden ser controlados por el Miembro de la OMC de que se trate. Por ejemplo, cuando un comerciante individual no agota todos los recursos y posibilidades procesales que le ofrece el sistema de un Miembro de la OMC, la falta de uniformidad resultante no puede imputarse a una deficiencia del sistema de ese Miembro. De forma análoga, si en un caso concreto un comerciante abusa de las posibilidades procesales o infringe disposiciones del derecho del Miembro de que se trate, ello no puede considerarse prueba de una falta de uniformidad contraria a lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

b) La carga de la prueba

4.404 La carga probar la existencia de una pauta de falta de uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras de las CE incumbe a los Estados Unidos. Los Estados Unidos están lejos de haber satisfecho esa carga.

4.405 Los Estados Unidos no se han centrado fundamentalmente en la aplicación efectiva de las leyes aduaneras en las CE, sino en aspectos sistémicos del sistema comunitario de administración aduanera. En un plano general, los Estados Unidos impugnan la intervención de las autoridades de los Estados miembros de las CE en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. En un nivel más concreto, los Estados Unidos critican la función o la capacidad de diversas instituciones o regímenes comunitarios, como la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia o el Comité del Código Aduanero. Por último, a nivel de gestión, los Estados Unidos critican también diversos aspectos del sistema de administración aduanero de las CE, como el diseño del sistema europeo de información arancelaria vinculante de las CE.

4.406 Ninguno de esos argumentos son pertinentes a la aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT ni constituyen una prueba de la existencia de una pauta de falta de uniformidad en la administración aduanera de las CE. Para referirnos al aspecto más fundamental, los Estados Unidos alegan ante el Grupo Especial que la intervención de las autoridades de los Estados miembros de las CE en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT porque "es inevitable que haya divergencias". Las CE rechazan firmemente esta

afirmación. Las CE desean manifestar además su asombro ante el hecho de que los Estados Unidos afirmen que un elemento fundamental del ordenamiento jurídico comunitario es incompatible con el GATT sin aportar ninguna prueba de ello.

4.407 En lo que respecta a los instrumentos e instituciones más específicos del sistema comunitario, como han puesto ya de manifiesto las CE en su Primera comunicación escrita, las críticas de los Estados Unidos se basan en errores de interpretación o tergiversaciones del sistema comunitario. Además, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT deja a los Miembros de la OMC un amplio margen de libertad en lo que respecta a la forma de aplicar su derecho aduanero, siempre que lo hagan de manera uniforme. En consecuencia, las críticas de los Estados Unidos no son pertinentes a la evaluación del cumplimiento por las CE del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.408 Además, en su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos presentan un panorama incompleto y distorsionado del sistema de administración aduanera de las CE. Basándose en esa exposición inadecuada de los hechos, los Estados Unidos optan por abordar únicamente aquellas cuestiones concretas en las que perciben que el sistema de las CE parece débil. No obstante, para evaluar si hay una deficiencia en el sistema de las CE no basta considerar aisladamente un aspecto o instrumento determinado, sino que, como ha explicado adecuadamente el Japón, es necesario atender al sistema comunitario en su conjunto.

4.409 La comunicación de los Estados Unidos guarda un silencio casi absoluto acerca de la aplicación real de la normativa aduanera comunitaria. Esencialmente, presenta al Grupo Especial dos ejemplos de supuesta falta de uniformidad en la esfera de la clasificación arancelaria y uno en la esfera de la valoración en aduana. Aun en el supuesto de que esos casos hicieran realmente patente una falta de uniformidad, uno o dos casos en una esfera determinada no pueden constituir una muestra estadísticamente significativa para evaluar si existe una pauta de falta de uniformidad. Además, como las CE han puesto de manifiesto en su Primera comunicación escrita, ninguno de los ejemplos citados por los Estados Unidos, todos los cuales implican cuestiones de administración aduanera de gran complejidad técnica, pone de hecho de manifiesto una falta de uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera por las CE.

4.410 Ningún hecho puede poner de relieve la debilidad de las argumentaciones de los Estados Unidos con mayor claridad que la tibia respuesta que obtuvo el USTR cuando lanzó un llamamiento para formular observaciones a raíz de su solicitud de consultas en la presente diferencia. En respuesta a ese llamamiento, el USTR sólo recibió tres comunicaciones, dos de las cuales los mismos Estados Unidos parecen no haber considerado útiles para sus argumentos. Las CE sostienen que si existiera en realidad una pauta significativa de falta de uniformidad en la práctica comunitaria, cabría haber esperado una reacción más firme de la rama de producción y los comerciantes interesados.

4.411 En general, los Estados Unidos no demuestran que haya una pauta de falta de uniformidad en el sistema de administración aduanera de las CE.

c) Las alegaciones formuladas por los Estados Unidos

i) Clasificación arancelaria

4.412 La primera esfera en la que los Estados Unidos alegan que existe falta de uniformidad es la clasificación arancelaria. Los Estados Unidos basan esencialmente su alegación en una crítica de la función del Tribunal de Justicia y del sistema de información arancelaria vinculante de las CE. Además, los Estados Unidos citan dos ejemplos de clasificación de productos concretos que, según alegan, demuestran la falta de uniformidad en la práctica de las CE.

4.413 En lo que respecta a las dos cuestiones sistémicas, las críticas de los Estados Unidos son injustificadas. El Tribunal de Justicia, en particular a través del procedimiento de reenvío prejudicial,

desempeña una importante función para garantizar la interpretación y aplicación uniformes de las normas comunitarias de clasificación y seguirá haciéndolo así en el futuro.

4.414 De forma análoga, el sistema de información arancelaria vinculante de las CE es un importante instrumento para aportar uniformidad a la clasificación arancelaria en todas las CE y dar seguridad a los comerciantes. No obstante, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no obliga a las CE a establecer un sistema de información arancelaria vinculante, y mucho menos a diseñar este sistema de una forma determinada.

4.415 Además, como ha señalado de forma pertinente el Japón, tanto el Tribunal de Justicia como el sistema europeo de información arancelaria vinculante son sólo parte del sistema de clasificación de las CE. Como las CE han señalado ya, para evaluar si las CE aplican las normas de clasificación de manera uniforme no basta considerar aisladamente dos elementos, sino que es preciso considerar el sistema de las CE en su conjunto, incluidos instrumentos como los reglamentos de clasificación, las notas explicativas y criterios del SA y las notas explicativas de las CE.

4.416 Los dos ejemplos concretos que citan los Estados Unidos son la clasificación de los forros opacos para cortinas y de los monitores LCD. No obstante, ninguno de esos dos casos pone de manifiesto una falta de uniformidad en la práctica de clasificación de las CE. De hecho, ambos se refieren a cuestiones de clasificación sumamente complejas, con las que los Estados Unidos han experimentado también ciertas dificultades. En consecuencia, esos casos, lejos de demostrar una falta de uniformidad en la práctica de las CE, únicamente ponen de relieve las complejidades técnicas de la clasificación arancelaria en un mundo, como el actual, que experimenta una rápida evolución.

ii) Valoración en aduana

4.417 La segunda esfera en la que los Estados Unidos alegan una falta de uniformidad es la de la valoración en aduana. No obstante, los argumentos de los Estados Unidos a este respecto son tan poco fundados como su alegación en la esfera de la clasificación arancelaria.

4.418 A nivel sistémico, los Estados Unidos alegan que las CE ni siquiera proporcionan resoluciones vinculantes en materia de valoración. No obstante, esa alegación es injustificada. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no obliga a las CE a emitir resoluciones vinculantes sobre cuestiones relativas a la valoración en aduana o sobre cualquier otro aspecto.

4.419 Además, hay diferencias estructurales considerables entre la clasificación arancelaria y la valoración en aduana que explican las razones por las que las CE proporcionan información vinculante en la esfera de la clasificación arancelaria, pero no en la de la valoración en aduana. En concreto, la valoración en aduana se basa normalmente en el valor de transacción, lo que implica datos que pueden cambiar de transacción a transacción y de importador a importador.

4.420 Al mismo tiempo, las normas comunitarias sobre valoración son bastante detalladas y orientan a las autoridades aduaneras de las CE en todas las circunstancias pertinentes. En los casos en que sea necesario aclararlas, esa aclaración puede hacerse mediante modificaciones de las normas de valoración contenidas en el Reglamento de Aplicación o en el Código Aduanero. Además, la Comisión Europea, el Comité del Código Aduanero y el Tribunal Europeo de Justicia desempeñan todos ellos una importante función para garantizar una práctica uniforme en materia de valoración.

4.421 Para justificar sus alegaciones, los Estados Unidos se basan principalmente en un informe de 2000 del Tribunal de Cuentas de las CE. Sin embargo, ese informe no apoya las alegaciones de los Estados Unidos. De hecho, más que cualquier otra cosa, es una prueba de la capacidad de las CE para garantizar la uniformidad de su administración aduanera. En los casos en que ello ha resultado necesario, el informe ha dado lugar a la adopción de medidas adecuadas por las instituciones comunitarias, por lo que actualmente no constituye una prueba pertinente. Además, las CE desean

señalar también que el Tribunal de Cuentas en modo alguno formuló juicios acerca de si las CE cumplían el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, y no puede darse por sentado que las cuestiones planteadas en el informe del Tribunal de Cuentas reflejen una violación del GATT.

4.422 Al nivel de la práctica real, los Estados Unidos sólo presentan un ejemplo relativo a una diferencia en materia de valoración entre Reebok International Limited (RIL) y las autoridades aduaneras españolas. No obstante, se trata de una compleja diferencia de valoración que se refiere a la apreciación de si hay entre RIL y algunos de sus proveedores una relación de control. La Comisión Europea ha examinado detenidamente este caso, pendiente actualmente de la resolución de un tribunal español, y lo ha analizado en el Comité del Código Aduanero. No obstante, hay que recordar también que ni la Comisión Aduanera ni el Comité del Código Aduanero pueden sustituir a los mecanismos normales de recurso ante los tribunales nacionales.

iii) Transformación bajo control aduanero y procedimiento de domiciliación

4.423 Los Estados Unidos alegan que hay una falta de uniformidad en lo que respecta a dos regímenes aduaneros, el régimen de transformación bajo control aduanero y el procedimiento de domiciliación. Esos argumentos de los Estados Unidos se basan en interpretaciones equivocadas y errores fácticos.

4.424 En relación con la transformación bajo control aduanero, la realidad es que la legislación aduanera de la Comunidad y las directrices del Reino Unido y de Francia requieren la concurrencia de las mismas dos "condiciones económicas" para autorizar la transformación bajo control aduanero. En consecuencia, no hay datos que demuestren que las autoridades aduaneras de las CE aplican este régimen de manera no uniforme.

4.425 En cuanto al procedimiento de domiciliación, la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos es deficiente en cuatro sentidos. En primer lugar, los Estados Unidos no aportan una sola prueba documental que ilustre y apoye su alegación. En segundo lugar, de la descripción que se hace en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos se desprende claramente que los Estados Unidos no han entendido correctamente las diversas etapas del proceso que se sigue cuando las mercancías se importan con arreglo a este procedimiento. En tercer lugar, la descripción que hacen los Estados Unidos del procedimiento y de los requisitos relativos a la conservación de documentos contiene errores fundamentales. Por último, las diferencias que podrían subsistir no tienen un carácter sustancial y en consecuencia no sobrepasan el umbral mínimo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

iv) Sanciones por infracciones del derecho aduanero

4.426 Por último, los Estados Unidos alegan también que las CE incumplen sus obligaciones al no aplicar de manera uniforme las sanciones por infracciones de las leyes aduaneras. Esta alegación de los Estados Unidos debe rechazarse por tres razones.

4.427 En primer lugar, las CE sostienen que las disposiciones que establecen la sanción por una infracción de las leyes aduaneras no se refieren en sí mismas a la aplicación de las leyes aduaneras y, en consecuencia, no están comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.428 En segundo lugar, es importante señalar que las sanciones aplicables a las infracciones de leyes aduaneras se establecen en las leyes y reglamentos de los Estados miembros de las CE. En consecuencia, no es la aplicación de las leyes lo que varía, sino que son las propias leyes las que son diferentes. No obstante, como han explicado ya las CE, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no establece ninguna obligación de armonizar las leyes que se aplican en un Miembro de la OMC a nivel subfederal.

4.429 Por último, el derecho comunitario prevé un grado suficiente de armonización de las sanciones por infracciones del derecho aduanero. Como ha aclarado el Tribunal Europeo de Justicia en su jurisprudencia, las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Esos principios preservan suficientemente la aplicación uniforme del derecho aduanero en las CE.

3. La pronta revisión de las decisiones aduaneras en las CE

a) Las prescripciones del párrafo 3 b) del artículo X del GATT

4.430 El párrafo 3 b) del artículo X del GATT se limita a obligar a los Miembros de la OMC a garantizar la pronta revisión de las decisiones administrativas en cuestiones aduaneras por un tribunal independiente o por un procedimiento independiente. Los Estados Unidos tergiversan las prescripciones del párrafo 3 b) del artículo X del GATT.

4.431 Las CE desean recordar de nuevo que, con arreglo a una jurisprudencia constante desde los informes del Órgano de Apelación en *CE - Banano* y *CE - Productos avícolas*, el artículo X del GATT y, en consecuencia, el párrafo 3 b) de ese artículo, no impone una obligación de armonización de las leyes dentro de un Miembro de la OMC, lo que significa que cuando, dentro de un Miembro de la OMC, existen sistemas distintos de revisión judicial a nivel subfederal, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT no exige la armonización de esos sistemas distintos, sino que exige simplemente que dentro de cada uno de esos sistemas distintos de revisión judicial se garantice la pronta revisión de las decisiones aduaneras.

4.432 Además, hay que recordar también que el párrafo 3 a) y el párrafo 3 b) del artículo X del GATT establecen obligaciones distintas. En consecuencia, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT, a diferencia del párrafo 3 a) de ese artículo, no se ocupa de cuestiones de uniformidad, sino exclusivamente de la pronta revisión de las decisiones aduaneras.

4.433 Debe señalarse también que en las CE la revisión de las decisiones aduaneras se produce habitualmente dentro del sistema general de revisión de las decisiones administrativas en la esfera del derecho administrativo o el derecho fiscal. La creación de una jurisdicción independiente para cuestiones aduaneras a nivel comunitario llevaría, en consecuencia, no a una menor, sino a una mayor fragmentación de los procedimientos de revisión judicial, lo que no redundaría en interés de los comerciantes, ya que en ese caso, en lugar de poder recurrir a abogados competentes en derecho administrativo o derecho fiscal en un Estado miembro determinado, tendrían que recurrir a abogados especializados experimentados en procedimientos específicos a nivel comunitario.

4.434 Además, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT es neutral en cuanto a los medios que utilizan los Miembros de la OMC para garantizar la pronta revisión. Dicho de otra forma, esta disposición no prescribe los órganos o instrumentos, estructuras y plazos concretos que los Miembros de la OMC deben utilizar para garantizar la pronta revisión de las decisiones aduaneras. En consecuencia, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT no responde a la finalidad de armonizar las leyes de los Miembros de la OMC, ni constituye una base legal para obtener ese resultado a través del ESD.

b) La carga de la prueba

4.435 La carga de la prueba de que las CE no garantizan una pronta revisión de las decisiones aduaneras incumbe a los Estados Unidos. También a este respecto, como ocurre en la esfera de la aplicación uniforme, los Estados Unidos están lejos de satisfacer esa carga.

4.436 Los Estados Unidos no se han centrado fundamentalmente en la revisión efectiva de las decisiones aduaneras en las CE, sino en una cuestión sistémica del sistema judicial de las CE. A nivel

general, los Estados Unidos consideran insuficiente la intervención de los órganos judiciales de los Estados miembros de las CE en la revisión de las decisiones aduaneras. Los Estados Unidos sostienen ante el Grupo Especial que la intervención de los órganos judiciales de los Estados miembros de las CE en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria es incompatible con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT porque "el proceso de recurso no atenúa la carga que representa para los comerciantes la aplicación no uniforme". Las CE rechazan firmemente esta afirmación.

4.437 La comunicación de los Estados Unidos guarda un silencio casi absoluto acerca del funcionamiento real del sistema judicial de las CE. En síntesis, los Estados Unidos se refieren únicamente a los plazos máximos para las revisiones administrativas en tres Estados miembros de las CE y una de esas referencias ni siquiera es exacta.

c) Las alegaciones formuladas por los Estados Unidos

i) La inexistencia de un tribunal aduanero comunitario

4.438 La primera crítica de los Estados Unidos se refiere a la naturaleza del sistema de revisión judicial establecido en las CE. Según los Estados Unidos, la inexistencia de una revisión a nivel de las CE potencia las divergencias de interpretación entre las autoridades de dos Estados miembros distintos.

4.439 Esta interpretación es errónea por cuanto establece una relación injustificada entre los dos apartados del párrafo 3 del artículo X del GATT y porque el párrafo 3 b) del artículo X del GATT no exige un procedimiento o tribunal central, similar al Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USCIT) para conocer de los recursos contra decisiones administrativas en cuestiones aduaneras. En su comunicación en calidad de tercero, el Japón ha apoyado la interpretación de las CE.

4.440 Además, como han explicado las CE en su comunicación escrita, cuando los tribunales de los Estados miembros proceden a la revisión judicial de decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros, actúan como órganos de las CE, a través de los cuales éstas cumplen sus obligaciones en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT. Esta posición encuentra también apoyo en el reciente informe del Grupo Especial que examinó el asunto *CE - Indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio (Estados Unidos).*

ii) La falta de prontitud de la revisión

4.441 La segunda crítica que hacen los Estados Unidos al sistema de las CE es que éste no garantiza una pronta revisión de las decisiones aduaneras.

4.442 Ante todo, hay que decir que esta alegación de los Estados Unidos se basa en la divergencia de los plazos máximos para las revisiones administrativas entre tres Estados miembros de las CE. Sin embargo, la información que dan los Estados Unidos en relación con los Países Bajos no es totalmente exacta. El punto 6.2.7 del Reglamento de la Ley Fiscal General de los Países Bajos establece que las autoridades fiscales, que incluyen las autoridades aduaneras, resolverán en principio todas las objeciones dentro del plazo de seis semanas. Según la misma disposición, el límite legal de un año, que se establece en una ley distinta, sólo es aplicable en casos excepcionales, por ejemplo en caso de reclamaciones múltiples, o cuando el reclamante no presta la cooperación necesaria.

4.443 En segundo lugar, la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos alega que los plazos para las revisiones administrativas en los Estados miembros de las CE pueden variar ampliamente. Sin embargo, los Estados Unidos no aportan pruebas reales de esa afirmación. En particular, habría que tener presente que los plazos a que se refieren los Estados Unidos son sólo plazos máximos, y en

consecuencia no ofrecen necesariamente información sobre la duración real de las revisiones administrativas.

4.444 Las CE han explicado ya que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT no impone una obligación de armonización. Además, el hecho de que un Estado miembro de las CE establezca un plazo de un año en lugar del plazo de tres meses establecido por otro no significa que el primero no garantice una pronta revisión.

4.445 Incluso en los Estados Unidos el plazo máximo legal para adoptar una decisión en relación con las reclamaciones es de dos años. Los Estados Unidos no explican por qué razones este plazo máximo sería compatible con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT y los plazos más breves previstos en algunos Estados miembros de las CE no lo serían. Para aclarar aún más este aspecto, resulta también reveladora la práctica del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos. En tres recientes asuntos de clasificación, el USCIT tardó casi una media de cuatro años en adoptar una decisión.

4.446 Estos ejemplos ponen de manifiesto que establecer lo que es "pronta" y lo que no lo es quizá no sea tan sencillo como parecen dar a entender los Estados Unidos. En realidad, la duración real de la revisión administrativa y judicial de una decisión aduanera puede depender de una serie de factores, no todos los cuales están siempre plenamente bajo el control del Miembro de la OMC de que se trata. Entre esos factores pueden citarse el volumen de asuntos, la complejidad fáctica y jurídica del asunto, el comportamiento del reclamante y la intervención de las demás partes, así como cuestiones de procedimiento y organización administrativas y judiciales. En consecuencia, es sumamente difícil establecer normas abstractas sobre la duración de los procedimientos administrativos y aún más sobre la duración de los procedimientos judiciales, puesto que siempre puede haber casos excepcionales en los que esté justificada una mayor duración por las circunstancias especiales del caso.

4.447 Por esta razón, las CE sostienen también que no es posible determinar si un Miembro de la OMC cumple o no la obligación que le corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT basándose en casos individuales aislados, sino que habría que establecer la existencia de una pauta general en la que no hay una pronta revisión para considerar que se infringe la obligación establecida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT.

E. SEGUNDA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS

1. Introducción

4.448 Los 25 Estados miembros de las Comunidades Europeas no actúan al unísono cuando se trata de la aplicación de la legislación aduanera de las CE o la revisión y rectificación de decisiones administrativas de índole aduanero. Aunque en este procedimiento las CE cuestionan las alegaciones formuladas por los Estados Unidos, las CE y funcionarios de las CE han reconocido abiertamente el problema subyacente en declaraciones hechas fuera del contexto de la solución de diferencias.

4.449 No es sorprendente que la uniformidad sea una meta que las CE pretenden alcanzar. Por ejemplo, en la Decisión por la que se adopta el programa "Aduanas 2007" de las CE (CE - Prueba documental 43), el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea pidieron que se adaptara continuamente la política aduanera "de forma que las administraciones aduaneras nacionales puedan funcionar de manera tan eficiente y eficaz como lo haría una única administración". No obstante, el sistema de administración y revisión en materia aduanera actualmente en vigor no sólo se queda muy lejos de alcanzar esa meta, sino que también se queda bastante lejos de cumplir las prescripciones del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 y, por ello, infringe ese artículo.

4.450 Antes de rebatir los temas fundamentales que han surgido en la respuesta de las CE a las alegaciones de los Estados Unidos, hay que examinar dos aspectos generales que trascienden los

diversos argumentos de las CE. En primer lugar, las CE adoptan en repetidas ocasiones un tono alarmista al responder a los argumentos de los Estados Unidos. El Grupo Especial debe tomarse la predicción de las CE acerca de una convulsión generalizada con una buena dosis de escepticismo. Los Estados Unidos no sostienen en ningún momento que el párrafo 3 del artículo X obligue a los Miembros de la OMC a tener sistemas de administración y revisión aduaneras idénticos, ni tampoco puede deducirse así de los argumentos estadounidenses.

4.451 También es errónea la tesis de que aceptar los argumentos de los Estados Unidos derivará en una obligación de armonizar disposiciones no relacionadas con las aduanas que suelen ser reglamentadas en el plano del gobierno regional o local. Las CE sacan esa conclusión del hecho de que los Estados Unidos señalen a la atención determinados instrumentos de aplicación de la legislación aduanera de las CE -en particular, las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de auditoría- que varían drásticamente de un Estado miembro a otro. No obstante, las CE dejan de lado que el argumento de los Estados Unidos va dirigido a las leyes y reglamentos en el plano subfederal (o sea, de Estado miembro) que se usan para verificar y hacer cumplir las leyes y reglamentos prescritos en el plano federal (o sea, las CE). El argumento de los Estados Unidos no va dirigido al inmenso acervo de leyes y reglamentos en el plano subfederal que no tienen nada en absoluto que ver con la verificación y la imposición del cumplimiento de otras leyes y reglamentos o que atañen únicamente a la verificación y la imposición del cumplimiento de otras leyes y reglamentos subfederales.

4.452 Además, al sugerir que la lógica del argumento de los Estados Unidos sobre el párrafo 3 b) del artículo X obligaría a cada Miembro de la OMC a tener un único tribunal aduanero centralizado, las CE desvirtúan una vez más la posición estadounidense. Los Estados Unidos no opinan que el párrafo 3 b) del artículo X obligue a cada Estado Miembro a tener un único tribunal aduanero centralizado. La opinión de los Estados Unidos es que el párrafo 3 b) del artículo X obliga a que cada Miembro de la OMC tenga tribunales o procedimientos de revisión cuyas "decisiones … regirán [la] práctica [administrativa]" de "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" de su legislación aduanera. Los Miembros podrán cumplir esa disposición cuando los tribunales con jurisdicción regional revisen las medidas de una autoridad aduanera única. Ahora bien, ese no es el caso cuando a la fragmentación de la revisión se suma la fragmentación de la administración, como ocurre en las CE.

4.453 Al igual que el Grupo Especial no debe dejarse llevar por la predicción de las CE de una procesión de horrores si es que acepta los argumentos de los Estados Unidos, tampoco debe dejarse influir por la tesis de las CE de que resultaría difícil cumplir sus obligaciones. La dificultad de cumplir las obligaciones no tiene ninguna relación con que las CE cumplan o no cumplan actualmente sus obligaciones en el marco del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994. La dificultad relativa respecto del cumplimiento no aclara el sentido ordinario de los términos del tratado. Tampoco es un elemento de contexto ni el objeto y propósito de tratado.

2. El párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no contiene una norma relativa específica de los Miembros

a) Las obligaciones del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no varían según las características concretas del sistema de administración aduanera de un Miembro.

4.454 Las CE imponen incorrectamente al Grupo Especial un criterio relativo del párrafo 3 a) del artículo X. Las CE sugieren que la obligación de aplicación uniforme puede tener distintos significados para diferentes Miembros de la OMC, según el diseño del sistema de administración aduanera de cada Miembro. La alusión de las CE al párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994, entre otras declaraciones, sugiere una norma relativa. Ese artículo dispone tan solo que cada Miembro de la OMC "deberá tomar las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que, dentro de su territorio, los gobiernos y autoridades regionales y locales observen las disposiciones del [GATT

de 1994]". No es aplicable en este caso, porque la presente diferencia no concierne a que "los gobiernos y autoridades regionales y locales [de las CE] observen las disposiciones del [GATT de 1994]", sino que se refiere a la observancia de las disposiciones del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 por las propias CE.

4.455 Además, las CE no invocan formalmente el párrafo 12 del artículo XXIV, pero aducen que "cualquier interpretación del párrafo 3 a) del artículo X que afecte a la distribución interna de competencias es incompatible con el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT". Al parecer, las CE tratan de dar la vuelta al párrafo 12 del artículo XXIV. El párrafo 13 del *Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* deja claro que el párrafo 12 del artículo XXIV no exime a un Miembro de sus obligaciones ni las modifica. Ese párrafo expone explícitamente que "[e]n virtud del GATT de 1994, cada Miembro es plenamente responsable de la observancia de todas las disposiciones de ese instrumento". En cambio, las CE parecen estar afirmando que si se lee a la luz del párrafo 12 del artículo XXIV, el párrafo 3 a) del artículo X tendrá distintos significados para diferentes Miembros, dependiendo de que el Miembro, como cuestión de "la distribución interna de competencias", haya decidido que los gobiernos regionales han de prescribir y aplicar determinados instrumentos para la aplicación de su legislación aduanera (como las sanciones y las auditorías).

4.456 Esta interpretación de que el párrafo 3 a) del artículo X se aplica de manera diferente a distintos Miembros no tiene fundamento en el párrafo 3 a) del artículo X ni en el párrafo 12 del artículo XXIV. Este último no limita ni estipula una reserva de otro tipo a la obligación de una aplicación uniforme. Es más, el párrafo 12 del artículo XXIV no estipula reservas a la *aplicabilidad* de las obligaciones en el marco del GATT en absoluto. Más bien, es una disposición estricta relativa al *cumplimiento* de determinadas obligaciones, que debe interpretarse para evitar "desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los Estados unitarios y aquellos de los Estados federales". (Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafos 63 y 64)

4.457 Que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 no apoya una interpretación del párrafo 3 a) del artículo X que varía de un Miembro a otro lo demuestra también una comparación de esa disposición con una disposición de otro acuerdo de la OMC -el *Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios* ("AGCS")- que, efectivamente, estipula reservas a las obligaciones de los Miembros. El párrafo 2 a) del artículo VI del AGCS, al igual que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, obliga a los Miembros a mantener o establecer tribunales o procedimientos que permitan la pronta revisión de determinadas decisiones administrativas. No obstante, se estipula una reserva expresa a esa obligación en el siguiente apartado, que dispone que "[l]as disposiciones del apartado a) no se interpretarán en el sentido de que impongan a ningún Miembro la obligación de establecer tales tribunales o procedimientos cuando ello sea incompatible con su estructura constitucional o con la naturaleza de su sistema jurídico". En el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no figura una excepción análoga.

4.458 Además, no debe pasar inadvertido que las CE, pese a su oblicua afirmación sobre "consecuencias constitucionales" y su referencia a "principios fundamentales del ordenamiento jurídico de las CE", no invocan formalmente el párrafo 12 del artículo XXIV. De haberlo hecho, habrían asumido la carga de demostrar que las deficiencias en la aplicación uniforme de la legislación aduanera de las CE conciernen a asuntos "que escapan al control del gobierno central porque caen fuera de su jurisdicción en virtud de la distribución constitucional de poderes". (Informe del Grupo Especial del GATT, *Estados Unidos - Bebidas alcohólicas*, párrafo 5.79.) Evidentemente, se trata de una carga que las CE no están dispuestas a asumir.

b) Los Estados Unidos no pretenden la armonización de los sistemas de administración aduanera de los Miembros de la OMC

4.459 Por último, un aspecto fundamental del afán de las CE por imponer una norma relativa para la aplicación del párrafo 3 del artículo X es su interpretación errónea de que las alegaciones de los Estados Unidos buscan "la armonización de los sistemas de administración aduanera de los Miembros de la OMC a través del recurso al ESD". En contra de la afirmación de las CE, los Estados Unidos no aducen que el párrafo 3 del artículo X obligue a cada Miembro a tener un organismo aduanero y un tribunal aduanero únicos. Los Estados Unidos reconocen la diversidad de los sistemas de administración aduanera entre los Miembros de la OMC, lo que queda patente en parte por las respuestas a las preguntas 10 y 11 formuladas por el Grupo Especial a los terceros. Cabe observar, no obstante, que cada uno de esos terceros destacó la existencia de un solo organismo aduanero centralizado al explicar cómo garantiza la aplicación uniforme de la legislación aduanera en todo su territorio. Si es improcedente que los Estados Unidos aduzcan que el párrafo 3 a) del artículo X prescribe la armonización de los sistemas de las administraciones aduaneras de los Miembros, es igualmente improcedente que las CE sostengan que su condición particular en la OMC, donde quizás sea el único Miembro que no tiene un solo organismo aduanero centralizado, es motivo de que estén sujetas a una norma distinta respecto de la obligación de asegurar una aplicación uniforme.

3. El párrafo 3 a) del artículo X no es una "disposición subsidiaria", "que establece normas mínimas", que se infringe únicamente cuando de la aplicación no uniforme de la legislación aduanera de un Miembro se desprende una pauta discernible

a) No existe fundamento para la caracterización del párrafo 3 a) del artículo X por las CE como "disposición subsidiaria", "que establece normas mínimas"

4.460 Las CE persisten en caracterizar el párrafo 3 a) del artículo X como "una disposición que establece normas mínimas" o "una disposición subsidiaria." Esta caracterización se basa íntegramente en una referencia de pasada del Órgano de Apelación en su informe sobre el asunto *Estados Unidos - Camarones*. Esa afirmación, sin embargo, no apoya la menor importancia que las CE otorgan al párrafo 3 a) del artículo X.

4.461 Las CE hacen una lectura errónea de la frase "normas mínimas" utilizada en el informe sobre el asunto *Estados Unidos - Camarones* como si significara, en efecto, "normas de una mayor tolerancia" o "normas de menor importancia". Ahora bien, en el contexto está claro que no era este el sentido en el que el Órgano de Apelación empleó la expresión. El tema en litigio era una ley para la que los Estados Unidos habían invocado una excepción en virtud del artículo XX del GATT. El Órgano de Apelación consideró que el párrafo 3 del artículo X era una disposición que establecía prescripciones análogas a las "debidas garantías procesales" que sería pertinente para analizar si se habían cumplido las prescripciones del preámbulo del artículo XX (párrafo 182). Ahora bien, el Órgano de Apelación no estaba investigando en qué medida la norma del párrafo 3 del artículo X es estricta o laxa. De hecho, constató que era evidente que diversos aspectos de la medida en litigio eran "contrarios al espíritu, si no a la letra, del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994". (párrafo 183)

4.462 Así pues, en el contexto, es evidente que al utilizar la frase "normas mínimas", el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* no formulaba un juicio acerca de si el umbral del párrafo 3 del artículo X es alto o bajo, sino de que existe un umbral que debe cumplirse.

4.463 En cualquier caso, no está claro de qué manera la caracterización del párrafo 3 a) del artículo X por las CE como una "disposición que establece normas mínimas" se traduce en una norma jurídica que pueda ser aplicada por el Grupo Especial. Las CE sugieren que al utilizar "normas mínimas" y frases similares, lo que en realidad querían decir era que sólo puede establecerse una infracción de la obligación de aplicación uniforme si se demuestra la aplicación no uniforme sobre la base de "una pauta general" o de "pautas generales" de la administración aduanera.

b) Los Estados Unidos no tienen la obligación de demostrar la existencia de una "pauta" de aplicación no uniforme para establecer que las CE han infringido su obligación dimanada del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

i) La obligación relativa a la "pauta" que reivindican las CE no tiene fundamento en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

4.464 El informe del Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* en el que las CE se basan para caracterizar como "disposición que establece normas mínimas" el párrafo 3 del artículo X no hace ninguna alusión a una obligación relativa a pautas. En efecto, la constatación del Órgano de Apelación de que en la aplicación de la medida en litigio en ese asunto no se habían cumplido las normas de transparencia y equidad procesal se basaba en una constatación de que el sistema de aplicación de esa medida carecía de determinadas salvaguardas formales, y no en una constatación de la existencia de una "pauta" de no transparencia o de falta de equidad procesal como cuestión de práctica (párrafo 181). Del mismo modo, las CE no brindan ningún mecanismo de salvaguarda para prevenir la aplicación no uniforme de su legislación aduanera por las autoridades de los 25 diferentes Estados miembros.

4.465 Algo más fundamental es que en el texto del párrafo 3 a) del artículo X (o en cualquier otra disposición de la OMC) no existe fundamento para la tesis de que se establece una infracción únicamente cuando se demuestra una pauta de aplicación no uniforme. El único grupo especial que ha examinado a fondo la obligación de aplicación uniforme en el párrafo 3 a) del artículo X -el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Pieles y cueros*- no se refirió a una obligación relativa a una "pauta" para establecer una infracción de esa obligación (párrafos 11.80 a 11.83). Ese grupo especial constató que se desprendía "claramente que lo que se trata de indicar es que la legislación aduanera no debe variar, que es preciso que todos los exportadores e importadores puedan esperar el mismo trato en momentos y lugares distintos y en comparación con otras personas" (párrafo 11.83). Tal y como se explicó en ese caso la obligación de uniformidad en la aplicación, es perfectamente posible infringirla incluso si de varios casos de aplicación no uniforme no se desprende una pauta discernible.

ii) Las CE ni siquiera llegan a explicar lo que en su opinión han de establecer los Estados Unidos para cumplir el denominado requisito sobre la "pauta"

4.466 El mero hecho de que la "pauta" sería un elemento de una infracción además de la aplicación "no uniforme" demuestra el error esencial del enfoque propuesto por las CE. El texto del párrafo 3 a) del artículo X se refiere a administrar de "manera uniforme". No se refiere a una "pauta" de aplicación "no uniforme".

4.467 Además, el enfoque que proponen las CE no tiene ningún sentido incluso si se le aísla del texto convenido del GATT de 1994. El significado corriente de la palabra "pattern" (pauta) en su relación con el presente caso es "*[a]n arrangement or order discernible in objects, actions, ideas, situations, etc.*" (disposición u orden que puede apreciarse en objetos, actos, ideas, situaciones, etc.). En la base del concepto de pauta está que la disposición o el orden sean apreciables. En la base del concepto de no uniformidad está la ausencia de esas mismas cualidades. Así pues, una pauta de aplicación no uniforme parecería referirse, paradójicamente, a un carácter apreciable de la disposición o el orden en algo que carece de un carácter apreciable de disposición u orden (o sea, que no es uniforme). Pese a esta aparente anomalía, las CE no se extienden acerca del requisito de "pauta".

4.468 Las CE hacen referencias indirectas a una "muestra estadísticamente significativa" de no uniformidad, a casos de no uniformidad que son "tan extendidos y frecuentes que constituyen una pauta global de no uniformidad" y a casos de no uniformidad "a gran escala", como si quisieran dar a entender que equiparan la existencia de una pauta de aplicación no uniforme a la frecuencia y el

alcance de la aplicación no uniforme. No obstante, esas referencias no aportan claridad sobre lo que las CE creen que hay que demostrar para poder cumplir el denominado requisito de pauta.

4.469 Más importancia reviste el hecho de que la sugerencia de que existe algún criterio cuantitativo para evaluar la uniformidad de aplicación no concuerde con lo que las propias CE han reconocido en el sentido de que "el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige la uniformidad por sí misma, sino que trata de proteger los intereses de los comerciantes". Los intereses de los comerciantes en la aplicación uniforme de las leyes de aduanas no dependen de la significación estadística de los casos de aplicación no uniforme, igual que no dependen de si los casos de aplicación no uniforme exponen una pauta, en el sentido corriente de esa expresión, o suceden aleatoriamente.

iii) La referencia a una "pauta" en el informe del Grupo Especial sobre el asunto Estados Unidos - Acero laminado en caliente *no guarda relación con la presente diferencia*

4.470 Además, la reivindicación por las CE de un requisito de pauta se inspira en una sola frase extraída del informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*. El concepto de pauta guardaba relación con la cuestión en litigio en esa diferencia de una manera que no es pertinente en la presente diferencia.

4.471 En toda diferencia en la que entre en juego una alegación de aplicación *no uniforme*, es menester preguntar cómo sería la aplicación *uniforme*. En la presente diferencia, que atañe a una alegación de no uniformidad geográfica general de aplicación, se compara el sistema vigente en las CE con un sistema en el que los comerciantes pueden esperar razonablemente un trato del mismo tipo y en la misma forma al introducir sus mercancías por distintos Estados miembros de las CE. En la medida en que los comerciantes no son objeto del mismo tipo de trato y en la misma forma al introducir mercancías a través de distintos Estados miembros de las CE, ese estado de cosas puede reconocerse como aplicación no uniforme, constituya o no una pauta esa aplicación no uniforme.

4.472 A la inversa, en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* la alegación pertinente era que una aplicación concreta de la legislación antidumping estadounidense en una investigación concreta equivalía a la aplicación no uniforme de la legislación antidumping estadounidense. Esa tesis se podía poner a prueba únicamente si el grupo especial entendía lo que era la aplicación uniforme de la legislación antidumping estadounidense.

4.473 La alegación en litigio en la presente diferencia es muy diferente. Los Estados Unidos aducen que el sistema de las CE de aplicación de la legislación aduanera en su conjunto no resulta en la aplicación uniforme que prescribe el párrafo 3 a) del artículo X. No hacen falta pruebas de la existencia de una pauta para calificar el sistema de aplicación de la legislación aduanera de las CE como uno que no cumple esa obligación.

4.474 Es curioso que, al abogar en pro de una prescripción genérica de "pauta", las CE citen el resumen por el Grupo Especial del argumento de los Estados Unidos en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*. Ahora bien, en esa diferencia los Estados Unidos no abogaban en pro de una prescripción genérica de "pauta". Muy al contrario, los Estados Unidos abogaban en pro de que se hiciera una distinción entre la forma en que el Grupo Especial analizó las alegaciones del Japón en el marco del párrafo 3 del artículo X y la forma en que los grupos especiales habían analizado alegaciones en el marco del párrafo 3 del artículo X en diferencias en las que se impugnaba la administración general de medidas concretas de aplicación general. La presente es una diferencia en la que los Estados Unidos impugnan la aplicación global de la legislación aduanera de las CE. En ese sentido, la alegación de los Estados Unidos es más parecida a la alegación en litigio en el asunto *Estados Unidos - Camarones* que a la alegación en litigio en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*.

c) Las CE reconocen la existencia de divergencias entre las autoridades de los Estados miembros en cuanto a la aplicación de la legislación aduanera de las CE

4.475 Por último, es importante recordar que las propias CE reconocen que, efectivamente, existen divergencias en la aplicación de su legislación aduanera entre las 25 autoridades de los diferentes Estados miembros. Aducen que, cuando ocurren, o bien se reconcilian mediante diversos instrumentos e instituciones de las CE, o sencillamente carecen de importancia o no guardan relación con la obligación de las CE en el marco del párrafo 3 a) del artículo X. Ahora bien, reconocen que existen divergencias, y no debemos perder de vista ese aspecto.

4.476 Además de haber reconocido en general la existencia de divergencias en la aplicación de su legislación aduanera, las CE han reconocido en particular tales divergencias en el contexto de la presente diferencia. Específicamente, han reconocido divergencias en las esferas de las medidas que establecen sanciones y los procedimientos de auditoría, los enfoques por los que se permiten determinados métodos de valoración en aduana, y la aplicación del análisis de condiciones económicas para el empleo del denominado régimen de transformación bajo control aduanero.

4.477 Al señalar a la atención los distintos reconocimientos por parte de las CE de la aplicación no uniforme de su legislación aduanera, los Estados Unidos se proponen demostrar que el argumento de las CE relativo a la carga de la prueba de los Estados Unidos no está escrito en una hoja limpia. Las CE aducen que los Estados Unidos no han cumplido su carga de la prueba, pero sus propias declaraciones les impiden afirmar que las autoridades aduaneras de los 25 distintos Estados miembros administran la legislación aduanera de las CE como lo haría una sola autoridad para todas las CE.

4. Los instrumentos que, según las CE, garantizan la aplicación uniforme no sirven para ello

4.478 La afirmación por las CE de que determinados instrumentos de las CE impiden que se produzcan divergencias entre los Estados miembros o las subsanan cuando se producen es el eje central del argumento de las CE en el sentido de que cumplen con su obligación de aplicación uniforme en el marco del párrafo 3 a) del artículo X.

a) La mayoría de los instrumentos que según las CE aseguran una aplicación uniforme no son vinculantes, son de uso discrecional o tienen una naturaleza sumamente general

4.479 En primer lugar, las respuestas de las CE a las preguntas del Grupo Especial recalcan la naturaleza no vinculante, discrecional o extremadamente general de los instrumentos que supuestamente garantizan la aplicación uniforme. Por ejemplo: a) Las CE reconocen que las Directrices Administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante (EBTI/IAV) y su funcionamiento "no son jurídicamente vinculantes"; b) Cuando se les pregunta acerca de "mecanismos prácticos" para hacer frente a la situación en la que los Estados miembros no están de acuerdo con la clasificación de una mercancía concreta, las CE responden que los Estados miembros "*deben* consultarse mutuamente," que si persiste el desacuerdo el Comité del Código Aduanero "*podrá* examinar la cuestión," y que "[e]n la práctica, el funcionario competente del Estado miembro interesado presentará la cuestión a la Comisión" (aunque las CE no dicen qué norma le obligará a presentarla); c) Al preguntarles de qué forma, "en términos prácticos", reconcilia el Comité del Código Aduanero las diferencias en la aplicación de las normas de las CE sobre valoración en aduana, las CE explican que "[e]l Comité podrá emitir opiniones" que, como explica más tarde, no son jurídicamente vinculantes para las autoridades aduaneras de los Estados miembros; y d) Cuando se les pide que expliquen "en términos prácticos" una constatación del TJCE de que la legislación de las CE se debe aplicar uniformemente en todos los Estados miembros, las CE declaran que "esto significa que [las autoridades de los Estados miembros] deben interpretar y aplicar la legislación comunitaria de conformidad con toda la orientación disponible sobre su sentido correcto".

4.480 A menudo, al referirse a los instrumentos que garantizan la aplicación uniforme, las CE echan mano del deber general de cooperación de los Estados miembros en virtud del artículo 10 del Tratado de la CE. Esa disposición enuncia una obligación general de los Estados miembros en el marco de la legislación de las CE. Es revelador que, al referirse a ella como instrumento que garantiza la aplicación uniforme, las CE no se refieren a ninguna medida que ponga en práctica esa obligación general en el ámbito específico de la administración aduanera.

b) La información arancelaria vinculante no garantiza la aplicación uniforme

4.481 Un instrumento más concreto para garantizar la aplicación uniforme que las CE señalan es la información arancelaria vinculante. Las respuestas de las CE a las preguntas confirman que la IAV no garantiza la aplicación uniforme.

i) El sistema de las CE permite la búsqueda de IAV favorable entre las autoridades aduaneras de los 25 Estados miembros

4.482 Un motivo de que la IAV no garantice la aplicación uniforme es que los comerciantes pueden dedicarse a usar la IAV más ventajosa. O sea, en un sistema en que cada una de las diferentes autoridades aduaneras de los 25 Estados miembros está encargada por separado de expedir IAV, los comerciantes podrán manipular el sistema para obtener la clasificación óptima para sus mercancías, con independencia de que esa clasificación haya sido convenida uniformemente entre todos los Estados miembros. La oportunidad de manipulación se ve propiciada por el hecho de que, en virtud del apartado 2 del artículo 12 del Código Aduanero Comunitario (Estados Unidos - Prueba documental 5), la IAV "tendrá carácter vinculante para las autoridades aduaneras frente al titular de la solicitud de información", pero no es vinculante para el titular.

4.483 Efectivamente, en su introducción explicativa que acompaña al proyecto de Código Aduanero Comunitario Modernizado (Estados Unidos - Prueba documental 32), las CE reconocen que el problema del uso de la IAV más ventajosa es un factor que redunda en detrimento de una aplicación uniforme. Así pues, las CE declaran que "se propone ampliar el efecto vinculante de la decisión [es decir, la IAV] también al (a los) titular(es) de la decisión con objeto de evitar que el sistema únicamente se utilice donde el solicitante esté satisfecho con el resultado" (página 12). De igual forma, en sus argumentos en la diferencia *CE - Trozos de pollo,* las CE explicaron que "de conformidad con la legislación comunitaria, es posible retirar una solicitud de IAV cuando el importador considera desfavorable el resultado". (Informe del Grupo Especial, párrafo 7.261)

4.484 En la primera reunión del Grupo Especial, los Estados Unidos entendieron que las CE afirmaban que la situación en la que la IAV se utiliza únicamente cuando el solicitante está satisfecho del resultado es una circunstancia más bien poco frecuente. En una pregunta formulada después de la primera reunión del Grupo Especial, los Estados Unidos pidieron a las CE que confirmaran esa afirmación. La escueta respuesta de las CE fue que "[las CE] no tienen ninguna prueba que indique que esas situaciones son frecuentes", admitiendo al mismo tiempo en la práctica que no tienen pruebas de que tales situaciones sean "poco frecuentes". Esta respuesta no es sorprendente. Un problema del uso de la IAV más ventajosa desde el punto de vista de la aplicación uniforme es precisamente el hecho de que se hace de tal manera que no quedan pruebas de ello y por eso es difícil de descubrir. Difícilmente puede esperarse que los comerciantes den la cara y admitan públicamente que se están aprovechando de la oportunidad de obtener una clasificación óptima de sus mercancías entre 25 autoridades aduaneras distintas.

ii) La facultad de la autoridad aduanera de un Estado miembro de revocar IAV sobre la única base de su propia reconsideración de las normas de clasificación aplicables, como se afirma en la decisión Timmermans*, redunda en detrimento de la aplicación uniforme*

4.485 El examen del caso *Timmermans* que hacen las CE y la posibilidad de que las autoridades de los Estados miembros modifiquen o revoquen IAV por iniciativa propia refuerza el argumento de que la IAV no garantiza una aplicación uniforme de la legislación aduanera de las CE. El asunto *Timmermans* fue el caso en el que el Tribunal dictaminó que las autoridades aduaneras de un Estado miembro pueden modificar o revocar IAV incluso cuando el único fundamento para la modificación o revocación sea la reconsideración por las propias autoridades de las normas de clasificación aplicables. El Tribunal sacó esa conclusión pese a la observación del Abogado General (Prueba documental - Estados Unidos 21) de que "[admitir tal] posibilidad de revocación resulta difícilmente compatible tanto con el objetivo de aplicación uniforme de la nomenclatura aduanera como con el objetivo de seguridad jurídica que se persigue mediante la creación de las IAV". (párrafo 59)

4.486 Al explicar su desacuerdo con la observación del Abogado General, las CE declararon que "[l]a clasificación correcta en la nomenclatura combinada no es una cuestión discrecional, como tampoco lo es la revocación de IAV cuando se ha comprobado que son incompatibles con la nomenclatura combinada". Las CE indicaron seguidamente que "el Tribunal dejó claro que las autoridades aduaneras podrán revocar la IAV únicamente si es incorrecta".

4.487 Existe una grave deficiencia en la lógica de las CE. En ella se da por supuesto, sin fundamento alguno, que todas las autoridades de los Estados miembros conocerán objetivamente la clasificación correcta de cualquier mercancía dada y que, por lo tanto, "no es una cuestión discrecional". En ese supuesto, la aplicación de las normas de clasificación es siempre un ejercicio sencillo y mecánico, y si la autoridad de un Estado miembro revoca IAV, tiene que deberse a un error evidente en la realización de ese ejercicio, cuya rectificación fomentará forzosamente la uniformidad.

4.488 Las CE hacen caso omiso del hecho de que aplicar normas de clasificación a una mercancía concreta tal vez obligue a una autoridad aduanera a formular ciertos juicios y que, especialmente en asuntos complejos, esos juicios podrán evolucionar después de una reflexión. No se trata de que la clasificación correcta sea cuestión discrecional, sino de que las constataciones que conducen a la determinación de la clasificación correcta tal vez entrañen ejercicios de discreción, en el sentido de juicio. No es correcto que las CE den por supuesto que la clasificación de una mercancía concreta sea siempre objetivamente conocida y evidente para las 25 autoridades aduaneras en su totalidad. Al basarse en la constatación del Tribunal de que "las autoridades aduaneras podrán revocar la IAV únicamente si es incorrecta", y afirmar que la discreción no desempeña ningún papel en esa medida, las CE interpretan incorrectamente el sentido en el que se utiliza discreción y suscitan la cuestión de quién determina que la IAV es incorrecta. Por supuesto, en ausencia de un reglamento de la Comisión, *es la propia autoridad del Estado miembro* quien determina que la IAV inicial es incorrecta. En consecuencia, no cabe dar por supuesto que, cuando una autoridad aduanera revoca IAV basándose en su evaluación revisada de la clasificación correcta de la mercancía, esa medida resultará forzosamente en la clasificación objetivamente correcta y la armonizará por tanto con las autoridades aduaneras de los demás Estados miembros, dando lugar a una aplicación uniforme.

4.489 Cuando una autoridad de un Estado miembro expide inicialmente una IAV -es de suponer que en la creencia de que ha aplicado las normas de clasificación correctamente- se supone que esa IAV es vinculante para las autoridades de otros Estados miembros respecto del titular concreto de la IAV y las mercancías de que se trate. Si esa autoridad se replantea su aplicación de las normas de clasificación -una vez más, presuntamente creyendo que la aplicación revisada de las normas de clasificación es correcta- no existe un mecanismo que imponga su reconsideración con carácter uniforme. Es en este sentido en el que la autonomía del Estado miembro que se reconoce en el asunto *Timmermans* redunda en detrimento de la aplicación uniforme.

4.490 Un último aspecto que cabe recordar respecto de la IAV es el sentido muy limitado en el que la IAV es ostensiblemente vinculante de hecho. Como subraya Corea en su comunicación presentada en calidad de tercero, "[l]a IAV de un Estado miembro no obliga necesariamente a otro Estado miembro a clasificar del mismo modo mercancías similares o idénticas importadas por una persona distinta del titular de la IAV, lo que da lugar a clasificaciones y tratos diferentes para el mismo producto u otro similar". Las propias CE señalaron a la atención esta aplicabilidad limitada de IAV en la diferencia *CE - Trozos de pollo*.

c) La posibilidad de revisión por los tribunales de los Estados miembros como medio "normal" de reconciliar divergencias en la aplicación de la legislación aduanera de las CE por los Estados miembros no cumple la obligación que corresponde a las CE en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 de aplicar su legislación aduanera de manera uniforme

4.491 El instrumento que, según las CE, garantiza una aplicación uniforme que es de carácter vinculante es la revisión de las decisiones administrativas aduaneras por los tribunales de los Estados miembros. El hincapié que las CE hacen en este instrumento es problemático por tres motivos por lo menos. En primer lugar, como las decisiones de un tribunal de un Estado miembro son sólo obligatorias dentro de ese Estado miembro, un recurso ante un tribunal de un Estado miembro no dará lugar necesariamente a una aplicación uniforme. Cabe señalar que las CE confirman que no disponen de un mecanismo para notificar a los tribunales de otros Estados miembros el resultado de la revisión de una decisión aduanera en un tribunal de un Estado miembro. En ausencia de un mecanismo de esa índole, es difícil entender cómo podría un tribunal de un Estado miembro tener en cuenta las decisiones pertinentes de tribunales de otros Estados miembros, para qué hablar de tomar la medida de tratar de imponer la aplicación uniforme alineándose afirmativamente con los tribunales de otros Estados miembros.

4.492 En segundo lugar, mientras que la interposición de un recurso ante un tribunal de un Estado miembro podría o no podría conducir a la aplicación uniforme en el caso de una simple divergencia entre dos Estados miembros, no aborda la situación de una divergencia en la que intervinieran varios Estados miembros. En ese caso, las CE evidentemente exigirían que el comerciante interpusiera recurso ante un tribunal de cada uno de varios Estados miembros para poder lograr la aplicación uniforme. Eso es imponer una carga particularmente onerosa a los comerciantes para lograr un resultado -la aplicación uniforme- al que tienen derecho como cuestión de equidad procesal en primer lugar, en cumplimiento de los dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

4.493 En tercer lugar, la insistencia de las CE en los recursos ante tribunales de los Estados miembros da la vuelta al párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Toman una obligación en el marco del GATT con arreglo a la cual los comerciantes tienen derecho a determinados elementos de equidad procesal en la administración aduanera y afirman que se cumple en gran medida mediante un sistema que impone a los comerciantes la obligación de superar obstáculos jurídicos para poder obtener esos elementos de equidad procesal. Esto puede comprobarse, por ejemplo, en la afirmación de las CE en su declaración en la primera reunión del Grupo Especial de que "cuando un comerciante no agota todos los recursos y posibilidades procesales que le ofrece el sistema de un Miembro de la OMC, la falta de uniformidad que de ello se derive no puede atribuirse a una deficiencia del sistema de ese Miembro".

4.494 El párrafo 3 del artículo X contiene un par de obligaciones complementarias que ofrecen equidad procesal a los comerciantes. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X, un comerciante podrá esperar que, de conformidad con las obligaciones de un Miembro en el marco de la OMC, su legislación aduanera se aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable en todo el territorio de ese Miembro. Según el párrafo 3 b) del artículo X, el comerciante podrá esperar, de conformidad con las obligaciones de un Miembro en el marco de la OMC, acceso a un foro independiente para la pronta revisión y rectificación de casos concretos de la aplicación uniforme de

la legislación aduanera del Miembro. En virtud de esa misma disposición, el comerciante podrá esperar no sólo que las decisiones de esos foros independientes serán ejecutadas por los organismos encargados de la administración aduanera, sino también que regirán la práctica de todas esas autoridades, de forma que la legislación aduanera seguirá siendo aplicada de manera uniforme a la luz de esas decisiones.

4.495 Sin embargo, las CE parecen afirmar que el cumplimiento del párrafo 3 b) del artículo X equivaldría necesariamente en sí mismo al cumplimiento del párrafo 3 a) del artículo X. Dicho de otro modo, el enfoque de las CE significaría que el párrafo 3 b) del artículo X haría superfluo el párrafo 3 a) del artículo X. Tal y como lo describen las CE, el comerciante no tiene necesariamente derecho a esperar que la legislación aduanera de las CE sea aplicada de manera uniforme en primer lugar. Más bien, es a través de ejercer el derecho a la revisión que el comerciante *podrá* lograr en su momento la aplicación uniforme.

4.496 Además, según la explicación de las CE, los comerciantes deben estar dispuestos no sólo a pasar por un primer nivel de revisión con objeto de lograr la aplicación uniforme, sino a "agotar todos los recursos y posibilidades procesales que les ofrece el sistema". Salvo que un comerciante esté dispuesto a interponer recursos en múltiples instancias, posiblemente en más de un Estado miembro, incluidas las oportunidades de reenvío prejudicial de cuestiones al TJCE -proceso que en sí mismo lleva por término medio de 19 a 20 meses para completarse- toda falta de uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera de las CE que de ello se derive "no puede imputarse a una deficiencia del sistema [de las CE]".

4.497 Los Estados Unidos declaran que, al hacer hincapié en los recursos ante tribunales de los Estados miembros como elemento fundamental para garantizar la aplicación uniforme, las CE han tomado una obligación de las CE de aportar un elemento importante de equidad procesal a los comerciantes y han desplazado a éstos la obligación de que ellos mismos busquen ese elemento de equidad procesal, lo que va en contra del texto del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 y del foco de atención ampliamente reconocido de ese artículo en los intereses de los comerciantes.

5. Al argumentar que asuntos como las medidas que establecen sanciones y los procedimientos de auditoría son ajenos al ámbito de su obligación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, las CE se basan en una interpretación errónea de lo que significa "aplicar" la legislación aduanera

4.498 No existen normas comunitarias que prescriban sanciones para las infracciones de la legislación aduanera de las CE. Como ha reconocido la propia Comisión de las CE, "Determinadas infracciones pueden ser consideradas delitos graves en un Estado miembro que pueden ser sancionadas con penas de prisión, mientras que en otro Estado miembro ese mismo acto puede ser sancionado con una multa de menor cuantía, o ni siquiera esto". (Estados Unidos - Prueba documental 32, página 13)

4.499 En cuanto a los procedimientos de auditoría, existen diferencias entre las prácticas de trabajo, incluido el equilibrio entre la utilización de exámenes de mercancías en el momento de la importación y las auditorías posteriores al despacho. Como observó el Tribunal de Cuentas de las CE, debido a esas diferencias, "las distintas autoridades aduaneras son reticentes a aceptar las decisiones de las demás". (Estados Unidos - Prueba documental 14, párrafo 37). Al concluir las auditorías, las autoridades de algunos Estados miembros entregan a los comerciantes lo que equivale a información de valoración vinculante, que éstos pueden invocar en operaciones futuras, mientras que otras no lo hacen.

4.500 Al desestimar los casos antes citados de aplicación no uniforme, las CE adujeron que quedan fuera del ámbito de su obligación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 porque las sanciones y los procedimientos de auditoría no son medidas del tipo que se describe en el

párrafo 1 del artículo X, y porque las sanciones y los procedimientos de auditoría no constituyen una aplicación de las medidas que se describen en el párrafo 1 del artículo X. Por otro lado, las CE adujeron que determinadas directrices de las CE hacen que las sanciones y los procedimientos de auditoría sean uniformes en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X. De estos argumentos, aflora como línea principal la tesis de que las diferencias entre Estados miembros en cuanto a sanciones y procedimientos de auditoría no constituyen una aplicación no uniforme de medidas comunitarias que indiscutiblemente quedan dentro del ámbito del párrafo 1 del artículo X.

a) Las CE se basan en una interpretación errónea de lo que significa "aplicar" la legislación aduanera

4.501 En su respuesta a la pregunta 93 del Grupo Especial, las CE se refieren a la definición de la expresión "aplicar" y declaran que, habida cuenta de esa definición, "el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la ejecución en casos concretos de las leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones de aplicación general a que alude el párrafo 1 del artículo X del GATT". Seguidamente argumentan que dado que una ley de un Estado miembro, como una ley que establece sanciones, "tiene que ser ejecutada o aplicada", "no puede afirmarse que esa ley 'ejecute' o 'aplique' otra". Este argumento está viciado por varias razones.

4.502 En primer lugar y de forma fundamental, las CE se basan en una definición sumamente estricta y errónea del término "aplicar". Comienzan correctamente al referirse a la definición del diccionario de "aplicar" como "ejecutar". Ahora bien, seguidamente pretenden parafrasear la definición y, al hacerlo, introducen un concepto ajeno a la definición del diccionario y recurren a fondo a ese concepto en su argumento. Concretamente, afirman que "en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, 'aplicar' significa ejecutar las leyes y reglamentos generales, es decir, aplicarlos *en casos concretos*". Así pues, las CE aducen que únicamente cuando una autoridad de un Estado miembro aplica la legislación aduanera de las CE "en casos concretos" está aplicando esa legislación, y que sólo las divergencias en la aplicación de la legislación aduanera de las CE "en casos concretos" pueden constituir una aplicación no uniforme. A la inversa, según el argumento de las CE, el simple empleo de instrumentos radicalmente diferentes por las autoridades aduaneras de distintos Estados miembros para poner en práctica la legislación aduanera de las CE no constituye una aplicación no uniforme.

4.503 Por supuesto, el concepto de "casos concretos" no figura en ninguna parte en la definición de "aplicar" que las propias CE citan. Los Estados Unidos no cuestionan que la aplicación de leyes y reglamentos en casos concretos es una medida abarcada por el término "aplicar". No obstante, los Estados Unidos cuestionan la sugerencia de las CE de que el término "aplicar" se limita a la aplicación en casos concretos.

4.504 De hecho, un examen más minucioso del término "aplicar" pone en evidencia la ausencia de cualquier concepto limitador de esa índole. Las CE citan correctamente la definición del diccionario de "aplicar" como "ejecutar". Pero no tratan de definir "ejecutar". En efecto, el sentido corriente de "execute" (ejecutar) en el presente contexto es "*[c]arry out, put into effect*" (llevar a cabo, poner en práctica). La cuestión, entonces, es si los procedimientos de auditoría y las disposiciones de diferentes Estados miembros que establecen sanciones ponen en práctica la legislación aduanera de las CE, o si es únicamente la aplicación de esa legislación por las autoridades aduaneras en casos concretos la que las pone en práctica. La respuesta es que los procedimientos de auditoría y las disposiciones que establecen sanciones ponen en práctica la legislación aduanera de las CE al verificar e imponer el cumplimiento de esa legislación.

b) Las sanciones y los procedimientos de auditoría desempeñan una función fundamental en la puesta en práctica de la legislación aduanera de las CE

4.505 La aplicación de la legislación aduanera de las CE depende en gran parte de los actos de los propios comerciantes. Son los comerciantes los que efectúan declaraciones y proporcionan a las autoridades aduaneras información relativa a la clasificación y valoración de mercancías. A las autoridades les resultaría imposible inspeccionar minuciosamente cada expedición o verificar el contenido de cada declaración antes del despacho. A ello se debe que los instrumentos para verificar y hacer cumplir la legislación aduanera sean fundamentales para "llevar a cabo" o "poner en práctica" esa legislación.

4.506 Dada la función crítica que las auditorías y las sanciones desempeñan en la no puesta en práctica de la legislación aduanera de las CE, resulta algo sorprendente que las CE afirmen por ejemplo, que "las disposiciones que establecen la sanción por una infracción de las leyes aduaneras no se refieren en sí mismas a la aplicación de las leyes aduaneras". Desde luego, en otros contextos (por ejemplo, CE - Prueba documental 41, página 1) las CE han reconocido la relación crítica entre las sanciones y la aplicación de la legislación aduanera.

4.507 La posición de las CE respecto de las auditorías causa también perplejidad. En su Primera comunicación escrita, las CE afirmaron que las auditorías, al igual que las sanciones, "no forman parte de los regímenes aduaneros, y por lo tanto no conciernen a la aplicación de la legislación aduanera como tal". En su respuesta a la pregunta 64 e) del Grupo Especial, las CE explicaron que no consideran que las auditorías sean regímenes aduaneros "[p]orque no son uno de los regímenes citados en el apartado 16 del artículo 3 del CAC". No obstante, el sentido específico en el que las CE utilizan el término "régimen aduanero" a los efectos del CAC no influye en absoluto en el hecho de que las auditorías sean o no regímenes aduaneros para aplicar el CAC. En efecto, las CE así lo han reconocido en respuesta a la pregunta 64 c) del Grupo Especial.

4.508 En otros contextos, las CE han reconocido que las auditorías son instrumentos para aplicar la legislación aduanera de las CE. Por ejemplo, la Guía de sobre auditorías de aduana que figura en la Prueba documental 90 presentada por las CE se refiere a los artículos 13 a 16 del CAC como "una base jurídica para la realización de auditorías". (Un marco para los controles *a posteriori* y los controles por auditoría, página 4). El artículo 13 del CAC, a su vez, enuncia que las autoridades aduaneras de los Estados miembros podrán adoptar "cualquier medida de control que juzguen necesaria para la correcta aplicación de la normativa aduanera".

c) Las medidas que establecen sanciones y los procedimientos de auditoría se caracterizan correctamente como instrumentos para la aplicación de la legislación aduanera de las CE

4.509 Las CE sostienen que, al describir las dispares disposiciones que establecen sanciones y disposiciones de auditoría de los Estados miembros como instrumentos de la aplicación de la normativa aduanera de las CE que constituyen la aplicación no uniforme de esa legislación, "los Estados Unidos socavan la clara distinción entre la aplicación de la legislación y la legislación propiamente dicha". En opinión de las CE, las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones de auditoría son en sí mismas leyes que se aplican y por lo tanto no pueden describirse como instrumentos para aplicar otras leyes (en este caso, las leyes aduaneras de las CE).

i) Una ley puede ser un instrumento para aplicar otras leyes

4.510 El error del razonamiento de las CE es que asumen que una ley puede considerarse únicamente de una manera, como la cosa que se aplica pero no como un instrumento para aplicar otra cosa. Los Estados Unidos no están en desacuerdo con la tesis de que una ley que prevé medidas que establecen sanciones o de auditoría se pueda considerar susceptible de ser aplicada. Pero eso no excluye la posibilidad de considerar esa misma ley como instrumento para aplicar otras leyes, por

ejemplo, poniendo en práctica esas leyes mediante la verificación y la imposición del cumplimiento. Las propias CE reconocieron este aspecto concreto en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, en el que impugnaron la misma medida argentina desde la perspectiva de su sustancia y desde la perspectiva de su carácter de instrumento para aplicar otras leyes. (Informe del Grupo Especial, párrafo 4.203)

ii) Basar una alegación de aplicación no uniforme en las diferencias entre las leyes de los Estados miembros que son instrumentos para aplicar la legislación aduanera de las CE no es incompatible con la constatación del Órgano de Apelación de que una alegación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 debe concernir a la aplicación de la legislación aduanera y no al fondo de esa legislación

4.511 La distinción entre aplicación y fondo a la que se refirió el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Banano III* no va en contra. El Órgano de Apelación en ese asunto no tuvo ocasión de examinar si los distintos regímenes de licencias en litigio representaban una falta de uniformidad en la aplicación de alguna otra ley. Esa cuestión sencillamente no estaba en litigio en ese asunto, como lo está en éste.

4.512 En cambio, el grupo especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* sí tuvo ocasión de examinar si se podía impugnar un reglamento en el marco del párrafo 3 a) del artículo X por tratarse de un instrumento para aplicar la legislación aduanera de la Argentina de una manera incompatible con esa disposición. En aquella diferencia, las CE impugnaron una medida de la Argentina (la Resolución 2235) por tratarse de un instrumento para aplicar la legislación aduanera de la Argentina (enunciada en otros instrumentos legislativos y resoluciones) de manera incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X. La Argentina ejerció su defensa, igual que las CE lo hacen aquí, arguyendo que la reclamación se refería al fondo o contenido de una medida y no a su aplicación, y por lo tanto quedaba fuera del ámbito del párrafo 3 a) del artículo X con arreglo al razonamiento del Órgano de Apelación en *CE - Banano III*. El Grupo Especial desestimó ese argumento, señalando que "[l]a cuestión pertinente es si el contenido de esa medida es de naturaleza administrativa o implica cuestiones sustantivas reguladas más adecuadamente en otras disposiciones del GATT de 1994". (párrafo 11.70). Al constatar que la medida en cuestión era de naturaleza administrativa, el Grupo Especial observó: "La Resolución 2235 no establece prescripciones en materia de clasificación, reintegros a la exportación, o derechos de exportación, sino que se limita a establecer una cierta forma de aplicar esas normas sustantivas". (párrafo 11.72)

4.513 Si se sigue el razonamiento del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, el hecho de que los propios instrumentos para la aplicación de la legislación aduanera de las CE adopten la forma de leyes no significa que los Estados Unidos hayan hecho caso omiso de la diferencia entre el fondo y la aplicación que se puso de relieve en el asunto *CE - Banano III*. Del mismo modo que la Resolución 2235 en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones de auditoría de los Estados miembros no prescriben normas de clasificación y valoración, sino que brindan los medios de "poner en práctica" leyes que prescriben normas de clasificación y valoración.

iii) Las constataciones del grupo especial en el asunto Argentina - Pieles y cueros guardan una relación directa con la presente diferencia.

4.514 Las CE rechazan la pertinencia del informe del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*. En primer lugar, afirman que una característica distintiva de la medida impugnada en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* era que otorgaba un mandato para la aplicación de manera incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X. En segundo término, sugieren que, a diferencia de la medida impugnada en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, no cabe reconocer que las disposiciones que establecen sanciones sean de naturaleza administrativa. Ninguno de los dos argumentos tiene un fundamento sólido.

4.515 La cuestión de si la medida en litigio en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* autorizaba un comportamiento administrativo incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 o simplemente lo permitía no guardó absolutamente ninguna relación con las constataciones del grupo especial en esa diferencia. La sugerencia de las CE de que el informe del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* carece de pertinencia porque, a diferencia de la medida en litigio en ese asunto, las disposiciones que establecen sanciones no pueden calificarse fácilmente como "administrativas" o "sustantivas" se aborda en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 90 del Grupo Especial.

4.516 Por supuesto, la cuestión pertinente a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X no es si una medida es de carácter "administrativo" *o* "sustantivo". Una medida puede tener ambas cualidades según la perspectiva con que se la examine, como las CE adujeron en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*. Calificar una medida como de carácter "administrativo", como explicó el Grupo Especial en esa diferencia, es cuestión de determinar si prescribe los medios de "ejecutar" o "poner en práctica" normas sustantivas de clasificación y valoración, por ejemplo, que ya están enunciadas en otras medidas. Al igual que la medida en litigio en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones de auditoría de los Estados miembros de las CE no prescriben normas sustantivas de clasificación y valoración, sino que ponen en práctica esas normas sustantivas prescritas en los reglamentos de las CE.

4.517 Dado que, a juicio de las CE, un Miembro administra su legislación aduanera únicamente cuando aplica esa legislación "en casos concretos", Las CE no pueden concebir la posibilidad de que la aplicación no uniforme de la legislación aduanera pueda adoptar la forma de distintos procedimientos de auditoría y disposiciones que establecen sanciones en diferentes regiones del territorio del Miembro. La interpretación de las CE hace caso omiso del sentido corriente de "aplicar" como "ejecutar", que a su vez significa "poner en práctica".

4.518 Las CE reconocen que el párrafo 3 del artículo X se concentra en proteger los intereses de los comerciantes. Desde el punto de vista de éstos, no obstante, las responsabilidades en que puedan incurrir por la clasificación errónea de mercancías o los errores técnicos al despachar mercancías en aduana, la probabilidad de verse sometidos a una auditoría, y la posibilidad de que al concluir la auditoría las autoridades aduaneras puedan expedir una orientación vinculante en la que los comerciantes puedan basarse en el futuro son todas ellas consideraciones que pueden tener la misma importancia que la consideración de la forma en que las autoridades aduaneras clasifiquen y valoren sus mercancías.

d) La referencia a "sanciones" por "infracciones leves" que se hace en el párrafo 3 del artículo VIII del GATT de 1994 no sitúa las sanciones fuera del ámbito del párrafo 3 a) del artículo X

4.519 Las CE argumentan además que la mención de "sanciones … por infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana" que figura en el párrafo 3 del artículo VIII del GATT de 1994 es prueba de que el artículo X del GATT de 1994 no contempla las sanciones. Ahora bien, este argumento entraña un *non sequitur*. El hecho de que el párrafo 3 del artículo VIII establezca parámetros sustantivos para sanciones por determinados tipos de infracciones de los reglamentos o formalidades de aduana -es decir, "infracciones leves"- no tiene nada ver con que las sanciones se puedan considerar instrumentos para aplicar la legislación aduanera de un Miembro.

4.520 Si se lleva a su conclusión lógica, el razonamiento de las CE conduciría a unos resultados manifiestamente absurdos. Por ejemplo, significaría que un Miembro podría discriminar entre otros Miembros aplicando sanciones a infracciones aduaneras con productos de algunos Miembros y no aplicándolas a las infracciones aduaneras con productos de otros Miembros, lo que no sería una infracción del artículo I del GATT de1994, con arreglo al razonamiento de las CE, porque dicho

artículo, al igual que el párrafo 1 del artículo X, se refiere únicamente a "cargas" y no expresamente a "sanciones."

e) El argumento de los Estados Unidos no lleva implícito un requisito de armonización de todas las leyes subfederales de los Miembros de la OMC que guarden cualquier parecido a leyes federales en cuanto a la materia

4.521 Igualmente inútil es el argumento de las CE en el sentido de que una constatación de que diferencias en las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones de auditoría de los Estados miembros constituyen una aplicación no uniforme de la legislación aduanera de las CE tendría nefastas consecuencias para todos los Miembros de la OMC en una variedad de esferas normativas. Este argumento se basa en la premisa errónea de que, según el argumento de los Estados Unidos, "cabría afirmar" que cualquier ley subfederal que tuviera cualquier parecido en cuanto a la materia con una ley federal (es decir, un "vínculo") "constituye 'aplicación' de la ley". Ahora bien, no es la mera existencia de un "vínculo" entre las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones de auditoría de los Estados miembros y la legislación aduanera de las CE lo que hace que las primeras tengan naturaleza administrativa. Es el hecho de que el mismísimo objeto de las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones de auditoría de los Estados miembros es "ejecutar" o "poner en práctica" la legislación aduanera de las CE el que les infunde esa cualidad.

6. Las decisiones de los tribunales de revisión en las CE no rigen la práctica de "los organismos" encargados de aplicar las medidas administrativas de la legislación aduanera de las CE, en contra de lo dispuesto en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994

4.522 Las CE incumplen lo dispuesto en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 porque el tribunal de revisión que facilitan cuyas decisiones tienen efecto en todas las CE es el TJCE, y la revisión por el TJCE no cumple la prescripción de prontitud. La revisión por los tribunales de los Estados miembros no cumple la obligación de las CE, pues las decisiones de cada uno de esos tribunales se aplican únicamente en su respectivo Estado miembro. Las decisiones de los tribunales de cualquier Estado miembro dado no "rigen [la] práctica [de]" "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" de la legislación aduanera de las CE en su conjunto. Además, el párrafo 3 b) del artículo X debe leerse a la luz de la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X; en consecuencia, donde la revisión conduzca a decisiones cuyo efecto se limite a regiones concretas en el territorio de un Miembro, esa revisión no es acorde con el párrafo 3 b) del artículo X.

a) Las decisiones de los tribunales o procedimientos que un Miembro de la OMC mantenga en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 deben regir la práctica de "los organismos" encargados de aplicar las medidas administrativas de la legislación aduanera de los Miembros

4.523 La primera frase del párrafo 3 b) del artículo X obliga a los Miembros a mantener o instituir tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. La segunda frase exige que esos tribunales o procedimientos "[sean] independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" y que sus decisiones "[sean] ejecutadas por estos últimos *y* [rijan] su práctica administrativa". La prescripción de que las decisiones de los tribunales o procedimientos de revisión rijan la práctica administrativa de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas es la que deja claro que las CE no cumplen la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X, ya que cada uno de los múltiples tribunales de revisión que mantienen pronuncian decisiones que rigen la práctica únicamente de un subconjunto de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas en una región concreta de las CE.

4.524 Las CE afirman que "el párrafo 3 b) del artículo X del GATT, a diferencia del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, no se ocupa de cuestiones de uniformidad, sino exclusivamente de la pronta revisión de las decisiones aduaneras". Pero si fuera así, no habría necesidad de que el párrafo 3 b) del artículo X especificara que las decisiones de los tribunales de revisión "regirán [la] práctica" de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Bastaría sencillamente exigir que se mantuvieran o instituyeran tribunales o procedimientos cuyas decisiones fueran "ejecutadas por" los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas.

4.525 El sentido corriente del término "govern" (regir), en relación con el presente asunto, es "*[c]ontrol, influence, regulate, or determine*" (controlar, influir en, regular, o determinar" o "*[c]onstitute a law, rule, standard, or principle for*" (constituir una ley, regla, norma o principio de para). En consecuencia, la nítida prescripción del párrafo 3 b) del artículo X relativa a "regir la práctica" va más allá de la simple ejecución de una decisión en el caso que nos ocupa y exige que la decisión "controle, influya en, reglamente, o determine" la práctica de "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas de la legislación aduanera" o "constituya una ley, reglamento, norma o principio" para esos organismos.

4.526 Además, son "*los* organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" cuya práctica está obligada a regirse por las decisiones de los tribunales o procedimientos de revisión. Esa obligación no se cumple cuando las decisiones de los tribunales o procedimientos de revisión rigen la práctica de tan solo *algunos* de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas.

4.527 Esta interpretación se ve reforzada por el contexto que aporta el párrafo 3 a) del artículo X. Las CE admiten que los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X deben interpretarse "de forma armoniosa". Cuando las decisiones de los tribunales de revisión rigen la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, pasan a formar parte de la aplicación de la legislación aduanera del Miembro por esos organismos en casos futuros. Como la legislación aduanera del Miembro se ha de aplicar de manera uniforme, las decisiones de los tribunales de revisión debe regir la práctica de "los organismos" en todo su territorio.

4.528 Australia lo expresó sucintamente en su declaración en la primera reunión del Grupo Especial al observar que "las decisiones y resoluciones de los órganos de revisión deben aplicarse coherentemente y estar vigentes igualmente en todo el territorio del Miembro de la OMC". Ese no es el caso en las CE. No sólo las decisiones de los tribunales de los distintos Estados miembros son aplicables únicamente en sus respectivos Estados miembros, y por tanto no se aplican coherentemente en todo el territorio de las CE, sino que esas decisiones no están "vigentes igualmente en todo el territorio" de las CE. Como las CE explicaron en respuesta a la pregunta 72 del Grupo Especial, no existe un mecanismo por el que se mantenga informados a los tribunales de los Estados miembros de las decisiones en materia de revisión aduanera de los tribunales de otros Estados miembros.

4.529 Las únicas decisiones de un tribunal de revisión que rigen la práctica de "los organismos" encargados de aplicar las medidas administrativas de la legislación aduanera de las CE en todo el territorio de las CE son las decisiones del TJCE. No obstante, difícilmente puede considerarse que la revisión del TJCE cumpla la prescripción de pronta revisión del párrafo 3 b) del artículo X. La vía normal de presentar cuestiones al TJCE es el procedimiento de reenvío prejudicial, en el que pueden transcurrir de 19 a 20 meses para que el TJCE se pronuncie (y sólo se trata de un promedio).

b) El argumento de los Estados Unidos no significa la obligación de que cada Miembro de la OMC establezca un tribunal aduanero centralizado único

4.530 Las CE han indicado que no son el único Miembro de la OMC que prevé la revisión de medidas administrativas aduaneras con carácter regional y han sugerido que el argumento de los Estados Unidos llevaría implícita la obligación para cada Miembro de la OMC de establecer un solo tribunal de revisión con jurisdicción en todo su territorio. Ahora bien, tanto si existen otros Miembros

que prevén la revisión de medidas administrativas aduaneras con carácter regional como si no existen, las CE son el único Miembro de la OMC del que los Estados Unidos sepan que tiene una combinación de administración aduanera geográficamente fragmentada *y* revisión geográficamente fragmentada.

4.531 Los Estados Unidos no aducen que el párrafo 3 b) del artículo X obligue a cada Miembro de la OMC a tener un tribunal centralizado único para la pronta revisión y rectificación de medidas administrativas aduaneras. Lo que los Estados Unidos sí aducen es que el párrafo 3 b) del artículo X exige que las decisiones de los tribunales que un Miembro mantiene para la pronta revisión y rectificación de medidas administrativas aduaneras rijan la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas de la legislación aduanera *en todo el territorio del Miembro*.

4.532 Cuando un Miembro cuenta con un organismo centralizado único encargado de la aplicación de su legislación aduanera, cabe concebir que pueda cumplir su obligación en virtud del párrafo 3 b) del artículo X incluso si prevé la revisión y rectificación por vía de múltiples tribunales cuya jurisdicción individual esté limitada regionalmente. En ese caso, cuando el tribunal de una región concreta pronuncia una decisión, el organismo debería estar en condiciones de ejecutar esa decisión en la región y conformar su práctica en todo su territorio. De ese modo, la aplicación por el Miembro de su legislación aduanera estaría regida por esa decisión, y la aplicación de su derecho aduanero sería uniforme. Si la decisión de un tribunal en una región entra en conflicto con la de un tribunal en otra región, el organismo debería poder resolver el conflicto recurriendo una u otra decisión ante un tribunal de una jurisdicción superior, posibilidad prevista en la segunda frase del párrafo 3 b) del artículo X.

4.533 Otra prueba a favor de la tesis de que la revisión y rectificación previstas en virtud del párrafo 3 b) del artículo X deben derivar en decisiones que rijan la aplicación de la legislación aduanera de un Miembro en todo su territorio es la *reserva* contenida en la segunda frase, que declara que "*la administración central de tal organismo* pueda adoptar medidas con el fin de obtener la revisión del caso mediante otro procedimiento, si hay motivos suficientes para creer que la decisión es incompatible con los principios jurídicos o con la realidad de los hechos". (Sin subrayar en el original.) La *reserva* prevé que "la administración central" impugne la decisión de un tribunal colateralmente -es decir, "mediante otro procedimiento"- cuando la administración central determine que "la decisión es incompatible con los principios jurídicos o con la realidad de los hechos". Ahora bien, esa posibilidad sólo tiene sentido si, de lo contrario, la decisión en la actuación original pudiera tener efectos fuera del marco de esa actuación. Si los efectos de la decisión se limitaran al procedimiento en el que se pronunció, no habría necesidad de impugnación colateral ni fundamento para ello.

4.534 Como la posibilidad de la impugnación colateral de las decisiones de los tribunales lleva implícito que los efectos de tales decisiones no se limitan a los procedimientos concretos en que se han pronunciado, no hay fundamento para sugerir que el párrafo 3 b) del artículo X prevé que esos efectos tengan un alcance más estrecho que todo el territorio de un Miembro. No sólo no existe fundamento para una sugerencia de esa índole, sino que la referencia a "la administración central" del organismo encargado de aplicar las medidas administrativas en sí misma abona la tesis de que se contempla que los efectos de las decisiones de los tribunales tienen un alcance que abarca todo el territorio del Miembro.

4.535 En resumen, la combinación de 25 autoridades aduaneras y tribunales de revisión distintos de los Estados miembros que son exclusivos de cada Estado miembro resulta en decisiones de los tribunales de revisión que no rigen la práctica de "*los* organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" de la legislación aduanera de las CE. Por este motivo, la revisión y rectificación de las decisiones administrativas aduaneras que brindan los tribunales de los Estados miembros no cumple la obligación de las CE en el marco del párrafo 3 b) del artículo X.

F. SEGUNDA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1. Las medidas en litigio en la presente diferencia

4.536 La alegación de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT atañe a "la manera en la que las CE aplican" su legislación aduanera. Por lo que se refiere a la alegación de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 b) del artículo X del GATT, las CE entienden que la medida en litigio es la presunta omisión de las CE de mantener o instituir tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de decisiones aduaneras.

4.537 No obstante, en relación con su alegación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, los Estados Unidos añaden que "la medida específica en litigio" en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del ESD "son las leyes, reglamentos, decisiones y resoluciones que constituyen la normativa aduanera de las CE", es decir, las medidas enumeradas en el primer párrafo de la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos.

4.538 Las CE no están de acuerdo en que las medidas enumeradas en el primer párrafo de la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos, que incluyen en especial el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación y el Arancel Aduanero Común, sean las "medidas en litigio" en la presente diferencia en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. De la primera frase del primer párrafo de la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos se desprende con claridad que la alegación de los Estados Unidos se refiere a la manera en que las CE *aplican* las medidas enumeradas, y no a las medidas propiamente dichas. La enumeración que figura al final del primer párrafo de la solicitud de los Estados Unidos sirve únicamente a los efectos de identificar las leyes que las CE presuntamente no aplican de manera uniforme. No obstante, eso no significa que esas mismas leyes resulten ser medidas en litigio en la presente diferencia.

4.539 Las CE tampoco comparten la opinión de los Estados Unidos de que la aplicación de las leyes "puede no ser en sí misma una medida". Como lo ha confirmado el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, todo acto u omisión atribuible a un Miembro de la OMC puede ser una medida a los efectos de la solución de diferencias en el marco de la OMC. Esto se aplica también a la aplicación de la legislación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.540 Es particularmente necesario prestar suma atención a lo que es la medida en litigio en la presente diferencia dadas las características específicas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT en cuanto fundamento jurídico de la alegación de los Estados Unidos. Como lo ha confirmado el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Banano III*, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere únicamente a la aplicación de las leyes y reglamentos mencionados en el párrafo 1 del artículo X del GATT, y no a esas leyes y reglamentos en sí mismos.

4.541 La sugerencia de los Estados Unidos de que la aplicación puede no ser una medida conduciría al resultado absurdo de que el incumplimiento del párrafo 3 a) del artículo X del GATT nunca podría ser impugnado en el marco del ESD.

4.542 Al mismo tiempo, preocupa a las CE que los Estados Unidos estén tratando de borrar la distinción entre la aplicación de medidas y las propias medidas, y que con ello intenten en la práctica ampliar el ámbito de la presente diferencia. Por estos motivos, el Grupo Especial debe dictaminar que los actos de aplicación general enumerados en la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos no son medidas en litigio en la presente diferencia.

4.543 Acerca de otro aspecto, los Estados Unidos se han negado a identificar los aspectos específicos de la administración aduanera de las CE que impugnaban. Se han limitado simplemente a

declarar que impugnaba la aplicación de las medidas enumeradas, que, según describieron, "abarcan el universo de medidas que constituyen la normativa aduanera de las CE".

4.544 Esto no constituye una descripción suficientemente precisa de la medida en litigio en la presente diferencia. La legislación aduanera de las CE es un acervo jurídico extenso y complejo. En consecuencia, no bastaría con describir la medida en litigio en la presente diferencia como la "aplicación de la legislación aduanera de las CE", sino que la medida en litigio en la presente diferencia es la aplicación de la legislación aduanera de las CE en las esferas a que se hace referencia en la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos, decantadas en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, en especial la clasificación arancelaria, la valoración en aduana, la transformación bajo control aduanero, el procedimiento de domiciliación, y las sanciones. Así lo confirma también el título de la presente diferencia, que es "Determinadas cuestiones aduaneras", y por lo tanto no puede sencillamente incluir todas las cuestiones aduaneras.

4.545 Los intentos de los Estados Unidos por mantener impreciso el ámbito de las presentes actuaciones del Grupo Especial se ponen también de manifiesto por su negativa a proporcionar una lista exhaustiva de los regímenes aduaneros respecto de los cuales aduce una falta de aplicación uniforme, afirmando en cambio que esta falta "no se limita a una norma o grupo de normas aduaneras concretas". A este respecto, las CE observarían que no se puede pretender que se defiendan contra vagas acusaciones de aplicación no uniforme en esferas que los Estados Unidos no han individualizado en su solicitud de establecimiento de un Grupo Especial ni en su Primera comunicación escrita. En consecuencia, debe rechazarse el intento de los Estados Unidos por mantener impreciso el ámbito de las presentes actuaciones.

2. Las alegaciones de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

a) Las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

i) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras, y no a las propias leyes aduaneras

4.546 Las CE han explicado, por remisión a la jurisprudencia pertinente del Órgano de Apelación, que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no concierne a las propias leyes y reglamentos, sino sólo a su aplicación. Esto significa que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe una armonización de la legislación de un Miembro en el caso en que, por ejemplo, sean aplicables distintos regímenes jurídicos en distintas partes del territorio de un Miembro de la OMC. Esto es pertinente en todas las esferas en que las cuestiones en litigio en la presente diferencia se rigen por leyes de los Estados miembros de las CE, como es el caso en particular respecto de las sanciones por infracciones de la legislación aduanera.

4.547 Los Estados Unidos cuestionan esta interpretación y argumentan que "las leyes aduaneras pueden ser aplicadas mediante instrumentos que son a su vez leyes".

4.548 Las CE consideran que esta interpretación es a todas luces incompatible con el texto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, que se refiere únicamente a la *aplicación* de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas del tipo citado en el párrafo 1 de ese artículo. El párrafo 1 del artículo X del GATT especifica que esas medidas son todas ellas de *aplicación general*. La administración de tales medidas es, así pues, su aplicación en casos concretos. Por lo tanto, no puede considerarse al mismo tiempo que las leyes, que son de aplicación general, sean medidas administrativas. El argumento de los Estados Unidos sería también incompatible con la clara distinción que hizo el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Banano III* entre la aplicación de las leyes y las propias leyes.

4.549 Los Estados Unidos tratan de eludir esta conclusión estableciendo para ello una distinción entre leyes "sustantivas" y "administrativas", en apoyo de la cual reivindica el informe del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*. Según los Estados Unidos, únicamente las leyes que son de índole administrativa tienen que ser aplicadas de manera uniforme, mientras que esa obligación no existiría respecto de leyes cuyo carácter es "sustantivo".

4.550 Aparte de que los Estados Unidos no ofrecen ninguna explicación de qué es lo que entienden por leyes "sustantivas" y por leyes "administrativas", las CE no creen que esta interpretación sea correcta. El informe del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* no brinda ningún apoyo a la interpretación estadounidense. La obligación de aplicación uniforme tiene pertinencia para todas las medidas del tipo citado en el párrafo 1 del artículo X del GATT, con independencia de que sean de índole "sustantiva" o "administrativa". Para el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, la verdadera distinción reside, así pues, no entre medidas sustantivas y administrativas, sino entre la aplicación y las medidas que se han de aplicar.

4.551 Este asunto es de gran importancia para todos los Miembros de la OMC en los que determinadas cuestiones previstas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT puedan estar reglamentadas en el plano subfederal. Este aspecto es incluso más importante ya que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT afecta no sólo a la aplicación de la legislación aduanera, sino también a las leyes relativas a la tributación interna y a la venta interna de productos. En muchos Miembros de la OMC, incluidos los Estados Unidos, esas cuestiones suelen regirse por leyes subfederales, lo que puede dar lugar a la existencia de normas divergentes en el territorio de esos Miembros de la OMC. Si se aceptaran los argumentos de los Estados Unidos, habría que considerar que las diferencias de la legislación subfederal son incompatibles con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Esto alteraría el equilibrio federal en numerosos Miembros de la OMC, y no puede ser por lo tanto una interpretación razonable del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Esto sería incompatible también con las constataciones del Grupo Especial del GATT en el asunto *Canadá - Monedas de oro*, que consideró que el GATT respeta la distribución interna de competencias dentro de cada Miembro de la OMC.

4.552 Los Estados Unidos han aducido incorrectamente que la interpretación de las CE situaría a "todas las leyes y reglamentos que son instrumentos de administración aduanera fuera del alcance de las disciplinas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT".

4.553 Ante todo, el argumento de las CE se aplica únicamente a las cuestiones que son materia de la legislación subfederal, lo que es el caso en las CE, especialmente en cuanto a las sanciones. En las CE, como en otros Miembros de la OMC, la mayoría de las esferas del derecho aduanero se rigen por leyes a nivel federal.

4.554 Además, incluso donde exista una ley a nivel subfederal, esto no significa que esté "fuera del alcance" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Al contrario, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT prescribe la aplicación uniforme de todas las leyes, incluso las que puedan existir en un Miembro de la OMC a nivel subfederal, en la región en las que sean aplicables.

4.555 Por último, los Estados Unidos pierden de vista el objeto y propósito reales del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. El propósito de esta disposición es el de garantizar a los Miembros de la OMC y los comerciantes un determinado nivel mínimo de previsibilidad y seguridad en cuanto a la aplicación de las leyes y reglamentos en él previstos. Este objetivo se respeta en su totalidad si las leyes que son de aplicación a nivel subfederal en un Miembro de la OMC se aplican de manera uniforme dentro del territorio en el que son aplicables. No es compatible con este objeto y propósito transformar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT en una disposición que prescribe cambios legislativos, y especialmente una armonización a nivel subfederal en un Miembro de la OMC.

ii) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe las maneras en las que los Miembros de la OMC deben aplicar su legislación aduanera

4.556 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT contiene una obligación de aplicar la legislación aduanera de manera uniforme, pero no prescribe la forma concreta en que los Miembros de la OMC deben aplicar sus leyes aduaneras.

4.557 A ese nivel de principio, los Estados Unidos no parecen cuestionar ese argumento. Efectivamente, declaran en una serie de ocasiones que "prescribir el método para que las CE cumplan el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es necesario para solucionar esta diferencia".

4.558 Sin embargo, la realidad de las alegaciones de los Estados Unidos es más bien diferente. En particular, los Estados Unidos están exigiendo en la práctica que las CE establezcan un organismo aduanero, que además debe tener competencias para expedir resoluciones anticipadas sobre una serie de asuntos. Es difícil imaginar una aplicación más normativa del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.559 También es interesante observar que los Estados Unidos no han ofrecido hasta ahora ninguna explicación acerca de la forma en que sus alegaciones guardan relación con su propia propuesta formulada en el contexto de las negociaciones sobre facilitación del comercio de la Ronda de Doha, que prevén en particular que se cree la obligación de prever resoluciones anticipadas en asuntos de clasificación arancelaria y valoración. Los Estados Unidos tampoco han rebatido que uno de sus motivos esenciales en el presente asunto es influir en las negociaciones sobre facilitación del comercio de la Ronda de Doha.

4.560 Las CE mantienen por ello su opinión de que los Estados Unidos pretenden una aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT que tendría un carácter sumamente normativo, y que transformaría en la práctica el párrafo 3 a) del artículo X del GATT en la base para la armonización de las leyes y prácticas aduaneras según el modelo estadounidense. Las CE afirman que una interpretación de esa índole debe ser rechazada.

iii) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT establece normas mínimas

4.561 Los Estados Unidos han tratado de negar la importancia de la declaración del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Camarones*, y han criticado en particular que el Órgano de Apelación "no profundizara en lo que entendía por normas mínimas". Ahora bien, eso no altera el hecho de que el Órgano de Apelación calificara el párrafo 3 del artículo X del GATT como una disposición que establece determinadas normas mínimas de transparencia y equidad procesal. Aunque esto no suple la necesidad de interpretar los términos reales del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, arroja cierta luz sobre el objetivo limitado que subyace a esa disposición, que va directamente en contra de la interpretación sumamente ambiciosa que propugnan los Estados Unidos.

4.562 En su Primera comunicación escrita, las CE también han explicado, en relación con el informe del Grupo Especial del GATT en el asunto *CEE - Manzanas de mesa*, que no puede considerarse que las diferencias administrativas leves en cuanto al trato signifiquen una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. El Japón también ha compartido esta opinión. En su respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las CE han explicado que esto significa que incumbe a los Estados Unidos, como parte reclamante, demostrar que las variaciones de la práctica administrativa, incluso cuando existieran, tienen una repercusión importante para los comerciantes.

4.563 Los Estados Unidos han tratado de desechar esta jurisprudencia al afirmar que "han presentado pruebas de un sistema que genera y no pone remedio a multitud de divergencias de aplicación en asuntos que llegan al corazón de la administración aduanera y afectan a la responsabilidad de los comerciantes en concepto de derechos de aduana, así como a otros aspectos de

sus operaciones". Las CE no cuestionan, por ejemplo, que cuando se ve afectada la responsabilidad en concepto de derechos de aduana, ello reviste importancia para la situación competitiva de un comerciante. No obstante, como las CE ya han observado, en el caso de las demás diferencias presuntas, por ejemplo, en lo que atañe al procedimiento de domiciliación o las auditorías de valoración, los Estados Unidos no han ofrecido hasta ahora ninguna explicación de por qué esas diferencias, incluso si existieran, serían importantes para los comerciantes.

iv) El significado de "aplicación uniforme"

4.564 Como sostuvo el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, la uniformidad puede juzgarse únicamente atendiendo a una pauta general de administración aduanera. La norma del párrafo 3 a) del artículo X del GATT se infringe únicamente si, a tenor de tales pautas generales, se puede demostrar que la aplicación por un Miembro de la OMC de su legislación aduanera no es uniforme. Algunos de los terceros en el presente asunto, a saber, Australia y el Japón, también han expresado opiniones muy parecidas.

4.565 Los Estados Unidos han tratado de distinguir el presente caso de los asuntos *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* y *CE - Productos avícolas*, argumentando para ello que estos casos no se ocupaban de la "uniformidad geográfica". Sin embargo, los Estados Unidos omiten explicar por qué debería tratarse la "uniformidad geográfica" de una manera diferente a otros tipos de uniformidad, por ejemplo, la uniformidad en el tiempo. Tampoco está claro por qué se aplicaría una norma diferente a la obligación de aplicación uniforme, por una parte, y a la obligación de aplicación imparcial y razonable, por la otra. Las CE desearían también recordar que han sido los propios Estados Unidos los que -en asuntos como *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*- han abogado en contra de que el cumplimiento del párrafo 3 a) del artículo X del GATT se juzgue únicamente a tenor de casos individuales.

4.566 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos han explicado en mayor detalle que en el presente caso, "la cuestión no es si una autoridad administrativa concreta aplica una ley concreta de manera uniforme", sino "si diferentes autoridades en todo el territorio de un Miembro de la OMC … aplican diversas leyes de manera uniforme". Al parecer, los Estados Unidos sugieren con ello que se debe aplicar una norma más estricta a los Miembros de la OMC que tengan un sistema descentralizado de administración aduanera que a los Miembros de la OMC con una administración aduanera centralizada. Las CE no ven ninguna razón para esa dualidad de criterios, que en consecuencia ha de ser rechazada.

4.567 Por último, en contra de lo que los Estados Unidos alegan, las CE nunca han sugerido que la pauta de no uniformidad tuviera que ser "clara". Si los casos de no uniformidad en el sistema de un Miembro de la OMC son tan extendidos y frecuentes que tienen una repercusión importante en la administración del sistema de ese Miembro, ello equivaldrá a una pauta de aplicación no uniforme. No hay necesidad de que respondan a una pauta concreta. Por lo tanto, el argumento de los Estados Unidos de que la norma enunciada por el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* imposibilitaría impugnar una ausencia general de uniformidad es sencillamente incorrecto.

b) La carga de la prueba

4.568 La carga de la prueba recae en los Estados Unidos como demandante en el presente asunto. Incumbe a los Estados Unidos aportar suficientes pruebas para establecer que existe una pauta de aplicación no uniforme respecto de los aspectos de la legislación aduanera de las CE planteados por los Estados Unidos.

4.569 En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos omitieron presentar pruebas al efecto. Se limitaron a plantear un número reducido de casos sobre cuestiones de clasificación

arancelaria y valoración en aduana. Un número limitado de casos en una esfera concreta no basta para evaluar la aplicación general del sistema de las CE. Además, los casos planteados por los Estados Unidos no constituyen de hecho ejemplos de falta de uniformidad en el sistema de las CE.

4.570 El Grupo Especial formuló una serie de preguntas a los Estados Unidos destinadas a obtener de éstos pruebas relativas a la incidencia real de aplicación no uniforme en las esferas de la normativa aduanera de las CE planteadas por los Estados Unidos.

4.571 En sus respuestas, los Estados Unidos no aportan un solo elemento nuevo de prueba de no uniformidad en el sistema de las CE. En su lugar, responden que su alegación "no gira en torno de la frecuencia estadística de aplicación no uniforme". Además, alegan "que son las CE, no los Estados Unidos, las que probablemente disponen de la información que se trata de obtener en la cuestión", y piden al Grupo Especial que ejerza las facultades que le confiere el artículo 13 del ESD para recabar información pertinente de las CE. Por ejemplo, los Estados Unidos sugieren que se debe pedir a las CE que proporcionen "una muestra estadísticamente significativa de IAV y otras decisiones en materia de clasificación de diversos Estados miembros (con explicaciones de los fundamentos de esas decisiones) con objeto de determinar la frecuencia de aplicación divergente". Por poner otro ejemplo, los Estados Unidos sugieren que el "Grupo Especial podría recabar de las CE información del tipo que permitió al Tribunal de Cuentas de las CE formular las constataciones contenidas en su informe sobre valoración en aduana".

4.572 Estas respuestas deben ser consideradas intentos claros de los Estados Unidos por quitarse de encima la carga de la prueba, y como tales deben ser rechazadas. No es digno de crédito que los Estados Unidos aleguen, por una parte, que existe una pauta extendida de aplicación no uniforme en las CE, y luego afirmen que no tienen ninguna prueba en apoyo de esa alegación.

4.573 En cambio, los Estados Unidos desean traspasar la carga de la prueba a las CE al solicitar que sean éstas las que proporcionen la información solicitada. Con esta petición, los Estados Unidos sugieren básicamente que las CE demuestren su propia inocencia. Esta petición no sólo carece de todo fundamento en la normativa de la OMC, sino que también supone una imposibilidad lógica. Si bien debería ser posible que los Estados Unidos aportaran pruebas de aplicación no uniforme, si esos casos efectivamente existieran, es lógicamente imposible que las CE demuestren que tales casos no ocurren nunca.

4.574 Por este motivo, sería muy poco práctico que el Grupo Especial pidiera a las CE, como sugieren los Estados Unidos, que proporcionaran "una muestra estadísticamente significativa de IAV y otras decisiones en materia de clasificación de diversos Estados miembros (con explicaciones de los fundamentos de esas decisiones) con objeto de determinar la frecuencia de aplicación divergente". Igualmente, es poco práctico que los Estados Unidos sugieran que el "Grupo Especial podría recabar de las CE información del tipo que permitió al Tribunal de Cuentas de las CE formular las constataciones contenidas en su informe sobre valoración en aduana". El informe del Tribunal de Cuentas se basó en visitas de auditoría que tuvieron lugar en los locales de la Comisión y de las administraciones aduaneras de 12 Estados miembros de las CE en 1999-2000. Por lo tanto, la sugerencia de los Estados Unidos equivale esencialmente a pedir a las CE que efectúen una nueva auditoría de la valoración en aduana. No es una petición razonable que se pueda hacer a una parte demandada en el contexto de actuaciones en el marco del ESD.

4.575 Además, la solicitud formulada por los Estados Unidos va bastante más allá de las funciones de un Grupo Especial en virtud del artículo 13 del ESD. Si bien el Órgano de Apelación ha confirmado que el Grupo Especial tiene ciertas facultades investigadoras, estas facultades también tienen sus límites, que el Órgano de Apelación explicó con todo detalle en el asunto *Japón - Productos agrícolas II*. En el presente caso, los Estados Unidos están pidiendo al Grupo Especial que haga precisamente lo que el Órgano de Apelación dijo que no debía hacer. Al no haber podido acreditar su presunción *prima facie*, los Estados Unidos piden al Grupo Especial que recabe la

información pertinente de las CE. De esta forma, el Grupo Especial eximiría a los Estados Unidos de su carga de la prueba original, y abonaría las argumentaciones del reclamante.

4.576 Los Estados Unidos parecen creer que pueden establecer una falta de uniformidad formulando alegaciones amplias de ausencia de uniformidad en esferas concretas. Sin embargo, la aplicación de la legislación aduanera en esferas como la clasificación arancelaria o la valoración en aduana depende de las circunstancias concretas de cada caso. Por ello, no se puede establecer si la aplicación es uniforme o no sin conocer los "detalles concretos de cada caso", e incumbe a los Estados Unidos como demandante presentar esos detalles.

4.577 Por último, aunque desde luego no puede esperarse que las CE demuestren que aplican sus leyes de manera uniforme, desean señalar que determinados elementos del contexto del presente asunto aportan una indicación de que las alegaciones fácticas presentadas por los Estados Unidos son incorrectas. Las CE ya han señalado, en su Primera comunicación escrita, la casi total falta de reacción de la industria y los comerciantes estadounidenses a la solicitud del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales de aportaciones al presente caso.

4.578 Otra indicación igualmente interesante la brindan las reacciones de otros Miembros de la OMC, y notablemente los terceros, a la presente diferencia. De los nueve Miembros de la OMC que han optado por ser partes en la presente diferencia, ni uno solo ha señalado la existencia de ejemplos de falta de uniformidad. El único tercero que alegó que existía falta de uniformidad en la práctica de las CE fue Corea. Ahora bien, Corea se negó a hacerlo, invocando "la naturaleza comercial confidencial de las transacciones comerciales subyacentes". Las CE consideran que si Corea tenía efectivamente información que podría ser útil para que las CE garantizaran una aplicación uniforme de su legislación aduanera, debería haberla compartido en primer lugar con las CE, lo que también habría sido acorde con el acuerdo de cooperación aduanera entre las CE y Corea, que establece obligaciones de información y asistencia recíprocas.

4.579 Por último, los Estados Unidos se refieren una y otra vez a lo que denominaN "francos reconocimientos de cómo funciona el sistema de las CE" por determinados funcionarios e instituciones de las CE, y afirman que el "mensaje acumulativo es que existe un problema de aplicación divergente". Los Estados Unidos se están refiriendo en este caso a un puñado de declaraciones dispersas de funcionarios e instituciones de las CE, que se sacan de contexto, y que no guardan relación con el presente caso. La mayoría de esas declaraciones deben considerarse un reflejo normal del proceso de autovigilancia y mejora que resulta necesario para cualquier sistema de administración aduanera en el contexto de un mundo en rápida evolución. Si cada observación crítica que se hace en el contexto de los procesos administrativos y normativos de un Miembro de la OMC se interpretara inmediatamente como prueba de incompatibilidad con la OMC, daría lugar a un grave efecto de bloqueo en los debates normativos internos de los Miembros de la OMC.

c) Cuestiones generales que subyacen a las alegaciones de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

4.580 En su Primera comunicación escrita, las CE ya han abordado una serie de cuestiones generales que subyacen a las alegaciones de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, incluida la función de los Estados miembros, la Comisión, el Tribunal de Justicia, y el Comité del Código Aduanero. Los Estados Unidos no han respondido en detalle hasta ahora a esas explicaciones de las CE. En cambio, sus intervenciones posteriores han puesto de relieve dos tendencias centrales que subyacen a la argumentación de los Estados Unidos: la primera, su intento de obligar a las CE a crear un organismo aduanero comunitario, y la segunda, su tendencia a menospreciar y hacer caso omiso del funcionamiento de las instituciones y procedimientos de las CE concebidos para garantizar una aplicación uniforme del derecho comunitario en todas las CE.

i) La argumentación de los Estados Unidos está destinada a obligar a las CE a crear un organismo aduanero comunitario

4.581 Las comunicaciones de los Estados Unidos confirman que la argumentación estadounidense está destinada esencialmente a obligar a las CE a establecer un organismo aduanero comunitario. Aunque los Estados Unidos hayan afirmado formalmente que prescribir el método para que las CE cumplan sus obligaciones en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT "no es necesario para solucionar esta diferencia", sus alegaciones y declaraciones en la presente diferencia son harina de otro costal. Efectivamente, la presunta necesidad de un organismo aduanero comunitario es un tema que se repite en las comunicaciones de los Estados Unidos. En consecuencia, los Estados Unidos se han referido a la creación de tal organismo como una "opción obvia" para hacer frente a sus alegaciones.

4.582 Que la argumentación de los Estados Unidos pretenda exclusivamente la creación de un organismo aduanero de las CE viene ilustrado también por la respuesta estadounidense a una pregunta del Grupo Especial sobre las medidas específicas que los Estados Unidos esperarían que adoptaran las CE para hacer frente a sus alegaciones. Los Estados Unidos se refirieron únicamente a la creación de un organismo aduanero. Aunque los Estados Unidos indicaron que no "descartaban" que pudieran existir otras medidas para atender sus reclamaciones, omitieron señalar qué otras medidas concretas podrían adoptar las CE.

4.583 El foco de atención exclusivo de los Estados Unidos en el establecimiento de un organismo aduanero de las CE se pone también de manifiesto en la respuesta estadounidense a una pregunta del Grupo Especial, en la que éste pidió a los Estados Unidos que comentaran acerca de la observación de las CE de que las críticas estadounidenses del fallo del TJCE en el asunto *Timmermans* eran incompatibles con sus críticas sobre la decisión del tribunal del Reino Unido en el asunto *Bantex*. Los Estados Unidos explicaron en su respuesta que, en ausencia de una autoridad aduanera centralizada, cualquier hipótesis conduciría a una aplicación no uniforme.

4.584 En opinión de los Estados Unidos, en ausencia de un organismo de esa índole, ninguna modificación de las normas y procedimientos de las CE en las esferas de clasificación arancelaria, valoración en aduana y regímenes aduaneros bastaría para atender las reclamaciones estadounidenses.

4.585 Otra confirmación de la naturaleza de las alegaciones de los Estados Unidos es la "lista de deseos" que los Estados Unidos cursaron a las CE después de las consultas en la presente diferencia. Esta lista de deseos incluía en primer lugar el "establecimiento de una autoridad centralizada única de las CE para expedir resoluciones anticipadas, en un plazo breve especificado tras la solicitud, a los comerciantes en relación con cuestiones como clasificación, valoración y origen (tanto preferenciales como no preferenciales)".

4.586 Los Estados Unidos han tratado de presentar esta solicitud como si fuera una especie de concesión, ya que el organismo en cuestión estaría encargado únicamente de expedir resoluciones anticipadas. En respuesta, las CE recordarían que -con la excepción de las cuestiones de origen- no existe actualmente ninguna obligación de prever resoluciones anticipadas sobre cuestiones aduaneras. En consecuencia, la sugerencia de que las CE deben crear un organismo con competencias para expedir esas resoluciones va más allá de los actuales compromisos en el marco de la OMC.

4.587 En general, va quedando claro que la argumentación de los Estados Unidos no se ocupa de la aplicación real de la legislación aduanera comunitaria, sino que es una argumentación extremadamente ambiciosa que pretende una reorganización general del sistema de administración aduanera comunitaria. No daría a las CE casi ninguna otra opción sino la de establecer un organismo con tareas operacionales que no tienen precedente en la historia de las CE. Esa empresa entrañaría cambios profundos de la manera en que se aplica el derecho de las CE, y comportaría consecuencias jurídicas, financieras y de personal que son muy difíciles de proyectar en el momento actual. Las CE

también dudan que se pudiera considerar una "medida razonable" en el sentido del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT.

4.588 Lo que reviste incluso más importancia es que el federalismo ejecutivo es un rasgo no sólo de la legislación aduanera de las CE, sino del derecho comunitario en general. Como el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se aplica no sólo a cuestiones aduaneras, sino a todas las cuestiones a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo X del GATT, las cuestiones planteadas en el presente caso no parecen limitarse necesariamente al ámbito de las aduanas, sino que conciernen a casi todas las esferas del derecho comunitario. Por ello, se trata de un ataque frontal contra el federalismo ejecutivo del ordenamiento jurídico de las CE, con consecuencias que transcenderían considerablemente del ámbito de las aduanas.

4.589 Esta alegación no puede tener un fundamento jurídico en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Esa disposición prevé determinadas normas mínimas de equidad procesal y transparencia. Al igual que los Acuerdos de la OMC en general, no prejuzga la autonomía interna de los Miembros de la OMC en cuestiones fundamentales de organización y administración internas.

ii) Los Estados Unidos interpretan erróneamente el sistema jurídico comunitario

4.590 En su Primera comunicación escrita, las CE han consignado en detalle como garantiza el sistema jurídico comunitario la interpretación y aplicación uniformes del derecho comunitario en todo el territorio de las CE. Las CE han explicado también cómo contribuyen las diversas instituciones y actores participantes a la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria.

4.591 En sus comunicaciones posteriores, los Estados Unidos no han ofrecido prácticamente ninguna reacción a estas explicaciones. En cambio, los Estados Unidos optan por persistir en su lectura sumamente selectiva del sistema jurídico de las CE, y hacen caso omiso de todo lo que no encaja en el cuadro negativo que desean trazar. El enfoque desdeñoso de los Estados Unidos respecto del sistema jurídico de las CE se refleja en una declaración repetida, en la que los Estados Unidos afirman que el sistema comunitario consiste en "una trama floja de principios, instrumentos, e instituciones, que incluye orientación no vinculante, así como obligaciones generales de cooperación entre los Estados miembros, y remisiones discrecionales de asuntos al Comité del Código Aduanero".

4.592 Las CE consideran que esas declaraciones son despectivas para las CE en su conjunto. Los mecanismos que las CE han descrito son típicos no sólo de la esfera del derecho aduanero, sino de la manera en que se garantizan la interpretación y aplicación uniformes del derecho comunitario en todo el territorio de las CE. En consecuencia, si los Estados Unidos consideran que la unión aduanera comunitaria constituye una "trama floja", cabe presumir que esa opinión se aplica también a las CE en su conjunto.

4.593 Esas declaraciones delatan una falta de comprensión y de aprecio de la historia y el éxito de la integración europea en el curso de los últimos 50 años. Quizás sea también reflejo del hecho de que existe una diferencia considerable entre las estructuras y procesos institucionales de los Estados Unidos por un lado y los de las CE por el otro. No obstante, hay que tolerar esas diferencias en el seno de la OMC, y no cabe presumir sencillamente que equivalen a infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.594 Por lo que se refiere a la función de la Comisión, el Tribunal de Justicia, y el Comité del Código Aduanero, hasta ahora los Estados Unidos no han corroborado sus críticas. Por lo que se refiere al Comité del Código Aduanero, al preguntárseles si tenían alguna prueba para demostrar su alegación de que la adopción de decisiones en el Comité resulta más difícil desde la ampliación más reciente el 1º de mayo de 2005, los Estados Unidos no presentaron las pruebas solicitadas y, en cambio, declararon que ello era "evidente". Además, se refirieron nuevamente a una declaración de un funcionario de las CE. Sin embargo, esa declaración se hizo a título personal inmediatamente

después de la entrada en vigor de la ampliación, por lo que difícilmente puede considerarse como "prueba" de lo que ha ocurrido desde la ampliación.

d) Las alegaciones de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

i) Clasificación arancelaria

Información arancelaria vinculante

El presunto riesgo del uso de la IAV más ventajosa

4.595 El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que proporcionaran pruebas de que en el sistema de IAV de las CE efectivamente se produce el uso de la IAV más ventajosa. En respuesta, los Estados Unidos no aportaron tales pruebas. En cambio, tratan de sortear la cuestión al referirse a observaciones que no guardan relación con la cuestión.

4.596 En primer lugar, los Estados Unidos se refieren a un pasaje del informe del Grupo Especial en el asunto *CE - Trozos de pollo*, en el que se informa de que las CE han declarado que con arreglo al derecho comunitario es posible retirar una solicitud de IAV cuando el importador considera que el resultado es desfavorable. Ahora bien, en esa declaración no figura nada que indique que en las CE se produzcan casos del uso de la IAV más ventajosa. Como la IAV se concede previa solicitud, y en interés del solicitante, es normal que se pueda retirar la solicitud antes de que se haya expedido la IAV. Antes de la expedición de la IAV, el solicitante desconocerá en la mayoría de los casos la clasificación que prevén las autoridades aduaneras. Por el contrario, una vez que se haya expedido la IAV, ya no se puede retirar la solicitud. Además, cabe señalar que todas las solicitudes, incluidas las que se han retirado, se introducen en la versión de la base de datos EBTI/IAV a la que tienen acceso las autoridades aduaneras.

4.597 En segundo lugar, las alegaciones de los Estados Unidos de que la expedición de IAV está "muy sesgada a favor de determinados Estados miembros", y las alegaciones de que este "sesgo sugiere la selección estratégica de los Estados miembros en los que los importadores solicitan la IAV". Las CE consideran que el hecho de que las autoridades de determinados Estados miembros expidan más IAV que otros refleja solamente diferencias entre Estados miembros en cuanto a volumen de mercado, ubicación geográfica, pautas comerciales y otras consideraciones de orden práctico.

4.598 Por último, los Estados Unidos declaran que "los importadores se dirigen constantemente a las embajadas de los Estados Unidos en los Estados miembros de las CE para consultar acerca de qué autoridades son las óptimas para solicitar IAV". Las CE observarían que, incluso en el caso de que se formulara ese tipo de preguntas, ello no es prueba de que efectivamente se produzcan prácticas divergentes. De hecho, no existen "autoridades óptimas", y la solicitud debe presentarse a las autoridades competentes de los Estados miembros como lo determina el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de Aplicación.

Las supuestas dificultades de detectar y rectificar IAV divergentes

4.599 Los Estados Unidos han aducido también que el sistema de las CE no prevé un mecanismo suficiente para detectar y rectificar divergencias entre IAV, en caso de que ocurran.

4.600 En sus respuestas a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos han criticado que la base de datos EBTI/IAV "no pone de manifiesto con ningún detalle las razones en las que se basan las distintas autoridades al clasificar una mercancía concreta de una manera concreta". Esta declaración deja atónitas a las CE. Para cada IAV que se expide, la base de datos EBTI/IAV (en sus dos versiones) incluye una descripción detallada del producto que es suficiente para permitir su

identificación y clasificación, el código NC en el que se clasificó el producto, y la justificación de la clasificación. En la justificación normalmente se señalarán las normas y principios de interpretación utilizados y, cuando proceda, otros fundamentos pertinentes, como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Las CE consideran que estos datos son totalmente suficientes para garantizar una información completa sobre la práctica de las autoridades aduaneras de las CE en materia de IAV.

4.601 Las CE también han explicado que la base de datos EBTI/IAV tiene muy buena acogida entre los comerciantes y las autoridades aduaneras, que la utilizan muy a menudo, como lo demuestra el hecho de que el promedio de consultas al mes en el primer semestre de 2005 fuera de unas 324.000. Los Estados Unidos han aducido que este número podría "indicar cualquier cosa, desde curiosidad intelectual hasta la recopilación de información estadística". A las CE les parece que la explicación de que 324.000 consultas al mes se deberían a "curiosidad intelectual" o "recopilación de información estadística" es notablemente rebuscada. Es evidente que la base de datos EBTI/IAV de las CE es un instrumento útil para garantizar una práctica uniforme de clasificación, que es utilizada muy a menudo por comerciantes y autoridades aduaneras por igual.

> La alegación de los Estados Unidos de que los Estados miembros no consideran vinculante la IAV emitida por otros Estados miembros

4.602 En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos han alegado que "los Estados miembros no siempre tratan la IAV facilitada por otros Estados miembros como vinculante". Una vez más, los Estados Unidos han omitido ofrecer ejemplos específicos para demostrar su alegación. En cambio, señalan una encuesta de una asociación comercial a la que ya se han referido en su Primera comunicación escrita. Según esta encuesta, una empresa comunicó que "la información arancelaria vinculante de Alemania todavía no es aceptada por otros países de la UE, en particular Grecia y Portugal".

4.603 Las CE cuestionan que existan problemas en relación con el reconocimiento de IAV de Alemania por otros Estados miembros de las CE. La "encuesta" a la que se refieren los Estados Unidos no es "prueba" de lo contrario. Simplemente refleja una observación formulada por una empresa no identificada que no está respaldada por ninguna otra explicación o prueba. Por lo tanto, es imposible verificar la exactitud de la afirmación. Las CE señalarían que incluso si un importador afirma que la IAV no fue aceptada, ello puede de hecho reflejar una serie de problemas de un tipo totalmente diferente, por ejemplo, la falta de identidad de los productos importados con los descritos en la IAV. Además, si efectivamente una autoridad aduanera no reconoce la IAV emitida por otro Estado miembro, el importador puede obtener la revisión judicial. El importador también puede informar a la Comisión Europea, pero a las CE no les consta que esto haya ocurrido.

4.604 En segundo lugar, los Estados Unidos se refieren a una declaración de las CE en el contexto de la diferencia *CE - Trozos de pollo*, en las que se cita que las CE afirman que una "interpretación" concreta no fue observada en otras oficinas aduaneras comunitarias. Como las CE explicarán con más detalle más adelante, no hubo una diferencia de interpretación o de aplicación de las normas de clasificación de las CE en este caso. No obstante, a los efectos del presente examen, basta señalar que la declaración de las CE se refería únicamente a "interpretación". Las CE no han dicho en ninguna parte del informe del Grupo Especial sobre *CE - Trozos de pollo* que no se reconociera una IAV cuando la presentaba el titular. Por lo tanto, la declaración citada por los Estados Unidos no es una respuesta pertinente a la pregunta del Grupo Especial.

4.605 Finalmente, los Estados Unidos remiten al Grupo Especial a la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen en el caso *Bantex*, en la que esa Oficina señaló que "se han expedido numerosas decisiones arancelarias aduaneras vinculantes en relación con mercancías comparables". Esta observación delata una vez más un mal entendimiento de cómo funciona el sistema de IAV comunitario. La IAV sólo obliga a las autoridades aduaneras frente al titular de la IAV y no parece que *Bantex* GmbH fuera el titular de la IAV para los productos en litigio. Así pues, una vez más, los

Estados Unidos responden a la pregunta del Grupo Especial con un ejemplo que no guarda relación con la pregunta. Además, cabe señalar que, en el caso *Bantex*, la cuestión no era que existiera IAV para mercancías comparables, sino si las mercancías eran idénticas a las descritas en las IAV. Al no ser así, el ejemplo es incluso menos indicado para respaldar la alegación estadounidense.

El efecto jurídico de la IAV

4.606 En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos han hecho también numerosas críticas de los efectos jurídicos de la IAV, que se refieren notablemente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia en el caso *Timmermans*. Esas críticas carecen de fundamento: el caso *Timmermans* en efecto puede contribuir a la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria. Las CE han señalado también que los argumentos de los Estados Unidos no están en consonancia con sus críticas de la decisión del Tribunal del Reino Unido en el caso *Bantex*.

4.607 Al ser preguntados por el Grupo Especial acerca de esta evidente falta de consonancia, los Estados Unidos respondieron que "en ausencia de una administración aduanera centralizada", ambas situaciones, o sea, permitir la revocación de IAV o no permitirla, podría derivar en una falta de uniformidad. Como las CE ya han explicado *supra*, esta respuesta estadounidense demuestra irrefutablemente que las características específicas del sistema de IAV de las CE no son de ningún modo problemáticas desde el punto de vista de la aplicación uniforme de las normas de clasificación de las CE. Más bien, la argumentación de los Estados Unidos tiene el objetivo de obligar a las CE a crear un organismo aduanero comunitario.

4.608 Que no existe ningún problema con el sistema IAV de las CE, y especialmente el efecto de la IAV en el ordenamiento jurídico de las CE, lo confirma también una comparación de las normas estadounidenses sobre resoluciones anticipadas. Por ejemplo, los Estados Unidos han criticado en su Primera comunicación escrita que la IAV en las CE sea "específica del titular". Es interesante que exactamente lo mismo parece ocurrir en el caso de las resoluciones anticipadas en los Estados Unidos, donde la legislación estadounidense advierte explícitamente que "ninguna otra persona [distinta de aquella a la que va dirigida la resolución] debe basarse en la carta de resolución o asumir que los principios de esa resolución se aplicarán en relación con alguna transacción distinta de la que se describe en el auto".

4.609 Igualmente, la legislación estadounidense también dispone que una carta de resolución se podrá invocar únicamente "en ausencia de un cambio de práctica u otra modificación o revocación que afecte al principio de la resolución enunciado en la carta de resolución". Las CE no pueden entender de qué manera esto sea fundamentalmente diferente de la jurisprudencia en el caso *Timmermans*.

4.610 El efecto más bien limitado de las resoluciones dictadas por las Aduanas de los Estados Unidos también ha sido confirmado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto *Estados Unidos* contra *Mead Corp*, en el que el Tribunal dictaminó que las cartas de resolución de las Aduanas de los Estados Unidos no tienen fuerza de ley y que las Aduanas han considerado que una clasificación es firme únicamente entre las Aduanas y el importador al que se le expidió.

Presuntas divergencias en la práctica de clasificación de las CE

Forros opacos para cortinas

4.611 En su Primera comunicación escrita, las CE ya han demostrado que los productos en litigio no eran idénticos a los productos descritos en la IAV mencionada por los Estados Unidos y que, así pues, ese asunto no demuestra una falta de uniformidad en la práctica de clasificación de las CE.

4.612 Al ser requeridos por el Grupo Especial para que comentaran acerca de las explicaciones de las CE, los Estados Unidos comienzan sus observaciones cuestionando la declaración de las CE de que el producto "ante las autoridades alemanas no era tundido". En apoyo de esa afirmación, los Estados Unidos se refieren a una "decisión" de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo en la que supuestamente se basó la Oficina Principal de Aduanas de Bremen. Esas afirmaciones son incorrectas ya que la carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo se refería a un recurso administrativo interpuesto por una empresa llamada Ornata GmbH. Este recurso no está relacionado de ninguna manera con el recurso administrativo interpuesto por Bautex-Stoffe GmbH que fue objeto de la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen, y desde luego la Oficina Principal de Aduanas de Bremen no se basó en la carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo.

4.613 Cabe señalar también que, en contra de las alegaciones de los Estados Unidos, esa carta no contiene una decisión, sino que en ella se pedían las observaciones del importador sobre la clasificación prevista. En respuesta a esa carta, Ornata GmbH retiró su protesta por carta de fecha 16 de septiembre de 1998.

4.614 Por lo que se refiere al fondo, los Estados Unidos imputan a la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen ser incompatible con una nota explicativa de la partida del SA 59.07. Esta afirmación es manifiestamente errónea. La nota explicativa G 1 de la partida 59.07 del SA dispone que los tejidos previstos incluyen "tejidos que, después de recubrirlos en toda la superficie con un adhesivo (a base de caucho o de otro tipo), materias plásticas, caucho u otras materias, se espolvorean con una delgada película de partículas de materias diversas, tales como: 1) [t]undiznos: estos tejidos imitan principalmente a las gamuzas y se asemejan a las llamadas *pieles de Suecia*". Por lo tanto, la presencia de tundiznos o nudos de materias textiles era un criterio pertinente para la clasificación en la partida 59.07. La decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen tuvo presente este factor y, como el producto no estaba tundido, no se podía clasificar en la partida 59.07.

4.615 Los Estados Unidos también critican sin justificación la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen por haber considerado la densidad de la trama del producto. Según la Nota 2) a) 5) del Capítulo 59 de la NC, la partida 5903 no se aplica a las hojas, placas o tiras de plástico celular, combinadas con tela, en las que ésta sea un simple soporte. La cuestión de si la trama era fina es un criterio pertinente para establecer si es un simple soporte o no.

4.616 Los Estados Unidos han criticado también a las CE por haberse referido a un reglamento de clasificación relativo a un tipo de pantalones de esquí. Esta crítica no está justificada. El Reglamento 1458/97 de la Comisión se refería a la clasificación de prendas en la partida 6210, que abarca "prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó 5907". En consecuencia, el reglamento de clasificación en cuestión afectaba implícitamente a la clasificación de la tela con la que estaban confeccionados los pantalones. Al ser así, tuvo que aplicar la Nota 2 a) 5) del Capítulo 59 de la Nomenclatura Combinada, es decir, determinar si la tela sirve de simple soporte, y en este contexto tuvo en cuenta entre otras cosas la "densidad" de la tela. Por ello, el Reglamento 1458/97 de la Comisión era ciertamente un precedente pertinente para la interpretación de la Nota 2 a) 5) del Capítulo 59.

4.617 Por el mismo motivo, las CE tampoco pueden encontrar nada que vaya en contra del derecho comunitario en la "ayuda interpretativa" a la que se refiere la oficina aduanera alemana de menor rango: el criterio de la densidad de la trama mencionado en ese texto era plenamente compatible con el derecho comunitario y el texto alemán era simplemente una ayuda interpretativa sin ningún carácter jurídicamente vinculante.

4.618 Por último, los Estados Unidos también alegan que, al guiarse por la densidad de la tela, la Oficina Principal de Aduanas de Bremen violó el encabezamiento de la Nota 2 a) del Capítulo 59, que declara que la partida 5903 se aplica a "las telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, cualquiera que sea el peso por metro cuadrado". Esta crítica también es injustificada

porque el peso citado es el peso de todo el producto, es decir, la tela impregnada, recubierta, revestida o estratificada. La Oficina Principal de Aduanas de Bremen no consideró el peso del producto, sino más bien la densidad de la trama de la tela de poliéster, que sólo es una parte del producto. En consecuencia, la decisión de la Oficina es plenamente compatible con el preámbulo de la Nota 2 a) del Capítulo 59.

4.619 Además, las tentativas de los Estados Unidos de criticar ciertos aspectos del razonamiento de las autoridades aduaneras alemanas tampoco guardan relación con el presente asunto, que no se ocupa de la cuestión de la partida en la que se debería haber clasificado correctamente un producto concreto, sino de la cuestión de la uniformidad de aplicación de las normas de clasificación de las CE. Además, en la medida que los Estados Unidos consideran que la práctica comunitaria es incompatible con una nota explicativa del SA, podría plantear este asunto en el contexto de la OMA de conformidad con el artículo 10 del Convenio sobre el SA.

4.620 Es evidente que los productos que se describen en la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen no eran idénticos a los productos descritos en las IAV a la que se refieren los Estados Unidos, ya que los primeros no estaban flocados con tundiznos, mientras que los productos que figuran en las IAV se describen como tundidos. Con arreglo a esas descripciones de productos, éstos tenían que clasificarse de forma diferente. Así pues, esta diferencia en la clasificación arancelaria no es una falta de uniformidad, sino, al contrario, el resultado de la aplicación correcta de la Nomenclatura Combinada.

4.621 Además, si se ha producido un error respecto de la descripción de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras alemanas, los importadores en cuestión podrían haber impugnado la decisión en los tribunales alemanes. Ahora bien, no se ha tomado ninguna medida de esa índole.

Monitores LCD

4.622 Las CE han señalado especialmente el hecho de que el Reglamento 493/2005 del Consejo, al suspender los derechos aduaneros del código 8528 para monitores de determinadas dimensiones, garantiza un trato arancelario uniforme para todos los monitores previstos en el Reglamento. Los Estados Unidos siguen criticando este reglamento por ser "provisional" y una "medida paliativa", y aducen que una suspensión de los derechos es "muy diferente de un reglamento de clasificación".

4.623 Las CE consideran que estas objeciones carecen de fundamento. El hecho de que ese reglamento esté en vigor únicamente hasta el 31 de diciembre de 2006 no merma en absoluto su utilidad para garantizar un trato arancelario uniforme en todo el territorio de las CE en el día de hoy. Además, antes de que expire la medida, las CE examinarán la situación y adoptarán las medidas que resulten necesarias. Los Estados Unidos no pueden basar una alegación de aplicación no uniforme en la mera especulación de que las CE puedan no adoptar determinadas medidas en el futuro.

4.624 Los Estados Unidos también se equivocan al afirmar que el Reglamento 493/2005 no garantiza la aplicación uniforme porque la medida atañe a la suspensión de un tipo de derecho, y no a la clasificación de un producto. Los Estados Unidos no se percatan de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige la aplicación uniforme por sí misma, sino a fin de garantizar unas condiciones uniformes de trato para los comerciantes. En consecuencia, sólo puede afirmarse que se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X del GATT cuando una variación de la práctica tenga de hecho un impacto importante para los comerciantes. En el caso de los monitores LCD, a raíz del Reglamento 493/2005, y para los videomonitores previstos en el reglamento, no hay ninguna diferencia en cuanto a los derechos aduaneros entre los monitores clasificadoss en el código 8471 y loas clasificados en el código 8528, ya que el tipo de derecho para ambos será el 0 por ciento. Tampoco existen otras diferencias pertinentes en el trato. Por lo tanto, incluso si hubiera diferencias en la clasificación arancelaria de los monitores en cuestión, no tendrían absolutamente ningún

impacto para los comerciantes. He ahí la razón de que la comunidad comerciante efectivamente apoyara con firmeza la medida.

4.625 Además, las CE consideran que incluso si el Grupo Especial dictaminara que existía una incompatibilidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, no podría considerarse que esta compatibilidad constituyera anulación o menoscabo de los beneficios que les corresponden a los Estados Unidos en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Como los Estados Unidos no han cuestionado que el trato arancelario de los monitores previstos en el Reglamento 493/2005 sea uniforme, y el tipo de derecho es el 0 por ciento, habría que considerar por lo tanto que la presunción de anulación y menoscabo establecida por el párrafo 8 del artículo 3 del ESD ha sido refutada en el presente caso.

4.626 Los Estados Unidos critican también las conclusiones a las que llegó el Comité del Código Aduanero en su 346ª reunión celebrada del 30 de junio al 2 de julio de 2004, según las cuales "salvo que un importador pueda demostrar que un monitor sólo será utilizable con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos (partida 8471), o como tablero indicador (partida 8531), el monitor deberá clasificarse en la partida 8528". Los Estados Unidos aducen en particular que esta conclusión es incompatible con la Nota 5 del Capítulo 84 del Arancel Aduanero Común, según la cual una unidad ha de considerarse parte de un sistema completo si "es del tipo utilizado exclusiva o principalmente en un sistema automático para el tratamiento o procesamiento de datos".

4.627 Las CE recuerdan que el presente caso no concierne a la corrección de distintas clasificaciones, sino a la cuestión de la aplicación uniforme. Los Estados Unidos no demuestran que haya falta de uniformidad; más bien, ponen en tela de juicio la práctica de clasificación sustantiva de las CE. Tales argumentos no son aceptables en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, lo que ha sido confirmado también por el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, en el que el Grupo Especial dictaminó que no era "procedente que un grupo especial examine si un Miembro ha actuado de forma compatible con su propia legislación interna".

4.628 Además, las alegaciones de los Estados Unidos de que las conclusiones del Comité del Código Aduanero son incompatibles con la Nota 5 a) del capítulo 84 son falsas. Atendiendo a varias exposiciones de la industria interesada, el Comité concluyó que la industria no había logrado presentar ningún criterio con arreglo al cual se pudiera establecer la utilización principal.

4.629 Las CE añadirían que no entienden qué finalidad podrían tener las conclusiones del Comité del Código Aduanero si, tal como parecen sugerir los Estados Unidos, se limitaran a reafirmar el texto de la Nomenclatura Combinada. Para poder velar por una aplicación uniforme de la NC, el Comité debe poder formular, a tenor de los hechos disponibles, y actuando de conformidad con la Nomenclatura Combinada, conclusiones específicas relativas a la clasificación de mercancías concretas. Así es como el Comité puede contribuir, y contribuye, a la clasificación uniforme de mercancías en todo el territorio de las CE. Así pues, la sugerencia estadounidense de que las conclusiones del Comité "en realidad menoscaban la uniformidad en lugar de fomentarla" carece manifiestamente de fundamento.

4.630 La propia práctica de los Estados Unidos no parece divergir mucho de la de las CE en este aspecto. En su Primera comunicación escrita, las CE ya habían señalado una resolución en la que a las Aduanas de los Estados Unidos les había resultado imposible establecer la "utilización principal" de un monitor. En otra reciente resolución sobre monitores LCD, las Aduanas de los Estados Unidos concluyeron que "la doble finalidad de los monitores es indicio de una falta de utilización principal de esta mercancía", y clasificaron por tanto la mercancía en la partida 8528. Igualmente, en una reciente orientación a los comerciantes sobre módulos visualizadores planos, las Aduanas de los Estados Unidos declararon lo siguiente: "Hasta ahora ha resultado difícil determinar la cuestión de la utilización principal/exclusiva. Como consecuencia de este examen por las Aduanas de los Estados

Unidos, se ha determinado que sólo se utilizan principalmente en sistemas de tratamiento o procesamiento de información módulos visualizadores planos de dimensiones específicas …"

Otros ejemplos de presunta no uniformidad en la práctica de clasificación

4.631 El Grupo Especial ha pedido a los Estados Unidos que aporten pruebas de su alegación de que existen otros casos de aplicación no uniforme en la práctica de clasificación de las CE. En respuesta, los Estados Unidos se refieren a un número limitado de afirmaciones en su mayor parte no corroboradas que ya hicieron en su Primera comunicación escrita.

4.632 En primer lugar, los Estados Unidos se refieren a un cuestionario de una asociación comercial de marzo de 2005, en el que se informa de que una empresa entrevistada declaró que "en Italia y España, los artículos o "shorts" unisex tienen clasificaciones diferentes de las de Alemania". Esta "encuesta" se basa en un comentario de una sola empresa sin identificar, y no está respaldada por otras pruebas o explicaciones. Sobre esa base, es imposible cerciorarse de la naturaleza precisa de las mercancías en cuestión, ni determinar las cuestiones de clasificación arancelaria que puedan entrar en juego. Por lo tanto, las CE consideran que esta declaración no aporta ninguna prueba de falta de uniformidad en la práctica de clasificación de las CE.

4.633 En segundo lugar, los Estados Unidos se refieren una vez más al asunto C-339/98, *Peacock*, en el que Alemania había clasificado determinadas tarjetas de red de manera diferente a la clasificación prevista en las IAV expedidas por otros Estados miembros determinados. Las CE no entiende de qué manera ilustra este asunto una ausencia de aplicación uniforme. Para empezar, las CE recordarían que este asunto se refiere a importaciones realizadas antes de 1995. Ahora bien, en 1995 la Comisión Europea, con objeto de asegurar una aplicación uniforme del derecho comunitario, adoptó el Reglamento 1165/95 en el que se preveía la clasificación de las tarjetas adaptadoras en cuestión en la partida 8517 (aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos).

4.634 La clasificación de las autoridades aduaneras alemanas fue recurrida en los tribunales competentes, que remitieron la cuestión al Tribunal Europeo de Justicia. En sentencia del 19 de octubre de 2000 en el asunto C-339/98, el Tribunal de Justicia decidió que los productos en cuestión se tenían que clasificar en la partida 8471 (máquinas automáticas para tratamiento de información y sus unidades). En otra sentencia, en el asunto C-463/95, *Cabletron*, el Tribunal de Justicia confirmó esta interpretación y decidió que el Reglamento 1165/95 no era válido.

4.635 En general, el de las tarjetas de red es un asunto en el que la Comisión ya había tomado en 1995 las medidas necesarias para garantizar una práctica de clasificación uniforme. Como los propios Estados Unidos han reconocido, lo que es significativo no es que se pueda producir una divergencia, sino que se aborda y se subsana cuando ha ocurrido. Eso es precisamente lo que sucedió en el asunto *Peacock*.

4.636 Además, las CE observarían que la clasificación correcta del equipo de red es una cuestión técnica compleja a la que muchas autoridades aduaneras han tenido que hacer frente. Los propios Estados Unidos tuvieron dificultades para clasificar equipo de red, y han revocado o modificado numerosas resoluciones relativas a la clasificación de este tipo de equipo. Por último, la clasificación del equipo de red ha conducido también a un litigio en la OMC entre las CE y los Estados Unidos acerca de la clasificación correcta de equipo para redes locales, en el que los Estados Unidos alegaron infructuosamente que, debido a su práctica de clasificación, las CE no respetaban sus concesiones arancelarias respecto del equipo para redes locales. Las CE opinan que es improcedente que los Estados Unidos planteen lo que es esencialmente una cuestión sustantiva de clasificación en el contexto del presente caso, que se ocupa de la uniformidad de aplicación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.637 En tercer lugar, los Estados Unidos se refieren a la diferencia *CE - Trozos de pollo*. Sin embargo, cabe recordar que ese asunto afectaba a la interpretación de las concesiones arancelarias de las CE, y de paso al tema de la clasificación correcta de los productos en cuestión. Por el contrario, en *CE - Trozos de pollo*, los demandantes no formularon alegaciones en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, y nunca se alegó que la práctica de clasificación de las CE no hubiera sido uniforme. Al contrario, los detalles del caso demuestra que durante todo el período en cuestión las CE disponían de medidas que garantizaban la clasificación arancelaria uniforme de los productos. Sobre esa base, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación llegaron a la conclusión de que la práctica de clasificación de las CE había sido totalmente uniforme.

4.638 Por último, los Estados Unidos se refieren nuevamente a una presunta falta de uniformidad en relación con la clasificación de los productos para riego por goteo. Se trata de un caso de IAV divergente temporalmente que se subsanó mediante la adopción de un reglamento de clasificación y que hoy en día está resuelto.

4.639 El 6 de julio de 1999 Francia expidió información arancelaria vinculante para un producto de Roberts Irrigation Systems (Ro-Drip) con el código NC 8424 81 10. El 9 de febrero de 2001, España expidió una IAV en la que clasificó el producto en el código NC 3917 32 99. La Sección de la Nomenclatura Arancelaria y Estadística del Comité del Código Aduanero examinó este tema de IAV divergente. Durante ese trámite, Roberts Irrigation Systems presentó una comunicación al Comité. Además, el Gobierno de los Estados Unidos también presentó varias comunicaciones a la Comisión. La cuestión quedó resuelta mediante la adopción del Reglamento (CE) Nº 763/2002 de la Comisión, de 3 de mayo de 2002, que clasificó el producto en el código 3917 32 99. En consecuencia, Francia revocó y sustituyó la información arancelaria vinculante expedida previamente.

4.640 Los Estados Unidos han afirmado que ese caso respalda sus alegaciones porque uno o más Estados miembro no consideraron vinculante la IAV expedida por otros Estados miembros. Esta observación parece no venir al caso, ya que las IAV no se expidieron para los mismos titulares. En cualquier caso, como los propios Estados Unidos han argumentado, lo que importa no es si se produjeron divergencias, sino si se subsanan y eliminan cuando ocurren. En el caso de los productos para riego por goteo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Una vez que se hubo detectado la IAV divergente, el asunto fue abordado con rapidez y resuelto en un plazo de 15 meses, un plazo que es prudencial para resolver definitivamente una cuestión compleja de clasificación.

ii) Valoración en aduana

Informe 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE

4.641 El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que presentaran pruebas acerca de la incidencia de la aplicación no uniforme respecto de las cuestiones de valoración en aduana examinadas en el Informe 23/2000 y a las que se habían referido los Estados Unidos. En respuesta, los Estados Unidos rehusaron aportar tales pruebas y adujeron que su alegación "no gira en torno de la frecuencia estadística de la aplicación no uniforme".

4.642 Las CE no están de acuerdo con esta respuesta. En primer lugar, para que haya una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT tiene que existir una pauta de aplicación no uniforme. Así pues, la incidencia estadística de casos de aplicación no uniforme en las esferas de que se trata es una cuestión sumamente pertinente. Como los Estados Unidos no han aportado tales pruebas, no han establecido presunción de infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.643 Incluso mayor importancia reviste que, con sus referencias al Informe 23/2000, los Estados Unidos no han demostrado la existencia de una falta de uniformidad en el sistema de las CE. El Informe del Tribunal de Cuentas no pretendía juzgar el cumplimiento del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Además, en cuanto a todas las cuestiones suscitadas en el informe, éste ha sido

objeto de seguimiento en las instituciones de las CE y, siempre que ha resultado necesario, se han adoptado las medidas pertinentes.

4.644 La respuesta estadounidense a estas observaciones es pedir al Grupo Especial que "ejerza las facultades que le confiere el artículo 13 del ESD […] para recabar información del tipo que se puso a disposición del Tribunal de Cuentas para preparar su informe sobre valoración". Como ya han observado las CE, esta petición equivale a desplazar la carga de la prueba a las CE, y por lo tanto debe ser rechazada.

4.645 Además, la petición de los Estados Unidos es también inviable. El Informe 23/2000 se basó visitas de auditoría que tuvieron lugar en los locales de la Comisión y de las administraciones aduaneras de 12 Estados miembros de las CE en 1999-2000. Cualquier información que el Tribunal de Cuentas, que es una institución comunitaria independiente, pueda haber recabado en esa ocasión obra en poder del Tribunal de Cuentas exclusivamente. Además, esa información reflejaría la situación imperante en 1999-2000, pero no la actual. Así pues, la sugerencia estadounidense equivale básicamente a pedir a las CE que realicen una nueva auditoía de la valoración en aduana. De esta forma, los Estados Unidos al parecer quieren transformar una institución comunitaria que está dedicada a velar por la percepción y administración correctas de los recursos propios de las CE en un mecanismo destinado a proporcionarles las pruebas necesarias para llevar a cabo una impugnación en el marco de la OMC. Debe considerarse que la petición de los Estados Unidos es inadmisible.

4.646 En cuanto a la cuestión de los gastos de reparación cubiertos por la garantía, los Estados Unidos al parecer aceptan ya que ha quedado resuelta por el Reglamento 44/2002 de la Comisión, de 11 de marzo de 2002. No obstante, los Estados Unidos critican a las CE por haber presuntamente tardado más de 12 años en solucionar el asunto. Ante todo, no es cierto que las CE toleraran una falta de uniformidad durante 12 años. Es incluso más importante que, en una cuestión compleja de valoración en aduana, las propias CE detectaran el problema y adoptaran las medidas necesarias para subsanarlo. Así pues, antes que demostrar una deficiencia en el sistema de las CE, este caso prueba que el sistema comunitario funciona correctamente.

4.647 Los Estados Unidos también vuelven a referirse a la cuestión específica de las auditorías de valoración. En particular, los Estados Unidos mencionan una declaración en el informe del Tribunal de Cuentas según la cual un Estado miembro no tenía derecho a proceder a auditorías posteriores a la importación.

4.648 A este respecto, las CE desearían aclarar que con arreglo al apartado 2 del artículo 76 del CAC, cada Estado miembro puede realizar todas las verificaciones necesarias para cerciorarse de la exactitud de los detalles contenidos en la declaración, lo que incluye también todo lo relativo al valor de las mercancías. El Estado miembro al que se refería el Tribunal de Cuentas era Grecia, que, en el año 2000, había establecido un servicio con facultades para efectuar auditorías *a posteriori*. Además, las CE se han referido también a la Guía comunitaria sobre auditorías de aduana, que garantiza una práctica uniforme de auditoría en todo el territorio de las CE.

El caso Reebok

4.649 El Grupo Especial ha solicitado a los Estados Unidos que aporten pruebas concretas en apoyo de su afirmación de que existe una falta de aplicación uniforme en cuanto al trato de la vinculación entre las partes en el marco de la letra e) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación. Los Estados Unidos informan en su respuesta de que su descripción del caso se basa en "un relato del importador en cuestión". Además, los Estados Unidos declaran que "debido a preocupaciones relativas a que estaba pendiente un pleito sobre el asunto en litigio y la sensibilidad comercial de la información que figuraría en la documentación justificativa, el importador rehusó proporcionar documentación a la sazón".

4.650 Los Estados Unidos no aportan por tanto ninguna prueba en apoyo de su alegación de que existe una falta de uniformidad en la aplicación del apartado 1 e) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación. Los Estados Unidos no pueden justificar su omisión de cumplir la carga de la prueba aduciendo la negativa del importador en cuestión a aportar las pruebas necesarias. Incumbe a los propios Estados Unidos, como parte demandante, aportar las pruebas de la alegación que formula.

4.651 Los Estados Unidos han declarado en repetidas ocasiones que las "CE no niegan los hechos esenciales". Las CE desde luego no han cuestionado que Reebok se haya dirigido a ellas en relación con un problema sobre la aplicación por parte de las autoridades aduaneras españolas del apartado 1 e) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación. No obstante, las CE cuestionan que exista un problema de aplicación no uniforme de esta disposición.

4.652 Los Estados Unidos también critican a las CE por haber declarado que la Comisión y el Comité del Código Aduanero no pueden servir de sucedáneos de los procedimientos normales de recurso que se aplican en cada caso, y han afirmado que "no existe una institución de las CE ante la que un comerciante tenga derecho a obtener un trato uniforme". Esta afirmación choca de frente con el hecho de que, según las propias declaraciones de los Estados Unidos, el asunto se encuentra pendiente en los tribunales españoles, y el importador interesado se niega a compartir información debido a esa circunstancia. Además, como las CE ya han explicado en repetidas ocasiones, cuando un tribunal de un Estado miembro aplica el derecho comunitario, actúa en calidad de órgano de las CE. Por último, si existe un problema de interpretación del derecho comunitario, puede -y en determinados casos, debe- remitirse al Tribunal Europeo de Justicia por medio de una solicitud de decisión prejudicial, lo que garantiza una interpretación uniforme del derecho de las CE en toda la Comunidad.

4.653 Además, los Estados Unidos se han referido a una decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre una reclamación de un importador. Las CE pueden confirmar que la reclamación fue presentada en nombre de Reebok, que alegaba que la Comisión Europea no cumplía cabalmente sus obligaciones respecto de la aplicación de la legislación sobre valoración en aduana.

4.654 Para empezar, las CE desean señalar que el Defensor del Pueblo no adoptó una decisión sobre el fondo de la reclamación. En cambio, el reclamante retiró la reclamación e indicó que "estaba satisfecho con la posición que la Comisión había adoptado en el asunto y con su propuesta de estudiar las cuestiones problemáticas pendientes".

4.655 En segundo lugar, las CE desearían recordar que el Defensor del Pueblo Europeo es un mecanismo más que contribuye a la correcta aplicación del derecho comunitario por las instituciones de las CE. El hecho de que exista una decisión del Defensor del Pueblo Europeo no es por lo tanto problemático en sí, sino que demuestra más bien el buen funcionamiento de los diversos mecanismos del sistema de las CE.

4.656 Por último, las CE señalarían que los hechos que se consignan en la decisión no se han presentado de una forma totalmente correcta. En especial, los Estados Unidos citan una carta de la Comisión Europea de 20 de diciembre de 2000, en la que se supone que la Comisión ha declarado "que las cuestiones de interpretación planteadas por el reclamante eran competencia de las autoridades aduaneras nacionales". La cita no es correcta. En su carta de 20 de diciembre de 2000, la Comisión declaró que "[l]a aplicación del criterio [del apartado 1 e) del artículo 143] en los distintos casos es naturalmente competencia de las administraciones nacionales y los Servicios de la Comisión sólo podían expresar una opinión si los servicios aduaneros en cuestión les transmitieran un expediente detallado sobre todos los aspectos del caso. Sin embargo, nuestros servicios en general no están obligados a realizar un examen detallado de casos muy específicos ya que esta tarea corresponde a las administraciones nacionales".

4.657 Las CE consideran que esta declaración recoge correctamente la división de competencias entre la Comisión Europea y las autoridades aduaneras de los Estados miembros, que son competentes para aplicar la legislación aduanera en cada caso. No es ni posible ni procedente que la Comisión se erija en sustituta de la autoridad competente simplemente porque en un caso concreto de aplicación un comerciante no esté satisfecho con un enfoque adoptado por la autoridad aduanera. Al contrario, la Comisión Europea está encargada de vigilar y garantizar la interpretación y aplicación correctas y uniformes de la normativa aduanera comunitaria.

4.658 En el caso de que se trata, Reebok simplemente no había presentado en el momento de que hablamos ninguna prueba a la Comisión Europea que demostrara una aplicación incorrecta del derecho comunitario, o una divergencia en la aplicación de ese derecho. Así pues, la Comisión no estimó la necesidad de intervenir en el caso pendiente específico.

4.659 Cuando se informa a la Comisión de una interpretación errónea del derecho comunitario, incluida la normativa aduanera comunitaria, ésta toma las medidas del caso. Un ejemplo pertinente lo brinda una reclamación presentada por Reebok en relación con la imposición de intereses compensatorios por las autoridades aduaneras españolas. Como esta reclamación demostró una incompatibilidad con el derecho comunitario, condujo a que la Comisión incoara un procedimiento por incumplimiento contra España. Las CE recalcarían que Reebok no presentó una reclamación similar respecto de la aplicación del apartado 1 e) del artículo 143 del CAC.

iii) Transformación bajo control aduanero

4.660 En relación con este régimen aduanero, los Estados Unidos han limitado progresivamente sus alegaciones. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos señalaron una posible contradicción entre el artículo 133 del CAC y el apartado 3 del artículo 502 del Reglamento de Aplicación, pues el primero prescribe que el solicitante proporcione información sobre la creación o el mantenimiento de actividades de transformación en la Comunidad, así como sobre la ausencia de perjuicios para los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares, mientras el Reglamento de Aplicación prescribe la primera condición, pero no la segunda. Al mismo tiempo, los Estados Unidos pusieron de relieve que, según esta interpretación, una directriz adoptada por el Reino Unido exigía ambos tipos de información, mientras que la directriz francesa enuncia solamente la primera condición.

4.661 Las CE explicaron en su Primera comunicación escrita que no existe contradicción entre el CAC y el Reglamento de Aplicación, porque el segundo es legislación subsidiaria y no puede modificar las condiciones establecidas en el CAC. Las CE también explicaron que la directriz tanto del Reino Unido como de Francia exigía que el importador presentase ambos lotes de información.

4.662 Los Estados Unidos insisten en que la directriz francesa no se refiere a la información sobre los perjuicios para los productores comunitarios que, en cambio, sí está prescrita por la directriz del Reino Unido.

4.663 Las CE consideran que la crítica estadounidense se basa en una interpretación aislada e incorrecta de la directriz francesa, que se ha de interpretar en el contexto de la legislación comunitaria. La directriz recoge las condiciones económicas que han de cumplirse para obtener autorización para transformar bajo control aduanero de la misma forma que el apartado 3 del artículo 502 del Reglamento de Aplicación, a saber, utilizando para ello una versión abreviada de los requisitos estipulados en la letra e) del artículo 133 del CAC. Las autoridades francesas exigen el mismo tipo de información que el Reino Unido: la información necesaria para evaluar si se reúnen "las condiciones necesarias para que el régimen pueda contribuir a favorecer la creación y mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en la Comunidad sin que perjudiquen los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares (condiciones económicas)".

4.664 Esta interpretación cuenta también con el respaldo del párrafo 78 de la directriz francesa que, en el Capítulo II "Examen de las condiciones económicas", juega el papel de preámbulo de la Sección I, en la que se encuentra el párrafo 83. En contra de lo que afirman los Estados Unidos, este párrafo 78 es algo más que una paráfrasis introductoria de determinadas disposiciones del CAC. Este párrafo recuerda, para la Sección I en su conjunto, que la inexistencia de efectos negativos para los intereses esenciales de los productores comunitarios es una condición económica general común a los tres regímenes aduaneros previstos en esa disposición (perfeccionamiento activo, perfeccionamiento pasivo y transformación bajo control aduanero), como está estipulado con claridad en la letra c) del artículo 117, la letra c) del artículo 148 y la letra e) del artículo 133 del CAC, respectivamente.

4.665 En el presente caso, los Estados Unidos no han aportado pruebas sobre la aplicación de la directriz emitida por las autoridades francesas. Las CE desearían recordar que, con arreglo a la jurisprudencia del Órgano de Apelación, incumbe a la parte que afirma que una medida de otro Miembro es incompatible con las obligaciones en el marco de la OMC la carga de probar que la medida en cuestión tiene el contenido o significado que se alega. Entre las pruebas pertinentes para establecer el significado podrán incluirse también pruebas relativas a la aplicación de la medida. Así lo explicó el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono* y en *Estados Unidos - Exámenes por extinción: Artículos tubulares para campos petrolíferos*.

iv) Procedimiento de domiciliación

4.666 En respuesta a dos preguntas del Grupo Especial, los Estados Unidos han explicado su interpretación de los procedimientos aplicables en las CE para el despacho a libre práctica y han afirmado que la falta de aplicación uniforme descrita en su Primera comunicación escrita existe con independencia de las etapas concretas en que esté articulado el proceso de despacho.

4.667 La descripción que hacen los Estados Unidos sigue siendo incorrecta. Los Estados Unidos afirman que los procedimientos simplificados se dividen en tres grupos (domiciliación, depósito y declaración simplificada), pero la clasificación correcta en relación con declaraciones para el despacho a libre práctica debe ser "declaración incompleta" (artículos 254 a 259 del Reglamento de Aplicación), "procedimiento de declaración simplificada" (artículos 260 a 262) y "procedimiento de domiciliación" (artículos 263 a 267). En su descripción, los Estados Unidos mezclan el procedimiento de domiciliación para el despacho a libre práctica y otras simplificaciones de los regímenes aduaneros con el régimen aduanero económico, como el depósito en aduana. En cualquier caso, las CE estiman que los Estados Unidos no han explicado las presuntas divergencias entre las prácticas de las autoridades aduaneras y si las diferencias se producen entre Estados miembros de las CE en fases equivalentes del mismo procedimiento.

4.668 Aparte de eso, las CE quieren insistir en que en los párrafos 110 a 115 y en el cuadro del párrafo 116 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos se describen divergencias inexistentes. Así, si tomamos el Reino Unido y Francia como ejemplos representativos en relación con la inspección de mercancías por las autoridades aduaneras antes del despacho, no existe contradicción entre las prácticas de esos dos Estados miembros. En ambos casos, los funcionarios de aduanas podrán (o no podrán) inspeccionar las mercancías antes del despacho. Las CE ya han explicado esta cuestión en su Primera comunicación escrita, sin recibir respuesta de los Estados Unidos en su Primera declaración oral ni en su respuesta a las preguntas del Grupo Especial. Los mismos problemas ocurren en el caso de las demás divergencias que alegan los Estados Unidos.

4.669 Es evidente que, en contra de lo que los Estados Unidos afirman, las CE cuestionan la existencia de divergencias en la aplicación de los procedimientos de domiciliación y sostienen que los Estados Unidos no han aportado una sola prueba documental para ilustrar y respaldar su alegación.

v) Sanciones por infracciones del derecho aduanero

Las disposiciones que establecen sanciones no están comprendidas en el ámbito del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

4.670 Los Estados Unidos aducen que las disposiciones que establecen sanciones son "instrumentos" para la aplicación de la legislación aduanera. Es interesante que los propios Estados Unidos parecen admitir que las disposiciones que establecen sanciones no son, en cuanto tales, leyes relativas a las materias enumeradas en el párrafo 1 del artículo X del GATT. Es más, los propios Estados Unidos explican que "es importante distinguir entre la administración de la legislación penal y la aplicación de la legislación penal para administrar leyes aduaneras del tipo descrito en el párrafo 1 del artículo X".

4.671 Las CE no cuestionan que las disposiciones que establecen sanciones sean instrumentos para garantizar una aplicación uniforme de la legislación aduanera. He ahí precisamente el motivo de que el derecho comunitario disponga que las disposiciones que establecen sanciones deben ser efectivas y disuasorias. Ahora bien, el que esas disposiciones sean "instrumentos" para la aplicación uniforme de la legislación aduanera no significa que sean leyes o reglamentos relativos a las materias enumeradas en el párrafo 1 del artículo X del GATT, en particular la clasificación arancelaria, la valoración en aduana o los tipos de derechos. Si las disposiciones que establecen sanciones son, como afirman los Estados Unidos, simplemente "instrumentos" para garantizar una aplicación uniforme de esa legislación, se deduce que las disposiciones que establecen sanciones como tales no están comprendidas en el ámbito del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.672 Los Estados Unidos han tratado de rebatir este argumento aduciendo para ello que en el Convenio de Kyoto también se abordan las normas sobre disposiciones que establecen sanciones. Sin embargo, el hecho de que el Convenio de Kyoto, que es un instrumento negociado en el contexto de la OMA, pueda contener determinadas disposiciones o normas sobre disposiciones que establecen sanciones no tiene nada que ver con el ámbito del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Al contrario, el hecho de que el Convenio de Kyoto contenga una armonización de determinadas cuestiones específicas puede servir de indicio de que los Miembros de la OMA consideraron que esas cuestiones no habían sido abordadas aún suficientemente en el GATT.

4.673 Los Estados Unidos han cuestionado también el argumento de las CE de que las sanciones conciernen medidas ilegítimas y no el comercio legal. Para apoyarse, se han referido al ejemplo de la sentencia del TJCE en el asunto *de Andrade*, en el que, según los Estados Unidos, "la única infracción en ese caso consistió en que no se procedió al despacho de aduana de las mercancías dentro del plazo especificado en el Código Aduanero Comunitario".

4.674 Las CE no pueden entender en qué se basa la objeción de los Estados Unidos. Las sanciones por infracciones del derecho aduanero son por definición respuestas a contravenciones del derecho aduanero. Las sanciones son penalizaciones por acciones u omisiones que son ilegales. Por lo tanto, las disposiciones que establecen sanciones tienen un carácter fundamentalmente diferente de las disposiciones por las que se establecen las condiciones para el comercio lícito, por ejemplo, al fijar tipos arancelarios o establecer normas sobre valoración en aduana.

4.675 El asunto *de Andrade* al que se han referido los Estados Unidos confirma precisamente este argumento. En *de Andrade*, el importador había cometido una infracción del artículo 49 del CAC, que dispone que, cuando se realice una declaración sumaria de las mercancías, éstas deberán ser declaradas para un régimen aduanero o ser objeto de una solicitud para recibir un destino mencionado dentro de determinados plazos especificados. Las medidas adoptadas por las autoridades aduaneras en el caso *de Andrade* consistieron en una sanción por el incumplimiento de esos plazos por el importador. El caso *de Andrade* sólo demuestra que las penalizaciones son un instrumento para asegurar el cumplimiento de la legislación comunitaria, y que los Estados miembros de las CE aplican

las sanciones necesarias. En cambio, *de Andrade* no contribuye en nada a apoyar el criterio de que las disposiciones que establecen sanciones como tales están comprendidas en el ámbito del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe la armonización de las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones

4.676 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT concierne únicamente a la aplicación de la legislación aduanera, no al contenido de las propias leyes. Esto significa en particular que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no crea la obligación de armonizar leyes que puedan existir dentro de un Miembro de la OMC en el plano subfederal. Simplemente prescribe que esas leyes se apliquen de manera uniforme en el territorio en el que estén vigentes.

4.677 Los Estados Unidos siguen alegando que, como las leyes de los Estados miembros de las CE contienen disposiciones que establecen sanciones, las CE aplican sus leyes de manera no uniforme. Esta afirmación es manifiestamente errónea. Como las CE ya han recalcado, no es la aplicación de las disposiciones que establecen sanciones lo que varía en las CE; son las propias leyes las que son diferentes, si bien dentro de los límites establecidos por el derecho comunitario.

4.678 En sus comunicaciones, los Estados Unidos no han alegado que los Estados miembros de las CE no apliquen sus disposiciones que establecen sanciones de manera uniforme. Es más, los Estados Unidos han declarado que "si cada Estado miembro aplica o no su propio derecho penal de manera uniforme en su propio territorio no guarda relación con nuestra alegación". Se trata de una admisión sorprendente, porque demuestra que la alegación de los Estados Unidos efectivamente no tiene nada que ver con la aplicación de las disposiciones que establecen sanciones. Al contrario, la alegación estadounidense se refiere a la armonización de la legislación dentro de las CE, que es una alegación que carece de fundamento en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.679 Los Estados Unidos también reiteran su argumento de que el razonamiento de las CE "menoscabaría drásticamente la eficacia del párrafo 3 a) del artículo X del GATT". Sin embargo, esa afirmación es incorrecta. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT se aplica a la administración de todas las leyes enumeradas en el párrafo 1 del artículo X del GATT, con independencia de que se apliquen en todo el territorio de un Miembro de la OMC o en parte de él. Si se considerara que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT aplica disposiciones que establecen sanciones, debería aplicarse a la administración de las disposiciones que establecen sanciones de cada Estado miembro. Así pues, la clara distinción que hacen las CE entre la aplicación de las medidas y su contenido no menoscaba en absoluto la eficacia del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, sino que sólo refleja el ámbito y contenido correctos de esta disposición.

El derecho comunitario garantiza un grado suficiente de uniformidad de las disposiciones que establecen sanciones

4.680 Por último, en la medida que las disposiciones que establecen sanciones se pueden considerar pertinentes para garantizar una aplicación uniforme de las leyes enumeradas en el párrafo 1 del artículo X del GATT, las CE consideran que el derecho comunitario prevé un nivel suficiente de armonización a este respecto.

4.681 Como las CE ya han explicado, el Tribunal Europeo de Justicia ha formulado directrices claras sobre disposiciones que establecen sanciones por infracciones de la legislación aduanera de las CE, que han de ser en particular efectivas, proporcionadas y disuasorias. Estos principios han sido confirmados también por el Consejo de la Unión Europea.

4.682 Los Estados Unidos no han demostrado que el hecho de que las disposiciones que establecen sanciones estén contenidas en leyes de los Estados miembros derive de alguna forma en una falta de

uniformidad en la aplicación de las leyes previstas en el párrafo 1 del artículo X del GATT, en particular las relativas a clasificación arancelaria, valoración en aduana y tipos de derechos.

4.683 En su lugar, los Estados Unidos se han limitado a declarar que "[e]n la medida que distintos Estados miembros tienen disposiciones que establecen sanciones diferentes, que se aplican a la infracción de la legislación aduanera de las CE … aplican la legislación aduanera de las CE de manera diferente". Esta argumentación está viciada desde el punto de vista de la lógica, pues los Estados Unidos no distinguen entre la aplicación de las disposiciones que establecen sanciones y la aplicación de las pertinentes leyes sustantivas.

4.684 De hecho, no es correcto dar por supuesto que las diferencias en las sanciones conducirían forzosamente a una falta de uniformidad en la aplicación de las disposiciones cuya infracción se penaliza. Esa consecuencia resultaría únicamente si las sanciones no fueran disuasorias o efectivas. Si, en cambio, las sanciones son disuasorias y efectivas, cabe suponer que las disposiciones sustantivas conexas serán respetadas, independientemente de las diferencias en el nivel de sanciones aplicable.

4.685 Es cierto que las diferencias en el nivel de las sanciones también pueden revestir importancia desde el punto de vista de la proporcionalidad. Ahora bien, la proporcionalidad no tiene nada que ver con la cuestión de la aplicación uniforme en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. La proporcionalidad de las sanciones se aborda en el párrafo 3 del artículo VIII del GATT, y los Estados Unidos no han formulado alegaciones de que las CE no cumplan esa disposición.

4.686 Como las CE han explicado, el derecho comunitario exige que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados Unidos no han demostrado que las sanciones en las CE no cumplan esos principios. Además, los Estados Unidos no han demostrado que las divergencias en las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones conduzcan de alguna manera a una falta de uniformidad en la aplicación de las leyes de los Estados miembros. El argumento de los Estados Unidos sigue siendo pues puramente teórico, y sin ninguna prueba que lo corrobore.

4.687 Los Estados Unidos también han vuelto a referirse a la labor de las CE en el código aduanero modernizado, que abarca propuestas sobre la armonización de las sanciones administrativas por infracciones de la legislación aduanera. A este respecto, cabe subrayar que la finalidad de estas propuestas es seguir desarrollando y fomentando en las CE el mercado único también en el ámbito de las sanciones, lo que no tiene nada que ver con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

3. La alegación de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 b) del artículo X del GATT

a) La naturaleza de la revisión: tribunales o procedimientos independientes

4.688 Los Estados Unidos coinciden con las CE en que un Miembro de la OMC cumple la obligación que le corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT únicamente cuando el sistema de revisión es independiente de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras.

4.689 A este respecto, los Estados Unidos no han planteado críticas sobre la independencia de las vías de interposición de recursos instituidas por las CE, en el plano comunitario y en el de Estado miembro. Cabría no obstante señalar que los Estados Unidos utilizan una norma de independencia menos estricta que las CE. Éstas han considerado que un órgano encargado de la revisión administrativa es independiente de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas sólo si no está integrado en la estructura orgánica de esos organismos. En cambio, para los Estados Unidos, la independencia ya está garantizada cuando la oficina encargada de la revisión administrativa es orgánicamente independiente de los puertos cuyas decisiones revisa, incluso si

ambas oficinas forman parte del mismo organismo. Las CE consideran que la interpretación de los Estados Unidos no está en consonancia con el párrafo 3 b) del artículo X, que prescribe que los tribunales o procedimientos de revisión tienen que ser independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Esta disposición impone la separación externa entre los tribunales o procedimientos y los organismos, y para cumplir el párrafo 3 b) del artículo X no basta una separación interna en el seno de un organismo entre el controlador y el controlado.

4.690 La esencia de la alegación de los Estados Unidos se concentra en el hecho de que las decisiones de revisión adoptadas por los Estados miembros de las CE "surten efecto únicamente dentro de sus respectivos Estados miembros y no en los organismos comunitarios en general" y que "el mantenimiento de tribunales o procedimientos por distintos Estados miembros dentro de las CE no cumple las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del párrafo 3 b) del artículo X".

4.691 Los Estados Unidos recurren a varios argumentos en apoyo de esa afirmación. En primer lugar, los Estados Unidos han aducido constantemente que la obligación en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT debe interpretarse teniendo en cuenta el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, que a juicio de los Estados Unidos es su contexto.

4.692 Las CE han explicado en varias ocasiones que cada uno de esos dos apartados del párrafo 3 del artículo X del GATT estipula obligaciones distintas y que no puede considerarse que exista una relación legal entre esas dos disposiciones (es decir, no pueden transponerse las obligaciones de una disposición a la otra).

4.693 La propia estructura del párrafo 3 del artículo X del GATT ya justifica esa interpretación. En primer lugar, el apartado b) no hace remisión alguna al apartado a), a diferencia del apartado c), que contiene un vínculo expreso con el apartado b). En segundo lugar, el párrafo 3 del artículo X del GATT no lleva un preámbulo que permita afirmar que los dos apartados distintos están vinculados y que las obligaciones que en cada uno de ellos se establecen han de ser interpretadas teniendo en cuenta el otro.

4.694 Además, en contra de lo que afirman los Estados Unidos, la revisión de las decisiones aduaneras por los tribunales de los Estados miembros de las CE no se opone a la obligación de aplicación uniforme. Ese tipo de revisión es perfectamente compatible con dicha obligación, siempre que ésta se garantice por otros medios que sean adecuados para este objetivo.

4.695 Por último, hay una razón de fondo para rechazar la interpretación de los Estados Unidos. Si consideramos, que, tal y como han aceptado los Estados Unidos, la revisión que establece el párrafo 3 b) del artículo X es sólo una revisión en primera instancia, exigir la uniformidad en la primera instancia llevaría forzosamente implícito el establecimiento de un tribunal central de primera instancia con jurisdicción en todo el territorio de cualquier Miembro de la OMC. Esta conclusión no encuentra apoyo en el texto del párrafo 3 b) del artículo X del GATT, que no hace referencia a la obligación de establecer un tribunal central de primera instancia de esa naturaleza. El párrafo 3 b) del artículo X del GATT ni siquiera prescribe que los recursos hayan de ser dirimidos por un tribunal central o un tribunal de jurisdicción superior. La conclusión es que el párrafo 3 b) del artículo X no se ocupa de la administración/aplicación uniforme del derecho aduanero, que está prevista exclusivamente en el apartado a), sino tan solo de las vías de recurso en primera instancia.

4.696 Los Estados Unidos interpretan el párrafo 3 b) del artículo X a través del prisma de su propio sistema jurídico y exigen a todos los Miembros de la OMC que establezcan el equivalente de su Tribunal de Comercio Internacional. El Japón se ha alineado con las CE en el rechazo de esta interpretación unilateral. Cabe observar que Australia también ha afirmado que "el párrafo 3 b) del artículo X no es un artículo normativo y no contiene la obligación de establecer un tribunal central".

4.697 Además, las CE querrían recordar que el establecimiento de un tribunal aduanero central en el marco institucional comunitario es contrario a uno de sus principios constitucionales fundamentales: que el Tribunal de Justicia de las CE y el Tribunal de Primera Instancia han de actuar dentro de los límites de los poderes que les han conferido los tratados fundacionales y que los tribunales de los Estados miembros de las CE actúan como tribunales "ordinarios" de las CE cuando aplican el derecho comunitario. Al no existir una disposición en los Tratados que atribuya una competencia a uno de esos dos Tribunales, o a ambos, para revisar las decisiones adoptadas por los Estados miembros de las CE y teniendo presente la existencia del sistema de reenvío judicial estipulado en el artículo 234 del Tratado de la CE, toda modificación de las demarcaciones entre las competencias del Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia y los tribunales nacionales exigiría la enmienda del Tratado de la CE.

4.698 Las CE creen que pueden plantearse problemas análogos, al menos en el plano legislativo, en los Miembros de la OMC en que no existe un tribunal central de primera instancia en materia aduanera.

4.699 Los Estados Unidos afirman que han encontrado un argumento para justificar una relación entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X en la segunda frase del apartado b), que dice que las decisiones de los tribunales o procedimientos regirán la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas.

4.700 Las CE consideran que esa frase es una disposición destinada a asegurar una ejecución equitativa de las decisiones judiciales en cuestiones de derecho administrativo. Para garantizar que una autoridad administrativa respete las decisiones adoptadas por un tribunal, la mayoría de los sistemas jurídicos han elaborado distintos métodos de imponer el principio de cosa juzgada (*res judicata*). Ese es el sentido que las CE dan a la frase "regirán la práctica". No puede significar, como sostienen los Estados Unidos, que una decisión de revisión en primera instancia sobre un asunto específico constituya la fuente de una obligación general para el organismo de que se trate. El párrafo 3 b) del artículo X sólo establece una obligación de aplicar en condiciones equitativas la decisión pronunciada por un tribunal independiente o adoptada por vía de un procedimiento independiente.

4.701 En segundo lugar, los Estados Unidos han cuestionado el argumento de las CE de que la utilización del plural en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT significa que un Miembro de la OMC puede tener varios tribunales de revisión distintos, ocupándose cada uno de ellos de una parte de su geografía. Según los Estados Unidos, "la utilización del plural … podría abrir la posibilidad de que un Estado miembro prevea distintos tipos de revisión".

4.702 Las CE cuestionan este argumento, porque no tiene en cuenta que la interpretación de los Estados Unidos y la de las CE no se excluyen mutuamente: la utilización del plural puede indicar que un Miembro de la OMC tiene derecho a mantener tribunales geográficamente delimitados y puede indicar también que un Miembro de la OMC puede mantener múltiples foros para la revisión de las decisiones aduaneras.

4.703 En tercer lugar, las CE han explicado en su Primera comunicación escrita que cuando los tribunales de los Estados miembros aplican el derecho comunitario, actúan en calidad de órganos de la Comunidad. Se trata de uno de los principios fundamentales del entramado constitucional de las CE. En apoyo de su afirmación, las CE se han referido también a las constataciones del Grupo Especial en el asunto *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Estados Unidos)*.

4.704 En su Primera declaración oral, los Estados Unidos han aducido que el informe del Grupo Especial en el asunto *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Estados Unidos)* no viene al caso, porque "la cuestión sometida a ese Grupo Especial era sustancialmente distinta de la que se plantea en el presente caso". Las CE no están de acuerdo. La cuestión en el

asunto *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Estados Unidos)* era una alegación de los Estados Unidos de que, al aplicar un reglamento de las CE, los Estados miembros de las CE se estaban concediendo recíprocamente ventajas de las que no disponían otros terceros países, y violaban así las obligaciones en materia de nación más favorecida. En respuesta a esta alegación, el Grupo Especial sostuvo que las autoridades de los Estados miembros, al dar aplicación al derecho comunitario, actuaban en calidad de órganos de las CE; por este motivo, el Grupo Especial constató que no podía considerarse que esa aplicación constituyera una concesión de ventajas a "otros países". La constatación del Grupo Especial en el asunto *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Estados Unidos)* de que las autoridades de los Estados miembros, al aplicar el derecho comunitario, obran en calidad de órganos de las CE, guarda estrecha relación con el presente caso. El hecho de que en el caso que nos ocupa, los Estados Unidos hayan formulado una alegación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, y no en relación con las obligaciones en materia de nación más favorecida, no es motivo para que el Grupo Especial haga caso omiso de esta jurisprudencia.

4.705 Además, los Estados Unidos arguyen "que no puede darse por sentado que el reconocimiento por un grupo especial de que las autoridades *ejecutivas* de los Estados miembros como autoridades comunitarias *de facto* … signifique que otro grupo especial debe reconocer que las autoridades *judiciales* de los Estados miembros son autoridades comunitarias *de facto*". Las CE no logran entender el fundamento de esta distinción. Tanto las autoridades ejecutivas como las judiciales son autoridades públicas competentes en cada Miembro de la OMC. Tanto las medidas de las autoridades ejecutivas como las de las judiciales pueden ser pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones en el marco de la OMC. Así pues, las CE no ven ningún motivo para que se reconozca a las autoridades ejecutivas de los Estados miembros como autoridades de las CE al aplicar el derecho comunitario y no a las autoridades judiciales.

4.706 Los argumentos de los Estados Unidos también son incompatibles con los principios del derecho internacional general en relación con la responsabilidad por hechos ilícitos. A este respecto, las CE se remitirían al párrafo 1 del artículo 4 de los Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos preparados por la Comisión de Derecho Internacional (CDI).

4.707 Se desprende claramente de esa disposición que, al tratarse de hechos de un Estado según el derecho internacional, no existe distinción entre hechos de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales. Por ese mismo motivo, parecería injustificable que sólo las autoridades ejecutivas de los Estados miembros, y no las autoridades judiciales de los Estados miembros, puedan obrar en calidad de órganos de las CE.

4.708 De manera similar, se desprende de los Artículos sobre la responsabilidad del Estado de la CDI que la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos se extiende no sólo a los órganos del gobierno central, sino también a los órganos de las divisiones territoriales. Así pues, las CE nunca han cuestionado que sean responsables según el derecho internacional por el cumplimiento por los Estados miembros de las CE de las obligaciones comunitarias en virtud de los Acuerdos de la OMC.

4.709 Con su argumento de que los tribunales de los Estados miembros no pueden considerarse tribunales de las CE, los Estados Unidos parecen sugerir que, si bien las CE son responsables por las acciones de los Estados miembros de las CE, no pueden recurrir a órganos de los Estados miembros de las CE para cumplir sus obligaciones, como la derivada del párrafo 3 b) del artículo X del GATT. Ese resultado sería sumamente contradictorio. Según los principios generales de la responsabilidad del Estado, la atribución de un comportamiento se refiere a toda acción u omisión, con independencia de su legalidad. Así pues, no sólo debe atribuirse un comportamiento a los efectos de establecer una violación de las obligaciones internacionales, sino también para estimar si se han cumplido las obligaciones. Dicho de otra forma, es perfectamente posible que las CE recurran a sus Estados miembros a los efectos de cumplir sus obligaciones internacionales, incluida la obligación de prever la pronta revisión en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT.

b) Prescripción relativa al plazo: prontitud de la revisión

4.710 A medida que estas actuaciones han ido avanzando, los Estados Unidos han ido rebajando progresivamente su alegación. De hecho, los Estados Unidos han explicado últimamente que no impugnan la falta de prontitud de la revisión y rectificación que proveen los tribunales de los Estados miembros de las CE.

4.711 En cuanto al Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, los Estados Unidos nunca han alegado que las actuaciones en esos dos Tribunales, al revisar decisiones adoptadas por instituciones de las CE, no garanticen la pronta revisión. La única crítica que han mantenido los Estados Unidos se refiere a las "decisiones prejudiciales" (es decir, los reenvíos al Tribunal de Justicia por los tribunales nacionales). Los Estados Unidos aducen que "el plazo que lleva presentar cuestiones al TJCE y que este decida al respecto y el hecho de que, en general, la remisión de cuestiones al TJCE sea discrecional … significa que el TJCE no es un tribunal o un procedimiento destinado a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras".

4.712 Las CE ya han explicado que esta crítica subyace al mal entendimiento por los Estados Unidos del sistema de las CE: el TJCE no revisa decisiones de las administraciones aduaneras nacionales, sino que ayuda a los tribunales nacionales en la revisión mediante el procedimiento de decisión prejudicial con objeto de garantizar la aplicación uniforme del derecho comunitario en toda la Comunidad. Por lo tanto, las decisiones prejudiciales del TJCE son uno de los mecanismos de las CE para garantizar la aplicación uniforme de la legislación, los reglamentos, las decisiones judiciales y las resoluciones administrativas de aplicación general en materia comercial de las CE, como lo prescribe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, y como tal no puede considerarse un mecanismo de "revisión" de las decisiones aduaneras nacionales.

G. SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1. Las CE no están obligadas a crear un organismo aduanero ni un tribunal aduanero de las CE

4.713 Las CE ya han explicado las consecuencias constitucionales significativas que este caso puede tener para las CE y para los Miembros de la OMC en general. También han explicado que las alegaciones de los Estados Unidos en relación con el párrafo 3 del artículo X del GATT tienen fundamentalmente por objeto obligar a las CE a crear un organismo aduanero centralizado y un tribunal aduanero.

4.714 Las comunicaciones posteriores de los Estados Unidos han confirmado en un todo esta opinión. Los Estados Unidos no han presentado prueba alguna de que la aplicación de las leyes aduaneras de las CE se haga de manera no uniforme ni de que la revisión judicial no sea pronta. En cambio, se han concentrado exclusivamente en la participación de las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las CE en la aplicación de las leyes aduaneras de las CE que, según sostienen, "en sí misma" es causa de una falta de uniformidad que contraviene el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. De igual forma, en las alegaciones que hacen con arreglo al párrafo 3 b) de ese artículo, los Estados Unidos se han ocupado solamente de la inexistencia de un tribunal aduanero en las CE.

4.715 Los Estados Unidos han dicho que esta es una "caricatura" de sus alegaciones. Sin embargo, como sucede con frecuencia, las caricaturas revelan la verdadera naturaleza de las cosas. Inmediatamente después de haber asegurado al Grupo Especial que no sostienen que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT exija que los Miembros de la OMC tengan un solo organismo aduanero, los Estados Unidos se retractan, declarando que "el establecimiento de un organismo de esa índole es el método principal que, a juicio de los Estados Unidos, la gran mayoría de los Miembros de la OMC (si no todos ellos) han adoptado para cumplir la obligación" que les corresponde en virtud del

párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Los Estados Unidos también alegan que las CE, dado que no tienen un organismo aduanero único, están obligadas a tener un solo tribunal aduanero.

4.716 La idea fija de los Estados Unidos sobre la creación de un organismo aduanero centralizado y un tribunal aduanero ha sido una constante en estas actuaciones. La creación de ese organismo, que también debe estar facultado para dictar resoluciones anticipadas sobre diversas cuestiones, fue lo primero que los Estados Unidos pidieron a las CE en la etapa de consultas de esta diferencia. Lo segundo fue la creación de un tribunal aduanero de las CE. Además, cuando el Grupo Especial preguntó qué medidas, dejando de lado el establecimiento de un organismo aduanero y de un tribunal aduanero, tendrían que tomar las CE si los Estados Unidos tenían éxito en su alegación, los Estados Unidos no mencionaron ninguna medida concreta.

4.717 Por lo tanto, los Estados Unidos no están en lo cierto cuando afirman que las CE tergiversan sus alegaciones. La alegación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT procura evidentemente impedir que las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las CE intervengan en la aplicación de las leyes de aduanas de las CE. Es, en consecuencia, una impugnación directa del sistema de federalismo ejecutivo de las CE, que es un elemento estructural general del ordenamiento jurídico de las CE, y no sólo en el campo de la administración aduanera. Lo mismo sucede con la alegación hecha por los Estados Unidos de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT, cuyo objetivo es reemplazar los tribunales de los Estados miembros por un tribunal aduanero de las CE. No se puede reprochar a las CE que digan claramente en qué consisten las alegaciones de los Estados Unidos.

4.718 Los Estados Unidos han acusado a las CE de defender una interpretación relativa del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Este argumento no tiene fundamento. La obligación de asegurar una aplicación uniforme, imparcial y razonable prevista en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT es igual para todos los Miembros de la OMC, incluidas las CE. Las CE nunca han afirmado que estén sujetas a normas diferentes de las aplicables a los demás Miembros.

4.719 En defensa de su posición, los Estados Unidos han dicho que las CE, con el apoyo del Japón, han sostenido que, para determinar si hay o no falta de uniformidad, se han de tener en cuenta las características del régimen de administración aduanera en cuestión. Esa afirmación tampoco tiene fundamento. Huelga decir que la determinación de si hay o no falta de uniformidad en un determinado régimen de administración aduanera solamente se puede hacer considerando todos los hechos pertinentes, que necesariamente incluyen las características del sistema de aduanas de que se trate. Esto no tiene nada que ver con la defensa de una norma relativa, sino que se trata simplemente de un requisito inherente a la evaluación objetiva de los hechos.

4.720 Los Estados Unidos han afirmado que "no es aceptable que las CE sostengan que su condición particular en la OMC, donde quizá sean el único Miembro que no tiene un solo organismo aduanero centralizado, es motivo de que estén sujetas a una norma distinta respecto de la obligación de asegurar una aplicación uniforme". Los Estados Unidos también han dicho que "las CE son el único Miembro de la OMC … que tiene una combinación de administración aduanera geográficamente fragmentada y revisión geográficamente fragmentada". Como ya han indicado, las CE no alegan que estén sujetas a una norma diferente a la de los demás Miembros de la OMC. Sin embargo, aun si fueran el único Miembro de la OMC con un sistema descentralizado de administración aduanera y de revisión judicial, esto no significa que su régimen sea de ninguna manera incompatible con el párrafo 3 del artículo X del GATT.

4.721 Las CE son un Miembro inicial de la OMC. Cuando las CE pasaron a ser parte en los Acuerdos de la OMC, incluido el GATT de 1994, todas las Partes Contratantes conocían perfectamente su régimen de administración aduanera y de revisión judicial. Con esa información, las Partes Contratantes, incluidos los Estados Unidos, aceptaron que las CE fueran Miembro inicial de la OMC. No es serio sostener que una característica fundamental de las CE, como es la intervención

de los Estados miembros de las CE en la aplicación de la legislación de las CE, incluida la legislación de aduanas, y en la revisión judicial, haya de considerarse de todos modos incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.722 Este punto debe ser subrayado especialmente porque no se limita al campo de las leyes de aduanas. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT se aplica a todas las leyes mencionadas en el párrafo 1 de ese artículo. Por consiguiente, las interpretaciones de los Estados Unidos no se aplicarían únicamente a la normativa aduanera. En cambio, harían que la intervención de entidades subfederales en la ejecución de leyes federales fuera generalmente imposible en grandes esferas de la reglamentación económica.

4.723 Este es un motivo de considerable preocupación para todos los Miembros de la OMC. Si bien los Estados Unidos tienen un sistema constitucional en el que las esferas de competencia del Gobierno federal y de los 50 estados están separadas claramente, otros Miembros de la OMC tienen sistemas que se caracterizan por un régimen de federalismo ejecutivo, donde las leyes federales son aplicadas por unidades subfederales. Como lo han admitido incluso magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el federalismo ejecutivo es un régimen constitucional perfectamente legítimo y no hay ninguna razón para que no se pueda aplicar también en materia aduanera. Por lo tanto, el Grupo Especial no debe aceptar una interpretación del párrafo 3 del artículo X del GATT que impondría una opinión exclusiva de los Estados Unidos sobre la forma en que las leyes federales se deben aplicar en otros Miembros de la OMC.

4.724 Los Estados Unidos han criticado también a las CE por haber hecho referencia al párrafo 12 del artículo XXIV del GATT. Esa crítica no se justifica. Las CE han invocado esa disposición en apoyo de su opinión de que los compromisos del GATT, incluido el párrafo 3 a) del artículo X, fueron contraídos por las Partes Contratantes con pleno respeto de sus respectivos regímenes constitucionales. Como explicó el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Canadá - Monedas de oro*, el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT es una disposición que tiene el "cometido de permitir que los Estados federales se adhieran al Acuerdo General sin tener que cambiar la distribución federal de las competencias". Como contrapartida, el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT exige que todos los Miembros de la OMC tomen las medidas razonables que estén a su alcance para asegurar la observancia de las disposiciones del GATT a nivel subfederal.

4.725 Las CE están plenamente comprometidas a asegurar el cumplimiento por sus Estados miembros de las prescripciones del artículo X del GATT, de conformidad con el párrafo 12 de su artículo XXIV. Sin embargo, esto no es lo que los Estados Unidos piden de las CE. Los Estados Unidos dicen que las CE deben crear un organismo aduanero centralizado y un tribunal aduanero y deben reemplazar toda la legislación pertinente de los Estados miembros, en particular en materia de sanciones, por legislación de las CE. Esto daría lugar a un cambio radical en el equilibrio federal dentro de las CE. Por ello, esa interpretación no es compatible con el propósito del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT.

4.726 En relación concretamente con la cuestión del tribunal aduanero, los Estados Unidos se han referido también al párrafo 2 b) del artículo VI del AGCS y han argumentado que las CE están tratando de asimilar esta disposición al párrafo 3 del artículo X del GATT. Este argumento es manifiestamente infundado. El párrafo 2 b) del artículo VI del AGCS contiene una excepción general que significa que la obligación de establecer tribunales o procedimientos prevista en el párrafo 2 a) del artículo VI del AGCS sea de cumplimiento esencialmente facultativo para algunos miembros. En este sentido, la disposición puede ser considerada un equivalente de mayor alcance del párrafo 3 c) del artículo X del GATT, que ofrece la posibilidad de asegurar la revisión también mediante procedimientos aplicados por órganos que no son independientes. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con los argumentos de las CE en esta diferencia. Las CE no discuten que están obligadas a establecer tribunales o procedimientos de revisión judicial que sean independientes de los organismos que controlan. Las CE simplemente dicen que el párrafo 3 del artículo X del GATT no prejuzga la

cuestión de cómo las CE organizan su sistema de tribunales mediante el cual garantizan la revisión judicial.

4.727 Los Estados Unidos también han alegado que las dificultades que obstaculizan el cumplimiento no deben influir en la determinación de si las CE cumplen o no lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo X del GATT. A un nivel general, las CE están de acuerdo en que las dificultades para el cumplimiento no son en sí mismas determinantes de la interpretación de una obligación internacional. Sin embargo, los Estados Unidos no pueden esperar que su alegación se acepte sin tener de ninguna forma en cuenta sus consecuencias prácticas. Si bien el Grupo Especial no está obligado a decidir qué medidas harían falta para asegurar el cumplimiento, tampoco debe adoptar una decisión en esta diferencia sin considerar debidamente las repercusiones que en el mundo real tendrían las reclamaciones de los Estados Unidos.

2. Las alegaciones de los Estados Unidos basadas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT

a) Los Estados Unidos tergiversan las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

i) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT es una disposición no preceptiva que establece normas mínimas

4.728 Los Estados Unidos han cuestionado la caracterización hecha por las CE del párrafo 3 a) del artículo X del GATT como disposición que establece una norma mínima. También discuten la pertinencia del informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Camarones*, en el que el Órgano de Apelación dice que las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT son "normas mínimas". A juicio de los Estados Unidos, "normas mínimas" no significa que sean "normas de una mayor tolerancia".

4.729 Estos argumentos de los Estados Unidos son una tergiversación de los argumentos de las CE. Las CE no han dicho que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT contenga una norma "relativa" ni han adoptado una posición acerca de que sea una norma "débil" o "rigurosa". Sin embargo, en vista del alcance sumamente ambicioso que los Estados Unidos atribuyen al párrafo 3 a) del artículo X del GATT, es necesario reflexionar acerca de la índole y el propósito de las obligaciones que contiene.

4.730 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es una disposición que prescriba en forma detallada cómo los Miembros de la OMC deben aplicar su legislación aduanera. Hay otras disposiciones en el GATT y en otros acuerdos abarcados que contienen las disciplinas sustantivas detalladas que los Miembros deben cumplir. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT complementa esas disciplinas del GATT y sus anexos a fin de asegurar que la obtención por otros Miembros de los beneficios del GATT no sea frustrada por medidas de aplicación que no son razonables, imparciales y uniformes. No se puede suponer con ligereza que la aplicación que hace un Miembro de la OMC cae por debajo de esas normas mínimas.

4.731 Así lo confirmó el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos*, cuando indicó lo siguiente: "Una alegación basada en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 tiene que estar respaldada por pruebas sólidas; la naturaleza y el alcance de la alegación, y las pruebas presentadas por el reclamante en su apoyo, deberían corresponder a la gravedad de las acusaciones inherentes a las alegaciones basadas en dicho párrafo." Esto confirma claramente que el Órgano de Apelación considera que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT establece normas mínimas básicas cuya violación no se puede presumir con ligereza. Además, en un caso muy reciente, los mismos Estados Unidos argumentaron que las pruebas presentadas en apoyo de una alegación basada en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT deben corresponder a la gravedad de la alegación.

ii) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT exige que los Estados Unidos demuestren la existencia de una pauta de aplicación no uniforme

4.732 En su Segunda comunicación escrita, los Estados Unidos no aceptan que tengan la obligación de demostrar que hay una pauta de aplicación no uniforme a los fines de probar que se infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Los Estados Unidos han aducido también que el informe del Grupo Especial que entendió en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* no sirve de fundamento para ese requisito y sostienen que las CE se han basado en "una sola oración" de ese informe. Esto es evidentemente inexacto. La referencia hecha en el informe del Grupo Especial sobre el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* a la necesidad de que haya una pauta de falta de uniformidad no refleja una simple opinión, sino que se basa en un examen ponderado de las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Expresa la posición del Grupo Especial de que, para representar una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, sería necesario que las medidas en cuestión "tuviesen una repercusión significativa en la aplicación general de la ley y no sólo en los resultados del caso aislado de que se trate". Cabe señalar de paso que esto es también lo que sostuvieron los Estados Unidos en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente.*

4.733 Los Estados Unidos tratan de hacer una distinción respecto del asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* sosteniendo que en el presente caso no afirman que una "aplicación concreta" de las leyes aduaneras de las CE constituya un ejemplo de aplicación no uniforme, sino que "el sistema de las CE de aplicación de la legislación aduanera en su conjunto" no se ajusta al párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Las CE están desconcertadas ante este argumento. Los Estados Unidos parecen creer que, cuanto más generalizadas son sus afirmaciones, menos pruebas necesitan presentar. Las CE estiman que lo contrario es la verdad. Las CE no pueden entender cómo los Estados Unidos pueden impugnar la "aplicación general" del régimen de las CE sin demostrar efectivamente cómo se aplican las leyes aduaneras en ese régimen. Las CE piensan que, para criticar el sistema de administración aduanera de las CE en su totalidad como incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, hay que demostrar la existencia de una pauta muy clara de aplicación no uniforme.

4.734 Los Estados Unidos también han hecho referencia al informe del Grupo Especial sobre el asunto *Argentina - Pieles y cueros* y han dicho que ese Grupo Especial no mencionó la necesidad de que hubiese una pauta. Sin embargo, el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Pieles y cueros* no respalda los argumentos de los Estados Unidos. La medida impugnada en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* era una resolución que autorizaba a representantes de los productores argentinos a participar en determinados aspectos del proceso administrativo. Por ello era imposible para la Argentina asegurar la protección de información comercial confidencial y aplicar su legislación de aduanas de manera imparcial y razonable. No se discutía si, en la aplicación práctica de la resolución, los representantes de la industria participaban en realidad en el proceso. Por lo tanto, como no había dudas de que la aplicación por parte de la Argentina no era en ningún caso ni razonable ni imparcial, no había motivos para que el Grupo Especial considerase si había o no una pauta. Esto es totalmente diferente de lo que sucede en el caso presente, donde no hay ninguna medida de las CE que imponga una aplicación no uniforme; por el contrario, las medidas de las CE aseguran una aplicación uniforme y las CE rechazan categóricamente que haya falta de uniformidad en su aplicación de sus leyes de aduanas.

4.735 Por último, los Estados Unidos se esfuerzan por tergiversar el argumento de las CE aduciendo que las CE les habían pedido que demostraran la existencia de una "pauta clara" de aplicación no uniforme. Las CE no creen que en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, el Grupo Especial haya exigido que la pauta de casos de aplicación siguiese un orden determinado ni que fuera "clara". Una pauta puede estar constituida también por una repetición de actos u omisiones similares. Cuando esos casos de aplicación se vuelven suficientemente generalizados y frecuentes como para tener una repercusión en la aplicación general de la ley, esto

representa una falta de uniformidad incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Esta es la norma que deben cumplir los Estados Unidos; ni más, ni menos.

4.736 Los Estados Unidos han aducido asimismo que no se puede exigir que haya una pauta porque "los intereses de los comerciantes en … la aplicación uniforme de las leyes de aduanas no dependen de la significación estadística de los casos de aplicación no uniforme". Las CE no están de acuerdo. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT protege a los comerciantes contra una aplicación de las leyes de aduanas que les impida predecir razonablemente qué trato recibirán. No los protege contra casos individuales de error administrativo, los cuales se pueden y deben corregir a través de mecanismos de revisión administrativa y judicial. Por lo tanto, la medida en que los casos de aplicación no uniforme son generalizados y frecuentes es una consideración pertinente en relación con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

b) Los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de que haya falta de uniformidad en la aplicación por las CE de sus leyes de aduanas

4.737 Como ya han dicho las CE, en el asunto *Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos*, el Órgano de Apelación ha dictaminado que toda alegación basada en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT debe estar respaldada por "pruebas sólidas". Los Estados Unidos, que, como reclamante, tienen la carga de la prueba, manifiestamente no han satisfecho esa exigencia. Lejos de haber presentado pruebas sólidas, no han presentado ninguna prueba en apoyo de su alegación de que no hay una aplicación uniforme en el sistema de administración aduanera de las CE.

4.738 Cuando el Grupo Especial pidió que presentaran pruebas en apoyo de su alegación, los Estados Unidos repitieron monótonamente que esas pruebas no eran pertinentes a los fines de su alegación y que, si fueran pertinentes, serían las CE las que tendrían que presentarlas. Como ya han dicho las CE, Este es un intento manifiesto de desplazar la carga de la prueba a las CE que debe ser rechazado por el Grupo Especial.

4.739 Las afirmaciones de los Estados Unidos en el sentido de que las CE han "reconocido" que ha habido casos de aplicación no uniforme en materia de sanciones y procedimientos de auditoría no tienen fundamento. Con respecto a la cuestión de las sanciones, no es que haya una aplicación no uniforme, sino que, como las CE demostrarán más tarde, las leyes de los Estados miembros prevén sanciones que son diferentes. En relación con las auditorías, las CE ya han negado y siguen negando que haya una falta de aplicación uniforme. Como se ha explicado, todos los Estados miembros tienen la capacidad necesaria en materia de auditorías y sus prácticas en este campo están suficientemente armonizadas gracias a la orientación que proporciona la Guía de las CE sobre auditorías de aduana. En ésta se tratan también la selección de los temas de las auditorías y la cuestión de la evaluación de los riesgos. Por consiguiente, se aborda el tema del equilibrio entre las inspecciones de importación y las auditorías *a posteriori* que han planteado los Estados Unidos. Por ello, los Estados Unidos no han probado la exactitud de su alegación de que no hay uniformidad en la práctica de las CE en la esfera de las auditorías de aduana.

4.740 Los Estados Unidos también dicen haber demostrado que no hay uniformidad en la esfera de la transformación bajo control aduanero. Las CE no creen que esta afirmación tenga fundamento. Los Estados Unidos sólo han hablado de las orientaciones en esta materia que, según sostienen, contienen algunas divergencias con respecto a la aplicación de las condiciones económicas. Las CE han refutado esta interpretación de los Estados Unidos, que no está respaldada por el texto de las orientaciones. En cambio, los Estados Unidos no han presentado como prueba ningún caso real que confirme su alegación de que hay diferencias en la aplicación.

4.741 Los Estados Unidos alegan que las CE han reconocido que esas diferencias existen cuando han explicado que, en algunos casos, el examen de las condiciones económicas se hace a nivel de

las CE. Esta afirmación no tiene fundamento. Las CE se han limitado a explicar correctamente cuáles son las distintas formas en que las condiciones económicas de la transformación bajo control aduanero se aplican en las CE. El hecho de que en algunos casos las condiciones se examinen a nivel de las CE, mientras que en otros son examinadas a nivel de los Estados miembros, no significa que en este segundo caso haya una falta de aplicación uniforme. Cabe señalar también que, de acuerdo con el artículo 522 del Reglamento de Aplicación, los Estados miembros están obligados a transmitir a la Comisión información sobre las autorizaciones otorgadas y sobre las solicitudes que se denegaron porque no se reunían las condiciones económicas. Esto permite que la Comisión verifique que las condiciones económicas se aplican correctamente.

4.742 Por lo tanto, en general los Estados Unidos no han demostrado que haya falta de uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras de las CE y menos aún que haya una pauta de aplicación no uniforme.

c) Las críticas de los Estados Unidos del sistema de administración aduanera de las CE no están justificadas y no demuestran ninguna incompatibilidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT

4.743 Dado que no han podido demostrar que realmente hay falta de uniformidad en la práctica de las CE, los Estados Unidos han procurado en cambio basar su posición en una crítica de los distintos elementos del sistema de administración aduanera de las CE. Antes de tratar los argumentos específicos de los Estados Unidos, las CE quieren hacer tres observaciones generales.

4.744 En primer lugar, las críticas del sistema no pueden reemplazar la demostración de una real falta de aplicación uniforme. Como las CE han dicho una y otra vez, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe de qué manera los Miembros de la OMC deben aplicar sus leyes. Por ello, la estructura específica del sistema de las CE podría ser pertinente en relación con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo si necesariamente ocasionase una falta de uniformidad. Sin embargo, los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de que así sea. En este sentido, también es necesario recordar las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*, según las cuales el reclamante que alegue que el derecho interno de otro Miembro tiene un significado o efecto particular está obligado a presentar pruebas de esa afirmación.

4.745 En segundo término, para saber si el sistema de las CE asegura la aplicación uniforme de las leyes aduaneras, no basta con considerar un determinado instrumento o característica en forma aislada. En cambio, de lo que se trata es de si el sistema de las CE en su conjunto, incluidos todos sus instrumentos pertinentes, asegura una aplicación uniforme. El enfoque seguido por los Estados Unidos en su Segunda comunicación escrita es precisamente el contrario. Los Estados Unidos eligen un instrumento en particular, lo definen mal y luego declaran sin reparos que ese instrumento no basta para garantizar una aplicación uniforme. Es evidente que esa forma de proceder no es una manera justa y objetiva de evaluar el sistema de las CE.

4.746 En tercer lugar, los Estados Unidos demuestran una clara tendencia a hacer caso omiso de todos los elementos que no les resultan convenientes para fundamentar sus alegaciones. Por ejemplo, cuando examinan la práctica de las CE en materia de clasificación, los Estados Unidos se concentran casi exclusivamente en el sistema europeo de información arancelaria vinculante (EBTI/IAV), pero no reconocen que en la normativa comunitaria hay otros instrumentos vinculantes, como los reglamentos sobre clasificaciones y las notas explicativas. Del mismo modo, los Estados Unidos no han dicho ni una sola palabra acerca de los instrumentos de las CE en materia de cooperación aduanera o sobre los instrumentos presupuestarios y financieros. En otras palabras, mientras que los Estados Unidos no tienen ningún problema en usar un informe del Tribunal de Cuentas como presunta prueba de falta de uniformidad en el sistema de las CE, los Estados Unidos no quieren reconocer que instituciones de las CE como esa también pueden promover la uniformidad y que, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta cuando se evalúa el sistema en general.

i) Orientación administrativa y el deber de cooperación

4.747 La primera crítica del sistema que hacen los Estados Unidos es que "la mayoría de los instrumentos que según las CE aseguran una aplicación uniforme no son vinculantes, son de uso discrecional o tienen una naturaleza sumamente general".

4.748 Esta afirmación es una distorsión del sistema de las CE. El régimen de administración aduanera de las CE se basa en un cuerpo de leyes muy completo que es totalmente vinculante. En todos los campos del derecho aduanero, las instituciones de las CE disponen de las atribuciones necesarias para adoptar medidas jurídicamente vinculantes cuando son necesarias. A ello se suma un sistema completo de protección y revisión judicial, que incluye el derecho de los comerciantes a apelar y también la posibilidad de entablar procedimientos por incumplimiento. Por consiguiente, es manifiestamente inexacto sostener que el sistema de las CE se basa sobre todo en medios no vinculantes.

4.749 Los Estados Unidos también critican el hecho de que, en algunos casos, las CE se basen en orientaciones administrativas y otros instrumentos que no son jurídicamente obligatorios, como las directrices del sistema EBTI/IAV o las conclusiones del Comité del Código Aduanero. Esta crítica no se justifica. Las CE usan las orientaciones no obligatorias como complemento de las medidas vinculantes cuando así lo justifica la cuestión concreta de que se trata, en vista, por ejemplo, de su carácter técnico. Para dar un solo ejemplo, las CE no entienden qué se ganaría convirtiendo en instrumento jurídicamente vinculante a las directrices del sistema EBTI/IAV que, por ejemplo, contienen instrucciones sobre cómo y cuándo consultar la base de datos del sistema. Asimismo, más importante es si las directrices se cumplen realmente y los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba que demuestre lo contrario.

4.750 En lo referente al deber de cooperación, los Estados Unidos han aducido que esa obligación es de naturaleza demasiado general. Las CE no están de acuerdo. Lo que importa no es que el deber de cooperación sea una obligación general, sino que exista. Además, es jurídicamente vinculante y puede ser impuesto por el Tribunal de Justicia. El hecho de que los casos planteados ante el Tribunal quizá no sean muy frecuentes no significa que el deber de cooperación no tenga efecto práctico. Todo lo contrario: demuestra que en general se respeta.

ii) El sistema EBTI/IAV

4.751 El segundo elemento sistémico que critican los Estados Unidos es el sistema IAV de las CE. Las CE ya han respondido con detenimiento a los argumentos de los Estados Unidos en este sentido y, por lo tanto, sólo se referirán a algunos aspectos nuevos de los argumentos de los Estados Unidos.

4.752 En su Segunda comunicación escrita, los Estados Unidos repiten su alegación de que el sistema de las CE facilita el uso de la IAV más ventajosa en cada caso. Sin embargo, como las CE ya han indicado, los Estados Unidos no aportaron ninguna prueba que apoyase esa afirmación. Intentando al parecer explicar esa omisión, los Estados Unidos dicen ahora que el uso de la IAV más ventajosa "se hace de tal manera que no quedan pruebas de ello y por eso es difícil de descubrir". Los Estados Unidos añaden que "no se puede esperar que los comerciantes admitan voluntaria y abiertamente que están aprovechando la oportunidad de conseguir una clasificación óptima para sus mercancías". Las CE consideran que las presuntas dificultades para presentar pruebas no son motivo para eximir a los Estados Unidos de satisfacer la carga de la prueba. Los Estados Unidos no pueden esperar que el Grupo Especial acepte la alegación que hacen sin recibir pruebas simplemente porque los Estados Unidos dicen que obtener pruebas es muy difícil.

4.753 Segundo, suponiendo por un momento que la descripción de la situación que hacen los Estados Unidos es correcta, las CE quisieran saber también en qué consistiría precisamente la anulación o el menoscabo de las ventajas de los Estados Unidos. Las CE estiman que, si hay

anulación o menoscabo, los Estados Unidos tendrían que poder demostrarlo con alguna prueba. En caso contrario, si sus comerciantes no tienen interés en el caso porque han conseguido una clasificación óptima para sus mercancías, entonces los Estados Unidos mismos han refutado la presunción de anulación o menoscabo del párrafo 8 del artículo 3 del ESD.

4.754 En su Segunda comunicación escrita, los Estados Unidos vuelven a criticar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Timmermans*, que, a juicio de los Estados Unidos, se opone a la aplicación uniforme de las leyes aduaneras de las CE. En este sentido, en buena medida las CE sólo tienen que remitirse a sus comunicaciones anteriores. Sin embargo, la argumentación de los Estados Unidos contiene un elemento nuevo, a saber, que los Estados Unidos al parecer ahora estiman que la clasificación es una cuestión discrecional. En realidad, los Estados Unidos aducen que la clasificación arancelaria exige que las autoridades aduaneras tomen determinadas decisiones que pueden modificarse con el tiempo. De esta manera, los Estados Unidos parecen adoptar un enfoque muy dinámico respecto de la clasificación arancelaria, que los Estados Unidos parecen considerar, por lo menos en parte, una cuestión de política.

4.755 Este enfoque quizás explique las reconsideraciones frecuentes de las cuestiones de clasificación en la práctica de los Estados Unidos. También puede explicar por qué los Estados Unidos parecen estar mucho más interesados en la uniformidad geográfica que en la uniformidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, las CE no están de acuerdo con el punto de partida de los Estados Unidos. La clasificación arancelaria, si bien es compleja, es una cuestión jurídica que está plenamente sujeta a revisión judicial. En cualquier momento dado, hay una sola clasificación correcta para un determinado producto y esta clasificación no cambia rápidamente por consideraciones de política.

4.756 Por consiguiente, la jurisprudencia del asunto *Timmermans* no atenta de ninguna forma contra la uniformidad de las normas de las CE. Por el contrario, permite que los Estados miembros corrijan errores, cuando se han cometido errores. A diferencia de lo que piensan los Estados Unidos, esto no tiene nada que ver con una aplicación de la "propia interpretación" de los Estados miembros, sino que se trata de la aplicación de la interpretación correcta. Un ejemplo perfecto es el asunto *Bantex*, en el cual el antecedente del asunto *Timmermans* permitió que las autoridades del Reino Unido ajustasen su práctica en materia de clasificación al reglamento de clasificación de las CE que no habían tenido en cuenta. Además, como las CE ya han demostrado, las normas que siguen los Estados Unidos para revocar decisiones anticipadas en caso de error o cambio de las prácticas no parecen ser fundamentalmente diferentes de las normas de las CE.

iii) Revisión judicial por los tribunales de los Estados miembros

4.757 La tercera y última cuestión es la crítica de los Estados Unidos de que las CE han dicho que la revisión judicial de las decisiones sobre temas aduaneros es otro medio de asegurar la aplicación uniforme de la normativa de aduanas de las CE.

4.758 La primera objeción de los Estados Unidos es que, en vista de que las decisiones de los tribunales de un Estado miembro son "sólo obligatorias dentro de ese Estado miembro", la decisión que se tome en un caso en particular puede no coincidir con las decisiones de los tribunales de otros Estados miembros. Esta objeción es falsa. Aparte de que, como las CE van a demostrar más tarde, no es necesario que los fallos de primera instancia sean "vinculantes en toda la Comunidad", los Estados Unidos se olvidan de que los tribunales de los Estados miembros de las CE no actúan en el vacío. Precisamente para evitar el peligro al que se refieren los Estados Unidos, el Tratado de la CE contempla el procedimiento de reenvío prejudicial. Este procedimiento permite que el Tribunal de Justicia, manteniendo un diálogo constante con los tribunales de los Estados miembros, asegure la interpretación y aplicación uniforme del derecho comunitario. Es importante observar que, para decidir si una cuestión de derecho comunitario debe ser planteada ante el Tribunal de Justicia o si puede considerarse obvia, los tribunales de los Estados miembros tienen que considerar también si la

cuestión sería igualmente obvia para los tribunales de otros Estados miembros. Por lo tanto, cuando los tribunales de distintos Estados miembros han decidido, o podrían decidir, una cuestión de derecho comunitario de manera diferente, hay motivo para remitir la cuestión al Tribunal de Justicia de las CE.

4.759 Asimismo, los Estados Unidos han criticado el hecho de que las CE no tengan un sistema de notificación de los fallos entre los tribunales de los Estados miembros. Para refutar el argumento de las CE de que un sistema tal sería engorroso e ineficaz, los Estados Unidos han dicho que en los Estados Unidos hay bases de datos como Lexis y Westlaw. Esas observaciones no vienen al caso. Las CE entienden que la pregunta 72 del Grupo Especial se refiere a mecanismos de "notificación" formal a un tribunal de las decisiones de otro. Las CE no creen que la pregunta se haya referido a bases de datos privadas, como Lexis y Westlaw. Respecto de ese mecanismo, en las CE evidentemente también hay bases de datos similares, así como publicaciones jurídicas y técnicas. Además, por lo común los comerciantes y los corredores interesados en la clasificación de una mercancía en particular están bien informados acerca de las decisiones judiciales pertinentes adoptadas en todas las CE y las señalan a la atención de los tribunales si éstos no las conocen todavía.

4.760 En segundo término, los Estados Unidos dicen que, para un comerciante que tiene operaciones en distintos Estados miembros, es excesivamente complicado tramitar su apelación en varios tribunales. Las CE no están de acuerdo. La situación que describen los Estados Unidos es resultado del hecho de que la competencia de los tribunales de las CE es territorialmente limitada y, como las CE van a demostrar, ello no tiene nada de malo. Además, ningún comerciante está obligado a importar la misma mercancía pasando por varios puertos distintos en diferentes Estados miembros pero, si lo hace, el resultado puede ser que los tribunales competentes sean varios. Por último, esto todavía no significa que lo normal sea que el comerciante tenga que tramitar varias apelaciones en forma paralela. Si una cuestión se presenta al Tribunal de Justicia, lo normal es que las demás actuaciones en que esa cuestión está en juego puedan suspenderse hasta que el Tribunal haya dictado su fallo. Una vez que el Tribunal ha dictaminado, su interpretación sirve de orientación para los tribunales de todos los Estados miembros. Además, todos los casos planteados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y sus fallos se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que permite que los comerciantes y los jueces de los Estados miembros de las CE dispongan de información completa sobre los casos que surgen en otros Estados miembros.

4.761 Por último, los Estados Unidos sostienen que no se debe permitir que las CE digan que la revisión judicial es un instrumento para asegurar la aplicación uniforme, porque se trata de un "derecho" que los comerciantes tienen en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT. Además, los Estados Unidos afirman que las CE aducen que el cumplimiento del párrafo 3 b) del artículo X del GATT es suficiente para cumplir el párrafo 3 a) del mismo artículo.

4.762 Esas alegaciones no tienen ningún fundamento. Las CE nunca han dicho que la existencia de un procedimiento de revisión judicial sea suficiente para cumplir el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Por el contrario, las CE han reconocido que un sistema que se basase solamente en los derechos de apelación privados normalmente no parecería ajustarse al párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Sin embargo, esto no es lo que sucede en las CE, donde la revisión judicial es solamente uno de muchos mecanismos que promueven la aplicación uniforme del derecho comunitario. El hecho de que la revisión judicial sea también al mismo tiempo un derecho en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT no es pertinente. Ante todo, esta disposición se refiere exclusivamente a la consideración en primera instancia. En segundo lugar, nada impide que también y al mismo tiempo sea un medio para asegurar una aplicación uniforme.

4.763 En general, los Estados Unidos no han podido demostrar que el sistema de las CE tenga característica alguna que necesariamente sea causa de una falta de uniformidad en el régimen de administración aduanera de las CE. Por el contrario, el sistema de las CE comprende muchos mecanismos que se complementan entre sí y que, juntos, ofrecen garantías firmes de que las leyes

aduaneras de las CE se interpretan y aplican de manera uniforme. Por consiguiente, las alegaciones de los Estados Unidos deben ser desestimadas.

d) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige que las CE armonicen las disposiciones de los Estados miembros sobre las sanciones

4.764 Una última alegación hecha en relación con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a las sanciones por violaciones de normas aduaneras. Esta alegación de los Estados Unidos no tiene nada que ver con la aplicación de las leyes sino que tiene por objeto obligar a las CE a armonizar las leyes de sus Estados miembros que contienen disposiciones que establecen sanciones y reemplazarlas con legislación de las CE. Esta alegación no tiene ningún fundamento en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

i) Las disposiciones que establecen sanciones no están incluidas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT

4.765 En primer lugar, las CE han explicado que las disposiciones que establecen sanciones no figuran entre las leyes a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo X del GATT y, por lo tanto, no están incluidas en el párrafo 3 a) de ese mismo artículo. Hasta ahora, los Estados Unidos no han explicado por qué las disposiciones que establecen sanciones deban ser consideradas leyes en el sentido del párrafo 1 del artículo X del GATT, es decir leyes "que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas".

4.766 En realidad, los Estados Unidos no parecen ni siquiera sostener que las disposiciones que establecen sanciones sean leyes en el sentido del párrafo 1 del artículo X del GATT. Se limitan en cambio a decir que las leyes que establecen sanciones son "instrumentos" para la aplicación de las leyes mencionadas en el párrafo 1 del artículo X del GATT. Sin embargo, si las disposiciones que establecen sanciones son nada más que instrumentos para aplicar las leyes mencionadas en el párrafo 1 del artículo X del GATT, entonces no son ellas mismas leyes.

4.767 En su Segunda comunicación escrita, los Estados Unidos también hacen una referencia indirecta al término "cargas" que aparece en el párrafo 1 del artículo X del GATT. Sin embargo, las CE no creen que esa palabra abarque las sanciones. Las "cargas" son pagos pecuniarios que frecuentemente se cobran a cambio de servicios prestados o mercancías suministradas. Las sanciones son una respuesta a un comportamiento ilegal consistente en la imposición de un castigo. Esas sanciones pueden ser financieras, pero también pueden adoptar otras formas. Por ejemplo, las sanciones penales pueden ser multas, pero también pueden incluir la reclusión y el trabajo social. Las sanciones administrativas pueden consistir en medidas como la destrucción o el decomiso de mercancías. No parece que todos estos tipos diferentes de sanciones puedan estar comprendidos en el término "cargas". Esto también queda demostrado por el artículo VIII del GATT, que distingue claramente los derechos y cargas, por un lado, de las sanciones, por el otro.

ii) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige que se armonicen las leyes que rigen en un Miembro de la OMC a nivel subfederal

4.768 El segundo problema que plantea la alegación de los Estados Unidos es que las leyes de los Estados miembros que contienen disposiciones que establecen sanciones son ellas mismas leyes de aplicación general. Por lo tanto, incluso si esas leyes estuviesen comprendidas en el párrafo 1 del artículo X del GATT, sería a su aplicación a lo que se referiría el párrafo 3 a) de ese artículo. Las presuntas diferencias entre las disposiciones que establecen sanciones de los Estados miembros que han mencionado los Estados Unidos no son diferencias en materia de aplicación, sino diferencias que hay entre las distintas medidas legislativas vigentes en diferentes territorios. El hecho de que un tema en particular esté regido por disposiciones distintas en diferentes partes del territorio de un Miembro de la OMC no tiene nada que ver con una aplicación no uniforme. Por consiguiente, el párrafo 3 a)

del artículo X del GATT no se puede usar para crear la obligación de armonizar las leyes subfederales vigentes en un Miembro de la OMC.

4.769 Los Estados Unidos han tratado de eludir esta conclusión repitiendo la fórmula de que "las leyes se pueden aplicar también mediante leyes" y que, por lo tanto, las disposiciones que establecen sanciones de los Estados miembros se han de considerar parte de la "aplicación" a los fines del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Esta interpretación está totalmente en desacuerdo con el sentido corriente de los términos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.770 Los Estados Unidos han definido el término "aplicar" como "ejecutar" que, a su vez, definen como "poner en práctica, poner en vigor". Las CE pueden aceptar esas definiciones. Sin embargo, las CE no están de acuerdo en que una disposición sobre sanciones "ponga en vigor" o "ponga en práctica" la norma sustantiva cuya infracción tiene por fin castigar. Por ejemplo, una disposición que prescriba la imposición de una sanción por la omisión de declarar una mercancía no "pone en práctica" ni "pone en vigor" la norma que establece la obligación de declarar la mercancía. La disposición misma sobre la sanción necesita ser puesta en práctica mediante un acto administrativo o judicial que imponga la sanción. Es este último acto el que puede ser considerado como medida de ejecución de la prohibición y que, por ello, representa la "aplicación". En cambio, la disposición sobre la sanción complementa a la norma sustantiva, pero ella misma no la pone en vigor.

4.771 En realidad, los propios Estados Unidos han reconocido expresamente que una disposición sobre sanciones "puede ser considerada algo que debe ser aplicado". Esto pone de manifiesto el error lógico cometido por los Estados Unidos. No es posible decir que una ley que en sí misma necesita ser "puesta en vigor" sirva para "poner en vigor" a otra ley. En cambio, las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones sustantivas son tanto unas como otras medidas de aplicación general que se complementan mutuamente. El hecho de que las primeras existen al nivel de los Estados miembros mientras que las segundas rigen al nivel de las CE no significa que las primeras apliquen las segundas.

4.772 Los Estados Unidos han criticado a las CE por haber definido "aplicación" como la ejecución de leyes "en casos concretos". Esta crítica no tiene fundamento. La aplicación de una ley, que se define como un acto de aplicación general, por definición incluye su aplicación en casos concretos. Ello se desprende claramente de la estructura del artículo X del GATT. El párrafo 1 del artículo X del GATT define las leyes de aplicación general que deben publicar los Miembros de la OMC. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT luego dice que esas leyes de aplicación general son las medidas que se deben aplicar de manera uniforme, imparcial y razonable. Es contrario a la lógica interna del artículo X del GATT sostener que las leyes que se han de aplicar pueden ser al mismo tiempo disposiciones de aplicación. Ello eliminaría la distinción clara entre la "aplicación" y las leyes que se han de aplicar que fue reconocida por el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Banano III.*

4.773 Los Estados Unidos tratan de apoyar su interpretación en el informe del Grupo Especial sobe el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, donde el Grupo Especial constató que una determinada resolución de la Argentina constituía una infracción del requisito de la aplicación imparcial y razonable. Sin embargo, como las CE ya han explicado, ello era así porque la medida de la Argentina impedía que la Argentina aplicara sus leyes de aduanas de una manera que fuese razonable e imparcial. En ningún momento el Grupo Especial que trató el asunto *Argentina - Pieles y cueros* dice que la medida de la Argentina aplicaba alguna otra medida. Por consiguiente, el asunto *Argentina - Pieles y cueros* no respalda la interpretación de los Estados Unidos en la presente diferencia.

4.774 En general, la interpretación de los Estados Unidos de que "las leyes pueden aplicar otras leyes" es muy forzada y sólo contempla los intereses de los propios Estados Unidos. Su propósito es conseguir una decisión contraria a las CE en esta diferencia pero preservando las esferas de actividad económica que en los propios Estados Unidos se rigen por la legislación de nivel estatal.

4.775 En los Estados Unidos, un exportador de vinos puede tener que trabajar con 50 normativas estatales diferentes sobre la venta de bebidas alcohólicas. Es probable que ello sea mucho más complicado que para un importador de las CE tener quizá que tomar en consideración las disposiciones que establecen sanciones de uno de los 25 Estados miembros, dependiendo del lugar donde se cometa la infracción. Por lo tanto, no está claro por qué las CE estarían obligadas a armonizar sus disposiciones que establecen sanciones, mientras que los Estados Unidos están autorizados a mantener leyes subfederales en numerosos campos abarcados por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.776 Por supuesto, los Estados Unidos tienen un sistema de federalismo doble, donde las leyes de los estados nunca pueden ser medios de aplicación de la legislación federal. Sin embargo, esto no puede querer decir que todos los Miembros de la OMC en los que los límites entre la competencia federal y la competencia de los estados son menos estrictos y en los que, por consiguiente, las leyes federales y las estatales pueden complementarse mutuamente, estén de alguna manera infringiendo el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

iii) El derecho comunitario asegura un grado suficiente de uniformidad de las disposiciones que establecen sanciones

4.777 Por último, las CE quieren aclarar que, aunque no aceptan que las leyes que establecen sanciones puedan considerarse medidas de "aplicación", no discuten que las leyes que establecen sanciones también pueden servir para asegurar una aplicación uniforme de las leyes mencionadas en el párrafo 1 del artículo X del GATT. Precisamente por ello, el derecho comunitario, tal como ha sido aclarado por el Tribunal de Justicia, establece determinados principios básicos para las disposiciones que establecen sanciones, que deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

4.778 Estos requisitos generales bastan para asegurar una aplicación uniforme de las leyes aduaneras de las CE, de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Los Estados Unidos no aportan ninguna prueba de que la falta de una armonización completa de las disposiciones que establecen sanciones en las CE elimine la uniformidad en la aplicación de las leyes de las CE en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del artículo X del GATT.

4.779 Los Estados Unidos se han referido repetidas veces al hecho de que las CE, en el contexto de las conversaciones sobre la modernización del código aduanero, han considerado la inclusión de una disposición que contemplaría una mayor armonización de las sanciones administrativas en materia aduanera. Sin embargo, esas conversaciones no tienen nada que ver con la cuestión de si las CE cumplen las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Cuando ello ha sido conveniente para el funcionamiento del mercado interno, las CE han tomado medidas de armonización en numerosos campos, sin que ello haya sido necesariamente una respuesta a una obligación de las CE.

3. La alegación de los Estados Unidos basada en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT

a) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el requisito de pronta revisión

4.780 La crítica de los Estados Unidos sobre la pronta revisión se limita a la función que desempeña el Tribunal de Justicia mediante el procedimiento de reenvío prejudicial. Los Estados Unidos no han presentado ninguna alegación con respecto a los recursos de anulación de una medida de las CE y, por lo tanto, los Estados Unidos parecen admitir que, en este tipo de procedimiento, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia cumplen el requisito de pronta revisión.

4.781 Debe señalarse que el reenvío prejudicial tiene el propósito de asegurar que los tribunales de los Estados miembros de las CE aplican e interpretan el derecho comunitario de manera uniforme. En este sentido, cuando el Tribunal de Justicia usa el procedimiento de reenvío prejudicial cumple una

función que no difiere de la de un tribunal supremo. Como las CE han explicado en repetidas ocasiones, el procedimiento de reenvío prejudicial también constituye, al mismo tiempo, uno de los diversos instrumentos que sirven para asegurar la aplicación uniforme, de acuerdo con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Las CE han manifestado ya que, desde su punto de vista, "aplicar" significa poner en práctica las leyes y los reglamentos generales, aplicarlos en casos concretos. Por lo tanto, la uniformidad se asegura mediante una variedad de mecanismos administrativos y jurídicos, entre los que se incluyen algunos judiciales, como el reenvío prejudicial o la apelación a un tribunal de segunda instancia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia mediante el procedimiento de reenvío prejudicial no hace de ninguna forma una "revisión" en el sentido del párrafo 3 b) del artículo X del GATT, ni tampoco es necesario que la haga para considerar que las CE cumplen lo establecido en esta disposición. En este contexto, cabe recordar que la pronta revisión que se prevé en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT se refiere sólo a la primera instancia, tal como lo han admitido los Estados Unidos.

4.782 De cualquier modo, incluso aunque el requisito de prontitud se aplique a los casos en que se solicita el reenvío prejudicial, el tiempo acumulado que se necesita para que un caso sea resuelto por el Tribunal de Justicia y el tribunal nacional correspondiente rara vez alcanza el promedio de cuatro años de los casos del USCIT mencionado por las CE en su Primera declaración oral. En su respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos justifican estos retrasos por "el hecho de que, en los tribunales de los Estados Unidos, las actuaciones se programan, en buena medida, mediante acuerdo entre las partes". A las CE les resulta difícil justificar una excepción a la obligación de "pronta revisión" hecha en virtud de un mecanismo procesal que se basa en la voluntad discrecional del organismo demandado.

4.783 Además, las CE desean recordar que la duración media de las revisiones del USCIT a la que hicieron referencia no incluye el tiempo necesario para las apelaciones al Tribunal Federal de Apelación de los Estados Unidos y, luego, a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Por consiguiente, las CE opinan que si la actividad de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos debe considerarse "revisión", ésta no sería, por cierto, más pronta que la del Tribunal Europeo de Justicia.

b) El requisito de que las decisiones de los tribunales deben regir la práctica de los organismos

4.784 El segundo argumento de los Estados Unidos es el núcleo de su Segunda comunicación escrita con respecto al párrafo 3 b) del artículo X del GATT. Este argumento se refiere al requisito de que las decisiones de los tribunales que hacen las revisiones rijan la práctica de los organismos encargados de aplicar al nivel administrativo las leyes aduaneras de los Miembros de la OMC.

4.785 Este argumento sólo apareció en una etapa muy tardía de estas actuaciones. Los Estados Unidos lo utilizaron por primera vez en algunas de sus respuestas a las primeras preguntas del Grupo Especial, en particular a la pregunta 35, en la que el Grupo Especial pedía a los Estados Unidos que aclararan qué impugnaban o aducían con base en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT. Este argumento parece sustituir al más general de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, según el cual "la revisión y rectificación por parte de cada Estado miembro, uno por uno, no cumple la obligación que las CE tienen en virtud del párrafo 3 b) del artículo X". Este capítulo incluía varios argumentos, principalmente sobre la duración y las variaciones de los procedimientos de revisión, todos los cuales parecen haber sido descartados en el curso de las actuaciones. Por lo tanto, el argumento de los Estados Unidos basado en la segunda oración del párrafo 3 b) del artículo X parece indicar una retirada de último momento respecto de la postura original.

4.786 Aunque la aparición tardía del argumento ha impedido el intercambio de opiniones entre las partes, las CE explicarán debidamente por qué la posición de los Estados Unidos sobre el requisito de "regir la práctica" es una tergiversación del párrafo 3 b) del artículo X del GATT.

4.787 La interpretación de los Estados Unidos de que cualquier decisión de un tribunal de primera instancia es obligatoria para el conjunto de los organismos aduaneros de todo el territorio de un Miembro de la OMC se basa en cuatro aspectos: tres están vinculados con la interpretación literal de la disposición, concretamente la referencia a dos obligaciones diferentes en la disposición ("ejecutar" y "regir"), el sentido corriente del término "regir" y el uso del artículo "los" antes de la palabra "organismos", mientras que el cuarto se basa en el contexto que da el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.788 Las CE no pueden estar de acuerdo con estos argumentos presentados por los Estados Unidos. En primer lugar, las CE ya explicaron, en su Segunda comunicación escrita, el significado del término "regir" comparado con la palabra "ejecutar", y cómo el primero se refiere ante todo a la obligación de ser equitativo cuando se toma una segunda decisión administrativa, después de la adopción de una decisión de revisión independiente.

4.789 Segundo, para interpretar el término "regir", deben diferenciarse sus diversas definiciones. Si admitiéramos que "regir" significa "controlar, reglamentar, determinar o establecer una ley, norma, criterio o principio", se consideraría que las decisiones de los tribunales de primera instancia son vinculantes, en contravención de un principio común a la mayoría de los sistemas jurídicos de "derecho civil" y de "*common law*", a saber que sólo los tribunales de alto nivel o de última instancia toman decisiones que se consideran vinculantes y, por lo tanto, fuente general de derecho.

4.790 Las CE pueden admitir que una decisión de un tribunal regional de primera instancia cumple el papel de orientar a otros tribunales regionales de primera instancia. De este modo, el sentido corriente de "regir" sería "influir", según los significados dados por los Estados Unidos. Las decisiones de un tribunal de primera instancia son vinculantes sólo en los casos específicos resueltos por el mismo tribunal y, por lo tanto, no son un instrumento que garantiza la aplicación uniforme, contrariamente a lo que sostiene un argumento repetido constantemente por los Estados Unidos.

4.791 Esta interpretación refleja la situación existente en los países que intervienen como terceros en esta diferencia que tienen tribunales regionales de primera instancia para atender cuestiones aduaneras, como el Brasil, China, el Japón y, en parte, la India. Por el contrario, y como lo han demostrado sus comunicaciones, los terceros en los que las revisiones de primera instancia de las decisiones administrativas sobre asuntos aduaneros son hechas por tribunales centralizados (la Argentina, Australia y Corea) pueden compartir fácilmente la interpretación de gran alcance del párrafo 3 b) del artículo X que los Estados Unidos hacen en este caso.

4.792 En tercer lugar, el uso de la expresión "<u>los</u> organismos" en el párrafo 3 b) del artículo X no significa que esos organismos sean <u>todos</u> los organismos de todo el territorio del Miembro de la OMC, en este caso las CE. La expresión "los organismos" debe entenderse en función del término con el que se relaciona, a saber, "tribunales", que indica los tribunales de primera instancia. Por consiguiente, "los organismos" son "los organismos" cuyas decisiones son revisadas por esos tribunales de primera instancia. En las CE, "los organismos" son los establecidos en cada uno de sus Estados miembros y no los establecidos en los demás Estados miembros.

4.793 Además, los Estados Unidos no atribuyen el sentido adecuado al término "decisión" que figura en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT. La "decisión" de un tribunal en un caso particular debe distinguirse del razonamiento que lo llevó a tomarla. Por ejemplo, si un tribunal resuelve sobre un recurso de anulación de una decisión de las autoridades aduaneras, la decisión será anular o no la decisión. Si la decisión es anularla, entonces esta decisión regirá la práctica del organismo. Por el contrario, en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no hay base alguna para suponer que todas las cuestiones de interpretación que el tribunal puede haber tenido en cuenta en el curso de su razonamiento se convierten también en vinculantes para el organismo. Esto daría a los precedentes judiciales un papel que iría mucho más allá de la práctica de numerosos Miembros de la OMC, que no tienen un sistema jurídico basado en la jurisprudencia.

4.794 Esto no quiere decir que las decisiones de un tribunal de primera instancia, incluido el razonamiento que aparece en el fallo, no produzcan ningún efecto en el sistema de las CE. Ese razonamiento pasará a ser parte de la práctica judicial pertinente que será tenida en cuenta por los organismos aduaneros. Además, si un organismo aduanero o un tribunal de un Estado miembro de las CE no comparte la interpretación de la legislación de las CE que hace un tribunal de otro Estado miembro, tomará las iniciativas que correspondan a su posición en el sistema: el organismo aduanero consultará y analizará el asunto con la Comisión y los demás Estados miembros; el tribunal de otro Estado miembro recurrirá al Tribunal Europeo de Justicia.

4.795 En cuarto lugar, los Estados Unidos consideran que su interpretación del párrafo 3 b) del artículo X se ve reforzada por el contexto que le da el párrafo 3 a) del mismo artículo. Las CE ya han impugnado toda vinculación entre estos dos conjuntos de obligaciones en el curso de estas actuaciones. Las CE consideran que la interpretación que hacen los Estados Unidos no tiene ningún sustento en los términos, la estructura o los objetivos del párrafo 3 del artículo X del GATT. El hecho de que, como lo subrayan los Estados Unidos, las CE acepten que los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X deben interpretarse "de forma armoniosa" no significa que estemos de acuerdo con una interpretación que transforma al párrafo 3 del artículo X del GATT en una disposición "*totum revolutum*" en la que se funden las diferentes obligaciones, lo que trae como consecuencia injustificada que la obligación de asegurar una revisión y una rectificación independientes de las decisiones administrativas relativas a las cuestiones aduaneras al nivel de la primera instancia termina absorbida por la obligación de asegurar una aplicación uniforme de la legislación.

4.796 Por último, no es cierto, al contrario de lo que manifiestan los Estados Unidos, que "si ellas [es decir, las decisiones de los tribunales de revisión] rigen la práctica de sólo algunos de los organismos, en consecuencia, por definición, la aplicación de la legislación del Miembro no será uniforme". Esta conclusión categórica no tiene en cuenta que, tal como lo explicaron las CE, hay otras formas de asegurar la aplicación uniforme y las CE cuentan con una gama amplia de recursos que contribuyen a la interpretación y la aplicación uniformes de las leyes aduaneras de las CE.

c) La interpretación que los Estados Unidos hacen del párrafo 3 b) del artículo X del GATT, exige que, en cada Miembro de la OMC, se establezca un tribunal aduanero único y centralizado o un organismo aduanero único y centralizado

4.797 Los Estados Unidos alegan que no sostienen que el párrafo 3 b) del artículo X exija que todos los Miembros de la OMC tengan un tribunal único y centralizado para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. Los Estados Unidos aceptan la existencia de tribunales regionales de primera instancia, siempre que el Miembro de la OMC tenga un organismo único y centralizado encargado de exigir el cumplimiento de las leyes aduaneras, o que las diversas autoridades aduaneras regionales tomen otras medidas para asegurar que las decisiones de los tribunales de revisión rijan la práctica de los organismos y que el Miembro siga aplicando sus leyes aduaneras de manera uniforme.

4.798 Las CE no tienen claro por qué la existencia de un organismo aduanero centralizado que, en el mejor de los casos, es una cuestión que surge en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, debe vincularse con la estructura del sistema judicial, en el marco del párrafo 3 b) de ese artículo. Los Estados Unidos explican que "si la decisión de un tribunal en una región entra en conflicto con la de un tribunal en otra región, el organismo debería poder resolver el conflicto recurriendo una u otra decisión ante un tribunal superior". Esta explicación es reveladora porque muestra que, incluso a juicio de los Estados Unidos, las sentencias de los tribunales de primera instancia no son vinculantes para otros tribunales porque, si no fuera así, el conflicto no se habría producido en absoluto. Más importante todavía es que los Estados Unidos parecen olvidar que son los tribunales los que deben controlar al organismo, y no el organismo el que controla a los tribunales. En opinión de los Estados Unidos, sería el organismo el que debería estar encargado de asegurar la uniformidad de la práctica de los tribunales de primera instancia y el que seleccionaría el fallo contra el que quiere apelar. Esta

interpretación confunde totalmente los límites entre el papel de las autoridades aduaneras y el de los tribunales y no debe admitirse.

4.799 La única razón adicional dada por los Estados Unidos para sostener que un organismo centralizado resolvería la falta de un tribunal central es una salvedad que figura en la cuarta frase de la segunda oración del párrafo 3 b) del artículo X. Esta salvedad da a la administración central de un organismo aduanero la posibilidad de solicitar la revisión de una decisión de un tribunal de primera instancia cuando hay motivos suficientes para creer que la decisión es incompatible con los principios jurídicos o con la realidad de los hechos. Los Estados Unidos consideran que "esa posibilidad sólo tiene sentido si, de lo contrario, la decisión en la actuación inicial pudiera tener efectos fuera del marco de esa actuación".

4.800 La interpretación de la salvedad que hacen los Estados Unidos es errónea porque confunde el papel que desempeña el mecanismo de revisión previsto en ella. Ese mecanismo no se instauró para rectificar los efectos que la decisión original tiene sobre la práctica de los organismos, sino para poder tomar una medida correctiva, basada en motivos limitados, de una decisión que ya no se puede impugnar mediante recursos ordinarios, porque han vencido los plazos.

4.801 En primer lugar, esto se desprende claramente de la estructura del apartado b). La excepción contemplada por la salvedad se refiere al plazo para presentar los recursos, que figura en la frase anterior del apartado b) (la tercera frase de la segunda oración del apartado) y no al requisito de "regir la práctica", que figura en la segunda frase de la segunda oración del párrafo 3 b) del artículo X del GATT.

4.802 Segundo, el hecho de que la salvedad no tiene el propósito de rectificar los efectos de la decisión original sobre la práctica de los organismos también se deriva de la naturaleza de este tipo de revisión excepcional. Cuando la revisión se fundamenta en la incompatibilidad con los principios jurídicos establecidos, su propósito es proteger los pilares del sistema jurídico, con el fin de eliminar conflictos con la jurisprudencia de los tribunales más altos, que son responsables de definir mejor esos principios jurídicos. Cuando la revisión se basa en la incompatibilidad con la realidad de los hechos, su propósito es anular una decisión judicial tras haberse descubierto hechos que el tribunal y la parte que solicitó la revisión desconocían cuando se tomó la decisión. Ninguno de estos dos motivos de revisión está vinculado con los efectos posteriores que puede tener una decisión judicial de primera instancia sobre la práctica de los organismos aduaneros. La revisión basada en el respeto de los principios tiene el objetivo de asegurar el respeto del sistema jurídico y los tribunales más altos; la revisión fundamentada en el descubrimiento de hechos nuevos tiene efectos sólo sobre la decisión original.

4. Declaración final

4.803 Las CE comenzarán sus comentarios finales haciendo primero varias observaciones generales sobre el caso presente. Luego expondrán sus argumentos finales sobre las alegaciones de los Estados Unidos basadas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Luego presentarán sus argumentos finales sobre las alegaciones de los Estados Unidos basadas en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT.

4.804 Un primer comentario general que quieren hacer las CE es que este caso es distinto de cualquier otro que se haya litigado en el marco del ESD. Constituye una impugnación fundamental de todo el sistema de administración aduanera y de revisión judicial de un Miembro de la OMC, concretamente las CE. A diferencia de lo que han alegado los Estados Unidos, esto no tiene nada que ver con "tácticas intimidatorias" sino que simplemente describe la realidad. De las deliberaciones se desprende que el caso no se limita a asuntos de legislación y administración aduanera. Tiene que ver, más bien, con diferencias fundamentales entre tradiciones y culturas jurídicas, entre Miembros que tienen una estructura federal y otros que no la tienen, entre Miembros que tienen un sistema de federalismo ejecutivo y otros que no lo tienen, y entre el *common law* y el derecho continental con

respecto al valor de los precedentes judiciales. Las CE creen que estas cuestiones no pueden resolverse correctamente en el marco del ESD, sino que deben quedar libradas a la autonomía constitucional de cada Miembro de la OMC. Las CE confían en que el Grupo Especial tendrá presente estas consideraciones cuando interprete el artículo X del GATT, que no es una disposición que deba usarse para interferir en cuestiones relacionadas con el ordenamiento jurídico nacional de un Miembro.

4.805 Un segundo comentario general que quieren hacer las CE es que el Grupo Especial no debe perder de vista las consecuencias reales de las alegaciones de los Estados Unidos. Los argumentos de los Estados Unidos, como han sostenido las CE en repetidas ocasiones, apuntan a la creación de un organismo aduanero de las CE y de un tribunal de las CE, además de a la armonización de las leyes de los Estados miembros en varios ámbitos. A pesar de todas las afirmaciones de los Estados Unidos en sentido contrario, esta es la conclusión clara que se desprende de numerosas declaraciones de los Estados Unidos, en las que éstos han manifestado que, ante "la ausencia" de un organismo aduanero o de un tribunal aduanero de las CE, una u otra cuestión produce necesariamente una falta de uniformidad. Este carácter absoluto de los argumentos de los Estados Unidos es preocupante, porque representa una aplicación muy preceptiva del párrafo 3 a) del artículo X del GATT en relación con elementos estructurales del régimen jurídico de las CE que eran bien conocidos cuando las CE se incorporaron como Miembro de la OMC.

4.806 La tercera cuestión es que las CE preveían plantear el asunto de la presentación tardía de pruebas por parte de los Estados Unidos. Dada la decisión del Grupo Especial de modificar el calendario, por lo que las CE dan las gracias al Grupo Especial, las CE no van a tratar este asunto en esta etapa. Sin embargo, las CE lamentan que los Estados Unidos no hayan presentado las pruebas antes; las CE piensan que no están en la situación en la que estarían si los Estados Unidos hubieran presentado sus pruebas tan pronto como deberían haberlo hecho. Las CE también quieren añadir que, al final de estas actuaciones, todavía parece que se está lejos de una conclusión. De hecho, las CE sienten como si hubieran participado en una especie de ejercicio del mecanismo de examen de las políticas comerciales y parece que los debates sobre el sistema de administración aduanera de las CE podrían haber continuado indefinidamente. No parece que ésta sea realmente la forma en que debe utilizarse el mecanismo de solución de diferencias de la OMC.

4.807 Los siguientes son los comentarios finales de las CE sobre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.808 Estas actuaciones han demostrado que las partes tienen opiniones muy diferentes sobre las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Los Estados Unidos consideran que esta disposición es una norma jurídica muy exigente, que puede utilizarse para prescribir con detalle la forma en que un Miembro de la OMC debe aplicar sus leyes aduaneras. Además, los Estados Unidos parecen creer también, a pesar de sus declaraciones de que las discrepancias como tales no son un problema, que una trasgresión del párrafo 3 a) del artículo X se puede demostrar haciendo referencia a ejemplos individuales de aplicación.

4.809 Las CE no están de acuerdo con estos puntos de vista de los Estados Unidos. Las CE opinan que el párrafo 3 a) del artículo X es solamente una disposición no prescriptiva y que establece normas mínimas y que complementa las disciplinas sustantivas de otras disposiciones de los acuerdos abarcados. Además, dada la gran cantidad de instancias administrativas que participan en la gestión cotidiana de las aduanas, no se puede suponer que es posible aceptar la existencia de una trasgresión a partir de ejemplos individuales de aplicación no uniforme. Más bien, como indicó el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, es necesario demostrar una pauta de aplicación no uniforme. Además, como señaló el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos*, se necesitan "pruebas sólidas" que correspondan a la gravedad de la alegación.

4.810 En la mayor parte de sus comunicaciones, los Estados Unidos trataron de basar sus argumentos en críticas al sistema mismo de administración aduanera de las CE y no en pruebas de su aplicación real. Las CE, en sus comunicaciones, ya han contestado a estas alegaciones detalladamente. También han hecho una descripción completa del sistema de administración aduanera de las CE, que esperan sirvan de ayuda al Grupo Especial en su tarea de hacer una evaluación objetiva de los hechos.

4.811 Por consiguiente, las CE se limitarán a ocuparse de algunas alegaciones sistémicas presentadas en la Segunda declaración oral de los Estados Unidos. Primero, los Estados Unidos insisten continuamente en sus argumentos de que el sistema de las CE alienta el uso de la IAV más ventajosa. Para apoyar esos argumentos se refieren a lo que denominan "sesgo" en la promulgación de IAV y, en particular, al hecho de que algunos Estados miembros, especialmente Alemania, promulgan un porcentaje mayor de IAV que otros. Como ya indicaron las CE, esto no demuestra de ninguna manera que se trate de usar la IAV más ventajosa. Más bien refleja las distintas modalidades comerciales y la importancia general que tiene Alemania por ser la mayor economía del mercado interno de las CE. También puede reflejar los distintos hábitos de los comerciantes, ya que Alemania fue el primer Estado miembro en utilizar IAV en las CE, antes de su generalización a toda la Comunidad a través del Código Aduanero de las CE.

4.812 Los Estados Unidos también se han quejado de que no sea obligatorio para las autoridades de un Estado miembro tener en cuenta la IAV promulgada por otros Estados miembros. Esta afirmación distorsiona la situación jurídica imperante en las CE. Como ya lo explicaron las CE, cuando un Estado miembro, por ejemplo consultando la base de datos del sistema EBTI/IAV, observa que la IAV difiere de la clasificación que él prevé, el Estado miembro no puede sencillamente seguir adelante y promulgar la IAV contradictoria sino que, en cambio, debe poner este asunto a consideración de la Comisión y/o del Comité del Código Aduanero.

4.813 Por último, los Estados Unidos también han insistido en criticar el procedimiento de reenvío prejudicial como medio de asegurar una aplicación uniforme. Para sustentar su opinión, en su Segunda declaración oral, hicieron referencia a un fallo reciente del Tribunal Europeo de Justicia sobre el asunto *Intermodal Transport*, que han citado de manera muy parcial. Las CE habían previsto referirse a esta cuestión en sus comentarios finales, pero dado el tiempo adicional otorgado por el Grupo Especial para hacer observaciones sobre la parte III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, las CE se ocuparán de este asunto en sus comentarios escritos.

4.814 Dejando de lado los aspectos sistémicos, las CE tratarán ahora lo que debería ser el núcleo de la argumentación de los Estados Unidos, concretamente la aplicación misma de la normativa aduanera de las CE. En otras palabras, cuando se examinan las comunicaciones de los Estados Unidos, ¿se ve que los Estados Unidos han demostrado que existe una pauta de aplicación no uniforme de la normativa aduanera de las CE? La respuesta es un "no" rotundo.

4.815 En el campo de la clasificación arancelaria, los Estados Unidos han hecho referencia fundamentalmente sólo a dos casos individuales de aplicación: monitores LCD y forros opacos para cortinas.

4.816 La posición de los Estados Unidos con respecto a los monitores LCD fue, primero, que el reglamento sobre la suspensión de derechos no aseguraba una aplicación uniforme. Más recientemente, en particular en su Segunda declaración oral, los Estados Unidos cambiaron su enfoque, orientándolo hacia los monitores que no estaban comprendidos en ese reglamento. En este contexto hicieron referencia a algunos acontecimientos muy recientes sucedidos durante las actuaciones del Grupo Especial, por ejemplo la IAV promulgada por las autoridades alemanas en julio de 2005, y observaciones de la rama de producción presentadas a la Comisión Europea en septiembre de 2005. Según la opinión de las CE, estos acontecimientos recientes no demuestran que haya un problema de aplicación no uniforme que contravenga al párrafo 3 a) del artículo X del GATT sino,

más bien, que hay una cuestión en vías de solución. De hecho, la clasificación de los monitores del caso es un asunto que se está estudiando actualmente y dentro de muy poco tiempo se pondrán a consideración del Comité del Código Aduanero las medidas que correspondan.

4.817 Los Estados Unidos tampoco han demostrado que haya falta de uniformidad en el caso de los forros opacos para cortinas. Como las CE ya han señalado, no hay pruebas de que los productos que se pusieron a consideración de las autoridades alemanas estuvieran revestidos de tundiznos y fueran, por lo tanto, idénticos a los descritos en la IAV promulgada por las autoridades holandesas, irlandesas y británicas. En un intento de último momento por disimular esta dificultad, los Estados Unidos han presentado una declaración jurada del presidente de Rockland, fabricante de forros opacos para cortinas. Las CE ya han explicado que esta declaración, hecha por una persona que tiene un claro interés en la clasificación de los forros opacos para cortinas, no tiene absolutamente ningún valor probatorio. Además, la declaración jurada es ajena a la cuestión de si los productos que estaban a consideración de las autoridades de las CE eran en realidad idénticos. Por el contrario, solamente incluye una confirmación de que Rockland nunca ha fabricado ningún producto que no fuera tundido. Sin embargo, ésta no es la cuestión, ya que no está claro que todos los productos hayan sido producidos por Rockland y tampoco que todos los productos de Rockland sean verdaderamente idénticos. En términos generales, la cuestión de si los productos tenían tundiznos es simplemente un asunto relacionado con el examen de los productos mismos por parte de las autoridades aduaneras competentes. Además, las CE destacan que ninguno de los dos importadores afectados por las decisiones alemanas, Bautex GmbH y Ornata GmbH, ha apelado contra las decisiones. Por este motivo, los Estados Unidos no pueden alegar ahora que hay falta de uniformidad atribuible al sistema de las CE.

4.818 En la esfera de la valoración en aduana, los Estados Unidos han aportado aún menos pruebas. Se han referido principalmente al informe del Tribunal de Cuentas, que es, sin embargo, en sí mismo un instrumento para asegurar la aplicación uniforme, que se ha aplicado y que ya no es una descripción precisa de la situación actual. En lo relativo a casos reales, los Estados Unidos han hecho referencia sólo a uno, en el que intervenía Reebok. Sin embargo, los Estados Unidos no han justificado de ninguna manera su postura aportando pruebas de que se haya hecho una aplicación no uniforme y, por lo tanto, no han satisfecho la carga de la prueba.

4.819 Por último, en lo que atañe a la administración aduanera, los Estados Unidos parecen haber abandonado completamente sus argumentos con respecto al procedimiento de domiciliación. En relación con la transformación bajo control aduanero, los Estados Unidos simplemente repiten sus interpretaciones erróneas de las directrices francesas, que tergiversan para crear la impresión de que discrepan de la legislación de las CE. Sin embargo, no consiguen sustentar su interpretación dudosa con ninguna prueba que se relacione con la aplicación misma de las directrices.

4.820 Cuando se examina el fundamento fáctico de las alegaciones de los Estados Unidos es inevitable concluir que es sumamente endeble. Desde el comienzo, los Estados Unidos se esforzaron por aportar pruebas de una aplicación no uniforme. Comenzaron trayendo dos ejemplos en el ámbito de la clasificación y uno en el de la valoración. Cuando vieron que estos ejemplos se evaporaban, trataron de añadir, en un último esfuerzo, dos casos más, uno de los cuales se refiere a un asunto que está fuera del mandato del Grupo Especial.

4.821 Las CE sostienen que hay un desequilibrio absoluto entre esta falta de pruebas fácticas y las alegaciones sumamente amplias de los Estados Unidos. Las autoridades aduaneras de las CE se ocupan de millones de asuntos aduaneros todos los años. Si el sistema de administración aduanera de las CE fuera verdaderamente deficiente, como sostienen los Estados Unidos, abundarían las pruebas de aplicación no uniforme y los Estados Unidos deberían haber podido dar numerosos ejemplos. Sin embargo, ha sucedido lo contrario. Además, es significativo que ninguno de los numerosos terceros participantes en estas actuaciones, ni siquiera los que en principio apoyaron los argumentos de los Estados Unidos, haya dado ejemplo alguno de falta de uniformidad en el sistema de las CE.

Esta dificultad de los Estados Unidos para dar pruebas se debe esencialmente a un hecho: el sistema de las CE no es de ninguna forma tan malo como los Estados Unidos quiere hacerlo parecer sino que, por el contrario, en su conjunto garantiza un alto grado de uniformidad en todas las CE. Por este motivo, las alegaciones de los Estados Unidos deben rechazarse.

4.822 Antes de dar por terminadas las observaciones sobre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, las CE quieren hacer algunos comentarios finales sobre el tema de las sanciones. Resulta claro ahora que la alegación al respecto de los Estados Unidos es bastante distinta de las otras, pues no se refiere a la administración propiamente dicha sino a la legislación diferente que existe a nivel de los Estados miembros. Como han explicado las CE, esta alegación no debe prosperar por varias razones.

4.823 Primero, las disposiciones sobre las sanciones no están incluidas entre las leyes a las que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT. Las explicaciones que figuran en la Segunda declaración oral de los Estados Unidos de que las sanciones de alguna manera "se refieren a la clasificación" o constituirían "cargas" o "prescripciones de importación" no tienen ninguna base en el texto del párrafo 1 del artículo X del GATT.

4.824 Segundo, las disposiciones que establecen sanciones no forman parte de "la aplicación" sino que, por el contrario, son leyes de aplicación general en sí mismas. El hecho de que al mismo tiempo puedan relacionarse con las disposiciones sustantivas cuyo cumplimiento aseguran no es pertinente. Las leyes pueden complementarse muy bien entre sí, sin que por eso se conviertan en medios de "aplicación".

4.825 Por último, en la medida en que la legislación que establece sanciones tiene consecuencias sobre la aplicación uniforme de las leyes aduaneras, las CE han adoptado las disposiciones necesarias para asegurar que la legislación de los Estados miembros sobre sanciones no socave la uniformidad. En particular, el requisito de que las sanciones sean disuasorias significa que los comerciantes normalmente respetarán las disposiciones sustantivas de las leyes aduaneras; así se asegura la aplicación uniforme de esas leyes.

4.826 Los Estados Unidos, en su Segunda declaración oral, sostuvieron que "acá no se trata de" la aplicación uniforme de las leyes aduaneras de las CE, porque las leyes que establecen sanciones siguen siendo parte del "entorno jurídico" en el cual los comerciantes deciden en qué Estado miembro de la Comunidad van a hacer las importaciones. Esto es erróneo por dos motivos. El primero es que las disposiciones que establecen sanciones no están comprendidas en el párrafo 1 del artículo X del GATT. El segundo es que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo se refiere a la aplicación de las leyes, pero no da a los comerciantes el derecho a esperar que las mismas leyes se apliquen en todo el territorio de un Miembro de la OMC. En otras palabras, el "entorno jurídico" de un Miembro de la OMC que tiene una estructura federal puede incluir perfectamente bien leyes subfederales, siempre que, por supuesto, estas leyes se apliquen de acuerdo con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.827 Por consiguiente, el Grupo Especial debe desestimar la alegación de los Estados Unidos de que las CE están obligadas a armonizar las leyes que establecen sanciones de sus Estados miembros.

4.828 En lo referente al párrafo 3 b) del artículo X del GATT, las CE se ocuparán principalmente de algunos argumentos presentados por los Estados Unidos recientemente.

4.829 Primero, las CE quieren insistir en que los argumentos de los Estados Unidos sobre el párrafo 3 b) del artículo X se han orientado recientemente hacia el requisito de "regir la práctica".

4.830 Las CE no repetirán sus razonamientos sobre esta cuestión, aunque vale la pena insistir en que los Estados Unidos hacen una interpretación que no tiene en cuenta que las obligaciones del párrafo 3 b) del artículo X se aplican a tribunales de primera instancia.

4.831 Los Estados Unidos alegan que el requisito de "regir la práctica" significa "que las decisiones del tribunal de revisión deben determinar la forma en que los organismos aplican la legislación aduanera". Esta interpretación impone obligaciones de gran alcance a todos los Miembros de la OMC que no corresponden a las tradiciones jurídicas de la mayoría de ellos, ya sea que pertenezcan al sistema del "derecho civil o derecho romano-germánico" o del "*common law*". Según la interpretación de los Estados Unidos, los tribunales de primera instancia dictarán sentencias que serán vinculantes fuera de las actuaciones del caso y participarán en la elaboración de jurisprudencia o de antecedentes que constituirán una fuente general de derecho.

4.832 Este resultado sorprendente es agravado por el hecho de que, como las CE han oído durante estas deliberaciones, los Estados Unidos consideran que el término "decisión" comprende no sólo la parte dispositiva de un fallo, sino también su razonamiento. La interpretación de los Estados Unidos entrañaría un cambio radical de la naturaleza de esos tribunales.

4.833 Las CE insisten en que es necesario desestimar esta interpretación de amplio alcance del párrafo 3 b) del artículo X que hacen los Estados Unidos. Las CE han presentado al Grupo Especial su propia interpretación, que confirma claramente que el sistema judicial de las CE satisface los requisitos del párrafo 3 b) del artículo X.

4.834 Segundo, las CE subrayan que, al contrario de lo que alegan los Estados Unidos, su posición respecto de la interpretación del requisito de "regir la práctica" no se opone a su interpretación del párrafo 3 b) del artículo X del GATT.

4.835 Los Estados Unidos, en el párrafo 89 de su Segunda declaración oral, tergiversan los argumentos de las CE sobre este particular. Las CE nunca han dicho que la revisión de las decisiones de los organismos aduaneros por los tribunales de primera instancia de los Estados miembros sea un medio esencial para alcanzar el objetivo de una aplicación uniforme. Lo que las CE han sostenido es algo que no tiene nada que ver con el resumen engañoso presentado por los Estados Unidos. Las CE explicaron que las decisiones prejudiciales del Tribunal Europeo de Justicia son un instrumento importante para garantizar la aplicación uniforme de las leyes aduaneras. Esta función se cumple no porque los tribunales de primera instancia hagan el reenvío prejudicial, sino por los efectos que las resoluciones consiguientes del Tribunal Europeo de Justicia tienen para todos los tribunales de los diferentes Estados miembros.

4.836 Tercero, las CE quieren referirse a la réplica de los Estados Unidos al argumento de las CE de que la creación de un tribunal aduanero de las CE infringiría principios constitucionales fundamentales de las CE. Los Estados Unidos, en su Segunda declaración oral, alegaron que el artículo 225 A del Tratado de la CE crea condiciones que permiten establecer nuevos tribunales de las CE, como el nuevo Tribunal de la Función Pública.

4.837 Esta interpretación demuestra una falta total de comprensión del régimen jurídico de las CE por parte de los Estados Unidos.

4.838 El artículo 225 A del Tratado de la CE es simplemente una disposición de organización que permite la creación de órganos judiciales para decidir en primera instancia acerca de ciertas clases de actuaciones o procedimientos en ámbitos específicos. En otras palabras, la creación de un nuevo tribunal sólo tendría como consecuencia la redistribución del trabajo del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y de ninguna manera significa que se atribuyan nuevas competencias a los tribunales de las CE.

4.839 Por consiguiente, ningún nuevo tribunal que se estableciera en virtud del artículo 225 A del Tratado de la CE tendría derecho a considerar demandas que no fueran demandas de anulación de determinados actos de las instituciones de las CE sobre las que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas tiene jurisdicción en virtud de los artículos 225 y 230 de dicho Tratado.

Ningún tribunal de ese tipo podría revisar decisiones tomadas por las autoridades de los Estados miembros. Esta es tarea de los tribunales de los Estados miembros de las CE, de acuerdo con el sistema de atribución de competencias establecido en el Tratado de la CE, y seguirá siéndolo a menos que todos los Estados miembros ratifiquen una enmienda a este Tratado.

4.840 En consecuencia, la creación de un tribunal aduanero centralizado en las CE exigiría una reforma del Tratado de la CE.

4.841 Los Estados Unidos ofrecen amablemente a las CE otra posibilidad para satisfacer su interpretación ambiciosa de la obligación prevista en el párrafo 3 b) del artículo X: en lugar de instituir un tribunal aduanero centralizado, las CE siempre pueden establecer un organismo aduanero centralizado que, entre otras cosas, se encargue de asegurar que las decisiones de revisión de los tribunales de primera instancia "controlen" la forma en que los organismos aplican las leyes aduaneras de las CE.

4.842 Los Estados Unidos han acusado muchas veces a las CE de reclamar para sí el uso de un criterio especial en la aplicación del párrafo 3 del artículo X del GATT, acusación de la que nos hemos defendido como corresponde. A las CE les parece que, por el contrario, son los Estados Unidos los que tratan de imponer su propio criterio a todos los Miembros de la OMC, dado que su interpretación de las obligaciones contraídas en virtud del párrafo 3 b) del artículo X conduce siempre a la imposición de uno u otro organismo o institución del sistema de los Estados Unidos (ya sea un organismo aduanero centralizado y/o un tribunal aduanero centralizado). Por el contrario, la interpretación que hacen las CE del párrafo 3 b) del artículo X permite a los Estados Unidos y a otros Miembros de la OMC mantener sus propios sistemas en la medida que cumplan las obligaciones, importantes pero distintas, de aplicación uniforme y de pronta revisión de las decisiones administrativas.

H. SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

1. Introducción

4.843 La presente diferencia versa sobre dos cuestiones: *en primer lugar*, el hecho de que las CE, a través de sus 25 autoridades aduaneras distintas, no aplica la legislación aduanera comunitaria de manera uniforme; y, *en segundo lugar*, el hecho de que las CE no mantienen tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas aduaneras, como exige el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

4.844 Con respecto al párrafo 3 a) del artículo X, los Estados Unidos han demostrado que la legislación aduanera de las CE la aplican 25 autoridades aduaneras distintas e independientes. Al no existir un procedimiento o institución para impedir las divergencias entre estas autoridades o conciliarlas cuando se producen, ese sistema sencillamente no satisface la obligación de las CE de aplicación uniforme, y en realidad, ese procedimiento o institución no existe.

4.845 Las CE afirman que efectivamente existen esos procedimientos e instituciones. Sin embargo, los procedimientos e instituciones que según las CE garantizan una aplicación uniforme no hacen nada semejante. Son, o sumamente generales (por ejemplo, el deber general de cooperación que figura en el artículo 10 del Tratado de la CE), no vinculantes (por ejemplo, notas explicativas, directrices, y otros instrumentos sin fuerza obligatoria directa a los que se han referido las CE), o de carácter discrecional (por ejemplo, la posibilidad de que se remita o no una cuestión al Comité del Código Aduanero). El único procedimiento de naturaleza vinculante que según las CE garantiza una aplicación uniforme -la interposición de recursos ante los tribunales de los Estados miembros con la posibilidad de remisión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)- en realidad impone al comerciante la carga gravosa de procurar obtener la aplicación uniforme, en lugar de

mantener en primer lugar dicha aplicación uniforme, como exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Además, incluso este procedimiento no garantiza realmente una aplicación uniforme.

4.846 Las CE y distintos funcionarios comunitarios reconocen que los instrumentos que supuestamente garantizan una aplicación uniforme en realidad no lo hacen. Los comerciantes comparten esta opinión. En algunas esferas (por ejemplo, sanciones y procedimientos de auditoría) los instrumentos de aplicación difieren de un Estado miembro a otro de tal manera que la aplicación de la legislación aduanera de las CE es innegablemente no uniforme. Los Estados Unidos han justificado sus argumentos con ejemplos de casos concretos en los que Estados miembros han aplicado la legislación aduanera comunitaria de manera no uniforme y las CE no han conciliado eficaz y oportunamente las divergencias.

4.847 Además, los únicos tribunales o procedimientos que existen en las CE para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas aduaneras son los tribunales de los Estados miembros. Las decisiones de estos tribunales rigen únicamente las medidas de las autoridades aduaneras de los Estados miembros afectados. Como no existe un tribunal para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas aduaneras cuyas decisiones rijan la práctica de las autoridades aduaneras en todo el territorio de las CE, éstas no cumplen la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

4.848 Es importante tener presente que esta diferencia se deriva del hecho de que las CE son un Miembro de la OMC por derecho propio. La presente diferencia no se podría haber planteado en el marco del GATT de 1947 ya que las propias CE (a diferencia de cada uno de los Estados miembros) no eran Parte Contratante del GATT de 1947. Hay que tener en cuenta este hecho al interpretar los argumentos de las CE que van desde el momento de la presentación de la alegación de los Estados Unidos hasta las intenciones de los redactores del párrafo 3 del artículo X.

2. Las CE no refutan pruebas que respaldan las alegaciones de los Estados Unidos

4.849 Las CE afirman erróneamente que no existen pruebas para respaldar las alegaciones estadounidenses. De hecho, las alegaciones estadounidenses están ampliamente respaldadas por pruebas no refutadas de la forma de funcionamiento de los mismos "procedimientos e instituciones del sistema jurídico de las CE" que según alegan las CE "proporcionan una aplicación e interpretación uniformes del derecho comunitario"; reconocimientos efectuados por las CE y funcionarios comunitarios; declaraciones de comerciantes; y ejemplos de casos concretos de aplicación no uniforme.

a) Reconocimientos efectuados por las CE de aplicación no uniforme

4.850 Un poco torpemente las CE intentan distanciarse de sus propios reconocimientos anteriores o de funcionarios comunitarios de alto nivel. En algunos casos las CE descartan esas declaraciones por irrelevantes basándose en la teoría de que el orador no estaba refiriéndose a la compatibilidad de las medidas de las CE con el párrafo 3 del artículo X en sí mismo. A juicio de las CE, parece que un reconocimiento es una prueba pertinente únicamente si el orador saca efectivamente la conclusión jurídica de que la acción u omisión en cuestión infringe el párrafo 3 del artículo X.

4.851 De este modo, aunque el Tribunal de Cuentas de las CE formuló varias constataciones críticas que demuestran la falta de aplicación uniforme de las normas de valoración en aduana de las CE, éstas prescinden de esas constataciones porque "el Tribunal de Cuentas en modo alguno formuló juicios acerca de si las CE cumplían el párrafo 3 a) del artículo X del GATT". De igual modo, aunque en la nota explicativa que acompaña al proyecto de Código Aduanero Modernizado de las CE se observa que "determinadas infracciones pueden ser consideradas delitos graves en un Estado miembro que pueden ser sancionadas con penas de prisión, mientras que en otro Estado miembro ese mismo acto puede ser sancionado con una multa de menor cuantía, o ni siquiera esto" (Estados Unidos - Prueba

documental 32, página 13), las CE afirman que ese reconocimiento no resulta pertinente porque no se sacaba una conclusión jurídica con respecto al párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.852 Un reconocimiento realizado por las CE o por un funcionario comunitario no tiene que exponer una conclusión jurídica para que sea una prueba pertinente. Lo que importa es que las declaraciones relativas a cuestiones de hecho suelen apoyar una conclusión jurídica pertinente a la diferencia.

4.853 De manera similar, el Grupo Especial debería rechazar la sugerencia de las CE de que no preste atención a las declaraciones de distintos funcionarios simplemente porque no hablaban oficialmente en nombre de las CE. Lo que las CE no entienden sistemáticamente es que en cada uno de estos casos un funcionario de alto nivel con amplio conocimiento de la aplicación de la legislación aduanera de las CE -ya sea por ejemplo el Jefe de la Unidad de Legislación Aduanera de la Comisión o un Abogado General del Tribunal de Justicia- estaba hablando autorizadamente sobre ese tema.

4.854 Otro ejemplo de que las CE se distancian de sus propios reconocimientos es el análisis que hacen de la diferencia *CE - Trozos de pollo*. En esa diferencia, cuando convenía a sus intereses inmediatos, las CE invocaron una falta de aplicación uniforme (es decir, falta de clasificación constante del producto en cuestión en una partida arancelaria). Y ahora, cuando la falta de aplicación uniforme *no* favorece a sus fines inmediatos, se pegan a la constatación de clasificación constante del Grupo Especial y desautorizan sus declaraciones anteriores.

b) No es obligatorio mostrar una "pauta" de aplicación no uniforme

4.855 Además de distanciarse de sus propios reconocimientos, las CE responden a las pruebas de los Estados Unidos en apoyo de la alegación que han formulado al amparo del párrafo 3 a) del artículo X aduciendo que las pruebas no indican una "pauta". Sin embargo, en el párrafo 3 a) del artículo X no hay base alguna para exigir una "pauta". Tampoco está respaldada por el informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, en el que las CE se basan ampliamente.

c) La dificultad de determinadas cuestiones de práctica aduanera no refuta las pruebas de aplicación no uniforme y, de hecho, subraya el problema

4.856 Otra línea argumental de las CE afirma que los casos que según los Estados Unidos demuestran la aplicación no uniforme se refieren a asuntos "difíciles" o "complejos" de práctica aduanera y que la Aduana de los Estados Unidos también ha tropezado con problemas al enfrentarse a estos asuntos. Sin embargo, el párrafo 3 a) del artículo X no disculpa la aplicación no uniforme en casos difíciles o complejos. De hecho, son precisamente los casos difíciles o complejos los que subrayan de manera más destacada la falta de aplicación uniforme en las CE.

4.857 Por ejemplo, al enfrentarse a productos sencillos, similares a los productos básicos, el riesgo de aplicación no uniforme de las normas de clasificación parecería ser inferior que para los productos más complejos. Sin embargo, cuando se trata de productos más complejos o que incorporan nuevas tecnologías, el hecho de que las decisiones de clasificación las adopten 25 autoridades diferentes aumenta la probabilidad de aplicación divergente.

4.858 Además, lejos de apoyar el argumento de las CE, su afirmación de que la Aduana de los Estados Unidos ha tropezado con dificultades al enfrentarse a determinadas cuestiones en realidad subraya la diferencia entre la aplicación no uniforme de la legislación aduanera de las CE y la aplicación uniforme de la legislación aduanera estadounidense. Cualesquiera que sean los problemas con que pueda haber tropezado la Aduana estadounidense al ocuparse de productos difíciles de clasificar, sus decisiones se aplicaban en todo el territorio aduanero de los Estados Unidos.

d) La resolución de las divergencias entre los Estados miembros tras meses o años no refuta las pruebas de aplicación no uniforme

4.859 Otra línea argumental de las CE es que los ejemplos de aplicación no uniforme identificados por los Estados Unidos no son apropiados porque en esos casos se resolvió la falta de uniformidad. Este argumento no refuta las pruebas de aplicación no uniforme porque en cada uno de los casos existió una aplicación no uniforme y, además, se permitió que subsistiera durante meses o años.

4.860 No es posible que un Miembro cumpla la obligación de aplicación uniforme prevista en el párrafo 3 a) del artículo X siempre que acabe conciliando los casos de aplicación no uniforme, aunque para hacerlo hagan falta muchos meses o años. Tal interpretación privaría de todo sentido al párrafo 3 a) del artículo X ya que un Miembro podrían responder a cualquier caso de aplicación no uniforme simplemente diciendo que lo está resolviendo.

3. Casos recientes confirman que los procedimientos que según las CE garantizan una aplicación uniforme no lo hacen

4.861 Las CE acusan a los Estados Unidos de basar sus alegaciones en supuestos "teóricos". De la exposición que hizo un avezado especialista en legislación aduanera comunitaria, el Sr. Philippe De Baere, en un foro reciente patrocinado por la Asociación de Abogados de los Estados Unidos (ABA) se desprende con claridad una aguda refutación de esa crítica. (Estados Unidos - Prueba documental 59).

4.862 Las CE se han referido a notas explicativas y conclusiones del Comité del Código Aduanero como instrumentos destinados a garantizar la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria. De hecho, lo que indica la exposición del Sr. De Baere (página 14) es precisamente lo contrario. En algunos Estados miembros se puede dar a una nota explicativa la misma consideración que a un reglamento y darle sólo efectos prospectivos. En otros se puede considerar que una nota explicativa es una aclaración y darle efectos retrospectivos.

4.863 En concreto, el Sr. De Baere describe un caso reciente que afecta a la clasificación de videocámaras que demuestra no sólo diferencias entre los Estados miembros en el trato dado a las notas explicativas de las CE, sino también el problema de la falta de reconocimiento de información arancelaria vinculante (IAV) entre los Estados miembros, el problema de la aplicación no uniforme del derecho comunitario (apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario (CAC)) que prescribe el plazo posterior a la importación durante el cual se puede percibir una deuda aduanera, y el problema del recurso a los tribunales de los Estados miembros como un supuesto medio de asegurar la aplicación uniforme. Lo que es objeto de litigio en este caso es si determinadas videocámaras deberían clasificarse en la partida arancelaria 8525.40.91 o en la 8525.40.99. Una videocámara se puede clasificar en la primera partida si "sólo puede grabar sonidos e imágenes tomadas por la cámara de televisión". (Estados Unidos - Prueba documental 60). Las "demás" videocámaras se clasifican en la partida 8525.40.99.

4.864 En julio de 2001 la Comisión adoptó una modificación de una nota explicativa que abarca la partida 8525.40.99. La modificación disponía que se clasifican en esta partida "las videocámaras, en las que la entrada de video está tapada por una placa o por otro medio, y en las que el interfaz vídeo se puede activar posteriormente mediante un programa informático." (Estados Unidos - Prueba documental 61). La nota modificada dio lugar a que se aplicaran de manera no uniforme las normas aduaneras al menos en tres aspectos.

4.865 En primer lugar, en vista de la nota explicativa modificada, dos Estados miembros (Francia y España) llegaron a percibir derechos adicionales sobre determinadas videocámaras importadas antes de la modificación y que estaban clasificadas en la partida 8525.40.91. En cambio, otros Estados miembros (en particular el Reino Unido y Alemania) se han abstenido expresamente de dar efecto

retroactivo a las notas explicativas (Pruebas documentales 63 y 64 presentadas por los Estados Unidos).

4.866 En segundo lugar, después de la publicación de la nota modificada, en junio de 2004, la autoridad aduanera española emitió IAV que clasificaban 19 modelos de videocámaras producidos por una empresa determinada en la partida 8525.40.91 (Estados Unidos - Prueba documental 65). En julio de 2004 la filial francesa del importador español informó a la autoridad aduanera francesa de la existencia de estas IAV durante una auditoría realizada por la autoridad francesa. A pesar de esta información, en noviembre de 2005 la autoridad francesa informó a la empresa de que se proponía percibir retroactivamente derechos adicionales sobre algunas videocámaras, incluidas las cámaras, es decir, modelos abarcados por las IAV españolas.

4.867 En tercer lugar, al decidir dar efecto retroactivo a la nota explicativa de julio de 2001, la autoridad francesa siguió una interpretación de las normas comunitarias que no siguen otros Estados miembros en cuanto al plazo posterior a la importación durante el cual puede cobrarse una deuda aduanera. El apartado 3 del artículo 221 del CAC (Estados Unidos - Prueba documental 5) fija ese plazo en tres años. La única excepción a esta regla es la interposición de un recurso, que suspende el plazo de tres años. Sin embargo, a partir de una sentencia de 1998 del Tribunal de Casación francés (Estados Unidos - Prueba documental 66) relativa al anterior apartado 3 del artículo 221, la autoridad aduanera francesa ha considerado que cualquier procedimiento administrativo (*procès - verbal*) que investigue una posible infracción aduanera también suspende el plazo de tres años. En recursos interpuestos contra decisiones que siguen esa posición los litigantes no han podido convencer al tribunal francés para que remita al TJCE la cuestión de si esta posición es compatible con el apartado 3 del artículo 221 del CAC (Pruebas documentales 67 y 68 presentadas por los Estados Unidos), y de hecho, a partir de diciembre de 2002, la interpretación francesa del apartado 3 del artículo 221 se ha afianzado mediante una modificación de la legislación aduanera francesa (Estados Unidos - Prueba documental 69). La negativa incluso del tribunal francés de última instancia a remitir esta cuestión al TJCE, incluso existiendo pruebas de que otros Estados miembros interpretan de distinta manera el apartado 3 del artículo 221, es otra demostración de que la posibilidad de recurrir ante los tribunales de los Estados miembros no es el instrumento que garantiza la aplicación uniforme que alegan las CE.

4.868 Un segundo ejemplo en la exposición de De Baere refuerza el argumento de que, en contra de lo que aducen las CE, la posibilidad de recurrir las decisiones aduaneras administrativas ante los tribunales de los Estados miembros, con la posibilidad de remisión en su caso al TJCE, no garantiza la aplicación uniforme. El caso afecta a la clasificación de la consola PlayStation2 (PS2) de Sony. La autoridad aduanera del Reino Unidos emitió IAV para una mercancía y después la revocó sobre la base de un reglamento de la Comisión de las CE que adopta una clasificación diferente para la mercancía. Cuando el Tribunal de Primera Instancia de las CE anuló ese reglamento, en lugar de restablecer la IAV, la autoridad mantuvo su revocación sobre la base de una nueva evaluación de su primera decisión de clasificación. Confirmó que se mantenía la revocación de la IAV por nuevos motivos nacionales sólo unas semanas después de la decisión del TJCE sobre el asunto *Timmermans*. De no haber sido por esa medida, la PS2 habría estado sujeta de manera continuada a instrumentos de clasificación con efectos uniformes (en teoría) en toda la CE, comenzando con la emisión de la IAV del Reino Unido, siguiendo con la publicación del reglamento de la Comisión y manteniéndose después de la anulación del reglamento con el restablecimiento de la IAV. La sentencia dictada en el asunto *Timmermans* permitió al Reino Unido interrumpir esa uniformidad presumiblemente continua al mantener la revocación de la IAV basándose en motivos distintos del reglamento de la Comisión que había dado lugar a su revocación en primer término. El hecho de que el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido se negara a remitir al TJCE la cuestión de si la autoridad aduanera podía hacer esto agrava esta interrupción de la aplicación uniforme.

4.869 Un tercer caso reciente que pone en duda la eficacia de recurrir ante los tribunales de los Estados miembros con la posibilidad de remisión al TJCE como instrumento de aplicación uniforme es la sentencia del TJCE en el asunto *Intermodal Transports* (Estados Unidos - Prueba documental

71). Ese asunto afectaba a la clasificación de determinados tractores por la autoridad aduanera holandesa. En contra de lo solicitado por el importador, la autoridad había clasificado los tractores en la partida 8701 y no en la 8709. En el recurso que interpuso el importador señaló a la atención del tribunal holandés el hecho de que la autoridad aduanera finlandensa había clasificado mercancías similares en la partida 8709. A pesar de la aparente divergencia, el tribunal se abstuvo de remitir el asunto al TJCE. Cuando el recurso llegó al Tribunal Supremo de los Países Bajos, éste remitió al TJCE la cuestión de si un tribunal de un Estado Miembro debería hacer un reenvío prejudicial al TJCE cuando una parte señala a su atención la existencia de IAV contradictoria para mercancías similares que ha sido emitida por la autoridad de otro Estado miembro a favor de un tercero y el tribunal considera que la IAV clasificó erróneamente esas mercancías.

4.870 El TJCE constató que los tribunales nacionales no están obligados a remitir la cuestión. Con respecto a los tribunales que no son de última instancia, el TJCE dijo que las pruebas de IAV divergentes "no pueden restringir la libertad de apreciación que ostenta dicho órgano jurisdiccional en virtud del artículo 234 CE". (Estados Unidos - Prueba documental 71, párrafos 32 y 45). Además, dijo que incluso un tribunal de última instancia no está obligado a remitir la cuestión si, por ejemplo, considera que la clasificación correcta de las mercancías en cuestión es "tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable". (párrafos 33 y 45). También señaló que se "atribuye exclusivamente" al tribunal nacional la misión de apreciar si la correcta clasificación de las mercancías es "tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable" (párrafo 37).

4.871 Tal vez el consultor de las CE, el Sr. Vermulst, lo expresó mejor en su artículo "*EC Customs Classification Rules: Does Ice - Cream Melt*"? (Estados Unidos - Prueba documental 72, página 21) cuando dijo lo siguiente:

> El sistema de las CE con respecto a la revisión judicial en cuestiones de clasificación y, en términos más generales, todas las cuestiones aduaneras, no sólo es caro y lento para las partes afectadas sino que también puede dar lugar a sentencias incongruentes de los tribunales nacionales, al menos en primera instancia. Este problema se ve agravado por el hecho de que los tribunales de algunos Estados miembros suelen solicitar mucho menos decisiones prejudiciales que los de otros Estados miembros.

4. Es oportuno que el Grupo Especial haga uso de las facultades que le confiere el artículo 13 del ESD

4.872 En cuanto a la sugerencia de los Estados Unidos de que el Grupo Especial haga uso de las facultades que le confiere el párrafo 1 del artículo 13 del ESD, los Estados Unidos no estaban pidiendo al Grupo Especial que estableciera su presunción *prima facie*. Los Estados Unidos ya lo han hecho con las pruebas y argumentos que han presentado al Grupo Especial. Más bien estaban sugiriendo que si una interpretación de la incidencia estadística de la aplicación no uniforme de la normativa aduanera comunitaria ayudase al Grupo Especial a evaluar las pruebas, debería hacer uso de las facultades que le confiere el párrafo 1 del artículo 13 para obtener determinada información, que está exclusivamente en poder de las CE o de sus Estados miembros. Como explicó recientemente el Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Algodón americano (*upland*)*, "Cualquier sugerencia de que un grupo especial 'apoya los argumentos del reclamante', cuando meramente ejerce las facultades que le confiere el *ESD*, es totalmente inadecuada" (párrafo 7.633).

5. Las CE no refutan pruebas de que las normas de clasificación se aplican de manera no uniforme

a) La IAV no garantiza una aplicación uniforme

4.873 Con respecto a los argumentos de los Estados Unidos que demuestran que la IAV no garantiza una aplicación uniforme, las CE niegan en primer lugar que la posibilidad de que un

importador obtenga una IAV de cualquiera de las autoridades aduaneras de los 25 distintos Estados miembros, sin ningún control centralizado, alienta el uso de la IAV más ventajosa. En concreto, sostienen que el reconocimiento que hicieron en la diferencia *CE - Trozos de pollo* de que "de conformidad con la legislación comunitaria, es posible retirar una solicitud de IAV cuando el importador considera desfavorable el resultado" (párrafo 7.261) no indica que se produzca ese uso de la IAV más ventajosa. Sin embargo, ese argumento carece de lógica. En un sistema en el que la aplicación de la legislación aduanera fuera uniforme no tendría sentido que un importador retirara una solicitud de resolución de clasificación una vez conocida la decisión propuesta por la autoridad.

4.874 Las CE sostienen también que el sesgo acentuado en la emisión de IAV a favor de algunos Estados miembros no indica que se use la IAV más ventajosa, sino simplemente diferencias en distintos factores comerciales de un Estado miembro a otro. Esos factores podrían ser una explicación lógica si el sesgo no fuera tan espectacular como realmente es. Sin embargo, parece notable que en un sistema que, según las CE, no alienta el uso de la IAV más ventajosa, un solo Estado miembro (Alemania), que representa algo más del 19 por ciento del valor de las importaciones a las CE en 2004, emitiera aproximadamente el 37 por ciento de todas las IAV con fecha de inicio en 2004 mientras que, por ejemplo, otro Estado miembro (Italia), que representa aproximadamente el 11 por ciento de las importaciones, emitiera menos del 1 por ciento de todas las IAV con fecha de inicio en 2004, y un Estado miembro que representa casi el 2 por ciento de las importaciones a las CE (Grecia), emitiera una sola IAV con fecha de inicio en 2004 (y sólo 10 con fecha de inicio en 2003 y 17 con fecha de inicio en 2002).

4.875 Como ha observado el consultor de las CE, el Sr. Vermulst (Estados Unidos - Prueba documental 74, páginas 1.314 y 1.315):

> Lamentablemente, la misma disparidad con respecto al origen de las decisiones prejudiciales se pone de manifiesto en las solicitudes de IAV, siendo Alemania el país que emitió más resoluciones que ningún otro. Esa disparidad en el número de procedimientos tiene varias consecuencias lamentables. Supone que Alemania tiene demasiada influencia en esta parte del derecho aduanero. Además, la autoridad de un procedimiento no se ve reforzada si la mayoría de los Estados miembros apenas lo aplican.

4.876 Además, no es sólo la posibilidad de buscar una clasificación favorable lo que hace que la IAV sea un instrumento inadecuado para garantizar la aplicación uniforme de las normas de clasificación aduanera. La falta de una explicación narrativa en las IAV hace que sea difícil ver cómo la autoridad de un determinado Estado miembro ha llegado a la decisión de clasificación y por tanto que otras autoridades determinen si ellas deben seguir esa decisión al clasificar mercancías similares.

4.877 Otro elemento que limita la utilidad de la IAV como medio de garantizar una aplicación uniforme es el sentido tan limitado en que la IAV emitida por la autoridad de un Estado miembro rige las acciones de las autoridades de otros Estados miembros. La IAV emitida por la autoridad de un Estado miembro sólo vincula a las autoridades de otros Estados miembros en la medida en que la persona que invoca la IAV es la misma a favor de la que se emitió (el "titular") y las mercancías en cuestión son idénticas a las descritas en la IAV. Salvo en esos casos, las autoridades de un Estado miembro no están obligadas a tener en cuenta la IAV emitida por las autoridades de otro Estado miembro para mercancías similares cuando se señala a su atención esa IVA. Este problema resulta evidente en la respuesta de las CE al análisis realizado por los Estados Unidos de la diferencia *CE - Trozos de pollo*. A pesar de que las CE reconocieron que distintas oficinas de aduanas clasificaban de distinta manera mercancías idénticas, las CE dicen ahora que "las CE no han dicho en ninguna parte del informe del Grupo Especial sobre *CE - Trozos de pollo* que no se reconociera una IAV cuando la presentaba el titular".

4.878 La cuestión queda ilustrada nuevamente por el análisis de las CE del asunto relativo a los forros opacos para cortinas. En respuesta a pruebas de que la oficina de aduanas de las CE en Alemania no explicó por qué no seguía las decisiones de clasificación recogidas en IAV de otras oficinas, las CE dicen simplemente que la "IAV sólo obliga a las autoridades aduaneras frente al titular de la IAV".

4.879 Las CE intentan establecer una comparación con la práctica de la Aduana de los Estados Unidos. Sin embargo, el mismo reglamento que las CE citan como prueba de la práctica estadounidense ilustra la diferencia entre el sistema estadounidense de resoluciones anticipadas, que fomenta la uniformidad, y el sistema comunitario de IAV, que no lo hace. Así pues, el artículo 177.9(a) del reglamento (Estados Unidos - Prueba documental 129) dispone que cuando la Aduana de los Estados Unidos emite una carta de resolución con respecto a una transacción o cuestión concreta, "el principio de la resolución enunciado en la carta de resolución … podrá citarse como autoridad en la disposición de transacciones en que intervengan las mismas circunstancias". El sistema de IAV de las CE no contiene una disposición así.

b) Monitores de cristal líquido (monitores LCD)

4.880 Con respecto a las pruebas que demuestran que el asunto relativo a los monitores LCD es un ejemplo importante de la falta de aplicación uniforme de las normas comunitarias en materia de clasificación aduanera, las CE afirman primero que el reglamento de suspensión de derechos relativo a los monitores LCD con interfaz videodigital (DVI) ha resuelto la falta de uniformidad de aplicación con respecto a esta cuestión concreta de clasificación y que la comunidad comercial está satisfecha con el resultado. En realidad, esta afirmación simplemente pasa por alto el hecho de que el reglamento de suspensión se aplica únicamente a los monitores cuyo tamaño es inferior a un determinado límite, que no resuelve realmente la cuestión de clasificación subyacente y que, para los monitores cuyo tamaño supera el límite, subsiste una situación de no uniformidad con graves consecuencias financieras. Además, la sugerencia de que la comunidad comercial está satisfecha queda desmentida por declaraciones realizadas recientemente por la industria afectada por esta cuestión de clasificación (Estados Unidos - Prueba documental 75).

4.881 Las CE refutan a continuación el argumento estadounidense de que una conclusión del Comité del Código Aduanero de las CE que esté en contradicción con una nota de capítulo aplicable de la Nomenclatura Combinada disminuye en lugar de fomentar la aplicación uniforme. La conclusión del Comité indicaba que no se debe clasificar un monitor en la partida arancelaria 8471 salvo que el importador pueda demostrar que "*sólo* se utilizará con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos", mientras que la nota de capítulo aplicable indica que un monitor es clasificable en la partida 8471 si "es del tipo utilizado exclusiva *o principalmente* en un sistema automático para el tratamiento o procesamiento de datos". La conclusión del Comité ha puesto a las autoridades de los Estados miembros ante el dilema de tener que decidir qué valor dan a la conclusión en vista de una nota de capítulo aparentemente contradictoria.

4.882 Por ejemplo, en un aviso arancelario publicado en 2004 la autoridad del Reino Unido, que evidentemente seguía la conclusión del Comité del Código Aduanero, declaró que "desde octubre de 2004 los monitores LCD/TFT que incluyen un conectador DVI deberán clasificarse en el código 8528 21 90 de la Nomenclatura Combinada (NC)". (Estados Unidos - Prueba documental 76). En cambio, los Países Bajos han adoptado un enfoque muy diferente. En un decreto de julio de 2005 la autoridad aduanera holandesa explicaba que desde abril de 2004 había venido clasificando los monitores LCD con DVI en la partida arancelaria 8528 habida cuenta de un reglamento de la Comisión sobre los monitores de plasma. Dijo además que (Estados Unidos - Prueba documental 77):

> [n]o todos los Estados miembros se atienen a esta política. Esto ha dado lugar a una desviación de la corriente comercial, que es perjudicial para la competitividad de la industria neerlandesa en el sector de la logística y los servicios. Por este motivo, los

> Países Bajos están precisando más la política relativa a la clasificación de determinados monitores LCD en la Nomenclatura Combinada.

En consecuencia, en el decreto se exponen los criterios que aplican los Países Bajos a partir del 22 de noviembre de 2004.

4.883 Además, a pesar de la conclusión del Comité del Código Aduanero, también la autoridad alemana parece haber seguido clasificando los monitores LCD con interfaz DVI en la partida 8471, incluso cuando están destinados a ser utilizados principal pero no exclusivamente con ordenadores (Estados Unidos - Prueba documental 78).

4.884 Por último, las CE intentan nuevamente desviar la atención de su propia práctica a la de la Aduana estadounidense. Sin embargo, a diferencia de las CE, cuando la Aduana estadounidense consideró difícil clasificar los monitores LCD sus resoluciones seguían aplicándose en todo el territorio de los Estados Unidos.

c) Forros opacos para cortinas

4.885 De manera similar, las CE no refutan pruebas que demuestran que el caso de los forros opacos para cortinas es otro ejemplo más de la aplicación no uniforme de las normas de clasificación aduanera. Las CE ponen erróneamente en duda que los forros producidos por Rockland Industries de que se trataba en la decisión adoptada por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen, que fueron clasificados en la partida arancelaria 3921, fueran sustancialmente idénticos a los forros que otros Estados miembros habían clasificado en la partida 5907. En particular, las CE afirman que el producto presentado a la Oficina de Aduanas de Bremen no tenía tundizno mientras que el producto de que se trataba en otras decisiones de clasificación contenía tundizno. Sin embargo, como declara bajo juramento el Presidente y Director Ejecutivo de Rockland (Estados Unidos - Prueba documental 79), "Todos los productos recubiertos que produce Rockland incorporan tundizno como parte del proceso de recubrimiento. Rockland no ha fabricado nunca un producto recubierto que no incorpore tundizno … El tundizno es necesario para impedir que el tejido se pegue".

4.886 Además, en contexto parece que la Oficina de Aduanas de Bremen no constató una falta de tundizno en sí mismo sino más bien que éste no constituía una capa distinta en el producto en cuestión de Rockland. Lo que la Oficina de Aduanas de Bremen consideró importante era la existencia de plástico en el recubrimiento, con independencia de que en ese recubrimiento se mezclaran tundizno u otros elementos. Una carta de la oficina de aduanas de Hamburgo relativa a los forros de Rockland confirma que la autoridad aduanera alemana adopta este enfoque, que es contrario al adoptado por las autoridades de otros Estados miembros (Estados Unidos - Prueba documental 50).

4.887 Al haber excluido la clasificación de los forros en la partida 5907, aparentemente porque consideraba que la existencia de plástico en el recubrimiento impedía esa clasificación, la autoridad alemana recurrió después a una ayuda interpretativa que según las CE se dedujo por analogía de un reglamento de las CE que clasifica los pantalones de esquí. Aunque las CE afirman que la ayuda interpretativa "no tenía ningún carácter jurídicamente vinculante", la autoridad alemana se basó en ella de una manera que resultó ser decisiva. En todo caso, no es coherente con la aplicación uniforme que la autoridad alemana clasifique un producto textil basándose en la selección de un elemento del criterio de tres elementos para clasificar un producto de vestir cuando ningún otro Estado miembro lo ha hecho.

4.888 Por último, las CE afirman sin ningún fundamento que la densidad de la trama, el criterio clave según la ayuda interpretativa de Alemania, es pertinente para determinar si el tejido textil está presente simplemente como refuerzo. De hecho, las notas relativas al capítulo 39 del arancel no mencionan la densidad de la trama como criterio pertinente y las notas del capítulo 59 disponen expresamente que la clasificación en ese capítulo ha de determinarse *con independencia* del peso por

metro cuadrado. Las CE afirman sin ningún fundamento que la referencia al peso por metro cuadrado es distinta de la densidad de la trama. Sin embargo, en realidad el peso por metro cuadrado es necesariamente una función de la densidad de la trama.

6. Las CE no refutan pruebas de que las normas de valoración se aplican de manera no uniforme

4.889 Las CE tampoco consiguen refutar pruebas de que las normas de valoración de las CE se aplican de manera no uniforme. Además de que las CE no logran explicar convincentemente las constataciones de no uniformidad que figuran en el informe del Tribunal de Cuentas, conviene señalar otros dos aspectos.

4.890 En primer lugar, como se ha indicado anteriormente, una de las formas en que los Estados miembros aplican de manera no uniforme las normas de auditoría en aduana de las CE es mediante distintas prácticas de verificación. Las CE responden que "con arreglo al apartado 2 del artículo 76 del CAC, cada Estado miembro puede realizar todas las verificaciones necesarias para cerciorarse de la exactitud de los detalles contenidos en la declaración". Sin embargo, el hecho de que los Estados miembros "puedan" hacer esto no prueba nada. No cambia el hecho de que las prácticas de auditoría de los Estados miembros de hecho varían de manera notable de tal manera que, como dijo el Tribunal de Cuentas de las CE "las distintas autoridades aduaneras son reticentes a aceptar las decisiones de las demás" (Estados Unidos - Prueba documental 14, párrafo 37).

4.891 Las CE alegan también que la Guía de las CE sobre auditorías de aduana de las CE "garantiza una práctica uniforme en la totalidad" de las CE. Sin embargo, dado que la Guía sólo se "finalizó recientemente" y, en todo caso, dado que simplemente está "destinada a servir de ayuda a los Estados miembros" y no a imponerles una obligación, no hay fundamento alguno para esta afirmación.

4.892 En segundo lugar, con respecto al caso Reebok, las CE no refutan que se trata de un ejemplo patente de aplicación no uniforme de las normas de valoración. Las CE afirman que los recursos interpuestos por Reebok International Ltd (RIL) ante los tribunales españoles demuestran que efectivamente existe un foro al que puede recurrir este comerciante para solicitar la aplicación uniforme. Sin embargo, las CE no pueden sostener seriamente que, desde el punto de vista de la aplicación uniforme, el derecho a impugnar una diferencia ante un tribunal de un Estado miembro sea comparable al derecho de someter directamente el asunto a una institución con competencia para dar una respuesta que sea definitiva para la totalidad de las CE, derecho que no existe actualmente. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no se refiere al derecho de un comerciante a recurrir contra decisiones aduaneras desfavorables, sino a la obligación de los Miembros de aplicar leyes concretas de manera uniforme, con independencia de que los comerciantes recurran o no contra medidas administrativas en casos concretos.

4.893 Además, las CE sugieren erróneamente que como RIL retiró la reclamación ante el Defensor del Pueblo de las CE, se ha resuelto el problema de la aplicación no uniforme. Sencillamente no es así. La decisión de RIL de desistir de su reclamación no modifica la evidente prevención de la Comisión de la no uniformidad a lo largo de más de tres años. Tampoco cambia el hecho de que existe una divergencia entre la aplicación por la autoridad española de las normas de valoración comunitarias y la aplicación de esas normas por otros Estados miembros.

7. Las CE no refutan pruebas de que los regímenes aduaneros se aplican de manera no uniforme

a) Transformación bajo control aduanero

4.894 Con respecto a la transformación bajo control aduanero, los Estados Unidos han demostrado que algunos Estados miembros se plantean la evaluación de las condiciones económicas de distinta

manera. Por ejemplo, el Reino Unido hace una evaluación doble, examinando primero si la transformación bajo control aduanero permitirá crear o mantener actividades de transformación en las CE y después si perjudicará intereses esenciales de productores comunitarios de mercancías similares. En cambio, Francia aplica sólo el primer criterio.

4.895 La respuesta de las CE a estas pruebas es que los Estados Unidos interpretan equivocadamente el boletín aduanero que explica la manera en Francia aplica la evaluación de las condiciones económicas. Las CE afirman que de hecho el boletín hace referencia al daño a los productores comunitarios. Sin embargo, esa referencia es simplemente una paráfrasis introductoria de la disposición del CAC sobre la transformación bajo control aduanero. El texto dispositivo del boletín francés establece un solo criterio que se refiere únicamente a la creación o mantenimiento de actividades de transformación en las CE.

4.896 Las CE responden con un argumento circular. Dicen que "la directriz francesa … que se ha de interpretar en el contexto de la legislación comunitaria". Dicho de otro modo, aunque el texto de la directriz francesa dice claramente algo distinto del texto de la directriz del Reino Unido, las CE sostienen que de hecho no debe interpretarse que difiera de la directriz del Reino Unido porque eso sería incompatible con el derecho comunitario. Sin embargo, las CE no justifican su afirmación de que la incompatibilidad con el reglamento aplicable de las CE hace que desaparezca automáticamente la falta de uniformidad en la aplicación de ese reglamento por parte de los Estados miembros.

4.897 Las CE también critican a los Estados Unidos por no aportar "pruebas sobre la aplicación de la directriz emitida por las autoridades francesas". Sin embargo, no era necesario que los Estados Unidos lo hicieran. No se trata de un asunto en el que los Estados Unidos aleguen que la directriz francesa o la del Reino Unido sean en sí mismas incompatibles con obligaciones contraídas en el marco de la OMC y por lo tanto, según las CE, "tienen la carga de probar que la medida en cuestión tiene el contenido o significado que se alega". Por el contrario, la incompatibilidad con las obligaciones de la OMC que alegan los Estados Unidos es una falta de aplicación uniforme por parte de *las CE* y, en el caso de la transformación bajo control aduanero, la falta de uniformidad es evidente ante la existencia de directrices divergentes de dos Estados miembros distintos.

b) Sanciones

4.898 Con respecto a las sanciones, las CE afirman en primer lugar que la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es aplicable a las sanciones porque éstas "no figuran entre las cuestiones a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo X del GATT". En contra de lo que alegan las CE, los Estados Unidos no admiten este argumento. Por el contrario, los términos del párrafo 1 del artículo X abarcan claramente las disposiciones que establecen sanciones. Por ejemplo, una ley que imponga una sanción por negligencia en la declaración errónea de la clasificación o valoración de un producto sin duda "se refier[e] a la clasificación o a la valoración en aduana de productos". También se puede considerar que una sanción es "otra[] carga[] … de importación". Asimismo, si se considera que es una consecuencia de no haber realizado una declaración verdadera, por ejemplo, una sanción se refiere a "prescripciones … de importación".

4.899 Un error fundamental en el argumento de las CE es que suponen que una ley o reglamento tiene que ser o bien lo que se aplica o un medio de aplicación. Sin embargo, según las CE, no puede tener un aspecto o el otro, según la perspectiva que se tenga. Esa afirmación es infundada.

4.900 Además, aunque las CE parecen reconocer que las sanciones "garantizan la observancia del derecho comunitario", que es otra manera de decir que aplican el derecho comunitario dándole efecto, las CE siguen evitando el argumento de los Estados Unidos, que es que la diversidad de las leyes de los Estados miembros que establecen sanciones para dar efecto a la normativa aduanera comunitaria es un caso importante de aplicación no uniforme de ese derecho. En cambio, las CE responden a un argumento que los Estados Unidos no esgrimen. Sostienen que "el párrafo 3 a) del artículo X

del GATT no establece una obligación de armonizar las leyes que puedan existir dentro de un Miembro de la OMC a nivel subfederal." Los Estados Unidos no invocan una obligación tan genérica, simplemente aducen que el párrafo 3 a) del artículo X obliga a aplicar la normativa aduanera de las CE de forma uniforme. Dado que distintos Estados miembros despliegan diferentes instrumentos -es decir, distintas disposiciones que establecen sanciones - para dar efecto a la normativa aduanera de las CE, éstas no aplican ese derecho de manera uniforme.

4.901 Además, las CE se equivocan al sostener que las sanciones no están comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X porque se aplican a medidas que infringen leyes aduaneras. El párrafo 3 a) del artículo X no establece la distinción entre "medidas ilegítimas" y "comercio lícito" que proponen las CE. En todo caso, en contra de lo que afirman las CE, las disposiciones que establecen sanciones "establecen las condiciones para el comercio legal". En un sistema que se basa excesivamente en las medidas que adoptan los comerciantes en cada etapa del proceso, las disposiciones que establecen sanciones aplican la legislación aduanera, es decir, dan efecto a esas leyes, estableciendo las consecuencias en caso de infracción de dichas leyes. El problema es que en las CE esas consecuencias varían extraordinariamente de un Estado miembro a otro.

4.902 Las CE aducen subsidiariamente que si bien las disposiciones que establecen sanciones varían de un Estado miembro a otro, esto no significa que exista falta de aplicación uniforme. Para ello se basan en la tesis de que en la medida en que las leyes de los Estados miembros que establecen sanciones han de ser "disuasorias y efectivas", de acuerdo con las "directrices" del TJCE, aplican la normativa aduanera de las CE de manera uniforme, con independencia de las diferencias que existan entre ellas. La teoría de las CE parece ser que siempre que dos disposiciones diferentes que establecen sanciones aseguren el cumplimiento de la normativa aduanera de las CE, cualquier diferencia entre ellas sencillamente carece de importancia.

4.903 Sin embargo, la posibilidad de que los comerciantes cumplan generalmente las leyes aduaneras en dos Estados miembros diferentes, a pesar de diferencias en las sanciones, no viene al caso. No cambia el hecho de que un comerciante debe tener en cuenta esa diferencia, de la misma manera que tiene en cuenta la probabilidad de que una autoridad interprete las normas de clasificación o de valoración de manera favorable.

8. Los tribunales de los Estados miembros, cuyas decisiones rigen únicamente la práctica de las autoridades aduaneras de sus territorios respectivos, no cumplen la obligación establecida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994

4.904 Las CE incumplen la obligación establecida en el párrafo 3 b) del artículo X porque las decisiones de los tribunales de los Estados miembros "r[ige]n [la] práctica" sólo de un subconjunto de organismos encargados de la ejecución de la normativa aduanera de las CE y porque la fragmentación de la revisión es incompatible con el contexto del párrafo 3 b) del artículo X, que incluye el requisito de la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria.

4.905 Las CE aducen que la expresión "regirán [la] práctica" no significa nada más que "aplicar en condiciones equitativas". Sin embargo, el párrafo 3 b) del artículo X ya contiene la obligación separada de que los organismos "ejecut[en]" las decisiones de los tribunales o procedimientos de revisión. La interpretación de las CE de la expresión "regirán [la] práctica" haría que fuera superflua la obligación separada de "ejecutar".

4.906 Las decisiones de un tribunal de un Estado miembro de las CE sólo rigen la práctica de los organismos incluidos en ese Estado miembro. Incluso cuando un tribunal se enfrenta a una divergencia clara entre la práctica seguida dentro de su Estado y la de otros Estados miembros -como ocurrió en el caso *Intermodal Transport* y en los casos franceses sobre el apartado 3 del artículo 221 del CAC- no es obligatorio remitir la cuestión al TJCE. Además, como han reconocido las CE, no

existe en ellas un mecanismo para tener informados a los tribunales de las decisiones de revisión aduanera de los tribunales de otros Estados miembros y mucho menos un mecanismo para mantener informadas a las autoridades aduaneras de las decisiones de tribunales que no sean los de sus respectivos Estados miembros.

4.907 Las CE aducen también incorrectamente que el párrafo 3 b) del artículo X no debería interpretarse teniendo como contexto el párrafo 3 a) del artículo X. A su juicio, la falta de un "vínculo expreso" o un "preámbulo" significa que el primero no es contexto para el segundo, aunque las dos disposiciones figuren en apartados contiguos. Esta posición contrasta notablemente con la invocación que hacen las CE del párrafo 12 del artículo XXIV como contexto para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X, y aunque ninguna regla de interpretación de los tratados exige un "vínculo expreso" o un "preámbulo" para que una disposición sea contexto para la interpretación de otra, en realidad hay un vínculo expreso entre las disposiciones de que se trata en este caso.

4.908 El párrafo 3 a) del artículo X obliga a los Miembros a aplicar sus normas aduaneras de manera uniforme. El párrafo 3 b) del artículo X exige que las decisiones de los tribunales o procedimientos de revisión "rijan la práctica" de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. La prescripción de que "regirán [la] práctica" significa que las decisiones del tribunal de revisión deben determinar la forma en que los organismos aplican la legislación aduanera. En este sentido las dos disposiciones están relacionadas.

4.909 Las CE rechazan la tesis de que la revisión de las decisiones aduaneras por los tribunales de los Estados miembros cuyas decisiones rigen únicamente a determinados organismos es incompatible con la obligación de aplicación uniforme. Sin embargo, el argumento que esgrimen a este respecto está en contradicción con su argumento relativo al párrafo 3 a) del artículo X. Afirman que la revisión por los tribunales de los Estados miembros "es perfectamente compatible con la obligación de aplicación uniforme, *siempre que esta se garantice por otros medios que sean adecuados para este objetivo*." Sin embargo, en su argumento relativo al párrafo 3 a) del artículo X, las propias CE sostienen que la revisión por los tribunales de los Estados miembros es un medio fundamental para conseguir el objetivo de la aplicación uniforme. Ahora aducen que ese objetivo debe lograrse por "otros medios" y que la revisión por los tribunales de los Estados miembros es simplemente "compatible" con dicho objetivo.

4.910 Además, las CE pretenden erróneamente deducir del argumento estadounidense un requisito implícito para "el establecimiento de un tribunal central de primera instancia con jurisdicción en todo el territorio de cualquier Miembro de la OMC." Sin embargo, esa no es la consecuencia lógica del argumento estadounidense. La consecuencia lógica es que, de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo X, cada Miembro de la OMC ha de dar efecto en todo su territorio a las decisiones de sus tribunales de revisión. En los casos en que un Miembro tiene una administración de aduanas única puede hacer esto aunque mantenga múltiples tribunales aduaneros regionales. En las CE, tal vez de manera única, la aplicación fragmentada va acompañada de la revisión fragmentada y el resultado es incompatible con el párrafo 3 b) del artículo X.

4.911 Las CE también acusan equivocadamente a los Estados Unidos de "interpretar el párrafo 3 b) del artículo X a través del prisma de su propio sistema jurídico". Resulta irónico que inmediatamente después las CE insten a que se realice una interpretación del párrafo 3 b) del artículo X a través del espejo de su propio sistema jurídico. Afirman que el establecimiento de un tribunal aduanero de las CE, suponiendo que fuera la única manera de que las CE cumplieran la obligación que les impone el párrafo 3 b) del artículo X, sería "contrario a uno de los principios constitucionales fundamentales [de las CE]".

4.912 Por último, si bien las CE han manifestado sistemáticamente que la creación de un tribunal aduanero de las CE infringiría "principios constitucionales fundamentales", conviene señalar que el Tratado de Niza (que incorpora el artículo 225 A al Tratado de la CE) de hecho estableció las bases

para la creación de nuevos tribunales de las CE. Asimismo, su modificación del artículo 220 del Tratado de la CE prevé que "podrán agregarse al Tribunal de Primera Instancia, en las condiciones establecidas en el artículo 225 A, salas jurisdiccionales". En vista de la autorización establecida en el Tratado de Niza para crear tribunales especiales, parece que el establecimiento de un tribunal como una opción para que las CE cumplan la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X no infringiría "principios constitucionales fundamentales".

9. Declaración final

4.913 La manera en que las CE han argumentado la presente diferencia da la impresión de que las cuestiones son mucho más complicadas de lo que en realidad son. Las CE han sostenido en ocasiones que la diferencia versa sobre cuestiones filosóficas más amplias, tales como diferencias en las doctrinas que apuntalan el federalismo en los Estados Unidos y en las CE. En otras ocasiones han sostenido que la diferencia versa sobre la minucia de si una u otra autoridad aduanera de las CE decidió correctamente una cuestión concreta. Es fácil perderse en las idas y venidas entre la teoría política y los misterios técnicos, pero cuando se despejan los argumentos sobre cuestiones que no guardan relación con esta diferencia, el asunto en realidad es muy sencillo.

4.914 Con respecto al párrafo 3 a) del artículo X, las CE están obligadas a aplicar sus leyes aduaneras de manera uniforme. En la práctica, las aplican mediante 25 autoridades distintas en diferentes partes de su territorio. Las decisiones de una autoridad no obligan a ninguna de las demás autoridades. Si la autoridad comunitaria en España emite información arancelaria vinculante mediante la que se clasifica un producto de una manera determinada, la autoridad comunitaria en Alemania no está obligada a dar valor alguno a esa decisión (salvo en el caso muy limitado en que el titular invoque la IAV). Si un tercero insta a la autoridad comunitaria en Alemania a seguir la decisión de clasificación de la autoridad comunitaria en España, aunque ese tercero sea una filial del titular, la autoridad comunitaria en Alemania no está obligada a hacerlo. En resumen, una parte del mecanismo de administración de aduanas de las CE no está obligada a actuar de manera coherente con otras partes de ese mecanismo.

4.915 Las CE afirman que no es así. Declaran que existen procedimientos e instituciones para garantizar que distintas partes del mecanismo de administración de aduanas de las CE actúen de manera uniforme. Sin embargo, esta afirmación no resiste el análisis. Con una excepción (los recursos ante los tribunales de los Estados miembros), los procedimientos e instituciones son obligaciones de carácter general, orientaciones no vinculantes y mecanismos discrecionales. Este aspecto quedó bien ilustrado en la respuesta preliminar de las CE a la pregunta 164 a) del Grupo Especial. Cuando se les pidió que se refirieran a la observación de que las CE no aluden a medidas que hagan operativo el artículo 10 del Tratado de la CE -el deber general de cooperación de los Estados miembros- en el contexto de la administración de aduanas, las CE siguieron sin mencionar medidas específicas. Dijeron simplemente que el deber de cooperación establecido en el artículo 10 es una obligación jurídica vinculante que puede exigirse mediante el procedimiento por incumplimiento. Las CE afirman reiteradamente que se pueden remitir asuntos al Comité del Código Aduanero, que se pueden plantear reclamaciones por infracción, que los Estados miembros pueden dar deferencia a las decisiones de otros Estados miembros. Sin embargo, lo esencial es que todos estos denominados instrumentos son discrecionales.

4.916 Al no existir procedimientos ni instituciones que obliguen a las distintas partes del mecanismo comunitario de administración de aduanas a actuar de manera uniforme, el diseño y la estructura del sistema comunitario de administración de aduanas es tal que necesariamente da lugar a la aplicación no uniforme. Incluso el único instrumento obligatorio al que se han referido las CE no resuelve este problema. Incluso cuando se enfrenta a pruebas directas de que existe divergencia en la aplicación de la legislación aduanera en los Estados miembros, un tribunal de un Estado miembro no está obligado a remitir la cuestión al TJCE.

4.917 En la declaración inicial formulada en la presente reunión del Grupo Especial, al referirse a una cuestión relacionada con la clasificación, las CE han dicho que "[e]n cualquier momento dado, hay una sola clasificación correcta para un determinado producto". Los Estados Unidos están de acuerdo. Sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿Quién decide cuál es la clasificación correcta? En las CE lo decide cada una de las 25 distintas autoridades aduaneras, cada una sólo con respecto a un territorio determinado, y ninguna con facultades para obligar a las demás. Los procedimientos e instituciones a los que aluden las CE no modifican esta situación. Por este motivo, las CE no cumplen la obligación que les impone el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.918 Con respecto al párrafo 3 b) del artículo X, las CE están obligadas a mantener tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras y sus decisiones han de ser ejecutadas por los organismos encargados de aplicar las medidas las medidas administrativas y regirán su práctica administrativa. Los tribunales que según las CE proporcionan la revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras son los tribunales de los Estados miembros. Las decisiones de los tribunales de cada Estado miembro se aplican únicamente en el territorio de ese Estado miembro. La autoridad aduanera comunitaria en Francia no está obligada a seguir las decisiones de los tribunales del Reino Unido. De hecho, ni siquiera existe un mecanismo para dar a conocer a los tribunales de los Estados miembros las decisiones de revisión aduanera de los tribunales de otros Estados miembros.

4.919 Conforme a la estructura anterior, las decisiones de los tribunales que mantienen las CE no rigen la práctica de sus organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Las decisiones de cada tribunal rigen únicamente la práctica de un subconjunto separado de esos organismos. Esto no sólo es incompatible con el texto del párrafo 3 b) del artículo X, sino también con el contexto que ofrece el párrafo 3 a) del artículo X, que indica que la obligación de mantener tribunales de revisión debe interpretarse de manera compatible con la obligación de aplicar la legislación aduanera de manera uniforme. La única respuesta de las CE consiste en aducir que la expresión "regirán [la] práctica" realmente significa "aplicarán en condiciones equitativas". (Segunda comunicación, párrafo 230). Como esta interpretación haría que fuera superfluo el requisito separado de "ejecutar" que figura en el párrafo 3 b) del artículo X, debe ser rechazada. En consecuencia, las CE no cumplen la obligación de mantener tribunales de revisión conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 b) del artículo X.

4.920 La segunda observación que hacen los Estados Unidos para terminar es que el Grupo Especial no debe distraerse por la constante referencia de las CE a las terribles consecuencias que supuestamente se derivarían de formular las constataciones que solicitan los Estados Unidos. Las predicciones de las CE no sólo resultan improcedentes sino que no son exactas.

4.921 Los 19 primeros párrafos de la Declaración oral de las CE en esta reunión estaban dedicados a reformular incorrectamente las alegaciones de los Estados Unidos como alegaciones de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT obliga a las CE a "establecer un organismo y un tribunal aduanero centralizados". (Segunda declaración oral, párrafo 3.) Tras haber expuesto de este modo equivocadamente las alegaciones de los Estados Unidos, las CE acusaron seguidamente a éstos de tratar de modificar "una característica fundamental de las CE" y de lograr "un cambio radical en el equilibrio federal dentro de las CE".

4.922 Además, la situación catastrófica que predicen las CE no se circunscribe a su propio sistema. Sostienen que las constataciones que solicitan los Estados Unidos "harían que la intervención de entidades subfederales en la ejecución de leyes federales fuera generalmente imposible en grandes esferas de la reglamentación económica". Alegan que "[é]ste es un motivo de considerable preocupación para todos los Miembros de la OMC".

4.923 Estos temas se han repetido a lo largo de las comunicaciones e intervenciones de las CE. Las CE intentan disuadir al Grupo Especial de que saque las conclusiones obvias que imponen los

hechos y la ley recurriendo a tácticas intimidatorias. Efectivamente, las CE dicen que las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 3 del artículo X deben interpretarse teniendo en cuenta las consecuencias que tendría una interpretación determinada. Esto resultó evidente cuando las CE dijeron al mismo tiempo que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT no es pertinente para interpretar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT pero que sería pertinente para interpretar esta disposición si se constatara que el párrafo 3 a) del artículo X obliga a las CE a crear un organismo y un tribunal aduaneros centralizados. (Respuesta provisional de las CE a la pregunta provisional 155 del Grupo Especial.)

4.924 A juicio de las CE, debería rechazarse una interpretación si, por ejemplo, exigiera un cambio radical en el equilibrio federal dentro de las CE. Sin embargo, esto es simplemente invertir la cuestión. La dificultad relativa del cumplimiento no es un fundamento para adoptar o rechazar una interpretación determinada de la disposición de un tratado. Además, según el derecho internacional consuetudinario, recogido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, "[u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".

4.925 En el párrafo 12 de la declaración inicial de las CE en la presente reunión del Grupo Especial las CE recordaron a éste que "las CE son un Miembro inicial de la OMC" y que cuando las Partes Contratantes convinieron en que las CE deberían convertirse en un Miembro fundador lo hicieron conociendo el "sistema de administración y revisión judicial en materia de aduanas" de las CE. Las CE sostienen que, teniendo en cuenta este conocimiento, no se puede aducir que el sistema de las CE es incompatible con el párrafo 3 del artículo X del GATT. Sin embargo, también en este caso las CE invierten exactamente la cuestión. No se trata de que haya que considerar que los demás Miembros fundadores de la OMC aceptaron la infracción de las CE de una obligación del GATT al haber acordado que las CE debían ser un Miembro fundador. Antes bien, las CE tenían que haber considerado y aceptado las consecuencias del párrafo 3 del artículo X cuando decidieron convertirse en Miembro de la OMC por derecho propio. Ahora no pueden aducir que no le gustan esas consecuencias y por eso deberían quedar exentas de las obligaciones que aceptaron libremente.

4.926 En resumen, el panorama que describen las CE de los cambios institucionales que habría que realizar en las CE si el Grupo Especial formulara las constataciones que solicitan los Estados Unidos es pura hipérbole, sin ninguna relación con la cuestión que examinamos. El Grupo Especial debería rechazar la propuesta de las CE para interpretar el párrafo 3 del artículo X a la luz de su pronóstico de lo que sería necesario para que las CE cumplieran sus obligaciones. Tampoco debería dar crédito a la tesis de que las alegaciones de los Estados Unidos tendrán consecuencias terribles para otros Miembros de la OMC. Las alegaciones de los Estados Unidos se dirigen a un problema exclusivo de las CE, dada su combinación excepcional de aplicación y revisión geográficamente fraccionadas.

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS[164]

5.1 En esta sección se resumen los argumentos de los terceros que presentaron comunicaciones escritas y/o que formularon declaraciones orales ante el Grupo Especial. Los resúmenes se basan en los suministrados por los terceros. Cuando los terceros proporcionaron respuestas escritas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial, esas respuestas figuran en el anexo A. (Véase la lista de anexos en la página iv.)

A. COMUNICACIÓN ESCRITA DE CHINA EN CALIDAD DE TERCERO

5.2 China cree que tiene un interés sustancial en la cuestión considerada por el Grupo Especial, a saber, si las Comunidades Europeas ("CE") aplican de manera uniforme la legislación aduanera, según lo prescrito en el párrafo 3 a) del artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("el GATT de 1994"), y si las CE han cumplido los requisitos de pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras que se prevén en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

1. Cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del párrafo 3 a) del artículo X

a) El ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

5.3 El párrafo 3 a) del artículo X se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras y no a éstas últimas propiamente dichas. Las CE parecen estar interesadas en determinar si el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras tanto a nivel local como a nivel central.

5.4 Basándose en el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 y en el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Canadá - Monedas de oro*, las CE sacan la conclusión de que "el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige que las leyes aduaneras estén reguladas a nivel central en todos los Miembros de la OMC".[165]

5.5 Sin pronunciarse sobre esta afirmación de las CE, China no cree que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 y el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Canadá - Monedas de oro* confirmen el argumento de las CE.

5.6 El párrafo 12 del artículo XXIV exige que las disposiciones del GATT sean observadas tanto por el gobierno central como por las autoridades regionales o locales de las Partes Contratantes y que el gobierno central asuma la responsabilidad de asegurar la observancia de las disposiciones del GATT por parte de sus autoridades locales. Ello significa que, si el gobierno federal de una Parte Contratante tropieza con dificultades ocasionadas por sus estructuras administrativas o legales particulares para asegurar la observancia de las disposiciones del GATT por parte de sus autoridades locales, el gobierno federal debe de todos modos arbitrar las medidas razonables de que disponga para garantizar que sus autoridades locales cumplan las disposiciones del GATT de conformidad con el párrafo 12 del artículo XXIV hasta el momento en que se deroguen las disposiciones o medidas de las autoridades locales que se aparten de las disposiciones del GATT. El gobierno federal de esa Parte Contratante otorgará compensación, en relación con las disposiciones o medidas de sus autoridades

[164] En las secciones V.A a V.I, los textos de las notas son los textos originales de las notas que figuran en las comunicaciones de los terceros.

[165] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 221.

locales, por toda anulación o menoscabo de los beneficios que las disposiciones del GATT ofrecen a las demás Partes Contratantes.[166]

5.7 Según el Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Canadá - Monedas de oro*, el párrafo 12 de artículo XXIV se ocupa de las medidas adoptadas por las autoridades locales de las Partes Contratantes que tienen regímenes federales cuando aplican las leyes o reglamentaciones de nivel local.[167] La presente diferencia no se refiere a una medida tomada por una autoridad local cuando aplica sus leyes o reglamentos de nivel local, sino que se refiere a si las leyes aduaneras de las CE (es decir, leyes de nivel central) pueden ser aplicadas por los Estados miembros de las CE (es decir, por autoridades de nivel local) y si esa aplicación se hace de manera uniforme.

5.8 El Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Canadá - Monedas de oro* también sostuvo que el párrafo 12 del artículo XXIV no regula el ámbito de aplicación de las disposiciones del GATT.[168] China coincide con las CE en que "el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe la forma concreta en que los Miembros de la OMC deben aplicar sus leyes aduaneras".[169] Sin embargo, no es posible modificar la obligación de aplicar esas leyes de manera uniforme.

b) El significado de "uniforme" según se emplea en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

5.9 El sentido corriente de "*uniform*" (uniforme), según se aplica en estas circunstancias, es "*of one unchanging form, character, or kind; that is or stays the same in different places or circumstances, or at different times*" (de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o que sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas).[170]

5.10 El Grupo Especial que entendió en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* sostuvo que "la legislación aduanera no debe variar, que es preciso que todos los exportadores e importadores puedan esperar el mismo trato en momentos y lugares distintos y en comparación con otras personas. La uniformidad de la aplicación requiere que los Miembros se aseguren de que sus leyes se apliquen de forma coherente y previsible. ... El requisito de uniformidad se refiere a la aplicación uniforme de las leyes y procedimientos de aduanas a los distintos expedidores e incluso a la misma persona en momentos y lugares distintos".[171]

5.11 China considera que la forma en que, en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, el Grupo Especial interpretó la palabra "uniforme" en el sentido en que se usa en el párrafo 3 a) del artículo X coincide en el fondo con su sentido corriente.

5.12 China cree que, cuando se examina el significado de la palabra "uniforme", hay que hacer referencia a la interpretación del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros.*

---

[166] Informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Canadá - Monedas de oro*, párrafo 65.

[167] *Ibid*., párrafo 56.

[168] *Ibid*., párrafo 63.

[169] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 222.

[170] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen II, página 3488 (1993) (Estados Unidos - Prueba documental 4).

[171] Informe del Grupo Especial sobre el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, WT/DS155/R, párrafo 11.83.

c) La norma de la uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

5.13 Las CE afirman que "el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo establece normas mínimas".[172] Las CE se remiten al informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Camarones* en apoyo de su argumentación. El párrafo de dicho informe citado por las CE dice lo siguiente:

> "También es evidente para nosotros que el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 establece determinadas normas mínimas de *transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales* que, a nuestro juicio, en este caso no se han cumplido. ..."[173] (sin cursivas en el original.)

5.14 Las normas mínimas mencionadas por el Órgano de Apelación se refieren a la transparencia y la equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales y no directamente al requisito de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera.

5.15 Las CE también citan el informe del Grupo Especial sobre el asunto *Argentina - Pieles y cueros* en apoyo de su argumentación. Sin embargo, los párrafos a que se remiten las CE se ocupan del significado de la palabra "uniforme" y no tienen relación directa con la norma de la uniformidad.

2. Conclusión

5.16 China da las gracias al Grupo Especial por la oportunidad de dar a conocer sus opiniones sobre los asuntos tratados en estas actuaciones y espera que sus observaciones sean útiles.

B. COMUNICACIÓN ESCRITA DEL JAPÓN EN CALIDAD DE TERCERO

1. Introducción

5.17 El Japón participa en esta diferencia en vista de su interés sistémico en la interpretación y aplicación correcta de los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("el GATT de 1994").

2. Compatibilidad de las medidas impugnadas con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT

a) El significado de la aplicación "uniforme" prevista en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

5.18 Como premisa, el Japón está de acuerdo con los Estados Unidos en que las CE, como Parte Contratante, tienen que asegurar la aplicación uniforme de las disposiciones aduaneras en todo su territorio[174] y que, en el caso de las CE, las palabras "aplicación general" del párrafo 1 del artículo X del GATT significan la aplicación general en las CE en su totalidad.

5.19 Los Estados Unidos afirman que las "leyes aduaneras de las CE son aplicadas por 25 autoridades diferentes, entre las cuales es inevitable que haya divergencias, y las CE no prevén formas de resolver sistemáticamente esas divergencias".[175] Los Estados Unidos aclaran que esas

[172] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 231.

[173] Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Camarones*, párrafo 183.

[174] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 29 y 36.

[175] *Ibid*., párrafo 19.

divergencias y la falta de una solución sistemática afectan a la clasificación y valoración en aduana y los regímenes aduaneros de los Estados miembros de las CE.[176]

5.20 Para determinar el significado del término "uniforme" que aparece en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, primero es útil recordar la constatación hecha por el Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*. El Grupo Especial dijo que una medida de un Miembro, para ser incompatible con el párrafo 3 a) del GATT, tendría que tener una repercusión significativa en la aplicación general de las leyes de ese Miembro y no sólo en los resultados del caso aislado de que se tratara. El Grupo Especial indicó lo siguiente:

> Aunque no puede descartarse la posibilidad de que las medidas de un Miembro en un único proceso pongan de manifiesto que sus leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones administrativas no se aplican de manera uniforme, imparcial y razonable, consideramos que sería necesario que las medidas en cuestión tuviesen una repercusión significativa en la aplicación general de la ley, y no sólo en los resultados del caso aislado de que se trate. Además, consideramos improbable que se pueda llegar a una conclusión de esa naturaleza cuando las medidas adoptadas en el único caso de que se trata son, en sí mismas, compatibles con obligaciones más específicas en virtud de otros Acuerdos de la OMC.[177]

5.21 También es pertinente la constatación del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*. El Grupo Especial señaló lo siguiente:

> Consideramos que esta disposición no debe interpretarse como una disposición general contra la discriminación. No creemos que deba entenderse que exige que se dé a todos los productos un trato idéntico. Esa interpretación daría un alcance mucho más amplio a este párrafo, que se centra en la aplicación cotidiana de las leyes, normas y reglamentos aduaneros. Hay numerosas diferencias entre los productos, que pueden exigir un trato diferente, y no creemos que esta disposición deba interpretarse como una invitación general a que los grupos especiales establezcan distinciones de esa naturaleza.[178]

5.22 El Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *CEE - Manzanas de mesa* también constató, con respecto al párrafo 3 a) del artículo X del GATT, que las diferencias mínimas no representan una infracción, como se indica a continuación[179]:

> El Grupo Especial también señaló que los reglamentos de la Comisión de la CEE examinados eran directamente aplicables en cada uno de los 10 Estados miembros de una manera sustancialmente uniforme, si bien existían algunas diferencias administrativas de importancia secundaria, por ejemplo, la forma en que podían presentarse las solicitudes de certificado y el requisito de facturas pro forma.

---

[176] *Ibid*., párrafos 24 a 26 y 40 y siguientes.

[177] Informe del Grupo Especial sobre el asunto *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, WT/DS184/R, adoptado el 23 de agosto de 2001, párrafo 7.268.

[178] Informe del Grupo Especial sobre el asunto *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, WT/DS155/R y Corr.1, adoptado el 16 de febrero de 2001, párrafo 11.84.

[179] Informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa* (L/6491-36S/l04), adoptado el 22 de junio de 1989, párrafo 12.30.

El Grupo Especial estimó que esas diferencias eran mínimas y que en sí mismas no representaban una infracción del párrafo 3 del artículo X.

5.23 Teniendo en cuenta las constataciones citadas y la complejidad y el gran número de importaciones que tramitan las autoridades aduaneras, el Japón comparte la opinión de las CE de que "el párrafo 3 a) del artículo X establece normas mínimas"[180] para asegurar la aplicación imparcial de las leyes relacionadas con el comercio. El Grupo Especial debe tomar en consideración la naturaleza de la actividad aduanera que a menudo se caracteriza por la existencia de una cantidad elevada de importaciones y de numerosos productos diferentes que son difíciles de clasificar, lo que refleja hechos reales, como la velocidad del adelanto tecnológico y la consiguiente elaboración de productos nuevos. Por lo tanto, las posibles divergencias entre distintas decisiones de diferentes autoridades aduaneras no son en sí mismas incompatibles con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, como lo confirman tanto los Estados Unidos como las CE.[181] En este contexto, es necesario analizar si, como alegan los Estados Unidos, las supuestas divergencias existen y, en caso afirmativo, si esas divergencias son de un grado tal que se considerarían incompatibles con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT teniendo en cuenta las características del sistema aduanero de que se trate, en su totalidad.

b) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe los medios específicos que un Miembro debe emplear para asegurar una aplicación uniforme de las leyes aduaneras; esa uniformidad se debe determinar en función de cada sistema aduanero concreto en su totalidad

5.24 Con respecto a la alegación de los Estados Unidos de que las CE no prevén medios para resolver sistemáticamente las divergencias, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT "no se refiere a las leyes aduaneras mismas, sino sólo a su aplicación"[182] y "no prescribe los medios específicos que los Miembros deben emplear para asegurar una aplicación uniforme de las leyes aduaneras", como señalan las CE.[183] Esto coincide con la opinión del Japón ya expuesta de que de lo que se trata es de saber si los resultados del empleo de un medio específico por parte de un Miembro aseguran o no una aplicación uniforme en general.

5.25 Aunque el Japón espera que, cuando corresponda, los Miembros armonicen más su administración aduanera dentro de sus respectivos territorios en el futuro, el Japón opina que los medios específicos que asegurarán una aplicación uniforme de las leyes aduaneras son uno de los temas que se deben tratar en las negociaciones de Doha sobre facilitación del comercio, cuyo propósito es "aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del GATT de 1994 ...".

5.26 Con respecto al sistema de información arancelaria vinculante y la función del Comité del Código Aduanero, conviene recordar que el sistema y el Comité son dos medios de que disponen las CE para asegurar una aplicación uniforme en materia aduanera, pero que no son los únicos. Es necesario analizar otros medios, como las reglamentaciones sobre clasificación, las notas explicativas y las opiniones sobre el SA y las notas explicativas de las CE para determinar si el régimen aduanero de las CE en su conjunto garantiza una aplicación uniforme compatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

[180] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 231.

[181] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 25; Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 238.

[182] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 216.

[183] *Ibid*., párrafo 303.

3. Compatibilidad de las medidas impugnadas con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT

a) La medida en cuestión

5.27 Los Estados Unidos afirman que en las CE no hay tribunales o procedimientos que permitan la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras, como se dispone en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT.[184] El Japón está de acuerdo con los Estados Unidos en que, como las CE son la entidad responsable de aplicar las disposiciones sobre cuestiones aduaneras, las CE deben asegurar que haya tribunales o procedimientos para la pronta revisión y rectificación de medidas.

5.28 Los Estados Unidos alegan que en las CE no hay oportunidad de revisar y rectificar las medidas administrativas en materia aduanera porque, por ejemplo, "el Código Aduanero Comunitario no es suficientemente explícito acerca de la cuestión de los recursos"[185] y "en la realidad, los plazos fijados para los exámenes en primera instancia a cargo de las autoridades aduaneras de los Estados miembros pueden variar mucho ... salvo los tribunales de última instancia, la remisión de asuntos por parte de los tribunales de los Estados miembros [al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas] es optativa".[186]

b) La compatibilidad de la medida impugnada con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT

5.29 En relación con la alegación de los Estados Unidos de que las CE no dan oportunidades para revisar y rectificar las medidas administrativas en materia aduanera porque en ellas no hay un procedimiento común de apelación, el Japón quiere decir que, si bien un tribunal o procedimiento central probablemente aseguraría ese resultado, tampoco éste tiene por qué ser el único medio de revisión y rectificación de las CE, sobre todo si se tienen en cuenta los principios de la supremacía y de la eficacia directa del derecho comunitario, vinculante para los tribunales nacionales de los Estados miembros de las CE.[187] Como han explicado las CE, los tribunales nacionales podrían "asumen el carácter de tribunales comunitarios de competencia general".[188]

5.30 El Japón comparte la opinión de las CE de que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT "no exige que haya un tribunal o procedimiento central para apelar contra las decisiones administrativas sobre asuntos aduaneros. El GATT no impone a los Miembros de la OMC la obligación de establecer un tribunal similar al Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos."[189]

5.31 Dado que, en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, todos los Miembros están obligados a aplicar de manera uniforme todas sus disposiciones aduaneras, es razonable deducir que los *resultados* a que se llegaría a través de los tribunales o con los procedimientos de revisión pronta previstos en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT asegurarían la aplicación uniforme de las decisiones sobre cuestiones aduaneras. Sin embargo, esta sería una cuestión abarcada por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

---

[184] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, sección V, subsección D.

[185] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 141 a 143.

[186] *Ibid*., párrafos 146 a 149.

[187] Primera comunicación escrita de las CE, sección III.A.3.

[188] *Ibid*., párrafo 166.

[189] *Ibid*., párrafo 465.

5.32 Respecto de la alegación de los Estados Unidos de que "en la realidad, los plazos fijados para los exámenes en primera instancia a cargo de las autoridades aduaneras de los Estados miembros pueden variar mucho"[190], las CE dicen que "pronta" significa "sin demora" y que "demora" es "tiempo perdido por inacción o por incapacidad para actuar".[191] El Japón coincide en que el GATT no fija un plazo preciso para la revisión y rectificación "pronta" y, a esta altura, se abstiene de considerar cuestiones fácticas. Sin embargo, si dentro de las CE se encuentran dos sistemas diferentes, en uno de los cuales en un Estado miembro la revisión y la rectificación pueden tomar hasta un año, mientras que en el otro sistema, en otro Estado miembro, sólo se necesitan 30 días, parece posible sostener que el primero de esos Estados miembros, cuyo trámite de revisión y rectificación toma un año, no asegura una "pronta revisión y rectificación" dentro de un plazo razonablemente corto.

4. Conclusión

5.33 Como se indicó al comienzo, el Japón, basado en su interés sistémico en la interpretación y aplicación correcta de los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT, aguarda con sumo interés y respeto las deliberaciones del Grupo Especial sobre las cuestiones referentes a esas disposiciones planteadas por los Estados Unidos en esta diferencia.

C. COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA REPÚBLICA DE COREA EN CALIDAD DE TERCERO

1. Introducción

5.34 Corea cree que algunos aspectos del régimen aduanero de las CE no se aplican de manera uniforme, como lo exigen las disposiciones pertinentes del GATT de 1994. Sin embargo, en lugar de reiterar todos los argumentos, Corea se referirá en esta comunicación a algunas cuestiones de importancia crucial.

2. Argumentos jurídicos

a) La aplicación no uniforme por parte de las CE de las leyes y los reglamentos relativos a la clasificación y valoración en aduana y otros procedimientos infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

5.35 La cuestión fundamental en esta diferencia es si, en su conjunto, el régimen aduanero de las CE garantiza la uniformidad en la aplicación de las leyes y los reglamentos de aduanas.

5.36 Corea no discute que las leyes y los reglamentos de aduana, por su naturaleza, entrañan un margen de discrecionalidad para las autoridades aduaneras de los Miembros de la OMC.[192] Esa discrecionalidad, sin embargo, no significa que las autoridades aduaneras tengan flexibilidad para aplicar las leyes y los reglamentos de aduanas de una manera no uniforme, parcial o irrazonable. Si esto sucede, no se trata de un ejercicio de facultades discrecionales, sino simplemente del incumplimiento de la obligación explícita impuesta por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

5.37 En materia de control aduanero, las CE tienen leyes y reglamentos verdaderamente "uniformes". Sin embargo, lo que el párrafo 3 a) del artículo X exige y lo que los Estados Unidos

[190] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 146 a 149.

[191] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 459.

[192] *Ibid.*, de fecha 16 de agosto de 2005, página 60 ("Otro punto importante es que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe la forma concreta en que los Miembros de la OMC deben aplicar las leyes aduaneras de manera uniforme").

impugnan (y lo que, por consiguiente, motiva las preocupaciones de Corea en su condición de tercero) no son las leyes y los reglamentos en sí mismos. En cambio, el núcleo de la diferencia es el hecho de que esas leyes y esos reglamentos de las CE son administrados individualmente por 25 Estados miembros de manera no uniforme. Los 25 Estados miembros tienen sus propias autoridades aduaneras que aplican las leyes y los reglamentos en la forma que consideran adecuada, en lo referente a la clasificación, la valoración y otros regímenes aduaneros.

5.38 Corea reconoce debidamente y respeta las características únicas de las CE, donde los 25 Estados miembros ejercen individualmente su competencia en materia aduanera. Sin embargo, esas características únicas no deben ser invocadas como pretexto para apartarse de las normas de la OMC que son aplicables en todos los demás sentidos, entre ellas las del GATT de 1994. Como Miembro de la OMC por derecho propio, como entidad distinta de los Estados miembros que las integran, las CE tienen la obligación de asegurar que haya mecanismos que garanticen la aplicación uniforme de sus leyes y reglamentos de aduana. Incluso si todos sus Estados miembros conservan sus autoridades aduaneras propias en virtud del instrumento jurídico constitutivo, las CE por lo menos tendrían que haber sabido que las divergencias en las reglamentaciones y prácticas aduaneras serían innumerables y, por lo tanto, deberían haber establecido un mecanismo para armonizar y conciliar esos reglamentos y prácticas divergentes.

5.39 A juicio de Corea, el problema causado por el régimen aduanero único de las CE se agravará con el transcurso del tiempo. Como consecuencia del constante desarrollo tecnológico y del advenimiento de productos nuevos o híbridos, el control y la regulación en las aduanas es cada vez más difícil.

5.40 El esfuerzo de las CE por restar importancia a la confusión y las incongruencias ampliamente conocidas resulta simplemente inútil cuando se observa lo que sucede en la realidad. Corea subraya que, cuando se considera el párrafo 3 a) del artículo X, lo importante es la realidad a que tienen que hacer frente en la frontera los exportadores extranjeros. El Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Pieles y cueros* indicó que "el párrafo 3 a) del artículo X requiere un examen de los "efectos reales" que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio".[193] Con el desorden imperante ahora en las CE, simplemente es imposible que "todos los exportadores e importadores ... [esperen] el mismo trato en momentos y lugares distintos ...".[194]

5.41 En particular, en lo que se refiere a la clasificación, el llamado sistema de información arancelaria vinculante de las CE simplemente complica aún más la situación en lugar de aliviar el problema actual, a causa de que su efecto vinculante no es universal y porque existe la posibilidad de tratar de usar la IAV más ventajosa.

5.42 La existencia de 25 maneras diferentes de aplicar las leyes y los reglamentos de aduana no representa de ninguna manera "uniformidad" en el sentido corriente del término.[195] Corea cree que la "uniformidad" sólo se puede alcanzar con una forma idéntica de aplicación (o algo comparable a una aplicación idéntica) de las leyes y los reglamentos de aduana en todo el territorio de cada miembro de la OMC, en este caso, los territorios de los 25 Estados miembros de las CE.[196] Por más que las CE

[193] *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, WT/DS155/R, informe del Grupo Especial, adoptado el 16 de febrero de 2001 ("*Argentina - Pieles y cueros*"), párrafo 11.77. (sin comillas en el original)

[194] *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.83.

[195] Párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

[196] *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.83.

traten de justificarla, la aplicación de las normas aduaneras de las CE en su forma actual en realidad no garantiza ni la coherencia ni la previsibilidad en el campo de la clasificación, la valoración y otros regímenes aduaneros. Esta es precisamente la situación que quiso prevenir el Grupo Especial que entendió en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*.[197]

5.43 Los exportadores coreanos han tenido que tratar con los organismos aduaneros de cada uno de los Estados miembros en forma *ad hoc* y sin ninguna garantía de que los otros miembros de las CE llegasen a la misma conclusión o a una conclusión similar respecto de la misma cuestión o una cuestión similar.

5.44 En vista de todo lo indicado, por no aplicar las leyes y los reglamentos aduaneros de manera "uniforme", las CE no cumplen la obligación que les impone el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

b) La falta en el sistema judicial de las CE de un mecanismo viable para revisar con prontitud las medidas administrativas sobre cuestiones aduaneras representa una infracción del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994

5.45 Además, los Miembros de la OMC están obligados a conceder a un agente comercial que se considera perjudicado una revisión judicial "pronta" de la decisión administrativa adoptada por sus autoridades aduaneras. Cabe señalar que la obligación de los Miembros de la OMC no consiste simplemente en proceder a una revisión, sino a una revisión "pronta". Sin embargo, el sistema judicial de las CE dista mucho de hacer revisiones judiciales "prontas" de las decisiones y medidas administrativas adoptadas por las autoridades aduaneras de sus Estados miembros. En realidad, los agentes comerciales se ven forzados a transitar un tramo adicional de complicaciones creadas por la revisión judicial lenta y sin resultados firmes de las CE.

5.46 Las características exclusivas y la organización estructural de las CE no se deben aducir como pretexto para quebrantar disposiciones del GATT de 1994 que son aplicables en todos los demás sentidos.

5.47 Como ya se dijo, cada Estado miembro de las CE tiene su propio organismo aduanero y éstos toman decisiones administrativas con independencia unos de otros. Huelga decir que entre los distintos Estados miembros de las CE con frecuencia hay discrepancias en las decisiones administrativas adoptadas sobre cuestiones aduaneras referentes a una misma materia. Esta discrepancia es agravada por otra causa más de divergencia: la decisión administrativa es luego materia de apelación en los tribunales de los distintos Estados miembros, que tienen facultades para pronunciarse y aplicar principios jurídicos en la cuestión aduanera que es objeto de la apelación pero que también actúan con independencia respecto de los tribunales nacionales de otros miembros. De esta forma, cada Estado miembro tiene amplia latitud para hacer revisiones judiciales de las medidas administrativas sobre cuestiones aduaneras en la forma que prefiera. Por ejemplo, no hay una regla común sobre el tiempo que puede tomar la revisión.[198] El resultado es que la revisión judicial hecha en un Estado miembro habitualmente aumenta la confusión ya grande y la incongruencia ocasionadas por la aplicación no uniforme de las leyes y los reglamentos aduaneros, como se explicó en la sección 2 a) *supra*, en lugar de zanjar la cuestión de manera confiable y definitiva.

5.48 Solamente después de haberse terminado la revisión judicial de los tribunales nacionales pueden los agentes comerciales extranjeros pedir una revisión judicial por el Tribunal de las CE que

[197] *Ibid.*

[198] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, páginas 106 y 107.

tiene jurisdicción en todo el territorio de las CE: el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En síntesis, en las CE, los agentes comerciales tienen que seguir un proceso más que en otros Miembros de la OMC, que además es largo, antes de obtener una revisión judicial viable de un tribunal de las CE.

5.49 Las CE alegan que, con el Tribunal de Justicia, cumplen las obligaciones que tienen en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[199] Sin embargo, habida cuenta de que el agente comercial que se considera perjudicado sólo tiene acceso al Tribunal de Justicia cuando se ha completado la revisión judicial en los Estados miembros, ese Tribunal no es un órgano eficaz que haga una revisión "pronta" de la medida impugnada. Además, incluso cuando el Tribunal finalmente dicta su fallo, lo que viene después son básicamente más idas y venidas entre el Tribunal de las CE y los tribunales nacionales, en lugar de ponerse término de inmediato a la diferencia.[200] En esas circunstancias, Corea no cree que esta sea una revisión judicial "pronta".

5.50 Los esfuerzos de las CE por justificar la situación insistiendo en los aspectos estructurales exclusivos de las CE no pueden prosperar tampoco.[201] Como entidad económica unificada, las CE, por derecho propio, tienen tanto derechos como obligaciones en la OMC, que forman un todo único. No pueden simplemente reclamar beneficios como entidad económica unificada y al mismo tiempo desconocer las obligaciones derivadas de ello, en particular si ese desconocimiento crea una carga no razonable para sus socios comerciales.

5.51 Por los motivos señalados, Corea sostiene que las CE no ofrecen medios judiciales para hacer una revisión rápida de las medidas administrativas referentes a cuestiones aduaneras y, por ello, no cumplen la obligación que tienen en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

3. Conclusión

5.52 Por todas estas razones, las CE no cumplen la obligación que les imponen los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994. Corea respetuosamente pide que el Grupo Especial determine que el régimen aduanero de las CE descrito precedentemente es incompatible con los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994.

D. COMUNICACIÓN ESCRITA DEL TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU EN CALIDAD DE TERCERO

1. Introducción

5.53 El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu agradece la oportunidad de presentar sus opiniones acerca de esta diferencia dado su sustancial interés sistémico y comercial en el resultado de este caso y también en vista de que las Comunidades Europeas (CE) son una de las principales potencias comerciales del mundo. En este sentido, es indispensable que las CE, como Miembro de la OMC por derecho propio, cumplan las obligaciones de aplicar de manera uniforme sus leyes y reglamentos aduaneros, como se prevé en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994, sin excepciones.

[199] Primera comunicación escrita de las CE, páginas 127 y 128.

[200] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, páginas 109 y 110.

[201] *Véase*, en general, la Primera comunicación escrita de las CE, en la sección III.

2. Argumentos

5.54 El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu estima que muchos de los argumentos de las CE o bien no tienen pertinencia o son engañosos, en especial en lo relativo a la caracterización de los argumentos presentados por los Estados Unidos. Para empezar, es importante destacar que las CE mismas son Miembro pleno de la OMC y desenvuelven su actividad como tal, a pesar de tener 25 Estados miembros distintos que también son Miembros de la OMC. Por lo tanto, las CE, como todos los demás Miembros de la OMC, tienen la obligación de observar las normas establecidas en el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994.

5.55 En lo referente a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X, el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu no entiende por qué las CE se esfuerzan deliberadamente por subrayar la referencia a la *aplicación* de las leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones, como si ésa no fuera la impugnación de los Estados Unidos. No queremos discutir que el párrafo 3 a) del artículo X se refiere a la aplicación de las leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones, y no a ellos mismos, y que en el asunto *CE - Banano*, el Órgano de Apelación hizo precisamente esa distinción.[202] Sin embargo, esta interpretación del párrafo 3 a) del artículo X no refuta el hecho de que las CE, como Miembro de la OMC, tienen efectivamente la obligación de *aplicar* sus leyes y reglamentos de manera *uniforme*. Esta obligación es, a nuestro juicio, precisamente lo que los Estados Unidos sostienen que no cumplen las CE. Las CE no han presentado argumento pertinente alguno en sentido contrario.

5.56 Las CE dicen que la forma en que han aplicado sus leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones de aduana es resultado de su federalismo ejecutivo, que es un principio constitucional fundamental y legítimo de gobierno y que merece el mismo respeto que los de los Estados Unidos.[203] A nuestro juicio, ni la base constitucional de las CE ni la de los Estados Unidos parecen ser pertinentes en esta diferencia. Opinamos que los Estados Unidos no impugnan la estructura de gobierno de las CE, ni tratan de interpretar el párrafo 3 a) del artículo X de forma que exija la formación de una sola autoridad aduanera. Es verdad que la OMC no decide de qué manera un Miembro debe organizar su gobierno, así como el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no "prejuzga la cuestión de cómo están estructuradas y organizadas las autoridades aduaneras de un Miembro de la OMC", como dicen las CE.[204] Sin embargo, es igualmente cierto que la estructura y la organización del gobierno de un Miembro no deben afectar de ninguna manera a las obligaciones que ese Miembro tiene en el marco de la OMC. En definitiva, el gobierno mismo ha aceptado el conjunto de obligaciones contraídas en la OMC. Cualquiera que sea el principio constitucional de las CE, de lo que se trata en este caso es si las CE han cumplido sus obligaciones.

5.57 Las CE también suponen que hubo consideraciones políticas encaminadas a influir en las negociaciones de la Ronda de Doha sobre facilitación del comercio que influyeron en la decisión de los Estados Unidos de plantear esta diferencia.[205] Esto tampoco es pertinente, porque las suposiciones acerca de los motivos por los que un Miembro decide presentar una reclamación en la OMC para su examen por un grupo especial no son constructivas ni pertinentes para resolver la diferencia. La misión del Grupo Especial es decidir si las alegaciones de los Estados Unidos se justifican a la luz de las disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT y de los hechos.

---

[202] *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, informe del Órgano de Apelación, WT/DS27/AB/R, párrafo 200.

[203] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 204.

[204] *Id.*, párrafo 252.

[205] *Id.*, párrafos 229 y 230.

Por lo tanto, una decisión favorable a los Estados Unidos no significará que el Grupo Especial haya cedido ante consideraciones políticas, sino simplemente que las CE no han cumplido correctamente las obligaciones que les imponen las disposiciones correspondientes.

5.58 Las CE citan al Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Pieles y cueros* y al Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *CEE - Manzanas de mesa* en apoyo de su argumento de que el trato diferente y las variaciones de importancia secundaria entre los Estados miembros de las CE en la aplicación de las leyes de aduanas no constituyen una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.[206] Esta es una caracterización incorrecta de los precedentes y los hechos. El pasaje del informe sobre el asunto *Argentina - Pieles y cueros* citado en la Primera comunicación escrita de las CE habla de "numerosas diferencias entre los productos, que pueden exigir un trato diferente".[207] Esto no está en juego en la presente diferencia. Esta diferencia se refiere a la necesidad de tratar a los *mismos productos* de "manera uniforme" en diferentes puertos de entrada en diferentes momentos. Por lo tanto, la cita no apoya el argumento de las CE.

5.59 En el asunto *CEE - Manzanas de mesa*, las "diferencias administrativas de importancia secundaria" se relacionaban con la forma en que se podían solicitar certificados y el requisito de facturas pro forma. En el caso presente, el trato distinto es resultado de los procedimientos de clasificación y valoración y otros regímenes aduaneros. Las divergencias en las áreas de las clasificaciones, la valoración y los regímenes aduaneros (sobre sanciones y transformación bajo control aduanero) tienen que ver con la esencia misma de la función de las autoridades aduaneras, tienen repercusiones enormes en el comercio y no se pueden comparar con las variaciones de escasa importancia relativas a las solicitudes de certificados y el requisito de facturas pro forma mencionadas en el asunto *CEE - Manzanas de mesa*. Las clasificaciones y la valoración en aduana y los procedimientos a que se refiere este asunto no pueden ser considerados diferencias administrativas de importancia secundaria. Si así fuese, el párrafo 3 a) del artículo X no tendría ningún significado.

5.60 En lo relativo a la suficiencia de las pruebas, el argumento de las CE de que los Estados Unidos no han satisfecho la carga de la prueba es infundado. Los Estados Unidos mencionan los forros opacos para cortinas[208] y las DVI y los monitores LCD[209] como ejemplos en apoyo de su reclamación acerca de la aplicación no uniforme de las normas de clasificación aduanera de las CE. En relación con la aplicación no uniforme de las normas de las CE sobre la valoración en aduana, los Estados Unidos citan la consideración por el Tribunal de Cuentas de las CE de la cuestión de que diferentes Estados miembros han adoptado posiciones diferentes respecto de si el costo de las reparaciones de un automóvil que está cubierto por la garantía del vendedor se debe deducir o no del valor en aduana.[210] En un ejemplo, los Estados Unidos señalan que diferentes Estados miembros de las CE han adoptado posiciones distintas acerca de si un importador está vinculado con las empresas no pertenecientes a las CE que fabrican sus productos y sobre la forma en que esos productos deben ser valorados.[211] Con respecto a los regímenes aduaneros, los Estados Unidos citan una decisión del

[206] *Id*., párrafos 232 y 233.

[207] *Id*., párrafo 232.

[208] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 67.

[209] *Ibid*., párrafo 74.

[210] *Véase* Tribunal de Cuentas, Informe especial Nº 23/2000 sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (valoración en aduana), acompañado de las respuestas de la Comisión, reimpreso en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C84, párrafos 73 y 74 (14 de marzo de 2001) ("Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración") (Estados Unidos - Prueba documental 14), Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 78 a 96.

[211] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 91.

Tribunal de Justicia de las CE en el sentido de que, como cuestión de derecho comunitario, los distintos Estados miembros están facultados para imponer y de hecho imponen sanciones distintas.[212] En lo relativo al procedimiento denominado "transformación bajo control aduanero", los Estados Unidos destacan que diferentes Estados miembros aplican esas pruebas de manera distinta, lo que puede repercutir significativamente en el comercio.[213] Como demuestran los Estados Unidos, los requisitos que efectivamente deben cumplir los usuarios del "procedimiento de domiciliación" varían significativamente de un Estado miembro a otro y el proceso es considerablemente más engorroso en algunos que en otros.[214] Como se mostró antes, los Estados Unidos no se limitan a argumentar que las normas aduaneras de las CE son aplicadas por 25 autoridades diferentes entre las que es inevitable que surjan divergencias.[215] El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu cree que los Estados Unidos han satisfecho en medida suficiente la carga inicial de la prueba. Son las CE quienes hasta ahora no han podido refutar las pruebas *prima facie* presentadas por los Estados Unidos.

5.61 Por último, en lo referente al párrafo 3 b) del artículo X, esta disposición exige que los Miembros mantengan "tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados ... a *la pronta revisión y rectificación* de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras". (sin cursivas en el original) Las CE aducen que es posible cumplir esta prescripción manteniendo varios tribunales, cada uno de los cuales abarca una parte del territorio del Miembro.[216] Sin embargo, es difícil ver cómo se puede alcanzar el propósito perseguido de hacer una pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas a menos que el Miembro establezca un procedimiento en virtud del cual las decisiones y resoluciones de los tribunales prevalezcan en todo el territorio del Miembro. No está claro de qué forma las decisiones y resoluciones de un tribunal acerca de una medida administrativa relativa a una cuestión aduanera en un Estado miembro de las CE pueden ser aceptadas y ejecutadas por autoridades aduaneras de otro Estado miembro de las CE. Además, el tiempo que se necesita para obtener decisiones o resoluciones de distintos tribunales puede variar mucho de un Estado miembro a otro. Tampoco está claro cómo las CE pueden asegurar que la revisión y la rectificación sean hechas con rapidez por tribunales distintos ubicados en diferentes Estados miembros.

3. Conclusión

5.62 El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu pide respetuosamente que el Grupo Especial considere con detenimiento las opiniones expuestas.

E. DECLARACIÓN ORAL DE LA ARGENTINA EN CALIDAD DE TERCERO

1. Introducción

5.63 La atención de la Argentina se dirige a que la interpretación del párrafo 3 b) del artículo X asegure la obligación de instituir o mantener tribunales o procedimientos funcionales al objeto y fin del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994; es decir, para garantizar la "pronta" revisión y rectificación uniforme de los reglamentos comerciales en las CE en su conjunto.

---

[212] *Ibid.*, párrafo 101.

[213] *Ibid*., párrafos 106 a 108.

[214] *Ibid*., párrafos 110 a 118.

[215] *Id.*, párrafo 20.

[216] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 454.

2. El vínculo entre el apartado b) y el apartado a) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994

5.64 La Argentina coincide con los Estados Unidos en que el apartado a) del párrafo 3 del artículo X, constituye el contexto inmediato y relevante para interpretar el sentido y alcance de la obligación establecida en el apartado b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994, ya que es precisamente en el contexto de la obligación de aplicar los reglamentos comerciales de manera uniforme que se inscribe la obligación de cada Miembro de la OMC de crear o mantener tribunales o procedimientos tendientes a la pronta revisión o rectificación de los reglamentos comerciales.

5.65 La Argentina entiende que -con prescindencia del carácter diferenciado que puedan tener las obligaciones establecidas en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994- existe un claro vínculo entre ellas, toda vez que el párrafo 3 del artículo X en su conjunto debe leerse e interpretarse como un todo coherente y sin contradicciones internas, de modo que el cumplimiento de una obligación no altere o menoscabe el cumplimiento de la otra (principio de efecto útil). Se debe tener presente, además, que esa vinculación surge del hecho de que dichas obligaciones fueron consignadas por el legislador en apartados diferentes de un mismo párrafo.

5.66 En efecto, conforme al apartado a) del párrafo 3 del artículo X, todo Miembro de la OMC tiene la obligación de aplicar de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas. Adicionalmente, conforme al apartado b) del párrafo 3 del artículo X, todo Miembro de la OMC debe establecer los procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos de revisión o rectificación de las medidas administrativas, en tanto sean aplicadas de manera no uniforme, parcial o irrazonable. Por lo tanto, los procedimientos a los que se refiere el apartado b) del párrafo 3 del artículo X deben asegurar, entre otras cosas, la aplicación uniforme de los reglamentos comerciales conforme se establece en el apartado a) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994.

5.67 Por lo expuesto, la Argentina no cuestiona la naturaleza *sui generis* de las CE, ni el hecho que los Miembros de la OMC conserven cierto grado de discrecionalidad para cumplir con las obligaciones derivadas del artículo X en función del texto expreso de este artículo. Sin embargo, la Argentina entiende que ello no debería constituirse en un obstáculo para que -en tanto Miembro de la OMC distinto de los Estados que las componen-, las CE estén sujetas a las obligaciones establecidas en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X y, en cuanto tal, instituyan o mantengan tribunales o procedimientos de revisión y rectificación que aseguren la aplicación uniforme de los reglamentos comerciales en todo el territorio de las CE.

3. La "prontitud" dentro de las obligaciones del párrafo 3 b) del artículo X

5.68 La Argentina coincide con las partes en la presente diferencia en que la obligación establecida en el apartado b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no se circunscribe sólo a crear o mantener tribunales o procedimientos de revisión o rectificación de disposiciones administrativas sino que, además, dichos procedimientos deben instituirse para permitir la "*pronta*" revisión y rectificación de las decisiones de las autoridades aduaneras.

5.69 La Argentina coincide con las CE sobre el significado que le otorgan al término "pronto", en tanto su sentido indicaría que la revisión o rectificación de la decisión de la autoridad aduanera deberá producirse dentro de un "período de tiempo ... razonablemente corto".

5.70 A fin de determinar cuándo estamos en presencia de un plazo "razonablemente corto", se debe tener presente que el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 tiene como destinatarios principales a los importadores y exportadores y que su objeto y fin es preservar determinadas situaciones de competencia, conforme lo ha señalado el Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*.

5.71 Por consiguiente, la Argentina entiende que el párrafo 3 b) del artículo X se infringe cuando los procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos no permitan la revisión o rectificación de disposiciones administrativas dentro de un período "razonablemente corto" (pronto) de modo que se preserven las situaciones de competencia de los exportadores e importadores.

5.72 La Argentina destaca la importancia que, tanto los párrafos 1 y 3 del artículo X del GATT de 1994 como la jurisprudencia OMC asignan a los exportadores e importadores como principales beneficiarios de las obligaciones establecidas por este artículo.

5.73 Por lo tanto, la Argentina considera que la condición *sui generis* de las CE no debe obstar a que -en tanto Miembro de la OMC independiente de los Estados que las componen-, en virtud del párrafo 3 b) del artículo X, las Comunidades Europeas deban asegurar no solamente la existencia de mecanismos de revisión y rectificación, sino también que dicha revisión y rectificación de las decisiones de las autoridades aduaneras de los Estados miembros en las CE en su conjunto sea "pronta".

5.74 Al respecto, no obstante el grado de discrecionalidad que las CE dejan a los Estados miembros (en materia de procedimiento de revisión y rectificación de las decisiones de las autoridades aduaneras), la ausencia en la legislación comunitaria de toda referencia expresa en materia de plazos para estas revisiones y rectificaciones, hace presuponer que las CE no aseguran a los restantes Miembros de la OMC, en todos los casos, que la revisión y rectificación sea "pronta" en todo el territorio comunitario, como requiere el apartado b) del párrafo 3 del artículo X.

F. DECLARACIÓN ORAL DE AUSTRALIA EN CALIDAD DE TERCERO

5.75 Australia participó en esta diferencia como tercero en vista de sus intereses sistémicos en las cuestiones que el Grupo Especial está estudiando. Por consiguiente, Australia se abstiene, en esta etapa, de adoptar una posición con respecto a los hechos de esta diferencia particular.

5.76 Las Comunidades Europeas, en su carácter de Miembro de la OMC por derecho propio, tienen la obligación de cumplir lo establecido en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, asegurando que su sistema aduanero funcione de manera uniforme, imparcial y razonable.

5.77 Australia está de acuerdo en que el párrafo 3 a) del artículo X no tiene carácter preceptivo y tiene que ver con la aplicación de las leyes aduaneras y no con las leyes en sí mismas. Está claro que los Miembros de la OMC tienen facultades discrecionales sobre su sistema administrativo a condición de que sea uniforme, imparcial y razonable.

5.78 Australia reconoce también que, dada la naturaleza compleja de los sistemas aduaneros, pueden surgir divergencias de vez en cuando, pero éstas no deben ser tan generalizadas ni frecuentes como para que la administración aduanera sea incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X.

5.79 La cuestión que tiene que resolver el Grupo Especial es si las presuntas divergencias causadas por el sistema particular de las Comunidades Europeas (es decir, el uso de los sistemas nacionales de sus Estados miembros) entran en esa categoría.

5.80 Así como sucede con el párrafo 3 a) del artículo X, las Comunidades Europeas, en su carácter de Miembro de la OMC por derecho propio, tienen la obligación de cumplir lo que se establece en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, garantizando que haya tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras.

5.81 Australia sostendría que el párrafo 3 b) del artículo X no es preceptivo y que no contempla la obligación de tener un tribunal central. Sin embargo, Australia comparte la opinión de que las

decisiones y disposiciones de los órganos de revisión deben aplicarse de forma coherente y regir de la misma manera en todo el territorio del Miembro de la OMC. La cuestión que el Grupo Especial debe responder es si el sistema de revisión de las cuestiones aduaneras de las Comunidades Europeas da ese resultado.

5.82 Con respecto al requisito de pronta revisión, Australia consideraría deseable que los plazos de las revisiones fueran razonablemente comparables cualquiera que fuese el lugar en que se solicitase la revisión en el territorio de un Miembro. Esto evitaría, entre otras cosas, que los agentes comerciales pidiesen que la revisión se hiciera en el tribunal en el que esperasen un resultado más rápido y contribuiría a conseguir un enfoque uniforme (de manera coherente con el párrafo 3 a) del artículo X).

G. DECLARACIÓN ORAL DE CHINA EN CALIDAD DE TERCERO

1. El ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

5.83 China considera que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras y no a estas últimas propiamente dichas. Las CE parecen estar interesadas en determinar si el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras tanto a nivel local como a nivel central.

5.84 Basándose en el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 y en el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Canadá - Monedas de oro*, las CE sacan la conclusión de que "el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige que las leyes aduaneras estén reguladas a nivel central en todos los Miembros de la OMC".

5.85 Sin pronunciarse sobre esta afirmación de las CE, China no cree que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 y el informe del Grupo Especial del GATT sobre el asunto *Canadá - Monedas de oro* confirmen el argumento de las CE.

5.86 El párrafo 12 del artículo XXIV exige que las disposiciones del GATT sean observadas tanto por el gobierno central como por las autoridades regionales o locales de las Partes Contratantes y que el gobierno central asuma la responsabilidad de asegurar la observancia de las disposiciones del GATT por parte de sus autoridades locales. Ello significa que, si el gobierno federal de una Parte Contratante tropieza con dificultades ocasionadas por sus estructuras administrativas o legales particulares para asegurar la observancia de las disposiciones del GATT por parte de sus autoridades locales, el gobierno federal debe de todos modos arbitrar las medidas razonables de que disponga para garantizar que sus autoridades locales cumplan las disposiciones del GATT de conformidad con el párrafo 12 del artículo XXIV hasta el momento en que se deroguen las disposiciones o medidas de las autoridades locales que se aparten de las disposiciones del GATT. El gobierno federal de esa Parte Contratante otorgará compensación, en relación con las disposiciones o medidas de sus autoridades locales, por toda anulación o menoscabo de los beneficios que las disposiciones del GATT ofrecen a las demás Partes Contratantes.

5.87 Según el Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Canadá - Monedas de oro*, el párrafo 12 de artículo XXIV se ocupa de las medidas adoptadas por las autoridades locales de las Partes Contratantes que tienen regímenes federales cuando aplican las leyes o reglamentaciones de nivel local. La presente diferencia no se refiere a una medida tomada por una autoridad local cuando aplica sus leyes o reglamentos de nivel local, sino que se refiere a si las leyes aduaneras de las CE (es decir, leyes de nivel central) pueden ser aplicadas por los Estados miembros de las CE (es decir, por autoridades de nivel local) y si esa aplicación se hace de manera uniforme.

5.88 El Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Canadá - Monedas de oro* también sostuvo que el párrafo 12 del artículo XXIV no regula el ámbito de aplicación de las disposiciones del GATT. China coincide con las CE en que "el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe la

forma concreta en que los Miembros de la OMC deben aplicar sus leyes aduaneras". Sin embargo, no es posible modificar la obligación de aplicar esas leyes de manera uniforme.

2. El significado de "uniforme" según se emplea en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

5.89 El sentido corriente de "*uniform*" (uniforme), según se aplica en estas circunstancias, es "*of one unchanging form, character, or kind; that is or stays the same in different places or circumstances, or at different times*" (de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o que sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas).[217]

5.90 El Grupo Especial que entendió en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* sostuvo que "la legislación aduanera no debe variar, que es preciso que todos los exportadores e importadores puedan esperar el mismo trato en momentos y lugares distintos y en comparación con otras personas. La uniformidad de la aplicación requiere que los Miembros se aseguren de que sus leyes se apliquen de forma coherente y previsible. ... El requisito de uniformidad se refiere a la aplicación uniforme de las leyes y procedimientos de aduanas a los distintos expedidores e incluso a la misma persona en momentos y lugares distintos".

5.91 China considera que la forma en que, en el asunto *Argentina - Pieles y cueros,* el Grupo Especial interpretó la palabra "uniforme" en el sentido en que se usa en el párrafo 3 a) del artículo X coincide en el fondo con su sentido corriente.

5.92 China cree que, cuando se examina el significado de la palabra "uniforme", hay que hacer referencia a la interpretación del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros.*

3. La norma de la uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

5.93 Las CE afirman que "el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo establece normas mínimas". Las CE se remiten al informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Camarones* en apoyo de su argumentación. El párrafo de dicho informe citado por las CE dice lo siguiente:

> "También es evidente para nosotros que el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 establece determinadas normas mínimas de *transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales* que, a nuestro juicio, en este caso no se han cumplido." (sin cursivas en el original)

5.94 Las normas mínimas mencionadas por el Órgano de Apelación se refieren a la transparencia y la equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales y no directamente al requisito de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera.

5.95 Las CE también citan el informe del Grupo Especial sobre el asunto *Argentina - Pieles y cueros* en apoyo de su argumentación. Sin embargo, los párrafos a que se remiten las CE se ocupan del significado de la palabra "uniforme" y no tienen relación directa con la norma de la uniformidad.

---

[217] The *New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen II, página 3488 (1993) (Estados Unidos - Prueba documental 4).

H. DECLARACIÓN ORAL DEL JAPÓN EN CALIDAD DE TERCERO

1. Argumentos sobre la compatibilidad de las medidas impugnadas con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT

5.96 Como fundamento de nuestro argumento de que "el párrafo 3 a) del artículo X establece normas mínimas"[218], el Japón desea añadir la conclusión del Órgano de Apelación en el caso *Estados Unidos - Camarones* de que "[e]s evidente para nosotros que el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 establece determinadas normas mínimas de transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales".[219] China ha señalado que esta conclusión no se refiere directamente al requisito de uniformidad. El párrafo 3 a) del artículo X no estipula la "transparencia y equidad procesal" de la administración sino, más bien, la "manera uniforme, imparcial y razonable" en que deberán aplicarse las reglamentaciones comerciales. Sin embargo, el Órgano de Apelación, en el asunto *Estados Unidos - Camarones*, definió los requisitos previstos en el párrafo 3 a) del artículo X como "transparencia y equidad procesal". De hecho esto es evidente a partir del significado de los términos "uniforme", "transparente" y "equitativo". La "uniformidad" aseguraría que la aplicación se hiciera de "*one unchanging form, character, or kind; that is or stays the same in different places or circumstances, or at different times*" (la misma forma, naturaleza o tipo; que es o sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas).[220] Una administración "equitativa" se aplicaría de manera "*just, unbiased, equitable, impartial* ..." (justa, objetiva, equilibrada, imparcial ...).[221] Como la "*transparency*" (transparencia) es la "*quality or condition of being transparent*" (la cualidad o condición de ser transparente)[222], una administración "*transparent*" (transparente) sería "*easily discerned; evident; ... open*" (fácilmente percibida; evidente; ... abierta), así como "*extrapolated from every occurrence of the phenomenon; to which there are no exceptions*" (extrapolada a partir de todas las ocurrencias del fenómeno; sin ninguna excepción)[223], "*not subject to ... more than one interpretation*" (sujeta a una sola interpretación).[224] Una aplicación de las reglamentaciones que careciera de "uniformidad" sería, en términos generales, injusta, subjetiva, no equilibrada, parcial y opaca; en otras palabras, injusta y carente de transparencia. Por consiguiente, la uniformidad es un componente de una aplicación transparente y equitativa, o de la equidad procesal, y la conclusión del Órgano de Apelación señalada *supra* sería pertinente en la interpretación de la uniformidad que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

5.97 El Japón coincide con la declaración del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, que señaló correctamente que, si bien el Grupo Especial que se ocupó del caso

---

[218] Comunicación del Japón en calidad de tercero, párrafo 8.

[219] Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón*, WT/DS58/AB/R, adoptado el 6 de noviembre de 1998, párrafo 183.

[220] Informe del Grupo Especial sobre el asunto *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, WT/DS155/R y Corr.1, adoptado el 16 de febrero de 2001, párrafo 11.80 (donde se cita *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen II, página 3.488 (1993)).

[221] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 907 (1993).

[222] *Ibid.*, página 3373.

[223] *Ibid*.

[224] *Merriam-Webster Online Thesaurus*: http://www.m-w.com/cgi-bin/thesaurus?book=Thesaurus&va=transparent&x=13&y=16

Argentina - Pieles y cueros determinó que "hay numerosas diferencias entre los productos, que pueden exigir un trato diferente, ... [l]a presente diferencia se refiere a la necesidad de tratar a los mismos productos de 'manera ... uniforme'".[225] Sin embargo, consideramos que la conclusión del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* sigue siendo pertinente en este caso. Demuestra que el alcance y el nivel de la "uniformidad" que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT que, según el Grupo Especial que entendió en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* es una aplicación de "la misma forma, naturaleza o tipo; que es o sigue siendo la misma en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas"[226], están sujetos a interpretación. También muestra que el párrafo 3 a) del artículo X "se centra en la aplicación cotidiana de las leyes, normas y reglamentos aduaneros"[227] y proporciona un contexto para la interpretación de esta disposición.

5.98 El Japón está de acuerdo con los Estados Unidos y otros terceros en que las CE como Parte Contratante son responsables de asegurar una aplicación uniforme de las normas aduaneras en todo su territorio, con independencia de la cantidad de autoridades aduaneras que existan en él. El Japón también está de acuerdo en que es deseable que exista dentro del gobierno, un servicio central encargado principalmente de interpretar reglamentos comerciales, como los relativos a la clasificación aduanera o la valoración en aduana. Sin embargo, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prescribe un medio específico que un Miembro deba utilizar para asegurar una aplicación uniforme de las leyes aduaneras; ese es uno de los asuntos que deben abordarse en las negociaciones de Doha sobre facilitación del comercio, que tienen el objetivo de "aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del GATT de 1994 ...".[228] El Japón quiere llamar la atención del Grupo Especial sobre el hecho de que, como ese medio no está previsto específicamente en el GATT actual, el Japón junto con Mongolia, el Pakistán, el Perú y el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, hizo una propuesta sobre este tema.[229] Por consiguiente, el asunto que está a consideración del Grupo Especial es si la aplicación de los reglamentos aduaneros de las CE en su totalidad es una aplicación uniforme compatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT y no si las CE proporcionan un medio específico para alcanzar la uniformidad.

5.99 Además, si hay divergencias debidas a las características particulares del sistema aduanero en su conjunto, surge la cuestión de si el "grado" de esas divergencias es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Sobre este punto el Japón recuerda la constatación del Grupo Especial que entendió en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, que sostuvo que para que las medidas de un Miembro fuesen incompatibles con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT "sería necesario que las medidas en cuestión tuviesen una repercusión significativa en la aplicación general de la ley" de ese Miembro, a diferencia de una mera repercusión "sólo en los resultados del caso aislado de que se trate".[230] Además, el Grupo Especial que se ocupó del caso *Argentina - Pieles y cueros* señaló que "el párrafo 3 a) del artículo X requiere un examen de los efectos reales que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio" y que el examen de esos efectos reales "puede suponer un examen de la existencia de posibles repercusiones

[225] Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, comunicación escrita en calidad de tercero, párrafo 6.

[226] *Supra*, nota 100.

[227] *Supra*, nota 100, párrafo 11.84.

[228] WT/L/579, anexo D, párrafo 1.

[229] TN/TF/W/8, página 5, TN/TF/W/8/Add.1.

[230] Informe del Grupo Especial sobre el asunto *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, WT/DS184/R, adoptado el 23 de agosto de 2001 y modificado por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS184/AB/R, párrafo 7.268.

en la situación de competencia".[231] Por consiguiente, si el Grupo Especial considera que los casos a los que hacen referencia los Estados Unidos son divergencias, es necesario profundizar el examen para determinar si la aplicación que hacen las CE carece de uniformidad hasta el "grado" en que sería incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Esa determinación debe basarse en la consideración de si los casos mencionados por los Estados Unidos son resultados aislados de la aplicación de las leyes aduaneras de las CE o pruebas de una falta de uniformidad en la aplicación general de los reglamentos aduaneros de las CE que puede tener una repercusión importante en la situación en materia de competencia.

I. DECLARACIÓN ORAL DE LA REPÚBLICA DE COREA EN CALIDAD DE TERCERO

5.100 Corea apoya los argumentos presentados por los Estados Unidos en su Primera comunicación escrita, de fecha 12 de julio de 2005. Corea cree que determinados aspectos del régimen aduanero de las CE en general y de algunas leyes y reglamentos en particular son incompatibles con las disposiciones pertinentes del GATT de 1994. Teniendo esto en cuenta, Corea expone su posición sobre los siguientes asuntos.

1. La administración no uniforme por parte de las CE de las leyes y reglamentos sobre la clasificación aduanera, la valoración en aduana y otros procedimientos infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

5.101 En su carácter de Miembro de la OMC por derecho propio, las CE han contraído la obligación de administrar sus leyes y reglamentos aduaneros de manera "uniforme, imparcial y razonable" de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, las CE no cumplen esta importante obligación. Las leyes y los reglamentos de las CE son aplicados de manera individual y separada por los 25 Estados miembros de manera no uniforme. En cuanto a la clasificación, la valoración y los regímenes aduaneros, los 25 Estados Miembros tienen sus propias autoridades aduaneras que aplican las leyes y los reglamentos aduaneros de la manera que consideran apropiada. Los exportadores coreanos, como otros de países que no forman parte de las CE, tienen que tratar con estas 25 autoridades aduaneras diferentes y sus procedimientos distintos para la entrada en las CE de los mismos productos o de productos similares.

5.102 La existencia de 25 maneras diferentes de aplicar las normas aduaneras no representa de ninguna manera "uniformidad" en el sentido corriente del término. Corea cree que la "uniformidad" sólo se puede alcanzar con una forma idéntica de aplicación (o algo comparable a una aplicación idéntica) de las leyes y los reglamentos de aduana en todo el territorio de cada Miembro de la OMC, en este caso los territorios de los 25 Estados miembros de las CE. Por más que las CE traten de justificarla, la aplicación de las normas aduaneras de las CE, en su forma actual en realidad no garantiza ni la coherencia ni la previsibilidad en el campo de la clasificación, la valoración y otros regímenes aduaneros. Esta es precisamente la situación que quiso prevenir el Grupo Especial que entendió en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*.

5.103 Corea reconoce debidamente y respeta las características únicas de las CE, donde los 25 Estados miembros ejercen individualmente su competencia en materia aduanera. Sin embargo, esas características únicas no deben ser invocadas como pretexto para apartarse de las normas de la OMC que son aplicables en todos los demás sentidos, entre ellas las del GATT de 1994. En vista de todo lo indicado, por no aplicar las leyes y los reglamentos aduaneros de manera "uniforme", las CE no cumplen la obligación que les impone el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

[231] *Supra*, nota 3, párrafo 11.77.

2. La falta en el sistema judicial de las CE de un mecanismo viable para revisar con prontitud las medidas administrativas sobre cuestiones aduaneras representa una infracción del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994

5.104 Además, cada Estado miembro tiene amplia latitud para hacer revisiones judiciales de las medidas administrativas sobre cuestiones aduaneras en la forma que prefiera. Por ejemplo, no hay una regla común sobre el tiempo que puede tomar la revisión. El resultado es que la variedad de enfoques sobre la revisión judicial que hay en los Estados miembros aumenta la confusión ya generalizada y la incongruencia ocasionadas por la aplicación no uniforme por los organismos correspondientes de las leyes y los reglamentos aduaneros, como se explicó antes.

5.105 Solamente después de haberse terminado la revisión judicial larga, imprevisible e incoherente de los tribunales nacionales pueden los agentes comerciales extranjeros pedir una revisión judicial por el Tribunal de las CE que tiene jurisdicción en todo el territorio de las CE: el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Las CE alegan que, con el Tribunal de Justicia, cumplen las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Habida cuenta de que el agente comercial que se considera perjudicado sólo tiene acceso al Tribunal de Justicia cuando se ha completado la revisión judicial a nivel de los Estados miembros, ese Tribunal no es un órgano eficaz para hacer una revisión "pronta" de la medida impugnada.

5.106 Para asegurar una revisión pronta de las decisiones sobre cuestiones aduaneras, las CE tendrían que haber instituido y mantenido un órgano judicial con jurisdicción en todo el territorio de las CE. Por el contrario, las CE no ofrecen medios judiciales para hacer una pronta revisión de las medidas administrativas referentes a cuestiones aduaneras y, por ello, no cumplen la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

VI. REEXAMEN INTERMEDIO

6.1 El 10 de febrero de 2006 se dio traslado del informe provisional del Grupo Especial a las partes. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD y el párrafo 16 del Procedimiento de trabajo del Grupo Especial, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas presentaron por escrito solicitudes de reexamen del informe provisional el 24 de febrero de 2006. El 3 de marzo de 2006, los Estados Unidos y las Comunidades Europeas presentaron observaciones escritas adicionales sobre las observaciones que habían presentado el 24 de febrero de 2006.

6.2 De conformidad con el párrafo 3 del artículo 15 del ESD, esta sección del informe del Grupo Especial contiene la respuesta del Grupo Especial a las observaciones formuladas por las partes en relación con el informe provisional, en la medida en que es necesaria una explicación. Como se indica más adelante, el Grupo Especial ha modificado aspectos de su informe a la luz de las observaciones de las partes cuando lo ha considerado conveniente. Asimismo, ha efectuado determinadas revisiones y correcciones de carácter editorial para mayor claridad y precisión. Las referencias que se hacen en la sección VI a secciones, números de párrafos y notas corresponden al informe provisional.

A. NUEVAS PRUEBAS A QUE SE HA HECHO REFERENCIA EN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS DURANTE LA ETAPA INTERMEDIA DE REEXAMEN

6.3 En sus observaciones sobre el informe provisional, las **Comunidades Europeas** se refirieron a varias pruebas documentales en las que no se habían basado anteriormente en el procedimiento del Grupo Especial. En particular, las Comunidades Europeas se refirieron a lo siguiente: a) el Reglamento (CE) Nº 2171/2005 de la Comisión, relativo a la clasificación arancelaria de ciertos monitores LCD (CE - Prueba documental 167); b) el mensaje transmitido por fax del Ministerio de Hacienda de los Países Bajos, Telefaxbericht BCPP 2006/389 M (CE - Prueba documental 168); c) un extracto de la base de datos EBTI/IAV relativo a la IAV DE M/2975/05-1, que ya no está en

vigor (CE - Prueba documental 169); d) las respuestas de las autoridades aduaneras de los Estados miembros con relación a la supuesta prescripción de aprobación previa para utilizar una base de valoración distinta de la última venta (CE - Prueba documental 170); e) el Decreto Presidencial Nº 203 de Grecia (CE - Prueba documental 171); y f) el Dictamen 1/94 del TJCE con respecto a la adhesión a la OMC (CE - Prueba documental 172).

6.4 Los **Estados Unidos** se opusieron a que las Comunidades Europeas hicieran referencia a las Pruebas documentales 167 a 172 presentadas por las CE y se basaran en esas pruebas. Más concretamente, los Estados Unidos sostuvieron que la introducción de nuevas pruebas durante la etapa intermedia de reexamen del procedimiento del Grupo Especial es totalmente inadmisible y que el Grupo Especial no debía tomar en consideración esas pruebas. En apoyo de su argumentación los Estados Unidos invocaron la decisión del Órgano de Apelación en el asunto *CE - Sardinas* que, según adujeron los Estados Unidos, respalda la tesis de que, de conformidad con el artículo 15 del ESD, la etapa intermedia de reexamen no puede incluir una evaluación de nuevas pruebas a las que la otra parte no ha respondido.

6.5 El **Grupo Especial** observa que el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, que rige la etapa intermedia de reexamen del procedimiento de los grupos especiales, establece en la parte pertinente lo siguiente:

> "Una vez expirado el plazo establecido para recibir las observaciones de las partes en la diferencia, el grupo especial dará traslado a las mismas de un informe provisional en el que figurarán tanto los capítulos expositivos como las constataciones y conclusiones del grupo especial. Dentro de un plazo fijado por él, cualquiera de las partes podrá presentar por escrito una petición de que el grupo especial reexamine aspectos concretos del informe provisional antes de la distribución del informe definitivo a los Miembros. ..."

6.6 A juicio del Grupo Especial, el párrafo 2 del artículo 15 del ESD indica de forma clara que el objetivo de la etapa intermedia de reexamen del procedimiento del Grupo Especial es reexaminar "aspectos concretos" del informe provisional del cual se dio traslado a las partes el 10 de febrero de 2006. Consideramos que los términos del párrafo 2 del artículo 15 nos impiden tomar en consideración pruebas que no constan en el informe provisional.[232] Por lo tanto, el Grupo Especial se abstiene de tomar en consideración las Pruebas documentales 167 a 172 presentadas por las CE.

B. MANDATO DEL GRUPO ESPECIAL

1. Manera en que se lleva a cabo la aplicación

6.7 Los **Estados Unidos** solicitaron al Grupo Especial que reconsiderara la constatación que formuló en la sección VII.B de que la "medida en litigio" a los efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es la "manera en que se lleva a cabo la aplicación" de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.

6.8 Las **Comunidades Europeas** sostuvieron que estaban de acuerdo con el análisis a este respecto que se había hecho el Grupo Especial y que figura en la sección VII.B, y que, por lo tanto, la solicitud de los Estados Unidos debía rechazarse.

---

[232] Encontramos respaldo para esta opinión en el informe del Órgano de Apelación, *CE - Sardinas*, párrafo 301.

6.9 El **Grupo Especial** ha tomado buena nota de los argumentos presentados por los Estados Unidos, pero ha decidido no aceptar su solicitud. El Grupo Especial explicó plenamente el razonamiento en que se basó para concluir, en los párrafos 7.18 a 7.22, que, a los efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, la medida en litigio es la manera de aplicación supuestamente no uniforme, parcial y/o no razonable. Los Estados Unidos no han convencido al Grupo Especial de que su razonamiento deba revisarse y, por consiguiente, el Grupo Especial ha mantenido estos párrafos en su informe definitivo.

2. Impugnación del sistema de las CE en su conjunto/en general

6.10 Los **Estados Unidos** pusieron en entredicho que el Grupo Especial hubiera examinado debidamente en su conjunto en la sección VII.B la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, cuando concluyó que su mandato no abarcaba la impugnación por los Estados Unidos del sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto o en general. Los Estados Unidos sostuvieron además que una alegación de que un Miembro está infringiendo una obligación en el marco de la OMC formulada en una solicitud de establecimiento de un grupo especial es suficiente para informar a ese Miembro de la obligación que supuestamente se ha infringido y de la medida en litigio. Según los Estados Unidos, no es necesario identificar concretamente si la impugnación es "en general" o "en su conjunto" o si, por el contrario, la impugnación se refiere a casos concretos de infracción.

6.11 Las **Comunidades Europeas** sostuvieron que la solicitud de los Estados Unidos de que se reconsiderara el análisis formulado por el Grupo Especial en la sección VII.B debía rechazarse. Según las Comunidades Europeas, el enfoque del Grupo Especial es compatible con la jurisprudencia pertinente del Órgano de Apelación, que exige simplemente que en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial se examine el conjunto de la solicitud.

6.12 El **Grupo Especial** observa que, en los párrafos 7.24 a 7.32 y 7.42 a 7.46, el Grupo Especial se refirió a todos los aspectos pertinentes de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos y examinó cada uno de ellos. Además, en el párrafo 7.40, pusimos de relieve que una impugnación de un sistema en su conjunto o en general debe cumplir las importantes prescripciones en materia de debido proceso que figuran en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Hemos modificado el párrafo 7.46 a fin de aclarar que, al examinarse en su conjunto, los diversos elementos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos impiden una impugnación del sistema de administración aduanera de las CE en general o en su conjunto.

3. Aplicación por las "autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros de las CE" de las "leyes, reglamentos, guías, manuales y prácticas administrativas"

6.13 Los **Estados Unidos** solicitaron al Grupo Especial que suprimiera la referencia a la aplicación por las "autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros de las CE" contenida en los párrafos 7.25, 7.33, 7.50 y 7.55. Los Estados Unidos sostuvieron que, en caso de mantenerse esta referencia, se produciría la falsa impresión de que la aplicación en las Comunidades Europeas puede llevarse a cabo por otras vías distintas de las autoridades aduaneras nacionales. Los Estados Unidos también solicitaron la modificación del párrafo 7.25 a fin de aclarar que no alegan que las "leyes, reglamentos, guías, manuales y prácticas administrativas" a los que se refieren en su solicitud de establecimiento de un grupo especial infringen por sí mismos el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 sino que, más bien, constituyen pruebas de dicha infracción.

6.14 El **Grupo Especial** ha decidido conservar la referencia a la aplicación por las "autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros de las CE" que figura en los párrafos 7.25, 7.33, 7.50 y 7.55 habida cuenta de que, entre otras razones, dicha referencia procede directamente de la propia solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. Con respecto a

la referencia a las "leyes, reglamentos, guías, manuales y prácticas administrativas", el Grupo Especial ha modificado el párrafo 7.25 con objeto de aclarar que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos indica que las formas concretas de aplicación "impugnadas" por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 incluyen, entre otros instrumentos, las "leyes, reglamentos, guías, manuales y prácticas administrativas".

4. Cuestiones temporales

a) Medidas que ya no están en vigor o medidas que no están aún en vigor en el momento del establecimiento del grupo especial

6.15 Los **Estados Unidos** solicitaron la supresión de la declaración contenida en la última frase del párrafo 7.28 de que las medidas que modifiquen o apliquen el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común o el TARIC o sean medidas conexas a esos instrumentos están comprendidas en el ámbito del mandato del Grupo Especial, "en la medida en que no alteren la esencia de las medidas modificadas o aplicadas y/o no entrañen una modificación de la naturaleza esencial de los argumentos de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994".

6.16 Las **Comunidades Europeas** sostuvieron que podían aceptar la solicitud de los Estados Unidos en caso de que el Grupo Especial accediera a la solicitud formulada por las Comunidades Europeas con respecto a los párrafos 7.90 a 7.92. Más concretamente, las Comunidades Europeas solicitaron que dichos párrafos se trasladaran a la sección que se refiere al mandato del Grupo Especial.

6.17 El **Grupo Especial** ha decidido acceder a las solicitudes tanto de los Estados Unidos como de las Comunidades Europeas. En particular, suprimimos la declaración contenida en la última frase del párrafo 7.28 a la que los Estados Unidos se opusieron e incorporamos los párrafos 7.90 a 7.92 en una nueva sección titulada "Cuestiones temporales concernientes al mandato del Grupo Especial", después de la sección que se ocupa de "La(s) medida(s) en litigio" de conformidad con la solicitud formulada por las Comunidades Europeas.

6.18 Las **Comunidades Europeas** solicitaron al Grupo Especial que reconsiderara el razonamiento que formuló en el párrafo 7.91 con respecto a las medidas que ya no están en vigor y las medidas que no están aún en vigor . Las Comunidades Europeas adujeron que el criterio formulado por el Grupo Especial en esos párrafos era excesivamente amplio. A este respecto, las Comunidades Europeas observaron que, con arreglo al párrafo 7 del artículo 3 del ESD, el objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias. Sin embargo, por lo que respecta a las medidas que ya no están en vigor en el momento del establecimiento de un grupo especial, las Comunidades Europeas adujeron que el Miembro demandado no puede poner dichas medidas en conformidad. Por lo que se refiere a las medidas que no están aún en vigor en el momento del establecimiento de un grupo especial, las Comunidades Europeas sostuvieron que dichas medidas no podían estar "abarcadas" por la solicitud de establecimiento de un grupo especial.

6.19 Los **Estados Unidos** sostuvieron que la solicitud de las Comunidades Europeas debía rechazarse. Adujeron que las pruebas de casos en que la aplicación fue anterior o posterior al establecimiento de un grupo especial siguen siendo pertinentes al análisis que realiza el Grupo Especial en la medida en que proporcionan un contexto para el examen de casos concretos de supuestas infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Los Estados Unidos adujeron además que las circunstancias que dieron lugar a una manera determinada de aplicación en un caso pueden ser las mismas circunstancias que afectan a la aplicación en otros casos.

6.20 El **Grupo Especial** ha examinado cuidadosamente los argumentos de las partes con respecto al razonamiento que formuló en el párrafo 7.91 (el mismo que, como se ha señalado en el párrafo 6.17 *supra*, ahora figura en la sección que se refiere al mandato del Grupo Especial en el informe definitivo). Para empezar, el Grupo Especial recuerda la declaración que formuló en el párrafo 7.91 de que, como principio general, un grupo especial es competente para formular constataciones y recomendaciones con respecto a medidas vigentes en el momento en que fue establecido. En otras palabras, desde una perspectiva temporal, el momento del establecimiento de un grupo especial reviste una importancia crucial porque es en ese momento cuando el grupo especial debe centrar su atención para determinar si existe o no una infracción de los acuerdos abarcados. No estamos de acuerdo con el argumento de los Estados Unidos de que las pruebas de casos en que la aplicación fue anterior o posterior al establecimiento de un grupo especial siguen siendo pertinentes al análisis que realiza un grupo especial en la medida en que los Estados Unidos dan a entender que cualquier cosa que ocurra antes o después del establecimiento de un grupo especial, por mucho que diste en términos temporales del momento de dicho establecimiento, puede influir en el análisis que efectúa el grupo especial en el momento de su establecimiento. Más bien, como afirmó claramente el Grupo Especial en el párrafo 7.91, las medidas que ya no están en vigor pueden ser adecuadamente objeto de constataciones y recomendaciones de un grupo especial *sólo en el grado en que afecten al funcionamiento de un acuerdo abarcado en el momento del establecimiento del grupo especial*. Además, una solicitud de establecimiento de un grupo especial puede redactarse de modo tal que prevea medidas que no estén aún en vigor en el momento del establecimiento. Como se señaló en el párrafo 7.91, el Grupo Especial considera que, en esos casos, las medidas "futuras" que han entrado en vigor después del establecimiento del grupo especial, pueden estar comprendidas en el ámbito del mandato del grupo especial *sólo si no entrañan una modificación de la naturaleza esencial de los argumentos del Miembro reclamante tal y como se reflejan en su solicitud de establecimiento de un grupo especial*. A la luz de lo anterior, el Grupo Especial no considera necesario modificar el razonamiento que formuló en el párrafo 7.91.

b) El ámbito temporal de la "aplicación"

6.21 Las **Comunidades Europeas** solicitaron al Grupo Especial que reconsiderara el razonamiento que formuló en el párrafo 7.92. En particular, las Comunidades Europeas manifestaron que la declaración formulada por el Grupo Especial en ese párrafo en el sentido de que cabe la posibilidad de que la manera en que se lleva a cabo la aplicación no tenga un punto inicial o un punto final claro haría imposible que un Miembro demandado respecto del cual se haya constatado que infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 pruebe que la infracción ha terminado.

6.22 Los **Estados Unidos** sostuvieron que, dado el carácter interrelacionado de la "aplicación", las constataciones con respecto a la misma, anteriores o posteriores al establecimiento de un grupo especial, bien podían arrojar luz sobre la aplicación que indiscutiblemente existía en el momento del establecimiento. Además, los Estados Unidos observaron que no se oponían al razonamiento del Grupo Especial contenido en el párrafo 7.92, pero sugerían que el Grupo Especial encuadrara su razonamiento no como una cuestión concerniente al mandato del Grupo Especial sino, más bien, como un contexto que arrojase luz sobre los casos de aplicación que indiscutiblemente existían en el momento del establecimiento del grupo especial. Los Estados Unidos también sostuvieron que las constataciones acerca de casos pasados de aplicación no uniforme constituyen pruebas con respecto al sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto.

6.23 El **Grupo Especial** ha tomado nota de las observaciones de las partes con respecto al párrafo 7.92. A la luz de esas observaciones, el Grupo Especial ha decidido modificar el razonamiento que formuló en ese párrafo (el mismo que, como se ha señalado en el párrafo 6.17 *supra*, ahora figura en la sección que se ocupa del mandato del Grupo Especial en el informe definitivo). Las modificaciones aclaran que el Grupo Especial no desea dar a entender que la aplicación que ha tenido lugar antes del establecimiento del grupo especial o que puede tener lugar después de dicho establecimiento puede ser objeto de constataciones y recomendaciones del grupo

especial en el contexto de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Más bien, la naturaleza de la aplicación es tal que quizá no sea posible identificar con claridad el momento en que dicha aplicación existe. Como señalamos en el párrafo 7.92, cabe la posibilidad de que la aplicación "no tenga un punto inicial o un punto final claro. De forma más concreta, la aplicación puede ser parte de una serie de actos o medidas interrelacionados en curso que, en consecuencia, puede implicar actos o medidas que no existían ya o aún no existían en el momento del establecimiento del grupo especial". El Grupo Especial ha modificado el párrafo 7.92 a fin de aclarar que la aplicación puede comprender una serie continua de medidas y actos, algunos de los cuales pueden ser anteriores o posteriores a la medida o acto que forma parte de la aplicación examinada por un grupo especial en el momento de su establecimiento. Las medidas y actos anteriores o posteriores a la aplicación que es objeto de examen pueden ser pertinentes para determinar la existencia o no de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el momento del establecimiento del grupo especial.

6.24 A modo de ejemplo, el Grupo Especial se refiere al párrafo 7.294 de su informe provisional. Con respecto a ese párrafo, las **Comunidades Europeas** sostuvieron que algunas de las pruebas presentadas por los Estados Unidos para demostrar la clasificación divergente de los monitores LCD conllevan medidas posteriores al establecimiento del Grupo Especial (a saber, las Pruebas documentales 76, 77 y 78 presentadas por los Estados Unidos) y que, por lo tanto, no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

6.25 Los **Estados Unidos** respondieron que las objeciones de las Comunidades Europeas debían desestimarse porque dan por supuesto que la aplicación no uniforme acreditada por las pruebas documentales en cuestión sólo se produjo una vez emitidos esos documentos y no antes. Según los Estados Unidos, la aplicación no uniforme reflejada en esos documentos es simplemente la continuación de "una serie de actos o medidas interrelacionados en curso" que existían en el momento del establecimiento del Grupo Especial.

6.26 El **Grupo Especial** considera que se desprende claramente del razonamiento que formuló en el párrafo 7.294, en particular cuando se lo interpreta a la luz de los párrafos 7.91, 7.92 y 7.295, que el Grupo Especial no se basó en las Pruebas documentales 76, 77 y 78 presentadas por los Estados Unidos como prueba de la existencia de una aplicación no uniforme en el momento del establecimiento del Grupo Especial. Más bien, el Grupo Especial se refirió a esas pruebas documentales porque demostraban la existencia de una serie continua de medidas y actos que comprendían la aplicación del Arancel Aduanero Común con respecto a la clasificación arancelaria de los monitores LCD y servían para demostrar que, en el momento del establecimiento del Grupo Especial, las Comunidades Europeas no estaban aplicando el Arancel Aduanero Común de manera uniforme.

c) "Actualmente"

6.27 Las **Comunidades Europeas** solicitaron la supresión del término "actualmente" contenido en los párrafos 7.207 y 7.448 y en los párrafos en que figuran conclusiones inferidas de las constataciones formuladas en dichos párrafos. Las Comunidades Europeas adujeron que la inclusión de este término da a entender incorrectamente que debe distinguirse entre los casos en que nunca existió una infracción en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 1994 y los casos en que alguna vez existió una infracción que posteriormente se ha eliminado. Las Comunidades Europeas también sostuvieron que el uso del término "actualmente" da a entender que existe el riesgo de que la infracción en cuestión se repita.

6.28 Los **Estados Unidos** sostuvieron que las solicitudes de las Comunidades Europeas debían rechazarse porque las circunstancias que dieron lugar a una manera determinada de aplicación en un caso pueden ser las mismas circunstancias que afectan a la aplicación en otros casos.

6.29 El **Grupo Especial** observa que, al usar el término "actualmente" en esos párrafos, el Grupo Especial se propone simplemente destacar que, en un momento determinado, el acto o medida en cuestión constituía una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 pero que, en el momento del establecimiento del Grupo Especial, esa falta de uniformidad no existía.

5. Recaudación retroactiva de derechos de aduana

6.30 Las **Comunidades Europeas** solicitaron la supresión de los párrafos 7.375 a 7.385. Según las Comunidades Europeas, esos párrafos se refieren a la recaudación retroactiva de derechos de aduana después de la adopción de una nota explicativa, lo cual no está comprendido en el mandato del Grupo Especial.

6.31 Los **Estados Unidos** sostuvieron que la solicitud de las Comunidades Europeas debía rechazarse. Observaron que, si una autoridad aduanera de las CE considera que una nota explicativa es una simple aclaración del Arancel Aduanero Común, y por lo tanto la aplica retroactivamente, aplica el Arancel Aduanero Común de una forma diferente a otra autoridad aduanera de las CE que considere que dicha nota se parece más a una modificación y sólo la aplique de forma prospectiva. Los Estados Unidos sostuvieron que lo anterior no podía considerarse otra cosa que una divergencia en la aplicación de las normas de clasificación arancelaria en las Comunidades Europeas.

6.32 El **Grupo Especial** considera que el párrafo 7.381 deja claro que, en los párrafos 7.375 a 7.385, el Grupo Especial se ocupa de las supuestas diferencias en la interpretación y aplicación de las notas explicativas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros (una cuestión que evidentemente está comprendida en el mandato del Grupo Especial), y no de la recaudación retroactiva de derechos de aduana. Por consiguiente, el Grupo Especial no considera necesario suprimir los párrafos 7.375 a 7.385.

C. INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO 3 a) DEL ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994

1. "Objeto y fin"

6.33 Los **Estados Unidos** solicitaron la supresión del párrafo 7.109. Con respecto a la referencia al "objeto y fin" que figura en el párrafo 1 del artículo 31 de la *Convención de Viena*, sostuvieron que la jurisprudencia de la OMC no señala que un objeto y fin del Acuerdo sobre la OMC sea asegurar la seguridad y previsibilidad. Más bien, la referencia a la seguridad y previsibilidad en dicha jurisprudencia se deriva del párrafo 2 del artículo 3 del ESD, que se refiere al objetivo del mecanismo de solución de diferencias de la OMC.

6.34 El **Grupo Especial** considera que la arquitectura del sistema de la OMC, que es un sistema basado en normas, implica que la seguridad y previsibilidad constituyen un objeto y fin del Acuerdo sobre la OMC. A juicio del Grupo Especial, lo anterior está implícito en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD, el mismo que dispone, entre otras cosas, que "[e]l sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio". A nuestro juicio, esta disposición indica que la seguridad y previsibilidad constituyen un objeto y fin no sólo del ESD sino también de todo el sistema multilateral de comercio, del cual el ESD forma parte. Sin embargo, habida cuenta de que las constataciones del Grupo Especial contenidas en el párrafo 7.109 no son esenciales para su interpretación del término "aplicar" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial ha decidido suprimir los párrafos 7.108 y 7.109.

2. "Medios de interpretación complementarios"

6.35 Los **Estados Unidos** solicitaron al Grupo Especial que suprimiera su referencia al "contexto fáctico" con arreglo al artículo 32 de la *Convención de Viena* como un "medio de interpretación

complementario", en los párrafos 7.131 a 7.136. Los Estados Unidos sugirieron que el examen por el Grupo Especial del contexto fáctico debía sustituirse por un examen de la relación entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994.

6.36 Las **Comunidades Europeas** sostuvieron que la solicitud de los Estados Unidos debía rechazarse. En apoyo de su posición, las Comunidades Europeas se remitieron a la decisión del Órgano de Apelación en el asunto *CE - Trozos de pollo* que, según afirman, confirma el carácter inclusivo del artículo 32 de la *Convención de Viena*.

6.37 El **Grupo Especial** observa que los Estados Unidos no parecen cuestionar la referencia del Grupo Especial al "contexto fáctico". Más bien, su preocupación primordial parece ser el fundamento jurídico en que se basó el Grupo Especial para formular esa referencia. A este respecto, el Grupo Especial recuerda la observación que formuló en la nota 262 del informe provisional de que, en el asunto *CE - Trozos de pollo*, el Órgano de Apelación confirmó la utilización por el Grupo Especial del "contexto fáctico" como base para interpretar el sentido corriente de un término de un tratado de conformidad con el artículo 31 de la *Convención de Viena*. El Grupo Especial señaló también en la nota 262 que la aprobación por el Órgano de Apelación de la utilización del "contexto fáctico" de conformidad con el artículo 31 de la *Convención de Viena* indica que ese contexto podría tomarse en consideración de forma subsidiaria o complementaria a tenor del artículo 32 de la *Convención de Viena*. Encontramos apoyo para esta opinión en el asunto *CE - Trozos de pollo*, en el cual el Órgano de Apelación declaró lo siguiente: "Subrayamos además que el artículo 32 no define exhaustivamente los medios de interpretación complementarios a los que puede recurrir un intérprete. Dice únicamente que *incluyen* los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. Por consiguiente, un intérprete dispone de cierta flexibilidad al considerar medios complementarios pertinentes en un caso determinado para ayudar a determinar las intenciones comunes de las partes".[233] Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo Especial ha decidido no suprimir en los párrafos 7.131 a 7.136 la referencia al "contexto fáctico" con arreglo al artículo 32 de la *Convención de Viena* como un "medio de interpretación complementario", pero ha modificado la nota 262 a fin de que refleje un mayor apoyo para el enfoque del Grupo Especial.

6.38 Con respecto a la sugerencia de los Estados Unidos de que el examen por el Grupo Especial del "contexto fáctico" debe sustituirse por un examen de la relación entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial observa que los Estados Unidos no se refirieron a esa relación al demostrar su alegación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En cualquier caso, el Grupo Especial considera que dista mucho de estar claro que la prescripción de hacer una pronta revisión y rectificación de las decisiones administrativas por conducto de tribunales y mediante procedimientos nacionales de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 apoye la opinión de que la obligación de uniformidad prevista en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 debe interpretarse de forma flexible, como han dado a entender los Estados Unidos en sus observaciones.

3. "Normas mínimas"

6.39 Los **Estados Unidos** solicitaron al Grupo Especial que suprimiera su referencia a las "normas mínimas de debidas garantías de procedimiento" en el párrafo 7.135. Los Estados Unidos sostuvieron que dicha referencia podía interpretarse erróneamente en el sentido de que agrega algo al texto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

6.40 El **Grupo Especial** acepta que no hay ninguna referencia explícita a las "normas mínimas de debidas garantías de procedimiento" en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, considera que dicho concepto está implícito en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT

[233] Informe del Órgano de Apelación, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 283.

de 1994 a la luz del contexto inmediato de esa disposición, que el Grupo Especial examinó en los párrafos 7.126 a 7.130. Además, el Grupo Especial recuerda la observación que formuló en la nota 264 en el sentido de que el Órgano de Apelación declaró en el asunto *Estados Unidos - Camarones* que "[t]ambién es evidente para nosotros que el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 establece determinadas normas mínimas de transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales".[234] Por lo tanto, el Grupo Especial no accede a la solicitud de los Estados Unidos con respecto al párrafo 7.135.

4. "Uniforme"

a) Naturaleza de la impugnación

6.41 Los **Estados Unidos** sostuvieron que el examen por el Grupo Especial del término "uniforme" en el párrafo 7.136 implica que se aplican criterios diferentes en función del alcance de la impugnación que se formula al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Los Estados Unidos adujeron que esto podía interpretarse erróneamente en el sentido de que, por ejemplo, en el contexto de una impugnación limitada, sería necesario que un Miembro clasificara el mismo producto en la misma partida arancelaria, mientras que, en el contexto de una impugnación más amplia, el mismo producto podría clasificarse en diferentes partidas arancelarias y la clasificación arancelaria del Miembro se consideraría "uniforme" a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Los Estados Unidos solicitaron al Grupo Especial que aclarara si su constatación es que la naturaleza de la obligación de aplicación uniforme de las medidas podría variar en función del grado de amplitud con que un Miembro haya configurado su solicitud de establecimiento de un grupo especial.

6.42 El **Grupo Especial** considera que en el párrafo 7.136 ya se proporciona la respuesta a la cuestión respecto de la cual los Estados Unidos solicitan una aclaración. En particular, en ese párrafo, el Grupo Especial señaló que la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme deben tenerse en cuenta al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el contexto de un caso determinado. El Grupo Especial manifestó además que cuanto más limitada sea la impugnación desde el punto de vista de la aplicación que se impugna y de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que se alega que se aplican de manera no uniforme en un caso determinado, más riguroso será el requisito de uniformidad. Cuanto más amplia y de mayor alcance sea la impugnación tanto desde el punto de vista de la naturaleza de la aplicación impugnada como del de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones o resoluciones concretas que supuestamente se aplican de manera no uniforme en un caso determinado, menos riguroso será el criterio de uniformidad que debe aplicarse. Por consiguiente, el Grupo Especial considera que no hay motivos para aclarar aún más el párrafo 7.136.

b) "Plazo prudencial"

6.43 Los **Estados Unidos** solicitaron al Grupo Especial que modificara el párrafo 7.136, en el cual el Grupo Especial señala que, a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, la uniformidad debe alcanzarse dentro de un plazo prudencial. Los Estados Unidos sostuvieron que la obligación prevista en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es la de aplicar de manera uniforme actualmente. Además, los Estados Unidos adujeron que la referencia a un "plazo prudencial" podía confundirse con la referencia a la misma expresión que figura en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD.

[234] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Camarones*, párrafo 183.

6.44 Las **Comunidades Europeas** sostuvieron que la solicitud de los Estados Unidos debía rechazarse. Según las Comunidades Europeas, la obligación de aplicación uniforme prevista en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es aplicable en todo momento, no sólo actualmente, aunque el cumplimiento del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 1994 debe evaluarse en el momento del establecimiento del Grupo Especial. Las Comunidades Europeas también adujeron que el contexto del párrafo 7.136 deja claro que el Grupo Especial no se refiere a un "plazo prudencial" a los efectos del párrafo 3 del artículo 21 del ESD.

6.45 El **Grupo Especial** ha tomado nota de las observaciones de las partes y ha decidido aclarar el párrafo 7.133, en el que se basa el resumen contenido en el párrafo 7.136. Concretamente, para evitar una constatación de aplicación no uniforme de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 debe ser evidente en el momento de establecimiento del grupo especial que cualquier falta de uniformidad que pudiera haber existido ha sido subsanada en un plazo que es prudencial.

D. OBSERVACIONES DEL GRUPO ESPECIAL CON RESPECTO AL SISTEMA COMUNITARIO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA

6.46 Las **Comunidades Europeas** estuvieron de acuerdo en que su sistema de administración aduanera es un contexto pertinente para el examen de las alegaciones concretas de infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 formuladas por los Estados Unidos. Sin embargo, las Comunidades Europeas solicitaron que se suprimieran los párrafos 7.156 a 7.191, en los que se describen aspectos pertinentes del sistema comunitario de administración aduanera. Las Comunidades Europeas formularon observaciones similares aunque más específicas con respecto a los párrafos 7.165, 7.168, 7.169, 7.272 y 7.534. Las Comunidades Europeas adujeron que esos párrafos se superponen a la descripción del sistema de las CE contenida en la parte expositiva del informe del Grupo Especial; siguen una estructura distinta de la adoptada en la parte expositiva, lo que podría dar lugar a confusiones; contienen errores, y/o se refieren a cuestiones que no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

6.47 Los **Estados Unidos** sostuvieron que el Grupo Especial debía rechazar la solicitud de las Comunidades Europeas con respecto a los párrafos 7.156 a 7.191, 7.272 y 7.534. A este respecto, los Estados Unidos manifestaron que el examen del sistema de las CE que figura en la parte expositiva es inadecuado porque se refiere simplemente a los hechos y no contiene ningún análisis. Sin embargo, los Estados Unidos sostuvieron que debía suprimirse todo el párrafo 7.535 salvo su primera frase (que está vinculada a los párrafos 7.156 a 7.191 y 7.534) habida cuenta de que el texto en cuestión se refiere a cuestiones que no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

6.48 El **Grupo Especial** ha tomado buena nota de las observaciones de las partes con respecto a los párrafos 7.156 a 7.191, 7.272, 7.534 y 7.535 y ha decidido conservar esos párrafos porque, como se señala en el párrafo 7.156, explican la interpretación del Grupo Especial de determinados aspectos de la manera en la que funciona el sistema de administración aduanera de las CE, que se han planteado en el contexto de los casos concretos de infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 alegados por los Estados Unidos. En la sección del informe del Grupo Especial que se refiere a los casos concretos de supuestas infracciones, hemos incluido remisiones a la descripción general del sistema de las CE, lo que sirve para ilustrar este punto. El Grupo Especial no considera que ninguna superposición entre la descripción del sistema comunitario de administración aduanera contenida en la parte expositiva y la que figura en los párrafos 7.156 a 7.191, 7.534 y 7.535 dé lugar a confusión. Por el contrario, consideramos que la explicación proporcionada en los párrafos 7.156 a 7.191, 7.272, 7.534 y 7.535 asegura que el lector tenga un panorama claro y completo del modo en que funciona el sistema de administración aduanera de las CE. El Grupo Especial, al conservar los párrafos 7.156 a 7.191, 7.272, 7.534 y 7.535, pone de relieve que dichos párrafos contienen simplemente las observaciones del Grupo Especial acerca de los aspectos del sistema de las CE que surgen en el contexto de los casos concretos de infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 alegados por los Estados Unidos.

E. CASOS CONCRETOS DE SUPUESTA INFRACCIÓN DEL PÁRRAFO 3 A) DEL ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994

1. Clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas

6.49 Las **Comunidades Europeas** solicitaron la supresión de los párrafos 7.265 a 7.276 porque, según adujeron, esos párrafos reflejan una incompatibilidad lógica. A este respecto, las Comunidades Europeas dieron a entender que es imposible constatar que la falta de uniformidad relacionada con un proceso administrativo infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 salvo que también se haya constatado que el resultado de dicho proceso no es uniforme, en violación de esa disposición.

6.50 Los **Estados Unidos** sostuvieron que la solicitud de las Comunidades Europeas debía rechazarse. Los Estados Unidos observaron a este respecto que el Grupo Especial no constató que la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas en las Comunidades Europeas era uniforme. Más bien, sobre la base de las pruebas que se le presentaron, el Grupo Especial constató que no podía concluir que los productos que las diversas autoridades aduaneras de las CE tuvieron ante sí fueran sustancialmente idénticos. Los Estados Unidos sostuvieron que, por consiguiente, esa constatación no excluye una constatación de aplicación no uniforme con respecto al proceso administrativo conducente a la clasificación de los forros opacos para cortinas.

6.51 El **Grupo Especial** ha examinado cuidadosamente las observaciones de las partes y ha decidido no suprimir los párrafos 7.265 a 7.276. El Grupo Especial recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.264 de que, basándose en las pruebas limitadas que obraban en su poder, sólo podía suponer que los productos en cuestión no eran idénticos. Ese fue el motivo por el cual el Grupo Especial se vio obligado a concluir que la clasificación arancelaria de los productos que tuvieron ante sí las autoridades aduaneras alemanas, por una parte y, por la otra, las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica no adolecía de falta de uniformidad a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En cualquier caso, el Grupo Especial considera que los procesos administrativos no uniformes pueden dar lugar a una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 aunque los resultados de dichos procesos sean uniformes. En realidad, a juicio del Grupo Especial, independientemente del resultado sustantivo de un proceso administrativo, la falta de uniformidad del propio proceso puede tener el efecto de disuadir a los comerciantes de importar en una parte determinada de un Miembro. En particular, esto podría ocurrir cuando los procesos administrativos aplicados en una parte de un Miembro son más gravosos u onerosos que los aplicados en otra parte de ese Miembro.

6.52 Las **Comunidades Europeas** también solicitaron la modificación del párrafo 7.274 en la medida en que señala que la Oficina Principal de Aduanas de Bremen no tuvo debidamente en cuenta decisiones en materia de clasificación adoptadas por otras autoridades aduaneras. Las Comunidades Europeas adujeron que esa afirmación no se justifica porque los productos que fueron objeto de clasificación por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen eran distintos de los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica.

6.53 Los **Estados Unidos** sostuvieron que la solicitud de las Comunidades Europeas debía rechazarse debido a que se basaba en una interpretación errónea de los hechos.

6.54 El **Grupo Especial** ha examinado las observaciones de las partes y ha decidido no modificar el párrafo 7.274. A juicio del Grupo Especial, aunque la Oficina Principal de Aduanas de Bremen considerara que los productos en cuestión eran diferentes, debió haber tenido en cuenta las decisiones en materia de clasificación de otras autoridades aduaneras. Incumbía a la Oficina Principal de Aduanas de Bremen proceder de esa forma habida cuenta de las numerosas reclamaciones hechas por el comerciante que solicitaba la reclasificación y porque a la Oficina Principal de Aduanas de Bremen

le constaba la existencia de decisiones de clasificación de otras autoridades aduaneras sobre "mercancías comparables".

6.55 Además, las **Comunidades Europeas** solicitaron la inclusión en el párrafo 7.253 de una referencia a la declaración formulada por el ZPLA de Hamburgo en el asunto relativo a la protesta de Ornata, por la que se pedía al comerciante en cuestión que facilitara "más información y recibos que muestren que mercancías idénticas fueron tratadas de manera diferente en otros países de la UE".

6.56 Los **Estados Unidos** sostuvieron que la solicitud de las Comunidades Europeas debía rechazarse porque el párrafo 7.253 simplemente contiene una descripción de los productos que fueron objeto de clasificación por el ZPLA de Hamburgo.

6.57 El **Grupo Especial** considera que no es necesario incluir en el párrafo 7.253 una referencia a la declaración a la que han aludido las Comunidades Europeas porque la declaración en cuestión ya se reproduce íntegramente en la nota 501.

6.58 Las **Comunidades Europeas** solicitaron que se suprimiera del párrafo 7.275 la declaración de que "la aparente omisión por parte de las autoridades aduaneras alemanas puede haber tenido repercusiones y puede seguir teniéndolas en el futuro para la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas en las Comunidades Europeas". Las Comunidades Europeas pusieron en entredicho las "repercusiones" que puede tener la supuesta omisión.

6.59 Los **Estados Unidos** sostuvieron que la solicitud de las Comunidades Europeas debía rechazarse. Según los Estados Unidos, las posibles repercusiones son evidentes. En particular, los Estados Unidos adujeron que, en la medida en que los comerciantes puedan prever que las autoridades aduaneras alemanas aplicarán las normas de clasificación de las CE con respecto a los forros opacos para cortinas utilizando su propia ayuda interpretativa nacional y sin considerar seriamente las decisiones de otras autoridades aduaneras, las exportaciones de esos comerciantes pueden desviarse.

6.60 Habida cuenta de las observaciones de las partes, el **Grupo Especial** ha decidido aclarar el carácter de las repercusiones a las que hacía referencia en el párrafo 7.275.

6.61 Las **Comunidades Europeas** solicitaron la supresión de la indicación contenida en el párrafo 7.276 de que el sistema de las CE no exige que las autoridades aduaneras alemanas se remitan a las decisiones en materia de clasificación de otras autoridades aduaneras. Las Comunidades Europeas observaron que la aplicación de esta constatación exigiría modificaciones del sistema comunitario de administración aduanera, lo cual es una cuestión que no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.

6.62 Los **Estados Unidos** sostuvieron que la solicitud de las Comunidades Europeas debía rechazarse. Alegaron que las constataciones del Grupo Especial no deberían estar dictadas por lo que las Comunidades Europeas consideran que tendrán o no tendrán que hacer a efectos de la aplicación.

6.63 El **Grupo Especial** ha examinado cuidadosamente las observaciones de las partes y ha modificado el párrafo 7.276 a fin de aclarar que los actos de las autoridades aduaneras alemanas con respecto al proceso administrativo conducente a la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas, y no el sistema de las CE en sí mismo, dieron lugar a la constatación por el Grupo Especial de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

2. Clasificación arancelaria de los monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital

6.64 Las **Comunidades Europeas** solicitaron la supresión de la declaración contenida en el párrafo 7.294 de que las Comunidades Europeas no parecen poner en duda que en 2004 se produjo

una divergencia en lo que respecta a la clasificación arancelaria de los monitores LCD. Las Comunidades Europeas sostuvieron que, si bien han reconocido en sus comunicaciones que la clasificación de los monitores LCD era una cuestión compleja que entrañaba la clasificación de numerosos productos, no han reconocido que había falta de uniformidad en su práctica de clasificación con respecto a los monitores LCD en el momento del establecimiento del Grupo Especial.

6.65 El **Grupo Especial** reconoce que las Comunidades Europeas no afirmaron *explícitamente* en sus comunicaciones que estaban de acuerdo en que existía una divergencia con respecto a la clasificación arancelaria de los monitores LCD en el momento pertinente. Sin embargo, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas reconocieron *implícitamente* la existencia de esa divergencia en los diversos párrafos de sus comunicaciones a que hace referencia la nota 540. Hemos ampliado dicha nota con objeto de fundamentar más detalladamente este punto. Además, en la misma nota, hemos desarrollado nuestro examen del comunicado de prensa de Greenberg Traurig, emitido el 24 de mayo de 2005, que figura en la Prueba documental 29 presentada por los Estados Unidos, el cual tiende a confirmar que en 2004 existía una divergencia en la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI entre las autoridades aduaneras neerlandeses por una parte, y las autoridades aduaneras de los otros Estados miembros por la otra.

3. Revocación de IAV con respecto a candelabros y a frutas y frutos de cáscara conservados en el contexto del asunto *Timmermans*

6.66 Las **Comunidades Europeas** solicitaron que se suprimieran los párrafos 7.347 a 7.360 porque los Estados Unidos no formularon una alegación de falta de uniformidad con respecto a los candelabros y las frutas y frutos de cáscara conservados. Además, las Comunidades Europeas sostuvieron que estos párrafos debían suprimirse porque se refieren a la impugnación por los Estados Unidos del sistema comunitario de administración aduanera "en sí mismo", una cuestión que no está comprendida en el mandato del Grupo Especial.

6.67 Los **Estados Unidos** sostuvieron que podían aceptar la solicitud de las Comunidades Europeas siempre que se conservaran los párrafos 7.357 y 7.358 en la sección VII.D.6 a).

6.68 Teniendo en cuenta las observaciones de las partes, el **Grupo Especial** ha decidido suprimir los párrafos 7.347 a 7.360, excepto los párrafos 7.357 y 7.358 que se han mantenido en la sección VII.D.6 a).

4. Sanciones contra infracciones de la legislación aduanera de las CE

6.69 Las **Comunidades Europeas** solicitaron la supresión del párrafo 7.490 basándose en que los Estados Unidos no alegaron una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 de la manera formulada por el Grupo Especial en ese párrafo. Además, las Comunidades Europeas adujeron que las declaraciones formuladas por el Grupo Especial en esos párrafos son incompatibles con su razonamiento de que las leyes sustantivas que establecen sanciones no pueden considerarse actos de aplicación.

6.70 Los **Estados Unidos** sostuvieron que la solicitud de las Comunidades Europeas debía rechazarse. Los Estados Unidos reconocieron que no configuraron su alegación con respecto a las sanciones de la manera adoptada por el Grupo Especial en el párrafo 7.490. Sin embargo, sostuvieron que no es verdad que no alegaran una infracción a este respecto. Además, los Estados Unidos sostuvieron que no hay incompatibilidad alguna entre el razonamiento del Grupo Especial contenido en el párrafo 7.490 y las demás constataciones del Grupo Especial con respecto a las sanciones. Según los Estados Unidos, la cuestión a que se hace referencia en el párrafo 7.490 no es si las distintas leyes que establecen sanciones pueden considerarse actos de aplicación. Más bien, la cuestión es si la decisión relativa al asunto *Andrade* y el Reglamento del Consejo de las CE de que se trata son leyes

aduaneras comunitarias susceptibles de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

6.71 El **Grupo Especial** ha decidido no modificar el párrafo 7.490. En primer lugar, el Grupo Especial señala que no hay nada que le impida formular observaciones, aunque éstas no se basen en alegaciones específicamente formuladas por las partes durante las actuaciones del Grupo Especial. Además, como se señala en la primera frase del párrafo 7.490, las observaciones del Grupo Especial contenidas en dicho párrafo se refieren a la *aplicación* de la decisión judicial dictada por el TJCE en el asunto *José Teodoro de Andrade* contra *Director da Alfândega de Leixões* y de la Resolución del Consejo de las CE, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior. Las observaciones del Grupo Especial no se refieren a diferencias sustantivas en leyes, reglamentos u otras medidas.

F. OBLIGACIONES DE LAS CE Y DE LOS ESTADOS MIEMBROS

6.72 Las **Comunidades Europeas** solicitaron la modificación del párrafo 7.593 a fin de aclarar que las Comunidades Europeas, y no los Estados miembros, tienen competencia exclusiva en las cuestiones relativas a los Acuerdos de la OMC con respecto al comercio de mercancías.

6.73 Los **Estados Unidos** sostuvieron que la solicitud de las Comunidades Europeas debía rechazarse. En apoyo de su posición, los Estados Unidos sostuvieron que, mediante su solicitud, las Comunidades Europeas introducen una cuestión que nunca se examinó anteriormente en esta diferencia, intentan respaldar su argumento con pruebas que presentaron por primera vez durante la etapa intermedia de reexamen y piden al Grupo Especial que formule una declaración sobre la competencia relativa de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, lo que tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito de esta diferencia y que es errónea como cuestión de derecho.

6.74 El **Grupo Especial** ha tomado buena nota de las observaciones de las partes y ha decidido no aceptar la solicitud de las Comunidades Europeas con respecto al párrafo 7.593. El Grupo Especial observa que la declaración a la que se oponen las Comunidades Europeas se refiere a las obligaciones que corresponden a las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en virtud de los Acuerdos de la OMC *como una cuestión de derecho internacional*. Sin embargo, los argumentos formulados por las Comunidades Europeas en apoyo de la propuesta de modificación del párrafo 7.593 se refieren a la competencia relativa de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros *como una cuestión de derecho interno*, lo cual no guarda relación con la declaración en cuestión.

G. OTRAS SOLICITUDES DE REEXAMEN

6.75 Los Estados Unidos y las Comunidades Europeas solicitaron determinadas modificaciones de la forma en que sus respectivos argumentos estaban reflejados en los siguientes párrafos del informe provisional: 7.73, 7.98, 7.99, 7.115, 7.116, 7.119, 7.254, 7.280, 7.526, 7.546 y 7.595. El Grupo Especial aceptó esas modificaciones en la medida en que eran compatibles con lo que las partes afirmaron en las diversas comunicaciones que presentaron al Grupo Especial durante sus actuaciones.

6.76 Los Estados Unidos y las Comunidades Europeas solicitaron la modificación o aclaración de la descripción por el Grupo Especial de aspectos específicos relacionados con el sistema de administración aduanera de las CE en los párrafos 2.26, 2.33, 2.57, 2.72, 7.160, 7.166, 7.168, 7.181, 7.187, 7.299, 7.319 y 7.343 y en las notas 306 y 650. El Grupo Especial accedió a esas solicitudes en la medida en que eran compatibles con las pruebas que las partes habían presentado al Grupo Especial durante sus actuaciones.

6.77 Las Comunidades Europeas solicitaron modificaciones, en los párrafos 7.251 y 7.253, de las traducciones inglesas de determinadas pruebas documentales presentadas por los Estados Unidos cuyo idioma original era el alemán (a saber, las Pruebas documentales 23, 41 y 50 presentadas por los Estados Unidos). El Grupo Especial aceptó esas modificaciones en la medida en que guardaban fidelidad con la versión alemana de las pruebas documentales en cuestión.

6.78 Con respecto a los párrafos que se mencionan a continuación, una parte formuló sugerencias a las que la otra parte no se opuso: 7.327, 7.329 a 7.346, 7.347 a 7.356, 7.360, 7.386 a 7.399, 7.402, 7.444, 8.1 (con respecto al mandato del Grupo Especial), 8.1 a) vii), viii) y xi) y 8.2. El Grupo Especial aceptó todas esas sugerencias de modificación.

6.79 Además, los Estados Unidos y/o las Comunidades Europeas solicitaron la aclaración de determinadas cuestiones fácticas en los párrafos 7.262 y 7.265. El Grupo Especial hizo las aclaraciones necesarias en esos párrafos.

VII. CONSTATACIONES

A. ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994

7.1 El artículo X del GATT de 1994, titulado "Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales" dispone lo siguiente:

> "1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general que cualquier parte contratante haya puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a ellas, o a la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos productos, serán publicados rápidamente a fin de que los gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellos. Se publicarán también los acuerdos relacionados con la política comercial internacional y que estén en vigor entre el gobierno o un organismo gubernamental de una parte contratante y el gobierno o un organismo gubernamental de otra parte contratante. Las disposiciones de este párrafo no obligarán a ninguna parte contratante a revelar informaciones de carácter confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.
>
> 2. No podrá ser aplicada antes de su publicación oficial ninguna medida de carácter general adoptada por una parte contratante que tenga por efecto aumentar el tipo de un derecho de aduana u otra carga sobre la importación en virtud del uso establecido y uniforme, o que imponga una nueva o más gravosa prescripción, restricción o prohibición para las importaciones o para las transferencias de fondos relativas a ellas.
>
> 3. a) Cada parte contratante aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.
>
> b) Cada parte contratante mantendrá, o instituirá tan pronto como sea posible, tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otras cosas, a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. Estos tribunales o

> procedimientos serán independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, y sus decisiones serán ejecutadas por estos últimos y regirán su práctica administrativa, a menos que se interponga un recurso ante una jurisdicción superior, dentro del plazo prescrito para los recursos presentados por los importadores, y a reserva de que la administración central de tal organismo pueda adoptar medidas con el fin de obtener la revisión del caso mediante otro procedimiento, si hay motivos suficientes para creer que la decisión es incompatible con los principios jurídicos o con la realidad de los hechos.
>
> c) Las disposiciones del apartado b) de este párrafo no requerirán la supresión o la sustitución de los procedimientos vigentes en el territorio de toda parte contratante en la fecha del presente Acuerdo, que garanticen de hecho una revisión imparcial y objetiva de las decisiones administrativas, aun cuando dichos procedimientos no sean total u oficialmente independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Toda parte contratante que recurra a tales procedimientos deberá facilitar a las PARTES CONTRATANTES, si así lo solicitan, una información completa al respecto para que puedan decidir si los procedimientos citados se ajustan a las condiciones fijadas en este apartado."

7.2 En esta diferencia, los Estados Unidos han formulado alegaciones al amparo de los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial abordará por ese orden cada una de estas alegaciones, después de examinar varias cuestiones relativas al mandato del Grupo Especial y a aspectos de procedimiento que se han planteado.

B. EL MANDATO DEL GRUPO ESPECIAL

1. La(s) medida(s) en litigio

a) Resumen de los argumentos de las partes

7.3 Los **Estados Unidos** han aclarado en su Primera comunicación escrita que el objeto de su preocupación es exclusivamente el requisito de aplicación "uniforme" establecido en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[235] Los Estados Unidos alegan que las Comunidades Europeas, con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, no aplican de manera uniforme las siguientes medidas: el "Código Aduanero Comunitario" contenido en el Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo de 12 de octubre de 1992; el "Reglamento de Aplicación" por el que se fijan disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, contenido en el Reglamento (CEE) Nº 2454/93 del 2 de julio de 1993; y el "Arancel Aduanero Común" promulgado inicialmente en el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo y que se actualiza anualmente en el Diario Oficial de las CE.[236] Los Estados Unidos explican que, aunque impugnan fundamentalmente esas tres medidas, por cuanto comprenden el contenido de las leyes aduaneras comunitarias, esas medidas están "complementadas" por diversos reglamentos de la Comisión y por otras medidas.[237] Los Estados Unidos sostienen que esas medidas complementarias se refieren a productos o grupos de productos específicos, desarrollando las disposiciones establecidas en las tres medidas principales. Según los Estados Unidos, dada su especificidad y la amplia gama de cuestiones abarcadas, sería imposible identificar todas esas medidas complementarias. No obstante, a título de ejemplo, los Estados Unidos citan el Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo relativo a la suspensión de los derechos sobre un

[235] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 115.

[236] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 3.

[237] Respuesta de los Estados Unidos a las preguntas 3 y 128 del Grupo Especial.

subconjunto de monitores LCD[238], así como una nota explicativa de la Nomenclatura Combinada sobre la clasificación de determinadas videocámaras.[239] Los Estados Unidos sostienen que las tres medidas principales y las medidas complementarias no se aplican de manera uniforme, con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[240]

7.4 Las **Comunidades Europeas** aducen que las leyes y reglamentos enumerados en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no son las "medidas en litigio" correspondientes a las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Según las Comunidades Europeas, de esa solicitud se desprende claramente que la alegación de los Estados Unidos se refiere a la manera en que las Comunidades Europeas aplican las medidas enumeradas en la solicitud y no a las propias medidas. Las Comunidades Europeas sostienen que la enumeración de leyes y otras medidas que se hace en la solicitud responde simplemente al propósito de identificar las leyes que supuestamente las Comunidades Europeas no aplican de manera uniforme.[241]

7.5 En respuesta a lo anterior, los **Estados Unidos** señalan que no impugnan el contenido de las medidas mencionadas en su solicitud de establecimiento de un grupo especial[242], sino la manera en que se aplica la legislación aduanera comunitaria. No obstante, según los Estados Unidos, la manera en que las Comunidades Europeas aplican su normativa aduanera puede no ser una "medida". En consecuencia, las "medidas concretas en litigio" en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del ESD son las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que configuran la normativa aduanera comunitaria, aunque en algunos casos esos instrumentos sean aplicados mediante leyes y reglamentos que son a su vez medidas.[243]

7.6 Las **Comunidades Europeas** no admiten que la manera de aplicar las leyes pueda no ser una medida. A este respecto, sostienen que el Órgano de Apelación ha confirmado que todo acto u omisión atribuible a un Miembro de la OMC puede considerarse una medida de ese Miembro a efectos de la solución de diferencias en el marco de la OMC. Según las Comunidades Europeas, esta declaración es aplicable también a la aplicación de las leyes a que se hace referencia en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El que una medida determinada sea o no impugnable en el marco de la OMC depende enteramente del contenido de la obligación derivada de las normas de la OMC de que se trate.[244] Las Comunidades Europeas aducen que la identificación de la(s) medida(s) en litigio en la presente diferencia es especialmente necesaria habida cuenta de las características específicas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[245] Las Comunidades Europeas sostienen que la

[238] Estados Unidos - Prueba documental 28.

[239] Notas explicativas de la Nomenclatura Combinada de las Comunidades Europeas, 13 de julio de 2000, página 316 (Estados Unidos - Prueba documental 62).

[240] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 128 del Grupo Especial.

[241] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 7.

[242] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 1, 4 y 128 del Grupo Especial.

[243] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 1 y 4 del Grupo Especial.

[244] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 8, en el que se hace referencia al informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, párrafo 81.

[245] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 9, en el que se hace referencia al informe del Órgano de Apelación, *CE - Bananos III*, párrafo 200.

sugerencia de los Estados Unidos de que la "manera en que se lleva a cabo la aplicación" puede no ser una medida llevaría al resultado absurdo de que nunca podría impugnarse al amparo del ESD el incumplimiento del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[246] Las Comunidades Europeas señalan además a este respecto que el Órgano de Apelación ha confirmado que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere únicamente a la aplicación de las leyes y reglamentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 10 del GATT de 1994 y no al contenido de esas leyes y reglamentos.[247]

b) Análisis por el Grupo Especial

7.7 En el contexto de la alegación de los Estados Unidos de que las Comunidades Europeas han infringido el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se ha planteado la cuestión de si "la(s) medida(s) en litigio" están comprendidas en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD a los efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En particular, se ha pedido al Grupo Especial que determine si las medidas en litigio en la presente diferencia son las leyes, reglamentos y demás medidas citadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, como han sostenido los Estados Unidos, o la manera en que se lleva a cabo la aplicación del sistema aduanero comunitario, como han sostenido las Comunidades Europeas.

i) Interpretación de la expresión "medidas en litigio" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD

7.8 Como antecedentes para su examen de la(s) "medida(s) en litigio" a los efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial examinará en primer lugar de forma general el sentido de la expresión "medidas ... en litigio", que figura en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

7.9 El párrafo 2 del artículo 6 del ESD establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

> "[En] las peticiones de establecimiento de grupos especiales ... se identificarán las *medidas* concretas *en litigio* y se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad." (Sin cursivas en el original)

7.10 En síntesis, el párrafo 2 del artículo 6 del ESD establece dos requisitos distintos que deben cumplirse en relación con una solicitud de establecimiento de un grupo especial: 1) la solicitud debe identificar las medidas concretas en litigio; y 2) en ella debe hacerse una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación.

7.11 La "medida en litigio" identificada en la solicitud de establecimiento de un grupo especial desempeña una función esencial en una diferencia sustanciada en el marco de la OMC por varias razones.

7.12 *En primer lugar*, la "medida en litigio" juntamente con "los fundamentos de derecho de la reclamación" delimitan el "asunto sometido al OSD" que constituye la base del mandato del Grupo Especial conforme al párrafo 1 del artículo 7 del ESD.[248] A su vez, el mandato del Grupo Especial delimita el alcance de la diferencia y cumple el objetivo del debido proceso al proporcionar

[246] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 10.

[247] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 9, en el que se hace referencia al informe del Órgano de Apelación, *CE - Bananos III*, párrafo 200.

[248] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 125.

información a las partes y a los terceros en una diferencia sobre la naturaleza de los argumentos del reclamante.[249]

7.13 *En segundo lugar*, la "medida en litigio" identificada en la solicitud de establecimiento del grupo especial es la que debe ponerse en conformidad en caso de que se constate que infringe una obligación en el marco de la OMC. Ello se deduce de forma evidente, entre otras cosas, del párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

> "Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que una *medida* es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado *la* ponga en conformidad con ese acuerdo." (Sin cursivas en el original)

7.14 El Grupo Especial entiende que hay una interrelación entre la referencia a "medidas" del párrafo 1 del artículo 19 del ESD y la referencia a "medidas ... en litigio" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En particular, los grupos especiales o el Órgano de Apelación sólo pueden formular recomendaciones de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD con respecto a una medida que haya sido identificada concretamente en la solicitud pertinente de establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD y que se haya constatado que es incompatible con una obligación derivada de las normas de la OMC.

7.15 Es pertinente a la interpretación del término "medidas" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD la siguiente declaración del Órgano de Apelación:

> "En principio, todo acto u omisión atribuible a un Miembro de la OMC puede ser una medida de ese Miembro a efectos del procedimiento de solución de diferencias.[250] Los actos u omisiones que pueden ser atribuidos de ese modo son habitualmente los actos u omisiones de los órganos del Estado, incluidos los del poder ejecutivo.[251]
>
> Además, en la práctica de solución de diferencias del GATT y la OMC, los grupos especiales han examinado con frecuencia medidas que consistían no sólo en actos concretos aplicados solamente a una situación específica, sino también actos que establecen reglas o normas destinadas a ser aplicadas de manera general y prospectiva.[252] En otras palabras, los instrumentos de un Miembro que contengan

[249] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 126.

[250] (*Nota del original*) En esta apelación no es necesario que examinemos cuestiones conexas, como la medida en que los actos u omisiones de gobiernos regionales o locales, o incluso las acciones de entidades privadas, pueden atribuirse a un Miembro en determinadas circunstancias.

[251] (*Nota del original*) Tanto las determinaciones específicas realizadas por los organismos ejecutivos de un país Miembro como los reglamentos promulgados por su poder ejecutivo pueden constituir actos atribuibles a ese Miembro. Véase, por ejemplo, el informe del Grupo Especial en *Estados Unidos - DRAE*, en el que las medidas sometidas al Grupo Especial incluían una determinación del USDOC en un examen administrativo así como una disposición reglamentaria emitida por el USDOC.

[252] (*Nota del original*) Véanse, por ejemplo, el informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Superfund*; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Bebidas derivadas de la malta*; informe del Grupo Especial, *CEE - Piezas y componentes*; informe del Grupo Especial, *Tailandia - Cigarrillos*; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Tabaco*; informe del Grupo Especial, *Argentina - Textiles y prendas de vestir*; informe del Grupo Especial, *Canadá - Aeronaves*; informe del Grupo Especial, *Turquía - Textiles*; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - EVE*; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Ley de 1916 (CE)*; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Ley de 1916 (Japón)*; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Limitaciones de las exportaciones*; informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - EVE (Párrafo 5 del artículo 21 - CE)*; informe del Grupo

> reglas o normas pueden constituir una "medida" con independencia de que esas reglas o normas se apliquen en un caso concreto y de cómo se apliquen. Esto es así porque las disciplinas del GATT y de la OMC, así como el sistema de solución de diferencias, tienen por objeto proteger no sólo el comercio actual sino también la seguridad y previsibilidad necesarias para llevar a cabo el comercio futuro. Este objetivo quedaría frustrado si los instrumentos que establecen reglas o normas incompatibles con las obligaciones de un Miembro no pudieran someterse a un grupo especial una vez que hayan sido adoptados y con independencia de cualquier caso concreto de aplicación de tales reglas o normas.[253] También daría lugar a múltiples litigios si los instrumentos que incorporan reglas o normas no pudieran ser impugnados en sí mismos, sino únicamente en los supuestos de aplicación. Por consiguiente, la posibilidad de formular alegaciones contra medidas, en sí mismas, sirve para evitar diferencias futuras al permitir que se elimine la raíz del comportamiento incompatible con las normas de la OMC."[254]

7.16 En lo que respecta a la importancia que debe atribuirse, en su caso, a la expresión "en litigio" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD con referencia a las medidas concretas que es preciso que se identifiquen en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, el Grupo Especial señala que el sentido corriente de esa expresión indica que se refiere a lo que es impugnado por el reclamante.[255] En consecuencia, entendemos que la expresión "medida(s) ... en litigio" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD hace referencia a la medida impugnada en una diferencia determinada.

7.17 A juicio del Grupo Especial, la expresión "medida(s) ... en litigio" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD debe interpretarse a la luz de la obligación concreta derivada de las normas de la OMC que se supone infringida por la medida en una determinada diferencia. El Grupo Especial considera que ese enfoque es necesario por cuanto la "medida en litigio" a la que se ha hecho referencia en una solicitud de establecimiento del Grupo Especial de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD será el objeto de la recomendación de que la medida se ponga en conformidad, en cumplimiento del párrafo 1 del artículo 19 del ESD, formulada por un grupo especial y/o por el Órgano de Apelación, si se constata que infringe una obligación derivada de las normas de la OMC. La forma en que es preciso poner en conformidad la medida está claramente relacionada con el contenido sustantivo de la obligación derivada de las normas de la OMC con la que se ha constatado que la medida en cuestión es incompatible. En consecuencia, el Grupo Especial considera que, al menos en el contexto de algunas alegaciones, el contenido sustantivo de la obligación derivada de las normas de la OMC con la que puede haberse constatado que una medida es incompatible puede influir en la interpretación de la expresión "medidas ... en litigio" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Una vez dicho esto, hay que aclarar que el Grupo Especial no pretende sugerir que sea preciso refundir y evaluar como un único requisito los requisitos independientes del párrafo 2 del artículo 6 del ESD de identificar las medidas concretas en litigio y de hacer una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación. Por el contrario, esos requisitos responden a propósitos distintos. En tanto que el requisito de hacer referencia a la "medida en litigio" concreta en la solicitud de establecimiento

---

Especial, *Chile - Sistema de bandas de precios*. Véase también el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafos 156 y 157. Véase también, informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de 1916*, notas 34 y 35 a los párrafos 60 y 61, respectivamente.

[253] (*Nota del original*) Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Superfund*, párrafo 5.2.2.

[254] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, párrafos 81 y 82.

[255] El *New Shorter Oxford English Dictionary* define "*at issue*" (en litigio) como "*the position of parties of which one affirms and the other denies a point*" (la posición de las partes cuando una afirma y la otra niega algo): *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 1.428.

de un grupo especial responde al propósito de identificar el acto u omisión de un Miembro de la OMC impugnado, el requisito de hacer una exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación indica la pauta de referencia o criterio jurídico para evaluar el acto u omisión con el fin de determinar si es o no incompatible con las normas de la OMC. No obstante, aunque se trata de requisitos claramente diferenciados que responden a propósitos distintos, esos requisitos están interrelacionados, por cuanto la interpretación de uno de ellos en el contexto de una determinada diferencia puede informar la interpretación del otro.

ii) La(s) "medida(s) en litigio" a los efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

7.18 Teniendo presentes las anteriores consideraciones generales, el Grupo Especial se ocupa a continuación de la cuestión de cuáles son las "medidas en litigio" a los efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Comenzamos por analizar los aspectos pertinentes del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 ya que, como se ha indicado en el párrafo 7.17 *supra*, la expresión "medida(s) ... en litigio" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD debe interpretarse a la luz de la obligación concreta derivada de las normas de la OMC que la medida supuestamente infringe.

7.19 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 establece lo siguiente:

> "Cada parte contratante aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo."

7.20 A juicio del Grupo Especial, el aspecto esencial de la obligación establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 que tiene importancia para la interpretación de la expresión "medidas ... en litigio" del párrafo 2 del artículo 6 del ESD a efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es la exigencia de aplicar los instrumentos de que se trata "de manera uniforme, imparcial y razonable". El Grupo Especial considera que, a la luz de este aspecto esencial de la obligación establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, cuando se alegue una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 la solicitud pertinente de establecimiento de un grupo especial debe identificar la manera de aplicación supuestamente no uniforme, parcial y/o no razonable.

7.21 A este respecto, el Grupo Especial recuerda que del párrafo 2 del artículo 6 y del párrafo 1 del artículo 19 del ESD se deduce evidentemente que lo que debe ponerse en conformidad en caso de que se constate que la medida en cuestión infringe una obligación derivada de las normas de la OMC es la "medida en litigio" identificada en la solicitud de establecimiento del grupo especial. Si se constata que un Miembro de la OMC infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, ello significa que la manera en que ese Miembro aplica las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y/o disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 no es uniforme, imparcial y/o razonable. Si, habida cuenta de esa infracción, un Grupo Especial o el Órgano de Apelación ha recomendado al OSD que el Miembro ponga la medida de que se trata en conformidad, el Miembro habrá de modificar la *manera* en que *se aplican* las leyes, reglamentos, decisiones y/o resoluciones pertinentes para dar cumplimiento a esa recomendación.

7.22 Aunque "la medida en litigio" a efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es la manera en que se lleva a cabo la aplicación, que supuestamente no es uniforme, es parcial y/o no es razonable, ello no significa necesariamente que la mera identificación de la manera en que se lleva a cabo la aplicación en una solicitud de establecimiento de un grupo especial basta para cumplir el requisito del párrafo 2 del artículo 6 del ESD de identificar la medida *concreta* en litigio. A juicio del Grupo Especial, lo que es necesario para cumplir el requisito de concreción del párrafo 2 del artículo 6 del ESD variará según los casos. En la siguiente sección de

nuestro informe analizamos, entre otras cosas, el requisito de concreción del párrafo 2 del artículo 6 del ESD a los efectos de la presente diferencia.

iii) La "medida en litigio" a efectos de la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en la presente diferencia

7.23 El Grupo Especial examinará ahora en su conjunto la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos para determinar la(s) medida(s) concreta(s) en litigio a efectos de la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en la presente diferencia. En su solicitud de establecimiento de un grupo especial, los Estados Unidos se refieren al aspecto esencial de la obligación establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 indicada en el párrafo 7.20 *supra*, es decir, la manera en que se lleva a cabo la aplicación que supuestamente tiene por resultado una falta de uniformidad.[256]

Manera en que se lleva a cabo la aplicación

7.24 En concreto, la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos declara, en la parte pertinente, lo siguiente:

> "Los Estados Unidos consideran que la *manera* en que las Comunidades Europeas ("CE") *aplican* las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* ("GATT de 1994") no es uniforme, imparcial y razonable, y, por lo tanto, es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.
>
> ...
>
> *Llevan a cabo* la aplicación [de las medidas indicadas en el párrafo 7.23 *infra*] en las Comunidades Europeas *las autoridades aduaneras nacionales* de los Estados miembros de las CE. Tal aplicación adopta numerosas formas diferentes. Los Estados Unidos entienden que *las incontables formas de aplicación* de esas medidas incluyen, sin que la enumeración sea exhaustiva, las leyes, reglamentos, guías, manuales y prácticas administrativas de las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las Comunidades Europeas."[257] (Sin cursivas en el original)

7.25 Los términos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos indican que éstos impugnan la manera en que se lleva a cabo la aplicación de determinados aspectos de la normativa aduanera comunitaria.[258] En la solicitud se aclara que la aplicación impugnada por los Estados Unidos es la que llevan a cabo las "autoridades aduaneras

[256] Como se ha indicado anteriormente, en la nota 15 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos han aclarado que, en el contexto de la presente diferencia, sólo alegan que la manera en que el sistema de administración aduanera de las CE lleva a cabo la aplicación no es "uniforme", con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Los Estados Unidos han declarado expresamente que no se pronuncian acerca de si la manera en que el sistema comunitario lleva a cabo la aplicación es o no "imparcial" "razonable" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

[257] Documento WT/DS315/8, reproducido en el anexo D del informe del Grupo Especial.

[258] En sus comunicaciones al Grupo Especial en el presente procedimiento, los Estados Unidos han confirmado que impugnan la manera en que se lleva a cabo la aplicación de las medidas mencionadas en su solicitud de establecimiento de un grupo especial y no el contenido sustantivo de esas medidas: Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 1, 4 y 128 del Grupo Especial.

nacionales de los Estados miembros de las CE". Además, la solicitud indica que las formas concretas de aplicación por parte de las autoridades aduaneras nacionales impugnadas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 incluyen, entre otros instrumentos, las leyes, reglamentos, guías, manuales y prácticas administrativas.

> "Leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994"

7.26 Hay que destacar que la solicitud de los Estados Unidos hace referencia también a las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994", que los Estados Unidos alegan que no se aplican de manera uniforme, con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En particular, la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos declara, en la parte pertinente, lo siguiente:

> "A los efectos de la presente solicitud, las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas (colectivamente, 'medidas') que las Comunidades Europeas no aplican de tal manera se refieren a la clasificación y valoración de productos a efectos aduaneros y a las prescripciones, restricciones o prohibiciones en información. Las medidas son las siguientes:
>
> - Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, incluidos todos sus anexos, modificado [el 'Código Aduanero Comunitario'];
>
> - Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 2 de octubre de 1992, por el que se establece el Código aduanero comunitario, incluido todos sus anexos, modificado [el 'Reglamento de Aplicación'];
>
> - Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, incluidos todos sus anexos, modificado [el 'Arancel Aduanero Común'];
>
> - el arancel integrado de las Comunidades Europeas establecido en virtud del artículo 2 del Reglamento (CE) Nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, incluidos todos sus anexos, modificado [el 'TARIC']; y
>
> - todas las modificaciones, medidas de aplicación y demás medidas conexas respecto de cada una de las leyes y reglamentos mencionados *supra*."[259]

7.27 En opinión del Grupo Especial, el requisito de concreción del párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que se indiquen en la solicitud de establecimiento del grupo especial las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refieren el párrafo [1 del artículo X del GATT de 1994]" que se alega que se aplican de una manera que infringe lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. A este respecto, el Grupo Especial recuerda que los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, incluida la obligación de identificar *concretamente* la "medida en litigio" responden al importante objetivo de facilitar información a las partes y a los terceros en la diferencia acerca de la naturaleza de los argumentos del reclamante conforme a las

[259] Documento WT/DS315/8, reproducido en el anexo D del informe del Grupo Especial.

debidas garantías de procedimiento. Consideramos que ese objetivo no se alcanzaría plenamente si se informara únicamente al Miembro demandado de la manera en que se lleva cabo la aplicación que tiene supuestamente por resultado la falta de uniformidad, la parcialidad y/o la no razonabilidad, pero no de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales o disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera contraria a la prescrita en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.28 El Grupo Especial observa además que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos se refiere a todas "las modificaciones, medidas de aplicación y demás medidas conexas" respecto del Código Aduanero Común, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común y el TARIC. Los amplios términos utilizados por los Estados Unidos indican que las medidas que modifiquen o apliquen el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común o el TARIC o sean medidas conexas a esos instrumentos pueden estar comprendidas en el ámbito de nuestro mandato.[260]

Esferas de la administración aduanera

7.29 Una de las cuestiones que se ha planteado en el contexto de la presente diferencia es si el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, en conexión con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, exige además la identificación de las esferas concretas de la administración aduanera respecto de las cuales se alega que se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.30 El Grupo Especial señala que, en este caso, los Estados Unidos han impugnado la aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas. Esas medidas contienen, en conjunto, literalmente miles de disposiciones diferentes, se refieren a una amplia gama de esferas aduaneras diferentes y pueden entrañar la aplicación de esas medidas en una gran cantidad de formas distintas.[261] En consecuencia,

[260] Véase, a este respecto, el análisis que hace el Grupo Especial en los párrafos 7.36 y 7.37 *infra*.

[261] El Código Aduanero Comunitario (Estados Unidos - Prueba documental 5) comprende 253 artículos, y está dividido en 9 títulos, que se ocupan de los siguientes temas: Título I: Disposiciones Generales; Título II: Elementos en el que se basa la aplicación de los derechos de importación o de exportación y demás medidas previstas en el marco de los intercambios de mercancías; Título III: Disposiciones aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad en tanto no se les haya atribuido un destino aduanero; Título IV: Destinos aduaneros; Título V: Mercancías que salgan del territorio aduanero de la Comunidad; Título VI: Operaciones privilegiadas; Título VII: Deuda aduanera; Título VIII: Recursos; Título IX: Disposiciones finales.

El Reglamento de Aplicación (Estados Unidos - Prueba documental 6) comprende 915 artículos, que tratan de los siguientes temas: PARTE I: Disposiciones de aplicación generales: Título I: Generalidades; Título II: Informaciones vinculantes; Título III: Tratamiento arancelario favorable en razón de la naturaleza de la mercancía; Título IV: Origen de las mercancías; Título V: Valor en aduana; Título VI: Introducción de las mercancías en el territorio aduanero; Título VII: Declaración en aduana - Procedimiento normal; Título VIII: Examen de las mercancías, reconocimiento y otras medidas tomadas por la aduana; Título IX: Procedimientos simplificados. PARTE II: Los destinos aduaneros: Título I: Despacho a libre práctica; Título II: Estatuto aduanero de las mercancías en tránsito; Título III: Regímenes aduaneros económicos; Título IV: Disposiciones de aplicación relativas a la exportación; Título V: Otros destinos aduaneros; Título VI: Mercancías que salgan del territorio aduanero de la Comunidad. PARTE III: Operaciones privilegiadas: Título I: Mercancías de retorno. PARTE IV: Deuda aduanera: Título I: Garantías; Título II: Nacimiento de la deuda; Título III: Recaudación del importe de la deuda aduanera; Título IV: Evolución o condonación de los derechos de importación o de exportación. PARTE IV bis: Control del uso y destino de las mercancías. PARTE V: Disposiciones finales.

El Arancel Aduanero Común comprende 21 secciones, que abarcan 99 capítulos e incluye más de 5.000 partidas arancelarias.

consideramos que, en el contexto de la presente diferencia, el requisito de concreción del párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige además la identificación de la esferas aduaneras en cuyo contexto los Estados Unidos alegan que la obligación establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 ha sido violada. A nuestro parecer, sin esa concreción adicional acerca de las esferas aduaneras en cuestión, se privaría a las Comunidades Europeas de su derecho a ser informadas, en el marco de un procedimiento con las debidas garantías, de la naturaleza de la alegación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.31 A este respecto, destacamos que en el asunto *CE - Equipo informático*, el Órgano de Apelación se ocupó de la cuestión de si las medidas en litigio y los productos a los que afectaban esas medidas habían sido identificados de modo suficientemente concreto a los efectos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. El Órgano de Apelación señaló en ese asunto que, aun cuando "el párrafo 2 del artículo 6 del ESD *no* exige expresamente que se identifiquen los productos a los que se aplican las 'medidas concretas en litigio' ... en lo concerniente a ciertas obligaciones en el marco de la OMC, *para identificar 'las medidas concretas en litigio' tal vez sea necesario también identificar los productos sujetos a esas medidas*".[262] El Grupo Especial considera, que en el contexto del presente asunto, la identificación de las esferas de la administración aduanera en litigio es necesaria para identificar *concretamente* las "medidas en litigio" de la forma que ha indicado el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Equipo informático*. Dicho de otro modo, las esferas de la administración aduanera contribuyen a identificar *concretamente* las "medidas en litigio", es decir, la manera en que se lleva a cabo la aplicación.

7.32 En el presente caso, la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos identifica concretamente las siguientes esferas de la administración aduanera:

- la clasificación y valoración de mercancías;
- los procedimientos para la clasificación y valoración de mercancías, incluida la facilitación a los importadores de información vinculante sobre clasificación y valoración;
- los procedimientos para la entrada y levante de mercancías, incluidas las prescripciones diferentes en materia de certificados de origen, los criterios diferentes entre los Estados miembros respecto de la inspección física de mercancías, las prescripciones diferentes en materia de diferencias para la importación de productos alimenticios y los procedimientos diferentes para tramitar envíos de entrega urgente;
- los procedimientos para controlar las declaraciones de entrada una vez que se ha permitido la incorporación de las mercancías al circuito comercial de las Comunidades Europeas;
- las sanciones y los procedimientos de imposición de sanciones por infracción de las normas aduaneras; y
- las prescripciones para mantenimiento de registros.[263]

[262] Informe del Órgano de Apelación, *CE - Equipo informático*, párrafo 67.

[263] Documento WT/DS315/8, reproducido en el anexo D del informe del Grupo Especial.

iv) Resumen

7.33 A juicio del Grupo Especial, de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, considerada en su conjunto, se desprende que la "medida concreta en litigio" en la presente diferencia a los efectos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es la manera en que las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros aplican el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos (la clasificación y valoración de mercancías, los procedimientos para la clasificación y valoración de mercancías, los procedimientos para la entrada y levante de mercancías, los procedimientos para controlar las declaraciones de entrada una vez que las mercancías han sido despachadas a libre práctica, las sanciones y los procedimientos de imposición de sanciones por infracción de las normas aduaneras y las prescripciones para mantenimiento de registros). En consecuencia, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7 del ESD, con arreglo a nuestro mandato sólo estamos autorizados a examinar la manera en que las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros aplican el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.

2. Cuestiones temporales concernientes al mandato del Grupo Especial

a) Resumen de los argumentos de las partes

7.34 Las **Comunidades Europeas** sostienen que el mandato del Grupo Especial sólo incluye las medidas vigentes en el momento en que el asunto le fue sometido por el OSD. En consecuencia, según las Comunidades Europeas, el Grupo Especial no puede formular constataciones con respecto a medidas que no estaban ya en vigor en el momento en que fue establecido ni a medidas que aún no estaban en vigor en ese momento.[264]

b) Análisis por el Grupo Especial

7.35 El Grupo Especial observa que las Comunidades Europeas han planteado la cuestión de la existencia o no de limitaciones temporales en relación con las medidas con respecto a las cuales el Grupo Especial puede formular constataciones al abordar la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En concreto, las Comunidades Europeas aducen que el mandato del Grupo Especial sólo incluye las medidas vigentes en el momento en que le fue sometido el asunto por el OSD. En consecuencia, según las Comunidades Europeas, el Grupo Especial no puede formular constataciones con respecto a medidas que no estaban ya en vigor en el momento en que fue establecido ni a medidas que aún no estaban en vigor en ese momento.[265]

7.36 Entendemos que, como principio general, un grupo especial es competente para formular constataciones y recomendaciones con respecto a medidas vigentes en el momento en que fue establecido, siempre que la solicitud de establecimiento del grupo especial abarque esas medidas. No obstante, puede ser también competente para formular constataciones y hacer recomendaciones con respecto a medidas que han expirado o que no están aún en vigor en el momento del establecimiento del grupo especial, siempre que la solicitud de establecimiento abarque esas medidas.

[264] Observaciones de las Comunidades Europeas a la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial.

[265] Observaciones de las Comunidades Europeas a la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial.

De forma más concreta, entendemos que, en el grado en que medidas que ya no están en vigor afecten al funcionamiento de un acuerdo abarcado en el momento del establecimiento de un grupo especial, esas medidas pueden ser adecuadamente objeto de constataciones y recomendaciones de éste último, especialmente en el caso de que esas constataciones y recomendaciones sean necesarias para lograr una solución positiva de la diferencia.[266] De forma análoga, las medidas que no están en vigor en el momento del establecimiento del grupo especial pueden ser objeto de constataciones y recomendaciones de éste cuando entren en vigor siempre que no entrañen una modificación de la naturaleza esencial de los argumentos del Miembro reclamante tal y como se reflejan en su solicitud de establecimiento de un grupo especial.[267]

7.37 En el contexto de la presente diferencia, el Grupo Especial recuerda que la "medida concreta en litigio" en ella abarca *la manera en que se aplican* el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas. Como se pondrá de manifiesto cuando el Grupo Especial proceda a interpretar y aplicar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el contexto de los casos concretos de infracción alegados por los Estados Unidos, cabe la posibilidad de que la manera en que se lleva a cabo la aplicación en un caso determinado no tenga un punto inicial o un punto final claro. De forma más concreta, la aplicación puede ser parte de una serie de actos o medidas interrelacionados en curso que, en consecuencia, puede implicar actos o medidas que no existían ya o aún no existían en el momento del establecimiento del grupo especial. Dicho de otra forma, la aplicación puede comprender una serie continua de medidas y actos, algunos de los cuales pueden ser anteriores o posteriores a la medida o acto de aplicación examinado por un grupo especial en el momento de su establecimiento.[268] A nuestro juicio, las medidas y actos de aplicación anteriores o posteriores al establecimiento de un grupo especial pueden ser pertinentes para determinar la existencia o no de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el momento del establecimiento. La pertinencia de estas observaciones se pondrá de manifiesto cuando abordemos en nuestro informe los casos concretos de supuesta infracción por las Comunidades Europeas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

3. Alcance de la impugnación del sistema comunitario de administración aduanera por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

a) Resumen de los argumentos de las partes

7.38 Los **Estados Unidos** sostienen que, con respecto a la alegación que formulan al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, impugnan la falta de uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria en general.[269] Los Estados Unidos afirman que su solicitud de establecimiento de un grupo especial indica que su impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la falta de uniformidad de la aplicación de la normativa aduanera comunitaria en general y demuestra que una impugnación basada en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria en general está comprendida en el ámbito del mandato del Grupo Especial. De forma más concreta, los Estados Unidos explican que, en primer lugar, la solicitud

[266] Véanse el informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Algodón americano* (*upland*), párrafo 261; el informe del Órgano de Apelación, *Chile - Sistema de bandas de precios*, párrafos 126 a 144; y el informe del Órgano de Apelación, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 156.

[267] Véase el informe del Órgano de Apelación, *Chile - Sistema de bandas de precios*, párrafos 126 a 144.

[268] A este respecto, el Grupo Especial recuerda que, por regla general, se pide a los grupos especiales que examinen medidas vigentes en el momento del establecimiento del grupo especial.

[269] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial.

identifica el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación y el Arancel Aduanero Común, que, a juicio de los Estados Unidos, son los elementos principales de la normativa aduanera comunitaria en general. Los Estados Unidos añaden que más adelante en su solicitud de establecimiento de un grupo especial aclaran que la falta de una aplicación uniforme en la que se basa la reclamación de los Estados Unidos "es evidente en las diferencias entre los Estados miembros en diversas esferas, incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva", las que indican. Según los Estados Unidos, esos aspectos de su solicitud de establecimiento de un grupo especial demuestran que una impugnación basada en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria en su conjunto está comprendida en el ámbito del mandato del Grupo Especial.[270] Los Estados Unidos añaden que, en las diversas comunicaciones que han presentado, han descrito el problema de la aplicación no uniforme en las Comunidades Europeas en términos sistémicos y han expuesto a continuación la forma en que ese problema se pone de manifiesto en las tres esferas de la clasificación arancelaria, la valoración en aduana y los regímenes aduaneros.[271]

7.39 Las **Comunidades Europeas** aducen que los Estados Unidos se han negado a identificar los aspectos concretos de la administración aduanera de las CE impugnados.[272] Según las Comunidades Europeas, la medida en litigio en la presente diferencia es la aplicación de la normativa aduanera comunitaria en las esferas a las que se hace concretamente referencia en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, de la forma precisada en la Primera comunicación escrita de ese país, es decir, la clasificación arancelaria, la valoración en aduana, la transformación bajo control aduanero, los procedimientos de domiciliación y las sanciones. Las Comunidades Europeas sostienen que el título de la presente diferencia ("*Determinadas* cuestiones aduaneras" (sin cursivas en el original)) confirma que el mandato tiene un carácter más limitado. Las Comunidades Europeas concluyen que los Estados Unidos no pueden tratar de incluir todas las cuestiones aduaneras en el mandato del Grupo Especial impugnando el sistema de administración aduanero de las CE en su conjunto.[273] Las Comunidades Europeas añaden que esa interpretación amplia de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no se ajusta a las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, que exige una identificación suficiente de las medidas concretas en litigio.[274] Las Comunidades Europeas sostienen que no puede exigirse a las Comunidades que se defiendan de acusaciones vagas de falta de uniformidad en la aplicación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en esferas que los Estados Unidos no han identificado en su solicitud de establecimiento de un grupo especial ni en su Primera comunicación escrita.[275]

b) Análisis por el Grupo Especial

7.40 En el contexto de la presente diferencia, se ha pedido al Grupo Especial que determine si los Estados Unidos pueden impugnar el sistema de administración aduanera de las CE en general o en su conjunto, como han sostenido los Estados Unidos o si, por el contrario, sólo pueden formular argumentos con respecto a las esferas aduaneras concretas identificadas en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, como han sostenido las Comunidades Europeas.

---

[270] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial.

[271] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 3 del Grupo Especial.

[272] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 12.

[273] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 13.

[274] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial.

[275] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 14.

7.41 Antes de ocuparse de esta cuestión concreta, el Grupo Especial desearía formular algunas observaciones generales acerca de su mandato, que pueden tener importancia para la cuestión.

7.42 *En primer lugar*, el mandato del Grupo Especial no cambia en el curso del tiempo ni se ve afectado por la forma en que los miembros reclamantes expongan sus argumentos.[276] Como hemos declarado antes, el mandato de un grupo especial está definido por la solicitud de establecimiento del mismo. Si la solicitud está redactada en términos amplios, el mandato del grupo especial tendrá una amplitud paralela durante el período en el que le esté encomendada la solución de una diferencia. Un Miembro reclamante que exponga sus argumentos en cualquier momento del procedimiento del grupo especial en términos más limitados de los formulados en su solicitud de establecimiento de un grupo especial no está obligado a contraerse a esos términos más limitados durante el resto del procedimiento ante el grupo especial.

7.43 *En segundo lugar*, el título de un asunto no tiene ninguna influencia en el alcance del mandato de un grupo especial. Como se ha indicado anteriormente, el mandato del grupo especial está definido por las medidas y las alegaciones identificadas en la solicitud de establecimiento. Ni el artículo 7 del ESD, que define el mandato de los grupos especiales, ni los requisitos conexos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD hacen referencia al título del asunto.[277] En último término, el carácter amplio o limitado de una determinada impugnación dependerá exclusivamente de los términos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial pertinente.

7.44 En cuanto a la cuestión concreta sobre la que se nos ha pedido que nos pronunciemos, identificada en el párrafo 7.40 *supra*, no hay en el ESD ni en los demás acuerdos de la OMC ninguna disposición que impida a un Miembro reclamante impugnar el sistema de un Miembro demandado en su conjunto o de forma general. No obstante, si un Miembro reclamante desea formular una impugnación de esa naturaleza, la solicitud de establecimiento de un grupo especial en la que se impugne el sistema del Miembro demandado en su conjunto o de forma general debe ajustarse a las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. El cumplimiento o no de las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD en un caso concreto dependerá de la solicitud concreta de establecimiento de un grupo especial y de los hechos pertinentes que concurran en el caso.

7.45 Los Estados Unidos han sostenido que su impugnación del sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto o en general se desprende claramente de dos aspectos de su solicitud de establecimiento de un grupo especial. *En primer lugar*, afirman que la solicitud identifica el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación y el Arancel Aduanero Común, que los Estados Unidos aducen que son los principales elementos de la normativa aduanera comunitaria en su conjunto. Dicho de otra forma, los Estados Unidos sostienen que, puesto que han identificado lo que califican de "elementos principales" del sistema de administración aduanera de las CE en su solicitud, están impugnando, el sistema de las CE en su conjunto. *En segundo lugar*, los Estados Unidos sostienen que su solicitud aclara que la falta de una aplicación uniforme en la que se basa su alegación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 "es evidente en las diferencias entre los Estados miembros en diversas esferas, *incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva*" las esferas que se indican expresamente en la solicitud. Los Estados Unidos señalan que la formulación

[276] No obstante, esto no quiere decir que un Grupo Especial esté obligado a formular constataciones y/o resoluciones y recomendaciones con respecto a todas las medidas y alegaciones identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Por el contrario, el Grupo Especial puede pronunciarse únicamente sobre aquellas cuestiones sobre las que sea necesario hacerlo para hallar una solución positiva a una diferencia: informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Camisas y blusas de lana*, página 19.

[277] Además, el Grupo Especial señala que el título de una diferencia suele proceder de la Secretaría de la OMC.

general de su solicitud indica que su alegación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 abarca el sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto.

7.46 A juicio del Grupo Especial, de conformidad con los términos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, éstos no pueden impugnar el sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto o en general en la presente diferencia. El Grupo Especial opina que, debido al texto y al contenido de la solicitud de los Estados Unidos, el mandato del Grupo Especial en relación con el alcance de la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se limita a las esferas concretas de la administración aduanera a que se hace referencia en esa solicitud, que son las indicadas en el párrafo 7.32 *supra*. Exponemos a continuación nuestro razonamiento a ese respecto.

7.47 *En primer lugar*, el Grupo Especial considera que las referencias que hacen los Estados Unidos en su solicitud de establecimiento de un grupo especial al Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación y el Arancel Aduanero Común no pueden considerarse separadamente de la referencia que se hace en esa solicitud a diversas esferas de la administración aduanera.[278] Esos aspectos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, considerados conjuntamente, indican que la alegación formulada por ese país al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se extiende a algunas, pero no a todas, las esferas de la administración aduanera abarcada por el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación y el Arancel Aduanero Común.

7.48 *En segundo lugar*, el Grupo Especial señala que las esferas de la administración aduanera enunciadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no abarcan la gama completa de esferas que forman la totalidad del sistema de administración aduanera de las CE. El ámbito de esa gama de esferas se hace patente a partir del contenido de las diversas medidas a que hacen referencia los Estados Unidos en su solicitud (el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y otras "medidas conexas"). Entre las esferas que forman parte del sistema comunitario de administración aduanera, pero a las que no han hecho referencia los Estados Unidos en su solicitud, figuran los regímenes de tránsito, la deuda aduanera, el perfeccionamiento activo, el perfeccionamiento pasivo, la exportación y la reexportación.[279] A juicio del Grupo Especial, esas esferas del sistema comunitario de

[278] El Grupo Especial recuerda la constatación que se recoge en el párrafo 7.33 *supra* de que la "medida concreta en litigio" en la presente diferencia a los efectos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es la manera en que las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros aplican el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. El Grupo Especial señala además que, al referirse a diversos elementos de su solicitud de establecimiento de un grupo especial en apoyo de su argumento de que la solicitud se refiere al sistema comunitario de administración aduanera en su conjunto, los propios Estados Unidos parecen propugnar el enfoque de que los diversos aspectos de las "medidas en litigio" a los efectos de una alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 deben considerarse conjuntamente: Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial.

[279] Los "regímenes de tránsito" se rigen, entre otros, por los artículos 54 y 55, 91 a 97 y 163 a 165 del Código Aduanero Comunitario y los artículos 309 a 495, 616 a 623 y 712 a 716 del Reglamento de Aplicación. La "deuda aduanera" se regula, entre otros, en los artículos 189 a 242 del Código Aduanero Comunitario y los artículos 857 a 912 del Reglamento de Aplicación. El "perfeccionamiento activo" se rige por los artículos 114 a 129 del Código Aduanero Comunitario y los artículos 275 y 276, 538 a 547, 549 a 649 y 829 a 839 del Reglamento de Aplicación. El "perfeccionamiento pasivo" se rige, entre otros, por los artículos 145 a 160 del Código Aduanero Comunitario y los artículos 277 y 748 a 787 del Reglamento de Aplicación. La "exportación" se regula, entre otros, en los artículos 161 y 162 del Código Aduanero Comunitario y los artículos 788 a 798 y 843 a 856 del Reglamento de Aplicación. La "reexportación" se rige, entre otros, por el artículo 182 del Código Aduanero Comunitario y los artículos 841 y 842 del Reglamento de Aplicación.

administración aduanera no son insignificantes desde el punto de vista de la frecuencia con la que se recurre a ellas y del volumen del comercio al que afectan. En consecuencia, merece destacarse su ausencia de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, ausencia que apoya la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 7.42 *supra* de que, sobre la base de su solicitud de establecimiento de un grupo especial, los Estados Unidos no pueden impugnar de forma general o en su conjunto el sistema de administración aduanera de las CE al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en la presente diferencia.

7.49 *Por último*, el Grupo Especial señala que la lista de las esferas de la administración aduanera que figura en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos está precedida del siguiente texto: "La falta de una aplicación uniforme, imparcial y razonable de las medidas identificadas *supra* es evidente en las diferencias entre los Estados miembros en diversas esferas, *incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva, las siguientes* ...". No consideramos que la expresión "incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva" tenga por sí misma el efecto jurídico de incorporar al mandato del Grupo Especial *todas* las esferas de la administración aduanera del sistema de las CE y no sólo aquéllas identificadas expresamente en la solicitud de los Estados Unidos. A nuestro juicio, si hubiéramos de interpretar que esta expresión tiene el efecto jurídico de incluir esferas que no han sido identificadas específicamente en la solicitud, esa interpretación socavaría un importante objetivo en el marco de un procedimiento con las debidas garantías al que responde el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, en concreto el de facilitar a la parte demandada y a los terceros en una diferencia información suficiente sobre la naturaleza de los argumentos del reclamante.[280]

7.50 Habida cuenta de lo precedente y tras haber examinado en su conjunto la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, el Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que su mandato en relación con la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no abarca una impugnación del sistema comunitario de administración aduanera en su conjunto o en general al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sino que, como se declara en el párrafo 7.33 *supra*, nuestro mandato se reduce a la manera en que las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros aplican el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.

4. Naturaleza de la impugnación del sistema comunitario de administración aduanera por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

a) Resumen de los argumentos de las partes

7.51 Los **Estados Unidos** manifiestan que impugnan el diseño y estructura del sistema de administración aduanera de las CE "en sí mismo". Según los Estados Unidos, aunque es cierto que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación, un sistema de administración aduanera "en sí mismo" puede infringir el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 si tiene como resultado necesario una aplicación no uniforme.[281] Los Estados Unidos sostienen que, en el caso del sistema de administración aduanera de las CE, lo que tiene necesariamente como resultado una aplicación no uniforme, con infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es la ausencia en el diseño y estructura de ese sistema de un elemento crítico, es decir, la inexistencia de un procedimiento o institución que garantice que no se produzcan divergencias de aplicación entre las autoridades aduaneras de los 25 Estados miembros o que cuando se produzcan concilie de hecho

[280] Informe del Órgano de Apelación, *India - Patentes (EE.UU.)*, párrafo 90.

[281] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 173 del Grupo Especial.

prontamente esas divergencias. En opinión de los Estados Unidos, los procedimientos e instituciones identificados por las Comunidades Europeas como decisivos para lograr la aplicación uniforme en las Comunidades Europeas no pueden dar lugar, ni de hecho lo dan, a una aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria por 25 autoridades independientes con una limitación regional de sus competencias, sino que, según los Estados Unidos, esos procedimientos e instituciones constituyen una red flexible en la que pueden darse, pero no necesariamente se dan, diversas respuestas a una aplicación no uniforme. Los Estados Unidos aducen que, dado que en el sistema de administración aduanera de las CE no existen procedimientos o instituciones que garanticen que no se produzcan divergencias o que, cuando éstas aparezcan, sean prontamente conciliadas, ese sistema tiene como resultado necesario una aplicación no uniforme, con infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[282] Los Estados Unidos sostienen que esta deficiencia estructural del sistema comunitario da lugar a una aplicación no uniforme con respecto a todas las esferas de la administración aduanera. Los Estados Unidos aducen que, en cada una de esas esferas, los únicos procedimientos o instituciones que supuestamente garantizan la aplicación uniforme son procedimientos o instituciones de carácter general, no vinculante y discrecional, con excepción de la revisión por parte de los tribunales nacionales. No obstante, a juicio de los Estados Unidos, la revisión por los tribunales nacionales no garantiza una aplicación uniforme dadas las facultades discrecionales de los tribunales para reenviar o no los asuntos al Tribunal de Justicia, la inexistencia de una obligación de la autoridad aduanera de un Estado miembro determinado de seguir las decisiones adoptadas por los tribunales de otros Estados miembros y la falta de cualquier mecanismo destinado a informar a las autoridades aduaneras de los diversos Estados miembros de las decisiones aduaneras pertinentes de los tribunales de los demás Estados miembros.[283]

7.52 Las **Comunidades Europeas** manifiestan que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos sólo citaba como medida en litigio la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. Según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos no han impugnado medidas de aplicación general que configuran el sistema de administración aduanera de las CE. Las Comunidades Europeas sostienen que, por lo tanto, esas medidas generales no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.[284] Las Comunidades Europeas sostienen además que en los casos en los que una ley o reglamento "impone" una forma de aplicación que no es uniforme, razonable o imparcial, puede considerarse que esa ley o reglamento infringe *per se* el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Según las Comunidades Europeas, una ley o reglamento es "obligatoria" si no deja a las autoridades ninguna posibilidad de aplicar las leyes o reglamentos de que se trate de manera uniforme, imparcial o razonable.[285] No obstante, las Comunidades Europeas sostienen que el diseño y estructura específicos del sistema de las Comunidades Europeas sólo pueden ser pertinentes en relación con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 si tienen necesariamente como resultado una falta de uniformidad.[286] A este respecto, las Comunidades Europeas recuerdan que la evaluación de si el sistema de administración aduanera de las CE garantiza o no una aplicación uniforme debe basarse en el sistema en su conjunto y no en medidas individuales aisladamente consideradas.[287] Las Comunidades Europeas añaden que la

[282] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 a) del Grupo Especial.

[283] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 b) del Grupo Especial.

[284] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 173 del Grupo Especial.

[285] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 154 del Grupo Especial.

[286] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 44; respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 173 del Grupo Especial.

[287] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 45; observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 127 del Grupo Especial.

cuestión de si el sistema comunitario de administración aduanera "en sí mismo" lleva a una aplicación no uniforme es una cuestión de hecho que concierne a la interpretación y aplicación de un extenso cuerpo de leyes internas de las CE. La carga de probar que esas leyes internas infringen obligaciones en el marco de la OMC recae en los Estados Unidos como parte reclamante.[288] Las Comunidades Europeas concluyen que los Estados Unidos no han demostrado que haya en el sistema de administración aduanera de las CE elementos que lleven necesariamente a una falta de uniformidad.[289] Las Comunidades Europeas explican que, en las Comunidades, ninguna ley impone una aplicación no uniforme de la normativa aduanera comunitaria.[290] Por el contrario, según las Comunidades Europeas, hay en el sistema comunitario de administración aduanera numerosos mecanismos interdependientes que, en conjunto, proporcionan un elevado grado de seguridad en lo que respecta a la interpretación y aplicación uniforme de las leyes aduaneras de las CE.[291]

b) Análisis por el Grupo Especial

7.53 Otra cuestión sometida al examen del Grupo Especial en el contexto de la presente diferencia es si los Estados Unidos pueden impugnar el sistema comunitario de administración aduanera "en sí mismo". A este respecto, el Grupo Especial observa que los Estados Unidos han manifestado claramente que impugnan el diseño y estructura del sistema comunitario de administración aduanera "en sí mismo".[292] Las Comunidades Europeas aducen que la impugnación por los Estados Unidos del sistema comunitario de administración aduanera "en sí mismo" excede del ámbito del mandato del Grupo Especial.[293]

7.54 Como observación preliminar, el Grupo Especial señala que los Estados Unidos impugnan implícitamente el diseño y estructura del sistema comunitario de administración aduanera "en sí mismo" *en conjunto o en general*. Así se desprende claramente, entre otras cosas, del hecho de que los Estados Unidos sostienen que las supuestas deficiencias estructurales del sistema de las CE tienen necesariamente como resultado una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT en *todas* las esferas de la administración aduanera en las Comunidades Europeas.[294] El Grupo Especial recuerda las constataciones que figuran en los párrafos 7.46 y siguientes *supra* de que los Estados Unidos no pueden impugnar el sistema comunitario de administración aduanera en su conjunto o de forma general al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 porque, como hemos manifestado anteriormente, esa impugnación excede de nuestro mandato. No obstante, hemos constatado también en el párrafo 7.33 *supra* que nuestro mandato nos autoriza a examinar la manera en que las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros aplican el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos han sostenido que las deficiencias estructurales del sistema comunitario tienen como resultado necesario una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en todas las esferas de la

[288] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 173 del Grupo Especial.

[289] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 64.

[290] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 154 del Grupo Especial.

[291] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 64.

[292] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 173 del Grupo Especial.

[293] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 14; Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 173 del Grupo Especial.

[294] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 b) del Grupo Especial.

administración aduanera en las Comunidades Europeas, examinaremos si los Estados Unidos pueden o no formular una impugnación con respecto al diseño y estructura del sistema comunitario "en sí mismo" en las esferas de la administración aduanera concretamente identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.

7.55 El Grupo Especial señala en primer lugar que la *legislación* de un Miembro puede ser impugnada "en sí misma" como legislación que viola una obligación en el marco de la OMC.[295] También parece gozar de apoyo la opinión de que es posible impugnar un *sistema* (y, presumiblemente, elementos componentes de ese sistema) "en sí mismo" siempre que comprenda reglas o normas destinadas a ser aplicadas de manera general y prospectiva.[296]

7.56 El Grupo Especial se remite de nuevo al texto de la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos para determinar si nuestro mandato nos autoriza o no a examinar una impugnación del diseño y estructura del sistema comunitario "en sí mismo" en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de los Estados Unidos. Observamos a este respecto que en el asunto *Estados Unidos - Exámenes por extinción relativos a los artículos tubulares para campos petrolíferos*, el Órgano de Apelación declaró lo siguiente:

> "... A nuestro juicio, las impugnaciones de medidas de un Miembro 'en sí mismas' en el procedimiento de solución de diferencias de la OMC son impugnaciones graves. Por definición, las alegaciones referentes a medidas 'en sí mismas' impugnan leyes, reglamentos u otros instrumentos de un Miembro que tienen aplicación general y futura, afirmando que la conducta de un Miembro -no sólo en un caso particular que haya acontecido, sino también en situaciones futuras- es necesariamente incompatible con las obligaciones de ese Miembro en la OMC. En lo esencial, las partes reclamantes que formulan impugnaciones de medias 'en sí mismas' procuran impedir *ex ante* que los Miembros realicen ciertos actos. Las consecuencias de tales impugnaciones son, evidentemente, de mayor alcance que las alegaciones referentes a medidas 'en su aplicación'.
>
> También partimos del supuesto de que las medidas que son objeto de impugnación 'en sí mismas' habrán sido sometidas conforme al derecho interno a un estudio a través de diversos procedimientos deliberativos para asegurar su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Miembro, incluidas las que se encuentran en los acuerdos abarcados, y que la aprobación de tal medida refleja implícitamente la conclusión de ese Miembro de que la medida no es incompatible con esas obligaciones. La presunción de que los Miembros de la OMC actúan de buena fe en el cumplimiento de sus compromisos en el marco de la OMC es particularmente oportuna en el contexto de las medidas impugnadas 'en sí mismas'. Por lo tanto, deseamos instar a las partes reclamantes a que actúen *con especial diligencia* al exponer con la mayor claridad posible sus alegaciones referentes a medidas 'en sí mismas' en las solicitudes de establecimiento que presenten. En particular, es de esperar que las alegaciones referentes a medidas 'en sí mismas' indiquen inequívocamente las medidas concretas de derecho interno que la parte reclamante impugna y el fundamento jurídico de la alegación de que tales medidas no son compatibles con determinadas disposiciones de los acuerdos abarcados. Mediante esa exposición inequívoca de las alegaciones sobre medidas 'en sí mismas', las solicitudes

[295] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de 1916*, párrafo 75.

[296] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, párrafos 81 y 82, reproducidos *supra* en el párrafo 7.15.

> de establecimiento no deberían dejar dudas a las partes demandadas de que, a pesar de sus propias opiniones ponderadas respecto a la compatibilidad de sus medidas con la OMC, otro Miembro se propone impugnar esas medidas 'en sí mismas' en el procedimiento de solución de diferencias de la OMC."[297]

7.57 En el presente caso, el Grupo Especial considera que de la solicitud de establecimiento de un Grupo Especial presentada por los Estados Unidos no se desprende claramente que los Estados Unidos se propusieran impugnar el diseño y estructura de aspectos del sistema comunitario de administración aduanera "en sí mismo".

7.58 *En primer lugar*, a juicio del Grupo Especial no hay en el texto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos nada que pueda interpretarse como una indicación clara de que la impugnación formulada por ese país al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere al diseño y estructura del sistema comunitario de administración aduanera.

7.59 *En segundo lugar*, la solicitud de establecimiento de un grupo especial indica que los Estados Unidos están preocupados por la forma en que las autoridades aduaneras de los Estados miembros proceden a la aplicación y no por el diseño y estructura del sistema de administración aduanera a nivel de las CE "en sí mismo". En particular, la solicitud comienza declarando que "[l]os Estados Unidos consideran que la *manera* en que las Comunidades Europeas ("CE") aplican las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994") no es uniforme, imparcial y razonable, y, por lo tanto, es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994" (sin cursivas en el original). Observamos que el término "*manner*" (manera) se define como "*the way in which something is done or happens; a method of action; a mode of procedure*" (la forma en la que se hace u ocurre algo; un método de acción; una forma de proceder).[298] A nuestro parecer, no hay en el sentido corriente del término "manera" nada que indique que se refiere al diseño y estructura de algo, sino que ese sentido corriente indica que se refiere a la aplicación en la práctica.

7.60 Además, al identificar la manera de aplicación que supuestamente infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, la solicitud hace hincapié en los actos de las autoridades aduaneras de los Estados miembros en tanto que, en cambio, no se hace referencia en ella a los actos realizados y/o los procedimientos e instituciones existentes a nivel de las CE, incluido el diseño y estructura del sistema comunitario de administración aduanera. En concreto, en la solicitud se declara lo siguiente:

> "*Llevan a cabo* la aplicación de esas medidas en las Comunidades Europeas *las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros de las CE*. Tal aplicación adopta numerosas formas diferentes. Los Estados Unidos entienden que las incontables formas de aplicación de esas medidas incluyen, sin que la enumeración sea exhaustiva, las leyes, reglamentos, guías, manuales y prácticas administrativas de *las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las Comunidades Europeas*."[299] (Sin cursivas en el original)

7.61 *En tercer lugar*, recordamos nuestra constatación, que figura en el párrafo 7.20 *supra*, de que el aspecto esencial del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es la obligación de "aplicar de

---

[297] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Exámenes por extinción relativos a los artículos tubulares para campos petrolíferos*, párrafos 172 y 173.

[298] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 1.687.

[299] Documento WT/DS315/8, reproducido en el anexo D del informe del Grupo Especial.

manera uniforme, imparcial y razonable". Al impugnar el diseño y estructura del sistema comunitario de administración aduanera "en sí mismo" al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, los Estados Unidos aducen de hecho que tienen como resultado *necesario* una aplicación que no es uniforme.[300] Dicho de otra forma, los Estados Unidos aducen que no impugnan, o al menos no impugnan sólo, casos concretos de aplicación de leyes, reglamentos, decisiones judiciales o disposiciones administrativas, sino el sistema, que es el marco y el contexto institucional en el que se realizan los actos concretos de aplicación. A juicio del Grupo Especial, la pretendida impugnación por los Estados Unidos del diseño y estructura del sistema comunitario "en sí mismo" no está evidentemente vinculada a la esencia de la obligación que se recoge en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, en concreto, la obligación de llevar a cabo la aplicación de manera uniforme. Habida cuenta de la falta de una conexión evidente entre la pretendida impugnación por los Estados Unidos del sistema de administración aduanera de las CE "en sí mismo" y este aspecto esencial de la obligación recogida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, hubiera sido absolutamente necesario que los Estados Unidos aclararan la naturaleza de su impugnación en su solicitud de establecimiento de un grupo especial.

7.62 *Por último*, el Grupo Especial observa que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no hay una referencia expresa a los términos "en sí mismo" o *per se*. El Grupo Especial considera que, en general, el hecho de que en una solicitud de establecimiento de un grupo especial no figuren esos términos, cuyo sentido es absolutamente claro en el lenguaje de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, no significa necesariamente que el Miembro reclamante no pueda formular una impugnación de una medida "en sí misma", siempre que el Miembro demandado no tenga ninguna duda en cuanto al propósito de formular esa impugnación.[301] No obstante, por las razones a las que se ha hecho antes referencia, el Grupo Especial considera que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no aclaró que se formulaba una impugnación del sistema de administración aduanera de las CE "en sí mismo".[302]

7.63 A la luz del conjunto de los factores expuestos, el Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que, sobre la base del texto y el contenido de su solicitud de establecimiento de un grupo especial, los Estados Unidos no pueden formular una impugnación con respecto al diseño y estructura del sistema comunitario de administración aduanera "en sí mismo" en general ni con respecto al diseño y estructura del sistema comunitario en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de los Estados Unidos. En cambio, con arreglo a los términos de su solicitud de establecimiento de un grupo especial, pueden alegar que la aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en su

[300] De hecho, los Estados Unidos lo aducen expresamente así en su respuesta a la pregunta 126 a) del Grupo Especial.

[301] Recordamos a este respecto que la solicitud de establecimiento de un grupo especial responde al importante objetivo, en el marco de un procedimiento con las debidas garantías, de informar a las partes y a los terceros en una diferencia de la naturaleza de los argumentos del reclamante. Véase el párrafo 7.12 *supra*.

[302] Además, el Grupo Especial señala que los Estados Unidos sólo han indicado claramente su propósito de impugnar el diseño y estructura del sistema de administración aduanera de las CE "en sí mismo" en una etapa tardía del procedimiento del Grupo Especial, en respuesta a una pregunta formulada por éste después de la segunda reunión sustantiva (Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 73 del Grupo Especial. Véase también la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 del Grupo Especial). Con anterioridad a esa etapa del procedimiento del Grupo Especial, los Estados Unidos no indicaron expresamente que su impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 fuese una impugnación de esa naturaleza, lo que tiende a respaldar la opinión de que, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, los Estados Unidos no pretendieron impugnar el sistema de administración aduanera de las CE "en sí mismo".

solicitud infringe en determinados casos el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. De hecho, los propios Estados Unidos sostienen que sus alegaciones no se reducen a una impugnación del diseño y estructura del sistema de administración aduanera de las CE "en sí mismo" y explican que en sus comunicaciones han puesto de manifiesto ejemplos concretos de aplicación no uniforme en el contexto del sistema de las CE.[303]

5. Conclusiones generales con respecto al mandato del Grupo Especial

7.64 El Grupo Especial concluye que, por las razones expuestas, su mandato le autoriza a examinar la manera en que las autoridades aduaneras de los Estados miembros aplican el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. Concluye además, que sobre la base del texto y el contenido del mandato del Grupo Especial, éste no puede examinar impugnaciones del diseño y la estructura "en sí mismos" del sistema de administración aduanera de las CE en general, ni del diseño y estructura del sistema comunitario en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. En cambio, estamos autorizados a examinar casos o supuestos concretos de aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de los Estados Unidos, cuando tales casos o supuestos hayan sido expuestos por los Estados Unidos en el contexto de la presente diferencia y los Estados Unidos se hayan basado en ellos. El Grupo Especial examinará posteriormente cada uno de esos casos o supuestos en su informe después de haber examinado varios procedimientos y cuestiones generales en relación con la interpretación y aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

C. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

1. Admisibilidad de determinadas pruebas

a) Pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva

7.65 La cuestión de si determinadas pruebas en las que se han basado los Estados Unidos en el contexto de su alegación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 deben ser admitidas por el Grupo Especial fue planteada por las Comunidades Europeas en el curso de la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes, que tuvo lugar los días 22 y 23 de noviembre de 2005. En particular, el 22 de noviembre de 2005, tras la exposición por los Estados Unidos de su Declaración oral en esa reunión sustantiva, las Comunidades Europeas adujeron que las pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos[304] constituían "nuevas" pruebas, que habían sido presentadas demasiado tarde, y cuya inadmisibilidad, debía, por lo tanto, ser declaradas por el Grupo Especial. Los Estados Unidos defendieron la utilización de esas pruebas basándose en que constituían "pruebas necesarias a efectos de las réplicas" en el sentido del

[303] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126b) del Grupo Especial.

[304] La sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos se titula "Casos recientes confirman que los procedimientos que según las CE garantizan una aplicación uniforme no lo hacen" y se refiere a la alegación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

párrafo 12 del Procedimiento de trabajo[305] y que, en tal concepto, no se habían aportado demasiado tarde.

7.66 El 23 de noviembre de 2005, el Grupo Especial dirigió una carta a las partes en la que indicaba que había decidido admitir las pruebas de que se trata. En particular, en esa carta se decía lo siguiente:

> "El Grupo Especial se refiere a una cuestión de procedimiento planteada oralmente por las Comunidades Europeas el 22 de noviembre de 2005 en el curso de la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes. En concreto, las Comunidades Europeas adujeron que el Grupo Especial debía considerar inadmisibles las pruebas contenidas en las pruebas documentales de la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva porque el párrafo 12 del Procedimiento de trabajo del Grupo Especial prohíbe la presentación de 'nuevas' pruebas fácticas después de la primera reunión sustantiva. Los Estados Unidos responden que las pruebas en cuestión no son 'nuevas' sino que, constituyen 'pruebas necesarias a efectos de las réplicas' en el sentido del párrafo 12 del Procedimiento de trabajo.
>
> El Grupo Especial ha examinado atentamente los argumentos de las partes a la luz del párrafo 12 de su Procedimiento de trabajo y de las disposiciones pertinentes del ESD sin llegar a una conclusión acerca de si puede interpretarse o no que las pruebas en cuestión constituyen 'nuevas pruebas' o pruebas 'necesarias a efectos de las réplicas' en el sentido del párrafo 12 del Procedimiento de trabajo, ha decidido admitir las pruebas a las que hacen referencia los Estados Unidos en la sección III de su Declaración oral en la segunda reunión sustantiva. El Grupo Especial se considera autorizado a admitir las pruebas por las razones que se exponen a continuación. El párrafo 12 del Procedimiento de trabajo del Grupo Especial establece que 'las partes presentarán todas las pruebas fácticas al Grupo Especial en el curso de la primera reunión sustantiva a más tardar, excepto en lo que respecta a las pruebas necesarias a efectos de las réplicas'. El párrafo 1 del artículo 12 del ESD autoriza a los grupos especiales a desviarse del Procedimiento de trabajo tras consultar a las partes. Además, el artículo 11 del ESD obliga al Grupo Especial a hacer una evaluación objetiva de los hechos. A nuestro juicio, no cumpliríamos la función que nos asigna el artículo 11 del ESD si declaráramos inadmisible pruebas que pueden tener influencia en las constataciones del Grupo Especial en la presente diferencia.
>
> Para no causar ningún perjuicio a las Comunidades Europeas en lo que respecta a la referencia de los Estados Unidos a las pruebas de la sección III de su Declaración oral, el Grupo Especial ha decidido dar a las Comunidades Europeas derecho a formular observaciones sobre el contenido de la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva. ... El Grupo Especial se reserva el derecho de formular preguntas a los Estados Unidos y a las Comunidades con respecto al contenido de la sección III con inclusión de las pruebas a que se hace referencia en la misma y de cualesquiera observaciones formuladas por las Comunidades Europeas al respecto.
>
> ...

[305] El Procedimiento de trabajo del Grupo Especial para la presente diferencia se reproduce en el anexo E del informe del Grupo Especial.

> Las partes deben tomar nota de que la decisión adoptada por el Grupo Especial en la presente comunicación se refiere a la admisibilidad de las pruebas citadas por los Estados Unidos en la sección III de su Declaración oral en la segunda reunión sustantiva y no tiene ninguna relación con la importancia que, en su caso, el Grupo Especial pueda atribuir en último término a esa pruebas."

7.67 El Grupo Especial concedió a las Comunidades Europeas un plazo de tres semanas para formular observaciones, contado a partir de la fecha en que los Estados Unidos formularon su Declaración oral en la segunda reunión sustantiva en la que hicieron referencia a las pruebas en cuestión.[306] En concreto, se concedió a las Comunidades un plazo que terminaba el 14 de diciembre de 2005 para presentar sus observaciones. En éstas, las Comunidades Europeas reconocieron que el Procedimiento de trabajo recogido en el apéndice 3 del ESD no establecía plazos específicos para la presentación de pruebas.[307] Las Comunidades Europeas reconocieron también que el Grupo Especial podía, tras celebrar consultas con las partes en la diferencia, adoptar procedimientos más específicos que los recogidos en el apéndice 3 del ESD y/o modificar los procedimientos tras celebrar esas consultas.[308] Las Comunidades Europeas adujeron que, no obstante, la presentación por los Estados Unidos de "nuevas" pruebas fácticas no se ajustaba a los requisitos de debidas garantías de procedimiento y de equidad procesal que se reflejaban en el párrafo 12 del Procedimiento de trabajo del Grupo Especial.[309] Más concretamente, las Comunidades Europeas adujeron que los Estados Unidos no habían demostrado que hubiera una razón suficiente para la tardía presentación de las pruebas, afirmaron que los Estados Unidos no habían aportado pruebas justificantes en sus comunicaciones anteriores y señalaron que las pruebas a que se hacía referencia en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos se remontaban a varios años atrás.[310] Las Comunidades Europeas añadieron que la decisión del Grupo Especial de concederles un plazo adicional para formular observaciones sobre la sección III no daba respuesta a sus preocupaciones en relación con las debidas garantías de procedimiento, porque se les había pedido que presentaran una tercera comunicación con observaciones sobre la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva además de responder a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva y formular observaciones sobre las respuestas de los Estados Unidos a esas preguntas.[311]

7.68 El 15 de diciembre de 2005, tras haber recibido las observaciones de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial envió a las partes una lista complementaria de preguntas relativas a la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva y las observaciones de las Comunidades Europeas al respecto. En una de esas preguntas se pedía a los Estados Unidos que explicaran por qué no habían hecho referencia a las pruebas contenidas en la sección III antes de la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes. En respuesta a ello, los Estados Unidos manifestaron que sólo tuvieron conocimiento de esas pruebas por una

---

[306] El Grupo Especial proporcionó a las Comunidades Europeas la oportunidad de formular observaciones mediante una pregunta formulada al término de la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes. En concreto, en la pregunta 172, pidió a las Comunidades Europeas que formularan observaciones sobre la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, con inclusión de las pruebas documentales a que se hacía referencia en esa sección.

[307] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 6.

[308] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 6.

[309] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 9.

[310] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafos 12 y 13.

[311] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 15.

presentación efectuada el 27 de octubre de 2005[312], es decir, después de haberse presentado su Segunda comunicación escrita. Los Estados Unidos sostuvieron que, de cualquier forma, los casos a los que se hacía referencia en esa presentación, y en los que se apoyaron posteriormente los Estados Unidos en la sección III de su Declaración oral en la segunda reunión sustantiva, refutaban la tesis mantenida por las Comunidades Europeas en la primera etapa del procedimiento del Grupo Especial de que los Estados Unidos basaban sus alegaciones en hipótesis meramente teóricas. Los Estados Unidos añadieron que las pruebas ponían de relieve cuestiones que habían sido desarrolladas en etapas anteriores de la presente diferencia y se referían además a acontecimientos relativamente recientes. Los Estados Unidos sostuvieron que, por ello, las pruebas en cuestión estaban comprendidas en el ámbito del párrafo 12 del Procedimiento de trabajo del Grupo Especial.[313]

7.69 Como se ha indicado en el párrafo 7.66 *supra*, el Grupo Especial decidió el 23 de noviembre de 2005 admitir las pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva. Dado que las partes han formulado observaciones adicionales acerca de la admisibilidad de esas pruebas después de haber sido adoptada esa decisión, el Grupo Especial considera necesario confirmar la decisión de admitir esas pruebas. El Grupo Especial no estima necesario adoptar una decisión sobre si las pruebas en cuestión constituyen "nuevas" pruebas fácticas presentadas por las Comunidades Europeas o pruebas "necesarias a efectos de las réplicas" en el sentido del párrafo 12 del Procedimiento de trabajo, como sostienen los Estados Unidos. Mantenemos esta opinión porque, como hemos explicado en nuestra carta de 23 de noviembre de 2005, con independencia de la calificación que se dé a esas pruebas, estamos autorizados a admitirlas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del ESD y en el párrafo 12 del Procedimiento de trabajo.

7.70 En todo caso, el Grupo Especial se siente obligado a admitir las pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva sobre la base del artículo 11 del ESD. Con arreglo a ese artículo, estamos obligados a hacer una evaluación objetiva, entre otras cosas, de los hechos. Como hemos manifestado en nuestra carta de 23 de noviembre de 2005 no cumpliríamos la función que nos asigna el artículo 11 si prescindiéramos de pruebas que pueden tener influencia en nuestras constataciones en la presente diferencia. Además, aún en el caso de que pudiera interpretarse que las pruebas de que se trata constituyen "nuevas" pruebas, el Grupo Especial ha concedido a las Comunidades Europeas un plazo de tres semanas para formular observaciones sobre ellas, a contar desde la fecha en que los Estados Unidos hicieron referencia a las pruebas de que se trata. El plazo de tres semanas fue debatido y acordado por el Grupo Especial y las partes en la segunda reunión sustantiva.[314] En aquel momento, las Comunidades Europeas no indicaron al Grupo Especial que ese plazo fuera insuficiente para responder plenamente a los argumentos formulados y a las pruebas aportadas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos.

b) Pruebas distintas de las contenidas en la sección III, citadas en diversas secciones de su Declaración oral en la segunda reunión sustantiva en las que se basan los Estados Unidos

7.71 En sus observaciones sobre la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, presentadas el 14 de diciembre de 2005, las Comunidades Europeas

[312] Philippe De Baere, "Coping with customs in the EU: The uniformity challenge: Judicial review of customs decisions and implementing legislation", presentación en PowerPoint en la sección de Derecho Internacional de la ABA, 27 de octubre de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 59).

[313] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 177 del Grupo Especial.

[314] En concreto, este plazo fue acordado en la etapa final de la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes.

hicieron referencia a las pruebas "adicionales", distintas de las contenidas en la sección III en las que se basaban los Estados Unidos citadas en diversas secciones de su Declaración oral en la segunda reunión sustantiva.[315] Con respecto a esas pruebas "adicionales" las Comunidades Europeas manifestaron que no estaban claras las razones por las que no se habían presentado en comunicaciones anteriores.[316] En su lista complementaria de preguntas en relación con la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, enviada a las partes el 15 de diciembre de 2005, el Grupo Especial pidió a las Comunidades Europeas que identificaran claramente las pruebas "adicionales" a las que hacían referencia en la observación citada.[317] En respuesta a ello, las Comunidades Europeas se remitieron a las pruebas contenidas en las pruebas documentales 73[318], 74[319], 75[320], 76[321], 77[322], 78[323], 79[324] y 80[325] presentadas por los Estados Unidos.

7.72 El Grupo Especial ha decidido admitir lo que las Comunidades Europeas califican de pruebas "adicionales" contenidas en diversas secciones de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva distintas de la sección III. Para ello hemos seguido el siguiente razonamiento.

7.73 *En primer lugar*, cuando las Comunidades Europeas plantearon la cuestión de la admisibilidad de las pruebas "adicionales" no solicitaron de forma clara y concreta al Grupo Especial que las rechazara por tratarse de "nuevas" pruebas.[326] En lugar de ello, las Comunidades Europeas se

[315] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 15.

[316] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 11.

[317] Pregunta 182 del Grupo Especial.

[318] Comisión Europea, *External and intra-European Union trade*, páginas 94 y 95, septiembre de 2005.

[319] Edwin A. Vermulst, *EC Customs Classification Rules: Should Ice Cream Melt?*, 15 Mich. J. Int'l L. 1241, páginas 1.314-15, 1994.

[320] Carta de Mark MacGann, Director General, EICTA, a Manuel Arnal Monreal, Director de Asuntos Internacionales y Cuestiones Arancelarias, Comisión Europea, 2 de septiembre de 2005.

[321] HM Customs & Excise, Tariff Notice 13/04.

[322] Douanerechten. Indeligen van bepaalde LCD monitoren in de gecombineerde nomenclatuur, Nº CPP2005/1372M, del 8 de julio de 2005 (texto original y traducción no oficial al inglés).

[323] BTI DEM/2975/05-1 (fecha inicial de validez, 19 de julio de 2005).

[324] Declaración jurada de Mark R. Berman, Presidente y Director Ejecutivo de Rockland Industries, Inc., 10 de noviembre de 2005.

[325] Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, publicado en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, páginas C80/22 a C80/24 y C80/80, 10 de marzo de 2001.

[326] En cambio, al referirse a las pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, las Comunidades Europeas manifestaron claramente que esas pruebas constituían "nuevas pruebas". Véase, por ejemplo, la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 10. Además, las Comunidades Europeas alegaron que no había razón suficiente para la presentación tardía de las pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, pero no hicieron ninguna referencia a las pruebas contenidas en otras secciones de la Declaración oral de los Estados Unidos al formular esa alegación; Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 12.

limitaron a señalar que la decisión de 23 de noviembre de 2005 de admitir determinadas pruebas se refería únicamente a la sección III pero no a las pruebas adicionales a que se hacía referencia en otras partes de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva.[327] Además, las Comunidades Europeas se limitaron a preguntar las razones por las que las pruebas no habían sido presentadas antes, sin solicitar expresamente que fueran rechazadas.

7.74 *En segundo lugar*, aún en el caso de que se interpretaran las observaciones de las Comunidades Europeas acerca de las pruebas "adicionales" como una petición de que el Grupo Especial las rechazara por tratarse de "nuevas" pruebas, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas no formularon sus objeciones a esas pruebas con tiempo suficiente para que el Grupo Especial pudiera solicitar la respuesta de los Estados Unidos si lo hubiera considerado necesario. A este respecto, el Grupo Especial señala que, ni en la segunda reunión sustantiva, ni inmediatamente después, las Comunidades Europeas expusieron ninguna preocupación acerca de la admisibilidad de las pruebas contenidas en secciones de la Declaración oral de los Estados Unidos distintas de la sección III. La primera referencia a las aparentes preocupaciones de las Comunidades Europeas en relación con la admisibilidad de esas pruebas fue la que hicieron en sus observaciones sobre las pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos, tres semanas después del momento en que éstos hicieran referencia a esas pruebas "adicionales" en la segunda reunión sustantiva. Consideramos que las Comunidades Europeas debían haber expuesto sus preocupaciones en relación con las pruebas distintas de las contenidas en la sección III antes, y no en una etapa en la que sólo quedaba un trámite para que el Grupo Especial cerrara su expediente fáctico.[328]

7.75 *Por último*, el Grupo Especial recuerda que, de conformidad con el artículo 11 del ESD, el Grupo Especial está obligado a hacer una evaluación objetiva, entre otras cosas, de los hechos. Consideramos que, en virtud de ese artículo, estamos autorizados a tener en cuenta las pruebas contenidas en las pruebas documentales 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 presentadas por los Estados Unidos, porque esas pruebas pueden tener influencia en nuestras constataciones en la presente diferencia en relación con la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

c) Resumen y conclusiones

7.76 En resumen, por las razones que hemos expuesto, el Grupo Especial considera admisibles las pruebas contenidas en la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, con inclusión de las contenidas en la sección III de la Declaración, pero sin que esta indicación sea excluyente. El Grupo Especial considera que está autorizado a admitir esas pruebas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 del ESD y el párrafo 12 del Procedimiento de trabajo. Además, el Grupo Especial opina que la admisión de esas pruebas es necesaria habida cuenta de la obligación que le impone el artículo 11 del ESD de hacer una evaluación objetiva, entre otras cosas, de los hechos. El Grupo Especial considera además que, con respecto a las pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, ha preservado el derecho de

[327] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 15.

[328] A la luz de las objeciones de las Comunidades Europeas con respecto a las pruebas contenidas en la sección III de la declaración oral hecha por los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, el Grupo Especial y las partes convinieron en los trámites que se realizarían para tener en cuenta esas objeciones. El primer trámite era la formulación de observaciones por las Comunidades Europeas sobre las pruebas contenidas en la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos, observaciones que fueron recibidas el 14 de diciembre de 2005. El último trámite era la respuesta a las preguntas del Grupo Especial en relación con la sección III de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva y las observaciones de las Comunidades Europeas al respecto. Las preguntas del Grupo Especial se enviaron a las partes el 15 de diciembre de 2005 y las respuestas de las partes se recibieron el 22 de diciembre de 2005.

las Comunidades Europeas a un procedimiento con las debidas garantías al darles oportunidad de formular observaciones sobre las pruebas en cuestión dentro de lo que el Grupo Especial considera un plazo razonable.[329]

2. Peticiones de los Estados Unidos de que el Grupo Especial ejerza las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD

7.77 Como se ha indicado anteriormente, en la presente diferencia los Estados Unidos formulan, entre otras, alegaciones al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En concreto, alegan que la aplicación de la normativa aduanera comunitaria no es uniforme, por lo que esa aplicación infringe lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Después de la primera reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes, el Grupo Especial formuló diversas preguntas a los Estados Unidos pidiendo a ese país que facilitara todos los datos estadísticos y/u otra información pertinente para demostrar la incidencia de la aplicación no uniforme en lo que respecta a la clasificación arancelaria[330], la valoración en aduana[331] y los regímenes aduaneros[332] en el contexto de la aplicación general del régimen aduanero de las CE. En respuesta a las preguntas del Grupo Especial en relación con la clasificación aduanera y la valoración en aduana, los Estados Unidos adujeron en primer lugar que la información solicitada por el Grupo Especial no era necesaria para llegar a la conclusión de que las Comunidades Europeas incumplen la obligación de aplicación uniforme que les impone el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y pidieron subsidiariamente al Grupo Especial que hiciera uso de las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD porque era probable que la información solicitada estuviera en poder de las Comunidades Europeas, y no de los Estados Unidos.

7.78 El artículo 13 del ESD dispone lo siguiente:

> "1. Cada grupo especial tendrá el derecho de recabar información y asesoramiento técnico de cualquier persona o entidad que estime conveniente. No obstante, antes de recabar información o asesoramiento de una persona o entidad sometida a la jurisdicción de un Miembro, el grupo especial lo notificará a las autoridades de dicho Miembro. Los Miembros deberán dar una respuesta pronta y completa a cualquier solicitud que les dirija un grupo especial para obtener la información que considere necesaria y pertinente. La información confidencial que se proporcione no deberá ser revelada sin la autorización formal de la persona, institución o autoridad del Miembro que la haya facilitado.
>
> 2. Los grupos especiales podrán recabar información de cualquier fuente pertinente y consultará expertos para obtener su opinión sobre determinados aspectos de la cuestión. Los grupos especial podrán solicitar a un grupo consultivo de expertos que emita un informe por escrito sobre un elemento de hecho concerniente a una cuestión de carácter científico o técnico planteada por una parte en la diferencia.

[329] Además, el Grupo Especial señala que ha recibido una carta de fecha 21 de diciembre de 2005, titulada "DS315 Amicus Curiae". Mediante una carta de fecha 9 de enero de 2006, el Grupo Especial informó a las partes en la presente diferencia de su decisión de no admitirla como parte del expediente del Grupo Especial porque, entre otras cosas, se había presentado demasiado tarde y su admisión habría dilatado indebidamente el procedimiento.

[330] Pregunta 16 del Grupo Especial.

[331] Pregunta 24 del Grupo Especial.

[332] Pregunta 33 del Grupo Especial.

> En el Apéndice 4 figuran las normas para el establecimiento de esos grupos consultivos de expertos y el procedimiento de actuación de los mismos."

7.79 En la esfera de la *clasificación arancelaria*, los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que solicitara a las Comunidades Europeas una muestra estadísticamente significativa de informaciones arancelarias vinculantes ("IAV") y otras decisiones en materia de clasificación de diversos Estados miembros, para determinar la frecuencia de la aplicación divergente en esa esfera de conformidad con el artículo 13 del ESD.[333] Además, pidieron al Grupo Especial que solicitara una copia de un estudio del año 2003 al que se hacía referencia en el proyecto de Código Aduanero Modernizado de las Comunidades Europeas.[334] Los Estados Unidos manifestaron que habían solicitado una copia de ese estudio durante las consultas con las Comunidades Europeas en relación con la presente diferencia, pero las Comunidades se habían negado a facilitárselo. Al formular su petición de que el Grupo Especial ejerciera las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD en relación con el estudio al que se hacía referencia en el proyecto de Código Aduanero Modernizado, los Estados Unidos sostuvieron que en caso de que las Comunidades Europeas se negaran a facilitarlo, el Grupo Especial debería inferir de esa negativa una conclusión adversa.[335]

7.80 En la esfera de la *valoración en aduana*, los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que recabara de las Comunidades Europeas la información que permitió al Tribunal de Cuentas de las CE formular las constataciones contenidas en su informe sobre valoración en aduana, Informe especial Nº 23/2000, de conformidad con el artículo 13 del ESD.[336] A este respecto, los Estados Unidos señalaron que, al evaluar la incidencia de la aplicación no uniforme con respecto a las normas de valoración, el Tribunal de Cuentas de las CE había tenido acceso a "documentos tratados en el Comité del valor en aduana de la Comisión, expedientes de auditoría elaborados por las autoridades aduaneras en materia de valoración en aduana, decisiones escritas relativas a la valoración, decisiones de tribunales de apelación y declaraciones de aduana propiamente dichas" en relación con más de 200 empresas y grupos de empresas.[337]

7.81 En respuesta a lo anterior, las Comunidades Europeas manifestaron que las peticiones de los Estados Unidos de que el Grupo Especial hiciera uso de las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD debían ser rechazadas, porque constituían un intento de los Estados Unidos de librarse de su carga de establecer una presunción *prima facie* y, por tanto, excedían considerablemente

---

[333] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 16 del Grupo Especial.

[334] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 16 del Grupo Especial. El proyecto de Código Aduanero Modernizado (Comisión Europea, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, TAXUD/458/2004 - Rev 4, *Draft Modernized Customs Code*, 11 de noviembre de 2004) se recoge en la Prueba documental 33 presentada por los Estados Unidos. El estudio al que se refieren los Estados Unidos se menciona en la página 4 de la prueba documental. En concreto, el proyecto de Código Aduanero Modernizado hace referencia a "un estudio externo de 2003 que ha permitido a la Comisión entender mejor la situación actual en los Estados miembros y los posibles costos y beneficios".

[335] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 16 del Grupo Especial.

[336] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 24 del Grupo Especial relativa al Tribunal de Cuentas, Informe especial Nº 23/2000 sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (valoración en aduana), acompañada de las respuestas de la Comisión, 14 de marzo de 2001, reproducido en la Prueba documental 14 presentada por los Estados Unidos.

[337] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 24 del Grupo Especial, con referencia al Tribunal de Cuentas, Informe especial Nº 23/2000 sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (evaluación en aduana) acompañado de las respuestas de la Comisión, 14 de marzo de 2001, párrafo 10 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

de las funciones que atribuye a los grupos especiales el artículo 13 del ESD. Las Comunidades Europeas sostuvieron también que no es creíble que los Estados Unidos, de un lado, aleguen que hay una falta de uniformidad generalizada en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, pero que no disponen de pruebas que avalen esta alegación, y, de otro, que sostengan que las Comunidades Europeas deben facilitar la información solicitada.[338] En respuesta concretamente a la petición de los Estados Unidos relativa al informe del Tribunal de Cuentas de las CE, las Comunidades Europeas han manifestado que en caso de que el Grupo Especial formulara una solicitud de esa naturaleza, no sería posible satisfacerla. Según las Comunidades Europeas el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE se basó en visitas de fiscalización que tuvieron lugar en los locales de la Comisión y de las administraciones aduaneras de los Estados miembros en el período 1999-2000.[339] Las Comunidades Europeas manifestaron que la información que el Tribunal de Cuentas de las CE pudiera haber reunido en ese momento está únicamente en poder del Tribunal. Además, esa información reflejaría la situación existente en 1999-2000, pero no la situación actual.[340]

7.82 En la segunda reunión sustantiva con las partes, el Grupo Especial declaró que, en esa etapa, no tenía intención de hacer uso de las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD. El Grupo Especial señaló que, cuando los Estados Unidos formularon sus peticiones de que el Grupo Especial hiciera uso de las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD manifestaron que "no consideran que la información [solicitada] en litigio sea necesaria para que el Grupo Especial constate que las CE incumplen su obligación de aplicación uniforme".[341]

7.83 El Grupo Especial confirma la decisión que adoptó en la segunda reunión sustantiva de no hacer uso de las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD porque, después de la adopción de esa decisión por el Grupo Especial, los Estados Unidos no han expuesto argumentos complementarios que avalen la necesidad de la información solicitada. De hecho, los Estados Unidos han declarado repetidamente al Grupo Especial, tanto antes de la segunda reunión sustantiva como posteriormente, que han demostrado que las Comunidades Europeas infringen el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994[342], aún a falta de las pruebas que solicitan de conformidad con el artículo 13 del ESD. En consecuencia, dado que los Estados Unidos -la parte que pidió que el Grupo Especial hiciera uso de las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD- no consideran que la información que proponen que se recabe de las Comunidades sea necesaria para que el Grupo Especial constate que las Comunidades Europeas no cumplen la obligación que les impone el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial no estima que haya ninguna razón de peso para hacer uso de la facultad discrecional de recabar esa información que le confiere el artículo 13 del ESD. La decisión del Grupo Especial de no hacer uso de las facultades discrecionales que le confiere el artículo 13 del ESD nos exime de analizar el argumento de los Estados Unidos de que en caso de que las Comunidades Europeas se nieguen a facilitar una copia del estudio a que se

[338] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 48 a 50.

[339] Tribunal de Cuentas, Informe especial Nº 23/2000 sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (valoración en aduana), acompañado de las respuestas de la Comisión, 14 de marzo de 2001, párrafos 9 y 10 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[340] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 155.

[341] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 16, 24 y 33 del Grupo Especial.

[342] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 16, 24, 33, 124, 126 b) y 179 del Grupo Especial; Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafos 4 y 6; Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 173 del Grupo Especial.

hace referencia en el proyecto de Código Aduanero Modernizado aunque el Grupo Especial la haya solicitado deben inferirse de esa negativa conclusiones adversas.[343]

D. ALEGACIONES AL AMPARO DEL PÁRRAFO 3 A) DEL ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994

1. Párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

7.84 El párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 establece lo siguiente:

> "Cada parte contratante aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo."

2. Constataciones solicitadas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

a) Resumen de los argumentos de las partes

7.85 Los **Estados Unidos** sostienen que, con respecto a la alegación que formulan al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, les preocupa exclusivamente el requisito de aplicación "uniforme".[344] Los Estados Unidos señalan que la principal constatación que solicitan que formule el Grupo Especial es la de que el sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto es incompatible con la obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Los Estados Unidos consideran que esa constatación no impide formular constataciones de aplicación no uniforme con respecto a las esferas concretas de la administración aduanera a las que se han referido en sus comunicaciones para fundamentar su alegación de infracción por las Comunidades Europeas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Según los Estados Unidos, aunque las constataciones con respecto a esferas concretas de la administración aduanera en las Comunidades Europeas no son necesarias para formular la constatación solicitada con respecto al sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto, esas constataciones apoyarían la constatación solicitada por los Estados Unidos de que el sistema comunitario en general infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[345]

7.86 Los Estados Unidos sostienen que las pruebas que han presentado apoyan constataciones subsidiarias de que las Comunidades Europeas incumplen la obligación de aplicación uniforme que les impone el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la aplicación:

a) en la esfera de la clasificación arancelaria, del Arancel Aduanero Común;

b) en la esfera de la valoración en aduana:

   i) de la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario relativo al trato de los pagos por concepto de cánones a efectos de la valoración en aduana;

   ii) del artículo 147 del Reglamento de Aplicación relativo a la valoración en aduana sobre una base distinta de la última venta a partir de la cual se haya

[343] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 16 del Grupo Especial.

[344] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 15.

[345] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial.

introducido una mercancía en el territorio aduanero de las Comunidades Europeas;

iii) del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y la letra e) del apartado 1 del artículo 143 relativos a las circunstancias en las que se han de considerar "vinculadas" las partes a efectos de valoración en aduana;

c) en la esfera de los regímenes aduaneros:

i) de las disposiciones sobre valoración contenidas en el Código Aduanero Comunitario (artículos 28 a 36) y en el Reglamento de Aplicación (artículos 141 a 181 *bis* y anexos 23 a 29) en la medida en que las autoridades de distintos Estados miembros utilizan procedimientos de auditoría diferentes con respecto a los productos después de su despacho a libre práctica[346];

ii) de todas las disposiciones sobre clasificación y valoración en aduana del Arancel Aduanero Común, el Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación, en la medida en que diferentes autoridades de diferentes Estados miembros cuentan con sanciones diferentes para garantizar la observancia de esas disposiciones;

iii) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario y del apartado 3 del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación relativos a la evaluación de las condiciones económicas para permitir la transformación bajo control aduanero;

iv) de los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación relativos a los procedimientos de domiciliación; y

d) del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario relativo al período posterior a la contracción de una deuda aduanera durante el cual debe comunicarse al deudor el importe de la deuda y a la suspensión de ese plazo mientras esté pendiente un recurso.[347]

7.87 Los Estados Unidos señalan que impugnan la falta de uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT 1994. Según los Estados Unidos, la normativa aduanera comunitaria es aplicado fundamentalmente por autoridades radicadas en cada uno de los 25 Estados miembros de las Comunidades Europeas. Los Estados Unidos señalan que, en consecuencia, el objeto de la alegación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es la aplicación de la normativa aduanera comunitaria por las autoridades radicadas en cada uno de los 25 Estados miembros. No obstante, los Estados Unidos señalan también que las decisiones y actos de la Comisión de las CE y otras instituciones comunitarias tienen influencia en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. En particular, los Estados Unidos sostienen que esas decisiones y actos son pertinentes a la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en la medida en que

[346] Los Estados Unidos aclararon que sus alegaciones relativas a los procedimientos de control se referían a los productos después de su despacho a libre práctica en su Primera comunicación escrita, párrafo 96 y en su respuesta a la pregunta 28 del Grupo Especial.

[347] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 124 y 179 del Grupo Especial.

esas instituciones no intervienen para garantizar una aplicación uniforme por las autoridades aduaneras radicadas en el territorio de las Comunidades Europeas.[348]

7.88 En respuesta a lo anterior, en relación con la alegación de los Estados Unidos de que éstos impugnan el sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto, las **Comunidades Europeas** manifiestan que esa interpretación sumamente amplia de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no se ajusta a los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, que exige la identificación de las medidas concretas en litigio. Las Comunidades Europeas sostienen además que el mandato del Grupo Especial en lo que respecta a la alegación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 abarca sólo las esferas de la administración aduanera enumeradas expresamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.

b) Análisis por el Grupo Especial

7.89 En el curso del procedimiento del Grupo Especial, los Estados Unidos solicitaron a éste que constatara que el sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Los Estados Unidos pidieron además al Grupo Especial que formulara constataciones "subsidiarias" con respecto a las esferas concretas de la administración aduanera a las que los Estados Unidos se han referido en sus comunicaciones para corroborar su alegación de infracción por las Comunidades Europeas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por último, los Estados Unidos solicitan constataciones con respecto a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria por las autoridades aduaneras de los 25 Estados miembros de las Comunidades Europeas, pero indican que las decisiones y actos de la Comisión de las CE y de otras instituciones comunitarias pueden ser pertinentes a las constataciones del Grupo Especial en la medida en que esas instituciones no intervienen para garantizar la aplicación uniforme en los 25 Estados miembros.[349]

7.90 El Grupo Especial recuerda que su mandato en la presente diferencia se rige por la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. El Grupo Especial sólo está autorizado a formular constataciones, conclusiones y recomendaciones con respecto a las cuestiones comprendidas en el ámbito de su mandato.

7.91 Con respecto a la petición de los Estados Unidos de que constate que el sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial se remite a la constatación que figura en el párrafo 7.50 *supra* de que la impugnación por los Estados Unidos del sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto o en general excede del ámbito del mandato del Grupo Especial. En consecuencia, el Grupo Especial no está autorizado a formular constataciones, conclusiones o recomendaciones con respecto al sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto.

7.92 Con respecto a la solicitud de los Estados Unidos de constataciones "subsidiarias" en relación con esferas concretas de la administración aduanera, el Grupo Especial recuerda la constatación que figura en el párrafo 7.33 *supra* de que el mandato del Grupo Especial se refiere a la manera en que se lleva a cabo la aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, es decir, la clasificación y valoración de mercancías, los procedimientos para la clasificación y valoración de mercancías, los procedimientos para la entrada y

[348] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 125 del Grupo Especial.

[349] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 124 y 125 del Grupo Especial.

levante de mercancías, los procedimientos para controlar las declaraciones de entrada después de que las mercancías se han incorporado al circuito comercial, las acciones y los procedimientos de imposición de sanciones por infracción de las normas aduaneras y las prescripciones para mantenimiento de registros. En consecuencia, el Grupo Especial está autorizado a formular constataciones con respecto a la manera en que se lleva a cabo la aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas con respecto a las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.

7.93 Recordamos la constatación que se recoge en el párrafo 7.63 *supra* de que los Estados Unidos no pueden formular una impugnación con respecto al diseño y estructura del sistema comunitario "en sí mismo" en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. No obstante, como hemos declarado antes, estamos autorizados a formular constataciones con respecto a casos concretos de supuestas infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en lo que respecta a la aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de los Estados Unidos. En consecuencia, en la sección siguiente de nuestro informe nos ocuparemos de los casos concretos de supuestas infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

3. Interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

7.94 Antes de examinar los casos concretos de infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 alegados por los Estados Unidos, el Grupo Especial explicará su interpretación de los términos pertinentes del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

a) Interpretación de "*administer*" (administrar, aplicar)

i) Resumen de los argumentos de las partes

Sentido corriente

7.95 Los **Estados Unidos** sostienen que el sentido corriente de "*administer*" (administrar, aplicar) pertinente a la utilización de ese término en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es "*to carry on or execute (an office, affairs, etc.*)" (llevar a cabo o ejecutar (una función, negocios, etc.)).[350] Los Estados Unidos manifiestan que un Miembro no aplica su legislación de manera uniforme si se da un trato diferente a productos o transacciones idénticos en regiones geográficas diferentes y el Miembro no establece ningún mecanismo para la conciliación sistemática de las diferencias.[351] Los Estados Unidos explican que, con "trato" se refieren, en este contexto, a la aplicación a una mercancía o una transacción determinada de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. Por ejemplo, según los Estados Unidos, cuando una autoridad aduanera aplica una medida de aplicación general -como una regla de interpretación en materia de clasificación- a una determinada mercancía y establece en consecuencia la clasificación de la mercancía y el derecho correspondiente, da a esa mercancía un determinado "trato".[352]

[350] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 34, en el que se hace referencia a *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 28 (Estados Unidos - Prueba documental 3).

[351] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 20.

[352] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 7 del Grupo Especial.

7.96 Las **Comunidades Europeas** sostienen que el término "*administer*" se refiere a la ejecución de algo. En el caso del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, "*administration*" (aplicación) concierne a las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. Dicho de otra forma, en el contexto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, "*to administer*" (administrar, aplicar) significa ejecutar las leyes y reglamentos de aplicación general, es decir, aplicarlos en casos concretos. Las Comunidades Europeas sostienen que los textos en español y francés, que utilizan los términos "appliquera" y "aplicará", que pueden traducirse al inglés como "shall apply", confirman esta interpretación. En consecuencia, según las Comunidades Europeas, los textos en español y francés confirman que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de las leyes y reglamentos de aplicación general a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.[353] Las Comunidades Europeas añaden que la razón de ser del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es ofrecer a los comerciantes determinadas normas mínimas de previsibilidad. En consecuencia, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se ocupa fundamentalmente de los resultados administrativos que afectan a los comerciantes, y no de las leyes y procedimientos en sí mismos. Las Comunidades Europeas sostienen que sólo en la medida en que tenga como resultado necesario e inevitable una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 podría decirse que un determinado procedimiento infringe en sí mismo esa disposición.[354]

Contenido y aplicación

7.97 Las **Comunidades Europeas**, remitiéndose a las observaciones formuladas por el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Bananos III*, sostienen que los requisitos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no se aplican a las propias leyes aduaneras, sino sólo a la administración de esas leyes[355], lo que, según las Comunidades Europeas, significa que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no exige la armonización de las leyes dentro de un Miembro cuando, por ejemplo, son aplicables regímenes jurídicos diferentes en diferentes partes del territorio de un Miembro de la OMC.[356]

7.98 En respuesta a lo anterior, los **Estados Unidos** manifiestan que la línea divisoria que las Comunidades Europeas trazan entre contenido y aplicación privaría de sentido al párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. De forma más concreta, aducen que, al calificar a todas las leyes, reglamentos y reglas relativas a las cuestiones aduaneras de medidas sustantivas, las Comunidades Europeas excluirían a todas las leyes, reglamentos y normas que son instrumentos de la administración aduanera del ámbito de las disciplinas que los Miembros han acordado en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[357]

Formas de aplicación

7.99 Los **Estados Unidos** sostienen que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige uniformidad en la aplicación y es indiferente a las diversas formas que puede adoptar ésta última.[358]

---

[353] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 109 del Grupo Especial.

[354] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 94 del Grupo Especial.

[355] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 216, en el que se hace referencia al informe del Órgano de Apelación, *CE - Bananos III*, párrafo 200.

[356] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 217.

[357] Comunicación oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 23.

[358] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 93 y 94 del Grupo Especial.

Los Estados Unidos manifiestan que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se aplica a los procedimientos administrativos aplicables a los comerciantes, como los procedimientos relativos a sanciones y procedimientos de control, en la medida en que esos procedimientos pongan de manifiesto una aplicación no uniforme de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.[359] Según los Estados Unidos, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se aplica también a las decisiones sustantivas y a los resultados de los procesos administrativos que afectan a los comerciantes, tales como las decisiones concretas en materia de clasificación y valoración.[360] Los Estados Unidos sostienen que cualquier decisión adoptada por la autoridad aduanera de un Estado miembro por la que se aplique una medida de aplicación general a una mercancía o transacción concreta puede ser un acto de "aplicación" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Cuando las decisiones sustantivas difieren de uno a otro Estado miembro, ese hecho pone de manifiesto una aplicación no uniforme de las leyes en cuestión.[361]

7.100 Los Estados Unidos añaden que las leyes aduaneras pueden ser aplicadas mediante instrumentos que son a su vez leyes.[362] A juicio de los Estados Unidos, las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 son el objeto de la aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, es decir, las medidas que son aplicadas. Según los Estados Unidos, en principio, cualquiera de esas medidas puede ser aplicada mediante instrumentos que son a su vez leyes, reglamentos y otras medidas.[363] Los Estados Unidos sostienen que el contenido de esos instrumentos que adoptan la forma de leyes, reglamentos u otras medidas y que tienen naturaleza administrativa se examina en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En cambio, la aplicación que adopta la forma de leyes, reglamentos u otras medidas de naturaleza no administrativa se examina en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no desde el punto de vista de su contenido, sino para analizar si esos instrumentos se aplican de manera uniforme.[364] Los Estados Unidos explican que, puede considerarse lógicamente que cuando el contenido de las medidas que aplican leyes aduaneras difiere según las regiones, la aplicación de las leyes aduaneras no es uniforme, con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[365]

7.101 Las **Comunidades Europeas** recuerdan que el término "*administer*" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se define como "*to execute*" (ejecutar) o "*to apply*" (aplicar), lo que significa que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es aplicable a la ejecución en casos concretos de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. Según las Comunidades Europeas una ley es en sí misma de aplicación general y necesita ser ejecutada o aplicada. En consecuencia, no puede decirse que esa ley "ejecute" o "aplique" otra. Las Comunidades Europeas sostienen que la alegación de que una ley puede a su vez constituir un acto de "aplicación de una ley" socavaría la distinción clara entre la aplicación de las leyes y las propias

[359] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 90 del Grupo Especial.

[360] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 94 del Grupo Especial.

[361] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 12 del Grupo Especial.

[362] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 21.

[363] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 93 del Grupo Especial.

[364] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 90 del Grupo Especial.

[365] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 133 del Grupo Especial.

leyes.[366] Las Comunidades Europeas añaden que puesto que las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el artículo X del GATT de 1994 tienen en común la característica de ser "de aplicación general" no puede decirse que son ejecutadas o aplicadas por otra ley que es también de aplicación general.[367]

ii) Análisis por el Grupo Especial

7.102 La alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del artículo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 plantea la cuestión del alcance del término "*administer*" de ese precepto. Algunas cuestiones concretas que se ha pedido al Grupo Especial que aborde en el contexto de la presente diferencia son las siguientes: ¿se refiere ese término a la aplicación de leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones en casos determinados? En caso afirmativo, ¿se refiere a la forma en que se llevan a cabo los procesos administrativos? ¿Abarca también los resultados sustantivos de esos procesos? ¿Abarca ese término medidas que tienen a su vez la forma de leyes y reglamentos? Al interpretar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 para abordar esas y otras cuestiones, el Grupo Especial realizará su análisis de conformidad con los artículos 31 y 32 de la *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* (*Convención de Viena*).

Sentido corriente

7.103 El párrafo 1 del artículo 31 de la *Convención de Viena* indica que las disposiciones de un tratado deben interpretarse conforme a su *sentido corriente*. En lo que respecta al sentido corriente del término "*administer*" (administrar, aplicar), el verbo se define como "*to carry on or execute (an office, affairs etc.*)" (llevar a cabo o ejecutar (una función, negocios, etc.)) y "*to execute* or dispense (*justice*)" (administrar o dispensar (justicia))[368]. A su vez, el término "*execute*" (ejecutar) se define como "*to carry out, put into effect* (*a plan, purpose, command, sentence, law, will*)" (llevar a cabo, dar efecto (a un plan, un propósito, una orden, una sentencia, una norma, un testamento)).[369] El sustantivo "*administration*" (administración, aplicación) se define como "*the action of administering something* (*a sacrament, justice, remedies, an oath etc.*) *to another*" (el acto de administrar algo (un sacramento, justicia, una reparación, un juramento, etc. a otro)) y "*the management of public affairs; government*" (la gestión de los asuntos públicos; el gobierno).[370]

7.104 La definición del término "*administer*" en conexión con la definición del término "*execute*" indica que, en el contexto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el primero de esos términos se refiere a cualquier acto que dé efecto práctico a las leyes, reglamentos, decisiones y/o disposiciones a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 pertinentes, lo que a juicio del Grupo Especial, indica que el término abarca la *aplicación* de leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones en casos concretos porque la aplicación de una ley, etc., en un caso concreto supone necesariamente dar efecto práctico a la ley, etc. de que se trate.

7.105 A juicio del Grupo Especial, la aplicación de una ley en un caso concreto abarca los *procesos administrativos*[371] que entraña esa aplicación, ya que el proceso administrativo constituye la serie de

[366] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 93 a) del Grupo Especial.

[367] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 93 b) del Grupo Especial.

[368] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 28.

[369] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 877.

[370] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 28.

[371] A este respecto, observamos que el término "proceso" se define, por ejemplo, como una serie continua de actos, acontecimientos o cambios; un curso de acción, o procedimiento, y especialmente un acto o

trámites, actos o acontecimientos que es preciso que se realicen o tengan lugar para conseguir lo que exige la ley correspondiente. Además, consideramos que la aplicación de la ley en un caso concreto abarca los *resultados de los procesos administrativos*. Somos de esta opinión porque los resultados de los procesos administrativos constituyen la expresión final de la aplicación de una ley en un caso concreto. Además, los resultados de los procesos administrativos son, por definición, el producto de los procesos administrativos que, como ya hemos dicho, parecen estar comprendidos en el ámbito del sentido corriente del término "*administer*".

7.106 El Grupo Especial señala, en cambio, que no parece haber en el sentido corriente del término "*administer*" nada que indique que abarca *las leyes y reglamentos en sí mismos*. Por el contrario, las definiciones pertinentes del diccionario indican que ese término se refiere a los actos positivos o las medidas tomadas para dar efecto a medidas tales como leyes y reglamentos, pero no a las propias leyes y reglamentos, que existen sin producir ningún efecto hasta que son efectivamente aplicados en la práctica.

Contexto

7.107 El párrafo 1 del artículo 31 de la *Convención de Viena* indica que las disposiciones del tratado deben interpretarse en su *contexto*. El contexto pertinente para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se recoge en especial en el artículo X del GATT de 1994, titulado "Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales". Tanto el título de este artículo como el contenido de sus diversas disposiciones indican que el mismo, al menos en parte, tiene por objeto garantizar a los comerciantes un procedimiento con las debidas garantías cuando realizan importaciones o exportaciones. A este respecto, observamos que el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 exige que las leyes, reglamentos aduaneros, etc. sean publicados "a fin de que los gobiernos y los comerciantes tengan conocimientos de ellos". El párrafo 2 de ese artículo prohíbe la aplicación de una ley aduanera "antes de su publicación oficial". El párrafo 3b) del artículo X del GATT de 1994 exige el establecimiento de órganos o procedimientos destinados a la "revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras". El Órgano de Apelación, al interpretar ese precepto ha hecho referencia a este aspecto de las debidas garantías de procedimiento, que parece reflejarse en cada uno de los apartados del artículo X del GATT de 1994.[372]

7.108 La dimensión de debidas garantías de procedimiento que subyace al artículo X del GATT de 1994 nos indica que el objeto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es garantizar un trato equitativo y uniforme a los comerciantes cuando tratan de realizar importaciones o exportaciones en un determinado Miembro de la OMC[373], lo que, a su vez, nos indica que el término "*administer*"

---

serie de actos continuos y regulares que se producen o realizan de una forma definida: *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 2.364.

[372] En particular, el Órgano de Apelación ha hecho referencia a la importancia fundamental de las normas de transparencia recogidas en el artículo X del GATT de 1994 y ha declarado que ese artículo marca una dimensión relacionada con las debidas garantías de procedimiento: Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ropa interior*, páginas 22 y 23. Además, el Órgano de Apelación ha declarado que "es evidente para nosotros que el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 establece determinadas normas mínimas de transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales: Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Camarones*, párrafo 183. Con respecto a este último asunto, el Grupo Especial señala que en el párrafo 7.134 *infra* se analiza el sentido de las "normas mínimas" a que hace referencia el Órgano de Apelación.

[373] Esta interpretación parece reflejarse en la declaración formulada por el Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros* de que "la uniformidad de la aplicación requiere que los Miembros se aseguren de que sus leyes se apliquen *de forma coherente y previsible*" (sin cursivas en el original): Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.83.

del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la *aplicación* de las leyes en casos concretos y, en especial, a los *procesos administrativos y sus resultados*, puesto que la aplicación de la obligación de uniformidad (y, en este sentido, de las obligaciones de razonabilidad e imparcialidad) a esos procesos y sus resultados de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 contribuye a garantizar un trato equitativo y uniforme de los comerciantes. No está claro si los objetivos de debidas garantías de procedimiento que subyacen al artículo X del GATT de 1994 indican también que el término "*administer*" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere además a las *leyes y reglamentos en sí mismos*. Seguramente, la publicación de las leyes (exigida por el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994) unida a la obligación de garantizar la *aplicación* uniforme, razonable e imparcial de esas leyes y reglamentos bastará para cumplir el objetivo de un procedimiento con las debidas garantías que subyace al artículo X del GATT de 1994. En consecuencia, no es evidente que deba inferirse de ese objetivo que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige que las *leyes y reglamentos en sí mismos* sean también uniformes, razonables e imparciales.

Interpretación del texto español y del texto francés del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

7.109 La última cláusula del Acuerdo sobre la OMC indica que en ese Acuerdo, del que forma parte el GATT de 1994, son auténticos los textos en los idiomas español, francés e inglés.

7.110 El párrafo 3 a) del artículo X del texto francés del GATT de 1994 establece lo siguiente:

> "Chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article."

7.111 El párrafo 3 a) del artículo X del texto español del GATT de 1994 establece lo siguiente:

> "Cada parte contratante aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo."

7.112 El Grupo Especial entiende que los términos "*appliquera*" y "aplicará" de los textos en francés y en español del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 respectivamente son sinónimos del término inglés "*shall apply*".[374] En consecuencia, el Grupo Especial es de la opinión de que la utilización de los términos "*appliquera*" y "aplicará" en el texto francés y el texto español del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, respectivamente, tiende a confirmar que este párrafo se refiere a la aplicación de leyes, reglamentos, etc. y no a las leyes y reglamentos en sí mismos.

Resumen y conclusiones

7.113 En síntesis, los instrumentos interpretativos en los que el Grupo Especial puede basarse de conformidad con la *Convención de Viena* al interpretar el término "*administer*" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 indican que ese término se refiere a la aplicación de las leyes y reglamentos, con inclusión de los procesos administrativos y sus resultados, pero no a las leyes y reglamentos en sí mismos. A este respecto, señalamos que las declaraciones de los grupos especiales

[374] "Aplicar" se define, entre otras cosas, como "*to apply*": *Collins Spanish Dictionary*, 1985, página 41. "*Appliquer*" se define, entre otras cosas, como "*to apply*": *Robert & Collins Senior*, 2002, página 49. Observamos que, a su vez, el término "*apply*" se define como "*to put use with a particular subject matter <apply the law to the facts>*" (poner en práctica en relación con una determinada cuestión <aplicar la ley a los hechos>): *Black's Law Dictionary*, 1999, página 96.

y del Órgano de Apelación en otros casos, que han destacado que el párrafo 3 a) del artículo del GATT de 1994 no se refiere al *contenido* de las leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones en sí mismos, sino a su *aplicación*, tiende a respaldar esta opinión.[375] Dicho de otra forma, esas declaraciones tienden a respaldar la opinión de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no se refiere a lo que una determinada ley establece (es decir, a su contenido) sino a la manera en que se aplica en la práctica (es decir, la manera en que se aplica).

7.114 El Grupo Especial recuerda el argumento de los Estados Unidos de que es posible examinar en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 el contenido de las leyes o reglamentos que pueden considerarse que constituyen "instrumentos de aplicación" o que son "de naturaleza administrativa" para determinar si ponen o no de manifiesto una aplicación no uniforme de leyes, reglamentos u otras medidas, en tanto que otras leyes y reglamentos (aquellos que no pueden considerarse como "instrumentos de aplicación" o "de naturaleza administrativa") se examinan en el marco de ese párrafo para determinar si son aplicados de manera uniforme.[376] No obstante, el Grupo Especial no está convencido de que eso sea así, por las razones que a continuación exponemos.

7.115 *En primer lugar*, el Grupo Especial considera que la interpretación propuesta por los Estados Unidos difuminaría una distinción que el Grupo Especial considera que el texto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige. En concreto, a nuestro parecer, el texto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 requiere de hecho que se establezca una distinción entre los instrumentos aplicados (leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas) a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, de un lado, y los actos de aplicación de esas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas, de otro. En cambio, según los Estados Unidos, las leyes y reglamentos que son "instrumentos de aplicación" o "de naturaleza administrativa" son prueba de la aplicación no uniforme de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, porque dan efecto a esas leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones, pero pueden a su vez ser leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. A nuestro juicio, el texto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no prevé la posibilidad de que las leyes y reglamentos tengan *simultáneamente* la condición de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 y de actos de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.116 A este respecto, el Grupo Especial recuerda que la obligación de aplicación uniforme que establece el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 concierne a las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere [el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994]". A su vez, el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 se refiere a las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas *de aplicación general*" (sin cursivas en el original). El sentido específico del término "general" (general), pertinente en el contexto del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 es "*not specifically limited in application*; *related to a whole class of objects, cases, occasions, etc.*; (*of a rule, law etc.*) *true for all or nearly all cases coming under its terms*" (de aplicación no limitada específicamente; relativo a una clase completa de objetos, casos, ocasiones, etc.; (de una norma, ley, etc.) válida para todos o casi todos los casos abarcados por sus términos).[377] El sentido corriente del término "*application*" (aplicación), pertinente a los efectos del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 es "*the bringing of a general or figurative statement, a theory, principle, etc., to bear upon a matter*" (la acción de hacer valer con

[375] Véase, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación, *CE - Bananos III*, párrafo 200.

[376] A este respecto, el Grupo Especial destaca que los Estados Unidos se apoyan en las observaciones formuladas por el Grupo Especial en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, párrafos 11.69 a 11.72.

[377] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, página 1073.

respecto a una cuestión una declaración general o figurada, una teoría, un principio etc.).[378] El Grupo Especial entiende que, en consecuencia, las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas *de aplicación general* a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 son leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que se aplican a una serie de situaciones o casos y no se reducen a un ámbito de aplicación limitado. En consecuencia, las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere [el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994]" de que habla el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no son leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas con un ámbito de aplicación limitado, sino leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que se aplican a un conjunto de situaciones o casos.

7.117 *En segundo lugar*, el Grupo Especial señala que la interpretación de los Estados Unidos sugiere que la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 cuando se aplica a lo que los Estados Unidos califican como leyes o reglamentos que son "instrumentos de aplicación" o "de naturaleza administrativa" significa que puede examinarse el *contenido* de esas leyes o reglamentos. Dicho de otra forma, los Estados Unidos sostienen que con arreglo a la obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el contenido de las leyes o reglamentos que son "instrumentos de aplicación" o "de naturaleza administrativa" debe ser uniforme (es decir, idéntico) en todo el territorio de un Miembro de la OMC. A juicio del Grupo Especial, la interpretación expuesta por los Estados Unidos haría inútil en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 bien el término "aplicará" o bien la referencia a las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere [el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994]", al menos en lo que respecta a las leyes y reglamentos que los Estados Unidos califican de instrumentos de aplicación o de leyes y reglamentos "de naturaleza administrativa". Más concretamente, esa interpretación significaría que esencialmente, las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere [el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994]" que son "instrumentos de aplicación" o tienen "naturaleza administrativa" deben ser uniformes o que los "instrumentos de aplicación" que son leyes o reglamentos (con independencia de que sean o no leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994) deben ser uniformes. Señalamos que, una interpretación de esa naturaleza, que en el primero de los casos suprime de hecho el término "aplicará" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y en el segundo, suprime de hecho la referencia a las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere [el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994]" (al menos, en lo que respecta a las leyes reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que son "instrumentos de aplicación" o tienen "naturaleza administrativa") está excluida por el principio de interpretación efectiva de los tratados, que exige que demos sentido y efecto a todos los términos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[379]

7.118 *En tercer lugar*, según los Estados Unidos, todas las leyes y reglamentos, sean o no "instrumentos de aplicación" y tengan o no "naturaleza administrativa" están sujetos a la obligación de aplicación uniforme en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. No obstante, en opinión de los Estados Unidos, aquellos que pueden considerarse "instrumentos de aplicación" o leyes o reglamentos "de naturaleza administrativa" se examinan de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en relación con su contenido como prueba de aplicación no uniforme de

[378] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, página 100.

[379] El Órgano de Apelación declaró en el asunto *Estados Unidos - Gasolina* que uno de los corolarios de la "regla general de interpretación" del artículo 31 de la *Convención de Viena* es que la interpretación ha de dar sentido y efecto "a todos los términos del tratado" y que el intérprete no debe "adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado"; informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, página 27

las leyes, reglamentos u otras medidas a las que dan efecto, en tanto que las que no tienen tal condición se examinan en el marco de ese párrafo para determinar si están siendo o no aplicados de manera uniforme. A juicio del Grupo Especial, no hay en el texto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 nada que apoye ese enfoque dual y diferenciado.

7.119 En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, el Grupo Especial confirma su conclusión de que el término "*administer*" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de las leyes y reglamentos, con inclusión de los procesos administrativos y sus resultados, pero no a las propias leyes y reglamentos.

b) Interpretación de "*uniform*" (uniforme)

i) Resumen de los argumentos de las partes

7.120 Los **Estados Unidos** sostienen que el sentido corriente del término "*uniform*" (uniforme) pertinente a la utilización de ese término en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es "*of one unchanging form, character, or kind; that is or stays the same in different places or circumstances, or at different times*" (de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas).[380] Los Estados Unidos aducen que la obligación de aplicación uniforme que establece el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige la aplicación uniforme en todo el territorio de un Miembro de la OMC. Los Estados Unidos sostienen que un Miembro no aplica su legislación de manera uniforme si otorga un trato diferente a productos o transacciones idénticas en regiones geográficas diferentes de ese Miembro y no establece ningún mecanismo para la conciliación sistemática de las diferencias.[381]

7.121 Las **Comunidades Europeas** sostienen que aceptan la definición del término "uniforme" como "de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas". Las Comunidades Europeas añaden que deben aplicarse criterios idénticos al requisito de uniformidad en el tiempo, en un territorio o entre distintas personas.[382]

ii) Análisis por el Grupo Especial

7.122 Se ha pedido al Grupo Especial que establezca el criterio que debe aplicarse para determinar si se ha infringido o no la obligación de aplicación "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Al establecer lo que quiere decir "uniforme" en el contexto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial se ajustará en su análisis a los artículos 31 y 32 de la *Convención de Viena*.

Sentido corriente

7.123 En lo que respecta al *sentido corriente* del término "uniforme", un Grupo Especial de la OMC ha indicado que el diccionario define ese término como "de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas".[383] Esta

[380] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 34 y 35, donde se hace referencia a *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 3.488 (Estados Unidos - Prueba documental 4) y al informe del Grupo Especial sobre el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.80.

[381] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 20.

[382] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 151 del Grupo Especial, con referencia al informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.80.

[383] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.83.

definición, en la que se han basado tanto los Estados Unidos como las Comunidades Europeas y que ha sido apoyada por varios terceros en la presente diferencia indica que el término "uniforme" requiere, entre otras cosas, la uniformidad geográfica.[384] Dicho de otra forma, según esta definición la aplicación debe ser uniforme en distintos lugares de un determinado Miembro de la OMC de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial no ve ningún motivo para discrepar de esa interpretación.

7.124 En lo que respecta al criterio que debe aplicarse al establecer si la aplicación es o no "uniforme" en un caso concreto, la utilización del término "el mismo" en la definición citada en la que se basó el Grupo Especial a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior indica que la aplicación debe ser absoluta e instantáneamente idéntica cuando se refiere a los mismos hechos. No obstante, el Grupo Especial señala que el término se ha definido también como "*conforming to one standard, rule, or pattern; alike, similar*" (conforme con una norma, criterio o pauta; similar, semejante).[385] Esta definición parece implicar un criterio de uniformidad menos riguroso que el anterior, y que exige que se apliquen las mismas normas, pero no necesariamente que los resultados de la aplicación sean idénticos. Analizamos ahora el contexto para la interpretación del término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 para determinar cuál de esas dos interpretaciones del criterio de uniformidad, en su caso, es más adecuada a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Contexto

7.125 El Grupo Especial examinará en primer lugar el *contexto inmediato* del término "uniforme", en concreto, los demás términos que aparecen en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial recuerda que ese párrafo obliga a los Miembros, entre otras cosas, a "aplicar" de manera uniforme todas "sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere [el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994]". De los términos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se desprende claramente que hay una relación intrínseca entre la obligación de uniformidad, de un lado, y el sentido de "aplicará" y las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere [el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994]", de otro.

7.126 El Grupo Especial ha constatado en el párrafo 7.113 *supra* que el término "aplicará" (*administer*) del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de las leyes y reglamentos, con inclusión de los procesos administrativos y sus resultados, pero no a las leyes y reglamentos en sí mismos. El Grupo Especial entiende que la forma, la naturaleza y la escala específicas de la aplicación de que se trate en una diferencia relativa a la aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 pueden variar según los casos. En particular, un caso puede referirse a la aplicación en relación con un proceso administrativo concreto, autónomo, y otro a la aplicación de un sistema en su conjunto. El Grupo Especial considera que, en consecuencia, para interpretar el término "uniforme" en un caso determinado que implique una supuesta infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es necesario aclarar antes la aplicación que se impugna.

7.127 De forma análoga, el Grupo Especial opina que, para interpretar el término "uniforme" en un caso concreto es necesario aclarar cuáles son las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el [párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994]" que supuestamente se aplican de manera no uniforme, con infracción del párrafo 3 a) del artículo X

[384] El Grupo Especial señala que, en el contexto de la presente diferencia sólo se le ha pedido que examine cuestiones de supuesta falta de uniformidad geográfica. En consecuencia, el Grupo Especial limitará su interpretación del término "uniformidad" a este aspecto.

[385] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 3.488.

del GATT de 1994. En un extremo del espectro, puede ser que una impugnación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiera a la aplicación de una sola disposición legislativa concreta. En el otro extremo del espectro, esa impugnación puede referirse a la aplicación de un amplio cuerpo de disposiciones legislativas. Entre esos dos extremos del espectro hay gran número de casos posibles.

7.128 De lo precedente se desprende claramente que la forma, la naturaleza y la escala de la aplicación[386] que puede estar en litigio en una diferencia relativa a la aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 tanto desde el punto de vista del tipo de aplicación como del marco legislativo en el que tiene lugar la aplicación en cuestión, pueden diferir considerablemente según los casos. Habida cuenta de la gama de posibilidades que se presentan a este respecto, el Grupo Especial no considera posible una definición única del concepto de "uniformidad" aplicable en todos los casos. De hecho, a juicio del Grupo Especial, al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el contexto de un caso determinado habría que tener en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme.

7.129 El Grupo Especial considera que cuanto más limitada sea la impugnación tanto desde el punto de vista de la aplicación que se impugna como desde el de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que se alega que se aplican de manera no uniforme en un determinado caso, más riguroso será el requisito de uniformidad. Por el contrario, cuanto más amplia y de mayor alcance sea la impugnación tanto desde el punto de vista de la naturaleza de la aplicación que se impugna como desde el de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones o resoluciones administrativas concretas que se alega que se aplican de manera no uniforme en un caso determinado, menos riguroso será el criterio de uniformidad que debe aplicarse.

Medios de interpretación complementarios

7.130 A juicio del Grupo Especial, el enfoque expuesto en el párrafo 7.129 *supra*, que supone un concepto de uniformidad cuyo umbral difiere en función de la forma, la naturaleza y la escala de la impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 de que se trate, está justificado en función del contexto fáctico, que, a nuestro juicio, puede tomarse en consideración, de conformidad con el artículo 32 de la *Convención de Viena*, como *medio de interpretación complementario*.[387]

[386] Al referirnos a la "escala de la aplicación" en esta parte y en otras de nuestro informe, nos referimos a la escala del acto o actos de aplicación concretos que son objeto de impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y *no* a la escala de un sistema de administración vigente en un determinado Miembro de la OMC.

[387] Señalamos que en el asunto *CE - Trozos de pollo*, el Grupo Especial se basó en el "contexto fáctico" al interpretar el sentido corriente del término "salados" en la Lista anexa al GATT de las Comunidades Europeas: informe del Grupo Especial, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 7.105. En apelación, las Comunidades Europeas impugnaron la utilización por el Grupo Especial del denominado "contexto fáctico". El Órgano de Apelación confirmó el análisis del Grupo Especial y declaró que "... Coincidimos con las Comunidades Europeas en que la *Convención de Viena* no contiene ninguna referencia al 'contexto fáctico' como etapa analítica separada en el marco del artículo 31. No obstante, no creemos que el Grupo Especial, al interpretar el término 'salados', tal como figura en la partida 02.10, haya actuado incorrectamente cuando tomó en consideración elementos como los 'productos abarcados por la concesión contenida en la partida 02.10' el 'sabor, textura y otras propiedades físicas' de los productos comprendidos en esa partida, y la 'conservación'. El examen de estos elementos por el Grupo Especial a tenor del sentido corriente del término 'salados' complementó su análisis de las definiciones de los diccionarios acerca del término. De cualquier modo, aunque estuviéramos de acuerdo con las Comunidades Europeas en que estos elementos no deben considerarse a tenor del 'sentido

7.131 En particular, el Grupo Especial considera que, si hubiéramos de interpretar que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 impone el requisito de uniformidad absoluta -es decir, uniformidad en todos los casos en que los hechos son idénticos, como sugiere una de las interpretaciones del sentido corriente del término "uniforme"- ello llevaría a un resultado que no es razonable. A este respecto, el Grupo Especial señala que lo cierto es que muchos sistemas de administración aduanera implican millones de actos de aplicación al año. El Grupo Especial no considera viable desde el punto de vista práctico conseguir una uniformidad absoluta en todos y cada uno de los casos en los que concurren hechos idénticos, especialmente en el caso de grandes Miembros a través de cuyas fronteras se importan y exportan diariamente gran número de productos y en los que desarrollan su actividad muchos funcionarios de aduanas.

7.132 El Grupo Especial considera que el contexto fáctico indica también que la interpretación del término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no entraña necesariamente una uniformidad instantánea, como podría inferirse de una de las interpretaciones del sentido corriente del término "uniforme". A nuestro parecer, interpretar que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 impone una obligación de uniformidad instantánea llevaría a un resultado no razonable, puesto que en el caso de muchos sistemas de administración aduanera no siempre sería viable desde el punto de vista práctico lograr esa uniformidad instantánea. En lugar de ello, consideramos que la uniformidad debe alcanzarse dentro de un plazo que sea prudencial. El Grupo Especial considera que para evitar una constatación de aplicación no uniforme de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 debe ser evidente en el momento de establecimiento del grupo especial que cualquier falta de uniformidad que pudiera haber existido ha sido subsanada en un plazo que sea prudencial. A nuestro juicio, lo que se considera prudencial dependerá de la forma, la naturaleza y la escala de la aplicación de que se trate, así como de la complejidad de las cuestiones fácticas y jurídicas que plantea el acto de aplicación impugnado.

7.133 A nuestro juicio, en ningún caso puede persistir la aplicación no uniforme por un período indefinido, por cuanto ello haría de hecho inútil el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, lo que sería contrario al principio de interpretación efectiva de los tratados.[388] Además, una interpretación de esa naturaleza sería incompatible con la obligación que nos impone la *Convención de Viena* de interpretar de buena fe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.134 En todos los casos, independientemente de la forma, la naturaleza y la escala de la aplicación de que se trate, el Grupo Especial considera que la aplicación debe ajustarse a determinadas normas mínimas de un procedimiento con las debidas garantías, lo que abarca conceptos como los de

---

corriente', no cabe duda de que podrían considerarse a tenor del 'contexto'": informe del Órgano de Apelación, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 176. A juicio del Grupo Especial, la aprobación por el Órgano de Apelación de la utilización del "contexto fáctico" de conformidad con el artículo 31 de la *Convención de Viena* indica que ese contexto podría tomarse en consideración de forma subsidiaria o complementaria a tenor del artículo 32 de la *Convención de Viena*. Encontramos apoyo a esta opinión en el asunto *CE - Trozos de pollo*, donde el Órgano de Apelación declaró lo siguiente: "Subrayamos además que el artículo 32 no define exhaustivamente los medios de interpretación complementarios a los que puede recurrir un intérprete. Dice únicamente que *incluyen* los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. Por consiguiente, un intérprete dispone de cierta flexibilidad al considerar medios complementarios pertinentes en un caso determinado para ayudar a determinar las intenciones comunes de las partes.": informe del Órgano de Apelación, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 283.

[388] A este respecto recordamos que en el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, el Órgano de Apelación declaró que uno de los corolarios de la "regla general de interpretación" del artículo 31 de la *Convención de Viena* es que la interpretación debe dar sentido y efecto "a todos los términos del tratado", y que el intérprete no debe "adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado": informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, página 27.

información, transparencia, justicia y equidad.[389] A juicio del Grupo Especial, esas normas se derivan del contexto más amplio de debidas garantías de procedimiento del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, que se ha analizado *supra* en los párrafos 7.107 y 7.108.

Resumen y conclusiones

7.135 En síntesis, los instrumentos de interpretación en los que el Grupo Especial puede basarse de conformidad con la *Convención de Viena* al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 indican que el término abarca, entre otras cosas, la uniformidad geográfica. Dicho de otra forma, la aplicación debe ser uniforme en diferentes lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. Además, el Grupo Especial considera que la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme deben tenerse en cuenta al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el contexto de un caso determinado. El Grupo Especial considera que cuanto más limitada sea la impugnación desde el punto de vista de la aplicación que se impugna y de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que se alega que se aplican de manera no uniforme en un caso determinado, más riguroso será el requisito de uniformidad. Cuanto más amplia y de mayor alcance sea la impugnación tanto desde el punto de vista de la naturaleza de la aplicación impugnada como del de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones o resoluciones concretas que supuestamente se aplican de manera no uniforme en un caso determinado, menos riguroso será el criterio de uniformidad que debe aplicarse. El Grupo Especial considera además que la interpretación del término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no entraña necesariamente una uniformidad instantánea, sino que la uniformidad debe alcanzarse dentro de un plazo que sea prudencial. Lo que se considera prudencial dependerá de la forma, naturaleza y alcance de la aplicación de que se trate y de la complejidad de las cuestiones fácticas y jurídicas que plantea el acto de aplicación impugnado. El Grupo Especial es de la opinión de que, en todos los casos, con

[389] A este respecto señalamos que en *Estados Unidos - Camarones*, el Órgano de Apelación declaró lo siguiente:

"Nos parece que de hecho, los Miembros exportadores que solicitan la certificación y cuyas solicitudes son rechazadas se ven privados del trato equitativo básico y de las debidas garantías procesales y son objeto de discriminación frente a los Miembros a los que se les ha concedido la certificación.

Las disposiciones del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 tratan este asunto. A nuestro juicio, el artículo 609 está comprendido en las 'leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general' que se mencionan en el párrafo 1 del artículo X. En tanto rija la prescripción de las debidas garantías procesales en general con respecto a medidas que por lo demás se imponen de conformidad con las obligaciones dimanantes de la OMC, no es sino razonable que se exija el riguroso cumplimiento de dichas garantías fundamentales en la aplicación y administración de una medida que pretende ser una excepción a las obligaciones dimanantes de tratados del Miembro que la impone y que da lugar efectivamente a la suspensión *pro hac vice* de los derechos de los otros Miembros dimanantes de tratados.

También es evidente para nosotros que *el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 establece determinadas normas mínimas de transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales* que, a nuestro juicio, en este caso no se han cumplido. El carácter *ex parte* y la falta de transparencia del procedimiento administrativo interno aplicado por los funcionarios competentes de la Oficina de Conservación Marina, el Departamento de Estados y el Servicio Nacional de Pesca Marítima de los Estados Unidos a través de los procedimientos de certificación previstos en el artículo 609, así como el hecho de que los países cuyas solicitudes son rechazadas no reciban una notificación formal de ese rechazo ni las razones del mismo, y el hecho también de que no haya ningún procedimiento jurídico formal de revisión ni de apelación con respecto a la denegación de una solicitud, son completamente contrarios al espíritu, sino a la letra, del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994." (sin cursivas en el original): Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Camarones*, párrafos 181 a 183.

independencia de la forma, la naturaleza y la escala de la aplicación de que se trate, la aplicación debe ajustarse a determinadas normas mínimas de debidas garantías de procedimiento, lo que abarca conceptos como los de información, transparencia, justicia y equidad.

4. Pertinencia del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el contexto de la presente diferencia

a) Resumen de los argumentos de las partes

7.136 Las **Comunidades Europeas** sostienen que lo cierto es que lo que pretenden de hecho los Estados Unidos con su alegación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es exigir a las Comunidades Europeas que establezcan un organismo aduanero central.[390] Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no prescribe la forma en que un Miembro de la OMC ha de aplicar sus leyes aduaneras, incluida la cuestión de las autoridades o la administración a través de las cuales se lleva a cabo la aplicación de las leyes aduaneras. Según las Comunidades Europeas, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no excluye en absoluto la posibilidad de que en un Estado o entidad federal o cuasifederal, las leyes aduaneras sean aplicadas por autoridades del nivel subfederal.[391] En apoyo de su posición, las Comunidades Europeas se remiten al párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 que establece que "cada parte contratante deberá tomar las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que, dentro de su territorio, los gobiernos y autoridades regionales y locales observen las disposiciones del presente Acuerdo".[392] Las Comunidades Europeas señalan que en el asunto *Canadá - Monedas de oro* el Grupo Especial del GATT constató que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 tiene el "cometido de permitir que los Estados federales se adhieran al Acuerdo General sin tener que cambiar la distribución federal de las competencias". Las Comunidades Europeas sostienen que, por lo tanto, cualquier interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 que afecte a la distribución interna de las competencias es incompatible con el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994.[393]

7.137 En respuesta a lo anterior, los **Estados Unidos** aclaran que los Estados Unidos nunca han insistido en que las Comunidades Europeas deban establecer un organismo aduanero comunitario y un tribunal aduanero comunitario y armonizar las leyes de los Estados miembros. Los Estados Unidos aducen simplemente que las Comunidades Europeas, al igual que los demás Miembros de la OMC, deben aplicar sus leyes aduaneras de forma compatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[394] Los Estados Unidos sostienen que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 se refiere a la "observancia del Acuerdo General por los gobiernos y autoridades regionales y locales". Según los Estados Unidos, en cambio, la presente diferencia no se refiere a la observancia de una obligación dimanante del GATT de 1994 por los gobiernos y autoridades regionales, sino por las propias Comunidades Europeas. Los Estados Unidos aducen que, en consecuencia, este caso es distinto del caso *Canadá - Monedas de oro*, en el que un gobierno provincial del Canadá adoptó una medida para obtener ingresos provinciales -facultad que la Constitución canadiense atribuye exclusivamente a los cuerpos legislativos provinciales- de una manera que implicó la infracción por el

[390] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 30.

[391] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 252.

[392] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 220 y 221.

[393] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 220 y 221, en que se hace referencia al informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafo 58.

[394] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 158 del Grupo Especial.

Canadá de la obligación que le imponía el artículo III del GATT de 1994.[395] Los Estados Unidos añaden que si las Comunidades Europeas han tratado de invocar como defensa el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994, ello entraña la carga de probar que las deficiencias en la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria se refieren a cuestiones "que escapan al control del gobierno central porque caen fuera de su jurisdicción en virtud de la distribución constitucional de poderes".[396] Según los Estados Unidos, si las Comunidades Europeas aducen que no pueden controlar la aplicación del derecho aduanero por las autoridades aduaneras de los Estados miembros con arreglo a su distribución constitucional de poderes, ello refuerza el argumento de que las Comunidades Europeas no cumplen su obligación de aplicar su legislación aduanera de manera uniforme de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[397]

7.138 Las **Comunidades Europeas** responden que es preciso que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 tenga un sentido útil. En el contexto de ese párrafo, debe considerarse si hay dentro del territorio del Miembro de la OMC de que se trate gobiernos y autoridades regionales o locales responsables de aplicar las disposiciones del GATT. Según las Comunidades Europeas, en caso afirmativo, el Miembro en cuestión debe adoptar "medidas razonables" para garantizar la observancia.[398] Las Comunidades Europeas aducen que, el Grupo Especial que examinó el asunto *Canadá - Monedas de oro* declaró que para determinar lo que constituye una "medida razonable", "deben sopesarse las consecuencias de su inobservancia por el Gobierno local para las relaciones comerciales con otras partes contratantes, y las dificultades internas que habría que afrontar para lograr su observancia".[399]

7.139 Los **Estados Unidos** sostienen que aun en el caso de que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 fuese pertinente a la presente diferencia, ese párrafo no dispensaría a las Comunidades Europeas del cumplimiento de su obligación en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 ni afectaría en forma alguna a esa obligación. A este respecto, los Estados Unidos se remiten al párrafo 13 del Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del GATT de 1994, que, según los Estados Unidos, aclara que "en virtud del GATT de 1994, cada Miembro es plenamente responsable de la observancia de todas las disposiciones de ese instrumento ...", lo que quiere decir, a juicio de los Estados Unidos, que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 impone a los Miembros que tienen una estructura federal la obligación de tomar "medidas razonables" para "lograr" que los gobiernos locales o regionales "observen" las obligaciones de ese Miembro, pero no modifica el contenido de ninguna obligación derivada del GATT de 1994 para esos Miembros. Además, según los Estados Unidos, aun en el caso de que se trate de la observancia de obligaciones derivadas de la OMC por gobiernos regionales o locales, el párrafo 14 del Entendimiento relativo al artículo XXIV y el párrafo 9 del artículo 22 del ESD establecen "las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtud del [ESD]" y "las disposiciones de los acuerdos abarcados y del [ESD]", respectivamente "relativas a la compensación y a la suspensión de concesiones o de otras obligaciones" serán aplicables "en los casos en que no haya sido posible lograr la observancia". Los Estados Unidos sostienen que, en consecuencia, aun cuando

[395] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 158 del Grupo Especial.

[396] Informe del Grupo Especial del GATT, *Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta*, IBDD 39S/242, párrafo 5.79 (adoptado el 19 de junio de 1992).

[397] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 158 del Grupo Especial.

[398] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 176 del Grupo Especial.

[399] Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafo 69.

de conformidad con el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 la única obligación en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 fuera tomar "medidas razonables" para lograr la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria, el hecho de no aplicar efectivamente su derecho aduanero de manera uniforme no les liberaría de las disposiciones pertinentes en materia de compensación y suspensión de concesiones.[400]

b) Análisis por el Grupo Especial

7.140 El Grupo Especial señala que en el contexto de la presente diferencia los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas han incumplido la obligación que les impone el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 debido a que no han aplicado la normativa aduanera comunitaria de manera uniforme.[401] Los Estados Unidos reconocen que la aplicación de la normativa aduanera comunitaria es llevada a cabo por las autoridades aduaneras de los Estados miembros, pero sostiene que las Comunidades Europeas, en la medida en que no controlen la aplicación por esas autoridades aduaneras para lograr una aplicación uniforme, infringen el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[402]

7.141 A título de observación preliminar, el Grupo Especial señala que los términos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 simplemente obligan a los Miembros a aplicar las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X de manera, entre otras cosas, uniforme. Ese párrafo no prescribe cómo debe lograrse una aplicación uniforme. En consecuencia, el Grupo Especial considera que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 confiere a los Miembros la facultad discrecional de determinar la forma de lograr una aplicación uniforme, con inclusión de la naturaleza y el nivel de las entidades a las que se encomiende la aplicación y de los instrumentos que se establecen para lograrla. En consecuencia, el Grupo Especial considera que no hay en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 ninguna disposición que impida a las Comunidades Europeas aplicar sus leyes aduaneras por medio, por ejemplo, de las autoridades aduaneras de los Estados miembros que las integran.[403]

7.142 Se ha planteado en la presente diferencia la cuestión de si el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 tiene o no el efecto de limitar las obligaciones de las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 de forma que éstas sólo están obligadas a tomar "medidas razonables" para lograr la aplicación uniforme por las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[404] El párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 establece lo siguiente:

---

[400] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 158 del Grupo Especial.

[401] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 158 del Grupo Especial.

[402] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 158 del Grupo Especial.

[403] El Grupo Especial señala que, en el contexto de la presente diferencia, los Estados Unidos no han impugnado en sí mismo el hecho de que las Comunidades Europeas apliquen sus leyes aduaneras por medio, entre otras instancias, de las autoridades aduaneras de los Estados miembros que las integren.

[404] Véanse, por ejemplo, las observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 176 del Grupo Especial y las observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 158 del Grupo Especial.

> "Cada parte contratante deberá tomar las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que, dentro de su territorio, los gobiernos y autoridades regionales y locales observen las disposiciones del presente Acuerdo."

7.143 El Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("el Entendimiento"), que forma parte del GATT de 1994[405] convenido en el curso de las negociaciones de la Ronda Uruguay establece lo siguiente con respecto al párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994:

> "En virtud del GATT de 1994, cada Miembro es plenamente responsable de la observancia de todas las disposiciones de ese instrumento, y tomará las medidas razonables que están a su alcance para garantizar su observancia por los gobiernos y autoridades regionales y locales dentro de su territorio.
>
> Podrá recurrirse a las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtud del Entendimiento sobre Solución de Diferencias, con respecto a las medidas que afecten a su observancia adoptadas por los gobiernos y autoridades regionales y locales dentro del territorio de un Miembro. Cuando el Órgano de Solución de Diferencias haya resuelto que no se ha respetado una disposición del GATT de 1994, el Miembro responsable deberá tomar las medidas razonables que estén a su alcance para lograr su observancia. En los casos en los que no haya sido posible lograrla, serán aplicables las disposiciones relativas a la compensación y a la suspensión de concesiones o de otras obligaciones.
>
> Cada Miembro se compromete a examinar con comprensión las representaciones que le formule otro Miembro con respecto a medidas adoptadas dentro de su territorio que afecten al funcionamiento del GATT de 1994 y a brindar oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas representaciones."

7.144 El Grupo Especial destaca que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 no está redactado como una defensa, sino como una obligación positiva. Más concretamente, la utilización de la palabra "deberá"[406] en el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 indica que ese párrafo impone a los Miembros la obligación de tomar todas las medidas razonables para lograr que las autoridades locales cumplan las obligaciones derivadas de las normas de la OMC, lo que indicaría que no es posible basarse en el párrafo 12 del artículo XXIV para atenuar las disposiciones del GATT de 1994 (incluido el párrafo 3 a) de su artículo X) a las que se refiere ese párrafo, ni para desviarse de ellas. El Entendimiento respalda la opinión de que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 establece una obligación positiva en lugar de atenuar las disposiciones del GATT de 1994 o permitir una desviación de ellas. En concreto, el Entendimiento declara que "en virtud del GATT de 1994, cada Miembro es plenamente responsable de la observancia de todas las disposiciones de ese instrumento", lo que indica que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 no protege a los Miembros contra la constatación de que infringen sus obligaciones en el marco de la OMC.[407]

---

[405] Véase el apartado c) del artículo 1 del GATT de 1994.

[406] En el Black's Law Dictionary el término "deberá" se define como "tiene el deber de; de forma más general está obligado a": *Black's Law Dictionary*, 1999, página 1.379.

[407] El párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC respalda también la opinión de que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 no implica una atenuación o desviación de las disposiciones del GATT de 1994, incluido el párrafo 3 a) de su artículo X. El párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC establece que: "Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos." Entendemos que ese párrafo establece para todos los Miembros de la OMC la obligación clara de asegurar la conformidad de sus

Además, observamos que el Entendimiento establece claramente que cuando el OSD haya resuelto que los gobiernos o autoridades regionales o locales de un Miembro de la OMC no han respetado una disposición del GATT de 1994, "en los casos en que no haya sido posible lograr [la observancia], serán aplicables las disposiciones relativas a la compensación y a la suspensión de concesiones o de otras obligaciones".

7.145 Habida cuenta de lo precedente, el Grupo Especial opina que, con independencia de que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 sea o no aplicable en el contexto de la presente diferencia[408], ese precepto no constituye una excepción ni una dispensa de la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En consecuencia, el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 no tiene ninguna repercusión en nuestro examen de las alegaciones de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

5. Carga de la prueba

a) Resumen de los argumentos de las partes

7.146 Los **Estados Unidos** sostienen que, de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, es necesario examinar los efectos reales que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio.[409] Según los Estados Unidos, ello se desprende claramente del contexto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, que incluye en su párrafo 1 la obligación de publicar rápidamente determinadas medidas aduaneras y en su párrafo 3b) la obligación de proporcionar foros para la pronta revisión y rectificación de las decisiones aduaneras, obligaciones ambas que están evidentemente orientadas a facilitar las actividades de los comerciantes.[410]

7.147 Las **Comunidades Europeas** admiten que los efectos de la aplicación en los comerciantes son un elemento pertinente a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, lo que según las Comunidades Europeas significa que es preciso que el trato que un comerciante puede esperar de las autoridades aduaneras de un Miembro de la OMC sea razonablemente previsible. Ello no quiere decir que pueda considerarse que los casos concretos de errores administrativos susceptibles de rectificación mediante los mecanismos administrativos y judiciales que ofrece el sistema de un Miembro de la OMC constituyen una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Las Comunidades Europeas sostienen que en lugar de ello, es necesario que los efectos en los comerciantes puedan demostrarse mediante pruebas suficientes. Las Comunidades Europeas mantienen además que no puede considerarse que medidas que no entrañan ninguna diferencia de trato pertinente entre los comerciantes constituyan una infracción del párrafo 3 a) del artículo X

---

leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con sus obligaciones en virtud de los Acuerdos abarcados, incluido el GATT de 1994. Véase el informe del Órgano de Apelación, *CE - Sardinas*, párrafo 213.

[408] A este respecto, el Grupo Especial recuerda que los Estados Unidos han sugerido que el párrafo 12 del artículo XXIV es inaplicable en el contexto de la presente diferencia: Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 158 del Grupo Especial. El Grupo Especial señala que no necesita pronunciarse acerca de si los Estados miembros de las Comunidades Europeas reúnen o no las condiciones para ser considerados "gobiernos o autoridades regionales y locales" en el sentido del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994.

[409] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 117, en el que se cita el informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.77.

[410] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 117, en el que se cita el informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.76.

del GATT de 1994.[411] Las Comunidades Europeas consideran también que no hay obligación de demostrar la existencia de perjuicios comerciales para probar una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sino que la cuestión que es preciso analizar es si el reclamante ha sufrido anulación o menoscabo en el sentido del artículo XXIII del GATT de 1994. Según las Comunidades Europeas, del párrafo 8 del artículo 3 del ESD se desprende que cuando hay una infracción de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume normalmente que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. No obstante, el Miembro contra el que se haya presentado la reclamación puede refutar esa presunción.[412]

7.148 En respuesta a lo anterior, los **Estados Unidos** manifiestan que un examen de los efectos reales que una medida puede tener sobre los comerciantes no se reduce a un examen de si los comerciantes que se encuentran en situaciones análogas están obligados a pagar derechos de aduana diferentes, sino que incluye el análisis de las posibles repercusiones en la situación de competencia. Los Estados Unidos sostienen que, en consecuencia, al determinar si se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, un grupo especial no debe preguntarse si se ha dado a un Miembro de la OMC un trato diferente que a otros, sino si se ha dado un trato diferente a los comerciantes en función, por ejemplo, de la parte del territorio del Miembro en la que importan sus mercancías. Si la manera en que un Miembro aplica su derecho aduanero puede alentar a un comerciante a preferir efectuar la importación en una región y no en otra, este hecho sería prueba de una aplicación no uniforme con infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[413] Los Estados Unidos sostienen que los beneficios derivados para los Estados Unidos resultan anulados o menoscabados cuando los comerciantes se ven de hecho forzados a modificar la estructura de sus envíos o a contraer gastos adicionales como resultado de una aplicación no uniforme con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[414]

7.149 Las **Comunidades Europeas** sostienen que en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es aplicable un umbral mínimo, lo que implica que para que una variación de la práctica administrativa constituya una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es preciso que tenga una repercusión significativa de la aplicación del derecho aduanero.[415] Según las Comunidades Europeas, este umbral mínimo refleja el hecho de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no requiere la uniformidad como un fin en sí mismo, sino que pretende proteger los intereses de los comerciantes.[416] En apoyo de su posición, las Comunidades Europeas se remiten a las observaciones formuladas por el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Productos avícolas*, que, según las Comunidades Europeas, indican que casos aislados de aplicación no tienen valor probatorio con respecto a una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[417] Además, las Comunidades Europeas sostienen que las observaciones del Grupo Especial en *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* indican que a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

[411] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 174 del Grupo Especial.

[412] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 175 del Grupo Especial.

[413] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 174 y 175 del Grupo Especial.

[414] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 175 del Grupo Especial.

[415] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, donde se hace referencia al informe del Grupo Especial, *CEE - Manzanas de mesa*, párrafo 12.30.

[416] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 46 del Grupo Especial.

[417] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 239, en el que se cita el informe del Órgano de Apelación, *CE - Productos avícolas*, párrafos 111 y 113.

de 1994 es necesaria una estructura del proceso de formulación de decisiones.[418] Las Comunidades Europeas aducen que esa interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 resulta especialmente necesaria habida cuenta de que las autoridades aduaneras han de desarrollar su actividad en circunstancias complejas y que cambian rápidamente a las que han de adaptarse continuamente. Además, según las Comunidades Europeas, la administración aduanera es un sistema complejo, cuyos resultados dependen de numerosos factores, no todos ellos imputables al Miembro de que se trata.[419]

7.150 En respuesta a lo anterior, los **Estados Unidos** manifiestan que las Comunidades Europeas instan al Grupo Especial a adoptar una visión relativa del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 que requiere una evaluación de las particularidades del sistema de administración aduanera de que se trate.[420] Los Estados Unidos añaden que el texto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación "de manera uniforme" y no a una "estructura" de aplicación "no uniforme".[421] Además, los Estados Unidos aducen que la tesis de las Comunidades Europeas de que la falta de uniformidad sólo es inadmisible cuando representa una estructura de falta de uniformidad está fuera de lugar porque las Comunidades infieran esa tesis de dos informes que no vienen al caso. En primer lugar, con respecto al informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *CE - Productos avícolas*, los Estados Unidos sostienen que la cuestión relevante en ese asunto no era el sentido de "aplicación uniforme" en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sino si el artículo X del GATT de 1994 era o no aplicable a una determinada licencia de importación emitida respecto de un envío concreto.[422] Los Estados Unidos mantienen que, de forma análoga, las Comunidades Europeas se basan en una sola frase del informe del Grupo Especial sobre el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*.[423] Según los Estados Unidos, en ese asunto el Grupo Especial no se refirió a una estructura como requisito genérico para formular una alegación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sino a una estructura que le hubiera permitido determinar si la aplicación concreta de la legislación antidumping en cuestión en ese asunto fue o no uniforme.[424] Los Estados Unidos sostienen que la alegación en litigio en la presente diferencia es muy diferente de la que el Japón formuló en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*. Los Estados Unidos manifiestan que no alegan que un caso concreto de aplicación de la normativa aduanera comunitaria constituya una aplicación no uniforme, sino que el sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto no tiene como resultado la aplicación uniforme que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[425]

[418] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 240 en el que se hace referencia al informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, párrafo 7.268; Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 26; Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 28.

[419] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 26.

[420] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 12.

[421] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 28.

[422] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafos 17 a 19.

[423] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 33.

[424] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 35.

[425] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 36 a 38.

b) Análisis por el Grupo Especial

7.151 El Grupo Especial considera que la carga de la prueba a efectos de la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 está estrechamente relacionada con la interpretación que hace este Grupo Especial de los términos de dicho artículo. De especial pertinencia a la carga de la prueba en el contexto de la presente diferencia es la constatación del Grupo Especial que figura en el párrafo 7.135 *supra* de que en el contexto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es aplicable un concepto de uniformidad cuyo umbral difiere en función de la naturaleza de la impugnación de que se trate. Ese concepto del término "uniforme" parece entrañar una carga de la prueba diferente en función de la forma, la naturaleza y la escala de la aplicación impugnada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en un caso determinado. Como ha declarado el Grupo Especial en el párrafo 7.135 *supra*, cuanto más limitada sea la impugnación mayor será el grado de uniformidad exigido; cuanto más amplia sea la impugnación menos riguroso será el criterio de uniformidad aplicable.

7.152 Con respecto a la presente diferencia, el Grupo Especial recuerda la constatación que figura en el párrafo 7.64 *supra* de que su mandato le autoriza a examinar la manera en que las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros aplican el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. De conformidad con su mandato, el Grupo Especial no puede examinar las impugnaciones del diseño y la estructura en sí mismos del sistema de administración aduanera de las CE, incluidas las impugnaciones del diseño y estructura del sistema de las CE en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. En cambio, estamos autorizados a examinar casos concretos de aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de los Estados Unidos en los casos en los que los Estados Unidos se han basado en el contexto de la presente diferencia.

7.153 A la luz de nuestro mandato, a efectos de la resolución de la presente diferencia, el Grupo Especial considera que sólo es necesario determinar la carga de la prueba aplicable con respecto a los casos concretos de aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de los Estados Unidos en los que se han basado los Estados Unidos en el contexto de la presente diferencia. A juicio del Grupo Especial, como explicaremos detalladamente más adelante, esos casos representan impugnaciones limitadas en el contexto del sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto. En consecuencia, a juicio del Grupo Especial, con respecto a esos casos será exigible un alto grado de uniformidad.

7.154 No consideramos necesario determinar de forma precisa en qué medida debe ser estricto el requisito de uniformidad a este respecto. El Grupo Especial considera que ello dependerá de las circunstancias que concurran en el caso de que se trate de supuesta aplicación no uniforme. El Grupo Especial considera necesario tener presentes, al decidir si se cumple o no el criterio de uniformidad en un caso determinado, las normas mínimas de debidas garantías de procedimiento que subyacen al párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[426] Es asimismo necesario cerciorarse de que el umbral no sea tan alto que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 nunca pueda ser infringido, ya que es evidente que éste no fue el propósito de los redactores de ese párrafo. Además, el Grupo Especial opina que se demostrará la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT

[426] Véase el párrafo 7.134 *supra*.

de 1994 si la aplicación no uniforme en cuestión tiene como resultado futuros efectos desfavorables reales o posibles en el entorno comercial.[427]

6. Supuestas infracciones específicas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

7.155 En esta sección de su informe, el Grupo Especial abordará los casos concretos de supuestas infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en relación con la aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y medidas conexas en las esferas de la administración aduanera específicamente señaladas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial formulada por los Estados Unidos. Ahora bien, antes de proceder a ello, el Grupo Especial estima necesario explicar su interpretación de determinados aspectos de la manera en la que funciona el sistema de administración aduanera de las CE porque es un contexto importante para el examen de los casos concretos de supuestas infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 respecto de los cuales se han planteado esos aspectos. En la medida que resulte necesaria, el Grupo Especial considerará otros aspectos del sistema comunitario de administración aduanera al examinar los casos concretos de supuestas infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

a) Aspectos pertinentes del sistema comunitario de administración aduanera

i) Aplicación por autoridades aduaneras en los Estados miembros de las CE

7.156 Las Comunidades Europeas han informado al Grupo Especial de que la aplicación de la legislación aduanera comunitaria incumbe principalmente a los Estados miembros.[428] El Grupo Especial entiende que la legislación aduanera comunitaria es aplicable directamente en los Estados miembros, lo que significa que esa legislación debe ser aplicada íntegra y uniformemente en todos los Estados miembros.[429] Además, las Comunidades Europeas han informado al Grupo Especial de que las autoridades aduaneras de los Estados miembros deben aplicar la legislación aduanera comunitaria de conformidad con toda la orientación disponible relativa a su sentido correcto, como el Tratado de las CE y la jurisprudencia del TJCE.[430]

ii) Instituciones y mecanismos que intervienen en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria

Instituciones y mecanismos aplicables en general en todas las esferas de la administración aduanera[431]

---

[427] Señalamos a este respecto que el párrafo 8 del artículo 3 del ESD establece que: "En los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. Esto significa que normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene efectos desfavorables para otros Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá al Miembro contra el que se haya presentado la reclamación refutar la acusación."

[428] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 146 del Grupo Especial.

[429] Asunto 106/77, *Simmenthal II*, Recopilación de Jurisprudencia 629 [1978] (CE - Prueba documental 5).

[430] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 77 del Grupo Especial.

[431] El Grupo Especial observa que, además de las instituciones y mecanismos que se abordan *infra*, las Comunidades Europeas se refirieron a mecanismos de control presupuestario y financiero existentes en las Comunidades Europeas, lo que, según aducen, ayuda a lograr la aplicación uniforme de la legislación aduanera

Comité del Código Aduanero

7.157 Las Comunidades Europeas señalan que el Comité del Código Aduanero es una institución importante que ayuda a garantizar la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[432] Como se señala en el párrafo 2.15 *supra* en los aspectos fácticos del informe del Grupo Especial, el Comité del Código Aduanero se establece en virtud del apartado 1 del artículo 247 *bis* y el apartado 1 del artículo 248 *bis* del Código Aduanero Comunitario. Componen el Comité del Código Aduanero representantes de cada Estado miembro y está presidido por un representante de la Comisión. El artículo 249 del Código Aduanero Comunitario estipula que el Comité del Código Aduanero podrá examinar cualquier cuestión relativa a la reglamentación aduanera planteada por su presidente bien a iniciativa del mismo o a petición del representante de un Estado miembro. Puede encontrase una disposición análoga en el artículo 8 del Reglamento Nº 2658/87 por el que se establece el Arancel Aduanero Común, que estipula que el Comité podrá examinar cualquier cuestión planteada por su presidente, bien a iniciativa de éste, bien a instancia del representante de un Estado Miembro, relativa a la nomenclatura combinada o al TARIC. Las Comunidades Europeas señalan que el número de reuniones del Comité del Código Aduanero ascendió a un total de 77 en 2002 (con 113,5 días de reuniones), 47 en 2003 (con 77,5 días de reuniones) y 85 en 2004 (con 118,5 días de reuniones).[433]

7.158 El Grupo Especial entiende que, en la práctica, el Comité del Código Aduanero emite criterios sobre las modificaciones del Código Aduanero Comunitario o la aplicación de medidas propuestas por la Comisión; examina las cuestiones relativas a la interpretación de las disposiciones aduaneras o las definiciones de los términos utilizados en la legislación aduanera; y ejerce las facultades atribuidas al mismo en virtud de la legislación aduanera específica. Más concretamente, en la *esfera de la clasificación arancelaria*, el Grupo Especial ha sido informado por las Comunidades Europeas de que frecuentemente se pide al Comité del Código Aduanero que emita criterios sobre medidas propuestas por la Comisión que garanticen la aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común, como reglamentos de clasificación y notas explicativas comunitarias. Además, el Comité podrá adoptar criterios sobre cuestiones específicas de clasificación arancelaria.[434] En la *esfera de la valoración en aduana*, las Comunidades Europeas han informado al Grupo Especial de que el Comité del Código Aduanero considerará las divergencias en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria relativa a valoración en aduana que le presente la Comisión o un Estado miembro.[435] Tras haberlas considerado, el Comité podrá emitir criterios, que podrán adoptar la forma de conclusiones o comentarios sobre las normas de valoración en aduana.[436] Además, la Comisión

---

comunitaria por las autoridades aduaneras de los Estados miembros: Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 158. Estos mecanismos de control presupuestario y financiero se glosan en el párrafo 2.33 *supra*.

[432] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 85.

[433] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 58 c) del Grupo Especial. Las Comunidades Europeas también se remiten a la Prueba documental 103 presentada por las CE, en la que figura una reseña del número de reuniones por secciones del Comité del Código Aduanero.

[434] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 58 i) iii) del Grupo Especial.

[435] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 58 j) ii) del Grupo Especial.

[436] Estas conclusiones y comentarios figuran en el compendio de textos relativos al valor en aduana del Comité del Código Aduanero, 2 de diciembre de 2004 (CE - Prueba documental 37).

consultará al Comité del Código Aduanero acerca de los proyectos de modificación de las normas de valoración contenidas en el Reglamento de Aplicación.[437]

7.159 Es evidente que no todos los asuntos que entrañan divergencia en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros son planteados al Comité del Código Aduanero para que los examine.[438] Además, el Comité podrá examinar asuntos únicamente si los plantea el presidente del Comité o a instancia de los representantes de los Estados miembros.[439] Las Comunidades Europeas han recalcado que el Comité del Código Aduanero no sustituirá a las distintas autoridades aduaneras ni a los tribunales competentes de los Estados miembros en casos pendientes y, por lo tanto, normalmente no examinará casos individuales.[440] Incluso en los casos en que se plantean asuntos al Comité del Código Aduanero, las Comunidades Europeas han reconocido que en el Reglamento del Comité del Código Aduanero no hay ninguna disposición concreta que atribuya a la Comisión la facultad de pedir a las autoridades aduaneras de los Estados miembros que faciliten información específica.[441] Además, en tales casos, pueden plantearse dificultades y demoras para llegar a un acuerdo que se deben, entre otras cosas, a que el Comité está compuesto por representantes de cada Estado miembro[442] y que las decisiones se determinan por mayoría cualificada.[443]

---

[437] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 58 j) iii) del Grupo Especial.

[438] En el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de fecha 14 de marzo de 2001, el Tribunal de Cuentas Europeo declaró que "[m]uchos asuntos complejos del ámbito de la valoración en aduana no son planteados al Comité [del valor en aduana].": Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, 14 de marzo de 2001, párrafo 29 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[439] El artículo 249 del Código Aduanero Comunitario dispone que: "El Comité podrá examinar cualquier cuestión relativa a la reglamentación aduanera planteada por su presidente bien a iniciativa del mismo o a petición del representante de un Estado miembro." (Estados Unidos - Prueba documental 5).

[440] Respuesta de las Comunidades Europeas a las preguntas 58 j) i) y 58 j) v) del Grupo Especial.

[441] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 58 j) v) del Grupo Especial. Las Comunidades Europeas se remiten al respecto al artículo 10 del Tratado de la CE, que se aborda *infra* en los párrafos 7.161 y siguientes.

[442] En el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de fecha 14 de marzo de 2001, el Tribunal de Cuentas Europeo declaró que: "Aunque el Comité del valor en aduana constituye una plataforma que permite a los Estados miembros adoptar un enfoque común en casos similares, es inevitable que con quince autoridades aduaneras distintas, la obtención de consenso sea un proceso lento. El Comité del valor en aduana con frecuencia se ve trabado entre detalles y desacuerdos entre los representantes de los Estados miembros": Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, 14 de marzo de 2001, párrafo 26 (Estados Unidos - Prueba documental 14). Además, el Tribunal de Cuentas Europeo señala que "[el Comité del valor en aduana] constituye un vehículo demasiado lento para lograr los objetivos de la Comisión.": Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, 14 de marzo de 2001, párrafo 29 (Estados Unidos - Prueba documental 14). Asimismo, en una declaración efectuada por el Jefe de la Unidad de Legislación Aduanera de la Comisión Europea en junio de 2004, Michael Lux señaló que "organizar una decisión mayoritaria [del Comité del Código Aduanero] resultará más difícil, ya que habrá que negociar con 25 -en lugar de 15- Estados miembros. Con tantos miembros, la presidencia de las reuniones tendrá que ser firme para poder obtener algún resultado." *EU enlargement and customs law: What will change?*, Taxud/463/2004, Rev.1, 14 de junio de 2004, página 4 (Estados Unidos - Prueba documental 15). Además, en el contexto de la presente diferencia, las Comunidades Europeas han reconocido que no existen límites específicos del plazo que

7.160 Además, cabe señalar que los criterios del Comité del Código Aduanero no son jurídicamente vinculantes para las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[444] Como han declarado las propias Comunidades Europeas, el Comité del Código Aduanero no tiene facultades para tomar decisiones en relación con cuestiones aduaneras, sino que simplemente presta asistencia a las instituciones competentes de las CE en el contexto de los procedimientos de gestión o reglamentarios previstos en el marco del Comité del Código Aduanero.[445] Sin embargo, incluso en esta calidad, no está claro que los criterios y recomendaciones formulados por el Comité del Código Aduanero a las instituciones comunitarias se puedan hacer cumplir.[446] Por lo tanto, habida cuenta de lo que precede, parecería que el Comité del Código Aduanero tiene facultades limitadas para imponer la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria a las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[447]

Artículo 10 del Tratado de la CE

7.161 Las Comunidades Europeas afirman que el "deber de cooperación" que figura en el artículo 10 del Tratado de la CE contribuye de manera importante a la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria por las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[448]

7.162 El artículo 10 del Tratado de la CE dispone lo siguiente:

> "Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente

---

un asunto puede permanecer en el programa del Comité del Código Aduanero: Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 159 a) del Grupo Especial.

[443] Artículo 6 del Reglamento del Comité del Código Aduanero, 5 de diciembre de 2001 (Estados Unidos - Prueba documental 9).

[444] Asuntos acumulados 69 y 70/76, *Dittmeyer*, Recopilación de Jurisprudencia 231 [1977] (CE - Prueba documental 31).

[445] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 266. Véanse los párrafos 2.20 y 2.21 *supra*, en los que se describen los procedimientos reglamentarios y de gestión.

[446] En el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de fecha 14 de marzo de 2001, el Tribunal de Cuentas Europeo declaró que "la Comisión no está facultada para imponer los resultados del trabajo del Comité del valor en aduana": Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, 14 de marzo de 2001, párrafo 29 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[447] En el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de fecha 14 de marzo de 2001, el Tribunal de Cuentas Europeo declaró que: "La Comisión recurre a [la sección del valor en aduana del Comité del Código Aduanero] para intentar alcanzar su objetivo de garantizar la aplicación correcta y homogénea de las normas de valoración en aduana, pero no está facultada para obligar a los Estados miembros a interpretar de una manera particular la legislación al respecto. La Comisión considera que su misión es fomentar cualquier forma de convergencia de prácticas entre las administraciones representadas en el Comité del valor en aduana, y utiliza la discusión, la persuasión y la motivación como medios de conseguir un tratamiento común de los mismos problemas en todos los Estados miembros.": Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, 14 de marzo de 2001, párrafo 26 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[448] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 58 l) del Grupo Especial.

> Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión.
>
> Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado."

7.163 Según las Comunidades Europeas, el "deber de cooperación" del artículo 10 del Tratado de la CE es jurídicamente vinculante y directamente aplicable en todos los Estados miembros. Las Comunidades Europeas afirman que, por lo tanto, las autoridades de los Estados miembros deben respetar la obligación contenida en el artículo 10 del Tratado de la CE al aplicar la legislación aduanera comunitaria. Las Comunidades Europeas también afirman que, cuando un Estado miembro infringe el deber de cooperación, ello constituye una infracción del Tratado de la CE, contra la que la Comisión Europea puede incoar un procedimiento por incumplimiento en virtud del artículo 226 del Tratado de la CE.[449]

7.164 Cabe destacar que el artículo 10 del Tratado de la CE no prescribe las "medidas apropiadas" que los Estados miembros (incluidas las autoridades aduaneras de los Estados miembros) deben adoptar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho comunitario, incluida la normativa aduanera comunitaria. Además, las Comunidades Europeas se han referido únicamente a un puñado de casos en los que se invocó el artículo 10 del Tratado de la CE como fundamento para garantizar la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros[450]. Por lo tanto, el Grupo Especial señala que no está clara la medida en la que el artículo 10 del Tratado de la CE contribuye a la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria.

Sistema de reenvío prejudicial

7.165 Según el artículo 234 del Tratado de la CE, los tribunales nacionales de los Estados miembros podrán someter al TJCE cualquier cuestión relativa a la interpretación del derecho comunitario. Las Comunidades Europeas han informado al Grupo Especial de que los juzgados o tribunales nacionales cuyas decisiones sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno tienen derecho a someter una cuestión al TJCE para que éste pronuncie una decisión prejudicial, pero en principio no están obligados a ello. A reserva de determinadas excepciones, los tribunales de los Estados

[449] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 147 del Grupo Especial. Los procedimientos por incumplimiento incoados en virtud de, entre otras disposiciones, el artículo 226 del Tratado de la CE se examinan en los párrafos 7.169 y 7.170 *infra*.

[450] En particular, en la *esfera de la clasificación arancelaria*, las Comunidades Europeas se refieren al Asunto C-206/03, *Commissioners of Customs & Excise contra SmithKline Beecham*, Orden del Tribunal de 19 de enero de 2005 (no notificada todavía) (CE - Prueba documental 142) y al Asunto C-453/00, *Kühne & Heitz contra Productshap voor Pluimvee en Eieren*, [2004] Recopilación de Jurisprudencia, I-837 (CE - Prueba documental 61). En la *esfera de los procedimientos aduaneros* (y, específicamente, respecto de la imposición de sanciones en el contexto de infracciones de la legislación aduanera comunitaria), las Comunidades Europeas se refieren al Asunto C-213/99, *José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixoes, de Andrade* [2000] Recopilación de Jurisprudencia, I-11083 (Estados Unidos - Prueba documental 31), al Asunto C-91/02, *Hannle + Hofstetter Internationale Spedition contra Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland*, sentencia de 16 de octubre de 2003 (aún no se ha incluido en la Recopilación) (CE - Prueba documental 143), al Asunto C-36/94, *Siesse contra Director da Alfândega de Alcântara, Siesse* [1995] Recopilación de Jurisprudencia, I-3573 (CE - Prueba documental 40), al Asunto 68/88, Comisión contra Grecia, 1989 [Recopilación de Jurisprudencia] 2965 (CE - Prueba documental 38).

miembros cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno están obligados a someter esas cuestiones al TJCE.[451]

7.166 Las Comunidades Europeas sostienen que el principal objetivo del sistema de reenvío prejudicial previsto en virtud del artículo 234 del Tratado de la CE es garantizar la interpretación y aplicación uniformes del derecho comunitario, incluida la normativa aduanera comunitaria, en todos los Estados miembros. Las Comunidades Europeas asimismo sostienen que es a través de las decisiones prejudiciales pronunciadas por el TJCE, que obligan a todos los tribunales de los Estados miembros, como se puede evitar las divergencias en el seno de los Estados miembros y entre éstos y se puede asegurar la aplicación eficaz del derecho comunitario.[452]

7.167 El Grupo Especial observa que el sistema de reenvío prejudicial sólo entra en funcionamiento cuando se han cumplido dos condiciones acumulativas. La primera es que un comerciante descontento por la decisión de una autoridad aduanera de un Estado miembro debe recurrir a un tribunal nacional del Estado miembro en cuestión. Habida cuenta del costo y el tiempo que supone un recurso de esa índole, no está claro que los comerciantes vayan a recurrir a esa opción en todos los casos en que salga a la luz la aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Cabe señalar que un comerciante no está autorizado según el Derecho de las CE a someter el asunto al TJCE para que pronuncie una decisión prejudicial. La segunda condición es que el tribunal nacional al que haya recurrido el comerciante debe tener la obligación de someter el asunto al TJCE para que pronuncie una decisión prejudicial o debe decidir someterlo. Incluso en aquellos casos en que un tribunal nacional está obligado técnicamente a someter un asunto al TJCE para que pronuncie una decisión prejudicial[453], existen excepciones de esta obligación. En particular, un tribunal nacional no está obligado a plantear la cuestión prejudicial al TJCE cuando: la cuestión suscitada no es pertinente; la disposición comunitaria controvertida ya ha sido interpretada por el TJCE; o la correcta aplicación del derecho comunitario se impone con una evidencia tal que no deja lugar a ninguna duda razonable.[454]

7.168 Las Comunidades Europeas facilitaron al Grupo Especial estadísticas sobre la utilización del sistema de reenvío prejudicial en el contexto de la aplicación de la legislación aduanera comunitaria, incluso en las esferas específicas de administración aduanera enumeradas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas explican que el total de decisiones prejudiciales solicitadas por tribunales de los Estados miembros durante el período comprendido entre 1995 y 2005 fue de 2.314, de las que 249 se referían a la administración aduanera. Las Comunidades Europeas señalan que, de las 249 solicitudes de decisión prejudicial en la esfera de la administración de aduanas, 55 se referían a la clasificación arancelaria, 9 a valoración en aduana y 162 a procedimientos aduaneros.[455] El Grupo Especial señala que la utilización del sistema de reenvío prejudicial para garantizar la aplicación uniforme por las autoridades aduaneras de los Estados miembros en la esfera de la administración aduanera durante el período comprendido entre 1995 y 2005 parece escasa, habida cuenta especialmente de la afirmación

[451] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 95.

[452] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 185.

[453] Es decir, porque la decisión del tribunal nacional no es susceptible de ulterior recurso judicial de Derecho interno o cuando un tribunal nacional considere que un acto adoptado por una institución de la Comunidad es inválido.

[454] Asunto C-495/03 *Intermodal Transports BV contra Staatssecretaris van Financiën*, 15 de septiembre de 2005, párrafo 33 (Estados Unidos - Prueba documental 71) y Asunto 283/81, *Cilfit*, [1982], Recopilación de Jurisprudencia 3415, párrafos 10 a 16 (CE - Prueba documental 160).

[455] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 162 del Grupo Especial.

de las Comunidades Europeas de que literalmente millones de decisiones en materia de aduana son adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros cada año en las Comunidades Europeas.[456]

Procedimientos por incumplimiento

7.169 Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 226 a 228 del Tratado de la CE, se podrán interponer ante el TJCE "procedimientos por incumplimiento" contra Estados miembros por el incumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud del derecho comunitario. Las Comunidades Europeas sostienen que los procedimientos por incumplimiento contra las autoridades de los Estados miembros desempeñan una importante función para garantizar la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[457]

7.170 Las Comunidades Europeas señalan que, desde 1995, la Comisión Europea ha incoado 83 procedimientos por incumplimiento contra los Estados miembros en relación con la aplicación de la legislación aduanera comunitaria.[458] De esos 83 casos, dos se referían a clasificación arancelaria, uno a valoración en aduana y 44 a procedimientos aduaneros.[459] El Grupo Especial señala que la utilización de los procedimientos por incumplimiento para garantizar la aplicación uniforme por las autoridades aduaneras de los Estados miembros en la esfera de la administración aduanera durante el período comprendido entre 1995 y 2005 parece escasa, habida cuenta especialmente de la afirmación de las Comunidades Europeas de que literalmente millones de decisiones en materia de aduana son adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros cada año en las Comunidades Europeas.[460]

El Defensor del Pueblo Europeo

7.171 Las Comunidades Europeas sostienen que el Defensor del Pueblo Europeo es un mecanismo que contribuye a la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria por las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[461]

7.172 El Grupo Especial considera que el grado en el que el Defensor del Pueblo Europeo es eficaz para garantizar la aplicación uniforme entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros de la legislación aduanera comunitaria no está claro habida cuenta de los hechos siguientes. *En primer lugar*, está claro que la jurisdicción del Defensor del Pueblo Europeo se limita al examen de reclamaciones de mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión Europea.[462] Por lo tanto, parecería que el Defensor del Pueblo Europeo no puede investigar

[456] Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 20.

[457] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 46; Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 172; Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 49.

[458] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 1 de los Estados Unidos.

[459] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 164 del Grupo Especial.

[460] Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 20.

[461] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 50; Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 167.

[462] El Defensor del Pueblo Europeo - En pocas palabras …, página 2 (Estados Unidos - Prueba documental 82).

reclamaciones contra las autoridades aduaneras en los Estados miembros por la aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria. *En segundo lugar*, desde 1999, el Defensor del Pueblo Europeo ha pronunciado solamente cuatro decisiones en materia de administración aduanera. En un asunto, el Defensor del Pueblo Europeo formuló una observación crítica. En dos asuntos, el Defensor del Pueblo Europeo no constató mala administración. En otro asunto, la reclamación fue retirada, por lo que el Defensor del Pueblo Europeo no adoptó una decisión sobre el fondo de la reclamación.[463] El Grupo Especial señala que la utilización del Defensor del Pueblo Europeo para garantizar la aplicación uniforme por las autoridades aduaneras de los Estados miembros en la esfera de la administración aduanera desde 1999 parece escasa, habida cuenta especialmente de la afirmación de las Comunidades Europeas de que literalmente millones de decisiones en materia de aduana son adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros cada año en las Comunidades Europeas.[464]

Reclamaciones a la Comisión de las CE

7.173 Las Comunidades Europeas sostienen que cualquier persona preocupada por la administración de cuestiones aduaneras puede señalar la cuestión a la atención de la Comisión de las CE, que considerará el asunto y responderá de conformidad con el Código de Buena Conducta de la Comisión.[465]

7.174 Las Comunidades Europeas han informado al Grupo Especial de que, en el período comprendido entre 1996 y 2004, la Comisión de las CE recibió más de 17.000 cartas de entidades y empresarios privados relacionadas con asuntos aduaneros. Las Comunidades Europeas señalaron que no se podía precisar el número de cartas que se referían a las esferas de clasificación arancelaria, valoración en aduana y procedimientos aduaneros, pero estaban dispuestas a facilitar al Grupo Especial un cuadro representativo del período comprendido entre 2002 y 2005.[466] Además, las Comunidades Europeas informaron al Grupo Especial de que no era viable explicar la reacción y/o las medidas adoptadas por la Comisión en cada uno de los casos y el plazo que la Comisión tardó en responder.[467]

Restricciones a la adopción de medidas nacionales por las autoridades aduaneras de los Estados miembros

7.175 Las Comunidades Europeas sostienen que las medidas nacionales ejecutadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros (comprendidas las prácticas y disposiciones nacionales) deben respetar estrictamente el derecho comunitario y podrán además ser anuladas por los

[463] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 165 del Grupo Especial referente al asunto *Reebok* (Estados Unidos - Prueba documental 52).

[464] Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 20.

[465] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 275, en el que se hace referencia a la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre relaciones con el reclamante respecto de infracciones del derecho comunitario, 10 de octubre de 2002 (CE - Prueba documental 11) y al Reglamento de la Comisión, 8 de diciembre de 2000 (CE - Prueba documental 12).

[466] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 166 del Grupo Especial referente a los Cuadros de correspondencia del período comprendido entre 2002 y 2005, DG TAXUD (CE - Prueba documental 149).

[467] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 166 del Grupo Especial.

tribunales.[468] No obstante, las propias Comunidades Europeas sostienen que un Estado miembro podrá actuar para suplir disposiciones contenidas en el derecho comunitario si está expresamente autorizado a hacerlo[469], o si una cuestión concreta no está prevista por el derecho comunitario.[470] Además, las Comunidades Europeas afirman que las autoridades de los Estados miembros no están impedidas de emitir directrices administrativas y otros documentos no vinculantes a efectos administrativos, aunque el TJCE ha indicado que esas medidas no pueden menoscabar en modo alguno la aplicación del derecho comunitario por las autoridades aduaneras y los tribunales.[471] Más concretamente, el TJCE ha declarado que las autoridades nacionales no pueden emitir directrices vinculantes para la interpretación del derecho comunitario. En consecuencia, la interpretación del derecho comunitario por las administraciones y los tribunales nacionales debe guiarse exclusivamente por el texto del derecho comunitario, y debe prescindirse de todas las disposiciones o directrices contrarias de origen nacional.[472]

7.176 Las Comunidades Europeas señalan que, en los ámbitos que no están reglamentados por el derecho comunitario, los Estados miembros pueden legislar y aplicar sus propias leyes. Las Comunidades Europeas reconocen que no existen mecanismos a nivel comunitario que garanticen la interpretación y aplicación uniformes de las leyes de los Estados miembros en esos ámbitos. No obstante, las Comunidades Europeas sostienen que, en esos ámbitos, es posible que los Estados miembros sigan estando obligados a respetar determinados principios del derecho comunitario, entre ellos el artículo 10 del Tratado de la CE que se examina en el párrafo 7.161 y siguientes *supra* y la jurisprudencia del TJCE.[473]

Consultas y asistencia recíproca entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros

7.177 Las Comunidades Europeas han reconocido que la legislación aduanera comunitaria no contiene una prescripción general que obligue a las autoridades aduaneras de los Estados miembros a consultar a otras autoridades aduaneras de otros Estados miembros antes de adoptar decisiones en asuntos aduaneros, aunque pueden surgir obligaciones de consulta recíproca en situaciones específicas, por ejemplo, en el contexto de la expedición de las IAV, que se aborda con más detalle en el párrafo 7.181 *infra*.[474] Además, el Reglamento (CE) Nº 515/97 del Consejo relativo a la asistencia

[468] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 78 del Grupo Especial referente al Asunto 230/78, *Eridania-Zucherifici* [1979] Recopilación de Jurisprudencia 2749, párrafo 34 (CE - Prueba documental 114).

[469] Las Comunidades Europeas aclaran que la autorización no tiene forzosamente que ser "expresa"; basta que se desprenda del texto de la legislación comunitaria.

[470] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 78 del Grupo Especial; respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 157 del Grupo Especial.

[471] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 157 del Grupo Especial.

[472] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 78 del Grupo Especial.

[473] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 149 del Grupo Especial.

[474] Las Comunidades Europeas sostienen que entre los ejemplos figurarían las siguientes disposiciones: autorización única para destino especial (párrafo 2 del artículo 292 del Reglamento de Aplicación); regímenes aduaneros económicos (artículo 500 del Reglamento de Aplicación); servicio marítimo regular (artículos 313 *bis* y 313 *ter* del Reglamento de Aplicación); justificación del estatuto comunitario por el expedidor autorizado (artículo 324 *sexies* del Reglamento de Aplicación); procedimiento simplificado de tránsito para transporte aéreo - nivel 2 (artículo 445 del Reglamento de Aplicación); procedimiento simplificado de tránsito para transporte marítimo - nivel 2 (artículo 448 del Reglamento de Aplicación): Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 79 del Grupo Especial.

mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión trata de garantizar la aplicación correcta de la normativa aduanera comunitaria, entre otras cosas.[475] Las Comunidades Europeas explican que, de conformidad con el Reglamento Nº 515/97, los Estados miembros tienen el derecho general de solicitar información pertinente de otros Estados miembros, sobre personas o transacciones que entrañen la importación de mercancías, de otras administraciones. Los Estados miembros también tienen la obligación de prestar asistencia (incluida la comunicación de toda la información en su poder) si la consideran útil para garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera, o cuando se planteen infracciones (reales o posibles) de esa legislación.[476]

Directrices sobre las mejores prácticas

7.178 El artículo 4 de la Decisión 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2003 por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad se refiere a la necesidad, entre otras cosas, de determinar, desarrollar y aplicar las mejores prácticas de trabajo, en particular en materia de controles contables *a posteriori*, análisis de riesgos y procedimientos simplificados; reforzar la normalización y la simplificación de los procedimientos, regímenes y controles aduaneros; mejorar la coordinación de los laboratorios que realizan análisis con fines aduaneros, así como la cooperación entre ellos, con objeto de garantizar en particular, una clasificación arancelaria uniforme y sin ambigüedades en toda la Unión Europea; y desarrollar medidas de formación común y establecer un marco organizativo para la formación aduanera que responda a las necesidades derivadas de las acciones del programa. Las Comunidades Europeas se refieren a una lista de acciones del programa que cuadran en las categorías antes citadas.[477] Las Comunidades Europeas también afirman que la Comunidad y sus Estados miembros han emprendido una serie de acciones para mejorar las prácticas de trabajo.[478] En la esfera de la *clasificación arancelaria*, las Comunidades Europeas se refieren a las directrices EBTI/IAV como una forma de directrices sobre mejores prácticas de trabajo.[479] En cuanto a las directrices sobre mejores prácticas que existen en la esfera de la *valoración en aduana*, las Comunidades Europeas se refieren al compendio de textos relativos al valor en aduana[480], que se actualiza periódicamente, y en el que se integran todas las conclusiones y comentarios pertinentes.[481] En cuanto a las directrices sobre mejores prácticas de trabajo en la *esfera de los procedimientos aduaneros* (auditoría posterior al despacho a libre práctica, sanciones por infracciones de la legislación aduanera comunitaria, transformación bajo control aduanero y procedimientos de domiciliación), las Comunidades Europeas se refieren a una Guía de Análisis de Riesgos distribuida a los Estados miembros en 1998[482]; un Marco Unificado de

[475] CE - Prueba documental 42.

[476] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 149 del Grupo Especial.

[477] CE - Prueba documental 117.

[478] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 83 del Grupo Especial.

[479] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 167 del Grupo Especial referente a la Prueba documental 32 presentada por las CE. Estas directrices se abordan con más detalle en el párrafo 7.181 *infra*.

[480] Este Compendio, que figura en la Prueba documental 37 presentada por las CE, se examina con más detalle en el párrafo 7.186 y siguientes *infra*.

[481] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 167 del Grupo Especial.

[482] CE - Prueba documental 150.

Gestión de Riesgos publicado en 2002[483]; la Guía sobre auditorías de aduana[484]; y la Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior.[485]

> Instituciones y mecanismos aplicables en esferas específicas de la administración aduanera citados en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos
>
> Clasificación arancelaria

7.179 Las Comunidades Europeas señalan que la aplicación de la normativa comunitaria en la esfera de la clasificación arancelaria incumbe en principio a las autoridades aduaneras de los Estados miembros. No obstante, según las Comunidades Europeas, existe una serie de instrumentos que garantizan la aplicación uniforme por parte de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, como reglamentos de clasificación, notas explicativas del Arancel Aduanero Común, criterios del Comité del Código Aduanero e IAV. Esos instrumentos se glosan en los párrafos 2.37 a 2.48 *supra* de la parte correspondiente a los aspectos fácticos del informe del Grupo Especial.

7.180 Las Comunidades Europeas sostienen que, si existe un desacuerdo entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros relativo a la clasificación arancelaria, esas autoridades *deben* consultarse mutuamente. No obstante, las Comunidades Europeas reconocen que las autoridades aduaneras de los Estados miembros *no están obligadas* a consultarse mutuamente.[486] Las Comunidades Europeas también sostienen que, en caso de persistir el desacuerdo, el asunto *tiene que* plantearse ante el Comité del Código Aduanero. Ahora bien, como se señala en el párrafo 7.159 *supra*, dicho Comité podrá examinar asuntos únicamente si los plantea el presidente del Comité o a instancia de los representantes de los Estados miembros.[487] Además, según han afirmado las propias Comunidades Europeas, el Comité del Código Aduanero normalmente no examinará casos de aplicación divergente de la legislación aduanera comunitaria, comprendida la esfera de la clasificación arancelaria.[488] Además, el Grupo Especial recuerda que los criterios del Comité del Código Aduanero no son jurídicamente vinculantes.[489] Asimismo, el Grupo Especial observa que, al parecer, la normativa aduanera comunitaria no prevé situaciones en las que una autoridad aduanera de un Estado miembro se niegue a consultar con la autoridad aduanera de otro Estado miembro acerca de un desacuerdo relativo a la clasificación arancelaria de una mercancía concreta.

7.181 Por lo que se refiere a la facilitación de IAV por las autoridades aduaneras de los Estados miembros, el párrafo 1 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación dispone que se remitirán a la Comisión una copia de la solicitud de IAV y una copia de la IAV notificada al solicitante que se

---

[483] CE - Prueba documental 151.

[484] CE - Prueba documental 90.

[485] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 167 del Grupo Especial referente a la Prueba documental 41 presentada por las CE.

[486] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 56 del Grupo Especial.

[487] Artículo 249 del Código Aduanero Comunitario.

[488] Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas 58 j) i) y 58 j) v) del Grupo Especial.

[489] Asuntos acumulados 69 y 70/76, *Dittmeyer*, [1977] Recopilación de Jurisprudencia 231 (CE - Prueba documental 31).

registrarán en una base de datos central de la Comisión -a saber, la base de datos EBTI/IAV. De conformidad con las directrices administrativas publicadas por la Comisión acerca del sistema EBTI/IAV, las autoridades aduaneras deberán consultar la base de datos EBTI/IAV antes de expedir IAV en los casos en que existan dudas sobre la clasificación correcta, o cuando quepa considerar distintas partidas.[490] Cabe destacar, no obstante, que las Comunidades Europeas reconocen que las directrices administrativas sobre el sistema EBTI/IAV no son jurídicamente vinculantes y, en consecuencia, las autoridades aduaneras de los Estados miembros no tienen la obligación de consultar la base de datos EBTI/IAV al clasificar una mercancía.[491] Las Comunidades Europeas sostienen que, no obstante, en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria, todos los Estados miembros están obligados por el deber de cooperación que figura en el artículo 10 del Tratado de la CE según el cual los Estados miembros deben utilizar todos los instrumentos disponibles para asegurar la aplicación correcta y uniforme de la legislación aduanera comunitaria, incluido el sistema EBTI/IAV.[492] Otrosí, las Comunidades Europeas explican que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no están obligadas a consultar la base de datos EBTI/IAV porque, en la mayoría de los casos, la clasificación de mercancías no plantea problemas. Por lo tanto, según las Comunidades Europeas, exigir que se consulte la base de datos EBTI/IAV en todos y cada uno de los casos que supongan la clasificación de mercancías por las autoridades aduaneras de los Estados miembros sería desproporcionado y derivaría en un retraso considerable de los procedimientos aduaneros.[493] Las Comunidades Europeas explican asimismo que el propósito de la IAV es ante todo el de ofrecer a los titulares un cierto grado de seguridad jurídica en cuanto a la clasificación arancelaria de mercancías en todo el territorio de las Comunidades Europeas, y no el de asegurar la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en la esfera de la clasificación arancelaria.[494]

7.182 En cuanto a la revocación de las IAV, el Grupo Especial entiende que, en el contexto del sistema de administración aduanera comunitario, esa revocación no se impone a otras autoridades aduaneras que actúan en el contexto del mismo sistema y no hay obligación de informar a otras autoridades aduaneras de la decisión de revocar una IAV.[495] Por ejemplo, pueden plantearse casos en los que una autoridad aduanera de un Estado miembro considere que su interpretación de una partida arancelaria concreta es errónea y decida revocar la IAV que se expidió de conformidad con su interpretación anterior. El Grupo Especial observa que, si el sistema de administración aduanera no prevé la aplicación uniforme de la revocación y/o no obliga a la autoridad aduanera que revoca a

[490] Directrices administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante (EBTI/IAV) y su funcionamiento, 28 de octubre de 2004, página 7 (CE - Prueba documental 32).

[491] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 3 de los Estados Unidos después de la primera reunión sustantiva.

[492] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 55 del Grupo Especial. El artículo 10 del Tratado de la CE se examina *supra* en el párrafo 7.161 y siguientes.

[493] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 3 de los Estados Unidos después de la primera reunión sustantiva.

[494] Según las Comunidades Europeas, cabe deducir ese objetivo de numerosas disposiciones del derecho comunitario relativas a la concesión y los efectos de la información arancelaria vinculante, en particular el artículo 12 del Código Aduanero Comunitario y los artículos 5, 10 y 11 del Reglamento de Aplicación: Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 50 del Grupo Especial.

[495] El Grupo Especial entiende que en el derecho comunitario no existen disposiciones que prevean que la revocación de IAV es vinculante con carácter inmediato para las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros. Además, entendemos que no existen disposiciones específicas en la normativa aduanera comunitaria que prescriban la transmisión de la revocación por las autoridades aduaneras de los Estados miembros a la Comisión.

consultar y/o notificar a otras autoridades aduaneras la decisión de revocar, las autoridades aduaneras de otros Estados miembros podrán seguir clasificando en la partida utilizada anteriormente por la autoridad aduanera que revoca.[496]

Valoración en aduana

7.183 Las Comunidades Europeas sostienen que la aplicación de la normativa comunitaria en la esfera de la valoración en aduana incumbe principalmente a las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[497] Ahora bien, según las Comunidades Europeas existe una serie de instrumentos que garantizan la aplicación uniforme por las autoridades aduaneras de los Estados miembros, como las modificaciones de las normas comunitarias relativas a valoración en aduana, los criterios del Comité

[496] En efecto, en la decisión en *Timmermans Transport & Logistics BV contra Inspecteur der Belastingdienst Douanedistrict Roosendaal y Hoogenboom Production Ltd contra Inspecteur der Belastingdienst Douanedistrict Rotterdam*, el Abogado General señaló los riesgos de aplicación no uniforme en una situación de esa índole, declarando al respecto que:

[C]abe estimar que una IAV debe revocarse cuando las autoridades aduaneras han cometido efectivamente un error (demostrado y no simplemente invocado por dichas autoridades) en la interpretación de la nomenclatura aduanera y, por tanto, en la clasificación arancelaria de las mercancías a que se refiere la IAV de que se trate …

En cambio, no comparto la tesis … de que las autoridades aduaneras tienen derecho a revocar una IAV cuando consideren discrecionalmente (basándose exclusivamente en su apreciación) que han cometido un error en la interpretación de la nomenclatura aduanera y en la clasificación arancelaria correspondiente. En efecto, he de recordar que tal revocación no está necesariamente justificada, ya que el error en cuestión no ha sido necesariamente verificado. Además, admitir tal posibilidad de revocación resulta difícilmente compatible tanto con el objetivo de aplicación uniforme de la nomenclatura aduanera como con el objetivo de seguridad jurídica que persigue mediante la creación de las IAV.

En lo que respecta al objetivo de aplicación uniforme de la nomenclatura aduanera, considero que si una decisión de la Comisión que ordene la revocación de IAV tiene necesariamente como finalidad y como consecuencia garantizar la aplicación correcta y uniforme de la nomenclatura aduanera, no cabe afirmar lo mismo acerca de la práctica según la cual las autoridades aduaneras decidirían discrecionalmente revocar las IAV que hubieran emitido, a raíz de una modificación de su propia interpretación de la nomenclatura aplicable, aunque es posible que las autoridades de que se trate actúen así animadas por el afán de aproximarse a la interpretación dada por otras autoridades aduaneras.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que, a diferencia de la Comisión, las autoridades aduaneras emisoras no tienen necesariamente una visión de conjunto de la totalidad de las IAV emitidas por las demás autoridades aduaneras de la Comunidad con respecto a mercancías idénticas o similares.

A mi juicio, cuando las autoridades aduaneras consideren que han cometido un error en la interpretación de la nomenclatura aduanera con motivo de la emisión de una IAV, deben informar de ello a la Comisión con el fin de cerciorarse de que se trata efectivamente de un error que puede justificar la revocación de la IAV de que se trate. Sólo un mecanismo de ese tipo puede garantizar la aplicación correcta o al menos uniforme de la nomenclatura aduanera. En mi opinión, la necesidad de esta gestión de las autoridades aduaneras ante la Comisión se deriva tanto de los objetivos de seguridad jurídica y de aplicación uniforme de la nomenclatura aduanera, que guiaron la creación de las IAV, como de la obligación de colaboración leal de los Estados miembros con las instituciones comunitarias, establecida en el artículo 10 CE.": *Timmermans Transport & Logistics BV contra Inspecteur der Belastingdienst Douanedistrict Roosendaal y Hoogenboom Production Ltd contra Inspecteur der Belastingdienst Douanedistrict Rotterdam*, Conclusiones del Abogado General, Asuntos C-133/02 y C-134/02, Recopilación de Jurisprudencia 2004, I-01125, 11 de septiembre de 2003, párrafos 58 a 62 (Estados Unidos - Prueba documental 21).

[497] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 146 del Grupo Especial.

del Código Aduanero y el compendio de textos relativos al valor en aduana. Esos instrumentos se glosan en los párrafos 2.49 a 2.56 *supra* de la parte correspondiente a los aspectos fácticos del informe del Grupo Especial.

7.184 Las Comunidades Europeas afirman que, de existir la necesidad de nuevas reglas detalladas sobre valoración, la Comisión de las CE, de conformidad con el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 247 del Código Aduanero Comunitario, podrá modificar las normas de valoración contenidas en el Reglamento de Aplicación y esas modificaciones serán jurídicamente vinculantes en todos los Estados miembros.[498]

7.185 En cuanto a si los criterios del Comité del Código Aduanero sirven para lograr la aplicación uniforme por las autoridades aduaneras de los Estados miembros en la esfera de la valoración en aduana, las Comunidades Europeas señalan que el Comité del Código Aduanero podrá adoptar directrices y conclusiones acerca de cuestiones de valoración en aduana siempre que proceda.[499] A este respecto, el Grupo Especial recuerda que los criterios del Comité del Código Aduanero no son jurídicamente vinculantes para las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[500]

7.186 Las Comunidades Europeas también señalan que la Comisión ha publicado un compendio de textos relativos al valor en aduana, que contiene comentarios preparados por el Comité del Código Aduanero y las conclusiones a que ha llegado en cuestiones concretas de valoración en aduana. Además, contiene extractos de sentencias pertinentes del TJCE sobre cuestiones de valoración, así como índices de otros textos pertinentes.[501] No obstante, el Grupo Especial entiende que los comentarios que figuran en el compendio de textos relativos al valor en aduana carecen de valor jurídico y, por lo tanto, no surten efectos vinculantes.[502] Asimismo, en la medida en que le consta al Grupo Especial, la legislación aduanera comunitaria no obliga a las autoridades aduaneras de los Estados miembros a remitirse al compendio al adoptar decisiones sobre asuntos de valoración en aduana.

7.187 El Grupo Especial entiende también que, en la esfera de la valoración en aduana, no existe en el marco del derecho comunitario la obligación de consultar cuando haya un desacuerdo entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros acerca de la valoración en aduana en una situación concreta. Las Comunidades Europeas se refieren a lo que denominan una "guía de mejores prácticas", que se ocupa del intercambio de información entre los Estados miembros en relación, entre otras cosas, con decisiones sobre valoración.[503] El Grupo Especial señala que el documento al que se

---

[498] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 128.

[499] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 146 del Grupo Especial.

[500] Asuntos acumulados 69 y 70/76, *Dittmeyer*, [1977] Recopilación de Jurisprudencia, 231 (CE - Prueba documental 31).

[501] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 130, referente al compendio de textos relativos al valor en aduana del Comité del Código Aduanero, 2 de diciembre de 2004 (CE - Prueba documental 37).

[502] En efecto, la versión del compendio disponible en Internet dice: "El presente compendio ... [n]o tiene valor jurídico. Se ha preparado fundamentalmente para las administraciones de los Estados miembros, pero puede comunicarse a todas las partes interesadas": http://ec.europa/comm/taxation_customs/resources/documents//ccvt_es.pdf citado por las Comunidades Europeas en el párrafo 130 de su Primera comunicación escrita.

[503] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 149 del Grupo Especial en donde se hace referencia al Informe final del Grupo de proyecto "Aduanas 2002" encargado de examinar las herramientas de

refieren las Comunidades Europeas es un informe del Grupo de proyecto "Aduanas 2002" "encargado de examinar las herramientas de trabajo que puedan facilitar el intercambio de datos sobre cuestiones ligadas al valor en aduana", que fue creado atendiendo al Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana.[504] El informe del Grupo del Proyecto Aduanas 2002 señala que los actuales contactos bilaterales oficiosos entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros funcionan bien por lo que se refiere al intercambio de información sobre valoración en aduana, pero declara que sería útil complementarlos con un sistema más formalizado a disposición de todas las administraciones.[505] Según le consta al Grupo Especial, todavía no se ha implantado un sistema de esa índole en las Comunidades Europeas.

Procedimientos aduaneros

7.188 En cuanto a los procedimientos aduaneros, las Comunidades Europeas sostienen que la transformación bajo control aduanero, el procedimiento de domiciliación, los controles aduaneros y la administración de las disposiciones que establecen sanciones son incumbencia de las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[506]

7.189 El Grupo Especial señala que el artículo 250 del Código Aduanero Comunitario dispone que, cuando se utilice un régimen aduanero en varios Estados miembros, las decisiones, las medidas adoptadas o aceptadas y los documentos expedidos por un Estado miembro tendrán, en los demás Estados miembros, efectos jurídicos idénticos a los que resulten de dichas decisiones, medidas y documentos expedidos por cada uno de dichos Estados miembros.

7.190 El Grupo Especial entiende que, en la esfera de los regímenes aduaneros, no existe la obligación de consultar en el marco del derecho comunitario cuando haya un desacuerdo entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros acerca de los procedimientos aduaneros en una situación concreta. Las Comunidades Europeas sostienen, y los Estados Unidos no lo han impugnado, que, en lo tocante al procedimiento de domiciliación y la transformación bajo control aduanero, cuando en el procedimiento interviene más de un Estado miembro, se practica el intercambio de información entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[507]

Observaciones generales acerca de las instituciones y mecanismos que intervienen en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria

7.191 Las Comunidades Europeas sostienen que sólo puede determinarse si existe falta de uniformidad en un sistema concreto de administración aduanera atendiendo a todos los hechos pertinentes, lo que abarca forzosamente un examen de todas las características del sistema aduanero de que se trate.[508] Las Comunidades Europeas sostienen que, en el contexto de su sistema de administración aduanera, no es procedente examinar un número reducido de instrumentos aislados,

---

trabajo que puedan facilitar el intercambio de datos sobre cuestiones ligadas al valor en aduana, 21 de noviembre de 2002 (CE - Prueba documental 144).

[504] Estados Unidos - Prueba documental 14.

[505] Informe final, Grupo de proyecto "Aduanas 2002" encargado de examinar las herramientas de trabajo que puedan facilitar el intercambio de datos sobre cuestiones ligadas al valor en aduana, 21 de noviembre de 2002, página 7 (CE - Prueba documental 144).

[506] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 146 del Grupo Especial.

[507] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 149 del Grupo Especial.

[508] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 10.

haciendo caso omiso de la gama más amplia de instrumentos que contribuyen a la interpretación y la aplicación uniformes de la normativa aduanera comunitaria.[509] A ese respecto, el Grupo Especial señala que, en su examen del sistema comunitario de administración aduanera en su conjunto, comprobó que el sistema es complicado y, en ocasiones, opaco y desconcertante. Podemos imaginar que las dificultades con que tropezamos en nuestros esfuerzos por entender el sistema comunitario de administración aduanera se multiplicarían para los comerciantes en general y los pequeños comerciantes en particular que estén tratando de importar a las Comunidades Europeas.

7.192 El Grupo Especial examinará ahora los casos concretos de supuestas infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 relacionadas con la aplicación del Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y medidas conexas. Más concretamente, el Grupo Especial examinará las alegaciones de los Estados Unidos con respecto a: la aplicación no uniforme del Arancel Aduanero Común en la esfera de la clasificación arancelaria; la aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación en la esfera de la valoración en aduana; la aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación en la esfera de los procedimientos aduaneros; y la aplicación no uniforme en relación con el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario.

b) Alegaciones de aplicación no uniforme del Arancel Aduanero Común en la esfera de la clasificación arancelaria

i) Clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales

Resumen de los argumentos de las partes

7.193 Los **Estados Unidos** sostienen que el asunto *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn* describe una divergencia en la clasificación de tarjetas de red para ordenadores personales entre Dinamarca, los Países Bajos, y el Reino Unido, por una parte, y Alemania, por la otra.[510] Los Estados Unidos señalan que, en el contexto de ese asunto, el Abogado General observó que "las autoridades aduaneras de varios Estados miembros de la Comunidad facilitaron IAV contradictoria en la que se clasificaban artículos de equipo para LAN indistintamente en las partidas 8471, 8473 y 8517 [del Arancel Aduanero Común]".[511]

7.194 En respuesta, las **Comunidades Europeas** señalan que el asunto *Peacock* se refiere a importaciones de tarjetas de red para ordenadores personales antes de 1995. En 1995, las Comunidades Europeas adoptaron el Reglamento Nº 1165/95 en el que se preveía la clasificación de las tarjetas de red en cuestión en la partida 8517 (aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos).[512] Sin embargo, el Reglamento Nº 1165/95 no se aplicaba a las importaciones que tuvieron

[509] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 260.

[510] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 33, en donde se hace referencia al Asunto C-339/98, *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, Conclusiones del Abogado General, Recopilación de Jurisprudencia 2000, I-08947, 28 de octubre de 1999, párrafos 7 y 8 (Estados Unidos - Prueba documental 17).

[511] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 161 del Grupo Especial referente al Asunto C-339/98, *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, Conclusiones del Abogado General, Recopilación de Jurisprudencia 2000, I-08947, 28 de octubre de 1999, párrafo 15 (Estados Unidos - Prueba documental 17).

[512] Reglamento Nº 1165/95 de la Comisión, de 23 de mayo de 1995, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la Nomenclatura Combinada (CE - Prueba documental 135).

lugar antes de su entrada en vigor.[513] Además, las Comunidades Europeas sostienen que la clasificación de las tarjetas de red para ordenadores personales por las autoridades aduaneras alemanas que salió a la luz en el asunto *Peacock* fue recurrida en un tribunal competente en Alemania, que remitió la cuestión al TJCE para una decisión prejudicial. En sentencia del 19 de octubre de 2000, el TJCE decidió que la clasificación de las autoridades alemanas había sido errónea y que los productos en cuestión se tenían que clasificar en la partida 8471 (máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades).[514] Las Comunidades Europeas sostienen que, en otra decisión, el TJCE confirmó esta interpretación y decidió que el Reglamento Nº 1165/95 era inválido.[515]

7.195 Los **Estados Unidos** señalan en respuesta que, aunque la divergencia en la clasificación de tarjetas de red para ordenadores personales se pueda haber resuelto por la vía contenciosa que condujo en su momento a una decisión del TJCE, ello no refuta las pruebas de aplicación no uniforme porque hubo aplicación no uniforme y además se permitió que persistiera durante años. Los Estados Unidos señalan a este respecto que la divergencia en las tarjetas de red para ordenadores personales ocurrió en 1995 pero no se solucionó hasta cinco años más tarde, cuando el TJCE pronunció una decisión en 2000.[516]

7.196 Las **Comunidades Europeas** aducen que la IAV es vinculante únicamente respecto del titular de la IAV y no respecto de otras personas.[517] Además, las Comunidades Europeas sostienen que lo que reviste importancia no es que pueda producirse una divergencia, sino que se aborde y se subsane una vez que se ha producido. Según las Comunidades Europeas, eso es precisamente lo que ocurrió en el contexto del asunto *Peacock*.[518] Asimismo, las Comunidades Europeas sostienen que la clasificación correcta de equipo de red es una cuestión técnica compleja a la que han tenido que enfrentarse muchas autoridades aduaneras.[519] A este respecto, las Comunidades Europeas señalan que la clasificación de equipo de red ha llevado también a una diferencia en la OMC entre las Comunidades Europeas y los Estados Unidos en relación con la clasificación correcta de equipo para redes de área local (LAN) (incluidas las tarjetas de red).[520]

---

[513] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 134.

[514] Asunto C-339/98, *Peacock*, Recopilación de Jurisprudencia [2000], I-8497, 19 de octubre de 2000 (CE - Prueba documental 87).

[515] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 135, en el que se hace referencia al Asunto C-463/98, *Cabletron System Ltd contra The Revenue Commissioners* Recopilación de Jurisprudencia [2001], I-3495, 10 de mayo de 2001 (CE - Prueba documental 136).

[516] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 20 del Grupo Especial; Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 21.

[517] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 161 del Grupo Especial referente al Asunto C-495/03, *Intermodal Transports BV contra Staatssecretaris van Financiën*, 15 de septiembre de 2005, aún no se ha incluido en la Recopilación, párrafo 27 (Estados Unidos - Prueba documental 71).

[518] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 136.

[519] Asunto C-339/98, *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, Conclusiones del Abogado General, Recopilación de Jurisprudencia 2000, I-08947, 28 de octubre de 1999, párrafo 11 y siguientes (Estados Unidos - Prueba documental 17).

[520] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 137, en el que se hace referencia al Informe del Órgano de Apelación y los informes del Grupo Especial, *CE - Equipo informático*.

Análisis por el Grupo Especial

7.197 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos impugnan una supuesta divergencia en la clasificación arancelaria de tarjetas de red para ordenadores personales entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.[521]

7.198 En opinión del Grupo Especial, la clasificación arancelaria de un producto, como las tarjetas de red para ordenadores personales, constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es un asunto que está comprendido en el mandato del Grupo Especial puesto que equivale a un caso de aplicación del Arancel Aduanero Común en la esfera de la clasificación arancelaria.[522]

7.199 En cuanto a la cuestión de si la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales es o no es "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.135 *supra* de que se requiere la uniformidad geográfica en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Es decir, la aplicación debe ser uniforme en diferentes lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial también recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.135 *supra* de que deben tenerse en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos respecto de la clasificación arancelaria de tarjetas de red para ordenadores personales es de naturaleza limitada. Entraña la interpretación de tan solo unas pocas partidas arancelarias del Arancel Aduanero Común para determinar la clasificación de un solo producto -a saber, tarjetas de red para ordenadores personales. Por lo tanto, dado el carácter limitado de esta impugnación, el Grupo Especial estima que se precisa un alto grado de uniformidad a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Pasamos ahora a los hechos para determinar si se ha alcanzado o no este alto grado de uniformidad respecto de la clasificación arancelaria de tarjetas de red para ordenadores personales.

7.200 El Grupo Especial observa que, en apoyo de la alegación de los Estados Unidos de la existencia de clasificación arancelaria divergente de tarjetas de red para ordenadores personales entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas, recurre a la siguiente explicación de los antecedentes fácticos del procedimiento principal del asunto ante el TJCE en *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, que figura en las conclusiones del Abogado General:

> "Según la resolución de remisión, la sociedad alemana Peacock AG (en lo sucesivo, 'demandante') importó grandes cantidades de tarjetas de red procedentes de los Estados Unidos de América y de otros países terceros entre julio de 1990 y mayo de 1995, declarándolas para su despacho aduanero en la subpartida 8473 3000 de la NC como 'circuitos electrónicos, salvo los utilizables como partes de ordenadores de la partida 8471 (Cards)'. En 1993, la demandante y dos de sus filiales recibieron información vinculante de clasificación arancelaria de las Administraciones aduaneras danesa, neerlandesa y británica con arreglo a las cuales dichas tarjetas de red debían clasificarse en la subpartida 8473 de la NC.

[521] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 33 referente al Asunto C-339/98, *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, Conclusiones del Abogado General, Recopilación de Jurisprudencia 2000, I-08947, 28 de octubre de 1999, párrafos 7 y 8 (Estados Unidos - Prueba documental 17).

[522] Véase información sobre las instituciones y mecanismos comunitarios aplicables en la esfera de la clasificación arancelaria en los párrafos 7.179 a 7.182 *supra*.

> No obstante, el Hauptzollamt Paderborn (Administración Principal de Aduanas de Paderborn; en lo sucesivo, 'demandada') giró posteriormente liquidaciones complementarias en las que reclamaba el pago de los derechos de aduana adicionales que deberían haberse liquidado de haber clasificado las mercancías en la partida de la NC que consideraba correcta, a saber, la partida 8517. La demandante presentó reclamaciones tanto contra dichas liquidaciones complementarias como contra las declaraciones globales de derechos de aduana que había efectuado para atenerse a las mismas. Mediante decisión de 11 de septiembre de 1995, la demandada desestimó por infundadas las objeciones de la demandante, declarando que las tarjetas de red debían clasificarse en la partida 8517."[523]

7.201 Los hechos que figuran en las conclusiones del Abogado General indican efectivamente la existencia en un momento dado de diferencias en la clasificación arancelaria entre las autoridades aduaneras alemanas (que clasificaron el producto en cuestión en la partida 8517), por una parte, y, por la otra, las autoridades aduaneras danesas, neerlandesas y británicas (que lo clasificaron en la partida 8473). El Grupo Especial señala que las Comunidades Europeas no han discutido la existencia de esas diferencias.[524] Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo Especial considera que, en algún momento durante el período comprendido entre 1990 y 1995, las Comunidades Europeas no estaban aplicando el Arancel Aduanero Común en relación con la clasificación arancelaria de tarjetas de red para ordenadores personales de manera uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.202 No obstante, el Grupo Especial es de la opinión que a los efectos de la presente diferencia tienen que tenerse en cuenta los esfuerzos de las instituciones de las CE por regularizar esas diferencias. En el año 2000, tras la remisión del tribunal nacional alemán al TJCE para una decisión prejudicial en el asunto *Peacock*, el TJCE concluyó que los productos en cuestión se tenían que clasificar en la partida 8471 -es decir, en una partida que no había servido de base a las autoridades aduaneras alemanas ni a las autoridades aduaneras danesas, neerlandesas y británicas para la clasificación.[525]

7.203 Cabe destacar que las importaciones que dieron lugar a la decisión prejudicial del TJCE en el asunto *Peacock* ocurrieron entre 1990 y 1995.[526] Tuvieron lugar antes de que se adoptara el Reglamento (CE) Nº 1165/95, de 23 de mayo de 1995, según el cual determinadas mercancías quedaban clasificadas en la subpartida 8517 82 90.[527] Los productos clasificados en la

---

[523] Asunto C-339/98, *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, Conclusiones del Abogado General, Recopilación de Jurisprudencia 2000, I-08947, 28 de octubre de 1999, párrafos 7 y 8 (Prueba documental 17).

[524] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 134 a 137.

[525] Asunto C-339/98, *Peacock*, Recopilación de Jurisprudencia [2000], I-8497, 19 de octubre de 2000 (CE - Prueba documental 87).

[526] En el párrafo 3, el Abogado General declara que las mercancías de que se trata en el procedimiento principal fueron importadas entre 1990 y 1995: Asunto C-339/98, *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, Conclusiones del Abogado General, Recopilación de Jurisprudencia 2000, I-08947, 28 de octubre de 1999 (Estados Unidos - Prueba documental 17).

[527] En particular, el Reglamento Nº 1165/95 clasificaba los siguientes productos en la subpartida 8517 82 90: "Tarjeta de adaptación destinada a montarse en máquinas automáticas de tratamiento de la información unidas por cable, que permite intercambiar datos sobre una red de área local (LAN) sin utilizar un módem)". (CE - Prueba documental 135).

subpartida 8517 en virtud del Reglamento 1165/95 eran aparentemente idénticos a los productos en litigio en el asunto *Peacock*.[528]

7.204 Dado que las importaciones en litigio en el asunto *Peacock* eran anteriores a la adopción del Reglamento 1165/95, este Reglamento no estaba en litigio en aquel asunto.[529] No obstante, habida cuenta de la aparente incoherencia entre la clasificación de las tarjetas de red para ordenadores personales en la partida 8471 por el TJCE en su decisión prejudicial de 2000 en el asunto *Peacock*, por un lado, y, por el otro, el Reglamento Nº 1165/95, que clasificaba los productos en la partida 8517, el TJCE declaró jurídicamente inválido este último Reglamento en una decisión prejudicial en el asunto de *Cabletron Systems Ltd contra The Revenue Commissioners*.[530] En el asunto *Cabletron*, el TJCE tomó nota específicamente de su decisión en el caso *Peacock*[531] y declaró que "[l]a Comisión debería haber comprendido [al redactar el Reglamento Nº 1165/95], por la redacción de las partidas 8471 y 8517, interpretadas en relación con las Notas Explicativas vigentes cuando se adoptaron los dos Reglamentos mencionados, que erraba al clasificar en la partida 8517 los aparatos para red. … deben ser clasificados en la partida 8471 de la Nomenclatura Combinada".[532]

7.205 En síntesis, atendiendo a las pruebas que han sido presentadas a este Grupo Especial en el contexto de la presente diferencia, hubo divergencia en la clasificación arancelaria de tarjetas de red para ordenadores personales entre 1990 y 1995. Esa divergencia suscitó la atención de una institución de las CE -a saber, el TJCE- mediante una solicitud de decisión prejudicial en el asunto *Peacock* en el año 2000. En su decisión prejudicial en el asunto *Peacock* así como en una decisión prejudicial pronunciada el año 2001 en el asunto *Cabletron*, el TJCE aclaró la clasificación correcta de las tarjetas de red para ordenadores personales. El Grupo Especial entiende que las decisiones prejudiciales pronunciadas por el TJCE son vinculantes para el tribunal nacional que entiende del caso en el que se pronuncia la decisión.[533] Además, entendemos por las Comunidades Europeas que las decisiones prejudiciales pronunciadas por el TJCE, entre ellas las pronunciadas en los asuntos *Peacock* y *Cabletron*, son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.[534] No se ha aportado al Grupo Especial ninguna prueba que indique que persistiera la

[528] Así se desprende con claridad del párrafo 6 del Asunto C-339/98, *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, Conclusiones del Abogado General, Recopilación de Jurisprudencia 2000, I-08947, 28 de octubre de 1999 (Estados Unidos - Prueba documental 17).

[529] Efectivamente, como señala el Abogado General en sus conclusiones, "[e]l órgano jurisdiccional nacional no ha planteado una petición de decisión sobre la validez del Reglamento Nº 1165/95, que entró en vigor con posterioridad a las importaciones de que se trata en el procedimiento principal, pero ha expresado su opinión según la cual una decisión de este Tribunal de Justicia en el sentido de que las tarjetas de red deben clasificarse en la partida 8473 entrañaría indirectamente su invalidez, en la medida en que las clasifica en una partida diferente": Asunto C-339/98, Conclusiones del Abogado General, Recopilación de Jurisprudencia 2000, I-08947, párrafo 9 (28 de octubre de 1999) (Estados Unidos - Prueba documental 17).

[530] Asunto C-463/98, *Cabletron System Ltd contra The Revenue Commissioners*, Recopilación de Jurisprudencia [2001], I-3495, 10 de mayo de 2001 (CE - Prueba documental 136).

[531] Asunto C-463/98, *Cabletron System Ltd contra The Revenue Commissioners*, Recopilación de Jurisprudencia [2001], I-3495, 10 de mayo de 2001, párrafo 16 y siguientes (CE - Prueba documental 136).

[532] Asunto C-463/98, *Cabletron System Ltd contra The Revenue Commissioners*, Recopilación de Jurisprudencia [2001], I-3495, 10 de mayo de 2001, párrafos 1 y 2 (CE - Prueba documental 136).

[533] Asunto 29/68, *Milchkontor contra Hauptzollamt Saarbrücken*, Recopilación de Jurisprudencia [1969], 165 (CE - Prueba documental 59).

[534] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 163 del Grupo Especial.

divergencia en la clasificación arancelaria de tarjetas de red para ordenadores personales entre los Estados miembros después de la publicación de las decisiones prejudiciales del TJCE en los asuntos *Peacock* y *Cabletron*.

7.206 Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo Especial concluye que efectivamente parecían existir diferencias de aplicación en la clasificación arancelaria de los productos en cuestión entre las autoridades aduaneras alemanas, por un lado, y, por el otro, las autoridades aduaneras danesas, neerlandesas y británicas entre 1990 y 1995. El Grupo Especial considera que, durante ese período, las Comunidades Europeas no aplicaban el Arancel Aduanero Común en relación con la clasificación arancelaria de tarjetas de red para ordenadores personales de manera uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, la aplicación no uniforme en cuestión ocurrió hace más de 10 años. Por lo tanto, no consideramos que las diferencias en cuestión demuestren que las Comunidades Europeas apliquen actualmente el Arancel Aduanero Común de manera no uniforme respecto de la clasificación arancelaria de tarjetas de red para ordenadores personales. A este respecto, recordamos la constatación que formulamos en el párrafo 7.36 *supra* de que, como principio general, un grupo especial es competente para examinar medidas vigentes en el momento en el que fue establecido, pero también puede ser competente para examinar medidas que hubieran expirado en el momento del establecimiento en el grado en que esas medidas expiradas afecten al funcionamiento de un acuerdo abarcado en ese momento. En este caso, no obran en poder del Grupo Especial pruebas que indiquen que las diferencias en la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales que existían entre 1990 y 1995 persisten y siguen teniendo efecto hoy en día. Al contrario, el Grupo Especial entiende que, una vez que las diferencias en cuestión fueron señaladas a la atención de las instituciones comunitarias mediante los asuntos *Peacock* y *Cabletron*, esas diferencias se solucionaron.

7.207 El Grupo Especial llega a la conclusión de que la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales no equivale actualmente a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En consecuencia, el Grupo Especial no constata una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 respecto de la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales.

ii) Clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo

Resumen de los argumentos de las partes

7.208 Los **Estados Unidos** se refieren a un caso en el que las autoridades aduaneras de Francia y España tuvieron diferencias acerca de si un producto para riego por goteo debía clasificarse como sistema de riego o como tubo.[535] Los Estados Unidos explican que las autoridades aduaneras francesas facilitaron una IAV para el producto en cuestión en 1999, clasificándolo como un sistema de riego en la partida arancelaria 8424 del Arancel Aduanero Común, que llevaba un tipo de derecho *ad valorem* del 1,7 por ciento. En diciembre de 2000, cuando un importador del mismo producto trató de importarlo a través de España, las autoridades aduaneras españolas desestimaron la IAV francesa y clasificaron el producto como un tubo, en la partida arancelaria 3717 del Arancel Aduanero Común, que llevaba un tipo de derecho *ad valorem* del 6,4 por ciento.[536]

7.209 En respuesta, las **Comunidades Europeas** aclaran que la IAV fue facilitada por las autoridades aduaneras francesas el 6 de julio de 1999 para un producto de Roberts Irrigation (Ro-Drip) con el código 8424 81 10 de la NC, que abarca aparatos de riego. El 9 de febrero de 2001, las autoridades aduaneras españolas facilitaron una IAV en la que clasificaban el mismo producto en

[535] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 33.

[536] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 15 del Grupo Especial.

el código 3917 32 99 de la NC. Según las Comunidades Europeas, la Sección de la Nomenclatura Arancelaria y Estadística del Comité del Código Aduanero examinó la cuestión de la IAV divergente. La cuestión se solucionó mediante la adopción del Reglamento (CE) Nº 763/2002 de la Comisión, de 3 de mayo de 2002, que clasificó el producto en la partida 3917 32 99.[537] En consecuencia, Francia revocó y sustituyó la IAV facilitada con anterioridad.[538]

7.210 **Los Estados Unidos** responden que, incluso aunque la divergencia en la clasificación de productos para riego por goteo se pueda haber solucionado mediante la adopción de un reglamento, ello no refuta las pruebas de aplicación no uniforme, porque ésta existió y, además, se permitió que siguiera existiendo durante un año y medio.[539] Específicamente, los Estados Unidos sostienen que la divergencia en la clasificación del producto para riego por goteo ocurrió en febrero de 2001 y no se solucionó hasta 15 meses más tarde, en mayo de 2002. Durante ese plazo, la divergencia efectivamente obligó al exportador a modificar sus prácticas de envío, enviando su producto a Francia y no a España.[540]

7.211 Las **Comunidades Europeas** responden que la IAV es vinculante únicamente respecto del titular de la IAV y no es vinculante respecto de otras personas.[541] Según las Comunidades Europeas, las IAV facilitadas por Francia y España no lo fueron a favor de los mismos titulares. Además, las Comunidades Europeas sostienen que lo que reviste importancia no es que pueda ocurrir una divergencia en la clasificación arancelaria, sino que se aborde y elimine una vez que ocurra.[542] Según las Comunidades Europeas, eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso de los productos para riego por goteo. Una vez que se detectó la IAV divergente, se abordó rápidamente el caso y se solucionó en un plazo de tiempo que es prudencial. Las Comunidades Europeas sostienen que un plazo de menos de 15 meses desde la expedición de la IAV divergente hasta la adopción del reglamento sobre clasificación no constituye un plazo excesivamente prolongado para solucionar una cuestión compleja de clasificación.[543]

Análisis por el Grupo Especial

7.212 El Grupo Especial señala que los Estados Unidos impugnan una divergencia en la clasificación arancelaria de productos para riego por goteo entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.[544]

7.213 En opinión del Grupo Especial, la clasificación arancelaria de un producto, como los productos para riego por goteo, constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del

[537] Reglamento (CE) Nº 763/2002 de la Comisión, de 3 de mayo de 2002, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la nomenclatura combinada (CE - Prueba documental 88).

[538] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 142.

[539] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 15 y 20 del Grupo Especial.

[540] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 21.

[541] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 161 del Grupo Especial referente al Asunto C-495/03, *Intermodal Transports BV contra Staatssecretaris van Financiën*, 15 de septiembre de 2005, aún no se ha incluido en la Recopilación, párrafo 27 (Estados Unidos - Prueba documental 71).

[542] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 143.

[543] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 143.

[544] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 33.

artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es un asunto que está comprendido en el mandato del Grupo Especial puesto que equivale a un caso de aplicación del Arancel Aduanero Común en la esfera de la clasificación arancelaria.[545]

7.214 En cuanto a la cuestión de si la clasificación arancelaria de productos para riego por goteo es o no es "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.135 *supra* de que se requiere la uniformidad geográfica en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Es decir, la aplicación debe ser uniforme en diferentes lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial también recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.135 *supra* de que deben tenerse en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos respecto de la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo es de naturaleza limitada. Entraña la interpretación de tan solo unas pocas partidas arancelarias del Arancel Aduanero Común para determinar la clasificación de un solo producto -a saber, los productos para riego por goteo. Por lo tanto, dado el carácter limitado de esta impugnación, el Grupo Especial estima que se precisa un alto grado de uniformidad a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Pasamos ahora a los hechos para determinar si se ha alcanzado o no este alto grado de uniformidad respecto de la clasificación arancelaria de productos para riego por goteo.

7.215 El Grupo Especial señala que los Estados Unidos no han aportado ninguna prueba para apoyar su alegación de divergencia en la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo. Simplemente afirman en sus comunicaciones la existencia de una diferencia entre IAV francesas y españolas respecto de los productos para riego por goteo.[546] No obstante, el Grupo Especial está dispuesto a aceptar esta afirmación habida cuenta del hecho de que las Comunidades Europeas no discuten la existencia de divergencia a este respecto.[547]

7.216 Atendiendo a la explicación de los hechos por las Comunidades Europeas[548], la divergencia en la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo ocurrió entre 1999 y 2001. En particular, las autoridades aduaneras francesas clasificaron los productos para riego por goteo en la subpartida 8424 81 10 del Arancel Aduanero Común en una IAV que fue facilitada en julio de 1999, mientras que las autoridades aduaneras españolas lo hicieron en la subpartida 3917 32 99 del Arancel Aduanero Común en una IAV que fue facilitada en febrero de 2001. En el Reglamento (CE) Nº 763/2002 de la Comisión, de 3 de mayo de 2002, los productos para riego por goteo se clasificaron en la subpartida 3917 32 99.[549] No se ha aportado ninguna prueba al Grupo Especial que indique que la divergencia en la clasificación arancelaria de productos para riego por goteo persistiera después de la adopción del Reglamento Nº 763/2002.

---

[545] Véase información sobre las instituciones y mecanismos comunitarios aplicables en la esfera de la clasificación arancelaria en los párrafos 7.179 a 7.182 *supra*.

[546] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 33; Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 15 del Grupo Especial.

[547] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 142 y 143.

[548] Esta explicación se corresponde en gran medida con la descripción de los hechos por los Estados Unidos. En cualquier caso, el Grupo Especial señala que ninguna de las partes aportó al Grupo Especial pruebas que le permitieran verificar qué versión de los hechos era correcta.

[549] Reglamento (CE) Nº 763/2002 de la Comisión, de 3 de mayo de 2002, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la nomenclatura combinada (CE - Prueba documental 88).

7.217 Habida cuenta de los hechos que anteceden, el Grupo Especial llega a la conclusión de que la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo no equivale a aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Atendiendo a la descripción de los hechos que han hecho las partes, parecería que existían diferencias en la clasificación de los productos en cuestión entre las autoridades aduaneras francesas, por una parte, y las autoridades aduaneras españolas, por la otra. No obstante, las pruebas que se han presentado al Grupo Especial en la presente diferencia indican que esas diferencias existieron durante un plazo de tiempo relativamente corto, a saber, entre principios de 2001 y mediados de 2002. Además, las diferencias en cuestión ocurrieron hace algún tiempo. Por lo tanto, incluso si esas diferencias pueden calificarse de casos de no uniformidad geográfica en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, no consideramos que tales diferencias demuestren que las Comunidades Europeas apliquen actualmente el Arancel Aduanero Común de manera no uniforme respecto de la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo. A este respecto, recordamos la constatación que formulamos en el párrafo 7.36 *supra* de que, como principio general, un grupo especial es competente para examinar medidas vigentes en el momento en el que fue establecido, pero también puede ser competente para examinar medidas que hubieran expirado en el momento del establecimiento en el grado en que esas medidas expiradas afecten al funcionamiento de un acuerdo abarcado en ese momento. Además, no se nos ha aportado ninguna prueba que sugiera que las diferencias en la aplicación relativas a la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo que existían entre 2001 y 2002 persisten y siguen teniendo efecto hoy en día. Al contrario, el Grupo Especial entiende que las diferencias se han solucionado mediante la adopción del Reglamento Nº 763/2002, de 3 de mayo de 2002.

7.218 El Grupo Especial llega a la conclusión de que la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo no equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En consecuencia, el Grupo Especial no constata una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 respecto de la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo.

iii) Clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex

Resumen de los argumentos de las partes

7.219 Los **Estados Unidos** aducen que, en respuesta a una reciente encuesta entre los miembros de una asociación comercial formada por importadores de productos a las Comunidades Europeas, los encuestados observaron que "en Italia y España, los artículos o "shorts" unisex tienen clasificaciones diferentes de las de Alemania". Según los Estados Unidos, debido a esta divergencia en la clasificación entre los Estados miembros, estos artículos han de importarse a través de Alemania, lo que provoca costos adicionales.[550]

7.220 En respuesta, las **Comunidades Europeas** sostienen que la denominada "encuesta" a la que recurren los Estados Unidos se basa en un comentario de una sola empresa sin identificar en el contexto de un cuestionario de una asociación comercial de 2005 y no está respaldada por ninguna otra prueba. Las Comunidades Europeas sostienen que, por lo tanto, es imposible determinar la naturaleza precisa de los productos en cuestión o identificar las cuestiones de clasificación arancelaria que puedan entrar en liza. En consecuencia, las Comunidades Europeas consideran que la declaración

[550] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 76 referente a la Foreign Trade Association, cuestionario sobre el tema "Facilitación del comercio". Facilitación del comercio en los Estados de la OMC, marzo de 2005, respuesta a la pregunta 1.4 (Estados Unidos - Prueba documental 30).

citada por los Estados Unidos no aporta ninguna prueba de falta de uniformidad en la práctica de clasificación de las Comunidades Europeas respecto de artículos o "shorts" unisex.[551]

Análisis por el Grupo Especial

7.221 El Grupo Especial señala que los Estados Unidos impugnan la divergencia en la clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.[552]

7.222 En opinión del Grupo Especial, la clasificación arancelaria de un producto, como los artículos o "shorts" unisex, constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es un asunto que está comprendido en el mandato del Grupo Especial puesto que equivale a un caso de aplicación del Arancel Aduanero Común en la esfera de la clasificación arancelaria.[553]

7.223 En cuanto a la cuestión de si la clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex es o no es "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.135 *supra* de que se requiere la uniformidad geográfica en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Es decir, la aplicación debe ser uniforme en diferentes lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial también recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.135 *supra* de que deben tenerse en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos respecto de la clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex es de naturaleza limitada. Entraña la interpretación de tan solo unas pocas partidas arancelarias del Arancel Aduanero Común para determinar la clasificación de un solo producto -a saber, los artículos o "shorts" unisex. Por lo tanto, dado el carácter limitado de esta impugnación, el Grupo Especial estima que se precisa un alto grado de uniformidad a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Pasamos ahora a los hechos para determinar si se ha alcanzado o no este alto grado de uniformidad respecto de la clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex.

7.224 El Grupo Especial no considera que las pruebas aportadas por los Estados Unidos demuestren la existencia de una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 por las siguientes razones.

7.225 *En primer lugar*, la *única* prueba aportada por los Estados Unidos es el informe de marzo de 2005 de la Foreign Trade Association relativo a un cuestionario sobre el tema de "Facilitación del comercio": Facilitación del comercio en los Estados de la OMC.[554] No consideramos que este informe, por sí solo, constituya elemento probatorio a los efectos de una reclamación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 dado que simplemente contiene una muestra de

[551] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 133.

[552] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 76, en donde se hace referencia a la Foreign Trade Association, cuestionario sobre el tema "Facilitación del comercio": Facilitación del comercio en los Estados de la OMC, marzo de 2005, respuesta a la pregunta 1.4 (Estados Unidos - Prueba documental 30).

[553] Véase la información sobre las instituciones y mecanismos comunitarios aplicables en la esfera de la clasificación arancelaria en los párrafos 7.179 a 7.182 *supra*.

[554] Foreign Trade Association, cuestionario sobre el tema "Facilitación del comercio": Facilitación del comercio en los Estados de la OMC, marzo de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 30).

comentarios formulados por distintos comerciantes en respuesta a preguntas planteadas en el cuestionario. No está clara la medida en la que esos comentarios son representativos de las preocupaciones que tienen todos los comerciantes que tratan de importar productos a las Comunidades Europeas. De hecho, el primer párrafo del propio informe de la Foreign Trade Association afirma que "el cuestionario sobre facilitación del comercio se envió a 70 empresas miembros de la FTA. La FTA recibió 20 respuestas: a continuación figuran algunas citas tomadas de las respuestas. Aunque [las citas] no siempre reflejan fielmente el consenso político de todos los miembros, ponen de relieve los problemas prácticos con que se enfrentan los comerciantes europeos, y en particular los importadores, en las fronteras".

7.226 *En segundo lugar*, el Grupo Especial no está convencido de que el párrafo del informe de la Foreign Trade Association citado por los Estados Unidos en apoyo de sus alegaciones demuestre que se haya producido una falta de aplicación uniforme por parte de las Comunidades Europeas en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 respecto de los artículos o "shorts" unisex. En nuestra opinión, en caso de demostrar algo, el párrafo citado sugiere que las presuntas diferencias en la clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex están vinculadas a una falta de claridad en la(s) partida(s) arancelaria(s) pertinente(s) del Sistema Armonizado.[555] A este respecto, señalamos que el comentario en el que se basan los Estados Unidos reza así:

> "La clasificación de prendas de vestir causa en general muchos problemas. Por ejemplo, en Italia y España, los artículos o "shorts" unisex tienen clasificaciones diferentes de las de Alemania. Estos artículos han de importarse a través de Alemania, lo que provoca costos adicionales. *Debe simplificarse el Código del SA (una categoría para todas las prendas de vestir por encima de la cintura y otra para todas las prendas de vestir por debajo de la cintura).*"[556] (sin cursivas en el original)

7.227 *Por último*, incluso si pudiera interpretarse que el informe de la Foreign Trade Association indica diferencias relativas a la clasificación de los artículos o "shorts" unisex entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros, sin otras pruebas acreditativas, es imposible que el Grupo Especial pueda saber si existen o no esas diferencias pese a la identidad de los productos que se clasifican o, más bien, porque los productos no son los mismos.

7.228 El Grupo Especial llega a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado que la clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex equivalga a aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

iv) Clasificación arancelaria de forros opacos para cortinas

Resumen de los argumentos de las partes

Pruebas de divergencia en la clasificación

7.229 Los **Estados Unidos** sostienen que el caso de los forros opacos para cortinas es un ejemplo palmario de aplicación no uniforme del Arancel Aduanero Común en cuyo contexto ninguna institución de las CE ha intervenido para subsanar la falta de uniformidad.[557] Específicamente, los

[555] Las Comunidades Europeas son signatarias del Convenio del SA. Por lo tanto, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de dicho Convenio, están obligadas a utilizar las partidas y subpartidas del SA a nivel de seis cifras. Sin embargo, disponen de flexibilidad para agregar partidas y subpartidas más allá del nivel de seis cifras.

[556] Foreign Trade Association, cuestionario sobre el tema "Facilitación del comercio": Facilitación del comercio en los Estados de la OMC, marzo de 2005, párrafo 1.4 (Estados Unidos - Prueba documental 30).

[557] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4 del Grupo Especial.

Estados Unidos señalan que, en las IAV facilitada de 1999 a 2002, las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, y los Países Bajos y, posteriormente, Bélgica, clasificaron los forros para cortinas similares en la partida arancelaria 5907 del Arancel Aduanero Común ("Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos"). Ahora bien, durante ese mismo período, las autoridades aduaneras de Alemania clasificaron el producto en la partida 3921 del Arancel Aduanero Común ("Las demás placas, láminas, hojas, y tiras, de plástico"). Los Estados Unidos sostienen que, después de casi cinco años de diversas solicitudes de revisión presentadas por importadores ante diferentes secciones de la administración aduanera alemana, la Oficina Principal de Aduanas de Bremen emitió una decisión en septiembre de 2004 en la que constataba que las importaciones del producto en cuestión en octubre y noviembre de 1999 estaban clasificadas correctamente en la partida 3921.[558] Según los Estados Unidos, la autoridad aduanera alemana reconoció la existencia de IAV para mercancías comparables pero no se molestó en explicar por qué se negaba a observar las decisiones de clasificación reflejadas en esas IAV.[559] Tampoco trató de conciliar su decisión de clasificación con las decisiones de clasificación recogidas en IAV facilitadas por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros. Además, según los Estados Unidos, la autoridad aduanera alemana recurrió a una justificación que no tiene base en el Arancel Aduanero Común.[560]

7.230 Las **Comunidades Europeas** aducen que el presente caso no atañe a la cuestión de la partida en la que debería clasificarse correctamente un producto concreto, sino a la cuestión de uniformidad de aplicación de la normativa de clasificación comunitaria.[561]

¿Son iguales las mercancías en cuestión?

7.231 Las **Comunidades Europeas** sostienen que los productos que se describen en la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen no eran idénticos a los productos descritos en las IAV facilitadas por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, y los Países Bajos, ya que los primeros no estaban flocados con tundiznos, mientras que en las IAV se describe que los productos son tundidos. Atendiendo a estas descripciones del producto, los productos se tenían que clasificar de forma diferente.[562] Según las Comunidades Europeas, la presencia de una capa de tundiznos es un criterio importante para determinar si, de conformidad con la nota 2 a) 5) del capítulo 59 del Arancel Aduanero Común, la tela es un simple soporte lo que, a su vez, podría afectar a la clasificación.[563] Por lo tanto, según las Comunidades Europeas, la diferencia en la clasificación arancelaria a la que aluden los Estados Unidos no es una falta de uniformidad, sino el resultado de la aplicación correcta del Arancel Aduanero Común.[564] Las Comunidades Europeas también sostienen que, aun en caso de que se hubiera producido un error en la evaluación fáctica de los productos, ello no significa que no exista uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En particular, si el importador estimó que las autoridades alemanas

[558] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 66.

[559] Hauptzollamt Bremen, Carta de Decisión a Bautex-Stoffe GmbH relativa a la clasificación de forros opacos para cortinas, 22 de septiembre de 2004 (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 23).

[560] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4 del Grupo Especial.

[561] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 116.

[562] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 117.

[563] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 337.

[564] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 117.

habían incurrido en error al evaluar la mercancía en cuestión, podría haber recurrido la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen ante el Tribunal Tributario de Bremen. Según las Comunidades Europeas, si el importador ha optado por no recurrir, este hecho no puede servir para reivindicar una falta de uniformidad en el sistema comunitario de clasificación aduanera. Las Comunidades Europeas añaden que ni el importador ni el productor han señalado jamás la cuestión de la clasificación de los forros opacos para cortinas a la atención de la Comisión Europea.[565]

7.232 Los **Estados Unidos** responden que no es correcto que el producto que obraba en manos de las autoridades alemanas no estuviera tundido. Según los Estados Unidos, en rigor, la determinación de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo en la que se basó la Oficina Principal de Aduanas de Bremen constató que el producto contenía "tundizno con fibras sueltas".[566] Los Estados Unidos sostienen que la Oficina Principal de Aduanas de Bremen no constató una falta de tundizno en sí mismo, sino que éste no constituía una capa distinta en el producto en cuestión. Lo que la Oficina Principal de Aduanas de Bremen consideró importante era la existencia de plástico en el recubrimiento, con independencia de que en ese recubrimiento se mezclaran tundiznos u otros elementos. Los Estados Unidos aducen que el hecho de que la autoridad aduanera alemana adoptara este enfoque, contrario al adoptado por las autoridades de otros Estados miembros, queda confirmado por la carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo.[567]

7.233 En respuesta, las **Comunidades Europeas** sostienen que la carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo en la que se basan los Estados Unidos guarda relación con un recurso administrativo interpuesto por una empresa denominada Ornata GmbH. Según las Comunidades Europeas, no parece que ese recurso esté relacionado de manera alguna con el recurso administrativo interpuesto por Bautex-Stoffe GmbH, que fue objeto de la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen. Tampoco indica que la Oficina Principal de Aduanas de Bremen se basara en la carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo.[568]

7.234 Los **Estados Unidos** responden que la carta de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen y la carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo se refieren ambas a forros opacos para cortinas producidos por Rockland Industries. La Oficina Principal de Aduanas de Bremen decidió excluir el producto de Rockland Industries de la clasificación en la partida arancelaria 5907 por un motivo evidentemente no aplicado por otras autoridades aduaneras comunitarias -es decir, porque el producto llevaba plástico en su recubrimiento, con independencia de que en ese recubrimiento estuvieran mezclados tundiznos u otros elementos.[569] Los Estados Unidos asimismo sostienen que las Comunidades Europeas ponen erróneamente en tela de juicio que el forro producido por Rockland Industries en litigio en la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen, que se clasificó en la partida arancelaria 3291, fuera sustancialmente idéntico al forro que otros Estados miembros habían clasificado en la partida 5907. En apoyo de esto, los Estados Unidos sostienen que el Presidente y Director Ejecutivo de Rockland Industries afirma en declaración jurada que: "Todos los productos recubiertos que produce Rockland incorporan tundizno como parte del proceso de recubrimiento.

[565] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 340.

[566] Respuesta de los Estados Unidos a la Pregunta 17 a) del Grupo Especial referente a Carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo-Waltershof a ORNATA GmbH, 29 de julio de 1998 (original y traducción al inglés), página 1 (Estados Unidos - Prueba documental 50).

[567] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 62, en donde se hace referencia a la Carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo-Waltershof a ORNATA GmbH, 29 de julio de 1998 (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 50).

[568] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 108.

[569] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 a) del Grupo Especial.

Rockland no ha fabricado nunca un producto recubierto que no incorpore tundizno … El tundizno es necesario para impedir que el tejido se pegue."[570]

7.235 En respuesta, las **Comunidades Europeas** sostienen que una declaración jurada del Presidente de Rockland Industries, el productor de forros opacos para cortinas, es una declaración de una persona con un claro interés en la clasificación de los forros opacos para cortinas y, por ello, carece de fuerza probatoria. Además, la declaración jurada no concierne a la cuestión de si los productos que obraban en manos de las autoridades comunitarias eran efectivamente idénticos.[571] Más concretamente, si bien la declaración jurada indica que el producto que fue objeto de la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen fue producido por Rockland Industries, no aporta respuesta acerca de si los productos para los que las autoridades neerlandesas, irlandesas y británicas facilitaron IAV eran también productos de Rockland Industries.[572] Contiene únicamente una afirmación de que Rockland Industries nunca ha producido ningún producto que no esté tundido.[573] Las Comunidades Europeas añaden que, para poder determinar la clasificación correcta del producto, no se trata de que el producto lleve tundizno como parte del proceso de recubrimiento, sino de que exista una capa de tundizno perceptible a simple vista. Según las Comunidades Europeas, no es una pregunta a la que se pueda responder con una declaración jurada del Presidente del productor de la mercancía.[574]

Nota explicativa de la subpartida 5907 del Sistema Armonizado

7.236 Los **Estados Unidos** se refieren a la nota explicativa que acompaña a la partida 5907 del Sistema Armonizado, que dispone, entre otras cosas, que "[e]ntre los tejidos comprendidos [en la subpartida 5907] conviene mencionar ... [l]os tejidos, que después de recubrirlos en toda la superficie con un adhesivo (a base de caucho o de otro tipo), *materias plásticas*, caucho u otras materias, se espolvorean con una delgada película de partículas de materias diversas, tales como ... [t]undiznos: estos tejidos imitan principalmente a las gamuzas y se asemejan a las llamadas *pieles de* Suecia ...".[575] Los Estados Unidos sostienen que, vista esa nota explicativa, a efectos de clasificación, la densidad relativa de la capa de tundiznos no es un elemento distintivo importante. Según los Estados Unidos, las autoridades aduaneras de los Estados miembros, salvo Alemania, han clasificado los forros opacos para cortinas en la partida 5907 en los casos en que se comprobó que el tundizno de la superficie del producto estaba "aplicado con poca densidad".[576] Los Estados Unidos sostienen que, en cambio, la Oficina Principal de Aduanas de Bremen declaró que "[s]ólo cabría considerar la asignación de las

[570] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 61, en donde se hace referencia a la Declaración jurada de Mark R. Berman, Presidente y Director Ejecutivo de Rockland Industries, Inc., 10 de noviembre de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 79).

[571] Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 16.

[572] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 a) del Grupo Especial.

[573] Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 16.

[574] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 a) del Grupo Especial.

[575] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 17 a) del Grupo Especial referente a la Nota explicativa del Sistema Armonizado, subpartida 5907 (Estados Unidos - Prueba documental 48).

[576] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 17 a) del Grupo Especial referente a la IAV UK103424227 (Estados Unidos - Prueba documental 51).

mercancías a la partida 5907 si, de conformidad con el rubro de esa partida 'las demás telas', las mercancías no estuvieran recubiertas de materia plástica de conformidad con la partida 3921."[577]

7.237 Las **Comunidades Europeas** responden que es erróneo afirmar que la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen sea incompatible con la nota explicativa de la partida 5907 del Sistema Armonizado. Según las Comunidades Europeas, la nota explicativa G) 1) de la partida 5907 dispone que entre los tejidos comprendidos conviene mencionar "[l]os tejidos, que después de recubrirlos en toda la superficie con un adhesivo (a base de caucho o de otro tipo), materias plásticas, caucho u otras materias, se espolvorean con una delgada película de partículas de materias diversas, tales como ... 1) Tundiznos: estos tejidos imitan principalmente a las gamuzas y se asemejan a las llamadas *pieles de Suecia* ...".[578] Las Comunidades Europeas sostienen que, por ello, la presencia de tundiznos era un criterio pertinente para la clasificación en la partida 5907. La decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen tuvo en cuenta este factor al señalar la ausencia de una capa de tundiznos. Como el producto no llevaba tundiznos, no se podía clasificar en la partida 5907.[579]

La ayuda interpretativa alemana

7.238 Los **Estados Unidos** sostienen que la Oficina Principal de Aduanas de Bremen se basó en una ayuda interpretativa propia de Alemania y que no utilizan uniformemente las autoridades aduaneras de los Estados miembros al aplicar el Arancel Aduanero Común a tejidos recubiertos, como los forros opacos para cortinas. Los Estados Unidos sostienen que la ayuda en cuestión instruía a la autoridad aduanera a considerar la densidad de la fibra del producto. Según los Estados Unidos, es evidente que la Oficina Principal de Aduanas de Bremen se basó en las constataciones de la Oficina de Aduanas de Hamburgo y, además, se refirió expresamente al hecho de que "[l]a trama no es fina", en alusión al parecer a la constatación de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo basada en la ayuda interpretativa.[580]

7.239 En respuesta, las **Comunidades Europeas** sostienen que la ayuda en cuestión fue consultada únicamente por la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo, no por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen, que decidió el recurso.[581] Además, según las Comunidades Europeas, nada de lo que contiene el texto es contrario al derecho comunitario. En concreto, el criterio de que la trama no es fina se elaboró por analogía a otro reglamento de clasificación de las CE y es un factor pertinente para determinar si el tejido sirve como simple soporte.[582] Las Comunidades Europeas también

[577] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 17 a) del Grupo Especial referente a Hauptzollamt Bremen, Carta de Decisión a Bautex-Stoffe GmbH, 22 de septiembre de 2004 (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 23). El Grupo Especial señala que la traducción al inglés de la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen que han presentado los Estados Unidos se refiere a la partida 3921, mientras que la versión alemana de la decisión se refiere a la partida 5903.

[578] Nota explicativa del Sistema Armonizado, subpartida 5907 (Estados Unidos - Prueba documental 48; CE - Prueba documental 127).

[579] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 111.

[580] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 17 a) del Grupo Especial referente a Hauptzollamt Bremen, Carta de Decisión a Bautex-Stoffe GmbH, 22 de septiembre de 2004 (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 23).

[581] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 342.

[582] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 343, en donde se hace referencia al Reglamento (CE) Nº 1458/97 de la Comisión relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (CE - Prueba documental 78).

sostienen que el texto en cuestión es una ayuda puramente interpretativa preparada con fines administrativos que no tiene ninguna fuerza de ley, y no se desvía del derecho comunitario. A este respecto, las Comunidades Europeas aducen que el TJCE ha aclarado que los manuales, la orientación y otras recopilaciones preparadas por los Estados miembros no tienen carácter jurídicamente vinculante en el derecho comunitario.[583]

7.240 Los **Estados Unidos** sostienen en respuesta que el reglamento de clasificación comunitario respecto del cual las Comunidades Europeas afirman que se elaboró la ayuda interpretativa por analogía es un reglamento relacionado con la clasificación de pantalones de esquí, que son clasificables en el capítulo 62 del Arancel Aduanero Común.[584] Los Estados Unidos sostienen que las reglas para la interpretación a que se hace referencia en ese reglamento guardan relación con la clasificación de una prenda de vestir, pero no tienen sentido cuando se aplican a un producto como un forro opaco para cortinas. El aspecto particular de la norma sobre los pantalones de esquí en el que se basó la autoridad alemana en este caso era la densidad de la trama del tejido. No obstante, según los Estados Unidos, la nota 2 a) del capítulo 59 del Arancel Aduanero Común resta expresamente pertinencia a ese criterio para la clasificación de tejidos recubiertos. En particular, dispone que la partida 5903 comprende "las telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, *cualquiera que sea el peso por metro cuadrado* y la naturaleza del plástico. …".[585] Los Estados Unidos explican que la autoridad aduanera alemana, habiendo descartado la clasificación de los forros opacos para cortinas en cuestión en la partida 5907, basándose aparentemente en su opinión de que la presencia de plástico en el recubrimiento excluía esa clasificación, recurrió a una ayuda interpretativa alemana. Los Estados Unidos sostienen que la autoridad aduanera alemana se basó en esa ayuda de una manera que resultó determinante.[586]

7.241 Las **Comunidades Europeas** sostienen que la crítica de los Estados Unidos a la referencia a un reglamento de clasificación concerniente a un tipo de pantalones de esquí es injustificada. El Reglamento (CE) Nº 1458/97 de la Comisión concierne a la clasificación de prendas de vestir en la partida 6210, que comprende "prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó 5907".[587] Las Comunidades Europeas sostienen que, implícitamente, el reglamento de clasificación en cuestión concernía a la clasificación del tejido con el que están confeccionadas las prendas. Ese reglamento exigía implícitamente la aplicación de la nota 2 a) 5) del capítulo 59 del Arancel Aduanero Comunitario para determinar si la tela es un simple soporte. Las Comunidades Europeas sostienen que fue en este contexto en el que la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo tuvo en cuenta la "densidad de la trama" de la tela.[588] Las Comunidades Europeas sostienen que el peso al que se alude en la nota 2 a) del capítulo 59 es el peso de todo el producto -es decir, la tela en su forma impregnada, recubierta, revestida o estratificada. La Oficina Principal de Aduanas de Bremen no consideró el peso del producto, sino la densidad de la trama de la tela de poliéster, que es únicamente parte del producto.[589] Las Comunidades Europeas sostienen que,

[583] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 344, en donde se hace referencia al Asunto C-161/88, *Friedrich Binder*, Recopilación de Jurisprudencia [1989], 2415, 12 de julio de 1989, párrafo 19 (CE - Prueba documental 79).

[584] Reglamento (CE) Nº 1458/97 de la Comisión relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (CE - Prueba documental 78).

[585] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 17 a) del Grupo Especial.

[586] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 63.

[587] Extracto de la partida 6210 del Arancel Aduanero Común (CE - Prueba documental 132).

[588] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 113.

[589] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 115.

según la nota 2 a) 5) del capítulo 59 del Arancel Aduanero Común, la partida 5903 no comprende las hojas, placas o tiras de plástico celular, combinadas con la tela en la que ésta sea un simple soporte. Así pues, para que se aplique la partida 5903 es necesario determinar si la tela es un simple soporte y, en consecuencia, la cuestión de si la trama era fina es un criterio pertinente para establecer si es un simple soporte o no.[590]

7.242 En respuesta, los **Estados Unidos** sostienen que las notas relativas al capítulo 39 del Arancel Aduanero Común no mencionan la densidad de la trama como criterio pertinente, y las notas del capítulo 59 disponen expresamente que la clasificación en ese capítulo se ha de determinar *cualquiera que sea* el peso por metro cuadrado. Las Comunidades Europeas afirman sin ninguna base que la referencia al peso por metro cuadrado es diferente de la densidad de la trama. Ahora bien, en realidad, el peso por metro cuadrado es forzosamente función de la densidad de la trama.[591]

Compatibilidad con el dictamen de la OMA

7.243 Los **Estados Unidos** sostienen que, en octubre de 2004, la Secretaría de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) emitió un dictamen en el que convenía en que el producto en cuestión debía clasificarse en la partida 5907 del Sistema Armonizado.[592] Según los Estados Unidos, poco tiempo después, las autoridades aduaneras belgas emitieron una decisión en la que clasificaban los forros opacos para cortinas en la partida 5907. No obstante, la decisión alemana permanece inalterada.[593]

7.244 En respuesta, las **Comunidades Europeas** sostienen que el dictamen de la OMA no es pertinente. Las Comunidades Europeas señalan que el dictamen declara que "la capa externa visible consta de tundizno de algodón que reviste completamente el plástico celular acrílico". Según las Comunidades Europeas, no corresponde con la descripción del producto que obró en poder de las autoridades aduaneras alemanas. Las Comunidades Europeas señalan también que el dictamen no es sino la opinión de un funcionario de la OMA, que no es jurídicamente vinculante en absoluto en el marco del Convenio sobre el Sistema Armonizado. Además, si a juicio de los Estados Unidos existía una diferencia concerniente a la aplicación del Convenio sobre el Sistema Armonizado, podrían someter esa diferencia al Comité del Sistema Armonizado de conformidad con el artículo 10 del Convenio sobre el SA pero todavía no lo han hecho.[594]

[590] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 112.

[591] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 64.

[592] Carta del Sr. Chriticles Mwansa, Director, Organización Mundial de Aduanas, Dirección de Asuntos Arancelarios y Comerciales, al Sr. Myles B. Harmon, Director de la Oficina de Reglamentos y Resoluciones del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, 26 de octubre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 24).

[593] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 68.

[594] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 341.

Análisis por el Grupo Especial

Consideraciones generales

7.245 El Grupo Especial señala que los Estados Unidos impugnan la divergencia en la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.[595]

7.246 En opinión del Grupo Especial, la clasificación arancelaria de un producto, como los forros opacos para cortinas, constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es un asunto que está comprendido en el mandato del Grupo Especial puesto que equivale a un caso de aplicación del Arancel Aduanero Común en la esfera de la clasificación arancelaria.[596]

7.247 En cuanto a la cuestión de si la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas es o no es "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que formuló en el párrafo 7.135 *supra* de que se requiere la uniformidad geográfica en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Es decir, la aplicación debe ser uniforme en diferentes lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial también recuerda su constatación en el párrafo 7.135 *supra* de que deben tenerse en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos respecto de la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas es de naturaleza limitada. Entraña la interpretación de tan solo unas pocas partidas arancelarias del Arancel Aduanero Común para determinar la clasificación de un solo producto -a saber, los forros opacos para cortinas. Por lo tanto, dado el carácter limitado de esta impugnación, el Grupo Especial estima que se precisa un alto grado de uniformidad a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Pasamos ahora a los hechos para determinar si se ha alcanzado o no este alto grado de uniformidad respecto de la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas.

Pruebas en que se basan los Estados Unidos para demostrar la existencia de divergencia en la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas

7.248 Los Estados Unidos alegan la existencia de divergencia en la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas de 1999 a 2002 entre las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, y los Países Bajos y, posteriormente, Bélgica, que clasificaron el producto en cuestión en la partida arancelaria 5907 del Arancel Aduanero Común (que comprende "Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio o usos análogos"), por una parte, y, por la otra, las autoridades aduaneras de Alemania, que clasificaron el producto en la partida 3921 del Arancel Aduanero Común (que comprende "Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico").

7.249 En apoyo de su alegación, los Estados Unidos se refieren a una serie de IAV facilitadas para los forros opacos para cortinas por las autoridades aduaneras en el Reino Unido (de fechas 17 de marzo de 1999, 12 de junio de 1999 y 22 de diciembre de 1999), en Irlanda (de fecha 1º de abril

[595] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 66.

[596] Véase la información sobre las instituciones y mecanismos comunitarios aplicables en la esfera de la clasificación arancelaria en los párrafos 7.179 a 7.182 *supra*.

de 1999) y en los Países Bajos (de fecha 13 de febrero de 2002).[597] Cada una de las IAV en la que se basan los Estados Unidos clasifica el producto en la partida 5907. Las descripciones de los productos en cada una de esas IAV se indican inmediatamente a continuación:

IAV facilitada por la autoridad aduanera británica con fecha 17 de marzo de 1999

"Forro térmico para cortinas; también denominado material de oscurecimiento. Consistente en un tejido de ligamento tafetán de un 50 por ciento de poliéster y un 50 por ciento de fibras de algodón. Recubierto perceptiblemente por un lado solamente de una capa de espuma acrílica. Posteriormente parece que se han aplicado a la parte superior de este recubrimiento tundiznos poco densos que producen un efecto ligeramente resaltado o cepillado. Utilizado en lugares como hoteles, etc., para oscurecer y bloquear la luz solar en habitaciones en las que el sol causa problemas. El tejido puede aplicarse también al revés de cortinas transparentes/translúcidas existentes; como material de forro; dando el mismo resultado neto. Similar en apariencia al tejido utilizado en estudios fotográficos, etc."

IAV facilitada por la autoridad aduanera británica con fecha 12 de junio de 1999

"Tejido de ligamento tafetán 70 por ciento poliéster 30 por ciento algodón. Visiblemente recubierto por un lado únicamente. Se han aplicado tundiznos que dan al tejido un efecto ligeramente resaltado o cepillado. Utilizado como material de oscurecimiento."

IAV facilitada por la autoridad aduanera británica con fecha 22 de diciembre de 1999

"Tela fabricada de tundiznos con una capa de plástico celular y un soporte de tejido de punto. 71,3 por ciento espuma (PU/PVC); 16,6 por ciento poliéster; 12,1 por ciento viscosa."

IAV facilitada por la autoridad aduanera irlandesa con fecha 1º de abril de 1999

"Forro térmico para cortinas (forro opaco para cortinas), tejido de ligamento tafetán de 50 por ciento poliéster y 50 por ciento algodón, visiblemente recubierto por un lado de una capa de espuma acrílica. Luego se han aplicado tundiznos encima de este recubrimiento."

IAV facilitada por la autoridad aduanera neerlandesa con fecha 13 de febrero de 2002

"Tejido de 100 por ciento algodón recubierto de polímeros de resina acrílica de baja densidad, sobre el que se ha introducido [textielvezeltjes (fibra textil)] una capa (tundizno). El tejido se suministra en rollos de unos 50 metros de longitud, envueltos en plástico y en cuatro rollos por caja."

7.250 Además, en cuanto a la clasificación de los forros opacos para cortinas en Bélgica, se desprende claramente de una decisión emitida por el ZPLA de Hamburgo[598], de la que se incluyen

[597] IAV facilitadas de 1999 a 2002 por autoridades aduaneras en el Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos (Estados Unidos - Prueba documental 22).

[598] El Grupo Especial entiende que la sigla ZPLA (Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt) puede traducirse al inglés por "Testing and Training Establishment for Technical Customs Matters" (Establecimiento de ensayos y formación para cuestiones aduaneras técnicas). El órgano al que el Grupo Especial se refiere en

extractos de algunos de sus aspectos en el párrafo 7.252 *infra*, que ciertos productos importados a Bélgica por Rockland Industries fueron clasificados por las autoridades aduaneras belgas en la partida 5907.[599] Una declaración jurada del Sr. Mark Berman, Director Ejecutivo de Rockland Industries, afirma en la parte pertinente que:

> "6. Todos los productos recubiertos que produce Rockland Industries incorporan tundizno como parte del proceso de recubrimiento. Rockland no ha fabricado nunca un producto recubierto que no incorpore tundizno.
>
> 7. El tundizno es necesario para impedir que el tejido se pegue."[600]

7.251 Los Estados Unidos comparan las clasificaciones arancelarias de los forros opacos para cortinas efectuadas por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica con determinadas decisiones y dictámenes emitidos por las autoridades aduaneras alemanas. En particular, los Estados Unidos se refieren a un dictamen pericial emitido por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen a Bautex-Stoffe GmbH ("Bautex") de fecha 29 de septiembre de 2004.[601] En ese dictamen pericial, la Oficina Principal de Aduanas de Bremen constató que determinados productos que Bautex había importado a Alemania en octubre y noviembre de 1999 habían sido clasificados correctamente en la partida 3921.[602] El dictamen pericial de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen afirma en su parte pertinente que:[603]

---

sus constataciones como el "ZPLA de Hamburgo, es citado por las partes indistintamente como la "Oficina de Aduanas de Hamburgo", la "Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo" y el "ZPLA de Hamburgo".

[599] Carta de la Oberfinanzdirektion de Hamburgo a la Oficina Principal de Aduanas (HZA) de Bremen relativa a la Protesta de Bautex-Stoffe GmbH, 3 de febrero de 2003 (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 41). Asimismo, de la carta de Marc De Schutter, Servicios del Gobierno Federal, Sección Financiera, Administración de Policía de Fronteras e Impuestos a la Importación, Costa Occidental, al Inspector de Policía de Fronteras e Impuestos a la Importación en Amberes - C.T.D.A.I., 26 de noviembre de 2004 (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 25), se desprende claramente que las autoridades aduaneras belgas clasificaron en la partida arancelaria 5907 unos "tejidos" con "una superficie de revestimiento de material sintético no celular que contiene materiales de relleno (dióxido de titanio y silicatos), que están cubiertos en su superficie con pelo corporal".

[600] Declaración jurada de Mark R. Berman, Presidente y Director Ejecutivo de Rockland Industries, Inc., 10 de noviembre de 2005, párrafos 6 y 7 (Estados Unidos - Prueba documental 79). El Grupo Especial toma nota de las objeciones de las Comunidades Europeas a esta declaración jurada basándose en que constituye una declaración de una persona con un claro interés en la clasificación de los forros opacos para cortinas y, por lo tanto, carece de fuerza probatoria: Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 16. No obstante, el Grupo Especial estima que la declaración jurada contiene pruebas que contribuyen presumiblemente a nuestro deber en el marco del artículo 11 del ESD de hacer una evaluación objetiva del asunto que nos ocupa.

[601] El Grupo Especial señala que las Comunidades Europeas caracterizan este dictamen pericial de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen como una "decisión": Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 333.

[602] Hauptzollamt Bremen, Carta de decisión dirigida a Bautex-Stoffe GmbH relativa a la clasificación de forros opacos para cortinas, 29 de septiembre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 23).

[603] El Grupo Especial señala que la traducción al inglés hecha por los Estados Unidos de diversas pruebas documentales que estaban originalmente en alemán le resultó difícil de entender y, en ocasiones, le pareció incorrecta. Por lo tanto, en sus constataciones, el Grupo Especial se basa en sus propias traducciones oficiosas de las Pruebas documentales 23, 41 y 50 presentadas por los Estados Unidos. No obstante, el Grupo Especial considera que las diferencias entre las traducciones de las Pruebas documentales 23, 41 y 50 que presentaron los Estados Unidos, por un lado, y, por el otro, las traducciones del Grupo Especial de esas pruebas

> "Según el dictamen de clasificación del ZPLA de Hamburgo, así como otros tres dictámenes sobre el asunto, las mercancías en cuestión consisten en rollos de un tejido blanco hecho de poliéster, recubierto por un lado de acrilato. El tejido no es denso y no tiene ningún otro tratamiento. El recubrimiento consiste en plástico celular. El tejido y el recubrimiento tienen aproximadamente el mismo espesor. El tejido se ha de considerar simplemente un substrato. Las mercancías importadas están comprendidas en la partida 3921.
>
> Según el dictamen sobre la clasificación, no existe un recubrimiento endurecido a base de aceite. La superficie no está revestida de una capa delgada de tundiznos. La tela no es densa y es de color uniforme. La tela sirve únicamente de soporte.
>
> Cabría considerar la clasificación de las mercancías en la partida 5907 únicamente si, de conformidad con el texto de esa partida, "las demás telas … ", las mercancías no estuvieran recubiertas de plástico como lo prescribe la partida 5903. El hecho de que el recubrimiento de plástico haya sido tratado con un agente ignífugo o similar no altera el hecho de que el recubrimiento de plástico existe. Por lo tanto, queda excluida su clasificación en la partida 5907. Como el recubrimiento de plástico tiene estructura celular, queda excluido de la clasificación en la partida 5903 y debe clasificarse en la partida 3921.
>
> Al tratarse de láminas de plástico celular fabricadas de otros plásticos, a las mercancías importadas se les ha de asignar el código 3921 1900 990. La base legislativa para esta clasificación se encuentra en la nota 2) a) 5) del capítulo 59 del Arancel Aduanero.
>
> La Oficina Principal de Aduanas de Bremen está segura de que las constataciones del ZPLA de Hamburgo sobre la composición material de las mercancías son correctas.
>
> Se han expedido muchas más decisiones aduaneras vinculantes [IAV] en relación con mercancías comparables (material oscurecedor)."

7.252 Para llegar a la conclusión de que los productos en cuestión debían clasificarse en la partida 3921, la Oficina Principal de Aduanas de Bremen se basó, entre otras cosas, en una decisión emitida por el ZPLA de Hamburgo, de fecha 3 de febrero de 2003, concerniente a una "protesta" interpuesta por Bautex.[604] La decisión del ZPLA de Hamburgo (la "decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo") dice en su parte pertinente que:

> "Según el dictamen pericial, el recubrimiento no consiste en aceite endurecido; no obstante, el espectro infrarrojo indica la presencia en el extracto de rastros de aceite y ésteres polialílicos. Ahora bien, es probable que el principal elemento del recubrimiento sea acrilato, según el espectro infrarrojo. ...

---

documentales no afectan al fondo de las constataciones del Grupo Especial relativas a la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas.

[604] Carta de la Oberfinanzdirektion de Hamburgo a la Oficina Principal de Aduanas (HZA) de Bremen relativa a la Protesta de Bautex-Stoffe GmbH, 3 de febrero de 2003 (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 41). De la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen se desprende con claridad que éste órgano se basó en el dictamen del ZPLA de Hamburgo, así como en "otros tres dictámenes sobre el mismo asunto": Hauptzollamt Bremen, Carta de Decisión a Bautex-Stoffe GmbH relativa a la clasificación de forros opacos para cortinas, 29 de septiembre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 23).

> Existe una serie de vZTA[605] relativas a diversos materiales oscurecedores ... en los que el plástico celular estaba recubierto de una capa sintética, en la que se puede ver un poco de tundizno y que corresponde a la mercancía en cuestión. De esas vZTA, la 55/03 sirve muy bien de base de comparación porque el solicitante presentó los mismos documentos que Bautex-Stoffe GmbH en su escrito de protesta. Me refiero a las cartas de la Oficina de Aduanas belga según las cuales un producto de la empresa Rockland Industries se clasificó en la subpartida 5907 000 90. El hecho de utilizar los mismos documentos a efectos de clasificación en todos los casos da más peso a la sospecha de que los documentos no corresponden necesariamente a la mercancía ...
>
> Una diferencia importante reside en el hecho de que, en el caso de la vZTA 55/03, el tejido es denso mientras que en la mercancía objeto de examen no lo es. ...
>
> Como el producto en cuestión consiste en un plástico celular, me reafirmo en mi dictamen propuesto de que [la subpartida] 3921 19 es la apropiada."

7.253 La declaración jurada del Sr. Mark Berman, Director Ejecutivo de Rockland Industries, citada en el párrafo 7.250 *supra*, decía que los productos que fueron objeto de la clasificación en el dictamen pericial de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen y en la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo eran idénticos en todos los aspectos sustanciales a los que fueron objeto de una carta de clasificación del ZPLA de Hamburgo en 1998 concerniente a una "protesta" presentada por Ornata GmbH (la "carta dirigida a Ornata expedida por el ZPLA de Hamburgo").[606] En la carta a Ornata expedida por el ZPLA de Hamburgo,[607] los productos en cuestión se describieron en los siguientes términos:

> "Según ha podido constatar el ZPLA, la mercancía analizada muestra bajo lente de aumento fibras aisladas en la superficie; no existe una capa ligada. No existe un recubrimiento del tejido con una capa delgada de tundiznos. Como el tratamiento superficial (flocado con fibras sueltas) no es perceptible a simple vista, cabe descartar la clasificación de la mercancía en la partida 5907 según lo dispuesto en las letras a) y c) de la nota 5 del capítulo 59.
>
> ...
>
> En este caso concreto, el ZPLA determinó la siguiente composición de la mercancía: tejido blanco hecho de poliéster/algodón, que por un lado está revestido de plástico celular (y tundiznos) con la capa formada por -tela blanca (0,20 mm de espesor)- capas de plástico celular blanco/negro/blanco fabricado de poliacrilato con aditivos (0,20 mm de espesor)- tundiznos. El tejido hilado no es denso y no ha sido sometido a otro tratamiento. Según la definición citada, la tela blanca constituye simplemente una base a efectos de soporte. En consecuencia, la mercancía está excluida de la partida 5903, con arreglo a la nota 2 a) 5) del capítulo 59, y debe clasificarse en el capítulo 39.
>
> ...

---

[605] El Grupo Especial entiende que la sigla alemana "vZTA" (verbindliche Zolltarifauskunft) se corresponde a la sigla española "IAV".

[606] Declaración jurada de Mark R. Berman, Presidente y Director Ejecutivo de Rockland Industries, Inc., 10 de noviembre de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 79).

[607] Carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo -Waltershof a ORNATA GmbH en respuesta a una protesta relativa a clasificación, 29 de julio de 1998 (Estados Unidos - Prueba documental 50).

> Según su dictamen, expresado en su carta ..., un recubrimiento de la mercancía con polvo de tundizno es perceptible a simple vista, mientras que el ZPLA determinó que las fibras de polvo de tundizno eran perceptibles únicamente bajo lente de aumento.
>
> La expresión "perceptible a simple vista" significa, según la jurisprudencia establecida, que la impregnación, recubrimiento o revestimiento del tejido ha de ser perceptible directamente en una sencilla inspección ocular ...
>
> Dado que se precisa una lente de aumento para poder determinar fibras de polvo de tundiznos, el revestimiento del tejido con polvo de tundizno, por lo tanto, no es perceptible a simple vista. Según las características y rasgos objetivos, que se especifican en el texto de las partidas arancelarias en el Arancel Aduanero Común y en las notas de las secciones o capítulos, se desprende que no es posible la clasificación en la partida 5907 ..." (subrayado en el original).

7.254 Las Comunidades Europeas sostienen que los productos clasificados por las autoridades aduaneras en el Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica, por un lado, y las autoridades aduaneras en Alemania, por el otro, no eran idénticos en importantes aspectos y, por lo tanto, se tenían que clasificar de forma diferente.[608] Al ocuparse de este argumento, el Grupo Especial señala que su cometido en este caso no es determinar la clasificación correcta en el marco del Arancel Aduanero Común de los productos objeto de examen por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica, por un lado, y las autoridades aduaneras de Alemania, por el otro. Nuestra tarea consiste en determinar si la divergencia en la clasificación arancelaria respecto de esos productos demuestra la aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Al emprender esta tarea, nos concentraremos en determinar si existió o no una base objetivamente justificable para que las autoridades aduaneras alemanas consideraran que los productos objeto de clasificación por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica eran diferentes de los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras alemanas. De no ser así, se tendería a indicar la existencia de aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

> Características físicas de los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica, por un lado, y las autoridades aduaneras de Alemania, por el otro

7.255 En cuanto a los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica, el Grupo Especial señala que la IAV presentada por los Estados Unidos indica que los productos clasificados por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos son todos ellos productos textiles revestidos de una capa de tundizno.[609] Además, si se lee junto a la declaración jurada del Sr. Mark Berman, Director Ejecutivo de Rockland Industries, la decisión pertinente del ZPLA de Hamburgo indica que los productos clasificados por las autoridades aduaneras de Bélgica eran todos ellos productos textiles que llevaban tundiznos.[610]

---

[608] Véase, por ejemplo, la Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 117, y Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 16.

[609] Véase el párrafo 7.249 *supra*.

[610] Véase el párrafo 7.250 *supra*. En el Sistema Armonizado (partida 5603) se define que "tundizno" consiste en fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (seda, lana, algodón, fibras artificiales, etc.). Se obtiene como desperdicio durante diversas operaciones de acabado y, en particular, del cizallado de terciopelos. También se produce al cortar estopas o fibras textiles. El polvo textil se obtiene como desperdicio, o convirtiendo fibras textiles en polvo mediante la molienda. Los tundiznos y polvos textiles están

7.256 En cuanto a los productos clasificados por las autoridades aduaneras alemanas, el Grupo Especial señala que las únicas pruebas aportadas que arrojan luz sobre las características físicas de esos productos son el dictamen pericial de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen[611], la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo[612], la carta de Ornata expedida por el ZPLA de Hamburgo[613] y la declaración jurada del Sr. Mark Berman, Director Ejecutivo de Rockland Industries, relativa a productos fabricados por Rockland Industries.[614]

7.257 Se desprende con claridad de los extractos del dictamen pericial de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen consignados en el párrafo 7.251 *supra*, que, a diferencia de las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica, esa Oficina no caracterizó los productos como productos textiles. Los productos se describieron como "láminas de plástico celular". La Oficina Principal de Aduanas de Bremen explicó que los productos también constaban de un elemento de tejido, pero que ese elemento "se ha de considerar simplemente un substrato" y "sirve únicamente de soporte".

7.258 Al igual que el dictamen pericial de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen, la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo también parecía caracterizar los productos en cuestión como un plástico. En particular, en esta decisión consignada en el párrafo 7.252 *supra*, el ZPLA de Hamburgo describió que el producto era predominantemente un "acrilato"[615] y consistía en un "plástico celular". El ZPLA de Hamburgo pareció reconocer la presencia de elementos textiles. Por ejemplo, esa entidad se refirió a "rastros de ... ésteres polialílicos" y "un poco de tundizno". Ahora bien, el ZPLA de Hamburgo consideró que el tejido en cuestión no era suficientemente "denso" para justificar la clasificación del producto en la partida 5907 (o sea, como producto textil).

7.259 Según la carta de Ornata expedida por el ZPLA de Hamburgo que se consigna en el párrafo 7.253 *supra*, los productos que fueron objeto de clasificación se consideraron tundidos, compartiendo así un importante rasgo con los productos objeto de clasificación por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica. Ahora bien, a diferencia de estas autoridades, el ZPLA de Hamburgo estimó que ese tundizno no era suficiente para justificar la clasificación en la partida 5907 porque las "fibras de polvo de tundiznos" no eran "perceptibles a simple vista". El ZPLA de Hamburgo declaró asimismo que el elemento de tejido del producto en cuestión constituía "simplemente una base a efectos de soporte".

7.260 Se desprende que los productos que fueron objeto de clasificación en el dictamen pericial de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen y en la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de

---

comprendidos en esta partida incluso si están blanqueados o teñidos o si las fibras han sido rizadas artificialmente.

[611] Hauptzollamt Bremen, Carta de decisión dirigida a a Bautex-Stoffe GmbH relativa a la clasificación de forros opacos para cortinas, 29 de septiembre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 23).

[612] Carta de la Oberfinanzdirektion de Hamburgo a la Oficina Principal de Aduanas (HZA) de Bremen relativa a la Protesta de Bautex-Stoffe GmbH, 3 de febrero de 2003 (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 41).

[613] Carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo-Waltershof a ORNATA GmbH en respuesta a una protesta relativa a clasificación, 29 de julio de 1998 (Estados Unidos - Prueba documental 50).

[614] Declaración jurada de Mark R. Berman, Presidente y Director Ejecutivo de Rockland Industries, Inc., 10 de noviembre de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 79).

[615] El término "*acrylate*" (acrilato) se define como "*a salt or ester of acrylic acid*" (sal o éster del ácido acrílico": The New Shorter English Dictionary, 1993, página 21.

Hamburgo fueron fabricados por Rockland Industries y eran idénticos.[616] Está menos claro que los productos que fueron objeto de clasificación por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen y en la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo fueran idénticos a los productos que fueron objeto de clasificación en la carta de Ornata expedida por el ZPLA de Hamburgo. A este respecto, recordamos que, en su declaración jurada, el Sr. Mark Berman declara que el producto que fue objeto de clasificación en la carta de Ornata expedida por el ZPLA de Hamburgo era "idéntico en todos los aspectos sustanciales al producto vendido a [Bautex] por Rockland".[617] Los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba en apoyo de la afirmación del Sr. Berman de que los productos que fueron objeto de clasificación en la carta de Ornata expedida por el ZPLA de Hamburgo eran "idénticos en todos los aspectos sustanciales" a los que fueron objeto de clasificación por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen y en la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo. A este respecto, el Grupo Especial señala que la apreciación del Sr. Berman de lo que es sustancial puede ser diferente de los asuntos que son pertinentes a los efectos de determinar si la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas en las Comunidades Europeas equivale o no a aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.261 En cualquier caso, el Grupo Especial señala que en las tres decisiones de las autoridades aduaneras alemanas no se consideró que los elementos textiles/tela/tundizno de los productos que fueron objeto de clasificación eran significativos y/o perceptibles a simple vista, lo que parece chocar con las características físicas de los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica. A este respecto, el Grupo Especial recuerda que los Estados Unidos se han referido a una declaración jurada del Sr. Mark Berman, Director Ejecutivo de la empresa cuyos productos fueron objeto de clasificación por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen y por el ZPLA de Hamburgo respecto de la decisión sobre Bautex.[618] El Grupo Especial reconoce que esa declaración jurada indica que los productos que fueron objeto de clasificación por esas dos autoridades aduaneras alemanas eran "productos recubiertos" que llevaban "tundiznos". Ahora bien, como sostuvieron las Comunidades Europeas durante las actuaciones del Grupo Especial[619], la declaración jurada no trata de la cuestión de si los productos que obraban en poder de las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica eran, de hecho, idénticos a los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras alemanas. Desde luego, al Grupo Especial no se le ha presentado ninguna prueba que demuestre que los productos en cuestión eran, de hecho, idénticos.

7.262 Por lo que se refiere al dictamen de la Secretaría de la OMA a que se remiten los Estados Unidos, en el que ese órgano sugirió que los productos que eran objeto de clasificación en ese caso eran clasificables en la partida 5907 (o sea, una partida diferente de la que sirvió de base a las

[616] La decisión emitida por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen señala específicamente que los productos objeto de clasificación fueron fabricados por Rockland Industries: Hauptzollamt Bremen, Carta de decisión dirigida a Bautex-Stoffe GmbH relativa a la clasificación de forros opacos para cortinas, 29 de septiembre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 23). Como se señala en el párrafo 7.252 *supra*, para adoptar su decisión de que los productos en cuestión debían clasificarse en la partida 3921, la Oficina Principal de Aduanas de Bremen se basó, entre otras cosas, en la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo.

[617] Declaración jurada de Mark R. Berman, Presidente y Director Ejecutivo de Rockland Industries, Inc., 10 de noviembre de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 79).

[618] Declaración jurada de Mark R. Berman, Presidente y Director Ejecutivo de Rockland Industries, Inc., 10 de noviembre de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 79).

[619] Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 16.

autoridades aduaneras alemanas),[620] el Grupo Especial señala que no hay pruebas convincentes en ese dictamen que indiquen que los productos objeto del dictamen de la Secretaría de la OMA tuvieran las mismas características físicas fundamentales que las que poseían los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras alemanas. En particular, la Secretaría de la OMA describió los productos en cuestión de la siguiente forma:

> "[E]l producto en litigio parecería ser tejido compuesto por 70 por ciento poliéster y 30 por ciento algodón, que está recubierto en un lado, en una operación de tres pasadas, de tres capas de una mezcla de espuma de arcilla, dióxido de titanio, negro de humo, agente ignífugo, material acrílico y tundiznos. La capa más próxima al tejido es un plástico celular acrílico. La capa intermedia está compuesta principalmente de dióxido de titanio con negro de humo. La capa exterior está compuesta de un plástico celular acrílico con fibras de tundiznos de algodón. El tejido, que se utiliza para confeccionar los forros opacos para cortinas, representa el 24,7 por ciento del forro opaco, y el recubrimiento el 75,3 por ciento.
>
> ...
>
> [P]odría argumentarse que el producto en litigio, consistente en un tejido que no está elaborado ni trabajado, y que está teñido y recubierto uniformemente de plástico celular, debería clasificarse en la partida 39.21 en virtud de la Nota 2 a) 5) del capítulo 59.
>
> No obstante, a juzgar por la información presentada y la muestra suministrada, este producto no es simplemente un tejido estratificado con plástico celular. También lleva una capa intermedia compuesta principalmente de dióxido de titanio y negro de humo, y además la capa externa visible consta de tundizno de algodón que reviste completamente al plástico celular acrílico.
>
> ...
>
> [E]s el dióxido de titanio y el negro de humo los que confieren a este producto sus propiedades opacas (oscurecedoras), mientras que el tundizno de algodón reviste la superficie exterior del tejido, impidiendo que la capa de plástico acrílico se pegue y dando al tejido un tacto similar al de un tejido de terciopelo.
>
> La Secretaría comparte la opinión de su Administración de que no se puede desestimar la importancia de estas capas suplementarias, dada la utilización a la que se destinará este producto textil (fabricación de forros para cortinas opacas).
>
> La Secretaría también puede estar de acuerdo con usted en que el producto en litigio puede compararse a un tejido recubierto del tipo descrito en la página 1.036 de las Notas explicativas en la nota G) 1), y por ello la Secretaría se inclinaría a clasificarlo en la partida 59.07 por aplicación de la Regla 1 para la interpretación."

7.263 Parecería que los productos objeto de examen por la Secretaría de la OMA comprendían tejido estratificado con plástico celular. Además, el producto en cuestión incluía una capa externa visible (perceptible) consistente en tundizno de algodón, que revestía completamente al plástico

[620] Carta del Sr. Chriticles Mwansa, Director, Organización Mundial de Aduanas, Dirección de Asuntos Arancelarios y Comerciales, al Sr. Myles B. Harmon, Director de la Oficina de Reglamentos y Resoluciones del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, 26 de octubre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 24).

celular acrílico. Como ya se ha señalado, los productos que fueron objeto de clasificación por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen y en la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo se caracterizaron como predominantemente plásticos en lugar de textiles, lo que podría aducirse que les distingue de los productos objeto de examen por la Secretaría de la OMA. Asimismo, los productos que fueron objeto de clasificación en la carta de Ornata expedida por el ZPLA de Hamburgo se caracterizaron por poseer "fibras de polvo de tundiznos" que no eran "perceptibles a simple vista". Una vez más, podría argüirse que la falta de una capa perceptible de tundiznos les distingue de los productos examinados por la Secretaría de la OMA. Efectivamente, el dictamen de la Secretaría de la OMA, aunque no es vinculante, parece sugerir que, en ausencia de una capa externa perceptible de tundizno de algodón que revista al plástico celular acrílico (lo que aparentemente caracterizaba a los productos objeto del dictamen de la Secretaría de la OMA), los productos habrían sido clasificables en la partida 3921.

7.264 Basándose en las pruebas limitadas que obran en poder del Grupo Especial, éste puede únicamente suponer que los productos que fueron objeto de clasificación por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen, en la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo y en la carta de Ornata expedida por el ZPLA de Hamburgo, no eran idénticos a los que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica. Esto indica al Grupo Especial que existía una base objetivamente justificable en la que se fundaron las autoridades aduaneras alemanas para considerar que los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica eran distintos de los productos que fueron objeto de clasificación por las autoridades aduaneras alemanas.

7.265 Por lo tanto, el Grupo Especial no considera que las *decisiones* divergentes relativas a la clasificación arancelaria de las autoridades aduaneras alemanas, por una parte y, por la otra, de las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica equivalen a aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Como ya se ha dicho, consideramos que, basándose en las pruebas limitadas que obran en poder del Grupo Especial, existía una base fáctica objetiva que justifica la decisión de las autoridades aduaneras alemanas de clasificar el producto en cuestión de manera diferente de la de las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica. No obstante, el Grupo Especial señala que los Estados Unidos han impugnado también implícitamente el *proceso administrativo* que dio lugar a decisiones de clasificación divergentes en relación con los forros opacos para cortinas.[621] Examinamos ese proceso inmediatamente a continuación.

Proceso administrativo conducente a decisiones de clasificación arancelaria del producto en cuestión de las autoridades aduaneras alemanas

7.266 El Grupo Especial recuerda su constatación de que el término "aplicar" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de las leyes y reglamentos, incluidos los procesos administrativos. En opinión del Grupo Especial, el proceso administrativo conducente a una decisión de clasificación arancelaria, como la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas, constituye un acto de aplicación en el sentido el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Además, equivale a un caso de aplicación del Arancel Aduanero Común en la esfera de la clasificación arancelaria, asunto que queda comprendido en el ámbito del mandato del Grupo Especial.

La ayuda interpretativa alemana

7.267 En opinión del Grupo Especial, un sistema de administración de aduanas que permite o, al menos, no impide que las autoridades aduaneras se basen unilateralmente para desempeñar sus

[621] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 71 y 72.

funciones en ayudas interpretativas que no están previstas en las reglas vinculantes aplicables a todas las autoridades aduaneras, como en las Comunidades Europeas, podría conducir a la aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en determinadas circunstancias.

7.268 La decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo se refiere explícitamente a una ayuda interpretativa que era propia de Alemania.[622] En concreto, esa decisión se refiere a una nota del capítulo 59 del Arancel titulada "Erl. Zu Kap. 59 NEH Rz. 02.0 ff".[623] Cabe señalar que la ayuda interpretativa enuncia criterios cuya finalidad es determinar si el elemento textil de un producto es o no es un simple soporte de conformidad con la nota 2 a) 5) del capítulo 59 del Arancel Aduanero Común. La ayuda interpretativa enuncia, entre otras cosas, que para determinar si el elemento textil de un producto es o no es un simple soporte, es necesario considerar si el tejido en cuestión tiene "una trama densa". En este criterio parecen haberse basado las autoridades aduaneras alemanas en las tres decisiones que nos han sido presentadas.

7.269 En particular, como ya se ha señalado anteriormente, la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo se refiere explícitamente a una ayuda interpretativa que era propia de Alemania y seguidamente afirma que "el tejido no es denso en la mercancía objeto de examen".[624] Dicho de otro modo, el ZPLA de Hamburgo pareció establecer una correlación entre el criterio de la "densidad de la trama" de la ayuda interpretativa alemana y el criterio de la densidad del tejido. En este criterio de densidad se basó también la Oficina Principal de Aduanas de Bremen[625] y el ZPLA de Hamburgo respecto del dictamen relativo a Ornata.[626]

7.270 Cabe destacar que la ayuda interpretativa a la que recurrieron las autoridades aduaneras alemanas en cada uno de estos casos no figura en los capítulos pertinentes del Arancel Aduanero Común, a saber, los capítulos 39 y 59.[627] Las Comunidades Europeas sostienen que el criterio de la densidad del tejido se formuló en cumplimiento del Reglamento (CE) Nº 1458/97 de la Comisión.[628] Como las propias Comunidades Europeas explican, ese reglamento concernía a la clasificación de prendas de vestir. El Grupo Especial considera difícil conciliar el hecho de que un producto que las dos autoridades aduaneras alemanas en cuestión (es decir, la Oficina Principal de Aduanas de Bremen y el ZPLA de Hamburgo respecto de la decisión sobre Bautex) consideraron predominantemente plástico fuera clasificado por esas autoridades aduaneras a tenor de una ayuda interpretativa elaborada por analogía a un reglamento relativo a productos textiles. Además, incluso si el criterio de la densidad del tejido equivaliera a lo que las Comunidades Europeas describen como una "ayuda

---

[622] Las Comunidades Europeas no discuten que la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo estaba basada, al menos en parte, en una ayuda interpretativa que era propia de Alemania: Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 343.

[623] Esta nota figura en "National Decisions and Indications accompanying Chapter 59 of the German Tariff Schedule" (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 43).

[624] Véase el párrafo 7.252 *supra*.

[625] En particular, la Oficina Principal de Aduanas de Bremen declara que "[e]l tejido no es denso". Véase el párrafo 7.251 *supra*.

[626] La decisión sobre Ornata emitida por el ZPLA de Hamburgo declara que "[e]l tejido hilado no es denso": Véase el párrafo 7.253 *supra*.

[627] A este respecto, véanse los párrafos 7.175 y 7.176 *supra*.

[628] Reglamento (CE) Nº 1458/97 de la Comisión relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (CE - Prueba documental 78).

puramente interpretativa preparada con fines administrativos que no tiene ninguna fuerza de ley, y que no se desvía del derecho comunitario"[629], el Grupo Especial señala que el criterio parece haber desempeñado un papel fundamental para las autoridades aduaneras alemanas al decidir cómo clasificar los productos en cuestión.[630]

7.271 No se ha presentado ninguna prueba al Grupo Especial que indique que algún otro Estado miembro esté recurriendo a una ayuda parecida a la utilizada por las autoridades aduaneras alemanas respecto de la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas. Además, la ayuda interpretativa en la que se basaron las autoridades aduaneras alemanas no figura en los capítulos pertinentes del Arancel Aduanero Común.[631] Además, la ayuda interpretativa alemana al parecer ha tenido ya repercusiones en la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas en las Comunidades Europeas y puede seguir teniéndolas en el futuro. Esos factores demuestran que el hecho de que las autoridades aduaneras alemanas se basaran en la ayuda interpretativa en cuestión equivale a una aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Decisiones de clasificación arancelaria en otros Estados miembros

7.272 A guisa de observación, un sistema de administración aduanera que no *exige* que las autoridades aduaneras consulten las decisiones adoptadas por otras autoridades aduaneras que actúan en el seno del mismo sistema y/o la cooperación entre autoridades aduaneras antes de que se adopten decisiones aduaneras, como ocurre en las Comunidades Europeas, podría conducir a una aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en determinadas circunstancias.[632]

7.273 En el presente caso, el Grupo Especial también señala que, aunque la Oficina Principal de Aduanas de Bremen reconoció la existencia de "numerosas decisiones arancelarias aduaneras vinculantes … emitidas en relación con mercancías comparables"[633], sin ninguna explicación, procedió a declarar que "no ve motivo para revocar la Notificación de Modificación del Impuesto impugnada". Igualmente en la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo, la autoridad aduanera alemana se remitió a una decisión de clasificación de la autoridad aduanera belga pero la distinguió basándose en que "[e]l hecho de utilizar los mismos documentos a efectos de clasificación

[629] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 334 en donde se hace referencia a la Prueba documental 79 presentada por las CE, párrafo 19.

[630] A este respecto, el Grupo Especial señala que las Comunidades Europeas sostienen que no se impide a las autoridades aduaneras de los Estados miembros emitir directrices administrativas y otros documentos no vinculantes a efectos administrativos. No obstante, el TJCE ha confirmado que esas medidas no pueden modificar de ningún modo la aplicación del derecho comunitario: Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 157 del Grupo Especial.

[631] A este respecto, el Grupo Especial señala que las Comunidades Europeas sostienen que los Estados miembros sólo pueden actuar para complementar disposiciones contenidas en el derecho comunitario si han sido autorizados específicamente a hacerlo o si una cuestión específica no está prevista en el derecho comunitario: Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 157 del Grupo Especial. En el caso de la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas, el Grupo Especial señala que parece estar prevista en el Arancel Aduanero Común. Asimismo, no se ha aportado ninguna prueba al Grupo Especial que indique que los Estados miembros han sido autorizados específicamente a complementar el Arancel Aduanero Común en relación con la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas.

[632] A este respecto, véase el párrafo 7.177 *supra*.

[633] Hauptzollamt Bremen, Carta de Decisión a Bautex-Stoffe GmbH, 22 de septiembre de 2004 (original y traducción al inglés) ("Decisión sobre Bautex-Stoffe") (Estados Unidos - Prueba documental 23).

en todos los casos da más peso a la sospecha de que los documentos no corresponden necesariamente a la mercancía."[634]

7.274 El Grupo Especial es de la opinión que la omisión por parte de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen de tener en cuenta "numerosas decisiones arancelarias aduaneras vinculantes … emitidas en relación con mercancías comparables" o, como mínimo, de explicar por qué se consideraron improcedentes para la clasificación en cuestión no es compatible con la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial considera que le incumbía incluso más a la Oficina Principal de Aduanas de Bremen presentar esas explicaciones habida cuenta del hecho de que Bautex-Stoffe GmbH -la empresa que solicitó la revisión de la clasificación de productos a la Oficina Principal de Aduanas de Bremen- objetó en numerosas ocasiones la clasificación de los productos en la partida 3921 basándose en que las mercancías consistían en un tejido compuesto por poliéster y lana, recubierto de acrílico y tundido con fibras de algodón[635] y porque a la Oficina Principal de Aduanas de Bremen le constaba claramente la existencia de decisiones de clasificación de otras autoridades aduaneras sobre "mercancías comparables". Por las mismas razones, el Grupo Especial considera que fue improcedente que la autoridad aduanera alemana en la decisión sobre Bautex emitida por el ZPLA de Hamburgo desestimara la clasificación arancelaria de las autoridades aduaneras belgas sobre la base de una simple "sospecha" de que los documentos presentados para la clasificación de esos productos por las autoridades aduaneras belgas no se correspondían con los propios productos.[636]

7.275 De hecho, es posible que si la consideración por las autoridades aduaneras alemanas de decisiones de clasificación sobre los forros opacos para cortinas emitidas por autoridades aduaneras de otros Estados miembros hubiera trascendido de la simple referencia superficial que sus decisiones demuestran, la clasificación de los productos que obraban en poder de las autoridades aduaneras alemanas tal vez no habría sido diferente de la clasificación de los productos por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Bélgica. En opinión del Grupo Especial, la aparente omisión por parte de las autoridades aduaneras alemanas de considerar seriamente las decisiones sobre los forros opacos para cortinas de otras autoridades aduaneras puede haber tenido repercusiones y puede seguir teniéndolas en el futuro para el comercio de los forros opacos para cortinas en las Comunidades Europeas.[637] Esos factores demuestran que el trato por las autoridades

[634] Carta de la Oberfinanzdirektion de Hamburgo a la Oficina Principal de Aduanas (HZA) de Bremen relativa a la Protesta de Bautex-Stoffe GmbH, 3 de febrero de 2003 (original y traducción al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 41).

[635] Así se desprende claramente de la página 2 de Hauptzollamt Bremen, Carta de Decisión dirigida a Bautex-Stoffe GmbH, 22 de septiembre de 2004 (original y traducción al inglés) ("Decisión sobre Bautex-Stoffe") (Estados Unidos - Prueba documental 23) que se refiere a cartas de fecha 2 de mayo de 2001, 25 de agosto de 2001, 22 de agosto de 2002 y 14 de mayo de 2003.

[636] Respecto de su carta relativa a Ornata, el ZPLA de Hamburgo declara que: "En su carta de protesta de 18/12/1997 menciona usted que las autoridades financieras de Bruselas adoptaron una serie de decisiones fundamentales en relación con mercancías del código 5907 0090 900. Le ruego me informe de los números de los documentos y las fechas de las decisiones, si le constan. Si tiene usted más información y recibos que muestren que mercancías idénticas fueron tratadas de manera diferente en otros países de la UE (o sea, una clasificación distinta de la partida 3921), sírvase enviarme los documentos para poder aclarar la situación.": Carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo-Waltershof a ORNATA GmbH en respuesta a una protesta relativa a clasificación (29 de julio de 1998), página 2 (Estados Unidos - Prueba documental 50). No se ha aportado ninguna prueba al Grupo Especial que sugiera que no se presentó la documentación sobre mercancías idénticas solicitada por el ZPLA de Hamburgo y/o que el ZPLA de Hamburgo no tuvo en cuenta esa documentación.

[637] Por ejemplo, las repercusiones pueden consistir en la desviación del comercio a Estados miembros distintos de Alemania debido a los procesos administrativos aplicados por al menos algunas autoridades aduaneras en Alemania con respecto a la clasificación aduanera de los forros opacos para cortinas.

alemanas de decisiones de clasificación sobre los forros opacos para cortinas emitidas por otras autoridades aduaneras equivale a una aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Conclusión

7.276 Para concluir, el Grupo Especial considera que el proceso administrativo conducente a la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial considera que los actos de aplicación no uniforme que ocurrieron entre 1999 y 2002 respecto de la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas siguen teniendo un efecto potencial. En particular, las autoridades aduaneras alemanas pueden basarse en una ayuda interpretativa particular de Alemania al decidir cómo clasificar los forros opacos para cortinas mientras que, aparentemente, las autoridades aduaneras de otros Estados miembros no se basan en la misma ayuda. Además, las autoridades aduaneras alemanas no están obligadas a remitirse a las decisiones de otras autoridades aduaneras al clasificar los forros opacos para cortinas, incluso en casos en que haya una posibilidad de que los productos objeto de esas decisiones sean los mismos o similares. Por lo tanto, el Grupo Especial constata una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 respecto de la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas.

v) Clasificación arancelaria de los monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital (DVI)

Resumen de los argumentos de las partes

Pruebas de divergencia en la clasificación

7.277 Los **Estados Unidos** mencionan un caso relacionado con una IAV para la clasificación de los monitores planos de cristal líquido (LCD) con DVI. Los Estados miembros observan que, hasta 2004, las autoridades aduaneras de los Estados miembros clasificaban sistemáticamente los monitores LCD con DVI como "monitores de ordenador", en la partida 8471 del Arancel Aduanero Común ("Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades …"). Los Estados Unidos sostienen que, no obstante, en 2004 las autoridades aduaneras de los Países Bajos empezaron a clasificar las mercancías como "videomonitores", de la partida 8528 del Arancel Aduanero Común ("Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; videomonitores y videoproyectores"). Los Estados Unidos afirman que esta cuestión se señaló a la atención del Comité del Código Aduanero. Según los Estados Unidos, el Comité del Código Aduanero no resolvió de modo definitivo la cuestión de la clasificación, pero en marzo de 2005 el Consejo de la Unión Europea promulgó un Reglamento que resolvía provisionalmente el problema para algunos de estos monitores (los monitores con una medición diagonal de pantalla no superior a 19 pulgadas y formato 4:3 o 5:4). No obstante, los Estados Unidos sostienen que este Reglamento se limita a suspender los derechos aplicados a este subconjunto de monitores hasta el 31 de diciembre de 2006, y deja sin resolver la clasificación de los monitores con una medición diagonal superior a 19 pulgadas, que un Estado miembro por lo menos (los Países Bajos) sigue clasificando como videomonitores.[638] Según los Estados Unidos, los productos que superan el umbral definido en el Reglamento del Consejo siguen estando sometidos a derechos con arreglo a la clasificación que les atribuyan las autoridades aduaneras de los diferentes Estados miembros.[639]

[638] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 74, en el que se hace referencia al Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 28).

[639] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4 del Grupo Especial.

7.278 Las **Comunidades Europeas** responden que la clasificación correcta de los monitores de referencia es una cuestión relativamente reciente, que se planteó debido a la creciente convergencia entre la tecnología de la información y la electrónica de consumo. Muchos monitores LCD, en razón de su diseño y de sus características técnicas, pueden servir a la vez de monitores de ordenador y de videomonitores. Por consiguiente, las Comunidades Europeas sostienen que a las autoridades aduaneras les resulta difícil establecer con un criterio objetivo el propósito exacto al que se destina un monitor en particular.[640] Las Comunidades Europeas observan que existen muchos tipos distintos de monitores LCD en el mercado que se diferencian entre sí en varios aspectos, como el tamaño, las interfaces que poseen, las señales que pueden procesar y el diseño general. Según las Comunidades Europeas, en la medida en que estas características pueden tener consecuencias para su uso, quizás debieran tenerse en cuenta también las diferencias entre los distintos tipos de monitores.[641] Las Comunidades Europeas sostienen que las pruebas aportadas por los Estados Unidos en abono de sus alegaciones no demuestran que exista un problema de aplicación no uniforme que contradiga las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sino que se trata más bien de una cuestión en vías de solución. A este respecto, las Comunidades Europeas sostienen que la cuestión de la clasificación de estos monitores está siendo examinada actualmente, y que en un futuro próximo se someterán al Comité del Código Aduanero las medidas pertinentes.[642]

Medidas adoptadas por las Comunidades Europeas para resolver la divergencia en la clasificación

7.279 Las **Comunidades Europeas** observan que el Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005, suspende temporalmente, hasta el 31 de diciembre de 2006, los derechos aplicados a los videomonitores con una medición diagonal de pantalla no superior a 48,5 cm y formato 4:3 o 5:4.[643] Las Comunidades Europeas explican que la finalidad de esta medida consiste en proporcionar a los importadores interesados una mayor certidumbre acerca del trato arancelario, durante un período de transición. Esta suspensión se limitó a los monitores que, por razón de su tamaño, reúnen más probabilidades que los monitores más grandes de ser utilizados como monitores de ordenador. La suspensión temporal de los derechos se prefirió a la reglamentación de la clasificación porque, según las Comunidades Europeas, permite mantener en observación la evolución tecnológica y comercial de este sector del mercado.[644] Las Comunidades Europeas explican que, desde un punto de vista práctico, la suspensión de los derechos cumple exactamente la misma finalidad que un reglamento sobre la clasificación. La suspensión garantiza a los comerciantes que sus mercancías recibirán el mismo trato arancelario independientemente de que estén clasificadas en la partida 8471 o en la 8528. Las Comunidades Europeas observan que la asociación de la rama de producción correspondiente se ha referido en los términos siguientes al Reglamento Nº 493/2005: "Una petición muy importante de suspensión que, cuando se adopte del modo propuesto, beneficiará a todos los importadores de esos productos."[645] Las Comunidades Europeas indican que, antes de que

[640] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 349.

[641] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 350.

[642] Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 15.

[643] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 356, en el que se hace referencia al Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 28).

[644] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 357.

[645] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 358, en el que se hace referencia a la Prueba documental 84 presentada por las CE.

expire la medida suspensiva, las instituciones comunitarias pasarán revista a la situación y adoptarán las medidas necesarias.[646]

7.280 Los **Estados Unidos** afirman que, ante el problema que plantea una divergencia en la clasificación, las Comunidades Europeas se han limitado a adoptar un reglamento que suspende temporalmente los derechos sobre determinados monitores LCD con DVI, independientemente de su clasificación. Los Estados Unidos observan que la suspensión temporal de derechos sólo se aplica a los monitores de un tamaño inferior a un umbral determinado. Los monitores de tamaño superior a este umbral siguen estando clasificados de un modo distinto en diferentes Estados miembros.[647] Los Estados Unidos se preguntan si la adopción de un reglamento del Consejo para regular temporalmente un subconjunto de monitores LCD, en vez de un reglamento relativo a la clasificación aprobado por el Comité del Código Aduanero, equivale a una aplicación uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Según los Estados Unidos, existe una considerable diferencia entre un reglamento que suspende un derecho y un reglamento de clasificación. El primero es una solución normativa temporal, mientras que el segundo es una determinación definitiva de una cuestión técnica. A juicio de los Estados Unidos, la capacidad del Consejo de adoptar un reglamento de suspensión de un derecho no demuestra que el sistema sea capaz de asegurar la aplicación uniforme de las normas de clasificación. Es más, el hecho mismo de que la cuestión de la clasificación permanezca sin resolver es prueba de la incapacidad del sistema de conseguir la uniformidad en este ámbito.[648] Así pues, los Estados Unidos sostienen que, como el reglamento de suspensión sólo se aplica a los monitores de un tamaño inferior a un umbral determinado y no resuelve efectivamente la cuestión básica de la clasificación de los monitores de un tamaño superior al umbral, persiste una situación de no uniformidad que acarrea graves consecuencias financieras.[649] Según los Estados Unidos, los comerciantes organizan sus actividades comerciales a largo plazo, y es probable que cuando adopten sus decisiones de transporte tengan en cuenta cuáles serán las autoridades aduaneras que concederán el trato arancelario más favorable al término de la vigencia del reglamento temporal.[650]

7.281 Las **Comunidades Europeas** dicen que los Estados Unidos parecen insinuar que las Comunidades adoptaron el Reglamento Nº 493/2005 para eludir en cierto modo la autoridad del Comité del Código Aduanero. Las Comunidades Europeas niegan este extremo, alegando que el Reglamento Nº 493/2005 fue adoptado obligatoriamente por una mayoría cualificada de los Estados miembros del Consejo, como ocurre con la opinión favorable del Comité en el procedimiento reglamentario o de gestión. En realidad, se prefirió un Reglamento del Consejo porque parecía un instrumento mejor adaptado a las circunstancias del caso.[651] Las Comunidades Europeas añaden que han adoptado otra medida pertinente, el Reglamento Nº 634/2005, que clasifica a los monitores LCD de un tipo determinado en la partida 8528. En la actualidad la Comisión se mantiene al corriente de la situación, y podría adoptar otros reglamentos clasificatorios de los monitores LCD u otras medidas pertinentes cuando sea menester.[652]

---

[646] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 357.

[647] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 17 b) del Grupo Especial.

[648] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4 del Grupo Especial.

[649] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 53.

[650] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial.

[651] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 360.

[652] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 361, en el que se hace referencia en el que se hace referencia a la Prueba documental 85 presentada por las CE.

7.282 Las Comunidades Europeas sostienen también que la referencia a la planificación a largo plazo por parte de los comerciantes no es pertinente a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Las Comunidades Europeas entienden que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige la uniformidad de la aplicación, pero no prohíbe los cambios legislativos ni protege las expectativas de los comerciantes acerca del mantenimiento de determinadas medidas. En consecuencia, la cuestión de las medidas que las Comunidades Europeas adoptarán cuando prescriba el Reglamento Nº 493/2005 para garantizar la uniformidad de la aplicación no está prejuzgada por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[653] Las Comunidades Europeas afirman que el hecho de que el Reglamento Nº 493/2005 sólo tenga validez hasta el 31 de diciembre de 2006 no le impide garantizar el trato arancelario uniforme en todos los países de las Comunidades Europeas en el momento actual. Además, antes de que prescriba esta medida las Comunidades Europeas examinarán la situación y adoptarán las medidas que sean necesarias. Las Comunidades Europeas no creen que los Estados Unidos puedan alegar la existencia de una aplicación no uniforme basándose en una simple especulación sobre la posibilidad de que las Comunidades no tomen determinadas medidas en el futuro.[654] Por consiguiente, las Comunidades Europeas entienden que el hecho de que una disposición obligue a las Comunidades a adoptar las medidas necesarias cuando prescriba el Reglamento Nº 493/2005 es irrelevante.[655]

7.283 Para las Comunidades Europeas los Estados Unidos se equivocan al afirmar que el Reglamento Nº 493/2005 no garantiza la uniformidad de la aplicación porque la medida atañe más a la suspensión de un derecho que a la clasificación de un producto. A este respecto, las Comunidades Europeas observan que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no exige la aplicación uniforme como un fin en sí mismo, sino más bien para garantizar la uniformidad del trato a los comerciantes. En consecuencia, sólo podrá sostenerse que ha habido una infracción de las disposiciones del mencionado párrafo cuando una variación de la práctica tenga repercusiones importantes para los comerciantes. En el caso de los monitores LCD comprendidos en el Reglamento Nº 493/2005 no hay ninguna diferencia en los derechos de aduana tanto si están clasificados en la partida 8471 como en la partida 8528, ya que el tipo arancelario para ambos monitores es del 0 por ciento. Tampoco en el trato hay ninguna diferencia relevante. Por consiguiente, aunque hubiera diferencias en la clasificación arancelaria de estos monitores, estas diferencias no tendrían repercusiones para los comerciantes. Las Comunidades Europeas explican que esta es la razón de que la comunidad comercial apoye tan resueltamente la medida.[656] Además, las Comunidades Europeas consideran que, aunque el Grupo Especial resolviera que existe una incompatibilidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, no podría sostenerse que esta incompatibilidad es causa de anulación o menoscabo de cualquier beneficio que corresponda a los Estados Unidos de conformidad con el mencionado párrafo. En el caso de los monitores LCD, el trato arancelario para los incluidos en el Reglamento Nº 493/2005 es uniforme, y el tipo de derecho es del 0 por ciento. Por consiguiente, en el presente caso la presunción de anulación y menoscabo de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD no es válida.[657]

---

[653] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial.

[654] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 122; observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial.

[655] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial.

[656] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 123, en el que se hace referencia a la carta en que figura la respuesta de los industriales al Reglamento Nº 493/2005 relativo a los videomonitores LCD, de 16 de noviembre de 2004 (CE - Prueba documental 84).

[657] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 124.

7.284 Los **Estados Unidos** responden que la afirmación implícita de que la comunidad comercial está satisfecha con las medidas adoptadas hasta ahora por las Comunidades Europeas con respecto a la clasificación arancelaria de los monitores LCD queda en entredicho por las recientes declaraciones de la rama de producción interesada acerca de esta cuestión. Más concretamente, en carta de septiembre de 2005 dirigida al Director de Asuntos Internacionales y Cuestiones Arancelarias de la Comisión, la asociación de la rama de producción que se ocupa de esta cuestión ("EICTA") declaró que: "[s]in esta aclaración [de la clasificación de los monitores de un tamaño superior al umbral determinado por el reglamento de suspensión del derecho] la rama de producción se encuentra en una situación inaceptable, ya que varios Estados miembros aplican las normas de clasificación de un modo incongruente, lo que coloca a algunos importadores en situación de desventaja competitiva y hace casi imposible predecir las consecuencias de las decisiones relativas al aprovisionamiento y el envío".[658] Además, en fecha tan reciente como el 6 de diciembre de 2005, EICTA comunicó a la Comisión su profunda preocupación acerca de este asunto. Según los Estados Unidos, EICTA hizo ver no sólo su desacuerdo de fondo con el reglamento propuesto por la Comisión, sino también su decepción ante el hecho de que la Comisión no la hubiera consultado ni hubiera respondido a la carta que la asociación le envió el 2 de septiembre de 2005 a este respecto.[659]

7.285 Las **Comunidades Europeas** responden que en la carta de EICTA se pedía concretamente a la Comisión que aplazara el debate sobre el reglamento relativo a la clasificación. Las Comunidades Europeas se preguntan cómo el aplazamiento de una medida que contribuiría a la uniformidad de la aplicación puede corroborar la afirmación de los Estados Unidos de que las Comunidades Europeas no hacen lo suficiente para garantizar dicha uniformidad. En cuanto a la carta de EICTA, las Comunidades Europeas sostienen que el mandato del Grupo Especial no tiene que ver con esta carta, ni con otras medidas.[660] Por último, las Comunidades sostienen que, sobre la base de las consultas en curso con las autoridades aduaneras de los Estados miembros y con la rama de producción interesada, la Comisión de las CE ha preparado un proyecto de reglamento de clasificación de los monitores LCD. Esta medida se someterá al examen del Comité del Código Aduanero en su reunión de 16 de diciembre de 2005.[661]

Opinión del Comité del Código Aduanero

7.286 Las **Comunidades Europeas** sostienen que la cuestión de la clasificación de los monitores LCD se sometió por primera vez al Comité del Código Aduanero en abril de 2004, y que desde entonces el Comité ha pasado revista regularmente a la situación. Como la cuestión de la clasificación requiere una aportación técnica de la rama de producción, el Comité, de conformidad con el artículo 9 de su Reglamento, ha escuchado las declaraciones de representantes de la rama de

[658] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 53, en el que se hace referencia al párrafo 1 de una carta de 2 de septiembre de 2005 dirigida a Manuel Arnal Monreal, Director de Asuntos Internacionales y Cuestiones Arancelarias de la Comisión Europea, por Mark MacGann, Director General de EICTA (Estados Unidos - Prueba documental 75).

[659] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial, donde se hace referencia a la carta de 6 de diciembre de 2005 dirigida a Manuel Arnal Monreal, Director de Asuntos Internacionales y Cuestiones Arancelarias de la Comisión Europea, por Mark MacGann, Director General de EICTA (Estados Unidos - Prueba documental 81).

[660] Más concretamente, las Comunidades Europeas se refieren a las Pruebas documentales 75 a 78 presentadas por los Estados Unidos.

[661] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial, donde se hace referencia al nuevo reglamento propuesto sobre los monitores LCD, de 29 de noviembre de 2005 (CE - Prueba documental 163) y al Programa del Comité del Código Aduanero, de 21 de noviembre de 2005 (CE - Prueba documental 164).

producción.[662] Las Comunidades Europeas observan que, en su 346ª reunión, celebrada del 30 de junio al 2 de julio de 2004, el Comité del Código Aduanero llegó a la conclusión de que "salvo que un importador pueda demostrar que un monitor sólo será utilizable con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos (partida 8471), o como tablero indicador (partida 8531), el monitor deberá clasificarse en la partida 8528".[663] Teniendo en cuenta lo que antecede, las Comunidades Europeas sostienen que la afirmación de los Estados Unidos según la cual los Países Bajos clasifican erróneamente a los monitores LCD como videomonitores es infundada ya que, en principio, esta clasificación está en conformidad con el Arancel Aduanero Común, como ha confirmado el Comité del Código Aduanero.[664]

7.287 Los **Estados Unidos** responden que, al sostener que la clasificación neerlandesa "está en conformidad" con el Arancel Aduanero Común, las Comunidades Europeas dan a entender que más de una clasificación podría estar "en conformidad". Según los Estados Unidos, si más de una clasificación está "en conformidad" con el Arancel Aduanero Común, las Comunidades Europeas no proporcionan un mecanismo para conciliar sistemáticamente diferentes clasificaciones adoptadas por las autoridades de distintos Estados miembros. Los Estados Unidos agregan que la conclusión del Comité del Código Aduanero, que estima que la clasificación neerlandesa está "en conformidad" con el arancel, no lo está en cambio con la nota del capítulo correspondiente del Arancel Aduanero Común. Concretamente, la conclusión del Comité prohibiría que un monitor se clasificara como monitor de ordenador en la partida 8471, salvo que el importador pudiera demostrar que "sólo será utilizable con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos"[665], o sea un ordenador. No obstante, los Estados Unidos creen que un monitor puede clasificarse, según las notas de los capítulos correspondientes, como monitor de ordenador si "es del tipo utilizado *exclusiva o principalmente* en un sistema automático para el tratamiento o procesamiento de datos".[666]

7.288 Los Estados Unidos observan además que, según el Reglamento Nº 634/2005, que clasifica los monitores de un tipo determinado en la partida 8528, "[s]e excluye su clasificación en la subpartida 8471 60 ya que no es del tipo utilizado exclusiva o principalmente en un sistema automático para el tratamiento o procesamiento de datos …".[667] Los Estados Unidos observan que el Reglamento adopta el criterio de la utilización exclusiva o principal, como se indica en la nota 5 del capítulo 84 del Arancel Aduanero Común. En cambio, el Comité del Código Aduanero llega a la conclusión de que un importador debe demostrar que "un monitor *sólo* será utilizable con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos", para clasificarlo en la partida 8471. Los Estados Unidos entienden que la conclusión del Comité del Código Aduanero, que prescinde del criterio de la utilización exclusiva o principal establecida en el Arancel Aduanero Común en favor del criterio de la sola utilización, es más negativa que positiva para la uniformidad. A juicio de los Estados Unidos, esto coloca a las autoridades de los Estados miembros frente a dos criterios

[662] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 352.

[663] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 353.

[664] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 354.

[665] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 353.

[666] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 28; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4 del Grupo Especial relativa al Reglamento Nº 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, por el que se modifica el Anexo I del Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo sobre la nomenclatura arancelaria y estadística y sobre el Arancel Aduanero Común, de 30 de octubre de 2004, página 504 (capítulo 84, nota 5 B) a)) (sin cursivas en el original) (Estados Unidos - Prueba documental 46).

[667] Reglamento (CE) Nº 634/2005 de la Comisión, de 26 de abril de 2005, relativo a la clasificación de ciertas mercancías en la Nomenclatura Combinada (CE - Prueba documental 85).

contrapuestos para clasificar a los monitores LCD con DVI para las máquinas de procesamiento automático de datos, a saber, el criterio de la utilización exclusiva o principal que figura en las notas de los capítulos del Arancel Aduanero Común, o el criterio de la sola utilización indicado en la conclusión del Comité del Código Aduanero.[668]

7.289 Las **Comunidades Europeas** responden que el Comité del Código Aduanero llegó a esta conclusión partiendo de diversas declaraciones de la rama de producción interesada. Sobre esta base, el Comité concluyó que la rama de producción no había conseguido presentar ningún criterio que determine la utilización principal.[669] Las Comunidades añaden que no entienden cuál puede ser la finalidad de las conclusiones del Comité del Código Aduanero si se limitan a repetir la terminología de la Nomenclatura Combinada. Según las Comunidades Europeas, para facilitar la aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común el Comité, sobre la base de los hechos conocidos y actuando de conformidad con el Arancel Aduanero Común, debería poder llegar a conclusiones específicas sobre la clasificación de las distintas mercancías. De este modo el Comité puede contribuir, y contribuye, a la clasificación uniforme de las mercancías en todos los países de las Comunidades Europeas.[670]

7.290 Respondiendo a su vez, los **Estados Unidos** sostienen que las conclusiones del Comité del Código Aduanero han puesto a las autoridades de los Estados miembros en el dilema de tener que decidir qué peso atribuir a dichas conclusiones, en vista del contenido aparentemente conflictivo de la nota 5 del capítulo 84 del Arancel Aduanero Común.[671] Los Estados Unidos sostienen que este dilema se refleja en los diferentes enfoques adoptados por las autoridades de los Estados miembros. Por ejemplo, en un aviso arancelario publicado en 2004, las autoridades aduaneras del Reino Unido, ateniéndose evidentemente a la conclusión del Comité del Código Aduanero, declararon que "desde octubre de 2004 los monitores LCD/TFT que incluyen un conectador DVI deberán clasificarse en el código 8528 21 90 de la Nomenclatura Combinada (NC)".[672] Así pues, a los Estados Unidos les parece que el Reino Unido se ha atenido a la opinión del Comité del Código Aduanero, clasificando a todos estos monitores en la partida 8528 independientemente de su utilización exclusiva o principal. En cuanto a los Países Bajos, los Estados Unidos creen que no se ajustan a las orientaciones del Comité del Código Aduanero por temor a las repercusiones comerciales desfavorables, y ahora aplican su propio conjunto de criterios para decidir si los monitores han de clasificarse en la partida 8528 o en la partida 8471. Concretamente, en un Decreto de julio de 2005 las autoridades aduaneras de los Países Bajos explicaron que, desde abril de 2004, los monitores LCD con DVI se clasificaban en la partida arancelaria 8528 de conformidad con un Reglamento de la Comisión relativo a los monitores de plasma. Las autoridades añadían que: "[n]o todos los Estados miembros se atienen a esta norma. Esto ha dado lugar a una desviación de la corriente comercial, que es perjudicial para la competitividad de la rama de producción neerlandesa en el sector de la logística y los servicios. Por este motivo, los Países Bajos están precisando más la política relativa a la clasificación de determinados monitores LCD en la Nomenclatura Combinada".[673] En consecuencia, el Decreto fijaba criterios que los Países Bajos aplican desde el 22 de noviembre de 2004 para

[668] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 17 b) del Grupo Especial.

[669] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 127.

[670] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 128.

[671] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 54.

[672] HM Customs & Excise, Tariff Notice 13/04 (Estados Unidos - Prueba documental 76).

[673] Douanerechten. Indeling van bepaalde LCD monitoren in de gecombineerde nomenclatuur, Nº CPP2005/1372M, 8 de julio de 2005 (original y traducción no oficial al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 77).

determinar si los monitores LCD con DVI han de clasificarse en la partida 8471 o en la partida 8528. Estos criterios, que abarcan un cierto número de factores, incluido el modo en que el producto se presenta en los prospectos, son evidentemente exclusivos de los Países Bajos, ya que no figuran en ningún reglamento o ni siquiera en las orientaciones de las CE. Además, a pesar de la conclusión del Comité del Código Aduanero, las autoridades alemanas parecen haber seguido clasificando los monitores LCD con DVI en la partida 8471, incluso cuando se considera principalmente que no son de utilización exclusiva con ordenadores.[674]

Análisis por el Grupo Especial

7.291 El Grupo Especial toma nota de que los Estados Unidos impugnan la divergencia entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas en cuanto a la clasificación arancelaria de monitores LCD con DVI .[675]

7.292 A juicio del Grupo Especial, la clasificación arancelaria de un producto, incluidos los monitores LCD con DVI, constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación forma parte del mandato del Grupo Especial, por cuanto equivale a un caso de aplicación del Arancel Aduanero Común en materia de clasificación arancelaria.[676]

7.293 En cuanto a saber si la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI es o no "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda su constatación del párrafo 7.135 *supra* según la cual el mencionado párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 prescribe la uniformidad geográfica, o sea, que la aplicación debe ser uniforme en diferentes lugares de un mismo Miembro de la OMC. El Grupo Especial recuerda también su constatación del párrafo 7.135 *supra* en el sentido de que la forma, naturaleza y escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones que se presume se están aplicando de un modo no uniforme deben tenerse en cuenta al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial considera que la impugnación de la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI por parte de los Estados Unidos es de alcance limitado por cuanto se basa en la interpretación de unas pocas partidas arancelarias del Arancel Aduanero Común para determinar la clasificación de un solo producto, a saber, los monitores LCD con DVI. Por consiguiente, dado lo limitado de esta impugnación, el Grupo Especial entiende que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 impone un alto grado de uniformidad. Pasemos ahora a examinar los hechos que permiten determinar si se ha alcanzado o no este alto grado de uniformidad en la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI.

7.294 El Grupo Especial observa que las Comunidades Europeas no parecen poner en duda que en 2004 se produjo una divergencia entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros en lo que respecta a la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI, consistente concretamente en que las autoridades aduaneras de los Países Bajos clasificaron los monitores planos LCD con DVI como "videomonitores" de la partida 8528 ("aparatos receptores de televisión, incluso con un aparato receptor de radiodifusión o un aparato de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; videomonitores y videoproyectores"), mientras que las autoridades aduaneras de otros Estados

[674] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial, donde se hace referencia a la IAV DEM/2975/05-1 (fecha de inicio de validez, 19 de julio de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 78).

[675] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 74, en el que se hace referencia al Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 28).

[676] En los párrafos 7.179 a 7.182 *supra* figura información sobre las instituciones y los mecanismos de las CE aplicables en materia de clasificación arancelaria.

miembros clasificaban estos monitores LCD como "monitores de ordenador" en la partida 8471 ("máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades …").[677] Además, las propias Comunidades Europeas han observado que muchos monitores LCD, en razón de su diseño y sus características técnicas, pueden servir a la vez de monitores de ordenador y de videomonitores.[678] En estos procedimientos, las Comunidades Europeas no han indicado que la divergencia en la clasificación arancelaria se limite a un subconjunto de monitores LCD que pueden servir a la vez de monitor de ordenador y de videomonitor.

7.295 Sin embargo, las Comunidades Europeas afirman que la divergencia entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros con respecto a la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI ha sido y sigue siendo objeto de medidas por parte de las Comunidades Europeas con miras a su resolución.[679] Tras considerar todas las pruebas pertinentes que se nos han presentado, nosotros opinamos que las medidas adoptadas por las Comunidades Europeas desde 2004, cuando se manifestó claramente la existencia de una aplicación no uniforme, no han surtido el efecto de corregir la divergencia entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros con respecto a la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI.[680] Nuestro razonamiento es el siguiente:

7.296 *En primer lugar*, según han admitido las propias Comunidades Europeas, el Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005, que se promulgó en respuesta a la divergencia en la clasificación arancelaria de monitores LCD con DVI, sólo se aplica a los videomonitores con una

[677] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 349; declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 15; observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial. Por ejemplo, en su declaración final de la segunda reunión sustantiva, las Comunidades Europeas declararon que "estos acontecimientos recientes no demuestran que haya un problema de aplicación no uniforme que contravenga al párrafo 3 a) del artículo X del GATT, sino más bien, que hay una cuestión que se está estudiando actualmente …": declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 15. La divergencia en la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI entre las autoridades aduaneras neerlandesas por una parte, y las autoridades aduaneras de los otros Estados miembros por la otra, tiende a verse confirmada en un comunicado de prensa titulado "Nuevas evaluaciones fiscales hacen ver una vez más que los Países Bajos son la excepción en la UE". Según este comunicado de prensa, "las autoridades aduaneras neerlandesas han introducido de un modo totalmente inesperado criterios de importación -recién publicados en noviembre de 2004- y gravámenes sobre los monitores LCD con efecto retroactivo para todos estos productos importados en los Países Bajos por importadores y proveedores de servicios logísticos en el período de 2002 a 2004 … Esta situación ofrece un marcado contraste con la de otros países de la UE, que no han publicado evaluaciones adicionales". Comunicado de prensa de Greenberg Traurig, 24 de mayo de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 29).

[678] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 349.

[679] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 361, en el que se hace referencia al Reglamento Nº 634/2005 de la Comisión (CE - Prueba documental 85); declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 15; observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial, donde se hace referencia al nuevo reglamento propuesto sobre los monitores LCD, de 29 de noviembre de 2005 (CE - Prueba documental 163), y Programa del Comité del Código Aduanero, 21 de noviembre de 2005 (CE - Prueba documental 164).

[680] El Grupo Especial observa que las medidas adoptadas por las Comunidades Europeas en relación con la divergencia en la clasificación arancelaria de monitores LCD con DVI no forman parte de la "medida en cuestión" a los efectos de la reclamación de los Estados Unidos en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Esta medida es más bien una prueba pertinente para determinar si se ha resuelto o no la divergencia en la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros, que las Comunidades Europeas no han puesto en duda.

medición diagonal de pantalla no superior a los 48,5 cm y formato 4:3 o 5:4.[681] En el preámbulo del Reglamento figura una justificación del limitado alcance de su aplicación, en los términos siguientes: "Los datos comerciales indican que, actualmente, los videomonitores con tecnología de cristal líquido, con una medición diagonal de pantalla de dimensión no superior a 48,5 cm y de formato 4:3 o 5:4, se utilizan principalmente como unidades de salida de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos. Sin embargo, con frecuencia tales monitores pueden también reproducir imágenes de vídeo procedentes de una fuente distinta a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos y, por lo tanto, no cumplen el requisito de estar destinados exclusiva o principalmente a utilizarse con este tipo de máquinas."[682] En otras palabras, el Reglamento limita su ámbito de aplicación a los monitores con una medición diagonal de pantalla no superior a 48,5 cm y de formato 4:3 o 5:4, porque, según el propio Reglamento, los monitores que reúnen estas características se utilizan principalmente como unidades de salida de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y pueden también reproducir imágenes de vídeo procedentes de una fuente distinta a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos. El Grupo Especial no ha obtenido pruebas que permitan pensar que los monitores no incluidos en las disposiciones del Reglamento (porque no tienen una medición diagonal de pantalla no superior a 48,5 cm ni un formato 4:3 o 5:4) no se utilizarían también como unidades de salida de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, así como para reproducir imágenes de vídeo procedentes de una fuente distinta a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos. De hecho, lo que ocurre es lo contrario: las propias Comunidades Europeas han afirmado que muchos monitores LCD, por razón de su diseño y sus características técnicas, pueden servir a la vez de monitores de ordenador y de videomonitores.[683] Además, según el preámbulo del Reglamento Nº 493/2005:

> "La convergencia de la tecnología de la información, la electrónica de consumo y las nuevas tecnologías ha creado una situación en la que, a la hora de clasificar los videomonitores, se está haciendo imposible determinar, ateniéndose solamente a las características técnicas, el propósito principal de un monitor concreto. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se desprende que la clasificación no puede estar basada en la utilización real. La clasificación correcta de cada producto debe basarse en datos objetivos y cuantificables. En estos momentos resulta imposible establecer criterios inequívocos que cumplan este requisito."[684]

Así pues, aunque el Reglamento Nº 493/2005 puede haber rectificado la divergencia de la clasificación arancelaria con respecto a los monitores incluidos en su alcance, no surtirá el mismo efecto para los monitores no incluidos en dicho alcance.[685]

---

[681] Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 28).

[682] Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005, párrafo 3 del preámbulo (Estados Unidos - Prueba documental 28).

[683] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 349.

[684] Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005, párrafo 2 del preámbulo (Estados Unidos - Prueba documental 28).

[685] El Grupo Especial observa que, en este caso, no se refiere a la aplicación del Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005, a los efectos de la reclamación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sino que más bien estamos considerando ese Reglamento para determinar si indica o no que la divergencia en la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI, que se puso de manifiesto en 2004, ha sido resuelta.

7.297 *En segundo lugar*, según el Reglamento Nº 493/2005 la suspensión de derechos se aplica a los monitores LCD con DVI "clasificables en el código NC 8528 21 90".[686] En otras palabras, el Reglamento Nº 493/2005 sólo se aplica a los productos que reúnen las condiciones establecidas para pertenecer a la partida 8528. En consecuencia, este Reglamento no sería aplicable y, por lo tanto, no contribuiría a resolver la divergencia en la clasificación arancelaria en los casos en que no está claro si un monitor LCD puede clasificarse en la partida 8528 o en la partida 8471. Estos casos parecen constituir el núcleo de la alegación de los Estados Unidos de que existe una divergencia entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros en lo relativo a la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI.

7.298 *En tercer lugar*, el Grupo Especial toma nota de la declaración de las Comunidades Europeas según la cual ha adoptado otra medida pertinente, a saber, el Reglamento (CE) Nº 634/2005 de la Comisión, de 26 de abril de 2005, que clasifica a los monitores LCD de un tipo determinado en la partida 8528[687] y parece contribuir a disipar la ambigüedad inherente a la eventual clasificación de un producto en la partida 8528 o en la partida 8471. En particular, el mencionado Reglamento indica que la clasificación de los monitores LCD en la partida 8528 se limita a un "monitor en color de cristal líquido (LCD), con una diagonal de pantalla de 38,1 cm (15") y unas medidas totales de 30,5 x 22,9 x 8,9 cm". El Reglamento establece también que el producto ha de "visualizar señales procedentes de distintas fuentes, como las de una máquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos, un sistema de televisión en circuito cerrado, un reproductor de DVD o una videocámara", para que se le pueda clasificar en la partida 8528. El Reglamento aclara además que "se excluye su clasificación en la subpartida 8471 60 ya que no es del tipo utilizado exclusiva o principalmente en un sistema automático para el tratamiento o procesamiento de datos (véase la nota 5 del capítulo 84), dado que puede visualizar señales de varias fuentes".[688]

7.299 El Grupo Especial considera que los avances que se hayan podido lograr gracias al Reglamento Nº 634/2005 para resolver la divergencia en la clasificación de los monitores LCD podrían verse desvirtuados si se considera la opinión del Comité del Código Aduanero, expresada en su 346ª reunión de los días 30 de junio a 2 de julio de 2004, y especialmente el hecho de que los representantes de las autoridades aduaneras de los Estados miembros acostumbran a participar en el proceso de adopción de decisiones del Comité del Código Aduanero, y que son estas mismas autoridades aduaneras las que aplican el Reglamento Nº 634/2005.[689] En particular, el Comité del Código Aduanero opinó que "salvo que un importador pueda demostrar que un monitor sólo será utilizable con una máquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos (partida 8471), o como tablero indicador (partida 8531), el monitor deberá clasificarse en la partida 8528".[690] En otras palabras, según la opinión del Comité del Código Aduanero, para que pueda clasificarse en la

[686] Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005, párrafo 4 del preámbulo (Estados Unidos - Prueba documental 28).

[687] CE - Prueba documental 85.

[688] Reglamento Nº 634/2005 de la Comisión, de 26 de abril de 2005, anexo, párrafo 4 (CE - Prueba documental 85). El Grupo Especial observa que en este caso no se refiere a la aplicación del Reglamento Nº 634/2005 de la Comisión a los efectos de la reclamación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sino que más bien estamos considerando este Reglamento para determinar si indica o no que la divergencia en la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI, que se puso de manifiesto en 2004, ha sido resuelta.

[689] A este respecto, véanse los párrafos 7.157-7.160 *supra*.

[690] El extracto pertinente de las actas de la 346ª reunión del Comité del Código Aduanero, de los días 30 de junio a 2 de julio de 2004, figura en el párrafo 353 de la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas.

partida 8471 un monitor *sólo* ha de utilizarse con una máquina de procesamiento automático de datos. Esta opinión contrasta con la fórmula utilizada en el Reglamento Nº 634/2005, que declara implícitamente que en la partida 8471 60 sólo pueden incluirse los monitores de un tipo *utilizado exclusiva o principalmente* (no *sólo*) en un sistema automático para el tratamiento o procesamiento de datos.[691] Esta diferencia entre la fórmula utilizada en el Reglamento Nº 634/2005, y la propuesta por el Comité del Código Aduanero, podría surtir importantes efectos prácticos. A este respecto, hemos tomado nota de la afirmación de las Comunidades Europeas según la cual las opiniones del Comité del Código Aduanero son importantes para la aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común, y las autoridades aduaneras de los Estados miembros atribuyen un cierto relieve a estas opiniones.[692]

7.300 *En cuarto lugar*, el Grupo Especial ha comprobado que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no parecen tener una idea clara del efecto práctico de las diversas medidas aplicadas a nivel comunitario con respecto a la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI. Por ejemplo, en el Aviso Aduanero 13/04 que, al parecer, fue publicado después de que se diera a conocer la opinión del Comité del Código Aduanero, las autoridades aduaneras del Reino Unido declaraban que, "desde octubre de 2004 los monitores LCD/TFT que incluyen un conectador videodigital deberán clasificarse en el código 8528 21 90 de la Nomenclatura Combinada (NC)".[693] Esto parecía sugerir que las autoridades aduaneras del Reino Unido consideraban que los monitores que no tenían DVI incorporados no podían clasificarse en la partida 8528 y, por consiguiente, cabe suponer que eran clasificables en la partida 8471. En otras palabras, las autoridades del Reino Unido parecen haber adoptado el planteamiento indicado por el Comité del Código Aduanero.

7.301 Más recientemente, y después de la entrada en vigor del Reglamento Nº 634/2005, en un Decreto de 8 de julio de 2005 sobre la clasificación de ciertos monitores LCD las autoridades aduaneras de los Países Bajos declaraban lo siguiente:

> "De conformidad con el Reglamento (CE) Nº 754/2004, de 23 de abril de 2004 (publicado en OJL 118), la Comisión Europea ha clasificado en la partida 8528 los monitores de plasma con un diámetro de pantalla de 42" y con una conexión DVI.
>
> El sector de instrumentos de trabajo de la sección de la nomenclatura arancelaria y estadística del Comité de Aduanas (329ª reunión, de 15 de diciembre de 2003) acordó, por mayoría calificada, emitir una opinión sobre el mencionado Reglamento. Posteriormente los Países Bajos, con el apoyo de la Comisión Europea, han adoptado la norma de que los monitores LCD que reúnan las condiciones establecidas en el

[691] La fórmula utilizada en el Reglamento Nº 634/2005 se basa en la nota 5 del capítulo 84 del Arancel Aduanero Común.

[692] Por ejemplo, las Comunidades Europeas señalan que las opiniones del Comité del Código Aduanero no son jurídicamente vinculantes, pero añaden que, como afirma el TJCE en los Asuntos acumulados 69 y 70/76, *Dittmeyer v Hauptzollamt Hamburg - Waltershof* (CE - Prueba documental 31), constituyen un medio importante de asegurar la aplicación uniforme del Arancel Aduanero Común y, en esta condición, pueden considerarse como una ayuda válida para la interpretación del Arancel. Las Comunidades Europeas observan además que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no están jurídicamente vinculadas por las opiniones del Comité del Código Aduanero, pero sí lo están por el deber de cooperación estipulado en el artículo 10 del Tratado de las CE, que incluye una obligación de contribuir a la aplicación uniforme del derecho comunitario. Por este motivo, los Estados miembros están obligados a tener debidamente en cuenta las interpretaciones de la normativa aduanera de las CE que figuran en las opiniones del Comité del Código Aduanero. Las Comunidades Europeas añaden que, de un punto de vista práctico, las opiniones del Comité suelen reflejar un enfoque común convenido de todos los Estados miembros. Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 58 l) del Grupo Especial.

[693] HM Customs & Excise, Tariff Notice 13/04 (Estados Unidos - Prueba documental 76).

> Reglamento deberán clasificarse en la partida 8528. No todos los Estados miembros se atienen a esta norma. Esto ha dado lugar a una desviación de la corriente comercial, que es perjudicial para la competitividad de la rama de producción neerlandesa en el sector de la logística y los servicios. Por este motivo, los Países Bajos están precisando más la política relativa a la clasificación de determinados monitores LCD en la Nomenclatura Combinada."[694]

A continuación el Decreto enumera los criterios para la clasificación de los monitores LCD, algunos de los cuales no figuran en ninguno de los instrumentos existentes de nivel comunitario.[695]

7.302 Además, en una IAV de fecha 19 de julio de 2005 las autoridades aduaneras de Alemania parecen seguir clasificando los monitores LCD con DVI en la partida 8471, aunque se considere principalmente que no se utilizan exclusivamente con ordenadores.[696]

7.303 Por añadidura, parece haber una cierta confusión entre los industriales en cuanto a la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI. En particular, en una carta de fecha 2 de septiembre de 2005 dirigida al Director de la Comisión para Asuntos Internacionales y Cuestiones Arancelarias, la asociación de la rama de producción que se ocupa de los monitores LCD ("EICTA") afirmaba lo siguiente: "[s]in esta aclaración [de la clasificación de los monitores LCD] la rama de producción se encuentra en una situación inaceptable ya que varios Estados miembros aplican las normas de clasificación de un modo incongruente, lo que coloca a algunos importadores en una situación de desventaja competitiva y hace casi imposible predecir las consecuencias de las decisiones relativas al aprovisionamiento y el envío".[697] Por otra parte, en carta de fecha 6 de diciembre de 2005,

---

[694] Douanerechten. Indeling van bepaalde LCD monitoren in de gecombineerde nomenclatuur, Nº CPP2005/1372M (8 de julio de 2005) (original y traducción no oficial al inglés), párrafo 1 (Estados Unidos - Prueba documental 77).

[695] El Decreto neerlandés menciona los siguientes criterios:

> "- no ha de haber ninguna otra conexión salvo la conexión VGA y/o DVI (se permite la presencia de una conexión de audio);
>
> - el diámetro de la pantalla no ha de ser superior a 20" (51 cm) con mediciones de la pantalla (alto/ancho) de una relación aproximada de 3:4 (así pues, ninguna 'pantalla amplia');
>
> - la ausencia de un control remoto/ausencia de un sensor de rayos infrarrojos en el monitor;
>
> - la ausencia de un instrumento que permita la elección de los canales o el uso del monitor como un aparato de televisión;
>
> - ningún dispositivo (tapado por una placa metálica o por otro medio ('de ranura')) que permita que el monitor se utilice como videomonitor ('ingeniería arancelaria');
>
> - la oportunidad de colocar la pantalla en posiciones diversas (ajustar la altura, inclinación hacia adelante o hacia atrás, giro en un ángulo de 90º (retrato/panorama))".

[696] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 d) del Grupo Especial, donde se hace referencia a la IAV DEM/2975/05-1 (fecha inicial de validez, 19 de julio de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 78). La IAV indica que el producto que fue clasificado por las autoridades aduaneras de Alemania era un monitor LCD con una pantalla de 20,1" y un cable de conexión de red con máquinas de procesamiento automático de datos, del tipo utilizado principalmente para dicho procesamiento.

[697] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 53, en el que se hace referencia a una carta de 2 de septiembre de 2005 dirigida a Manuel Arnal Monreal, Director de Asuntos

EICTA comunicó a la Comisión de las CE su preocupación acerca de la promulgación de un Reglamento relativo a la clasificación de mercancías de las partidas 8471 y 8528, que no se había promulgado en la fecha en que se envió la carta a la Comisión de la CE.[698]

7.304 En vista de las pruebas que se le han presentado, el Grupo Especial opina que las medidas adoptadas por las Comunidades Europeas no han surtido el efecto de rectificar la divergencia entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros en cuanto a la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI, cuya existencia desde 2004 no ha sido puesta en duda por las Comunidades Europeas. A este respecto, las pruebas obtenidas indican que la existencia continuada de una divergencia en la clasificación arancelaria ha tenido, y es probable que siga teniendo hasta que se resuelva la divergencia, un efecto desfavorable para el entorno comercial.[699] El Grupo Especial considera que el modo preciso en que haya de resolverse esta divergencia no es de su incumbencia, ni tampoco depende de las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, es necesario aplicar instrumentos y mecanismos que resuelvan eficazmente la divergencia en la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI y esto, a nuestro juicio, no se ha producido a pesar de las diversas medidas adoptadas por las Comunidades Europeas para resolver la mencionada divergencia.

7.305 En conclusión, el Grupo Especial considera que la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial estima que las medidas adoptadas hasta ahora por las Comunidades Europeas no han surtido el efecto de eliminar la divergencia en la clasificación arancelaria de estos monitores, que se puso de manifiesto en 2004.[700] Por consiguiente, el Grupo Especial constata que ha habido una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la clasificación arancelaria de los monitores LCD con DVI.

Internacionales y Cuestiones Arancelarias de la Comisión Europea, por Mark MacGann, Director General de EICTA, página 1 (Estados Unidos - Prueba documental 75).

[698] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial, donde se hace referencia a una carta de 6 de diciembre de 2005 dirigida a Manuel Arnal Monreal, Director de Asuntos Internacionales y Cuestiones Arancelarias de la Comisión Europea, por Mark MacGann, Director General de EICTA (Estados Unidos - Prueba documental 81).

[699] El efecto en el entorno comercial se manifiesta, entre otras cosas, en las pruebas mencionadas por el Grupo Especial en los párrafos 7.300 a 7.303. El Grupo Especial considera que el hecho de que los comerciantes deban satisfacer el mismo derecho (o ningún derecho) tanto si los monitores LCD que importan en las Comunidades Europeas están clasificados en la partida 8471, como si lo están en la partida 8528, no desvirtúa nuestra conclusión de que el entorno comercial ha resultado afectado por la divergencia en la clasificación arancelaria.

[700] El Grupo Especial ha tomado nota de la existencia de un proyecto de Reglamento relativo a la clasificación de los monitores LCD, incluido en la Prueba documental 163 presentada por las CE. No obstante, en la época en que el Grupo Especial distribuyó su informe provisional a las partes, no se le había comunicado ninguna prueba que indicase que el proyecto de reglamento surtiría el efecto de eliminar la divergencia en la clasificación arancelaria de estos monitores, que se puso de manifiesto en 2004.

vi) Trato de la IAV en los Estados miembros que no sean el Estado miembro emisor

Resumen de los argumentos de las partes

7.306 Los **Estados Unidos** observan que el Código Aduanero de las Comunidades prevé la emisión, por las autoridades aduaneras de los Estados miembros, de resoluciones anticipadas en forma de IAV que informan a los comerciantes de la clasificación que se asignará a las mercancías cuando sean importadas.[701] Los Estados Unidos observan además que el artículo 11 del Reglamento de Aplicación establece que las IAV facilitadas por las autoridades aduaneras de un Estado miembro "obligarán a las autoridades competentes de todos los Estados miembros en las mismas condiciones"[702], pero dicen que, en realidad, los Estados miembros no siempre consideran vinculantes las IAV emitidas por otros Estados miembros.[703] Más en particular, los Estados Unidos alegan que las IAV de un Estado miembro no obligan a otro Estado miembro a clasificar las mercancías similares o idénticas importadas por una persona que no sea el titular de la IAV del mismo modo, con lo que el mismo producto puede clasificarse en diferentes partidas arancelarias y ser objeto de un trato arancelario distinto según cual sea el Estado miembro.[704] En abono de esta opinión, los Estados Unidos dicen que en una reciente encuesta entre los miembros de una asociación comercial, que eran importadores de productos en las Comunidades Europeas, las empresas observaron que la "información arancelaria vinculante de las autoridades alemanas todavía no es aceptada por otros países de la UE, en particular Grecia y Portugal".[705]

7.307 Las **Comunidades Europeas** no creen que exista ningún problema respecto del reconocimiento de las IAV de Alemania en otros Estados miembros. Las Comunidades alegan que la llamada "encuesta" en que se basan los Estados Unidos no es más que un comentario de una sola empresa no identificada, en el contexto del cuestionario de una asociación comercial, de marzo de 2005, y no es corroborada por ninguna otra prueba. En consecuencia, es imposible verificar la exactitud de la declaración. Las Comunidades Europeas sostienen que, aunque un importador afirme que una IAV no es aceptada, esto puede ser consecuencia de una serie de problemas muy distintos entre sí, por ejemplo que los productos importados no sean idénticos a los descritos en la IAV. Además, si una autoridad aduanera no reconoce una IAV emitida por otro Estado miembro, el importador podrá obtener una revisión judicial o informar a la Comisión de las CE; no obstante, a las Comunidades Europeas no les consta que esto haya ocurrido nunca.[706]

7.308 Los **Estados Unidos** indican que el asunto *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn* describe la divergencia en la clasificación de las tarjetas de red para ordenadores personales en

[701] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 22.

[702] Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, artículo 11 (Estados Unidos - Prueba documental 6).

[703] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 47.

[704] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 22.

[705] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 76, en el que se hace referencia al cuestionario de la Foreign Trade Association sobre el tema "Facilitación del comercio: facilitación del comercio en los Estados Miembros de la OMC", marzo de 2005, respuesta a la pregunta 1.4 (Estados Unidos - Prueba documental 30).

[706] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 95.

Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido, por una parte, y Alemania, por la otra.[707] Según los Estados Unidos, del asunto *Peacock* se infiere que uno o más Estados miembros no consideraron vinculantes las IAV emitidas por otros Estados miembros.[708]

7.309 Las **Comunidades Europeas** aducen que las IAV sólo son vinculantes frente al titular de la IAV, y no frente a otras personas.[709] Además, las Comunidades sostienen que lo importante no es que pueda surgir una divergencia, sino que se aborde y se resuelva en cuanto surja. Según las Comunidades Europeas, esto es exactamente lo que ocurrió en el asunto *Peacock*.[710]

7.310 Los **Estados Unidos** se refieren a la divergencia en la clasificación de los productos para riego por goteo. Explican que las autoridades aduaneras francesas emitieron una IAV para el producto en cuestión en 1999, clasificándolo como sistema de regadío perteneciente a la partida arancelaria 8424 del Arancel Aduanero Común, susceptible de un tipo de derecho ad valorem del 1,7 por ciento. En diciembre de 2000, cuando un importador de este mismo producto trató de importar el producto en España, las autoridades aduaneras españolas no tuvieron en cuenta la IAV francesa y clasificaron el producto como tubería de la partida arancelaria 3717 del Arancel Aduanero Común, que conlleva un tipo de derecho ad valorem de 6,4 por ciento.[711] Para los Estados Unidos este asunto demuestra que uno o más Estados miembros no consideraron vinculante una IAV emitida por otro Estado miembro.[712]

7.311 Las **Comunidades Europeas** responden que las IAV sólo son vinculantes frente al titular de la IAV, y no frente a otras personas.[713] Según las Comunidades, la IAV emitida por las autoridades aduaneras de Francia y España para los productos para riego por goteo no se emitió para los mismos titulares. Además, las Comunidades Europeas sostienen que lo importante no es que pueda surgir una divergencia en la clasificación arancelaria, sino que se aborde y se resuelva cuando surja.[714]

7.312 Los **Estados Unidos** se refieren al asunto Videocámaras y sostienen que, a raíz de la modificación de una nota explicativa relativa a las videocámaras, de junio de 2004, las autoridades aduaneras españolas emitieron una IAV clasificando 19 modelos de videocámaras producidas por una

---

[707] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 33, donde se hace referencia al Asunto C-339/98, *Peacok AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, opinión del Abogado General, 2000 ECR I-08947, 28 de octubre de 1999, párrafos 7 y 8 (Estados Unidos - Prueba documental 17).

[708] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 20 del Grupo Especial. Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 21.

[709] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 161 del Grupo Especial donde se hace referencia al Asunto C-495/03, *Intermodal Transports BV* contra *Staastsecretaris van Financiën*, 15 de septiembre de 2005, aún no incluido en la Recopilación, párrafo 27 (Estados Unidos - Prueba documental 71).

[710] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 136.

[711] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 14 del Grupo Especial.

[712] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 20 del Grupo Especial.

[713] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 161 del Grupo Especial, donde se hace referencia al Asunto C-495/03, *Intermodal Transports BV* contra *Staastsecretaris van Financiën*, de 15 de septiembre de 2005, aún no incluido en la Recopilación, párrafo 27 (Estados Unidos - Prueba documental 71).

[714] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 143, en el que se hace referencia a la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 2 del Grupo Especial, párrafo 4.

determinada empresa en la subpartida 8525 40 91.[715] La filial francesa del titular de la IAV informó de la existencia de la IAV a las autoridades aduaneras de Francia en el curso de una auditoría realizada por esta oficina. No obstante, según los Estados Unidos las autoridades aduaneras francesas comunicaron a la empresa que no tenían el propósito de ajustarse a la clasificación establecida en la IAV, sino que impondrían el derecho correspondiente a su propia estimación de la clasificación correcta de estos modelos de videocámara.[716] Los Estados Unidos sostienen que, si bien en el contexto en que se produjo esta situación estaba prevista la recaudación de los derechos después del despacho de aduana, para determinar la cuantía de los derechos que debían recaudarse era necesario clasificar antes el producto.[717]

7.313 Las **Comunidades Europeas** responden que las IAV emitidas por las autoridades españolas para las videocámaras son plenamente conformes con las normas de clasificación de las CE. Según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos no han aportado ninguna prueba de que cualquier otro Estado miembro haya clasificado las videocámaras de modo contrario a las normas de clasificación de las Comunidades. Además, las Comunidades Europeas consideran que los Estados Unidos no han dado ninguna indicación del momento en que se produjo la importación en Francia, y ni siquiera de que los productos fueran los descritos en las IAV emitidas por las autoridades españolas. Además, las Comunidades Europeas sostienen que, al parecer, la cuestión a que se refieren las autoridades francesas tiene que ver con la recaudación de los derechos de aduana después del despacho de las mercancías, y no con la clasificación arancelaria del producto. Así pues, como la cuestión no se refiere a la aplicación uniforme de las normas de clasificación arancelaria, sino más bien a la recaudación de derechos de aduana después del despacho de las mercancías, las Comunidades Europeas consideran que esta cuestión no está incluida en el mandato del Grupo Especial.[718]

7.314 Los **Estados Unidos** se refieren al informe del Grupo Especial acerca de la diferencia *CE - Trozos de pollo*. Los Estados Unidos observan que en este caso lo que se debatía era si un determinado producto debía clasificarse en la partida 0210 o en la partida 0207 del Arancel Aduanero Común. Las partes demandantes invocaron la emisión de IAV por varios Estados miembros, que clasificaban el producto en la partida 0210. En su respuesta, las Comunidades Europeas afirmaron que "esta interpretación no es la que adoptan otras oficinas aduaneras de las CE".[719]

7.315 Las **Comunidades Europeas** sostienen que no hubo ninguna diferencia de interpretación ni de aplicación de las normas de clasificación de las CE en el asunto *CE - Trozos de pollo*. Además, la declaración de las Comunidades Europeas se refería solamente a la "interpretación". En ningún lugar del informe del Grupo Especial sobre el asunto *CE - Trozos de pollo* se afirma que las Comunidades Europeas hayan dicho que la IAV no se reconoció cuando fue presentada por el titular. En consecuencia, a juicio de las Comunidades Europeas la declaración citada por los Estados Unidos no es pertinente.[720]

---

[715] IAV emitida por las autoridades aduaneras españolas, que clasifica a las cámaras de vídeo en la subpartida 8525 40 91, con fecha inicial de validez de junio de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 65).

[716] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 30.

[717] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 180 del Grupo Especial.

[718] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 37.

[719] Informe del Grupo Especial, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 7.260.

[720] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 96.

Análisis por el Grupo Especial

7.316 El Grupo Especial observa que, en lo esencial, la impugnación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se basa en la alegación de que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no siempre consideran vinculantes las IAV emitidas por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros.[721]

7.317 En opinión del Grupo Especial, el trato concedido a las IAV emitidas por las autoridades aduaneras constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 994. Este acto de aplicación está comprendido en el mandato del Grupo Especial porque equivale a una instancia de aplicación del Arancel Aduanero Común en materia de clasificación arancelaria.[722]

7.318 La impugnación de los Estados Unidos se basa en el apartado 2) del artículo 12 del Código Aduanero Comunitario, que establece que:

> La información arancelaria vinculante ... únicamente vinculará a las autoridades aduaneras frente al titular de la solicitud en lo relativo a la clasificación arancelaria ... de una mercancía ...

7.319 El artículo 11 del Reglamento de Aplicación también es pertinente a este respecto. Según este artículo:

> "Las informaciones arancelarias vinculantes facilitadas por las autoridades aduaneras de un Estado miembro a partir del 1 de enero de 1991 obligarán a las autoridades competentes de todos los Estados miembros en las mismas condiciones."[723]

7.320 Ante todo, el Grupo Especial observa que su cometido en esta diferencia consiste en determinar si las Comunidades Europeas han infringido o no el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, y no la conformidad o disconformidad con la normativa aduanera comunitaria de los actos de las Comunidades. Dicho esto, el Grupo Especial se da cuenta de que la no aceptación por las autoridades aduaneras de los Estados miembros de IAV emitidas por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros cuando la IAV haya sido presentada por el titular, con la consiguiente infracción del apartado 2 del artículo 12 del Código Aduanero Comunitario y del artículo 11 del Reglamento de Aplicación, podría dar lugar simultáneamente a un caso de aplicación no uniforme que infringiría el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En particular, si la autoridad aduanera de un Estado miembro se niega a reconocer y a considerar vinculante la IAV emitida por la autoridad aduanera de otro Estado miembro respecto de un producto que sea idéntico en todos los aspectos materiales a aquél que es objeto de la IAV, cuando esta IAV es invocada por el titular, y si atribuye otra clasificación al producto, esto dará lugar necesariamente a una aplicación no uniforme del Arancel Aduanero Común, con la consiguiente infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial observa que no se le han presentado pruebas suficientes de que se haya producido una aplicación no uniforme que suponga una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto al trato dado a la IAV en los Estados miembros, excepto el Estado miembro emisor, en los casos concretos a que se refieren los Estados Unidos.

---

[721] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 47.

[722] En los párrafos 7.179 a 7.182 *supra* figura información sobre las instituciones y los mecanismos de las CE aplicables en materia de clasificación arancelaria.

[723] Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, artículo 11 (Estados Unidos - Prueba documental 6).

7.321 En particular, para corroborar su afirmación de que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no siempre consideran vinculantes las IAV emitidas por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros, con la consiguiente infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, los Estados Unidos se remiten en primer lugar al informe de marzo de 2005 de la *Foreign Trade Association* (FTA) respecto de un cuestionario sobre el tema "Facilitación del comercio: facilitación del comercio en los Estados miembros de la OMC".[724] Más concretamente, los Estados Unidos se remiten a la siguiente declaración de un comerciante, que figura en el informe: "La información arancelaria vinculante de las autoridades alemanas todavía no es aceptada por otros países de la UE, en particular Grecia y Portugal".[725] El Grupo Especial no considera que esta declaración, por sí sola, constituya una prueba suficiente de la alegación de los Estados Unidos, ya que no es más que una observación aislada y anecdótica de un comerciante en respuesta a las preguntas formuladas en el cuestionario, y no es corroborada por ninguna prueba fáctica. En el propio párrafo inicial del informe de la *Foreign Trade Association* se indica que: "El cuestionario sobre facilitación del comercio se envió a 70 empresas miembros de la FTA. La FTA recibió 20 respuestas: a continuación figuran algunas citas tomadas de las respuestas. Aunque [las citas] no siempre reflejan fielmente el consenso político de todos los miembros, ponen de relieve los problemas prácticos con que se enfrentan los comerciantes europeos, y en particular los importadores, en las fronteras". Además, con respecto a la declaración a que se refieren concretamente los Estados Unidos, el Grupo Especial observa que es de carácter muy amplio y general y que en ella no se identifican los productos incluidos en la IAV de Alemania que presuntamente no son aceptados en otros países, en particular en Grecia y Portugal, ni tampoco se indica el período durante el cual las autoridades aduaneras de otros Estados miembros no aceptaron la IAV alemana. Por último, la declaración no dice si el titular de la IAV alemana invocó la IAV emitida por sus autoridades aduaneras que no fue aceptada por las autoridades aduaneras de Grecia y Portugal.

7.322 Como complemento de su afirmación de que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no siempre consideran vinculantes las IAV emitidas por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros, con la consiguiente infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, los Estados Unidos esgrimen la hipótesis de que las autoridades aduaneras alemanas no consideraron vinculantes IAV emitidas por las autoridades aduaneras de Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido, para tarjetas de red para ordenadores personales.[726] Los Estados Unidos formulan otras alegaciones acerca de la clasificación arancelaria de este producto, que se consideran en detalle en el párrafo 7.193 y siguientes, *supra*. Nosotros hemos observado en este debate que los hechos denotan la existencia, en un momento determinado, de diferencias en la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales entre las autoridades aduaneras alemanas (que clasificaron este producto en la partida 8517 del Arancel Aduanero Común) y las autoridades aduaneras danesas, neerlandesas y del Reino Unido (que lo clasificaron en la partida 8473), y que las Comunidades Europeas no han puesto en duda la existencia de estas diferencias.[727] No obstante, el Grupo Especial observa que no se le ha presentado ninguna prueba que indique que las autoridades aduaneras alemanas se negaron a aceptar la clasificación de las autoridades aduaneras danesas, neerlandesas y del Reino Unido. Por consiguiente, el Grupo Especial considera que no hay ningún motivo para

[724] *Foreign Trade Association*, cuestionario sobre el tema "Facilitación del comercio: facilitación del comercio en los Estados Miembros de la OMC", marzo de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 30).

[725] *Foreign Trade Association*, cuestionario sobre el tema "Facilitación del comercio: facilitación del comercio de los Estados Miembros de la OMC", marzo de 2005, párrafo 1.4 (Estados Unidos - Prueba documental 30).

[726] Los Estados Unidos se refieren en particular al Asunto C-339/98, *Peacok AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, opinión del Abogado General, 2000 ECR I-08947, 28 de octubre de 1999, párrafos 7 y 8 (Estados Unidos - Prueba documental 17).

[727] Véase el párrafo 7.201 *supra*.

apartarse de nuestra conclusión, que figura en el párrafo 7.207 *supra*, de que la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales no representa en la actualidad un caso de aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.323 Los Estados Unidos se refieren también al hecho de que, presuntamente, las autoridades aduaneras españolas no consideraron vinculante una IAV emitida por las autoridades aduaneras francesas para productos para riego por goteo. Los Estados Unidos formulan otras alegaciones respecto de la clasificación arancelaria de este producto, que se examinan en detalle en el párrafo 7.208 y siguientes, *supra*. Nosotros hemos observado en este debate que los Estados Unidos no han aportado ninguna prueba en favor de su afirmación de que existen diferencias entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros respecto de la clasificación arancelaria de los productos de riego por goteo, pero estamos dispuestos a aceptar su aseveración a este respecto teniendo en cuenta que las Comunidades Europeas no ponen en duda la existencia de diferencias en este sentido. No obstante, el Grupo Especial observa que no se le ha presentado ninguna prueba que indique que las autoridades aduaneras españolas se negaron a aceptar las clasificaciones de las autoridades aduaneras francesas. Por consiguiente, el Grupo Especial considera que no hay ningún motivo para apartarse de nuestra conclusión, que figura en el párrafo 7.218 *supra*, de que la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo no representa un caso de aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.324 Los Estados Unidos se refieren asimismo a las circunstancias del asunto Videocámaras, en el que se modificó una nota explicativa relativa a este producto.[728] Los Estados Unidos sostienen que las autoridades aduaneras francesas no aceptaron la IAV emitida por las autoridades aduaneras españolas después de la modificación, aunque la solicitud de la IAV a las autoridades francesas fue efectuada por la filial francesa de la empresa que había obtenido la IAV de las autoridades españolas, y a pesar de que la IAV española se había señalado a la atención de las autoridades francesas. El Grupo Especial observa que, para corroborar su afirmación de que las autoridades francesas se negaron a aceptar la IAV emitida por las autoridades españolas en el contexto del asunto Videocámaras, los Estados Unidos han facilitado copias de la IAV emitida por las autoridades aduaneras españolas.[729] No obstante, los Estados Unidos no han facilitado ninguna prueba de la IAV y/o de las decisiones de las autoridades aduaneras francesas en materia de clasificación, ni han demostrado en modo alguno que las autoridades aduaneras francesas conocieran la IAV española antes de clasificar los productos en cuestión. Por consiguiente, el Grupo Especial considera que los Estados Unidos no han demostrado que el asunto Videocámaras confirme su aseveración de que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no siempre consideran vinculantes las IAV emitidas por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros.

7.325 Los Estados Unidos se remiten a la declaración hecha por las Comunidades Europeas durante las actuaciones del Grupo Especial en el asunto *CE - Trozos de pollo*. En particular, los Estados Unidos sostienen que, en estas actuaciones, las Comunidades Europeas afirmaron que la interpretación contenida en las IAV emitidas por las autoridades aduaneras de varios Estados miembros respecto de la clasificación sistemática de ciertos productos del pollo en la partida 0210 de la Nomenclatura Combinada no había sido aceptada por otras oficinas aduaneras de las CE.[730]

---

[728] El Grupo Especial discute de nuevo este asunto en el párrafo 7.348 y siguientes *infra*.

[729] Estados Unidos - Prueba documental 65.

[730] Concretamente, los Estados Unidos se remiten al resumen hecho por el Grupo Especial de las declaraciones de las Comunidades Europeas en este asunto, que figura en el informe del Grupo Especial, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 7.260.

7.326 *En primer lugar*, el Grupo Especial observa que, a tenor del informe del Grupo Especial a este respecto, las Comunidades Europeas no han afirmado que las IAV emitidas por las autoridades aduaneras de determinados Estados miembros no fueron aceptadas por otros Estados miembros. Lo que sostuvieron las Comunidades Europeas es que ciertas oficinas aduaneras de las Comunidades no aceptaron la interpretación según la cual el producto debía clasificarse en la partida 0210 del Arancel Aduanero Común.[731]

7.327 *En segundo lugar*, a pesar de las declaraciones formuladas por las Comunidades Europeas que sugerían la existencia de divergencias en la clasificación arancelaria del mencionado producto, el Grupo Especial ha observado que las Comunidades no presentaron IAV en los casos en que los productos en cuestión habían sido clasificados en una partida distinta de la 0210.[732] En otras palabras, el Grupo Especial no tiene pruebas de una divergencia en la clasificación arancelaria del producto de referencia. Además, sobre la base de su informe al respecto, no parece que se haya proporcionado ninguna prueba al Grupo Especial de que IAV emitidas por autoridades aduaneras de algunos Estados miembros no han sido aceptadas en otros Estados miembros.

7.328 En relación con la afirmación de los Estados Unidos de que la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas no es uniforme, con lo que se infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial observa que los Estados Unidos alegaron que las autoridades aduaneras alemanas habían reconocido la existencia de IAV para productos comparables, pero no hicieron ningún esfuerzo para explicar por qué no respetan las decisiones sobre clasificación recogidas en esta IAV.[733] El Grupo Especial recuerda la constatación que formuló, en el párrafo 7.265 *supra*, de que parece existir una base fáctica objetiva que justifica la decisión de las autoridades aduaneras alemanas de clasificar los productos en cuestión de un modo distinto al de otras autoridades aduaneras de las Comunidades Europeas. Esto explicaría por qué las autoridades aduaneras alemanas no consideraron vinculantes IAV emitidas por otros Estados miembros.[734] Además, no hay ninguna indicación de que el titular hubiera invocado una IAV cualquiera señalada a la atención de las autoridades aduaneras alemanas.

---

[731] Según el informe del Grupo Especial en el asunto *CE - Trozos de pollo*, las Comunidades Europeas admitieron que las autoridades aduaneras de un Estado miembro de las CE habían emitido un cierto número de IAV (principalmente Hamburgo en Alemania, Rotterdam en los Países Bajos y diversas oficinas del Reino Unido), que clasificaban los productos en cuestión en la subpartida 0210.90. Las Comunidades Europeas admitieron también que, dada la importancia comercial de algunas de las oficinas aduaneras -en particular Hamburgo y Rotterdam- un considerable volumen de productos entraban en las Comunidades Europeas bajo esta interpretación incorrecta. No obstante, las Comunidades Europeas sostuvieron que esta interpretación no era aceptada en otras oficinas aduaneras de las CE: informe del Grupo Especial, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 7.260.

[732] Informe del Grupo Especial, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 7.270.

[733] Hauptzollamt Bremen, carta a Bautex-Stoffe GmbH comunicando una decisión sobre la clasificación de los forros opacos para cortinas, 22 de septiembre de 2004 (original y traducción al inglés) párrafo 1 (Estados Unidos - Prueba documental 23).

[734] No obstante, el Grupo Especial recuerda las constataciones que formuló, en los párrafos 7.272 a 7.275 *supra*, según las cuales el hecho de que las autoridades aduaneras alemanas no tuvieran en cuenta las decisiones sobre clasificación de autoridades aduaneras de otros Estados miembros ni, como mínimo, explicaran por qué las estimaban irrelevantes para la clasificación, no es compatible con la uniformidad obligatoria de la aplicación, establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial ha considerado además que el hecho de que otra autoridad aduanera alemana desestimara la clasificación arancelaria de las autoridades aduaneras belgas sobre la base de una simple "sospecha" de que los documentos presentados por estas últimas para la clasificación de estos productos no correspondían a los propios productos no es compatible con las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.329 Habida cuenta de lo que antecede, el Grupo Especial llega a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado que autoridades aduaneras de los Estados miembros no hayan considerado vinculantes las IAV emitidas por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros, y de que esto constituya un caso de aplicación no uniforme en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

vii) Negativa a retirar la revocación de una IAV relativa a las consolas PlayStation2 de Sony en el contexto del asunto PlayStation2 de Sony

Resumen de los argumentos de las partes

7.330 Los **Estados Unidos** se refieren a un asunto relativo a la clasificación arancelaria de la consola PlayStation2 (PS2) de Sony. Los Estados Unidos sostienen que la autoridad aduanera del Reino Unido emitió una IAV para este producto y a continuación la revocó amparándose en un Reglamento de la Comisión de las CE que asignaba una clasificación diferente al producto. Cuando el Tribunal de Primera Instancia de las CE anuló este Reglamento, la autoridad del Reino Unido, en vez de restablecer la IAV, mantuvo la revocación alegando nuevas justificaciones de alcance nacional, cuando sólo habían transcurrido unas semanas de la decisión del Tribunal de Justicia en el asunto *Timmermans*.[735] Los Estados Unidos sostienen que, antes del fallo del Tribunal de Justicia en el asunto *Timmermans*, que se pronunció en enero de 2004, la autoridad aduanera del Reino Unido creía evidentemente que debía restablecer la IAV después de la anulación del mencionado Reglamento y que, en vista de la opinión del Abogado General en el asunto *Timmermans*, publicada en septiembre de 2003, no podía modificar la IAV sobre la base de una reinterpretación propia e independiente de las normas de clasificación aplicables. Sin embargo, a raíz del fallo del Tribunal de Justicia en el asunto *Timmermans*, la autoridad aduanera del Reino Unido era libre de mantener la revocación de la IAV, no basándose en el Reglamento de las CE que había sido anulado sino en su propia interpretación de las normas de clasificación aplicables. Según los Estados Unidos, tanto si en la IAV la PS2 estuviera clasificada correctamente, como si no lo estuviera, el caso *PlayStation2 de Sony* se asienta en la proposición más general de que, de conformidad con el fallo del Tribunal de Justicia en el asunto *Timmermans*, cada una de las 25 oficinas aduaneras independientes y geográficamente delimitadas de las Comunidades Europeas tiene facultades para apartarse de criterio de aplicación uniforme de las normas de clasificación, sobre la base de su propia reconsideración de esas normas.[736]

7.331 Las **Comunidades Europeas** responden que la afirmación de los Estados Unidos, según la cual en el asunto *PS2* el Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido revocó la IAV sobre la base de su propia reevaluación de las normas de clasificación, induce a error. La revocación se produjo porque había entrado en vigor un Reglamento de clasificación de las CE. En consecuencia, el Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido no se atuvo a su propia interpretación de las normas de clasificación sino que aplicó correctamente el derecho comunitario. Según las Comunidades Europeas, el Alto Tribunal confirmó la validez de la revocación remitiéndose explícitamente al fallo del Tribunal de Justicia en el asunto *Timmermans*, y basándose en las pruebas que corroboraban claramente la justificación de la revocación.[737]

[735] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 33.

[736] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 184 del Grupo Especial.

[737] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 54, en el que se hace referencia a *Sony Computer Entertainment Europe Ltd.* contra *Commissioners of Customs and Excise*, Judgement of the High Court of Justice, Chancery Division, EWHC 1644, párrafo 118 (Estados Unidos - Prueba documental 70).

Análisis por el Grupo Especial

7.332 El Grupo Especial observa que, en lo esencial, la imputación de los Estados Unidos con respecto al asunto *PlayStation2 (PS2) de Sony* es que las autoridades aduaneras de los Estados miembros pueden negarse a retirar la revocación de una IAV aunque dicha negativa sea contraria a la uniformidad de la aplicación.[738]

7.333 El Grupo Especial recuerda la constatación que formuló, en el párrafo 7.64 *supra* según la cual, con arreglo a su solicitud de establecimiento de un Grupo Especial, los Estados Unidos no pueden hacer una impugnación "propiamente dicha" con respecto al diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las CE en general, y al diseño y la estructura del sistema comunitario en los sectores de la administración de aduanas que han sido señalados específicamente en la solicitud estadounidense. En el contexto de la afirmación hecha por los Estados Unidos, de que las autoridades aduaneras de los Estados miembros pueden negarse a retirar una revocación de una IAV aunque esta negativa sea contraria a la uniformidad de la aplicación, el Grupo Especial considera que esta cuestión no está comprendida en su mandato porque atañe a los aspectos estructurales relacionados con el sistema de la administración aduanera de las CE. No obstante, el Grupo Especial considera que, sobre la base de su solicitud de establecimiento de un Grupo Especial, los Estados Unidos pueden alegar, y el Grupo Especial está autorizado a considerar, si hay o no pruebas que indiquen que la negativa a retirar la revocación de la IAV con respecto a la consola PS2 en el contexto del asunto *PS2* por parte de las autoridades aduaneras del Reino Unido fue causa de una aplicación no uniforme, con la consiguiente infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. A este respecto, el Grupo Especial observa que la negativa a retirar la revocación de la IAV constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación está comprendido en el mandato del Grupo Especial por cuanto equivale a una instancia de aplicación del Arancel Aduanero Común en materia de clasificación arancelaria.[739]

7.334 Los hechos del caso se exponen en el fallo del Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido, División de la Cancillería, sobre el asunto *Sony Computer Entertainment Europe Ltd.* contra *the Commissioners of Customs and Excise*.[740] Concretamente, el 28 de agosto de 2000 Sony solicitó una IAV a la autoridad aduanera del Reino Unido para ciertos modelos de consolas PS2 pertenecientes a la partida arancelaria 8471 del Arancel Aduanero Común. El 19 de octubre de 2000 la autoridad aduanera del Reino Unido emitió una IAV que clasificaba la PS2 en la partida 9504 del mencionado Arancel, en vez de clasificarla en la partida 8471. La autoridad aduanera explicó que su decisión obedeció a que no se consideraba que el producto pudiera programarse libremente, y por consiguiente no reunía los criterios de la nota 5 A) a) 2) del capítulo 84 del Arancel Aduanero Común; en consecuencia, el producto no podía clasificarse en la partida 8471. La autoridad aduanera observó que la clasificación en la partida 9504 estaba justificada, entre otras cosas, por el Reglamento (CE) Nº 1508/2000 de la Comisión, relativo a un conjunto de aparatos electrónicos constituido por una consola para videojuegos.

7.335 El 22 de noviembre de 2000 Sony solicitó un examen departamental formal de la decisión de la autoridad aduanera del Reino Unido, de 19 de octubre de 2000, de clasificar las consolas PS2 en la partida 9504, y no en la 8471. En carta de fecha 5 de enero de 2001 se confirmó la decisión de

[738] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 184 del Grupo Especial.

[739] En los párrafos 7.179 a 7.182 *supra* figura información sobre las instrucciones y mecanismos de las CE aplicables en materia de clasificación arancelaria.

[740] *Sony Computer Entertainment Europe Ltd.* contra *Commissioners of Customs and Excise*, Judgement of the High Court of Justice, Chancery Division, EZHC 1644 (Ch), (Estados Unidos - Prueba documental 70).

clasificar la PS2 en la partida 9504, después de efectuado el examen departamental. La decisión fue confirmada también por la Sección del Arancel y la Nomenclatura del Comité del Código Aduanero en su reunión de los días 26 y 27 de febrero de 2001. En carta de fecha 29 de marzo de 2001 Sony fue informada de la decisión del Comité y se le notificó que se estaba redactando un proyecto de Reglamento que clasificaba a los productos en cuestión en la partida 9504. El proyecto de Reglamento daba la siguiente justificación para la clasificación de la consola PS2 en la partida 9504: "entre las diferentes funciones del aparato (videojuegos, lectura de CD-audio y de DVD-video, tratamiento automático de datos, etc.) los videojuegos constituyen la característica esencial que determina su clasificación en la partida 9504 por este concepto".[741]

7.336 Antes de que se aprobara el proyecto de Reglamento, Sony recurrió ante el VAT and Duties Tribunal del Reino Unido la decisión adoptada a raíz del examen departamental, comunicada por carta de 5 de enero de 2001. El recurso fue aceptado. Al aceptar el recurso, el Tribunal observó que la decisión de la autoridad aduanera del Reino Unido se había basado en el hecho de que la consola PS2 no podía "programarse libremente" y, por consiguiente, no reunía las condiciones prescritas para la inclusión en la partida 8471, de conformidad con la nota 5 A) a) 2) del capítulo 84. El examen departamental había confirmado este extremo. El Tribunal al que recurrió Sony determinó que el fundamento de la decisión de la autoridad aduanera del Reino Unido (y del subsiguiente examen departamental) era inválido porque el proyecto de Reglamento clasificaba la consola PS2 en la partida 9504 por motivos distintos. El Tribunal llegó a la conclusión de que, por consiguiente, la decisión de la autoridad aduanera del Reino Unido no era admisible.

7.337 Después de la decisión del Tribunal por la que se aceptaba su recurso, Sony pidió a la autoridad aduanera del Reino Unido que emitiese una nueva IAV clasificando la consola PS2 en la partida arancelaria 8471. La solicitud de Sony se concedió en carta de fecha 12 de junio de 2001, pero sometiéndola a la condición de que, una vez promulgado el Reglamento que clasificaba la PS2 en la partida 9504, la IAV que clasificaba la PS2 en la partida 8471 sería revocada.

7.338 El 10 de julio de 2001 fue aprobado el proyecto de Reglamento como Reglamento (CE) Nº 1400/2001 de la Comisión.[742] De conformidad con el artículo 1 del Reglamento, leído conjuntamente con el Anexo del mismo, la consola PS2 quedó clasificada en la partida 9504. En consecuencia, el 25 de julio de 2001 la autoridad aduanera del Reino Unido envió una carta a Sony en la que revocaba la IAV que había clasificado a la consola PS2 en la partida 8471. El 6 de septiembre de 2001 Sony solicitó un examen departamental de la decisión de revocar la IAV, alegando que el Reglamento que había causado la revocación (o sea el Reglamento Nº 1400/2001) era ilegal. Posteriormente, el 3 de octubre de 2001 Sony presentó una solicitud al Tribunal de Justicia para la anulación del Reglamento Nº 1400/2001, de conformidad con el artículo 230 del Tratado de las CE. El 30 de septiembre de 2003 el Tribunal de Primera Instancia anuló el Reglamento constatando que, aunque la consola PS2 podía clasificarse en la partida 9504, la explicación del fundamento jurídico para la clasificación de la PS2 en la partida 9504 de conformidad con el Reglamento era errónea.[743]

7.339 A raíz de la anulación del Reglamento Nº 1400/2001, la autoridad aduanera del Reino Unido solicitó el asesoramiento de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera respecto de la

[741] El proyecto de reglamento fue adoptado posteriormente como Reglamento (CE) Nº 1400/2001 de la Comisión, de 10 de julio de 2001 (CE - Prueba documental 157).

[742] Reglamento (CE) Nº 1400/2001 de la Comisión, de 10 de julio de 2001 (CE - Prueba documental 157).

[743] CFI Judgement: Sony Computer Entertainment Europe Ltd. contra Commission of the European Communities, Asunto T-243/01, 30 de septiembre de 2003, párrafos 120 a 128 (Estados Unidos - Prueba documental 12).

condición jurídica de la IAV que había clasificado la PS2 en la partida 8471. Según la respuesta de la Dirección General, contenida en carta de fecha 8 de enero de 2004 y distribuida a las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros actuales y futuros, a la luz de la constatación del Tribunal de Primera Instancia de que la consola PS2 no se podía clasificar en la partida 8471 y sí en la partida 9504, la opinión de la Comisión de las CE era que seguía siendo posible clasificar correctamente a la consola PS2 en la partida 9504. En fecha aproximada de 1º de mayo de 2004 la OMA adoptó una opinión que clasificaba a la consola PS2 en la partida 9504.

7.340 El Grupo Especial puede apreciar que las circunstancias que rodean el asunto *PS2* podrían haber dado lugar a una aplicación no uniforme, con la consiguiente infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Más concretamente, en el contexto de este asunto la autoridad aduanera del Reino Unido se negó a retirar la revocación de la IAV que clasificaba a la consola PS2 en la partida 8471, aunque el Reglamento Nº 1400/2001, que había dado lugar a la revocación, estaba anulado. La autoridad aduanera justificó su negativa alegando que se había determinado que el Reglamento Nº 1400/2001 era inválido no porque la clasificación de la PS2 en la partida 9504 fuera incorrecta con arreglo al Reglamento, sino porque la justificación del fundamento jurídico de la clasificación en virtud de dicho Reglamento era errónea. Cabe concebir que otras autoridades aduaneras de las Comunidades Europeas adoptasen un enfoque distinto al de las autoridades aduaneras del Reino Unido. En particular, estas otras autoridades podrían haber decidido que aceptaban la IAV que clasificaba a la consola PS2 en la partida 8471, considerando que el Reglamento que la clasificaba en la partida 9504 había sido anulado, o bien que retiraban la revocación de la IAV que había clasificado la consola PS2 en la partida 8471. El Grupo Especial considera que con una u otra de estas posibilidades se habría creado una situación de aplicación no uniforme, con la consiguiente infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En particular, mientras que la autoridad aduanera del Reino Unido habría clasificado el producto en la partida 9504, las otras autoridades aduaneras lo habrían clasificado en la partida 8471. Esto puede ocurrir con el sistema de administración aduanera de las CE porque dicho sistema no prevé una retirada uniforme de las revocaciones de las IAV ni impone a las autoridades aduaneras de un Estado miembro la obligación de consultar o notificar a otras autoridades aduaneras respecto de las decisiones de retirar la revocación de una IAV.[744]

7.341 No obstante, el Grupo Especial observa que no se le ha facilitado ninguna prueba de que haya surgido una divergencia en la clasificación arancelaria entre los Estados miembros debido a la negativa de la autoridad aduanera del Reino Unido de retirar su revocación de la IAV que clasificaba a las consolas PS2 en la partida 8471. Es más, la única prueba aportada por los Estados miembros respecto de la clasificación de la PS2 son los fallos del Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido[745] y del Tribunal de Primera Instancia[746] acerca del asunto *PS2*. El Grupo Especial considera que estos fallos no demuestran de por sí la existencia de una divergencia en la clasificación arancelaria entre los Estados miembros debido a la negativa de la autoridad aduanera del Reino Unido de retirar su revocación de la IAV que clasifica a la PS2 en la partida 8471.

[744] El Grupo Especial entiende que en la normativa aduanera de las CE no hay ninguna disposición que establezca que la retirada de la revocación de una IAV es vinculante de inmediato para las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros. Además, nosotros entendemos que en la normativa aduanera de las CE no existe ninguna disposición específica que obligue a las autoridades aduaneras de los Estados miembros a poner en conocimiento de la Comisión la retirada de la revocación de una IAV.

[745] *Sony Computer Entertainment Europe Ltd.* contra *Commissioners of Customs and Excise*, Judgement of the High Court of Justice, Chancery Division, [2005] EWHC 1644 (Ch), 27 de julio de 2005, (Estados Unidos - Prueba documental 70).

[746] CFI Judgement: Sony Computer Entertainment Europe Ltd. contra Commissioners of Customs and Excise, Asunto T-243/01, 30 de septiembre de 2003 (Estados Unidos - Prueba documental 12).

7.342 El Grupo Especial considera también que las circunstancias que rodean el asunto *PS2* podrían haber dado lugar a un caso de aplicación no uniforme, que infringiría el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 por otro concepto. En particular, en carta de fecha 12 de junio de 2001 las autoridades aduaneras del Reino Unido decidieron conceder a Sony una IAV que clasificaba la consola PS2 en la partida 8471, a pesar de que sabían que la adopción del Reglamento Nº 1400/2001 era inminente y haría que la PS2 quedase clasificada en la partida 9504.[747] Al conceder a Sony una IAV que clasificaba a la PS2 en la partida 8471, las autoridades aduaneras del Reino Unido indicaron claramente que la IAV se revocaría cuando se hubiera adoptado el Reglamento Nº 1400/2001. No obstante, es muy posible que entretanto otras autoridades aduaneras clasificaran a la PS2 en la partida 9504 en la inteligencia de que, con el tiempo, el Reglamento Nº 1400/2001 se aplicaría a este producto y requeriría su clasificación en la partida 9504. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente el Grupo Especial no ha obtenido ninguna prueba de que haya surgido una divergencia entre los Estados miembros respecto de la clasificación después de que la autoridad aduanera del Reino Unido emitiera una IAV que clasificaba a la PS2 en la partida 8471.

7.343 El Grupo Especial llega a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado que el hecho de que las autoridades aduaneras del Reino Unido no hayan retirado la revocación de la IAV con respecto a la clasificación arancelaria de la consola PS2 en el contexto del asunto PS2 represente un caso de aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

viii) Interpretación y aplicación de la modificación de una nota explicativa relativa a las videocámaras, en el asunto Videocámaras

Resumen de los argumentos de las partes

7.344 Los **Estados Unidos** sostienen que en una exposición del Sr. De Baere, especialista en derecho de aduana de las CE, se señala que las consecuencias de una nota explicativa pueden variar según el Estado miembro de que se trate. En algunos Estados miembros una nota explicativa puede recibir el mismo trato que un Reglamento, dándosele únicamente un efecto prospectivo. En otros Estados miembros una nota explicativa puede considerarse una aclaración de la situación jurídica, y surtir un efecto retroactivo.[748] Los Estados Unidos mencionan a título de ejemplo un asunto relativo a la clasificación de videocámaras. Lo que debía de decidirse en este asunto era si determinadas videocámaras habían de clasificarse en la partida arancelaria 8525 40 91 del Arancel Aduanero Común (con un arancel del 4,9 por ciento) o en la partida arancelaria 8525 40 99 (con un derecho del 14 por ciento).[749]

7.345 Los Estados Unidos observan que las videocámaras son clasificables en la partida 8525 40 91 si "[q]ue permitan la grabación de sonido e imágenes tomadas únicamente con la cámara", mientras que "las demás" videocámaras reúnen los criterios para clasificarse en la partida 8525 40 99. Los Estados Unidos sostienen que en julio de 2001 la Comisión introdujo una modificación en un nota explicativa anterior relativa a la partida 8525 40 99. La modificación preveía que la

[747] Observamos a este respecto que, si bien las Comunidades Europeas declararon en sus comunicaciones al Grupo Especial que "aunque la IAV en cuestión no debía haberse emitido, se trataba de un caso singular debido a las circunstancias muy específicas del asunto": respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 184 del Grupo Especial.

[748] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 26, en el que se hace referencia a la Prueba documental 59 presentada por los Estados Unidos.

[749] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 27, en el que se hace referencia al Reglamento Nº 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, por el que se modifica el Anexo I del Reglamento (CE) Nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al Arancel Aduanero Común, de 30 de octubre de 2004, página 573 (Estados Unidos - Prueba documental 60).

partida 8525 40 99 incluiría "videocámaras, en las que la entrada de video está tapada por una placa o por otro medio, y en las que el interfaz video se puede activarse posteriormente mediante un programa informático".[750] Los Estados Unidos sostienen que, de conformidad con la nota explicativa modificada, si una videocámara es susceptible de ciertas modificaciones debe clasificarse en la partida 8525 40 99, aunque en el momento de su importación pareciera poder clasificarse en la partida 8525 40 91.[751]

7.346 Los Estados Unidos alegan que, en vista de la nota explicativa modificada, dos Estados miembros (Francia y España) aplicaron derechos adicionales a determinadas videocámaras importadas antes de la modificación que había clasificado este producto en la partida 8525 40 91. Es decir, en vista de la nota explicativa, las autoridades aduaneras de estos Estados miembros revisaron la clasificación de una mercancía que ya había sido importada, percibiendo en consecuencia derechos de aduana adicionales. En cambio, las autoridades aduaneras de otros Estados miembros se abstuvieron de dar efecto retroactivo a la nota explicativa porque, a su juicio, la nota establecía efectivamente una nueva norma sustantiva, o sea, preveía la posibilidad de modificar el uso de las videocámaras después de su importación como un criterio para su clasificación. Los Estados Unidos sostienen que esto se vio claramente, por ejemplo, en el anuncio de la nota explicativa que publicaron las autoridades aduaneras del Reino Unido, en el que se decía que la nota "representa un cambio en la práctica del Reino Unido".[752] Así pues, según los Estados Unidos diferentes oficinas aduaneras de las CE aplicaron de un modo distinto la nota explicativa modificada a una misma situación, demostrando con ello que las Comunidades Europeas no aplican uniformemente su derecho aduanero e infringiendo en consecuencia el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[753]

7.347 Las **Comunidades Europeas** responden que la referencia de los Estados Unidos al asunto *Videocámaras* equivale a una refutación del argumento de las Comunidades según el cual las notas explicativas de las CE son un instrumento para garantizar la aplicación uniforme de las normas de clasificación comunitarias.[754] En cambio, según las Comunidades los Estados Unidos examinan este asunto para determinar si los Estados miembros pueden percibir los derechos adicionales a la importación que se impusieron antes de la publicación de la nota explicativa de las CE. Según las Comunidades Europeas, esta cuestión no tiene que ver con la utilidad de las notas explicativas como instrumentos para garantizar la aplicación uniforme de las normas de clasificación arancelaria. Además, según las Comunidades, los Estados Unidos no han demostrado que haya habido una falta de

[750] Aplicación uniforme de la Nomenclatura Combinada (NC), Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 6 de julio de 2001, página C 190/10 (Estados Unidos - Prueba documental 61). Notas explicativas a la Nomenclatura Combinada de las Comunidades Europeas, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 13 de julio de 2000, página 316 (Estados Unidos - Prueba documental 62).

[751] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 28.

[752] HM Customs & Excise, Tariff Notice 19/01, julio de 2001 (Estados Unidos - Prueba documental 63). Vorschriftensammlung Bundesfinanzverwaltung, VSF-Nachrichten N 46 2003, sec. I 3), 5 de agosto de 2003 (aviso aduanero de Alemania sobre la aplicación de las disposiciones de las CE relativas al reembolso/desgravación y recaudación de derechos de importación, con la traducción no oficial al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 64).

[753] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 29.

[754] En particular, las Comunidades Europeas sostienen que, al considerar el sistema comunitario de administración aduanera en el sector de la clasificación arancelaria, era necesario considerar todas sus características pertinentes, incluidas las notas explicativas. Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 262, 291 y 292; Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafos 38 y 39.

uniformidad en la clasificación arancelaria de las Comunidades Europeas después de la publicación de la mencionada nota explicativa.[755]

Análisis por el Grupo Especial

7.348 El Grupo Especial observa que, en lo esencial, la impugnación de los Estados Unidos en el contexto del asunto *Videocámaras* parece basarse en la alegación de que la modificación de una nota explicativa del Arancel Aduanero Común relativa a las videocámaras se interpretó y aplicó de manera distinta en diversos Estados miembros. Más concretamente, en el contexto del asunto *Videocámaras* los Estados Unidos sostienen que en algunos Estados miembros -el Reino Unido y Alemania- la nota explicativa se consideró equivalente a un Reglamento y surtió únicamente un efecto prospectivo. En otros Estados miembros -Francia y España- la nota se consideró una simple aclaración de una situación jurídica y se le atribuyó efecto retroactivo.[756]

7.349 A juicio del Grupo Especial, la interpretación y aplicación de las modificaciones de las notas explicativas del Arancel Aduanero Común por parte de las autoridades aduaneras de los Estados miembros constituyen un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación está comprendido en el mandato del Grupo Especial, por cuanto representa una instancia de aplicación del Arancel Aduanero Común en materia de clasificación arancelaria.[757]

7.350 El Grupo Especial puede apreciar que las diferencias en la interpretación y la aplicación de las modificaciones de las notas explicativas del Arancel Aduanero Común en los distintos Estados miembros pueden dar lugar a una aplicación no uniforme, con la consiguiente infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En particular, estas diferencias podrían hacer que a los importadores de productos idénticos se les concediera un trato arancelario desigual en los distintos Estados miembros. Por ejemplo, si un Estado miembro decidiera considerar que una modificación de las notas explicativas es una simple aclaración de la ley y, por consiguiente, aplicase retroactivamente la modificación, la consecuencia podría ser que los importadores que hubieran importado productos en dicho Estado miembro antes de que se modificase la nota explicativa deberían abonar un derecho exigido retroactivamente. Si, en cambio, otro Estado miembro decidiera considerar la modificación como un Reglamento sustantivo de clasificación y, en consecuencia, aplicarlo solo prospectivamente, esto significaría que los importadores que hubieran importado productos en este Estado miembro antes de la modificación de la nota explicativa no deberían pagar derechos con carácter retroactivo. A juicio del Grupo Especial, en el contexto del sistema comunitario de administración de aduanas, el hecho de que no se obligue a los Estados miembros a considerar del mismo modo una nota explicativa podría dar lugar a un caso de aplicación no uniforme, que infringiría el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[758] No obstante, el Grupo Especial observa que no se le han

[755] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafos 38 y 39.

[756] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafos 26 y 27.

[757] El Grupo Especial considera que, como mínimo, las modificaciones de las notas explicativas del Arancel Aduanero Común son "medidas relacionadas" con dicho Arancel. A este respecto, véase el párrafo 7.28 *supra*. Véase también el párrafo 7.175 *supra*.

[758] Observamos a este respecto que, de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Nº 2658/87, la Comisión debe publicar notas explicativas de la Nomenclatura Combinada. Las notas explicativas de la Nomenclatura Combinada no son jurídicamente vinculantes ni pueden modificar la Nomenclatura. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido en varias ocasiones que las notas explicativas son una ayuda importante para la interpretación de la Nomenclatura. Asunto C-396/02, *DFDS*, fallo de 16 de septiembre de 2004 (todavía no publicado), párrafo 28 (CE - Prueba documental 25); Asunto C-259/97, *Clees*, [1998] ECR I-8127, párrafo 12 (CE - Prueba documental 29).

proporcionado pruebas de que se haya producido realmente una aplicación no uniforme respecto de la interpretación y la aplicación de las notas explicativas modificadas relativas a las videocámaras, en el contexto del asunto *Videocámaras*.

7.351 En particular, los Estados Unidos se remiten principalmente a la presentación en PowerPoint del Sr. De Baere, especialista en normativa aduanera de las CE.[759] Según los Estados Unidos, en esta exposición se señalaba que las consecuencias de una nota explicativa podrían variar de un Estado miembro a otro.[760] Sin embargo, la única observación de la exposición que parece pertinente para las divergencias en la interpretación y aplicación de notas explicativas (y, es de suponer, para sus modificaciones) es que, con respecto a las videocámaras, "hay Estados miembros que dan una interpretación diferente al efecto retroactivo de la nota explicativa (Francia y España)".[761] El Grupo Especial toma nota de que la parte de la exposición del Sr. De Baere en la que figura esta declaración no contiene ninguna referencia a un material fáctico que corrobore la afirmación.

7.352 Sobre la base de la exposición del Sr. De Baere, los Estados Unidos tratan de contrastar la interpretación y aplicación de la modificación de la nota explicativa relativa a las videocámaras en Francia y España con la interpretación y aplicación de esta misma modificación en el Reino Unido y Alemania. A este propósito, los Estados Unidos se remiten al aviso arancelario del Reino Unido[762] y a un aviso de Alemania.[763] Sin embargo, procede señalar que el Grupo Especial no ha obtenido prueba alguna del trato dado a la mencionada nota explicativa modificada en Francia y en España.[764] A falta de estas pruebas, el Grupo Especial considera imposible extraer una conclusión sobre la existencia de una aplicación no uniforme de las notas explicativas modificadas entre las autoridades aduaneras de Francia y España por una parte y las del Reino Unido y Alemania por la otra.

---

[759] Philippe De Baere, "Coping with customs in the EU: The uniformity challenge: Judicial review of customs decisions and implementing legislation". Presentation at the ABA International Law Section, 27 de octubre de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 59).

[760] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 26, en el que se hace referencia a la exposición de Philippe De Baere, *Coping with customs in the EU: The uniformity challenge: Judicial review of customs decisions and implementing legislation*. Presentation at the ABA International Law Section, 27 de octubre de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 59).

[761] Philippe De Baere, "Coping with customs in the EU: The uniformity challenge: Judicial review of customs decisions and implementing legislation". Presentation at the ABA International Law Section, 27 de octubre de 2005, página 14 (Estados Unidos - Prueba documental 59).

[762] HM Customs & Excise, Tariff Notice 19/01, julio de 2001 (Estados Unidos - Prueba documental 63).

[763] Vorschriftensammlung Bundesfinanzverwaltung, VSF-Nachrichten N 46 2003, sec. I 3), 5 de agosto de 2003 (aviso aduanero de Alemania sobre la aplicación de las disposiciones de las CE relativas al reembolso/ desgravación y recaudación de derechos de importación, con la traducción no oficial al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 64).

[764] Esta nota explicativa fue modificada por un aviso de fecha 6 de julio de 2001 (Aplicación uniforme de la Nomenclatura Combinada, 6 de julio de 2001, página C 190/10 (Estados Unidos - Prueba documental 61)). Esta nota explicativa se refería a la interpretación de la subpartida 8525 40 99. El Grupo Especial observa que se le han proporcionado copias de la IAV que clasifica los productos en la partida arancelaria 8525 41 91, emitida por las autoridades aduaneras españolas en 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 65). Sin embargo, no hemos recibido ninguna prueba de que las autoridades aduaneras francesas y españolas aplicaran la nota explicativa modificada a los productos clasificados retroactivamente en la subpartida 8525 40 99, importados antes de julio de 2001.

7.353 Además, a juicio del Grupo Especial las pruebas presentadas respecto de la interpretación y aplicación de la nota explicativa modificada en el Reino Unido y Alemania no demuestran claramente que esos dos Estados miembros consideren que la nota explicativa es equivalente a un Reglamento sustantivo de clasificación y, por consiguiente, la apliquen prospectivamente, como afirman los Estados Unidos. Concretamente, el aviso arancelario del Reino Unido se limita a indicar que la nota explicativa modificada "representa un cambio en la práctica del Reino Unido", y no ofrece ninguna indicación sobre si la modificación asumirá un efecto prospectivo o retroactivo. El aviso alemán es una instrucción de la Administración Federal de Finanzas, que parece contener indicaciones generales acerca de la recaudación de derechos de importación en los casos en que se hayan modificado las notas explicativas, entre otros. A este respecto, el aviso de Alemania indica que: "en la medida en que los cambios de las notas explicativas constituyen modificaciones de su contenido, pueden aplicarse retroactivamente, o sea, que son aplicables también a las importaciones antes de su entrada en vigor. En otro casos en que, por ejemplo, los cambios de las notas explicativas constituyan un compromiso sustancial o una posición fundamental de carácter no concluyente, sólo se aplicarán prospectivamente respecto de la clasificación de la Nomenclatura Combinada."[765] En otras palabras, el aviso de Alemania tiende a indicar que las modificaciones de las notas explicativas pueden surtir efecto tanto retroactivo como prospectivo, según la naturaleza del cambio. Sin embargo, de ello no ha de inferirse que la modificación de la nota explicativa relativa al asunto *Videocámaras* deba considerarse prospectivamente, como afirman los Estados Unidos. De hecho, el aviso de Alemania no hace mención alguna al trato que deba darse a la nota explicativa en cuestión en el asunto *Videocámaras*.

7.354 Habiendo examinado todas las pruebas presentadas por los Estados Unidos, el Grupo Especial llega a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado que la interpretación y la aplicación de la nota explicativa modificada del Arancel Aduanero Común relativa a las videocámaras, en el contexto del asunto *Videocámaras,* represente una divergencia entre los Estados miembros, con la consiguiente infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

ix) Resumen y conclusiones

7.355 En resumen, el Grupo Especial constata que, con respecto a las alegaciones estadounidenses de aplicaciones no uniformes del Arancel Aduanero Común en materia de clasificación arancelaria:

a) Desde 1990 hasta 1995 las Comunidades Europeas no aplicaron de modo uniforme el Arancel Aduanero Común respecto de la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales, infringiendo con ello el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, actualmente la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales no representa un caso de aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por consiguiente, el Grupo Especial no ha constatado ninguna infracción del mencionado párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales.

b) La clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo no representa una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por consiguiente, el Grupo Especial no ha constatado ninguna infracción

[765] Vorschriftensammlung Bundesfinanzverwaltung, VSF-Nachrichten N 46 2003, sec. I 3), 5 de agosto de 2003 (Aviso aduanero de Alemania sobre la aplicación de las disposiciones de las CE relativas al reembolso/ desgravación y recaudación de derechos de importación, con la traducción no oficial al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 64).

del mencionado párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo.

c) Los Estados Unidos no han demostrado que la clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex represente una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

d) El trámite administrativo previo a la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas representa una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por consiguiente, el Grupo Especial constata la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas.

e) La clasificación arancelaria de los monitores de pantalla de cristal líquido con interfaz videodigital equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por consiguiente, el Grupo Especial constata la existencia de una infracción del mencionado párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la clasificación arancelaria de los monitores de pantalla de cristal líquido con interfaz videodigital.

f) Los Estados Unidos no han demostrado que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no hayan considerado vinculantes las IAV emitidas por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros, y que esto equivalga a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

g) Los Estados Unidos no han demostrado que la negativa a retirar la revocación de la IAV por parte de las autoridades aduaneras del Reino Unido con respecto a la clasificación arancelaria de la consola PlayStation2 de Sony en el contexto del asunto *PlayStation2 de Sony* equivalga a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

h) Los Estados Unidos no han demostrado que la interpretación y aplicación de las notas explicativas modificadas del Arancel Aduanero Común relativas a las videocámaras en el contexto del asunto *Videocámaras* represente una aplicación no uniforme, con la consiguiente infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

c) Alegaciones de aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y del Reglamento de Aplicación en la esfera de la valoración en aduana

i) Pagos de cánones

Resumen de los argumentos de las partes

7.356 Los **Estados Unidos** señalan que el Tribunal de Cuentas de las CE constató en su informe que, en varios casos, distintos Estados miembros asignaron de manera diferente los cánones al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa. Los Estados Unidos sostienen que el Tribunal constató que, en los casos identificados, los Estados miembros en cuestión no

señalaron el trato diferente a la atención del Comité del Código Aduanero o que éste no examinó el asunto.[766]

7.357 En respuesta, las **Comunidades Europeas** observan que el régimen de los cánones está regulado por la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario. Las Comunidades Europeas sostienen que no es correcto decir que distintos Estados miembros asignaron los cánones de manera diferente al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa ya que los ejemplos a que se refiere el Tribunal de Cuentas afectaban fundamentalmente a distintas filiales establecidas en varios Estados miembros.[767] Las Comunidades Europeas añaden que, a raíz del informe del Tribunal de Cuentas de las CE, la Comisión y el Comité del Código Aduanero trabajaron en los casos examinados por el Tribunal de Cuentas para aclarar las cuestiones y establecer si había existido falta de uniformidad. Según las Comunidades Europeas, en la mayoría de los casos se confirmó que las cuestiones de que se trataba eran simplemente cuestiones de hecho relativas al establecimiento de las condiciones de la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario. Las Comunidades Europeas aducen que, en vista de que no se constató una falta de uniformidad sistemática, se llegó a la conclusión de que no era necesario modificar el Código Aduanero Comunitario ni el Reglamento de Aplicación.[768]

7.358 Los **Estados Unidos** sostienen que, aunque las afirmaciones de las Comunidades Europeas fueran correctas, seguirían sin refutar las constataciones más generales que figuran en el informe del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas constató que entre las "debilidades" en la aplicación de las normas de valoración en aduana de las Comunidades Europeas figuran, entre otras, la "ausencia de unas normas de control y unos métodos de trabajo comunes", la "ausencia de un tratamiento común a los operadores que actúen en varios Estados miembros", y la "ausencia de disposiciones legislativas comunitarias que permitan establecer decisiones sobre valor en aduana a escala comunitaria".[769]

Análisis por el Grupo Especial

7.359 El Grupo Especial observa que, en esencia, los Estados Unidos alegan que existen diferencias entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros en cuanto a la manera en que se asignan los cánones al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa.[770] Los Estados Unidos indicaron en sus comunicaciones que impugnan específicamente la aplicación en las Comunidades Europeas de la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario con respecto al tratamiento de los pagos de cánones a afectos de valoración en aduana.[771]

7.360 A juicio del Grupo Especial, la manera en que se asignan los cánones al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es un asunto comprendido

[766] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 86, en el que se hace referencia al Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafo 58 a 61 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[767] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 392.

[768] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 393.

[769] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 c) del Grupo Especial, donde se hace referencia al Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafo 86 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[770] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 86, en el que se hace referencia al Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafos 58 a 61 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[771] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial.

en el mandato del Grupo Especial puesto que equivale a un caso de aplicación de la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario en la esfera de valoración en aduana.[772]

7.361 Con respecto a la cuestión de si la manera en que las autoridades aduaneras de los Estados miembros asignan los cánones al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa es o no "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que ha formulado en el párrafo 7.135 *supra* de que se exige la uniformidad geográfica en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Es decir, la aplicación deberá ser uniforme en distintos lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial recuerda también la constatación que figura en el párrafo 7.135 *supra* en el sentido de que al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 deberán tenerse en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos con respecto a la manera en que se asignan los cánones al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa es de carácter limitado. Afecta a la aplicación de una sola disposición del Código Aduanero Comunitario, a saber, la letra c) del apartado 1 del artículo 32. Por consiguiente, dado el carácter limitado de esta impugnación, el Grupo Especial considera que se necesita un alto grado de uniformidad a efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Pasamos seguidamente a examinar los hechos para determinar si se ha logrado o no este alto grado de uniformidad con respecto a la manera en que se asignan los cánones al valor en aduana.

7.362 La letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario dispone lo siguiente:

> "Para determinar el valor en aduana en aplicación del artículo 29 [del Código Aduanero Comunitario], se sumarán al precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías importadas:
>
> …
>
> c) los cánones y derechos de licencia relativos a las mercancías objeto de valoración, que el comprador esté obligado a pagar, directa o indirectamente, como condición de la venta de dichas mercancías objeto de valoración, en la medida en que tales cánones y derechos de licencia no estén incluidos en el precio efectivamente pagado o por pagar".

7.363 La única prueba en que se basan los Estados Unidos para justificar su alegación de que la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario no se aplica de manera uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, figura en el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de fecha 14 de marzo de 2001.[773] Examinaremos sucesivamente cada uno de los aspectos pertinentes del informe.

---

[772] A este respecto, véanse los párrafos 7.183 a 7.187 *supra*.

[773] A modo de información básica, el Grupo Especial señala que en el informe del Tribunal de Cuentas se indica lo siguiente:

> "La fiscalización tuvo lugar en la Comisión y en todos los Estados miembros, salvo en los tres que pasaron a formar parte de la Unión el 1º de enero de 1995 (Austria, Finlandia y Suecia). También se visitaron la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas.

7.364 *En primer lugar*, en el informe del Tribunal de Cuentas de las CE se hacen observaciones de carácter general con respecto a la aplicación de las disposiciones sobre los cánones contenidas en la legislación aduanera comunitaria:

> "Los cánones y los derechos de licencia pueden incluirse en el precio de la factura de las mercancías importadas o aparecer por separado en la factura junto con el precio básico. También pueden calcularse anualmente como un porcentaje del valor total de las ventas de mercancías importadas. …
>
> …
>
> La Comisión ha dedicado un esfuerzo considerable a garantizar una aplicación homogénea de las normas. Pese a ello, el Tribunal detectó varios casos de tratamiento aparentemente diferente entre los Estados miembros. Dada la actual diversidad de métodos de control dentro de la unión aduanera, esto no resulta sorprendente."[774]

7.365 A juicio del Grupo Especial, si bien el pasaje del informe del Tribunal de Cuentas de las CE que se expone en el párrafo anterior indica la existencia de un "tratamiento … diferente" en el contexto de las normas aduaneras comunitarias sobre los cánones, no ofrece ningún detalle sobre la naturaleza del tratamiento diferente. Por lo tanto, el Grupo Especial considera que estas declaraciones son por sí mismas una base insuficiente para inferir que el "tratamiento … diferente" en cuestión corresponde a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.366 *En segundo lugar*, en el informe del Tribunal de Cuentas de las CE se alude al pago realizado por una empresa concreta de derechos de aduana sobre los cánones en algunos Estados miembros, pero aparentemente no en otros. Concretamente, en el informe se indica lo siguiente:

> "En un caso, la autoridad aduanera del Estado miembro en que se hallaba situada la sede de la empresa consideró que se podían aplicar tres tipos de categorías de operaciones a efectos de valoración en aduana. Todas eran legales y en algunos casos se podían incluir en la valoración en aduana cánones y otros pagos. Si el análisis de esta autoridad aduanera es correcto, es bastante probable que la valoración en aduana de las importaciones efectuadas por la empresa en seis de los siete Estados miembros examinados por el Tribunal sea incorrecta. En 1997 la empresa en cuestión pagó más

---

> La fiscalización incluyó un examen de documentos tratados en el Comité del valor en aduana de la Comisión, de expedientes de auditoría elaborados por las autoridades aduaneras en materia de valoración en aduana, decisiones escritas relativas a la valoración, decisiones de tribunales de apelación y declaraciones de aduana propiamente dichas. Se examinaron expedientes y documentación sobre procedimientos de valoración en aduana correspondientes a más de 200 empresas y grupos de empresas.
>
> Para seleccionar su muestra, el Tribunal utilizó una lista predeterminada de las 50 empresas comerciales más importantes a escala mundial, combinada con listas obtenidas en cada Estado miembro visitado de las 50 empresas más importantes en términos de derechos de aduana constatados.": Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de 14 de marzo de 2001, párrafos 9 a 11 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[774] Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de 14 de marzo de 2001, párrafos 55 a 57 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

> de 43 millones de euros de derechos de aduana en estos siete Estados miembros. Los incrementos aplicados a los cánones por las distintas aduanas nacionales oscilaban entre el 0 por ciento y el 10 por ciento del valor de las mercancías importadas."[775]

7.367 El Grupo Especial observa que la declaración del Tribunal de Cuentas de las CE citado en el párrafo anterior se refiere a "tres tipos de categorías de operaciones" en las que intervino la empresa en cuestión, algunas de las cuales aparentemente entrañaron el pago de derechos de aduana sobre los cánones. La cita alude a la existencia de errores al evaluar estas operaciones por parte de varios Estados miembros, pero el informe no contiene información suficiente para que lleguemos a la conclusión de que tales errores dieron lugar a una aplicación no uniforme, con infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. La última frase de la cita indica que los incrementos "aplicados a los cánones por las distintas aduanas nacionales" pagaderos por la empresa en cuestión "oscilaban entre el 0 por ciento y el 10 por ciento". El Grupo Especial considera que, cuando se lee en su contexto, esta declaración no indica necesariamente que exista una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 dado que no está claro si las distintas cuantías de los incrementos aplicados a los cánones correspondían o no al hecho de que se trataba de operaciones materialmente distintas, lo que podría inferirse de la primera frase de la cita.

7.368 *En tercer lugar*, en el informe del Tribunal de Cuentas de las CE se hace referencia a otro caso en el que una empresa determinada pagó derechos de aduana sobre los cánones en algunos Estados miembros pero al parecer no en otros. Concretamente, en el informe se dice lo siguiente:

> "En otro caso, la mayoría de las importaciones a la Comunidad de una empresa pasaron por un centro de distribución de un Estado miembro. La autoridad aduanera de dicho Estado decidió que ninguno de los pagos de cánones efectuado por la empresa formaba parte del valor en aduana. El Tribunal observó que en cinco de los Estados miembros en los que el operador había importado anteriormente mercancías, las autoridades aduaneras habían percibido derechos al menos sobre parte del canon y otros pagos adicionales efectuados por el importador.
>
> En este caso algunos Estados miembros habían intercambiado información. No obstante, teniendo en cuenta las distintas soluciones y el tiempo transcurrido, las autoridades de los Estados miembros claramente tenían dificultades para aceptar que las principales cuestiones sobre valor en aduana eran las mismas. La empresa pagó más de 33 millones de euros de derechos de aduana en 1998. Pese a su objetivo declarado de mantener unas condiciones equivalentes para los operadores en los Estados miembros … la Comisión no examinó el procedimiento de valoración en aduana de esta empresa."[776]

7.369 El Grupo Especial señala que el pasaje del informe del Tribunal de Cuentas de las CE enunciado en el párrafo anterior tiende a indicar la existencia de diferencias en el tratamiento de los pagos de cánones a efectos de valoración en aduana entre los Estados miembros. En concreto, en el informe se menciona el hecho de que la autoridad aduanera de un Estado miembro decidió que los pagos de cánones efectuados por un importador determinado no formaban parte del valor en aduana, mientras que las autoridades aduaneras de otros cinco Estados miembros a los que el importador había importado previamente mercancías incluyeron los pagos de cánones como parte del valor en aduana. No obstante, se plantea la pregunta de si las operaciones en cuestión eran o no realmente idénticas.

---

[775] Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de 14 de marzo de 2001, párrafo 58 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[776] Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de 14 de marzo de 2001, párrafo 60 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

7.370 En cuanto a la pregunta de si las operaciones en cuestión eran o no realmente idénticas, en el informe se indica que las autoridades aduaneras de un Estado miembro decidieron que los pagos de cánones efectuados por una empresa determinada *no* formaban parte del valor en aduana pero estaba claro que, en el caso de ese Estado miembro, las importaciones pasaron por un centro de distribución. En el informe no se indica que las importaciones realizadas a otros Estados miembros, donde las autoridades aduaneras decidieron que los pagos de cánones efectuados por una empresa determinada *formaban* parte del valor en aduana, pasaran también por un centro de distribución. Por lo tanto, es imposible saber si las operaciones en cuestión eran o no realmente idénticas. En síntesis, el Grupo Especial considera que el informe del Tribunal de Cuentas de las CE no contiene información suficiente para saber si el "tratamiento diferente" en el contexto de las normas aduaneras comunitarias sobre los cánones constituía o no una aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[777]

7.371 El Grupo Especial llega a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado que existan diferencias entre los Estados miembros con respecto a la manera en que se asignan los cánones al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa que equivalgan a una aplicación no uniforme de la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

ii) Valoración sobre una base distinta al valor de transacción de la última venta (*o "venta sucesiva*")

Resumen de los argumentos de las partes

7.372 Según los **Estados Unidos**, el Tribunal de Cuentas de las CE constató en su informe que, con respecto a la aplicación de la norma que permite en algunos casos que las mercancías importadas sean valoradas sobre una base distinta del valor de transacción de la última venta que llevó a la introducción de las mercancías en el territorio aduanero de las Comunidades Europeas, las autoridades de algunos Estados miembros exigían a los importadores que obtuvieran la aprobación previa para la valoración sobre una base distinta del valor de transacción de la última venta, mientras que las autoridades de otros Estados miembros no imponían ese requisito.[778] Los Estados Unidos aducen también que es significativo no sólo que algunas autoridades aduaneras de las CE apliquen el apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación exigiendo una forma de aprobación previa, mientras que otros no, sino también que la aprobación previa obtenida de la autoridad aduanera

[777] El Grupo Especial señala a este respecto que la finalidad del informe del Tribunal de Cuentas de las CE no consistía en cerciorarse de la existencia o inexistencia de aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En el párrafo 12 del informe se indica lo siguiente: "El objetivo general de la fiscalización era examinar la exactitud y la coherencia de la valoración en aduana de las mercancías importadas a la Unión Europea. La fiscalización trató de determinar: a) cómo se han incorporado a la legislación comunitaria las normas internacionales en materia de valoración en aduana; b) qué medidas toman la Comisión o los Estados miembros para garantizar la adecuada aplicación de las normas comunitarias sobre valoración en aduana y qué procedimientos de control han establecido las autoridades aduaneras de los Estados miembros para cumplir los requisitos de la legislación comunitaria; c) en qué medida se aplica coherentemente la legislación comunitaria con respecto a las importaciones, en particular las efectuadas por empresas que operen en más de un Estado miembro.": Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de 14 de marzo de 2001, párrafo 60 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[778] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 87, en el que se hace referencia al Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafo 64 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

comunitaria en una región no tenga fuerza vinculante en otras partes del territorio de las Comunidades Europeas.[779]

7.373 En respuesta, las **Comunidades Europeas** sostienen que las condiciones con arreglo a las cuales se puede utilizar una venta distinta de la última venta como base para determinar el valor de transacción se exponen en el artículo 147 del Reglamento de Aplicación.[780] Las Comunidades Europeas aducen que, mientras que los Estados Unidos alegan que el Tribunal de Cuentas de las CE "constató que las autoridades de algunos Estados miembros exigían a los importadores que obtuvieran la aprobación previa para la valoración sobre una base distinta del valor de transacción de la última venta", el Tribunal de Cuentas simplemente dijo que "*en la práctica* algunas autoridades aduaneras imponen *una forma de aprobación previa*". Las Comunidades Europeas aducen que, en contra de la impresión que dan los Estados Unidos, no existe ninguna forma de requisito legal de aprobación previa para poder basarse en una venta anterior.[781] Además, dada la posible complejidad de esta cuestión, no resulta irrazonable que una autoridad aduanera aliente a los comerciantes que deseen basarse en la posibilidad de establecer el valor de transacción sobre la base de una venta anterior a que esta cuestión se resuelva con antelación. Las Comunidades Europeas sostienen que, en todo caso, a su juicio esa práctica constituye una diferencia de importancia secundaria en la práctica administrativa, que no equivale a una falta de uniformidad incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[782]

7.374 Los **Estados Unidos** sostienen que no existe diferencia entre exigir legalmente a los importadores que obtengan la aprobación previa e imponer en la práctica una forma de aprobación previa.[783] Además, los Estados Unidos no están de acuerdo en que las diferencias en cuestiones relativas a la aplicación del apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación constituyan "diferencias de importancia secundaria". Los Estados Unidos aducen que, desde el punto de vista del comerciante, si tiene que obtener la aprobación previa para poder basar el valor en aduana en una venta distinta de la última, eso resultaría pertinente para decidir si introduce sus mercancías en las Comunidades Europeas. A este respecto, los Estados Unidos sostienen que no existe fundamento alguno para la tesis de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se infringe sólo mediante la aplicación no uniforme que afecta a la deuda aduanera definitiva del comerciante, pero no mediante la aplicación no uniforme que afecta a la carga que soporta o el riesgo que afronta el comerciante.[784]

7.375 Las **Comunidades Europeas** aducen que, sobre la base de un estudio de las prácticas de las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros, pueden confirmar que ningún Estado miembro, ni legalmente ni en la práctica, impone un requisito de aprobación previa con respecto a las condiciones con arreglo a las cuales se puede utilizar una venta distinta de la última como base para

[779] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 d) del Grupo Especial.

[780] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 394.

[781] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 395.

[782] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 396.

[783] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 d) del Grupo Especial, donde se hace referencia a la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 394 a 396.

[784] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 d) del Grupo Especial, donde se hace referencia al informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafos 11.91 a 11.93.

establecer el valor de transacción a efectos de valoración en aduana. Según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba en sentido contrario.[785]

Análisis por el Grupo Especial

7.376 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos impugnan la aplicación del apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación. Concretamente, alegan que en algunos Estados miembros en la práctica se exige a los importadores que obtengan la aprobación previa para efectuar la valoración sobre una base distinta del valor de transacción de la última venta (también conocida como "venta sucesiva"), mientras que las autoridades de otros Estados miembros no imponen ese requisito.[786] Además, según los Estados Unidos, la aprobación previa obtenida de la autoridad aduanera de un Estado miembro no tiene fuerza vinculante en otras partes de las Comunidades Europeas.[787]

7.377 A juicio del Grupo Especial, la imposición de requisitos relativos a la aprobación para realizar la valoración sobre una base distinta del valor de transacción de la última venta constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es un asunto comprendido en el mandato del Grupo Especial puesto que equivale a un caso de aplicación del apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación en la esfera de valoración en aduana.[788]

7.378 Con respecto a la cuestión de si la imposición en los Estados miembros de requisitos relativos a la aprobación para realizar la valoración sobre una base distinta del valor de transacción de la última venta es o no "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que ha formulado en el párrafo 7.135 *supra* de que se exige la uniformidad geográfica en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Es decir, la aplicación deberá ser uniforme en distintos lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial recuerda también la constatación que figura en el párrafo 7.135 *supra* en el sentido de que al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 deberán tenerse en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos con respecto a la imposición de requisitos relativos a la aprobación para efectuar la valoración sobre una base distinta del valor de transacción de la última venta es de carácter limitado. Afecta a la aplicación de una sola disposición del Reglamento de Aplicación, a saber, el apartado 1 del artículo 147. Por lo tanto, dado el carácter limitado de esta impugnación, el Grupo Especial considera que se necesita un alto de grado de uniformidad a efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Examinaremos seguidamente los hechos para determinar si se ha logrado o no este alto grado de uniformidad con respecto a la aplicación del apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación en relación con la imposición de requisitos relativos a la aprobación para realizar la valoración sobre una base distinta del valor de transacción de la última venta.

7.379 El apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación dispone lo siguiente en la parte pertinente:

---

[785] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 d) del Grupo Especial.

[786] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 87.

[787] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 d) del Grupo Especial.

[788] A este respecto, véanse los párrafos 7.183 a 7.187 *supra*.

> "1. A efectos del artículo 29 del Código, el hecho de que las mercancías objeto de una venta se declaren para su despacho a libre práctica deberá considerarse una indicación suficiente de que han sido vendidas para su exportación al territorio aduanero de la Comunidad. En el caso de ventas sucesivas antes de la valoración, esta indicación sólo servirá respecto a la última venta a partir de la cual se introdujeron las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad, o respecto a una venta en el territorio aduanero de la Comunidad anterior al despacho a libre práctica de las mercancías.
>
> Deberá demostrarse a satisfacción de las autoridades aduaneras, en el momento en que tenga lugar la declaración del precio relativo a una venta que precede a la última venta a partir de la cual se hayan introducido las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad, que se ha concluido tal venta con vistas a la exportación a dicho territorio."

7.380 La única prueba en que se basan los Estados Unidos para justificar su alegación de que el apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación no se aplica de manera uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, figura en el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de fecha 14 de marzo de 2001.

7.381 En la parte pertinente del informe del Tribunal se indica lo siguiente:

> "El Tribunal no pudo identificar totalmente en qué medida los importadores utilizan o tratan de utilizar la disposición de las ventas sucesivas. Una razón de ello es que, a diferencia de otras disposiciones en materia de aduanas, para aplicar esta disposición no existe ningún requisito legal que obligue al importador a obtener permiso o autorización previa. Sin embargo, el Tribunal observó que en la práctica algunas autoridades aduaneras imponen una forma de aprobación previa, aunque no exista una base para ello en el Derecho comunitario. Como en otros aspectos de la valoración en aduana, el Tribunal observó variaciones en el grado en que las autoridades aduaneras permiten el uso de la disposición o se consultan entre sí. El Tribunal ha constatado que determinados importadores utilizan la disposición de las ventas sucesivas en uno o más Estados miembros, pero no en otros, y ha llamado la atención de la Comisión sobre algunos ejemplos significativos de incoherencia."[789]

7.382 El Grupo Especial observa que, en la parte del informe del Tribunal de Cuentas de las CE citado en el párrafo anterior, el Tribunal señaló la existencia de una "práctica" de las autoridades aduaneras de imponer una forma de aprobación previa con respecto a la disposición sobre las ventas sucesivas de legislación aduanera comunitaria, a saber el apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación. El Tribunal indicó específicamente que dicha práctica no tiene base en el derecho comunitario y no se sigue en otros Estados miembros. Durante las actuaciones del Grupo Especial las Comunidades Europeas adujeron que, sobre la base de un estudio de las prácticas de las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros, ningún Estado miembro, ni legalmente ni en práctica, imponen un requisito de aprobación previa con respecto a las condiciones en que puede utilizarse una venta distinta de la última venta como base para establecer el valor de transacción a efectos de valoración en aduana.[790] Sin embargo, cuando el Grupo Especial dio traslado del informe provisional

[789] Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de 14 de marzo de 2001, párrafo 64 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[790] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 d) del Grupo Especial.

a las partes, las Comunidades Europeas no habían presentado ninguna prueba para justificar su afirmación en ese sentido.[791] Además, en aquel momento no se había facilitado al Grupo Especial ninguna prueba que sugiriera que la práctica de algunas autoridades aduaneras de imponer una forma de aprobación previa que el Tribunal de Cuentas de las CE había identificado en su informe hubiera sido rectificada desde entonces en las Comunidades Europeas. El Grupo Especial considera que las pruebas que indican claramente la imposición de un requisito por los Estados miembros, ya sea en la práctica o como una cuestión de derecho, que no esté justificado por el derecho comunitario y que no se aplica en otros Estados miembros, como las que figuran en el informe del Tribunal de Cuentas de las CE con respecto a la disposición sobre las ventas sucesivas, contradicen directamente la obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.383 Por lo tanto, el Grupo Especial llega a la conclusión de que la aplicación del apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación en las Comunidades Europeas no es uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, en la medida en que las autoridades aduaneras de algunos Estados miembros imponen una forma de aprobación previa con respecto a la disposición sobre las ventas sucesivas, que es incompatible con la legislación aduanera de las CE, en tanto que las autoridades aduaneras de otros Estados miembros no lo hacen. El Grupo Especial señala a este respecto que la práctica de imponer una forma de aprobación previa con respecto a la disposición sobre las ventas sucesivas da lugar a efectos desfavorables, reales o posibles, en el entorno comercial en el sentido de que puede influir en qué Estado miembro decide el comerciante efectuar la importación.

7.384 En cuanto a la alegación de los Estados Unidos de que las Comunidades Europeas también han infringido el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 porque la aprobación previa obtenida de la autoridad aduanera en un Estado miembro no tiene fuerza obligatoria en otras partes de las Comunidades Europeas, el Grupo Especial observa que los Estados Unidos no han aportado pruebas para justificar esta alegación. Por consiguiente, consideramos que los Estados Unidos no han cumplido la obligación de acreditar *prima facie* que la aplicación del apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación no es uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, porque la aprobación previa obtenida de la autoridad aduanera en un Estado miembro no tiene fuerza obligatoria en otras partes de las Comunidades Europeas.

7.385 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Especial constata que la imposición por las autoridades aduaneras de algunos Estados miembros de una forma de aprobación previa con respecto a la disposición sobre las ventas sucesivas, que es incompatible con la legislación aduanera de las CE y que no imponen las autoridades aduaneras en otros Estados miembros, significa que las Comunidades Europeas no aplican su legislación aduanera sobre las ventas sucesivas -en particular el apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación- de manera uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

iii) Costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía

Resumen de los argumentos de las partes

7.386 Los **Estados Unidos** sostienen que el Tribunal de Cuentas de las CE señala en su informe que distintos Estados miembros han adoptado diferentes posiciones acerca de si los costes de reparación

[791] El Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas estaban obligadas a presentar esas pruebas en vista de los aspectos del informe del Tribunal de Cuentas de las CE a que se hace referencia en el párrafo 7.381 *supra*, que tienden a poner en tela de juicio la afirmación de las Comunidades Europeas en este sentido.

de automóviles cubiertos por la garantía del vendedor deben deducirse del valor en aduana.[792] Según los Estados Unidos, al menos en un Estado miembro -a saber, Alemania- el Tribunal constató que las autoridades aduaneras reducían el valor en aduana de los vehículos importados por el valor de las reparaciones efectuadas en el territorio de las Comunidades Europeas y que eran reembolsadas por el vendedor extranjero. Otros Estados miembros -en particular, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido- rechazaron solicitudes similares de reducciones del valor en aduana. Los Estados Unidos sostienen que el Tribunal observó que la Comisión había conocido el tratamiento diferente entre los Estados miembros al menos durante 10 años y no había adoptado ninguna medida para conciliar la diferencia.[793]

7.387 En respuesta, como cuestión preliminar, las **Comunidades Europeas** observan que en el informe del Tribunal de Cuentas de las CE se confirma que la Comisión no estaba informada del tratamiento diferente entre los Estados miembros durante 10 años. El Tribunal simplemente mencionó que la práctica de valoración alemana, que, en contra de la Comisión, consideraba injustificada, había sido conocida durante 10 años.[794] Las Comunidades Europeas sostienen que cuando, mediante el informe del Tribunal de Cuentas, resultó evidente que existían diferencias entre los Estados miembros en el tratamiento de los costes de reparación cubiertos por garantía, la Comisión, tras examinar atentamente la cuestión y efectuar debidamente consultas con el Comité del Código Aduanero, adoptó el Reglamento (CE) Nº 444/2002 de la Comisión, de 11 de marzo de 2002, que introdujo una versión modificada del artículo 145 en el Reglamento de Aplicación y aborda específicamente la cuestión planteada en el informe del Tribunal de Cuentas.[795] Según las Comunidades Europeas, con esta modificación se ha aclarado suficientemente la cuestión de las garantías y se ha garantizado la aplicación uniforme de la legislación de las CE en materia de valoración. A juicio de las Comunidades Europeas, el ejemplo demuestra que las Comunidades Europeas son perfectamente capaces de detectar y corregir las prácticas no uniformes en caso de que surjan.[796] Además, las Comunidades Europeas señalan que, en una cuestión compleja de valoración en aduana, ellas mismas detectaron el problema y adoptaron las medidas necesarias para corregirlo. En consecuencia, en lugar de demostrar algún fallo en el sistema de las Comunidades Europeas, el ejemplo de los costes de reparación cubiertos por una garantía demuestra que el sistema de administración aduanera de las CE funciona correctamente.[797]

7.388 En respuesta, los **Estados Unidos** sostienen que, como se explica en el informe del Tribunal de Cuentas de las CE, en un informe de 1990 se informó por primera vez a la Comisión de la existencia de una práctica incoherente de los Estados miembros. El hecho de que un caso de aplicación no uniforme que se señaló por primera vez a la atención de la Comisión en 1990 se resolviera mediante un reglamento adoptado en 2002 difícilmente demuestra que el sistema funcione

[792] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 25, en el que se hace referencia al Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (valoración en aduana), acompañado de las respuestas de la Comisión, párrafos 73 a 74, de 14 de marzo de 2001 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[793] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 88, en el que se hace referencia al Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafos 73 a 74, de 14 de marzo de 2001 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[794] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, nota 194.

[795] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 397, en el que se hace referencia a las Pruebas documentales 89 y 37 presentadas por las CE, páginas 14 a 19.

[796] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 398.

[797] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 156.

de manera compatible con la obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[798] Además, los Estados Unidos sostienen que si bien el reglamento citado por las Comunidades Europeas parece resolver la cuestión del tratamiento de los costes de reparación cubiertos por garantía, lo que es notable es que las Comunidades Europeas necesitaran 12 años para resolver este asunto.[799] Según los Estados Unidos, un sistema que lleva a resolver la aplicación no uniforme 12 años después de que se señalara a la atención de la autoridad pertinente difícilmente satisface el requisito de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[800]

Análisis por el Grupo Especial

7.389 El Grupo Especial observa que, cuando los Estados Unidos enumeraron las "constataciones subsidiarias" solicitadas con respecto a las esferas específicas de la administración aduanera que alegan que las Comunidades Europeas aplican de manera no uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, no mencionaron la aplicación de las normas de valoración de las Comunidades Europeas en casos que afectasen a los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía.[801] No obstante, en otras partes de sus comunicaciones los Estados Unidos alegaron efectivamente diferencias entre los Estados miembros acerca de si los costes de reparación de automóviles cubiertos por la garantía del vendedor debían deducirse o no del valor en aduana.[802] En vista de estas alegaciones, el Grupo Especial considera que tiene que examinarlas.

7.390 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos impugnan supuestas diferencias en los enfoques adoptados por las autoridades aduaneras de los Estados miembros acerca de si los costes de reparación de automóviles cubiertos por garantía del vendedor deben deducirse o no del valor en aduana.[803] El Grupo Especial entiende que, al alegar la existencia de diferencias entre los Estados miembros acerca de si los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor deben deducirse o no del valor en aduana, los Estados Unidos impugnan implícitamente la aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario.

7.391 A juicio del Grupo Especial, la deducción (o no) de los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es un asunto comprendido en el mandato del Grupo Especial puesto que equivale a un caso de aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario en la esfera de valoración en aduana.[804]

---

[798] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4 del Grupo Especial.

[799] Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafos 73 y 74 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[800] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 25 del Grupo Especial.

[801] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial.

[802] Véase, por ejemplo, la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 88 y 89.

[803] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 25, en el que se hace referencia al Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (valoración en aduana), acompañado de las respuestas de la Comisión, párrafos 73 y74, de 14 de marzo de 2001 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[804] A este respecto, véanse los párrafos 7.183 a 7.187 *supra*.

7.392 Con respecto a la cuestión de si la deducción (o no) de los costes de reparación de vehículos cubiertos por una garantía del vendedor en los Estados miembros es o no "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que ha formulado en el párrafo 7.135 *supra* de que se exige la uniformidad geográfica en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Es decir, la aplicación deberá ser uniforme en distintos lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial recuerda también la constatación que figura en el párrafo 7.135 *supra* en el sentido de que al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 deberán tenerse en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos con respecto a la deducción (o no) de los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor es de carácter limitado. Afecta a la aplicación de una sola disposición del Código Aduanero Comunitario, a saber, la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario. Por consiguiente, dado el carácter limitado de esta impugnación, el Grupo Especial considera que se necesita un alto grado de uniformidad a efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Pasamos seguidamente a examinar los hechos para determinar si se ha logrado o no este alto grado de uniformidad con respecto a la aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario en relación con la deducción (o no) de los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor en los Estados miembros.

7.393 La letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario dispone lo siguiente:

> "El precio efectivamente pagado o por pagar será el pago total que, por las mercancías importadas, haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste, y comprenderá todos los pagos efectuados o por efectuar, como condición de la venta de las mercancías importadas, por el comprador al vendedor o por el comprador a una tercera persona para satisfacer una obligación del vendedor. El pago no tendrá que hacerse necesariamente en efectivo; podrá efectuarse mediante cartas de crédito o instrumentos negociables, y directa o indirectamente."

7.394 La única prueba en que se basan los Estados Unidos para justificar su alegación de que la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario no se aplica de manera uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, figura en el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de fecha 14 de marzo de 2001. Examinaremos sucesivamente cada uno de los aspectos pertinentes de ese informe.

7.395 *En primer lugar*, en el informe del Tribunal de Cuentas de las CE se hacen observaciones generales sobre la aplicación de la legislación aduanera de las CE con respecto a los costes de reparación de los vehículos cubiertos por garantía del vendedor:

> "Los fabricantes con frecuencia ofrecen una garantía sobre sus productos. Dichas garantías significan que se indemnizará al comprador si posteriormente se comprueba que las mercancías no corresponden a las especificaciones del contrato de venta. …
>
> El tratamiento de las garantías ofrecidas por los fabricantes a automóviles importados constituye un ejemplo perfecto de un ámbito en que las distintas autoridades

> aduaneras de los Estados miembros interpretan de manera diferente la legislación comunitaria."[805]

7.396 A juicio del Grupo Especial, si bien el pasaje del informe del Tribunal de Cuentas de las CE reproducido en el párrafo anterior indica que los Estados miembros "interpretan de manera diferente" la legislación aduanera en lo que respecta a los costes de reparación de los vehículos cubiertos por una garantía del vendedor, no ofrece ningún detalle de la naturaleza de las distintas interpretaciones ni de las consecuencias prácticas de esas interpretaciones diferentes. Por lo tanto, el Grupo Especial considera que esas declaraciones son en sí mismas un fundamento insuficiente para deducir que las distintas interpretaciones en cuestión corresponden a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en cuanto al tratamiento de los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor a efectos de valoración en aduana.

7.397 *En segundo lugar*, el informe del Tribunal de Cuentas de las CE se refiere específicamente a la existencia de diferencias entre los Estados miembros acerca de si conceden o no reducciones del valor en aduana para tener en cuenta los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor. En particular, en el informe se indica lo siguiente:

> "En su Informe anual sobre el ejercicio 1990, el Tribunal llamaba la atención sobre la práctica de las autoridades aduaneras alemanas de autorizar reducciones de valor de las importaciones de vehículos de motor para tener en cuenta los costes de reparación cubiertos por las disposiciones de la garantía. El Tribunal consideraba que dichas reducciones no estaban previstas en la legislación comunitaria vigente en ese momento. Diez años después, las autoridades aduaneras alemanas siguen aplicando reducciones de valor similares. El Tribunal sigue considerando que este procedimiento no es conforme a las disposiciones de la normativa comunitaria.
>
> Situaciones similares se tratan de manera diferente en otros Estados miembros. Las autoridades aduaneras de tres de ellos (Italia, Países Bajos y Reino Unido) han rechazado solicitudes similares de importadores de vehículos de motor. Los distintos planteamientos de las administraciones aduaneras de los Estados miembros ante esta cuestión pueden ser uno de los elementos que dan lugar a un desvío del comercio dentro de la Comunidad.
>
> Esto constituye una clara muestra de la falta de cohesión dentro de la unión aduanera que puede haber supuesto pérdidas de recursos propios. Con independencia de cualquier posible revisión de la reglamentación, sigue siendo un hecho que durante diez años ha existido una práctica de reducciones a la que la Comisión no se ha opuesto."[806]

7.398 El Grupo Especial observa que, en las secciones del informe del Tribunal de Cuentas de las CE que se cita en el párrafo anterior, el Tribunal señaló la existencia de un tratamiento "diferente" entre los Estados miembros con respecto a "situaciones similares" en relación con los costes de reparación de vehículos cubiertos por una garantía del vendedor. Concretamente, el Tribunal señala que mientras que las autoridades aduaneras alemanas concedieron reducciones en las importaciones

[805] Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de 14 de marzo de 2001, párrafos 71 y 72 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[806] Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de 14 de marzo de 2001, párrafos 73 a 75 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

de vehículos sujetos a costes de reparación cubiertos por garantía, las autoridades aduaneras de Italia, los Países Bajos y el Reino Unido no hicieron lo mismo en situaciones similares. A juicio del Grupo Especial, estas constataciones del Tribunal de Cuentas de las CE tienden a indicar la existencia de una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto al tratamiento de los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor. De hecho, en el contexto de la presente diferencia, las Comunidades Europeas no discuten que el tratamiento diferente de que se trata equivale a una aplicación no uniforme.[807]

7.399 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Especial considera que cuando el Tribunal de Cuentas de las CE elaboró su informe -es decir, en 2001- las Comunidades Europeas no aplicaban de manera uniforme la legislación aduanera en lo que respecta a los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial estima que este caso de aplicación no uniforme es tanto más notable teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas ya había elaborado hacía 10 años, en 1990, un informe en el que señalaba el mismo caso de aplicación no uniforme.[808] El Grupo Especial entiende que, como en el caso del informe de 2001, la Comisión recibió un ejemplar del Informe de 1990 del Tribunal de Cuentas de las CE y se le dio la oportunidad de formular observaciones al respecto.[809]

7.400 El Grupo Especial observa que sólo después de recibir observaciones críticas en dos informes consecutivos del Tribunal de Cuentas de las CE, separados por un período de 10 años, la Comisión adoptó finalmente medidas para corregir la aplicación no uniforme en relación con el tratamiento de los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor. Concretamente, la Comisión adoptó en 2002 el Reglamento (CE) Nº 444/2002 de la Comisión, de 11 de marzo de 2002.[810] Ese Reglamento produjo, entre otros, el efecto de modificar el artículo 145 del Reglamento de Aplicación. Después de la modificación el apartado 2 del artículo 145 del Reglamento de Aplicación disponía y sigue disponiendo lo siguiente:

> "Tras el despacho a libre práctica de las mercancías, la modificación por el vendedor, a favor del comprador, del precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías podrá tomarse en consideración para la determinación del valor en aduana de conformidad con el artículo 29 del Código cuando se demuestre a satisfacción de las autoridades aduaneras:
>
> a) que las mercancías eran defectuosas en el momento mencionado en el artículo 67 del Código;
>
> b) que el vendedor efectuó la modificación de conformidad con las condiciones contractuales sobre la garantía contenidas en el contrato de venta concluido antes del despacho a libre práctica de las mercancías, y

[807] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 398; Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 156.

[808] Informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1990, capítulo 2, letra a) del apartado 2.52 (DO C 324 de 13 de diciembre de 1991), al que se hace referencia en el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de 14 de marzo de 2001, párrafos 73 a 75 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[809] El Grupo Especial observa que el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE contiene una sección en la que figuran las "Respuestas de la Comisión", páginas 13 a 18 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[810] Reglamento (CE) Nº 444/2002 de la Comisión, de 11 de marzo de 2002 (Comunidades Europeas - Prueba documental 89).

c) que en el contrato de venta pertinente no se tuvo ya en cuenta la naturaleza defectuosa de las mercancías."

7.401 Los Estados Unidos reconocen que el Reglamento Nº 444/2002 resolvió la aplicación no uniforme en cuanto al tratamiento de los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor a efectos de valoración en aduana.[811] En realidad, el Grupo Especial entiende que la aplicación no uniforme con respecto a esos costes que existió al menos entre 1990 y 2001 finalmente se eliminó en 2002. El Grupo Especial no dispone de pruebas que sugieran que la aplicación no uniforme haya resurgido desde entonces.

7.402 Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo Especial llega a la conclusión de que, en 2001, las Comunidades Europeas no aplicaban de manera uniforme la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario con respecto a los costes de reparación de vehículos, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, esta violación se rectificó en 2002 mediante la promulgación del Reglamento (CE) Nº 444/2002.

7.403 El Grupo Especial llega a la conclusión de que las Comunidades Europeas no aplican actualmente la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario con respecto a los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía de una manera que no sea uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por consiguiente, el Grupo Especial no constata ninguna violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en cuanto a la aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario respecto de los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía.

iv) Relación entre el importador comunitario y los fabricantes no comunitarios

Resumen de los argumentos de las partes

7.404 Los **Estados Unidos** aducen que distintos Estados miembros han adoptado posiciones diferentes acerca de si un importador está vinculado con empresas no comunitarias que fabrican sus productos y, en consecuencia, sobre cómo deberían valorarse esos productos.[692] A modo de ejemplo, los Estados Unidos se refieren a un caso que afecta a Reebok International Limited ("RIL"), que contrata con diversos proveedores fuera de las Comunidades Europeas para fabricar zapatos que después se importan y se venden a clientes en las Comunidades Europeas.[693] En cuanto a la cuestión de si los contratos de RIL con fabricantes no comunitarios establecen una relación de control que afecta al precio al que se venden los zapatos para ser exportados a las Comunidades Europeas, que debería tenerse en cuenta en la valoración en aduana, los Estados Unidos observan que autoridades aduaneras españolas constataron que los contratos de RIL con fabricantes no comunitarios establecían una relación de control con respecto a esos proveedores. Los aspectos pertinentes de los contratos que las autoridades aduaneras españolas consideraron importantes se referían a la aprobación de calidad, las condiciones de precios y restricciones sobre las condiciones de entrega. Sin embargo, los contratos no permitían a RIL dirigir o restringir la gestión o las actividades de sus proveedores. Los Estados Unidos sostienen que las autoridades aduaneras de otros Estados miembros no consideraron que los contratos hubieran establecido una relación de control entre RIL y sus fabricantes no comunitarios.[694] Según los Estados Unidos, RIL ha impugnado las decisiones de valoración de las autoridades aduaneras españolas, un proceso que ya dura años y está previsto que

[811] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4 del Grupo Especial.

[692] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 25.

[693] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 90.

[694] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 91.

dure aún más. Los Estados Unidos sostienen que el hacer frente a estas incoherencias ha supuesto más costos para las operaciones de RIL, que no serían necesarios si la legislación aduanera de las CE si aplicase de manera uniforme.[695]

7.405 Los Estados Unidos explican que sus alegaciones con respecto a esta cuestión se basan en una descripción del importador en cuestión. Observan que, debido a preocupaciones relacionadas con la existencia de un proceso en curso sobre el asunto en cuestión y a la sensibilidad de la información que contendría la documentación justificante, el importador se abstuvo de facilitar documentación en este momento. Sin embargo, según los Estados Unidos, sus alegaciones están respaldadas por una decisión del Defensor del Pueblo Europeo.[696] Los Estados Unidos aducen que esa decisión pone de manifiesto cómo se ocupó la Comisión de la reclamación de la empresa cuando se señaló a su atención en septiembre de 2000. Según los Estados Unidos, en lugar de remitir el asunto al Comité del Código Aduanero, la Comisión respondió tres meses después "que las cuestiones de interpretación planteadas por el reclamante eran competencia de las autoridades aduaneras nacionales y que [la Comisión] no está obligada a realizar un examen detallado de casos individuales muy específicos ya que eso corresponde a las administraciones nacionales".[697] Cuando la empresa pidió expresamente la remisión al Comité un año más tarde, la Comisión "rechazó la idea".[698] La empresa volvió a solicitarlo en enero de 2002 y, más de dos años después, todavía no había recibido una respuesta de la Comisión. Los Estados Unidos observan que la decisión del Defensor del Pueblo indica que, después de una reunión celebrada en mayo de 2004 entre agentes de la empresa y funcionarios de la Dirección de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión, el reclamante dijo que "ya no deseaba seguir adelante con la reclamación".[699] No obstante, según los Estados Unidos, *no* indica que se resolviera la falta de uniformidad subyacente. El hecho de que la empresa mantenga su apelación ante los tribunales españoles indica que, de hecho, no se ha resuelto.[700]

7.406 En respuesta, las **Comunidades Europeas** sostienen que los Estados Unidos no pueden justificar el no haber satisfecho la carga de la prueba basándose en que el importador en cuestión se negó a facilitar las pruebas necesarias.[701] Además, con respecto a la decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre una reclamación planteada por un importador concreto, las Comunidades Europeas confirman que la reclamación se presentó en nombre de Reebok, que alegó que la Comisión Europea no estaba cumpliendo correctamente sus obligaciones con respecto a la aplicación de la legislación sobre valoración en aduana.[702] Las Comunidades Europeas señalan que, no obstante, el Defensor del Pueblo no adoptó una decisión sobre el fondo de la reclamación. Antes bien, el reclamante desistió de

[695] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 92.

[696] Estados Unidos - Prueba documental 52.

[697] Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 128/2004/OV contra la Comisión Europea, página 2, 2 de junio de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 52).

[698] Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 128/2004/OV contra la Comisión Europea, página 2, 2 de junio de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 52).

[699] Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 128/2004/OV contra la Comisión Europea, página 4, 2 de junio de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 52).

[700] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 26 del Grupo Especial.

[701] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 162.

[702] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 165.

la reclamación indicando que "estaba satisfecho con la posición que la Comisión había adoptado sobre el asunto y con su propuesta de examinar cuestiones problemáticas pendientes".[703]

7.407 Las Comunidades Europeas aducen también que los hechos que se exponen en la decisión del Defensor del Pueblo no se presentan de manera totalmente correcta. De manera señalada, los Estados Unidos se remiten a una cita de una carta de la Comisión Europea de 20 de diciembre de 2000 en la que supuestamente la Comisión dijo "que las cuestiones de interpretación planteadas por el reclamante eran competencia de las autoridades aduaneras nacionales". Según las Comunidades Europeas esta cita es incorrecta. En su carta de 20 de diciembre de 2000 la Comisión declaró lo siguiente (sin cursivas en el original): "La *aplicación* de este criterio [de la letra e) del apartado 1 del artículo 143 del Reglamento de Aplicación] en los distintos casos es naturalmente competencia de las administraciones nacionales y los Servicios de la Comisión sólo podían expresar una opinión si los servicios aduaneros en cuestión les transmitieran un expediente detallado sobre todos los aspectos del caso. Sin embargo, nuestros servicios en general no están obligados a realizar un examen detallado de casos muy específicos ya que esta tarea corresponde a las administraciones nacionales".[704] Las Comunidades Europeas consideran que esta declaración refleja correctamente la división de competencias entre la Comisión Europea y las autoridades aduaneras de los Estados miembros, siendo estas últimas las competentes para aplicar la legislación aduanera en los distintos casos. Según las Comunidades Europeas, no es posible ni adecuado que la Comisión actúe en lugar de la autoridad competente simplemente porque, en un determinado caso de aplicación, un comerciante no está satisfecho con el enfoque adoptado por la autoridad aduanera.[705] Las Comunidades Europeas observan que, no obstante, la Comisión está encargada de vigilar y garantizar la interpretación y aplicación correctas y uniformes de la legislación aduanera comunitaria. Esto se reconoció explícitamente en el párrafo siguiente de la carta: "Por otra parte, se pueden notificar los casos que se refieren a la divergencia demostrada de valoración de una empresa en las CE, o a una aplicación o interpretación claramente errónea de la legislación de las CE, y seguidamente se pueden examinar para que los Servicios de la Comisión adopten las medidas adecuadas".[706] Según las Comunidades Europeas, en el caso de que se trata y en el momento en cuestión, Reebok no había presentado a las Comisión Europea ninguna prueba que indicara una aplicación incorrecta de la legislación comunitaria ni una divergencia en la aplicación de esa legislación. En consecuencia, la Comisión no consideró necesario intervenir en el caso específico pendiente.[707]

7.408 Las Comunidades Europeas aducen también que la diferencia de valoración entre Reebok y las autoridades aduaneras españolas es una diferencia compleja que se refiere a la determinación de si RIL controla a algunos de sus proveedores. Según las Comunidades Europeas, la Comisión ha seguido atentamente este caso, que está actualmente pendiente ante los tribunales españoles, y también lo ha debatido en el Comité del Código Aduanero. Sin embargo, ni la Comisión Europea ni el Comité del Código Aduanero pueden reemplazar los mecanismos normales de impugnación ante los tribunales nacionales. Además, de hecho RIL no ha presentado a la Comisión Europea una reclamación formal en este asunto.[708] Las Comunidades Europeas explican que la Sección del Valor en Aduana del Comité del Código Aduanero examinó la cuestión de la aplicación de la letra e) del

[703] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 166, en el que se hace referencia a la Prueba documental 52 presentada por los Estados Unidos, página 4.

[704] CE - Prueba documental 138.

[705] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 168 y 169.

[706] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 170.

[707] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 171.

[708] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 46.

apartado 1 del artículo 143 del Reglamento de Aplicación (que se ocupa de las partes vinculadas) por las autoridades aduaneras españolas pero no estableció ninguna incompatibilidad con la legislación comunitaria ni falta de uniformidad.[709] Las Comunidades Europeas explican además que, durante las reuniones del Comité del Código Aduanero celebradas los días 1º de octubre y 20 de diciembre de 2004, los delegados consideraron que los hechos tendían a indicar que las partes estaban vinculadas, como habían concluido previamente las autoridades españolas. Las Comunidades Europeas añaden que, puesto que otros dos Estados miembros habían planteado casos similares, se consideró que era conveniente seguir trabajando a este respecto en 2005. También se recordó que, puesto que se habían presentado casos similares que se referían a operaciones de fabricación y elaboración que han pasado a ser importantes desde el punto de vista comercial y económico, la Comisión decidió seguir trabajando sobre la base de un grupo de trabajo del Comité. En agosto de 2005 Reebok presentó, a solicitud de la Comisión, documentación que indicaba que podía haber un enfoque divergente entre los Estados miembros. Las Comunidades Europeas señalan que ahora se analizará esta documentación y el grupo de trabajo empezará a reunirse y a trabajar en breve plazo. Las Comunidades Europeas sostienen que está previsto que el grupo de trabajo obtenga resultados concretos que abordarán la interpretación y aplicación generales de la letra e) del apartado 1 del artículo 143 del Reglamento de Aplicación y los elementos específicos que han sido objeto de desacuerdo entre las autoridades aduaneras de España y la empresa en cuestión.[710] Las Comunidades Europeas aducen que, en general, no consideran que el caso de Reebok proporcione ningún respaldo para la alegación de que las Comunidades Europeas no aplican sus normas de valoración en aduana de forma uniforme.[711]

Análisis por el Grupo Especial

7.409 El Grupo Especial observa que los Estados Unidos impugnan la aplicación del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y de la letra e) del apartado 1 del artículo 143 del Reglamento de Aplicación, que se refieren a las circunstancias en que las partes han de ser consideradas "vinculadas" a efectos de valoración en aduana. En particular, los Estados Unidos aducen que distintos Estados miembros han adoptado posiciones diferentes acerca de si un importador está vinculado con empresas no comunitarias que fabrican sus productos y, en consecuencia, sobre cómo deberían valorarse esos productos.[712]

7.410 A juicio del Grupo Especial, la consideración (o no) de las partes como "vinculadas" a efectos de valoración en aduana constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es un asunto comprendido en el mandato del Grupo Especial puesto que equivale a un caso de aplicación del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y de la letra e) del apartado 1 del artículo 143 del Reglamento de Aplicación en la esfera de valoración en aduana.[713]

7.411 Con respecto a la cuestión de si la consideración (o no) de las partes como "vinculadas" en los Estados miembros es "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que ha formulado en el párrafo 7.135 *supra* de que se exige la uniformidad geográfica en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Es decir, la

[709] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 407.

[710] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 407; respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 62 del Grupo Especial.

[711] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 410.

[712] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 25.

[713] A este respecto, véanse los párrafos 7.183 a 7.187 *supra*.

aplicación deberá ser uniforme en distintos lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial recuerda también la constatación que figura en el párrafo 7.135 *supra* en el sentido de que al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 deberán tenerse en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos con respecto a la consideración (o no) de las partes como "vinculadas" a efectos de valoración en aduana es de carácter limitado. Afecta a la aplicación de una sola disposición del Código Aduanero Comunitario y una sola disposición del Reglamento de Aplicación, a saber, el artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y la letra e) del apartado 1 del artículo 143 del Reglamento de Aplicación. Por consiguiente, dado el carácter limitado de esta impugnación, el Grupo Especial considera que se necesita un alto grado de uniformidad a efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Pasamos seguidamente a examinar los hechos para determinar si se ha logrado o no este alto grado de uniformidad con respecto a la consideración (o no) de las partes como "vinculadas".

7.412 El artículo 29 del Código Aduanero Comunitario dispone lo siguiente en la parte pertinente:

> "1. El valor en aduana de las mercancías importadas será su valor de transacción es decir, el precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación con destino al territorio aduanero de la Comunidad, ajustado, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33, siempre que:
>
> …
>
> d) no exista vinculación entre comprador y vendedor o, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el apartado 2.
>
> 2. a) Para determinar si el valor de transacción es aceptable a efectos de la aplicación del apartado 1, el hecho de que el comprador y el vendedor estén vinculados no constituirá, por sí mismo, motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. Si fuere necesario, se examinarán las circunstancias propias de la venta y se admitirá el valor de transacción, siempre que la vinculación no haya influido en el precio. Cuando, por la información suministrada por el declarante u obtenida de otras fuentes, las autoridades aduaneras tengan motivos para considerar que la vinculación ha influido en el precio, comunicarán dichos motivos al declarante y le darán una oportunidad razonable para contestar. Si el declarante lo pidiere, los motivos se le comunicarán por escrito.
>
> b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de transacción y se valorarán las mercancías conforme al apartado 1, cuando el declarante demuestre que dicho valor está muy próximo a alguno de los valores que se señalan a continuación, referidos al mismo momento o a uno muy cercano:
>
> i) el valor de transacción en ventas de mercancías idénticas o similares, entre compradores y vendedores no vinculados, para su exportación con destino a la Comunidad;
>
> ii) el valor de aduana de mercancías idénticas o similares determinado con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 30;

iii) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en la letra d) del apartado 2 del artículo 30.

Al aplicar los criterios anteriores, deberán tenerse en cuenta las diferencias demostradas entre los niveles comerciales, las cantidades, los elementos enumerados en el artículo 32 y los costes que soporte el vendedor en las ventas a compradores no vinculados con él, y que no soporte en las ventas a compradores con los que tenga vinculación."

7.413 La letra e) del apartado 1) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación dispone que se considerará que existe vinculación entre las personas si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra.

7.414 Para respaldar su alegación de que el artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y la letra e) del apartado 1) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación se aplican de manera no uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, los Estados Unidos se refieren a un caso que afecta a Reebok International Limited ("RIL"). Según los Estados Unidos, las autoridades aduaneras españolas constataron que los contratos de RIL con fabricantes no comunitarios establecían una relación de control con respecto a esos proveedores mientras que las autoridades de otros Estados miembros no consideraron que los contratos habían establecido una relación de control entre RIL y sus fabricantes no comunitarios.

7.415 Los Estados Unidos explican que sus alegaciones sobre la aplicación del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y la letra e) del apartado 1) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación se basan en una descripción de RIL porque, debido a preocupaciones relacionadas con la existencia de un proceso en curso sobre el asunto objeto de litigio en la presente diferencia y a la sensibilidad de la información que contendría la documentación justificante, RIL se abstuvo de facilitar documentación. Aparte de la descripción de las experiencias de RIL, los Estados Unidos se basan también en una decisión del Defensor del Pueblo Europeo referente a una reclamación presentada por RIL.[714] Los Estados Unidos aducen que la decisión pone de manifiesto cómo se ocupó la Comisión de la reclamación presentada por RIL cuando se señaló a su atención en septiembre de 2000. Según los Estados Unidos, la decisión del Defensor del Pueblo Europeo no indica que se solucionara la falta de uniformidad subyacente.

7.416 La valoración que hace el Grupo Especial de la carta del Defensor del Pueblo es que, por sí misma, no demuestra la existencia de una aplicación no uniforme del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y de la letra e) del apartado 1) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[715] En la carta del Defensor del Pueblo se señala la reclamación de RIL de que "la legislación comunitaria no se interpreta de la misma manera en distintos Estados miembros, como los Países Bajos y España". Sin embargo, aparte de hacer esta observación sobre la reclamación de RIL, el Defensor del Pueblo no formuló ninguna constatación fáctica sobre la uniformidad o falta de uniformidad entre los Estados miembros con respecto a la cuestión de si las partes están o no vinculadas a efectos del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y la letra e) del apartado 1 del artículo 132 del Reglamento de Aplicación. De hecho, el Grupo Especial no dispone de pruebas objetivas que demuestren la existencia o inexistencia de aplicación no uniforme a este respecto. Además, teniendo en cuenta el hecho de que las Comunidades Europeas han impugnado la existencia de una aplicación no uniforme a este

[714] Estados Unidos - Prueba documental 52.

[715] En cuanto al Defensor del Pueblo Europeo, véanse los párrafos 7.171 y 7.172 *supra*.

respecto[716], el Grupo Especial no considera adecuado sacar conclusiones únicamente sobre la base de la descripción de los Estados Unidos.

7.417 En cuanto a las observaciones más generales de los Estados Unidos sobre la manera en que las Comunidades Europeas se ocuparon de la reclamación de RIL de supuesta aplicación no uniforme, el Grupo Especial considera que esas observaciones pueden ser pertinentes para una alegación de aplicación no razonable o parcial de la legislación aduanera de las CE en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, alegación que los Estados Unidos no han presentado en el contexto de la presente diferencia.[717] No obstante, el Grupo Especial considera que esas observaciones no son pertinentes para una alegación de aplicación no uniforme al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.418 En consecuencia, el Grupo Especial llega a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado que la forma de aplicar el artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y la letra e) del apartado 1) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación con respecto a las circunstancias en que ha de considerarse que las partes están "vinculadas" a efectos de valoración en aduana sea no uniforme entre los Estados miembros en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

v) Resumen y conclusiones

7.419 En síntesis, el Grupo Especial constata que, con respecto a las alegaciones de los Estados Unidos de aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y del Reglamento de Aplicación en la esfera de valoración en aduana:

a) Los Estados Unidos no han demostrado que existan diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la manera en que se asignan los cánones al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa que equivalgan a una aplicación no uniforme de la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

b) La imposición por las autoridades aduaneras de algunos Estados miembros de una forma de aprobación previa con respecto a la disposición sobre las ventas sucesivas, que es incompatible con la legislación aduanera de las CE y que no imponen las autoridades aduaneras en otros Estados miembros, significa que las Comunidades Europeas no aplican su legislación aduanera sobre las ventas sucesivas -en particular el apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación- de manera uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

c) En 2001 las Comunidades Europeas no aplicaban de manera uniforme la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario con respecto a los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. No obstante, las Comunidades Europeas no aplican actualmente la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario con respecto a los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía del vendedor de

[716] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 163.

[717] El Grupo Especial recuerda que los Estados Unidos aclararon en su Primera comunicación que únicamente les interesa el requisito de aplicación uniforme establecido en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994: Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 15.

una manera no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por lo tanto, el Grupo Especial no constata una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario respecto de los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía.

d) Los Estados Unidos no han demostrado que la forma de aplicación del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y de la letra e) del apartado 1 del artículo 143 del Reglamento de Aplicación con respecto a las circunstancias en que se ha de considerar que las partes están "vinculadas" a efectos de valoración en aduana sea no uniforme entre los Estados miembros en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

d) Alegaciones de aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y del Reglamento de Aplicación en la esfera de los regímenes aduaneros

i) Auditoría posterior al despacho a libre práctica

Resumen de los argumentos de las partes

7.420 Los **Estados Unidos** señalan que los procedimientos de auditoría son regímenes para verificar las declaraciones de los importadores con respecto a la clasificación, la valoración y el origen de las mercancías.[718] Los Estados Unidos aducen que el Tribunal de Cuentas de las CE constató en su informe que las autoridades de distintos Estados miembros adoptan diferentes enfoques con respecto a las auditorías de la valoración posteriores al despacho de los productos a libre práctica, con importantes consecuencias para los importadores.[719] Según los Estados Unidos, en el caso de al menos un Estado miembro, el Tribunal constató que las autoridades aduaneras no tienen derecho a efectuar auditorías posteriores a la importación excepto en casos de fraude. Los Estados Unidos afirman que incluso entre Estados miembros en los que las autoridades pueden realizar auditorías posteriores a la importación, el Tribunal constató diferencias entre los métodos de trabajo, con la consecuencia de que "las distintas autoridades aduaneras son reticentes a aceptar las decisiones de las demás".[720] Los Estados Unidos señalan también que el Tribunal de Cuentas de las CE indicó en su informe que las autoridades de Bélgica y los Países Bajos normalmente transmiten al importador una decisión de valoración por escrito después de cada visita de auditoría, que son vinculantes durante cinco años, dando de ese modo al importador cierto grado de seguridad jurídica similar a la IAV.[721] Según los Estados Unidos, en cambio, el Tribunal constató que "[a]lgunos Estados miembros sólo emiten estas decisiones cuando deben realizarse ajustes específicos (Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido). Otros raramente realizan estas decisiones por escrito (Dinamarca, España, Italia, Luxemburgo). En Alemania, la decisión sobre el valor en aduana no existe en forma de documento

[718] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4 del Grupo Especial.

[719] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 96.

[720] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 97, en el que se hace referencia al Informe del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración, párrafos 33 y 37 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[721] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 98.

escrito diferenciado. No obstante, el informe detallado que se entrega al importador tras una auditoría normalmente contiene la sustancia de una decisión de valoración en aduana."[722]

7.421 En respuesta, las **Comunidades Europeas** sostienen que las cuestiones de auditoría no forman parte de los regímenes aduaneros y, por lo tanto, no afectan a la aplicación de la legislación aduanera en sí misma.[723] Las Comunidades Europeas sostienen que, en todo caso, en virtud del apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario, todo Estado miembro puede efectuar todas las verificaciones necesarias para cerciorarse de la exactitud de los datos de la declaración de aduana. Según las Comunidades Europeas, esto incluye todas las cuestiones relativas al valor de las mercancías.[724] Las Comunidades Europeas aducen también que no creen que el párrafo 3 a) del artículo X GATT de 1994 pueda exigir una certeza completa para los comerciantes en cuanto a las cuestiones de auditoría. Por el contrario, un cierto grado de incertidumbre en cuanto al momento y las condiciones en que se llevará a cabo una auditoría va en interés de un control eficiente y los comerciantes deben aceptarlo como parte de la política de observancia de las normas aduaneras. Además, las Comunidades Europeas sostienen que cualesquiera diferencias administrativas que pudieran seguir existiendo son de naturaleza secundaria y no equivalen a una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[725] Las Comunidades Europeas señalan además que el Estado miembro mencionado por el Tribunal de Cuentas en el que las autoridades aduaneras carecen del derecho a realizar auditorías posteriores a la importación excepto en casos de fraude era Grecia. Grecia estableció en 2000 un servicio con facultades para realizar auditorías *a posteriori*. Por último, las Comunidades Europeas sostienen que la Comisión, conjuntamente con los Estados miembros, han finalizado recientemente una Guía comunitaria sobre auditorías de aduana.[726] Según las Comunidades Europeas, está Guía asegura una práctica de auditoría uniforme en todas las Comunidades Europeas.[727]

7.422 Los **Estados Unidos** no están de acuerdo con el argumento de las Comunidades Europeas de que las auditorías no formen parte de los regímenes aduaneros. Según los Estados Unidos, el sentido específico en que las Comunidades Europeas utilizan el término "régimen aduanero" a afectos del Código Aduanero Comunitario no influye en si las auditorías son regímenes aduaneros (en el sentido corriente de ese término) para aplicar el Código.[728] Los Estados Unidos aducen que, en cualquier caso, con independencia de que se caracterice o no a las auditorías como regímenes aduaneros, son simplemente instrumentos para aplicar la legislación aduanera comunitaria. Según los Estados

[722] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 99, en el que se hace referencia al Informe del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración, párrafo 46 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[723] A este respecto, las Comunidades Europeas señalan que el apartado 16 del artículo 4 del Código define como "régimen aduanero" cualquiera de los siguientes: el despacho a libre práctica; el tránsito; el depósito aduanero; el perfeccionamiento activo; la transformación bajo control aduanero; la importación temporal; el perfeccionamiento pasivo; y la exportación: respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 64 a) del Grupo Especial. Las Comunidades Europeas sostienen además que las auditorías posteriores al levante no son consideradas "regímenes aduaneros" porque no son ninguno de los regímenes mencionados en el apartado 16 del artículo 4 del Código Aduanero Comunitario.

[724] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 157.

[725] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 400.

[726] Guía comunitaria sobre auditorías de aduana (CE - Prueba documental 90).

[727] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 158.

[728] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 83.

Unidos, en la medida en que distintos Estados miembros utilizan diferentes procedimientos de auditoría, aplican la legislación subyacente de manera diferente.[729] Los Estados Unidos aducen que, de acuerdo con el sentido corriente del término "aplicar", los procedimientos de auditoría ponen en vigor la legislación aduanera de las CE al verificar y exigir el cumplimiento de esa legislación. Los Estados miembros "ejecutan" o "ponen en práctica" la legislación aduanera comunitaria mediante, entre otros, los instrumentos de los procedimientos de auditoría.[730] Los Estados Unidos aducen que la aplicación de la legislación aduanera comunitaria depende en gran parte de las acciones de los propios comerciantes. Teniendo en cuenta los millones de declaraciones que se presentan cada año a las autoridades aduaneras de los Estados miembros, sería imposible que las autoridades inspeccionaran minuciosamente cada envío o verificaran el contenido de cada declaración antes del levante. Por esta razón los instrumentos para verificar y exigir el cumplimiento de la legislación aduanera resultan indispensables para "poner en práctica" o "poner en vigor" esas leyes. La observancia de esas leyes se garantiza mediante el conocimiento por parte de los comerciantes de que las declaraciones que hacen a las autoridades aduaneras están en última instancia sujetas a verificación y ejecución mediante auditorías y sanciones.[731] Los Estados Unidos sostienen también que, dado que la Guía comunitaria sobre auditorías de aduana se finalizó recientemente y, en todo caso, simplemente se pretende que sea una ayuda para los Estados miembros, y no una obligación vinculante, no hay base alguna para afirmar que garantiza una práctica uniforme en todas las Comunidades Europeas.[732] Por último, en cuanto a la calificación de las Comunidades Europeas de las diferencias entre los Estados miembros en estas esfera como "de naturaleza secundaria", los Estados Unidos sostienen que mientras que algunos Estados miembros ofrecen a los comerciantes seguridad jurídica sobre el trato que recibirán transacciones específicas, otros no lo hacen.[733]

7.423 Las **Comunidades Europeas** sostienen que no creen que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exija la armonización de las normas pertinentes del derecho administrativo general de los Estados miembros que rigen los procedimientos de auditoría.[734] Además, aducen que el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario faculta a las autoridades aduaneras para realizar inspecciones y auditorías *a posteriori*. Todos los Estados miembros cuentan con los servicios de auditoría necesarios y se orientan por la Guía comunitaria sobre auditorías de aduana. Las Comunidades Europeas aducen que no consideran que las disposiciones sobre auditoría figuren entre las leyes enumeradas en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 ya que esta disposición sólo abarca las leyes y reglamentos que afectan a los asuntos a que se hace referencia en esa disposición.[735] En todo caso, existen disposiciones básicas a nivel comunitario, no de los Estados miembros, y se garantiza una práctica de auditoría uniforme en todas las Comunidades Europeas.[736]

7.424 Los **Estados Unidos** responden que los instrumentos de aplicación no tienen que ser considerados necesariamente como leyes de carácter general en el sentido del párrafo 1 del artículo X

---

[729] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 28 del Grupo Especial.

[730] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 79 y 80.

[731] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 81.

[732] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 68.

[733] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 55.

[734] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 401.

[735] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 138 del Grupo Especial.

[736] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 168 c) del Grupo Especial.

del GATT de 1994. A efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, es el objeto de la aplicación -lo que se aplica- y no la disposición que efectúa la aplicación lo que debe ser una ley de carácter general en el sentido del párrafo 1 del artículo X. Esto se desprende claramente de la estructura gramatical del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, en el que la frase "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo" es el objeto de la frase "aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable".[737]

Análisis por el Grupo Especial

7.425 El Grupo Especial señala que, en esencia, los Estados Unidos impugnan el hecho de que distintos Estados miembros adoptan diferentes enfoques en cuanto a las auditorías posteriores al despacho de las mercancías a libre práctica.[738] Los Estados Unidos se basan en el informe del Tribunal de Cuentas de las CE que, según afirman, se refirió a las diferencias entre los Estados miembros acerca de la existencia del derecho de las autoridades aduaneras a realizar auditorías después de la importación y también sobre los métodos de trabajo adoptados entre las autoridades aduaneras que tienen derecho a realizar esas auditorías.[739]

7.426 Con respecto a sus alegaciones sobre la divergencia en los procedimientos de auditoría entre los Estados miembros, los Estados Unidos no identifican específicamente las disposiciones de la legislación aduanera comunitaria que a su juicio se aplican de manera no uniforme. Los Estados Unidos sostienen que impugnan la forma de aplicación de "las disposiciones de valoración contenidas en el Código Aduanero Comunitario (artículos 28 a 36) y el Reglamento de Aplicación (artículos 141 a 181 *bis* y anexos 23 a 29) en la medida en que las autoridades de distintos Estados miembros utilizan procedimientos de auditoría diferentes".[740] No obstante, según lo entiende el Grupo Especial, la única disposición de los distintos instrumentos identificados en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos que según alegan se aplican de manera no uniforme y que se refiere a los procedimientos de auditoría posteriores al despacho a libre práctica es el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario.

7.427 A juicio del Grupo Especial, la realización (o no) de auditorías posteriores a la importación y los métodos de trabajo adoptados entre las autoridades aduaneras con respecto a las auditorías posteriores a la importación constituyen actos de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Estos actos de aplicación son asuntos comprendidos en el mandato del Grupo Especial puesto que equivalen a casos de aplicación del apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario con respecto a los procedimientos para la entrada y el levante de las mercancías.

7.428 El apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario dispone lo siguiente:

> "Las autoridades aduaneras, después de haber concedido el levante de las mercancías y con objeto de garantizar la exactitud de los datos de la declaración, podrán proceder al control de los documentos y datos comerciales relativos a las operaciones de importación o de exportación de las mercancías de que se trate así como a las operaciones comerciales ulteriores relativas a las mismas mercancías. Estos controles

[737] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 129 del Grupo Especial.

[738] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 96.

[739] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 97 a 99, donde se hace referencia al Informe del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración, párrafos 33, 37 y 46 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[740] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 124 y 179 del Grupo Especial.

> podrán realizarse ante el declarante, ante cualquier persona directa o indirectamente interesada por motivos profesionales en dichas operaciones y ante cualquier otra persona que como profesional posea dichos documentos y datos. Dichas autoridades también podrán proceder al examen de las mercancías, cuando éstas todavía puedan ser presentadas."

7.429 Como observación general, el Grupo Especial señala que el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario es de carácter discrecional y no preceptivo. Más concretamente, el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario autoriza a las autoridades aduaneras a efectuar controles después del despacho a libre práctica de las mercancías pero no les obliga a hacerlo. Además, esa disposición no impone ninguna condición sobre la manera en que han de llevarse a cabo los controles, salvo que su finalidad es que las autoridades aduaneras se cercioren de la exactitud de los datos de la declaración. Al cerciorarse de la exactitud de los datos de la declaración de aduana, el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario autoriza a las autoridades aduaneras a "proceder al control de los documentos y datos comerciales relativos a las operaciones de importación o de exportación de las mercancías de que se trate así como a las operaciones comerciales ulteriores relativas a las mismas mercancías." El Grupo Especial considera que el carácter discrecional del apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario es notable porque recoge una decisión de política del legislador de brindar a los administradores cierto grado de libertad en la aplicación de esa disposición.

7.430 El Grupo Especial observa que el sentido corriente de los términos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no indican que esta disposición exija que las leyes sean preceptivas y no discrecionales. Como el Grupo Especial ha señalado en el párrafo 7.20 *supra*, el aspecto esencial del párrafo 3 a) del artículo X del GATT es la obligación de "aplicar[] de manera uniforme, imparcial y razonable". El Grupo Especial recuerda las constataciones que ha formulado en el párrafo 7.113 *supra* de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no se refiere a lo que una determinada ley establece (es decir, a su contenido) sino a la manera en que se aplica en la práctica. Por lo tanto, el Grupo Especial considera que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no impone que una disposición que regula una cuestión concreta de administración aduanera deba redactarse o no en términos preceptivos y no discrecionales.[741]

---

[741] A este respecto, el Grupo Especial observa que cabe interpretar que el contexto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 sugiere que su finalidad no es armonizar la legislación aduanera de los Miembros de la OMC exigiendo, entre otras cosas, disposiciones preceptivas para regular las cuestiones aduaneras. De hecho, aunque se podría considerar que las disposiciones del artículo VIII del GATT de 1994 tienen por objeto, entre otras cosas, armonizar determinadas cuestiones aduaneras internas, el texto pertinente que se utiliza en el artículo VIII del GATT de 1994 es muy distinto del utilizado en el párrafo 3 a) del artículo X GATT de 1994. En particular, el artículo VIII del GATT de 1994, que en términos generales abarca determinados derechos y formalidades relacionados con la importación y exportación, dispone lo siguiente en la parte pertinente:

> "1. a) Todos los derechos y cargas de cualquier naturaleza que sean, distintos de los derechos de importación y de exportación y de los impuestos a que se refiere el artículo III, percibidos por las partes contratantes sobre la importación o la exportación o en conexión con ellas, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no deberán constituir una protección indirecta de los productos nacionales ni gravámenes de carácter fiscal aplicados a la importación o a la exportación.
>
> b) Las partes contratantes reconocen la necesidad de reducir el número y la diversidad de los derechos y cargas a que se refiere el apartado a).
>
> c) Las partes contratantes reconocen también la necesidad de reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de importación y exportación y de reducir y simplificar los requisitos relativos a los documentos exigidos para la importación y la exportación.*

7.431 El Grupo Especial observa que, por definición, las disposiciones discrecionales se pueden aplicar de distinta manera, que pueden dar lugar o no a resultados sustantivos diferentes. El Grupo Especial considera que, si se interpretara que esas diferencias de aplicación equivalen a casos de aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 eso significaría que la aplicación de muchas disposiciones discrecionales violaría el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial estima que los redactores del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no pudieron pretender este resultado porque puede haber un motivo razonable para la existencia de discrecionalidad en tales casos. No obstante, si bien el Grupo Especial considera que las divergencias resultantes del ejercicio de la discrecionalidad contenida en la ley objeto de aplicación no están necesariamente en contradicción con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, opina que hay ciertos límites implícitos en esa disposición que circunscriben los tipos de disposiciones que pueden redactarse en términos discrecionales y que pueden influir en la forma en que se utiliza la discrecionalidad en casos concretos. En particular, el Grupo Especial recuerda las constataciones que figuran en los párrafos 7.107 y 7.108 *supra* en el sentido de que la idea del debido proceso en que se basa el artículo X del GATT de 1994 indica que el objetivo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT es garantizar que los comerciantes reciban un trato equitativo y coherente cuando tratan de importar o exportar a un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial considera también que el objeto y fin del Acuerdo sobre la OMC es garantizar la seguridad y previsibilidad en el entorno comercial.[742]

> 2. Toda parte contratante, a petición de otra parte contratante o de las PARTES CONTRATANTES, examinará la aplicación de sus leyes y reglamentos, teniendo en cuenta las disposiciones de este artículo.
>
> 3. Ninguna parte contratante impondrá sanciones severas por infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana. En particular, no se impondrán sanciones pecuniarias superiores a las necesarias para servir simplemente de advertencia por un error u omisión en los documentos presentados a la aduana que pueda ser subsanado fácilmente y que haya sido cometido manifiestamente sin intención fraudulenta o sin que constituya una negligencia grave.
>
> 4. Las disposiciones de este artículo se harán extensivas a los derechos, cargas, formalidades y prescripciones impuestos por las autoridades gubernamentales o administrativas, en relación con la importación y la exportación y con inclusión de los referentes a:
>
> a) las formalidades consulares, tales como facturas y certificados consulares;
> b) las restricciones cuantitativas;
> c) las licencias;
> d) el control de los cambios;
> e) los servicios de estadística;
> f) los documentos que han de presentarse, la documentación y la expedición de certificados;
> g) los análisis y la inspección;
> h) la cuarentena, la inspección sanitaria y la desinfección.

[742] El preámbulo del Acuerdo sobre la OMC especifica que uno de los objetivos del Acuerdo es "acrecentar … el comercio de bienes y servicios". También dice que los Miembros deberán contribuir a ese objetivo "mediante la celebración de acuerdos encaminados a obtener, sobre la base de la reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos al comercio". En el asunto *CE - Equipo informático* el Órgano de Apelación declaró que "la seguridad y previsibilidad de los 'acuerdos encaminados a obtener, sobre la base de la reciprocidad y de mutuas ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos al comercio' es uno de los objetos y fines del Acuerdo sobre la OMC en general, así como del GATT de 1994.": informe del Órgano de Apelación, *CE - Equipo informático*, párrafo 82. Esta opinión la afirmó recientemente el Órgano de Apelación en el informe sobre el asunto *CE - Trozos de pollo*, párrafo 243. El Órgano de Apelación también se refirió al objetivo de seguridad y previsibilidad en el contexto del artículo III del GATT de 1994 (que se ocupa del trato nacional). En particular, en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas II*, el Órgano de Apelación declaró lo siguiente: "Nuestra interpretación del artículo III es fiel a las 'normas usuales de interpretación del derecho internacional público'. Las normas de la OMC son fiables, comprensibles y exigibles. Esas normas no son tan rígidas ni inflexibles que no permitan juicios razonados para hacer frente al interminable y siempre cambiante flujo y reflujo de los

En opinión del Grupo Especial, la existencia y el ejercicio de discrecionalidad no deberían comprometer indebidamente el objetivo implícito del debido proceso del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Tampoco deberían hacer el entorno comercial inseguro e imprevisible sin una causa que lo justifique.

7.432 El Grupo Especial toma nota del argumento de las Comunidades Europeas de que cierto grado de incertidumbre en cuanto al momento y las condiciones en que se llevará a cabo una auditoría va en interés de un control sólido y los comerciantes deben aceptarlo como parte de la política de observancia de las normas aduaneras.[743] El Grupo Especial observa que los Estados Unidos no han impugnado la justificación propuesta por las Comunidades Europeas para la existencia de discrecionalidad en virtud del apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario. El Grupo Especial no tiene ningún motivo para poner en duda esa justificación.[744] Además, el Grupo Especial observa que la Guía comunitaria sobre auditorías de aduana[745], que establece la normativa para los controles *a posteriori* y los controles por auditoría, contribuye a garantizar que no se pongan indebidamente en peligro las debidas garantías procesales de los comerciantes.[746]

7.433 Para apoyar su alegación de aplicación no uniforme con respecto a los procedimientos de auditoría, los Estados Unidos señalan una declaración que figura en el Informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas de las CE sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana, de fecha 14 de marzo de 2001, en el sentido de que las autoridades aduaneras de al menos un Estado miembro (al parecer Grecia) no tenían derecho a efectuar auditorías posteriores a la importación mientras que, implícitamente, las autoridades aduaneras de otros Estados miembros poseían ese derecho. El Grupo Especial entiende que tanto el enfoque adoptado por Grecia cuando se elaboró el informe del Tribunal de Cuentas de las CE, por una parte, y el adoptado en otros Estados miembros sería compatible con el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario dado que, como se ha indicado previamente, la referida disposición autoriza a las autoridades aduaneras de los Estados

---

hechos reales, en casos reales, en el mundo real. Servirán mejor al sistema de comercio multilateral si se interpretan con ese espíritu. De ese modo, conseguiremos la 'seguridad y previsibilidad' que buscaban para el sistema de comercio multilateral los Miembros de la OMC al establecer el sistema de solución de diferencias.": informe del Órgano de Apelación, *Japón - Bebidas alcohólicas II*, página 37. Por último, en el contexto del ESD se ha hecho referencia al objetivo de la seguridad y previsibilidad. En particular, en el asunto *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*, el Grupo Especial examinó el argumento de las Comunidades Europeas de que el artículo 301 era incompatible con el artículo 23 del ESD ("Fortalecimiento del sistema multilateral") así como con diversos artículos del GATT de 1994. Al examinar la cuestión, el Grupo Especial analizó la importancia del concepto de "seguridad y previsibilidad" y dijo lo siguiente: "La seguridad y la previsibilidad del sistema multilateral de comercio son otro de los principales objetos y fines del sistema y pueden contribuir a la consecución de los amplios objetivos del preámbulo. De todas las disciplinas de la OMC, el ESD es uno de los instrumentos más importantes para proteger la seguridad y la previsibilidad del sistema multilateral de comercio y, por conducto de él, la seguridad y la previsibilidad del mercado y de los diferentes empresarios. Así pues, las disposiciones del ESD han de interpretarse en función de ese objeto y de ese fin y de la manera que coadyuve más eficazmente a su consecución. A este respecto nos estamos refiriendo no sólo al preámbulo sino también a las disposiciones de derecho positivo que figuran en el propio ESD.": informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior*, párrafo 7.75.

[743] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 400.

[744] De hecho, el Grupo Especial no considera que esté en condiciones de cuestionar *a posteriori* las elecciones de política realizadas por los legisladores de las Comunidades Europeas.

[745] La Guía comunitaria sobre auditorías de aduana figura en Comunidades Europeas - Prueba documental 90. A este respecto, véase el párrafo 7.178 *supra*.

[746] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 400, en el que se hace referencia a Comunidades Europeas - Prueba documental 90.

miembros a realizar auditorías pero no les obliga a ello. Los Estados Unidos también se basan en declaraciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas de las CE en su informe en el sentido de que algunos Estados miembros (Bélgica y los Países Bajos) normalmente proporcionan al importador por escrito una decisión de valoración vinculante cuando concluye cada auditoría, otros sólo emiten esas decisiones cuando hay que realizar ajustes específicos (Francia, Irlanda, Portugal y el Reino Unido), otros rara vez adoptan esas decisiones por escrito (Dinamarca, España, Italia, Luxemburgo) y, por último, en Alemania la decisión sobre la valoración no existe como documento escrito diferente. Una vez más, el Grupo Especial se limita a señalar que el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario no contiene requisitos en cuanto a las medidas que han de adoptar las autoridades aduaneras una vez concluida una auditoría. En particular, el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario no obliga a preparar decisiones por escrito después de una auditoría. Tampoco impide que se emitan esas decisiones. Por lo tanto, parecería que los distintos enfoques adoptados por los Estados miembros en cuanto a la emisión de decisiones por escrito son todos ellos compatibles con los términos del apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario.

7.434 A modo de resumen, el Grupo Especial recuerda que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no impone que una disposición que regula una determinada cuestión de administración aduanera deba redactarse en términos preceptivos y no discrecionales. El Grupo Especial recuerda además que las divergencias resultantes del ejercicio de la discrecionalidad contenida en la ley que es objeto de aplicación no está necesariamente en contradicción con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 siempre que la existencia y el ejercicio de la discrecionalidad no pongan indebidamente en peligro el objetivo subyacente del debido proceso del párrafo 3 a) del artículo X y no conviertan en inseguro e imprevisible el entorno comercial sin una causa que lo justifique. Teniendo en cuenta estas constataciones y dado que el Grupo Especial no tiene ningún motivo para poner en duda la justificación que han indicado las Comunidades Europeas con respecto a la existencia de discrecionalidad en el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario, el Grupo Especial constata que no se ha violado el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la manera en que los Estados miembros aplican los requisitos relativos a los procedimientos de auditoría en las Comunidades Europeas aplicables a las mercancías después de su despacho a libre práctica, en particular el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario.[747]

ii) Sanciones por incumplimiento de la legislación aduanera comunitaria

Resumen de los argumentos de las partes

7.435 Los **Estados Unidos** sostienen que en la esfera de las sanciones por incumplimiento de la legislación aduanera comunitaria, está firmemente reconocido que, como cuestión del derecho de las CE, distintos Estados miembros tienen derecho a imponer, y efectivamente imponen, diferentes sanciones. Los Estados Unidos observan que la propia Comisión ha reconocido que "[d]eterminadas infracciones pueden ser consideradas delitos graves en un Estado miembro que pueden ser sancionadas con penas de prisión, mientras que en otro Estado miembro ese mismo acto puede ser sancionado con una multa de menor cuantía, o ni siquiera esto."[748] Además, aducen que esta esfera de divergencia la ha señalado el TJCE en varias ocasiones. Como ejemplo, los Estados Unidos se refieren a la decisión del TJCE en el asunto *José Teodoro de Andrade contra. Director da Alfândega*

[747] Habida cuenta de esta conclusión, el Grupo Especial considera que no es necesario determinar si las auditorías posteriores al despacho a libre práctica de las mercancías están clasificadas o no correctamente como "regímenes aduaneros".

[748] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 72, en el que se hace referencia al documento de la Comisión Europea, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, TAXUD/447/2004 Rev.2, *An explanatory Introduction to the modernized Customs Code*, página 13, 24 de febrero de 2005 (Estados Unidos - Prueba documental 32).

de Leixões, en el que el Tribunal declaró que "[e]n lo que respecta a las infracciones aduaneras, el Tribunal de Justicia ha precisado que, en caso de no existir una armonización de la legislación comunitaria en este ámbito, los Estados miembros son competentes para establecer las sanciones que les parezcan adecuadas".[749]

7.436 Las **Comunidades Europeas** sostienen que la alegación de los Estados Unidos con respecto a las sanciones por infracciones de la legislación aduanera debe ser desestimada porque las disposiciones que establecen sanciones no están abarcadas por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 porque esta disposición no exige la armonización de las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones y porque la legislación comunitaria garantiza un grado suficiente de uniformidad de las disposiciones de sus Estados miembros que establecen sanciones.[750] Además, las Comunidades Europeas aducen que las disposiciones sancionadoras, que establecen una sanción en caso de infracción de una disposición de la legislación aduanera, no son en sí mismas leyes aduaneras[751] y que, por lo tanto, no están abarcadas por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[752] Más concretamente, las Comunidades Europeas sostienen que las sanciones por infracciones de la legislación aduanera no figuran entre las cuestiones a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. Sostienen además que no puede considerarse que las sanciones por infracciones de la legislación aduanera "se refieran" a la clasificación o a la valoración en aduana de productos o a los tipos de los derechos de aduana.[753]

7.437 Las Comunidades Europeas sostienen también que las leyes de los Estados miembros que contienen disposiciones que establecen sanciones son en sí mismas leyes de aplicación general. En consecuencia, aunque estas leyes estuvieran comprendidas en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 sería aplicable a la aplicación de esas leyes. Las Comunidades Europeas aducen que las supuestas diferencias entre las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones a las que se han referido los Estados Unidos no son diferencias en la aplicación sino más bien diferencias entre distintas medidas legislativas aplicables en diferentes territorios. Que una determinada materia pueda estar regulada de manera diferente en distintas partes del territorio de un Miembro de la OMC no tiene nada que ver con la aplicación no uniforme.[754] Las Comunidades Europeas sostienen que, puesto que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 sólo se refiere a la *aplicación* de las leyes aduaneras y no al *contenido* de esas leyes en sí mismas, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no exige la armonización de las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones. Las Comunidades Europeas aducen que, por lo tanto, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no establece la obligación de armonizar leyes que pueden existir en un Miembro de la OMC a nivel subfederal. Simplemente exige

[749] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 100, en el que se hace referencia a la sentencia dictada en el asunto José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixões, Asunto C-213/99, Recopilación de Jurisprudencia 2000, página I-11083, 7 de diciembre de 2000, párrafos 4, 18 a 20. (Estados Unidos - Prueba documental 31).

[750] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 189.

[751] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 431.

[752] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 429; Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 52.

[753] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 119 del Grupo Especial; Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 67.

[754] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 69.

que esas leyes sean aplicadas de manera uniforme en el territorio en el que son aplicables.[755] Las Comunidades Europeas aducen también que las sanciones aplicables por infracciones de la legislación aduanera comunitaria se exponen en las leyes nacionales de los Estados miembros, que deben respetar los principios establecidos por el derecho comunitario. Por consiguiente, no es la aplicación de las disposiciones que establecen sanciones lo que varía dentro de las Comunidades Europeas: son las leyes propiamente dichas las que son diferentes, aunque dentro de los límites fijados por el derecho comunitario.[756] Las Comunidades Europeas concluyen que los Estados Unidos no han demostrado que la aplicación de esas disposiciones que establecen sanciones varíe dentro de los Estados miembros que las han adoptado. Más bien, según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos exigen efectivamente una armonización de las disposiciones que establecen sanciones dentro de las Comunidades Europeas, pero el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no ofrece fundamento jurídico alguno para tal alegación.[757]

7.438 Los **Estados Unidos** sostienen que el argumento de las Comunidades Europeas hacen caso omiso de la distinción entre las leyes que aplica un Estado miembro y los instrumentos para aplicar esas leyes. Suponen, sin base alguna, que como las disposiciones que establecen sanciones adoptan la forma de leyes sólo pueden ser aplicadas en sí mismas y no servir también como instrumentos de aplicación de otras leyes. Sin embargo, según los Estados Unidos, en la medida en que las leyes que establecen sanciones son instrumentos de aplicación de las leyes aduaneras y hacen que la aplicación de esas leyes sean uniforme o no, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es aplicable a esas leyes.[758] Los Estados Unidos aducen que, partiendo del sentido corriente de la palabra "aplicar", las disposiciones de los Estados miembros que establecen sanciones ponen en vigor las leyes aduaneras de las CE al verificar y exigir el cumplimiento de esas leyes. Las autoridades de los Estados miembros "ejecutan" o "cumplen" las leyes aduaneras de las CE mediante, entre otros, los instrumentos de las disposiciones que establecen sanciones.[759] Los Estados Unidos observan que sus argumentos se refieren a las leyes y reglamentos que existen a nivel subfederal y que se utilizan para verificar y exigir el cumplimiento de las leyes y los reglamentos prescritos a nivel federal, no a la totalidad de las leyes y reglamentos que existen a nivel subfederal que no tienen nada que ver con la verificación y la exigencia de la observancia de otras leyes y reglamentos o que se refieren únicamente a la verificación y exigencia de la observancia de otras leyes y reglamentos subfederales.[760] Los Estados Unidos aducen también que el argumento de las Comunidades Europeas según el cual las diferencias en las leyes que establecen sanciones son diferencias de contenido y no de aplicación supone erróneamente que una ley (u otra medida) no puede ser de naturaleza administrativa. A juicio de los Estados Unidos, las leyes que establecen sanciones son de naturaleza administrativa por cuanto presumen la existencia de otras leyes y prescriben consecuencias en caso de infracción de esas leyes.[761]

---

[755] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 434; Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 53.

[756] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 435; Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 53.

[757] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 436.

[758] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 32 del Grupo Especial.

[759] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 79 y 80.

[760] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 7.

[761] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 4 y 32 del Grupo Especial.

7.439 Las **Comunidades Europeas** responden que no están de acuerdo en que una disposición que establece sanciones ponga en vigor o cumpla la norma sustantiva cuya violación tiene por objeto sancionar. Por ejemplo, una disposición que establece la imposición de una sanción en caso de que no se declare una mercancía no "cumple" o "pone en vigor" la disposición que impone la obligación de declarar la mercancía. La propia disposición que establece sanciones tiene que cumplirse mediante un acto administrativo o judicial que imponga la sanción. Es este último acto el que puede considerarse que ejecuta la prohibición y por lo tanto constituye la "aplicación". En cambio, la disposición que establece sanciones complementa la disposición sustantiva, pero en sí misma no la pone en vigor.[762] Según las Comunidades Europeas, las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones sustantivas son medidas de aplicación general que se complementan entre sí. El hecho de que las primeras existan a nivel de los Estados miembros y las segundas a nivel de las CE no significa que las primeras apliquen las segundas.[763] Las Comunidades Europeas observan también que no impugnan que las disposiciones que establecen sanciones sean instrumentos pertinentes para garantizar la aplicación uniforme de la legislación aduanera. Sin embargo, el hecho de las disposiciones que establecen sanciones sean instrumentos para lograr la aplicación uniforme de la legislación aduanera no significa que sean en sí mismas leyes o reglamentos que se refieran a las materias enumeradas en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, en particular la clasificación arancelaria, la valoración en aduana o los tipos de los derechos de aduana.[764] Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige únicamente la aplicación uniforme de las leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo 1 de ese artículo. Si las disposiciones que establecen sanciones son simplemente "instrumentos" para garantizar una aplicación uniforme de esas leyes, las disposiciones que establecen sanciones en sí mismas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[765] Además, según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos no han demostrado que el hecho de que las disposiciones que establecen sanciones figuren en las leyes de los Estados miembros conduzca de alguna manera a la falta de uniformidad en la aplicación de las leyes abarcadas por el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, en particular las leyes relativas a la clasificación arancelaria, la valoración en aduana y los tipos de los derechos de aduana. Además, las Comunidades Europeas aducen que no es correcto suponer que las diferencias en las sanciones llevarían necesariamente a una falta de uniformidad en la aplicación de las disposiciones cuya infracción se sanciona. Ese resultado sólo se produciría si las sanciones no fueran disuasorias o efectivas. Si, por el contrario, las sanciones son disuasorias y efectivas, hay que suponer que se respetarán las disposiciones sustantivas conexas, con independencia de que haya diferencias en el nivel de las sanciones aplicables.[766]

7.440 Las Comunidades Europeas aducen también que, aunque se considerara que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es aplicable a la cuestión de la armonización de las disposiciones que establecen sanciones, la legislación de las CE proporciona un nivel suficiente de armonización a este respecto.[767] En este sentido, las Comunidades Europeas aducen que el TJCE ha elaborado directrices claras para las disposiciones que establecen sanciones en casos de infracción de la legislación aduanera comunitaria que, en particular, han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias

[762] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 71.

[763] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 72.

[764] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 192.

[765] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 193.

[766] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 209.

[767] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 429 y 437; Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 54.

y que el Consejo de la Unión Europea ha confirmado estos principios.[768] Las Comunidades Europeas consideran que estos requisitos generales son suficientes para garantizar una aplicación uniforme de las leyes aduaneras comunitarias, de acuerdo con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos no han aportado ninguna prueba que demuestre que la falta de una armonización completa de las disposiciones que establecen sanciones de las CE dé como resultado una falta de uniformidad en la aplicación de las leyes de las CE en las esferas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.[769] Además, las Comunidades Europeas sostienen que en el asunto *José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixões* el TJCE subrayó que los Estados miembros no pueden actuar libremente cuando establecen disposiciones que establecen sanciones sino que deben asegurarse de que la sanción sea efectiva, proporcionada y disuasoria. Las Comunidades Europeas explican que, con otras palabras, los Estados miembros están limitados en dos direcciones. No pueden establecer sanciones que sean excesivamente severas y, por lo tanto, violen el principio de proporcionalidad. Por otra parte, no pueden establecer sanciones tan indulgentes que no tengan efectos disuasorios y, por lo tanto, no garanticen la aplicación efectiva de la legislación comunitaria. Las Comunidades Europeas añaden que estos principios fundamentales bastan para garantizar la uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras, confirmado por el párrafo 3 del artículo VIII del GATT de 1994, que se refiere específicamente a la cuestión de las sanciones por infracciones de los reglamentos de aduanas y que simplemente establece algunos criterios mínimos de proporcionalidad.[770]

7.441 Los **Estados Unidos** aducen en respuesta que los principios fundamentales a que se refieren las Comunidades Europeas son principios muy generales que permiten una amplia diversidad de prácticas de los Estados miembros. Los Estados Unidos señalan que las propias Comunidades Europeas reconocen que mientras que determinadas infracciones pueden ser consideradas delitos graves en un Estado miembro que pueden ser sancionadas con penas de prisión, mientras que en otro Estado miembro ese mismo acto puede ser sancionado con una multa de menor cuantía, o ni siquiera esto. Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas no pueden sugerir que cumplen la obligación de aplicación uniforme cuando las doctrinas jurídicas aplicables permiten esas divergencias tan notables en la aplicación. Según los Estados Unidos, la aceptación de ese argumento dejaría efectivamente sin sentido el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[771]

Análisis por el Grupo Especial

7.442 El Grupo Especial observa que la esencia de la impugnación de los Estados Unidos es que, en la esfera de las sanciones por infracciones de la legislación aduanera de las CE, distintos Estados miembros tienen derecho a imponer, y efectivamente imponen, diferentes sanciones.[772] Los Estados Unidos sostienen que las leyes que establecen sanciones son instrumentos de aplicación de las leyes aduaneras de las CE y, en la medida en que son diferentes entre los Estados miembros, dan lugar a la

[768] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 438.

[769] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 79.

[770] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 441 y 442.

[771] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 52, en el que se hace referencia al documento de la Comisión Europea, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, TAXUD/447/2004 Rev.2, *An Explanatory Introduction to the Modernized Customs Code*, página 13, 24 de febrero de 2005. (Estados Unidos - Prueba documental 32).

[772] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 26.

aplicación no uniforme de las leyes aduaneras, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[773]

7.443 No hay en el Código Aduanero Comunitario ni en el Reglamento de Aplicación disposiciones que definan las infracciones a nivel de las CE ni identifiquen las consecuencias de tales infracciones (por ejemplo en forma de sanciones).[774] Por consiguiente, la naturaleza y el nivel de tales sanciones vienen determinados por las leyes nacionales de los Estados miembros. Este hecho lo señaló el TJCE en la esfera de la administración de aduanas en el asunto *José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixões.* En ese asunto el TJCE declaró que "[e]n lo que respecta a las infracciones aduaneras, el Tribunal de Justicia ha precisado que, en caso de no existir una armonización de la legislación comunitaria en este ámbito, los Estados miembros son competentes para establecer las sanciones que les parezcan adecuadas."[775]

7.444 Teniendo en cuenta lo anterior, lo que ha de examinar el Grupo Especial es si las leyes que establecen sanciones pueden ser consideradas "instrumentos" que aplican la legislación aduanera de las CE y, en caso afirmativo, si las diferencias sustantivas en esos instrumentos entre los Estados miembros - cuya existencia no discuten las partes - significan que la aplicación de las leyes aduaneras de las CE no es uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En este sentido, el Grupo Especial recuerda la constatación que figura en los párrafos 7.114 y siguientes en el sentido de que el término "aplicar" se refiere a la aplicación de las leyes y reglamentos, incluidos los procesos administrativos y sus resultados, pero no a las leyes y reglamentos en sí mismos. En consecuencia, el Grupo Especial considera que, a efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el contenido sustantivo de las leyes de los Estados miembros que establecen sanciones, que se utilizan para hacer cumplir la legislación aduanera comunitaria no puede ser considerado como actos de aplicación con respecto a las leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones abarcados por el párrafo 1 del artículo X del GATT. Por lo tanto, no se puede considerar que las diferencias sustantivas entre los Estados miembros en las leyes que establecen sanciones infrinjan el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por consiguiente, el Grupo Especial no constata una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a las diferencias sustantivas entre los Estados miembros en las leyes que establecen sanciones.[776]

7.445 No obstante, el Grupo Especial desea señalar que aunque a su juicio no puede considerarse que las diferencias sustantivas entre los Estados miembros en las leyes que establecen sanciones infrinjan el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sin embargo, las diferencias en la forma en que los Estados miembros han aplicado la decisión judicial dictada por el TJCE en el asunto *José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixões*, que exige que las infracciones de la legislación comunitaria sean sancionadas con medidas que hagan que la sanción sea efectiva, proporcionada y disuasoria, en teoría podrían considerarse una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. A este respecto, el Grupo Especial observa que decisiones judiciales como la dictada por el TJCE en el asunto *Andrade* están comprendidas en el ámbito de aplicación de las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el

[773] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 50; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 32 del Grupo Especial.

[774] A este respecto, véanse los párrafos 7.175 y 7.176.

[775] *José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixões* , asunto C-213/99, Recopilación de Jurisprudencia 2000, página I-11083, 7 de diciembre de 2000, párrafo 20. (Estados Unidos - Prueba documental 31).

[776] Habida cuenta de esta conclusión, el Grupo Especial considera que no es necesario determinar si las leyes que establecen sanciones están clasificadas o no correctamente como "regímenes aduaneros", lo que las Comunidades Europeas pusieron en tela de juicio en la nota 127 de su Primera comunicación escrita.

párrafo 1 [del artículo X del GATT de 1994]". Además, la decisión del TJCE en el asunto *Andrade* fue confirmada por la Resolución del Consejo de las CE, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior.[777] A juicio del Grupo Especial, esta Resolución del Consejo también está comprendida en el ámbito de aplicación de las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 [del artículo X del GATT de 1994]". El Grupo Especial considera que el reconocimiento por parte de las Comunidades Europeas en el contexto de la presente diferencia de diferencias sustantivas entre los Estados miembros en las disposiciones que establecen sanciones podría indicar que la decisión judicial dictada por el TJCE en el asunto *José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixões* y la Resolución del Consejo de 29 de junio de 1995 sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior no son aplicadas de manera uniforme por los Estados miembros, con infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, el Grupo Especial no tratará de determinar si la manera en que los Estados miembros aplican la decisión judicial dictada por el TJCE en el asunto *José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixões* y la Resolución del Consejo de 29 de junio de 1995 sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior infringe o no realmente el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 dado que los Estados Unidos no alegaron una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 a este respecto.

iii) Transformación bajo control aduanero

Resumen de los argumentos de las partes

7.446 Los **Estados Unidos** señalan que la "transformación bajo control aduanero" permite que se fijen los derechos sobre un producto que es importado a las Comunidades Europeas una vez que ha sido ulteriormente transformado en las Comunidades Europeas después de la importación en lugar de imponer los derechos sobre el propio producto importado. Según los Estados Unidos, en las Comunidades Europeas la posibilidad de utilizar este régimen se determina de acuerdo con el examen de las "condiciones económicas" establecido en la legislación de las CE.[778] Los Estados Unidos sostienen que, en virtud del anexo 76 del Reglamento de Aplicación, las "condiciones económicas" se consideran cumplidas en el caso de determinadas mercancías y operaciones pero para todas las demás las autoridades aduaneras del Estado miembro en que se presenta la solicitud deberán efectuar un examen de las condiciones económicas según las circunstancias de cada caso.[779]

7.447 Los Estados Unidos aducen que, aunque el examen de si se han cumplido o no las "condiciones económicas" en un caso determinado entraña un examen en la totalidad de las CE, la normativa aduanera comunitaria no prevé la aplicación uniforme de ese examen en todas las Comunidades Europeas. Los Estados Unidos aducen que distintos Estados miembros aplican los criterios de forma diferente, lo que puede tener efectos comerciales importantes.[780] A este respecto,

[777] Comunidades Europeas - Prueba documental 41. En particular, en la Resolución del Consejo se pide a los Estados miembros que "al trasponer los textos comunitarios al derecho nacional velen por que se tomen las medidas que conduzcan a una aplicación del Derecho comunitario con una eficacia y un rigor equivalentes a los empleados en la aplicación de su derecho nacional y que en materia de sanciones adopten disposiciones cuyo carácter sea, en cualquier caso, efectivo, proporcionado y disuasorio".

[778] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 27 y 103.

[779] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 104, en el que se hace referencia al apartado 1 del artículo 552 del Reglamento de Aplicación (Estados Unidos - Prueba documental 6).

[780] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 27.

los Estados Unidos observan que el apartado 3 del artículo 502 del Reglamento de Aplicación dice que el "examen deberá establecer si el recurso a fuentes de aprovisionamiento no comunitarias es susceptible de favorecer la creación o el mantenimiento de una actividad de transformación en la Comunidad." Los Estados Unidos sostienen que al menos las autoridades de un Estado miembro parecen aplicar criterios que van más allá de esta directriz básica.[781] Los Estados Unidos aducen en particular que, en el Reino Unido, las autoridades obligan al importador a demostrar no sólo que "el recurso a fuentes de aprovisionamiento no comunitarias es susceptible de favorecer la creación o el mantenimiento de una actividad de transformación en la Comunidad", como establece el apartado 3 del artículo 502, sino también que la transformación propuesta no "perjudicará los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares".[782] Los Estados Unidos sostienen que, en cambio, la esencia de la legislación francesa que aplica las disposiciones pertinentes de la legislación aduanera comunitaria identifica un solo criterio sobre los efectos económicos para decidir si se permite la transformación bajo control aduanero.[783] Los Estados Unidos sostienen que, en esencia, los reglamentos franceses simplemente requieren que el importador cumpla la condición establecida en el apartado 3 del artículo 502 del Reglamento de Aplicación y, por lo tanto, no imponen el criterio adicional que figura en la legislación del Reino Unido de demostrar que no se perjudica a los competidores de las Comunidades Europeas.[784] Por lo tanto, a quienes presentan una solicitud a la autoridad aduanera francesa no se les dice que la información que faciliten debe demostrar también que la actividad de transformación propuesta no perjudicará a los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares. Tampoco se les dice qué tipo de pruebas deben aportar para cumplir el segundo criterio relativo al examen de las condiciones económicas.[785]

7.448 Según los Estados Unidos, una comparación sencilla entre la directriz de Francia y la del Reino Unido demuestra que estos dos países están aplicando de manera no uniforme el artículo 133 del Código Aduanero Comunitario, el apartado 3 del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación. Los Estados Unidos aclaran que no han formulado ningún argumento con respecto a la aplicación de la legislación francesa. Según los Estados Unidos no es necesario hacerlo porque la legislación de Francia y la del Reino Unido -ambas instrumentos para la aplicación del derecho comunitario- son a simple vista divergentes.[786] Según los Estados Unidos, el hecho de que distintos Estados miembros apliquen explícitamente criterios diferentes, existiendo al menos un Estado miembro que exige pruebas positivas de la falta de perjuicio a los competidores de las Comunidades Europeas y otros que exigen simplemente pruebas de la creación o el mantenimiento de actividad de transformación en las Comunidades Europeas es una prueba patente de falta de uniformidad en la aplicación.[787] Los Estados Unidos sostienen que, por lo tanto, la aplicación de cada una de esas leyes será *necesariamente* divergente.[788]

---

[781] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 105.

[782] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 106, en el que se hace referencia a HM Customs & Excise, Notice 237, "*Processing Under Customs Control (PCC*)", junio de 2003 (Estados Unidos - Prueba documental 34).

[783] *Bulletin officiel des douanes*, Nº 6527, 31 de agosto de 2001, párrafo 81 (modificado por BOD Nº 6609, 4 de noviembre de 2004) (Estados Unidos - Prueba documental 35).

[784] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 107.

[785] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 140 del Grupo Especial.

[786] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 139 del Grupo Especial.

[787] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 107.

[788] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 139 del Grupo Especial.

7.449 En respuesta, las **Comunidades Europeas** aducen que los documentos de Francia y el Reino Unido que se mencionan en los argumentos de los Estados Unidos no constituyen "legislación". Su naturaleza es simplemente de orientación, que siempre ha de interpretarse de acuerdo con la legislación comunitaria. Las Comunidades Europeas aducen que, por lo tanto, los Estados Unidos impugnan lo que a su juicio es una divergencia entre la orientación de Francia y el Reino Unido en cuanto a la transformación bajo control aduanero.[789]

7.450 Los **Estados Unidos** aducen en respuesta que, en virtud del Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación, las autoridades aduaneras deben examinar las "condiciones económicas" para determinar si deben concederse determinadas solicitudes de transformación bajo control aduanero. La manera en que las autoridades de distintos Estados miembros aplican esa medida de aplicación general se expone en ocasiones en manuales, boletines u otros documentos de cada Estado miembro. En estos documentos se explica cómo aplican los Estados miembros los reglamentos de las CE sobre la transformación bajo control aduanero y, por lo tanto, tienen una función administrativa. Es decir, prescriben como se pondrán en práctica otras leyes - determinados artículos del Código Aduanero Comunitario y del Reglamento de Aplicación. Los Estados Unidos sostienen que, en la medida en que los manuales o boletines de distintos Estados miembros prescriben medios diferentes para poner en práctica las normas pertinentes de las CE, ponen de manifiesto una falta de uniformidad en la aplicación de esas normas. Según los Estados Unidos, la falta de uniformidad en la aplicación del examen de las condiciones económicas por las autoridades de distintos Estados miembros resulta evidente en el contenido de los manuales y boletines que imponen cómo ha de llevarse a cabo ese examen en distintos Estados miembros.[790]

7.451 Las **Comunidades Europeas** aducen que la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario restringe la autorización para la transformación bajo control aduanero a los casos "en que se reúnan las condiciones necesarias para que el régimen pueda contribuir a favorecer la creación y el mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en la Comunidad sin que se perjudiquen los intereses esenciales de los productores de mercancías similares (condiciones económicas)." Según las Comunidades Europeas, el apartado 3 del artículo 502 del Reglamento de Aplicación repite la primera parte de la frase, que debe considerarse una referencia abreviada a los requisitos establecidos en la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario. Las Comunidades Europeas aducen que la situación no podría ser distinta teniendo en cuenta que el Reglamento de Aplicación, que ha sido adoptado por la Comisión, es una legislación de aplicación y no puede modificar los requisitos establecidos por el Código Aduanero Comunitario.[791] Las Comunidades Europeas sostienen que, además, el "*Bulletin officiel des douanes*" francés también se refiere al criterio relativo a la falta de perjuicio a los competidores de las Comunidades Europeas.[792] Las Comunidades Europeas aducen que el segundo apartado que figura en los párrafos 78 y 79 de la directriz francesa subraya la obligación de la parte que presenta la solicitud de facilitar información sobre la falta de efectos perjudiciales a los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares.[793]

---

[789] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 139 del Grupo Especial.

[790] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 27 del Grupo Especial.

[791] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 413.

[792] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 415, donde se remiten al *Bulletin officiel des douanes* Nº 6527, párrafo 78, de 31 de agosto de 2001, página 17 (modificado por BOD Nº 6609, de 4 de noviembre de 2004) (Estados Unidos - Prueba documental 35).

[793] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 140 del Grupo Especial.

7.452 Las Comunidades Europeas llegan a la conclusión de que no existe divergencia entre los documentos de Francia y el Reino Unido y que, por lo tanto, corresponde a los Estados Unidos demostrar la existencia de una aplicación divergente de las condiciones para la transformación bajo control aduanero. Según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos no han aportado tales pruebas.[794] Las Comunidades Europeas aducen que, al no existir ninguna prueba que demuestre que las autoridades francesas siguen una práctica constante que se aparta de la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario, los Estados Unidos no han demostrado la existencia de una pauta de aplicación no uniforme en relación con el régimen de transformación bajo control aduanero.[795]

7.453 Los **Estados Unidos** responden que la mención que se hace en el boletín de aduanas francés a la falta de perjuicio a los competidores es simplemente una paráfrasis introductoria de determinadas disposiciones del Código Aduanero Comunitario. Después de la introducción en el boletín se especifica que el examen de las condiciones económicas se llevará a cabo según las modalidades enunciadas a continuación ("il s'effectue selon les modalités définies ci-après"). Las modalidades pertinentes no se refieren al perjuicio a los productores de la Comunidad.[796]

7.454 Las **Comunidades Europeas** aducen en respuesta que la crítica de los Estados Unidos se basa en una interpretación aislada e incorrecta de la directriz francesa, que debe interpretarse en el contexto de la legislación comunitaria. La directriz se refiere a las condiciones económicas exigidas para obtener autorización para efectuar una transformación bajo control aduanero de la misma manera que el apartado 3 del artículo 502 del Reglamento de Aplicación, es decir, utilizando una abreviación de los requisitos establecidos en la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario. Las autoridades francesas exigen el mismo tipo de información que las del Reino Unido: la información necesaria para determinar si "se reún[e]n las condiciones necesarias para que el régimen pueda contribuir a favorecer la creación y el mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en la Comunidad sin que se perjudiquen los intereses esenciales de los productores de mercancías similares (condiciones económicas)."[797] Las Comunidades Europeas sostienen que esta interpretación viene avalada por el párrafo 78 de la directriz francesa, que dentro del capítulo III "Examen de las condiciones económicas", sirve de preámbulo de la sección I, donde figura el párrafo 83. El párrafo 78 dispone que "la letra c) del artículo 117, la letra e) del artículo 133 y la letra c) del artículo 148 del Código Aduanero Comunitario estipulan que la concesión de autorización para los regímenes de perfeccionamiento activo, de perfeccionamiento pasivo y de transformación bajo control aduanero no perjudicarán los intereses esenciales de los productores de la Comunidad de mercancías comparables a las utilizadas".[798] Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo 78 es algo más que simplemente una paráfrasis introductoria de determinadas disposiciones del Código Aduanero Comunitario. Este párrafo recuerda, para toda la sección I, que la falta de efectos perjudiciales a los intereses esenciales de los productores de la Comunidad es una condición económica general que es común a los tres regímenes aduaneros en él comprendidos (perfeccionamiento activo, perfeccionamiento pasivo y transformación bajo control aduanero), como

[794] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 139 del Grupo Especial.

[795] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 183.

[796] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 4 del Grupo Especial.

[797] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 178.

[798] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 179, en el que se hace referencia la Prueba documental 35 presentada por los Estados Unidos.

se establece con claridad, de manera respectiva, en la letra c) del artículo 117, la letra c) del artículo 148 y la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario.[799]

Análisis por el Grupo Especial

7.455 El Grupo Especial señala que los Estados Unidos impugnan divergencias sustantivas en las directrices de Francia y el Reino Unido con respecto a la aplicación de las disposiciones de la legislación aduanera comunitaria relativas a la transformación bajo control aduanero.[800] Los Estados Unidos explican que esas divergencias *sustantivas* en dichas directrices se traducen necesariamente en una *aplicación* divergente de la legislación aduanera comunitaria en esta esfera por parte de las autoridades aduaneras de Francia y el Reino Unido.[801]

7.456 La legislación relativa a la transformación bajo control aduanero que según alegan los Estados Unidos se aplica de manera no uniforme existe a nivel de las CE. En particular, los Estados Unidos impugnan la manera de aplicar el artículo 133 del Código Aduanero Comunitario, el apartado 3 del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación en relación con el examen de las condiciones económicas para permitir la transformación bajo control aduanero.[802]

7.457 A juicio del Grupo Especial, la aplicación de la legislación comunitaria sobre la transformación bajo control aduanero constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es un asunto comprendido en el mandato del Grupo Especial puesto que equivale a un caso de aplicación del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario y del apartado 3 del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación con respecto a los regímenes de entrada y despacho a libre práctica de las mercancías.[803]

7.458 Con respecto a la cuestión de si la aplicación de la legislación de las CE relativa a la transformación bajo control aduanero es o no "uniforme" en los Estados miembros en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que ha formulado en el párrafo 7.135 *supra* de que se exige la uniformidad geográfica en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Es decir, la aplicación deberá ser uniforme en distintos lugares dentro de un determinado Miembro de la OMC. El Grupo Especial recuerda también la constatación que figura en el párrafo 7.135 *supra* en el sentido de que al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 deberán tenerse en cuenta la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos con respecto a la aplicación de la legislación aduanera relativa a la transformación bajo control aduanero es de carácter limitado. Afecta a la aplicación de algunas disposiciones del Código Aduanero Comunitario y del Reglamento de Aplicación, a saber, el artículo 133 del Código Aduanero Comunitario, el apartado 3 del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación. Por consiguiente, dado el carácter limitado de esta impugnación, el Grupo Especial considera que se necesita un alto grado de uniformidad a efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Pasamos seguidamente a

[799] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 180.

[800] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 75.

[801] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 139 del Grupo Especial.

[802] Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 124 y 139 del Grupo Especial.

[803] A este respecto, véanse los párrafos 7.188 a 7.190 *supra*.

examinar los hechos para determinar si se ha logrado o no este alto grado de uniformidad con respecto a la aplicación de la legislación comunitaria relativa a la transformación bajo control aduanero.

7.459 En síntesis, la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario dispone que, antes de conceder autorización para la transformación bajo control aduanero de conformidad con el artículo 85 del Código Aduanero Comunitario, las autoridades aduaneras deberán examinar las consecuencias económicas de la utilización del régimen de transformación bajo control aduanero para determinar si el régimen contribuye o no a crear o mantener una actividad de transformación en las Comunidades Europeas sin que se perjudiquen los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares. El apartado 3 del artículo 502 del Reglamento de Aplicación dispone que, con respecto al régimen de transformación bajo control aduanero, el examen deberá establecer si el recurso a fuentes de aprovisionamiento no comunitarias es susceptible de favorecer la creación o el mantenimiento de una actividad de transformación en la Comunidad. El artículo 552 y la parte A del anexo 76 del Reglamento de Aplicación enuncian los casos en que se consideran cumplidas las condiciones económicas de tal manera que en tales casos no es necesario efectuar un examen. Para los tipos de mercancías y las operaciones que figuran en la parte B del anexo 76 del Reglamento de Aplicación y que no estén cubiertas en la parte A del anexo, el examen de las condiciones económicas deberá hacerse a nivel comunitario a través del correspondiente procedimiento del Comité. Para los tipos de mercancías y las operaciones que no figuran en el anexo 76 del Reglamento de Aplicación, de conformidad con el apartado 1 del artículo 502 y el apartado 1 del artículo 552, el examen de las condiciones económicas se llevará a cabo a nivel nacional. Cuando los exámenes se realizan a nivel nacional los Estados miembros deben comunicar a la Comisión la información pertinente de acuerdo con el artículo 522 del Reglamento de Aplicación. Además, de conformidad con los artículos 503 y 504 del Reglamento de Aplicación, si un Estado miembro formula objeciones contra una autorización expedida o si las autoridades aduaneras interesadas desean celebrar consultas antes o después de la expedición de una autorización, el examen de las condiciones económicas podrá efectuarse a nivel de la Comunidad.

7.460 En el marco de las alegaciones de los Estados Unidos de aplicación no uniforme de la legislación comunitaria relativa a la transformación bajo control aduanero, el Grupo Especial entiende que el acto o los actos de aplicación que los Estados Unidos impugnan es la manera en que las autoridades aduaneras de Francia y el Reino Unido aplican la legislación aduanera comunitaria. Para apoyar su impugnación los Estados Unidos se basan en directrices emitidas por las autoridades aduaneras de Francia y el Reino Unido, respectivamente, con respecto a la aplicación de la legislación de las CE sobre la transformación bajo control aduanero. Según los Estados Unidos, la divergencia en el contenido de las referidas directrices significa que la manera en que las autoridades aduaneras de Francia y el Reino Unido aplican o dan cumplimiento a la legislación aduanera comunitaria no será uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.461 Para demostrar la manera en que las autoridades aduaneras del Reino Unido aplican las disposiciones, los Estados Unidos se remiten a HM Customs & Excise Notice 237, titulado "Processing under Customs Control (PCC)", de junio de 2003. La introducción indica que la finalidad del aviso es explicar el procedimiento relativo a la transformación bajo control aduanero.[804] En el aviso se explica que la legislación sobre el régimen de transformación bajo control aduanero y otros regímenes figura en el Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación.[805] Además, en

[804] HM Customs & Excise, Notice 237, "Processing Under Customs Control (PCC)", junio de 2003, párrafo 1.1 (Estados Unidos - Prueba documental 34).

[805] HM Customs & Excise, Notice 237, "Processing Under Customs Control (PCC)", junio de 2003, párrafo 1.4 (Estados Unidos - Prueba documental 34).

el aviso se indica en mayúsculas y negritas que "Nada de lo dispuesto en este aviso anula la ley" y posteriormente que "este aviso no es la ley".[806] En el aviso también se dice lo siguiente:

> "El Department of Trade and Industry (DTI)/: Department for Environment, Food and Rural Affaires (DEFRA) utilizará las pruebas aportadas para establecer si el recurso a mercancías no comunitarias es susceptible de favorecer la creación o el mantenimiento de una actividad de transformación en la Comunidad sin que se perjudiquen intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares. Por lo tanto, la prueba económica tiene dos aspectos y usted deberá aportar pruebas para demostrar los efectos en su actividad y en cualesquiera otros productores comunitarios de las mercancías importadas. …"[807]

7.462 Con respecto a la manera en que las autoridades aduaneras francesas aplican las disposiciones, los Estados Unidos se remiten al *Bulletin officiel des douanes* Nº 6527 de 31 de agosto de 2001. En la portada del *Bulletin* se indican algunas referencias documentales -a saber, el Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación.[808] El primer párrafo del capítulo del *Bulletin* que se ocupa de la prueba de las condiciones económicas (a saber, el capítulo III) también se refiere de manera específica a disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria, incluida la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario que se refiere a la transformación bajo control aduanero.[809] En cuanto a los requisitos aplicables en el marco de la prueba de las condiciones económicas para todos los regímenes aduaneros a los que se aplica la prueba, el primer párrafo del capítulo III dispone que "la letra c) del artículo 117, la letra e) del artículo 133 y la letra c) del artículo 148 del Código Aduanero Comunitario estipulan que la concesión de autorización para los regímenes de perfeccionamiento activo, de perfeccionamiento pasivo y de transformación bajo control aduanero no perjudicarán los intereses esenciales de los productores de la Comunidad de mercancías comparables a las utilizadas".[810] Un párrafo posterior del capítulo III, que se refiere exclusivamente a la transformación bajo control aduanero, dispone lo siguiente: "Con respecto a la transformación bajo control aduanero, la casilla 10 del modelo de solicitud deberá cumplimentarse con información que demuestre que el recurso a este régimen aduanero creará o mantendrá una actividad de transformación en la Comunidad (las mercancías y operaciones que no se mencionan en la parte A del anexo 76 del Reglamento de Aplicación)."[811]

7.463 A juicio del Grupo Especial, cuando se leen conjuntamente, los documentos del Reino Unido y Francia que proporcionan orientación sobre la transformación bajo control aduanero contienen los dos mismos requisitos sustantivos que se mencionan en la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario, a saber, el requisito de que se determine si la transformación bajo control

---

[806] HM Customs & Excise, Notice 237, "Processing Under Customs Control (PCC)", junio de 2003, párrafo 1.4 (Estados Unidos - Prueba documental 34).

[807] HM Customs & Excise, Notice 237, "Processing Under Customs Control (PCC)", junio de 2003, párrafo 15 (Estados Unidos - Prueba documental 34). Véase también el párrafo 3.4.

[808] *Bulletin officiel des douanes* Nº 6527, de 31 de agosto de 2001, página 1 (modificado por el BOD Nº 6609, de 4 de noviembre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 35).

[809] *Bulletin officiel des douanes* Nº 6527, de 31 de agosto de 2001, párrafo 78, página 17 (modificado por el BOD Nº 6609, de 4 de noviembre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 35).

[810] *Bulletin officiel des douanes* Nº 6527, de 31 de agosto de 2001, párrafo 78, página 17 (modificado por el BOD Nº 6609, de 4 de noviembre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 35).

[811] *Bulletin officiel des douanes* Nº 6527, de 31 de agosto de 2001, párrafo 83, página 19 (modificado por el BOD Nº 6609, de 4 de noviembre de 2004 (Estados Unidos - Prueba documental 35).

aduanero contribuye o no a crear o mantener una actividad de transformación en las Comunidades Europeas y el requisito de que se determine si se ven afectados o no los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares. En particular, esto se desprende con claridad del pasaje de la directriz del Reino Unidos que se expone en el párrafo 7.461 *supra*, que se refiere explícitamente al hecho de que la autoridad aduanera a la que se haya presentado una solicitud de autorización para la transformación bajo control aduanero establecerá si el recurso a mercancías no comunitarias contribuye a crear o mantener una actividad de transformación en la Comunidad sin que se perjudiquen los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares. De manera similar, en el caso de la directriz francesa, un párrafo del *Bulletin*, aplicable a todos los regímenes a los que se aplica la prueba de las condiciones económicas (uno de los cuales es el de transformación bajo control aduanero), se refiere específicamente a la necesidad de determinar si se ven afectados o no los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares. Posteriormente, en un párrafo que se ocupa exclusivamente de la transformación bajo control aduanero, se hace referencia al requisito de que el régimen debe contribuir a crear o mantener una actividad de transformación en las Comunidades Europeas. Además, como se desprende claramente de los párrafos 7.461 y 7.462 *supra*, los documentos del Reino Unido y de Francia que proporcionan orientación se remiten a la legislación comunitaria aplicable. El Grupo Especial considera que cualquiera que lea o aplique esos documentos entendería que deben leerse teniendo en cuenta los aspectos pertinentes de la legislación de las CE en que se basan, incluida la letra e) del artículo 133 del Código Aduanero Comunitario, al que la directriz francesa se refiere de manera expresa.

7.464 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Grupo Especial considera que los Estados Unidos no han demostrado la existencia de una divergencia sustantiva en las directrices de Francia y el Reino Unido con respecto a la aplicación de las disposiciones de la legislación aduanera comunitaria que rige la transformación bajo control aduanero. Además, los Estados Unidos no han aportado ninguna prueba de que la manera en que las autoridades aduaneras de Francia y el Reino Unido aplican esas directrices dé lugar en la práctica a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

7.465 Por consiguiente, el Grupo Especial llega a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado que la manera en que se aplica el artículo 133 del Código Aduanero Comunitario y el apartado 3 del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación con respecto a la transformación bajo control aduanero no sea uniforme entre los Estados miembros, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

iv) Procedimientos de domiciliación

Resumen de los argumentos de las partes

7.466 Los **Estados Unidos** indican que los "procedimientos de domiciliación" incluyen disposiciones en virtud de las cuales los importadores pueden conseguir que el despacho a libre práctica de las mercancías en las Comunidades Europeas se haga en sus propios locales, en lugar de presentarlas para su inspección por las autoridades aduaneras. Según los Estados Unidos, los requisitos que efectivamente deben cumplir los usuarios de este procedimiento varían significativamente de un Estado miembro a otro y el procedimiento es notablemente más gravoso en algunos que en otros.[812] Los Estados Unidos sostienen que es indudable que hay diferencias graves y que su existencia misma demuestra falta de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera de las CE.[813] Los Estados Unidos alegan que los distintos Estados miembros aplican los procedimientos de domiciliación de manera diferente, incluso en lo relativo a la intervención de las autoridades

[812] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 28 y 110.

[813] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 117.

aduaneras antes del levante de las mercancías, los requisitos posteriores al levante y los requisitos sobre la conservación de comprobantes.[814]

7.467 Los Estados Unidos presentan el cuadro siguiente para mostrar las diferencias:[815]

Estado miembro	**Requisitos previos al levante**	**Intervención de la aduana antes del levante**	**Requisitos posteriores al levante**	**Requisitos sobre conservación de comprobantes**
Reino Unido	Los datos del manifiesto se presentan por vía telemática a la aduana sin modificarlos.	Ninguna	Se transmiten a la aduana por vía telemática datos complementarios sobre la clasificación, la valoración y el origen.	El importador debe conservar los comprobantes durante 4 años.
Francia	Los datos del manifiesto se complementan con otros sobre la clasificación, la valoración, etc. y se registran en el sistema de inventario del importador; el importador transmite la declaración inicial a la aduana.	Se puede hacer una inspección dentro de un plazo determinado antes del levante.	Se deben presentar a la aduana en forma impresa datos complementarios, entre ellos comprobantes, el formulario de valoración DV1, facturas y certificados.	
Alemania	Se transmiten a la aduana los datos del manifiesto, incluida la traducción al alemán de la descripción de las mercancías; la declaración inicial, con información sobre la clasificación, la valoración y el origen, se presenta a la aduana.	Se puede hacer una inspección dentro de un plazo determinado antes del levante.	Se deben presentar a la aduana datos complementarios, entre ellos comprobantes, el formulario de valoración DV1, facturas y certificados.	El importador debe conservar los comprobantes durante 6 años.

[814] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 30 del Grupo Especial.

[815] El cuadro figura en el párrafo 116 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos.

Estado miembro	Requisitos previos al levante	Intervención de la aduana antes del levante	Requisitos posteriores al levante	Requisitos sobre conservación de comprobantes
Italia	Se transmiten a la aduana los datos del manifiesto.	Se puede hacer una inspección dentro del plazo de 1 hora.	La declaración complementaria se transmite por vía telemática; no se exige el formulario de valoración DV1.	El importador debe conservar los comprobantes durante 5 años.
Países Bajos	La declaración inicial se hace con una anotación en el sistema de inventario del importador; el contenido de la declaración inicial se negocia a nivel local.	Se puede hacer una inspección dentro de un plazo determinado antes del levante.	El formulario de valoración DV1 se transmite por vía telemática. Con la declaración suplementaria se exigen algunos documentos (por ejemplo, licencias y certificados que prueban el derecho a un trato arancelario preferencial, pero no se exigen facturas ni conocimientos de embarque.	El importador debe conservar los comprobantes durante 10 años.

7.468 Las **Comunidades Europeas** afirman que los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba documental que ejemplifique y apoye su alegación, lo cual no permite que las Comunidades Europeas se defiendan y no permite tampoco que el Grupo Especial verifique si la alegación de los Estados Unidos se justifica o no. Además, es evidente que los Estados Unidos no han entendido correctamente cuáles son las diferentes etapas del proceso que se sigue cuando las mercancías se importan con este procedimiento. Asimismo, la descripción que los Estados Unidos hacen del procedimiento y de los requisitos sobre conservación de comprobantes contiene errores fundamentales.[816] Por lo tanto, según las Comunidades Europeas, la alegación de que la aplicación no es uniforme de acuerdo con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT en lo referente a los procedimientos de domiciliación no tiene fundamento.[817]

7.469 En relación con la intervención de la aduana antes del levante, las Comunidades Europeas afirman que el hecho de que, en la frontera, las verificaciones de admisibilidad y para luchar contra el contrabando se realicen electrónicamente no significa que no haya una intervención de la aduana. Además, en caso de que las mercancías no sean objeto de esas verificaciones, habrá un acto de la aduana (verificación física, decomiso, etc.). Las Comunidades Europeas dicen que, en consecuencia, es erróneo afirmar que en el Reino Unido no hay intervención de la aduana antes del levante.[818]

[816] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 49.

[817] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 49.

[818] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 423.

Tomando al Reino Unido y a Francia como ejemplos representativos con respecto a la inspección de las mercancías que hacen las autoridades aduaneras antes del levante, a juicio de las Comunidades Europeas, no hay contradicción entre las prácticas de esos dos Estados miembros. En ambos casos, los funcionarios de aduanas pueden o no inspeccionar las mercancías antes del levante.[819]

7.470 En relación con los requisitos previos al levante en el marco de los procedimientos de domiciliación, las Comunidades Europeas afirman que lo que se presenta no son los datos del manifiesto de embarque mismo, sino una declaración simplificada que contiene determinados datos, en la que el comerciante tiene que consignar un número de referencia.[820] Las Comunidades Europeas añaden que es posible emplear tanto sistemas electrónicos de despacho como sistemas basados en documentación impresa. Las Comunidades Europeas afirman que, en lo referente a los procedimientos de domiciliación, en los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación figuran normas comunitarias detalladas para el despacho basado en documentación impresa. Cuando el sistema de despacho utilizado es electrónico, son aplicables normas adicionales que se recogen en los artículos 4*bis* a 4*quater* y en los artículos 222 a 224 de ese mismo Reglamento.[821] En lo que respecta a los documentos justificantes requeridos, las Comunidades Europeas dicen que todos los Estados miembros aplican normas idénticas y que la cuestión planteada por los Estados Unidos relativa al formulario de valoración "DV1" tiene también origen en una confusión, puesto que todos los Estados miembros permiten a los operadores que mantienen intercambios comerciales regulares con los mismos proveedores que presenten una sola vez el DV1 pertinente junto con la solicitud inicial para beneficiarse del procedimiento de domiciliación.[822]

7.471 En relación con los requisitos relativos a la conservación de documentos, las Comunidades Europeas indican que la información que facilitan los Estados Unidos sobre los Países Bajos es errónea: el período de conservación es de 7 años desde el lº de julio de 1998, de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 8 de la Douanewet (Ley de Aduanas). Las Comunidades Europeas dicen que, además, según el párrafo 1 del artículo 16 del Código Aduanero Comunitario, los documentos requeridos se conservarán durante un período mínimo de tres años, pero los Estados miembros podrán establecer períodos más largos teniendo en cuenta sus necesidades y prácticas administrativas y fiscales de carácter general. Las Comunidades Europeas dicen que las diferencias resultantes en cuanto a los plazos que hay entre los cuatro Estados miembros para los cuales los Estados Unidos presentan información (entre 4 y 7 años) no son esenciales. En este sentido, las Comunidades Europeas reiteran que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de las leyes aduaneras y no a las propias leyes aduaneras y que esa disposición no impone la obligación de armonizar la legislación dentro de un Miembro de la OMC. Las diferencias acerca de los plazos de conservación de los comprobantes que hay entre algunos Estados miembros de las CE tienen que ver con el contenido de las leyes aduaneras y con su aplicación. Por lo tanto, a juicio de las Comunidades Europeas, esas diferencias no caen dentro del ámbito del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[823] Por otro lado, las Comunidades Europeas afirman que, a la luz de lo declarado en el informe del Grupo Especial del GATT que examinó el asunto *CEE - Manzanas de mesa*, esas diferencias no tienen carácter sustancial y no suponen una falta de uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras contraria a lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Las Comunidades Europeas, por consiguiente, consideran que la alegación de los Estados Unidos

[819] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 186.

[820] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 422.

[821] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 424.

[822] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 425.

[823] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 426.

basada en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no tiene fundamento en lo que se refiere a los procedimientos de domiciliación.[824]

7.472 Los **Estados Unidos** declaran que las afirmaciones de las Comunidades Europeas sobre los procedimientos de domiciliación identifican los parámetros más amplios dentro de los cuales deben actuar distintas autoridades aduaneras de las Comunidades Europeas. Los Estados Unidos dicen que, aunque no discuten la caracterización que las Comunidades Europeas hacen de esos parámetros más amplios, sí afirman que las diferentes autoridades aduaneras de las Comunidades Europeas aplican los procedimientos de domiciliación de manera distinta dentro de esos parámetros.[825]

Análisis por el Grupo Especial

7.473 El Grupo Especial observa que el núcleo de la impugnación de los Estados Unidos contra los procedimientos de domiciliación reside en que los requisitos efectivos que los usuarios de esos procedimientos deben cumplir varían significativamente de uno a otro de los Estados miembros y que el proceso es notablemente más gravoso en algunos de ellos que en otros.[826] Los Estados Unidos afirman que esas diferencias en los requisitos impuestos por las autoridades aduaneras de las Comunidades Europeas en el contexto de los procedimientos de domiciliación significa que hay una aplicación no uniforme de los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación.

7.474 A juicio del Grupo Especial, la imposición de requisitos sobre los procedimientos de domiciliación constituye un acto de aplicación en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este acto de aplicación es una cuestión comprendida en el mandato del Grupo Especial porque equivale a un caso de aplicación de los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación con respecto a procedimientos relativos al ingreso y el levante de mercancías.[827]

7.475 En lo que se refiere a la cuestión de si la imposición de los requisitos sobre los procedimientos de domiciliación es o no "uniforme" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial recuerda la constatación que hace en el párrafo 7.135 *supra* de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige que haya uniformidad geográfica. Esto quiere decir que la aplicación debe ser uniforme en distintos lugares dentro de un mismo Miembro de la OMC. El Grupo Especial recuerda también la constatación que hace en el párrafo 7.135 *supra* de que la forma, la naturaleza y la escala de la supuesta aplicación no uniforme y las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que supuestamente se aplican de manera no uniforme deben tenerse en cuenta al interpretar el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial considera que la impugnación de los Estados Unidos sobre la imposición de requisitos relativos a los procedimientos de domiciliación es de naturaleza limitada. Se refiere a la aplicación de unas pocas disposiciones del Reglamento de Aplicación, a saber los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación. Por lo tanto, habida cuenta del carácter limitado de esa impugnación, el Grupo Especial considera que, a los fines del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, se necesita un alto grado de uniformidad. Pasamos ahora a considerar los hechos para determinar si se ha alcanzado o no ese alto grado de uniformidad con respecto a la imposición de los requisitos referentes a los procedimientos de domiciliación.

[824] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafos 427 y 428.

[825] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 e) del Grupo Especial.

[826] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 28 y 110.

[827] En este sentido, véanse los párrafos 7.188 a 7.190 *supra*.

7.476 En apoyo de sus alegaciones de no uniformidad en contravención del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, los Estados Unidos usan un cuadro que, según sostienen, demuestra que hay diferencias entre los Estados miembros en el marco de los procedimientos de domiciliación en cuanto a los requisitos impuestos antes del levante, a la intervención de las autoridades aduaneras antes del levante, a los requisitos impuestos después del levante y a los requisitos sobre la conservación de comprobantes. El Grupo Especial observa que los Estados Unidos no han presentado ningún material fáctico en apoyo de lo que, en esencia, no son más que afirmaciones incluidas en el cuadro de las supuestas diferencias en que se basan los Estados Unidos.

7.477 Por lo tanto, el Grupo Especial ha llegado a la conclusión de que los Estados Unidos no han demostrado que hay diferencias entre los Estados miembros respecto de los requisitos que los usuarios de los procedimientos de domiciliación tienen realmente que cumplir. Por consiguiente, los Estados Unidos no han demostrado que los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación se aplican de manera no uniforme en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

v) Resumen y conclusiones

7.478 En síntesis, el Grupo Especial formula las constataciones siguientes con respecto a las alegaciones de los Estados Unidos de aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación en la esfera de los regímenes aduaneros:

a) El Grupo Especial no constata ninguna infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la manera de aplicación del apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario en relación con los requisitos impuestos para los procedimientos de auditoría[828] posteriores al despacho de los productos a libre práctica en las Comunidades Europeas.

b) El Grupo Especial no constata ninguna infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a las diferencias sustantivas en las leyes sobre sanciones[829] entre los Estados miembros.

c) Los Estados Unidos no han demostrado que la manera en que se aplican el artículo 133 del Código Aduanero Comunitario y el apartado 3 del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación en relación con la transformación bajo control aduanero es no es uniforme en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

d) Los Estados Unidos no han demostrado que la aplicación de los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación en relación con los procedimientos de domiciliación es no es uniforme en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

[828] El Grupo Especial recuerda su conclusión, que figura en la nota 747 *supra*, de que el Grupo Especial no considera necesario determinar si es o no correcto considerar que las auditorías posteriores al despacho a libre práctica de mercancías son "regímenes aduaneros".

[829] El Grupo Especial recuerda su conclusión, que figura en la nota 776 *supra*, de que el Grupo Especial no considera necesario determinar si es o no correcto considerar que las leyes sobre sanciones son "regímenes aduaneros".

e) Alegaciones de aplicación no uniforme respecto del apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario

i) Resumen de los argumentos de las partes

7.479 Los **Estados Unidos** sostienen que el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario prescribe un plazo de tres años a partir del nacimiento de una deuda aduanera durante el cual esa obligación se puede dar a conocer al deudor. También prevé la suspensión del plazo de tres años mientras esté pendiente un procedimiento de recurso. Los Estados Unidos afirman que el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario no contempla ninguna otra circunstancia que permita suspender el plazo de tres años.[830] Según los Estados Unidos, las oficinas aduaneras de los 25 Estados miembros tienen la misión de aplicar esas normas, pero las aplican de manera diferente. Los Estados Unidos dicen que las autoridades aduaneras francesas han adoptado la posición de que el plazo de tres años se puede suspender mediante la interposición de cualquier procedimiento administrativo (*procès-verbal*) por el que se investigue una posible infracción a las leyes de aduanas, incluso cuando ese procedimiento no dé por resultado la imposición de ninguna sanción contra el deudor. En opinión de los Estados Unidos, a pesar de la divergencia que ello supone con la posición de otras autoridades aduaneras en otras partes de las Comunidades Europeas, el más alto tribunal francés (el Tribunal de Casación) se ha negado a plantear ante el Tribunal Europeo de Justicia la cuestión de la compatibilidad de esta norma con las disposiciones de las CE.[831] Los Estados Unidos dicen que el asunto *Videocámaras* es ejemplo de la aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario. Concretamente, en el contexto de ese caso, las autoridades aduaneras francesas adoptan la posición de que la nota explicativa enmendada del Arancel Aduanero Común se puede aplicar a importaciones anteriores a la fecha de la nota pero también, y a diferencia de las oficinas aduaneras de otras partes de las Comunidades Europeas, las autoridades aduaneras francesas sostienen que la nota se puede aplicar a las importaciones incluso aunque la deuda aduanera atribuible a esas importaciones haya nacido hace ya más de tres años. Por ello, según los Estados Unidos, el importador de las videocámaras en Francia sigue expuesto al cobro de derechos adicionales sobre importaciones hechas en 1999, aun cuando las oficinas de aduanas de otras partes de las Comunidades Europeas considerarían vencido el plazo para cobrar esas sumas adicionales. Los Estados Unidos alegan que, por lo tanto, en el contexto del asunto *Videocámaras*, la interpretación particular que hace Francia del apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario deja al importador expuesto al cobro de derechos adicionales sobre importaciones hechas hace seis años, a pesar de que otros Estados miembros considerarían que el plazo para cobrarlos ha vencido.[832]

7.480 Las **Comunidades Europeas** afirman que la aplicación del apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, que, según las Comunidades Europeas, se refiere al período durante el cual una deuda aduanera puede ser comunicada al deudor, no está comprendida en el mandato del Grupo Especial porque no cae dentro del alcance de las cuestiones aduaneras enumeradas en la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial. Las Comunidades Europeas añaden que los Estados Unidos no mencionaron la supuesta aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario hasta la segunda reunión sustantiva del Grupo

[830] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 179 del Grupo Especial.

[831] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 146 del Grupo Especial, en que se hace referencia al fallo del Tribunal de Casación en el Asunto Nº 143, 13 de junio de 2001, páginas 439 a 440 (Estados Unidos - Prueba documental 67); fallo del Tribunal de Casación, Asunto Nº 144, 13 de junio de 2001, página 448 (Estados Unidos - Prueba documental 68).

[832] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 31.

Especial con las partes. Además, en la respuesta a una pregunta del Grupo Especial[833], los Estados Unidos enumeran una serie de disposiciones respecto de las cuales dicen haber determinado que la aplicación no era uniforme, pero no incluyen el artículo 221 del Código Aduanero Comunitario. Según las Comunidades Europeas, esto significa o bien que los Estados Unidos no creen que hayan justificado su posición acerca de la aplicación no uniforme del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario o bien que reconocen que esta alegación no cae dentro del ámbito del mandato del Grupo Especial.[834]

7.481 En respuesta, los **Estados Unidos** aceptan que el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario se refiere al período durante el cual se puede notificar una deuda aduanera. Sin embargo, los Estados Unidos no están de acuerdo con la idea implícita de que esto no tiene nada ver con el cobro de la deuda aduanera. Según los Estados Unidos, el período durante el cual la deuda aduanera se puede comunicar al deudor es evidentemente fundamental para el cobro de la deuda. Los Estados Unidos aclaran que, si el plazo dentro del cual se puede hacer esa comunicación ha terminado, entonces también ha desaparecido la posibilidad de cobrar cualquier deuda que no se haya comunicado anteriormente.[835] Los Estados Unidos también sostienen que la afirmación de las Comunidades Europeas de que el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario no está relacionado con ninguna de las esferas de la administración de aduanas mencionadas en la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial parece confundir las alegaciones hechas por los Estados Unidos con los argumentos presentados por ellos en apoyo de esas alegaciones. Según los Estados Unidos, sus alegaciones al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT están expuestas claramente y de forma específica en el primer párrafo de la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Allí, los Estados Unidos dicen que "la manera en que las Comunidades Europeas aplican las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994") no es uniforme, imparcial y razonable y, por lo tanto, es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994". En la solicitud se identifican luego con precisión las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas del tipo descrito en el párrafo 1 del artículo X que los Estados Unidos dicen que las Comunidades Europeas no han aplicado en la forma exigida por el párrafo 3 a) del artículo X, incluido el Código Aduanero Comunitario. Los Estados Unidos dicen que el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario forma parte del Código Aduanero Comunitario. Además, la materia que es tema del apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario cae dentro de la lista ilustrativa y no exhaustiva de cuestiones aduaneras mencionadas en la solicitud de los Estados Unidos. Los Estados Unidos agregan que analizaron el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario en la declaración oral que formularon en la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial.[836]

7.482 Las **Comunidades Europeas** declaran también que el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario sólo se ocupa del período durante el cual se puede comunicar al deudor una deuda aduanera. Por el otro lado, la cuestión de las condiciones sustantivas con arreglo a las cuales es posible cobrar retroactivamente una deuda aduanera se trata en el artículo 220 del Código Aduanero Comunitario. Además, las Comunidades Europeas dicen que es incorrecto afirmar que la única excepción permitida al apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario es la

[833] Pregunta 124 del Grupo Especial.

[834] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial; observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial.

[835] Respuesta de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 31.

[836] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 178 del Grupo Especial.

interposición de un recurso, que suspende el plazo de tres años previsto para comunicar la deuda aduanera. Otra excepción pertinente es el apartado 4 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, según el cual, cuando la deuda aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente en el momento en que se cometió, la comunicación al deudor podrá efectuarse, en las condiciones previstas por las disposiciones vigentes, después de la expiración del plazo de tres años. Las Comunidades Europeas indican que el Tribunal Europeo de Justicia ha aclarado que la cuestión de si un acto es o no perseguible judicialmente es una cuestión que depende de la legislación de los Estados miembros y no del derecho comunitario.[837]

ii) Análisis por el Grupo Especial

7.483 Una cuestión preliminar que el Grupo Especial ha de considerar es si el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario está comprendido en el mandato del Grupo Especial. Según las Comunidades Europeas, el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, que se refiere al período durante el cual es posible comunicar una deuda aduanera al deudor, no está comprendido en el mandato del Grupo Especial porque no cae en el ámbito de las cuestiones aduaneras enumeradas en la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial. Los Estados Unidos aceptan que el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario se refiere al período durante el cual se puede cobrar una deuda aduanera, pero sostienen que está comprendido en el mandato del Grupo Especial porque forma parte del Código Aduanero Comunitario, que está mencionado en la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial, y el tema de que se trata en el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario está incluido en la lista ilustrativa y no exhaustiva de cuestiones aduaneras que figura en la solicitud de los Estados Unidos.

7.484 El Grupo Especial recuerda su constatación, que aparece en el párrafo 7.33 *supra*, de que, en virtud de su mandato, sólo está autorizado a considerar la manera en que las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros aplican el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración aduanera identificadas concretamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, (la clasificación y valoración de mercancías, los procedimientos para la clasificación y valoración de mercancías, los procedimientos para la entrada y levante de mercancías, los procedimientos para controlar las declaraciones de entrada una vez que las mercancías han sido despachadas a libre práctica, las sanciones y los procedimientos de imposición de sanciones por infracción de las normas aduaneras y las prescripciones para mantenimiento de registros). Aunque está claro que el apartado 3 del artículo 221 está contenido en una de las medidas mencionadas en la solicitud de los Estados Unidos que supuestamente no se aplican de manera uniforme en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, a saber, el Código Aduanero Comunitario, también es necesario determinar si el tema materia del apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario está o no abarcado por las cuestiones de administración aduanera enumeradas expresamente en esa solicitud. Por lo tanto, pasamos a considerar la redacción del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario.

7.485 El artículo 221 del Código Aduanero Comunitario aparece en el capítulo 3 del Código, que se titula "Cobro del importe de la deuda aduanera". Más concretamente, el artículo 221 aparece en la sección 1 del capítulo 3, que se titula "Contracción y comunicación al deudor del importe de los derechos". El artículo 221 dispone lo siguiente:

[837] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, párrafo 42, en el que se hace referencia al Asunto C-273/90, *Meico-Fell*, [1991] ECR I-5569, párrafo 13 (CE - Prueba documental 155).

> "1. Desde el momento de su contracción deberá comunicarse el importe de los derechos al deudor, según modalidades apropiadas.
>
> 2. Cuando, en la declaración en aduana y a título indicativo, se haya hecho mención del importe de derechos a liquidar, las autoridades aduaneras podrán disponer que la comunicación mencionada en el apartado 1 sólo se efectúe cuando el importe de derechos que se indique no corresponda al que dichas autoridades hubieren determinado.
>
> Sin perjuicio de la aplicación del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 218, cuando se haga uso de la posibilidad establecida en el párrafo primero del presente apartado, la concesión del levante de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras servirá de comunicación al deudor del importe de derechos contraído.
>
> 3. La comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera. Dicho plazo se suspenderá a partir del momento en que se interponga un recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 y hasta que finalice el procedimiento de recurso.
>
> 4. Cuando la deuda aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente en el momento en que se cometió, la comunicación al deudor podrá efectuarse, en las condiciones previstas por las disposiciones vigentes, después de la expiración del plazo de tres años previsto en el apartado 3."

7.486 A juicio del Grupo Especial, el artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, incluido el apartado 3 del artículo 221, se refiere al cobro y la comunicación de una deuda aduanera. Ello es evidente si se considera el sentido corriente de los términos del artículo 221, así como el contexto en que aparece el artículo, como el título del capítulo y el de la sección en que figura.

7.487 El Grupo Especial considera que el artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, incluido el apartado 3 del artículo 221, no está cubierto por ninguna de las esferas de la administración aduanera identificadas expresamente en la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial. En particular, el sentido corriente de esas esferas no parece comprender el cobro y la comunicación de deudas aduaneras.[838] Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que el

[838] En este sentido, observamos que el *Dictionary of International Trade*, 2000, define las esferas de la administración de aduanas mencionadas expresamente en la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial de la siguiente forma: "*classification*" (clasificación) se define como "*the categorization of merchandise*" (la categorización de mercancías) (página 40). "*Valuation*" (valoración) se define como "*the appraisal of the worth of imported goods by customs officials for the purpose of determining the amount of duty payable in the importing country*" (la determinación del valor de mercancías importadas hecha por funcionarios de aduanas con el fin de fijar el importe del derecho que se debe pagar en el país importador) (página 201). "*Entry*" (entrada) se define como "*the process of, and documentation required for securing the release of imported merchandise*" (el proceso seguido y la documentación necesaria para obtener el levante de la mercancía importada) (página 72). "*Audit*" (auditoría) se define como "*a formal examination of records or documents*" (un examen formal de registros o documentos) (página 20). "*Penalties*" (sanciones) se define como "*charges assessed or action taken by customs in response to a violation of a customs-enforced regulation or law*" (cargas impuestas o medidas adoptadas por la aduana en respuesta a una infracción de un reglamento o una ley cuyo cumplimiento debe asegurar la aduana) (página 154). El significado de "*record keeping*" (mantenimiento de registros) es evidente. Además, el Glosario de términos aduaneros internacionales de la Organización Mundial de Aduanas define "*release*" (levante) como "*action by the Customs to permit goods undergoing clearance to be placed at the disposal of the persons concerned*" (medida de la aduana por la que se permite que las mercancías sometidas a examen se pongan a disposición de los interesados).

apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario está fuera del alcance de nuestro mandato en lo que se refiere a la alegación de los Estados Unidos de que la aplicación de esa disposición infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Más concretamente, los Estados Unidos no pueden sostener en esta diferencia que la manera en que se aplica el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario contraviene el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, esto no significa que a los Estados Unidos les esté impedido basarse en la manera de aplicación del apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario en tanto y en cuanto ello sea pertinente a la alegación de los Estados Unidos de que hay medidas en las esferas de la administración aduanera que han sido expresamente identificadas en su solicitud de establecimiento de un grupo especial (como la clasificación arancelaria) que se están aplicando en una manera que contraviene el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[839]

f) Observaciones generales sobre las alegaciones de los Estados Unidos de aplicación no uniforme en relación con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

7.488 El Grupo Especial recuerda el argumento de los Estados Unidos de que la inexistencia en las Comunidades Europeas de un procedimiento o institución que asegure que no haya divergencias en la aplicación entre las autoridades aduaneras de los 25 Estados miembros, o que rectifique con prontitud esas divergencias en forma automática cuando existan, necesariamente da por resultado una aplicación no uniforme que contraviene el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[840] El Grupo Especial recuerda asimismo que los Estados Unidos sostuvieron que esas deficiencias estructurales causan una aplicación no uniforme con respecto a todos los ámbitos del sistema de administración de aduanas de las Comunidades Europeas.[841]

7.489 En los párrafos 7.156 a 7.192 *supra*, el Grupo Especial explicó su interpretación de la manera en que funciona el sistema de administración de aduanas de las CE. El Grupo Especial recuerda que presentó esa explicación porque considera que esa interpretación da un contexto importante para examinar los casos particulares de supuestas violaciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, que el Grupo Especial tiene el cometido de examinar en el marco de esta diferencia. En esa explicación, el Grupo Especial pasó revista a cada una de las instituciones y los mecanismos que, según indicaron las Comunidades Europeas, desempeñan un papel decisivo para asegurar la aplicación uniforme de la legislación aduanera de las CE por parte de las autoridades de aduana de los Estados miembros. En su explicación, el Grupo Especial observó que algunas características vinculadas con varias de esas instituciones y mecanismos no necesariamente fortalecerían la aplicación uniforme de la legislación aduanera de las CE por parte de las autoridades de aduana de los Estados miembros y que, en el peor de los casos, podrían incluso producir una aplicación no uniforme.

7.490 De todos modos, el Grupo Especial no está autorizado a hacer ninguna constatación acerca de esas instituciones y mecanismos porque, como se indicó *supra* en el párrafo 7.64, el mandato del Grupo Especial le impide considerar impugnaciones del diseño y la estructura "en sí mismos" del sistema de administración aduanera de las CE incluidos sus componentes. Sin embargo, incluso si el Grupo Especial estuviera facultado para hacer esas constataciones, el Grupo Especial observa que los Estados Unidos no demostraron que el diseño y la estructura del sistema de administración aduanera

[839] El Grupo Especial observa en este sentido que los Estados Unidos se basaron en el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario a los fines de su alegación de que la forma en que se interpretó y aplicó una enmienda a una nota explicativa del Arancel Aduanero Común referente a videocámaras varió de un Estado miembro a otro. Véanse el párrafo 7.344 y siguientes, *supra*.

[840] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 a) del Grupo Especial.

[841] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 b) del Grupo Especial.

de las CE, incluidos sus componentes, necesariamente dan por resultado una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En cambio, los Estados Unidos se refirieron a varios casos, aparentemente fortuitos, de supuestas infracciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sin demostrar al Grupo Especial que esos ejemplos son sintomáticos y representativos de deficiencias estructurales básicas del sistema de administración de aduanas de las CE. Además, el Grupo Especial recuerda que los Estados Unidos sólo demostraron al Grupo Especial que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 efectivamente se había infringido en tres de los diversos casos de supuesta contravención del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 a los que habían hecho referencia en apoyo de sus alegaciones.

E. ALEGACIONES EN RELACIÓN CON EL PÁRRAFO 3 B) DEL ARTÍCULO X DEL GATT DE 1994

1. El párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994

7.491 El párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 dispone lo siguiente:

> "Cada parte contratante mantendrá, o instituirá tan pronto como sea posible, tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otras cosas, a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. Estos tribunales o procedimientos serán independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, y sus decisiones serán ejecutadas por estos últimos y regirán su práctica administrativa, a menos que se interponga un recurso ante una jurisdicción superior, dentro del plazo prescrito para los recursos presentados por los importadores, y a reserva de que la administración central de tal organismo pueda adoptar medidas con el fin de obtener la revisión del caso mediante otro procedimiento, si hay motivos suficientes para creer que la decisión es incompatible con los principios jurídicos o con la realidad de los hechos."

2. Constataciones solicitadas por los Estados Unidos en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994

a) Resumen de los argumentos de las partes

7.492 Los **Estados Unidos** afirman que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 exige que las Comunidades Europeas como Miembro de la OMC tengan determinados "tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos". Luego define algunas características que esos tribunales o procedimientos deben tener. Los Estados Unidos aclaran que, en la presente diferencia, su alegación se refiere al requisito incluido en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 de que las decisiones de los tribunales o procedimientos previstos en ese artículo "regirán [la] práctica" de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas "a menos que se interponga un recurso ante una jurisdicción superior, dentro del plazo prescrito para los recursos presentados por los importadores".[842] En particular, los Estados Unidos dicen que las Comunidades Europeas no cumplen la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 porque cada uno de los múltiples tribunales de revisión que tienen adopta decisiones que rigen la práctica únicamente de un subconjunto de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas dentro de una región determinada de las Comunidades Europeas, pero no rigen la práctica de los organismos de las Comunidades Europeas en otros Estados miembros.[843]

[842] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 102 a 109; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 141 del Grupo Especial.

[843] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 102.

7.493 Las **Comunidades Europeas** señalan que, a su juicio, las alegaciones de los Estados Unidos en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no se refieren al alcance material del control ejercido por los tribunales o procedimientos de revisión con arreglo al párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 ni al propósito de la revisión. Las Comunidades Europeas sostienen que, a su juicio, la alegación de los Estados Unidos en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se centra en la naturaleza de la revisión que se ha de hacer de conformidad con ese artículo.[844] Más concretamente, las Comunidades Europeas dicen que las alegaciones de los Estados Unidos en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se refieren exclusivamente al requisito de que los tribunales o procedimientos deben regir la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas.[845]

b) Análisis por el Grupo Especial

7.494 El Grupo Especial observa que, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, los Estados Unidos presentaron su alegación en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 en los términos siguientes:

> "... las Comunidades Europeas no mantienen, ni han instituido tan pronto como fuera posible, tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otras cosas, a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. Las medidas identificadas *supra*, incluidos, en particular, los artículos 243 a 246 del Código, disponen expresamente que los Estados miembros de las CE son responsables de la implantación del procedimiento de recurso de las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros. En consecuencia, la posibilidad de lograr que un tribunal de las Comunidades Europeas revise una decisión aduanera no se presenta sino después de que un importador u otra parte interesada haya tratado de conseguir esa revisión en tribunales nacionales administrativos y/o judiciales. Por esta razón, las Comunidades Europeas infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994."[846]

7.495 En la respuesta a una pregunta hecha por el Grupo Especial, los Estados Unidos aclararon que su alegación respecto del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se limitaba a aducir que las decisiones de los tribunales o procedimientos de las Comunidades Europeas no "rigen la práctica" de todos "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" en las Comunidades Europeas, en violación del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Más concretamente, los Estados Unidos alegan en el contexto de esta diferencia que los tribunales o procedimientos que tienen los distintos Estados miembros para revisar y rectificar las medidas administrativas no aseguran el cumplimiento de la obligación que corresponde a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 porque las decisiones de esos tribunales y procedimientos tienen efecto sólo dentro del Estado miembro del caso y no para los organismos de las CE en todo el territorio de las Comunidades Europeas.[847]

---

[844] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 215.

[845] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 141 del Grupo Especial.

[846] WT/DS315/8, que figura en el anexo D del informe del Grupo Especial.

[847] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 35 del Grupo Especial.

7.496 Habida cuenta de la aclaración que los Estados Unidos hicieron de su alegación relativa al párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 en su respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Especial, el Grupo Especial limitará su análisis a la cuestión de si el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 exige o no que las decisiones de los tribunales o procedimientos de revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a cuestiones aduaneras rijan la práctica de *todos* los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas *en todo el territorio* de un determinado Miembro, como han sostenido los Estados Unidos. A los fines de la solución de esta diferencia, el Grupo Especial considerará también si los tribunales y procedimientos disponibles en las Comunidades Europeas para revisar y rectificar medidas administrativas se ajustan o no a la obligación que corresponde a las Comunidades Europeas en este sentido en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[848]

3. Interpretación del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994

a) Resumen de los argumentos de las partes

i) Características pertinentes de los órganos de revisión

7.497 Los **Estados Unidos** sostienen que son las medidas "administrativas" las que están sujetas a la pronta revisión y rectificación prevista en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Los Estados Unidos dicen que esto indica que la obligación de proceder a una pronta revisión y rectificación impuesta por el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se aplica al primer tribunal o procedimiento que un Miembro tiene para hacer la revisión y rectificación. Los Estados Unidos afirman que esta interpretación encuentra apoyo en la referencia del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 a los recursos "ante una jurisdicción superior, dentro del plazo prescrito para los recursos presentados por los importadores".[849]

7.498 Del mismo modo, las **Comunidades Europeas** declaran que la revisión contemplada en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 corresponde únicamente a la revisión en primera instancia.[850] Las Comunidades Europeas aducen que, por lo tanto, exigir uniformidad en la primera instancia necesariamente entrañaría el establecimiento de un tribunal central de primera instancia con jurisdicción sobre todo el territorio de un Miembro de la OMC. Según las Comunidades Europeas, esta conclusión no se puede defender con base en la redacción del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[851]

7.499 Las Comunidades Europeas destacan también que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 dispone que los tribunales o procedimientos que hacen la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras deben ser independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Según las Comunidades Europeas, si la revisión administrativa de primera instancia cumple el requisito de independencia, se puede considerar que esa revisión está de acuerdo con la obligación de asegurar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas prevista en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT

[848] El Grupo Especial indica que no considera que para solucionar esta diferencia sea necesario que determine si la revisión que se hace en las Comunidades Europeas de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 es o no "pronta" en el sentido de ese artículo: respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 40, 142 y 144 del Grupo Especial.

[849] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 121 del Grupo Especial.

[850] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 225.

[851] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 225.

de 1994.[852] Las Comunidades Europeas sostienen que el requisito de independencia del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 impone una separación externa entre los tribunales o procedimientos y los organismos.[853]

ii) Alcance geográfico y efecto sustantivo de las decisiones de los órganos de revisión

Consideraciones generales

7.500 Los **Estados Unidos** alegan que el contexto pertinente para interpretar el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 incluye el apartado inmediatamente precedente, es decir el apartado a) del mismo párrafo. Los Estados Unidos señalan que ese apartado exige una aplicación "uniforme, imparcial y razonable" de las leyes aduaneras. Los Estados Unidos afirman que, por lo tanto, cuando se considera teniendo en cuenta el apartado a) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994, el apartado b) del mismo párrafo significa que las decisiones de los tribunales o procedimientos deben permitir que la revisión y la rectificación de las medidas aduaneras abarquen a las Comunidades Europeas en su conjunto y no sólo a regiones geográficas limitadas dentro de las Comunidades Europeas.[854] Más concretamente, los Estados Unidos dicen que no es compatible con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 exigir a un comerciante respecto del cual se han dictado decisiones adversas sobre cuestiones aduaneras en diferentes Estados miembros, todas en desacuerdo con la interpretación prevaleciente de la legislación aduanera de las CE en otros Estados miembros, que interponga apelaciones separadas en cada uno de esos Estados.[855]

Significación de la expresión "regirán su práctica"

7.501 Los **Estados Unidos** alegan que la segunda oración del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 dispone que los tribunales o procedimientos establecidos por un Miembro "serán independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, y sus decisiones serán ejecutadas por estos últimos *y regirán su práctica administrativa* ..." Según los Estados Unidos, la frase "regirán su práctica" exige que todos los organismos de aplicación de un Miembro se ajusten a las decisiones del tribunal de revisión.[856] Los Estados Unidos agregan que el requisito de regir la práctica del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 significa que las decisiones de los órganos de revisión deben determinar la manera en que los organismos aplican la legislación de aduanas.[857] En apoyo de su posición, los Estados Unidos afirman que el sentido corriente del término "*govern*" (regir) en el contexto del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 es "*[c]ontrol, influence, regulate, or determine*" (controlar, influir en, regular o determinar) o "*[c]onstitute a law, rule, standard, or principle for*" (constituir una ley, regla, norma o principio para).[858] Los Estados Unidos sostienen que, en consecuencia, el requisito expreso de "regirán su práctica" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 va más allá de la simple ejecución de una decisión sobre el caso particular en cuestión y exige que la decisión "controle, influya en, regule o determine" la práctica o

[852] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 121 del Grupo Especial.

[853] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 218.

[854] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 138.

[855] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 134 y 139.

[856] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 35 del Grupo Especial.

[857] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 88.

[858] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, páginas 1.122 y 1.123.

"constituya una ley, regla, norma o principio para" "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" en materia aduanera.[859] Los Estados Unidos dicen también que, si el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, a diferencia del párrafo 3 a), no se refiriese a cuestiones de uniformidad, no habría necesidad de que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT especificara que las decisiones de los tribunales de revisión "regirán [la] práctica" de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Bastaría con exigir la existencia de tribunales o procedimientos cuyas decisiones fueran "ejecutadas por" los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas.[860]

7.502 En respuesta, las **Comunidades Europeas** indican que, a su juicio, la mención del término "regirán" en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 indica que su propósito es asegurar una ejecución equitativa de las decisiones de los tribunales en cuestiones de derecho administrativo.[861] De acuerdo con las Comunidades Europeas, si el término "regir" se interpretara de manera que significase "controlar, regular, determinar, constituir una ley, regla, norma o principio para", ello equivaldría a considerar que las decisiones de los tribunales de primera instancia tienen efecto vinculante, en contraposición a un elemento común compartido por la mayoría de los sistemas jurídicos de derecho civil y de *common law*, a saber, que solamente los tribunales de alto nivel o de última instancia toman decisiones que se consideran vinculantes y, por lo tanto, fuente general de derecho.[862] Las Comunidades Europeas sostienen que la interpretación de los Estados Unidos impone obligaciones de muy gran alcance a todos los Miembros de la OMC que no están de acuerdo con las tradiciones jurídicas de la mayoría de los Miembros de la OMC, tanto los que aplican el sistema de derecho civil o derecho romano-germánico como los que siguen el *common law*.[863] Según las Comunidades Europeas, las decisiones de un tribunal de primera instancia son vinculantes únicamente para los casos específicos decididos por el mismo tribunal y, por consiguiente, no son un instrumento para asegurar una aplicación uniforme. Las Comunidades Europeas dicen que una decisión de un órgano de revisión de primera instancia cumple la función de orientar a otros órganos de revisión de primera instancia. Por lo tanto, el sentido corriente de "regir" sería "influir en".[864]

Significación de la referencia a "los organismos"

7.503 Los **Estados Unidos** alegan que, en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" son los organismos cuya práctica tiene que regirse por las decisiones de los tribunales o procedimientos de revisión. Según los Estados Unidos, ese requisito no se cumple si las decisiones de los tribunales o procedimientos de revisión rigen la práctica de solamente algunos de los organismos encargados de la aplicación de las medidas administrativas. En cambio, para que la práctica de "los organismos" se rija por las decisiones de los tribunales de revisión, esas decisiones deben regir la actuación de "los organismos" de todo el territorio de un Miembro.[865] Los Estados Unidos afirman que esta interpretación también es

[859] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 104.

[860] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 103.

[861] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 93, y Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 230.

[862] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 94.

[863] Declaración final de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 30.

[864] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 95.

[865] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 106.

confirmada por el contexto que representa el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En particular, las decisiones de los tribunales de revisión, cuando rigen la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, pasan a ser parte de la aplicación que los organismos hacen de las leyes aduaneras de los Miembros en casos futuros. Dado que las leyes aduaneras de los Miembros deben ser aplicadas de manera uniforme, las decisiones de los tribunales de revisión deben regir la práctica de "los organismos" en todo el territorio. Si rigen la práctica de solamente algunos de los organismos, entonces, por definición, la aplicación de las leyes de los Miembros no será uniforme; diferentes interpretaciones de las leyes de un Miembro regirán la práctica de diferentes organismos dentro del territorio de un Miembro.[866]

7.504 Las **Comunidades Europeas** responden que el uso de las palabras "los organismos" en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no significa que se trate de todos los organismos de todo el territorio de un Miembro de la OMC. Según las Comunidades Europeas, las palabras "los organismos" deben interpretarse en su contexto, con referencia al término con el que están relacionadas, es decir, "tribunales", que son los tribunales de primera instancia. Las Comunidades Europeas opinan que, por lo tanto, "los organismos" significa "los organismos" cuyas decisiones son revisadas por esos tribunales de primera instancia. Las Comunidades Europeas añaden que "los organismos" son los que se han establecido en cada uno de sus Estados miembros, no los establecidos en los demás Estados miembros.[867]

Significación de la referencia al derecho de "la administración central de tal organismo" a pedir la revisión del caso

7.505 Los **Estados Unidos** dicen que otra prueba que confirma el argumento de que la revisión y la rectificación previstas en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 deben dar por resultado decisiones que rijan la aplicación de las leyes aduaneras de un Miembro en todo su territorio es la disposición de la segunda oración de esa cláusula que establece que "*la administración central de tal organismo* pued[e] adoptar medidas con el fin de obtener la revisión del caso mediante otro procedimiento, si hay motivos suficientes para creer que la decisión es incompatible con los principios jurídicos o con la realidad de los hechos". Según los Estados Unidos, esta disposición contempla la posibilidad de que "la administración central" impugne la decisión de un tribunal colateralmente, es decir, "mediante otro procedimiento", cuando la administración central determine que "la decisión es incompatible con los principios jurídicos o con la realidad de los hechos". Según la opinión de los Estados Unidos, esa posibilidad solamente tiene sentido si la decisión resultante del procedimiento original tiene efectos más allá de ese procedimiento. Si los efectos de la decisión se limitaran al procedimiento en cuyo marco se adoptó, no habría necesidad ni base para una impugnación colateral.[868] Los Estados Unidos dicen que, cuando un Miembro no tiene una "administración central" (como sucede en el caso de las Comunidades Europeas), la posibilidad prevista en esa disposición parecería no existir. Sin embargo, según los Estados Unidos, eso simplemente significa que, en el caso no habitual de un Miembro que no tenga una administración central, las diversas autoridades aduaneras regionales tendrán que tomar otras medidas para asegurar que las decisiones de los tribunales de revisión "regirán [la] práctica" de "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" y que el Miembro seguirá aplicando su legislación aduanera de manera uniforme.[869]

[866] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 107.

[867] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 97.

[868] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 113.

[869] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 115.

7.506 En respuesta, las **Comunidades Europeas** declaran que la posibilidad de que la administración central de un organismo aduanero pida la revisión no se ha establecido a fin de rectificar los efectos de la decisión original en la práctica de los organismos, sino para obtener protección, con base en motivos limitados, contra una decisión que ya no se puede impugnar con recursos ordinarios porque los plazos correspondientes han vencido.[870] Según las Comunidades Europeas, ello se desprende claramente de la estructura del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Concretamente, la disposición está relacionada con los plazos de los recursos mencionados en la oración anterior del mismo párrafo 3 b), y no con el requisito de "regir la práctica", que figura en la segunda frase de la segunda oración de ese párrafo.[871] Además, las Comunidades Europeas alegan que el hecho de que esa disposición no tiene por objeto rectificar los efectos de la decisión original en la práctica de los organismos se deriva también de la naturaleza de este tipo de revisión excepcional. Cuando la revisión se basa en una falta de compatibilidad con los principios jurídicos, su propósito es proteger los fundamentos de un sistema jurídico, con miras a eliminar conflictos con la jurisprudencia de los tribunales de más alto nivel, que tienen la misión de definir esos principios. Cuando la revisión se basa en la falta de compatibilidad con la realidad de los hechos, su propósito es anular una decisión judicial cuando se descubren hechos de los que ni el tribunal ni la parte que pide la revisión tenían conocimiento cuando se había dictado la decisión. Según las Comunidades Europeas, ninguna de estas dos razones de la revisión se relaciona con los efectos que finalmente tiene una decisión judicial de primera instancia para la práctica de los organismos de aduanas.[872]

Vínculo jurídico entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994

7.507 Los **Estados Unidos** alegan que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se debe interpretar teniendo en cuenta la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Los Estados Unidos dicen que, por consiguiente, cuando la revisión da por resultado decisiones cuyo efecto se limita a regiones particulares del territorio de un Miembro, esa revisión no es compatible con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[873]

7.508 Las **Comunidades Europeas** afirman que los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 establecen obligaciones diferentes: una es la aplicación uniforme y la otra se refiere a las medidas correctivas. Según las Comunidades Europeas, desde un punto de vista jurídico, el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no establece ningún vínculo entre los apartados a) y b), que, por consiguiente, deben ser considerados obligaciones separadas.[874] En primer lugar, el apartado b) no contiene ninguna referencia al apartado a), a diferencia de lo que sucede con el apartado c), que incluye un vínculo explícito con el apartado b). Además, el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no comienza con un preámbulo para indicar que los dos apartados están vinculados, de modo que uno tiene que ser interpretado a la luz del otro.[875] Las Comunidades Europeas agregan que el hecho de que los apartados a) y b) estén ambos incluidos en el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no significa que se hayan de interpretar de manera que se borre la distinción que hay entre las obligaciones que imponen. Evidentemente, las dos disposiciones se deben interpretar en forma armoniosa, teniendo en cuenta sus respectivos objetos y fines.

[870] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 106.

[871] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 107.

[872] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 108.

[873] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 99.

[874] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 461.

[875] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 223.

Sin embargo, esto no significa que las obligaciones previstas en una disposición puedan simplemente trasladarse a la otra. Las Comunidades Europeas alegan que, en particular, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no se refiere a la aplicación de leyes sobre el procedimiento judicial y la organización judicial, porque esas leyes no figuran entre las que se contemplan en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.[876]

7.509 En respuesta, los **Estados Unidos** afirman que las Comunidades Europeas no están en lo cierto cuando sostienen que el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 no establece ningún vínculo entre los apartados a) y b). Los Estados Unidos dicen que la segunda oración del apartado b) expresamente indica que las decisiones de los tribunales o procedimientos mantenidos o instituidos de conformidad con el apartado a) "regirán [la] práctica" de "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas". Según los Estados Unidos, el vínculo se deriva del hecho de que las medidas administrativas son, a su vez, el tema de que se trata en el apartado a).[877]

7.510 Las **Comunidades Europeas** responden que consideran que la expresión "aplicar las medidas administrativas" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no establecen un vínculo entre los apartados a) y b). A juicio de las Comunidades Europeas, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" para identificar a los organismos que están sujetos a una pronta revisión y respecto de los cuales los tribunales o procedimientos deben ser independientes.[878]

7.511 Los **Estados Unidos** declaran que las Comunidades Europeas mismas dicen que la revisión de las medidas administrativas por los tribunales y la aplicación uniforme están inherentemente vinculadas entre sí, de modo que la primera, a su juicio, es un instrumento clave para asegurar la segunda.[879] Más concretamente, los Estados Unidos indican que un tema que se repite en todas las comunicaciones de las Comunidades Europeas es que los recursos contra las decisiones de las aduanas interpuestos en los tribunales nacionales, sumados a la posibilidad de que los tribunales nacionales hagan un reenvío prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia, constituye un instrumento fundamental para asegurar la aplicación uniforme de la legislación aduanera. Los Estados Unidos sostienen que esa posición apoya la postura de que la obligación de asegurar la revisión de las decisiones aduaneras impuesta por el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se debe interpretar a la luz de la obligación de aplicar la legislación de aduanas de manera uniforme, impuesta por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[880]

7.512 En respuesta, las **Comunidades Europeas** alegan que el hecho de que las Comunidades Europeas hayan aceptado que los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 se deben interpretar en forma armoniosa no significa que las Comunidades Europeas estén de acuerdo con una interpretación que transforma el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 en una disposición "tótum revolútum", donde las distintas obligaciones del artículo se fusionan, con la consecuencia injustificada de que la obligación de asegurar la revisión y rectificación independiente de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras tomadas a nivel de primera

[876] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 87 del Grupo Especial.

[877] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 59.

[878] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 87 del Grupo Especial.

[879] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 58, en el que se hace referencia a la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 185.

[880] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 58.

instancia queda absorbida por la obligación de asegurar la aplicación uniforme de la legislación.[881] Las Comunidades Europeas dicen que el contexto pertinente para interpretar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no es el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, sino el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994, al cual se hace específicamente referencia en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Las Comunidades Europeas observan que el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 incluye las "decisiones judiciales ... de aplicación general" entre los instrumentos que se han de aplicar de manera uniforme de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Según las Comunidades Europeas, esto demuestra que el artículo X del GATT de 1994 abarca dos tipos de decisiones judiciales: las de aplicación general, cuya aplicación uniforme se exige en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, y las adoptadas por los tribunales de revisión de primera instancia, respecto de las cuales la aplicación uniforme en todo el Miembro de la OMC no se exige. Según las Comunidades Europeas, esta interpretación basada en el contexto explica por qué no hay un vínculo entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994.[882]

Significación de la referencia a "tribunales" y "procedimientos" en plural

7.513 Las **Comunidades Europeas** dicen que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 simplemente exige que los Miembros de la OMC aseguren que las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras sean revisadas de manera pronta por un tribunal independiente o mediante un procedimiento independiente.[883] Según las Comunidades Europeas, esta posición queda confirmada por la interpretación literal y multilingüe del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[884] Más concretamente, las Comunidades Europeas afirman que, en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, los Miembros de la OMC están obligados a tener "*tribunals or procedures*" (tribunales o procedimientos) no "un tribunal" o "un procedimiento". Las Comunidades Europeas destacan que las versiones en español y en francés de la disposición también usan los términos equivalentes en plural. Es claro que esto permite que los Miembros de la OMC tengan varios tribunales, cada uno de los cuales puede abarcar una parte de su territorio y ser competente para revisar las medidas administrativas adoptadas por las respectivas oficinas de aduanas.[885]

7.514 En respuesta, los **Estados Unidos** sostienen que el uso de la forma plural en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 podría indicar que es permisible que haya múltiples tribunales para hacer diferentes tipos de revisiones de las decisiones de las aduanas y/o para que las diferentes revisiones sean hechas por diferentes tipos de órganos de revisión, pero no es lógico inferir que se pueden usar tribunales separados e independientes para cada una de varias regiones diferentes del territorio de un Miembro.[886] Los Estados Unidos dicen que no es inconcebible que un Miembro de la OMC cuente con varios tribunales o procedimientos de revisión y que cada uno cubra una parte diferente de su territorio de una manera que sea compatible con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. A juicio de los Estados Unidos, lo que importa es que las decisiones de esos tribunales tengan validez para los organismos del Miembro en su conjunto, para así regir la práctica

[881] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 100.

[882] Observaciones de las Comunidades Europeas sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 142 del Grupo Especial.

[883] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 57.

[884] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 452.

[885] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 454.

[886] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafo 60; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial.

de los organismos del Miembro encargados de aplicar las medidas administrativas relacionadas con la legislación aduanera y no dar lugar a una aplicación no uniforme. Los Estados Unidos afirman que ello se puede hacer si un Miembro tiene un organismo aduanero único y centralizado, obligado a dar cumplimiento en todo el territorio del Miembro a las decisiones de cualquier tribunal que revise sus decisiones. Sin embargo, según los Estados Unidos, cuando los tribunales de revisión se ocupan de determinados organismos y no hay otro mecanismo para poner en vigor las decisiones de los tribunales independientes respecto de los organismos restantes, la fragmentación geográfica de la revisión es incompatible con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[887]

7.515 Las **Comunidades Europeas** sostienen que la interpretación de los Estados Unidos del uso del plural en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 puede coexistir perfectamente con la interpretación defendida por las Comunidades Europeas. Según las Comunidades Europeas, el uso del plural puede indicar que un Miembro de la OMC está facultado para mantener tribunales geográficamente limitados y también puede indicar que un Miembro de la OMC puede mantener múltiples tribunales para revisar las decisiones sobre cuestiones aduaneras.[888]

Decisiones

7.516 Los **Estados Unidos** afirman que los términos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 disponen claramente que las decisiones adoptadas por los tribunales o procedimientos de revisión deben cumplir dos requisitos independientes. Concretamente, deben ser ejecutadas por los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas y deben regir la práctica de esos organismos. Para que rijan la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, las decisiones tienen que tener efecto que trascienda la simple ejecución de la orden dictada en el caso en cuestión.[889] Los Estados Unidos sostienen que, independientemente de que se interprete que el término "decisiones" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 tiene un sentido más restringido según el cual sólo comprende el mandamiento o la orden definitiva, o de que se interprete que tiene un sentido más amplio que abarca el razonamiento del órgano de revisión, ello no afecta al requisito de "regirán [la] práctica". Esto quiere decir que, incluso en un sistema jurídico en el que se entiende que una decisión se refiere solamente al mandamiento o la orden del tribunal y no a su razonamiento, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 exige que la decisión sea ejecutada por los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas *y* que rija su práctica. A juicio de los Estados Unidos, no tiene importancia que en el sistema jurídico de un determinado Miembro se considere que una "decisión" consiste solamente en la orden o el mandamiento del tribunal o que se considere que incluye los motivos en que se basó el tribunal.[890]

7.517 Las **Comunidades Europeas** dicen que los Estados Unidos no interpretan correctamente el término "decisión" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. La "decisión" de un tribunal en un caso en particular se debe distinguir del razonamiento que condujo al tribunal a adoptarla. Por ejemplo, si un tribunal decide acerca de una acción de anulación de una decisión de las autoridades aduaneras, entonces la decisión será anular la decisión o no. Si lo que se decide es anularla, entonces esta decisión regirá la práctica del organismo. Por el contrario, no hay ningún fundamento en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 para suponer que todas las cuestiones de interpretación que el tribunal puede haber considerado en el curso de su razonamiento pasan a ser igualmente vinculantes para el organismo. Según las Comunidades Europeas, esto daría a los

[887] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial.

[888] Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 232.

[889] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 104 a 106.

[890] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 142 del Grupo Especial.

precedentes judiciales una función que iría mucho más allá de la práctica de numerosos Miembros de la OMC que no tienen un sistema jurídico basado en la jurisprudencia.[891] Las Comunidades Europeas aclaran que esto no significa que las decisiones de un tribunal de primera instancia, incluido el razonamiento contenido en el fallo del tribunal, no surtan ningún efecto en el sistema de las CE. Según las Comunidades Europeas, ese razonamiento formará parte de la práctica judicial pertinente, que será tenida en cuenta por los organismos aduaneros. Además, un organismo aduanero o un tribunal de un Estado miembro, si no comparte la interpretación de la legislación de las CE que tiene un tribunal de otro Estado miembro, tomará las iniciativas que correspondan de acuerdo con su respectiva posición en el sistema: el organismo aduanero consultará y examinará la cuestión con la Comisión y los otros Estados miembros y el tribunal de otro Estado miembro o planteará la cuestión en el Tribunal Europeo de Justicia.[892]

b) Análisis por el Grupo Especial

7.518 El Grupo Especial recuerda que para resolver esta diferencia, el Grupo Especial sólo necesita ocuparse de la cuestión de si el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 exige o no que las decisiones de los tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras rijan la práctica de *todos* los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas *en todo el territorio* de un Miembro en particular, como afirman los Estados Unidos. El Grupo Especial interpretará los diversos términos que figuran en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 que parecen tener relación con esta cuestión. Con este fin, el Grupo Especial utilizará como marco jurídico los artículos 31 y 32 de la *Convención de Viena*.

Sentido corriente

"Independientes"

7.519 El Grupo Especial recuerda que la primera oración del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 exige que los Miembros de la OMC mantengan o instituyan tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. La segunda oración del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 establece a continuación que esos tribunales o procedimientos "serán *independientes* de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas". El Grupo Especial entiende que, a la luz de la aclaración que se hace en la segunda oración del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, es evidente que los tribunales o los procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas que se prevén en la primera oración de ese artículo deben ser "independientes" de los organismos cuyas medidas administrativas son el objeto de la revisión.

7.520 El Grupo Especial señala que el término "independiente" se define como "*not subject to the control or influence of another; not associated with another (often larger) entity*" (que no está sujeto al control o la influencia de otro; que no está vinculado a otra entidad (a menudo más grande)).[893] Basándose en el sentido corriente del término "independiente", el Grupo Especial entiende que los tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras de acuerdo con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 deben estar libres del control o la influencia de los

[891] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 98.

[892] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 99.

[893] *Black's Law Dictionary*, 1999, página 774.

organismos administrativos cuyas decisiones son el objeto de la revisión. Más específicamente, entendemos que esos tribunales y procedimientos deben tener la capacidad de llevar a cabo la revisión prevista en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 libres, en términos institucionales y prácticos, de la injerencia de los organismos cuyas decisiones están revisando.[894]

El nivel de la revisión

7.521 Con respecto al nivel que debe tener la revisión de las medidas administrativas que se ha de hacer con arreglo al párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial señala que los términos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 indican que la revisión exigida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no tiene por qué ser necesariamente la revisión de *última* instancia a la que está sujeta una decisión administrativa, porque las decisiones de los tribunales y los procedimientos que hacen la revisión exigida por el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 pueden estar sujetas a un recurso posterior. A este respecto, el Grupo Especial señala que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 dispone que las decisiones de los tribunales judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas "regirán [la] práctica administrativa" de los organismos "*a menos que se interponga un recurso ante una jurisdicción superior*" (sin cursivas en el original). Según nuestra opinión, esto indica que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 contempla la posibilidad de que las decisiones de los tribunales y los procedimientos por los que se hace la revisión establecida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 sean recurridas ante órganos de "jurisdicción superior". Además, el Grupo Especial señala que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 hace referencia a la posibilidad de que "la administración central de tal organismo pueda adoptar medidas con el fin de obtener la revisión del caso mediante otro procedimiento, si hay motivos suficientes para creer que la decisión es incompatible con los principios jurídicos o con la realidad de los hechos". A juicio del Grupo Especial, la posibilidad de que la administración central de un organismo cuyas medidas administrativas son el objeto de la revisión pida otra revisión de esas medidas en otras actuaciones confirma la opinión de que la revisión prevista en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no es necesariamente la revisión de última instancia a la que pueden estar sujetas las medidas administrativas en cuestión.

7.522 El Grupo Especial señala también que las dos partes en esta diferencia comparten la opinión de que esa disposición se refiere a la revisión de *primera* instancia.[895] El párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se aplica a las revisiones hechas por tribunales o procedimientos que son "independientes" de los organismos cuyas medidas administrativas son el objeto de la revisión. Esto indica que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se aplica a las revisiones de primera instancia hechas por tribunales o procedimientos que son independientes de la autoridad administrativa que tomó las medidas administrativas que son el objeto de la revisión.

---

[894] El Grupo Especial entiende que, en algunos Miembros de la OMC, las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras pueden ser revisadas por las mismas autoridades administrativas que, originalmente, tomaron la medida. Por ejemplo, dos de los terceros participantes en esta diferencia, a saber el Japón y el Taipei Chino, señalaron que las medidas administrativas pueden ser revisadas primero por la misma autoridad administrativa que tomó la medida originalmente: respuesta del Japón a la pregunta 105 del Grupo Especial y respuesta del Taipei Chino a la misma pregunta. Esa revisión no se ajustaría al párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 porque, en esos casos, el organismo de revisión no es independiente de la autoridad administrativa cuya decisión es el objeto de la revisión.

[895] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 121 del Grupo Especial; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 225. El Grupo Especial entiende que la revisión de primera instancia es la revisión hecha por el primer órgano o procedimiento que considera una decisión, después de que ésta ha sido tomada. Por definición, entendemos que la revisión de primera instancia puede estar sujeta a una revisión posterior hecha por órganos o procedimientos de revisión de nivel superior.

"Tribunales o procedimientos"

7.523 Las partes han planteado en esta diferencia la cuestión de qué significación tiene, si tiene alguna, el hecho de que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se refiera a "tribunales" y "procedimientos" judiciales, arbitrales o administrativos en plural, en las tres versiones auténticas del GATT de 1994.

7.524 El Grupo Especial observa que la obligación de mantener o instituir "tribunales o procedimientos", en plural, incumbe a la "parte contratante", en singular. Esto indica al Grupo Especial que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no obliga a un Miembro a establecer un tribunal o procedimiento único para la revisión de todas las medidas administrativas. Además, según la opinión del Grupo Especial, esto indica que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 contempla expresamente la posibilidad de que, en un mismo Miembro de la OMC, haya múltiples tribunales o procedimientos para la revisión de las medidas administrativas.

7.525 La existencia de la posibilidad de que, de acuerdo con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, en un único Miembro de la OMC haya varios tribunales o procedimientos para la revisión de las medidas administrativas puede explicarse de varias maneras. Una explicación posible sería que los diversos tribunales o procedimientos de revisión que un Miembro de la OMC mantiene o instituye tienen diferentes ámbitos de competencia sustantiva. Otras posibles explicaciones podrían ser que los diversos tribunales o procedimientos son responsables de áreas geográficas diferentes y/o de medidas administrativas que provienen de órganos administrativos diferentes.[896] El Grupo Especial entiende que el uso del plural cuando se hace referencia a los tribunales y procedimientos contemplados en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no indica claramente cuál de estas explicaciones posibles es la interpretación apropiada del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, en caso de que alguna lo sea.

"Organismos"

7.526 El párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 dispone que las decisiones de los tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos "regirán [la] práctica" "de los *organismos*" (sin cursivas en el original). En el contexto de esta diferencia ha surgido la cuestión de la significación que se ha de dar a la referencia a los "organismos", en plural, en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

7.527 Una interpretación posible es que el uso del plural en "organismos" en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 obedece simplemente al hecho de que también se hace referencia en plural a los tribunales y procedimientos de revisión previstos en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Precisamente, la segunda oración del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 dice: "Estos tribunales o procedimientos ... regirán [la] práctica" de los "organismos". Además, el Grupo Especial señala que el uso del plural para hacer referencia a los organismos administrativos en la segunda oración del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 contrasta con la referencia al organismo, en singular, en la salvedad que figura al final de esa disposición. En particular, la salvedad del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 establece: "*a reserva de que* la administración central de *tal organismo* pueda adoptar medidas con el fin de obtener la revisión del caso mediante otro procedimiento ..." (sin cursivas en el original).

[896] De hecho, los Estados Unidos mismos sostienen que un Miembro de la OMC, de manera compatible con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, puede disponer de varios tribunales o procedimientos de revisión, cada uno de los cuales abarque una región diferente del país: respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial.

7.528 El Grupo Especial considera que es difícil saber qué significación tiene, de tener alguna, la referencia a los organismos, en plural, en la segunda oración del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, especialmente a la luz de la referencia al mismo término, en singular, en la salvedad de ese artículo. Sin embargo, el Grupo Especial opina que, de los términos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, se desprende con claridad que las decisiones de los tribunales y procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas deben regir la práctica del organismo cuya medida fue objeto de la revisión hecha por un tribunal o procedimiento, en cada caso particular.

"Regirán [la] práctica"

7.529 El párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 prescribe que los "tribunales o procedimientos [destinados a la revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras] serán independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, y sus decisiones serán ejecutadas por estos últimos y *regirán* su práctica administrativa" (sin cursivas en el original). Con respecto al sentido corriente del término "regir", el Grupo Especial señala que se define como "*control, influence, regulate, or determine (a person, another's action, the course or issue of events)*" (controlar, influir, reglamentar o condicionar (a una persona, los actos de los demás o el curso de los acontecimientos)).[897] Cuando se considera a la luz de esta definición, parecería que el término "regirán" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 significa que las decisiones de los tribunales y procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos establecidos para la revisión de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras deben tener efectos vinculantes.

7.530 El Grupo Especial recuerda la conclusión a que llegó en el párrafo 7.528 de que, según el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, las decisiones de los tribunales y procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas deben regir la práctica del organismo cuya medida fue objeto de la revisión hecha por un tribunal o procedimiento, en cada caso particular. En consecuencia, a la luz del sentido ordinario del término "regir", el Grupo Especial considera que las decisiones de los tribunales o procedimientos destinados a la revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras deben ser vinculantes para el organismo administrativo cuya medida es el objeto de la revisión hecha por un tribunal o procedimiento, en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

7.531 Además, el Grupo Especial considera que el sentido corriente del término "regir", cuando se lee conjuntamente con el término "práctica"[898] en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, tiene una connotación prospectiva. Más específicamente, el Grupo Especial entiende que el efecto vinculante de la decisión de un tribunal o procedimiento destinado a la revisión y rectificación de medidas administrativas significa que el organismo administrativo cuya medida fue el objeto de la revisión hecha por un tribunal o procedimiento en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 está obligado por esa decisión con respecto a la situación fáctica específica que fue objeto de

[897] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, 1993, página 1.122.

[898] El Grupo Especial señala que la interpretación que el Órgano de Apelación hizo en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas II* del término "práctica", en el contexto de la referencia a "toda práctica ulteriormente seguida" del párrafo 3 c) del artículo 31 de la Convención de Viena, parece ser pertinente en este caso. En particular, el Órgano de Apelación manifestó que la "práctica" supone "una serie 'concordante, común y coherente', de actos o declaraciones que bastan para determinar un modelo discernible ...": Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas II*, página 16.

la revisión, pero también con respecto a las situaciones fácticas idénticas que puedan surgir en el futuro en relación con cuestiones jurídicas idénticas.[899]

Contexto

Relación jurídica entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994

7.532 Se ha solicitado al Grupo Especial que determine la relación existente, de haberla, entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994, a los fines de la interpretación del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

7.533 El Grupo Especial señala que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 en sí mismo no contiene un vínculo textual explícito entre él y la obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. A este respecto, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 contrasta con el párrafo 3 c) del mismo artículo que, al igual que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT, figura en el artículo X del GATT, pero que hace referencia explícita al párrafo 3 b) del artículo X.[900]

7.534 El Grupo Especial, en el proceso de determinar si se puede o no concluir que hay un vínculo entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994, observa que el Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes (EE.UU.*) indicó que los principios sobre la interpretación de tratados de la *Convención de Viena* "ni exigen ni aprueban que se imputen al tratado palabras que no existen en él o que se trasladen a él conceptos que no se pretendía recoger en él."[901] Dada la ausencia de una referencia explícita al párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, que contrasta con la referencia explícita entre los apartados b) y c) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial considera que no es posible inferir que los redactores del GATT tuvieran la intención de que la obligación de contar con tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras, que figura en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, fuera interpretada en el sentido de que, simultáneamente, exige la aplicación uniforme de acuerdo con el párrafo 3 a) del

[899] El Grupo Especial señala que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 también dispone que las decisiones de los tribunales o procedimientos destinados a la revisión y rectificación de las medidas administrativas "serán ejecutadas por" los organismos administrativos. Según el Grupo Especial, esto significa que, además de estar obligado a cumplir una decisión de un tribunal o procedimiento destinado a la revisión y rectificación de una medida administrativa (lo que se desprende del término "regir" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994), el organismo administrativo también está obligado a *aplicar* en la práctica la decisión, de acuerdo con la prescripción de "ejecutar" esas decisiones incluida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

[900] El párrafo 3 c) del artículo X del GATT de 1994 dice lo siguiente: "Las disposiciones del apartado *b)* de este párrafo no requerirán la supresión o la sustitución de los procedimientos vigentes en el territorio de toda parte contratante en la fecha del presente Acuerdo, que garanticen de hecho una revisión imparcial y objetiva de las decisiones administrativas, aun cuando dichos procedimientos no sean total u oficialmente independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Toda parte contratante que recurra a tales procedimientos deberá facilitar a las PARTES CONTRATANTES, si así lo solicitan, una información completa al respecto para que puedan decidir si los procedimientos citados se ajustan a las condiciones fijadas en este apartado."

[901] Informe del Órgano de Apelación, India - Patentes (EE.UU.), párrafo 45. En el mismo sentido, el Órgano de Apelación, cuando interpretó la relación entre diversas disposiciones del Acuerdo SMC, manifestó: "asignamos importancia a la falta de toda vinculación textual entre los exámenes del párrafo 3 del artículo 21 y la norma *de minimis* establecida en el párrafo 9 del artículo 11. ": Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Acero al carbono, párrafo 69.

artículo X del GATT de 1994. De hecho, esa interpretación equivaldría a fusionar prescripciones diferentes que actualmente figuran en dos apartados separados del artículo X del GATT de 1994.

7.535 Sin embargo, el Grupo Especial no quiere dar a entender que los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 están completamente desvinculados. En realidad, consideramos que están vinculados de la misma manera en que lo están todas y cada una de las disposiciones de los Acuerdos de la OMC. Más concretamente, consideramos que todas las disposiciones de los Acuerdos de la OMC deben ser interpretadas y aplicadas de manera armoniosa con la interpretación y la aplicación de otras disposiciones de los Acuerdos de la OMC. El Grupo Especial considera que, en términos prácticos, esto significa que las diversas disposiciones de los Acuerdos de la OMC no deben interpretarse ni aplicarse de una manera que reste eficacia y/o eluda el cumplimiento de cualquier otra disposición de los mismos.[902]

Artículo X del GATT de 1994

7.536 Además, el Grupo Especial recuerda la observación que hizo en el contexto de su interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y que figura en los párrafos 7.107 y 7.108 *supra*, de que la idea del debido proceso inspira el artículo X del GATT de 1994. A juicio del Grupo Especial, esa idea significa que un propósito de la revisión prevista en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 es garantizar que un comerciante que ha sido afectado desfavorablemente por una decisión de un organismo administrativo tenga la posibilidad de conseguir que esa decisión adversa sea revisada por un tribunal o un procedimiento que sea independiente del organismo que originalmente tomó la decisión adversa.

Resumen general y conclusiones

7.537 El Grupo Especial considera que ni el sentido corriente de los diversos términos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 ni el contexto jurídico para la interpretación de ese párrafo dan una respuesta clara a la pregunta específica que se pide que el Grupo Especial responda, a saber, si el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 exige que las decisiones de los tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras rijan la práctica de *todos* los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas *en todo el territorio* de un determinado Miembro.

7.538 Una vez dicho esto, el Grupo Especial considera que la interpretación de los términos pertinentes del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 muestra claramente que las decisiones de los tribunales y procedimientos de revisión previstos en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 pueden ser objeto de recurso. Además, el Grupo Especial recuerda el entendimiento de las partes de que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la revisión de primera instancia.[903] En este sentido, el Grupo Especial no considera que sea razonable inferir que los tribunales y organismos independientes de revisión de primera instancia, cuya jurisdicción en la mayoría de los sistemas jurídicos está normalmente limitada en términos sustantivos y geográficos, deben tener competencia para obligar a todos los organismos responsables de la aplicación administrativa en todo el territorio de un Miembro. Además, el Grupo Especial recuerda que el tema del debido proceso que inspira el

[902] En este sentido, el Grupo Especial señala que el Órgano de Apelación, en el asunto *Argentina - Calzado (CE)*, indicó que las disposiciones de los Acuerdos de la OMC "son todas ellas disposiciones de un tratado, el Acuerdo sobre la OMC. Entraron en vigor como parte de ese tratado al mismo tiempo. Se aplican de igual modo y son de igual modo vinculantes para todos los Miembros de la OMC ... el intérprete de un tratado debe interpretar todas las disposiciones aplicables de un tratado de un modo tal que dé sentido a todas ellas de manera armoniosa.": Informe del Órgano de Apelación, Argentina - Calzado (CE), párrafo 81.

[903] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 121 del Grupo Especial; Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 225.

artículo X del GATT de 1994, que incluye el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, indica que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 existe para garantizar que un comerciante que ha sido afectado desfavorablemente por una decisión de un organismo administrativo tiene la posibilidad de conseguir que se revise esa decisión adversa. En opinión del Grupo Especial, exigir que las decisiones tomadas por los tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se apliquen y tengan efecto en todo el territorio de un Miembro, iría más allá de lo que exige este objetivo de debido proceso.

7.539 Los factores expuestos en el párrafo anterior, tomados en conjunto, nos llevan a la conclusión de que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no significa necesariamente que las decisiones de los tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras, deban regir la práctica de *todos* los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas *en todo el territorio* de un determinado Miembro.

4. Supuestas infracciones específicas del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994

b) Resumen de los argumentos de las partes

7.540 Los **Estados Unidos** sostienen que, de acuerdo con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, quien tiene obligación de disponer de tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras es el Miembro de la OMC (y no las subdivisiones regionales del mismo). Además, los Estados Unidos afirman que las decisiones de esos tribunales o procedimientos deben regir la práctica de los organismos del miembro -es decir, en este caso, los organismos de las Comunidades Europeas en su conjunto, no simplemente los organismos de cada uno de los Estados miembros- y que los organismos del miembro deben aplicar esas decisiones.[904]

7.541 Los Estados Unidos también sostienen que el hecho de que cada Estado miembro de las Comunidades Europeas cuente con tribunales o procedimientos no cumple la obligación que corresponde a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, ya que las decisiones de esos tribunales o procedimientos tienen efecto sólo dentro del Estado miembro respectivo y no para los organismos de las CE en general.[905] Más concretamente, los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas no cumplen la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 porque cada uno de los múltiples tribunales de revisión con que cuentan toman decisiones que rigen la práctica de sólo un subconjunto de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas dentro de una región particular de las Comunidades Europeas, pero no "rige la práctica" de los organismos de las Comunidades Europeas en otro Estado miembro.[906] Los Estados Unidos alegan que, dado que el Tribunal Europeo de Justicia no está organizado para ser un tribunal aduanero de las CE, lo que queda es un mosaico de autoridades aduaneras de los Estados miembros cuyo trabajo es revisado por los tribunales de los Estados miembros, y que no hay ningún tribunal o procedimiento de las CE que revise y rectifique prontamente las decisiones relativas a las cuestiones aduaneras de manera que haya uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera de las CE.[907]

---

[904] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 35 del Grupo Especial.

[905] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 35 del Grupo Especial.

[906] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 102.

[907] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 153.

7.542 Las **Comunidades Europeas** sostienen que los Estados Unidos se han concentrado exclusivamente en la ausencia de un tribunal aduanero de las CE.[908] Según las Comunidades Europeas, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 es neutral en cuanto a los medios que los Miembros de la OMC emplean para asegurar la revisión pronta. En otras palabras, esa disposición no establece los organismos o instrumentos ni la estructura o el plazo específicos que los Miembros de la OMC deben usar para garantizar la revisión pronta de las decisiones relativas a cuestiones aduaneras.[909] Las Comunidades Europeas declaran que la interpretación del artículo X del GATT de 1994 que hizo el Órgano de Apelación en los asuntos *CEE - Aves de corral (EE.UU.)* y *CE - Banano III* sustenta aún más la opinión de que ese artículo no impone ninguna estructura específica para el sistema de revisión.[910] Las Comunidades Europeas alegan, además, que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas* confirmó que las Comunidades Europeas pueden cumplir la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 mediante los tribunales de sus Estados miembros.[911] Según las Comunidades Europeas, los tribunales de los Estados miembros, cuando hacen una revisión judicial de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros, actúan como órganos de las Comunidades Europeas, a través de los cuales las Comunidades Europeas cumplen las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[912]

7.543 Los **Estados Unidos** afirman en su respuesta que las Comunidades Europeas parecen considerar que, si los distintos Estados miembros cumplen las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, las Comunidades Europeas necesariamente cumplen las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, el hecho de que, como cuestión de derecho interno de las CE, el mismo tribunal pueda ser considerado tanto tribunal de un Estado miembro como tribunal de las CE no significa que así se satisfacen los requisitos establecidos en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a las obligaciones tanto de las Comunidades Europeas como de los Estados miembros. Los Estados Unidos concluyen que, como cuestión de derecho de las CE, un tribunal puede cumplir una función doble, siendo a la vez un tribunal de un Estado miembro y tribunal de las CE. Sin embargo, esto no significa que así también se satisfacen tanto la obligación que corresponde al Estado miembro en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 como la que corresponde a las Comunidades Europeas en virtud del mismo párrafo.[913] Los Estados Unidos aclaran que su reclamación en esta diferencia no trata sobre los organismos de revisión de que dispone cada uno de los Estados miembros. Los Estados Unidos no sostuvieron, por ejemplo, que la revisión a nivel del Estado miembro infrinja las obligaciones que corresponden a los Estados miembros en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Por el contrario, el núcleo de la alegación de los Estados Unidos es que la revisión actual al nivel del Estado miembro solamente carece de las características que le permitirían satisfacer las obligaciones que corresponden a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[914] En particular, los Estados

[908] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva, párrafo 5.

[909] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 62.

[910] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 455.

[911] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 456.

[912] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 70, en el que se hace referencia al informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *CE - Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas*, párrafo 7.725.

[913] Observaciones de los Estados Unidos sobre la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 169 del Grupo Especial.

[914] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 142 del Grupo Especial.

Unidos sostienen que el mecanismo de apelación de cada Estado miembro es diferente y que las decisiones de los tribunales de cada Estado miembro se aplican sólo en el territorio del Estado miembro en cuestión.[915] Los Estados Unidos afirman que con este arreglo no se cumple la obligación que corresponde a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[916]

7.544 En respuesta, las **Comunidades Europeas** señalan que las decisiones de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, que se basan en el derecho comunitario, son revisadas por los tribunales nacionales y por tribunales que actúan como órganos judiciales ordinarios con respecto al derecho comunitario. Las decisiones sobre asuntos aduaneros adoptadas por las instituciones de las CE son revisadas por el Tribunal Europeo de Justicia (y, en algunos casos, por el Tribunal de Primera Instancia) mediante recursos directos o decisiones prejudiciales sobre la validez. Las Comunidades Europeas sostienen que, por lo tanto, se cuenta con un sistema completo de protección judicial.[917] Las Comunidades Europeas dicen, además, que en las Comunidades Europeas la revisión de las decisiones sobre asuntos aduaneros se lleva a cabo actualmente como parte del sistema general de revisión de las decisiones administrativas, en el campo del derecho administrativo o del derecho fiscal.[918] Según las Comunidades Europeas, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no exige que haya un tribunal o procedimiento central ante el cual apelar contra las decisiones administrativas sobre cuestiones aduaneras.[919] Las Comunidades Europeas también señalan, con respecto a los recursos directos ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Europeo de Justicia, que no existe revisión administrativa previa de las decisiones administrativas adoptadas por las instituciones de las CE sobre cuestiones aduaneras. De conformidad con el apartado 5 del artículo 230 del Tratado de la CE, un recurso de anulación debe ser presentado directamente al tribunal pertinente dentro del plazo de dos meses a partir de la notificación o la publicación de la decisión impugnada.[920] Con respecto al Tribunal de Primera Instancia y al Tribunal Europeo de Justicia, las Comunidades Europeas afirman que, de conformidad con el segundo apartado del artículo 230 del Tratado de la CE, los fundamentos de ilegalidad que las partes pueden alegar en una medida de anulación son incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder.[921]

7.545 En lo relativo a la revisión por el Tribunal Europeo de Justicia de conformidad con el artículo 230 del Tratado de la CE, los **Estados Unidos** alegan que ese artículo se refiere a la revisión, por parte del Tribunal Europeo de Justicia, de la legalidad de las medidas adoptadas por las instituciones de las CE, entre ellas la Comisión y el Consejo. Los Estados Unidos observan que, en el marco de la presente diferencia, no han planteado ninguna cuestión con respecto a la revisión por parte del Tribunal Europeo de Justicia de conformidad con el artículo 230 del Tratado de la CE.[922]

---

[915] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 133.

[916] Declaración oral de los Estados Unidos en la primera reunión sustantiva, párrafos 62 a 64.

[917] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 465.

[918] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 61.

[919] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 465.

[920] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 70 a) del Grupo Especial.

[921] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 71 a) y b) del Grupo Especial.

[922] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 143 del Grupo Especial.

c) Análisis por el Grupo Especial

7.546 La cuestión principal que el Grupo Especial debe considerar aquí es si las Comunidades Europeas cumplen o no las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. En este sentido, el Grupo Especial recuerda que los Estados Unidos alegan que las decisiones de los tribunales o procedimientos en las Comunidades Europeas no "rigen la práctica" de todos "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" en las Comunidades Europeas, lo que infringe el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.[923] El Grupo Especial también destaca que los Estados Unidos sólo sostienen que las Comunidades Europeas infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994; no alegan que los distintos Estados miembros de las Comunidades Europeas también infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Además, los Estados Unidos no cuestionan la revisión de medidas adoptadas conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, o por el Consejo mismo o el Parlamento cuando la medida tiene el fin de producir efectos jurídicos con respecto a terceros, de acuerdo con el artículo 230 del Tratado de la CE.[924]

i) Cumplimiento de la obligación que corresponde a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994

7.547 Un asunto preliminar que ha surgido con respecto a la alegación de los Estados Unidos de que las Comunidades Europeas infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 es si las Comunidades Europeas pueden cumplir las obligaciones que les corresponden en virtud de esa disposición a través de los Estados miembros. En particular, los Estados Unidos sostienen que el hecho de que los distintos Estados miembros que forman parte de las Comunidades Europeas dispongan de tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados a la revisión y rectificación de las medidas administrativas no asegura el cumplimiento de la obligación que corresponde a las Comunidades Europeas en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

7.548 El Grupo Especial señala que las Comunidades Europeas son un Miembro de la OMC.[925] Además, todos los Estados miembros que integran las Comunidades Europeas son Miembros de la OMC. Los Estados miembros, o bien fueron Miembros fundadores del GATT de 1947[926], o se adhirieron al GATT[927] o se adhirieron después a la OMC.[928] Por consiguiente, parecería que las

[923] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 35 del Grupo Especial.

[924] Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafo 85; declaración final de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, párrafos 8 y 9.

[925] En los artículos IX, XI y XIV del Acuerdo sobre la OMC se reconoce a las Comunidades Europeas como Miembro de la OMC. El párrafo 1 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC dice, entre otras cosas, lo siguiente: "Cuando las Comunidades Europeas ejerzan su derecho de voto, tendrán un número de votos igual al número de sus Estados miembros". El párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo sobre la OMC dispone: "Las partes contratantes del GATT de 1947 en la fecha de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y las Comunidades Europeas, que acepten el presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales y para las cuales se anexen Listas de Concesiones y Compromisos al GATT de 1994, y para las cuales se anexen Listas de Compromisos Específicos al AGCS, pasarán a ser Miembros iniciales de la OMC". El párrafo 1 del artículo XIV del Acuerdo sobre la OMC dice: "El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación, mediante firma o formalidad de otra clase, de las partes contratantes del GATT de 1947, y de las Comunidades Europeas, que reúnan las condiciones estipuladas en el artículo XI del presente Acuerdo para ser Miembros iniciales de la OMC".

[926] Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido.

[927] Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca y Suecia.

Comunidades Europeas así como los Estados miembros que las forman tienen simultáneamente las obligaciones previstas en los Acuerdos de la OMC, incluso las que figuran en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Sin embargo, el Grupo Especial recuerda que los Estados Unidos sólo afirman que las Comunidades Europeas infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994; no alegan que los Estados miembros de las Comunidades Europeas también infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Por lo tanto, el Grupo Especial se limitará a considerar si las Comunidades Europeas infringen o no el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

7.549 En este sentido, el Grupo Especial recuerda que el Tratado de la CE establece una política comercial común que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 133 del Tratado de la CE, está basada en principios uniformes, particularmente por lo que se refiere a las modificaciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales, la consecución de la uniformidad de las medidas de liberalización, la política de exportación, así como las medidas de protección comercial, y, entre ellas, las que deban adoptarse en caso de dumping y subvenciones. El Tribunal Europeo de Justicia ha confirmado que la unión aduanera y la política comercial común, que incluye la administración de las cuestiones aduaneras, son competencia exclusiva de las Comunidades Europeas.[929] Uno de los instrumentos principales que forman el marco jurídico para la administración aduanera en las Comunidades Europeas es el Código Aduanero Comunitario, que abarca, entre otras cosas, la revisión de las decisiones sobre las cuestiones aduaneras.

7.550 Las Comunidades Europeas han informado al Grupo Especial de que, cuando revisan las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros, los tribunales de los Estados miembros actúan como órganos de las Comunidades Europeas[930] y que la consideración de los tribunales de los Estados miembros como órganos responsables de la aplicación ordinaria del derecho comunitario se basa en la existencia del procedimiento de reenvío judicial al Tribunal Europeo de Justicia y en los principios básicos de la primacía del derecho comunitario y del efecto directo.[931] Esta opinión encuentra sustento en el artículo 243 del Código Aduanero Comunitario, que, en la parte pertinente, dice lo siguiente:

> 1. Toda persona que estime que una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la normativa aduanera lesiona sus derechos tendrá derecho a recurrir contra la misma, siempre y cuando ésta la afecte directa e individualmente.
>
> …
>
> El recurso deberá presentarse ante las autoridades del Estado miembro en que se haya adoptado o solicitado la decisión.
>
> 2. El derecho de recurso podrá ejercerse:
>
> a) en una primera fase, ante las autoridades aduaneras designadas al efecto por los Estados miembros;

---

[928] Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania.

[929] Dictamen 1/75, Norma sobre gastos locales, Recopilación de Jurisprudencia 1975, página 00375 (CE - Prueba documental 13).

[930] Declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva, párrafo 70.

[931] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 169 del Grupo Especial.

> b) en una segunda fase, ante una autoridad independiente que podrá ser una autoridad judicial o un órgano especializado equivalente, con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro.

7.551 El Grupo Especial entiende que el artículo 243 del Código Aduanero Comunitario exige que las decisiones sobre asuntos aduaneros sean revisadas, en una primera fase, por las autoridades aduaneras designadas al efecto por los Estados miembros y, en una segunda fase, ante una autoridad independiente que podrá ser una autoridad judicial o un órgano especializado equivalente, con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro.

7.552 El Grupo Especial opina que las Comunidades Europeas pueden cumplir las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 por intermedio de órganos de sus Estados miembros. Consideramos que esto es consecuencia del hecho de que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no contiene ningún requisito con respecto a la estructura institucional del mecanismo de revisión exigido por ese artículo, excepto el de que la revisión sea llevada a cabo por tribunales judiciales, arbitrales o administrativos.[932]

7.553 A la luz de lo anterior, el Grupo Especial concluye que las autoridades de los Estados miembros, incluidas las autoridades aduaneras designadas para ese fin por los Estados miembros y los órganos independientes, como una autoridad judicial o un órgano especializado equivalente, actúan como órganos de las Comunidades Europeas cuando revisan y rectifican las medidas administrativas tomadas de acuerdo con las leyes aduaneras de las CE.

ii) Revisión de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras por las autoridades de los Estados miembros

7.554 Los Estados Unidos impugnan la revisión hecha por las autoridades de los Estados miembros en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 basándose en que las decisiones de esas autoridades sólo tienen efecto dentro de los Estados miembros respectivos. De hecho, parece no haber ningún desacuerdo entre las partes respecto a que esto es así.[933] Sin embargo, el Grupo Especial recuerda que, en el párrafo 7.539 *supra*, constató que las decisiones de los tribunales o procedimientos instituidos o mantenidos en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 no tienen necesariamente que regir la práctica de *todos* los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas *en todo el territorio* de un Miembro en particular, como han afirmado los Estados Unidos. Por lo tanto, en el contexto de esta diferencia, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas no infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 simplemente por el hecho de que las decisiones que toman las autoridades de los Estados miembros que actúan como órganos de las Comunidades Europeas con respecto a la revisión de las medidas administrativas

---

[932] El Grupo Especial considera que esto también se deduce del artículo 4 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que prevé lo siguiente:

> "1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado.
>
> 2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado."

[933] De hecho, las Comunidades Europeas parecen reconocerlo en su Primera comunicación escrita, párrafo 454; Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 99; Segunda comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 224.

relativas a las cuestiones aduaneras no se apliquen ni tengan efecto en todo el territorio de las Comunidades Europeas.

7.555 Sobre la base de las explicaciones dadas por las Comunidades Europeas, que no fueron impugnadas por los Estados Unidos, entendemos que, en virtud del apartado 2 b) del artículo 243 del Código Aduanero Comunitario, los Estados miembros disponen de órganos administrativos y/o judiciales independientes que cumplen la función de revisar y rectificar las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. Específicamente, las Comunidades Europeas han indicado que, en el caso de España, Italia, Irlanda y Dinamarca, la revisión administrativa la lleva a cabo un órgano que es independiente de los organismos encargados de la aplicación administrativa.[934] Las Comunidades Europeas también han indicado que los tribunales de todos los Estados miembros revisan y rectifican la legalidad de las decisiones administrativas relativas a las cuestiones aduaneras.[935]

iii) Resumen y conclusiones

7.556 En resumen, el Grupo Especial considera que, en relación con las obligaciones previstas en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, las autoridades de los Estados miembros, es decir los órganos administrativos y judiciales independientes, actúan como órganos de las Comunidades Europeas cuando revisan y rectifican las medidas administrativas tomadas de acuerdo con las leyes aduaneras de las CE. En realidad, las decisiones de esas autoridades de los Estados miembros sólo tienen efecto dentro del respectivo Estado miembro. No obstante, el Grupo Especial considera que las Comunidades Europeas no infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 simplemente por el hecho de que las decisiones referentes a la revisión de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras que toman las autoridades de los Estados miembros que actúan como órganos de las Comunidades Europeas no se apliquen a todos los organismos de las Comunidades Europeas y no tengan efecto en todo el territorio de las Comunidades Europeas. El Grupo Especial recuerda que los Estados Unidos no alegan incompatibilidad con ningún otro aspecto del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Por consiguiente, el Grupo Especial llega a la conclusión de que las Comunidades Europeas no infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 El Grupo Especial llega a las siguientes *conclusiones*:

a) Con respecto al mandato del Grupo Especial en el contexto de la alegación de los Estados Unidos relativa al párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994:

i) El mandato autoriza al Grupo Especial a considerar la manera en que las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros aplican el Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación, el Arancel Aduanero Común, el TARIC y las medidas conexas en las esferas de la administración de aduanas identificadas específicamente en la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial.

ii) El artículo 221 del Código Aduanero Comunitario, incluido su apartado 3, no está comprendido en ninguna de las esferas de la administración de aduanas identificadas específicamente en la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial. Por lo tanto, el apartado 3 del

[934] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 69 b) del Grupo Especial.

[935] Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 69 a) del Grupo Especial.

artículo 221 del Código Aduanero Comunitario no está abarcado por el mandato del Grupo Especial.

iii) Con arreglo a su mandato, al Grupo Especial no le está permitido considerar impugnaciones del diseño y la estructura "en sí mismos" del sistema de administración de aduanas de las CE en su conjunto y tampoco el diseño y la estructura del sistema de las CE en las esferas de la administración de aduanas que se han identificado específicamente en la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial.

b) Con respecto a la alegación de los Estados Unidos de aplicación no uniforme del Arancel Aduanero Común en la esfera de la clasificación arancelaria en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994:

i) Las Comunidades Europeas no aplican actualmente el Arancel Aduanero Común con respecto a la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales en una manera que sea no uniforme en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por lo tanto, el Grupo Especial no constata ninguna infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la clasificación arancelaria de las tarjetas de red para ordenadores personales.

ii) La clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo no equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por lo tanto, el Grupo Especial no constata ninguna infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la clasificación arancelaria de los productos para riego por goteo.

iii) Los Estados Unidos no han demostrado que la clasificación arancelaria de los artículos o "shorts" unisex equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

iv) El proceso administrativo que da por resultado la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por lo tanto, el Grupo Especial constata una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas.

v) La clasificación arancelaria de los monitores de cristal líquido con interfaz videodigital equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por lo tanto, el Grupo Especial constata una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la clasificación arancelaria de los monitores de cristal líquido con interfaz videodigital.

vi) Los Estados Unidos no han demostrado que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no han considerado vinculante la IAV emitida por autoridades aduaneras en otros Estados miembros y que no haberlo hecho equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

vii) Los Estados Unidos no han demostrado que la negativa a retirar la revocación de la IAV por parte de las autoridades aduaneras del Reino Unido con

respecto a la clasificación arancelaria de la consola PlayStation2 de Sony en el contexto del asunto *Consola PlayStation2 de Sony* equivale a una aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

viii) Los Estados Unidos no han demostrado que la interpretación y la aplicación de las notas explicativas modificadas al Arancel Aduanero Común referentes a las videocámaras en el contexto del asunto *Videocámaras* equivalen a una aplicación no uniforme en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

c) Con respecto a las alegaciones de los Estados Unidos de aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y del Reglamento de Aplicación en la esfera de la valoración en aduana en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994:

i) Los Estados Unidos no han demostrado que, en la manera en que los cánones se imputan al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa, existen diferencias entre los Estados miembros que equivalen a una aplicación no uniforme de la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

ii) La imposición por las autoridades aduaneras de algunos Estados miembros de una forma de aprobación previa con respecto a la disposición sobre las ventas sucesivas, que es incompatible con las leyes de aduanas de las CE y que no es impuesta por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros, significa que las Comunidades Europeas no aplican su legislación aduanera referente a las ventas sucesivas -en particular el apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación- de manera uniforme en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

iii) Las Comunidades Europeas no aplican actualmente el apartado 3 a) del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario en relación con los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía en una manera que infrinja la obligación de uniformidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Por lo tanto, el Grupo Especial no constata ninguna infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la aplicación del apartado 3 a) del artículo 29 del Código Aduanero Comunitario en relación con los costes de reparación de vehículos cubiertos por garantía.

iv) Los Estados Unidos no han demostrado que la manera en que se aplican el artículo 29 del Código Aduanero Comunitario y la letra e) del apartado 1 del artículo 143 del Reglamento de Aplicación en relación con las circunstancias en que las partes han de ser consideradas "vinculadas" a los fines de la valoración en aduana no es uniforme entre los Estados miembros en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

d) Con respecto a las alegaciones de los Estados Unidos de aplicación no uniforme del Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación en la esfera de los regímenes aduaneros en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994:

i) El Grupo Especial no constata ninguna infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a la manera en que se aplica el apartado 2 del artículo 78 del Código Aduanero Comunitario en relación con

los requisitos impuestos para los procedimientos de auditoría posteriores al despacho de los productos a libre práctica en las Comunidades Europeas.

ii) El Grupo Especial no constata ninguna infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 con respecto a las diferencias sustantivas entre los Estados miembros en las leyes que establecen sanciones.

iii) Los Estados Unidos no han demostrado que la manera en que se aplican el artículo 133 del Código Aduanero Comunitario y el apartado 3 del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación en relación con la transformación bajo control aduanero no es uniforme en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

iv) Los Estados Unidos no han demostrado que la aplicación de los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación en relación con los procedimientos de domiciliación no es uniforme en infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

e) Con respecto a la alegación de los Estados Unidos de incumplimiento de la obligación de asegurar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras establecida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, el Grupo Especial no constata ninguna infracción.

8.2 Por consiguiente, el Grupo Especial *concluye* que las Comunidades Europeas han actuado de manera incompatible con las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y, de esa forma, han anulado o menoscabado ventajas resultantes para los Estados Unidos. Por lo tanto, el Grupo Especial *recomienda* que el Órgano de Solución de Diferencias pida a las Comunidades Europeas que se pongan en conformidad con respecto a:

a) la aplicación del Arancel Aduanero Común en relación con el proceso administrativo conducente a la clasificación arancelaria de los forros opacos para cortinas;

b) la aplicación del Arancel Aduanero Común en relación con la clasificación arancelaria de los monitores de cristal líquido con interfaz videodigital;

c) la aplicación del apartado 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación en relación con la imposición por las autoridades aduaneras de algunos Estados miembros de una forma de aprobación previa con respecto a la disposición sobre las ventas sucesivas en el contexto de la valoración en aduana.

_____

ANEXO A

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL Y POR OTRAS PARTES DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA DEL GRUPO ESPECIAL

Índice		Página
Anexo A-1	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva del Grupo Especial	A-2
Anexo A-2	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por las Comunidades Europeas después de la primera reunión sustantiva	A-51
Anexo A-3	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-53
Anexo A-4	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el grupo especial después de la primera reunión sustantiva	A-97
Anexo A-5	Respuestas de la Argentina a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-100
Anexo A-6	Respuestas de China a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-105
Anexo A-7	Respuestas del Japón a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-107
Anexo A-8	Respuestas de Corea a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-115
Anexo A-9	Respuestas del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva	A-121

ANEXO A-1

RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA DEL GRUPO ESPECIAL

(23 de septiembre de 2005)

PREGUNTAS PARA LOS ESTADOS UNIDOS:

1. Sírvanse responder a la afirmación que las Comunidades Europeas hacen en el párrafo 14 de su Primera comunicación escrita de que la medida en litigio en la presente diferencia es "la manera en que las CE aplican" las leyes aduaneras.

En la presente diferencia, los Estados Unidos impugnan la manera en que se aplica la normativa aduanera comunitaria (así como la inexistencia de tribunales o procedimientos de las CE destinados a la pronta revisión y rectificación de las decisiones administrativas aduaneras, como exige el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994). En especial, impugnamos la falta de uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. La manera en que las CE aplican su derecho aduanero -es decir, la falta de uniformidad de esa aplicación- puede no constituir en sí misma una "medida". Las "medidas concretas en litigio" a efectos del párrafo 2 del artículo VI del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") son las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que forman la normativa aduanera comunitaria, aun cuando en algunos casos esos instrumentos se apliquen mediante leyes y reglamentos que son a su vez medidas. Esas medidas en litigio se identifican en el primer párrafo de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos (y se recogen en la pregunta 3 de las preguntas refundidas del Grupo Especial). Los Estados Unidos no impugnan el contenido de esas medidas, sino la falta de uniformidad en su aplicación.

La falta de uniformidad en la aplicación de las medidas en litigio se pone de manifiesto de diferentes formas. Una de ellas es la existencia en los diferentes Estados miembros de instrumentos diferentes para hacer cumplir la normativa aduanera comunitaria. Por ejemplo, en la medida en que diferentes Estados miembros de las CE tienen y aplican diferentes sanciones para hacer cumplir la normativa aduanera comunitaria, ese hecho es prueba de una falta de uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. De forma análoga, en la medida en que diferentes Estados miembros de las CE tienen y aplican diferentes procedimientos de control para garantizar la observancia de la normativa aduanera comunitaria, ese hecho es asimismo prueba de una falta de uniformidad en la aplicación del mismo.

Las sanciones y los procedimientos de control -así como otros medios de aplicación- pueden adoptar a su vez la forma de medidas. Las medidas que son medios de aplicación son causa y prueba de la falta de uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras de que se trata. Aclararemos más este punto en nuestras respuestas a las preguntas 29, 32 y 90, *infra*.

2. En el párrafo 20 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos sostienen que un Miembro no aplica su legislación de manera uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 si se da un trato diferente a productos o transacciones idénticas en regiones geográficas diferentes y el Miembro no establece ningún mecanismo para la conciliación sistemática de las diferencias. De forma análoga, en el párrafo 119 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos sostienen que, en lo que respecta a la aplicación de la legislación comunitaria en relación con la clasificación y la valoración y con la aplicación de determinados procedimientos aduaneros, no hay uniformidad ni existen mecanismos jurídicos para lograrla. Sírvanse aclarar si los Estados Unidos alegan que: a) el otorgamiento de un

trato diferente en diferentes regiones geográficas a productos o transacciones idénticas infringiría el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 o si b) el otorgamiento de un trato diferente en regiones geográficas diferentes a productos o transacciones idénticas infringiría el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 solamente en el caso de que no hubiera ningún mecanismo para la conciliación sistemática de esas diferencias o ese mecanismo no fuera efectivo.

Los Estados Unidos reconocen que en el curso de la aplicación de las leyes aduaneras pueden producirse ocasionalmente divergencias entre las autoridades de diferentes regiones del territorio de un Miembro de la OMC. Los Estados Unidos no pretenden que el hecho de que se produzca una divergencia pruebe necesariamente y de forma automática la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. La aplicación de las leyes aduaneras no se reduce a las decisiones adoptadas en primera instancia en los diversos puertos aduaneros. Cuando tiene lugar una conciliación sistemática y pronta de las diferencias, el hecho de que durante un breve período existan divergencias en la aplicación no implica que el Miembro haya infringido el párrafo 3 a) del artículo X. El elemento decisivo es la existencia de un mecanismo -por ejemplo, un organismo central- para subsanar esas diferencias.

El hecho de que esporádicamente puedan producirse diferencias y éstas sean subsanadas no satisface la obligación de aplicación "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X, lo que se infiere claramente, por ejemplo, del hecho de que esa obligación es aplicable a "todas" las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de un Miembro a que se refiere el párrafo 1 del artículo X.

Lo que aducen los Estados Unidos es que las CE no cuentan con ningún mecanismo para subsanar las diferencias existentes en la aplicación por los Estados miembros de la normativa aduanera y convertir en uniforme la aplicación no uniforme. Es la inexistencia de un organismo aduanero u otro mecanismo central que logre una aplicación uniforme lo que lleva a la conclusión de que las CE incumplen la obligación que les impone el párrafo 3 a) del artículo X.

3. Sírvanse indicar qué impugnan los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en relación con:

a) El Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, el Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993 y el arancel integrado de las Comunidades Europeas establecido por el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987;

b) las "medidas conexas" a que se hace referencia en el párrafo 3 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos; y

c) las normas de las CE sobre clasificación aduanera, valoración en aduana y procedimientos aduaneros.

Los Estados Unidos impugnan la aplicación de las medidas enumeradas. Al hacer referencia en su solicitud de establecimiento de un grupo especial a todas y cada una de las medidas mencionadas en la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos han incluido en ella la totalidad de las medidas que constituyen la normativa aduanera comunitaria. Las principales medidas de esa naturaleza son aquéllas a las que se hace referencia en el apartado a) de la pregunta del Grupo Especial. No obstante, no se trata sólo de ellas. Como las propias CE han indicado[1], diversos

[1] *Véase, por ejemplo*, la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 92 a 96.

reglamentos de la Comisión y otras medidas relativas a la clasificación aduanera y a la valoración en aduana y los procedimientos aduaneros complementan esas medidas.

En el caso de cada una de las medidas enumeradas, la medida es aplicada por las autoridades aduaneras de 25 Estados miembros distintos, y los instrumentos que las CE pretenden que concilian las diferencias que se producen entre esas autoridades no las concilian para lograr la aplicación uniforme que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Aunque el contenido sustantivo de las diversas medidas es diferente -las medidas relativas a la clasificación son distintas de las medidas relativas a la valoración en aduana, por ejemplo- el problema de la falta de uniformidad en su aplicación es el mismo. En consecuencia, en nuestra Primera comunicación escrita hemos descrito el problema de la aplicación no uniforme de forma sistémica para exponer a continuación la forma en que ese problema se manifiesta en las tres esferas de la clasificación, la valoración en aduana y los procedimientos aduaneros.

4. Si los Estados Unidos impugnan la supuesta falta de uniformidad *en general* en la aplicación del sistema aduanero de las CE, sírvanse explicar por qué y de qué forma los diversos casos concretos de supuesta aplicación no uniforme señalados por los Estados Unidos para ilustrar su alegación de falta de uniformidad en la aplicación ponen de relieve y respaldan plenamente el contenido sustancial de la alegación de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos impugnan en realidad la falta de uniformidad en general en la aplicación del sistema aduanero de las CE. En nuestra Primera comunicación escrita y en la primera reunión del Grupo Especial, hemos respaldado esa impugnación con pruebas de la forma en que funciona el sistema de aplicación del derecho aduanero. En particular, hemos demostrado que la normativa aduanera de las CE es aplicada por las autoridades aduaneras de 25 Estados miembros distintos, y que los instrumentos que las CE pretenden que concilian las divergencias que se producen entre esas autoridades distintas no las concilian para lograr la aplicación uniforme que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. En respuesta a ello, las CE han descrito diversos principios del derecho comunitario, así como instrumentos e instituciones que, a su juicio, concilian las divergencias y tienen como resultado una aplicación uniforme. No obstante, como han demostrado los Estados Unidos, ninguno de esos principios, instrumentos e instituciones concilian las divergencias en la aplicación por los Estados miembros. Esos instrumentos constituyen una red flexible de orientaciones no vinculantes para las autoridades de los Estados miembros, obligaciones generales de colaboración, y facultades discrecionales de la Comisión y de los funcionarios de los Estados miembros para someter las cuestiones al Comité del Código Aduanero. El único aspecto de esta red que puede aducirse de forma sistemática es la posibilidad de que un comerciante recurra contra un acto de una autoridad aduanera de un determinado Estado miembro ante los tribunales de ese Estado miembro. No obstante, por las razones que hemos analizado en nuestra declaración inicial en la primera reunión del Grupo Especial, la existencia de esa posibilidad no libera a las CE de la obligación establecida en el párrafo 3 a) del artículo X.

Como ilustración de la falta de uniformidad en general con respecto a la aplicación del sistema aduanero de las CE, hemos señalado a la atención del Grupo Especial varios ejemplos, con el fin principal de demostrar que la infracción por las CE del párrafo 3 a) del artículo X no es simplemente un problema abstracto o técnico, sino un problema que entraña consecuencias reales para comerciantes reales. Lo esencial no es el número de ejemplos o los detalles concretos de cada uno de los casos; lo que esos casos ponen de manifiesto es el problema sistémico identificado por los Estados Unidos al demostrar la forma en que el modo en que funciona la administración aduanera en las CE afecta a tres esferas fundamentales de la administración aduanera: la clasificación, la valoración en aduana y los procedimientos aduaneros.

Forros opacos para cortinas: Este caso constituye un ejemplo palmario de aplicación no uniforme del Arancel Aduanero Común, en el que ninguna institución de las CE intervino para subsanar la falta de uniformidad. En él, la autoridad aduanera de un Estado miembro (Alemania)

aplicó el Arancel Aduanero Común de una forma que difería abiertamente de la manera en que era aplicado por las autoridades de otros Estados miembros. La forma de aplicar Alemania el Arancel Aduanero Común dio lugar a que la mercancía en cuestión fuera clasificada en la partida 3921, siendo así que las autoridades de otros Estados miembros habían clasificado sistemáticamente los forros opacos para cortinas en la partida 5907.

La autoridad alemana no trató en absoluto de conciliar su decisión en materia de clasificación con las decisiones reflejadas en la información arancelaria vinculante ("IAV") emitida por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros que se había señalado a su atención. Además, se basó en razones que el Arancel Aduanero Común no le forzaba a seguir y que a pesar de ello la Comisión se abstuvo de caracterizar como un caso de falta de uniformidad. En concreto, la autoridad alemana constató que la presencia de revestimiento plástico impedía clasificar los forros opacos para cortinas en la partida 5907 del arancel (en contra de lo indicado en la nota explicativa del Sistema Armonizado relativa a esa partida[2]), y se basó en un instrumento interpretativo específico de Alemania -en relación con la escasa densidad de la trama- desarrollándolo, según las CE, por analogía con un reglamento de la Comisión relativo a la clasificación de los pantalones de esquí.[3] En resumen, en el caso de los forros opacos para cortinas, la autoridad aduanera de un Estado miembro se abstuvo de tener en cuenta IAV de otros Estados miembros, prescindió de una nota explicativa aplicable del Sistema Armonizado, y se basó en último término para su clasificación en un instrumento interpretativo peculiar de un país, basándose en la analogía en relación con una mercancía clasificable en un capítulo completamente distinto del Arancel Aduanero Común. Esa situación no provocó ninguna intervención de una institución comunitaria para conciliar las diferencias en la aplicación, lo que ilustra la alegación de los Estados Unidos. En realidad, el propio hecho de que las CE, al verse enfrentadas a esta situación, nieguen incluso la existencia de una falta de uniformidad[4] destaca aún más el problema.

Monitores LCD: El caso de los monitores LCD constituye otro ejemplo de aplicación no uniforme del Arancel Aduanero Común por diferentes Estados miembros, sin que las CE intervengan para conciliar las diferencias. Ante las divergencias en cuanto a la clasificación aduanera de los monitores LCD con interfaz video-digital, el Comité del Código Aduanero no pudo llegar a una decisión sobre la forma de conciliar esas divergencias. En consecuencia, el Consejo de la Unión Europea adoptó, como medida coyuntural, un reglamento que suspendía temporalmente los derechos aplicables a un subconjunto del producto en cuestión en función de sus dimensiones. Los productos cuyas dimensiones excedían del umbral establecido en el reglamento del Consejo siguen sujetos a derechos en función de la clasificación asignada en los diferentes Estados miembros.

Las CE afirman que la adopción del reglamento del Consejo relativo a un subconjunto de monitores LCD es fruto de una opción deliberada basada en las circunstancias concretas del caso.[5] Las Comunidades aducen que era necesaria una mayoría cualificada para adoptar el reglamento del Consejo relativo a la suspensión de derechos, al igual que habría sido necesaria una mayoría cualificada en el Comité del Código Aduanero para aprobar efectivamente un reglamento de clasificación. No obstante, la diferencia estriba en que un reglamento de suspensión de los derechos es muy distinto de un reglamento de clasificación. El primero constituye una solución política temporal, en tanto que el segundo resuelve de forma definitiva una cuestión técnica. La capacidad del Consejo para adoptar un reglamento de suspensión de los derechos no es una prueba de la capacidad

[2] Nota explicativa del Sistema Armonizado, partida 59.07 (Estados Unidos - Prueba documental 48).

[3] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 343; CE - Prueba documental 78, página 14.

[4] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 346.

[5] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 360.

del sistema para lograr la uniformidad cuando se trata de la aplicación de normas de clasificación. En realidad, el mismo hecho de que la cuestión de clasificación siga sin resolver pone de manifiesto la incapacidad del sistema para lograr la uniformidad en esa esfera.

La propia explicación que dan las CE de la medida que adoptó el Comité del Código Aduanero con respecto a los monitores LCD pone aún más de relieve que el caso de esos monitores constituye un ejemplo adecuado del problema identificado por los Estados Unidos. En el párrafo 353 de su Primera comunicación escrita, las CE afirman que el Comité llegó a la conclusión de que salvo que un importador pueda demostrar que un monitor está sólo destinado a su utilización con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos (partida 8471) o como tablero indicador (partida 8531), debe clasificarse dentro de la partida 8528. Como hemos indicado en nuestra declaración inicial, la exigencia de demostrar que un monitor está destinado *sólo* a su utilización con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos está en contradicción con la nota de capítulo aplicable del Arancel, que hace referencia al uso exclusivo o principal.[6] Así pues, lejos de esclarecer la cuestión, la orientación dada por el Comité en ese caso parece favorecer, y no subsanar, la aplicación divergente de las normas de clasificación.

Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración: El informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración (Estados Unidos - Prueba documental 14) analiza diversas divergencias en la aplicación por los Estados miembros de las normas comunitarias de valoración en aduana. En la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos se destacan los elementos principales de ese informe. Al igual que los ejemplos citados en la esfera de la clasificación, todos los casos a los que se hace referencia en ella ponen de manifiesto divergencias en la aplicación por parte de los Estados miembros, unidas al hecho de que las instituciones comunitarias no subsanan de forma sistemática las divergencias. El único caso de divergencias en la aplicación de las normas de valoración en el que las CE afirman que han tomado medidas en respuesta al informe del Tribunal de Cuentas es el de los costes de reparación cubiertos por un vendedor en virtud de la garantía.[7] No obstante, como aclara el informe en su párrafo 73, la Comisión tuvo conocimiento por primera vez de la práctica divergente del Estado miembro en esta esfera por un informe de 1999. El hecho de que un caso de aplicación no uniforme señalado por primera vez a la atención de la Comisión en 1990 se haya resuelto mediante un reglamento adoptado en 2002 no es una prueba demasiado convincente de que el sistema funcione de manera compatible con la obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Con respecto a los demás ejemplos de aplicación no uniforme a los que se hacía referencia en el informe del Tribunal de Cuentas, las CE no niegan las divergencias, pero las despachan como diferencias basadas en cuestiones fácticas[8], diferencias de importancia secundaria[9], o cuestiones que no forman parte de los procedimientos aduaneros.[10] Se trata sólo de calificativos de las CE. Lo cierto sigue siendo que el informe del Tribunal de Cuentas identifica minuciosamente determinadas divergencias en la aplicación de las normas de valoración en aduana que las CE no han conciliado. A este respecto, los ejemplos del informe respaldan también la impugnación de los Estados Unidos basada en la inexistencia de una uniformidad general en el sistema de administración aduanera de las CE.

---

[6] Declaración inicial de los Estados Unidos, primera reunión del Grupo Especial, párrafo 28.

[7] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 397 y 398.

[8] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 393.

[9] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 396.

[10] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 407.

Reebok: El caso de Reebok constituye un ejemplo específico de aplicación divergente de las normas de valoración en aduana, sin que las CE hayan conciliado las divergencias. Como se ha expuesto en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, en ese caso la autoridad de un Estado miembro consideró a un importador vinculado a vendedores no comunitarios a efectos de valoración. Las autoridades de otro Estado miembro no consideraron que el importador estuviera vinculado con vendedores no comunitarios.

El caso Reebok respalda la alegación de los Estados Unidos, por cuanto es un caso concreto de aplicación no uniforme en la esfera de la valoración. De forma reveladora, las CE, aunque califican el caso de "relativamente complejo"[11], no niegan los hechos esenciales descritos en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos.

Transformación bajo control aduanero: Los Estados Unidos se han referido a la transformación bajo control aduanero como ejemplo de divergencia entre los Estados miembros en la aplicación del derecho comunitario en lo que concierne a los procedimientos aduaneros. En concreto, diferentes Estados miembros aplican criterios económicos diferentes para adoptar la decisión de permitir o no la transformación bajo control aduanero. Por ejemplo, hemos demostrado que la autoridad aduanera del Reino Unido exige que el solicitante demuestre tanto la creación y el mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en las CE como la inexistencia de perjuicio para los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares. En cambio, como hemos puesto de manifiesto, la autoridad francesa exige la demostración del primero de los aspectos citados, pero no del último.

Las CE responden que todos los Estados miembros aplican ambos criterios y se remite a la referencia a la inexistencia de perjuicio para los competidores que se hace en el boletín aduanero francés (Estados Unidos - Prueba documental 35).[12] No obstante, esa referencia (en el párrafo 78 del boletín) constituye simplemente una paráfrasis introductoria de determinadas disposiciones del Código Aduanero Comunitario. Después de la introducción, el boletín especifica que la prueba de condiciones económicas se efectuará según las modalidades que se exponen a continuación ("il s'effectue selon les modalités définies ci-après"). Como se ha explicado en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, la modalidad pertinente (párrafo 83) no hace ninguna referencia al perjuicio a los productores comunitarios.

Procedimiento de domiciliación: Los Estados Unidos han citado el procedimiento de domiciliación como segundo ejemplo de divergencia entre los Estados miembros en la aplicación del derecho comunitario con respecto a los procedimientos aduaneros. En concreto, hemos puesto de manifiesto que diferentes Estados miembros imponen requisitos diferentes para el procedimiento de domiciliación. Las CE contestan que la descripción de los Estados Unidos mezcla determinados trámites concretos de procedimiento y confunde determinados detalles en relación con algunos Estados miembros, pero no niegan la existencia de divergencias en la aplicación del procedimiento de domiciliación.

Sanciones: Las sanciones constituyen un tercer aspecto de los procedimientos aduaneros en el que hay divergencias entre los Estados miembros. Las CE ni siquiera niegan la existencia de divergencias en esta esfera, sino que sostienen que el párrafo 3 a) del artículo X no es aplicable a las sanciones. Las Comunidades aducen de diferentes modos que el objeto de las medidas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X no abarca las sanciones y que, en todo caso, las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las sanciones son diferencias de derecho sustantivo y no diferencias en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. Como hemos explicado en nuestra declaración

[11] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 407.

[12] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 405.

inicial[13], y así como en la respuesta a las preguntas 29 y 32 *infra*, las CE interpretan erróneamente el argumento de los Estados Unidos con respecto a las sanciones.

Las medidas que establecen sanciones son instrumentos para la aplicación de otras leyes, en el caso que nos ocupa, de leyes aduaneras. En consecuencia, la finalidad de una sanción por la infracción de una ley aduanera es inducir a la observancia de la ley. El párrafo 1 del artículo X se refiere a las leyes que deben aplicarse de manera uniforme en virtud del párrafo 3 a) del artículo X, y no a los instrumentos para su aplicación uniforme, como las sanciones. En consecuencia, aunque las CE estuvieran en lo cierto al sostener que el párrafo 1 del artículo X no abarca las leyes que establecen sanciones, su argumento no sería pertinente.

Por otra parte, el argumento de las CE de que las diferencias en las leyes que establecen sanciones son diferencias sustantivas y no diferencias de aplicación da por supuesto erróneamente que una ley (u otra medida) no puede tener naturaleza administrativa. Es evidente que las leyes que establecen sanciones tienen naturaleza administrativa, en la medida en que presuponen la existencia de otras leyes y establecen las consecuencias de su infracción.

En síntesis, el ejemplo de las sanciones subraya y respalda plenamente el contenido esencial de la alegación de los Estados Unidos, al poner de relieve otra divergencia en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. Las CE no niegan que exista la divergencia, sino que sostienen que esa divergencia excede del ámbito del artículo X. No obstante, por las razones que acabamos de explicar (y que exponemos más detalladamente en las respuestas a las preguntas 29 y 32), el argumento de las CE a este respecto no es correcto.

Procedimientos de control: Los Estados Unidos han hecho referencia a los procedimientos de control -es decir, a los procedimientos para verificar las declaraciones de los importadores con respecto a la clasificación, la valoración y el origen de las mercancías- como un ejemplo más de falta de uniformidad en la esfera de los procedimientos aduaneros. Al igual que en el caso de las sanciones, las CE admiten la existencia de diferencias entre los Estados miembros en esta esfera. Su único argumento para sostener que esas diferencias no son incompatibles con el párrafo 3 a) del artículo X es que se trata de diferencias sustantivas y no de diferencias de aplicación. Pero, como en el caso de las sanciones, este argumento prescinde del hecho de que determinadas medidas tienen naturaleza administrativa y, de hecho, descarta una falta de uniformidad innegable calificándola de falta de uniformidad en cuanto al "contenido sustantivo".

En conjunto, los diversos casos de aplicación no uniforme que hemos resumido en respuesta a la presente pregunta ponen de relieve que el problema sistémico que está en el centro de la presente diferencia se manifiesta en tres esferas principales de la administración aduanera. Precisamente porque se trata de un problema sistémico, no se reduce a la clasificación, la valoración en aduana o los procedimientos aduaneros. La falta de uniformidad de la aplicación es una característica esencial en las tres esferas. La prueba principal de una aplicación no uniforme es la demostración de que los instrumentos que las CE sostienen que concilian las divergencias que se producen entre las autoridades aduaneras de 25 Estados miembros diferentes no las concilian para lograr la aplicación uniforme que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Los ejemplos muestran cómo la aplicación por las CE de sus normas aduaneras permite la persistencia de una falta de uniformidad en la aplicación en tres esferas concretas.

5. Con respecto a las alegaciones de los Estados Unidos relativas a la aplicación por las Comunidades Europeas de las normas sobre valoración en aduana ¿impugnan los Estados Unidos *únicamente* la aplicación de las normas de las CE relativas a: a) las partes vinculadas; b) los pagos en concepto de cánones; c) la valoración efectuada sobre una base distinta del valor

[13] Declaración inicial de los Estados Unidos, primera reunión del Grupo Especial, párrafos 46 a 52.

de transacción de la última venta; y d) los gastos de reparación de vehículos cubiertos por la garantía? En caso de que los Estados Unidos impugnen otros aspectos de las normas de las CE sobre valoración en aduana al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sírvanse facilitar aclaraciones al respecto e identificar específicamente las normas de que se trata.

La alegación de los Estados Unidos se refiere al sistema de aplicación del derecho aduanero en las CE. Este sistema -en el cual la normativa aduanera comunitaria es aplicado por las autoridades de 25 Estados miembros distintos y las CE no tienen establecido un organismo u otro mecanismo central para conciliar las divergencias entre las diferentes autoridades- no asegura la aplicación uniforme exigida por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Los Estados Unidos impugnan el hecho de que las CE no hayan establecido un sistema que asegure la aplicación uniforme exigida por esa disposición. Este aspecto de la aplicación del derecho aduanero en las CE afecta a la aplicación de todas las normas que forman la normativa aduanera comunitaria. El hecho de que las CE no aseguran una aplicación uniforme se pone de manifiesto en una serie de esferas, incluidas las mencionadas en esta pregunta.

6. En el párrafo 26 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos señalan: "no nos proponemos hacer un catálogo de todos los aspectos de los procedimientos aduaneros en los que difieren las prácticas de los Estados miembros, sino que nos centramos en algunas esferas fundamentales para ilustrar la cuestión en general". Los Estados Unidos se refieren específicamente a las normas aduaneras de las CE relativas a: a) los controles posteriores al despacho a libre práctica; b) las sanciones por infracción de las leyes aduaneras de las CE; c) la transformación bajo control aduanero; y d) los procedimientos de domiciliación. Sírvanse facilitar una lista exhaustiva de todos los procedimientos aduaneros de las CE impugnados al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Los Estados Unidos se remiten a su respuesta a la pregunta 5. Como se indica en ella, lo que impugnan los Estados Unidos es el hecho de que las CE no proporcionan la aplicación uniforme exigida por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Ese hecho no afecta sólo a una norma aduanera o a un grupo de normas aduaneras concretas, sino que constituye una característica general de la aplicación del derecho aduanero en las CE y un aspecto esencial de la aplicación de todas las leyes aduaneras comunitarias. Las normas aduaneras comunitarias a las que se hace referencia en la esta pregunta son ejemplos de las esferas en las que se pone de manifiesto la falta de una aplicación uniforme.

7. Sírvanse aclarar lo que se entiende por "trato" en cada uno de los párrafos a que se hace referencia a continuación:

a) En el párrafo 20 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos afirman que "un Miembro no aplica su legislación de manera uniforme si se da un *trato* diferente a productos o transacciones idénticas en regiones geográficas diferentes y el Miembro no establece ningún mecanismo para la conciliación sistemática de las diferencias".

b) En el párrafo 84 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos afirman que "a pesar de su carácter detallado, el Código y el Reglamento de Aplicación no garantizan una aplicación uniforme, en el sentido de que se dé un *trato* similar a transacciones similares en todo el territorio de las CE".

El término "trato" utilizado en las dos declaraciones citadas significa la aplicación a una mercancía o una transacción determinada de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT. Por ejemplo, cuando una autoridad aduanera aplica una medida de aplicación general -por ejemplo, una regla de

interpretación en materia de clasificación- a una mercancía concreta y de esa forma determina su clasificación y el derecho correspondiente que hay que pagar, otorga a esa mercancía un trato en el sentido de los párrafos 20 y 84 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos. Cuando las autoridades aduaneras de diferentes regiones aplican de manera diferente medidas de aplicación general a mercancías o transacciones sustancialmente idénticas, ese hecho constituye una infracción de la obligación de aplicar las medidas de aplicación general de manera uniforme.

El caso de los forros opacos para cortinas es un buen ejemplo a este respecto. En ese caso, la medida de aplicación general era el Arancel Aduanero Común. La cuestión que se planteaba a las autoridades aduaneras de diferentes Estados miembros era la forma de aplicar el Arancel Aduanero Común a los forros opacos para cortinas para determinar su clasificación. Al aplicar el Arancel, la autoridad aduanera alemana decidió basarse en un instrumento interpretativo (derivado de un reglamento de las CE relativo a determinadas prendas de vestir) que le indujo a centrarse en la densidad del producto. Esa decisión llevó a la autoridad a clasificar el producto en la partida 3921. Ese fue el trato que la autoridad alemana dio al producto. Las autoridades de otro Estado miembro no se basaron en el elemento interpretativo utilizado por la autoridad alemana y, en consecuencia, clasificaron el producto de forma diferente, en la partida 5907. En síntesis, las autoridades de diferentes Estados miembros aplicaron de manera diferente el Arancel Aduanero Común, lo que dio lugar a clasificaciones diferentes y a la exigibilidad de derechos diferentes.

8. Sírvanse formular observaciones sobre la interpretación por las Comunidades Europeas de las "normas mínimas" que, según alegan, requiere la obligación de uniformidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

La dificultad para responder a esta pregunta estriba en que las CE no han identificado en realidad lo que entienden por "normas mínimas". Han calificado al párrafo 3 a) del artículo X de "disposición que establece normas mínimas", pero no han aclarado lo que ello significa.[14] Las Comunidades no han indicado ninguna base para identificar qué se entiende por mínimo, ni han explicado cómo su caracterización del párrafo 3 a) del artículo X se deduce del sentido corriente de sus términos, considerados en su contexto y habida cuenta del objeto y fin del GATT de 1994.

La caracterización del párrafo 3 a) del artículo X como disposición que establece normas mínimas que hacen las CE se basa enteramente en una referencia que se hace de pasada en el informe del Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones*.[15] En esa diferencia no estaba directamente en litigio el párrafo 3 a) del artículo X, sino si una medida que los Estados Unidos alegaban que constituía una excepción general sujeta al artículo XX del GATT de 1994 era compatible con las prescripciones establecidas en el preámbulo de ese artículo, en concreto, con el requisito de que la medida no se aplique en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones. Al resolver esa cuestión, el Órgano de Apelación consideró el párrafo 3 del artículo X como una disposición análoga relativa a las "debidas garantías de procedimiento" y declaró que ese párrafo "establece determinadas normas mínimas de transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales […]".[16] No obstante, el Órgano de Apelación no detalló lo que entendía por "normas mínimas". De hecho, constató a continuación que, fueran las que fueran esas normas, las medidas en litigio en la diferencia *Estados Unidos - Camarones* no se ajustaban a ellas. En resumen, la utilización incidental de la

[14] Declaración oral de las CE, primera reunión del Grupo Especial, párrafo 24.

[15] *Véase* la declaración oral de las CE, primera reunión del Grupo Especial, párrafo 24; Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 231.

[16] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón*, WT/DS58/AB/R, párrafo 183 (adoptado el 6 de noviembre de 1998) ("*Estados Unidos - Camarones*").

expresión "normas mínimas" en el informe del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Camarones* no es útil para aclarar la cuestión de cómo debe interpretarse la obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X.

9. En el párrafo 19 de su declaración oral en la primera reunión sustantiva, los Estados Unidos sostienen que la jurisprudencia de la OMC que sugiere que para demostrar la existencia de una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es necesaria una *estructura* de no uniformidad no es aplicable a los casos en los que se alega una no uniformidad geográfica. Si es ése el caso, sírvanse explicar claramente qué sería necesario para demostrar la existencia de una violación del párrafo 3 a) del artículo X en los casos en los que se alega una no uniformidad geográfica.

La afirmación de las CE de que para demostrar la existencia de una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es necesaria una estructura de no uniformidad se basa en una declaración aislada del informe del Grupo Especial en *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*.[17] En esa diferencia el Japón alegó que la aplicación de la ley antidumping estadounidense en una determinada investigación infringía la obligación de aplicación uniforme, imparcial y razonable. El Grupo Especial constató que el Japón no había siquiera alegado (ni mucho menos demostrado) la existencia de una "estructura" del "proceso de formulación de decisiones" que respaldara su alegación.[18]

En el contexto de esa diferencia -en la que lo que se alegaba era que la aplicación de una ley determinada en un caso concreto infringía las obligaciones establecidas en el párrafo 3 a) del artículo X- tenía sentido hacer hincapié en la estructura. Sería difícil, sino imposible, determinar si los actos de las autoridades investigadoras en ese asunto eran uniformes, imparciales y razonables sin saber cómo habían procedido en otros casos similares. La evaluación de la existencia o inexistencia de uniformidad, en particular, exigía la comparación entre el caso de que se trataba y otros similares.

Cuando, como ocurre en la presente diferencia, la cuestión estriba en una falta de uniformidad geográfica, el contexto es muy distinto al de la diferencia *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*. La cuestión no es si una autoridad administrativa determinada aplica una ley concreta de manera uniforme, cuestión que sólo puede resolverse analizando una serie de casos de aplicación de la ley por esa autoridad, sino si diferentes autoridades del territorio de un Miembro de la OMC (en el presente caso, 25 autoridades diferentes) aplican de manera uniforme diversas leyes.

La forma en que puede demostrarse la falta de uniformidad de la aplicación cuando la naturaleza de la falta de uniformidad alegada es una falta de uniformidad geográfica depende de las circunstancias de la alegación. En la presente diferencia, lo que se alega es que las CE no concilian las divergencias entre las autoridades de los Estados miembros cuando éstas se producen y, en consecuencia, no aplican de manera uniforme su derecho aduanero, como exige el párrafo 3 a) del artículo X. Para demostrar esa alegación, es necesario aportar pruebas con respecto a los mecanismos en vigor en las CE y demostrar que esos mecanismos no cumplen la función de conciliar las divergencias de aplicación entre los organismos de 25 Estados miembros diferentes. Los Estados Unidos sostienen que eso es lo que han hecho en su Primera comunicación escrita y que, por las razones expuestas en su declaración inicial y en sus intervenciones en la primera reunión del Grupo Especial, las CE no han refutado esas pruebas.

[17] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 240.

[18] Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, WT/DS/184/R, párrafo 7.268 (adoptado el 23 de agosto de 2001).

Además, la exigencia de pruebas de una estructura de falta de uniformidad en la presente diferencia conduciría a resultados perversos. Haría imposible impugnar la falta de uniformidad en general y obligaría al Miembro reclamante a centrarse, uno por uno, en los diversos casos de aplicación no uniforme. En consecuencia, aún en el supuesto de que las CE no tuvieran establecidos los diversos mecanismos que alegan (erróneamente) que dan lugar a la uniformidad de la aplicación de la normativa aduanera, otro Miembro de la OMC no podría formular una alegación sistémica, sino que habría de recurrir a impugnar los casos concretos de aplicación no uniforme.

No es lógico que las CE pretendan que cuando la aplicación no uniforme se hace patente de forma clara -probablemente en forma de diferencias constantes entre Estados miembros que no son conciliadas-, es posible impugnar los casos concretos de falta de uniformidad al amparo del párrafo 3 a) del artículo X, pero cuando el sistema en su conjunto no asegura una aplicación uniforme, no existe base para la impugnación. Dicho de otra forma, con arreglo al razonamiento de las CE, para que la aplicación no uniforme sea susceptible de impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X debe haber una uniformidad -es decir, una estructura- de falta de uniformidad en la aplicación. Pero, con arreglo a ese mismo razonamiento, cuando la aplicación no uniforme se pone de manifiesto de formas diversas e imprevisibles en diversas esferas del derecho aduanero, debido a la forma en que funciona el sistema en general, esa aplicación no uniforme no sería susceptible de impugnación. Ese resultado es incompatible con el objeto fundamental de conseguir la equidad con respecto a los comerciantes del artículo X[19] y debe ser rechazado.

10. En el párrafo 9 de su declaración oral en la primera reunión sustantiva, los Estados Unidos manifiestan lo siguiente: "nuestra reclamación consiste en que la conservación de la competencia de las autoridades de los Estados miembros en materia de administración aduanera, al no ir acompañada de una conciliación sistemática de las divergencias entre ellas, es incompatible con la obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X". Además, en el párrafo 12 de su declaración oral en la primera reunión sustantiva, los Estados Unidos sostienen que el "sistema" de aplicación de la legislación aduanera en las Comunidades Europeas no garantiza la uniformidad que exige el párrafo 3 a) del artículo X. A la luz de la estructura constitucional y de la configuración institucional de las Comunidades Europeas en lo que respecta a la administración de las cuestiones aduaneras, sírvanse identificar concretamente los aspectos/elementos/medidas/mecanismos que los Estados Unidos esperarían que las Comunidades Europeas introdujeran para conseguir una "conciliación sistemática de las divergencias [entre las autoridades de los Estados miembros]" con el fin de garantizar la aplicación uniforme de sus leyes aduaneras en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

En primer lugar, los Estados Unidos señalan que para resolver la presente diferencia no es necesario prescribir el método que las CE han de seguir para cumplir la obligación establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. La cuestión es si las CE cumplen su obligación, no lo que deben hacer para cumplirla.

Una vez dicho esto, al responder a esta pregunta conviene tener en cuenta diversos enfoques posibles de la administración aduanera, dentro de un espectro. En un extremo del espectro se encuentra la situación actual, que no asegura la uniformidad de la aplicación exigida por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, y en el otro un enfoque de la administración aduanera basado en un organismo aduanero único de las CE facultado para garantizar la uniformidad de la aplicación en todo el territorio comunitario. A juicio de los Estados Unidos, el establecimiento de un organismo de esa naturaleza constituye una opción clara para conseguir la conciliación sistemática de las

[19] Véase el informe del Grupo Especial, *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, WT/DS155/R, párrafos 11.76 y 11.77 (adoptado el 16 de febrero de 2001).

divergencias entre las autoridades de los Estados miembros con el fin de garantizar la aplicación uniforme de las leyes aduaneras comunitarias en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X. Entendemos que éste es el principal medio para lograr la aplicación uniforme del derecho aduanero en el territorio de casi todos los demás Miembro de la OMC, y no tenemos conocimiento de que haya un obstáculo constitucional que impida a las CE adoptar ese enfoque. Al mismo tiempo, no descartamos la posibilidad de que en algún punto medio del espectro entre la situación actual y el establecimiento de un organismo aduanero único de las CE haya otras opciones que permitan a las CE cumplir su obligación de aplicación uniforme en virtud del párrafo 3 a) del artículo X.

11. En el contexto del actual sistema comunitario de administración de aduanas, integrado, entre otros elementos, por el Comité del Código Aduanero y el sistema europeo de información arancelaria vinculante (EBTI), ¿qué nuevas ventajas representaría el establecimiento de una autoridad única centralizada de las CE, como proponen los Estados Unidos en el documento titulado "Elements of Potential EC Customs Reform" de 22 de diciembre de 2004?

En primer lugar, hay que señalar que la autoridad centralizada de las CE que se propone en el documento de 22 de diciembre de 2004 (que se adjunta como Estados Unidos - Prueba documental 49) era uno de los elementos de un paquete global que los Estados Unidos propusieron a las CE con el fin de llegar a una solución de la presente diferencia aceptable para ambas partes. Teniendo presente ese objetivo, los Estados Unidos no insistieron en el enfoque más obvio e integral para hacer frente al problema de la falta de una aplicación uniforme del derecho aduanero en las CE, que, como se expone en la respuesta a la pregunta 10, habría supuesto el establecimiento de una autoridad centralizada encargada de todos los aspectos de la aplicación del derecho aduanero.

Los Estados Unidos se centraron en la posibilidad de una autoridad centralizada que emitiera decisiones vinculantes previas (con respecto a la clasificación, la valoración y el origen), porque un sistema eficaz de decisiones vinculantes previas constituiría un avance sustancial hacia el logro de una aplicación uniforme en general. El hecho de contar con una única entidad centralizada que emitiera decisiones previas eliminaría el riesgo de aplicación divergente que existe cuando 25 autoridades diferentes cumplen esa función y ninguna autoridad central detecta sistemáticamente las divergencias e interviene para subsanarlas.

Con respecto a la valoración, la entidad propuesta establecería a nivel de toda la Comunidad algún tipo de directrices vinculantes con las que no se cuenta actualmente. Como hemos indicado en nuestra Primera comunicación escrita, sólo algunos Estados miembros emiten actualmente lo que equivale a directrices vinculantes en materia de valoración (una divergencia con respecto a las normas comunitarias sobre valoración).[20] En realidad, la idea de establecer directrices vinculantes sobre valoración para toda la Comunidad fue una de las mejoras que el Tribunal de Cuentas recomendó en su informe sobre la aplicación de las normas de valoración en las CE.[21]

En lo que respecta a la clasificación, ni el Comité del Código Aduanero ni la base de datos EBTI aportan uniformidad a la aplicación del sistema de IAV. Como se ha expuesto en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, los obstáculos institucionales, incluido el hecho de que el sometimiento de los asuntos al Comité depende exclusivamente de la potestad discrecional de la

[20] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 98 y 99.

[21] Tribunal de Cuentas, Informe especial Nº 23/2000 sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (valoración en aduana) acompañado de la respuesta de la Comisión, reproducido en *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C84, párrafo 52 (14 de marzo de 2001) ("Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración") (Estados Unidos - Prueba documental 14) ("La ausencia de unas decisiones comunitarias sobre valor en aduana vinculantes es uno de los problemas que se plantean cuando una unión aduanera no cuenta con una única administración aduanera"); *id*., párrafo 86 (en el que se recomiendan medidas legislativas que permitan establecer decisiones sobre valor en aduana a escala comunitaria).

Comisión o de los representantes de los Estados miembros, convierten al Comité en un mecanismo ineficaz para lograr sistemáticamente la uniformidad en el sistema de IAV. La base de datos EBTI tampoco es un instrumento eficaz para lograr ese objetivo. A no ser que la mercancía se describa a la autoridad que consulta la base de datos de la misma forma exactamente que ha sido descrita a las autoridades que han emitido anteriormente la IAV que puede ser pertinente, la búsqueda de la base de datos será de escasa utilidad. Aún en el caso de que las designaciones sean idénticas o similares, la base de datos no revela detalladamente las razones aplicadas por las diferentes autoridades para clasificar una determinada mercancía de una forma determinada. La base puede incluir una cita de la norma general interpretativa en que se han basado las autoridades, pero no hay una explicación narrativa de la clasificación. En consecuencia, la autoridad que trata de adoptar una decisión acerca de la forma de clasificar una mercancía a raíz de una solicitud de IAV no puede tener una idea demasiado clara de las razones de las autoridades de otros Estados miembros mediante la simple consulta de la base de datos.[22]

En resumen, la utilidad que tendría el establecimiento de una autoridad centralizada del tipo de la descrita en el documento de 22 de diciembre de 2004 sería la eliminación, en una medida considerable de la falta de uniformidad en la aplicación mediante decisiones comunitarias definitivas y vinculantes sobre cuestiones de valoración, clasificación y origen.

12. Los Estados Unidos hacen referencia a lo largo de su Primera comunicación escrita a *decisiones* divergentes adoptadas por las autoridades de los Estados miembros. Por ejemplo, aluden a la divergencia en las *decisiones en materia de clasificación*: en general (párrafo 21); con respecto a las tarjetas de adaptación a la red para ordenadores personales (nota 33); con respecto a los productos para riego por goteo (nota 33) y con respecto a los artículos o camisas unisex (párrafo 76). Además, los Estados Unidos hacen referencia a la divergencia en *decisiones en materia de valoración en aduana* (párrafos 25 y 93). Teniendo presentes esas referencias, ¿consideran los Estados Unidos que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige que las decisiones sustantivas sean uniformes? En tal caso, ¿consideran los Estados Unidos que las decisiones relativas a cuestiones aduaneras son equiparables a la "aplicación" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X? De ser así, sírvanse especificar de qué tipo(s) de decisiones se trata.

El párrafo 3 a) del artículo X exige que la aplicación de las medidas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X sea uniforme. Los instrumentos de aplicación pueden adoptar diversas formas. Las "decisiones" son instrumentos de aplicación. En consecuencia, cuando la autoridad aduanera de un Estado miembro de las CE decide clasificar una mercancía de una forma determinada aplica el Arancel Aduanero Común. Cuando la autoridad aduanera de un Estado miembro decide que el comprador y el vendedor de las mercancías son partes vinculadas aplica las normas de valoración del CAC. Cualquier decisión de una autoridad de un Estado miembro que aplica una medida de aplicación general a una mercancía o transacción determinada constituye un acto de "aplicación" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X. Cuando las decisiones sustantivas difieren de un Estado miembro a otro, esa diferencia constituye una prueba de la falta de una aplicación uniforme de las leyes de que se trata en las decisiones.

[22] Las CE sugieren que la base de datos EBTI es más accesible de lo que pretenden los Estados Unidos, habida cuenta del número de consultas y del hecho de que los Estados Unidos han podido encontrar IAV relativas a los forros opacos para cortinas. Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 319 y 323. Pero el número de consultas de la base de datos es escasamente revelador, por cuanto puede responder a distintas causas, desde la curiosidad científica a la recopilación de datos estadísticos. El hecho de que los Estados Unidos hayan podido identificar IAV relativa a los forros opacos para cortinas se debe a que el exportador en cuestión sabía positivamente que las autoridades de determinados Estados miembros habían emitido IAV para el producto en litigio en determinadas ocasiones. Dicho de otra forma, esa IAV no se consiguió mediante el tipo de búsqueda aleatoria que habitualmente realiza un comerciante o una autoridad.

13. Sírvanse facilitar datos de ejemplos concretos que prueben la afirmación que se hace en el párrafo 47 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos de que, en realidad, los Estados miembros no siempre tratan como vinculante la información arancelaria vinculante emitida por otros Estados miembros.

Remitimos al Grupo Especial a la Prueba documental 30 presentada por los Estados Unidos, que es un cuestionario de marzo de 2005 sobre el tema de la "facilitación del comercio" preparada por un grupo radicado en las CE, la Asociación de Comercio Exterior. Como se indica en la introducción, el cuestionario se envió a 70 de las empresas miembros de la Asociación, y se recibieron 20 respuestas, en las que se reflejaba la experiencia en cinco Estados miembros diferentes. En respuesta a la pregunta 1.4, relativa a la clasificación, una empresa comunicó de que la "información arancelaria vinculante de Alemania sigue sin ser aceptada por otros países de la Unión Europea, especialmente Grecia y Portugal".[23]

Remitimos también al Grupo Especial al informe del Grupo Especial en la diferencia *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo deshuesados congelados* (*Reclamaciones del Brasil y de Tailandia*). En ella se planteaba la cuestión de si un determinado producto debía clasificarse en la partida arancelaria 0210 o en la 0207. Las partes reclamantes se basaron en la emisión por varios Estados miembros de las CE de IAV en la que se clasificaba sistemáticamente el producto en la partida 0210. En respuesta a ello, las CE manifestaron que "otras oficinas de aduanas comunitarias no siguieron esta interpretación".[24]

Por último, remitimos al Grupo Especial a la Prueba documental 23 presentada por los Estados Unidos, que recoge la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen (Alemania) en el caso de los forros opacos para cortinas. En la página 4 de esa decisión, la autoridad aduanera alemana reconoce que se han emitido numerosas decisiones arancelarias vinculantes en relación con mercancías comparables, pero, sin ninguna otra explicación, se abstiene de seguir esas decisiones y no establece ninguna distinción entre ese producto y los productos en litigio en esas otras decisiones.

14. En el párrafo 16 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos manifiestan que "no se puede hablar de una autoridad aduanera, ni hay una institución comunitaria que concilie sistemáticamente las divergencias que pueden surgir entre los Estados miembros en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria".[1] ¿Dan con ello a entender los Estados Unidos que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 *obliga* a los Miembros de la OMC a establecer una autoridad aduanera central para conciliar las divergencias que puedan surgir entre las autoridades aduaneras en ese Miembro? De ser así, sírvanse justificarlo, haciendo referencia al texto concreto y al sentido de los términos pertinentes del párrafo 3 a) del artículo X.

[1] *Véase también la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 19, donde los Estados Unidos manifiestan que "la legislación aduanera de las CE es aplicada por 25 autoridades distintas, entre las cuales es inevitable que haya divergencias, y las CE no prevén la conciliación sistemática de esas divergencias".*

[23] Asociación de Comercio Exterior, cuestionario sobre el tema "facilitación del comercio": facilitación del comercio en los Estados de la OMC, respuesta a la pregunta 1.4 (marzo de 2005) ("FTA Questionnaire") (Estados Unidos - Prueba documental 30).

[24] Informe del Grupo Especial, *Comunidades Europeas - Clasificación aduanera de los trozos de pollo* (Reclamación del Brasil), WT/DS269/R, WT/DS286/R, párrafo 7.260 (distribuido el 30 de mayo de 2005) ("*CE - Trozos de pollo*").

Los Estados Unidos no pretenden que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 obligue a los Miembro de la OMC a establecer una autoridad aduanera central para conciliar las divergencias que puedan producirse entre las autoridades aduaneras de ese Miembro. Como se expone en la respuesta a la pregunta 10 *supra*, el establecimiento de una autoridad de esa naturaleza parece ser una forma obvia de que un Miembro de la OMC cumpla su obligación de aplicación uniforme en virtud del párrafo 3 a) del artículo X. No tenemos conocimiento de que haya ningún Miembro de la OMC, con la excepción de las CE, que no cuente con una autoridad de ese tipo. Al mismo tiempo, no descartamos la posibilidad de que haya otras formas de lograr una aplicación uniforme.

15. En el párrafo 76 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos manifiestan que los ejemplos de los forros opacos para cortinas y de los monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital no son ejemplos aislados y que los comerciantes de otros productos han tropezado también con dificultades prácticas derivadas del problema sistémico de la aplicación no uniforme de la legislación en materia de clasificación aduanera de las Comunidades Europeas. Sírvanse indicar cuáles son los otros productos a que se hace referencia en esta declaración y aportar, respecto de cada uno de ellos, pruebas de la existencia de una aplicación no uniforme.

Remitimos al Grupo Especial a la Prueba documental 30 presentada por los Estados Unidos, el cuestionario de marzo de 2005 de la Asociación de Comercio Exterior sobre facilitación del comercio. En él, una empresa declarante señaló que los artículos o "shorts" unisex eran clasificados en Italia y España de forma diferente que en Alemania. Esos artículos tenían que importarse a través de Alemania, lo que generaba costos adicionales.[25]

Remitimos asimismo al Grupo Especial a la Prueba documental 17 presentada por los Estados Unidos, en la que se recoge el dictamen del Abogado General en el asunto *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn* del Tribunal de Justicia. En los párrafos 7 y 8 de ese dictamen, el Abogado General expone los hechos del caso, que incluyen la emisión para las tarjetas de red por las autoridades aduaneras de Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido de IAV, a la que no se atuvieron las autoridades aduaneras de Alemania.

Remitimos asimismo al Grupo Especial, al igual que en nuestra respuesta a la pregunta 13 *supra*, al reconocimiento hecho por las CE en el contexto de la diferencia *CE - Trozos de pollo*. En ella, las CE manifestaron que las autoridades aduaneras de algunos Estados miembros clasificaban el producto en litigio de forma diferente que las autoridades aduaneras de otros Estados miembros, a pesar de la IAV emitida por los últimos.

Por último, remitimos al Grupo Especial a la nota 33 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos. En ella, nos referimos a un caso en el que las autoridades aduaneras de Francia y de España se pronunciaron de forma diferente acerca de si un producto para riego por goteo debía clasificarse como un sistema de riego o como tubería para riego. De hecho, Francia había emitido en 1999 IAV con respecto a ese producto, en la que se le clasificaba como un sistema de riego comprendido en la partida arancelaria 8424 (al que correspondía un derecho *ad valorem* del 1,7 por ciento). En diciembre de 2000, cuando un importador de ese mismo producto intentó importarlo a través de España, las autoridades aduaneras españolas prescindieron de la IAV francesa y clasificaron el producto como tubería, dentro de la partida 3717 (con un derecho *ad valorem* del 6,4 por ciento). Las CE manifiestan que la cuestión se resolvió en último término mediante la adopción por la Comisión de un reglamento de clasificación.[26] Pero ello no afecta al hecho de que durante año y

[25] FTA Questionnaire, página 4 (Estados Unidos - Prueba documental 30).

[26] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 364 Nº 177.

medio, un comerciante debería haber podido basarse en el territorio de las CE en IAV emitida por la autoridad aduanera de un determinado Estado miembro no pudo hacerlo.

16. En lo que respecta a la clasificación arancelaria, los Estados Unidos hacen referencia a la aplicación no uniforme con respecto a los forros opacos para cortinas, los monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital, las tarjetas de adaptación a la red para ordenadores personales, los productos para riego por goteo y los artículos o "shorts" unisex, ejemplos que según los Estados Unidos ilustran la aplicación no uniforme de las normas aduaneras de las CE.

a) Sírvanse facilitar todos los datos estadísticos y/u otra información disponible para demostrar la incidencia de la aplicación no uniforme en el contexto de la aplicación general del régimen aduanero de las CE en lo que respecta a la clasificación arancelaria.

b) ¿En qué grado son i) representativos, ii) significativos y iii) tienen una repercusión en la aplicación de las normas de las CE sobre clasificación arancelaria en su conjunto los casos de los forros opacos para cortinas, las monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital, las tarjetas de red para ordenadores, los productos para riego por goteo y los artículos o "shorts" unisex?

La alegación de los Estados Unidos no concierne a la frecuencia estadística de la aplicación no uniforme con respecto a la clasificación arancelaria. Hemos citado casos concretos de aplicación no uniforme con respecto a la clasificación arancelaria exclusivamente a título de ejemplo, para demostrar al Grupo Especial las repercusiones reales de lo que, de no ser por esas repercusiones, parecería constituir un problema abstracto y técnico.

A los efectos de la alegación de los Estados Unidos, lo pertinente es *el hecho* de que se producen divergencias y éstas no son conciliadas, y *no la frecuencia* de determinados tipos de divergencias. Las propias CE reconocen que se producen divergencias[27], pero aducen que hay en vigor mecanismos destinados a conciliarlas sistemáticamente. Los Estados Unidos no están de acuerdo con esa afirmación. El sistema de aplicación de la normativa aduanera de las CE está integrado por las autoridades aduaneras de 25 Estados miembros independientes y no hay ninguna autoridad o mecanismo central comunitario que supervise su funcionamiento y concilie las divergencias en la aplicación. En lugar de ello, hay una red flexible de principios, instrumentos e instituciones, incluidas orientaciones no vinculantes y obligaciones generales de colaboración entre los Estados miembros unidas a una facultad discrecional de someter las cuestiones al Comité del Código Aduanero. Esa red flexible de principios, instrumentos e instituciones no proporciona la aplicación uniforme de la normativa aduanera de las CE que exige el párrafo 3 a) del artículo X.

En todo caso, es probable que la información que se solicita en esta pregunta no esté a disposición de los Estados Unidos, sino de las CE. Aunque no consideran que la información en cuestión sea necesaria para que el Grupo Especial constate que las CE incumplen su obligación de aplicación uniforme, los Estados Unidos solicitan que el Grupo Especial ejerza las facultades que les confiere el artículo 13 del ESD para recabar la información pertinente de las CE. Por ejemplo, el Grupo Especial podría solicitar a las CE una muestra estadísticamente significativa de IAV y otras decisiones en materia de clasificación de diversos Estados miembros (con inclusión de la explicación de los fundamentos de esas decisiones) para determinar la frecuencia con que se producen divergencias en la aplicación. Además, los Estados Unidos señalan a la atención del Grupo Especial la Prueba documental 33 presentada por los Estados Unidos, en la que se recoge el proyecto de Código Aduanero Modernizado de las CE. En la página 4 de ese documento, las CE afirman, como

[27] *Véase, por ejemplo*, la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 144, 238, 396, 401 y 426.

introducción, que "un estudio externo de 2003 ha permitido a la Comisión entender mejor la situación actual en los Estados miembros y los posibles costos y beneficios".[28] Los Estados Unidos solicitaron una copia de ese estudio durante las consultas, pero las CE se negaron a facilitársela. Los Estados Unidos proponen también que el Grupo Especial solicite una copia de ese estudio o infiera la conclusión correspondiente en caso de que las CE se nieguen a facilitarla.

Los Estados Unidos recuerdan que al evaluar la incidencia de la aplicación no uniforme con respecto a las normas de valoración, el Tribunal de Cuentas de las CE tuvo acceso a "documentos tratados en el Comité del Valor en Aduana, expedientes de auditoría elaborados por las autoridades aduaneras en materia de valoración en aduana, decisiones escritas relativas a la valoración, decisiones de tribunales de apelación y declaraciones de aduana propiamente dichas" correspondientes a más de 200 empresas y grupos de empresas.[29] Los Estados Unidos no han podido beneficiarse de ese acceso en relación con ninguna de las cuestiones en litigio en la presente diferencia. En consecuencia, es difícil responder directamente a la pregunta del Grupo Especial. Si el Grupo Especial ejerciera las facultades que le confiere el artículo 13 del ESD, podría recabar información del tipo de la que tuvo a su disposición el Tribunal de Cuentas al preparar su informe sobre la valoración. No obstante, por las razones antes analizadas, el Grupo Especial no necesita la información solicitada en esta pregunta para llegar a la conclusión de que las CE incumplen su obligación de aplicar de manera uniforme las leyes aduaneras.

17. Sírvanse formular observaciones sobre los siguientes argumentos expuestos por las Comunidades Europeas:

a) En los párrafos 331 y siguientes de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas aducen que en el caso de los forros opacos para cortinas no se pone de manifiesto una falta de uniformidad en la práctica de clasificación de las Comunidades Europeas.

b) En los párrafos 347 y siguientes de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas aducen que las Comunidades Europeas han adoptado medidas para garantizar una práctica de clasificación uniforme con respecto a las monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital.

La afirmación de las CE de que en el caso de los forros opacos para cortinas no se pone de manifiesto una falta de uniformidad en la práctica de clasificación de las CE es inexacta por varias razones. En primer lugar, las CE distorsionan los hechos cuando afirman que el producto considerado por las autoridades alemanas no había sido flocado y en consecuencia era distinto del producto del que se trataba en las diversas IAV recogidas en Estados Unidos - Prueba documental 22. De hecho, la determinación de la Oficina de Aduanas de Hamburgo en la que se basó la Oficina de Aduanas de Bremen constataba que el producto "contenía tundiznos con fibras independientes".[30] A efectos de clasificación, la relativa densidad de los tundiznos no era un rasgo distintivo importante del producto considerado por las autoridades alemanas frente al considerado por las autoridades de otros Estados miembros. De hecho, las autoridades de otros Estados miembros han clasificado los forros opacos

[28] Comisión Europea, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, TAXUD/458/2004 - Rev 4, *Draft Modernized Customs Code*, página 4 (11 de noviembre de 2004) (Estados Unidos - Prueba documental 33).

[29] Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafo 10 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[30] Carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo -Waltershof a ORNATA GmbH, 29 de julio de 1998 (original y traducción al inglés), página 1 (Estados Unidos - Prueba documental 50).

para cortinas en la partida 5907 cuando se consideró que se había procedido a una aplicación con baja densidad de los tundiznos.[31]

En segundo lugar, las CE prescinden simplemente de la declaración de la autoridad aduanera alemana de que "sólo podía considerarse la asignación de las mercancías a la partida 5907 si, de conformidad con el epígrafe de esa partida, 'los demás', las mercancías no estuvieran plastificadas como en la partida 3921".[32] Esa declaración era sencillamente errónea, como hace patente la nota explicativa del sistema armonizado que acompaña a la partida 5907. Según esa nota, "Entre los tejidos comprendidos [en la partida 5907] conviene mencionar principalmente: […] los tejidos que, después de recubrirlos en toda la superficie con un adhesivo (a base de caucho o de otro tipo), *materias plásticas*, caucho u otras materias, se espolvorean con una delgada película de partículas de materias diversas, tales como […] tundiznos: esos tejidos imitan principalmente a las gamuzas y se asemejan a las llamadas *pieles de Suecia* denominándose a veces *tejidos agamuzados* […]".[33]

En tercer lugar, las CE afirman que estaba justificado que las autoridades aduaneras alemanas se basaran para su decisión en materia de clasificación en un instrumento interpretativo que era específico de Alemania y no era generalmente utilizado por las autoridades aduaneras de los Estados miembros al aplicar el Arancel Aduanero Común a las recubiertas, como los forros opacos para cortinas. Ese instrumento interpretativo indujo a las autoridades aduaneras a atender a la densidad de las fibras del producto.[34] Las CE manifiestan que "sólo la Oficina de Aduanas de Hamburgo, y no la Oficina Principal de Aduanas de Bremen que resolvió el recurso, hace referencia al texto en cuestión".[35] No obstante, la Oficina de Bremen se limitó a basarse en las constataciones de la oficina de Hamburgo y además manifestó expresamente "que la trama no es fina", lo que parece ser una alusión a la constatación de la Oficina de Hamburgo basada en el instrumento interpretativo en cuestión.[36]

Más fundamental es el hecho de que las CE manifiestan que el criterio de la falta de finura de la trama se estableció por analogía con otro reglamento de clasificación de las CE y es un factor pertinente para determinar si el tejido textil sirve simplemente para reforzar el producto.[37] El reglamento de clasificación al que hacen referencia las CE (CE - Prueba documental 78) es un reglamento relativo a la clasificación de los pantalones de esquí, que pueden clasificarse dentro del capítulo 62 del Arancel. Las reglas interpretativas a que se hace referencia en ese reglamento son pertinentes a la clasificación de una prenda de vestir, pero carecen de sentido si se aplican a un producto como los forros opacos para cortina. Por ejemplo, en ellas se tiene en cuenta si los tejidos forman el interior o el exterior del producto, criterio que es pertinente a una prenda de vestir, pero no a un producto que, como los forros, no tiene interior y exterior.

---

[31] BTI UK103424227 (Estados Unidos - Prueba documental 51).

[32] Hauptzollamt Bremen, carta en la que se comunica la decisión a Bautex-Stoffe GmbH, 22 de septiembre de 2004 (original y traducción al inglés) ("Decisión Bautex-Stoffe"), página 4 (Estados Unidos - Prueba documental 23).

[33] Nota explicativa del Sistema Armonizado, partida 59.07 (Estados Unidos - Prueba documental 48).

[34] *Véase en general* la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 72.

[35] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 342.

[36] Decisión Bautex-Stoffe, página 4 (Estados Unidos - Prueba documental 23).

[37] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 343.

El aspecto particular de la regla relativa a los pantalones de esquí en que se basó la autoridad alemana en este caso fue la tensión del tejido. No obstante, la nota 2 a) al capítulo 59 del Arancel Aduanero Común aclara expresamente que ese criterio no es pertinente a la clasificación de tejidos recubiertos. En esa nota se dice que la partida 5903 comprende "los tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados, con plástico, *cualquiera que sea el peso por metro cuadrado* y la naturaleza del plástico […]".

En resumen, en contra de lo que afirman las CE, el caso de los forros opacos para cortinas pone de manifiesto una falta de uniformidad en la práctica de clasificación dentro de las CE en la medida en que 1) las autoridades de otro Estado miembro han clasificado el producto de que se trata en la partida 5907, a pesar de la baja densidad de aplicación de los tundiznos; 2) la decisión de excluir el producto de la partida 5907 debido a la existencia de un revestimiento plástico estaba en contradicción directa con la nota explicativa aplicable del Sistema Armonizado; y 3) la autoridad aduanera alemana se basó en último término en un instrumento interpretativo que no utiliza la autoridad de ningún otro Estado miembro para clasificar el producto en litigio, y las CE sostienen que esa utilización de un instrumento interpretativo específico de un Estado miembro basándose en la analogía con reglas relativas a un producto enteramente diferente es justificable con arreglo a la normativa comunitaria, a pesar de que los términos del instrumento interpretativo aplicados están en contradicción directa con las notas de capítulo aplicables del Arancel.

En lo que respecta a las monitores planos de cristal líquido con interfaz videodigital ("DVI") es importante señalar que las CE no alegan que garanticen una "práctica *de clasificación* uniforme" sino que manifiestan que han adoptado medidas "para garantizar una práctica uniforme".[38] La diferencia es importante y pone de relieve que las CE no han conciliado las divergencias en la aplicación por los Estados miembros del Arancel Aduanero Común a los monitores LCD con interfaz videodigital.

Lo que han hecho las CE es adoptar un reglamento que suspende temporalmente los derechos sobre determinados monitores LCD con DVI, con independencia de la clasificación de esos productos. La suspensión temporal de derechos sólo se aplica a los monitores de dimensiones inferiores a un umbral determinado. Los monitores que superan ese umbral siguen sujetos a una clasificación que difiere según el Estado miembro de que se trate, extremo éste que las CE no niegan. Las CE hacen referencia a un reglamento distinto (recogido en CE - Prueba documental 85) en el que se clasifican los monitores de determinado tipo en la partida 8528.[39] No obstante, los monitores en cuestión no superan el umbral especificado en el reglamento de suspensión de derechos. Dicho de otra forma, el reglamento de clasificación no concilia en absoluto la clasificación no uniforme de los monitores que superan el umbral fijado en el reglamento de suspensión de derechos.

Es curioso observar que en el Reglamento que figura en CE - Prueba documental 85 se dice que "se excluye su clasificación en la subpartida 8471 60 ya que no es del tipo utilizado exclusiva o principalmente en un sistema automático para el tratamiento o procesamiento de datos […]". Así pues, en este caso la Comisión aplicó el criterio de la utilización exclusiva o principal, conforme a lo indicado en la nota 5 al capítulo 84 del Arancel Aduanero Común. En cambio, en la conclusión del Comité del Código Aduanero al que se refieren las CE en el párrafo 353 de su Primera comunicación escrita se exige que el importador demuestre que un monitor se destina *sólo* a su utilización con una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos para que ese monitor pueda ser clasificado en la partida 8471.

[38] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 356.

[39] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 361.

Como hemos expuesto en nuestra declaración oral en la primera reunión del Grupo Especial, de hecho, la conclusión del Comité del Código Aduanero, que abandona el criterio de la utilización exclusiva o principal establecido en el Arancel Aduanero Común para seguir el criterio de la utilización exclusiva lejos de promover la uniformidad la reduce.[40] Las autoridades de los Estados miembros se enfrentan ahora a la existencia de dos criterios divergentes para clasificar los monitores LCD con DVI para máquinas automáticas de tratamiento o procesamiento de datos, el criterio de la utilización exclusiva o principal de las notas de capítulo del Arancel y el criterio de la utilización exclusiva de la conclusión del Comité del Código Aduanero. En realidad, al afirmar que la clasificación por los Países Bajos de los productos en cuestión como videomonitores "está en conformidad con la NC, como confirmó el Comité del Código Aduanero" las CE sugieren que diversas clasificaciones de las mismas mercancías pueden estar en conformidad con la NC.

Por las razones expuestas, las medidas que las CE han adoptado no proporcionan una práctica de clasificación uniforme, ya que se utilizan criterios no uniformes con respecto a los monitores LCD con DVI para máquinas automáticas de tratamiento o procesamiento de datos.

18. Sírvanse responder a la afirmación que hacen las Comunidades Europeas en el párrafo 345 de su Primera comunicación escrita de que "los Estados Unidos han tenido también dificultades en relación con la clasificación [de los forros opacos para cortinas]. De hecho, la oficina de aduanas de Nueva York clasificó inicialmente esos productos en la partida 5903.90.25.00 del Arancel Armonizado de los Estados Unidos. Esa decisión fue confirmada inicialmente por la Oficina Central de Aduanas de los Estados Unidos. En 2004, esas decisiones fueron revocadas por la Oficina Central de Aduanas, que decidió que la clasificación había sido errónea y clasificó la mercancía en la partida 5907.00.6000 del Arancel Armonizado de los Estados Unidos".

Los Estados Unidos señalan en primer lugar que los actos de los organismos administrativos estadounidenses no son objeto de la presente diferencia. No obstante, con el fin de aclarar las cuestiones en litigio en ella, los Estados Unidos responden lo siguiente:

De conformidad con el Reglamento Aduanero (19 CFR 177.1), se solicitó una resolución acerca de la clasificación de los forros opacos para cortinas. En respuesta a la solicitud se emitió la New York Ruling Letter (NY) H81427, de 15 de agosto de 2001. En NY H81427, el producto en cuestión se clasificó en la partida 5903 del Arancel Armonizado. En ella se excluían los forros opacos para cortinas de la clasificación en la partida 5907 porque a raíz de los análisis de laboratorio se consideró que la película de tundiznos no era perceptible a simple vista. La nota de capítulo 5 a) al capítulo 59 excluye de la clasificación en la partida 5907 a los tejidos cuyo recubrimiento o revestimiento no sean perceptibles a simple vista.

De conformidad con el Reglamento Aduanero (19 CFR 177.12), se presentó una solicitud de reexamen de la NY H81427. La Headquarters Ruling Letter (HQ) 965343 de 30 de julio de 2002 confirmó la resolución inicial. La resolución señalaba que según los análisis de laboratorio el flocado textil no era perceptible a simple vista y determinaba que el producto en cuestión había de clasificarse en la partida 5903 del Arancel Armonizado.

A raíz de una solicitud posterior de reexamen de la HQ 965343 se realizó un análisis de laboratorio adicional. La decisión se basó en el segundo informe de laboratorio que señaló la presencia de un revestimiento perceptible a simple vista. El análisis demostró también que el tejido textil había sido recubierto de una película de plástico a la que se había aplicado una película de flocado textil.

[40] Declaración oral de los Estados Unidos, primera reunión del Grupo Especial, párrafo 28.

Teniendo en cuenta estos nuevos datos se publicó en el *Customs Bulletin*, volumen 38, Nº 6, de 4 de febrero de 2004, de conformidad con la ley estadounidense (19 USC 1625(c)) un aviso en el que se proponía la revocación de la resolución anterior. Se concedió a las partes interesadas un plazo de 30 días para formular observaciones sobre la revocación propuesta y/o identificar una resolución aceptada que no se identificaba en el aviso. No se recibió ninguna observación en respuesta al aviso.

En la HQ 966508 de 17 de marzo de 2004, se revocaron, de conformidad con el Reglamento Aduanero (19 CFR 177.12) la HQ 965343 y la NY H81427. Sesenta días hábiles después de que se publicara el aviso final, la revocación surtió efectos. Los forros opacos para cortinas fueron reclasificados en la partida 5907 del Arancel Armonizado.

En ningún momento del proceso precedente hubo en vigor en los Estados Unidos resoluciones divergentes sobre los forros opacos para cortinas. La Aduana de los Estados Unidos siguió un proceso transparente, que incluyó un aviso público, en el que se explicó enteramente la modificación propuesta y se ofreció al público la posibilidad de formular observaciones sobre ella.

19. Sírvanse responder a la manifestación que hacen las Comunidades Europeas en el párrafo 362 de su Primera comunicación escrita de que "las autoridades aduaneras de los Estados Unidos han encontrado también difícil clasificar adecuadamente los monitores de cristal líquido. Por ejemplo, en una resolución de 3 de junio de 2003, la Aduana de los Estados Unidos constató que no era posible determinar la función principal de un tipo determinado de monitores de cristal líquido y, en consecuencia, decidió clasificar esos monitores en la partida 8528, aplicando la nota general para la interpretación 3 c), que dispone que la mercancía se clasifique en la última partida por orden de numeración".

Los Estados Unidos señalan, en primer lugar, que los actos de los organismos administrativos estadounidenses no son objeto de la presente diferencia. No obstante, con el fin de aclarar las cuestiones en litigio en ella, los Estados Unidos responden lo siguiente:

Al examinar la clasificación de los monitores LCD, la Aduana de los Estados Unidos aplica los requisitos para su clasificación como una unidad de un sistema automático de procesamiento de datos en el sentido de la nota 5 B) del Capítulo 84 del Sistema Armonizado. Los monitores multimedia se ajustan a los criterios de las notas 5 B) b) y 5 B) c). Al llegar a sus decisiones en materia de clasificación, la Aduana de los Estados Unidos se ha centrado en la determinación de si el monitor cumple el criterio de la nota 5 B) a) en el sentido de que es del tipo utilizado exclusiva o principalmente en un sistema automático de procesamiento de datos, así como de si el monitor se clasifica *prima facie* en otra partida (por ejemplo, en la partida 8528, como videomonitor). En todas sus decisiones administrativas con respecto a esta cuestión, la Aduana de los Estados Unidos aplica los precedentes judiciales al determinar la "utilización principal".

La decisión a que se hace referencia en el párrafo 362 de la Primera comunicación escrita de las CE fue sometida a examen de conformidad con el Reglamento Aduanero de los Estados Unidos (*véase* 19 CFR Part 177). La Aduana constató que el monitor en cuestión era una combinación de máquinas con arreglo a la definición de la nota 3 a la sección XVI del Sistema Armonizado, porque cumplía las funciones tanto de un monitor de máquina para el tratamiento o procesamiento de datos como de videomonitor. Después de examinar todas las pruebas aportadas, la Aduana constató que no podía establecerse cuál era la función principal del monitor en cuestión, y, en consecuencia, siguió la orientación de las notas explicativas generales a la sección XVI, que establecen en la parte pertinente que "cuando no sea posible determinar la función principal y en ausencia de disposiciones en contrario en el texto de la Nota 3 de la sección XVI, hay que recurrir a la Regla general de interpretación 3 c)".

Los monitores tienen especificaciones técnicas que rigen su utilización. El criterio que establece el texto del Sistema Armonizado para clasificar esas máquinas es el de la "utilización

exclusiva o principal". En este caso, el comerciante no pudo demostrar la utilización principal como monitor de máquina para el tratamiento o procesamiento de datos. En consecuencia, con arreglo al SA, lo procedente es aplicar la Regla general de interpretación 3 c).

20. Con respecto a la referencia que hacen los Estados Unidos en la nota 33 de su Primera comunicación escrita a ejemplos de supuestas decisiones divergentes en materia de clasificación entre los Estados miembros en relación con las tarjetas de adaptación a la red para ordenadores personales y los productos para riego por goteo, sírvanse responder a las observaciones formuladas por las Comunidades Europeas en la nota 177 de su Primera comunicación escrita con respecto a esos dos productos.

Con respecto tanto al ejemplo de las tarjetas de adaptación a la red como al de los productos para riego por goteo, las CE observan que la cuestión se ha resuelto. En el primer caso, se resolvió por vía contenciosa y llevó en último término a una decisión del Tribunal de Justicia, y en el segundo mediante la adopción de un reglamento de la Comisión. No obstante, esas observaciones ocultan el hecho de que en ambos casos un elemento fundamental de la red de instrumentos de aplicación uniforme de las normas de clasificación según la descripción de las CE -la obligación de los Estados miembros de atenerse a la IAV emitida por otros Estados miembros- no funcionó de la manera que las CE pretenden que debe funcionar. Aunque se supone que la IAV emitida por un Estado miembro vincula a todos los Estados miembros, tanto en el caso de las tarjetas de adaptación a la red como en el de los productos para riego por goteo, uno o varios Estados miembros no consideraron vinculante la IAV emitida por otros Estados miembros, y ello con independencia de que las cuestiones hayan podido resolverse en última instancia.

21. En los párrafos 51 y 52 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos manifiestan que la estructura del sistema de información arancelaria vinculante en el derecho de las CE permite a los solicitantes "elegir" entre los Estados miembros basándose exclusivamente en la información arancelaria vinculante más favorable. Sírvanse aportar datos para demostrar que en la práctica se produce esa "elección".

Las propias CE reconocen que esta "elección" se produce en la práctica. Por ejemplo, en el informe del Grupo Especial en *CE - Trozos de pollo*, al resumir la argumentación de las CE, el Grupo Especial manifestó: "[las Comunidades Europeas] agregan que 'de conformidad con la legislación comunitaria, es posible retirar una solicitud de IAV cuando el importador considera desfavorable el resultado'".[41] Además, en su memorandum explicativo que acompañaba al proyecto de Código Aduanero Modernizado, las CE declaran lo siguiente: "se propone hacer también extensivo el efecto vinculante de la decisión [IAV] al (a los) titular(es) de ella, para evitar que el sistema se utilice únicamente cuando el solicitante esté satisfecho con el resultado".[42]

Una simple búsqueda en la base de datos EBTI indica también claramente que esta práctica se produce. La búsqueda pone de manifiesto que en la emisión de IAV hay un acusado sesgo favorable a determinados Estados miembros. La base de datos permite a la persona que hace la búsqueda identificar cuántas IAV ha emitido cada Estado miembro a partir de una fecha inicial durante un determinado período. Así, si se busca cuántas IAV emitió Alemania entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004, el resultado de la búsqueda indica que se emitieron 12 731 IAV. La cifra desciende espectacularmente en otro el caso de otros países: Italia emitió 232; Grecia, 1 y

[41] Informe del Grupo Especial, *CE - Trozos de pollo*, párrafo 7.261 (donde se citan la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 51 y la respuesta de las CE a la pregunta 117 del Grupo Especial).

[42] Comisión Europea, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, TAXUD/447/2004 Rev.2, *An Explanatory Introduction to the modernized Customs Code*, página 12 (24 de febrero de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 32).

Bélgica, 451.[43] Ese sesgo se debe a una elección estratégica de los Estados miembros en los que los importadores solicitan IAV.

Por último, el hecho de que los importadores se dirijan habitualmente a los funcionarios comerciales de las embajadas de los Estados Unidos en los Estados miembros de las CE para preguntarles cuáles son las autoridades de las que es mejor solicitar IAV confirma la existencia de esa práctica.

22. En el párrafo 131 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos sostienen que la reciente ampliación de las Comunidades Europeas a 25 Estados miembros agrava los problemas para llegar a una decisión en el contexto del Comité del Código Aduanero. ¿Disponen los Estados Unidos de pruebas concretas que indiquen que después de la ampliación el proceso de adopción de decisiones se ha hecho más difícil? De ser así, sírvanse facilitar al Grupo Especial todos los datos pertinentes.

Habida cuenta del proceso de formulación de decisiones del Comité que se describe en los párrafos 121 a 132 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, resulta evidente, sin necesidad de un ulterior análisis, que ese proceso se ha hecho más difícil. Además, remitimos al Grupo Especial al párrafo 131 de nuestra Primera comunicación escrita, en la que citamos las palabras de un alto funcionario de las CE, que declaraba que "la organización de una decisión mayoritaria será más difícil, puesto que habrá que negociar con 25 Estados miembros en lugar de con 15". No cabe duda de que este funcionario, que está próximo al proceso de formulación de decisiones, está en condiciones de percibir las dificultades con las que se tropezará debido a la ampliación.

23. Sírvanse explicar claramente si las siguientes declaraciones demuestran que ha habido una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y cómo lo demuestran, haciendo referencia al texto concreto y al sentido de los términos pertinentes del párrafo 3 a) del artículo X:

a) En el párrafo 86 de su Primera comunicación escrita, con respecto al trato dado a los pagos en concepto de cánones, los Estados Unidos declaran que el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas "constató que en varios casos, distintos Estados miembros imputaban de forma diferente los cánones al valor en aduana de productos idénticos importados por la misma empresa".

b) En el párrafo 87 de su Primera comunicación escrita, con respecto a la valoración no basada en el valor de transacción de la última venta, los Estados Unidos manifiestan que el Tribunal de Cuentas de las CE "constató que las autoridades de algunos Estados miembros exigían la obtención por los importadores de una aprobación previa para la valoración no basada en el valor de transacción de la última venta, en tanto que las autoridades de otros Estados miembros no imponían ese requisito".

c) En el párrafo 88 de su Primera comunicación escrita, con respecto a los gastos de reparación de vehículos cubiertos por la garantía, los Estados Unidos señalan que "al menos en un Estado miembro -Alemania- el Tribunal constató que las autoridades aduaneras deducían del valor en aduana de los vehículos importados el valor de las reparaciones realizadas en el territorio de las CE y reembolsadas por el vendedor extranjero. Otros Estados miembros -en

[43] *Véase* http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/ebtiquer?Lang=EN (consultada por última vez el 23 de septiembre de 2005).

concreto, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido- rechazaban las solicitudes de reducciones similares del valor en aduana".

d) En los párrafos 96 y 97 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos mantienen que el Tribunal de Cuentas de las CE "constató que las autoridades de distintos Estados miembros adoptaban enfoques diferentes [con respecto a los controles de la valoración realizados después de que las mercancías hayan sido despachadas a libre práctica] […]. En caso de al menos un Estado miembro, el Tribunal constató que las autoridades aduaneras no tenían derecho a realizar controles posteriores a la importación, salvo en casos de fraude. El Tribunal constató que incluso entre los Estados en los que las autoridades podían realizarlos, existían diferencias en cuanto a las prácticas operativas".

En cada una de esas declaraciones se describe un caso de aplicación divergente de la legislación aduanera de las CE sobre valoración en aduana. En todos los casos, la divergencia fue importante y afectó a la deuda final del importador derivada de los derechos aduaneros. Esos ejemplos, así como otros a los que se han referido los Estados Unidos, ilustran el hecho de que las CE no aplican de manera uniforme la normativa aduanera comunitaria. Los términos concretos del párrafo 3 a) del artículo X en cuestión son "aplicar" y "uniforme". En los párrafos 32 a 38 de nuestra Primera comunicación escrita hemos analizado el sentido de esos términos. En concreto, el sentido corriente de "aplicar" es "llevar a cabo o ejecutar (una función, negocios, etc.)" y el sentido corriente de "uniforme" es "de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas". En cada uno de los casos citados, el derecho comunitario sobre valoración en aduana fue "ejecutado" -en el sentido de que se aplicaron medidas de aplicación general a personas determinadas- de una manera que no seguía siendo "la misma en distintos lugares", sino que variaba según los Estados miembros.

Con respecto a los cuatro aspectos del régimen aduanero de las CE en relación con la valoración en aduana que los Estados Unidos alegan que ilustran la falta de uniformidad en la aplicación de las normas aduaneras de las CE en las Comunidades Europeas (las partes vinculadas, los pagos en concepto de cánones, la valoración no basada en el valor de transacción de la última venta y los gastos de reparación de vehículos cubiertos por la garantía):

24. Sírvanse facilitar todos los datos estadísticos y/o demás información pertinentes que demuestran la incidencia de la falta de uniformidad en la aplicación en el contexto de la aplicación general del régimen aduanero de las CE en lo que respecta a la valoración en aduana.

a) ¿En qué grado son i) representativos, ii) significativos y iii) tienen una repercusión en la aplicación de las normas de las CE sobre valoración en aduana en su conjunto los ejemplos a que se refieren específicamente los Estados Unidos en su Primera comunicación escrita (las partes vinculadas, los pagos en concepto de cánones, la valoración no basada en el valor de transacción de la última venta y los gastos de reparación de vehículos cubiertos por la garantía)?

b) La alegación de los Estados Unidos no concierne a la frecuencia estadística de la aplicación no uniforme en lo que respecta a la valoración en aduana. Hemos citado casos concretos de aplicación no uniforme en lo que respecta a la valoración en aduana exclusivamente a título de ejemplo, para demostrar al Grupo Especial las repercusiones reales de lo que, de no ser por ellas, parecería ser un problema abstracto y técnico.

A efectos de la alegación de los Estados Unidos, lo pertinente es *el hecho* de que se producen divergencias y de que éstas no son conciliadas y *no la frecuencia* de tipos determinados de

divergencias. Las propias CE reconocen que se producen divergencias[44], pero aducen que hay mecanismos para conciliarlas sistemáticamente. Los Estados Unidos discrepan de esa afirmación. El sistema de aplicación de la normativa aduanera de las CE está integrado por autoridades aduaneras de 25 Estados miembros independientes y en él no hay ninguna autoridad ni otro mecanismo central comunitario similar que supervise su funcionamiento y concilie las divergencias en la aplicación, sino una red flexible de principios, instrumentos e instituciones, incluidas orientaciones no vinculantes, unidas a obligaciones generales de colaboración entre los Estados miembros y una facultad discrecional de someter las cuestiones al Comité del Código Aduanero. Esa red flexible de principios, instrumentos e instituciones no proporciona la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria que exige el párrafo 3 a) del artículo X.

En todo caso, lo probable es que la información solicitada en esta pregunta esté a disposición de las CE y no de los Estados Unidos. Aunque no consideran que la información en cuestión sea necesaria para que el Grupo Especial constate que las CE incumplen su obligación de aplicación uniforme, los Estados Unidos solicitan al Grupo Especial que ejerza las facultades que le confiere el artículo 13 del ESD para recabar la información pertinente de las CE. Por ejemplo, el Grupo Especial podría pedir a las CE información del tipo de la que permitió al Tribunal de Cuentas de las CE formular las constataciones que figuran en su informe sobre la valoración en aduana (Estados Unidos - Prueba documental 14).

Los Estados Unidos recuerdan que al evaluar la incidencia de la aplicación no uniforme en lo que respecta a las normas de valoración en aduana, el Tribunal de Cuentas tuvo acceso a "documentos tratados en el Comité del Valor en Aduana, expedientes de auditoría elaborados por las autoridades aduaneras en materia de valoración en aduana, decisiones escritas relativas a la valoración, decisiones de tribunales de apelación y declaraciones de aduana propiamente dichas" correspondientes a más de 200 empresas y grupos de empresas.[45] Los Estados Unidos no se beneficiaron de ese acceso en relación con ninguna de las cuestiones en litigio en la presente diferencia. En consecuencia, resulta difícil responder directamente a la pregunta del Grupo Especial. Si el Grupo Especial ejerciera las facultades que le confiere el artículo 13 del ESD, podría recabar información del tipo de la que tuvo a su disposición el Tribunal de Cuentas al preparar su informe sobre la valoración. Además, los Estados Unidos señalan a la atención del Grupo Especial la Prueba documental 33 presentada por los Estados Unidos, en la que se recoge el proyecto de Código Aduanero Modernizado de las CE. En la página 4 de ese documento, las CE declaran, como introducción que "un estudio externo de 2003 ha permitido a la Comisión entender mejor la situación en los Estados miembros y los posibles costos y beneficios".[46] Los Estados Unidos solicitaron una copia de ese estudio durante las consultas, pero las CE se negaron a facilitarla. Los Estados Unidos sugieren también que el Grupo Especial solicite una copia de ese estudio o infiera la conclusión correspondiente en caso de que las CE se nieguen a facilitarla. No obstante, por las razones antes expuestas, el Grupo Especial no necesitaría la información solicitada en esta pregunta para llegar a la conclusión de que las CE incumplen su obligación de aplicar de manera uniforme las leyes aduaneras.

25. Sírvanse responder a la afirmación que hacen las Comunidades Europeas en el párrafo 397 de su Primera comunicación escrita de que las diferencias que existían entre los Estados miembros en lo que respecta al trato de los gastos de reparación cubiertos por una garantía han sido resueltas por el Reglamento (CE) Nº 444/2002 de la Comisión, de 11 de marzo de 2002 (CE - Prueba documental 89).

---

[44] *Véase, por ejemplo*, la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 144, 238, 396, 401 y 426.

[45] Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafo 10 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[46] *Draft Modernized Customs Code*, página 4 (Estados Unidos - Prueba documental 33).

Aunque el Reglamento citado por las CE parece ocuparse de la cuestión del trato de los gastos de reparación cubiertos por una garantía, merece la pena destacar que las CE necesitaron 12 años para resolver esta cuestión. En el informe del Tribunal de Cuentas se indica que la divergencia en cuestión se señaló por primera vez a la atención de la Comisión en 1990.[47] No puede considerarse que un sistema que lleva a la resolución de la falta de uniformidad de la aplicación 12 años después de haberse señalado la divergencia a la atención de la autoridad competente se ajusta al requisito del párrafo 3 a) del artículo X. Señalamos además que se trata de la única contradicción identificada en el informe del Tribunal de Cuentas que las CE pretenden que ha sido resuelta. Las CE intentan, sin éxito, encontrar una explicación convincente con respecto a las demás esferas importantes de falta de uniformidad en la aplicación identificadas por el Tribunal de Cuentas (trato de los pagos en concepto de cánones; condiciones en las que una venta distinta de la última venta que llevó a la introducción de mercancías en las CE puede utilizarse como base para la valoración en aduana; controles de valoración; y establecimiento de directrices vinculantes en materia de valoración), pero no niega la existencia de una falta de uniformidad de la aplicación en esas esferas.

26. Sírvanse facilitar pruebas concretas que apoyen la afirmación que se hace en los párrafos 25 y 90 a 92 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos de que distintos Estados miembros han adoptado posiciones distintas acerca de la vinculación de un importador a empresas no comunitarias que fabrican sus productos a efectos de valoración en aduana.

La descripción que se hace en los párrafos 25 y 90 a 92 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos se basa en una exposición del importador en cuestión. Debido a preocupaciones relativas a la litispendencia del asunto y a la sensibilidad comercial de la información que contendría la documentación justificante, el importador se abstuvo de facilitar la documentación correspondiente en ese momento.

No obstante, una Decisión del Defensor del Pueblo Europeo (Estados Unidos - Prueba documental 52) confirma la descripción de la aplicación no uniforme de las leyes comunitarias sobre valoración que se recoge en los párrafos de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos a que se hace referencia. El importador en cuestión confirma que es la empresa descrita en esa Decisión. La reclamación del importador acerca de la falta de aplicación uniforme de las normas comunitarias de valoración en aduana por las autoridades aduaneras españolas y las autoridades aduaneras de los Países Bajos se resume a partir de la página 2.

Lo que resulta especialmente revelador en este resumen es la descripción de la forma en que la Comisión se ocupó de la reclamación de la empresa cuando ésta se señaló a su atención en septiembre de 2000. En lugar de someter la cuestión al Comité del Código Aduanero, la Comisión contestó, tres meses más tarde, que "las cuestiones de interpretación planteadas por el reclamante eran un asunto que correspondía examinar a las autoridades aduaneras nacionales y que [la Comisión] no estaba obligada a realizar un examen detallado de casos individuales muy concretos, tarea que correspondía a las administraciones nacionales".[48] Cuando, un año más tarde, la empresa solicitó expresamente que la cuestión fuera sometida al Comité, la Comisión "rechazó la idea".[49] La empresa renovó su petición en enero de 2002 y más de dos años después no había recibido aún una contestación de la Comisión. La Decisión del Defensor del Pueblo Europeo indica que, tras una

[47] Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafos 73 y 74 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[48] Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 128/2004/OV contra la Comisión Europea, página 2 (2 de junio de 2004) (Estados Unidos - Prueba documental 52).

[49] Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 128/2004/OV contra la Comisión Europea, página 2 (2 de junio de 2004) (Estados Unidos - Prueba documental 52).

reunión entre agentes de la empresa y funcionarios de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión en mayo de 2004, el reclamante manifestó que "no deseaba ya seguir adelante con la reclamación".[50] No obstante, *no* se indica que la falta de uniformidad en cuestión hubiera sido efectivamente resuelta. El hecho de que la empresa siga adelante con su recurso en los tribunales españoles indica que, de hecho, no lo ha sido.

Por último, merece la pena destacar que las CE, aunque califican el asunto de "relativamente complejo"[51], no niegan los hechos esenciales expuestos por los Estados Unidos, es decir, no niegan que este caso entrañe una aplicación divergente de las normas comunitarias sobre valoración a un importador concreto para determinar si los contratos de ese importador con vendedores no comunitarios daban lugar a una relación de control.

27. En relación con la transformación bajo control aduanero, ¿preocupan a los Estados Unidos las discrepancias advertidas entre Estados miembros en cuanto a la *prueba sustantiva* para determinar si las condiciones económicas justifican la transformación bajo control aduanero y/o la *aplicación* de la prueba de las condiciones económicas por los Estados miembros? En el último caso, sírvanse facilitar pruebas concretas que apoyen la alegación de que esa aplicación infringe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Esta pregunta pone de relieve el error fundamental que entraña el hecho de que las CE no reconozcan que las medidas pueden servir también para aplicar otras medidas. La transformación bajo control aduanero es un régimen previsto en el artículo 130 del Código Aduanero Comunitario. Cuando se le permite utilizarlo, un importador puede introducir en el territorio de las CE mercancías sin que estén sujetas a derechos, realizar determinadas operaciones en relación con esas mercancías y despachar a libre práctica con los derechos de importación que les correspondan los productos que resulten de estas operaciones. Así pues, no cabe duda de que el artículo 130 es un "reglamento" que se refiere a "los tipos de los derechos de aduana" sobre las importaciones en el sentido del párrafo 1 del artículo X del GATT y, como tal, debe aplicarse de manera uniforme, conforme al párrafo 3 a) de ese mismo artículo.

Con arreglo al Código Aduanero Comunitario y al Reglamento de Aplicación las autoridades aduaneras deben proceder a una evaluación de las "condiciones económicas" para determinar si debe accederse a determinadas solicitudes de transformación bajo control aduanero. La manera en la que las autoridades de los diferentes Estados miembros aplican esa medida de aplicación general se recoge a veces en manuales o boletines o en otros documentos propios del Estado miembro. En esos documentos se explica cómo aplican los Estados miembros los reglamentos comunitarios sobre transformación bajo control aduanero.

Los manuales o boletines que explican la forma en que los diversos Estados miembros aplican los reglamentos de las CE sobre la transformación bajo control aduanero cumplen una función administrativa, es decir, prescriben la forma en que se pondrán en práctica otras normas (determinados artículos del Código Aduanero Comunitario y el Reglamento de Aplicación). En la medida en que los manuales o boletines de diferentes Estados miembros prescriben formas diferentes de poner en práctica las normas comunitarias, ponen de manifiesto una falta de uniformidad en la aplicación de esas normas. Para decirlo en los términos indicados por la pregunta del Grupo Especial, lo que preocupa a los Estados Unidos es la falta de uniformidad en la aplicación de la prueba de las condiciones económicas por las autoridades de diferentes Estados miembros, que se pone de

[50] Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 128/2004/OV contra la Comisión Europea, página 4 (2 de junio de 2004) (Estados Unidos - Prueba documental 52).

[51] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 407.

manifiesto en el contenido de los manuales y boletines que prescriben la forma en que ha de llevarse a cabo la prueba en diferentes Estados miembros.

Para aclarar esta falta de uniformidad, hemos contrastado las directrices del Reino Unido sobre la aplicación de la prueba de condiciones económicas con las directrices francesas.[52] Hemos demostrado que, con arreglo a las directrices del Reino Unido, el solicitante debe aportar tanto pruebas relativas a las repercusiones sobre sus actividades como a las repercusiones sobre cualesquiera otros productores comunitarios de las mercancías importadas[53], en tanto que con arreglo a las directrices francesas, sólo ha de aportar pruebas de la creación o mantenimiento de actividades de transformación dentro de las CE.[54]

Las CE afirman que las directrices francesas también se refieren a la prueba relativa a la falta de perjuicio a los competidores en las CE[55] y remiten al Grupo Especial al párrafo 78 de esas directrices (Estados Unidos - Prueba documental 35). No obstante, esa referencia es simplemente una paráfrasis introductoria de determinadas disposiciones del Código Aduanero Comunitario. Después de la introducción, el boletín especifica que la prueba de las condiciones económicas se llevará a cabo según las modalidades que se exponen a continuación ("il s'effectue selon les modalités définies ci-après"). Como se explicó en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, la modalidad pertinente (párrafo 83) no hace ninguna referencia al perjuicio para los productores comunitarios.

28. En el párrafo 400 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que las cuestiones relativas a los controles no forman parte de los procedimientos aduaneros. Sírvanse formular observaciones al respecto.

Señalamos ante todo que las Comunidades Europeas no explican en absoluto su afirmación. Las CE no indican en qué se basa la tesis de que las cuestiones relativas a los controles no forman parte de los procedimientos aduaneros.

En segundo lugar, las CE parecen basarse en una definición sumamente restrictiva de "procedimientos aduaneros". En la primera reunión del Grupo Especial, hemos entendido que las CE manifiestan que con esa expresión se refieren al término "régimen aduanero" del apartado 16) del artículo 4 del Código Aduanero Comunitario. Según esta disposición, la expresión "régimen aduanero" se refiere a las ocho formas distintas en que pueden tratarse las mercancías después de su importación en el territorio de las CE (incluidos, por ejemplo, el despacho a libre práctica y la transformación bajo control aduanero). El término tiene un sentido particular propio del contexto del Código. En cambio, en otros contextos, las CE lo utilizan en un sentido más amplio y genérico. Por ejemplo, como hemos expuesto en nuestra declaración inicial en la primera reunión del Grupo Especial, según el acuerdo comercial regional de las CE con Chile, las "disposiciones y procedimientos […] aduaneros deberán basarse en […] la aplicación de técnicas modernas [incluidos] […] métodos de auditoría de las empresas".[56]

En tercer lugar, con independencia de que el procedimiento de control se califique o no de procedimiento aduanero, los controles son instrumentos para aplicar las leyes aduaneras comunitarias.

---

[52] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 105 a 107.

[53] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 105.

[54] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 107.

[55] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 415.

[56] Declaración inicial de los Estados Unidos, primera reunión del Grupo Especial, párrafo 53.

Cuando esa serie de normas básicas es la normativa aduanera comunitaria, los procedimientos de control son instrumentos para aplicar ese derecho. En la medida en que diferentes Estados miembros utilizan diferentes procedimientos de control, aplican el derecho básico de manera diferente. Las CE despacha esas diferencias calificándolas de diferencias "de importancia secundaria".[57] No obstante, el informe del Tribunal de Cuentas proporciona una visión bastante distinta. En él se constata que en un Estado miembro las autoridades carecen de facultades para llevar a cabo en absoluto controles posteriores a la importación, salvo en caso de fraude, y que las divergencias entre Estados miembros en lo que respecta a los procedimientos de control llevan aparejado que "las distintas autoridades aduaneras son reticentes a aceptar las decisiones de las demás".[58] Es difícil entender cómo puede calificarse a esas diferencias de "diferencias de importancia secundaria".

29. En los párrafos 429 a 431 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que las disposiciones que establecen sanciones, que establecen una sanción en caso de infracción de una disposición de las leyes aduaneras, no son en sí mismas leyes aduaneras y, en consecuencia, no están abarcadas por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Sírvanse formular observaciones al respecto.

La tesis de las CE de que el párrafo 3 a) del artículo X no abarca las disposiciones que establecen sanciones adolece al menos de dos vicios fundamentales. En primer lugar, prescinde de la distinción entre las leyes que aplica un Estado miembro y los instrumentos para aplicar esas leyes y da por supuesto, sin ningún fundamento, que dado que las disposiciones que establecen sanciones adoptan la forma de leyes sólo pueden ser ellas mismas objeto de aplicación y no pueden servir también de instrumentos de aplicación de otras leyes. No obstante, las disposiciones que establecen sanciones, como los procedimientos de control, presuponen la existencia de otras leyes, en el caso que nos ocupa de otras leyes aduaneras comunitarias. Las disposiciones que establecen sanciones no existen en el vacío. Están intrínsecamente ligadas a las leyes básicas a cuyo cumplimiento pretenden inducir.[59] De hecho, las CE admiten esta tesis fundamental. Así, la Resolución del Consejo sobre las sanciones que se recoge en CE - Prueba documental 41 declara que "la ausencia de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento del derecho comunitario podría atentar contra la propia credibilidad de la legislación común […]".[60]

El asunto *de Andrade*, citado en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, demuestra que las sanciones son instrumentos para aplicar la normativa aduanera comunitaria.[61] Las medidas comunitarias aplicadas en ese caso eran el artículo 49 y el apartado 1 del artículo 53 del Código Aduanero Comunitario. El artículo 49 establece plazos específicos para llevar a cabo las formalidades necesarias para dar a las mercancías cubiertas por una declaración sumaria un destino aduanero. A su vez, el apartado 1 del artículo 53 dispone que "las autoridades aduaneras adoptarán sin demora cualquier medida necesaria, incluida la venta de las mercancías, para solventar la situación

[57] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 400.

[58] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 97 (donde se hace una cita de Estados Unidos - Prueba documental 14).

[59] Véase *The New Shorter Oxford English Dictionary*, Vol. II, páginas 2.144 y 2.145 (1993) (Estados Unidos - Prueba documental 53) (en donde se define "penalty" (sanción), en el sentido pertinente en el presente contexto, como "punishment imposed for breach of a law, rule, or contract" (penalidad impuesta por la violación de una ley, norma o contrato)).

[60] Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior, página 1 (CE - Prueba documental 41).

[61] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 100.

de las mercancías para las que no se hayan llevado a cabo las formalidades con vistas a darles un destino aduanero dentro de los plazos fijados de conformidad con el artículo 49".

En el asunto *de Andrade*, un importador no llevó a cabo las formalidades necesarias para dar a las mercancías un destino aduanero dentro del plazo aplicable prescrito por el artículo 49 del Código. En consecuencia, la autoridad aduanera portuguesa aplicó el apartado 1 del artículo 53, es decir, adoptó las medidas necesarias para solventar la situación, imponiendo una sanción prevista en el derecho portugués. Mediante la aplicación de la disposición que establece sanciones, la autoridad portuguesa dio efecto al apartado 1 del artículo 53del Código Aduanero Comunitario.

En la medida en que diferentes Estados miembros tienen diferentes disposiciones que establecen sanciones, aplicables a la infracción de la normativa aduanera comunitaria -lo que las CE no niegan ni pueden negar- esos Estados aplican de manera diferente la normativa aduanera comunitaria. En consecuencia, la existencia de diversas disposiciones que establecen sanciones en los Estados miembros de las CE, con arreglo a las cuales la misma infracción puede considerarse un acto delictivo grave en uno y una infracción leve en otro[62] es prueba de una aplicación no uniforme, con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X. El segundo vicio fundamental de que adolece el argumento de las CE es su suposición de que las disposiciones que establecen sanciones atañen a "actos ilegítimos" y, por consiguiente, no pueden estar abarcadas por el párrafo 3 a) del artículo X.[63] Como hemos analizado en nuestra declaración inicial, el párrafo 3 a) del artículo X no establece ninguna distinción entre transacciones legítimas e ilegítimas. Además, es sencillamente erróneo afirmar, como hacen las CE, que las sanciones sólo se aplican a transacciones ilegítimas. A este respecto, también el asunto *de Andrade*, en el que la única infracción consistía en la inobservancia de un plazo, resulta esclarecedor; en él, se aplicó una sanción en el contexto del comercio legítimo.

30. Sírvanse explicar paso por paso cuál es la concepción de los Estados Unidos acerca de los procedimientos aplicables en las Comunidades Europeas con respecto a:

a) el despacho de las mercancías a libre práctica conforme a los procedimientos de domiciliación; y

b) el despacho de las mercancías a libre práctica *sin* utilización de procedimientos de domiciliación.

A continuación se exponen los procedimientos aplicables en las CE para el despacho de mercancías a libre práctica, según los entienden los Estados Unidos, (con referencias al Código Aduanero Comunitario ("CAC") y al Reglamento de Aplicación del Código Aduanero Comunitario ("RA")):

Paso 1: las mercancías se presentan en aduana (artículo 40 del CAC). La presentación corresponde generalmente al transportista y se aplica a todas las mercancías, con independencia al sistema de despacho.

Paso 2: se presenta en aduana una declaración sumaria (artículo 43 del CAC). Puede corresponder al transportista, el operador de puerto o explotador de las instalaciones o a otra persona y adopta la forma de un documento de identificación de la mercancía. La presentación de una declaración sumaria es exigible asimismo con respecto a todas las

[62] Véase *An Explanatory Introduction to the Modernized Customs Code*, página 13 (Estados Unidos - Prueba documental 32).

[63] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 432.

mercancías, con independencia del sistema de despacho. Las mercancías tienen desde ese momento el estatuto de mercancías en depósito temporal (artículo 50 del CAC).

Paso 3: se asigna a las mercancías un destino aduanero (artículo 48 del CAC), mediante una declaración para un régimen aduanero. El procedimiento aduanero puede ser un "procedimiento normal" (artículos 62 a 75 del CAC) o un "procedimiento simplificado" (artículo 76 del CAC). Hay, a su vez, tres categorías de procedimientos simplificados: el procedimiento de domiciliación (artículos 263 a 267 del RA), el depósito aduanero (artículo 268 del RA) y el procedimiento de declaración simplificada (artículos 269 a 271 del RA).

En síntesis, los procedimientos aplicables para el despacho normal y el despacho mediante procedimientos de domiciliación son los mismos en los primeros dos pasos, en tanto que en el tercero, hay una diferencia. Cuando se utilizan los procedimientos normales, el importador debe hacer una declaración completa, con documentos justificantes, y dar a las autoridades aduaneras la oportunidad de examinar las mercancías y extraer muestras antes del despacho a libre práctica (artículos 239 a 252 del RA). Cuando se utiliza el procedimiento de domiciliación, el importador comunica a las autoridades aduaneras la llegada de las mercancías y las inscribe en sus documentos contables, con lo cual, normalmente, pueden ser despachadas a libre práctica (artículo 266 del RA). Cuando se utiliza el procedimiento de domiciliación, se formula una declaración complementaria después del despacho a libre práctica. Como se describe en los párrafos 109 a 116 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, diferentes Estados miembros aplican de manera diferente los procedimientos de domiciliación, por ejemplo, en lo que respecta a la intervención de las autoridades aduaneras antes del despacho, los requisitos posteriores a éste y las prescripciones relativas a la conservación de la documentación.

31. En el párrafo 419 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que los argumentos de los Estados Unidos con respecto a los procedimientos de domiciliación fallan por su base, por cuanto no establecen ninguna diferencia entre la declaración sumaria (de la que se ocupa el artículo 43 del Código aduanero comunitario), la notificación para el levante conforme al procedimiento de domiciliación (de la que se ocupa el artículo 266 del Reglamento de Aplicación) y la declaración complementaria (a la que se refiere el párrafo 2 del artículo 76 del Código aduanero comunitario).

La falta de diferenciación que señalan las CE no afecta al elemento esencial del análisis de los Estados Unidos con respecto a los procedimientos de domiciliación. La falta de una aplicación uniforme expuesta en nuestra Primera comunicación escrita existe con independencia de que las fases concretas del proceso de despacho a libre práctica se describan o no separadamente.

32. En los párrafos 220 y 221 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que cuando en un determinado Miembro de la OMC existen leyes subfederales, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a esas leyes.

a) ¿Es aplicable el párrafo 3 a) del artículo X a las leyes penales?

b) En caso afirmativo, ¿estaría facultado el Grupo Especial para examinar la aplicación de las leyes penales de los Estados miembros en relación con la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X?

Nos remitimos a nuestra respuesta a la pregunta 29. Como se ha expuesto en ella, las leyes penales que establecen sanciones por la violación de las leyes aduaneras son instrumentos para la aplicación de esas leyes, por cuanto fomentan su cumplimiento. En la medida en que diferentes Estados miembros de las CE aplican leyes penales diferentes a las infracciones de la normativa

aduanera comunitaria, aplican de manera diferente la normativa aduanera comunitaria. El párrafo 3 a) del artículo X obliga a los Miembros de la OMC a aplicar de manera uniforme sus leyes aduaneras. En la medida en que las leyes penales son instrumentos de aplicación de las leyes aduaneras y dan lugar a que la aplicación de las leyes aduaneras sea o no uniforme, el párrafo 3 a) del artículo X es aplicable a las leyes penales.

Con respecto a la segunda parte de la pregunta del Grupo Especial, es importante distinguir entre la aplicación de las leyes penales y la aplicación de las leyes penales para aplicar las leyes aduaneras a que se refiere el párrafo 1 del artículo X. Por las razones expuestas en el párrafo anterior y en nuestra respuesta a la pregunta 29, el Grupo Especial está facultado para examinar las leyes penales como instrumento de aplicación de la normativa aduanera comunitaria en relación con la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X. Lo pertinente a la alegación de los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X es el hecho de que diferentes Estados miembros tienen diferentes leyes penales y, en consecuencia, aplican la normativa aduanera comunitaria básico de manera no uniforme. El hecho de que cada uno de los Estados miembros aplique o no de manera uniforme su propia ley penal dentro de su propio territorio no es pertinente a nuestra alegación.

Las CE confunden esta distinción al rechazar la tesis de que las leyes pueden tener ellas mismas naturaleza administrativa. A su juicio, no hay leyes de naturaleza administrativa. Así, manifiestan que "cuando en un determinado Miembro de la OMC existen leyes subfederales, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a esas leyes".[64] Las Comunidades descartan la posibilidad de que las leyes de nivel subfederal sean instrumentos de la aplicación de leyes a nivel federal. Sin embargo, eso es precisamente lo que son las disposiciones que establecen sanciones aduaneras. Al sugerir que las leyes de nivel subfederal nunca pueden ser evaluadas a efectos del párrafo 3 a) del artículo X como instrumentos para aplicar leyes a nivel federal, las CE interpretan ese párrafo de una forma que reduce drásticamente su eficacia. Con arreglo a esa lógica, cuando las leyes aduaneras de nivel federal son aplicadas por las autoridades subfederales, casi todos los casos de aplicación no uniforme a nivel federal pueden reformularse como diferencias en cuanto a las medidas sustantivas prescritas a nivel subfederal, lo que permitiría a los Miembros de la OMC que cuentan con una organización federal eludir su obligación de aplicación uniforme. Esa interpretación del párrafo 3 a) del artículo X, que priva al mismo casi totalmente de utilidad en el caso de los estados federales, es contraria a las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados del derecho internacional público y debe rechazarse.

33. Con respecto a los cuatro tipos de "procedimientos aduaneros" que, según alegan los Estados Unidos, ilustran la falta de uniformidad en la aplicación de las normas aduaneras de las CE en las Comunidades Europeas (controles posteriores al despacho a libre práctica, sanciones por infracción de las leyes aduaneras de las CE, transformación bajo control aduanero y procedimientos de domiciliación):

a) Sírvanse facilitar todos los datos estadísticos y/o demás información pertinentes que demuestren la incidencia de la falta de uniformidad en la aplicación en el contexto de la aplicación general del régimen aduanero de las CE en lo que respecta a los procedimientos aduaneros.

b) ¿En qué grado i) son representativos, ii) son significativos, y iii) tienen repercusión en la aplicación de las normas de las CE sobre procedimientos aduaneros en su conjunto los ejemplos a que se refieren concretamente los Estados Unidos en su Primera comunicación escrita (los controles posteriores al despacho a libre práctica, las sanciones por infracción de las leyes aduaneras de

[64] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 221.

las CE, la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación)?

La alegación de los Estados Unidos no concierne a la frecuencia estadística de la aplicación no uniforme en lo que respecta a los procedimientos aduaneros. Hemos citado casos concretos de aplicación no uniforme con respecto a los procedimientos aduaneros exclusivamente a título de ejemplo, para demostrar al Grupo Especial las repercusiones reales de lo que de no ser por ellas podría parecer que constituye un problema abstracto y técnico.

A efectos de la alegación de los Estados Unidos, lo pertinente es *el hecho* de que se producen divergencias que no son conciliadas y *no la frecuencia* de tipos concretos de divergencias. Las propias CE reconocen que se producen divergencias[65], pero aducen que hay en vigor mecanismos para conciliarlas sistemáticamente. Los Estados Unidos discrepan de esa afirmación. El sistema de aplicación de la normativa aduanera de las CE está integrado por autoridades aduaneras de 25 Estados miembros independientes sin que haya ninguna autoridad u otro mecanismo central comunitario similar que supervise su funcionamiento y concilie las diferencias en la aplicación, sino que existe una red flexible de principios, instrumentos e instituciones, incluidas orientaciones no vinculantes, unida a obligaciones generales de colaboración entre los Estados miembros y a una facultad discrecional de someter las cuestiones al Comité del Código Aduanero. Esta red flexible de principios, instrumentos e instituciones no proporciona la aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria que exige el párrafo 3 a) del artículo X.

En cualquier caso, es probable que la información solicitada en esta pregunta no esté a disposición de los Estados Unidos, sino de las CE. Aunque no consideran que la información en cuestión sea necesaria para que el Grupo Especial constate que las CE incumplen su obligación de aplicación uniforme, los Estados Unidos solicitan que el Grupo Especial ejerza las facultades que le confiere el artículo 13 del ESD para recabar la información pertinente de las CE.

Los Estados Unidos recuerdan que al evaluar la incidencia de la aplicación no uniforme en lo que respecta a las normas sobre valoración, el Tribunal de Cuentas de las CE tuvo acceso a "documentos tratados en el Comité del Valor en Aduana […] expedientes de auditoría elaborados por las autoridades en materia de valoración en aduana, decisiones escritas relativas a la valoración, decisiones de tribunales de apelación y declaraciones de aduana propiamente dichas" correspondientes a más de 200 empresas y grupos de empresas.[66] Los Estados Unidos no se han beneficiado de ese acceso con respecto a ninguna de las cuestiones en litigio en la presente diferencia. En consecuencia, resulta difícil responder directamente a la pregunta del Grupo Especial. Si el Grupo Especial ejerciera las facultades que le confiere el artículo 13 del ESD, podría recabar información del tipo de la que tuvo a su disposición el Tribunal de Cuentas en la preparación de su informe sobre la valoración.

Además, los Estados Unidos señalan a la atención del Grupo Especial la prueba documental 33 presentada por los Estados Unidos, en la que se recoge el proyecto de Código Aduanero Modernizado de las CE. En la página 4 de ese documento las CE declaran, como introducción, que "un estudio externo de 2003 ha permitido a la Comisión entender mejor la situación actual en los Estados miembros y los posibles costos y beneficios".[67] Los Estados Unidos solicitaron una copia de este estudio durante las consultas, pero las CE se negaron a facilitarla. Los Estados

[65] *Véase, por ejemplo*, la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 144, 238, 396, 401 y 426.

[66] Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafo 10 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[67] *Draft Modernized Customs Code*, página 4 (Estados Unidos - Prueba documental 33).

Unidos proponen también que el Grupo Especial solicite una copia de ese estudio o infiera la conclusión correspondiente en caso de que las CE se nieguen a facilitarla. No obstante, por las razones expuestas antes, el Grupo Especial no necesitaría la información solicitada en esta pregunta para llegar a la conclusión de que las CE incumplen su obligación de aplicar de manera uniforme las leyes aduaneras.

34. ¿Cómo garantizan los Estados Unidos la uniformidad en la aplicación de sus leyes aduaneras en los diferentes puntos de entrada en el país? A este respecto, sírvanse facilitar detalles relativos a todos los aspectos pertinentes de la administración de aduanas estadounidense, incluidos, en particular, aquellos aspectos que no están directamente vinculados a su estructura constitucional e institucional.

Los Estados Unidos señalan, en primer lugar, que los actos de los organismos administrativos estadounidenses no son objeto de la presente diferencia. No obstante, para aclarar las cuestiones en litigio en ella, los Estados Unidos responden lo siguiente:

Para lograr una aplicación uniforme de las normas aduaneras, la Oficina de Aduanas y Protección en Frontera (CBP) de los Estados Unidos utiliza diversos instrumentos en la esfera tanto de la formulación como de la rectificación, en su caso.

Con respecto a la primera de esas esferas, la CBP publica reglamentos detallados y aclara de forma más detenida cuestiones concretas de interpretación o de procedimiento mediante Directivas, Manuales y otros instrumentos formales destinados a los funcionarios de la CBP, que se publican electrónicamente para su mayor difusión y que pueden consultarse fácilmente.

La CBP promueve además la aplicación uniforme en primera instancia mediante la intervención directa de expertos en las esferas pertinentes. A través de su División Nacional de Especialistas en Productos (NCSD), la CBP supervisa determinadas decisiones sobre el trato aduanero de especialistas en importaciones competentes en primera instancia en relación con las decisiones en materia de trato en los puertos de entrada. Expertos en las diversas materias de la Oficina Central de la CBP celebran también habitualmente consultas con los funcionarios sobre el terreno cuando se plantean problemas.

La administración aduanera de los Estados Unidos se basa también en gran medida en un diálogo continuo con los importadores y otras personas interesadas con arreglo a los principios de "cumplimiento informado" y "diligencia razonable".

Cuando no se dispone de información definitiva sobre un punto determinado, el importador puede solicitar una decisión vinculante sobre cualquier aspecto del trato aduanero. Las decisiones de la NCSD se emiten en un plazo de 30 días. La Oficina Central de la CBP emite decisiones anticipadas en un plazo de 90 días, salvo que concurran circunstancias extraordinarias. El sistema de búsqueda en línea de decisiones aduaneras (CROSS) constituye un instrumento fundamental del programa de decisiones vinculantes. Los comerciantes y funcionarios de aduanas se remiten constantemente a los procedentes publicados en él como orientación para determinar si son necesarias nuevas decisiones, así como acerca de la aplicabilidad de decisiones anteriores a las que están en preparación.

Cuando la CBP tiene conocimiento de decisiones divergentes, puede rectificar las decisiones dictadas menos de 60 días antes mediante una simple notificación al receptor. La rectificación o revocación de decisiones emitidas más de 60 días antes se rige por procedimientos más detallados. Con arreglo al artículo 625 de la Ley Arancelaria de 1930, modificada, (19 USC 1625) y el Reglamento de la CBP (19 CFR 177.12), la CBP efectúa las rectificaciones apropiadas mediante un aviso público de la cuestión que ha de examinarse y de la modificación o revocación propuesta por la CBP, en el que se abre un período de información pública, y la publicación posterior de una

revisión que tiene en cuenta, en su caso, las observaciones formuladas en ese período de información pública. La publicación de una modificación o revocación final con arreglo al artículo 625 establece el trato aduanero que la CBP dará en el territorio aduanero de los Estados Unidos a una mercancía concreta o con respecto a una cuestión concreta.

Otra vía para la rectificación de decisiones no uniformes sobre el trato aduanero es la reclamación administrativa, de conformidad con el artículo 514 de la Ley Arancelaria de 1930, modificada, (19 USC 1514). Con arreglo a ese procedimiento, un importador puede pedir a la CBP que examine y rectifique decisiones no uniformes. Además, el importador tiene derecho a recurrir contra la denegación definitiva de una reclamación ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos.

Un comerciante tiene derecho a recurrir prontamente contra una decisión aduanera impugnada ante un tribunal de revisión. Este derecho puede ejercerse solicitando una actuación acelerada del puerto aduanero (19 CFR 174.22). Si no se accede a la petición en el plazo de 30 días, ésta se presume denegada y contra la denegación presunta puede recurrirse ante el Tribunal de Comercio Internacional sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.

35. Sírvanse indicar concretamente lo que impugnan/alegan los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 en relación con los siguientes aspectos:

a) El nivel de los organismos establecidos para revisar las decisiones aduaneras y el efecto geográfico de sus decisiones. (Véase el párrafo 4 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, donde éstos sostienen que la competencia en las apelaciones contra las decisiones aduaneras está reservada a cada uno de los Estados miembros y que, en la actualidad, en las Comunidades Europeas hay 25 regímenes diferentes de apelación, ninguno de los cuales puede dar lugar a una decisión que surta efecto en todas las CE.);

b) Los procedimientos de los Estados miembros en lo que respecta a los mecanismos de apelación para la revisión de las decisiones aduaneras. (Véanse el párrafo 133 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, donde éstos señalan que "el mecanismo de apelación es diferente en cada Estado miembro" y el párrafo 143, en el que afirman que "los procedimientos de apelación varían de un Estado miembro a otro".); y

c) El acceso de los comerciantes al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (Véase el párrafo 5 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, donde afirman que las Comunidades Europeas no permiten a los comerciantes el acceso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para garantizar, entre otras cosas, la pronta revisión y rectificación de las decisiones aduaneras.)

Los Estados Unidos alegan que con arreglo al párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, es el Miembro de la OMC (y no las subdivisiones regionales del Miembro) el que está obligado a proporcionar tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a cuestiones aduaneras; las decisiones de esos tribunales o procedimientos deben regir la práctica de los organismos del Miembro (en consecuencia, los organismos de las CE, en su conjunto y no los organismos de los diversos Estados miembros) y los organismos del Miembro (asimismo, los organismos de las CE en su conjunto) deben dar efecto a esas decisiones. Los Estados Unidos alegan también que el establecimiento de tribunales o procedimientos por los diversos Estados miembros dentro de las CE no basta para cumplir la obligación que incumbe a las CE en virtud del párrafo 3 b) del artículo X, ya que las decisiones de esos tribunales o

procedimientos sólo surten efectos dentro de los Estados miembros correspondientes y no en general en los organismos de las CE.

La segunda frase del párrafo 3 b) del artículo X, que declara que los tribunales o procedimientos que un Miembro mantiene o instituye "serán independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas y sus decisiones serán ejecutadas por estos últimos *y regirán su práctica administrativa* […]" (sin cursivas en el original) respalda la interpretación expuesta de esa disposición. La frase "regirán su práctica administrativa" requiere que los organismos de ejecución de un Miembro (en este caso las CE) se ajusten a las decisiones de los tribunales de revisión, lo que significa que esas decisiones deben ser efectivas con respecto a los organismos de ejecución del Miembro y no sólo con respecto a algunos de ellos.

Cuando los tribunales alemanes deciden que una norma de clasificación del Arancel Aduanero Común debe interpretarse de una forma determinada, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT exige que la decisión rija la práctica de los organismos de las CE encargados de la aplicación administrativa del Arancel. Pero dado que las decisiones de los tribunales alemanes sólo son aplicables a los organismos alemanes, no rigen la práctica de todos los organismos de las CE encargados de la aplicación administrativa del Arancel.

Con respecto a los procedimientos de los Estados miembros relativos a los mecanismos de recurso para la revisión de las decisiones aduaneras, la única alegación que hacen los Estados Unidos es que, debido precisamente a que las decisiones de esos mecanismos de recurso no surten efecto para algunos de los organismos de las CE, su existencia no libera a las CE de su obligación de instituir tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las decisiones aduaneras. Los Estados Unidos no alegan, como sugieren las CE[68], que los procedimientos establecidos en los Estados miembros supondrían el cumplimiento de la obligación de las CE si fueran suficientemente prontos. La descripción de los mecanismos de recurso de los diversos Estados miembros que figuraba en nuestra Primera comunicación escrita se hacía con el fin de establecer los antecedentes, para demostrar que la falta de uniformidad que existe en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria se materializa en la esfera de la revisión de las decisiones por las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Dicho de otra forma, la falta de uniformidad en la aplicación que existe en primera instancia no es subsanada por las CE mediante el establecimiento de tribunales o procedimientos de revisión que puedan dictar decisiones que surtan efecto en todo el territorio de las CE y puedan, teóricamente, generar uniformidad.

Con respecto al acceso de los comerciantes al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, lo que alegamos es que el acceso que las CE da a este órgano no da cumplimiento a la obligación de las CE en virtud del párrafo 3 b) del artículo X. Aunque las decisiones del Tribunal de Justicia puedan tener efecto en todo el territorio de las CE, dado el tiempo necesario para someter los asuntos al Tribunal de Justicia y para que éste adopte una decisión al respecto y al hecho de que, en general, el reenvío de asuntos al Tribunal de Justicia es discrecional (excepto en el caso de los reenvíos de tribunales de los Estados miembros contra los que no quepa ulterior recurso), el Tribunal de Justicia no es un tribunal o procedimiento destinado a la pronta revisión y rectificación de las decisiones administrativas aduaneras.

Es evidente que las CE no niegan esta alegación, por cuanto aducen que los tribunales o procedimientos que las Comunidades proporcionan para la pronta revisión y rectificación de las decisiones administrativas aduaneras son los tribunales de los Estados miembros. A su juicio, el Tribunal de Justicia no es un órgano destinado a la pronta revisión y rectificación de las decisiones administrativas aduaneras, sino una institución comunitaria que presta su asistencia a las entidades que son los órganos destinados a la pronta revisión y rectificación de esas decisiones. Por las razones

[68] Declaración oral de las CE, primera reunión del Grupo Especial, párrafos 72 a 77.

expuestas en la primera parte de la presente respuesta, los Estados Unidos discrepan de la afirmación de las CE de que los tribunales de los Estados miembros son los órganos que cumplen la obligación de pronta revisión y rectificación de las CE.

36. ¿Qué organismo(s)/procedimientos se han instituido en los Estados Unidos para dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994? Sírvanse explicar cómo se produce en la práctica el recurso a ese(esos) organismo(s)/procedimientos.

Los Estados Unidos señalan, en primer lugar, que las instituciones y procedimientos estadounidenses no son objeto de la presente diferencia. No obstante, para aclarar las cuestiones en litigio el ella, los Estados Unidos responden lo siguiente:

Los organismos que existen en los Estados Unidos para dar cumplimiento a las obligaciones de ese país en virtud del párrafo 3 b) del artículo X son el Servicio de Reglamentos y Resoluciones de la Oficina de Aduanas y Protección en Frontera de los Estados Unidos y el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USCIT). En general, el comerciante que pretende que se revise y rectifique una decisión aduanera adoptada en un puerto de entrada dispone de dos opciones. La primera consiste en tratar de obtener una revisión por parte del Servicio de Reglamentos y Resoluciones, mediante un procedimiento de revisión ulterior ante la Oficina Central de las determinaciones sobre reclamaciones. En ese procedimiento, el Servicio de Reglamentos y Resoluciones procede a una revisión objetiva e imparcial de las decisiones adoptadas en los puertos de entrada. Sus decisiones pueden, a su vez, ser recurridas ante el USCIT. La segunda opción, examinada en la respuesta a la pregunta 34, consiste en solicitar una resolución administrativa acelerada de la CBP sobre una reclamación, lo que permite al comerciante iniciar un procedimiento ante el USCIT 30 días después de haber formulado esa solicitud si el puerto aduanero rechaza la reclamación o simplemente no adopta una decisión sobre ella.

37. En el párrafo 327 y la nota 162 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas indican que la crítica de los Estados Unidos a la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de permitir la revocación de la información arancelaria vinculante en el asunto *Timmermans* es incompatible con su crítica de la decisión del tribunal del Reino Unido de no permitirla en el asunto *Bantex*. Sírvanse formular observaciones al respecto.

Precisamente porque las CE aplican sus leyes aduaneras mediante autoridades de 25 Estados miembros diferentes sin que haya ninguna administración aduanera u otro mecanismo centralizado para lograr la uniformidad, tanto la situación descrita en *Timmermans* como la descrita en *Bantex pueden* dar lugar a una aplicación no uniforme. En el supuesto del asunto *Timmermans*, una autoridad aduanera puede revocar IAV por propia iniciativa aunque los hechos no hayan cambiado. Si otras autoridades se han basado en la IAV emitida por la primera y la han seguido, se produce una falta de uniformidad. El derecho comunitario no obliga a esas otras autoridades a revisar sus clasificaciones por la simple razón de que la primera haya decidido por propia iniciativa revocar la IAV. De forma análoga, el supuesto del asunto *Bantex* puede dar también lugar a una falta de uniformidad. Esa falta de uniformidad se produciría cuando un Estado miembro haya emitido IAV y tenga posteriormente conocimiento de la existencia de IAV divergentes emitidas por otros Estados, esté convencido de que su decisión fue errónea y no pueda modificarla.

La aparente paradoja que entraña el hecho de que ambas situaciones puedan generar una falta de uniformidad se disipa si se recuerda que no hay ningún organismo aduanero u otro mecanismo a nivel de las CE que garantice una aplicación uniforme. A la inversa, si hubiera un organismo central competente para la emisión de IAV, ambas situaciones serían imposibles. Cualquier contradicción que pudiera surgir se resolvería sistemáticamente a nivel de las CE. Ello sería compatible con el párrafo 3 a) del artículo X. Ahora bien, esa situación no es la que existe actualmente en las CE.

38. En el párrafo 454 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas manifiestan que, dado que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se refiere en plural a "tribunales" y "procedimientos", los Miembros de la OMC pueden tener varios tribunales, cada uno de ellos con jurisdicción en una parte de su geografía y con competencia para revisar las decisiones administrativas adoptadas por las respectivas oficinas aduaneras. Sírvanse formular observaciones al respecto.

La significación que las CE atribuyen a la utilización del plural en el párrafo 3 b) del artículo X carece de suficiente fundamento. La utilización del plural es signo de un cierto grado de flexibilidad. Un Miembro de la OMC no está obligado a tener únicamente un solo tribunal o procedimiento, judicial, arbitral o administrativo, destinado a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a cuestiones aduaneras. Puede, por ejemplo, establecer un tribunal judicial, pero ofrecer también a los comerciantes la posibilidad de solicitar la revisión o rectificación por un tribunal arbitral (lo que puede ser más rápido y menos costoso) o establecer un tribunal administrativo para determinados tipos de revisión (por ejemplo, para las reclamaciones contra decisiones en materia de clasificación o valoración) y un tribunal judicial para otros (por ejemplo, con respecto a la imposición de sanciones). Ambas hipótesis serían compatibles con la utilización del plural en el párrafo 3 b) del artículo X. En cambio, la interpretación propuesta por las CE daría a la utilización del plural en el párrafo 3 b) del artículo X un sentido incompatible con el requisito de que las decisiones de los tribunales o procedimientos destinados a la revisión y rectificación de las medidas administrativas aduaneras rijan la práctica de "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas".

Es posible que un Miembro de la OMC establezca varios tribunales o procedimientos de revisión, cada uno de ellos para una parte diferente de su geografía, de manera compatible con el párrafo 3 b) del artículo X. Lo importante a este respecto es que los organismos del Miembro en su conjunto den efecto a las decisiones de esos tribunales, de forma que éstas rijan la práctica de los organismos del Miembro encargados de la aplicación administrativa de las leyes aduaneras y no den lugar a una aplicación no uniforme, lo que podría conseguirse si un Miembro contara con un único organismo aduanero centralizado para dar efecto en todo el territorio del Miembro a las decisiones de los tribunales que revisen sus medidas. En tal caso, cuando el tribunal de revisión de una región determinada emitiera una decisión acerca de la interpretación de las normas en materia de clasificación, por ejemplo, el organismo aduanero podría aplicar de inmediato la decisión del tribunal tanto en esa región como en todo el territorio aduanero. Ese marco sería compatible con el párrafo 3 b) del artículo X. En cambio, cuando -como ocurre en las CE- los tribunales de revisión abarcan determinados organismos y no se dispone de otro mecanismo para dar efecto a las decisiones de los distintos tribunales en relación con los demás organismos de las CE (es decir, las autoridades aduaneras de otros Estados miembros), la fragmentación geográfica de la revisión es incompatible con el párrafo 3 b) del artículo X.

39. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 79 de la declaración oral de las Comunidades Europeas en la primera reunión sustantiva en el sentido de que, por término medio, la revisión de los últimos tres asuntos relativos a la clasificación por la USITC requirió cuatro años.

En primer lugar, la tesis para la que las CE citaban los asuntos revisados por el USCIT se basaba en la premisa inexacta de que los Estados Unidos impugnan la prontitud (o falta de prontitud) de la revisión o rectificación por los tribunales de los Estados miembros de las CE. Como hemos expuesto en la respuesta a la pregunta 35 *supra*, los Estados Unidos no alegan que las CE darían cumplimiento a su obligación en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de no ser por el hecho de que la revisión de los tribunales de los Estados miembros no es pronta. En consecuencia, el aspecto que las CE tratan de destacar al hacer referencia al tiempo empleado para la resolución de los asuntos por el USCIT no es en absoluto pertinente.

Además, los actos del USCIT no son objeto de la presente diferencia. No obstante, para aclarar las cuestiones en litigio, en ella, los Estados Unidos responden lo siguiente:

En primer lugar, el análisis que hacen las CE en el párrafo 79 de su declaración oral prescinde del hecho de que en los tribunales estadounidenses el calendario de los procedimientos se establece, en un grado significativo, por consentimiento mutuo de las partes, bajo el control último del tribunal. Ese fue el enfoque seguido en los tres asuntos citados. Merece la pena destacar que el USCIT, después de la vista o del debate oral de los asuntos, adoptó sus decisiones en un plazo inferior, respectivamente, a cuatro meses (CE - Prueba documental 99), cuatro meses (CE - Prueba documental 100) y siete meses (CE - Prueba documental 101).

En segundo lugar, las CE exageran el tiempo que tardó el USCIT en resolver los asuntos citados al referirse al tiempo transcurrido desde la solicitud de citación formal a la resolución final. Aunque el procedimiento se inicia formalmente con la solicitud de la citación, en realidad no se inicia hasta que el demandante presenta una reclamación en la que se exponen sus alegaciones concretas, lo que puede ocurrir hasta 18 meses después de la solicitud de citación (o más tarde aún si así se solicita). Así, en el asunto recogido en la Prueba documental 101 presentada por las CE, por ejemplo, aunque se presentó una solicitud de citación en abril de 2001, ésta no fue perfeccionada por la presentación de una reclamación hasta abril de 2003.

40. ¿Cómo puede definirse el término "pronta" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994? Sírvanse explicar cómo debería aplicarse en la práctica esa definición.

El término "pronta" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT debe definirse conforme a su sentido corriente, en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del GATT de 1994. El sentido corriente de "pronta" pertinente en este contexto es "sin demora". Lo que se entiende por una medida adoptada sin demora dependerá necesariamente del contexto. El término "pronta", por sí mismo, no connota un determinado lapso de tiempo pertinente en todos los contextos. En el contexto de la revisión y rectificación de las medidas administrativas, la prontitud puede depender, por ejemplo, de la complejidad del asunto.

Desde el punto de vista práctico, no resulta necesario que este Grupo Especial determine el punto exacto a partir del cual la revisión y rectificación deja de ser pronta. Como se ha expuesto en la respuesta a la pregunta 35, los Estados Unidos no alegan que las CE darían cumplimiento al párrafo 3 b) del artículo X de no ser por el hecho de que la revisión y rectificación de los tribunales de los Estados miembros no es pronta, sino que lo que alegamos es que habida cuenta de que las decisiones de los tribunales de los Estados miembros no rigen la práctica de los organismos aduaneros de las CE en general, sino sólo de determinados organismos en el Estado miembro de que se trate, la existencia de esos tribunales no libera a las CE de la obligación que le impone el párrafo 3 b) del artículo X.

El único tribunal a cuyas decisiones puede darse efecto de forma que rijan la práctica de los organismos aduaneros de las CE en general es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. No obstante, habida cuenta de los actos que es preciso realizar para que una cuestión sea revisada por el Tribunal, la revisión de ese órgano no puede calificarse de forma plausible de revisión "sin demora". En consecuencia, aunque en otra diferencia el Grupo Especial puede enfrentarse a la cuestión del punto en el que hay que trazar la línea divisoria entre pronta y no pronta, este Grupo Especial no tiene necesidad de responder a esa cuestión.

PREGUNTAS PARA AMBAS PARTES

89. ¿Puede un sistema en el que corresponde fundamentalmente a un comerciante la reivindicación de sus derechos para conseguir la aplicación uniforme por las autoridades aduaneras de un determinado Miembro de la OMC (por ejemplo, mediante apelaciones para

reclamar contra las decisiones de esas autoridades aduaneras o el trato otorgado por ellas) dar cumplimiento a las obligaciones recogidas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

Resulta difícil responder a esta pregunta sin conocer otras características del sistema respecto del que se formula la hipótesis. Dependiendo de los mecanismos mediante los cuales los comerciantes reivindiquen sus derechos, ese sistema podría ajustarse al párrafo 3 a) del artículo X. Tal sería el caso, por ejemplo, del sistema en el que un comerciante, al encontrarse con un caso de aplicación no uniforme, pudiera recurrir conforme a derecho ante un organismo central y conseguir que la cuestión se resolviera en un plazo fijado relativamente breve. El caso opuesto sería un sistema en el que la única forma de conciliar conforme a derecho la falta de uniformidad fuera una prolongada revisión judicial de cada caso distinto de aplicación no uniforme. Un sistema de ese tipo no daría cumplimiento a la obligación del Miembro en virtud del párrafo 3 a) del artículo X.

90. En el párrafo 11.70 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Pieles y cueros* declaró que "la cuestión pertinente [para determinar si es o no aplicable el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994] es si el contenido de esa medida es de naturaleza administrativa o implica cuestiones sustantivas reguladas más adecuadamente en otras disposiciones del GATT de 1994". Sírvanse indicar cómo interpretan esta declaración, y en especial la referencia a una medida que "es de naturaleza administrativa". Sírvanse explicar además en forma práctica en qué sentido la distinción entre las medidas de naturaleza administrativa y las que no tienen esa naturaleza es pertinente para la *aplicación* del párrafo 3 a) del artículo X.

Los Estados Unidos entienden que la declaración citada de *Argentina - Pieles y cueros* aclara que el hecho de que los instrumentos para la aplicación de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X puedan adoptar la forma de medidas no las excluye del ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X. Ese párrafo exige que determinadas medidas de aplicación general especificadas se apliquen de manera uniforme. La obligación no afecta al contenido sustantivo de las medidas aplicadas, sino a la manera en que se aplican. En consecuencia, un Miembro puede (como ocurre con respecto a una parte de las alegaciones formuladas por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X en la presente diferencia) impugnar su *aplicación* sin impugnar su *contenido* (para utilizar los términos empleados en el informe *Argentina - Pieles y cueros*).

No obstante, la aplicación de medidas puede adoptar varias formas, incluidas algunas que son a su vez medidas. (Por ejemplo, una disposición que establece sanciones es una medida que es un instrumento de aplicación de otra ley o norma; es un medio de hacer cumplir esa ley o norma.) La declaración de *Argentina - Pieles y cueros* pone de relieve que las medidas pueden ser no sólo *objeto* de aplicación, sino también *instrumentos* de aplicación de otras medidas. Además, las medidas que son instrumentos (y no objeto de aplicación) tienen como "contenido" (utilizando los términos empleados por el Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Pieles y cueros*) la aplicación. Así pues, en la terminología de ese informe, las medidas que tienen naturaleza administrativa se examinan en el marco del párrafo 3a del artículo X del GATT en relación con su "contenido"; en cambio, las medidas que no aplican otras medidas se examinan en el marco del párrafo 3 a) del artículo X, no en relación con su "contenido", sino para determinar si se están aplicando de manera uniforme.

La definición de "administrative" (administrativa) es "[p]ertaining to management of affairs; executive. ..." (relativa a la gestión de los asuntos; ejecutiva […]).[69] A su vez "executive" (ejecutiva) significa "[p]ertaining to execution; having the function of putting something into effect. ..." (relativa

[69] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 28 (1993) (Estados Unidos - Prueba documental 54).

a la ejecución; que tiene la función de poner en efecto algo […]).[70] Así pues, una medida tiene naturaleza administrativa cuando tiene la función de poner algo en efecto. Dicho de otra forma, presume la existencia de una ley, norma u otra medida distinta y sirve para ejecutar o poner en práctica esa ley, norma u otra medida. A este respecto, también es adecuado el ejemplo de las medidas que establecen sanciones. Una medida que establece sanciones presupone necesariamente la existencia de una medida subyacente. Carece de sentido hablar de una medida que establece sanciones en abstracto, sin conexión con una medida concreta a la que se trata de dar efecto. Una medida que establece sanciones tiene la función de dar efecto a otras medidas subyacentes, por ejemplo, a leyes aduaneras. Otro ejemplo adecuado es el de las disposiciones de control. Esas disposiciones no existen con independencia de las normas cuyo cumplimiento se controla. Tienen la función de dar efecto a otras normas mediante la verificación de su cumplimiento.

Desde el punto de vista práctico, la naturaleza administrativa de una medida es pertinente a la evaluación del cumplimiento del párrafo 3 a) del artículo X, porque la medida prueba la forma en que las medidas a las que da aplicación se aplican. Si diferentes regiones dentro del territorio de un Miembro de la OMC utilizan medidas administrativas diferentes para dar efecto a las leyes aduaneras de ese Miembro, el Miembro en cuestión, por definición, no aplica su derecho aduanero de manera uniforme.

91. Sírvanse facilitar una copia de la lista de propuestas formuladas por los Estados Unidos que figura en el documento titulado "Elements of Potential EC Customs Reform", de fecha 22 de diciembre de 2004.

La lista se incluye con esta comunicación como prueba documental 49 presentada por los Estados Unidos. Como han explicado los Estados Unidos en la primera reunión del Grupo Especial, facilitamos esta lista a las CE en diciembre de 2004 con el propósito de llegar a una solución aceptable para ambas partes de la presente diferencia. Los Estados Unidos consideran que la aceptación de las propuestas que figuran en esta lista constituye una forma razonable para que las CE cumplan sus obligaciones en virtud del párrafo 3 del artículo X, pero no consideran que sea la única.

92. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 7 de la comunicación en calidad de tercero del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, en el que se aduce que no es pertinente al presente caso el criterio de las "diferencias administrativas de importancia secundaria" de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 a que hizo referencia el Grupo Especial del GATT en el asunto *CE - Manzanas de mesa*. ¿Depende la aplicabilidad de ese criterio de la existencia de determinadas circunstancias fácticas o de otra naturaleza? De ser así, sírvanse explicarlo y justificarlo, haciendo referencia a los términos específicos del párrafo 3 a) del artículo X.

Estamos de acuerdo con la declaración del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu por las razones expuestas en el párrafo 7 de su comunicación en calidad de tercero. Lo que se planteaba en la diferencia *CE - Manzanas de mesa* era el hecho de que diferentes Estados miembros de las CE exigían a los solicitantes cumplimentar formularios diferentes para obtener determinadas licencias. En la medida en que el Grupo Especial del GATT constató que las diferencias eran "mínimas", lo hizo porque no tenían un efecto importante sobre los comerciantes. No afectaban a la deuda de los comerciantes derivada de los derechos de aduana ni a otros aspectos de su capacidad de introducir mercancías en el territorio de las CE y distribuirlas y venderlas en las CE. En cambio, en la presente diferencia, hemos aportado pruebas de un sistema que genera incontables divergencias de aplicación en cuestiones que corresponden a aspectos esenciales de la administración aduanera y afectan a la deuda de los comerciantes derivada de los derechos de aduana, así como a

[70] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 877 (1996) (Estados Unidos - Prueba documental 55).

otros aspectos de sus actividades y que no subsana esas divergencias, las cuales difícilmente pueden calificarse de "diferencias administrativas de importancia secundaria".

93. En el párrafo 21 de su declaración oral en la primera reunión sustantiva, los Estados Unidos sostienen que las leyes aduaneras pueden aplicarse mediante instrumentos que son a su vez leyes, como ocurre en el caso de las leyes que imponen sanciones.

a) Sírvanse formular observaciones al respecto.

b) ¿Puede aplicarse este argumento a todas las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994?

c) En caso afirmativo, sírvanse indicar los tipos de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general de que se trate.

d) ¿Cuáles serían las repercusiones y el efecto práctico de una interpretación de esa naturaleza en relación con la administración de cuestiones distintas de las aduaneras?

Con respecto a la parte a) de esta pregunta, remitimos al Grupo Especial a nuestras respuestas a las preguntas 32 y 90.

Con respecto a las partes b) y c), es importante recordar que las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 son objeto de aplicación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X, es decir, son las medidas que son aplicadas. En principio, cualquiera de esas medidas puede ser aplicada mediante instrumentos que son a su vez leyes, reglamentos u otras medidas. No consideramos que haya ninguna base para establecer una distinción entre las medidas de aplicación general a que se refiere el párrafo 1 del artículo X susceptibles de aplicación mediante otras medidas de naturaleza administrativa y las medidas de aplicación general *no susceptibles* de ser aplicadas de esa forma.

En lo que respecta a la parte d) de la pregunta no consideramos que la interpretación propuesta tenga repercusiones o efectos prácticos en la administración *per se*. De conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X todas las medidas de aplicación general a que se refiere el párrafo 1 del artículo X deben ser aplicadas de manera uniforme. Esta obligación es independiente de la forma que adopte la aplicación de una medida.

El argumento expuesto en el párrafo 21 de nuestra declaración oral refutaba la tesis de las CE de que las diferencias en las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de control exceden del ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X porque son diferencias de contenido y no diferencias de aplicación. Las CE dan por supuesto indebidamente que, cuando las disposiciones se manifiestan como leyes, reglamentos u otras medidas no pueden en absoluto servir a la aplicación de otras medidas y ser prueba de la falta de uniformidad en la aplicación de esas otras medidas. En consecuencia, las CE sostienen que con respecto a las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de control, que en las CE son establecidos independientemente por cada uno de los Estados miembros, la única obligación dimanante del párrafo 3 a) del artículo X es la de que cada Estado miembro aplique sus propias disposiciones que establecen sanciones y sus propios procedimientos de control de manera uniforme dentro de su territorio.

Hemos respondido que el argumento de las CE pasa por alto el hecho de que las medidas pueden cumplir también una función administrativa. Las CE prescinden de la naturaleza de las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de control como instrumentos para la aplicación de la normativa aduanera comunitaria. Desde este punto de vista, las diferencias en las

disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de control entre Estados miembros son prueba de la falta de uniformidad en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria.

Al debatir este punto en la primera reunión del Grupo Especial, las CE indicaron que si el Grupo Especial aceptara el argumento de los Estados Unidos con respecto a medidas tales como las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de control, ello tendría consecuencias de amplio alcance para otras cuestiones distintas de las aduaneras abarcadas por el párrafo 1 del artículo X. Las CE señalaron que, además de las cuestiones aduaneras, el párrafo 1 del artículo X abarca cuestiones que suelen estar reguladas a niveles regionales de gobierno, como la venta, la distribución, el transporte y el seguro de las importaciones. Las CE indicaron que el argumento de los Estados Unidos acerca de las sanciones y los procedimientos de control exigiría también la armonización en esas otras esferas.

El vicio principal de que adolece el argumento de las CE consiste en que prescinde de la distinción entre medidas que son objeto de aplicación y medidas que sirven para la aplicación de otras medidas. Las cuestiones distintas de las aduaneras a que se refiere el párrafo 1 del artículo X -como las medidas de aplicación general que se refieren a la venta, la distribución, el transporte y el seguro de las importaciones- son distintas de las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de control en la medida en que son objeto de aplicación y no medidas que cumplen una función administrativa. Como se ha explicado en las respuestas a las preguntas 29, 32 y 90 *supra*, las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de control presuponen necesariamente la existencia de una serie de leyes o normas subyacentes y sirven para dar efecto a esa serie de leyes o normas. Por ello son de naturaleza administrativa. En cambio, el párrafo 3 a) del artículo X exige que las propias medidas que se refieran a la venta, la distribución, el transporte y el seguro de las importaciones sean aplicadas de manera uniforme en cualquiera de las regiones del territorio de un Miembro de la OMC en las que se apliquen. En consecuencia, la aceptación del argumento de los Estados Unidos relativo a las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de control no tendría la consecuencia drástica que sugieren las CE de obligar a la armonización en una amplia gama de esferas distintas de la esfera aduanera.

94. En lo que respecta a la interpretación del término "aplicación" en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, ¿consideran las partes que debería establecerse una distinción entre los procedimientos administrativos aplicables a los comerciantes y el trato otorgado a éstos, de una parte, y las decisiones sustantivas y los resultados de los procesos administrativos que afectan a los comerciantes, de otra? En caso afirmativo, sírvanse explicar el fundamento jurídico para establecer esa distinción.

Los Estados Unidos no consideran que en el párrafo 3 a) del artículo X haya ninguna base para establecer la distinción que se indica en esta pregunta. El párrafo 3 a) del artículo X exige uniformidad en la aplicación y es indiferente a las diversas formas que puede adoptar la aplicación. La pregunta identifica dos formas que puede adoptar la aplicación, los procedimientos administrativos aplicables a los comerciantes y el trato otorgado a estos, de una parte, y las decisiones sustantivas y los resultados de los procesos administrativos que afectan a los comerciantes, de otra. Con la primera forma entendemos que el Grupo Especial se refiere, por ejemplo, a los procedimientos que establecen sanciones y procedimientos de control. Con la segunda, entendemos que el Grupo Especial se refiere, por ejemplo, a las decisiones particulares con respecto a la clasificación y la valoración. Un Miembro de la OMC no cumpliría la obligación de aplicación uniforme si mantuviera la uniformidad con respecto a una de esas formas de aplicación, pero no con respecto a la otra.

PREGUNTAS PARA LAS PARTES Y LOS TERCEROS

109. ¿Cómo debe interpretarse el término "aplicará" a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

La interpretación del término "administer" (aplicar [á]) se analiza en los párrafos 32 a 39 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos. Remitimos al Grupo Especial a nuestras respuestas a las preguntas 1, 12 y 23 *supra*. Por último, remitimos al Grupo Especial a nuestra respuesta a la pregunta 9, en la que analizamos el sentido del término conexo "administrative" (administrativa).

110. ¿Significa la obligación de uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 que no debe haber posibilidad de ejercer facultades discrecionales en la aplicación de leyes aduaneras o que esa posibilidad debe tener sólo un alcance limitado?

No es cierto que la posibilidad de ejercer facultades discrecionales lleve siempre a la aplicación no uniforme de las leyes aduaneras, con infracción del párrafo 3 a) del artículo X. Por ejemplo, es probable que el ejercicio práctico habitual de facultades discrecionales (por ejemplo, en relación con la decisión de inspeccionar o no un envío determinado, de realizar o no un control de un importador determinado o de solicitar o no documentación complementaria para respaldar una solicitud de clasificación) no dé lugar a una falta de uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras.

111. ¿Se tiene en cuenta a los efectos de la obligación de uniformidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 el tiempo que requiere la solución de una cuestión concreta (incluidos los supuestos de divergencias en materia de aplicación)? En caso afirmativo, sírvanse explicar las razones, con referencia a los términos específicos del párrafo 3 a) del artículo X.

El tiempo que requiere la solución de una cuestión concreta es un aspecto que ha de tenerse en cuenta a los efectos de la obligación de uniformidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El tiempo que requiere la solución de una cuestión es pertinente a la eficacia del párrafo 3 a) del artículo X. Si se permitiera a un Miembro que dejara que la falta de uniformidad en la aplicación persistiera durante un período indefinido, siempre que procediera finalmente a subsanar la falta de uniformidad, se privaría de sentido a la obligación de aplicación uniforme del apartado 3 a) del artículo X, lo que estaría en contra del principio de efectividad en la interpretación de los tratados, reconocido sistemáticamente por el Órgano de Apelación.[71]

Un ejemplo de la pertinencia del tiempo al examen del cumplimiento de la obligación de aplicación uniforme es el caso de los diferentes enfoques adoptados en las CE con respecto al trato a efectos de valoración en aduana de los gastos de reparación de vehículos cubiertos por la garantía.[72] En su informe sobre la aplicación de las normas de valoración en las CE, el Tribunal de Cuentas de las CE declaró que había señalado esta cuestión a la atención de la Comisión en 1990.[73] En su

[71] *Véanse, por ejemplo*, los informes del Órgano de Apelación, *Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado*, WT/DS121/AB/R, párrafo 88 (adoptado el 12 de enero de 2000); *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, página 12 (adoptado el 1º noviembre de 1996); y *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional*, WT/DS2/AB/R, página 25 (adoptado el 20 de mayo de 1996).

[72] *Véase* la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 88-89 (donde se analiza el informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafos 73 y 74 (Estados Unidos - Prueba documental 14)).

[73] Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración, párrafo 73 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

Primera comunicación escrita, las CE afirman que abordaron esa falta de uniformidad mediante la adopción de un reglamento en 2002.[74] Así, aunque aparentemente se subsanó la falta de uniformidad en la aplicación, tardó doce años en subsanarse. Los Estados Unidos sostienen que una interpretación del párrafo 3 a) del artículo X conforme a la cual se suponga que un Miembro aplica sus leyes de manera uniforme cuando concilia las diferencias de aplicación doce años después de que se señale el problema a la atención de las autoridades competentes anularía la obligación de aplicación uniforme, en contra del principio de efectividad.

112. Con respecto al objetivo de la OMC de seguridad y previsibilidad del entorno comercial internacional (al que ha hecho recientemente referencia el Órgano de Apelación en el contexto de los compromisos arancelarios en el párrafo 243 de su informe en *CE - Trozos de pollo*, WT/DS269/AB/R y WT/DS286/R), sírvanse explicar si es pertinente a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, por qué razones y en qué sentido.

Como hemos analizado en nuestra declaración inicial en nuestra primera reunión del Grupo Especial, las CE proponen una interpretación extraordinariamente restrictiva del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[75] Las CE aducen que la obligación de aplicación uniforme está sujeta a diversas limitaciones, cuyo efecto neto es privar de toda efectividad a la obligación de aplicación uniforme. Así, las CE califican el párrafo 3 a) del artículo X como una prescripción que establece "normas mínimas", matizada por las "circunstancias prácticas" y que sólo se infringe cuando la aplicación no uniforme pone de manifiesto una estructura concreta.[76]

El Grupo Especial debe rechazar la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X propuesta por las CE, por cuanto carece de toda base en el texto y es incompatible con el principio de efectividad. En este sentido, entrañaría una reducción de una obligación establecida en un acuerdo abarcado, en contra de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD. Como se aclara en ese párrafo, el sistema de solución de diferencias aporta seguridad y previsibilidad mediante la interpretación adecuada de los acuerdos abarcados y no mediante el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones de los Miembros.[77]

113. ¿Son pertinentes a la interpretación y aplicación de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT de 1994 las expectativas de los comerciantes? En caso afirmativo, sírvanse explicar por qué y en qué sentido, con referencia al texto específico de esos párrafos.

Las expectativas de los comerciantes son pertinentes a la interpretación y aplicación de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X. De conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados del derecho internacional público, un tratado debe interpretarse conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado.[78] El texto y el contexto de los párrafos 3a y 3 b) del artículo X indican que el objeto principal del artículo X en su conjunto es la equidad para los comerciantes. Así, por ejemplo, el párrafo 1 del artículo X obliga a los Miembros a publicar determinadas medidas de

[74] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 397.

[75] Declaración oral de los Estados Unidos, primera reunión del Grupo Especial, párrafos 14 a 23.

[76] *Véase* la declaración oral de las CE, primera reunión del Grupo Especial, párrafo 24; Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 235, 238 y 241.

[77] Los Estados Unidos señalan también que cuestionan la referencia a la "seguridad y previsibilidad del entorno comercial internacional" como objeto y fin del Acuerdo sobre la OMC.

[78] *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados*, hecha en Viena, 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331, 8 ILM 679 (julio de 1969) ("VCLT"), párrafo 1 del artículo 31.

aplicación general "rápidamente a fin de que los Gobiernos *y los comerciantes* tengan conocimiento de ellos" (sin cursivas en el original). Como señaló el Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*, "aunque es normal que el GATT de 1994 exija este tipo de transparencia entre Miembros, es significativo que el párrafo 1 del artículo X no se limite a ello y se refiera expresamente a la importancia de la transparencia con respecto a los comerciantes individuales […]. En consecuencia, podemos observar que el párrafo 3 a) del artículo X requiere un examen de los efectos reales que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio".[79]

De forma análoga, el párrafo 3 a) del artículo X no sólo exige la aplicación uniforme, sino también la aplicación imparcial y razonable de las medidas aduaneras, y el párrafo 3 b) de ese artículo exige que se establezcan tribunales o procedimientos para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. El Órgano de Apelación ha descrito en *Estados Unidos - Camarones* esas normas como normas "de transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales".[80] Los beneficiarios evidentes de las normas de transparencia y equidad procesal son los comerciantes.

Además, merece la pena destacar que la segunda frase del párrafo 3 b) del artículo X exige que la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras se rija por las decisiones de los tribunales o procedimientos de revisión "a menos que se interponga un recurso ante una jurisdicción superior, *dentro del plazo prescrito para los recursos presentados por los importadores*" (sin cursivas en el original). Dicho de otra forma, un organismo aduanero puede recurrir contra la decisión de un tribunal, y no es necesario que la decisión de un tribunal rija la práctica de un organismo mientras esté pendiente el recurso, pero no debe darse al organismo más tiempo para interponer su recurso que el que se da a los importadores para presentar sus recursos. La referencia al plazo prescrito para los recursos presentados por los importadores como pauta es otra prueba más de que el texto y el contexto de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X respaldan la idea de que se presta una atención especial a los comerciantes.

114. ¿Requiere la obligación recogida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 la uniformidad *general* de la aplicación o la uniformidad de la aplicación *en todos y cada uno de los casos*? ¿Depende la respuesta a esa pregunta de la naturaleza de la impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X? De ser así, sírvanse explicarlo. En caso de que sea admisible de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X una uniformidad general, ¿cuál sería el umbral práctico/cuantitativo y/o el punto de referencia para demostrar que se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X?

El párrafo 3 a) del artículo X no especifica si requiere la uniformidad general de la aplicación o la uniformidad de la aplicación en todos y cada uno de los casos. No obstante, en la presente diferencia, los Estados Unidos no impugnan el hecho de que las CE no hayan logrado la uniformidad de la aplicación en todos y cada uno de los casos, sino de que no hayan logrado la uniformidad general de la aplicación de sus leyes aduaneras.

Por las razones expuestas en nuestras respuestas a las preguntas 16, 24 y 33 *supra*, no es necesario identificar un umbral práctico/cuantitativo ni un punto de referencia para demostrar que se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X. Lo que han demostrado los Estados Unidos es que el sistema de aplicación del derecho aduanero en las CE, integrado por 25 autoridades independientes, sin que haya ningún organismo u otro mecanismo central que concilie las divergencias de aplicación entre esas autoridades, no puede por su propia naturaleza lograr la aplicación uniforme que el párrafo 3 a) del artículo X exige. Dado que la prueba de la forma en que está diseñado y funciona este

[79] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafos 11.76 y 11.77.

[80] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Camarones*, párrafo 183.

sistema es la que demuestra que las CE incumplen su obligación, lo pertinente es *el hecho* de que se producen divergencias y éstas no son conciliadas, y *no la frecuencia* de determinados tipos de divergencias.

115. Sírvanse formular observaciones sobre la afirmación que hace el Japón en el párrafo 8 de su comunicación en calidad de tercero en el sentido de que, al evaluar la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, es necesario que el Grupo Especial analice si existen las supuestas divergencias que alegan los Estados Unidos, y de existir, si existen en un grado que se consideraría incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X a la luz del sistema aduanero concreto considerado en su conjunto.

Nos permitimos remitir al Grupo Especial a las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 16, 24, 33 y 114 *supra*. La propuesta del Japón de evaluar la alegación de los Estados Unidos "a la luz del sistema aduanero concreto considerado en su conjunto" entrañaría el riesgo de establecer un criterio distinto conforme al párrafo 3 a) del artículo X para cada uno de los Miembros de la OMC. Está en litigio uno de los aspectos más importantes del sistema de comercio basado en normas, y la evaluación de si se logra o no la uniformidad de la aplicación no puede varias de esa manera.

116. En el párrafo 2 de la declaración oral del Japón en la sesión destinada a los terceros de la primera reunión sustantiva, el Japón se basa en las "normas mínimas" de transparencia y equidad procesal a que hizo referencia el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* para aducir que "una aplicación de los reglamentos que careciera de 'uniformidad' [a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994] sería en general injusta, parcial, sesgada, tendenciosa y opaca -dicho de otra forma, no equitativa y no transparente". Con arreglo a esta forma de razonar, ¿serían aplicables los requisitos de transparencia y equidad procesal a: i) los procesos o el trato de los comerciantes en el contexto de la aplicación de las leyes aduaneras; y/o ii) las decisiones aduaneras sustantivas a las que están sujetos los comerciantes?

Remitimos al Grupo Especial a nuestra respuesta a la pregunta 94 *supra*.

117. En el párrafo 7.268 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* (WT/DS184/R) declaró: "Observamos que el Japón no ha alegado en ningún momento, ni mucho menos ha demostrado, que el proceso de formulación de decisiones en relación con las cuestiones concretas que plantea haya tenido una estructura que indique que la legislación antidumping estadounidense no se aplica de manera uniforme, imparcial y razonable [de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994]". Sírvanse formular observaciones sobre la constatación del Grupo Especial de que para demostrar la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X es necesario demostrar una determinada estructura del proceso de formulación de decisiones.

Remitimos al Grupo Especial a nuestra respuesta a la pregunta 9 *supra*.

118. ¿Qué significan las palabras "que se refieran a" del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? Las normas que regulan el procedimiento operativo de los organismos que supervisan la aplicación de leyes aduaneras o intervienen de alguna forma en ella, como, por ejemplo, el Comité del Código Aduanero de las CE ¿reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general "que se refieren a" la clasificación o la valoración de los productos a efectos aduaneros?

Las palabras "pertaining to" (que se refieran a) del párrafo 1 del artículo X tienen su sentido corriente que, en este contexto es "[h]av[ing] reference or relation to" (que hacen referencia o tienen

relación con).[81] Esas palabras se distinguen de la palabra "affecting" el otro término conjuntivo utilizado en la primera frase del párrafo 1 del artículo X. Así, en la primera frase se describen dos categorías de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general: 1) las que se refieren a ciertas materias y 2) aquéllas que afectan a otras. El término "affecting" utilizado en este párrafo significa "influenc[ing]" (que tienen influencia en).[82]

A juicio de los Estados Unidos, es poco probable que las normas que rigen los procedimientos operativos de los órganos que supervisan la aplicación de las leyes aduaneras o intervienen de alguna forma en ella -como, por ejemplo, el Comité del Código Aduanero de las CE- reúnan las condiciones necesarias para ser consideradas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general "que se refieren a" la clasificación o la valoración de los productos a efectos aduaneros. Esas normas que rigen los procedimientos operativos pueden carecer de la necesaria relación con la clasificación y la valoración para que pueda considerarse que "se refieren" a ellas.

119. Las leyes/disposiciones que establecen sanciones, aplicables a la violación de leyes aduaneras ¿están comprendidas dentro de las medidas a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? De ser así, sírvanse explicarlo, con referencia a los términos pertinentes de ese párrafo.

Remitimos al Grupo Especial a nuestras respuestas a las preguntas 29 y 32 *supra*.

120. ¿Cuál es la relevancia del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

En su primera comunicación, las CE sugieren que el párrafo 12 del artículo XXIV limita en cierta medida sus obligaciones en virtud del párrafo 3 a) del artículo X.[83] Ello no es así. El párrafo 12 del artículo XXIV obliga a cada uno de los Miembros de la OMC a "tomar las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que, dentro de su territorio, los Gobiernos y autoridades regionales y locales observen las disposiciones del [GATT]". De esta forma se reconoce que en el caso de ciertos Miembros de la OMC, determinadas cuestiones reglamentarias a las que afectan las obligaciones del GATT pueden exceder constitucionalmente de la competencia del gobierno central. En esos casos, el gobierno central está obligado a tomar las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que los gobiernos regionales y locales cumplan las obligaciones pertinentes. Como las propias CE han aducido en anteriores diferencias en el marco del GATT[84], se trata de una disposición matizada relativa a la aplicación de determinadas obligaciones, y no de una dispensa general del párrafo 3 a) del artículo X ni de una limitación de su aplicabilidad. De hecho, los grupos especiales que han examinado el párrafo 12 del artículo XXIV han reconocido sistemáticamente que debe

[81] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen II, página 2173 (1993) (Estados Unidos - Prueba documental 56).

[82] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 35 (1993) (Estados Unidos - Prueba documental 57).

[83] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 220.

[84] *Véanse, por ejemplo*, el informe del Grupo Especial del GATT, *Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por organismos provinciales de comercialización canadienses*, L/6304, IBDD 35S/37, párrafo 3.52 (adoptado el 22 de marzo de 1988).

interpretarse de forma restrictiva, para evitar "desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los Estados unitarios y aquellos de los Estados federales".[85]

121. Con referencia a los términos específicos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, sírvanse explicar si la obligación de garantizar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas está o no limitada a las revisiones en primera instancia por las autoridades administradoras.

El párrafo 3 b) del artículo X se refiere a los tribunales o procedimientos destinados a la "pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a cuestiones aduaneras". Con arreglo a esta disposición son las medidas "administrativas" las acreedoras a una pronta revisión y rectificación, y no los actos jurisdiccionales de tribunales o procedimientos inferiores. La referencia indica que la obligación de pronta revisión y rectificación se aplica al primer tribunal o procedimiento que un Miembro establece a efectos de revisión y rectificación que cumpla el requisito del párrafo 3 b) del artículo X de independencia de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. La referencia, distinta, que se hace en el párrafo 3 b) del artículo X a los recursos "ante una jurisdicción superior, dentro del plazo prescrito para los recursos presentados por los importadores" avala esta interpretación.

122. ¿Qué significa "rectificación" en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

Entendemos que el sentido corriente del término "correction" (rectificación) utilizado en el párrafo 3 b) del artículo X es en este caso "[t]he action of putting right or indicating errors" (la acción de corregir o indicar errores).[86] Los tribunales o procedimientos que establece un Miembro de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo X deben estar facultados, no sólo para revisar las medidas administrativas, sino también para rectificar los errores cometidos por los organismos administrativos cuyos actos revisan.

123. ¿Cuál es la relación jurídica, en su caso, entre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3 b) de ese artículo?

Tanto el párrafo 3 a) como el párrafo 3 b) del artículo X establecen obligaciones relativas a la transparencia y a la equidad procesal para los comerciantes. Desde el punto de vista jurídico, cada apartado forma parte del contexto para la interpretación de los demás, de conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados recogidas en el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena.

[85] Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá -Medidas que afectan a la venta de monedas de oro*, L/5863, párrafos 63-64 (17 de septiembre de 1985) (no adoptado); *véase también* el informe del Grupo Especial del GATT, *Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta*, IBDD 39S/242, párrafo 5.79 (adoptado el 19 de julio de 1992) (en el que se apoyó una interpretación restrictiva del párrafo 12 del artículo XXIV).

[86] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 516 (1993) (Estados Unidos - Prueba documental 58).

ANEXO A-2

RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de septiembre de 2005)

1. Con frecuencia en los Estados Unidos cuestiones que se refieren a los impuestos u otras cargas o afectan a la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de los productos están reguladas por leyes o reglamentos de los 50 Estados, cuyo contenido puede variar considerablemente. ¿Consideran los Estados Unidos que la aplicación de esas leyes y reglamentos estatales es uniforme, como exige el párrafo 3 a) del artículo X? Sírvanse facilitar explicaciones al respecto.

Los Estados Unidos señalan que la aplicación de las medidas de los Estados Unidos no está en litigio en la presente diferencia. Además, observamos que la pregunta de las Comunidades Europeas (CE) no afecta al derecho aduanero, por lo que no corresponde al tipo de medidas cuya aplicación está en litigio en el presente procedimiento.[1] Por último, no entendemos que las CE sostengan que su derecho aduanero sustantivo varía según los lugares dentro del territorio de las Comunidades Europeas.

2. ¿Consideran los Estados Unidos que el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos ha proporcionado una pronta revisión en los casos a los que se hace referencia en las Pruebas documentales 99 a 101 presentadas por las Comunidades Europeas? Sírvanse facilitar explicaciones al respecto.

Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 39 del Grupo Especial.

3. Según la ley de los Estados Unidos (19 US 1515 [a], CE - Prueba documental 66), la Aduana de los Estados Unidos adoptará normalmente una decisión sobre una reclamación dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la reclamación se haya presentado. ¿Consideran los Estados Unidos que esta disposición está en conformidad con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT? Sírvanse facilitar explicaciones al respecto.

Al igual que en el caso de la pregunta 2, esta pregunta parece basarse en la premisa errónea de que los Estados Unidos impugnan la prontitud (o falta de prontitud) de la revisión y rectificación por los tribunales de los Estados miembros de las CE. Además, las prácticas de la Aduana de los Estados

[1] Por otra parte, la premisa en que se basa esta pregunta es inexacta, en la medida en que el alcance de las leyes y reglamentos a los que se refiere no corresponde al texto del artículo X del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* ("GATT de 1994"). La obligación de aplicación uniforme del párrafo 3 a) del artículo X afecta a la aplicación de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X. A su vez, las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X no son leyes, reglamentos, decisiones y resoluciones que se refieran a los "impuestos u otras cargas", como da a entender esta pregunta. Tampoco son leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones que se refieran a la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización "de los productos" en general, como da a entender también la pregunta de las CE. En ambos casos el párrafo 1 del artículo X establece una relación con la "importación o exportación", de la que prescinde la pregunta.

Unidos no son objeto de la presente diferencia. No obstante, para aclarar las cuestiones en litigio en ella, los Estados Unidos responden lo siguiente:

Los Estados Unidos consideran que su sistema para la revisión y rectificación de las decisiones administrativas en cuestiones aduaneras es enteramente compatible con sus obligaciones en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994. Con arreglo a la disposición citada en esta pregunta, la reclamación presentada por un importador sirve para mantener la situación existente hasta que se adopte una decisión. Si el importador resulta vencedor, tiene derecho a los intereses devengados sobre cualesquiera cantidades que hayan de reembolsarse. Así pues, se indemniza plenamente al importador.

Además, los importadores no están obligados a seguir el procedimiento de reclamación a que se refiere esta pregunta. Un comerciante puede solicitar que el puerto aduanero adopte una resolución acelerada sobre una reclamación. Si no se acepta la reclamación en el plazo de 30 días, ésta se presume denegada. En ese momento puede recurrirse contra la denegación presunta ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USCIT) sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.

4. Con arreglo al párrafo 3 b) del artículo X del GATT, los tribunales o procedimientos destinados a la revisión de las decisiones aduaneras serán independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. ¿Consideran los Estados Unidos que la revisión que proporciona la Aduana de los Estados Unidos está en conformidad con este requisito? Sírvanse facilitar explicaciones al respecto.

Los Estados Unidos señalan que la revisión de las decisiones administrativas en cuestiones aduaneras en los Estados Unidos no es objeto de la presente diferencia. No obstante, para aclarar las cuestiones en litigio en ella, los Estados Unidos responden lo siguiente:

La revisión de la Aduana de los Estados Unidos está en conformidad con el requisito del párrafo 3 b) del artículo X de que un tribunal o procedimiento destinado a la revisión y a la rectificación sea independiente de los organismos encargados de la aplicación de las medidas administrativas. El departamento de la Aduana encargado de la revisión de las medidas administrativas en materia aduanera es el Servicio de Reglamentaciones y Resoluciones, que forma parte de la Oficina de Aduanas y Protección en Frontera. Ese Servicio es independiente funcionalmente de los puertos aduaneros, cuyas decisiones revisa. Está sujeto a la jurisdicción del Comisario Asistente de Aduanas para el Servicio de Reglamentaciones y Resoluciones, en tanto que los puertos están sometidos a la jurisdicción del Comisario Asistente para Operaciones sobre el Terreno. Y en su calidad de departamento separado e independiente de los puertos, el Servicios de Reglamentaciones y Resoluciones proporciona de hecho una revisión objetiva e imparcial de las medidas administrativas.

5. ¿Consideran los Estados Unidos que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT obliga a los Miembros de la OMC a instituir o mantener un tribunal para la revisión de las decisiones aduaneras con competencia en todo el territorio del Miembro de la OMC de que se trate? ¿Consideran los Estados Unidos que ese tribunal debe ser un tribunal de primera instancia o puede ser también un tribunal de instancia superior? Sírvanse facilitar explicaciones al respecto.

Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 35 y 121 del Grupo Especial.

ANEXO A-3

RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de septiembre de 2005)

PREGUNTAS PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS:

41. En el derecho comunitario, ¿son las Comunidades Europeas y/o los Estados miembros de las Comunidades Europeas responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

En el derecho comunitario, tanto las instituciones de las Comunidades Europeas (CE) como las autoridades de los Estados miembros son responsables, dentro del ámbito de su esfera de competencia, del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT.

En el ámbito del derecho internacional, las CE son las únicas responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT.

42. En el derecho comunitario, ¿son las Comunidades Europeas y/o los Estados miembros de las Comunidades Europeas responsables de la aplicación de: a) el Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, b) el Reglamento (CEE) Nº 2454/93, de la Comisión, de 2 de julio de 1993 y c) el arancel integrado de las Comunidades Europeas establecido por el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987?

En el derecho comunitario, tanto las instituciones de las CE como las autoridades de los Estados miembros son responsables, dentro de su esfera de competencia, de la aplicación de los instrumentos mencionados en la pregunta del Grupo Especial.

43. En el acta de la reunión del OSD celebrada el 21 de marzo de 2005 (WT/DSB/M/186, párrafo 29) consta que las Comunidades Europeas manifestaron que las CE tenían en vigor normas aduaneras y medidas institucionales y administrativas armonizadas -aplicadas por la Comisión y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- con el propósito de evitar las prácticas divergentes. Con respecto a esas observaciones, sírvanse explicar a qué "prácticas divergentes" se referían las Comunidades Europeas.

Las CE se referían a las posibles prácticas divergentes que pudiera haber en la esfera de la administración aduanera cuando las CE no disponían de los instrumentos actualmente en vigor para garantizar una aplicación uniforme. Las CE no se referían a ningún ejemplo actual de prácticas divergentes.

44. En el párrafo 22 de su Declaración oral en la primera reunión sustantiva, las Comunidades Europeas afirman que, cuando hay leyes y reglamentos a nivel subfederal, todo lo que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es que esas leyes se apliquen de manera uniforme en la zona en que son aplicables. ¿En qué sentido es pertinente este argumento en la esfera de la legislación aduanera de las CE que corresponde a la competencia exclusiva de la Comunidad?

Este argumento no es pertinente cuando las CE tienen la competencia exclusiva y no existen leyes de los Estados miembros. Sin embargo, las alegaciones estadounidenses se refieren también a

esferas sobre las que las CE no tienen competencia exclusiva o sobre las que han legislado los Estados miembros. Como ejemplo cabe citar las sanciones de las infracciones de las leyes aduaneras, que son fijadas por la legislación de los Estados miembros de las CE. Otro ejemplo pueden ser las leyes administrativas generales de los Estados miembros cuando tales leyes son aplicables a las actividades de las autoridades aduaneras en esferas que no han sido armonizadas por la legislación de las CE.

45. En el párrafo 16 de su Declaración oral en la primera reunión sustantiva, los Estados Unidos manifiestan que "las CE hacen referencia a una limitación de las 'realidades prácticas', pero no identifican ningún criterio que permita evaluar esa limitación. De forma análoga, aunque afirman que 'es de hecho inevitable un grado mínimo de falta de uniformidad' no ofrecen ningún criterio para apreciar el grado de falta de uniformidad que puede existir sin que haya una contradicción con lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X". Sírvanse responder a las observaciones formuladas por los Estados Unidos.

Las CE no están de acuerdo con la observación de los Estados Unidos. En el párrafo 241 de su Primera comunicación escrita, las CE han descrito la norma aplicable del siguiente modo:

> En consecuencia, no es posible establecer si un Miembro determinado cumple el requisito de "uniformidad" atendiendo exclusivamente a un ejemplo individual de su práctica, sino que la uniformidad sólo puede evaluarse en función de una pauta global de la administración aduanera. Solamente en caso de que pueda demostrarse, sobre la base de esa pauta global, que la aplicación por un Miembro de la OMC de sus leyes aduaneras no es uniforme, habrá una infracción de la norma del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Este criterio se basa plenamente en las constataciones del Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*.[1] El Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión* adoptó el mismo planteamiento.[2]

Varios terceros han defendido que se aplique un criterio muy similar con respecto al párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Por ejemplo, Australia ha alegado que "dada la naturaleza compleja de los sistemas aduaneros, pueden surgir divergencias de vez en cuando, pero éstas no deben ser tan generalizadas ni frecuentes como para que la administración aduanera sea incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT".[3] Igualmente el Japón ha sostenido lo siguiente[4]:

> Por consiguiente, si el Grupo Especial considera que los casos a los que hacen referencia los Estados Unidos son divergencias, es necesario profundizar el examen para determinar si la aplicación que hacen las CE carece de uniformidad hasta el "grado" en que sería incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Esa determinación debe basarse en la consideración de si los casos mencionados por los Estados Unidos son resultados aislados de la aplicación de las leyes aduaneras de las CE o pruebas de una falta de uniformidad en la aplicación general de los

[1] Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, párrafo 7.268.

[2] Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión*, párrafo 7.310.

[3] Declaración oral de Australia, párrafo 6.

[4] Declaración oral del Japón, párrafo 5.

> reglamentos aduaneros de las CE que puede tener una repercusión importante en la situación en materia de competencia.

Cabe señalar que en otros casos los propios Estados Unidos defendieron un criterio muy similar. Por ejemplo, en el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* alegaron lo siguiente[5]:

> Los Estados Unidos advierten además que debe distinguirse entre la forma en que se ha tratado un caso determinado y la aplicación global de las leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo 3 del artículo X. Los Estados Unidos ponen de relieve que el Japón no aduce que la práctica global en materia antidumping de los Estados Unidos sea arbitraria o no se den en ella las necesarias garantías de procedimiento, sino que únicamente impugna la forma en que se ha tratado este caso.

Por consiguiente, los Estados Unidos se equivocan al sostener que las CE no proponen ninguna norma de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. La norma que proponen es la que encuentra apoyo en la jurisprudencia existente con respecto al párrafo 3 a) del artículo X del GATT y que ha sido adoptada por numerosos miembros de la OMC, incluidos los propios Estados Unidos.

En qué momento habrá de considerarse que los casos de falta de uniformidad son tan generalizados y frecuentes que constituyen una pauta general de falta de uniformidad es algo que habrá de decidirse en función de los hechos que concurran en cada caso concreto, teniendo en cuenta las características del sistema de administración aduanera en cuestión. Sin embargo, el hecho de que sea difícil definir en términos cuantitativos y en abstracto este criterio no quiere decir que no pueda ser aplicado por un grupo especial.

Los Estados Unidos no han presentado ni un solo ejemplo de falta de uniformidad en el sistema de administración aduanera de las CE ni mucho menos han demostrado la existencia de una pauta general de falta de uniformidad. Está claro que no basta un pequeño número de casos en una esfera particular para establecer una pauta general de falta de uniformidad. Puesto que los Estados Unidos hasta el momento no han cumplido ni de lejos las obligaciones que derivan de la carga de la prueba que les corresponde, las CE consideran que el Grupo Especial puede abstenerse de definir qué número concreto de casos en una esfera determinada podría constituir una pauta de falta de uniformidad.

46. En el párrafo 25 de su Declaración oral en la primera reunión sustantiva, las Comunidades Europeas sostienen que "hay en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT un umbral mínimo, que implica que una modificación de la práctica administrativa ha de tener una repercusión significativa en la aplicación de las leyes aduaneras para que constituya una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT". Sírvanse clarificar en términos prácticos/cuantitativos lo que las Comunidades Europeas entienden por un "umbral mínimo" a este respecto.

En el asunto *CEE - Manzanas de mesa*, el Grupo Especial sostuvo que no se puede considerar que variaciones menores de la práctica administrativa de los Estados miembros de las CE sean incompatibles con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.[6]

---

[5] Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*, párrafo 7.264. Los Estados Unidos defendieron también argumentos similares en el asunto *Estados Unidos - Acero inoxidable*, según puede verse en el párrafo 6. 47 del informe del Grupo Especial correspondiente.

[6] Informe del Grupo Especial del GATT, *CEE - Manzanas de mesa*, párrafo 12.30 (para la cita completa véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 233).

Las CE creen que este umbral mínimo refleja el hecho de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige una uniformidad por sí misma sino que pretende más bien proteger los intereses de los comerciantes. Así lo reconoció el Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, al afirmar que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT exige un examen de los efectos reales que una medida puede tener para los comerciantes[7]:

> En consecuencia, podemos observar que el párrafo 3 a) del artículo X requiere un examen de los efectos reales que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio. Ello no exige, naturalmente, que se demuestre la existencia de perjuicios comerciales, de la misma forma que no se exige en general en el caso de las infracciones del GATT de 1994, pero puede suponer un examen de la existencia de posibles repercusiones en la situación de competencia de la supuesta parcialidad, irrazonabilidad o falta de uniformidad en la aplicación de las leyes, reglamentos, decisiones, etc. aduaneros.

Por tanto, de los informes sobre los asuntos *CEE - Manzanas de mesa* y *Argentina - Pieles y cueros* cabe deducir que para que una pauta de falta de uniformidad en la aplicación de las leyes constituya una infracción de las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT dicha pauta ha de tener una repercusión en la situación de competencia de los comerciantes y este impacto ha de ser significativo.

Las CE no discuten que la falta de uniformidad en asuntos que tengan una repercusión en los derechos aduaneros que deba pagar el comerciante no tenga un impacto significativo en la situación de competencia y por tanto sea pertinente a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Por este motivo, las diferencias en la clasificación arancelaria o la valoración en aduana, si suponen diferencias en los derechos a pagar, constituirán más que una variación menor desde el punto de vista del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, siempre que se produzcan en gran escala.

No obstante, los Estados Unidos han planteado también alegaciones sobre cuestiones en las que la repercusión sobre la situación de competencia de los comerciantes no es evidente. Un ejemplo serían las supuestas diferencias de procedimiento en el despacho de aduanas de los distintos países, en el que no está claro de qué forma pueden tener estas diferencias, caso de que existan, una repercusión significativa en los comerciantes.[8] Otro ejemplo serían las alegaciones de los Estados Unidos sobre las auditorías de las valoraciones.[9]

Las CE quisieran señalar también que corresponde a los Estados Unidos, como parte reclamante, demostrar que existe una repercusión en los comerciantes y que esa repercusión es significativa desde el punto de vista del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

47. Los Estados Unidos hacen referencia a lo largo de su Primera comunicación escrita a decisiones divergentes adoptadas por las autoridades de los Estados miembros. Por ejemplo, aluden a la divergencia en las decisiones en materia de clasificación: en general (párrafo 21), con respecto a las tarjetas de adaptación a la red para ordenadores personales (nota 33), con respecto a los productos para riego por goteo (nota 33) y con respecto a los artículos o "shorts" unisex (párrafo 76). Además, los Estados Unidos hacen referencia a la divergencia en decisiones en materia de valoración en aduana (párrafos 25 y 93). ¿Puede ser impugnada esa divergencia entre las decisiones al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

---

[7] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.77.

[8] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 116.

[9] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 96.

Primero, las CE quisieran subrayar que discrepan de que haya divergencias entre las decisiones adoptadas por los Estados miembros tanto en general como con respecto a las cuestiones concretas señaladas por los Estados Unidos.[10]

Segundo, aunque las decisiones individuales puedan constituir pruebas pertinentes para establecer si hay una pauta de falta de uniformidad, no se pueden impugnar al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. A este respecto, las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 45 del Grupo Especial.

48. En el párrafo 5 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es una disposición que establece normas mínimas para la aplicación de la legislación aduanera y no una base jurídica para la armonización de los sistemas de administración de aduanas de los Miembros de la OMC. Además, en los párrafos 231 y 232 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que, dado que el párrafo 3 a) del artículo X se limita a establecer normas mínimas, no obliga a los Miembros de la OMC a ajustarse a los criterios más rigurosos que sea posible cumplir en un momento determinado. Sírvanse explicar cuáles son las "normas mínimas" exigidas con respecto a la obligación de uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X. Sírvanse explicar en forma práctica cómo pueden y deben aplicarse esas "normas mínimas" con respecto a las esferas concretas de la administración de aduanas a que hacen referencia los Estados Unidos (clasificación arancelaria, valoración en aduana y procedimientos aduaneros).

El párrafo 3 a) del artículo X del GATT simplemente obliga a los Miembros de la OMC a que apliquen las leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo 1 del propio artículo X del GATT de manera uniforme. Esto significa que, tomando como base la pauta general de aplicación, el comerciante debe tener una seguridad razonable de la forma en que el Miembro de la OMC en cuestión aplicará sus leyes y reglamentos.

Por el contrario, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no detalla de qué forma debe aplicar un Miembro de la OMC sus leyes y reglamentos o qué instrumentos debe emplear para garantizar una aplicación uniforme de esas leyes y reglamentos. Ese es el fundamento a partir del cual las CE han sostenido que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es una base para la armonización de las legislaciones aduaneras de los Miembros de la OMC. En el presente caso, varios terceros han subrayado también que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es una disposición prescriptiva.[11]

49. Sírvanse formular observaciones sobre el contenido de la siguiente declaración del Abogado General en el asunto *Timmermans* (Estados Unidos - Prueba documental 21, párrafo 41):

> "[…] la clasificación arancelaria de mercancías equivalentes no puede variar de un Estado miembro a otro en función de las apreciaciones divergentes de las autoridades aduaneras de cada uno de los Estados miembros, so pena de renunciar al objetivo de aplicar uniformemente la nomenclatura aduanera dentro de la Comunidad, que se pretende, en particular, evitar que se produzca un trato discriminatorio entre los operadores económicos de que se trate."

[10] Primera comunicación escrita de las CE, notas 158 y 177.

[11] Declaración oral de Australia, párrafo 5; Declaración oral del Japón, párrafo 4.

Las CE están de acuerdo con esta declaración. El derecho comunitario no permite que mercancías idénticas[12] se clasifiquen de distinta forma.

Las CE quisieran señalar a este respecto que el derecho comunitario es más exigente que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, que sólo se interesa por la administración general de las leyes y reglamentos de un Miembro, y no por casos individuales de clasificación arancelaria.

50. Sírvanse explicar la finalidad de la información arancelaria vinculante, refiriéndose, en la medida de lo posible, a las disposiciones pertinentes de las normas comunitarias. En la medida en que haya una contradicción, sírvanse explicar cómo puede conciliarse esa finalidad con la siguiente declaración del Abogado General en el asunto *Timmermans* (Estados Unidos - Prueba documental 21, párrafo 60): "En lo que respecta al objetivo de la aplicación uniforme de la nomenclatura aduanera, considero que si una decisión de la Comisión que ordene la revocación de la IAV tiene necesariamente como finalidad y como consecuencia garantizar la aplicación correcta y uniforme de la nomenclatura aduanera, no cabe afirmar lo mismo acerca de la práctica según la cual las autoridades aduaneras decidirían discrecionalmente revocar las IAV que hubieran emitido, a raíz de una modificación de su propia interpretación de la nomenclatura aplicable, aunque es posible que las autoridades de que se trata actúen así animadas por el afán de aproximarse a la interpretación dada por otras autoridades aduaneras."

La finalidad de la información arancelaria vinculante (IAV) es dar a los titulares de la medida seguridad jurídica de la clasificación arancelaria de las mercancías en todo el interior de las CE. En esa medida, la IAV tiene también el objetivo de contribuir a la administración uniforme de las normas de clasificación arancelaria en el interior de las CE.

Este objetivo se puede deducir de numerosas disposiciones del derecho comunitario relativas a la emisión y los efectos de la IAV, en particular del artículo 12 del CAC y los artículos 5, 10 y 11 del Reglamento de Aplicación.

Las CE no están de acuerdo con la declaración del Abogado General Léger reproducida en la pregunta. La declaración del Abogado General presupone que la revocación de una IAV puede ser decidida por las autoridades aduaneras "discrecionalmente". La clasificación correcta según la nomenclatura combinada no es una cuestión discrecional como tampoco lo es la revocación de una IAV que se haya constatado que es incompatible con la nomenclatura combinada. Igualmente, las autoridades aduaneras no tienen que aceptar sin más una interpretación de la nomenclatura combinada, sino la interpretación correcta.

Además, ha de recordarse que las autoridades aduaneras de los Estados miembros, lo mismo que la Comisión, están obligadas por la nomenclatura combinada, que tienen que interpretar y aplicar correctamente. Por consiguiente, el Abogado General se equivoca al sugerir que no se puede presuponer que la revocación de una IAV por las autoridades aduaneras de un Estado miembro, a diferencia de la revocación de una IAV por la Comisión, tiene por finalidad lograr una interpretación uniforme de la nomenclatura combinada.

Es importante señalar que el Tribunal no respetó la opinión del Abogado General en el asunto *Timmermans*. En su sentencia, el Tribunal no hace referencia a ninguna capacidad discrecional que

[12] Las CE entienden por mercancías "idénticas" aquellas que son iguales entre sí en todos los aspectos que sean pertinentes para la clasificación arancelaria en cuestión. Aparentemente el Abogado General utilizó el término "equivalentes" en ese mismo sentido.

puedan ejercer las autoridades aduaneras. Al contrario, el Tribunal dejó claro que las autoridades aduaneras sólo pueden revocar una IAV si es errónea[13]:

> Ahora bien, la emisión de una IAV se hace partiendo de una interpretación, por parte de las autoridades aduaneras, de las disposiciones legales aplicables a la clasificación arancelaria de las mercancías afectadas y se halla condicionada por el fundamento de dicha interpretación.
>
> Cuando, tras un examen más exhaustivo, las autoridades aduaneras llegan a la conclusión de que dicha interpretación es errónea, como consecuencia de un error de apreciación o de una evolución de los criterios en materia de clasificación arancelaria, éstas pueden legítimamente considerar que una de las condiciones para la adopción de la IAV ya no se cumple y revocar dicha IAV con vistas a modificar la clasificación arancelaria de las mercancías afectadas.

La aplicación de esta jurisprudencia facilita, más que dificulta, la aplicación uniforme de la legislación aduanera de las CE, como ilustra convincentemente el caso Bantex, en el que las autoridades aduaneras del Reino Unido se basaron en la sentencia sobre el caso *Timmermans* para revocar una IAV que se había emitido erróneamente en contradicción con la reglamentación que establecía la clasificación aplicable.[14]

En términos más generales, las CE quisieran poner de manifiesto que las opiniones de los Abogados Generales no son jurídicamente vinculantes en ningún sentido y tienen un valor jurídico limitado. Las opiniones emitidas por un Abogado General no son de ningún modo vinculantes para el Tribunal, y no forman parte de su sentencia. Al contrario, como ha aclarado el Tribunal de Justicia, constituyen una "opinión individual razonada" del Abogado General como miembro del Tribunal de Justicia.[15]

La opinión del Abogado General puede constituir un antecedente útil para la interpretación de una sentencia del Tribunal de Justicia si éste siguió la opinión del Abogado General. En cambio, si el Tribunal, como en el asunto *Timmermans*, no siguió la opinión del Abogado General, ésta tiene una relevancia jurídica muy limitada y no puede utilizarse como base para establecer cuál es la interpretación correcta del derecho comunitario.

51. El artículo 11 del Reglamento de Aplicación dispone que "las informaciones arancelarias vinculantes facilitadas por las autoridades aduaneras de un Estado miembro a partir del 1º de enero de 1991 obligarán a las autoridades competentes de todos los Estados miembros en las mismas condiciones". Teniendo presente esta disposición:

a) Sírvanse indicar las medidas prácticas en vigor para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de Aplicación y explicar cómo se aplican en la práctica esas medidas.

Se trata del artículo 11 de un reglamento de la Comisión Europea. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 249 del Tratado de la CE, los reglamentos son obligatorios en todos sus

---

[13] Estados Unidos - Prueba documental 2, párrafos 24 y 25 (sin subrayados en el original).

[14] Primera comunicación escrita de las CE, nota 162 y párrafo 469.

[15] Orden del Tribunal de Justicia, asunto C-17/18, *Emesa Sugar*, [2000] ECR I-665, párrafo 14 (CE - Prueba documental 102).

elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro. Por consiguiente, no es necesaria ninguna medida general más para garantizar la aplicabilidad de esta disposición.

En caso de que un Estado miembro no respete las obligaciones que le impone el artículo 11 del Reglamento de Aplicación, entrarán en juego los mecanismos normales de garantía de la aplicación del derecho comunitario. Cualquier titular de una IAV que, en contradicción con las disposiciones del derecho comunitario, no sea reconocida, puede obtener protección judicial recurriendo a los tribunales del Estado miembro en cuestión. Además, la Comisión Europea puede abrir un procedimiento de infracción contra un Estado miembro si no respeta su obligación de reconocer una IAV.

b) Sírvanse explicar si la información arancelaria vinculante emitida por un Estado miembro obliga a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y, en tal caso, en qué circunstancias, haciendo referencia a todas las normas comunitarias pertinentes.

El párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento de Aplicación establece que una IAV es vinculante para las administraciones de todos los Estados miembros cuando se cumplen las condiciones que establecen los artículos 6 y 7. Por consiguiente, todas las IAV emitidas de conformidad con el derecho comunitario y que sigan siendo válidas serán vinculantes para las autoridades competentes de todos los Estados miembros.

c) ¿Hay casos en los que la información arancelaria vinculante emitida por un Estado miembro no obliga a las autoridades competentes de los demás Estados miembros? De ser así, sírvanse explicar en qué circunstancias se dará ese supuesto, haciendo referencia a todas las normas comunitarias pertinentes.

No. Si una IAV obliga en un Estado miembro, obliga en todos los demás Estados miembros, y viceversa. En lo que respecta a las condiciones en que una IAV puede dejar de ser válida, las CE se remiten al párrafo 115 de su Primera comunicación escrita.

52. El párrafo 1 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación dispone que "las autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate remitirán a la Comisión, en el plazo más breve posible, una copia de la información arancelaria vinculante notificada […] así como los datos […]". ¿Se lleva a efecto en la práctica la remisión de la información arancelaria vinculante por las autoridades aduaneras a la Comisión prevista por ese párrafo? ¿Qué hace la Comisión con la información arancelaria vinculante una vez que ha sido notificada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación?

La remisión de la información arancelaria vinculante por las autoridades aduaneras a la Comisión prevista en el párrafo 1 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación no se realiza en la práctica. Los datos que recibe la Comisión se introducen en la base de datos del sistema EBTI de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación.

53. Según el párrafo 2 a) del artículo 10 del Reglamento de Aplicación las autoridades aduaneras *podrán* exigir al titular de información arancelaria vinculante que, en el momento en que efectúe los trámites aduaneros, indique a las mismas que se encuentra en posesión de una información arancelaria vinculante para las mercancías que son objeto del despacho aduanero. Sírvanse facilitar datos acerca de con qué frecuencia y en qué circunstancias las autoridades aduaneras utilizan la facultad discrecional que les atribuye ese precepto de exigir la indicación de que se dispone la información arancelaria vinculante en cuestión.

Los Estados miembros pueden invocar las disposiciones del párrafo 2 a) del artículo 10 del Reglamento de Aplicación siempre que lo justifiquen las circunstancias particulares de un caso

concreto, en particular si hay dudas acerca de la clasificación correcta de la mercancía y si se sospecha que el comerciante puede estar en posesión de una IAV. Los Estados miembros y la Comisión Europea no mantienen estadísticas del número de veces que se ha invocado esta disposición.

54. Sírvanse formular observaciones sobre la declaración que hace la Comisión de las CE en la página 12 de la introducción explicatoria al código de aduanas modernizado (Estados Unidos - Prueba documental 32) de que se prevé hacer extensivo el efecto vinculante [de la información arancelaria vinculante] al(a los) titular(es) de la decisión para evitar que sólo se utilice el sistema cuando el solicitante esté satisfecho con el resultado, teniendo presente el párrafo 308 de la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, en que se pone en tela de juicio la afirmación de los Estados Unidos de que la información arancelaria vinculante no siempre obliga a los titulares.

Actualmente, la IAV es obligatoria sólo para las autoridades aduaneras (véase el artículo 5 del Reglamento de Aplicación). En cambio, ninguna disposición establece actualmente que la IAV es obligatoria para el titular, aunque las autoridades aduaneras, tomando como base el párrafo 2 a) del artículo 10 del Reglamento de Aplicación, pueden exigir al titular que las informe, cuando realice las formalidades aduaneras, de que está en posesión de una IAV.

Los servicios de la Comisión están considerando actualmente la inclusión en el código aduanero modernizado de una disposición que haga obligatoria también la IAV para el titular. La disposición actualmente prevista establecería lo siguiente[16]:

> Las decisiones sobre la clasificación o el origen serán vinculantes en lo que respecta a la clasificación arancelaria o a la determinación del origen de las mercancías y para
>
> - las autoridades aduaneras, frente al titular, únicamente en lo que respecta a mercancías cuyas formalidades aduaneras se hayan completado después de la fecha de la decisión;
>
> - para el titular, frente a las autoridades aduaneras, a partir de la fecha en que haya recibido notificación de la decisión.

El objetivo de esta disposición sería lograr un equilibrio de obligaciones entre las autoridades aduaneras y el titular y aumentar todavía más la transparencia del sistema de IAV. De esta forma, la disposición en cuestión refleja el compromiso de las CE con el desarrollo y modernización continuos de la legislación aduanera de las CE.

En cambio, las CE no consideran que la disposición en cuestión sea de ningún modo fundamental para el cumplimiento de la obligación que impone a las CE el párrafo 3 a) del artículo 10 del GATT. Como las CE han explicado ya[17], la IAV se emite principalmente en beneficio del titular, de quien, por consiguiente, cabe normalmente esperar que la invoque. Si el titular no está satisfecho con la IAV que ha recibido, la forma normal de actuación sería que impugnara la IAV ante los tribunales. Además, no hay motivos para suponer que otras autoridades aduaneras de las CE

[16] Estados Unidos - Prueba documental 33, párrafo 3) del artículo 14. Debe subrayarse que esta disposición, como todas las demás disposiciones que figuran en la Prueba documental 33 presentada por los Estados Unidos, es únicamente un texto de trabajo y no representa la posición oficial de la Comisión Europea ni de otra institución comunitaria.

[17] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 309.

clasificarían la mercancía en cuestión de forma diferente por el simple hecho de que no se invoque la IAV.

Por último, debe observarse que la versión de la base de datos del sistema EBTI a la que pueden acceder las autoridades aduaneras permite a éstas buscar el nombre del solicitante o del titular.[18] Por consiguiente, si se sospecha que un comerciante concreto puede ser titular de una IAV de las mercancías en cuestión, resulta fácil confirmarlo consultando la base de datos.

55. A la luz de las "Directrices administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante (IAV-EBTI)" (CE - Prueba documental 32), en las que se afirma expresamente que jurídicamente las Directrices no son vinculantes, ¿están las autoridades aduaneras *obligadas* a remitirse al sistema EBTI antes de emitir información arancelaria vinculante? De ser así, sírvanse indicar el fundamento jurídico de esa obligación y las circunstancias en las que se requiere la remisión al sistema EBTI.

Las Directrices administrativas no son jurídicamente vinculantes en sí mismas. Sin embargo, todos los Estados miembros están obligados por el deber de cooperación en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria (artículo 10 del Tratado de la CE).

Esto significa que los Estados miembros han de tener debidamente en cuenta las directrices administrativas. Además, han de utilizar todos los instrumentos disponibles para garantizar la aplicación adecuada y uniforme de la legislación aduanera comunitaria. En este contexto, cabe observar que el establecimiento de la base de datos del sistema EBTI está expresamente previsto en el párrafo 3 del artículo 8 del Reglamento de Aplicación.

Sobre esta base, los Estados miembros están obligados a consultar debidamente la base de datos del sistema EBTI en todos los casos en que proceda. Cuáles son los casos concretos en que debe procederse a una consulta de la base de datos del sistema EBTI y hasta dónde debe extenderse una búsqueda concreta es algo que habrá de determinarse caso por caso. A este respecto, los Estados miembros de las CE se orientan por los criterios que establecen las Directrices administrativas del sistema EBTI.[19]

56. En la página 9 de las "Directrices administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante (IAV-EBTI)" se afirma que, cuando haya discrepancia entre dos o más Estados miembros en cuanto a la correcta clasificación de una mercancía determinada, debe informarse al Comité del Código Aduanero. Sírvanse explicar los mecanismos prácticos en vigor para garantizar que en tales circunstancias se informa debidamente al Comité del Código Aduanero.

En primer lugar, los Estados miembros en cuestión deben mantener consultas entre sí. Estas consultas pueden realizarse a través de cualquier medio adecuado. Los Estados miembros disponen de una lista de personas que actúan como enlace de cada autoridad aduanera y con las que pueden ponerse en contacto en casos semejantes, lista que está a disposición de los Estados miembros a través de la herramienta extranet Circa.

Si se mantiene el desacuerdo, el asunto puede ser sometido al Comité del Código Aduanero. En términos jurídicos, el fundamento para ello se encuentra en el artículo 249 del CAC y en el artículo 8 del Reglamento 2658/87, según el cual el Comité del Código Aduanero puede examinar cualquier cuestión relativa a la legislación aduanera o el arancel aduanero común, bien a iniciativa del

[18] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 111.

[19] CE - Prueba documental 32, página 7.

presidente o bien a petición de un representante de un Estado miembro. En la práctica, el responsable oficial del Estado miembro de que se trate someterá la cuestión a la Comisión, la cual la incluirá a continuación en el orden del día del Comité del Código Aduanero de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 c) del artículo 3 de su Reglamento interno.[20]

57. En el párrafo 320 de su Primera comunicación escrita, al analizar la utilidad del sistema EBTI para detectar divergencias en la información arancelaria vinculante emitida por las diferentes autoridades aduaneras, las Comunidades Europeas admiten que aunque las designaciones de los productos pueden variar, pueden realizarse búsquedas utilizando otros parámetros. Sírvanse explicar, con ejemplos concretos, qué parámetros podrían utilizarse para garantizar la detección de esas divergencias.

En primer lugar, parece necesario recordar que hay dos versiones de la base de datos del sistema EBTI, una abierta al público y la otra, que contiene más información, a la que pueden acceder la Comisión y las autoridades aduaneras de los Estados miembros.[21] Las CE entienden que la pregunta del Grupo Especial hace referencia a la versión pública de la base de datos.

La versión pública de la base de datos del sistema EBTI permite búsquedas de IAV válidas por país emisor, fecha de inicio y fin de la validez, referencia de la IAV, código NC, palabras clave o descripción de los productos. Como han explicado las CE, la posibilidad de búsqueda de palabras clave incluye también un dispositivo que permite la traducción de esas palabras a los idiomas oficiales de la Comunidad.

En una situación normal, por consiguiente, si una búsqueda a través de la descripción del producto no arroja resultados, una estrategia de búsqueda prometedora será identificar los códigos NC que podrían considerarse para clasificar los productos y buscarlos utilizando las palabras clave adecuadas.

Además, para facilitar la búsqueda utilizando palabras clave, el usuario puede obtener todas las palabras claves disponibles, por orden alfabético. Para ello, sólo necesitará introducir las primeras letras de una palabra y obtendrá todas las que empiecen por esas letras.

Por último, cabe mencionar que la IAV contiene también frecuentemente una imagen del producto en cuestión, lo que ayudará a evaluar si un producto clasificado en una IAV anterior es idéntico al producto considerado por quien solicita la información.

58. En relación con la labor realizada por el Comité del Código Aduanero:

a) ¿Con respecto a qué cuestiones aduaneras concretas tiene el Comité del Código Aduanero facultad para conciliar las diferencias entre Estados miembros?

De conformidad con el artículo 249 del CAC, el Comité del Código Aduanero puede examinar cualquier cuestión relativa a la interpretación o aplicación de la legislación aduanera. Igualmente, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 2658/87, el Comité puede examinar cualquier asunto relacionado con la Nomenclatura Combinada o la nomenclatura TARIC.

Las CE quisieran aclarar, en lo que respecta a la presente y anteriores preguntas, que no es totalmente exacto decir que el Comité "concilia diferencias". En particular, no es correcto hacerlo así en todos los casos en los que el Comité es consultado con respecto a medidas destinadas a garantizar

[20] Estados Unidos - Prueba documental 9.

[21] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 110.

la uniformidad, como por ejemplo reglamentos de clasificación o notas explicativas. En estos casos, es el propio instrumento el que garantizará la aplicación uniforme de la legislación comunitaria. El Comité en sí mismo no es quien "concilia" una diferencia.

b) Desde el punto de vista práctico, ¿cómo establece el Comité del Código Aduanero el orden de prioridades entre las cuestiones que se le someten?

En primer lugar, el Comité realiza su labor a través de las diversas secciones que están enumeradas en el párrafo 1 del artículo 1 de su Reglamento.

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento del Comité, el Presidente establece el orden del día de cada reunión. El orden del día incluirá todos los asuntos que la Comisión haya sometido al Comité, incluidos los proyectos de todas las medidas sobre las que ha de ser consultado en virtud del procedimiento de comitología, así como todos los asuntos que le sometan los Estados miembros.

Desde un punto de vista práctico, el Presidente tenderá a abordar los asuntos más urgentes antes que los menos urgentes. Sin embargo, el Comité examinará todas las cuestiones sometidas a su atención en un momento determinado.

c) ¿Con qué frecuencia se reúnen las diversas secciones del Comité del Código Aduanero?

Entre 2002 y 2004 el Comité del Código Aduanero se reunió el siguiente número de veces:

2002	Número total de reuniones del Comité del Código Aduanero	77
2002	Número total de días	113,5
2003	Número total de reuniones del Comité del Código Aduanero	47
2003	Número total de días	77,5
2004	Número total de reuniones del Comité del Código Aduanero	85
2004	Número total de días	118,5

En la Prueba documental 103 presentada por las CE se ofrece un cuadro general del número de reuniones, por secciones.

d) ¿Pueden los grupos de trabajo del Comité del Código Aduanero adoptar decisiones y/o disposiciones que puedan considerarse decisiones/disposiciones del Comité del Código Aduanero? En caso afirmativo, sírvanse identificar el tipo de decisiones/disposiciones de que se trata.

No. Los grupos de trabajo se limitan a preparar la labor del Comité.

e) En el párrafo 87 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que, cuando ello esté justificado por la complejidad de una cuestión determinada, el Comité del Código Aduanero puede oír a los representantes de la rama de producción nacional afectada o a los comerciantes y lo ha hecho así en el pasado. Sírvanse indicar el número de ocasiones y las circunstancias en las que el Comité del Código Aduanero ha consultado a representantes de la rama de producción y comerciantes.

En la Prueba documental 126 presentada por las CE se adjunta una lista de las organizaciones y los comerciantes invitados a participar en las reuniones del Comité del Código Aduanero, con una indicación del tema, el número de la reunión y el día en que ésta se produjo. La lista abarca desde el final de 1999 hasta la actualidad.

f) ¿En qué criterios se basa el Comité del Código Aduanero para determinar si la divergencia en una esfera concreta de la administración de aduanas debe o no ser objeto de un reglamento de las Comunidades Europeas?

Los reglamentos siempre son actos de la Comisión, no del Comité. Por consiguiente, corresponde en primer lugar a la Comisión, y no al Comité, decidir si un reglamento es la medida adecuada. Por supuesto, si lo exige el derecho comunitario, el Comité será consultado sobre la medida propuesta, de conformidad con el procedimiento de comitología aplicable.

No se puede responder en general a la pregunta de si un asunto concreto debe ser abordado a través de un reglamento o de otro instrumento puesto que dependerá de la cuestión concreta de que se trate. Un factor importante sin duda será si la cuestión ha de ser abordada a través de un instrumento que sea jurídicamente vinculante y aplicable directamente en todos los Estados miembros, en cuyo caso el instrumento preferido podría ser un reglamento.

g) En el párrafo 277 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas manifiestan que "los documentos relativos al Comité del Código Aduanero, incluidos los órdenes del día y las actas resumidas de las reuniones, están disponibles en el registro público de comitología de la Comisión Europea, al que tiene acceso el público mediante Internet". En la parte de la página Web en la que pueden consultarse esos documentos (recogida en CE - Prueba documental 73) se afirma que el registro no contiene los documentos que no se envían al Parlamento Europeo. ¿Significa eso que los órdenes del día y las actas resumidas de las reuniones se envían al Parlamento Europeo? ¿Qué otros documentos "relativos al Comité del Código Aduanero" pueden consultarse en el sitio Web correspondiente?

Sí, los órdenes del día y las actas resumidas se envían al Parlamento Europeo. En términos generales no pueden consultarse otros documentos en el sitio Web correspondiente.

h) ¿Puede invocarse en algún caso la excepción recogida en el párrafo 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) Nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (CE - Prueba documental 74) con respecto a documentos elaborados por el Comité del Código Aduanero? En tal caso, sírvanse explicar en qué circunstancias, citando, si es posible, ejemplos prácticos pertinentes.

La excepción recogida en el párrafo 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) Nº 1049/2001 puede ser invocada también, en principio, con respecto a documentos elaborados por el Comité del Código Aduanero. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 4, será necesario para ello que la divulgación del documento dificulte gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución.

Esta disposición fue invocada en un caso relacionado con el acceso a documentos internos de un grupo de trabajo de la Sección de la Nomenclatura Arancelaria y Estadística del Comité del Código Aduanero. Actualmente está pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda de anulación de la decisión de negar el acceso a estos documentos.

i) En relación con la información arancelaria vinculante:

i) A los efectos del artículo 9 del Reglamento de Aplicación, ¿cómo se identifican las diferencias en la información arancelaria vinculante?

Como han explicado ya las CE en su Primera comunicación escrita[22], las diferencias en la clasificación arancelaria se pueden descubrir de distintas formas. Primero, las diferencias pueden ser descubiertas por las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones normales, cuando clasifican productos o deciden sobre solicitudes de IAV. Un instrumento que puede ayudar a las autoridades aduaneras a detectar divergencias es la base de datos del sistema EBTI. Sin embargo, las autoridades aduaneras pueden tener noticia de prácticas divergentes de otro modo, por ejemplo, a través de conversaciones sobre cuestiones de clasificación con los enlaces de otras administraciones o en el Comité del Código Aduanero, o a través de fuentes públicas.

Además, los comerciantes pueden señalar también a la atención de las autoridades aduaneras de los Estados miembros o de la Comisión las prácticas vigentes de clasificación arancelaria.

ii) ¿Cómo se señalan a la atención del Comité las diferencias en la información arancelaria vinculante?

Las CE se remiten a la respuesta a la pregunta 56 del Grupo Especial.

iii) Sírvanse explicar en forma práctica cómo concilia el Comité las diferencias en la información arancelaria vinculante que se señalan a su atención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Aplicación. Sírvanse citar los ejemplos que puedan ser pertinentes.

Frecuentemente se pide al Comité[23] que dé una opinión sobre las medidas propuestas por la Comisión para garantizar una aplicación uniforme de la NC, como reglamentos de clasificación y notas explicativas de las CE. Además, el Comité puede también emitir opiniones sobre cuestiones concretas de clasificación arancelaria, que quedarán reflejadas en las actas de sus reuniones.

iv) ¿Cuántos casos de diferencias en la información arancelaria vinculante se han sometido al Comité para que las concilie? ¿Cómo se incluyeron esos casos en el orden del día del Comité? ¿Cuál fue el resultado en cada uno de esos casos, incluidas las propuestas formuladas por el Comité y la medida adoptada por la Comisión de las CE, en su caso? ¿Cuánto se tardó en resolver esos casos?

Dado el poco tiempo de que han dispuesto, las CE no pueden ofrecer todavía una respuesta a esta parte de la pregunta. Las CE responderán a esta parte de la pregunta del Grupo Especial lo antes posible.

(Respuesta recibida el 3 de octubre de 2005):

Desde el 1º de enero de 2000 hasta el día de hoy se han sometido al Comité del Código Aduanero 196 casos de presuntas divergencias entre IAV.

---

[22] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 314.

[23] En lo que respecta al término "conciliación", véase *supra* la respuesta de las CE a la pregunta 58 a).

De ellos, 178 fueron sometidos al Comité por las autoridades aduaneras de uno o más Estados miembros, mientras que 18 fueron sometidos por la Comisión.

Tres de estos casos fueron resueltos a través de una sentencia del Tribunal de Justicia, 78 dieron lugar a la adopción de un reglamento de clasificación por la Comisión, nueve a la adopción de una nota explicativa de la NC, tres a la adopción de una decisión de la Comisión sobre la invalidación de IAV, 43 casos dieron lugar a conclusiones del Comité y en cuatro casos el asunto fue sometido al Comité del SA.

El promedio del tiempo necesario para la tramitación de la conclusión fue de unos 13 meses. Este promedio incluye los plazos necesarios para la traducción de las medidas legales y la toma de decisiones internas de la Comisión Europea.

j) En lo que respecta a la valoración en aduana:

i) En el párrafo 77 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos sostienen que el Comité del Código Aduanero no tiene facultades para examinar casos individuales de valoración en aduana con el fin de conciliar las diferencias en la aplicación entre diferentes Estados miembros. Sírvanse formular observaciones al respecto.

De conformidad con el artículo 249 del CAC, el Comité puede examinar cualquier cuestión relacionada con la legislación aduanera, incluidas cuestiones de valoración. Por tanto, el Comité puede examinar cualquier cuestión relativa a la interpretación y aplicación de las normas de valoración, incluida la cuestión de si existen divergencias en casos concretos.

Otro asunto distinto es que el Comité no incluye entre sus funciones aplicar las normas de valoración en casos concretos. Por consiguiente, el Comité no interviene en lugar de las autoridades aduaneras individuales o de los tribunales competentes de los Estados miembros en los casos pendientes.

ii) ¿En qué circunstancias examinará/debe examinar el Comité del Código Aduanero las divergencias entre los Estados miembros en la aplicación por ellos de las normas comunitarias sobre valoración en aduana?

El Comité examinará las divergencias en la aplicación de las normas comunitarias de valoración que le sometan la Comisión o los Estados miembros.

iii) Sírvanse explicar en forma práctica cómo concilia el Comité las diferencias en la aplicación de las normas comunitarias sobre valoración en aduana. Sírvanse citar los ejemplos que puedan ser pertinentes.

El Comité puede emitir opiniones, que pueden adoptar la forma de conclusiones o de comentarios a las normas de valoración de las CE. Las conclusiones del Comité se incluyen en el compendio de textos sobre valoración en aduana de las CE.[24] La Comisión consulta también con el Comité los proyectos de enmienda de las normas de valoración que contiene el Reglamento de Aplicación.

iv) ¿Cuántos casos de divergencias en la aplicación de las normas sobre valoración en aduana se han presentado para su conciliación al Comité? ¿Cómo se incluyeron esos casos en el orden del día del Comité?

[24] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 130 y CE - Prueba documental 37.

¿Cuál fue el resultado en cada uno de esos casos, incluidas las propuestas formuladas por el Comité y la medida adoptada por la Comisión de las CE, en su caso? ¿Cuánto tardaron en resolverse esos casos?

Se adjunta, como Prueba documental 104 presentada por las CE, un resumen de las cuestiones debatidas en la sección de valoración del Comité del Código Aduanero en el período de tres años comprendido entre mediados de 2002 y mediados de 2005.

v) En el párrafo 29 de las respuestas de la Comisión al informe especial del Tribunal de Cuentas Nº 23/2000 sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (Estados Unidos - Prueba documental 14), la Comisión declara que "según las normas del código aduanero relativas al Comité de valor en aduana, la Comisión no está facultada para pedir a las administraciones de los Estados miembros que den cuenta del trato aplicado a un operador determinado en cada uno de dichos Estados. El Comité del código trata de establecer normas, directrices u otras conclusiones, normalmente sin examinar casos individuales". Sírvanse formular observaciones al respecto.

Es cierto que el Reglamento del Comité del Código Aduanero no contiene ninguna disposición concreta que atribuya a la Comisión la facultad de pedir a los Estados miembros que presenten información sobre asuntos específicos.

Sin embargo, los Estados miembros están obligados, al aplicar la legislación aduanera lo mismo que al aplicar el derecho comunitario en general, por el deber de cooperación (artículo 10 del Tratado de la CE). Este deber de cooperación implica el deber de facilitar la labor de la Comisión como guardián del Tratado, incluido el deber de facilitar toda la información que sea necesaria para que la Comisión pueda establecer si los Estados miembros aplican el derecho comunitario correctamente. Así lo ha confirmado expresamente el Tribunal Europeo de Justicia en su jurisprudencia[25]:

Los Estados miembros están obligados, en virtud del artículo 5 del Tratado, a facilitar a la Comisión el cumplimiento de su misión, que en particular, según el artículo 155, consiste en velar por la aplicación de las disposiciones del Tratado así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de éste. Por consiguiente, constituye un incumplimiento de las obligaciones de un Estado miembro el hecho de negarse a colaborar con la Comisión en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por ésta para probar la realidad de las infracciones del Derecho comunitario que resultan de normativas y de prácticas en vigor en el mencionado Estado.

Además, la transmisión de información de los Estados miembros a la Comisión en la esfera de la valoración en aduana no plantea ningún problema general. Otra cuestión es que, como han señalado ya las CE, no forma parte de las funciones del Comité sustituir a las autoridades aduaneras individuales o a los tribunales competentes de los Estados miembros en los casos pendientes.

[25] Asunto 272/86, *Comisión/Grecia*, [1988] ECR 4875 (CE - Prueba documental 105). El artículo 5 del Tratado de la CE es actualmente el artículo 10 de dicho Tratado.

k) Con respecto a los párrafos 103 y 104 de la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas:

i) Sírvanse aclarar con respecto a qué cuestiones adopta, de conformidad con el procedimiento de comitología, dictámenes el Comité del Código Aduanero.

El Comité del Código Aduanero adopta dictámenes, de conformidad con el procedimiento de comitología, sobre las siguientes cuestiones:

- Legislación general
- Mercancías falsificadas y pirateadas
- Procedimientos aduaneros con repercusiones económicas
- Valoración en aduana
- Almacenes de depósito aduanero y zonas francas
- Acuerdos de franquicia arancelaria
- Trato arancelario favorable (uso final de las mercancías)
- Movimiento por aire o mar de equipaje de pasajeros
- Origen
- Reembolsos
- Documento administrativo único
- Nomenclatura arancelaria y estadística - clasificación arancelaria //SA/TARIC/textiles/IAV
- Cuestiones económicas arancelarias - contingentes
- Tránsito

ii) Sírvanse facilitar detalles acerca del objeto de los dictámenes adoptados por el Comité del Código Aduanero sobre cuestiones relativas a la aplicación e interpretación de la nomenclatura combinada. ¿Qué procedimientos se aplican con respecto a tales dictámenes?

Los dictámenes del Comité del Código Aduanero pueden referirse a cualquier asunto relacionado con la legislación aduanera comunitaria.

Desde el punto de vista jurídico, si el Comité adopta un dictamen al margen del procedimiento de reglamentación o de gestión, puede hacerlo por mayoría simple.[26] Normalmente, sin embargo, el Comité adopta un dictamen sólo en aquellos casos en que el enfoque es objeto de un amplio acuerdo en su seno. Si la cuestión es controvertida, es posible que se prefiera una medida jurídicamente vinculante.

iii) ¿Puede el Comité del Código Aduanero adoptar otros dictámenes sobre cuestiones distintos de los adoptados mediante el procedimiento de comitología y de los adoptados sobre cuestiones relativas a la aplicación e interpretación de la nomenclatura combinada? En tal caso, sírvanse indicar y explicar los procedimientos para la adopción de esos dictámenes.

De conformidad con el artículo 249 del CAC, el Comité puede adoptar dictámenes sobre cualquier asunto relacionado con la legislación aduanera comunitaria. Los procedimientos son los expuestos en la respuesta a la pregunta anterior.

[26] Artículo 3 de la Decisión sobre comitología (Estados Unidos - Prueba documental 10).

l) En el párrafo 4 de los Asuntos Acumulados 69 y 70/76, Dittmeyer, [1977] ECR 231 (CE - Prueba documental 31), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indica que los dictámenes del Comité del Código Aduanero no son jurídicamente vinculantes y que en determinadas circunstancias cabe que esos dictámenes no sean seguidos. Sírvanse indicar concretamente las circunstancias en las que un dictamen del Comité del Código Aduanero puede no ser seguido o no será seguido por la Comisión de las CE, las autoridades de los Estados miembros y/o cualquier otro organismo competente. Sírvanse facilitar, en su caso, datos estadísticos sobre los casos en los que no haya sido adoptado/seguido el dictamen del Comité del Código Aduanero.

Los dictámenes del Comité del Código Aduanero no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, como estableció también el Tribunal en la sentencia en cuestión, constituyen un medio importante para asegurar la aplicación uniforme del arancel aduanero común y, por tanto, se pueden considerar una ayuda válida para la interpretación del arancel.

Las autoridades aduaneras de los Estados miembros no están vinculadas jurídicamente por los dictámenes del Comité del Código Aduanero. Sin embargo, sí lo están por el deber de cooperación (artículo 10 del Tratado de la CE), que incluye la obligación de contribuir a la aplicación uniforme del derecho comunitario. Por esta razón, los Estados miembros de las CE están obligados a atribuir la debida importancia a las interpretaciones de la legislación comunitaria aduanera que contienen los dictámenes del Comité del Código Aduanero.

Desde un punto de vista práctico hay que subrayar que los dictámenes del Comité normalmente reflejan un enfoque común aceptado por todos los Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros normalmente respetan estos dictámenes convenidos sin plantearse dudas.

59. En el párrafo 316 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas manifiestan que los comerciantes "se dirigen frecuentemente con problemas concretos de clasificación aduanera a la Comisión o a las autoridades de los Estados miembros, que pueden optar por adoptar las medidas necesarias, incluida la de plantear la cuestión al Comité del Código Aduanero". Además de los principios de buena conducta administrativa, ¿hay normas o directrices aplicables a la Comisión de las CE que indiquen lo que deben hacer ésta y las autoridades del Estado miembro y en qué plazos deben hacerlo cuando acuden a ellas comerciantes individuales?

Si un comerciante presenta una reclamación relativa a una infracción del derecho comunitario por las autoridades de un Estado miembro, son aplicables los principios que establece la Comunicación de la Comisión sobre las relaciones con el reclamante (CE - Prueba documental 11).

En otras circunstancias, será aplicable el Código de Conducta de la Comisión que figura como Anexo de su Reglamento (CE - Prueba documental 12). El punto 4 de este Código de Conducta establece normas para la tramitación de las solicitudes. Según estas normas, los servicios de la Comisión deben responder a las solicitudes de la forma más adecuada y lo más rápidamente posible. Además, se debe responder normalmente a la correspondencia en un plazo de 15 días, salvo que la complejidad del asunto no permita una respuesta en ese plazo.

60. Con arreglo a la información arancelaria vinculante emitida por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos (que se reproduce en Estados Unidos - Prueba documental 22), los forros opacos para cortinas objeto de la información arancelaria vinculante estaban recubiertos con tundizno y se clasificaron dentro de la partida 5907 de la nomenclatura combinada de las CE. Sírvanse explicar por qué deben clasificarse esos productos en la partida 5907, haciendo referencia a los términos y el sentido concretos de esa partida.

Los productos abarcados por estas IAV son productos en los que el tejido ha sido recubierto con plásticos, los cuales a su vez han sido recubiertos con tundizno. La clasificación prevista en estas IAV se ha hecho de conformidad con las Reglas Generales de Interpretación del Sistema Armonizado 1 y 2 y con la Nota Explicativa G 1) a la partida 59.07 del Sistema Armonizado (CE - Prueba documental 127).

61. Sírvanse explicar, facilitando todos los datos pertinentes al respecto, si se señaló a la atención de la Comisión de las CE la información arancelaria vinculante supuestamente contradictoria con respecto a los forros opacos para cortinas y, de ser así, en qué forma.

Como observación preliminar, las CE quisieran recordar que Alemania no ha emitido ninguna IAV, por lo que no puede haber ninguna IAV contradictoria. Además, como han explicado ya las CE, no hay ninguna contradicción entre la IAV emitida y la decisión de las autoridades aduaneras alemanas sobre la clasificación.[27]

Las instituciones comunitarias tuvieron por primera vez conocimiento de este asunto a través del ejemplar de *Inside US Trade* del 12 de noviembre de 2004 (CE - Prueba documental 1), en el que se informaba de una comunicación presentada por Rockland Industries al USTR después de una solicitud de éste de observaciones sobre la solicitud estadounidense de celebración de consultas en el presente asunto.

Los Estados Unidos sometieron el asunto directamente a las CE por primera vez en su Primera comunicación escrita sobre el presente asunto. Desde entonces, los Estados Unidos han vuelto a plantear el caso de los forros opacos para cortinas en una reunión técnica entre la Oficina de Aduanas y Protección en Frontera de los Estados Unidos y la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera celebrada en Washington el 14 de julio de 2005. Se adjunta como Prueba documental Nº 106 presentada por las CE copia de una nota facilitada por la Oficina de Aduanas de los Estados Unidos a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera.

62. En el párrafo 407 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas manifiestan que la sección de valor en aduana del Comité del Código Aduanero examinó la cuestión de la aplicación del párrafo 1 e) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación por las autoridades aduaneras españolas pero no determinó que hubiera incompatibilidad con la legislación comunitaria ni falta de uniformidad. En tal caso, ¿por qué se sometió la cuestión a un grupo de trabajo del Comité? ¿En qué etapa están actualmente los debates del grupo de trabajo con respecto a ella? ¿Cuándo debe adoptar el Comité una decisión definitiva al respecto? ¿Cuánto tardará la cuestión en ser resuelta finalmente por la Comisión?

En el caso de Reebok, la empresa en cuestión no había aceptado la posición de la administración española sobre la aplicación de determinadas disposiciones del Código Aduanero y de su Reglamento de Aplicación[28] a una situación comercial concreta y, después de varias intervenciones, la Comisión sometió al Comité las cuestiones planteadas por Reebok (por motivos de confidencialidad, Reebok no fue identificada como tal).

Durante las reuniones que celebró el Comité del Código Aduanero los días 1º de octubre y 20 de diciembre de 2004, la opinión de los delegados fue que los hechos tendían a mostrar que las partes estaban relacionadas, como previamente habían concluido las autoridades españolas.

---

[27] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 331 y siguientes.

[28] Párrafo 2 del artículo 29 del Código Aduanero y párrafo 1 e) del artículo 143 y artículo 147 del Reglamento de Aplicación.

Como otros dos Estados miembros habían planteado asuntos similares se consideró que era aconsejable seguir trabajando en 2005 sobre el tema. También se recordó que como se habían sometido a su atención casos similares que se relacionaban con operaciones de manufactura y elaboración que habían adquirido importancia en términos comerciales y económicos, la Comisión había decidido seguir trabajando sobre la cuestión a través de un grupo de trabajo del Comité.

En agosto de 2005, Reebok presentó, a petición de la Comisión, información que indicaba que otro Estado miembro podía tener un enfoque divergente. Esta información será examinada.

El grupo de trabajo empezará a reunirse y trabajar en breve. Se pretende que el grupo produzca resultados concretos que abarquen tanto la interpretación general y aplicación del párrafo 1 e) del artículo 143 como los elementos específicos que dieron origen al desacuerdo entre las autoridades aduaneras españolas y la empresa en cuestión.

63. En el párrafo 44 de su Declaración oral en la primera reunión sustantiva, las Comunidades Europeas manifiestan que "las normas de las CE en materia de valoración son bastante detalladas y orientan en todas las circunstancias pertinentes a las autoridades aduaneras de las CE". Sírvanse explicar cómo puede armonizarse esta manifestación con la respuesta de la Comisión de las CE al informe especial Nº 23/2000 del Tribunal de Cuentas sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (Estados Unidos - Prueba documental 14) en el sentido de que las normas de valoración de las CE se basan, en gran medida, en conceptos simples pero vagos que el legislador de la OMC ha intentado aclarar, en particular estableciendo una gama de subconceptos sin que, no obstante, se haya reducido sustancialmente el margen de apreciación para las autoridades aduaneras.

Las CE quisieran señalar que la declaración a que se hace referencia en la pregunta remite en primer lugar a las normas del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.

En cuanto a las normas de valoración de las CE, las CE mantienen que estas normas son detalladas y abarcan todos los aspectos importantes de la práctica de la valoración y, por tanto, ofrecen una orientación general a las autoridades aduaneras de las CE sobre todas las cuestiones relacionadas con la valoración en aduana. El hecho de que las normas de valoración se apliquen en situaciones de hecho complejas y de que ocasionalmente se planteen dificultades de interpretación o aplicación no contradice esta afirmación.

64. Con referencia al párrafo 400 de la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas:

a) ¿Cuál es la definición de "procedimiento aduanero" en el derecho aduanero de las CE?

El párrafo 16 del artículo 3 del CAC establece que por "procedimiento aduanero" se entenderá lo siguiente:

- el despacho a libre circulación;
- el tránsito;
- el depósito aduanero;
- el perfeccionamiento activo;
- la transformación bajo control aduanero;
- la importación temporal;
- el perfeccionamiento pasivo;
- la exportación.

b) ¿Cuál es la significación, a los efectos del derecho aduanero de las CE, de la clasificación de un elemento entre los "procedimientos aduaneros"?

Son numerosas las disposiciones del Código Aduanero que incluyen los términos "procedimiento aduanero". Un ejemplo sería el artículo 250 del CAC, al que se refiere la pregunta 67 del Grupo Especial.

c) Sírvanse explicar las razones por las que la definición de "procedimientos aduaneros" en las leyes aduaneras de las CE debe determinar si los procedimientos en cuestión están o no comprendidos en el ámbito de aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Se trata de preguntas independientes. Los términos "procedimientos aduaneros" forman parte del derecho comunitario. El alcance del párrafo 3 a) del artículo X del GATT depende de si la ley o reglamento que se aplique esté incluido en el ámbito de uno de los temas enumerados en el párrafo 1 del artículo X del GATT.

d) Sírvanse identificar el principal objetivo de los controles posteriores al despacho de aduana.

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 78 del CAC, el objetivo de los controles posteriores al despacho de aduana es evaluar si las declaraciones de importación han sido cumplimentadas adecuadamente.

e) ¿Por qué no se consideran "procedimientos aduaneros" esos controles?

Porque no son uno de los procedimientos mencionados en el párrafo 16 del artículo 3 del CAC.

65. La Resolución 95/C 188/01 del Consejo de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior (CE - Prueba documental 41) declara que "si se observaran graves dificultades para el buen funcionamiento del mercado interior ocasionadas por las disparidades de los regímenes nacionales, deberán buscarse soluciones, cuando sea necesario, para garantizar que las sanciones tengan como resultado una aplicación igualmente efectiva de la legislación en la Unión, dentro del respeto de las competencias respectivas de la Comunidad y de los Estados miembros y de los principios del derecho nacional de los Estados miembros, y a la luz de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad". ¿Ha adoptado en alguna ocasión el Consejo "soluciones" de conformidad con esta disposición? De ser así, sírvanse explicar las situaciones en las que se buscaron esas soluciones y las razones por las que se consideraron necesarias.

No.

66. Con referencia a las disposiciones pertinentes del derecho aduanero comunitario, sírvanse explicar las circunstancias en las que es necesaria una evaluación de las condiciones económicas a nivel de los Estados miembros y/o a nivel de las CE para determinar si debe autorizarse o no la transformación bajo control aduanero.

Como las CE han explicado ya en los párrafos 135 a 138 de su Primera comunicación escrita, si se trata de los tipos de mercancías y las operaciones mencionados en la Parte A del Anexo 76 del Reglamento de Aplicación (Estados Unidos - Prueba documental 6), es decir, en la mayoría de los casos, se considerará que se cumplen las condiciones económicas, de conformidad con el primer

apartado del párrafo 1 del artículo 552 del Reglamento de Aplicación. Esto significa que, en tales casos, las autoridades aduaneras no examinarán las condiciones económicas.

En lo que respecta a los tipos de mercancías y operaciones mencionados en la Parte B del Anexo 76 del Reglamento de Aplicación y no abarcadas por la Parte A de ese Anexo, el examen de las condiciones económicas se realizará a escala de la Comunidad, a través del procedimiento pertinente del Comité. Esto significa que la realización uniforme de la evaluación de las condiciones económicas está asegurada para las denominadas mercancías sensibles porque el examen tiene que realizarse a nivel de la Comunidad (véase el párrafo 2 del artículo 552 del Reglamento de Aplicación).

Tercero, cuando se trate de los tipos de mercancías y de las operaciones no mencionados en el Anexo 76 del Reglamento de Aplicación, el examen de las condiciones económicas se realizará a nivel nacional (párrafo 1 del artículo 502 y párrafo 1, segundo inciso, del artículo 552 del Reglamento de Aplicación). Son raros los casos en que sólo se exige un examen a nivel nacional debido a que, como antes se ha mencionado, o bien se considera que se han cumplido las condiciones económicas o bien el examen tiene lugar a nivel de la Comunidad. No obstante, la transparencia y la realización uniforme de la evaluación de las condiciones económicas está garantizada también en estos pocos casos porque los Estados miembros tienen que transmitir a la Comisión la información pertinente, según establece el artículo 522 del Reglamento de Aplicación. La Comisión da a conocer esta información a las administraciones aduaneras. Además, si un Estado miembro se opone a una autorización o si las autoridades aduaneras de que se trate desean mantener consultas antes o después de emitir una autorización, puede realizarse un examen de las condiciones económicas a nivel de la Comunidad (véanse los artículos 503 y 504 del Reglamento de Aplicación).

Si la descripción anterior dejara todavía algún elemento poco claro, las CE facilitarán con gusto nuevas aclaraciones si así se les pide.

67. Sírvanse explicar el alcance y efectos del artículo 250 del Código aduanero comunitario.

Esta disposición establece que si se utiliza un procedimiento aduanero en varios Estados miembros, las decisiones, las medidas de identificación, los documentos emitidos y las constataciones formuladas tendrán la misma fuerza jurídica en todos los Estados miembros en cuestión. En este contexto, por "procedimiento aduanero" se entenderá cualquiera de los procedimientos señalados en el párrafo 16 del artículo 3 del CAC. El artículo 250 del CAC se aplica cuando se trata de un procedimiento aduanero concreto en el que intervienen las mismas mercancías.

El artículo 250 del CAC tiene por objeto garantizar que los procedimientos aduaneros que tienen lugar en el territorio de varios Estados miembros se pueden llevar a cabo de forma eficiente y coherente.

68. Con respecto a los párrafos 220 y 221 de su Primera comunicación escrita, ¿la referencia de las Comunidades Europeas al párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 se hace con el exclusivo fin de apoyar su argumento de que el párrafo 3 a) del artículo X no exige la regulación de las leyes aduaneras a nivel central? De ser así, sírvanse explicar en forma práctica lo que ello implica para la aplicación de las leyes aduaneras de las CE. En caso contrario, sírvanse explicar conforme a qué otras bases tratan las Comunidades Europeas de buscar apoyo en el párrafo 12 del artículo XXIV.

Las CE se refirieron al párrafo 12 del artículo XXIV del GATT, y al informe del Grupo Especial del GATT *Canadá - Monedas de oro*, como apoyo a su argumento de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no afecta a la distribución federal de competencias dentro de un Miembro de la OMC y por consiguiente no exige la armonización de las leyes en el interior de ese Miembro de la OMC. Esto significa que si, en el ámbito interno de un Miembro de la OMC, algunos asuntos están regulados a escala subfederal, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo exigirá que estas leyes o

reglamentos se apliquen de manera uniforme. No exige que tales leyes sean sustituidas por una legislación armonizada a escala central. Como ejemplo cabe citar las sanciones, que están reguladas dentro de las CE por las leyes de los Estados miembros.

Esta interpretación es totalmente conforme con el objeto y fin del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Dicho párrafo pretende ofrecer a los comerciantes un nivel mínimo de seguridad y previsibilidad en los asuntos mencionados en el párrafo 1 del artículo X del GATT. El cumplimiento de este objetivo estará plenamente garantizado si las leyes a escala subfederal se aplican de manera uniforme en el territorio en el que están vigentes. Para lograr el cumplimiento del objetivo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es necesario obligar a los Miembros de la OMC a armonizar las leyes aplicables a escala subfederal de un Miembro de la OMC.

69. Con respecto a las apelaciones ante cada uno de los tribunales de los 25 Estados miembros competentes para revisar y rectificar decisiones sobre cuestiones aduaneras:

Las CE están dispuestas a facilitar al Grupo Especial información sobre el sistema de Justicia de las CE, incluidos los tribunales de los Estados miembros. Sin embargo, quisieran subrayar que esta labor forma parte de la carga de la prueba que corresponde a los Estados Unidos como reclamante. Las CE han insistido repetidas veces en esta cuestión en su Primera comunicación escrita (párrafo 474) y en su primera Declaración oral (párrafos 63 a 66).

a) ¿Cuál es la norma de examen en los tribunales de cada uno de los Estados miembros con respecto a las decisiones administrativas de las autoridades aduaneras?

Los tribunales de todos los Estados miembros revisan y rectifican la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas sobre asuntos aduaneros, incluido el control de las facultades discrecionales. El control de la legalidad incluye también la compatibilidad con el derecho comunitario. Aunque alguno de los ordenamientos jurídicos incluye una clasificación de los asuntos que pueden ser examinados por los tribunales comparable a la que contiene el artículo 230 del Tratado de la CE (véase *infra* la respuesta a la pregunta 71), eso no significa que haya diferencias importantes en el tipo de control que garantizan los tribunales nacionales.

b) Desde el punto de vista práctico, ¿cuáles son las etapas necesarias para someter un asunto a cada uno de esos tribunales (con inclusión de detalles de los casos en los que se requiere una revisión en primera instancia por las autoridades administradoras competentes)?

La mayoría de los Estados miembros de las CE exigen que el comerciante presente una solicitud de examen administrativo antes de apelar al tribunal competente. Las excepciones son Bélgica, Estonia, Grecia, Chipre, Francia, Malta y Portugal, donde los exámenes administrativos son voluntarios, y Suecia, donde no existen los exámenes administrativos y la decisión administrativa tiene que ser apelada directamente ante los tribunales.

En los casos de España, Italia, Irlanda (segunda instancia de los exámenes administrativos) y Dinamarca, los exámenes administrativos son llevados a cabo por un órgano que es independiente de los organismos encargados de la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones.

c) ¿Cuánto dura el proceso de apelación con respecto a las decisiones adoptadas en cuestiones aduaneras en cada uno de esos tribunales (incluido el tiempo que requiere la revisión en primera instancia por las autoridades administradoras competentes, cuando ésta se realiza/es necesaria)?

La mayoría de los Estados miembros de las CE garantizan normalmente la finalización de los exámenes administrativos en un plazo inferior a seis meses. En varios casos, el plazo medio es incluso más breve (en torno a un mes): la República Checa, Estonia, Grecia, España, Irlanda, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría y Eslovaquia. Sólo en Dinamarca e Italia se necesitan entre 1 y 1,5 años para que se adopte una decisión en un examen administrativo.

En lo que respecta a las revisiones judiciales, diez Estados miembros de las CE llevan a cabo las revisiones en primera instancia normalmente en un plazo inferior a un año: la República Checa, España, Chipre, Hungría, Austria, Polonia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. Entre uno y dos años es el tiempo que se necesita en Alemania, Estonia, Letonia y los Países Bajos. En el resto se necesitan por término medio de dos a tres años.

70. Con respecto a: i) las apelaciones directas ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; y ii) las peticiones de una decisión prejudicial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:

a) Desde el punto de vista práctico, ¿cuáles son los trámites necesarios para someter un asunto al Tribunal?

Para apelar ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas frente a una decisión administrativa adoptada por las instituciones comunitarias sobre asuntos aduaneros no se necesita una revisión administrativa previa. Las demandas de anulación deberán interponerse directamente ante el Tribunal competente en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación o notificación de la decisión (párrafo 5 del artículo 230 del Tratado de la CE). De conformidad con el párrafo 2 del artículo 81 y el párrafo 2 del artículo 102, respectivamente, del Reglamento del Tribunal de Justicia y el Reglamento del Tribunal de Primera Instancia, estos plazos se amplían siempre diez días para tener en cuenta la distancia (Pruebas documentales 107 y 108 presentadas por las CE). Según las "Instrucciones prácticas" adoptadas por cada uno de los Tribunales, se puede transmitir al Registro copia del original firmado de un documento procesal bien sea por telefax o como anexo de un correo electrónico, siempre que el Registro reciba el propio original firmado en un plazo de diez días contados a partir de esa presentación (Pruebas documentales 109 y 110 presentadas por las CE).

Las decisiones de pedir una decisión prejudicial son adoptadas por los tribunales de los Estados miembros, los cuales normalmente oyen a ambas partes antes de hacer dicha petición, aunque no están obligados por la posición de las partes sobre la conveniencia o necesidad de hacerla. Además, no es necesario que las partes en el asunto planteen la cuestión, que puede ser decidida por el tribunal nacional de oficio. El tribunal nacional está autorizado para decidir en qué etapa del procedimiento se presenta la petición, a condición de que no se haya decidido ya sobre el asunto. Pueden encontrarse nuevas explicaciones de este procedimiento en la Nota informativa sobre las peticiones de los tribunales nacionales de decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia (CE - Prueba documental 55).

b) ¿Cuánto dura normalmente el proceso de apelación/el proceso destinado a obtener una decisión prejudicial en relación con cuestiones aduaneras?

Un procedimiento de anulación dura por término medio 24 meses: como ejemplo representativo cabe citar el asunto consola Playstation2 de Sony (Estados Unidos - Prueba documental 12), en el que la demanda se presentó el 3 de octubre de 2001 y la sentencia se dictó el 30 de septiembre de 2003.

En el caso de las peticiones de decisiones prejudiciales, se necesitan por término medio 19 a 20 meses para que finalice el procedimiento, aunque en algunos casos pueden ser necesarios hasta 22 meses. Como ejemplo cabe citar la sentencia en el asunto C-396/02, DFDS, (CE - Prueba

documental 25), que se dictó dentro de este último plazo (desde el 11 de noviembre de 2002, fecha de la recepción, hasta el 16 de septiembre de 2004, fecha de la sentencia).

71. Sírvanse indicar cómo "rectifican" los siguientes organismos los actos administrativos (incluidas las decisiones en materias aduaneras) impugnados ante ellos (mediante, por ejemplo, su anulación, suspensión, revocación, etc.:

a) el Tribunal de Primera Instancia;

b) el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 231 y el párrafo 6 del artículo 224 del Tratado de la CE, ante una demanda de anulación, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia tienen que declarar nulo el acto impugnado o desestimar la demanda. No tienen jurisdicción para sustituir o enmendar el acto en cuestión, aunque están autorizados a declarar nula sólo una parte de una medida. Las causas de ilegalidad que las partes pueden alegar en una demanda de anulación son la falta de competencia, el incumplimiento de un requisito de procedimiento esencial, la infracción del Tratado o de cualquier norma legal relacionada con su aplicación, o una desviación de poder (segundo párrafo del artículo 230 del Tratado de la CE).

Ambos Tribunales pueden ordenar la suspensión de la aplicación de un acto impugnado en un procedimiento que esté bajo su jurisdicción (artículo 242 del Tratado de la CE). También pueden ordenar medidas provisionales (artículo 243 del Tratado de la CE). Para que se dicte una medida provisional se necesita que sea urgente, que se haya establecido una presunción *prima facie* y que se respete el equilibrio de intereses en juego.

c) los tribunales de los Estados miembros; y

La mayoría de los tribunales de los Estados miembros están autorizados a anular la decisión administrativa únicamente si la consideran ilegal. Sin embargo, en algunos casos los tribunales pueden sustituir la decisión administrativa por una decisión propia si el asunto supone el pago de derechos. Unos pocos tribunales nacionales están autorizados a sustituir o enmendar la decisión administrativa impugnada: los de Dinamarca, Letonia, los Países Bajos, Suecia y Eslovenia.

d) los organismos encargados de llevar a cabo la revisión en primera instancia de decisiones aduaneras en las Comunidades Europeas.

Las autoridades administrativas de los Estados miembros de las CE pueden anular, revocar, alterar o sustituir una decisión administrativa impugnada. De conformidad con el segundo apartado del artículo 244 del CAC, puede suspenderse la aplicación de la decisión impugnada durante el procedimiento.

72. ¿Qué mecanismos existen, en su caso, para garantizar que el resultado de la revisión de una decisión aduanera en un tribunal de un Estado miembro sea notificado a los tribunales de los demás Estados miembros?

Como en la mayoría de los sistemas jurídicos, en las CE no existen mecanismos de este tipo. Debido al elevado número de asuntos, la notificación del resultado de las revisiones de decisiones aduaneras por el tribunal de un Estado miembro a los tribunales de los demás Estados miembros sería onerosa e ineficaz: una primera estimación del número de asuntos sometidos a los tribunales nacionales de primera instancia de los Estados miembros sitúa la cifra por encima de los 7.500.

73. ¿Vinculan en todos los casos a los tribunales nacionales de los Estados miembros las decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? De no ser así, sírvanse explicar las circunstancias en las que las decisiones prejudiciales no son vinculantes.

Como ya han explicado las CE en el párrafo 188 de su Primera comunicación escrita, las decisiones prejudiciales son vinculantes para los tribunales que sometieron los asuntos, los cuales tienen que aplicarlas en los asuntos que motivaron la petición de la decisión.

En lo que respecta a las peticiones de una decisión basadas en motivos de validez, si el Tribunal de Justicia decide que una medida comunitaria es inválida, ésta se ha de considerar inválida a todos los efectos y ante todos los tribunales: Asunto 66/80, *Spa International Chemical Corporation*, [1981] ECR 1191, párrafos 11 a 13 (CE - Prueba documental 111).

Las resoluciones del Tribunal de Justicia sobre cuestiones de interpretación se consideran vinculantes para los demás tribunales en virtud del objetivo del procedimiento de decisión prejudicial, que es garantizar la uniformidad del derecho comunitario (asuntos acumulados 28 a 30/62, *Da Costa*, [1963] ECR 31) (CE - Prueba documental 112). No obstante, los tribunales de un Estado miembro pueden plantear otra cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si la cuestión considerada parece no ser materialmente idéntica a la que ya fue objeto de una decisión prejudicial en un asunto semejante o si la anterior decisión prejudicial se dictó hace mucho tiempo.

74. En el párrafo 142 de su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos manifiestan que, aun en caso de que pueda considerarse que los tribunales nacionales de los Estados miembros reúnen los requisitos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, no hay en el Código aduanero comunitario ningún precepto que exija que la revisión realizada por esos tribunales nacionales sea "pronta". Sírvanse formular observaciones al respecto.

En primer lugar, debe señalarse que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT obliga simplemente a que los tribunales actúen con prontitud. No exige que los Miembros adopten medidas particulares a tal fin, como establecer plazos. Hasta el momento, los Estados Unidos no han alegado que los exámenes realizados por los tribunales de los Estados miembros de las CE no se realicen con prontitud, y mucho menos han presentado una prueba al respecto.

Aunque el CAC no contiene ninguna disposición que exija que los tribunales nacionales realicen las revisiones con "prontitud", este requisito es reconocido por el derecho comunitario o los sistemas jurídicos de los Estados miembros. En efecto, la "prontitud" forma parte del contenido fundamental del derecho a una protección judicial efectiva.

Según la jurisprudencia, los derechos fundamentales forman parte integrante de los principios generales del derecho, cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Para tal fin, el Tribunal se inspira en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y en las directrices que ofrecen los tratados internacionales de protección de los derechos humanos en que han colaborado los Estados miembros o de los que éstos son signatarios (véase, por ejemplo, el asunto C-71/02, *Karner*, [2004], todavía no incluido en la Recopilación, párrafo 48) (CE - Prueba documental 113).

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha manifestado que el Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene especial importancia a este respecto y las CE han explicado ya en el párrafo 174 de su Primera comunicación escrita que el párrafo 1 del artículo 6 de este Convenio consagra el derecho a un juicio equitativo por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley (CE - Prueba documental 49).

Además, como ya se indicó en el párrafo 174 de la Primera comunicación escrita de las CE, el derecho a la tutela efectiva por un tribunal está reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CE - Prueba documental 48).

Por último, las CE observan que tampoco parece que exista ninguna medida estadounidense particular que garantice que el USCIT realiza sus revisiones con prontitud.

75. En su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas se refieren a una serie de instituciones y mecanismos diversos, que, según sostienen, contribuyen a garantizar la aplicación uniforme de las leyes aduaneras comunitarias (en particular, el Comité del Código Aduanero, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la supremacía y efecto directo de la legislación comunitaria, el deber de cooperación, los procedimientos de infracción, los diversos instrumentos de cooperación aduanera de las CE y las medidas de fiscalización presupuestaria). En la medida en que las Comunidades Europeas no lo han hecho ya en su Primera comunicación escrita, sírvanse explicar concretamente cómo cada una de esas instituciones y mecanismos contribuye a lograr la uniformidad con respecto a los aspectos de la administración de aduanas identificados específicamente por los Estados Unidos: la clasificación aduanera; la valoración en aduana; el control posterior al despacho a libre práctica; las sanciones por infracción de las leyes aduaneras; la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación.

Las CE consideran que han ofrecido ya una explicación amplia del régimen jurídico y administrativo aduanero comunitario. En principio, los mecanismos e instrumentos generales descritos en la Primera comunicación escrita de las CE son aplicables en todas las esferas de la legislación aduanera. Sin embargo, si el Grupo Especial tiene preguntas concretas que hacer sobre la relación entre instrumentos específicos y una cuestión particular, las CE con gusto ofrecerán nuevas explicaciones si así se le pide.

76. Sírvanse formular observaciones sobre la afirmación que hacen los Estados Unidos en el párrafo 44 de su Declaración oral en la primera reunión sustantiva de que el derecho de apelación de los comerciantes, que las Comunidades Europeas sostienen que forma parte del marco destinado a garantizar la aplicación uniforme de las leyes aduaneras comunitarias, se refiere únicamente a infracciones sustantivas y no a la aplicación divergente del derecho sustantivo. Además, sírvanse identificar concretamente los trámites que los comerciantes deben realizar en caso de que se encuentren con esa aplicación divergente, haciendo referencia a todas las normas y directrices pertinentes de las CE.

El derecho a obtener una revisión judicial por los tribunales de los Estados miembros se puede ejercer ante cualquier tipo de infracción del derecho comunitario, con independencia de cuál sea la cuestión de que se trate.

Las CE no están seguras de entender la diferencia entre "infracciones sustantivas" y "aplicación divergente del derecho sustantivo". Sólo existirá derecho de apelación si se ha producido una infracción del derecho comunitario, con independencia de que éste sea sustantivo, o no. Por definición, existirá ilegalidad siempre que se produzca una aplicación no uniforme de la ley.

Por este motivo, las CE no están seguras de cuáles son los casos en los que se puede decir que hay una "aplicación divergente del derecho sustantivo" sin que haya una ilegalidad. En la medida en que intervenga un margen de capacidad discrecional en la aplicación de la ley y ese margen de capacidad discrecional se utilice de conformidad con la legislación aplicable es evidente que no habrá derecho de apelación.

En cualquier caso, las CE sugerirían que los Estados Unidos detallaran a qué casos concretos se refieren. Las CE preguntarían también si existe en los Estados Unidos el derecho de apelación contra prácticas de organismos administrativos que sean conformes con la legislación estadounidense.

77. En el asunto 106/77, *Simmenthal II*, [1978] ECR 629 (CE - Prueba documental 5), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constató que la aplicabilidad directa del derecho comunitario significa que sus normas deben ser aplicadas plena y uniformemente en todos los Estados miembros desde la fecha de su entrada en vigor y mientras sigan estándolo. Sírvanse explicar en forma práctica lo que implica esta constatación, en la medida en la que de ella se deduce que los Estados miembros deben aplicar "uniformemente" el derecho aduanero comunitario.

Esta constatación significa que todas las autoridades de los Estados miembros, incluidos los organismos administrativos y los tribunales, tienen que aplicar el derecho comunitario uniformemente. En concreto, significa que deben interpretar y aplicar el derecho comunitario de conformidad con todas las orientaciones disponibles sobre su significado correcto, con inclusión de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Si la legislación nacional entra en conflicto con disposiciones del derecho comunitario, los tribunales tienen que relegarla. Un instrumento adicional de que disponen los tribunales de los Estados miembros para asegurarse de que aplican el derecho comunitario de manera uniforme son las peticiones de decisiones prejudiciales a que hace referencia el artículo 234 del Tratado de la CE. Para una explicación más detallada, las CE se remiten a su Primera comunicación escrita.[29]

78. En el párrafo 35 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas señalan que el párrafo 2 del artículo 249 del Tratado Constitutivo de la Comunidad establece, entre otras cosas, que: "El reglamento tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro". ¿En qué medida permite ese precepto a los Estados miembros complementar en la práctica las disposiciones del derecho comunitario? ¿Qué medidas existen para impedir que las autoridades aduaneras de los Estados miembros se basen en políticas/directrices privativas del Estado miembro de que se trate al interpretar el derecho aduanero comunitario?

Los Estados miembros pueden completar las disposiciones de un reglamento comunitario si están autorizados expresamente para ello o si la cuestión concreta de que se trate no está prevista en la legislación comunitaria. Sin embargo, todas las leyes nacionales tienen que respetar estrictamente la legislación comunitaria y en caso contrario pueden ser recusadas por los tribunales.[30]

El Tribunal ha aclarado también que el efecto directo de los reglamentos no puede ser supeditado a una práctica o disposición nacional.[31] Además, el Tribunal ha declarado que las autoridades nacionales no pueden establecer directrices vinculantes para la interpretación del derecho comunitario.[32] Por consiguiente, la interpretación del derecho comunitario por las administraciones y los tribunales nacionales se ha de orientar exclusivamente por el texto de las leyes comunitarias, y todas las disposiciones o directrices de origen nacional contrarias se han de considerar sin efecto.

---

[29] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 35 y siguientes.

[30] Asunto 230/78, *Eridania-Zuccherifici*, [1979] ECR 2749, párrafo 34 (CE - Prueba documental 114).

[31] Asunto 93/71, *Leonesio*, [1972] ECR 287, párrafo 22 (CE - Prueba documental 115).

[32] Asunto 94/77, *Fratelli Zerbone*, [1978] ECR 99, párrafo 27 (CE - Prueba documental 116).

79. ¿Hay en el derecho comunitario alguna *obligación* en virtud de la cual las autoridades aduaneras de los Estados miembros hayan de consultar a otros Estados miembros antes de adoptar decisiones en cuestiones aduaneras? En caso afirmativo, sírvanse identificarla y explicarla.

El derecho comunitario no contiene ninguna obligación general en virtud de la cual las autoridades aduaneras de los Estados miembros hayan de consultar a otros Estados miembros antes de adoptar decisiones en cuestiones aduaneras. Tal obligación sería desproporcionada ya que cada año se adoptan millones de decisiones en cuestiones aduaneras y la gran mayoría de ellas no plantea ningún problema particular y no exigen consultas entre las autoridades aduaneras.

Dicho esto, la aplicación del deber de cooperación en situaciones concretas puede dar origen a una obligación de consultas mutuas, por ejemplo si se trata de la emisión de IAV (véase la respuesta de las CE a la pregunta 56 del Grupo Especial). Algunas disposiciones concretas de la legislación aduanera de las CE pueden imponer también la obligación de cooperación mutua en determinadas circunstancias. Como ejemplo cabe citar las siguientes disposiciones:

- Autorización individual para destinos especiales (párrafo 2 del artículo 292 del Reglamento de Aplicación)
- Procedimientos aduaneros con repercusión económica (artículo 500 del Reglamento de Aplicación)
- Servicios regulares de transporte marítimo (apartados a y b del artículo 313 del Reglamento de Aplicación)
- Prueba del carácter comunitario del expedidor autorizado (apartado e del artículo 324 del Reglamento de Aplicación)
- Procedimiento de tránsito simplificado para el transporte aéreo - nivel 2 (artículo 445 del Reglamento de Aplicación)
- Procedimiento de tránsito simplificado para el transporte marítimo - nivel 2 (artículo 448 del Reglamento de Aplicación)

Por último, el Reglamento 515/97 establece un marco general para la cooperación y la asistencia mutua entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros (CE - Prueba documental 42).

80. En el preámbulo del Reglamento (CE) Nº 515/97 del Consejo de 13 de marzo de 1997 (CE - Prueba documental 42) relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria, se declara lo siguiente:

> **"Considerando que la Comisión debe procurar que exista un trato equitativo de los operadores económicos, velando porque la aplicación del sistema de asistencia mutua administrativa por parte de los Estados miembros no dé lugar a discriminaciones entre los operadores económicos situados en los distintos Estados miembros; […]"**
>
> **Sírvanse explicar qué significa "un trato equitativo" y "discriminaciones".**

Los dos términos se refieren al objetivo de asegurar a los operadores económicos que serán tratados por las autoridades aduaneras de los Estados miembros de un modo similar en todos los aspectos pertinentes, impidiendo así la distorsión de las condiciones de competencia entre operadores económicos.

81. En el párrafo 2 del artículo 3 de la Decisión Nº 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2003 por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad (CE - Prueba documental 43) se hace referencia al "Grupo de política aduanera". Sírvanse explicar qué cometido/funciones tiene ese Grupo.

El Grupo de política aduanera es un grupo de trabajo de alto nivel, presidido por la Comisión y formado por los jefes de las administraciones aduaneras o sus adjuntos.

El Grupo permite a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión Europea trabajar en colaboración para asegurarse de que el enfoque común de las políticas aduaneras se adapta continuamente a los nuevos acontecimientos. Su papel es abordar cualquier cuestión aduanera de carácter político y en particular:

- examinar y, en caso necesario, adaptar el enfoque común de las políticas;
- analizar las estrategias (incluidas las de capacitación, informatización y asuntos externos);
- considerar las cuestiones de principio que le remita el Comité del programa Aduanas 2007;
- considerar las cuestiones aduaneras que no están incluidas en el ámbito del programa Aduanas 2007;
- considerar la aplicación de los resultados de las medidas de Aduanas 2007 (por ejemplo, la utilización de directrices, el desarrollo de la gestión de riesgos, la medición de los resultados, etc.)

82. En el párrafo 156 de la Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, las Comunidades Europeas se refieren a varios "programas de acción" encaminados a reforzar el funcionamiento efectivo de la unión aduanera de las CE, incluidas las actividades de formación:

a) ¿Hay formación de los funcionarios de aduanas de los Estados miembros a nivel de Estados miembros y/o de las CE?

La formación de los funcionarios de aduanas se realiza principalmente a escala nacional. Sin embargo, para lograr una armonización en la esfera de la formación y promover un entendimiento común en la esfera de la administración de aduanas se desarrolló un "Programa común de formación aduanera", bajo el programa anterior a Aduanas 2007. Este programa establece unos criterios mínimos vinculantes para la formación nacional básica de los funcionarios de aduanas de toda la Comunidad. Actualmente se están actualizando los correspondientes "módulos de formación común" (se ultimaron a finales de 2005).

El programa presta apoyo a las actividades nacionales de formación y complementa esta formación desde un punto de vista central con proyectos comunes de formación en caso necesario. El desarrollo de estos proyectos comunes de formación (principalmente para una formación profesional avanzada) normalmente está a cargo de la Comisión, con apoyo de expertos y especialistas en formación de los Estados miembros (por ejemplo, elaboración de material de

formación común, otros apoyos a la formación como catálogos de materiales de formación, guías de buena práctica o módulos de aprendizaje en línea con enfoques educativos mixtos).

Otra misión del programa de formación de Aduanas 2007 es el desarrollo de un marco organizativo de la formación aduanera. A tal fin, la Comisión Europea está preparando una Academia Aduanera Virtual, que se define como la oferta de formación aduanera y de las mejores prácticas en distintos formatos, en la que participan los Estados miembros con apoyo de la Comisión en el marco del programa Aduanas 2007.

En el marco del programa Aduanas 2007 la Comisión organiza y preside seminarios y conferencias en colaboración con las administraciones anfitrionas. Los seminarios o conferencias que se organizan en el marco de Aduanas 2007 se utilizan frecuentemente como instrumentos para

- Actualizar y mejorar los conocimientos de los Estados miembros sobre la legislación común;
- Establecer un foro para difundir las mejores prácticas comunes y desarrollar orientaciones prácticas para aplicar la legislación común;
- Servir de vehículo de intercambio de información para que los Estados miembros intercambien conocimientos, especialización y experiencias;
- Lanzar nuevas iniciativas en la esfera de las aduanas.

Por consiguiente, la mayoría de los seminarios efectivamente incluyen un elemento de intercambio de información/conocimientos que se puede considerar método de formación en un sentido amplio. Por ejemplo, los seminarios cuentan con ese componente de intercambio de información, a través de la cual la Comisión presenta la legislación común nueva o modificada. Además, los talleres organizados por la Comisión, que tienen una orientación más práctica, son también a su vez una herramienta para difundir información a los expertos de los Estados miembros (por ejemplo, taller sobre el nuevo sistema de tránsito informatizado, taller sobre el RIF, etc.).

b) En tal caso, sírvanse explicar la naturaleza y finalidad de esa formación. ¿Responde al objetivo de la asimilación de los 10 Estados miembros de las CE de reciente adhesión y/o forma parte de una formación de larga data y permanente destinada a los funcionarios de aduanas de todos los Estados miembros de las CE?

En la actualidad, los 10 nuevos Estados miembros participan plenamente en este proceso y además se benefician de todo el material y los módulos de formación que se prepararon antes de su adhesión a la UE.

Además, ya desde antes de la adhesión, una de las prioridades del programa Aduanas 2007 era la preparación para la ampliación. Según el párrafo 2 del artículo 2 de la Decisión 253/2003, el programa está abierto a la participación de los países candidatos a la adhesión a las CE. Se prepararon diversas medidas expresamente para capacitar a los países candidatos para que pudieran cumplir la legislación aduanera comunitaria (seminarios sobre aranceles, reuniones de formación sobre solicitudes arancelarias, etc.) y ofrecerles asistencia con respecto a la interconectividad (sistemas de TI) y la capacidad operativa. Además de estas disposiciones especiales, los países candidatos fueron invitados a todos los seminarios y a la mayoría de las demás actividades generales organizadas por los Estados miembros.

83. Sírvanse indicar si se han adoptado medidas en aplicación de lo dispuesto en los siguientes párrafos del artículo 4 de la Decisión Nº 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo de 11 de febrero de 2003 por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad, y en caso de que se hayan adoptado, cuáles han sido esas medidas:

...

b) determinar, desarrollar y aplicar las mejores prácticas de trabajo, en particular en materia de controles contables *a posteriori*, análisis de riesgo y procedimientos simplificados;

...

e) reforzar la normalización y la simplificación de los procedimientos, regímenes y controles aduaneros;

f) mejorar la coordinación de los laboratorios que realizan análisis con fines aduaneros, así como la cooperación entre ellos, con objeto de garantizar, en particular, una clasificación arancelaria uniforme y sin ambigüedades en toda la Unión Europea;

...

k) desarrollar medidas de formación común y establecer un marco organizativo para la formación aduanera que responda a las necesidades derivadas de las acciones del programa.

Se adjunta a la Prueba documental 117 presentada por las CE una lista de las medidas incluidas en el programa que pueden ser clasificadas dentro de las categorías mencionadas *supra* en función de sus objetivos.

La Comunidad Europea y sus Estados miembros han adoptado una serie de medidas para mejorar las prácticas de trabajo. Éstas se desarrollan de diversas formas, lo que incluye el establecimiento de criterios, la redacción de directrices, la creación de grupos de contacto para compartir información y las mejores prácticas, utilización de grupos seleccionados para hacer el seguimiento de temas concretos, etc. En las esferas mencionadas expresamente, la Comunidad Europea ha elaborado una guía para los controles contables *a posteriori*[33], que explica el enfoque recomendado para tales controles.

La Comunidad Europea lleva trabajando también en la esfera de la gestión de riesgos desde hace algunos años. Después de la aprobación de la primera guía de análisis de riesgos, las medidas se han centrado en la promoción de un enfoque común de la gestión de riesgos. Un seminario sobre el análisis de riesgos, abierto a toda la Comunidad, condujo a que la labor se centrara en el establecimiento de un marco comunitario para la gestión de riesgos. Desde entonces, los esfuerzos se han orientado hacia la creación de un sistema comunitario de intercambio seguro de información sobre riesgos basado en los principios del marco. Este sistema lleva funcionando desde hace más de un año en fase experimental. La reciente modificación del Código Aduanero Comunitario ha introducido la obligación legal de crear un sistema comunitario de gestión de riesgos. La Comisión y los Estados miembros están actualmente ultimando este sistema, que operará a partir de la base segura de TI que ha sido ya experimentada y permitirá la introducción de perfiles comunitarios de riesgos y un intercambio efectivo de información sobre riesgos.

[33] CE - Prueba documental 90.

Además de la labor sobre la gestión de riesgos que permite un enfoque común del control, la Comunidad elabora enfoques normalizados de los sistemas y controles a través de diversos métodos. Entre ellos cabe mencionar el intercambio de funcionarios, el uso de criterios de referencia y grupos encargados de proyectos de examen de temas concretos (como las autorizaciones europeas individuales, la producción de guías, manuales, etc.), la formación y el desarrollo de sistemas de TI. También se pueden adoptar medidas específicas para realizar controles más especializados, por ejemplo, la lucha contra la falsificación.

84. Sírvanse explicar qué información/datos contiene el sistema de información sobre el arancel integrado comunitario (TARIC) a que se hace referencia en el párrafo 1d) del artículo 5 de la Decisión Nº 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2003 por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad.

El sistema TARIC contiene toda la información a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 2 del Reglamento 2658/87, cuyo texto dice lo siguiente:

> Dicho arancel [el arancel integrado TARIC] estará basado en la nomenclatura combinada, e incluirá:
>
> a) las medidas que contiene el presente Reglamento;
>
> b) las subdivisiones comunitarias complementarias, denominadas "subpartidas TARIC", necesarias para la ejecución de las medidas comunitarias específicas que figuran en el anexo II;
>
> c) cualquier otro elemento informativo necesario para la aplicación o la gestión de los códigos TARIC y de los códigos adicionales contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 3;
>
> d) los tipos de los derechos de aduana y los demás gravámenes sobre la exportación y la importación, incluyendo las exenciones de derechos y los tipos preferenciales de derechos aplicables a la importación o la exportación de mercancías específicas;
>
> e) las medidas aplicables a la importación o a la exportación de mercancías específicas que figuran en el anexo II.

El anexo II a que se hace referencia en los apartados b) y e) del párrafo 2 del artículo 2 del Reglamento 2658/87 actualmente está incluido en el anexo II del reglamento 1810/2004 de la Comisión (CE - Prueba documental 118).

85. En las esferas que no están reguladas específicamente por el derecho comunitario por lo que, de hecho, las autoridades de los Estados miembros tienen facultades discrecionales en lo que respecta a la interpretación y aplicación del derecho en relación con esas esferas, ¿qué mecanismos, en su caso, están en vigor para *garantizar* la uniformidad de la interpretación y aplicación del derecho en todos los Estados miembros?

En las esferas que no están reguladas por el derecho comunitario, incluido el derecho comunitario primario, los Estados miembros pueden libremente legislar y aplicar sus propias leyes. No hay ningún mecanismo en vigor a escala de las CE para garantizar la uniformidad de la interpretación y aplicación de las leyes de los Estados miembros en las esferas que no están reguladas por el derecho comunitario.

Debe señalarse, no obstante, que aunque el derecho comunitario secundario no haya regulado expresamente una esfera, los Estados miembros pueden estar obligados a respetar determinados principios del derecho comunitario. Como ejemplo cabe citar la esfera de las sanciones por infracción del derecho comunitario, respecto de las cuales el artículo 10 del Tratado de la CE exige que las que establezcan los Estados miembros sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.[34]

86. Sírvanse explicar la actual condición jurídica del Código aduanero modernizado que se reproduce en Estados Unidos - Prueba documental 33. Sírvanse aclarar durante cuánto tiempo ha estado en curso el proceso de revisión. Sírvanse identificar cuándo y cómo tuvo lugar la consulta al público/los terceros con respecto a este proceso de revisión.

El proyecto de Código aduanero modernizado que se reproduce en la Prueba documental 33 presentada por los Estados Unidos es un documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea. No representa la posición oficial de la Comisión Europea ni de ninguna institución comunitaria.

El Código aduanero modernizado es un proyecto importante cuyo objetivo es la recodificación, modernización y simplificación del derecho aduanero comunitario, aprovechando la experiencia acumulada antes de la entrada en vigor del Código Aduanero Comunitario. La Comisión anunció por primera vez su intención de modernizar y simplificar el derecho aduanero en 2003. En julio y agosto de 2004 se mantuvieron las primeras consultas públicas sobre el proyecto de Código aduanero modernizado. En enero de 2005 se mantuvieron las segundas consultas públicas sobre una versión revisada del código (CE - Prueba documental 47).

87. ¿Cuál es la relación jurídica, en su caso, entre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3 b) de ese mismo artículo? A este respecto, sírvanse formular observaciones concretamente sobre las siguientes manifestaciones hechas por los Estados Unidos en su Declaración oral en la primera reunión sustantiva:

Como han explicado ya las CE en su Primera comunicación escrita (párrafos 461 y 466) y en su primera Declaración oral (párrafo 60), los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT establecen obligaciones diferentes y no se puede considerar que haya una relación jurídica entre ambas disposiciones.

El párrafo 3 a) del artículo X del GATT obliga a las partes a aplicar de manera uniforme, imparcial y razonable las leyes y reglamentos a que hace referencia el párrafo 1 de dicho artículo X del GATT. En cambio, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT obliga a las partes a prever una pronta revisión de las decisiones aduaneras.

El hecho de que estas disposiciones figuren en el mismo artículo no significa que deban ser interpretadas de forma que se diluya la diferencia entre las obligaciones que establecen. Evidentemente, las dos disposiciones tienen que ser interpretadas de forma armoniosa, teniendo en cuenta su respectivo objeto y fin. Sin embargo, eso no significa que las obligaciones que establece una disposición puedan ser trasladadas sin más a la otra.

En particular, las CE atribuyen una gran importancia al hecho de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no se relacione con la aplicación de las leyes relativas al procedimiento judicial y la organización de la justicia, ya que esas leyes no figuran entre las enumeradas en el párrafo 1 del artículo X del GATT. Por consiguiente, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no se puede interpretar que obliga a la armonización de las leyes relativas al procedimiento judicial y la organización de la justicia de un Miembro de la OMC.

[34] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 144 y siguientes.

a) el argumento de las CE de que las apelaciones al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constituyen un instrumento importante de aplicación uniforme está en contradicción con su pretensión en el contexto del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 de que la obligación de aplicación uniforme y la obligación de instituir recursos frente a las medidas administrativas son obligaciones diferenciadas, entre las que no hay una relación intrínseca (párrafo 42);

El argumento planteado por los Estados Unidos se basa en una interpretación incorrecta, pues, según los Estados Unidos, las demandas de decisiones prejudiciales sometidas al Tribunal de Justicia tienen el carácter de un recurso en apelación. Al contrario, ese procedimiento se basa en una relación de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales, y no en una relación jerárquica. Las CE han puesto ya de manifiesto esta cuestión en el párrafo 470 de su Primera comunicación escrita.

Puesto que el Tribunal de Justicia, cuando examina demandas de decisiones prejudiciales, no actúa como tribunal de apelación su papel ha de ser interpretado teniendo en cuenta la obligación que establece el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de asegurar la aplicación uniforme de todas las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del mismo artículo. De hecho, las decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia son un instrumento importante, entre todos los demás descritos por las CE en su Primera comunicación escrita, para asegurar la aplicación uniforme. La pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a cuestiones aduaneras, según exige el párrafo 3 b) del artículo X del GATT, está garantizada por los tribunales nacionales ante los que se presentan las demandas, no por el Tribunal de Justicia.

b) la relación entre el párrafo 3 a) del artículo X y el párrafo 3 b) de ese mismo artículo deriva de la referencia que se hace en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 a "aplicar las medidas administrativas", aplicación que constituye el objeto del párrafo 3 a) del artículo X (párrafo 59).

Igualmente, las CE consideran que los términos "aplicar las medidas administrativas" que figuran en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT no establecen ninguna relación entre esta disposición y el párrafo 3 a) de dicho artículo X. El párrafo 3 b) se refiere a los "organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" para identificar a los organismos que están sometidos a la obligación de proceder a una pronta revisión, y de los que serán independientes los tribunales o procedimientos. Eso no significa que la aplicación en cuanto tal se convierta en el contenido del párrafo 3 b) del artículo X del GATT.

88. ¿Tiene efectos directos en los Estados miembros la obligación de pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas establecida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994? Si es así, ¿qué significa eso desde el punto de vista práctico para la revisión de las decisiones aduaneras por organismos de los Estados miembros?

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia han sostenido que, teniendo presente su naturaleza y estructura, los Acuerdos de la OMC no figuran, en principio, entre las normas en las que han de basarse para revisar la legalidad de las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias (asunto C-149/96, *Portugal/Consejo*, [1999] ECR I-8395, párrafos 42 a 46 (CE - Prueba documental 119), asunto C-377/02, *Van Parys*, [2005], no incluido todavía en la Recopilación, párrafo 39 (CE - Prueba documental 120) y asunto T-19/01, *Chiquita/Comisión*, [2005], no incluido todavía en la Recopilación, párrafo 114 (CE - Prueba documental 121). Por consiguiente, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT no crea ningún derecho que las personas individuales puedan alegar directamente ante los tribunales en virtud del derecho comunitario.

Sin embargo, las CE quisieran remitirse a su respuesta a la pregunta 74, en la que explicaban que el principio de "pronta revisión" es en cualquier caso inherente al derecho a una protección judicial eficaz, que forma parte de los principios generales reconocidos en todos los Estados miembros así como del sistema jurídico comunitario, reconocido por el Tribunal de Justicia.

PREGUNTAS PARA AMBAS PARTES:

89. ¿Puede un sistema en el que corresponde fundamentalmente a un comerciante la reivindicación de sus derechos para conseguir la aplicación uniforme por las autoridades aduaneras de un determinado Miembro de la OMC (por ejemplo, mediante apelaciones para reclamar contra las decisiones de esas autoridades aduaneras o el trato otorgado por ellas) dar cumplimiento a las obligaciones recogidas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

El hecho de que la práctica de un Miembro de la OMC esté en conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT es algo que ha de evaluarse a partir de la pauta general de aplicación de ese Miembro, teniendo en cuenta todos los elementos del sistema jurídico de ese Miembro en su totalidad. Por este motivo, es difícil dar una respuesta general a la pregunta del Grupo Especial.

Dicho esto, las CE creen que, si bien las posibilidades de procedimiento que se ofrecen a los comerciantes pueden desempeñar un papel importante en la consecución de la uniformidad en la aplicación, normalmente la aplicación uniforme de las leyes será también un objetivo de las autoridades públicas. Cuáles deban ser los instrumentos específicos a disposición de las autoridades y cuáles los instrumentos a disposición de las partes privadas dependerá de la estructura general del sistema particular y, por consiguiente, no se puede dar una respuesta en abstracto.

90. En el párrafo 11. 70 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Pieles y cueros* declaró que "la cuestión pertinente [para determinar si es o no aplicable el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994] es si el contenido de esa medida es de naturaleza administrativa o implica cuestiones sustantivas reguladas más adecuadamente en otras disposiciones del GATT de 1994". Sírvanse indicar cómo interpretan esta declaración, y en especial la referencia a una medida que "es de naturaleza administrativa". Sírvanse explicar además en forma práctica en qué sentido la distinción entre las medidas de naturaleza administrativa y las que no tienen esa naturaleza es pertinente para la *aplicación* del párrafo 3 a) del artículo X.

Las CE consideran que esta declaración no tiene ninguna relación directa con el presente asunto. El Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Pieles y cueros* tenía que decidir sobre una alegación de las CE de que un reglamento argentino concreto que preveía la presencia de representantes de la industria curtidora argentina en el procedimiento administrativo representaba una aplicación no razonable, parcial y no uniforme.[35] La Argentina se defendía alegando que las CE impugnaban la sustancia de una norma y no su aplicación.[36]

En esencia, lo que el Grupo Especial *Argentina - Pieles y cueros* decidió fue que si una ley o reglamento concreto obliga a una actuación administrativa que no es razonable, no es uniforme o es parcial, la propia ley o el propio reglamento constituirán una infracción de las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Ese es el sentido de la distinción del Grupo Especial entre medidas administrativas y medidas sustantivas. Está claro que el Grupo Especial no pretendió poner

[35] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.58.

[36] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.69.

de ningún modo en duda el hecho de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere únicamente a la aplicación de las leyes y reglamentos.

En el presente asunto, ninguna medida de las CE obliga de ningún modo a la aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria. Al contrario, el propósito de las leyes y reglamentos de las CE es evitar cualquier falta de uniformidad. Por consiguiente, las CE entienden que el asunto mencionado por los Estados Unidos no hace referencia a la legislación aduanera comunitaria en cuanto tal sino más bien a la aplicación de esa legislación.

Contra lo que afirman los Estados Unidos[37], el Grupo Especial *Argentina - Pieles y cueros* no sirve de apoyo para afirmar que un Miembro de la OMC no está autorizado a mantener leyes a nivel subfederal, como sucede con las sanciones en las CE. En primer lugar, no está claro cómo definen los Estados Unidos "administrativas", y por qué consideran que las disposiciones que establecen las sanciones son "administrativas" y no "sustantivas".

Todavía más importante es el hecho de que no tiene nada que ver que haya leyes de los Miembros de la OMC a nivel subfederal que regulen asuntos incluidos en el ámbito del párrafo 1 del artículo X del GATT con la situación considerada por el Grupo Especial *Argentina - Pieles y cueros*. Por ejemplo, las disposiciones penales que contienen las leyes de los Estados miembros de las CE no suponen de ningún modo una falta de uniformidad en la administración o aplicación de esas leyes. Esta situación es totalmente distinta de la considerada en el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, pues en aquel caso la medida argentina hacía imperativa la presencia de representantes de la industria, parciales e interesados, lo que necesariamente implicaba que la administración o aplicación no era ni razonable ni imparcial.

91. Sírvanse facilitar una copia de la lista de propuestas formuladas por los Estados Unidos que figura en el documento titulado "Elements of Potential EC Customs Reform", de fecha 22 de diciembre de 2004.

Se adjunta como Prueba documental 122 presentada por las CE copia de este documento. El documento fue transmitido por los Estados Unidos a las CE el 22 de diciembre de 2004 a raíz de las consultas celebradas el 16 de noviembre de ese mismo año.

92. Sírvanse formular observaciones sobre el párrafo 7 de la comunicación en calidad de tercero del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, en el que se aduce que no es pertinente al presente caso el criterio de las "diferencias administrativas de importancia secundaria" de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 a que hizo referencia el Grupo Especial del GATT en el asunto *CE - Manzanas de mesa*. ¿Depende la aplicabilidad de ese criterio de la existencia de determinadas circunstancias fácticas o de otra naturaleza? De ser así, sírvanse explicarlo y justificarlo, haciendo referencia a los términos específicos del párrafo 3 a) del artículo X.

Las CE se remiten al respecto a su respuesta a la pregunta 46 del Grupo Especial.

93. En el párrafo 21 de su Declaración oral en la primera reunión sustantiva, los Estados Unidos sostienen que las leyes aduaneras pueden aplicarse mediante instrumentos que son a su vez leyes, como ocurre en el caso de las leyes que imponen sanciones.

[37] Primera Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 47.

a) Sírvanse formular observaciones al respecto.

Las CE no están de acuerdo con esta afirmación. Como han explicado ya en respuesta a la pregunta 109 del Grupo Especial, el verbo "aplicar" que se utiliza en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT ("*administer*" en la versión inglesa) significa "ejecutar" o "administrar". En este contexto concreto, eso significa que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se refiere a la ejecución en casos concretos de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT.

Una ley, como las leyes de los Estados miembros que contienen disposiciones que establecen sanciones, es por sí misma de aplicación general y necesita ser ejecutada o aplicada. Por consiguiente, no se puede decir que tal ley "ejecute" o "aplique" otra. Por consiguiente, la alegación de los Estados Unidos no es conforme con el sentido corriente de los términos del artículo X del GATT.

Además, la alegación estadounidense es incompatible con la jurisprudencia establecida por el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Bananos III*, según la cual el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no hace referencia a las leyes y reglamentos en sí mismos sino más bien a su aplicación.[38] Los Estados Unidos, al alegar que una ley puede constituir en sí misma una "aplicación" de otra ley, pretenden borrar los perfiles de la clara diferencia entre la aplicación de las leyes y las leyes en sí mismas. Según los Estados Unidos, se podría alegar que cualquier actividad legislativa es también una actividad administrativa. Está claro que esta conclusión no forma parte del objeto y fin del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

b) ¿Puede aplicarse este argumento a todas las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994?

Este argumento no se puede aplicar a ninguno de los instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo X del GATT. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que hace referencia esta disposición tienen siempre en común que han de ser "de aplicación general". Por consiguiente no se puede decir que sean ejecutadas o aplicadas por otra ley también de aplicación general.

c) En caso afirmativo, sírvanse indicar los tipos de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general de que se trate.

Véase la respuesta a la pregunta anterior.

d) ¿Cuáles serían las repercusiones y el efecto práctico de una interpretación de esa naturaleza en relación con la administración de cuestiones distintas de las aduaneras?

Las consecuencias serían extremadamente graves para los Miembros de la OMC que tengan en vigor leyes, reglamentos u otras medidas de aplicación general a nivel subfederal, regional o incluso local.

Si los Estados Unidos tuvieran razón, estas leyes subfederales, de tener algún vínculo con una ley en vigor a nivel federal, por ejemplo porque completan o complementan sus disposiciones, se podría decir que constituirían una "aplicación" de la ley. Por consiguiente, si estuvieran en vigor varias leyes de este tipo en diferentes partes del territorio de un Miembro de la OMC y su contenido

[38] Informe del Órgano de Apelación, *CE - Bananos III*, párrafo 200.

no fuera idéntico, el Miembro de la OMC estaría quebrantando las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Esta interpretación afectaría a todos los Miembros de la OMC que tengan en vigor legislación no sólo a nivel central sino también a niveles inferiores. Los sistemas de tipo federal tienen en común el fenómeno de que la legislación a nivel federal y a nivel subfederal son mutuamente complementarias y se entrelazan. Por consiguiente, la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT propuesta por los Estados Unidos interferiría gravemente en la distribución constitucional de los poderes para la mayoría de los Miembros de la OMC que tienen una estructura federal, y por consiguiente debe ser rechazada.

94. En lo que respecta a la interpretación del término "aplicación" en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, ¿consideran las partes que debería establecerse una distinción entre los procedimientos administrativos aplicables a los comerciantes y el trato otorgado a éstos, de una parte, y las decisiones sustantivas y los resultados de los procesos administrativos que afectan a los comerciantes, de otra? En caso afirmativo, sírvanse explicar el fundamento jurídico para establecer esa distinción.

Las CE consideran que debe establecerse tal distinción. Como han indicado ya las CE[39], el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es una disposición que se remita a sí misma sino que pretende establecer unas normas mínimas de previsibilidad para los comerciantes. Por consiguiente, el párrafo 3 a) del artículo X se interesa principalmente por los resultados administrativos que afectan a los comerciantes, y no por las leyes y procedimientos en cuanto tales. Como también han dicho las CE[40], sólo se puede decir que un procedimiento constituye una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT si ese procedimiento concreto tiene por resultado necesario e inevitable una infracción de dicha disposición.

<u>PREGUNTAS PARA LAS PARTES Y LOS TERCEROS</u>:

109. ¿Cómo debe interpretarse el término "aplicará" a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

El verbo "*administer*" (aplicar) se define como "*manage as a steward; carry on or execute*" (gestionar como apoderado; realizar o ejecutar).[41] En otras palabras, el verbo "aplicar" remite a la ejecución de algo. En el caso del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, esta aplicación se relaciona con las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT. En otras palabras, a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT el verbo "aplicar" significa ejecutar las leyes y reglamentos generales, es decir, aplicarlos en casos concretos.

Esta interpretación está confirmada por los textos en español y en francés, en los que se utilizan los verbos "aplicará" o "appliquera", respectivamente, que se pueden traducir como "*to apply*". Por consiguiente, los textos en español y en francés confirman también que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT hace referencia a la aplicación de las leyes y reglamentos generales señalados en el párrafo 1 de dicho artículo.

---

[39] Respuesta de las CE a la pregunta 46 del Grupo Especial.

[40] Respuesta de las CE a la pregunta 90 del Grupo Especial.

[41] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, Clarendon Press, Oxford, 1993, volumen 1, página 28 (CE - Prueba documental 123).

110. ¿Significa la obligación de uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 que no debe haber posibilidad de ejercer facultades discrecionales en la aplicación de leyes aduaneras o que esa posibilidad debe tener sólo un alcance limitado?

No. El ejercicio de facultades discrecionales es un fenómeno normal en el derecho administrativo. El reconocimiento de un margen de capacidad discrecional puede ser necesario cuando hay que tener en cuenta aspectos complejos de los hechos que concurren en un caso particular o hay que ponderar y equilibrar intereses contradictorios o no resulta posible determinar en cada caso el resultado concreto de una medida de aplicación general. Normalmente el ejercicio de facultades discrecionales por las autoridades estará limitado por la ley, y habrá de respetar determinados principios, como el principio de no discriminación. Por tanto, el ejercicio adecuado de las facultades discrecionales reconocidas por la ley no se puede considerar que constituya una falta de uniformidad que esté en conflicto con las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

111. ¿Se tiene en cuenta a los efectos de la obligación de uniformidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 el tiempo que requiere la solución de una cuestión concreta (incluidos los supuestos de divergencias en materia de aplicación)? En caso afirmativo, sírvanse explicar las razones, con referencia a los términos específicos del párrafo 3 a) del artículo X.

En principio, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se interesa por el resultado de la aplicación de las leyes. Por este motivo, no es incompatible con dicho párrafo 3 a) del artículo X del GATT que los instrumentos administrativos destinados a garantizar la uniformidad no surtan efectos inmediatamente siempre que aseguren la aplicación uniforme de la legislación en un plazo razonable. Además, el tiempo necesario para solucionar una cuestión concreta puede depender también de la complejidad del asunto y de las circunstancias que concurran en él.

112. Con respecto al objetivo de la OMC de seguridad y previsibilidad del entorno comercial internacional (al que ha hecho recientemente referencia el Órgano de Apelación en el contexto de los compromisos arancelarios en el párrafo 243 de su informe en *CE - Trozos de pollo*, WT/DS269/AB/R y WT/DS286/R), sírvanse explicar si es pertinente a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, por qué razones y en qué sentido.

Las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 46 del Grupo Especial.

113. ¿Son pertinentes a la interpretación y aplicación de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT de 1994 las expectativas de los comerciantes? En caso afirmativo, sírvanse explicar por qué y en qué sentido, con referencia al texto específico de esos párrafos.

Las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 46 del Grupo Especial.

114. ¿Requiere la obligación recogida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 la uniformidad general de la aplicación o la uniformidad de la aplicación en todos y cada uno de los casos? ¿Depende la respuesta a esa pregunta de la naturaleza de la impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X? De ser así, sírvanse explicarlo. En caso de que sea admisible de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X una uniformidad general, ¿cuál sería el umbral práctico/cuantitativo y/o el punto de referencia para demostrar que se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X?

Las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 45 del Grupo Especial.

115. Sírvanse formular observaciones sobre la afirmación que hace el Japón en el párrafo 8 de su comunicación en calidad de tercero en el sentido de que, al evaluar la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, es necesario que el Grupo Especial analice si existen las supuestas divergencias que alegan los

Estados Unidos, y de existir, si existen en un grado que se consideraría incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X a la luz del sistema aduanero concreto considerado en su conjunto.

Las CE están de acuerdo con la afirmación del Japón. En lo que respecta a los demás aspectos de la pregunta, las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 45 del Grupo Especial.

116. En el párrafo 2 de la Declaración oral del Japón en la sesión destinada a los terceros de la primera reunión sustantiva, el Japón se basa en las "normas mínimas" de transparencia y equidad procesal a que hizo referencia el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* para aducir que "una aplicación de los reglamentos que careciera de 'uniformidad' [a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994] sería en general injusta, parcial, sesgada, tendenciosa y opaca -dicho de otra forma, no equitativa y no transparente". Con arreglo a esta forma de razonar, ¿serían aplicables los requisitos de transparencia y equidad procesal a: i) los procesos o el trato de los comerciantes en el contexto de la aplicación de las leyes aduaneras; y/o ii) las decisiones aduaneras sustantivas a las que están sujetos los comerciantes?

Las CE están de acuerdo con el Japón en que la declaración del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Camarones* es aplicable a la interpretación de "uniformidad" a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. En cuanto a las preguntas concretas planteadas por el Grupo Especial, las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 94 del Grupo Especial.

117. En el párrafo 7. 268 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Acero laminado en caliente (WT/DS184/R) declaró: "Observamos que el Japón no ha alegado en ningún momento, ni mucho menos ha demostrado, que el proceso de formulación de decisiones en relación con las cuestiones concretas que plantea haya tenido una estructura que indique que la legislación antidumping estadounidense no se aplica de manera uniforme, imparcial y razonable [de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994]". Sírvanse formular observaciones sobre la constatación del Grupo Especial de que para demostrar la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X es necesario demostrar una determinada estructura del proceso de formulación de decisiones.

Las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 45 del Grupo Especial.

118. ¿Qué significan las palabras "que se refieran a" del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? Las normas que regulan el procedimiento operativo de los organismos que supervisan la aplicación de leyes aduaneras o intervienen de alguna forma en ella, como, por ejemplo, el Comité del Código Aduanero de las CE ¿reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general "que se refieren a" la clasificación o la valoración de los productos a efectos aduaneros?

La expresión "*pertain to*" (que se refieran a) se define como "*belong or be attached to, have reference or relation to*" (pertenecer o estar unido a, remitir a o tener relación con).[42] En otras palabras, el contenido de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general tiene que formar parte, remitir a, o estar relacionado con los asuntos enumerados en el párrafo 1 del artículo X del GATT, es decir, la clasificación o la valoración en aduana de productos, los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, o las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación o exportación, o la transferencia de pagos relativa a ellas,

[42] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, Clarendon Press, Oxford, 1993, volumen 2, página 2.173 (CE - Prueba documental 123).

o la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de los productos.

Las normas que regulan los procedimientos de actuación de los órganos que supervisan o intervienen de algún modo en la aplicación de las leyes aduaneras no reúnen, en sí mismas, las condiciones para ser consideradas leyes, reglamentos, decisiones judiciales o disposiciones administrativas de aplicación general "que se refieran a" la clasificación o la valoración en aduana de productos. Estas leyes pueden garantizar que un Miembro cumple las obligaciones que le atribuye el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Sin embargo, eso no quiere decir que las leyes que regulan las operaciones de los organismos se convierten ellas mismas en leyes "que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana de productos".

119. Las leyes/disposiciones que establecen sanciones, aplicables a la violación de leyes aduaneras ¿están comprendidas dentro de las medidas a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? De ser así, sírvanse explicarlo, con referencia a los términos pertinentes de ese párrafo.

Como han explicado las CE en respuesta a la pregunta anterior, el párrafo 1 del artículo X del GATT sólo abarca las leyes que se refieren a los asuntos que el propio párrafo enumera, es decir, la clasificación o la valoración en aduana de productos, los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, o las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación o exportación, o la transferencia de pagos relativa a ellas, o la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de los productos.

Las sanciones por la infracción de las leyes aduaneras no figuran entre los asuntos enumerados en el párrafo 1 del artículo X del GATT. Tampoco se puede considerar que las sanciones por la infracción de leyes aduaneras necesariamente "se refieren a" la clasificación o la valoración de los productos o los tipos de los derechos de aduana. Por ejemplo, la legislación de un Miembro puede imponer una sanción si no se declara una mercancía cuando es importada. No parece que pueda afirmarse que esa ley se refiere a la clasificación o la valoración de productos o a los tipos de los derechos de aduana.

Debe observarse que, debido al carácter mismo de las sanciones, parece que sería algo problemático exigir una aplicación uniforme de las mismas. Las disposiciones que establecen sanciones, y en particular las disposiciones del derecho penal, normalmente reconocen a las autoridades un margen de libertad para evaluar la sanción aplicable en cada caso concreto. Este margen es particularmente necesario si se quiere tener en cuenta la culpabilidad individual del demandado. Por definición, se necesita un margen mayor de libertad para la aplicación de disposiciones que establecen sanciones que para la aplicación de disposiciones relativas a la clasificación, la valoración y los tipos de los derechos de aduana.

Así lo reconoce también implícitamente el párrafo 3 del artículo VIII del GATT, que únicamente exige que se respeten ciertos criterios mínimos de proporcionalidad en la imposición de sanciones por infracciones de reglamentos o formalidades de aduana. Además, dada la referencia expresa a las sanciones que contiene el párrafo 3 del artículo VIII del GATT, parece que si los redactores del GATT hubieran tenido la intención de incluir las sanciones en el ámbito del párrafo 1 del artículo X del GATT habrían hecho una referencia expresa a las mismas en esta disposición.[43]

[43] En el marco de las negociaciones de Doha sobre la facilitación del comercio, el Japón, Mongolia, el Taipei Chino y el Perú presentaron la propuesta de incluir una disposición para "Enunciar con claridad y publicar las disposiciones sobre sanciones por infracciones de las formalidades de importación y exportación

120. ¿Cuál es la relevancia del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

Las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 68 del Grupo Especial.

121. Con referencia a los términos específicos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, sírvanse explicar si la obligación de garantizar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas está o no limitada a las revisiones en primera instancia por las autoridades administradoras.

El párrafo 3 b) del artículo X del GATT establece que los tribunales o los procedimientos destinados a garantizar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a cuestiones aduaneras serán independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Sólo si las revisiones en primera instancia por las autoridades administradoras cumplen este requisito de independencia se puede considerar que las revisiones de este tipo cumplen suficientemente la obligación de garantizar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas.

122. ¿Qué significa "rectificación" en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

El término "rectificación" ha de ser interpretado en conjunción con el término acompañante "revisión". Ambos deben abarcar las funciones ordinarias de los tribunales y jueces de control de la Administración: verificar que las decisiones administrativas respetan la ley y ofrecer al demandante una reparación que elimine la ilegalidad.

Las CE consideran que el término "revisión" hace referencia a la primera función y que el término "rectificación" hace referencia a la segunda.

Esta interpretación es acorde con la definición de ambos términos que puede encontrarse en los diccionarios. En el inglés jurídico, el término "*review*" quiere decir "*consideration of a judgement, sentence, etc., by some higher court or authority*" (consideración de un juicio, sentencia, etc., por un tribunal o una autoridad superior), y "*correction*" quiere decir "*an act or instance of enmendation*" o "*the neutralization of anything harmful*" (acción o efecto de enmendar, neutralización de algo dañino).[44] Definiciones similares se pueden encontrar en español y en francés. "Revisar" en español significa "examinar una cuenta, unas notas, un trabajo hecho, etc., para asegurarse de que está bien o completo" y "rectificar" significa "corregir a alguien su conducta".[45] En francés, "*réviser*" significa "*examiner de nouveau pour changer, corriger*" (volver a examinar para cambiar, corregir) y "*rectifier*" significa "*faire disparaître en corrigeant*" (hacer que desaparezca mediante una corrección).[46]

---

contenidas en las leyes y reglamentos pertinentes"; véase la compilación preparada por la Secretaría, TN/TF/W/43/Rev. 1, página 14 (CE - Prueba documental 70).

[44] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, Clarendon Press, Oxford, 1993, volumen 2, página 2.582 y volumen 1, página 516 (CE - Prueba documental 123).

[45] María Moliner, *Diccionario del uso del español*, Editorial Gredos, Madrid, 1988, páginas 1.003 y 960 (CE - Prueba documental 124).

[46] *Le nouveau petit Robert*, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2003, páginas 2.296 y 2.201 (CE - Prueba documental 125).

123. ¿Cuál es la relación jurídica, en su caso, entre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3 b) de ese artículo?

Las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 87 del Grupo Especial.

ANEXO A-4

RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de septiembre de 2005)

1. En los párrafos 46 a 48 de su Primera comunicación escrita, las CE hacen referencia al hecho de que la Comisión puede iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros y que la intervención de los particulares para señalar a la atención de la Comisión supuestas infracciones cumple una función fundamental.

a) Desde 1995, ¿cuántas reclamaciones de particulares concernientes a una infracción se han presentado a la Comisión en relación con la aplicación de la legislación aduanera por los Estados miembros?

La respuesta es 51.

b) Desde 1995, ¿cuántos procedimientos de infracción ha iniciado la Comisión contra Estados miembros en relación con la aplicación de la legislación aduanera?

La respuesta es 83.

2. En el párrafo 38 de su declaración inicial, las CE afirman que "el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no obliga a las CE a establecer un sistema de información arancelaria vinculante, y mucho menos a diseñar ese sistema de una forma determinada". ¿Consideran las CE que cuando un mecanismo -como la información arancelaria vinculante- no está impuesto específicamente por las obligaciones en el marco de la OMC no hay obligación de aplicar ese mecanismo de manera uniforme?

Como las CE han señalado repetidas veces, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT hace referencia a la aplicación de las leyes y reglamentos que regulan los asuntos enumerados en el párrafo 1 del artículo X del GATT.

Puesto que la IAV hace referencia a la clasificación de los productos, las CE no discuten que la práctica comunitaria de la IAV tiene que ser compatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Sin embargo, los Estados Unidos no han demostrado hasta el momento ninguna incompatibilidad real de la práctica comunitaria de la IAV, sino que más bien han criticado aspectos concretos del diseño del sistema de IAV de las CE. Esto no basta para demostrar el quebrantamiento de las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

En lo que respecta a la mención por los Estados Unidos de otros "mecanismos", las CE quisieran repetir que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo se refiere a la aplicación de las leyes y reglamentos a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT. A este respecto, las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 118 del Grupo Especial.

3. Cuando un importador trata de obtener la clasificación de una mercancía importada en un Estado miembro determinado, ¿está obligada la autoridad aduanera del Estado miembro a buscar en la base de datos EBTI para determinar si las autoridades de alguno de los demás 24

Estados miembros ha emitido información arancelaria vinculante por la que se clasifique dicha mercancía?

Las CE entienden que la pregunta de los Estados Unidos se refiere a la clasificación de los productos en el curso de procedimientos aduaneros normales, y no a la emisión de IAV.

No existe ninguna obligación general de consultar la base de datos EBTI cada vez que las autoridades aduaneras clasifican un producto. Las autoridades aduaneras comunitarias reciben anualmente millones de declaraciones aduaneras. En la gran mayoría de los casos, la clasificación de los productos en cuestión no plantea problemas. Por consiguiente, sería totalmente desproporcionado, y daría lugar a una ralentización considerable de los trámites aduaneros, exigir la consulta de la base de datos EBTI todas y cada una de las veces en que intervenga una clasificación de productos.

Por supuesto, las autoridades aduaneras, al clasificar productos lo mismo que en cualquier otra esfera de la administración de aduanas, tienen el deber general de cooperación (artículo 10 del Tratado de la CE). Esto significa que tienen que actuar con la debida diligencia y utilizar todos los medios necesarios al decidir sobre una aplicación concreta de la Nomenclatura Combinada. Si caben dudas acerca de la clasificación correcta del producto en cuestión, las autoridades aduaneras de los Estados miembros tienen a su alcance diversos medios entre los que se cuenta también la consulta de la base de datos EBTI.

4. En el párrafo 26 de su declaración inicial, las CE manifiestan que "cuando un comerciante no agota todos los recursos y posibilidades procesales que le ofrece el sistema de un Miembro de la OMC, la falta de uniformidad que de ello se derive no puede atribuirse a un defecto del sistema de ese Miembro". ¿Adoptan las CE la posición de que la carga de garantizar la aplicación uniforme recae en los comerciantes individuales?

No. Las instituciones comunitarias y las autoridades aduaneras de los Estados miembros tienen también la responsabilidad de garantizar una interpretación y una aplicación uniformes de la legislación aduanera comunitaria.

Sin embargo, como han explicado ya las CE, en cualquier sistema de administración de aduanas las personas tienen <u>también</u> un papel que desempeñar. Si un comerciante decide no apelar frente a una decisión en un caso concreto, aunque tenga la posibilidad de hacerlo, esta decisión no puede ser atribuida a las autoridades aduaneras. Si, debido a la decisión de un comerciante individual, se permite que se mantenga una decisión errónea, no se puede considerar que ello constituya una falta de uniformidad atribuible al sistema de administración aduanera de ese Miembro.

5. En la pregunta provisional 27 del Grupo Especial a las partes, el Grupo Especial pidió a las CE que formularan observaciones sobre el *contenido* de la siguiente declaración del Abogado General en el asunto *Timmermans* (Estados Unidos - Prueba documental 21, párrafo 41):

> **"[...] la clasificación arancelaria de mercancías equivalentes no puede variar de un Estado miembro a otro en función de las apreciaciones divergentes de las autoridades aduaneras de cada uno de los Estados miembros, so pena de renunciar al objetivo de aplicar uniformemente la nomenclatura aduanera dentro de la Comunidad, que pretende, en particular, evitar que se produzca un trato discriminatorio entre los operadores económicos de que se trate."**

Entendemos que las CE, en la respuesta que dieron en la reunión del Grupo Especial de 15 de septiembre de 2005, declararon que debe entenderse que la expresión "mercancías equivalentes" utilizada en la declaración citada significa "mercancías idénticas".

a) ¿Podrían confirmar las CE que es esa su posición?

b) En tal caso, ¿en qué se basan las CE para afirmar que debe entenderse que la expresión "mercancías equivalentes" utilizada en la declaración citada significa "mercancías idénticas"?

Las CE remiten a los Estados Unidos a su respuesta a la pregunta 49 del Grupo Especial.

6. En la pregunta provisional 30 del Grupo Especial a las partes se pedía a las CE que formularan observaciones sobre la declaración de la Comisión que figura en la página 12 de la introducción explicativa del Código aduanero modernizado (Estados Unidos - Prueba documental 32) de que "se prevé hacer extensivo el efecto vinculante de [la información arancelaria vinculante] al(los) titular(es) de la decisión para evitar que el sistema se utilice únicamente cuando el solicitante esté satisfecho con el resultado". Entendemos que las CE manifiestan que la situación descrita en la declaración citada la de que "el sistema sólo se utilice cuando el solicitante esté satisfecho con el resultado"- es bastante poco frecuente.

Si las CE siguen opinando que la situación descrita es bastante poco frecuente, ¿en qué basan esa opinión? Sírvanse facilitar los datos en los que las CE basan su opinión.

Las CE no tienen ninguna prueba que indique que estas situaciones son frecuentes. No se puede esperar razonablemente que las CE demuestren que algo es "poco frecuente".

Además, las CE quisieran subrayar que corresponde a los Estados Unidos la carga de la prueba en este caso ya que son los reclamantes. Por consiguiente, corresponde a los Estados Unidos, y no a las CE, aportar pruebas que demuestren que la situación mencionada es frecuente.

7. En la última frase del párrafo 407 de la Primera comunicación escrita de las CE se dice lo siguiente: "Sin embargo se decidió que el asunto podía seguir siendo examinado en un grupo de trabajo del Comité [del Código Aduanero]." Entendemos que al explicar esta afirmación en el curso de la reunión del Grupo Especial de 15 de septiembre de 2005 las CE manifestaron que la referencia al "asunto" de la declaración citada no es una referencia al caso de las licencias de importación sujetas a restricciones, sino en general a lo que constituye una relación de control a efectos de valoración de aduana. ¿Podrían las CE confirmar esta interpretación?

Las CE remiten a los Estados Unidos a su respuesta a la pregunta 62 del Grupo Especial.

ANEXO A-5

RESPUESTAS DE LA ARGENTINA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de septiembre de 2005)

PREGUNTAS PARA TODOS LOS TERCEROS

103. ¿Cuál es el sentido del término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

Argentina reitera[1] que el término "uniforme" ha sido definido como "de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas", conforme lo señalara la jurisprudencia OMC[2].

104. ¿Cómo garantizan los terceros la uniformidad en la aplicación de sus leyes aduaneras respectivas en diferentes puntos de entrada? A este respecto, sírvanse facilitar detalles acerca de todos los aspectos pertinentes de la administración de aduanas, incluidos en particular aquellos que no están vinculados directamente a su estructura constitucional e institucional.

No se ha recibido respuesta.

105. Qué organismo(s)/procedimientos han sido instituidos en los terceros para dar cumplimiento a las obligaciones que impone el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994? Sírvanse explicar cómo funciona en la práctica el recurso a ese(esos) organismo(s)/procedimientos, indicando la duración del proceso de revisión y rectificación.

No se ha recibido respuesta.

106. Los Estados Unidos hacen referencia a lo largo de su primera comunicación escrita a *decisiones* divergentes adoptadas por las autoridades de los Estados miembros. Por ejemplo, aluden a la divergencia en *decisiones en materia de clasificación* en general (párrafo 21), con respecto a las tarjetas de adaptación a la red para ordenadores personales (nota 33), con respecto a productos para riego por goteo (nota 33) y con respecto a artículos o camisas unisex (párrafo 76). Además, los Estados Unidos hacen referencia a la divergencia en *decisiones en materia de valoración en aduana* (párrafos 25 y 93). ¿Puede impugnarse esa divergencia en las decisiones al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

Argentina considera que dichas divergencias son cuestionables bajo el artículo X:3(a) porque pueden implicar una aplicación "no uniforme" de reglamentos o disposiciones administrativas de carácter general que se refieren a clasificación o valoración en aduana.

---

[1] Remitimos a lo expuesto en la intervención oral de la República Argentina como tercera parte, 15 de septiembre de 2005, nota al pie 5, que asimismo remite al Informe del Grupo Especial en *Argentina – Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, WT/DS155/R, párrafo 11.83 (en adelante *Argentina – Cueros*).

[2] Informe del Grupo Especial en *Argentina – Cueros*, WT/DS155/R, párrafo 11.80 y ss., que a su vez remite a *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen II, Oxford (1993), página 3.488. Asimismo, consideramos que el concepto de "uniformidad" debe ser separado del concepto de "no discriminación", oportunamente señalado por el Grupo Especial en *Argentina – Cueros*, WT/DS155/R, párrafo 11.84.

Es precisamente la "divergencia" en la aplicación de dichos reglamentos o disposiciones administrativas lo que impediría que "*todos los exportadores e importadores puedan esperar el mismo trato en momentos y lugares distintos y en comparación con otras personas*".[3] Consecuentemente, se produciría una aplicación "no uniforme", con lo cual se infringiría la obligación de "el artículo X:3(a) del GATT 1994.

En otras palabras, una divergencia en esas "decisiones" no cumpliría el "requisito de uniformidad" que se refiere a la "*aplicación uniforme de las leyes y procedimientos de aduana a los distintos expedidores e incluso a la misma persona en momentos y lugares distintos*".[4]

107. En los párrafos 220 y 221 de su primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que, cuando en un determinado Miembro de la OMC existen leyes subfederales, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de esas leyes.

a) ¿Es aplicable el párrafo 3 a) del artículo X a las leyes penales?

Argentina considera que el artículo X:3 (a) es aplicable a las normas penales en la medida en que éstas incriminen conductas que se refieran a, tal como lo menciona el Art. XI.1, "la clasificación o la valoración en aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación o exportación, o la transferencia de pagos relativa a ellas, o a la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos productos."

b) En caso de que lo sea, ¿estaría autorizado el Grupo Especial a examinar la aplicación de las leyes penales de los Estados miembros con respecto a la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X?

Argentina considera que sí, en la medida que dichas legislaciones se refieran a la administración de normativa de la CE. Al respecto, reiteramos nuestra opinión en el sentido que es la CE, como Miembro OMC distinto de los Estados que la componen, quien está obligada a cumplir con las obligaciones del artículo X:3 (a) del GATT 1994.[5]

108. ¿Cómo debería definirse el término "pronta" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

Argentina remite a lo oportunamente expuesto en su intervención como tercera parte durante la primera audiencia del Grupo Especial[6].

---

[3] Informe del Grupo Especial en *Argentina - Cueros*, WT/DS155/R, párrafo 11.83, al referirse al concepto de "uniformidad".

[4] Informe del Grupo Especial en *Argentina - Cueros*, WT/DS155/R, párrafo 11.83, al referirse al término "uniformidad".

[5] Primera Intervención oral de la República Argentina como tercera parte, 15 de septiembre de 2005, párrafo 10.

[6] Primera Intervención oral de la República Argentina como tercera parte, 15 de septiembre de 2005, párrafos 11 y siguientes, que remiten a la Primera Presentación de la CE, párrafo 459.

PREGUNTAS PARA LAS PARTES Y LOS TERCEROS

109. ¿Cómo debe interpretarse el término "aplicará" a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

No se ha recibido respuesta.

110. ¿Significa la obligación de uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 que no debe haber posibilidad de ejercer facultades discrecionales en la aplicación de leyes aduaneras o que esa posibilidad debe tener sólo un alcance limitado?

No se ha recibido respuesta.

111. ¿Se tiene en cuenta a los efectos de la obligación de uniformidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 el tiempo que requiere la solución de una cuestión concreta (incluidos los supuestos de divergencias en materia de aplicación)? En caso afirmativo, sírvanse explicar las razones, con referencia a los términos específicos del párrafo 3 a) del artículo X.

No se ha recibido respuesta.

112. Con respecto al objetivo de la OMC de seguridad y previsibilidad del entorno comercial internacional (al que ha hecho recientemente referencia el Órgano de Apelación en el contexto de los compromisos arancelarios en el párrafo 243 de su informe en *CE - Trozos de pollo*, WT/DS269/AB/R y WT/DS286/R), sírvanse explicar si es pertinente a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, por qué razones y en qué sentido.

No se ha recibido respuesta.

113. ¿Son pertinentes a la interpretación y aplicación de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT de 1994 las expectativas de los comerciantes? En caso afirmativo, sírvanse explicar por qué y en qué sentido, con referencia al texto específico de esos párrafos.

Argentina reitera su opinión en el sentido que son los exportadores e importadores los principales beneficiarios de las obligaciones establecidas por el artículo X del GATT 1994[7]. Esto surge de la propia normativa del GATT 1994 -el artículo X:3 (b) se refiere expresamente a los "importadores", y el artículo X:1 referido por el artículo X:3 (a) se refiere a "comerciantes" y "empresas públicas y privadas"- y de la jurisprudencia OMC.[8]

114. ¿Requiere la obligación recogida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 la uniformidad *general* de la aplicación o la uniformidad de la aplicación *en todos y cada uno de los casos*? ¿Depende la respuesta a esa pregunta de la naturaleza de la impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X? De ser así, sírvanse explicarlo. En caso de que sea admisible de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X una uniformidad general, ¿cuál sería el umbral

[7] Primera Intervención oral de la República Argentina como tercera parte, 15 de septiembre de 2005, párrafo 15.

[8] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, WT/DS155/R, párrafos 11.68, 11.76 y 11.77; Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales*, WT/DS24/R, párrafo 21; Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y las hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea*, WT/DS179/R, párrafos 6.50 y 6.51.

práctico/cuantitativo y/o el punto de referencia para demostrar que se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X?

No se ha recibido respuesta.

115. Sírvanse formular observaciones sobre la afirmación que hace el Japón en el párrafo 8 de su comunicación en calidad de tercero en el sentido de que, al evaluar la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, es necesario que el Grupo Especial analice si existen las supuestas divergencias que alegan los Estados Unidos, y de existir, si existen en un grado que se consideraría incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X a la luz del sistema aduanero concreto considerado en su conjunto.

No se ha recibido respuesta.

116. En el párrafo 2 de la declaración oral del Japón en la sesión destinada a los terceros de la primera reunión sustantiva, el Japón se basa en las "normas mínimas" de transparencia y equidad procesal a que hizo referencia el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* para aducir que "una aplicación de los reglamentos que careciera de 'uniformidad' [a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994] sería en general injusta, parcial, sesgada, tendenciosa y opaca -dicho de otra forma, no equitativa y no transparente". Con arreglo a esta forma de razonar, ¿serían aplicables los requisitos de transparencia y equidad procesal a: i) los procesos o el trato de los comerciantes en el contexto de la aplicación de las leyes aduaneras; y/o ii) las decisiones aduaneras sustantivas a las que están sujetos los comerciantes?

No se ha recibido respuesta.

117. En el párrafo 7.268 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* (WT/DS184/R) declaró: "Observamos que el Japón no ha alegado en ningún momento, ni mucho menos ha demostrado, que el proceso de formulación de decisiones en relación con las cuestiones concretas que plantea haya tenido una estructura que indique que la legislación antidumping estadounidense no se aplica de manera uniforme, imparcial y razonable [de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994]". Sírvanse formular observaciones sobre la constatación del Grupo Especial de que para demostrar la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X es necesario demostrar una determinada estructura del proceso de formulación de decisiones.

No se ha recibido respuesta.

118. ¿Qué significan las palabras "que se refieran a" del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? Las normas que regulan el procedimiento operativo de los organismos que supervisan la aplicación de leyes aduaneras o intervienen de alguna forma en ella, como, por ejemplo, el Comité del Código Aduanero de las CE ¿reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general "que se refieren a" la clasificación o la valoración de los productos a efectos aduaneros?

No se ha recibido respuesta.

119. Las leyes/disposiciones que establecen sanciones, aplicables a la violación de leyes aduaneras ¿están comprendidas dentro de las medidas a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? De ser así, sírvanse explicarlo, con referencia a los términos pertinentes de ese párrafo.

No se ha recibido respuesta.

120. ¿Cuál es la relevancia del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

No se ha recibido respuesta.

121. Con referencia a los términos específicos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, sírvanse explicar si la obligación de garantizar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas está o no limitada a las revisiones en primera instancia por las autoridades administradoras.

No se ha recibido respuesta.

122. ¿Qué significa "rectificación" en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

No se ha recibido respuesta.

123. ¿Cuál es la relación jurídica, en su caso, entre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3 b) de ese artículo?

Argentina remite a lo expresamente señalado en su intervención como tercera parte durante la primera audiencia del Grupo Especial.[9]

[9] Primera Intervención oral de la República Argentina como tercera parte, 15 de septiembre de 2005, párrafos 5 a 10.

ANEXO A-6

RESPUESTAS DE CHINA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de septiembre de 2005)

PREGUNTAS PARA CHINA

95. En relación con el párrafo 5 de su comunicación en calidad de tercero, sírvanse especificar el punto inicial y el punto final del período extraordinario que China sostiene que puede considerarse concedido en virtud de la aplicación del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994.

El párrafo 12 del artículo XXIV no define expresamente el punto inicial y el punto final del período extraordinario. Sin embargo, tanto el texto como el objeto del párrafo 12 del artículo XXIV indican que el punto inicial del período extraordinario se sitúa a más tardar el día en que se ha constatado que la medida adoptada por la autoridad a nivel local de una parte contratante es incompatible con las disposiciones del GATT. Y el punto final del período extraordinario es el día en que la medida incompatible con las disposiciones del GATT adoptada por las autoridades locales es suprimida. Aunque es aconsejable que el período extraordinario sea lo más breve posible, es necesario conceder tiempo suficiente al gobierno federal de la parte contratante para superar las dificultades internas que se presenten.

96. En relación con el párrafo 6 de la comunicación de tercero presentada por China, ¿considera China que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 no puede aplicarse al contenido y/o a la aplicación de medidas adoptadas a nivel federal/central?

No. El párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 no se puede aplicar al contenido y/o a la aplicación de medidas adoptadas a nivel federal/central. China está de acuerdo con la afirmación del Grupo Especial del GATT *Canadá - Monedas de oro* de que: "La historia del proceso de redacción indica, a juicio del Grupo Especial, que el párrafo 12 del artículo XXIV se aplica *únicamente* a las medidas tomadas a nivel local o regional que el Gobierno Federal no pueda controlar porque quedan fuera de su jurisdicción de acuerdo con la distribución de competencias que establece la constitución.[1] (Cursivas añadidas por China)". Las medidas y/o la aplicación de medidas adoptadas a nivel federal/central están bajo el control del gobierno federal/central de la parte contratante y bajo la jurisdicción del gobierno federal/central.

97. En su comunicación en calidad de tercero, China parece afirmar a efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 la interpretación dada por el Grupo Especial al término "uniforme" en *Argentina - Pieles y cueros*. ¿Entiende China que esa interpretación significa que la aplicación de normas aduaneras no debe variar en el curso del tiempo?

China no cree que la interpretación del término "uniforme" del Grupo Especial *Argentina - Pieles y cueros*, signifique que la aplicación de normas aduaneras *no deba* variar en el curso del tiempo. Es decir, China no cree que el Grupo Especial *Argentina - Pieles y cueros* indicara que la aplicación de las normas aduaneras debe ser igual en el curso del tiempo. Lo que el Grupo Especial *Argentina - Pieles y cueros* quiso decir es que la aplicación de las normas aduaneras no puede variar cada poco tiempo en la medida en que no habría previsibilidad. El Grupo Especial *Argentina - Pieles y cueros* quiso decir que la aplicación de las normas aduaneras debe ser estable en el curso del tiempo

[1] Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafo 56.

o en un plazo razonable de tiempo. Aunque la aplicación de las normas aduaneras pueda variar en la primera fase de aplicación, tendrá que haber un mecanismo de corrección de los aspectos que hayan variado para aplicarlos de manera uniforme.

PREGUNTAS PARA TODOS LOS TERCEROS (103 A 108)

No se han recibido respuestas.

PREGUNTAS PARA LAS PARTES Y LOS TERCEROS (109 A 123)

No se han recibido respuestas.

ANEXO A-7

RESPUESTAS DEL JAPÓN A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de septiembre de 2005)

PREGUNTAS PARA EL JAPÓN

98. Sírvanse explicar de forma práctica qué se entiende con la referencia a los "resultados" del párrafo 9 de la comunicación de tercero presentada por el Japón.

El término "resultados" que se utiliza en el párrafo 9 de la comunicación de tercero presentada por el Japón se entiende que significa la aplicación efectiva de la reglamentación aduanera, es decir, la "aplicación de" los reglamentos comerciales que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana o a los demás asuntos enumerados en el párrafo 1 del artículo X del GATT.

Por ejemplo, en caso de que un Miembro no haya establecido un sistema suficiente de lo que se denomina "resoluciones anticipadas" pero la reglamentación comercial de ese Miembro concreto es aplicada de manera uniforme debido a que entran en juego otras medidas que garantizan esa aplicación uniforme, consideramos que la aplicación es conforme con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT y que los "resultados" en ese caso, teniendo en cuenta la forma en que se utilizó este término en nuestra comunicación, serán la aplicación efectiva de las medidas de este Miembro que garantizan la uniformidad.

99. Con respecto al párrafo 17 de su comunicación en calidad de tercero, ¿alega el Japón que, de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, los *resultados* de los procedimientos de revisión y rectificación previstos en el párrafo 3 b) de ese mismo artículo deben ser uniformes? De ser así, sírvanse justificar esa alegación con referencia al texto de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X.

No. El objetivo del párrafo 17 de la comunicación en calidad de tercero del Japón es señalar que el párrafo 3 b) del artículo X del GATT obliga a los Miembros a mantener o instituir tan pronto como sea posible tribunales o procedimientos de examen para "la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras". La cuestión de la aplicación uniforme en lo que respecta a esos tribunales o procedimientos pertenece al ámbito del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, cuando proceda.

100. Con respecto al párrafo 2 de la declaración oral del Japón en la sesión destinada a los terceros de la primera reunión sustantiva, ¿considera el Japón que las únicas "normas mínimas" que caracterizan los requisitos del párrafo 3 a) del artículo X, incluido, en particular, el de uniformidad, son la "transparencia" y la "equidad procesal"? En caso contrario, sírvanse identificar cualesquiera otras "normas mínimas" pertinentes.

El Japón indica en la parte pertinente del párrafo 2 de su declaración oral cuál es su opinión sobre lo que el Órgano de Apelación describió en el asunto *Estados Unidos - Camarones* como normas mínimas de cumplimiento de las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X. En nuestra opinión, las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X son unas normas mínimas pues la definición de transparencia y equidad procesal se solapa en parte con la uniformidad; no sugeríamos que éstas fueran las únicas características de las disposiciones en cuestión. En cuanto a si hay otras "normas mínimas" pertinentes, el Japón señalaba que la uniformidad, así como los demás requisitos del párrafo 3 a) del artículo X, es decir, la imparcialidad y la razonabilidad, fueron consideradas "normas mínimas" por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Camarones*.

PREGUNTAS PARA TODOS LOS TERCEROS

103. ¿Cuál es el sentido del término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

Como hemos señalado en nuestra comunicación en calidad de tercero y en nuestra declaración oral, suscribimos las siguientes constataciones de grupos especiales que definen el significado del término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y lo sitúan en su contexto.

El Grupo Especial *Argentina - Pieles y cueros* determinó que el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 significa "de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas"[1], y que:

> … la legislación aduanera no debe variar, que es preciso que todos los exportadores e importadores puedan esperar el mismo trato en momentos y lugares distintos y en comparación con otras personas. La uniformidad de la aplicación requiere que los Miembros se aseguren de que sus leyes se apliquen de forma coherente y previsible y no exige únicamente, por ejemplo, que se garantice un trato igual a los Miembros de la OMC. Este último aspecto podría dar lugar a una infracción sustantiva a la que sería procedente aplicar el artículo I. El requisito de uniformidad se refiere a la aplicación uniforme de las leyes y procedimientos de aduanas a los distintos expedidores e incluso a la misma persona en momentos y lugares distintos.[2]
>
> Consideramos que esta disposición no debe interpretarse como una disposición general contra la discriminación. No creemos que deba entenderse que exige que se dé a todos los productos un trato idéntico. Esa interpretación daría un alcance mucho más amplio a este párrafo, que se centra en la aplicación cotidiana de las leyes, normas y reglamentos aduaneros. Hay numerosas diferencias entre los productos, que pueden exigir un trato diferente, y no creemos que esta disposición deba interpretarse como una invitación general a que los grupos especiales establezcan distinciones de esa naturaleza.[3]

Por consiguiente, además del significado atribuido al término "uniforme", es decir, que "la legislación aduanera no debe variar, que es preciso que todos los exportadores e importadores puedan esperar el mismo trato en momentos y lugares distintos y en comparación con otras personas … de forma coherente y previsible", el párrafo 3 a) del artículo X habrá de ser interpretado en el contexto de la "aplicación cotidiana de las leyes, normas y reglamentos aduaneros". También es necesario tener en cuenta que hay un límite para la uniformidad exigida por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El Grupo Especial *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* aclaró que para que una medida sea incompatible con las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT habrá de tener una repercusión significativa en la aplicación general de la legislación del

[1] Informe del Grupo Especial, *Argentina – Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, WT/DS155/R y Corr.1, adoptado el 16 de febrero de 2001, párrafo 11.80 (citando *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen II, página 3488 (1993)).

[2] *Ibid*., párrafo 11.83.

[3] *Ibid*., párrafo 11.84.

Miembro, y no sólo en los resultados del caso aislado de que se trate.[4] El Grupo Especial del GATT *CEE - Manzanas de mesa* constató que diferencias mínimas, como la forma en que podían presentarse las solicitudes de certificado y el requisito de facturas pro forma, no representaban en sí mismas una infracción del párrafo 3 del artículo X.[5]

104. ¿Cómo garantizan los terceros la uniformidad en la aplicación de sus leyes aduaneras respectivas en diferentes puntos de entrada? A este respecto, sírvanse facilitar detalles acerca de todos los aspectos pertinentes de la administración de aduanas, incluidos en particular aquellos que no están vinculados directamente a su estructura constitucional e institucional.

Aduanas del Japón utiliza diversas medidas para garantizar la uniformidad en la aplicación de sus leyes aduaneras, que abarcan desde métodos comunes, como consultas y reuniones de y entre las autoridades aduaneras regionales, hasta mecanismos a nivel nacional. Las medidas más importantes son las siguientes:

Para garantizar la aplicación uniforme de los reglamentos aduaneros, Aduanas del Japón funciona como autoridad central en las esferas de la clasificación y valoración en aduana, y en el desempeño de estas funciones tiene la responsabilidad primaria de la interpretación de los reglamentos comerciales relativos a la clasificación y valoración en aduana así como a otros asuntos pertinentes. Cuando formulan decisiones sobre resoluciones anticipadas (que se explican posteriormente) en asuntos difíciles, las aduanas regionales están obligadas a consultar a las autoridades centrales. Las autoridades centrales mantienen bases de datos con las decisiones de las aduanas regionales y también ofrecen formación de distinto tipo a funcionarios de las aduanas regionales para garantizar la aplicación uniforme de los reglamentos comerciales en todo el Japón.

El Japón utiliza desde 1966 un sistema de resoluciones anticipadas para los asuntos aduaneros relacionados con la importación. De acuerdo con este sistema, las autoridades aduaneras informan, sea oralmente (las solicitudes y las resoluciones transmitidas por correo electrónico se consideran "orales") o por escrito (las solicitudes y las resoluciones transmitidas a través del CuPES (*Customs Procedure Entry System*), un sistema que permite presentar solicitudes a través del sistema Web, se consideran "escritas"), sobre la clasificación arancelaria correcta, etc., al solicitante (importador u otra parte interesada en los productos que vayan a ser importados) de tal resolución anticipada. Se pueden formular resoluciones sobre la clasificación arancelaria, los tipos de los aranceles, el origen de las mercancías y la valoración en aduana. Además, si se formula la decisión por escrito, estas decisiones se publican y se dan a conocer al público a través de una base de datos en Internet a la que se puede acceder desde el portal oficial de Aduanas del Japón, en principio, con la salvedad de los casos comercialmente sensibles, cuya publicación no está autorizada.

Véase también nuestra respuesta a la pregunta 105 *infra*, en la que se explica cuáles son los tribunales/procedimientos que ayudan a mantener la uniformidad en la aplicación de los reglamentos comerciales en el Japón.

105. Qué organismo(s)/procedimientos han sido instituidos en los terceros para dar cumplimiento a las obligaciones que impone el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994? Sírvanse explicar cómo funciona en la práctica el recurso a ese(esos) organismo(s)/procedimientos, indicando la duración del proceso de revisión y rectificación.

---

[4] Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón*, WT/DS184/R, adoptado el 23 de agosto de 2001, párrafo 7.268.

[5] Informe del Grupo Especial del GATT, *Comunidad Económica Europea - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa* (L/6491-36S/104), adoptado el 22 de junio de 1989, párrafo 12.30.

El Japón dispone de procedimientos administrativos y judiciales que garantizan la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a cuestiones aduaneras. En algunos casos establecidos por ley, como en el de las decisiones de imponer un arancel aduanero, no se puede abreviar el procedimiento administrativo anterior a la presentación de una demanda ante un tribunal judicial. A continuación se ofrece información detallada sobre cada procedimiento:

Primero, cualquier persona que no esté satisfecha con una medida adoptada por una aduana regional puede presentar una objeción al Director General (DG) de la aduana regional concreta, antes de que transcurran dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que la persona tuvo conocimiento de la medida concreta. El DG tiene que adoptar una decisión sobre la corrección de la medida en un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la objeción (si no se adopta una decisión en ese plazo, la persona que presentó la objeción puede recurrir al procedimiento siguiente, que se explica en el último párrafo de esta respuesta).

Cualquier persona que no esté satisfecha con una decisión adoptada por el DG de la aduana regional en respuesta a la objeción formulada puede recurrir en apelación al Ministro de Hacienda antes de que transcurra un mes contado a partir del día siguiente a la fecha en que la persona haya recibido la notificación de la decisión del DG. El Ministro de Hacienda deberá adoptar una decisión sobre la adecuación de la medida en un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la apelación (si la decisión no se adopta dentro de ese plazo, la persona que presentó la objeción puede recurrir al siguiente procedimiento, que se explica en el primer párrafo de la respuesta a la pregunta 106 *infra*).

Además, cualquier persona que no esté satisfecha con la decisión adoptada por el Ministro de Hacienda (o en caso de que se puedan abreviar los procedimientos antes indicados, con la medida adoptada por una aduana regional) puede presentar una demanda ante un tribunal judicial antes de que transcurran seis meses contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la decisión (o medida), o un año contado a partir de la fecha de la decisión (o medida), en principio (este plazo se puede ampliar en algunos casos).

106. Los Estados Unidos hacen referencia a lo largo de su primera comunicación escrita a *decisiones* divergentes adoptadas por las autoridades de los Estados miembros. Por ejemplo, aluden a la divergencia en *decisiones en materia de clasificación* en general (párrafo 21), con respecto a las tarjetas de adaptación a la red para ordenadores personales (nota 33), con respecto a productos para riego por goteo (nota 33) y con respecto a artículos o camisas unisex (párrafo 76). Además, los Estados Unidos hacen referencia a la divergencia en *decisiones en materia de valoración en aduana* (párrafos 25 y 93). ¿Puede impugnarse esa divergencia en las decisiones al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

La administración aduanera, por su propia naturaleza, supone tramitar un gran número de importaciones y muchos productos diferentes que resulta complicado clasificar y que reflejan realidades tales como la velocidad de los adelantos tecnológicos y la correspondiente fabricación de nuevos productos. Por consiguiente, el hecho de que pueda haber divergencias entre decisiones individuales de autoridades aduaneras diversas no es en sí mismo incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Teniendo en cuenta lo anterior, si los casos mencionados por los Estados Unidos fundamentan la afirmación de que no hay uniformidad en la aplicación general de la reglamentación aduanera comunitaria, ese hecho puede tener una repercusión importante en la situación de la competencia. En tal caso, estas *decisiones*, que son aplicaciones de la "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas", supondrán divergencias de un grado tal que las harán incompatibles con el párrafo 3 a) del artículo X.

107. En los párrafos 220 y 221 de su primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que, cuando en un determinado Miembro de la OMC existen leyes subfederales, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de esas leyes.

a) ¿Es aplicable el párrafo 3 a) del artículo X a las leyes penales?

Sí, en la medida en que tales leyes impongan sanciones por la infracción de reglamentaciones comerciales pertinentes. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT se aplica a las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo". El párrafo 1 del artículo X del GATT establece, pues, el alcance de la remisión del párrafo 3 a) del artículo X del GATT a los "reglamentos, decisiones y disposiciones a que se refiere", y estipula lo siguiente:

> Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general que cualquier parte contratante haya puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a ellas, o a la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos productos.

Las sanciones por la infracción de la legislación aduanera se imponen a través de leyes, reglamentos, decisiones y resoluciones que, por consiguiente, "se refieren a la clasificación o a la valoración en aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas …", y/o afecta a su "venta, distribución …" y, por consiguiente, están incluidas en el ámbito del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Aunque el párrafo 3 del artículo VIII del GATT prohíbe la imposición de sanciones severas por infracciones leves, ello no es lo mismo que garantizar una aplicación uniforme de las sanciones, como sugieren las CE, y ni siquiera lo garantiza siempre.[6]

No obstante, como el párrafo 1 del artículo X no establece expresamente que las sanciones están incluidas y es difícil interpretar si el alcance de las reglamentaciones a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X incluye las sanciones, el Japón, en el marco de los esfuerzos por *aclarar* y mejorar el artículo VIII del GATT, así como por cumplir mejor el objetivo del artículo X, ha propuesto en las negociaciones sobre la facilitación del comercio "enunciar con claridad y publicar" las disposiciones sobre sanciones por infracciones de las formalidades de importación y exportación contenidas en las leyes y reglamentos pertinentes.[7]

b) En caso de que lo sea, ¿estaría autorizado el Grupo Especial a examinar la aplicación de las leyes penales de los Estados miembros con respecto a la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X?

En nuestra opinión, sí, el Grupo Especial estaría autorizado para ello.

---

[6] Primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, párrafo 441.

[7] TN/TF/W/17, sección IV.

108. ¿Cómo debería definirse el término "pronta" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

Además de lo señalado por el Japón en el párrafo 18 de su comunicación en calidad de tercero, consideramos que la definición adecuada de "*prompt*" (pronta) en este sentido significa "*being ready and quick to act as occasion demands*" (preparado y dispuesto para actuar según lo exija la situación)[8], así como "*without delay*" (sin demora), sabiendo que "*delay*" (demora) es "*(a period of) time lost by inaction or inability to proceed*" ((un período de) tiempo perdido por inactividad o incapacidad para proseguir), según han señalado las CE en el párrafo 459 de su primera comunicación escrita. La determinación de que una revisión se ha realizado con prontitud (estar preparado y dispuesto para actuar según lo exija la situación) o "sin demora" dependerá de las circunstancias concretas de cada sistema particular y debe formularse teniendo en cuenta la totalidad de la situación correspondiente.

A la vista de lo anterior, los procedimientos ante los tribunales administrativos en el Japón pueden servir de referencia. Como se indicó en nuestra respuesta a la pregunta 11 *supra*, de acuerdo con los procedimientos aduaneros ante los tribunales administrativos japoneses, el DG de una aduana regional debe formular una decisión sobre una demanda en un plazo de cinco meses contados a partir de la aplicación de la medida en cuestión por la aduana regional de que se trate (teniendo en cuenta el plazo de dos meses para que el demandante formule una objeción y el plazo de tres meses para que el DG emita una decisión, según se indicó en nuestra respuesta a la pregunta 11 *supra*), en principio, y el Ministro de Hacienda debe formular una decisión sobre la apelación contra la decisión del DG en un plazo de nueve meses contados a partir de la aplicación de la medida en cuestión, en principio.

PREGUNTAS PARA LAS PARTES Y LOS TERCEROS

109. ¿Cómo debe interpretarse el término "aplicará" a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

No se ha recibido respuesta.

110. ¿Significa la obligación de uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 que no debe haber posibilidad de ejercer facultades discrecionales en la aplicación de leyes aduaneras o que esa posibilidad debe tener sólo un alcance limitado?

No se ha recibido respuesta.

111. ¿Se tiene en cuenta a los efectos de la obligación de uniformidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 el tiempo que requiere la solución de una cuestión concreta (incluidos los supuestos de divergencias en materia de aplicación)? En caso afirmativo, sírvanse explicar las razones, con referencia a los términos específicos del párrafo 3 a) del artículo X.

No se ha recibido respuesta.

112. Con respecto al objetivo de la OMC de seguridad y previsibilidad del entorno comercial internacional (al que ha hecho recientemente referencia el Órgano de Apelación en el contexto de los compromisos arancelarios en el párrafo 243 de su informe en *CE - Trozos de pollo*, WT/DS269/AB/R y WT/DS286/R), sírvanse explicar si es pertinente a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, por qué razones y en qué sentido.

[8] *Merriam-Webster Online Dictionary*, http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary.

Como el párrafo 3 a) del artículo X es una disposición que contribuye a la seguridad y previsibilidad del entorno comercial internacional al asegurar la aplicación uniforme, imparcial y razonable de la reglamentación aduanera, este objetivo de la OMC es pertinente y el párrafo 3 a) del artículo X se debe interpretar teniendo en cuenta este objetivo.

113. ¿Son pertinentes a la interpretación y aplicación de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT de 1994 las expectativas de los comerciantes? En caso afirmativo, sírvanse explicar por qué y en qué sentido, con referencia al texto específico de esos párrafos.

No se ha recibido respuesta.

114. ¿Requiere la obligación recogida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 la uniformidad *general* de la aplicación o la uniformidad de la aplicación *en todos y cada uno de los casos*? ¿Depende la respuesta a esa pregunta de la naturaleza de la impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X? De ser así, sírvanse explicarlo. En caso de que sea admisible de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X una uniformidad general, ¿cuál sería el umbral práctico/cuantitativo y/o el punto de referencia para demostrar que se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X?

No se ha recibido respuesta.

115. Sírvanse formular observaciones sobre la afirmación que hace el Japón en el párrafo 8 de su comunicación en calidad de tercero en el sentido de que, al evaluar la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, es necesario que el Grupo Especial analice si existen las supuestas divergencias que alegan los Estados Unidos, y de existir, si existen en un grado que se consideraría incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X a la luz del sistema aduanero concreto considerado en su conjunto.

No se ha recibido respuesta.

116. En el párrafo 2 de la declaración oral del Japón en la sesión destinada a los terceros de la primera reunión sustantiva, el Japón se basa en las "normas mínimas" de transparencia y equidad procesal a que hizo referencia el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* para aducir que "una aplicación de los reglamentos que careciera de 'uniformidad' [a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994] sería en general injusta, parcial, sesgada, tendenciosa y opaca -dicho de otra forma, no equitativa y no transparente". Con arreglo a esta forma de razonar, ¿serían aplicables los requisitos de transparencia y equidad procesal a: i) los procesos o el trato de los comerciantes en el contexto de la aplicación de las leyes aduaneras; y/o ii) las decisiones aduaneras sustantivas a las que están sujetos los comerciantes?

No se ha recibido respuesta.

117. En el párrafo 7.268 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* (WT/DS184/R) declaró: "Observamos que el Japón no ha alegado en ningún momento, ni mucho menos ha demostrado, que el proceso de formulación de decisiones en relación con las cuestiones concretas que plantea haya tenido una estructura que indique que la legislación antidumping estadounidense no se aplica de manera uniforme, imparcial y razonable [de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994]". Sírvanse formular observaciones sobre la constatación del Grupo Especial de que para demostrar la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X es necesario demostrar una determinada estructura del proceso de formulación de decisiones.

No se ha recibido respuesta.

118. ¿Qué significan las palabras "que se refieran a" del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? Las normas que regulan el procedimiento operativo de los organismos que supervisan la aplicación de leyes aduaneras o intervienen de alguna forma en ella, como, por ejemplo, el Comité del Código Aduanero de las CE ¿reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general "que se refieren a" la clasificación o la valoración de los productos a efectos aduaneros?

En el contexto del párrafo 1 del artículo X, "*pertain*" (que se refieran a) significa "*have reference or relation to; relate to*" (hacer referencia a o tener relación con; relacionarse con).[9] Sin embargo, eso no quiere decir que cualquier asunto, por muy distante que sea su relación, pertenezca al ámbito del párrafo 1 del artículo X. Debe establecerse una distinción basada en si las leyes pertinentes, etc., son lo bastante pertinentes como para que puedan considerarse relacionadas directamente con los asuntos indicados en el párrafo 1 del artículo X. Por consiguiente, si las normas que regulan el procedimiento operativo de los organismos que supervisan la aplicación de las leyes aduaneras o intervienen de alguna forma en ella pertenecen al ámbito del párrafo 1 del artículo X es algo que debe determinarse teniendo en cuenta el contenido de esas normas. Si establecen la forma detallada de aplicar los reglamentos comerciales, es posible "que se refieran a" las reglamentaciones comerciales enumeradas en el párrafo 1 del artículo X. Sin embargo, es difícil imaginar que las normas que regulan el procedimiento operativo de órganos sean normas "de aplicación general" tal y como exige el párrafo 1 del artículo X.

119. Las leyes/disposiciones que establecen sanciones, aplicables a la violación de leyes aduaneras ¿están comprendidas dentro de las medidas a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? De ser así, sírvanse explicarlo, con referencia a los términos pertinentes de ese párrafo.

Véase nuestra respuesta a la pregunta 107 a) *supra*.

120. ¿Cuál es la relevancia del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

No se ha recibido respuesta.

121. Con referencia a los términos específicos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, sírvanse explicar si la obligación de garantizar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas está o no limitada a las revisiones en primera instancia por las autoridades administradoras.

No se ha recibido respuesta.

122. ¿Qué significa "rectificación" en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

No se ha recibido respuesta.

123. ¿Cuál es la relación jurídica, en su caso, entre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3 b) de ese artículo?

No se ha recibido respuesta.

[9] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen 2, página 2.173 (1993).

ANEXO A-8

RESPUESTAS DE COREA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de septiembre de 2005)

PREGUNTAS PARA COREA

101. Con respecto al párrafo 7 de su comunicación en calidad de tercero, sírvanse explicar de forma práctica cómo puede establecerse una distinción entre el ejercicio legítimo de facultades discrecionales, de un lado, y un caso de aplicación no uniforme con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, de otro.

El hecho de que un Miembro de la OMC disfrute, dentro del régimen de la OMC, de facultades discrecionales no quiere decir que ese Miembro pueda justificar su incumplimiento de una obligación exigible en otras circunstancias remitiéndose a esas facultades discrecionales. El ejercicio de facultades discrecionales por un Miembro de la OMC sólo está permitido en la medida en que se respeten las obligaciones pertinentes del régimen de la OMC.

En términos más prácticos, Corea cree que las CE son libres de adoptar el sistema de administración aduanera que deseen, sea éste un sistema controlado centralmente y con un solo organismo aduanero o un sistema formado por 25 organismos aduaneros independientes y distintos. Sin embargo, las CE, como Miembro de la OMC, tienen que asegurarse de que la aplicación de las leyes y reglamentos aduaneros es "fiable y previsible" desde la perspectiva de los exportadores extranjeros, sin que importe qué organismos y procedimientos aduaneros del país Miembro decide utilizar el exportador. Así pues, Corea opina que la línea divisoria entre un ejercicio legítimo de las facultades discrecionales y el incumplimiento de la obligación de aplicación uniforme debe situarse en si existe "fiabilidad y previsibilidad" en el régimen del Miembro de la OMC. Corea observa que las CE no han cumplido esta obligación.

102. En el párrafo 3 de su comunicación en calidad de tercero, Corea hace alusión a que desde la perspectiva de los exportadores extranjeros la aplicación de las leyes aduaneras de las CE resulta "frustrante", "gravosa", "irrazonable" e "imprevisible". ¿Dispone Corea de pruebas concretas que apoyen esas afirmaciones?

Esta observación se basa en la compilación de las preocupaciones y reclamaciones de algunos exportadores coreanos que tuvieron que enfrentarse con la diferente aplicación de las leyes y reglamentos aduaneros por los países miembros de las CE. Debido al carácter confidencial de las transacciones empresariales básicas (es decir, debido a que para algunos exportadores coreanos explicar la selección de un determinado puerto de entrada puede revelar su estrategia y sus planes empresariales) y a la sensibilidad de las alegaciones, Corea no está actualmente en condiciones de presentar pruebas concretas al respecto. Corea, sin embargo, hará todo lo posible para ello si tales pruebas concretas del punto de vista coreano resultan fundamentales para el análisis del Grupo Especial. Corea observa que los ejemplos presentados por los Estados Unidos en su primera comunicación escrita parecen ofrecer también una descripción adecuada de los problemas de los exportadores coreanos.

PREGUNTAS PARA TODOS LOS TERCEROS

103. ¿Cuál es el sentido del término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

La norma de "uniformidad" incluida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 no significa que una autoridad aduanera tenga que adoptar la misma decisión todo el tiempo. Corea no lo cree logísticamente posible o practicable dado el carácter en continua evolución de los productos ya existentes y la aparición de nuevos productos. En opinión de Corea, por uniformidad hay que entender que un exportador extranjero pueda esperar una aplicación "fiable y previsible" de las leyes y reglamentos aduaneros. En otras palabras, si un exportador extranjero tiene que "adivinar" en la frontera la clasificación o la valoración de un producto, quedará demostrada la falta de "fiabilidad y previsibilidad" del sistema aduanero, que por consiguiente dará lugar a una aplicación "no uniforme" de las leyes y reglamentos aduaneros.

104. ¿Cómo garantizan los terceros la uniformidad en la aplicación de sus leyes aduaneras respectivas en diferentes puntos de entrada? A este respecto, sírvanse facilitar detalles acerca de todos los aspectos pertinentes de la administración de aduanas, incluidos en particular aquellos que no están vinculados directamente a su estructura constitucional e institucional.

En Corea, el Servicio de Aduanas se encarga de las cuestiones aduaneras. Aplica las leyes y reglamentos aduaneros de forma uniforme en todo el territorio coreano. Como todas las cuestiones relacionadas con las aduanas están vigiladas y coordinadas por un solo organismo gubernamental, pocas veces se produce una decisión contradictoria sobre asuntos aduaneros, y los conflictos de este tipo se resuelven con prontitud.

105. Qué organismo(s)/procedimientos han sido instituidos en los terceros para dar cumplimiento a las obligaciones que impone el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994? Sírvanse explicar cómo funciona en la práctica el recurso a ese(esos) organismo(s)/procedimientos, indicando la duración del proceso de revisión y rectificación.

Un importador que se sienta perjudicado puede presentar al Servicio de Aduanas de Corea una demanda de corrección o aclaración. Cuando se presenta una demanda, el Servicio de Aduanas de Corea está obligado a formular una determinación en un plazo de 30, 60 ó 90 días dependiendo del carácter de la demanda. Si la demanda se deniega, el importador que se sienta perjudicado puede iniciar una acción en justicia contra el Servicio de Aduanas pidiendo la revisión judicial de la determinación del organismo. En ese caso, el asunto puede ser examinado y juzgado por el Tribunal Administrativo, que es un tribunal especial del sistema judicial coreano que se encarga de este tipo de litigios. El tiempo necesario para esta revisión judicial normalmente es de un año, aunque si el asunto es complejo puede ser más largo.

106. Los Estados Unidos hacen referencia a lo largo de su primera comunicación escrita a *decisiones* divergentes adoptadas por las autoridades de los Estados miembros. Por ejemplo, aluden a la divergencia en *decisiones en materia de clasificación* en general (párrafo 21), con respecto a las tarjetas de adaptación a la red para ordenadores personales (nota 33), con respecto a productos para riego por goteo (nota 33) y con respecto a artículos o camisas unisex (párrafo 76). Además, los Estados Unidos hacen referencia a la divergencia en *decisiones en materia de valoración en aduana* (párrafos 25 y 93). ¿Puede impugnarse esa divergencia en las decisiones al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

Para responder directamente a esta pregunta cabe decir que Corea considera que esta "divergencia" se puede impugnar también al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Una vez más, en opinión de Corea, la divergencia señalada por los Estados Unidos en su

comunicación es sencillamente un ejemplo que muestra la falta de "fiabilidad y previsibilidad" en lo que respecta a la aplicación por las CE de las leyes y reglamentos aduaneros.

Si la divergencia fuera una simple incongruencia debida al propio carácter de la administración de aduanas, como pretenden las CE, no sería impugnable al amparo de esa disposición. Sin embargo, Corea cree que los ejemplos presentados por los Estados Unidos en su comunicación son sencillamente la punta del iceberg que muestra que existe un problema crónico de divergencia más que unas incongruencias infrecuentes y no intencionadas.

107. En los párrafos 220 y 221 de su primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que, cuando en un determinado Miembro de la OMC existen leyes subfederales, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de esas leyes.

a) ¿Es aplicable el párrafo 3 a) del artículo X a las leyes penales?

Corea cree que la respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa. En la medida en que las disposiciones pertinentes de las leyes penales se relacionan directamente con la aplicación de leyes y reglamentos aduaneros, Corea no considera que haya ningún motivo particular para excluirlas.

b) En caso de que lo sea, ¿estaría autorizado el Grupo Especial a examinar la aplicación de las leyes penales de los Estados miembros con respecto a la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X?

Corea observa que la norma debe ser si la aplicación de las leyes penales por los distintos Estados miembros da lugar a una tipificación "no fiable o no previsible" de las actividades aduaneras correspondientes de los exportadores extranjeros. Si tal es el caso, puede constituir una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

108. ¿Cómo debería definirse el término "pronta" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

Corea cree que el término "pronta" se debe interpretar como "sin demora" en unas determinadas circunstancias. Si un Miembro de la OMC tiene un sistema en virtud del cual la revisión judicial exige sistemáticamente mucho más tiempo que en otros países, ese miembro no ofrece una revisión "pronta". No debe permitirse que un miembro se limite a elegir con todo cuidado dentro del sistema del país reclamante un ejemplo que haya exigido un tiempo excepcionalmente largo y a continuación lo compare con el propio caso en el intento de justificar su supuesta "prontitud".

PREGUNTAS PARA LAS PARTES Y LOS TERCEROS

109. ¿Cómo debe interpretarse el término "aplicará" a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

Corea cree que el término "aplicará" abarca todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de las leyes y reglamentos aduaneros de un Miembro de la OMC.

110. ¿Significa la obligación de uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 que no debe haber posibilidad de ejercer facultades discrecionales en la aplicación de leyes aduaneras o que esa posibilidad debe tener sólo un alcance limitado?

En la medida en que los miembros de la OMC no deben ejercer sus facultades discrecionales de manera que suponga un incumplimiento de la obligación de uniformidad que establece el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 cabe afirmar que la posibilidad de ejercer facultades discrecionales en la aplicación de las leyes y reglamentos aduaneros debe tener sólo un "alcance limitado".

111. ¿Se tiene en cuenta a los efectos de la obligación de uniformidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 el tiempo que requiere la solución de una cuestión concreta (incluidos los supuestos de divergencias en materia de aplicación)? En caso afirmativo, sírvanse explicar las razones, con referencia a los términos específicos del párrafo 3 a) del artículo X.

Corea cree que el tiempo que se requiere es también uno de los elementos que hay que tener presentes para considerar el cumplimiento de la obligación de uniformidad que establece el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 porque puede aliviar o agravar la supuesta divergencia. En otras palabras, cuanto más tiempo sea necesario más divergente será la diferencia y más probable será que haya "no uniformidad".

112. Con respecto al objetivo de la OMC de seguridad y previsibilidad del entorno comercial internacional (al que ha hecho recientemente referencia el Órgano de Apelación en el contexto de los compromisos arancelarios en el párrafo 243 de su informe en *CE - Trozos de pollo*, WT/DS269/AB/R y WT/DS286/R), sírvanse explicar si es pertinente a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, por qué razones y en qué sentido.

No se ha recibido respuesta.

113. ¿Son pertinentes a la interpretación y aplicación de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT de 1994 las expectativas de los comerciantes? En caso afirmativo, sírvanse explicar por qué y en qué sentido, con referencia al texto específico de esos párrafos.

Como antes se ha indicado, Corea cree que el contenido básico del párrafo 3 a) del artículo X es defender un sistema aduanero "fiable y previsible" para los exportadores extranjeros. En opinión de Corea, por tanto, la disposición es importante para las expectativas de los comerciantes.

114. ¿Requiere la obligación recogida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 la uniformidad *general* de la aplicación o la uniformidad de la aplicación *en todos y cada uno de los casos*? ¿Depende la respuesta a esa pregunta de la naturaleza de la impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X? De ser así, sírvanse explicarlo. En caso de que sea admisible de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X una uniformidad general, ¿cuál sería el umbral práctico/cuantitativo y/o el punto de referencia para demostrar que se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X?

Corea cree que la uniformidad a que hace referencia el párrafo 3 a) del artículo X se refiere a una uniformidad *general* más que a una uniformidad en todos y cada uno de los casos. En otras palabras, el Grupo Especial tiene que evaluar todos los hechos pertinentes para determinar si efectivamente el sistema de las CE puede garantizar un régimen aduanero "fiable y previsible" para los exportadores extranjeros.

115. Sírvanse formular observaciones sobre la afirmación que hace el Japón en el párrafo 8 de su comunicación en calidad de tercero en el sentido de que, al evaluar la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, es necesario que el Grupo Especial analice si existen las supuestas divergencias que alegan los Estados Unidos, y de existir, si existen en un grado que se consideraría incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X a la luz del sistema aduanero concreto considerado en su conjunto.

No se ha recibido respuesta.

116. En el párrafo 2 de la declaración oral del Japón en la sesión destinada a los terceros de la primera reunión sustantiva, el Japón se basa en las "normas mínimas" de transparencia y equidad procesal a que hizo referencia el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* para aducir que "una aplicación de los reglamentos que careciera de 'uniformidad' [a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994] sería en general injusta, parcial, sesgada, tendenciosa y opaca -dicho de otra forma, no equitativa y no transparente". Con arreglo a esta forma de razonar, ¿serían aplicables los requisitos de transparencia y equidad procesal a: i) los procesos o el trato de los comerciantes en el contexto de la aplicación de las leyes aduaneras; y/o ii) las decisiones aduaneras sustantivas a las que están sujetos los comerciantes?

No se ha recibido respuesta.

117. En el párrafo 7.268 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* (WT/DS184/R) declaró: "Observamos que el Japón no ha alegado en ningún momento, ni mucho menos ha demostrado, que el proceso de formulación de decisiones en relación con las cuestiones concretas que plantea haya tenido una estructura que indique que la legislación antidumping estadounidense no se aplica de manera uniforme, imparcial y razonable [de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994]". Sírvanse formular observaciones sobre la constatación del Grupo Especial de que para demostrar la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X es necesario demostrar una determinada estructura del proceso de formulación de decisiones.

Como antes se ha señalado, Corea cree que lo que importa al examinar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 es si la aplicación *general* de las leyes y reglamentos aduaneros muestra que la uniformidad es una pauta, y no buscarla caso por caso. En este contexto, Corea cree que la pauta del proceso de formulación de decisiones es más concluyente que un proceso individual de formulación de una decisión.

118. ¿Qué significan las palabras "que se refieran a" del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? Las normas que regulan el procedimiento operativo de los organismos que supervisan la aplicación de leyes aduaneras o intervienen de alguna forma en ella, como, por ejemplo, el Comité del Código Aduanero de las CE ¿reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general "que se refieren a" la clasificación o la valoración de los productos a efectos aduaneros?

No se ha recibido respuesta.

119. Las leyes/disposiciones que establecen sanciones, aplicables a la violación de leyes aduaneras ¿están comprendidas dentro de las medidas a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? De ser así, sírvanse explicarlo, con referencia a los términos pertinentes de ese párrafo.

No se ha recibido respuesta.

120. ¿Cuál es la relevancia del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

No se ha recibido respuesta.

121. Con referencia a los términos específicos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, sírvanse explicar si la obligación de garantizar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas está o no limitada a las revisiones en primera instancia por las autoridades administradoras.

Corea cree que el requisito de prontitud que establece el párrafo 3 b) del párrafo X del GATT de 1994 es aplicable a *todos* los procedimientos de revisión administrativa y judicial de un Miembro de la OMC hasta que no se formule una *decisión final* sobre el litigio o impugnación.

122. ¿Qué significa "rectificación" en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

No se ha recibido respuesta.

123. ¿Cuál es la relación jurídica, en su caso, entre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3 b) de ese artículo?

No se ha recibido respuesta.

ANEXO A-9

RESPUESTAS DEL TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU, KINMEN Y MATSU A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(23 de septiembre de 2005)

PREGUNTAS PARA TODOS LOS TERCEROS

103. ¿Cuál es el sentido del término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

Estamos de acuerdo con el sentido corriente que los Estados Unidos atribuyen al término "uniforme".[1] También estamos de acuerdo con el informe del Grupo Especial del GATT *CEE - Restricciones a las importaciones de manzanas de mesa – Reclamación de Chile*, cuando constata que la uniformidad tiene que existir "dentro del territorio" del Miembro de que se trate "en el tiempo". El término "uniforme" hace referencia a la uniformidad en la aplicación así como en los resultados de esa aplicación.

104. ¿Cómo garantizan los terceros la uniformidad en la aplicación de sus leyes aduaneras respectivas en diferentes puntos de entrada? A este respecto, sírvanse facilitar detalles acerca de todos los aspectos pertinentes de la administración de aduanas, incluidos en particular aquellos que no están vinculados directamente a su estructura constitucional e institucional.

Para garantizar la uniformidad creemos que el requisito más importante es disponer de un conjunto uniforme de leyes y reglamentos que establezcan la conducta a seguir por las autoridades aduaneras. El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu dispone en su territorio de ese conjunto singular y único de leyes y reglamentos en que los funcionarios de aduanas basan su comportamiento en el desempeño de sus funciones. Existe también un organismo gubernamental central responsable de la supervisión y vigilancia de la administración de aduanas. Creemos que la supervisión y vigilancia de las actividades son importantes para garantizar la uniformidad. A tal fin, ofrecemos a nuestros funcionarios de aduana formación en el puesto de trabajo para garantizar que todas las leyes y reglamentos, sean nuevos o antiguos, se aplican de conformidad con el párrafo 1 a) del artículo X. Además, los funcionarios de los diferentes puestos fronterizos mantienen reuniones de coordinación para eliminar diferencias.

105. Qué organismo(s)/procedimientos han sido instituidos en los terceros para dar cumplimiento a las obligaciones que impone el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994? Sírvanse explicar cómo funciona en la práctica el recurso a ese(esos) organismo(s)/procedimientos, indicando la duración del proceso de revisión y rectificación.

En virtud del artículo 45 de la Ley de Aduanas del Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu, si una parte no está satisfecha con la decisión de las autoridades aduaneras con respecto a la clasificación de sus productos, la decisión sobre la valoración en aduana o la cuantía de los derechos o derechos especiales que debe pagar, tendrá derecho a solicitar a las autoridades aduaneras una revisión en un plazo de 30 días. La parte puede también depositar garantías o pagarés para recibir sus mercancías antes de que se formule la decisión final en esta revisión. Además, en virtud del artículo 46 de la Ley de Aduanas, las autoridades aduaneras están obligadas a formular una

[1] Primera comunicación de los Estados Unidos, párrafo 35.

decisión sobre la revisión en un plazo de dos meses contados a partir del día posterior a la recepción de la solicitud de revisión. Si la parte no está satisfecha todavía con la decisión de la revisión, puede además apelar ante el Comité de Apelaciones Administrativas del organismo superior. El organismo superior formulará su decisión sobre tal apelación administrativa en un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de la demanda. Puede concederse una prórroga de tres meses una sola vez. Si la parte no está satisfecha con el resultado de la apelación administrativa puede apelar al Tribunal Administrativo Superior y al Tribunal Supremo Administrativo.

106. Los Estados Unidos hacen referencia a lo largo de su primera comunicación escrita a *decisiones* divergentes adoptadas por las autoridades de los Estados miembros. Por ejemplo, aluden a la divergencia en *decisiones en materia de clasificación* en general (párrafo 21), con respecto a las tarjetas de adaptación a la red para ordenadores personales (nota 33), con respecto a productos para riego por goteo (nota 33) y con respecto a artículos o camisas unisex (párrafo 76). Además, los Estados Unidos hacen referencia a la divergencia en *decisiones en materia de valoración en aduana* (párrafos 25 y 93). ¿Puede impugnarse esa divergencia en las decisiones al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

El párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige una aplicación uniforme de todas las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administrativas del tipo descrito en el párrafo 1 del mismo artículo, que incluye las "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general que cualquier parte contratante haya puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a ellas, o a la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos productos". Las decisiones divergentes mencionadas por los Estados Unidos se pueden impugnar al amparo del párrafo 3 a) del artículo X porque son resoluciones administrativas que se refieren a la clasificación de determinados productos. Estas resoluciones tienen unas consecuencias generales que afectan a las posteriores importaciones de los mismos productos.

107. En los párrafos 220 y 221 de su primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que, cuando en un determinado Miembro de la OMC existen leyes subfederales, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se refiere a la aplicación de esas leyes.

a) ¿Es aplicable el párrafo 3 a) del artículo X a las leyes penales?

b) En caso de que lo sea, ¿estaría autorizado el Grupo Especial a examinar la aplicación de las leyes penales de los Estados miembros con respecto a la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X?

De hecho, las leyes penales que establecen sanciones por el incumplimiento de reglamentos y resoluciones relativas a la aplicación de leyes aduaneras pueden tener también una gran influencia en el comercio internacional. El derecho penal puede formar parte de la estructura general de la aplicación de las leyes aduaneras. No entendemos por qué las leyes penales deben estar excluidas *per se* del ámbito de las leyes a que hace referencia el párrafo 3 a) del artículo X.

Este Grupo Especial está autorizado para considerar la aplicación de las leyes, reglamentos, decisiones y resoluciones aduaneras por el Miembro, lo que incluye las leyes penales que establecen sanciones por el incumplimiento de esas leyes, reglamentos, decisiones y resoluciones.

108. ¿Cómo debería definirse el término "pronta" del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

El término "pronta" del párrafo 3 b) del artículo X significa sin demora innecesaria o injustificable o sin prolongar el proceso o procedimiento hasta tal punto que las medidas correctivas que deriven de la revisión y rectificación de los actos administrativos dejen de ser suficientes para reparar el daño provocado por la medida examinada de la parte correspondiente.

PREGUNTAS PARA LAS PARTES Y LOS TERCEROS

109. ¿Cómo debe interpretarse el término "aplicará" a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

Aplicar las leyes y los reglamentos significa ejecutar, llevar a la práctica o exigir el cumplimiento de las leyes y reglamentos o formular decisiones sobre la clasificación, la valoración u otros asuntos incluidos en el ámbito del párrafo 3 a) del artículo X, tengan o no por base leyes o reglamentos vigentes del tipo indicado en dicho párrafo 3 a) del artículo X.

110. ¿Significa la obligación de uniformidad establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 que no debe haber posibilidad de ejercer facultades discrecionales en la aplicación de leyes aduaneras o que esa posibilidad debe tener sólo un alcance limitado?

En nuestra opinión, es posible que las autoridades aduaneras dispongan de algunas facultades discrecionales en la aplicación de las leyes aduaneras, dentro de los parámetros que establezcan las leyes aduaneras y que no deben infringir las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X. El Grupo Especial del GATT *CEE – Manzanas de mesa* coincide con nuestra posición en el sentido de que reconoce que puede haber "diferencias administrativas de importancia secundaria", que podrían ser consecuencia de esas facultades discrecionales, sin que exista infracción del párrafo 3 a) del artículo X.

111. ¿Se tiene en cuenta a los efectos de la obligación de uniformidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 el tiempo que requiere la solución de una cuestión concreta (incluidos los supuestos de divergencias en materia de aplicación)? En caso afirmativo, sírvanse explicar las razones, con referencia a los términos específicos del párrafo 3 a) del artículo X.

Las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X incluyen la aplicación de las leyes y reglamentos de manera uniforme, imparcial y razonable. Sin duda el tiempo que requiere la solución de una cuestión concreta debe ser una consideración a tener en cuenta a los efectos de la obligación de "uniformidad" y a la obligación de "razonabilidad". Si se requiere un tiempo prolongado para resolver una cuestión concreta, es posible que el Miembro de que se trate no cumpla el requisito de aplicar las leyes y reglamentos de manera razonable. Además, puede ser que, si el tiempo que se necesita para resolver cuestiones de un tipo similar varía, el Miembro no aplique las leyes y reglamentos de manera uniforme.

112. Con respecto al objetivo de la OMC de seguridad y previsibilidad del entorno comercial internacional (al que ha hecho recientemente referencia el Órgano de Apelación en el contexto de los compromisos arancelarios en el párrafo 243 de su informe en *CE - Trozos de pollo*, WT/DS269/AB/R y WT/DS286/R), sírvanse explicar si es pertinente a la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, por qué razones y en qué sentido.

Consideramos que el objetivo de la OMC de aportar seguridad y previsibilidad al entorno del comercio internacional, consagrado por el Órgano de Apelación, es muy importante para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Dicho párrafo obliga a los Miembros a aplicar las leyes y reglamentos de manera uniforme, imparcial y razonable. Este requisito

es la manifestación y aplicación práctica del principio fundamental de seguridad y previsibilidad del entorno del comercio internacional. Así pues, cuando se interpreta esta disposición concreta, se debe considerar siempre un elemento importante el objetivo de seguridad y previsibilidad.

113. ¿Son pertinentes a la interpretación y aplicación de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X del GATT de 1994 las expectativas de los comerciantes? En caso afirmativo, sírvanse explicar por qué y en qué sentido, con referencia al texto específico de esos párrafos.

Las expectativas concretas de los comerciantes no tienen ninguna trascendencia directa para la interpretación de los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X en general. Sin embargo, las expectativas de los comerciantes en una situación concreta pueden ser una consideración importante al aplicar los criterios de razonabilidad e imparcialidad que recogen los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X.

114. ¿Requiere la obligación recogida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 la uniformidad *general* de la aplicación o la uniformidad de la aplicación *en todos y cada uno de los casos*? ¿Depende la respuesta a esa pregunta de la naturaleza de la impugnación al amparo del párrafo 3 a) del artículo X? De ser así, sírvanse explicarlo. En caso de que sea admisible de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X una uniformidad general, ¿cuál sería el umbral práctico/cuantitativo y/o el punto de referencia para demostrar que se ha infringido el párrafo 3 a) del artículo X?

Consideramos que la obligación recogida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exige uniformidad de aplicación en todos y cada uno de los casos a lo largo del tiempo y en todo el territorio del Miembro en cuestión si concurren las mismas condiciones generales. Esta opinión es conforme con el sentido corriente del término "uniforme". En el mundo real, se producen divergencias en la aplicación. Estas divergencias se deben considerar infracciones. Si estas infracciones no son corregidas internamente de una forma adecuada pueden ser objeto de una impugnación ante la OMC.

115. Sírvanse formular observaciones sobre la afirmación que hace el Japón en el párrafo 8 de su comunicación en calidad de tercero en el sentido de que, al evaluar la alegación formulada por los Estados Unidos al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, es necesario que el Grupo Especial analice si existen las supuestas divergencias que alegan los Estados Unidos, y de existir, si existen en un grado que se consideraría incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X a la luz del sistema aduanero concreto considerado en su conjunto.

Los Estados Unidos han presentado en este asunto pruebas de las divergencias existentes en la aplicación de las leyes, reglamentos, decisiones y resoluciones de las CE en asuntos aduaneros y entendemos que las CE discuten la existencia de tales divergencias, más que su grado. No vemos cuál es el fundamento jurídico textual para exigir este análisis en dos etapas. Los requisitos que establece el párrafo 3 a) del artículo X son que la aplicación ha de ser uniforme, imparcial y razonable. Cualquier incumplimiento de estos requisitos constituye una infracción de esta disposición concreta. Nuestra opinión es que las "diferencias administrativas de importancia secundaria", consideradas aceptables en el asunto *CEE - Manzanas de mesa*, remiten al tipo de aplicación en el que se producen las divergencias y no al grado de divergencia.

116. En el párrafo 2 de la declaración oral del Japón en la sesión destinada a los terceros de la primera reunión sustantiva, el Japón se basa en las "normas mínimas" de transparencia y equidad procesal a que hizo referencia el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* para aducir que "una aplicación de los reglamentos que careciera de 'uniformidad' [a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994] sería en general injusta, parcial, sesgada, tendenciosa y opaca - dicho de otra forma, no equitativa y no transparente". Con arreglo a esta forma de razonar, ¿serían aplicables los requisitos de transparencia y equidad procesal a: i) los procesos o el trato de los comerciantes en el contexto de la aplicación de las

leyes aduaneras; y/o ii) las decisiones aduaneras sustantivas a las que están sujetos los comerciantes?

Nuestra opinión es que los requisitos de transparencia y equidad procesal afectan al trato de los comerciantes tanto en el contexto de la aplicación de las leyes aduaneras como en el contexto de la aplicación de las decisiones aduaneras sustantivas, porque ambos están incluidos en el concepto de aplicación de leyes y reglamentos y porque esa aplicación ha de respetar estrictamente las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

117. En el párrafo 7.268 de su informe, el Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Acero laminado en caliente* (WT/DS184/R) declaró: "Observamos que el Japón no ha alegado en ningún momento, ni mucho menos ha demostrado, que el proceso de formulación de decisiones en relación con las cuestiones concretas que plantea haya tenido una estructura que indique que la legislación antidumping estadounidense no se aplica de manera uniforme, imparcial y razonable [de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994]". Sírvanse formular observaciones sobre la constatación del Grupo Especial de que para demostrar la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X es necesario demostrar una determinada estructura del proceso de formulación de decisiones.

No estamos de acuerdo con la opinión recogida en el informe del Grupo Especial *Estados Unidos - Acero laminado en caliente*. Para constatar que existe una infracción del párrafo 3 a) del artículo X no es necesario demostrar la existencia de "una determinada estructura del proceso de formulación de decisiones". Además, no estamos seguros de cuál es el umbral para establecer la existencia de "una estructura del proceso de formulación de decisiones". Este requisito equivaldría a reconocer a todos los Miembros el privilegio de incumplir las obligaciones que establece el párrafo 3 a) del artículo X hasta que se pueda constatar la existencia de "una estructura del proceso de formulación de decisiones".

118. ¿Qué significan las palabras "que se refieran a" del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? Las normas que regulan el procedimiento operativo de los organismos que supervisan la aplicación de leyes aduaneras o intervienen de alguna forma en ella, como, por ejemplo, el Comité del Código Aduanero de las CE ¿reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general "que se refieren a" la clasificación o la valoración de los productos a efectos aduaneros?

Según el Oxford English Dictionary, los términos "*pertaining to*" (que se refieran a) significan "*be appropriate, related, and applicable*" (tener correspondencia, estar relacionado y ser aplicable). Es una definición bastante amplia. Las normas que regulan el procedimiento operativo de los organismos que supervisan la aplicación de las leyes aduaneras se relacionan innegablemente con las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas sobre las cuestiones aduaneras enumeradas en el párrafo 1 del artículo X. Por consiguiente, tenemos que considerar que estas normas entran dentro del ámbito del párrafo 1 del artículo X. A no ser que aceptemos esta interpretación se producirá una laguna que los Miembros podrán aprovechar para eludir el cumplimiento de las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X.

119. Las leyes/disposiciones que establecen sanciones, aplicables a la violación de leyes aduaneras ¿están comprendidas dentro de las medidas a que hace referencia el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994? De ser así, sírvanse explicarlo, con referencia a los términos pertinentes de ese párrafo.

El párrafo 1 del artículo X incluye las leyes y reglamentos "que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana de productos, a los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación o exportación, o a la

transferencia de pagos relativa a ellas, o a la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la inspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos productos". Así pues la cuestión, como señala correctamente el Grupo Especial en la pregunta anterior, es si una ley o reglamento se refiere a los asuntos enumerados en la disposición. No hay diferencia entre leyes penales y leyes no penales a los efectos de la aplicación de esta disposición. Así pues, las leyes y disposiciones penales que se refieran a asunto aduaneros según lo previsto en el párrafo 1 del artículo X deben estar incluidas en el ámbito de esta disposición.

120. ¿Cuál es la relevancia del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

El párrafo 12 del artículo XXIV obliga a todos los Miembros, con independencia de su estructura de gobierno (no sólo a los gobiernos que tienen un carácter federal) a adoptar medidas razonables para asegurarse de que todos los niveles de su estructura de gobierno, incluidos los gobiernos regionales y locales, respetan las normas del GATT. Esta disposición está redactada bajo la forma de obligación activa, más que de expectativa y, en cualquier caso, no se puede utilizar como fundamento para que un gobierno central se ampare en ella para justificar el incumplimiento de las obligaciones que le impone la OMC, con independencia de la estructura u organización del gobierno de ese Miembro. En caso contrario, todos los Miembros podrían eludir el cumplimiento de las obligaciones de la OMC delegando la aplicación de las normas aduaneras en los gobiernos regionales y locales. Por consiguiente, no creemos que el párrafo 12 del artículo XXIV tenga ninguna relevancia para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X en el presente asunto.

121. Con referencia a los términos específicos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, sírvanse explicar si la obligación de garantizar la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas está o no limitada a las revisiones en primera instancia por las autoridades administradoras.

El párrafo 3 b) del artículo X establece que "Cada parte contratante mantendrá, o instituirá tan pronto como sea posible, tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otras cosas, a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras". No podemos encontrar en él ningún fundamento para afirmar que la pronta revisión y rectificación de medidas administrativas se deba limitar únicamente a la primera instancia. Además, los requisitos son una "pronta revisión" y una "pronta rectificación". Es posible que el resultado en primera instancia sea incorrecto. La parte podría necesitar un recurso en segunda o incluso en tercera instancia para conseguir la revisión. Si la segunda y tercera instancia no son prontas, no será posible obtener una "pronta rectificación" según exige esta disposición.

122. ¿Qué significa "rectificación" en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994?

"Rectificación" en el párrafo 3 b) del artículo X significa, en nuestra opinión, modificación para remediar y corregir la situación.

123. ¿Cuál es la relación jurídica, en su caso, entre el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y el párrafo 3 b) de ese artículo?

Estos dos párrafos establecen unas obligaciones claramente independientes. El párrafo 3 a) del artículo X se refiere a la aplicación de leyes y reglamentos, mientras que el párrafo 3 b) del artículo X se refiere a la revisión y rectificación de actos administrativos. Si el mecanismo de revisión y rectificación se aplica de forma no uniforme, parcial y no razonable, puede resultar aplicable también el párrafo 3 a) del artículo X porque el mecanismo de revisión y rectificación está formado también por leyes o reglamentos que se refieren a asuntos aduaneros. Además, si una ley aduanera no es aplicada de forma uniforme y no existen tribunales o procedimientos judiciales,

arbitrales o administrativos para revisar y rectificar las decisiones, pueden incumplirse las disposiciones tanto del párrafo 3 a) como del párrafo 3 b) del artículo X.

_____

ANEXO B

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE SU SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

Índice		Página
Anexo B-1	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión substantiva	B-2
Anexo B-2	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión substantiva	B-38
Anexo B-3	Observaciones de los Estados Unidos sobre las respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión substantiva	B-68
Anexo B-4	Observaciones de las Comunidades Europeas sobre las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión substantiva	B-93

ANEXO B-1

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE SU SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

(7 de diciembre de 2005)

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ESTADOS UNIDOS:

124. En sus respuestas a las preguntas 1, 3, 5 y 114 del Grupo Especial, los Estados Unidos mantienen que no impugnan al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 esferas específicas de la administración de aduanas, sino la falta de uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras de las CE con carácter general/en su conjunto.

a) Sírvanse referirse de forma específica a los términos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos (WT/DS315/8) para apoyar la afirmación de los Estados Unidos de que esa impugnación está comprendida en el ámbito del mandato del Grupo Especial.

b) Sírvanse confirmar que los Estados Unidos sólo solicitan que el Grupo Especial formule constataciones sobre la conformidad o falta de conformidad del sistema de administración aduanera de las Comunidades Europeas en su conjunto y no sobre las esferas específicas de la administración de aduanas a las que se han referido en su comunicación para basar su alegación de que las Comunidades Europeas han infringido el párrafo 3 a) del artículo X.

En la primera frase de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos se afirma que "la manera en que las [CE] aplican las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X … no es uniforme, imparcial y razonable, y, por lo tanto, es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994".[1] En la solicitud se indican a continuación las leyes y reglamentos que forman "las leyes aduaneras de las CE en su conjunto". Es decir, se indican en primer lugar el Código Aduanero Comunitario (el "CAC"), el Reglamento de Aplicación del CAC (el "Reglamento de Aplicación"), y el Arancel Aduanero Común (el "Reglamento del arancel"). Éstos son los principales elementos de las leyes aduaneras de las CE en su conjunto.[2] Se indican a continuación, en la solicitud, varios instrumentos conexos.

En su tercer párrafo, la solicitud aclara que la falta de una aplicación uniforme, que constituye el fundamento de la reclamación de los Estados Unidos, "es evidente en las diferencias entre los Estados miembros en diversas esferas, incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva", las que se mencionan. También este texto corresponde al enfoque adoptado en la solicitud de establecimiento de un grupo especial como impugnación de la falta de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera de las CE con carácter general y demuestra que la impugnación fundada en la aplicación de la legislación aduanera de las CE en su conjunto está comprendida en el mandato del Grupo Especial.

[1] Desde su primera solicitud de establecimiento de un grupo especial, los Estados Unidos han centrado su reclamación en el carácter no uniforme de la aplicación (y no en la aplicación parcial o irrazonable). Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 33, nota 15.

[2] Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 63 (donde se describen el Arancel Aduanero Común, el CAC y el Reglamento de Aplicación como "[l]os tres principales instrumentos de la legislación aduanera de las CE").

Con respecto a la parte b) de la pregunta del Grupo Especial, es exacto que la principal constatación que los Estados Unidos piden al Grupo Especial es que el sistema de administración aduanera de las CE en su conjunto es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Al mismo tiempo, la formulación de tal constatación no excluye otras sobre las esferas específicas de la administración de aduanas a que se han referido los Estados Unidos en sus comunicaciones e intervenciones en apoyo de su alegación de infracción por las Comunidades Europeas del párrafo 3 a) del artículo X. Aunque tales constataciones referentes a esferas específicas de la administración aduanera de las CE no son estrictamente necesarias para formular la constatación pedida respecto de ese sistema en su conjunto, tenderían a apoyar la constatación solicitada con carácter general. En consecuencia, los Estados Unidos recibirían con satisfacción constataciones sobre las esferas específicas, sin dejar de reconocer que podría ser apropiado aplicar el criterio de economía procesal a su respecto teniendo en cuenta una constatación de infracción referente a la administración de las CE en su conjunto.

En particular, las pruebas que han presentado los Estados Unidos apoyan constataciones accesorias de incumplimiento por las CE de su obligación de aplicación uniforme, establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, respecto de la aplicación de los siguientes instrumentos:

> el Reglamento del arancel;
>
> el párrafo 1 c) del artículo 32 del CAC (sobre el régimen de los cánones y derechos de licencia a los fines de la valoración en aduana);
>
> el artículo 147 del Reglamento de Aplicación (referente a la valoración en aduana sobre bases distintas de la última venta que dio lugar a la introducción de una mercancía en el territorio aduanero de las CE);
>
> el artículo 29 del CAC y el párrafo 1 e) del artículo 143 del Reglamento de Aplicación (sobre la circunstancias en que las partes deben considerarse vinculadas a los efectos de la valoración en aduana);
>
> todas las disposiciones sobre valoración que figuran en el CAC y el Reglamento de Aplicación (es decir: los artículos 28 a 36 del CAC y los artículos 141 a 181a y los Anexos 23 a 29 del Reglamento de Aplicación) en la medida en que las autoridades de los diferentes Estados miembros emplean distintos procedimientos de control (por ejemplo, al suministrar sólo algunos de ellos información arancelaria vinculante[3]), por lo que "las distintas autoridades aduaneras son reticentes a aceptar las decisiones de las demás"[4];
>
> todas las disposiciones sobre clasificación y valoración que figuran en el Reglamento del Arancel, el CAC y el Reglamento de Aplicación, en la medida en que las autoridades de los distintos Estados miembros tienen a su disposición diferentes sanciones para asegurar el cumplimiento de esas disposiciones;

[3] Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 98 y 99.

[4] Tribunal de Cuentas, Informe especial Nº 23/2000 sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (valoración en aduana), acompañado de las respuestas de la Comisión, reimpreso en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C84, párrafo 37 (14 de marzo de 2001) ("Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración en aduana") (Estados Unidos - Prueba documental 14); véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 96 y 97.

el artículo 133 del CAC y el apartado 3) del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación (sobre la apreciación de las condiciones económicas para autorizar la transformación bajo control aduanero); y

los artículos 263 a 267 del Reglamento de Aplicación (sobre el procedimiento de domiciliación).

Corresponde aclarar que el Grupo Especial no necesita formular las constataciones precedentes para poder formular la constatación de carácter general sobre falta de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X que solicitan los Estados Unidos. La infracción sistémica que han acreditado los Estados Unidos -la aplicación de las leyes de aduana por 25 autoridades aduaneras independientes, territorialmente limitadas, junto con la inexistencia total de procedimientos o instituciones de las CE de carácter eficaz y vinculante para asegurar que esas autoridades apliquen las leyes de aduana de las CE de manera uniforme- se aplica a todos los aspectos de la administración aduanera en las CE. Los Estados Unidos consideran que la falta de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X puede constatarse sobre la base del diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las CE.[5] Sin embargo, las divergencias en esferas específicas de la administración aduanera que han indicado los Estados Unidos corroboran lo que resulta forzosamente del diseño y la estructura del sistema. Por consiguiente, los Estados Unidos recibirían con satisfacción constataciones sobre estas esferas específicas de divergencia.

125. Con respecto a la alegación formulada al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, ¿impugnan los Estados Unidos *solamente* la falta de uniformidad de las decisiones/medidas adoptadas por los Estados miembros o *también* la falta de uniformidad de las decisiones/medidas adoptadas a nivel de las CE (es decir, por instituciones de las CE)? En el último caso, sírvanse facilitar más detalles al respecto.

Los Estados Unidos impugnan la falta de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera de las CE. Esa legislación se aplica principalmente por autoridades situadas en cada uno de los 25 Estados miembros de las CE.[6] Como dicen las CE, "normalmente la Comisión no interviene directamente en la aplicación de la normativa aduanera de las CE".[7]

Hay decisiones y medidas adoptadas por la Comisión y otras instituciones comunitarias que desempeñan una función en la aplicación de la legislación aduanera de las CE. Pero la reclamación de los Estados Unidos está centrada en la aplicación de la legislación comunitaria por las autoridades situadas en cada uno de sus 25 Estados miembros.

Las instituciones comunitarias tienen pertinencia respecto de la reclamación de los Estados Unidos en cuanto no intervienen para asegurar una aplicación uniforme entre las distintas autoridades dispersas por todo el territorio de las CE. En otras palabras: es un hecho pertinente la inacción de las instituciones comunitarias. Esa inacción desvirtúa el argumento de que, aunque la aplicación de la legislación aduanera comunitaria se lleva a cabo por 25 autoridades independientes y territorialmente limitadas, a pesar de ello adquiere uniformidad por efecto de la existencia de diversos procedimientos e instituciones de carácter comunitario.

[5] Véase el informe del Grupo Especial, *Canadá - Medidas relativas a las exportaciones de trigo y al trato del grano importado* ("*Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano*"), WT/DS276/R (adoptado el 27 de septiembre de 2004 con informe del Órgano de Apelación), párrafo 4.601 (las CE, en calidad de tercero, alegan que puede constatarse la violación de una obligación del GATT sobre la base de "deficiencias estructurales").

[6] Véase, por ejemplo, la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 78 y 79.

[7] *Ibid.*, párrafo 79.

126. ¿Pretenden esencialmente los Estados Unidos que el diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las Comunidades Europeas tiene *necesariamente* como resultado una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994? En tal caso:

a) Sírvanse indicar concretamente los aspectos del sistema de las Comunidades Europeas que tienen necesariamente como resultado una infracción del párrafo 3 a) del artículo X.

Al responder a esta pregunta es importante que quede claro ante todo lo que los Estados Unidos entienden por "el diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las Comunidades Europeas". Los Estados Unidos interpretan esa expresión como una referencia a lo siguiente:

> la legislación aduanera, en las CE, se prescribe por instituciones comunitarias: el Consejo y la Comisión.
>
> La legislación aduanera de las CE se aplica por 25 autoridades diferentes, cada una de ellas responsable de una parte distinta del territorio de las CE.
>
> Las CE disponen de ciertos procedimientos e instituciones que, según afirman, garantizan una aplicación uniforme entre las 25 autoridades diferentes. Comprenden un deber general de cooperación entre los Estados miembros, directrices sobre diversas cuestiones (por ejemplo, la realización de controles aduaneros), mecanismos discrecionales (por ejemplo, el sometimiento de cuestiones al Comité del Código Aduanero) y la posibilidad de que los comerciantes apelen contra los actos administrativos en materia aduanera ante tribunales de los Estados miembros, que a su vez puede someter cuestiones relativas al derecho comunitario al TJCE.

Si el diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las CE consistiera únicamente en normas aduaneras prescritas por el Consejo y la Comisión y aplicadas por 25 autoridades independientes, territorialmente limitadas sin que hubiera, ni siquiera en apariencia, ningún mecanismo ni otro medio destinado a asegurar que las distintas autoridades actuaran de manera uniforme, entonces sería incuestionable que las CE no cumplirían la obligación que les corresponde con arreglo al párrafo 3 a) del artículo X. Por cierto, las CE evidentemente no controvierten esta afirmación, ya que sostienen que los "procedimientos e instituciones del sistema jurídico de las CE" son los que "proporcionan una aplicación e interpretación uniformes del derecho comunitario, incluido el derecho aduanero comunitario".[8] Es decir: el propio hecho de que 25 autoridades separadas e independientes tuvieran que aplicar su criterio en la interpretación y aplicación de la legislación aduanera comunitaria, sin que hubiera procedimientos ni instituciones para garantizar que no se produjeran divergencias o para conciliarlas con rapidez y de pleno derecho cuando se produjeran, constituiría *necesariamente* una falta de aplicación uniforme con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X.

Por lo tanto, es preciso examinar los "procedimientos e instituciones del sistema jurídico de las CE" que éstas indican, para determinar si efectivamente, como ellas aducen, "proporcionan una aplicación e interpretación uniformes del derecho comunitario". Los Estados Unidos sostienen que los procedimientos e instituciones que indican las CE no tienen ese efecto. Esos procedimientos y esas instituciones consisten en obligaciones de gran generalidad (por ejemplo, la obligación de cooperación establecida en el artículo 10 del Tratado Constitutivo de la CE) que no se ponen en práctica en materia aduanera, directrices no vinculantes e instrumentos discrecionales (como la remisión al Comité del Código Aduanero). El único instrumento de carácter vinculante que han

[8] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 76.

indicado las CE es el derecho de apelación ante un tribunal de un Estado miembro, con la posibilidad de remisión al TJCE. Pero la posibilidad de llegar a obtener reparación mediante una revisión judicial (que las CE están obligadas a proporcionar en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT) no suple la obligación primaria de aplicar las leyes de manera uniforme (impuesta a las CE por el párrafo 3 a) de ese artículo). Además, un recurso ante un tribunal de un Estado miembro mal puede ser un procedimiento eficaz para garantizar la aplicación uniforme teniendo en cuenta la discrecionalidad con que cuenta el tribunal para *no someter* cuestiones al TJCE, ni siquiera cuando se ve ante una contradicción directa entre la aplicación de las normas comunitarias por diferentes autoridades[9] y teniendo en cuenta el carácter "oneroso y dilatado" del procedimiento.[10]

En síntesis: es la *falta* de una característica esencial en el diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las CE lo que da lugar *necesariamente* a una aplicación no uniforme, en violación de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. La característica esencial que falta es un procedimiento o institución que garantice que no se produzcan divergencias de aplicación entre las 25 autoridades aduaneras diferentes, o que las concilie sin demora y sistemáticamente cuando se produzcan. Los procedimientos y las instituciones que indican las CE (aun con la caracterización que éstas les dan) no pueden tener como resultado, y no lo tienen, una aplicación uniforme de la normativa aduanera comunitaria por 25 autoridades aduaneras independientes y territorialmente limitadas. Lo que constituyen las instituciones y los procedimientos de las CE es una trama floja en medio de la cual *pueden producirse* diversas reacciones ante la aplicación no uniforme sin que ello deba ocurrir necesariamente.[11]

[9] Véase la Segunda Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 31 y 35 a 37.

[10] *Ibid.*, párrafo 38 (donde se cita Edwin A. Vermulst, *EC Customs Classification Rules: Does Ice-Cream Melt?*, página 21, en el sitio Web http://www.vvg-law.com/publicationes.htm ("Vermulst, *EC Customs Classification Rules*") (Estados Unidos - Prueba documental 72). A este respecto resulta ilustrativa una observación de las CE en su declaración final en la segunda reunión con el Grupo Especial. Con respecto al ejemplo de los forros opacos para cortinas, las CE observaron que "ninguno de los dos importadores afectados por las decisiones alemanas, Bautex GmbH y Ornata GmbH, ha apelado contra las decisiones. Por este motivo, los Estados Unidos no pueden alegar ahora que hay falta de uniformidad atribuible al sistema de las CE" (segunda declaración final de las CE, párrafo 16). Esta observación, en realidad, apoya el argumento de los Estados Unidos respecto de las apelaciones como instrumento de garantía de la aplicación uniforme. Teniendo en cuenta el tiempo y los gastos que supone el desarrollo de una apelación -en especial si se aspira a llegar hasta el TJCE y obtener una sentencia con efectos de alcance comunitario- un pequeño importador bien puede considerar que esa posibilidad no justifica su costo. A juicio de las CE, una falta de uniformidad que persista como consecuencia de tal decisión de abstenerse de tramitar una apelación no puede constituir el fundamento de una alegación de "falta de uniformidad atribuible al sistema de las CE". De este modo, las CE invierten el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT: convierten una disposición centrada en las obligaciones de los Miembros (en este caso, las CE) en una disposición que impone una carga a los comerciantes obligándoles a procurar con su propio empeño que la aplicación sea uniforme.

[11] Véase la declaración final de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, párrafos 5 y 6; y la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 48 a 52 (donde se analizan diversos casos en que las CE reconocen el carácter general, no vinculante o discrecional de los procedimientos y las instituciones invocados como garantía de uniformidad de la aplicación); véase también la segunda declaración inicial de las CE, párrafos 51 ("lo que importa no es que el deber de cooperación sea una obligación general, sino que exista. Además, es jurídicamente vinculante y *puede* ser impuesto por el Tribunal de Justicia") (sin cursivas en el original); y 61 ("*si* una cuestión se presenta al Tribunal de Justicia, lo normal es que las demás actuaciones en que esa cuestión está en juego *puedan* suspenderse hasta que el Tribunal haya dictado su fallo") (sin cursivas en el original).

Lo ilustra perfectamente el párrafo 99 de la declaración inicial de las CE en la segunda reunión con el Grupo Especial. Las CE dijeron allí lo siguiente:

> si un organismo aduanero o un tribunal de un Estado miembro de las CE no comparte la interpretación de la legislación de las CE que hace un tribunal de otro Estado miembro, *tomará* las iniciativas que correspondan a su posición en el sistema: el organismo aduanero *consultará* y *analizará* el asunto con la Comisión y los demás Estados miembros; el tribunal de otro Estado miembro *recurrirá* al Tribunal Europeo de Justicia.[12]

Las CE no indican en parte alguna el fundamento de sus pronósticos sobre lo que ocurrirá al manifestarse una divergencia en la aplicación, y precisamente de eso se trata. El diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las CE carecen de procedimientos e instituciones que aseguren, en primer lugar, que no se produzcan divergencias; o bien, en segundo lugar, que cuando se manifiesten las divergencias que habrán de resultar forzosamente del sistema de las CE, se las concilie sin demora y sistemáticamente. Como el sistema carece de procedimientos e instituciones de ese tipo, necesariamente da lugar a una aplicación no uniforme, con infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

b) Sírvanse explicar las razones por las que esos aspectos tienen necesariamente como resultado una aplicación no uniforme con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X con respecto a todas y cada una de las esferas de la administración de aduanas en las Comunidades Europeas.

Con respecto a la parte b) de la pregunta del Grupo Especial, los aspectos del diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las CE a que se han referido los Estados Unidos -es decir, su aplicación por 25 autoridades separadas e independientes y la falta de procedimientos o instituciones que pudieran garantizar que no se produzcan divergencias o que las conciliaran sin demora y sistemáticamente cuando se manifestasen- da lugar a una aplicación no uniforme con respecto a *todas* las esferas de la administración de aduanas por la misma razón. Es decir: la aplicación de las normas de clasificación, las normas de valoración y los procedimientos de aduana está sujeta al mismo régimen viciado.

En todas esas esferas los únicos procedimientos o las únicas instituciones que supuestamente garantizan una aplicación uniforme son procedimientos e instituciones de carácter general, no vinculante y discrecional, con excepción de la revisión judicial. Pero como ya se ha indicado, la revisión judicial no garantiza la aplicación uniforme, habida cuenta de la discrecionalidad de que disponen los tribunales en cuanto a someter o no los asuntos al TJCE, la falta de obligación de las autoridades aduaneras de cada Estado miembro en cuanto a acatar las sentencias de los tribunales de otros Estados miembros y, por cierto, la falta de todo mecanismo destinado a informar a las autoridades aduaneras de los diversos Estados miembros de las sentencias pertinentes dictadas en materia aduanera por los tribunales de otros Estados miembros.[13]

---

[12] Segunda Declaración oral de las CE, párrafo 99 (sin cursivas en el original); véanse también las respuestas de las CE a las preguntas formuladas por el Grupo Especial en la primera reunión, párrafos 47, 48 y 58; y Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 86.

[13] Véase la respuesta a la pregunta 126, *supra*; véase también la segunda declaración inicial de los Estados Unidos, párrafos 31 y 35 a 38; y Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 63 a 71.

Por último, es importante reconocer que el argumento de los Estados Unidos no concluye con su demostración de que el diseño y la estructura del sistema de las CE dan lugar necesariamente a una aplicación no uniforme. Además de ello, los Estados Unidos han mostrado, a lo largo de sus comunicaciones e intervenciones, que las CE y altas autoridades comunitarias han reconocido la falta de aplicación uniforme; han presentado ejemplos de ella; y han mostrado que los profesionales que deben actuar efectivamente en el marco del sistema entienden que su aplicación no es uniforme. En suma, aunque la demostración de que el diseño y la estructura del sistema de las CE dan lugar necesariamente a una aplicación no uniforme es una parte importante de la argumentación de los Estados Unidos, no constituye la totalidad de esa argumentación.

127. Con respecto al párrafo 10 de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva sírvanse indicar específicamente cuáles son los "procedimientos" e "instituciones" a que se refieren los Estados Unidos en apoyo de su alegación de que las Comunidades Europeas violan el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

La referencia a "procedimientos" e "instituciones", en el párrafo 10 de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, es una cita del párrafo 76 de la Segunda comunicación escrita de las CE. Como se señala en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 del Grupo Especial, las CE reconocen evidentemente que la aplicación de la legislación aduanera de las CE por 25 autoridades aduaneras separadas e independientes, en sí misma, no cumpliría la obligación de aplicación uniforme que corresponde a las CE con arreglo al párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Tendrían que existir procedimientos o instituciones que aseguraran que las 25 autoridades separadas e independientes aplicasen la normativa de manera uniforme. Reconociéndolo así, las CE han indicado diversos procedimientos e instituciones que, según alegan, cumplen esa función, y que los Estados Unidos han demostrado que no la cumplen por razones analizadas al responder a la pregunta 126 y en anteriores comunicaciones e intervenciones.

Esos procedimientos e instituciones son los siguientes:

> la obligación general de cooperación entre los Estados miembros, establecida en el artículo 10 del Tratado Constitutivo de la CE;
>
> la posibilidad, con arreglo al artículo 226 del Tratado Constitutivo de la CE, de que la Comisión entable acción contra un Estado miembro por infracción de una obligación del derecho comunitario;
>
> la posibilidad de que se someta una cuestión al Comité del Código Aduanero, por decisión discrecional de un representante de la Comisión o de un Estado miembro;
>
> la publicación de reglamentos, notas explicativas no vinculantes, dictámenes no vinculantes del Comité del Código Aduanero e informaciones y orientaciones no vinculantes (como, por ejemplo, el compendio de textos sobre valoración en aduana, las directrices sobre procedimientos de control y las directrices administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante);
>
> la formulación de información arancelaria vinculante por autoridades aduaneras en cada uno de los Estados miembros, que los demás Estados miembros no necesitan acatar salvo respecto del titular de cada una de esas informaciones;
>
> disposiciones generales, que incluyen la orientación del TJCE por la que se dispone que las sanciones deben ser de carácter " efectivo, proporcionado y disuasorio"; disposiciones sobre comunicación de informaciones entre los Estados miembros, establecidas en el Reglamento (CE) 515/97; el programa "Aduanas 2007", con el que se aspira a lograr un grado mayor de cooperación entre las autoridades aduaneras al

> final del 2007; y el Reglamento (CE, Euratom) Nº 1150/2000 del Consejo sobre la percepción de los "recursos propios" de las CE; y
>
> la posibilidad que tiene la parte afectada de apelar contra las medidas aduaneras que le son adversas ante un tribunal de un Estado miembro, con la posibilidad de que las cuestiones pertinentes de derecho comunitario se sometan después al TJCE.

Lo que cabe destacar, desde el punto de vista de la alegación de los Estados Unidos fundada en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, es que *ni siquiera uno solo* de los procedimientos o instituciones precedentes ofrece garantías contra las divergencias que resultan inevitablemente cuando las 25 autoridades aduaneras independientes y territorialmente limitadas se ven ante las incontables alternativas cotidianas que plantea la aplicación de la legislación aduanera de las CE, y *ni siquiera uno solo* de ellos establece una rápida conciliación, de pleno derecho, de las divergencias que efectivamente se producen. Como se explicó en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 y en anteriores comunicaciones de los Estados Unidos[14], esos procedimientos y esas instituciones se distinguen por sus características sumamente generales, no vinculantes y discrecionales. Entre todos estos procedimientos e instituciones, el único al que un comerciante puede recurrir por derecho propio cuando se encuentra con una aplicación no uniforme es la posibilidad de apelar contra las decisiones que le son adversas ante un tribunal de un Estado miembro e instar a ese tribunal o, en su momento, a un tribunal superior a que haga uso de su facultad de someter una cuestión al TJCE. La existencia de ese único procedimiento de naturaleza vinculante no cumple la obligación impuesta a las CE por el párrafo 3 a) del artículo X, como se analizó anteriormente.

128. En su respuesta a la pregunta 3 del Grupo Especial, los Estados Unidos explican que, aunque impugnan fundamentalmente el Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, el Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993 y el arancel integrado de las Comunidades Europeas establecido por el Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, esas medidas están complementadas por diversos reglamentos y otras medidas de la Comisión que se refieren a la clasificación aduanera y a la valoración en aduana y los procedimientos aduaneros. Sírvanse indicar expresamente la medida o medidas complementarias de que se trata.

En primer lugar, los Estados Unidos desean aclarar que no están impugnando las medidas mencionadas en esta pregunta en sí mismas, sino la *aplicación* de esas medidas.

Las medidas indicadas representan lo principal del contenido de la legislación aduanera comunitaria.[15] Como han indicado las CE, existen reglamentos conexos y otras medidas referentes a la clasificación y valoración aduaneras y los procedimientos de aduana.[16] Como el mismo sistema de administración que se aplica a las tres medidas indicadas rige también para las diversas medidas conexas, el problema de la aplicación no uniforme afecta igualmente a esas otras medidas.

Los Estados Unidos se han referido a algunas medidas complementarias. Por ejemplo, han mencionado el Reglamento del Consejo por el que se suspenden derechos aplicados a un subconjunto de monitores planos de cristal líquido (monitores LCD).[17] Los Estados Unidos también se han

[14] Véase, por ejemplo, la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 48 a 52; y la primera Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 32 a 45.

[15] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 63.

[16] Véase, por ejemplo, *Ibid.*, párrafos 92 a 96.

[17] Véase la primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 74 (donde se hace referencia al Reglamento (CE) Nº 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005, *Diario Oficial de la Unión Europea* L82/1 (31 de marzo de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 28)).

referido a la nota explicativa sobre la clasificación de ciertas videocámaras.[18] Se trata de medidas complementarias que las CE no aplican de manera uniforme. Del mismo modo que estas medidas complementarias, hay otras que se refieren a productos o grupos de productos determinados en formas que desarrollan en detalle las disposiciones establecidas en las tres normas aduaneras fundamentales. Debido a su especificidad y a la diversidad de los temas que abarcan, resultaría imposible indicar la totalidad de esas medidas.

129. Con respecto al argumento de los Estados Unidos de que puede considerarse que determinadas leyes son "de naturaleza administrativa" y/o constituyen "instrumentos de aplicación" a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994:

a) Sírvanse enumerar todas las leyes/disposiciones sustantivas del régimen de administración de aduanas de las CE promulgadas por las Comunidades Europeas o por los Estados miembros diferentes de las leyes que establecen sanciones, que los Estados Unidos clasifican como leyes de naturaleza "administrativa" y/o que reúnen las condiciones para ser consideradas un "instrumento de aplicación".

b) Con referencia al texto del párrafo 3 a) del artículo X, ¿podrían clasificarse esos "instrumentos de aplicación" como leyes "de aplicación general" en el sentido del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994?

Además de las leyes que establecen sanciones, otras disposiciones a que han hecho referencia los Estados Unidos, que son de naturaleza administrativa, son la información arancelaria vinculante, las disposiciones de auditoría de los Estados miembros, las directrices de los Estados miembros sobre la aplicación del criterio de los efectos económicos para decidir si se autoriza la transformación bajo control aduanero, y las directrices publicadas por instituciones comunitarias (como la Guía sobre auditorías de aduana (Prueba documental 90 presentada por las CE)). Las características comunes de estas diversas disposiciones que les dan naturaleza administrativa son las mismas características señaladas por el Grupo Especial del asunto *Argentina - Pieles y cueros* en el párrafo 11.72 de su informe. En particular, ninguna de estas disposiciones establece normas aduaneras sustantivas. Las normas aduaneras sustantivas se encuentran establecidas en otras disposiciones (en especial, el Reglamento del arancel, el CAC y el Reglamento de Aplicación). Además, cada una de las disposiciones mencionadas simplemente "establece una cierta forma de aplicar esas normas sustantivas".[19]

No es preciso que estos instrumentos de aplicación constituyan necesariamente leyes de aplicación general en el sentido del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. A los efectos del párrafo 3 a) del artículo X, lo que debe ser una ley de aplicación general en el sentido del párrafo 1 es el objeto de la aplicación -lo que se aplica- y no la disposición que lleva a cabo esa aplicación. Esto resulta con evidencia de la estructura gramatical del párrafo 3 a) del artículo X, en que la expresión "sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el

[18] Segunda Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 28 (donde se hace referencia a la aplicación uniforme de la Nomenclatura Combinada, *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 6 de julio de 2001, página C 190/10 (Estados Unidos - Prueba documental 61), y a las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada de las Comunidades Europeas (*Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 13 de julio de 2000, página 316 (Estados Unidos - Prueba documental 62)).

[19] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados* ("*Argentina - Pieles y cueros*"), WT/DS155/R (adoptado el 16 de febrero de 2001), párrafo 11.72.

párrafo 1 de este artículo" es el objeto al que se refiere la frase "aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable".[20]

130. En el asunto *Argentina - Pieles y cueros* el Grupo Especial declaró en los párrafos 11.71 y 11.75 de su informe que es posible considerar el contenido de las leyes que son "de naturaleza administrativa" de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Dando por supuesta una distinción entre las normas que son "de naturaleza administrativa" y las que no están justificadas en el marco del párrafo 3 a) del artículo X ¿qué criterios deberían aplicarse al determinar si una medida es o no "de naturaleza administrativa"?

En el asunto *Argentina - Pieles y cueros*, el Grupo Especial se refirió a ciertos criterios para determinar si una medida es o no de naturaleza administrativa. En el párrafo 11.72 de su informe constató que la medida de que se trataba en ese caso -la Resolución 2235 de la Argentina- era de naturaleza administrativa. Para llegar a esa conclusión señaló que "la Resolución 2235 no establece normas aduaneras sustantivas para la aplicación de leyes de exportación". Señaló que las normas sustantivas se encontraban en otras leyes. También observó que la Resolución 2235 "establece una cierta forma de aplicar esas normas sustantivas".

Estos criterios toman en consideración el sentido corriente de la palabra "administrativo". Una medida es administrativa cuando su naturaleza es ejecutiva; es decir, cuando tiene "la función de poner en práctica alguna cosa".[21] Por lo tanto, el sentido corriente de "administrativo" sugiere una distinción entre lo que se pone en práctica y lo que produce el efecto de ponerlo en práctica. Los criterios indicados por el Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros* están basados en la premisa de esa distinción y permiten al observador determinar de qué lado de ella se sitúa una medida determinada en vista del marco analítico aplicable.[22] Los Estados Unidos entienden que se trata de criterios adecuados para que este Grupo Especial los aplique a la determinación de si las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones de auditoría, en particular, son o no de naturaleza administrativa. Por las razones que los Estados Unidos han analizado en comunicaciones anteriores, la respuesta es que son de naturaleza administrativa.[23]

Las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones de auditoría no establecen normas aduaneras sustantivas. Lo que establecen es una forma de aplicar normas sustantivas dispuestas en otras medidas (por ejemplo, el Reglamento del arancel, el CAC y el Reglamento de Aplicación). En un sistema que se apoya en gran medida en la veracidad de las declaraciones de los comerciantes acerca de sus importaciones, las disposiciones que establecen sanciones y las

---

[20] Esto no significa que las medidas que son instrumentos de aplicación *no puedan* ser leyes de aplicación general en el sentido del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994. En otros contextos analíticos esas medidas pueden constituir el objeto de la aplicación, en cuyo caso sería pertinente considerar si son o no leyes de aplicación general en el sentido del párrafo 1 del artículo X. Véase la Segunda Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 76 y 77.

[21] Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 158.

[22] Como han analizado los Estados Unidos (véase su Segunda Declaración oral, párrafos 67 a 77), el hecho de que una medida pueda ser administrativa en un contexto no significa que no pueda caracterizarse como sustantiva en otro diferente. Uno de los errores en que incurren las CE consiste en suponer que determinada medida deber ser sustantiva o bien administrativa para *todos* los fines. Véase la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 193; y la Segunda Declaración oral de las CE, párrafos 67 y 72. Simplemente no es así.

[23] Véanse, por ejemplo, las respuestas de los Estados Unidos a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafos 118 a 120 y 156 a 160; la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 72 a 98; y la Segunda Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 78 a 81.

disposiciones de auditoría garantizan el cumplimiento de las normas sustantivas. Por consiguiente, cumplen los requisitos necesarios para ser "de naturaleza administrativa" conforme a los criterios de *Argentina - Pieles y cueros*.

Como las disposiciones que establecen sanciones y las disposiciones de auditoría son de naturaleza administrativa, las diferencias de sus términos ponen de manifiesto diferencias en la forma en que las 25 autoridades aduaneras independientes aplican las normas aduaneras sustantivas de las CE en las distintas partes del territorio comunitario. Como han reconocido las propias CE, las diferencias entre las disposiciones que establecen sanciones son enormes, al punto de que una misma infracción puede dar lugar a que la autoridad aduanera imponga una pena de prisión en una parte de las CE y una multa de menor cuantía en otra.[24] Del mismo modo, como ha observado el Tribunal de Cuentas de las CE, las prácticas en materia de auditoría son tan diferentes que hacen que algunos Estados miembros no acepten las decisiones de otros.[25] La existencia de estas importantes diferencias en los términos de las medidas que constituyen los instrumentos de aplicación de las normas aduaneras sustantivas de las CE significa que esas normas sustantivas no se aplican de manera uniforme, y ello es incompatible con la obligación que corresponde a las CE en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

131. En su respuesta a la pregunta 113 del Grupo Especial, los Estados Unidos señalan que en *Estados Unidos - Camarones* el Órgano de Apelación calificó las normas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 de normas de "transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales". Los Estados Unidos sostienen que, en consecuencia, los beneficiarios de las normas de transparencia y equidad procesal son los comerciantes. ¿Puede armonizarse esta manifestación con la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 8 del Grupo Especial y con el párrafo 23 de su Segunda comunicación escrita, donde los Estados Unidos parecen poner en tela de juicio el sentido de las "normas mínimas" a que hizo referencia el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* y su pertinencia al párrafo 3 a) del artículo X? En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo.

La respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 113 se refiere a una cuestión distinta de su respuesta a la pregunta 8 y de lo que se expresa en el párrafo 23 de su Segunda comunicación escrita. En su respuesta a la pregunta 113, los Estados Unidos estaban señalando que lo dicho por el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Camarones* apoya la afirmación de que el párrafo 3 a) del artículo X debe interpretarse como una obligación destinada a beneficiar a los comerciantes. En su respuesta a la pregunta 8 y en el párrafo 23 de su Segunda comunicación escrita, los Estados Unidos señalaban que la expresión "normas mínimas", del texto dispositivo de *Estados Unidos - Camarones*, no fue desarrollada por el Órgano de Apelación y que éste no necesitaba hacerlo porque constató que la medida en litigio claramente no alcanzaba a cumplir las normas pertinentes. Los Estados Unidos no ven ninguna contradicción entre estas dos observaciones, que no son mutuamente excluyentes.

Con respecto a las "normas mínimas", el argumento que han destacado los Estados Unidos es que el empleo accidental de esta expresión por el Órgano de Apelación constituye el único supuesto respaldo del criterio de las CE según el cual el párrafo 3 a) del artículo X debe interpretarse como una disposición que establece normas mínimas. En realidad, la referencia no apoya esa posición de las CE. El párrafo 3 a) del artículo X debe interpretarse conforme al sentido corriente de sus términos, en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin del GATT de 1994. Ni los términos, ni el

[24] Comisión Europea, Dirección General Fiscalidad y Unión Aduanera, TAXUD/447/2004/Rev 2, *An Explanatory Introduction to the modernizad Customs Code*, página 13 (24 de febrero de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 32).

[25] Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración en aduana, párrafo 37 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

contexto, ni el objeto y fin apoyan la caracterización que hacen las CE del párrafo 3 a) del artículo X como disposición que establece normas mínimas. La referencia del Órgano de Apelación a "normas mínimas" no contradice lo anterior.

132. En su respuesta a la pregunta 2 del Grupo Especial, los Estados Unidos reconocen que, en el curso de la aplicación de las leyes aduaneras pueden producirse en ocasiones contradicciones entre las autoridades de regiones diferentes dentro del territorio de un Miembro de la OMC. Los Estados Unidos señalan además que no aducen que la aparición de una contradicción pruebe de forma automática y necesaria la existencia de una infracción del párrafo 3 a) del artículo X, siempre que exista un mecanismo -como un organismo central- que subsane esas contradicciones.

a) ¿Quieren decir los Estados Unidos que de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X debería tolerarse la existencia de un número y/o un nivel determinados de contradicciones, siempre que hubiera un mecanismo central que subsanara esas contradicciones?

b) En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, sírvanse explicar específicamente de qué forma puede identificarse el número y/o el nivel de contradicciones que debería tolerarse.

c) En caso de respuesta negativa, sírvanse explicar más detalladamente la afirmación de los Estados Unidos.

La respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 2 no significa que deba tolerarse la existencia de determinado número o nivel de contradicciones siempre que haya un mecanismo central que las subsane. En un sistema que disponga la aplicación uniforme, toda diferencia que pueda surgir en la aplicación entre una región y otra debería resolverse sin demora y de pleno derecho. Si tal cosa ocurre, no habrá contradicciones que deban tolerarse.

El argumento que estaban planteando los Estados Unidos al responder a la pregunta 2 era que, aun cuando las leyes aduaneras se aplicaran de manera uniforme, desde el punto de vista práctico podría haber contradicciones momentáneas entre las regiones, que se resolvieran sin demora y de pleno derecho. Tal cosa podría ocurrir, por ejemplo, como consecuencia de interrupciones de las comunicaciones. Los funcionarios de un puerto situado en una parte del territorio de un Miembro pueden no tener conocimiento inmediato de una decisión en materia de clasificación dictada por la autoridad aduanera a pedido de un importador en otro puerto diferente. En la medida en que esto pudiera dar lugar a una contradicción momentánea, la uniformidad de la aplicación exige que la contradicción se elimine sin demora y de pleno derecho. Esto no equivale a decir que es tolerable determinado nivel máximo de contradicciones en un sistema en que las normas aduaneras se apliquen de manera uniforme.

Pero en las CE falta todo procedimiento o institución para resolver las diferencias entre casos fundamentalmente similares -o incluso idénticos- sin demora y de pleno derecho. La posibilidad de recurso judicial para impugnar determinado acto administrativo por su incompatibilidad con la legislación comunitaria no constituye tal procedimiento ni tal institución. Es decir: los tribunales de revisión (que exige el párrafo 3 b) del artículo X del GATT) no suplen la aplicación uniforme que constituye la obligación primaria (impuesta por el párrafo 3 a)). Además, como se analizó en la declaración inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, los tribunales de las CE no están obligados a someter cuestiones al único foro capaz de dictar sentencias con efecto en toda la Comunidad, el TJCE, ni siquiera cuando se ven ante divergencias directas en la aplicación del derecho comunitario.[26] Aunque una apelación dé lugar por último a que se alcance la

[26] Segunda Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 35 a 38.

uniformidad, la falta de ella puede persistir durante el desarrollo de un trámite que puede ser largo y dilatado.[27] Y además, el examen en apelación como medio para obtener la aplicación uniforme impone al comerciante, de manera inadmisible, la carga de lograr una situación que el Miembro mismo está obligado a proporcionar con arreglo al párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Las CE se han referido reiteradas veces a casos en que se manifestaron determinadas diferencias en la aplicación y acabaron siendo resueltas.[28] Sin embargo, las divergencias de que se trata resultaron precisamente de la estructura y el diseño del sistema de administración aduanera de las CE, y esas divergencias contribuyen a demostrar que las CE no aplican su legislación aduanera de manera uniforme. Además, lo notable de esos casos es la forma caótica en que se resolvieron esas diferencias y el tiempo que ello insumió. En cada uno de ellos había una divergencia claramente comprobada en la aplicación de la legislación comunitaria entre una región y otra, pero en ninguno hubo un camino claramente establecido para resolverlas sin demora y de pleno derecho. Tampoco la circunstancia de que determinadas divergencias se hayan resuelto caso a caso constituye prueba de que la aplicación sea uniforme. No es lo mismo resolver determinado problema detectado entre dos autoridades que afirmar que es uniforme la aplicación realizada por las 25 autoridades, incluso con respecto a ese mismo problema.

133. En su respuesta a la pregunta 90 del Grupo Especial, los Estados Unidos afirman que, de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, se examina el "contenido" de las medidas que tienen "naturaleza administrativa", en tanto que las medidas que no dan aplicación a otras se examinan de conformidad con ese párrafo, no para analizar su "contenido", sino para determinar si se aplican de manera uniforme. Sírvanse explicar de forma práctica la(s) diferencia(s) en los criterios aplicados de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X para determinar si existe o no una falta de uniformidad en la aplicación con respecto a las medidas que son "de naturaleza administrativa" y las que no tienen esa naturaleza.

El argumento que presentaron los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 90 y en otros lugares[29] no es que conforme al párrafo 3 a) del artículo X rigen criterios diferentes para determinar si existe aplicación no uniforme respecto de las medidas que tienen "naturaleza administrativa" y las que no la tienen. Si una medida es el objeto de la aplicación -si la medida es lo que se aplica- entonces el párrafo 3 a) del artículo X exige que se aplique de manera uniforme.

Algunas medidas son de naturaleza administrativa en el sentido de que ponen en práctica otras medidas. Las disposiciones que establecen sanciones constituyen un ejemplo. Existen como instrumentos para aplicar alguna otra medida, al imponer su cumplimiento. Sería difícil, si no imposible, analizar una medida que establece sanciones separadamente de la medida cuyo cumplimiento se procura.[30]

---

[27] Véase *Ibid.*, párrafo 38 (donde se cita Vermulst, *EC Customs Classification Rules* (Estados Unidos - Prueba documental 72)).

[28] Véase, por ejemplo, la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 136, 141 y 156.

[29] Véase, por ejemplo, la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 92 a 98.

[30] Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 158. Las CE presentan en términos inexactos el argumento de los Estados Unidos al afirmar que "las leyes pueden complementarse muy bien entre sí, sin que por eso se conviertan en medios de 'aplicación'" (segunda declaración final de las CE, párrafo 23). El argumento de los Estados Unidos no es que las disposiciones sancionadoras, en las CE, simplemente "complementan" las normas aduaneras sustantivas. Las disposiciones sancionadoras son instrumentos para poner en práctica esas normas sustantivas, de modo muy

Cuando un Miembro de la OMC utiliza medidas administrativas muy diferentes en distintas partes de su territorio para poner en práctica sus normas aduaneras -como ocurre en las CE- ese Miembro aplica sus normas aduaneras de modo diferente en las distintas regiones. Los distintos instrumentos que utilizan las CE para aplicar su legislación aduanera en distintas partes de su territorio constituyen una aplicación no uniforme de su legislación aduanera.

No se trata aquí de diferentes criterios para distintos tipos de leyes. A los efectos de esta diferencia, el objeto de la aplicación -lo que se aplica- es la legislación aduanera de las CE. La falta de aplicación uniforme de la legislación aduanera de las CE se pone en evidencia, en parte, por el hecho incuestionable de que sus diferentes autoridades aduaneras utilizan distintos instrumentos que establecen sanciones para poner en práctica la legislación aduanera de las CE.

Al afirmar (en la respuesta a la pregunta 90 del Grupo Especial) que "se examina el contenido de las medidas que tienen naturaleza administrativa", el argumento que exponían los Estados Unidos era que, cuando el contenido de las medidas por las que se aplica la legislación aduanera varía de una región a otra, lógicamente la aplicación de las leyes aduaneras no es uniforme. Las diferencias entre los instrumentos de aplicación constituyen *prueba* de la falta de uniformidad en la aplicación de las respectivas leyes aduaneras.

La respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 90 hace referencia al párrafo 11.70 del informe del Grupo Especial sobre *Argentina - Pieles y cueros*. El Grupo Especial que se ocupó de ese asunto explicó que cuando una medida es un instrumento para la aplicación de otra, el contenido de la primera puede dar lugar a que la segunda se aplique en forma incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

En *Argentina - Pieles y cueros*, la medida de cuya aplicación se trataba eran las normas de clasificación y los derechos de exportación de la Argentina. La Resolución 2235 era una medida separada que era un instrumento para la aplicación de esas normas. Tal como lo expresó el Grupo Especial, la Resolución 2235 establecía "un medio para que los particulares presten asistencia a los funcionarios de aduana en la aplicación de las normas sustantivas ...".[31] En la medida en que la Resolución 2235 aplicaba las normas sustantivas en forma incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X, esa Resolución era objeto legítimo de impugnación sobre la base de esa norma. Del mismo modo, en este caso, como las disposiciones que establecen sanciones y los procedimientos de auditoría vigentes en las CE aplican la legislación de manera no uniforme, incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X, son objeto legítimo de la reclamación de los Estados Unidos fundada en ese artículo.

134. En su respuesta a la pregunta 118 del Grupo Especial, los Estados Unidos manifiestan que es improbable que las normas que regulan los procedimientos operativos de los organismos que supervisan o intervienen de alguna forma en la aplicación de las leyes aduaneras -como, por ejemplo, el Comité del Código Aduanero de las CE- reúnan las condiciones para poder ser consideradas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general "que se refieren a" la clasificación o a la valoración en aduana de productos. A la luz de esta respuesta, sírvanse aclarar si los Estados Unidos impugnan o no la manera en que opera el Comité del Código Aduanero.

La manera en que opera el Comité del Código Aduanero no es, en sí misma, un caso de aplicación no uniforme de la legislación de las CE. Por lo tanto, los Estados Unidos no están

---

similar a la forma en que la medida en litigio en *Argentina - Pieles y cueros* era un instrumento para poner en práctica las normas aduaneras sustantivas de la Argentina.

[31] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.72.

impugnado la manera en que opera el Comité, en sí misma. Pero la forma en que opera es pertinente respecto de la alegación de los Estados Unidos relativa al párrafo 3 a) del artículo X porque el Comité es una de las instituciones que, según las CE, garantizan la aplicación uniforme de su legislación aduanera.

Como se analiza en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126, ni siquiera las CE aducen que cumplirían su obligación de aplicación uniforme si no existieran ciertos procedimientos e instituciones que supuestamente impiden las divergencias o las concilian sin demora. En última instancia, la cuestión consiste en determinar si los procedimientos e instituciones que indican las CE efectivamente tienen ese efecto. La respuesta es que no.

Una de las instituciones fundamentales que indican las CE es el Comité del Código Aduanero. Por consiguiente, es importante comprender la forma en que funciona ese comité. En particular: si actúa de tal modo que cuando un comerciante se encuentra con lo que considera que constituye una divergencia de aplicación entre dos autoridades aduaneras distintas de las CE, el comerciante pueda someter la alegación al Comité, por derecho propio, para que éste resuelva la cuestión en un plazo relativamente breve. La respuesta es negativa; las cuestiones que se someten al Comité le son planteadas por decisión discrecional de la Comisión o de representantes de Estados miembros. Cuando un comerciante pide que una cuestión se inscriba en el orden del día del Comité, la Comisión o el representante del Estado miembro puede dar o no su consentimiento. Aun cuando la cuestión efectivamente se inscriba en el orden del día del Comité, el comerciante no tiene la facultad de alegar ante él. Además, no existe ningún plazo para que el Comité examine el asunto.[32] Estas observaciones sobre la manera en que opera el Comité son pertinentes porque contradicen la aseveración de las CE de que el Comité es una institución clave para garantizar la uniformidad de la aplicación.

135. En su respuesta a la pregunta 7 del Grupo Especial, al definir el término "aplicará", los Estados Unidos prestan especial atención al trato de los "productos" y las "transacciones" pero no hacen ninguna referencia al trato de los "comerciantes". ¿Significa esto que los Estados Unidos consideran que el Grupo Especial debería centrarse en el trato dado a los productos y las transacciones y no en el trato dado a los comerciantes al determinar si ha habido o no una violación del párrafo 3 a) del artículo X?

La respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 7 del Grupo Especial se refería al empleo de la palabra "trato" en las dos afirmaciones formuladas en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos mencionada en esa pregunta. Esas dos afirmaciones se referían al trato dado a los productos y las transacciones. En consecuencia, en la respuesta de los Estados Unidos se expuso en detalle lo que entendían los Estados Unidos por "trato" en esos dos contextos. Esto no significa que el Grupo Especial deba centrarse en el trato dado a los productos y las transacciones *y no* en el trato dado a los comerciantes al determinar si ha habido o no una violación del párrafo 3 a) del artículo X. El Grupo Especial debe considerar *tanto* el trato que se da a los productos y las transacciones *como también* el trato dado a los comerciantes, reconociendo que existe una superposición importante entre uno y otro enfoque.

Desde el punto de vista aduanero, la clasificación y valoración de las mercancías de un comerciante y, por consiguiente, los derechos que se liquiden sobre ellas serán necesariamente importantes para el comerciante. En la medida en que diferentes autoridades aduaneras de las CE

[32] *Véase, en general*, la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 121 a 132; la Prueba documental 103 presentada por las CE (donde se indica que la comisión del Comité del Código Aduanero que se ocupa de la IAV sólo se ha reunido dos o tres veces en cada uno de los últimos tres años); y la respuesta de las CE a la pregunta 58 i) iv) del Grupo Especial (donde se indica que el tiempo medio en que se han resuelto los casos referentes a supuestas divergencias de la IAV que se someten al Comité del Código Aduanero ha sido de unos 13 meses).

traten esas cuestiones en distinta forma, habrán de dar, por extensión, un trato diferente al comerciante. El diferente trato que se dé a la clasificación y valoración de las mercancías habrá de afectar a la forma en que el comerciante planifique sus transacciones. Por ejemplo, si prevé determinada clasificación de sus mercancías en una región de las CE y otra diferente en una región distinta, es de esperar que el comerciante planifique sus envíos en consecuencia. Es en este sentido que un enfoque que apunte al trato dado a las mercancías y las transacciones se superpone con un enfoque que apunte al trato dado a los comerciantes.

Pero dar determinado trato a las mercancías y las transacciones no es el único medio a través del cual una autoridad aduanera puede otorgar un trato a un comerciante. También lo hace, por ejemplo, cuando impone una sanción, realiza un control o permite al comerciante despachar sus mercancías por un procedimiento simplificado, como el de domiciliación. Cabe hace hincapié en esto, teniendo en cuenta la sugerencia de las CE de que un Miembro sólo aplica su legislación aduanera de manera no uniforme cuando impone derechos diferentes a mercancías idénticas y de idéntico valor.[33]

La interpretación estrecha de las CE sobre lo que significa que un Miembro aplique su legislación aduanera de manera no uniforme se contradice con el contexto del párrafo 3 a) del artículo X, que -como reconocen las CE- denota una atención preferente al trato dado a los comerciantes.[34] Como explicó el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Pieles y cueros*, "el párrafo 3 a) del artículo X requiere un examen de los efectos reales que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio".[35] Además, "es preciso que todos los exportadores e importadores puedan esperar el mismo trato en momentos y lugares distintos y en comparación con otras personas".[36]

El trato que los exportadores e importadores esperan que sea el mismo en diferentes lugares del territorio de un Miembro no se limita a la cuantía de los derechos liquidados sobre determinados bienes. Incluye, por ejemplo, las sanciones a que se exponen en distintos lugares. Los Estados Unidos hacen hincapié en esto especialmente, porque las CE han sugerido que las diferencias entre las sanciones que se aplican en una y otra región no constituyen una aplicación no uniforme siempre que todas las distintas sanciones disuadan a los comerciantes de violar el derecho aduanero comunitario.[37]

Como explicaron los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, un comerciante puede tener el más cabal propósito de cumplir la legislación y a pesar de ello verse

---

[33] Véase, por ejemplo, Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 123 (donde se argumenta que el caso de los monitores LCD no indica una aplicación no uniforme con infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT porque, con independencia de la clasificación, todos los monitores comprendidos en una reglamentación sobre suspensión temporal de derechos están sujetos a un tipo arancelario del 0 por ciento; respuestas de las CE a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 16; Segunda declaración final de las CE, párrafo 24 (donde se argumenta que, a pesar de importantes diferencias entre las sanciones en los Estados miembros, se "garantiza" una aplicación uniforme porque "normalmente los comerciantes respetarán las disposiciones sustantivas del derecho aduanero").

[34] Véanse, por ejemplo, las respuestas de las CE a la primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 14; Segunda Declaración oral de las CE, párrafo 18 (donde se pide "considerar debidamente las repercusiones que en el mundo real tendrían las reclamaciones de los Estados Unidos").

[35] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.77.

[36] *Ibid.*, párrafo 11.83.

[37] Véase, por ejemplo, la Segunda Declaración oral de las CE, párrafos 78 y 79; y la Segunda declaración final de las CE, párrafo 24.

afectado por diferencias entre las sanciones que rigen en una y otra región. Los comerciantes suelen ser reacios a los riesgos y organizan sus transacciones teniendo en cuenta múltiples factores diversos, entre ellos las sanciones a que pueden verse expuestos. Es simplemente inexacta la afirmación de las CE de que su legislación aduanera se aplica de manera uniforme aunque las distintas autoridades tengan a su disposición instrumentos enormemente distintos para garantizar el cumplimiento de esas normas. Contrariamente a esta aseveración, un nivel general de cumplimiento en todas las regiones no equivale a una aplicación uniforme. Las CE desconocen el hecho de que las diferencias en la aplicación de las leyes, incluidas las diferencias de las sanciones que pueden aplicarse, influyen en la forma en que los comerciantes organizan sus envíos. En síntesis, las CE desconocen el hecho de que el párrafo 3 a) del artículo X está concebido apuntando principalmente a la situación del comerciante.

136. En el párrafo 101 de su Segunda comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que en los Estados Unidos la información arancelaria vinculante (IAV) es específica para el titular de esa información, como ocurre en las Comunidades Europeas.

a) Sírvanse formular observaciones al respecto.

b) ¿Qué medidas tienen en vigor los Estados Unidos para prevenir la búsqueda de la IAV más favorable?

Los Estados Unidos observan en primer lugar que las instituciones y los procedimientos de los Estados Unidos no están en litigio en la presente diferencia. No obstante, con el fin de ilustrar las cuestiones en litigio, los Estados Unidos darán respuesta a la pregunta en los términos que siguen.

En los Estados Unidos se puede pedir lo que la Oficina de Aduanas y Protección en Frontera de los Estados Unidos (la "Aduana de los Estados Unidos") denomina una resolución correspondiente a la parte 177 del Reglamento de Aduanas. El Reglamento establece que la resolución constituye "la posición oficial del Servicio de Aduanas respecto de la transacción o *la cuestión* indicada en ella".[38] En consecuencia, la resolución genera derechos y responsabilidades para su titular. Pero también otras personas que estén importando mercancías idénticas, en todos los aspectos de importancia, a las mercancías comprendidas en la resolución tienen el derecho de invocar, respecto de sus mercancías, una resolución vigente como fundamento del principio enunciado en ella. Es por esta razón que la Aduana de los Estados Unidos, antes de modificar o revocar una resolución que ha estado en vigor durante un mínimo de 90 días, publica un aviso de su propósito de modificarla o revocarla y toma en consideración las observaciones del público acerca de la conveniencia de la medida que se propone adoptar. De este modo, el procedimiento de modificación y revocación demuestra que las personas cuyas mercancías están comprendidas en el alcance del principio enunciado en la resolución pueden gozar de los beneficios que ella otorga.

Por el contrario, el funcionamiento del sistema de IAV en las CE ofrece una ilustración elocuente de la forma en que las CE no aplican su legislación aduanera de manera uniforme. Con arreglo al sistema de las CE, cuando la autoridad comunitaria de una región emite una IAV a un importador, la autoridad comunitaria de otra región no tiene obligación alguna de ajustarse a esa IAV respecto de mercancías idénticas, a menos que la persona que la invoca sea precisamente el mismo importador, es decir, el "titular" de la IAV. Aun cuando la persona que invoca la IAV sea filial del titular de la IAV, la autoridad comunitaria de la segunda región no tiene obligación alguna de ajustarse a la IAV expedida por la autoridad comunitaria de la primera región. De este modo, la autoridad aduanera de las CE de un Estado miembro puede clasificar libremente el producto idéntico de distinto modo que la autoridad aduanera de las CE de otro Estado miembro; o, por cierto, que las autoridades aduaneras comunitarias de cualquiera de los otros 24 Estados miembros.

[38] 19 C.F.R. § 177.9 (a) (CE - Prueba documental 129) (sin cursivas en el original).

Con respecto a la parte b) de la pregunta del Grupo Especial, debe señalarse que la búsqueda de la IAV más favorable se produce cuando existe una aplicación no uniforme entre las regiones del territorio de un Miembro. En los Estados Unidos, desde el punto de vista práctico, la búsqueda de la IAV más favorable no puede producirse realmente porque existe una oficina central de la que pueden obtenerse resoluciones y, respecto de cualquier producto determinado, existe un único equipo de expertos -los Especialistas Nacionales en Importaciones de la División Nacional de Especialistas en Productos de la Oficina de Aduanas y Protección en Frontera- que está encargado de expedirlas. En materia de clasificación, las resoluciones iniciales se dictan por lo general por los especialistas de esa División en Nueva York. Las resoluciones de la División están sujetas a revisión y rectificación por la Oficina Central de Aduanas en Washington, DC. En los asuntos no referentes a la clasificación, las resoluciones se dictan centralmente por la Oficina de Aduanas de los Estados Unidos en Washington, DC. De este modo, la "búsqueda de la IAV más favorable" está excluida precisamente por la presencia, en los Estados Unidos, de lo que falta en las CE: una autoridad central.

137. Sírvanse formular observaciones sobre las siguientes manifestaciones de las Comunidades Europeas y dar respuesta a ellas:

a) Con respecto a la clasificación de los forros opacos para cortinas efectuada por la Oficina Principal de Aduanas de Bremen, en los párrafos 108 y 109 de su Segunda comunicación escrita las Comunidades Europeas sostienen que la carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo en la que se basan los Estados Unidos y que figura en la Prueba documental 50 presentada por ese país se refiere a una apelación administrativa que no tiene ninguna relación con la apelación administrativa que fue objeto de la decisión de la Oficina Principal de Aduanas de Bremen.

Los Estados Unidos se remiten a los párrafos 60 a 64 de su declaración inicial en la segunda reunión con el Grupo Especial, en la que se analiza esta cuestión, así como a la declaración jurada del Sr. Mark R. Berman (Prueba documental 79 presentada por los Estados Unidos), que se analiza en esa parte de la declaración inicial de los Estados Unidos.[39] Como se explica allí, la carta de la Oficina Principal de Aduana de Bremen (Prueba documental 23 presentada por los Estados Unidos) y la carta de la Oficina Principal de Aduana de Hamburgo (Prueba documental 50 presentada por los Estados Unidos) se refieren, ambas, a forros opacos para cortinas producidos por Rockland Industries. La primera oficina citada decidió excluir el producto de Rockland de la clasificación en la partida arancelaria 5907 por un fundamento que evidentemente no aplican otras autoridades aduaneras de las CE: que el producto contenía sustancias plásticas en su revestimiento, independientemente de que se mezclaran o no en ese revestimiento tundizno u otros elementos. En su análisis de ese caso, las CE pretendieron sembrar dudas sobre la afirmación de que fue ése el fundamento de la decisión de la Oficina Principal de Aduana de Bremen.[40] La carta de la Oficina Principal de Aduana de Hamburgo confirma que es efectivamente ése el criterio adoptado por la autoridad aduanera de Alemania.

[39] En su declaración final en la segunda reunión con el Grupo Especial, las CE pusieron en tela de juicio el valor probatorio de la declaración jurada del Sr. Berman basándose en la teoría de que éste tiene "un claro interés de la clasificación de los forros opacos para cortinas" (segunda declaración final de las CE, párrafo 16). Sin embargo, el argumento de las CE se basa en la premisa, manifiestamente absurda, de que el Sr. Berman está interesado de algún modo en el resultado de esta diferencia de la OMC. Desde luego, el resultado de esta diferencia no tendrá absolutamente ningún efecto en la clasificación de los forros opacos para cortinas en Alemania. Ni el Sr. Berman ni su empresa pueden obtener beneficio alguno de esta diferencia. Por consiguiente, el fundamento por el cual las CE pusieron en tela de juicio el crédito de la declaración jurada del Sr. Berman es totalmente infundado.

[40] Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 336 y 337.

b) En el párrafo 123 de su Segunda comunicación escrita, las Comunidades Europeas aducen que sólo puede mantenerse que ha habido una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 cuando la modificación de una práctica tiene una repercusión importante en los comerciantes. Las Comunidades Europeas sostienen que, en el caso de los monitores de cristal líquido con interfaz vídeo-digital, aun cuando hubiera diferencias en la clasificación arancelaria de los monitores de que se trata en esta diferencia, no habrían tenido ninguna consecuencia económica para los comerciantes, ya que, de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 493/2005, el arancel aplicable a ellas sería el 0 por ciento con independencia de que hubieran sido clasificados en la partida arancelaria 8528 o en la partida arancelaria 8471.

Los Estados Unidos se remiten a los párrafos 52 a 59 de su declaración inicial en la segunda reunión con el Grupo Especial, donde se analiza esta cuestión, así como a sus Pruebas documentales 75 a 78, en las que se analiza esa parte de la declaración inicial de los Estados Unidos. Como se explica allí, hay cuatro observaciones fundamentales que son pertinentes respecto de esta cuestión. En primer lugar, el Reglamento (CE) Nº 493/2005 dispone una suspensión temporal de derechos que no resuelve realmente el respectivo problema de clasificación. Las CE afirman que "antes de su expiración, las instituciones comunitarias revisarán obviamente la situación y adoptarán las medidas que entonces sean necesarias".[41] Esto podrá ser obvio para las CE, pero los Estados Unidos no tienen conocimiento de ninguna disposición que imponga tal resultado. Es más: como se analizó en la segunda reunión con el Grupo Especial, es importante el hecho de que el reglamento suspenda temporalmente los derechos pero no resuelva el respectivo problema de clasificación. Los comerciantes organizan sus actividades mercantiles con una perspectiva de largo plazo, y al adoptar sus decisiones en materia de envíos es probable que tengan en cuenta cuáles son las autoridades aduaneras que les otorgarán un trato arancelario más favorable después de que expire el reglamento temporal.

En segundo lugar, el reglamento sobre suspensión de derechos sólo se refiere a los derechos aplicables a los monitores cuyo tamaño no alcanza determinado límite. No tiene absolutamente ninguna pertinencia respecto de los monitores que exceden de ese tamaño.[42]

En tercer lugar, la sugerencia de las CE de que el reglamento sobre suspensión temporal de derechos ha obtenido cierto grado general de satisfacción en la rama de producción afectada resulta desmentida por recientes comunicaciones dirigidas a la Comisión por la principal asociación de la rama de producción correspondiente de las CE.[43] Esa asociación (la "EICTA") habla de "una situación inaceptable en que diversos Estados miembros aplican normas de clasificación en forma incoherente, creando desventajas competitivas para algunos importadores y haciendo casi impredecibles las consecuencias de las decisiones en materia de aprovisionamiento y encaminamiento".[44]

En su declaración final en la segunda reunión con el Grupo Especial, las CE afirmaron que "la clasificación de los monitores del caso es un asunto que se está estudiando actualmente y dentro de

[41] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 307.

[42] Véase la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 74.

[43] Véase la Segunda Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 52 (donde se analiza la carta de Mark MacGann, Director General de EICTA, a Manuel Arnal Monreal, Director de Asuntos Internacionales y Arancelarios de la Comisión Europea, página 1 ("Carta de EICTA de septiembre de 2005") (2 de septiembre de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 75)).

[44] Carta de EICTA de septiembre de 2005, página 1 (Estados Unidos- Prueba documental 75).

muy poco tiempo se pondrán en consideración del Comité del Código Aduanero las medidas que correspondan".[45] Sin embargo, en fecha muy reciente (el 6 de diciembre de 2005) la EICTA comunicó a la Comisión su profunda preocupación respecto del tema. La EICTA hizo ver no sólo su desacuerdo de fondo con el reglamento propuesto por la Comisión, sino también su decepción ante el hecho de que la Comisión no la hubiera consultado ni hubiera respondido a la carta que la asociación le envió el 2 de septiembre de 2005 a ese respecto (Prueba documental 75 presentada por los Estados Unidos).[46]

Por último, como se resumió en la declaración inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, existe un alto grado de confusión entre las autoridades aduaneras de las CE sobre la forma de tratar la clasificación de los monitores LCD con interfaz videodigital (DVI). Los Estados Unidos han indicado una autoridad aduanera (la del Reino Unido) que parece estar siguiendo el dictamen del Comité del Código Aduanero y clasificando todos esos monitores en la partida 8528, con independencia de su uso exclusivo o principal; otra autoridad aduanera (la de los Países Bajos) que ha dejado a un lado la orientación impartida por el Comité del Código Aduanero debido al temor de efectos comerciales desfavorables, y que ahora aplica su propio conjunto de criterios para decidir si los monitores se clasifican en las partidas 8528 y 8471; y todavía otra autoridad aduanera (la de Alemania) que ha expedido recientemente informaciones arancelarias vinculantes por las que se clasifican los monitores LCD con DVI en la partida 8471 sobre la base de una constatación de que se destinan *principalmente* al uso con ordenadores (es decir, a pesar de la conclusión del Comité del Código Aduanero de que la clasificación en la partida 8471 sólo procede cuando un monitor se destina *exclusivamente* al uso con ordenadores).[47]

c) En los párrafos 392 y 393 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas manifiestan que no es correcto afirmar que distintos Estados miembros imputan de forma diferente cánones al valor en aduana de mercancías idénticas importadas por la misma empresa, puesto que los ejemplos a que se refería el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la valoración afectaban en su mayoría a subsidiarias establecidas en diversos Estados miembros. Las Comunidades Europeas añaden que, a raíz del informe del Tribunal de Cuentas, la Comisión y el Comité del Código Aduanero han trabajado en relación con los asuntos examinados por el Tribunal de Cuentas para aclarar las cuestiones y determinar si había habido una falta de uniformidad. Según las Comunidades Europeas, en la mayoría de los casos se ha confirmado que las cuestiones de que se trataba eran simplemente cuestiones fácticas relativas al establecimiento de las condiciones del párrafo 2 e) del artículo 32 del Código Aduanero Comunitario. Las Comunidades Europeas aducen que, dado que no se constató que existiera una falta sistemática de uniformidad, se llegó a la conclusión de que no era necesaria ninguna modificación del Código ni del Reglamento de Aplicación.

Aun cuando las aseveraciones de las CE fueran exactas, ni siquiera así refutarían las constataciones más amplias del informe del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, el Tribunal constató que los "puntos débiles" de la aplicación por las CE de las normas de valoración en aduana incluían, entre otras cosas, "la falta de normas de control y prácticas de trabajo comunes"; "la falta de un trato

[45] Segunda declaración final de las CE, párrafo 15.

[46] Véase la carta de Mark MacGann, Director General de EICTA, a Manuel Arnal Monreal, Director de Asuntos Internacionales y Arancelarios de la Comisión Europea (6 de diciembre de 2005) (Estados Unidos-Prueba documental 81).

[47] Segunda Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 54 a 56.

común a los comerciantes que actúan en varios Estados miembros"; y "la falta de disposiciones comunitarias que permitan adoptar decisiones en materia de valoración para todo el ámbito comunitario".[48] Las aseveraciones de las CE acerca del régimen de los cánones y derechos de licencia no se refieren a ninguna de esas observaciones más generales, todas las cuales demuestran la falta de la aplicación uniforme que exige el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

d) En los párrafos 394 a 396 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que, con respecto a las condiciones en las que puede utilizarse una venta distinta de la última como base para establecer el valor de transacción a efectos de valoración en aduana, a tenor del párrafo 1 del artículo 147 del Reglamento de Aplicación, cuando se declare un precio que corresponda a una venta que ha tenido lugar antes de la última venta sobre cuya base se introdujeron las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad, debe demostrarse a la satisfacción de las autoridades aduaneras que esa venta de mercancías tuvo lugar para su exportación al territorio aduanero en cuestión. Las Comunidades Europeas sostienen que, aunque los Estados Unidos alegan que el Tribunal de Cuentas "constató que las autoridades de algunos Estados miembros exigían la obtención por los importadores de una aprobación previa para la valoración no basada en el valor de transacción de la última venta", el Tribunal se limitó a declarar que "*en la práctica,* algunas autoridades aduaneras imponen *una forma de aprobación previa*". Las Comunidades Europeas sostienen que, contrariamente a lo que dan a entender los Estados Unidos, no se requiere legalmente la aprobación previa para basarse en una venta anterior. Además, según las Comunidades Europeas, dada la complejidad que puede entrañar la cuestión, no es irrazonable que una autoridad aduanera aliente a los comerciantes que deseen basarse en la posibilidad de establecer el valor de transacción sobre la base de una venta anterior a que resuelvan de antemano esa cuestión. Las Comunidades Europeas sostienen que, en todo caso, esa práctica constituye una diferencia en la práctica administrativa de importancia secundaria, que no equivale a una falta de uniformidad incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

En respuesta a estas afirmaciones de las CE, los Estados Unidos desean formular tres observaciones fundamentales. En primer lugar, las CE parecen ver una distinción entre "exigir la obtención por los importadores de una aprobación previa" e "[imponer] en la práctica ... una forma de aprobación previa". Los Estados Unidos no alcanzan a advertir qué distinción pertinente podrían realizar las CE entre su caracterización de lo que hacen algunas autoridades aduaneras de las CE (aunque no todas ellas) y la caracterización hecha por los Estados Unidos de lo que hacen esas autoridades aduaneras. Las CE evidentemente atribuyen importancia a su afirmación de que "no se requiere legalmente la aprobación previa para basarse en una venta anterior". De este modo, las Comunidades Europeas parecen distinguir entre lo que se requiere "legalmente" y algo que se "impone" "en la práctica".[49] A los Estados Unidos no les resulta claro cuál es la distinción pertinente

[48] Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración en aduana, párrafo 86 (Estados Unidos - Prueba documental 14).

[49] Curiosamente, esta posición parece contradictoria con la asumida por las CE respecto de las disposiciones sancionadoras, acerca de las cuales las CE alegan que, precisamente porque las diferencias entre la aplicación por una autoridad y otra se refieren a diferentes *requisitos legales* en distintos Estados miembros, quedan fueran del alcance de un examen acerca de si las CE cumplen o no la obligación que les impone el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. En este caso las CE parecen admitir que las diferencias de requisitos legales (considerados en contraposición a las prácticas) respecto de la aprobación previa para la valoración por fundamentos distintos de la última venta constituirían diferencias de aplicación a las que podría aplicarse el párrafo 3 a) del artículo X. Conforme a esa lógica, las diferencias de requisitos legales respecto de las sanciones

ni tampoco -lo que es más importante- cómo podría tener algún interés para un comerciante que debiera someterse a la aprobación previa de que se trata, ya fuese porque "se requiere legalmente" o por razones "prácticas".

Resulta significativo que el Tribunal de Cuentas haya constatado que "en la práctica *algunas* autoridades aduaneras imponen una forma de aprobación previa".[50] Las CE no niegan que existen tales diferencias en la aplicación del apartado 1) del artículo 147 del Reglamento de Aplicación. Las CE dicen que "no es irrazonable que una autoridad aduanera aliente a los comerciantes que deseen basarse en la posibilidad de establecer el valor de transacción sobre la base de una venta anterior a que resuelvan de antemano esta cuestión". Los Estados Unidos no discrepan. La existencia de tal práctica, en sí misma, no es problemática desde el punto de vista del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Lo problemático es que algunas autoridades aduaneras, en el territorio de las CE, impongan una forma de aprobación previa mientras que otras no lo hacen. Por lo tanto, esto constituye un ejemplo más de aplicación no uniforme por las CE, en violación del párrafo 3 a) del artículo X.

En segundo lugar, es significativo, no sólo que algunas autoridades aduaneras de las CE apliquen el apartado 1) del artículo 147 del Reglamento de Aplicación imponiendo una forma de aprobación previa mientras que otras no lo hacen, sino también que la aprobación previa obtenida de una autoridad aduanera de las CE en una región no tenga efecto vinculante en otras partes de su territorio. Si un importador ha obtenido aprobación previa de una autoridad aduanera, en un Estado miembro de las CE para establecer el valor de transacción sobre la base de una venta que no es la última, no cuenta con garantía alguna de que esa aprobación previa será respetada por las autoridades aduaneras de otros Estados miembros de las CE, ni siquiera respecto de transacciones idénticas referentes a productos idénticos.

Por último, las CE afirman que la falta de uniformidad en la aplicación del apartado 1) del artículo 147 del Reglamento de Aplicación constituye "una diferencia de importancia secundaria". Los Estados Unidos no alcanzan a advertir el fundamento de tal caracterización. Por el contrario, desde el punto de vista del comerciante, el hecho de que deba o no obtener aprobación previa para basar el valor en aduana en una venta distinta de la última tendrá considerable importancia para resolver si introduce sus productos en las CE. La caracterización de esta diferencia como "de importancia secundaria" representa otro ejemplo de cómo las CE adoptan un criterio erróneo y excesivamente estrecho respecto de la aplicación no uniforme, con arreglo al cual las únicas divergencias que contarían desde el punto de vista del párrafo 3 a) del artículo X serían las que afectaran en última instancia a la cuantía de los derechos de aduana. A juicio de las CE, las divergencias de aplicación que sólo afectan a las cargas que pesan sobre el comerciante o los riesgos que soporta -ya se trate de diferencias que afectan a la forma en que el comerciante obtiene el derecho de basar el valor de transacción en una venta distinta de la última, a los riesgos relacionados con las sanciones que debe tener en cuenta, o a la posibilidad de obtener garantías seguras y de largo plazo respecto de la clasificación de los productos aunque estén temporalmente sujetos a un reglamento comunitario sobre suspensión de derechos (como ocurre con los monitorices LCD)- no tendrían importancia.

Los Estados Unidos adoptan un punto de vista diferente. Los Estados Unidos no encuentran ningún fundamento para la afirmación de que sólo se viola el párrafo 3 a) del artículo X por una aplicación no uniforme que afecte en última instancia a la cuantía de los derechos de aduana que debe

---

constituyen prueba de aplicación no uniforme de las leyes de aduana cuyo cumplimiento se garantiza mediante esas sanciones, como han argumentado los Estados Unidos.

[50] Informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración en aduana, párrafo 64 (Estados Unidos - Prueba documental 14) (sin cursivas en el original).

pagar el comerciante, y no por una aplicación no uniforme que afecte a las cargas que pesan sobre él o los riesgos que soporta. Por cierto, cabe destacar que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Pieles y cueros* constató que la Resolución 2235 de la Argentina violaba el párrafo 3 a) del artículo X a pesar de que esa disposición no afectaba a la cuantía económica de las obligaciones de los comerciantes. Esa disposición sometía a los comerciantes a determinado riesgo, en cuanto los competidores nacionales en la compra de cueros en bruto tenían derecho a encontrarse presentes en el puerto junto con los funcionarios de aduana que inspeccionaban los cueros antes de su exportación a adquirentes extranjeros.[51]

En síntesis, el párrafo 3 a) del artículo X exige que las leyes de aduana de los Miembros se apliquen de manera uniforme. Esa obligación no está limitada por las condiciones que sugieren las CE, de modo que sólo se produzca su violación cuando la aplicación no uniforme afecte en última instancia a la cuantía de los derechos de aduana que debe pagar el comerciante.

e) En lo que respecta a los procedimientos de domiciliación, en el párrafo 423 de su Primera comunicación escrita las Comunidades Europeas manifiestan que el hecho de que, en la frontera se lleven a cabo electrónicamente verificaciones de admisibilidad y para combatir el contrabando no significa que no haya ninguna intervención de las aduanas antes del despacho de las mercancías a libre práctica. Además, si las mercancías no se someten a esas verificaciones, habrá un acto de la aduana (verificación física, decomiso, …). Las Comunidades Europeas aducen que, en consecuencia, es erróneo afirmar que no hay ninguna intervención de las aduanas antes del despacho en el Reino Unido. En los párrafos 422 a 426 relativos a los requisitos previos al despacho en el marco de los procedimientos de domiciliación, las Comunidades Europeas declaran que no son necesarios los datos del manifiesto, sino que hay que presentar una declaración simplificada que contenga determinados datos. Las Comunidades Europeas añaden que es posible la utilización tanto de sistemas de despacho electrónico como de sistemas de documentación impresa. En lo que respecta a los requisitos en materia de documentación justificante, las Comunidades Europeas afirman que todos los Estados miembros de las CE aplican normas idénticas. En particular, todos los Estados miembros permiten a los operadores que realizan regularmente operaciones comerciales con los mismos proveedores que presenten solamente una vez el DV1 pertinente, juntamente con la solicitud inicial, para beneficiarse de los procedimientos de domiciliación. En lo que respecta a los requisitos en materia de conservación de los documentos, las Comunidades Europeas afirman que el período de conservación establecido en los Países Bajos es de siete años. Las Comunidades Europeas añaden que, el párrafo 1 del artículo 16 del Código Aduanero Comunitario dispone que los documentos requeridos se conservarán durante un plazo mínimo de tres años, pero deja en manos de los Estados miembros la posibilidad de fijar plazos más largos teniendo en cuenta sus necesidades y prácticas generales administrativas y fiscales.

Las afirmaciones de las CE sobre los procedimientos de domiciliación identifican los parámetros más amplios dentro de los cuales deben actuar distintas autoridades aduaneras de las CE. Los Estados Unidos no discuten la caracterización que las CE hacen de esos parámetros más amplios. Lo que han alegado los Estados Unidos es que las diferentes autoridades aduaneras de las CE aplican los procedimientos de domiciliación de manera distinta dentro de esos parámetros. Para un análisis de la forma en que ello ocurre, los Estados Unidos se remiten a los párrafos 109-117 de su Primera comunicación escrita.

[51] Véase, por ejemplo, informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafos 11.91 a 11.93.

138. Con respecto a las observaciones formuladas por los Estados Unidos en el párrafo 67 de su Declaración oral en la segunda reunión sustantiva ¿aceptan ahora los Estados Unidos la tesis de las Comunidades Europeas de que los procedimientos de control forman parte de las normas sobre valoración y no son procedimientos aduaneros?

Los Estados Unidos no aceptan la caracterización de los procedimientos de control como parte de las normas sobre valoración y no como procedimientos aduaneros. Es más exacto decir que los procedimientos de control son procedimientos aduaneros por los que se verifica el cumplimiento de normas de valoración.

Los Estados Unidos señalan al Grupo Especial el análisis que figura en el párrafo 83 de la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos. Como se explica allí, el punto de vista de las CE según el cual los procedimientos de control no constituyen procedimientos aduaneros está basado en su errónea interpretación de la expresión "*customs procedures*" ("procedimientos de aduana"; "régimen aduanero") en el sentido de que sólo comprende "los regímenes citados en el apartado 16 del artículo 3 del CAC".[52] Aunque "régimen aduanero" es por cierto una expresión técnica en el CAC (que se refiere a varias categorías definidas de trato que la autoridad aduanera puede asignar a determinada mercancía), ese empleo especializado de la expresión carece de pertinencia en esta diferencia. En esta diferencia los Estados Unidos han empleado la expresión citada para referirse al variado conjunto de normas, distintas de las normas de clasificación y valoración, que rigen la forma en que se tratan las mercancías con fines aduaneros cuando se las importa en las CE. En realidad, las propias CE reconocen que la forma en que se defina el concepto de "régimen aduanero" a los efectos del derecho comunitario y la cuestión de si determinado procedimiento está o no comprendido en el alcance del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 "son cuestiones independientes".[53] Como los procedimientos de control son instrumentos para la aplicación de las normas sustantivas que incuestionablemente están comprendidas en el alcance del párrafo 3 a) del artículo X, las diferencias de los procedimientos de control entre una y otra región de las CE constituyen prueba de falta de uniformidad en la aplicación de las leyes aduaneras de las CE, con independencia de que correspondan o no a la definición especializada de "régimen aduanero" en el Código Aduanero de la Comunidad.

139. Con respecto a los argumentos de los Estados Unidos relativos a la transformación bajo control aduanero ¿alegan los Estados Unidos que el *contenido* de la ley francesa que da aplicación a la legislación de las CE aplicable en esta esfera es diferente del contenido de la ley de otros Estados miembros (como el Reino Unido)? Además, o en otro caso, ¿alegan los Estados Unidos que hay diferencias entre la *aplicación* de la ley francesa en esta esfera y la aplicación de sus leyes por otros Estados miembros? En el último caso ¿disponen los Estados Unidos de pruebas que apoyen su alegación?

El argumento de los Estados Unidos es que el contenido de la ley francesa que pone en práctica la norma comunitaria (artículo 133 del CAC y apartado 3) del artículo 502 y artículo 552 del Reglamento de Aplicación) establece una prueba de efectos económicos basada en un único criterio para decidir si se ha de permitir o no la transformación bajo control aduanero.[54] Otros Estados miembros -por ejemplo, el Reino Unido- establecen una prueba con dos criterios.[55] La comparación

[52] Respuestas de las CE a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 105.

[53] *Ibid.*, párrafo 103.

[54] *Bulletin officiel des douanes* Nº 6527, párrafo 87 (31 de agosto de 2001, modificado por el similar Nº 6609, de 4 de noviembre de 2004) (Estados Unidos - Prueba documental 35).

[55] Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, Aviso 237, "*Processing Under Customs Control (PCC)*", artículo 15 (junio de 2003) (sin cursivas en el original) (Estados Unidos - Prueba documental 34).

directa entre las instrucciones de Francia y el Reino Unido demuestra que los dos países aplican el artículo 133 del CAC y el apartado 3) del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación de manera no uniforme.

Los Estados Unidos no han presentado un argumento referente a la aplicación del derecho francés. Ninguna falta hace, ya que la ley francesa y la del Reino Unido -que son, ambas, instrumentos de aplicación del derecho comunitario- divergen en forma patente. Por lo tanto, la aplicación de cada una de esas leyes tendrá que diferenciarse *necesariamente* de la aplicación de la otra.

140. En el párrafo 75 de la Declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, los Estados Unidos afirman que alegan una falta de uniformidad por parte de las Comunidades Europeas en la esfera de la transformación bajo control aduanero. Sírvanse señalar concretamente los actos/omisiones de las Comunidades Europeas que se alega que tienen como resultado una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 en esa esfera.

El párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 obliga a las CE a aplicar ciertas leyes de manera uniforme. Entre las leyes que deben aplicar de esa forma figuran el artículo 133 del CAC y el apartado 3) del artículo 502 y el artículo 552 del Reglamento de Aplicación, que se refieren a la transformación bajo control aduanero. El derecho comunitario en esa materia dispone que, respecto de ciertas mercancías, las autoridades aduaneras deben realizar una evaluación económica para decidir si se ha de permitir la transformación bajo control aduanero.

Existe cierta ambigüedad intrínseca del derecho comunitario sobre esta cuestión. El artículo 133 del CAC establece que la autorización para la transformación bajo control aduanero sólo se concederá cuando, entre otros requisitos, se reúnan las condiciones necesarias para que el régimen pueda contribuir a favorecer la creación y el mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en la Comunidad sin que se perjudiquen los intereses esenciales de los productores de mercancías similares (condiciones económicas)". Por lo tanto, este artículo establece una prueba en dos partes: la actividad de transformación propuesta: 1) debe "favorecer la creación y el mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en la Comunidad"; y 2) no debe "perjudicar los intereses esenciales de los productores de mercancías similares".

Por otro lado, el apartado 3) del artículo 502 del Reglamento de Aplicación establece lo siguiente: "Con respecto al régimen de transformación bajo control aduanero (Capítulo 4), el examen deberá establecer si el recurso a fuentes de aprovisionamiento no comunitarias es susceptible de favorecer la creación o el mantenimiento de una actividad de transformación en la Comunidad". El apartado 3) del artículo 502 del Reglamento de Aplicación no hace ninguna referencia a la segunda parte de la prueba de efectos económicos indicada en el artículo 133 del CAC: el requisito de que la actividad propuesta no "perjudique los intereses esenciales de los productores de mercancías similares".

Las CE afirman que el apartado 3) del artículo 502 del Reglamento de Aplicación es "lo que hay que considerar que constituye una referencia abreviada a los requisitos establecidos en la letra e) del artículo 133 del CAC".[56] Las CE no indican ningún fundamento de esta afirmación, que parece extraordinaria si se tiene en cuenta que, en general, el Reglamento de Aplicación, en sus 680 páginas, presenta un desarrollo más detallado de las disposiciones del CAC, que ocupa 77 páginas, y no una paráfrasis abreviada de estas últimas disposiciones. De cualquier modo, la ambigüedad intrínseca de la propia norma sustantiva ha dado lugar evidentemente a falta de uniformidad en la aplicación. De este modo, una autoridad aduanera comunitaria (la del Reino Unido) dice lo siguiente a quienes piden

[56] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 413.

autorización para dedicarse a la transformación bajo control aduanero: "Hay, pues, dos aspectos de la prueba económica y tendrá usted que presentar pruebas que acrediten *tanto* los efectos en su actividad mercantil *como también* los efectos en todos los demás productores comunitarios de las mercancías importadas".[57] La autoridad aduanera especifica seguidamente distintos tipos de pruebas que los solicitantes deben presentar para acreditar los dos aspectos de esta prueba económica.

En cambio, otra autoridad aduanera de las CE (la de Francia) dice lo siguiente a quienes solicitan autorización para dedicarse a la transformación bajo control aduanero: "En lo que respecta a la transformación bajo control aduanero, el punto 10 del modelo de solicitud debe complementarse con informaciones que acrediten que el recurso a ese régimen aduanero favorecerá la creación y el mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en la Comunidad ...".[58] No dice a los solicitantes que la información que presenten también debe acreditar que la actividad de transformación propuesta no perjudicará los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares. Y tampoco indica tipos de pruebas que los solicitantes deban presentar para cumplir ese segundo aspecto de la prueba económica.

Esta importante diferencia entre las pruebas que una autoridad aduanera comunitaria dice a los solicitantes que deben presentar y las pruebas que les indica otra autoridad aduanera comunitaria diferente constituye falta de uniformidad en la aplicación de la legislación comunitaria que establece la transformación bajo control aduanero. No sólo no ha habido ninguna institución comunitaria (como la Comisión) que interviniera para conciliar esta divergencia flagrante, sino que las CE niegan por completo que exista tal divergencia a pesar de la clara prueba documental de lo contrario. Las CE afirman que, a pesar de que las instrucciones que da una autoridad aduanera comunitaria a los comerciantes se diferencian en grado importante de las instrucciones que les da otra autoridad aduanera comunitaria, no debe asignarse importancia alguna a esa diferencia. Los Estados Unidos no alcanzan a advertir cómo es posible *no asignar* importancia a tal diferencia. Es ésta la divergencia incompatible con la obligación de aplicación uniforme que impone a las CE el párrafo 3 a) del artículo X del GATT respecto de la transformación bajo control aduanero.

141. En el párrafo 215 de su Segunda comunicación escrita, las Comunidades Europeas aducen que, con respecto a la alegación que formulan al amparo del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, los Estados Unidos no formulan alegaciones acerca del alcance de la revisión exigida por ese párrafo. Sírvanse formular observaciones al respecto.

La afirmación de las CE según la cual los Estados Unidos no formularon alegaciones acerca del alcance de la revisión que exige el párrafo 3 b) del artículo X se basa en un marco analítico que las CE han propuesto para el examen de esa disposición. Conforme a ese marco, las CE dicen que el párrafo 3 b) del artículo X puede examinarse desde el punto de vista de cuatro cuestiones: "el ámbito sustantivo del control, su naturaleza, su finalidad y un requisito temporal".[59] Los Estados Unidos no han utilizado este mismo marco para examinar la obligación que corresponde a las CE con arreglo al párrafo 3 b) del artículo X. Por lo tanto, las observaciones que formulan los Estados Unidos sobre la afirmación de las CE acerca del alcance de la revisión son sin perjuicio del punto de vista de los Estados Unidos sobre el marco analítico apropiado para examinar dicha disposición.

---

[57] Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, Aviso 237, "*Processing Under Customs Control (PCC)*", párrafo 15 (junio de 2003) (sin cursivas en el original) (Estados Unidos - Prueba documental 34).

[58] *Bulletin officiel des douanes* N° 6527, párrafo 83 (31 de agosto de 2001, modificado por el similar N° 6609, de 4 de noviembre de 2004) ("*En ce qui concerne la transformation sous douane, la rubrique 10 du modèle de demande doit être complétée des informations démontrant que le recours à ce régime douanier crée ou maintient une activité de transformation dans la communauté* ...") (Estados Unidos - Prueba documental 35).

[59] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 215.

El párrafo 3 b) del artículo X exige que las CE, como Miembro de la OMC, tengan ciertos "tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos". A continuación se definen determinadas cualidades que deben tener esos tribunales o procedimientos, en los siguientes términos:

1) Deben permitir la "revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras";

2) tal revisión y rectificación debe ser "pronta";

3) los tribunales o procedimientos deben ser "independientes de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas"; y

4) las decisiones de los tribunales o procedimientos deben:

   a) "ser ejecutadas" por esos organismos, y

   b) "regir su práctica administrativa",

   "a menos que se interponga un recurso ante una jurisdicción superior, dentro del plazo prescripto para los recursos presentados por los importadores".

Las alegaciones de los Estados Unidos en esta diferencia, referentes al párrafo 3 b) del artículo X, se relacionan con la cuarta de las cualidades mencionadas que deben tener dichos tribunales o procedimientos: en particular, el requisito de "regir la práctica". Los tribunales o procedimientos que establecen las CE para el examen y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras -en particular, los tribunales de cada uno de los 25 Estados miembros de las CE- carecen de la cuarta cualidad establecida en el párrafo 3 b) del artículo X porque las decisiones que dictan no rigen la práctica de "*los* organismos encargados de aplicar las medidas administrativas". Las decisiones de cualquiera de esos tribunales sólo rigen la práctica de un subconjunto de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Por lo tanto, las CE no establecen tribunales ni procedimientos que cumplan la totalidad de los requisitos del párrafo 3 b) del artículo X. Esto no sólo es incompatible con el sentido corriente del texto de la disposición, sino que esta conclusión se confirma al interpretarla en el contexto que establece el párrafo 3 a) del mismo artículo. En la medida en que las sentencias de los tribunales de revisión sólo rigen la práctica de *determinados* organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, el sistema de revisión de las CE frustra, en lugar de complementar, la aplicación uniforme que exige el párrafo 3 a) del artículo X. Como el párrafo 3 b) debe interpretarse en ese contexto, esto constituye un fundamento más para constatar que los tribunales de revisión establecidos por las CE no cumplen la obligación que corresponde a las CE con arreglo al párrafo 3 b) del artículo X.[60]

142. A la luz del argumento expuesto por los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 121 del Grupo Especial de que la obligación de pronta revisión y rectificación establecida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 se aplica al primer tribunal o procedimiento disponible en un Miembro después de la adopción de una decisión administrativa, en caso de que el Grupo Especial haya de asumir a efectos de argumentación que las Comunidades Europeas no están obligadas a establecer uno o varios organismos centrales con facultades para adoptar decisiones con efectos en todo el ámbito de las CE de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo X, sírvanse responder a las siguientes preguntas:

[60] Véase, en general, la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 134 a 139; y la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 102 a 109.

a) ¿Consideran los Estados Unidos que la revisión por organismos de cada uno de los Estados miembros encargados de realizar la revisión en primera instancia de las decisiones aduaneras adoptadas por las autoridades de los Estados miembros infringe el párrafo 3 b) del artículo X?

b) En caso de respuesta afirmativa, sírvanse explicar qué aspecto o aspectos de la revisión por esos organismos infringen el párrafo 3 b) del artículo X, haciendo referencia a los requisitos pertinentes de ese párrafo y facilitando todos los datos pertinentes en apoyo de esa explicación.

c) Con respecto al párrafo 86 de la Declaración oral de las Comunidades Europeas en la segunda reunión sustantiva ¿consideran los Estados Unidos que la revisión no es "pronta", con infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994, en lo que respecta a los siguientes aspectos:

i) la revisión en primera instancia por los tribunales nacionales de los Estados miembros de las CE cuando no ha habido una remisión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que éste adopte una decisión prejudicial; y/o

ii) la revisión en primera instancia por los tribunales nacionales de los Estados miembros de las CE cuando ha habido una remisión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para éste adopte una decisión prejudicial?

La reclamación de los Estados Unidos en esta diferencia no se refiere a los organismos de revisión establecidos por cada uno de los Estados miembros de las CE. Los Estados Unidos no han alegado, por ejemplo, que la revisión efectuada en el plano de los Estados miembros viole las obligaciones que corresponden a éstos con arreglo al párrafo 3 b) del artículo X del GATT. La reclamación de los Estados Unidos apunta a que la revisión vigente a nivel de los Estados miembros *por sí sola* carece de las características que le permitirían cumplir la obligación del párrafo 3 b) del artículo X. En particular, los tribunales de los Estados miembros dictan decisiones cuyos efectos se limitan al territorio del Estado miembro respectivo. No existe ningún tribunal en el territorio de las CE que realice la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas en materia aduanera dictando decisiones que rijan la práctica de *los* organismos encargados de aplicar las medidas administrativas del derecho aduanero comunitario (considerados en contraposición a un subconjunto de tales organismos).

Las CE afirman que las autoridades aduaneras situadas en cada uno de sus 25 Estados miembros son autoridades aduaneras de las CE. Admiten que las decisiones de los tribunales de un Estado miembro no obligan a las autoridades de los demás Estados miembros. Por lo tanto, las decisiones de los tribunales de un Estado miembro no rigen la práctica de los organismos comunitarios de los otros 24 Estados miembros. Esto constituye una infracción inequívoca del texto claro del párrafo 3 b) del artículo X.

Al analizar las partes a) y b) de la pregunta del Grupo Especial en la segunda reunión sustantiva con las partes, el Grupo Especial explicó que le interesaba saber cómo interpretaban los Estados Unidos la palabra "decisiones", empleada en el párrafo 3 b) del artículo X. En particular, el Grupo Especial preguntó si las decisiones que deben ejecutar los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas y que deben regir su práctica administrativa son simplemente los mandamientos u órdenes que en definitiva disponen los tribunales de revisión, o abarcan también el razonamiento del tribunal. Puesto que, sobre la base de la discusión realizada en la segunda reunión con el Grupo Especial, los Estados Unidos interpretan que la pregunta 142 también se refiere a esta cuestión, presentarán las observaciones que siguen.

El párrafo 3 b) del artículo X debe interpretarse conforme al sentido corriente de sus términos, en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del GATT de 1994. Sus términos disponen claramente que las decisiones dictadas por los tribunales o procedimientos de revisión deben cumplir dos requisitos independientes: deben ser ejecutadas por los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, y deben regir la práctica de esos organismos. Estos dos requisitos independientes no pueden fusionarse simplemente en un solo, que es lo que hacen las CE al aducir que "regir la práctica" significa simplemente "aplicar en condiciones equitativas".[61] Para que las decisiones rijan la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, es preciso que tengan efectos más allá de la simple aplicación de la orden al caso en cuestión.[62] Como ya se analizó, esto es lo coherente con el contexto del párrafo 3 b) del artículo X: en particular, el requisito de aplicación uniforme.

Se llega así a la cuestión del significado de "decisiones". En otras palabras: ¿qué manifestaciones de un tribunal de revisión deben regir la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas: simplemente su mandamiento u orden final, o ese mandamiento u orden junto con los fundamentos manifestados por el tribunal? En la segunda reunión con el Grupo Especial se señaló que en algunos sistemas jurídicos el término "decisiones" podría entenderse como limitado al mandamiento u orden final, mientras que en otros sistemas jurídicos podría abarcar también los fundamentos del tribunal. Los Estados Unidos sostienen que el requisito de que las decisiones "rijan la práctica" no resulta afectado por que se entienda que las "decisiones" tienen un significado más amplio o más estrecho. Es decir: incluso en un sistema jurídico en que se entienda que una decisión sólo corresponde al mandato o la orden del tribunal, y no a sus fundamentos, el párrafo 3 b) del artículo X no deja de exigir que la decisión se ejecute por los organismos encargados de la aplicación de las medidas administrativas *y también*, al mismo tiempo, rija la práctica de esos organismos. En realidad, no es preciso que un Miembro tenga un sistema jurídico en que los precedentes jurisprudenciales constituyen una fuente general de derecho para que deba cumplirse este requisito.

Lo anterior se ilustrará con un ejemplo sencillo. Considérese el caso de un tribunal de revisión que ha revocado la decisión de la autoridad aduanera de un Miembro sobre una cuestión de clasificación. El tribunal declara que la autoridad aduanera incurrió en error al clasificar un producto en la partida "X" y que debió haberlo clasificado en la partida "Y". La ejecución de la sentencia supone que la autoridad aduanera revise la clasificación de la mercancía correspondiente a la medida administrativa que dio origen a la revisión judicial. Puede ocurrir que para llegar a su decisión el tribunal haya explicado sus fundamentos en términos que admiten una aplicación más amplia a otras cuestiones de clasificación (o incluso a otras ramas del derecho). En algunos sistemas jurídicos podría asignarse cierto peso a los fundamentos manifestados por el tribunal, que adquirirían la eficacia de un precedente obligatorio. Pero no es preciso que el razonamiento del tribunal se considere un precedente en este sentido para que su decisión rija la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas. Entre los dos extremos de la simple ejecución en el caso concreto y la eficacia como precedente general se sitúa la posibilidad de que la decisión del tribunal -su conclusión acerca de la correcta clasificación de las mercancías- se aplique a otros casos referentes a productos idénticos. Es esto lo que Estados Unidos entienden por el concepto de que la decisión rija la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas conforme a la descripción de ese concepto que figura en el párrafo 3 b) del artículo X.

Por lo tanto, en el ejemplo precedente, si el tribunal constata que la autoridad aduanera incurrió en error al clasificar el producto en cuestión en la partida "X" y que debería haberlo clasificado en la partida "Y", el aspecto del párrafo 3 b) del artículo X referente a "regir la práctica"

[61] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 230.

[62] Véase la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 104 a 106.

exigiría que, en otros casos, la autoridad se ajustara a la sentencia y clasificara los productos idénticos en la partida "Y" aunque su importador no fuese el mismo de ese procedimiento judicial. En cambio, no exigiría que se diera a la sentencia una eficacia más amplia como precedente, aplicable no sólo a los productos idénticos sino también a otros y, eventualmente, también en otras ramas del derecho. En opinión de los Estados Unidos, con esta interpretación del aspecto del párrafo 3 b) del artículo X relativo a "regir la práctica", nada cambia porque en el sistema jurídico de un Miembro se considere que una "decisión" sólo consiste en la orden o mandamiento del tribunal o se entienda que incluye los fundamentos de éste.

En síntesis, aun cuando en el sistema jurídico de un Miembro se considere que la decisión de un tribunal sólo consiste en su mandamiento u orden final, el párrafo 3 b) del artículo X del GATT no deja por ello de exigir que la decisión rija la práctica de los organismos encargados de la aplicación de las medidas administrativas, y este efecto significa algo más que la simple aplicación de la decisión. Como ya se ha analizado, las sentencias de los tribunales de revisión en las CE no cumplen este requisito, ya que sólo rigen la práctica de algunos de los organismos encargados de la aplicación de las medidas administrativas en las CE.

Con respecto a la parte c) de la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos no se pronuncian en esta diferencia acerca de si la revisión es "pronta" en el sentido del párrafo 3 b) del artículo X en el caso de una revisión en primera instancia por los tribunales de los Estados miembros de las CE cuando no ha habido una remisión al TJCE para que éste adopte una decisión prejudicial. Esto no equivale a decir que los Estados Unidos admiten que tal revisión sea pronta. A ese respecto los Estados Unidos recuerdan la observación del consultor de las CE, Sr. Vermulst, de que "la revisión judicial en cuestiones de clasificación y, en términos más generales, todas las cuestiones aduaneras, no sólo es [cara y lenta] para las partes afectadas sino que también puede dar lugar a sentencias incongruentes de los tribunales nacionales, al menos en primera instancia".[63]

Los Estados Unidos se han referido al tiempo que se requiere para que una cuestión se remita al TJCE y se resuelva por él en los casos en que los tribunales optan por hacer uso de su facultad discrecional de remitírselos.[64] Los Estados Unidos lo han hecho partiendo del supuesto de que el TJCE es el único tribunal que ofrecen las CE que parece cumplir los demás requisitos del párrafo 3 b) del artículo X. En particular, a diferencia de los tribunales de los Estados miembros de las CE, el TJCE dicta decisiones que rigen la práctica de los organismos encargados de aplicar administrativamente las normas legales comunitarias en materia aduanera. Así, si el TJCE fuera el tribunal que tienen las CE para cumplir la obligación que les impone el párrafo 3 b) del artículo X (cosa que las CE rechazan[65]), entonces sería importante examinar si la revisión que realiza ese tribunal es o no pronta. En realidad, no lo es. Sólo para lograr que se plantee al TJCE una cuestión prejudicial, un comerciante puede tener que pasar por todo el proceso de recursos administrativos (en cuya etapa no es posible siquiera la remisión al TJCE)[66], seguido por múltiples instancias de revisión judicial, que por sí solas pueden llevar años. Aun entonces el comerciante no tiene garantía alguna de que una cuestión se remita al TJCE, por más que se refiera a una divergencia clara entre las

[63] Véase la segunda Declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 38 (donde se cita Vermulst, *EC Customs Classification Rules*, página 21 (Estados Unidos - Prueba documental 72)).

[64] Véase, por ejemplo, la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 109.

[65] Véase, por ejemplo, la segunda Declaración oral de las CE, párrafo 85.

[66] Véanse las respuestas de las CE a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafos 117 ("la mayor parte de los Estados miembros de las CE exige que el comerciante entable un recurso administrativo antes de apelar ante el tribunal competente"); 122 ("la decisión de remitir el asunto para una decisión prejudicial se adopta por los *tribunales* de los Estados miembros ...) (sin cursivas en el original).

aplicaciones de la ley hechas por diferentes autoridades.[67] Cuando el asunto llega a remitirse al TJCE, su decisión lleva por término medio 19 ó 20 meses.[68] Los Estados Unidos sostienen que el tiempo necesario para que el TJCE resuelva una cuestión después de que le ha sido remitida, junto con el tiempo que ya hizo falta para que la cuestión llegase al Tribunal, no cumpliría el requisito de prontitud si las CE sostuvieran que es la revisión por el TJCE lo que cumple la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X.[69]

143. A la luz del argumento expuesto por los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 121 del Grupo Especial de que la obligación de pronta revisión y rectificación establecida en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 es aplicable al primer tribunal o procedimiento disponible en un Miembro después de la adopción de una decisión administrativa y con respecto a su alegación al amparo del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 ¿impugnan los Estados Unidos la revisión, de conformidad con el artículo 230 del Tratado Constitutivo de la Comunidad por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de las decisiones adoptadas por las instituciones de las CE? En tal caso, sírvanse explicar qué aspecto o aspectos de la revisión por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de conformidad con el artículo 230 del Tratado Constitutivo de la Comunidad infringe el párrafo 3 b) del artículo X, haciendo referencia a los requisitos pertinentes de dicho párrafo y facilitando todas las pruebas pertinentes que apoyen esa explicación.

El artículo 230 del Tratado Constitutivo de la CE se refiere a la revisión por el TJCE de la legalidad de los actos adoptados por las instituciones comunitarias, incluidos la Comisión y el Consejo. En esta diferencia los Estados Unidos no han planteado ninguna cuestión respecto de la revisión por el TJCE con arreglo al artículo 230. El análisis de los Estados Unidos sobre la función del Tribunal se ha referido a la posibilidad de revisión con arreglo al artículo 234 del Tratado Constitutivo de la CE (el mecanismo de decisiones prejudiciales). Las CE afirman que a través de ese mecanismo el TJCE desempeña una importante función para garantizar la aplicación uniforme de las normas aduaneras comunitarias.[70] Los Estados Unidos han demostrado que no es así. En particular, en su Declaración oral en la segunda reunión con el Grupo Especial, los Estados Unidos mostraron que los tribunales de los diversos Estados miembros no tienen obligación alguna de remitir una cuestión al TJCE aun cuado tengan ante sí la prueba de una divergencia incuestionable en la aplicación de la normativa aduanera comunitaria.[71]

---

[67] Véase la Segunda Declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 35 a 38.

[68] Véanse las respuestas de las CE a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 124.

[69] Véanse, en general, las respuestas de los Estados Unidos a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafos 152 a 154. Como la parte c) de la pregunta del Grupo Especial hace referencia al párrafo 86 de la Declaración oral de las CE en la segunda reunión sustantiva, los Estados Unidos añaden una observación acerca de esa parte de la declaración de las CE. En ella, las CE comparan el tiempo necesario para tramitar una apelación en el procedimiento de revisión de los tribunales de sus Estados miembros y el TJCE con el tiempo que lleva en los Estados Unidos la decisión de una apelación por el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (el "USCIT"). Las CE presentan una descripción totalmente inexacta del tiempo que lleva la decisión de una solicitud de revisión en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se remiten al párrafo 142 de sus respuestas al primer conjunto de preguntas del Grupo Especial. Lo más significativo es que las CE desconocen simplemente el grado en que, en el examen por el USCIT, los tiempos están en manos del interesado. Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafos 150 y 151.

[70] Véase, por ejemplo, la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 185.

[71] Segunda Declaración oral de los Estados Unidos párrafos 31 y 35 a 38.

En su declaración en la segunda reunión con el Grupo Especial, las CE afirmaron que "si ... un tribunal de un Estado miembro de las CE no comparte la interpretación de la legislación de las CE que hace un tribunal de otro Estado miembro, tomará las iniciativas que correspondan a su posición en el sistema: ... el tribunal de otro Estado miembro recurrirá al Tribunal Europeo de Justicia".[72] Estas afirmaciones sobre lo que "ocurrirá" carecen de fundamento. Y, como queda de manifiesto a través de las ilustraciones analizadas por los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial, el empleo del mecanismo de decisiones prejudiciales a que aluden las CE *no se produce* ni siquiera en casos que presentan una divergencia manifiesta de aplicación entre distintas autoridades aduaneras.

144. En su respuesta a la pregunta 74 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas sostienen que, aunque el Código Aduanero Comunitario no contiene ninguna disposición que exija que la revisión realizada por los tribunales nacionales sea pronta, hay varias medidas aplicables en toda la Comunidad (como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea) por efecto de los cuales se exige a los tribunales de los Estados miembros una revisión pronta. Sírvanse formular observaciones al respecto.

Los Estados Unidos observan que la respuesta de las CE a la pregunta 74 del Grupo Especial ofrece un ejemplo más de cómo las CE hacen referencia a obligaciones de índole muy general, del tipo de las garantías del debido proceso, de las que reconocen que no están puestas en práctica en materia aduanera, como base del cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al párrafo 3 del artículo X. Los Estados Unidos no alcanzan a advertir cómo es posible que tal disposición de carácter general, no puesta en práctica en materia aduanera, garantice que los tribunales que establecen las CE para la revisión de los actos administrativos en materia aduanera realicen efectivamente una revisión pronta. Sin perjuicio de ello, en esta diferencia los Estados Unidos no alegan que la revisión efectuada por los tribunales de determinados Estados miembros no sea pronta, sino que esos tribunales no cumplen los requisitos del párrafo 3 b) del artículo X.

145. En su respuesta a la pregunta 36 del Grupo Especial, los Estados Unidos manifiestan que la revisión en primera instancia es realizada por el Servicio de Reglamentos y Resoluciones, que forma parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera de los Estados Unidos. Sírvanse indicar si todas las decisiones adoptadas en revisión por el Servicio de Reglamentos y Resoluciones surten efectos en todo el territorio de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos observan en primer lugar que las instituciones y los procedimientos de los Estados Unidos no están en litigio en la presente diferencia. No obstante, con el fin de ilustrar las cuestiones en litigio, darán respuesta a la pregunta en los términos que siguen.

La revisión en primera instancia por el Servicio de Reglamentos y Resoluciones, mencionada en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 36 del Grupo Especial, se conoce en los Estados Unidos como "revisión ulterior" de las determinaciones sobre recursos. Las decisiones que se dictan en virtud del procedimiento de revisión ulterior tienen la misma eficacia y los mismos efectos que las resoluciones anticipadas: es decir, son vinculantes respecto de las operaciones descritas y no pueden modificarse ni revocarse sin pasar por el mismo procedimiento de modificación aplicable a las resoluciones. El destinatario de la decisión dictada en una revisión ulterior podría utilizarla en cualquier puerto de los Estados Unidos. Otras personas cuyas mercancías fueran idénticas en todos los aspectos importantes podrían invocar la decisión como fundamento aplicable al despacho de sus mercancías.

[72] Segunda Declaración oral de las CE, párrafo 99.

PREGUNTAS DIRIGIDAS A AMBAS PARTES

173. Con referencia a los términos pertinentes del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y a cualesquiera otros elementos justificantes, sírvanse explicar si pueden tenerse en cuenta o no el diseño y la estructura de un sistema de administración de aduanas en su conjunto, o de los componentes pertinentes del mismo, *como tales*, al determinar si se ha infringido o no el párrafo 3 a) del artículo X por falta de una aplicación uniforme. Además, o subsidiariamente, ¿es necesario considerar casos concretos de aplicación no uniforme para demostrar la existencia de una violación del párrafo 3 a) del artículo X?

El párrafo 3 a) del artículo X tiene algunos aspectos excepcionales que es preciso tomar en consideración al examinarlo en el marco tradicional que distingue el examen de las disposiciones "en sí mismas" y "en su aplicación". Es verdad que el párrafo 3 a) del artículo X se refiere a la aplicación. Sin embargo, cabe concebir que un Miembro establezca un sistema de administración aduanera que, en sí mismo, dé lugar necesariamente a una aplicación no uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X (como ocurre en las CE). Existe analogía con el asunto *Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano*, en que el Grupo Especial constató que los Estados Unidos "están haciendo un cuestionamiento *per se* del Régimen de Exportación de la [Junta Canadiense del Trigo] considerado en su totalidad".[73] El Canadá no se opuso a la reclamación de los Estados Unidos (referente a una violación del artículo XVII del GATT) por ese fundamento, y el Grupo Especial convino en tratar la reclamación de los Estados Unidos.[74] En realidad, las CE, como tercero en esa diferencia, alegaron que el artículo del GATT de que se trataba podía violarse a causa de "deficiencias estructurales" que afectaran a la forma en que actuaba la respectiva empresa comercial del Estado.[75] Análogamente, en la presente diferencia los Estados Unidos sostienen que las deficiencias estructurales del sistema de administración aduanera de las CE dan lugar a una aplicación no uniforme del derecho aduanero comunitario, con infracción del párrafo 3 a) del artículo X.

Lo esencial, cuando se alega la violación de una norma "en sí misma", es la obligación cuya violación se invoca y si el objeto de la impugnación da lugar o no necesariamente a una infracción de esa obligación. Por las razones indicadas en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126, el diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las CE tienen por resultado necesariamente una aplicación no uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Además, como también se explica en la respuesta a la pregunta 126, el argumento de los Estados Unidos referente al párrafo 3 a) del artículo X no se basa exclusivamente en la demostración de que el diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las CE tienen por resultado necesario una aplicación no uniforme. Los Estados Unidos también han apoyado su argumentación con pruebas de que las CE y altos funcionarios de las CE han reconocido la falta de aplicación uniforme; ejemplos de esa aplicación no uniforme; y pruebas de que los profesionales que realmente deben actuar en el marco del sistema entienden que la aplicación no es uniforme.[76] El Grupo Especial pregunta si es necesario considerar casos concretos de aplicación no uniforme para demostrar la existencia de una violación del párrafo 3 a) del artículo X. Aunque resulta difícil responder en

[73] Informe del Grupo Especial, *Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano*, párrafo 6.28.

[74] *Ibid.*, párrafo 6.28.

[75] *Ibid.*, párrafo 4.601; véase también el párrafo 4.603 ("las Comunidades Europeas consideran también que la explicación del Canadá de la estructura institucional de la CWB no aporta garantías suficientes de que la Junta actúa realmente de conformidad con las obligaciones dimanantes de los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo XVII del GATT").

[76] Véase la respuesta a la pregunta 126, *supra*.

abstracto a esta pregunta, no es preciso darle respuesta en la presente diferencia porque la alegación de los Estados Unidos fundada en el párrafo 3 a) del artículo X está respaldada por pruebas que se refieren *tanto* al diseño y la estructura del sistema de administración aduanera de las CE *como también* a casos concretos de aplicación no uniforme.

174. Sírvanse formular observaciones sobre la pertinencia práctica, en su caso, de la siguiente observación formulada en el párrafo 11.77 del informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*: "El párrafo 3 a) del artículo X [del GATT de 1994] requiere un examen de los *efectos reales* que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio". (sin cursivas en el original)

En el contexto del asunto *Argentina - Pieles y cueros*, la referencia a "los efectos reales sobre los comerciantes" apuntaba a establecer una distinción por contraste con la sugerencia de que la obligación de aplicación uniforme impuesta por el párrafo 3 a) del artículo X sólo se viola cuando un Miembro trata las exportaciones a otro Miembro de distinto modo que las exportaciones a un tercero.[77] Al determinar si ha existido violación del párrafo 3 a) del artículo X, lo que debe plantearse un grupo especial no es si un Miembro de la OMC ha sido tratado en distinta forma que otros. Debe plantearse si los comerciantes han sido tratados de distinta forma sobre la base, por ejemplo, de la parte del territorio del Miembro a través de la cual importan sus mercancías. Si la forma en que un Miembro administra su legislación aduanera puede alentar a un comerciante a preferir la importación por una región y no por otra, ello demuestra la existencia de aplicación no uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X.

Es ilustrativo que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Pieles y cueros*, en la última frase del párrafo 11.77 de su informe, haya señalado que un examen de los efectos reales que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio "puede suponer un examen de la existencia de posibles repercusiones en la situación de competencia ...". En otras palabras: el examen de los efectos reales que una medida puede tener sobre los comerciantes no se limita a si los comerciantes en situación análoga deben pagar derechos de aduana diferentes. El concepto de "posibles repercusiones en la situación de competencia" no abarca solamente los derechos de aduana que se deben pagar. En especial incluye el efecto que tiene la aplicación no uniforme al hacer que los comerciantes desvíen sus envíos de una a otra región del territorio de un Miembro debido, por ejemplo, al distinto grado de certidumbre acerca de una clasificación o valoración favorables, el menor riesgo de responsabilidad por sanciones o la probabilidad de obtener autorización para realizar una actividad especializada (como la transformación bajo control aduanero).[78]

175. En el párrafo 11.77 del informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*, éste declaró que no es necesario que se demuestre la existencia de "perjuicios comerciales" para probar la existencia de una violación del párrafo 3 a) del artículo X. Sírvanse formular observaciones al respecto.

Para demostrar una violación del párrafo 3 a) del artículo X, lo único que deben hacer los Estados Unidos es acreditar que las CE aplican su legislación aduanera de manera no uniforme. Como respaldo de una alegación basada en el párrafo 3 a) del artículo X no es preciso que los Estados Unidos demuestren la existencia de perjuicio para los Estados Unidos o para determinados comerciantes. En particular, no tienen obligación alguna de demostrar que determinados casos de aplicación no uniforme han hecho que los importadores pagaran aranceles más elevados que los que habrían pagado en un sistema de aplicación uniforme. Bien puede ocurrir que la aplicación no

[77] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.76.

[78] Véanse las respuestas a las preguntas 135, 137 b) y 137 d), *supra*.

uniforme haga que los comerciantes desvíen su comercio en formas que no tendrían sentido si existiera una aplicación uniforme, precisamente para evitar la posibilidad de tener que pagar aranceles más elevados. Como analizaron los Estados Unidos en su declaración inicial en la segunda reunión con el Grupo Especial, esto ha ocurrido respecto de las importaciones de monitores LCD en las CE.[79] A pesar de las protestas de las CE sosteniendo lo contrario[80], para establecer una infracción del párrafo 3 a) del artículo X es indiferente que esa reacción ante la aplicación no uniforme haya dado lugar o no a determinado grado de perjuicio comercial.

176. En el párrafo 15 de su Declaración oral en la segunda reunión sustantiva, las Comunidades Europeas señalan que invocan el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 en respaldo de su opinión de que los compromisos en el marco del GATT, incluido el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, fueron contraídos por las Partes Contratantes con pleno respeto a sus sistemas constitucionales. ¿Qué importancia debe atribuirse, en su caso, al hecho de que en el momento en que se concluyó el texto del GATT de 1947 no existiera una unión aduanera similar de las Comunidades Europeas?

La afirmación de las CE en el párrafo 15 de su segunda Declaración oral, y otras declaraciones análogas hechas en otros lugares[81], sugieren equivocadamente que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 debe interpretarse a la luz de la estructura constitucional de cada Miembro, incluidas las CE. Siguiendo la lógica de las CE, el Grupo Especial debería empezar tomando como punto fijo la estructura constitucional de las CE e interpretar el párrafo 3 a) del artículo X en torno de ese punto fijo. Según este argumento, debería rechazarse cualquier interpretación que tuviera por resultado que las CE debieran modificar su sistema de administración y revisión en materia aduanera.

Como explicaron los Estados Unidos en su declaración final en la segunda reunión con el Grupo Especial, las CE invierten exactamente la cuestión.[82] No es la estructura constitucional de las CE lo que debe determinar el significado del párrafo 3 a) del artículo X; por el contrario, es el sentido corriente de los términos del párrafo 3 a) del artículo X, en su contexto y teniendo en cuenta el objeto fin del GATT de 1994, lo que debe determinar las obligaciones que corresponden a las CE en virtud de esa disposición.[83] El párrafo 12 del artículo XXIV no modifica esta situación. El párrafo 13 del *Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles*

[79] Véase la segunda declaración inicial de los Estados Unidos, párrafo 52 (donde se analiza la carta de la EICTA de septiembre de 2005, página 1 (Estados Unidos - Prueba documental 75)).

[80] Véase, por ejemplo, la segunda Declaración oral de las CE, párrafo 54 ("las CE quisieran saber también en qué consistía precisamente la anulación o el menoscabo de las ventajas de los Estados Unidos"); y la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 35 ("corresponde a los Estados Unidos, como parte reclamante, acreditar que las diferencias de la práctica administrativa, aunque hayan existido, tuvieron una repercusión significativa sobre los comerciantes").

[81] Véase, por ejemplo: segunda Declaración oral de las CE, párrafo 12; segunda declaración final de las CE, párrafo 3; Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 220; y respuestas de las CE a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 113.

[82] Véase la segunda declaración final de los Estados Unidos, párrafos 12 a 16.

[83] Cuando los negociadores de los acuerdos de la OMC quisieron tener en cuenta la estructura constitucional de los Miembros, supieron cómo hacerlo. Véase, por ejemplo: *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio*, párrafo 2 b) del artículo VI; *Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994*, párrafo 2 del artículo 4; véase también la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 16 (donde se analiza el párrafo 2 b) del artículo VI del AGCS).

Aduaneros y Comercio de 1994 deja claro que el párrafo 12 del artículo XXIV no exime a un Miembro de sus obligaciones ni las modifica. Ese párrafo dispone que "en virtud del GATT de 1994, cada Miembro es plenamente responsable de la observancia de todas las disposiciones de este instrumento".[84]

Que existiera o no una unión aduanera "similar" a las CE cuando se concertó el GATT en 1947 carece, por lo tanto, de pertinencia a los efectos del análisis de las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del artículo X.[85] Lo que cuenta es que el párrafo 3 a) del artículo X está formulado en términos que no crean ningún régimen especial en favor de una Parte Contratante con múltiples autoridades aduaneras independientes y territorialmente limitadas y que carece de procedimientos o instituciones que garanticen que esas diversas autoridades apliquen de modo uniforme las leyes aduaneras de esa Parte Contratante. Tampoco el párrafo 12 del artículo XXIV crea tal régimen especial. Como han explicado los Estados Unidos, el párrafo 12 del artículo XXIV no es una exención general respecto del párrafo 3 a) del artículo X ni una limitación de su aplicabilidad.[86]

Cuando las CE se incorporaron a la OMC, en 1994, aceptaron el texto del GATT y las obligaciones que resultaban de él. Ninguna disposición del GATT de 1994 ni del Acuerdo sobre la OMC sugiere que las CE tengan derechos u obligaciones diferentes de los de cualquier otro Miembro, ni existe disposición alguna en el Acuerdo sobre la OMC que indique que la incorporación de las CE afecte al significado de alguna disposición del GATT de 1994. En realidad, si hubiera de aceptarse aquí la lógica del argumento de las CE, se crearía una interrogante muy seria acerca de hasta dónde podría llegar. Es decir: ¿qué otras obligaciones del GATT tendrían que interpretarse especialmente a la luz de la estructura constitucional de las CE (o de cualquier otro Miembro)?

No existe fundamento alguno para aducir que una interpretación del párrafo 3 a) del artículo X que da a sus términos su sentido corriente, en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del GATT, deba rechazarse porque esa interpretación podría obligar a las CE a realizar modificaciones de su sistema de administración aduanera y de revisión de las decisiones en esa materia. El texto del artículo X no se modificó en 1994 cuando las CE se incorporaron en la OMC. El Grupo Especial no debe presumir que las Partes Contratantes, al aceptar a las CE como Miembro de la OMC, aceptaron que el sistema de administración aduanera de las CE estaba en conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X, sino que debe presumir que las CE optaron por ser un Miembro de la OMC concientes de las obligaciones que les impondría el párrafo 3 a) del artículo X del GATT y se comprometieron a ajustar en consecuencia su sistema de administración aduanera.

---

[84] Véase la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 12 a 17.

[85] Los Estados Unidos observan que no están seguros de lo que quiere decir exactamente el Grupo Especial al referirse a una unión aduanera "similar" a las CE.

[86] Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 188.

ANEXO B-2

RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

(7 de diciembre de 2005)

PREGUNTAS PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS:

146. En su respuesta a la pregunta 42 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas aducen que, en el ordenamiento jurídico de las CE, tanto las instituciones de las Comunidades Europeas como las autoridades de los Estados miembros, cada una de ellas dentro de su ámbito de competencia, son responsables de la aplicación de: a) el Reglamento Nº (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, b) el Reglamento Nº (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993 y c) el arancel integrado de las Comunidades Europeas establecido por el Reglamento Nº (CEE) Nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987. En el contexto del derecho de las CE, sírvanse señalar si las Comunidades Europeas y/o los Estados miembros son responsables, y en qué medida, de la promulgación[1] y la aplicación, entre otras cosas, de las leyes y los reglamentos en las esferas siguientes de la administración de aduanas:

a) clasificación arancelaria;

b) valoración en aduana; y

c) procedimientos aduaneros (en particular, los controles posteriores al despacho a libre práctica[2], las sanciones por infracción de la legislación aduanera de las CE, la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación).

Si hay una competencia compartida de las Comunidades Europeas y los Estados miembros en una o varias de las esferas citadas de la administración de aduanas, sírvanse explicar claramente la delimitación entre sus respectivas competencias en las esferas pertinentes.

En las CE, la legislación aduanera se rige en muy gran medida por el derecho comunitario, y en especial por el Arancel Aduanero Común, el Código Aduanero y el Reglamento de Aplicación. Como las CE ya han explicado al responder a la pregunta 78, los Estados miembros sólo pueden actuar para complementar el derecho comunitario si la cuestión no está prevista en la legislación comunitaria vigente, o si la legislación comunitaria les autoriza a hacerlo.[3]

En el ámbito de las aduanas, quedan por tanto sólo pocas esferas en las que los Estados miembros puedan legislar. La legislación de los Estados miembros regula en particular asuntos de organización, como el establecimiento y la designación de las autoridades de los Estados miembros competentes para la aplicación de la legislación aduanera. El derecho de los Estados miembros también determina las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación aduanera comunitaria. Por último, el derecho de los Estados miembros puede ser pertinente en el caso en que el derecho

[1] Por "promulgación" entendemos la promulgación de leyes y reglamentos *además del* Código Aduanero Comunitario, el Reglamento de Aplicación y el TARIC *y/o que complementen* esos instrumentos.

[2] Suponiendo, a efectos de argumentación, que esos controles puedan clasificarse dentro de los procedimientos aduaneros a efectos de la presente diferencia.

[3] Respuesta de las CE a la pregunta 78 del Grupo Especial, párrafo 145.

comunitario no prevea una cuestión concreta, por ejemplo, las normas relativas a la notificación de documentos. Otro ejemplo serían las prescripciones relativas a la conservación de los documentos, a cuyo respecto el apartado 1 del artículo 16 del CAC dispone que los documentos se conservarán durante un plazo de tres años como mínimo, pero da a los Estados miembros la posibilidad de estipular plazos más largos.[4]

Las CE ya han explicado que, al igual que en la mayoría de las demás esferas del derecho comunitario, la aplicación de la legislación aduanera comunitaria incumbe principalmente a los Estados miembros de las CE.[5] Las instituciones europeas, y en particular la Comisión Europea, aplican la legislación aduanera comunitaria sólo en un número reducido de casos. Ahora bien, la Comisión Europea, en su calidad de custodio del Tratado de la CE, supervisa la aplicación correcta de la legislación aduanera comunitaria.[6] El Comité del Código Aduanero brinda un foro específico que vela por la coordinación entre los Estados miembros y la Comisión.[7]

Estos principios generales son también de aplicación respecto de las esferas concretas mencionadas en la pregunta del Grupo Especial.[8] La aplicación de las reglas de clasificación arancelaria incumbe en principio a los Estados miembros. No obstante, la Comisión de las CE dispone de una serie de instrumentos[9] para asegurar una aplicación uniforme, como reglamentos de clasificación y notas explicativas, y, además, decisiones que prescriben la revocación de IAV. La Comisión también está encargada de administrar la base de datos EBTI. Asimismo, el Comité del Código Aduanero podrá examinar cualquier cuestión de clasificación arancelaria, y adoptar conclusiones al respecto.

En cuanto a la valoración en aduana, la aplicación de las reglas de valoración es igualmente incumbencia de las autoridades de los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión Europea vigila la aplicación correcta de las reglas de valoración en aduana, y el Comité del Código Aduanero también podrá adoptar directrices y conclusiones sobre cuestiones de valoración en aduana siempre que proceda.[10]

La realización de controles aduaneros y la aplicación de las disposiciones que establecen sanciones también son de la incumbencia de las autoridades de los Estados miembros. En cuanto a los controles, las CE señalan, no obstante, que la Comisión Europea podrá también, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Nº 1150/2000 (CE - Prueba documental 45), exigir a los Estados miembros que efectúen inspecciones, a las que asociarán a la Comisión, cuando ésta lo solicite, o realizar ella misma medidas de inspección.

---

[4] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 426.

[5] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 78 y 79.

[6] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 79. En cuanto a los instrumentos de que dispone la Comisión Europea a este respecto, las CE se remiten a la descripción contenida en su Primera comunicación escrita, parte III A y B.

[7] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 80 y siguientes.

[8] Véase Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 88 y siguientes.

[9] Las CE señalan que algunos de esos instrumentos, en especial los reglamentos de clasificación, son en sí mismos medidas de aplicación general, y no constituyen por lo tanto "aplicación".

[10] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 125 y siguientes.

Por último, en cuanto a la transformación bajo control aduanero y el procedimiento de domiciliación, la aplicación de esos procedimientos incumbe en principio a los Estados miembros. Por lo que se refiere a la aplicación de las condiciones económicas para la transformación bajo control aduanero, las CE ya han explicado, no obstante, que en determinados casos, el examen de esas condiciones se lleva a cabo a nivel de la Comunidad.[11]

147. Sírvanse explicar de forma práctica cómo se aplica el artículo 10 del Tratado Constitutivo de la Comunidad, y por quiénes, en las siguientes esferas de la administración de aduanas:

a) clasificación arancelaria;

b) valoración en aduana; y

c) procedimientos aduaneros (en particular, los controles posteriores al despacho a libre práctica[12], las sanciones por infracción de la legislación aduanera de las CE, la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación).

Sírvanse facilitar datos de la aplicación del artículo 10 del Tratado Constitutivo de la Comunidad en las esferas antes mencionadas de la administración de aduanas, como fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los que se haya invocado el artículo 10 del Tratado.

Como las CE han explicado, el deber de cooperación establecido en el artículo 10 del Tratado de la CE es jurídicamente vinculante y directamente aplicable en todos los Estados miembros. En consecuencia, las autoridades de los Estados miembros deben respetarlo al aplicar la legislación aduanera de la Comunidad.

El deber de cooperación inspira la interpretación del derecho comunitario por los Tribunales de las CE, y podrá invocarse en diferencias ante tribunales de los Estados miembros. Si se suscita una cuestión relativa a la aplicación del derecho comunitario, incluido el deber de cooperación, se puede -o, en el caso de un tribunal de última instancia, se debe- remitir al Tribunal de Justicia. Por último, cuando un Estado miembro infringe el deber de cooperación, ello constituye un incumplimiento del Tratado de la CE, contra el que la Comisión Europea puede interponer procedimientos por incumplimiento en virtud del artículo **226** del Tratado de la CE.

En la esfera de la clasificación, el TJCE se basó en el artículo 10 en dos asuntos recientes después de sendas remisiones para una decisión prejudicial. En *Commissioners of Customs & Excise contra SmithKline Beecham*[13], el artículo 10 constituyó la justificación central de la decisión del TJCE de que un órgano jurisdiccional nacional del Reino Unido estaba obligado a eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del derecho comunitario. En ese asunto, la autoridad aduanera había clasificado parches de nicotina. En el fallo del recurso, la High Court of Justice de Inglaterra y Gales, Chancery Division, discrepó de la clasificación y remitió la cuestión al Tribunal Europeo de Justicia. Al examinar los principios de derecho y las características fácticas del producto, el TJCE convino en que el producto había sido clasificado incorrectamente. Habida cuenta de esa clasificación

[11] Véase Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 137 y 138.

[12] Suponiendo, a efectos de argumentación, que esos controles puedan clasificarse dentro de los procedimientos aduaneros a efectos de la presente diferencia.

[13] Asunto C-206/03, *SmithKline Beecham*, Auto del Tribunal de 19 de enero de 2005 (aún no se ha incluido en la Recopilación) (CE - Prueba documental 142).

incorrecta, el Tribunal constató que el órgano jurisdiccional nacional estaba obligado a subsanar una incompatibilidad con el derecho comunitario. En particular, constató[14]:

> Ha de señalarse que, según reiterada jurisprudencia, en virtud del principio de cooperación leal previsto en el artículo 10 CE, los Estados miembros están obligados a eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del derecho comunitario. Dicha obligación incumbe a cada órgano del Estado miembro de que se trate en el marco de sus competencias. Consiguientemente, corresponde a las autoridades competentes y a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adoptar, en el marco de sus competencias, todas las medidas necesarias, generales o particulares, con el fin de subsanar la incompatibilidad de una información arancelaria vinculante incorrecta. En concreto, la anulación de la información arancelaria vinculante incorrecta y la adopción de una nueva información compatible con el derecho comunitario constituyen tales medidas particulares.

Kühne & Heitz contra Productschap voor Pluimvee en Eieren[15] supuso un asunto en que el que se había exigido a un comerciante que devolviera determinadas restituciones a la exportación a consecuencia de una determinación del tribunal nacional de que su producto no quedaba comprendido en las mercancías sujetas a restitución. Posteriormente, el Tribunal Europeo de Justicia adoptó una decisión prejudicial contraria sobre la misma cuestión. A raíz de esa decisión, el comerciante trató de obtener una suma equivalente a la cuantía de las restituciones que habría obtenido si su producto hubiera sido clasificado de conformidad con la sentencia del TJCE. El tribunal neerlandés solicitó una decisión prejudicial acerca de la cuestión de si, a la luz del concepto de seguridad jurídica, el tribunal estaba efectivamente obligado a reexaminar el asunto. Al responder a la cuestión prejudicial, el TJCE afirmó que, habida cuenta de las circunstancias del asunto concreto, el principio de cooperación derivado del artículo 10 CE obligaba al órgano administrativo de que se tratara a "examinar de nuevo dicha resolución para tomar en consideración la interpretación de la disposición pertinente del derecho comunitario efectuada entre tanto por el Tribunal de Justicia."[16]

El artículo 10 CE también ha servido de base para la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre sanciones por incumplimiento del derecho comunitario, incluida la legislación aduanera.[17] El asunto *José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixoes*[18] se ocupó de las sanciones portuguesas por la omisión de despachar mercancías en aduana en el plazo reglamentario. En ese asunto, el Sr. de Andrade entabló una demanda ante el Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto alegando entre otras cosas que el derecho portugués, que preveía la puesta a la venta de las mercancías o la percepción de un recargo *ad valorem* por incumplimiento de los procedimientos de despacho de aduana en el plazo reglamentario, violaba el concepto de proporcionalidad. Para justificar su decisión de que las disposiciones sobre la puesta a la venta o la imposición de sanciones

[14] Íd., párrafos 51 y 52 (se han omitido las citas).

[15] Asunto C-453/00, *Kühne & Heitz*, [2004] Recopilación de Jurisprudencia I-837 (CE - Prueba documental 61).

[16] Íd., párrafo 27.

[17] Véase Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 144 y siguientes. Se entiende que esta jurisprudencia concierne a medidas legislativas de los Estados miembros.

[18] Asunto C-213/99, *de Andrade*, [2000] Recopilación de Jurisprudencia I-11083 (Estados Unidos - Prueba documental 31).

ad valorem no violaban ese principio, el Tribunal señaló que la legislación comunitaria obligaba a las autoridades aduaneras a adoptar cualquier medida necesaria, incluso la venta, para solventar la situación de las mercancías. Teniendo eso presente, el Tribunal declaró:

> Conforme a reiterada jurisprudencia, recordada en el apartado 20 de la sentencia en el Asunto C-36/94 Siesse contra Director da Alfândega de Alcântara [1995] Recopilación de Jurisprudencia I-3573, cuando una normativa comunitaria no prevé sanciones específicas en caso de infracción de sus disposiciones o se remite, en este punto, a las disposiciones nacionales, el artículo 5 del Tratado CE (actualmente artículo 10 CE) obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia del derecho comunitario. Con este fin, los Estados miembros, aunque conservan una facultad discrecional en cuanto a la elección de las sanciones, deben velar por que las infracciones de la normativa comunitaria sean sancionadas en condiciones de fondo y de procedimiento análogas a las aplicables a las infracciones del derecho nacional de naturaleza e importancia similares y que, en todo caso, confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasivo. En lo que respecta a las infracciones aduaneras, el Tribunal de Justicia ha precisado que, en caso de no existir una armonización de la legislación comunitaria en este ámbito, los Estados miembros son competentes para establecer las sanciones que les parezcan adecuadas. Sin embargo, están obligados a ejercer esta competencia respetando el derecho comunitario y sus principios generales y, por consiguiente, respetando el principio de proporcionalidad (*véase* la sentencia Siesse, antes citada, apartado 21).[19]

En varios asuntos más se abordan de igual forma las sanciones a la luz del artículo 10. Entre esos asuntos figuran *Hannle + Hofstetter Internationale Spedition GmbH contra Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland*[20] y *Siesse contra Director da Alfândega de Alcântara*.[21]

En *Comisión contra Grecia*[22], dos cargamentos de maíz exportados de Grecia a Bélgica en mayo de 1986 en realidad estaban constituidos por maíz importado de Yugoslavia, cuando oficialmente habían sido declarados por las autoridades helénicas como maíz griego. Debido a este hecho, no se percibió la exacción reguladora agraria destinada a aprovisionar los recursos propios de la Comunidad. Según la Comisión, esta defraudación se cometió mediante la complicidad de algunos funcionarios griegos. La Comisión inició un procedimiento por incumplimiento, aduciendo entre otras cosas que, en virtud del artículo 5 (ahora 10) CE, Grecia estaba obligada a incoar

[19] Íd., párrafos 19 y 20.

[20] Asunto C-91/02, *Hannle + Hofstetter*, Sentencia de 16 de octubre de 2003 (aún no incluida en la Recopilación) (CE - Prueba documental 143).

[21] Asunto C-36/94, *Siesse*, [1995] Recopilación de Jurisprudencia I-3573, párrafo 20 (CE - Prueba documental 40).

[22] Asunto 68/88, *Comisión contra Grecia*, 1989 [Recopilación de Jurisprudencia] 2965 (CE - Prueba documental 38).

procedimientos contra los autores de la defraudación y los que colaboraron en su realización y encubrimiento. El Tribunal acogió los motivos de recurso de la Comisión[23]:

> A este respecto, es conveniente destacar que, cuando una normativa comunitaria no contenga disposición específica alguna que prevea una sanción en caso de infracción o cuando remita en este aspecto a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, el artículo 5 del Tratado exige de los Estados miembros la adopción de todas las medidas apropiadas para asegurar el alcance y la eficacia del derecho comunitario.
>
> Para ello, aun conservando la elección de las sanciones, los Estados miembros deben procurar, en particular, que las infracciones del derecho comunitario sean sancionadas en condiciones análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones del derecho nacional cuando tengan una índole y una importancia similares y que, en todo caso, confieran un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio a la sanción.
>
> Además, en relación con las infracciones del derecho comunitario, las autoridades nacionales deben proceder con la misma diligencia que utilizan para la aplicación de las respectivas legislaciones nacionales.

Esta reseña de jurisprudencia tomada del ámbito del derecho aduanero[24] demuestra que el artículo 10 es plenamente vigente y puede ser aplicado por el TJCE y los tribunales nacionales. Como ya han explicado las CE, el hecho de que no haya cientos de causas judiciales relacionadas con el artículo 10 del Tratado de la CE en el ámbito de las aduanas no significa que no se imponga el cumplimiento del deber de cooperación, sino que por lo general es respetado.[25]

148. En su respuesta a la pregunta 58 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas afirman que en el Reglamento Nº del Comité del Código Aduanero no hay ninguna disposición concreta que atribuya a la Comisión la facultad de pedir a los Estados miembros que faciliten información específica. Las Comunidades Europeas aducen que, a pesar de ello, los Estados miembros están vinculados por el deber de cooperación en virtud del artículo 10 del Tratado, lo que implica el deber de facilitar las funciones de vigilancia de la aplicación del Tratado de la Comisión, incluido el deber de facilitar toda la información que resulte necesaria a la Comisión para determinar si los Estados miembros han aplicado correctamente el derecho comunitario. Sírvanse facilitar datos de casos en los que se haya invocado el artículo 10 del Tratado Constitutivo de la Comunidad para recabar de los Estados miembros información en la esfera de la administración de aduanas.

[23] Íd., párrafos 23 y 24.

[24] De conformidad con la pregunta del Grupo Especial, los ejemplos citados en la presente pregunta se ciñen al ámbito del derecho aduanero. Fuera de ese ámbito, existen muchos más casos en los que el TJCE ha aplicado el artículo 10 CE.

[25] Segunda declaración oral de las CE, párrafo 51.

Como las CE ya han explicado en su respuesta a la pregunta 58, los Estados miembros tienen el deber de facilitar las tareas de la Comisión como custodio del Tratado, lo que comprende también la entrega de toda la información que pueda solicitar la Comisión.[26]

No obstante, como han explicado las CE[27], no existe ningún problema de transmisión de la información por las autoridades aduaneras de los Estados miembros a la Comisión. Cuando se aborda un asunto en el Comité del Código Aduanero, suelen ser los Estados miembros por propia iniciativa los que plantean la cuestión y los que suministrarán información. Por supuesto, la Comisión también solicita a menudo información a las autoridades aduaneras de los Estados miembros, bilateralmente o por conducto del Comité del Código Aduanero. Las autoridades de los Estados miembros proporcionan esa información automáticamente. Como hasta ahora nunca se ha dejado de suministrar la información cuando se ha solicitado, la Comisión Europea no ha tenido motivo para invocar específicamente el artículo 10 del Tratado de la CE a este respecto.

149. En su respuesta a la pregunta 79 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas manifiestan que en determinadas situaciones pueden existir obligaciones de consulta mutua entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Sírvanse facilitar detalles de todas las obligaciones de esa naturaleza y de las circunstancias en que son aplicables en las siguientes esferas de la administración de aduanas:

a) clasificación arancelaria;

b) valoración en aduana; y

c) procedimientos aduaneros (en particular, los controles posteriores al despacho a libre práctica[28], las sanciones por infracción de la legislación aduanera de las CE, la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación).

Al responder a esta pregunta, se asume que la frase "obligaciones de consulta mutua entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros" abarca también prácticas como el suministro o el intercambio de información, así como consultas a efectos de acuerdo previo en relación con la expedición de autorizaciones.

Las CE desean recordar que, al más alto nivel del derecho comunitario[29], existe un deber de cooperación entre los Estados miembros de las CE. Más concretamente, la consulta mutua entre Estados miembros puede emanar también de determinadas disposiciones del derecho aduanero comunitario. En la respuesta de las CE a la pregunta 79 del Grupo Especial ya se han presentado cinco ejemplos de ese tipo.

En cuanto a la clasificación arancelaria, las CE se remiten a sus respuestas a las preguntas 55 y 56 del Grupo Especial, en las que explican el deber de cooperación de los Estados miembros en el contexto de la expedición de IAV.

---

[26] Respuesta de las CE a la pregunta 58 del Grupo Especial, párrafo 79.

[27] Respuesta de las CE a la pregunta 58 del Grupo Especial, párrafo 80.

[28] Suponiendo, a efectos de argumentación, que esos controles puedan clasificarse dentro de los procedimientos aduaneros a efectos de la presente diferencia.

[29] Los Estados miembros está vinculados por el deber de cooperación (artículo 10 CE), que implica la obligación de seguir contribuyendo a la aplicación uniforme del derecho comunitario.

En la esfera de valoración, en determinadas situaciones la valoración declarada y aceptada en un Estado miembro se ha de comunicar a todos y cada uno de los demás Estados miembros que intervienen en las transacciones. Esto se aplica en algunos casos de mercancías almacenadas en régimen de depósito en aduana, de perfeccionamiento activo o de perfeccionamiento pasivo, o de mercancías importadas para su transformación dentro de las CE. Igualmente, se ha de notificar a otras administraciones el valor en aduana de las mercancías importadas en régimen de importación temporal o destino especial.[30] Existe también una guía de mejores prácticas que se ocupa del intercambio de información (es decir, consulta) entre los Estados miembros en relación con asesoramiento en materia de valoración, decisiones y auditoría (CE - Prueba documental 144).

En cuanto a los controles de importación posteriores al despacho aduanero, la obligación de consultar a otros Estados miembros depende de la cuestión específica de que se trate, porque esos controles posteriores al despacho pueden suscitar interrogantes acerca de cualquier cuestión o aspecto de la normativa o los controles aduaneros.

Por lo que se refiere al procedimiento de domiciliación y a la transformación bajo control aduanero, si en ese procedimiento interviene más de un Estado miembro se practica el intercambio de información. Además, el artículo 250 del Código Aduanero dispone que cuando se utilice un régimen aduanero en varios Estados miembros, las decisiones, las medidas de identificación adoptadas o aceptadas y los documentos expedidos por un Estado miembro tendrán, en los demás Estados miembros, efectos jurídicos idénticos a los que resulten de dichas decisiones, medidas y documentos expedidos por cada uno de dichos Estados miembros. Habiendo previsto los efectos jurídicos en los demás Estados miembros de las medidas adoptadas o aceptadas, las constataciones efectuadas, etc., por un Estado miembro, esta disposición viene a propósito para ilustrar nuevamente que la consulta mutua entre los Estados miembros puede producirse en el contexto de muchos aspectos de la gestión aduanera.

Por último, el Reglamento Nº 515/97 (CE - Prueba documental 42)[31] brinda un marco general de cooperación y asistencia mutuas entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros. En virtud de ese Reglamento, los Estados miembros tienen el derecho general de pedir información pertinente a otros Estados miembros, acerca de personas o transacciones que supongan la importación de mercancías. Los Estados miembros también tienen la obligación de prestar asistencia (incluso de comunicar toda la información en su poder) cuando lo consideren útil para asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o cuando se plantean infracciones (reales o potenciales) de esa legislación. Naturalmente, esas obligaciones generales pueden abarcar todas las esferas de la labor aduanera.

150. Sírvanse explicar qué es el sistema de información aduanero (establecido en virtud del Reglamento Nº (CE) Nº 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria (CE - Prueba documental 42)) y cómo funciona en la práctica.

Las autoridades aduaneras pueden verse en situaciones que exijan la adopción inmediata de medidas en otro Estado miembro de las CE. Por eso, las autoridades nacionales tienen que disponer de un mecanismo de comunicación y cooperación ya existente. El sistema de información aduanero (SIA) se ha implantado con objeto de crear un interfaz de comunicación rápida de esa índole.

[30] Artículos 296 y 523, respectivamente, del Reglamento de Aplicación.

[31] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 150 y siguientes.

El SIA consta de dos bases de datos: 1) el "*primer pilar del SIA*", que se ocupa de las infracciones del derecho comunitario en asuntos aduaneros y agrarios, y 2) el "*tercer pilar del SIA*", que aborda las contravenciones graves relacionadas con cuestiones aduaneras (derecho penal).

En cada base de datos, las principales categorías de la información recopilada se refieren a:

- productos básicos
- medios de transporte
- empresas
- personas
- tendencias de la defraudación
- conocimientos periciales disponibles
- partidas retenidas, incautadas, decomisadas.

Se dispone de dos motores de búsqueda para consultar la base de datos:

- la herramienta normal de búsqueda permite el acceso a todos los datos relacionados con un caso concreto;

- una herramienta de búsqueda simplificada (Border Query Tool - herramienta de consulta fronteriza) facilita el acceso rápido, con arreglo a criterios predeterminados, a elementos valiosos a efectos de control.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) gestiona el SIA. En la práctica, la información antes citada se distribuye por conducto de los terminales del AFIS (sistema de información antifraude) en los Estados miembros y el acceso directo a los datos está reservado exclusivamente a las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro, por ejemplo, las administraciones de aduanas. Una vez que la autoridad competente de cada Estado miembro la ha verificado, la información almacenada en la base de datos es enviada a la Comisión a efectos de almacenaje.

151. ¿Cómo definen las Comunidades Europeas el término "uniforme" del párrafo 3 a) del artículo X?

Las CE están de acuerdo con la definición a que se refirió el Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*, según la cual "uniforme" se puede definir como "de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas".[32]

Las CE recordarían, no obstante, que no cabe evaluar si la "aplicación" puede considerarse uniforme basándose en casos sueltos de aplicación, sino que es preciso demostrar una pauta de aplicación no uniforme.[33] Además, deben utilizarse criterios idénticos a la obligación de uniformidad en el tiempo, en el territorio o entre personas.[34]

152. En su respuesta a la pregunta 110 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas afirman que la concesión de facultades discrecionales en una determinada disposición legislativa puede ser necesaria cuando han de tenerse en cuenta aspectos fácticos complejos o es preciso sopesar y equilibrar intereses en conflicto. Las Comunidades Europeas añaden que, por lo

[32] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.80.

[33] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 63 y siguientes.

[34] Véase Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.83.

general, el ejercicio de esas facultades discrecionales estará limitado por ley y se regirá por determinados principios, como el principio de no discriminación.

a) Sírvanse explicar el fundamento jurídico de la aplicación del principio de "no discriminación" en el contexto de la aplicación de disposiciones discrecionales en la esfera de la administración de aduanas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros.

La referencia general principal al principio de no discriminación en el Tratado de la CE figura en el artículo 12 que prohíbe la discriminación por razón de la nacionalidad. Ahora bien, el Tribunal de Justicia lo ha declarado principio fundamental de derecho, por el que las situaciones comparables no deben recibir un trato diferente y las situaciones diferentes no deben recibir el mismo trato, a no ser que éste se justifique objetivamente.[35]

b) ¿Qué principios distintos del de "no discriminación" son aplicables en el contexto de la aplicación de disposiciones discrecionales en la esfera de la administración de aduanas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros?

En términos generales, el derecho aduanero comunitario es sumamente detallado, lo que no deja mucho margen de discreción a las autoridades aduaneras de los Estados miembros. En la medida en que existe esa discreción, los principios generales del derecho que las autoridades de los Estados miembros aplicarán con mayor probabilidad en la administración de aduanas son los de proporcionalidad, protección de la confianza legítima, y eficacia.

El principio de proporcionalidad exige que las medidas adoptadas no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa en cuestión y que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa.[36]

El principio de protección de la confianza legítima, que va unido a los principios de buena fe y seguridad jurídica, se hace extensivo a cualquier persona que se encuentre en una situación en la que sea evidente que la administración le ha hecho albergar esperanzas fundadas al darle garantías concretas.[37]

El principio de eficacia prohíbe a los Estados miembros adoptar medidas que menoscaben la aplicación del derecho comunitario y les obliga a aplicar adecuadamente el derecho comunitario en los asuntos que se les planteen (véase, *supra*, *Commissioners of Customs & Excise contra SmithKline Beecham*, párrafo 53).[38]

---

[35] Véanse, entre otros, Asunto C-150/94, *Reino Unido/Consejo*, [1998] Recopilación de Jurisprudencia I-7235, párrafos 97 a 101 (CE - Prueba documental 145), y Asunto T-13/99, *Pfizer Animal Health*, [2002] Recopilación de Jurisprudencia II-3305, párrafos 271 y 272 (CE - Prueba documental 146).

[36] Véase, entre otros, *Pfizer Animal Health*, citado en la nota anterior, párrafos 411 y 412, y Asunto C-192/01, *Comisión/Dinamarca*, [2003] Recopilación de Jurisprudencia I-9693, párrafo 45 (CE - Prueba documental 147).

[37] Véase, entre otros, Asunto T-65/98, *Van den Bergh Foods Ltd*, [2003], aún no incluido en la Recopilación, párrafo 192 (CE - Prueba documental 148).

[38] Párrafo 10 *supra*.

153. En su respuesta a la pregunta 94 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas manifiestan que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 se ocupa fundamentalmente de los *resultados* administrativos que afectan a los comerciantes. ¿Puede conciliarse esta declaración con la afirmación que hacen las Comunidades Europeas en sus respuestas a las preguntas 47 y 49 del Grupo Especial de que no es posible impugnar al amparo del párrafo 3 a) del artículo X decisiones *individuales*, como tales? En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo.

Las dos declaraciones son perfectamente compatibles. En su respuesta a la pregunta 9 del Grupo Especial, las CE pretendían aclarar que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no concierne a leyes, reglamentos y procedimientos en cuanto tales, sino tan solo a su aplicación. En respuesta a las preguntas 47 y 49 del Grupo Especial, las CE aclararon que únicamente puede evaluarse si la aplicación es acorde con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT a tenor de una pauta de aplicación, y no sobre la base de casos individuales de aplicación.

154. En su respuesta a la pregunta 90 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas aducen que, esencialmente, el Grupo Especial que examinó el asunto *Argentina - Pieles y cueros* declaró que cuando una ley o un reglamento determinado impone un comportamiento administrativo que, entre otras cosas, no es uniforme, la propia ley constituye una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. ¿Significa este razonamiento que, en el contexto del presente asunto, habrá una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 si puede entenderse que la legislación de las CE sobre administración de aduanas impone, esencialmente, una aplicación no uniforme? En caso contrario, sírvanse explicar cuál es, en su caso, la pertinencia de las observaciones antes mencionadas del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros* al presente asunto.

El párrafo 3 a) del artículo X del GATT se ocupa de la aplicación de leyes y reglamentos, no de esas leyes y reglamentos como tales. No obstante, las CE están de acuerdo en que si una ley o un reglamento "impone" una forma de administración que no es uniforme, razonable, o imparcial, esa ley o reglamento podría considerarse en sí mismo una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Una ley o reglamento será obligatorio en ese sentido si no ofrece a las autoridades la posibilidad de aplicar las leyes o reglamentos en cuestión de manera uniforme, imparcial o razonable.[39]

En las CE, ninguna ley impone la aplicación no uniforme del derecho aduanero comunitario. Al contrario, la legislación comunitaria garantiza su aplicación uniforme. La carga de la prueba de establecer lo contrario recae en los Estados Unidos. Acerca de la cuestión de si el sistema de administración aduanera de las CE puede considerarse "como tal" para determinar si se ha violado el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, las CE se remiten a su respuesta a la pregunta 173 del Grupo Especial.

155. En el párrafo 432 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas afirman que las leyes que establecen sanciones se regulan por normas fundamentales de un procedimiento con las debidas garantías a las que se adaptan mal las disciplinas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. ¿Puede armonizarse este argumento con la afirmación que hacen las Comunidades Europeas en el párrafo 231 de su Primera comunicación escrita en el sentido de que ese párrafo sólo establece normas mínimas de transparencia y equidad procesal? En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo.

Las CE creen que las dos declaraciones son perfectamente compatibles. La primera se refiere al ámbito del párrafo 1 del artículo X del GATT, mientras que la segunda concierne a la interpretación de las prescripciones sustantivas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. El hecho de que el

[39] Así ocurrió en *Argentina - Pieles y cueros*; véase Segunda declaración oral de las CE, párrafo 30.

párrafo 3 a) del artículo X del GATT contenga normas mínimas de transparencia y equidad procesal no significa que esa disposición tenga que aplicarse a las sanciones. Ello depende de que las disposiciones que establecen sanciones figuren entre las leyes mencionadas en el párrafo 1 del artículo X del GATT, lo cual, como han demostrado las CE, no es el caso.[40]

Además, las CE sostienen que los criterios de fondo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT se adaptan mal a la aplicación de sanciones, lo que es particularmente obvio respecto de la cuestión de uniformidad. Las sanciones, y en particular las sanciones penales, suponen una evaluación de la culpabilidad y el comportamiento de una persona, e incluyen pronósticos sobre la rehabilitación y la reinserción. Otra consideración importante es la proporcionalidad. Esas consideraciones son totalmente diferentes de las relativas a la aplicación uniforme de leyes sobre clasificación o valoración de mercancías.

Así lo confirma también el hecho de que las sanciones se abordan específicamente en el párrafo 3 del artículo VIII del GATT, que impone ciertos criterios de proporcionalidad respecto de la imposición de sanciones. Si se pretendía que el párrafo 1 del artículo X del GATT fuera aplicable a las sanciones, habría sido natural incluir una referencia específica a ellas en esa disposición.

156. En su respuesta a la pregunta 48 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas sostienen que la obligación de aplicación uniforme establecida por el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 implica que el comerciante debe tener un "grado razonable de seguridad" en cuanto a la forma en que el Miembro de la OMC de que se trate aplicará sus leyes y reglamentos. Sírvanse explicar en forma práctica lo que quiere decirse con la referencia a un "grado razonable de seguridad".

Grado razonable de seguridad significa que el trato que un comerciante puede esperar de las autoridades de ese Miembro debe ser razonablemente previsible. Esto es acorde con los requisitos del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*, en que el Grupo Especial declaró que la uniformidad de aplicación requiere que los Miembros se aseguren de que sus leyes se apliquen de forma coherente y previsible.[41] Como ya han observado las CE, si el trato que cabe esperar de las autoridades aduaneras es previsible en este sentido debe evaluarse no sobre la base de casos sueltos de aplicación, sino teniendo en cuenta la pauta global de aplicación.

157. En su respuesta a la pregunta 78 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas manifiestan que un Estado miembro sólo puede actuar para complementar las disposiciones contenidas en un reglamento comunitario si está expresamente autorizado a hacerlo o si una cuestión concreta no está abarcada por la legislación comunitaria. ¿Significa ello que los Estados miembros no pueden adoptar ninguna medida -vinculante o no vinculante- en caso de que un reglamento comunitario no autorice expresamente al Estado miembro a hacerlo o cuando una cuestión concreta está abarcada por la legislación comunitaria? En caso contrario, sírvanse explicar qué medidas están autorizados a adoptar los Estados miembros.

En cuanto a la legislación vinculante, las CE pueden confirmar que los Estados miembros sólo pueden actuar para complementar un reglamento comunitario si están autorizados a hacerlo[42] o si una cuestión concreta no está prevista en la legislación comunitaria.

---

[40] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 190 y siguientes; Segunda declaración oral, párrafo 66 y siguientes.

[41] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.83.

[42] Las CE aclararían que la autorización no tiene que ser forzosamente "expresa"; basta que emane del texto de la legislación comunitaria.

Por lo que se refiere a medidas no vinculantes, no se impide que las autoridades de los Estados miembros emitan directrices administrativas y otros documentos no vinculantes a efectos administrativos. No obstante, como ya han explicado las CE, esas medidas no pueden menoscabar en modo alguno la aplicación del derecho comunitario por las autoridades aduaneras y los tribunales.[43]

158. En el párrafo 68 de su Segunda comunicación escrita, las Comunidades Europeas manifiestan que tienen dudas de que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 exija el establecimiento de un organismo central de aduanas, porque ello no podría considerarse una "medida razonable" en el sentido del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994. ¿Significa esto que las Comunidades Europeas consideran que uno de los efectos del párrafo 12 del artículo XXIV, en conexión con el párrafo 3 a) del artículo X, es que los Miembros sólo están obligados a adoptar "medidas razonables" para cumplir las obligaciones que les impone la última de estas disposiciones? De ser así, sírvanse explicar en qué se basa esa opinión, con referencia al texto del párrafo 3 a) del artículo X y del párrafo 12 del artículo XXIV, respectivamente.

Como el Grupo Especial explicó en el asunto *Canadá - Monedas de oro*, la finalidad del párrafo 12 del artículo XXIV es "estipular una reserva a la obligación básica de garantizar la observancia del Acuerdo General por las autoridades y gobiernos regionales y locales, en el caso de las partes contratantes que tuvieran una estructura federal".[44] Como el Grupo Especial asimismo explicó, el párrafo 12 del artículo XXIV no limita la aplicabilidad de las disposiciones del Acuerdo General, sino que "limita simplemente la obligación de los Estados federales de lograr su aplicación" en el marco de su ordenamiento jurídico interno.[45]

Así pues, está claro que un Miembro de la OMC que tenga una estructura federal, si bien está plenamente vinculado por las obligaciones en el marco del acuerdo abarcado, está obligado a adoptar "medidas razonables" para asegurar su aplicación por las entidades subfederales. Medidas "razonables" no puede significar cualquier medida. Esa interpretación, como lo proponen los Estados Unidos[46], no daría ningún sentido útil al párrafo 12 del artículo XXIV del GATT.

Para poder determinar qué es una "medida razonable", el Grupo Especial en *Canadá - Monedas de oro* declaró que "deben sopesarse las consecuencias de [la] inobservancia [*de las disposiciones del GATT*] por el gobierno local para las relaciones comerciales con otras partes contratantes, y las dificultades internas que habría que afrontar para lograr su observancia".[47] Ese también es el criterio que habría que aplicar en el presente caso.

Las CE han observado que están plenamente comprometidas a asegurar la aplicación uniforme del derecho aduanero en todo el territorio de las CE, y han implantado las medidas necesarias para ese fin. He ahí el motivo de que las CE no hayan invocado el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT como defensa principal en el presente caso.

Sin embargo, las alegaciones de los Estados Unidos trascienden considerablemente de lo que es necesario para asegurar la aplicación uniforme del derecho aduanero por las autoridades de los Estados

[43] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 344; Respuesta de las CE a la pregunta 78 del Grupo Especial, párrafo 146.

[44] Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafo 53.

[45] Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafo 64.

[46] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 13 a 15.

[47] Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafo 69.

miembros de las CE; más bien, tienen por objetivo privar a los Estados miembros de las CE de su competencia para aplicar el derecho aduanero comunitario al exigir la creación de un organismo aduanero comunitario, y un tribunal aduanero comunitario, y la armonización de la legislación de los Estados miembros, especialmente en la esfera de las sanciones. Ello supondría un cambio radical en el equilibrio federal en el seno de las CE. Las CE no creen que esto se pueda describir como una "medida razonable" en el sentido del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT.

Sirven también para ilustrar este aspecto las conclusiones del Grupo Especial en *Canadá - Monedas de oro*, en las que el Grupo Especial no adoptó una posición acerca de si la remisión de la medida adoptada por la Provincia de Ontario al Tribunal Supremo del Canadá podía considerarse como una "medida razonable" en el contexto del ordenamiento jurídico canadiense.[48] Las CE sostienen por lo tanto que la creación de un organismo aduanero, un tribunal aduanero, o la armonización del derecho de los Estados miembros, no se podrían considerar "medidas razonables" en el sentido del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT.

159. Con respecto al Comité del Código Aduanero:

a) ¿Hay límites para el tiempo durante el que una cuestión puede seguir pendiente de resolución en el orden del día del Comité del Código Aduanero? De ser así, sírvanse indicar concretamente las disposiciones que imponen esos límites.

No existen plazos específicos para el tiempo que un asunto puede seguir pendiente en el orden del día del Comité del Código Aduanero, ni de ningún otro comité análogo. No sería práctico prescribir tales plazos, ya que puede llevar más tiempo abordar algunas cuestiones que otras. Además, no está del todo claro como debería definirse "cuestión". La cuestión puede guardar relación con la adopción de una sola medida, pero también puede tratarse de una serie de medidas conexas, o de un debate normativo continuado. Igualmente, el hecho de que el Comité vuelva a examinar una cuestión concreta no significa que no haya sido resuelta, sino que puede ser reflejo del seguimiento y la revisión en curso. En general, todas las cuestiones que se presentan al Comité del Código Aduanero se tramitan de la forma más expeditiva posible, de conformidad con los requisitos de la buena práctica administrativa.

b) En su respuesta a la pregunta 58 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas sostienen que los dictámenes del Comité del Código Aduanero reflejan generalmente un enfoque común adoptado por todos los Estados miembros, que es observado normalmente por ellos. Sírvanse facilitar pruebas que apoyen esa afirmación.

Los dictámenes del Comité del Código Aduanero suelen reflejar un enfoque común de los Estados miembros porque son adoptados por consenso. No corresponde a las CE, sino a los Estados Unidos como demandante en el presente asunto, aportar pruebas que demuestren lo contrario. Ahora bien, el fallo del Tribunal Superior (High Court) del Reino Unido relativo a la clasificación de la consola Playstation2 de Sony presentado por los Estados Unidos en su Prueba documental 70, en el que el tribunal británico se remitió a los dictámenes unánimes del Comité de Nomenclatura en apoyo de sus constataciones, brinda un ejemplo interesante de la observancia de los dictámenes del Comité del Código Aduanero.

c) ¿Cuántos casos de divergencias en la información arancelaria vinculante se han sometido al Comité para conciliar esas divergencias? ¿Cómo se incluyeron esos casos en el orden del día del Comité? ¿Cuál fue el resultado en cada uno de ellos, con inclusión de las propuestas formuladas por el Comité y de las medidas

[48] Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafo 71.

adoptadas por la Comisión de las CE, en su caso? ¿Cuánto se tardó en resolverlos?

Desde el 1º de enero de 2000 hasta el día de hoy, se han sometido al Comité del Código Aduanero 196 casos concernientes a divergencias percibidas entre IAV.

De ellos, 178 fueron remitidos por las autoridades aduaneras de uno o más Estados miembros, mientras que 18 fueron presentados al Comité por la Comisión.

Tres de esos casos se resolvieron mediante sentencia del Tribunal de Justicia, 78 dieron pie a que la Comisión adoptara un reglamento de clasificación, 9 a la adopción de una nota explicativa de la NC, 3 a la adopción de una decisión de la Comisión sobre la invalidación de IAV, 43 casos dieron lugar a dictámenes del Comité y, en cuatro casos, la cuestión se sometió al comité del SA.

El plazo medio de tramitación hasta el dictamen ha sido de 13 meses. Este promedio incluye los plazos necesarios para la traducción de medidas jurídicas y la adopción interna de decisiones por la Comisión Europea.

d) En el párrafo 266 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas sostienen que es incorrecto referirse al Comité del Código Aduanero como una institución de las Comunidades Europeas. ¿Cómo afecta o debe afectar esta caracterización del Comité del Código Aduanero al examen por el Grupo Especial de las instituciones, instrumentos y mecanismos que existen en las Comunidades Europeas para cumplir los requisitos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994?

La observación de las CE era una corrección de la caracterización incorrecta del Comité del Código Aduanero en la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos.[49]

Con arreglo al derecho comunitario, las instituciones de la Comunidad son únicamente las enumeradas en el párrafo 1 del artículo 7 del Tratado de la CE, a saber, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.[50] El Comité del Código Aduanero es un comité establecido por el Código Aduanero con objeto de asistir a la Comisión en el ejercicio de determinadas atribuciones delegadas en ésta por el Consejo, de conformidad con el artículo 202 del Tratado CE y la decisión sobre comitología.[51] Además, y con independencia de la adopción de medidas en el marco del procedimiento de comitología, el Comité del Código Aduanero también tiene competencias, en virtud del artículo 249 del CAC y el artículo 8 del Reglamento Nº 2658/87, para examinar cualquier cuestión relativa a la reglamentación aduanera, y hace así las veces de foro de coordinación e información mutua entre los Estados miembros y la Comisión.

Las CE señalan que, en respuesta a una pregunta formulada durante la segunda reunión sustantiva con el Grupo Especial (que es ahora la pregunta 134), los Estados Unidos confirmaron que no impugnaban la manera en que funciona el Comité del Código Aduanero. En esa medida, las CE no están seguras de cómo afectará la caracterización del Comité del Código Aduanero al análisis del Grupo Especial. No obstante, las CE creen que es importante entender correctamente el papel y las funciones

[49] Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 29.

[50] Véase Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 19.

[51] Véase Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 24 y siguientes y Estados Unidos - Prueba documental 10.

del Comité del Código Aduanero para comprender globalmente el sistema de administración aduanera de las CE.

160. En los casos en los que se adviertan divergencias entre los Estados miembros con respecto a la aplicación de las leyes aduaneras de las CE (con inclusión, entre otros, de los casos en que haya información arancelaria vinculante divergente), ¿tiene facultades la Comisión de las CE para no recurrir al Comité del Código Aduanero con el fin de resolver esas divergencias? De ser así, sírvanse explicar las circunstancias en la que ello es posible y la frecuencia con la que la Comisión adopta medidas con independencia del Comité del Código Aduanero en casos de divergencia.

Es obligatorio consultar al Comité del Código Aduanero siempre que la legislación comunitaria pertinente así lo prescriba, es decir, siempre que la Comisión actúe en ejercicio de las atribuciones que haya delegado en ella el Consejo. Las medidas que exigen que se consulte al Comité son, por ejemplo, las modificaciones del reglamento de aplicación, la adopción de reglamentos de clasificación o notas explicativas, o de decisiones que prescriban la revocación de IAV.[52] En esos casos, la consulta es un elemento necesario del procedimiento que conduce a la adopción del acto.

Cuando la Comisión no actúa en virtud de los poderes delegados en ella por el Consejo, no está obligada a recurrir al Comité del Código Aduanero. En su calidad de custodio del Tratado de la CE, podrá dirigirse directamente a los Estados miembros en relación con cualquier cuestión relativa a la aplicación del derecho aduanero por las autoridades de los Estados miembros. Además, cuando exista una infracción del derecho comunitario, la Comisión podrá incoar procedimiento por incumplimiento de conformidad con el artículo 226 CE. La Comisión naturalmente puede optar también por someter la cuestión al Comité del Código Aduanero de conformidad con el artículo 249 del CAC y el artículo 8 del Reglamento Nº 2658/87; es probable que así lo haga especialmente cuando una cuestión no guarde relación sólo con un Estado miembro, sino que sea de interés para todos ellos.

161. En lo que respecta a la clasificación arancelaria de las tarjetas de adaptación a la red para ordenadores personales y de los productos para riego por goteo en las Comunidades Europeas ¿admiten las Comunidades Europeas que, en un momento determinado, uno o varios Estados miembros de las CE no han tratado como vinculante información arancelaria vinculante emitida por los demás Estados miembros de las CE?

A las CE no les consta ningún caso de esa índole en relación con esos dos productos. En este contexto, las CE desearían recordar que la IAV es vinculante únicamente respecto de su titular, que es una persona física o jurídica concreta.[53] La IAV no es vinculante respecto de otras personas. Así lo ha confirmado también el TJCE en la reciente sentencia en *Intermodal Transports*.[54]

162. Con respecto al funcionamiento del sistema de decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el período 1995-2005:

a) ¿Cuál es el número total de decisiones prejudiciales solicitadas por tribunales de los Estados miembros?

[52] Véase Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 75, 92, 99 y 117.

[53] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 112.

[54] Asunto C-495/03, *Intermodal Transports*, aún no incluido en la Recopilación, párrafo 27 (Estados Unidos - Prueba documental 71).

El número total de decisiones prejudiciales solicitadas por tribunales de los Estados miembros durante el período 1995-2005 es de 2.314.

b) Del número total de solicitudes de decisiones prejudiciales presentadas en el período pertinente ¿cuántas afectan a la esfera de la administración de aduanas? Sírvanse desglosar la cifra en las correspondientes a las siguientes esferas específicas de la administración de aduanas:

i) clasificación arancelaria;

ii) valoración en aduana; y

iii) procedimientos aduaneros (en particular, los controles posteriores al despacho a libre práctica[55], las sanciones por infracción de la legislación aduanera de las CE, la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación).

Del número total de solicitudes de decisiones prejudiciales (2.314) presentadas durante el período 1995-2005, 249 conciernen a la esfera de la administración aduanera. El desglose es el siguiente:

Clasificación arancelaria	55
Valoración en aduana	9
Procedimientos aduaneros	162
Otras	23

c) Del número total de peticiones de decisiones prejudiciales presentadas en la esfera de la administración de aduanas ¿cuántas han dado lugar a decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? Sírvanse desglosar esa cifra en las correspondientes a las siguientes esferas específicas de la administración de aduanas:

i) clasificación arancelaria;

ii) valoración en aduana; y

iii) los procedimientos aduaneros (en particular, los controles posteriores al despacho a libre práctica[56], las sanciones por infracción de la legislación aduanera de las CE, la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación).

[55] Suponiendo, a efectos de argumentación, que esos controles puedan clasificarse dentro de los procedimientos aduaneros a efectos de la presente diferencia.

[56] Suponiendo, a efectos de argumentación, que esos controles puedan clasificarse dentro de los procedimientos aduaneros a efectos de la presente diferencia.

El resultado de las 249 peticiones de decisiones prejudiciales relativas a la esfera de la administración de aduanas, desglosadas por esferas específicas, es el siguiente:

	Sentencias	Autos	Archivadas	Pendientes	*Total*
Clasificación	45	-	2	8	55
Valoración	7	-	-	2	9
Procedimientos	114	9	22	17	162
Otras	17	1	1	4	23
Total	183	10	31	25	249

163. En el párrafo 61 de su declaración oral en la segunda reunión sustantiva, las Comunidades Europeas sostienen que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a raíz de una solicitud de un tribunal nacional de un Estado miembro de las CE "orientan" a todos los tribunales de los Estados miembros de las CE. Sírvanse aclarar si las resoluciones en cuestión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas vinculan o no a los tribunales de los Estados miembros de las CE.

Las CE confirman su respuesta a la pregunta 73[57], en la que explicaron que las sentencias del TJCE pronunciadas en remisiones prejudiciales vinculan a todos los tribunales de los Estados miembros de las CE. Sin embargo, en relación con la interpretación del derecho comunitario, los tribunales de los Estados miembros pueden dirigirse siempre al TJCE solicitando confirmación, aclaración o modificación de la jurisprudencia del TJCE. Es en este sentido en el que las sentencias del TJCE orientan a los tribunales de los Estados miembros.

164. Con respecto a los 83 procedimientos de infracción iniciados por la Comisión de las CE contra Estados miembros en relación con la aplicación de la legislación aduanera en el período 1995-2005:

a) sírvanse desglosar esa cifra en las correspondientes a las siguientes esferas concretas de la administración de aduanas:

i) clasificación arancelaria;

ii) valoración en aduana; y

iii) procedimientos aduaneros (en particular, los controles posteriores al despacho a libre práctica[58], las sanciones por infracción de la legislación aduanera de las CE, la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación).

De los 83 casos, dos se refieren a clasificación arancelaria, uno a valoración en aduana, 44 a procedimientos aduaneros y 36 a cuestiones generales de derecho aduanero comunitario, en especial los artículos 23 a 27 y 133 del Tratado de la CE.

[57] Respuesta de las CE a la pregunta 73 del Grupo Especial, párrafos 131 y 132.

[58] Suponiendo, a efectos de argumentación, que esos controles puedan clasificarse dentro de los procedimientos aduaneros a efectos de la presente diferencia.

b) ¿Qué medidas existen para garantizar que los resultados de un procedimiento de infracción de la Comisión de las CE contra un Estado miembro vinculen a los demás Estados miembros?

No existen medidas de esa índole, ni podrían existir. Los procedimientos de infracción en el marco del artículo 226 conciernen siempre a una acción u omisión específica cometida por un Estado miembro concreto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 CE, si el Tribunal de Justicia ha declarado que un Estado miembro ha incumplido sus obligaciones, es ese Estado miembro quien está obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia.

Cabe señalar que, si bien una sentencia en virtud del artículo 228 CE vincula únicamente al Estado miembro contra el que se incoó el procedimiento, las constataciones del Tribunal de Justicia surten el efecto de aclarar el derecho comunitario, y en esa medida orientan a los demás Estados miembros respecto de sus propias obligaciones en el marco del Tratado. Además, en procedimientos de infracción posteriores en los que se planteen las mismas o parecidas cuestiones, la Comisión se puede remitir a la jurisprudencia anterior del Tribunal como precedente pertinente.

165. En el párrafo 167 de su Segunda comunicación escrita, las Comunidades Europeas manifiestan que el Defensor del Pueblo Europeo constituye un mecanismo que contribuye a la aplicación "adecuada" de la legislación comunitaria. Sírvanse indicar el número de casos en que se ha recabado la opinión del Defensor del Pueblo Europeo en la esfera de la administración de aduanas y las medidas adoptadas por éste en cada uno de esos casos.

En el período posterior a 1999, el Defensor del Pueblo pronunció cuatro decisiones sobre asuntos de administración de aduanas. En un caso, formuló una observación crítica. En dos asuntos, no constató mala administración. En otro asunto, la reclamación fue retirada, por lo que el Defensor del Pueblo Europeo no adoptó una decisión sobre el fondo de la reclamación.[59]

166. En el párrafo 275 de su Primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas afirman que cualquier particular que tenga alguna preocupación en relación con la administración de las cuestiones aduaneras puede señalar la cuestión a la atención de la Comisión de las CE, la cual la examinará y dará respuesta a ella de conformidad con el Código de Conducta de la Comisión. En el período 1995-2005:

a) ¿cuál ha sido el número total de casos en los que los particulares se han dirigido a la Comisión de las CE con preocupaciones acerca de la administración de cuestiones aduaneras? Sírvanse desglosar esa cifra en las correspondientes a las siguientes esferas concretas de la administración de aduanas:

i) clasificación arancelaria;

ii) valoración en aduana; y

iii) procedimientos aduaneros (en particular, los controles posteriores al despacho a libre práctica[60], las sanciones por infracción de la legislación aduanera de las CE, la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación).

[59] El asunto *Reebok* (Estados Unidos - Prueba documental 52).

[60] Suponiendo, a efectos de argumentación, que esos controles puedan clasificarse dentro de los procedimientos aduaneros a efectos de la presente diferencia.

b) Facilitando todos los datos necesarios, sírvanse explicar la reacción de la Comisión y/o las medidas adoptadas por ella en cada uno de esos casos, indicando el tiempo que ha tardado la Comisión en responder.

Como resultado de una búsqueda en los archivos centrales de la DG TAXUD, en el período comprendido entre 1996[61] y 2004, se recibieron más de 17.000 cartas de entidades privadas y de particulares sobre asuntos de aduanas. Desglosados por año, los números totales son los siguientes:

Período	Cartas de entidades privadas y de particulares sobre asuntos de aduanas
1996	**2.769**
1997	**3.018**
1998	**2.490**
1999	**3.105**
2000	**1.425**
2001	**1.198**
2002	**1.049**
2003	**918**
2004	**1.334**

Los archivos no han podido subdividir esos números por sectores afectados para todo el período (clasificación, valoración, procedimientos aduaneros). Además, el Grupo Especial entenderá que no es viable que, en el plazo impuesto por las presentes actuaciones, las CE expliquen la reacción de la Comisión o las medidas adoptadas por ella en cada uno de esos casos y el tiempo que ha tardado en responder.

No obstante, para poder transmitir al Grupo Especial una idea general, las CE adjuntan cuadros representativos correspondientes al período comprendido entre 2002 y 2005 preparados por las dependencias más pertinentes de la DG TAXUD de la Comisión (CE - Prueba documental 149).

167. Sírvanse facilitar una lista de las directrices sobre las mejores prácticas de trabajo que hayan sido emitidas en las siguientes esferas de la administración de aduanas:

a) clasificación arancelaria;

b) valoración en aduana; y

c) procedimientos aduaneros (en particular, los controles posteriores al despacho a libre práctica[62], las sanciones por infracción de la legislación aduanera de las CE, la transformación bajo control aduanero y los procedimientos de domiciliación).

[61] Por razones técnicas, no se han podido suministrar datos del año 1995.

[62] Suponiendo, a efectos de argumentación, que esos controles puedan clasificarse dentro de los procedimientos aduaneros a efectos de la presente diferencia.

En relación con la esfera de clasificación arancelaria, las CE se pueden remitir a las directrices EBTI (CE - Prueba documental 32).

En cuanto a la esfera de valoración en aduana, las CE se remiten al compendio de textos sobre valoración en aduana (CE - Prueba documental 37), que se actualiza periódicamente, y en el que se integran todos los dictámenes y comentarios pertinentes. Asimismo, existe un formulario unificado para el intercambio de información sobre asuntos de valoración que ha sido adoptado en forma de conclusiones de un grupo de proyecto en el marco del programa Aduanas 2002 (CE - Prueba documental 144).

Por lo que se refiere a las cuestiones denominadas "procedimientos aduaneros" en la pregunta del Grupo Especial, o sea, los controles posteriores al despacho a libre práctica; las sanciones por infracción de la legislación aduanera de las CE; la transformación bajo control aduanero; y los procedimientos de domiciliación, las CE se pueden remitir a las siguientes directrices:

- Una Guía de Análisis de Riesgos distribuida a los Estados miembros en 1998 (CE-Prueba documental 150).

- Un Marco Unificado de Gestión de Riesgos publicado en 2002 (CE - Prueba documental 151).

- La Guía sobre auditorias de aduana (CE - Prueba documental 90).

- La Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior (CE - Prueba documental 41).

168. Sírvanse formular observaciones sobre las siguientes afirmaciones de los Estados Unidos y dar respuesta a ellas:

a) En el párrafo 50 de su Segunda comunicación escrita, los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas no hacen referencia a ninguna medida que dé carácter operativo al artículo 10 del Tratado Constitutivo de la Comunidad en la esfera de la administración de aduanas ni a normas que den cumplimiento a esa obligación general con respecto a los Estados miembros en situaciones concretas.

Las CE no están de acuerdo con la afirmación de los Estados Unidos. Como ya han explicado las CE en su Segunda declaración oral[63], el deber de cooperación vincula jurídicamente y es directamente aplicable a todos los Estados miembros. Se puede hacer cumplir, y se ha hecho cumplir, recurriendo al Tribunal Europeo de Justicia; a este respecto, las CE pueden remitirse a su respuesta a la pregunta 147 del Grupo Especial. El hecho de que tales casos no sean sumamente numerosos no significa que el deber de cooperación no tenga efectos prácticos, sino que por lo general es respetado.

b) En el párrafo 86 de su Segunda comunicación escrita, remitiéndose al informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*, los Estados Unidos afirman que, aunque puede considerarse que una ley que establezca sanciones o procedimientos de control es una ley que debe ser aplicada, ello no excluye la posibilidad de considerar a esa misma ley como instrumento para aplicar otras leyes, por ejemplo, al poner en práctica esas leyes mediante verificación y ejecución. Los Estados Unidos sostienen que las propias Comunidades Europeas reconocieron este extremo en *Argentina - Pieles y cueros*, cuando impugnaron la

[63] Segunda declaración oral de las CE, párrafo 51.

misma medida de la Argentina desde el punto de vista de su contenido y desde el punto de vista de su carácter como instrumento de aplicación de otras leyes.

Las CE disienten de la declaración de los Estados Unidos. Como ya han explicado las CE en su Segunda declaración oral[64], el asunto *Argentina - Pieles y cueros* concernía a una resolución concreta de la Argentina que autorizaba la participación de representantes de la industria en el proceso administrativo. El Grupo Especial declaró que la resolución constituía una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT porque hacía imposible que la Argentina aplicara sus normas aduaneras de manera razonable e imparcial.[65] El Informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros* no indica en ninguna parte que la medida argentina aplicara alguna otra medida. Así pues, *Argentina - Pieles y cueros* no aporta ningún apoyo a la interpretación estadounidense en el presente caso.

c) En su respuesta a la pregunta 93 del Grupo Especial, los Estados Unidos sostienen que las cuestiones descritas en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 que no son cuestiones aduaneras -como las medidas de aplicación general que afectan a la venta, la distribución, el transporte y el seguro de las importaciones- pueden distinguirse de las disposiciones que establecen sanciones y de los procedimientos de control en la medida en que son objeto de aplicación y no medidas que cumplen una función administrativa.

Las CE no ven la base de esa distinción. La distinción pertinente en el artículo X del GATT es la que existe entre las medidas de aplicación general a las que se hace referencia en el párrafo 1 de ese artículo, y su aplicación, a la que se hace referencia en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Como ya han explicado anteriormente las CE[66], el artículo X del GATT no establece una distinción entre "leyes" que sean de carácter "sustantivo" y otras que sean de carácter "administrativo", o entre leyes que "desempeñen una función administrativa" y otras que no lo hagan.

Todas las leyes a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo X del GATT tienen que ser administradas, o aplicadas. Así pues, todas desempeñan una función administrativa en el sentido en que orientan el comportamiento de las autoridades que están encargadas de su aplicación. Si la interpretación estadounidense fuera correcta, todas las leyes comprendidas en el ámbito del párrafo 1 del artículo X del GATT simultáneamente tendrían también que considerarse como "aplicación" en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Esa interpretación causaría estragos en la lógica del artículo X del GATT, y sencillamente no tiene fundamento en el texto de esa disposición. Pondría también al revés la clara distinción entre "aplicación" y las medidas que han de ser aplicadas que el Órgano de Apelación confirmó en *CE - Banano III*.[67]

---

[64] Segunda declaración oral de las CE, párrafo 74; véase también Segunda declaración oral de las CE, párrafo 30.

[65] Véase Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.58, donde se cita que las CE aducen que la resolución hace *imposible* la aplicación imparcial de las normas aduaneras pertinentes. Esto refuta al mismo tiempo la alegación de los Estados Unidos de que el informe del Grupo Especial "no hacía referencia en absoluto" al carácter obligatorio o permisivo de las medidas (Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 91).

[66] Véase Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 216 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 18 y siguientes.

[67] Informe del Órgano de Apelación, *CE - Banano III*, párrafo 200. Confirmada en el Informe del Órgano de Apelación, *CE - Productos avícolas*, párrafo 115; Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Examen por extinción: acero resistente a la corrosión*, párrafo 7.289.

En lo que atañe específicamente a las disposiciones que establecen sanciones, las CE han explicado ya que esas disposiciones son en sí mismas leyes que han de ser aplicadas, y no aplicación. A este respecto las CE se pueden remitir a anteriores comunicaciones.[68]

Por lo que se refiere a "procedimientos de control", las CE no están seguras de a qué "procedimientos" se refieren los Estados Unidos, ni dónde está el paralelismo con la cuestión de las sanciones. Como ya han explicado las CE[69], el párrafo 2 del artículo 78 del CAC faculta a las autoridades aduaneras a realizar inspecciones y controles después del despacho de las mercancías. Y como las CE también han señalado, todos los Estados miembros cuentan con los medios de control necesarios y se orientan por la Guía sobre auditorías de aduana de la Comunidad (CE - Prueba documental 90). Las CE no creen que las disposiciones sobre controles en sí mismas figuren entre las leyes que se enumeran en el párrafo 1 del artículo X del GATT. En cualquier caso, las disposiciones básicas existen a nivel comunitario, no en el plano de los Estados miembros, y se garantiza una práctica de control uniforme en todo el territorio de las CE.

d) En el párrafo 25 de su Segunda comunicación escrita, los Estados Unidos aducen que no está claro en qué forma la calificación que dan las Comunidades Europeas al párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 de "disposición que establece normas mínimas" se traduce en un criterio jurídico que pueda ser aplicado por el Grupo Especial.

Como las CE han explicado en su Segunda declaración oral[70], el fin de la calificación de "disposición que establece normas mínimas" dada al párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es definir la norma de fondo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, sino aclarar el objeto y fin de la disposición. Como también han explicado las CE, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es una disposición que prescriba detalladamente la manera en que los Miembros de la OMC deben aplicar su legislación aduanera. Existen otras disposiciones en el GATT, y en otros acuerdos abarcados, en las que figuran las disciplinas sustantivas detalladas que los Miembros han de cumplir. El párrafo 3 a) del artículo X del GATT complementa esas disciplinas del GATT y sus anexos a fin de velar por que el disfrute de los beneficios del GATT por otros Miembros no resulte menoscabado por medidas de aplicación que sean no razonables, parciales, o no uniformes. De conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados[71], el objeto y fin limitados del párrafo 3 a) del artículo X del GATT deben guiar al Grupo Especial en su interpretación de la disposición.

e) En el párrafo 42 de su declaración oral en la primera reunión sustantiva, los Estados Unidos sostienen que la tesis de las Comunidades Europeas de que las apelaciones contra decisiones aduaneras ante los tribunales nacionales, unida a la posibilidad de que éstos presenten peticiones de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constituyen un instrumento crítico para garantizar la aplicación uniforme de las leyes aduaneras está en contradicción con su tesis de que la obligación de aplicación uniforme establecida en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y la de instituir

[68] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 200 y siguientes; Segunda declaración oral de las CE, párrafo 69 y siguientes.

[69] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 157 y 158. En la Segunda comunicación escrita de las CE se hace referencia por error al párrafo 2 del artículo 76 del CAC; debe corregirse esa cita para que rece párrafo 2 del artículo 78 del CAC.

[70] Segunda declaración oral de las CE, párrafo 23 y siguientes.

[71] Como lo demuestra el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

recursos con respecto a las medidas administrativas del párrafo 3 b) de ese mismo artículo son obligaciones diferenciadas entre las que no hay una relación intrínseca.

Si se interpretara así el párrafo 42 de la Primera declaración oral de los Estados Unidos, constituiría una interpretación incorrecta de la posición de las CE. Las comunicaciones de las CE no limitan el papel desempeñado por los reenvíos prejudiciales al TJCE a los que presentan los tribunales de primera instancia nacionales, que son los tribunales abarcados en el párrafo 3 b) del artículo X del GATT, como han reconocido los Estados Unidos.[72] También envían remisiones al TJCE los tribunales nacionales de instancias superiores, que son instrumentos para lograr la aplicación uniforme en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Asimismo, las CE consideran que la jurisprudencia que forman las decisiones prejudiciales del TJCE es un instrumento importante para lograr la aplicación uniforme a los efectos del párrafo 3 b) del artículo X del GATT. Efectivamente, ese papel no se limita al asunto en el que entiende el órgano jurisdiccional nacional remitente, sino que se desempeña también en relación con futuros asuntos en que no habrá una remisión al TJCE y con la aplicación del derecho comunitario por las autoridades administrativas de los Estados miembros. Las CE, en consecuencia, insisten en que los reenvíos prejudiciales al TJCE han de considerarse uno de los instrumentos destinados a asegurar la aplicación uniforme que prescribe el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

169. Sírvanse indicar cuál es el fundamento jurídico concreto en el derecho comunitario para considerar órganos de las Comunidades Europeas a los siguientes organismos:

a) los organismos establecidos en los Estados miembros para revisar en primera instancia decisiones aduaneras adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros; y

b) los tribunales nacionales de los Estados miembros encargados de revisar en primera instancia decisiones aduaneras adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros.

En el párrafo 70 de su Primera declaración oral, las CE se refirieron a los tribunales de los Estados miembros como órganos de las CE con objeto de explicar que, en el sentido del derecho internacional, las CE tienen derecho a cumplir con sus obligaciones internacionales por conducto de esos tribunales.

En virtud del derecho constitucional de las CE, el papel de los tribunales de los Estados miembros como órganos encargados de la aplicación ordinaria del derecho comunitario se fundamenta en el procedimiento de reenvío judicial al TJCE y en los principios básicos de primacía del derecho comunitario y de efecto directo, que ya se han explicado en nuestra Primera comunicación escrita.[73] Esos dos principios también explican la posición de cualquier órgano de revisión administrativa en relación con el derecho comunitario.

Por último, encontramos un fundamento jurídico específico en la legislación aduanera, en la que el artículo 243 del CAC dispone que el derecho de recurso podrá ejercerse ante las autoridades aduaneras designadas al efecto por los Estados miembros y, posteriormente, ante una autoridad independiente que podrá ser una autoridad judicial o un órgano especializado equivalente, con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro.

[72] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 121 del Grupo Especial, párrafo 189.

[73] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 179 a 190 y 36 a 40, respectivamente.

170. En su respuesta a la pregunta 74 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas sostienen que, aunque el Código Aduanero Comunitario no contiene ninguna disposición que exija que la revisión por los tribunales nacionales sea pronta, hay varias medidas en vigor en las Comunidades Europeas (como la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales) que, según alegan las CE, tienen por efecto la exigencia de que los tribunales de los Estados miembros proporcionen una pronta revisión.

a) Sírvanse explicar en forma práctica cómo y por quién se da aplicación a las citadas medidas aplicables en todo el ámbito de la Comunidad en el contexto de los plazos para la revisión de las decisiones administrativas por los tribunales de los Estados miembros.

El artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CE - Prueba documental 49), en el que se basa el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales (CE - Prueba documental 48), es una disposición que se aplica en los Estados miembros de las CE, que son todos partes en la Convención. Esta disposición puede invocarse ante cualquier tribunal de un Estado miembro de las CE. Los órganos jurisdiccionales de segunda instancia o instancia superior desempeñan una función concreta para hacer cumplir la obligación de proporcionar una pronta revisión de las cuestiones aduaneras conocidas por los tribunales de primera instancia. Cuando se hayan agotado las vías de recurso internas, el caso podrá someterse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (artículo 35 de la Convención Europea).

b). ¿Se aplican esas medidas a la revisión por organismos de primera instancia en cada uno de los Estados miembros de las CE?

El párrafo 1 del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se aplican únicamente a las actuaciones judiciales. No obstante, la revisión de decisiones aduaneras por órganos administrativos independientes en el marco del párrafo 3 b) del artículo X del GATT está sujeta a principios relacionados con la buena administración, como la observancia de un plazo razonable en los procedimientos administrativos.[74] El principio de la buena administración ha quedado consagrado en el párrafo 1 del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como el derecho de toda persona "a que [las instituciones y órganos de la Unión] traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable". Cabe subrayar que la Carta, como se indica en su Preámbulo, "reafirma [...] los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros".

171. ¿En qué circunstancias y de conformidad con qué disposición o disposiciones puede/debe el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas revisar decisiones emitidas por los tribunales nacionales de los Estados miembros?

Las acciones ante el Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia se limitan a las establecidas en el Tratado de la CE, que se han enumerado en el párrafo 171 y en la nota 53 de la Primera comunicación escrita de las CE. El Tratado de la CE no establece una apelación al Tribunal de Justicia o al Tribunal de Primera Instancia contra las decisiones de los tribunales nacionales de los Estados miembros.

172. Sírvanse formular observaciones sobre la sección III de la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, con inclusión de las pruebas documentales a que se hace referencia en dicha sección.

[74] Asuntos acumulados T-44/01, T-119/01 y T-126/01, *Vieira*, [2003] Recopilación de Jurisprudencia II-1209, párrafo 167 (CE - Prueba documental 152).

Se presentará una respuesta a esta pregunta en una comunicación por separado antes del 14 de diciembre de 2005.

PARA AMBAS PARTES:

173. Con referencia a los términos pertinentes del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y a cualesquiera otros elementos justificantes, sírvanse explicar si pueden tenerse en cuenta o no el diseño y la estructura de un sistema de administración de aduanas en su conjunto, o de los componentes pertinentes del mismo, *como tales*, al determinar si se ha infringido o no el párrafo 3 a) del artículo X por falta de una aplicación uniforme. Además, o subsidiariamente, ¿es necesario considerar casos concretos de aplicación no uniforme para demostrar la existencia de una violación del párrafo 3 a) del artículo X?

En primer lugar, las CE observarían que la solicitud de los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial se refería, como medida en litigio, únicamente a la aplicación de la legislación aduanera, y no a las medidas de aplicación general que constituyen el sistema de administración de aduanas de las CE. Como ya han explicado las CE, estas medidas generales no están por lo tanto comprendidas en el mandato del Grupo Especial.[75]

Como las CE ya han observado también[76], el párrafo 3 a) del artículo X del GATT se ocupa de la aplicación de leyes y reglamentos, y no de esas leyes y reglamentos en sí mismos. Podría considerarse que el diseño y la estructura del sistema comunitario de administración de aduanas, o los distintos componentes del mismo, constituyen una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT únicamente si forzosa e inevitablemente dan lugar a una aplicación que contraviene las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Que el sistema de administración de aduanas de las CE "como tal" dé lugar o no a la aplicación no uniforme es pues una cuestión de hecho en cuanto a la interpretación y aplicación de un voluminoso acervo del derecho interno comunitario. Recae en los Estados Unidos, en calidad de demandante, la carga de la prueba de establecer que el derecho interno viola las obligaciones en el marco de la OMC. En *Estados Unidos - Acero al carbono*, el Órgano de Apelación ha descrito los requisitos para satisfacer esta carga de la prueba de la siguiente forma[77]:

> En consecuencia, la legislación de un Miembro demandado se considerará *compatible* con el régimen de la OMC mientras no se pruebe lo contrario. La parte que sostenga que la legislación interna de otra parte, en sí misma, es incompatible con obligaciones pertinentes dimanantes de un tratado tiene sobre sí la carga de presentar pruebas acerca del alcance y el sentido de esa ley para fundamentar tal aseveración. La forma característica de aportar esa prueba es el texto de la legislación o instrumentos jurídicos pertinentes, que puede apoyarse, según proceda, con pruebas sobre la aplicación sistemática de esas leyes, los pronunciamientos de los tribunales nacionales acerca de su sentido, las opiniones de juristas especializados y las publicaciones de estudiosos de prestigio. La naturaleza y el alcance de las pruebas necesarias para cumplir la carga de la prueba habrán de variar entre un caso y otro.

[75] Véase Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 18 y siguientes.

[76] Véase *supra* Respuesta a la pregunta 154 del Grupo Especial.

[77] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 157.

En consecuencia, no se puede suponer a la ligera que una medida de derecho interno, y mucho menos todo un sistema de administración de aduanas, como tal da lugar a una violación de las obligaciones en el marco de la OMC. Más bien, como lo confirmó el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Exámenes por extinción: Artículos tubulares para campos petrolíferos* refiriéndose específicamente al párrafo 3 a) del artículo X del GATT[78], una alegación de esa índole tiene que estar respaldada por pruebas sólidas, entre las que deben figurar pruebas relativas a la aplicación coherente de legislación, es decir, en el presente caso, de una falta coherente de uniformidad en el sistema de administración de aduanas de las CE.

El informe del Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México* brinda una ilustración reciente de los requisitos para establecer una impugnación de una medida en sí misma. En ese caso, el Grupo Especial llegó a la conclusión de que una orientación administrativa estadounidense, el Sunset Policy Bulletin, en sí misma violaba el Acuerdo Antidumping después de haber examinado un "muestreo" de más de 200 casos de aplicación de ese Bulletin. Los Estados Unidos recurrieron esa constatación, refiriéndose expresamente a "la gravedad de la impugnación de una medida 'en sí misma'" y al "especial rigor con que debe ser evaluada tal impugnación".[79] El Órgano de Apelación consideró que, al basarse en una muestra limitada, el Grupo Especial no hizo una evaluación objetiva de los hechos, conforme a lo que exige el artículo 11 del ESD; y por lo tanto revocó la constatación del Grupo Especial.[80]

El contraste entre *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México* y las alegaciones estadounidenses en el presente caso no puede ser más marcado. En *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México*, se estimó que una muestra tomada de más de 200 casos de aplicación era insuficiente para establecer que el Sunset Policy Bulletin en sí mismo violaba las obligaciones del régimen de la OMC. En el presente asunto, los Estados Unidos piden al Grupo Especial que llegue a la conclusión de que el sistema de administración de aduanas de las CE viola el párrafo 3 a) del artículo X del GATT basándose en apenas unos cuantos casos de aplicación, algunos de los cuales presentaron en una fase avanzada de las actuaciones, y que en ningún caso establecen una falta de uniformidad.[81] Además, los Estados Unidos han negado constantemente la pertinencia de información fáctica para establecer la compatibilidad del sistema de administración de aduanas de las CE con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Da la impresión de que, si bien los Estados Unidos preconizan el rigor en el establecimiento de los hechos cuando actúan como demandantes, no desean que se aplique el mismo criterio cuando son los demandados.

En general, las CE sostienen que las pruebas presentadas por los Estados Unidos son insuficientes para establecer, de conformidad con el artículo 11 del ESD, que el sistema de administración de aduanas de las CE, o algunos de sus componentes concretos, violan en sí mismos el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

---

[78] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Exámenes por extinción: Artículos tubulares para campos petrolíferos*, párrafo 217.

[79] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México*, párrafo 64.

[80] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México*, párrafo 210.

[81] En este contexto, es interesante observar que en el párrafo 64 de *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México*, los Estados Unidos se quejaron también de no haber tenido una oportunidad significativa para refutar las pruebas creadas y presentadas por el Grupo Especial hasta la etapa del reexamen intermedio.

174. Sírvanse formular observaciones sobre la pertinencia práctica, en su caso, de la siguiente observación formulada en el párrafo 11.77 del informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*: "El párrafo 3 a) del artículo X [del GATT de 1994] requiere un examen de los *efectos reales* que una medida puede tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio". (sin cursivas en el original)

Las CE están de acuerdo con que el efecto de la aplicación en los comerciantes es un factor pertinente que ha de considerarse al interpretar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Como han dicho las CE, eso significa que el trato que un comerciante puede esperar de las autoridades de un Miembro de la OMC debe ser razonablemente previsible.[82] Como también han explicado las CE,[83] eso no quiere decir que se pueda considerar que unos casos sueltos de error administrativo, que pueden subsanarse mediante mecanismos administrativos y judiciales previstos por el sistema de un Miembro de la OMC, constituyen una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

La obligación de examinar los efectos de la medida está vinculada también a las pruebas necesarias para satisfacer la carga de la prueba. Si los efectos en los comerciantes son un factor pertinente para el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, esos efectos deben poder demostrarse mediante pruebas suficientes. Los Estados Unidos no han presentado prácticamente ninguna prueba en relación con la aplicación concreta de la legislación aduanera comunitaria a determinados comerciantes. Además, cuando solicitaron aportaciones a la comunidad comerciante en apoyo de su argumento, apenas recibieron contribuciones.[84] Como los efectos en los comerciantes son un factor pertinente que se ha de considerar al interpretar y aplicar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, las pruebas aducidas por los Estados Unidos son insuficientes para establecer una violación de esa disposición.

Por último, como los efectos en los comerciantes son un factor pertinente que se ha de considerar en la aplicación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, no se puede considerar que las medidas que no entrañen una diferencia importante en el trato entre comerciantes constituyen una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Un ejemplo que viene al caso es el Reglamento Nº 493/2005, que los Estados Unidos han criticado sin justificación aunque garantiza un trato arancelario totalmente uniforme al suspender los derechos arancelarios sobre los productos abarcados.[85]

175. En el párrafo 11.77 del informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*, éste declaró que no es necesario que se demuestre la existencia de "perjuicios comerciales" para probar la existencia de una violación del párrafo 3 a) del artículo X. Sírvanse formular observaciones al respecto.

Las CE están de acuerdo en que no hay obligación de demostrar la existencia de "perjuicios comerciales" para poder establecer una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. En vez de perjuicios comerciales, se trata de comprobar si el demandante ha sufrido anulación o menoscabo en el sentido del artículo XXIII del GATT. Del párrafo 8 del artículo 3 del ESD se desprende que, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. No obstante, el Miembro contra el que se haya presentado la reclamación podrá refutar la acusación.

---

[82] Véase *supra*, Respuesta a la pregunta 156 del Grupo Especial.

[83] Segunda declaración oral de las CE, párrafo 32.

[84] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 10, y CE - Prueba documental 1.

[85] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 356 y siguientes.

Como han observado las CE, incluso si se declarara que el Reglamento Nº 493/2005 constituye una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, se trataría evidentemente de un caso en que no existe anulación o menoscabo, ya que los derechos aplicables a todas las mercancías abarcadas son nulos.[86] Hablando en términos más generales, algunas de las explicaciones que han dado los Estados Unidos de los motivos por los que no han presentado pruebas de aplicación no uniforme suscitan la pregunta de qué es la anulación o menoscabo que han sufrido los Estados Unidos.[87]

176. En el párrafo 15 de su declaración oral en la segunda reunión sustantiva, las Comunidades Europeas señalan que invocan el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 en respaldo de su opinión de que los compromisos en el marco del GATT, incluido el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, fueron contraídos por las Partes Contratantes con pleno respeto a sus sistemas constitucionales. ¿Qué importancia debe atribuirse, en su caso, al hecho de que en el momento en que se concluyó el texto del GATT de 1947 no existiera una unión aduanera similar de las Comunidades Europeas?

El hecho de que no existieran las CE ni ninguna otra unión aduanera parecida en el momento en que se concluyó el texto del GATT de 1947 no reviste ninguna importancia.

El párrafo 12 del artículo XXIV del GATT es una disposición general aplicable a todas las partes contratantes en las que los gobiernos y las autoridades regionales o locales ejecutan las disposiciones del GATT. Es lo que ocurre evidentemente en las CE. De conformidad con la nota explicativa 2 a) del GATT de 1994, las referencias que en el GATT de 1994 se hacen a una "parte contratante" se entenderán hechas a un "Miembro". Según el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC, las CE son un Miembro inicial de la OMC. Así pues, está claro que, una vez concluidos los acuerdos de la OMC, todos los Miembros de la OMC convinieron en que las disposiciones del GATT, comprendido el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT, se aplicaran a las CE.

Además, de conformidad con el párrafo 1 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, el GATT de 1994 es parte integrante del Acuerdo sobre la OMC, que fue aceptado por todos los Miembros de la OMC como un "todo único". Es cierto que el GATT de 1994 incorpora, con modificaciones, el GATT de 1947. Sin embargo, como aclaró el Órgano de Apelación en *Brasil - Coco desecado*, el GATT de 1947 por sí solo no constituye la suma total de los derechos y obligaciones de los Miembros de la OMC.[88]

La interpretación del GATT de 1947 de forma aislada no sería, pues, una manera adecuada de interpretar el GATT de 1994 como parte integrante de los Acuerdos de la OMC. Por este motivo, la cuestión de si las partes contratantes del GATT de 1947 pudieran haber considerado que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT podría o no podría aplicarse a un Miembro de la OMC como las CE no es pertinente para la interpretación del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994.

Otra confirmación de lo anterior se puede encontrar en el párrafo 13 del Entendimiento sobre el artículo XXIV del GATT, que simplemente reafirma las obligaciones emanadas del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT para los Miembros de la OMC. Si éstos, en el momento en que se concertó el Acuerdo de Marrakech, hubieran deseado someter a las CE a algunas normas especiales, habría sido natural incluir una disposición de esa índole en el entendimiento sobre el párrafo 12 del

[86] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 124.

[87] Segunda declaración oral de las CE, párrafo 54.

[88] Informe del Órgano de Apelación, *Brasil - Coco desecado*, página 17.

artículo XXIV del GATT. Como no ocurrió así, hay que suponer que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT es aplicable a las CE como lo es a cualquier otro Miembro de la OMC que tenga gobiernos o autoridades regionales o locales.

Por último, nada de lo que figura en el texto del el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT puede dar pie a la suposición de que esa disposición no debería haberse aplicado a una parte contratante "similar de las CE". Como han señalado las CE, éstas no afirman estar sujetas a normas diferentes de las aplicables a los demás Miembros de la OMC. En cambio, las CE tampoco aceptan que el sistema comunitario de federalismo ejecutivo y revisión judicial sea fundamentalmente diferente de los sistemas de otros Miembros de la OMC que tienen una organización federal. En consecuencia, no existen razones para considerar que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT no sea aplicable a las CE.

ANEXO B-3

OBSERVACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LAS RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

(14 de diciembre de 2005)

PREGUNTAS FORMULADAS A LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Los Estados Unidos agradecen la oportunidad de poder presentar observaciones acerca de las respuestas de las CE a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva con las partes. Muchos de los temas que plantean las CE ya han sido abordados por los Estados Unidos en anteriores comunicaciones escritas y orales o no guardan relación con la solución de la presente diferencia. En las observaciones que siguen, los Estados Unidos se concentrarán principalmente en nuevos aspectos planteados por las CE que son pertinentes a la solución de la presente diferencia y/o que no han sido tratados en las comunicaciones anteriores de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no presentan observaciones acerca de la respuesta a cada pregunta que el Grupo Especial formuló a las CE después de la segunda reunión sustantiva con las partes. La decisión estadounidense de no formular observaciones sobre la respuesta de las CE a cualquier pregunta concreta no debe interpretarse como una aceptación de esa respuesta.

Pregunta 146

En su respuesta a la pregunta 146, las CE delimitaron una serie de esferas en las que la aplicación de la legislación aduanera comunitaria es incumbencia de las autoridades independientes en cada uno de los 25 Estados miembros de las CE.[1] Otra esfera que ha sido objeto de examen en la presente diferencia y que se debería sumar a esa delimitación es el procedimiento aduanero relativo al cobro de deudas aduaneras. Como ya se señaló en la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión del Grupo Especial[2], el párrafo 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario (Prueba documental 5 de los Estados Unidos) estipula un plazo de tres años a partir de la fecha de importación durante el cual se podrá cobrar una deuda aduanera. Incumbe a cada una de las 25 oficinas de aduanas independientes y de ámbito geográfico limitado de las CE aplicar esa regla y, como han demostrado los Estados Unidos, las distintas oficinas de aduanas la aplican de manera diferente. Francia, por ejemplo, ha promulgado una ley por la que el plazo de tres años queda suspendido por cualquier actuación administrativa (procès-verbal) en la que se investigue una posible infracción aduanera.[3] Pese a la divergencia que ello supone con otras autoridades aduaneras de otras

[1] Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas del Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva, párrafos 3 a 7 (7 de diciembre de 2005) ("Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial").

[2] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 31.

[3] Loi de finances rectificative pour 2002 (Nº 2002-1576 du 30 décembre 2002), J.O. Nº 304 du 31 décembre 2002, p. 22070 texte Nº 2, Art. 44 (modificaciones del código aduanero, Art. 354) ("La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.") (Prueba documental 69 de los Estados Unidos).

partes de las CE, el más alto tribunal de Francia (la Cour de Cassation) ha rehusado remitir al TJCE la cuestión de la compatibilidad de esa regla con el Derecho comunitario.[4]

Pregunta 147

En su respuesta a la pregunta 147, las CE declaran que "el artículo 10 del Tratado de la CE es jurídicamente vinculante y directamente aplicable en todos los Estados miembros."[5] Añaden que el artículo 10 "inspira la interpretación del Derecho comunitario por los Tribunales de las CE."[6] Seguidamente ofrecen una reseña de asuntos en los que se ha invocado ese artículo y concluyen afirmando que "el artículo 10 es plenamente vigente y puede ser aplicado por el TJCE y los tribunales nacionales."[7]

Que el artículo 10 sea o no "jurídicamente vinculante y directamente aplicable" no viene al caso. La pregunta pertinente es si la obligación amplísima y general enunciada en el artículo 10 se traduce en reglas específicas en la esfera aduanera que garanticen la aplicación uniforme por las 25 administraciones de aduanas independientes y de ámbito geográficamente limitado. La respuesta es negativa. El artículo 10 sencillamente declara:

> Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión.
>
> Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado.

Ni el Tratado de la CE ni ningún otro elemento de la legislación comunitaria declara particularmente las "medidas apropiadas" que deben adoptar los Estados miembros en la esfera del derecho aduanero para lograr la aplicación uniforme.

Desde el punto de vista del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, poco importa que el artículo 10 del Tratado de la CE sea "jurídicamente vinculante" si (como efectivamente ocurre) no se pone en vigor en la esfera aduanera mediante normas o reglamentos particulares. Los Estados Unidos han demostrado este extremo en sus comunicaciones anteriores. Por ejemplo, cuando la autoridad aduanera de una parte de las CE ha clasificado una mercancía de una manera concreta, la naturaleza "jurídicamente vinculante" del artículo 10 del Tratado de la CE no obliga a la autoridad aduanera de otra parte de las CE a clasificar una mercancía materialmente idéntica de la misma manera.[8] Una ilustración sumamente concreta de la incapacidad del artículo 10 del Tratado de la CE

---

[4] *Véase* Sentencia de la Cour de Cassation, Asunto Nº 143, 13 de junio de 2001, páginas 439 y 440 (Prueba documental 67 de los Estados Unidos); Sentencia de la Cour de Cassation, Asunto Nº 144, 13 de junio de 2001, página 448 (Estados Unidos - Prueba documental 68).

[5] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 8.

[6] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 9.

[7] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 15.

[8] La única excepción limitada es el caso en que la clasificación decidida por la primera autoridad se consigna en información aduanera vinculante ("IAV") que seguidamente la mismísima persona a la que se expidió la IAV, y únicamente esa persona (es decir, "el titular"), invoca ante la segunda autoridad.

de garantizar la aplicación uniforme de la legislación aduanera es el caso de los monitores LCD. Los Estados Unidos explicaron en la segunda reunión del Grupo Especial[9] que, aunque el Comité del Código Aduanero expidió un dictamen no vinculante relativo a la clasificación de esas mercancías en julio de 2004, en la aplicación de las reglas de clasificación en relación con los monitores LCD reina el caos. Veamos: la autoridad de un Estado miembro (el Reino Unido) observa ese dictamen; otra autoridad (en Alemania) evidentemente lo rechaza, pues ha expedido recientemente IAV en la que clasifica un monitor en la partida 8471 fundándose en su utilización *principal*, aunque el dictamen instaba a que esa clasificación se basara únicamente en la utilización *exclusiva*; y una tercera autoridad (en los Países Bajos) ha promulgado su propio conjunto de criterios de clasificación debido a su preocupación de que las prácticas de otras autoridades estaban dando lugar a "una desviación de la corriente comercial, que es perjudicial para la competitividad de la industria neerlandesa en el sector de la logística y los servicios."[10]

Además, los asuntos que las CE citan en su respuesta a la pregunta 147 no afectan en absoluto a la conclusión de que el artículo 10 del Tratado de la CE no garantiza la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria por las 25 administraciones de aduanas independientes y de ámbito geográficamente limitado. Por ejemplo, las CE examinan la sentencia del TJCE en *Commissioners of Customs & Excise contra SmithKline Beecham* (Prueba documental 142 de las CE). La cuestión en ese asunto era lo que debería hacer un tribunal de un Estado miembro al constatar que la clasificación de una mercancía (parches de nicotina) consignada en IAV, que se había ajustado a un dictamen de la Organización Mundial de Aduanas ("OMA"), no era de hecho la clasificación correcta con arreglo al Arancel comunitario. Como es lógico, el TJCE constató que el órgano jurisdiccional del Estado miembro estaba "obligado a eliminar las consecuencias ilícitas" de la violación del derecho comunitario debida a la expedición de IAV incorrecta.[11] No obstante, el Tribunal siguió diciendo (en una parte de su auto que las CE no citaron en su respuesta a la pregunta 147) que las modalidades en que una autoridad proceda a subsanar un caso de incumplimiento del derecho aduanero comunitario y sus efectos se rigen "por el Derecho nacional".[12] La única limitación es que los Estados miembros observen los "principios de equivalencia y de efectividad" generales.[13] Así pues, distintas autoridades que se enfrenten a la misma cuestión a la que se enfrentó el tribunal del Reino Unido son libres de abordar el problema de maneras diferentes en el ámbito "del Derecho nacional".

Otro asunto que las CE exponen en su respuesta a la pregunta 147 es el caso de *Kühne & Heitz contra Productschap voor Pluimvee en Eieren* (Prueba documental 61 de las CE). Se trataba de un caso en el que un procedimiento administrativo concerniente al derecho de un exportador a percibir determinadas restituciones había concluido. El exportador perdió, a raíz de una constatación sobre la clasificación de las mercancías exportadas. Posteriormente, en otro procedimiento no relacionado con el anterior, el TJCE pronunció una decisión relativa a la clasificación de mercancías materialmente idénticas. Si esa decisión hubiera existido antes, el resultado de la solicitud de restitución en el asunto *Kühne & Heitz* habría sido distinto (es decir, favorable al exportador). Tras la decisión del TJCE, el exportador entabló un nuevo procedimiento, que en su momento dio lugar a que se remitiera al TJCE

[9] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 53 a 56.

[10] Douanerechten. Indeling van bepaalde LCD monitoren in de gecombineerde nomenclatuur, Nº CPP2005/1372M (8 de julio de 2005) (original y traducción no oficial al inglés) (Prueba documental 77 de los Estados Unidos).

[11] Asunto C-206/03, *SmithKline Beecham*, Auto del Tribunal de 19 de enero de 2005 (aún no se ha incluido en la Recopilación), párrafo 51 (Prueba documental 142 de las CE) ("*SmithKline*").

[12] Asunto C-206/03, *SmithKline*, párrafo 57 (Prueba documental 142 de las CE); véase también íd., párrafo 53.

[13] Asunto C-206/03, *SmithKline*, párrafo 57 (Prueba documental 142 de las CE).

la cuestión de si debía reabrirse el procedimiento administrativo original de *Kühne & Heitz* en vista de la decisión del TJCE en materia de clasificación. El TJCE falló que, *en tales circunstancias*, la autoridad aduanera neerlandesa debía "examinar de nuevo dicha resolución [...] para tomar en consideración la interpretación de la disposición pertinente del Derecho comunitario efectuada entre tanto por el Tribunal de Justicia."[14]

Particularmente, entre las circunstancias de ese caso figuraba el hecho de que "según el Derecho nacional, [la autoridad aduanera] dispon[ía] de la facultad de reconsiderar [esa] resolución."[15] De hecho, el TJCE reconoció que "el Derecho comunitario no exige, en principio, que un órgano administrativo esté obligado a reconsiderar una resolución administrativa que ha adquirido [...] firmeza [adquirida al expirar los plazos razonables de recurso o por agotamiento de las vías de recurso]."[16] Así pues, aunque la propia autoridad administrativa neerlandesa en el asunto *Kühne & Heitz* estaba obligada a reconsiderar una resolución administrativa habida cuenta de una decisión posterior del TJCE, el artículo 10 del Tratado de la CE no obligaba a que otras autoridades administrativas comunitarias lo hicieran si la legislación de sus respectivos Estados miembros estipulaba reglas más estrictas acerca de la firmeza de las resoluciones administrativas. En consecuencia, las autoridades aduaneras comunitarias de las 25 partes diferentes del territorio aduanero de las CE pueden adoptar enfoques muy distintos respecto de los efectos en procedimientos administrativos anteriores de una sentencia del TJCE en materia de clasificación aduanera. He aquí un ejemplo más de la falta de aplicación uniforme por las CE de su legislación aduanera.

Las CE también tratan del asunto *de Andrade* (al que los Estados Unidos se han referido en comunicaciones anteriores)[17], así como otros casos en los el artículo 10 del Tratado de las CE desempeña un papel en el contexto de las sanciones aduaneras. Los Estados Unidos ya han explicado con anterioridad que estos casos confirman que las disposiciones que establecen sanciones pueden variar bastante de una autoridad aduanera a otra en distintas partes de las CE. Como explicó el TJCE en *de Andrade*, el artículo 10 del Tratado CE solamente obliga a las autoridades aduaneras a "adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario."[18] No impone la obligación de que las distintas autoridades aduaneras "garanti[cen] el alcance y la eficacia del Derecho comunitario" de manera uniforme.

Asimismo, esas decisiones sobre sanciones aduaneras confirman que las sanciones son instrumentos para aplicar las reglas de la legislación aduanera comunitaria en cuanto a clasificación, valoración y procedimientos aduaneros, como han sostenido los Estados Unidos. Así pues, como se acaba de señalar, la decisión en el asunto *de Andrade* se refiere a las sanciones como medidas "para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario." La caracterización efectuada por el TJCE es acorde con el sentido corriente del término "aplicar"[19] y contradice el argumento de las CE en el

---

[14] Asunto C-453/00, *Kühne & Heitz*, [2004] Recopilación de Jurisprudencia I-837, párrafo 27 (Prueba documental 61 de las CE).

[15] Asunto C-453/00, *Kühne & Heitz*, párrafo 28 (Prueba documental 61 de las CE).

[16] Asunto C-453/00, *Kühne & Heitz*, párrafo 24 (Prueba documental 61 de las CE).

[17] *Véase, por ejemplo*, Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 100; Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 51; Respuestas de los Estados Unidos a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 111 y 112.

[18] Asunto C-213/99, *de Andrade*, [2000] Recopilación de Jurisprudencia I-11083, párrafos 19 y 20 (Prueba documental 31 de los Estados Unidos).

[19] *Véase* Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 34; *véase también* Respuestas de los Estados Unidos a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 158.

sentido de que las disposiciones que establecen sanciones no son instrumentos utilizados para aplicar la legislación aduanera comunitaria.

En el asunto *Hannle + Hofstetter* (Prueba documental 143 de las CE) se articula una caracterización parecida. Ese asunto concernía a una ley austriaca que imponía como sanción un aumento de los derechos percibibles en determinadas situaciones derivadas de demoras en el pago de deudas aduaneras. El TJCE precisó que "los Estados miembros son competentes para establecer las sanciones que les parezcan adecuadas" siempre que esas competencias se ejerzan respetando los principios generales de proporcionalidad y eficacia.[20] El Tribunal añadió que "el objetivo de la medida consiste en evitar que se perjudique a los operadores económicos que cumplen la normativa comunitaria y cuyo comportamiento permite que la contracción y el pago de la deuda aduanera se efectúen con celeridad."[21] Una vez más, el TJCE describe una medida que establece sanciones como un instrumento para hacer efectiva la legislación aduanera comunitaria (en este caso, en la esfera de los procedimientos aduaneros) al hacerla cumplir. Esto confirma que las disposiciones que establecen sanciones "aplican" la legislación aduanera comunitaria en el sentido corriente de ese término.[22]

Una última observación acerca de la respuesta de las CE a la pregunta 147 concierne a su afirmación de que un tribunal de última instancia debe remitir al TJCE las cuestiones relativas a la aplicación del Derecho comunitario que le sean planteadas.[23] Como se ha demostrado, esa obligación de los tribunales de última instancia no es absoluta. Así, el TJCE explicó en *Intermodal Transports* que un tribunal de última instancia no está obligado a plantear la cuestión prejudicial al TJCE si, por ejemplo, constata que la clasificación correcta de las mercancías en cuestión "se impone con una evidencia tal que no deja lugar a ninguna duda razonable."[24] Además, es al propio tribunal de última instancia al que le corresponde "exclusivamente" la misión de apreciar si la correcta clasificación de las mercancías es "tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable."[25] De hecho, como se señala *supra*, que el plazo de tres años para recuperar las deudas aduaneras pueda quedar suspendido al entablarse un procedimiento administrativo es una cuestión que un tribunal de última instancia (en Francia) ha rehusado remitir al TJCE, cabe presumir en la creencia de que la respuesta es evidente, aunque el inicio de un procedimiento administrativo no suspenda el plazo de tres años en otras partes de las CE.[26]

Pregunta 149

La respuesta de las CE a la pregunta 149 es notable al menos por dos razones. En primer lugar, las CE insisten en referirse a "obligaciones" de cooperación entre autoridades aduaneras que son de índole extremadamente general y/o no vinculantes. En segundo lugar, todos los ejemplos de obligaciones específicas de consulta mutua que las CE presentan corresponden a situaciones en las que dos o más autoridades aduaneras deben tomar determinadas medidas administrativas,

[20] Asunto C-91/02, *Hannl + Hofstetter*, Sentencia de 16 de octubre de 2003 (no incluida aún en la Recopilación), párrafo 18 (Prueba documental 143 de las CE).

[21] Asunto C-91/02, *Hannl + Hofstetter*, párrafo 21 (Prueba documental 143 de las CE).

[22] *Véase* Respuestas de los Estados Unidos a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 156 a 160; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 85 a 98.

[23] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 9.

[24] *Intermodal Transports*, párrafos 33 y 45 (Prueba documental 71 de los Estados Unidos).

[25] *Intermodal Transports*, párrafo 37 (Prueba documental 71 de los Estados Unidos).

[26] Véase Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 31.

habitualmente porque una mercancía o medio de transporte se desplaza por necesidad entre dos o más Estados miembros de las CE durante un plazo en el que las autoridades siguen teniendo un interés reglamentario en la mercancía o el medio de transporte. En efecto, he ahí las excepciones que confirman la regla. Es decir, como los únicos ejemplos de disposiciones *vinculantes* en materia de consulta mutua que las CE pueden poner son los que suponen situaciones en las que entra en juego forzosamente la adopción de medidas reglamentarias por dos o más autoridades aduaneras, cabe lógicamente deducir que en otras situaciones no existen disposiciones específicas y vinculantes sobre consultas mutuas. No cabe duda de que las CE las habrían citado si existieran para otras situaciones. Así pues, en el caso rutinario de una mercancía que es importada al territorio de las CE, se despacha en aduana y entra en la corriente comercial en las CE (o sea, adquiere el estatuto de mercancía comunitaria), no existen disposiciones específicas vinculantes en materia de consulta mutua.

Las CE empiezan su respuesta aludiendo una vez más al artículo 10 del Tratado CE.[27] Acerca de este extremo, los Estados Unidos se remiten a su observación sobre la respuesta de las CE a la pregunta 147. Después, las CE se refieren a sus respuestas a las preguntas 55 y 56 del Grupo Especial.[28] En esas respuestas se examinaban las Directrices Administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante (EBTI) y su funcionamiento. Al principio, las CE confirmaron que esas directrices "no son jurídicamente vinculantes".[29] Las CE declararon seguidamente que, tomadas en conjunto con el artículo 10 del Tratado CE, las autoridades aduaneras deben tener "debidamente en cuenta las directrices administrativas" y deben "utilizar todos los instrumentos disponibles para garantizar la aplicación correcta y uniforme de la legislación aduanera comunitaria".[30] Ahora bien, las CE nunca explican qué es lo que eso supone ni quién decide si se han tenido "debidamente en cuenta" las directrices administrativas no vinculantes.

En su respuesta a la pregunta 56 del Grupo Especial, las CE declararon que cuando dos o más Estados miembros no están de acuerdo acerca de la clasificación correcta de una mercancía "*deben* consultarse mutuamente".[31] Las CE no explican en absoluto qué autoridad aduanera debe iniciar esas consultas o en qué plazo. Tampoco explican qué ocurre si una autoridad aduanera de un determinado Estado miembro rehúsa consultar. Tampoco explican qué ocurre si un Estado miembro cree que no existe un desacuerdo real en materia de clasificación porque (a pesar de las afirmaciones del importador) en su opinión las mercancías que está examinando son materialmente diferentes de las que el otro Estado miembro está examinando.

Las CE declararon luego que "si persiste el desacuerdo, debe plantearse la cuestión ante el Comité del Código Aduanero." Afirmaron que "[e]n la práctica, el funcionario competente del Estado miembro interesado presentará la cuestión a la Comisión".[32] De nuevo, las CE no ofrecieron ninguna explicación acerca del plazo en que se "hará" esa presentación. Tampoco explicaron cuál de los Estados miembros es "el Estado miembro interesado" que "presentará la cuestión a la Comisión" cuando exista un desacuerdo entre dos o más Estados miembros.

También en su respuesta a la pregunta 149, las CE se refieren a "una guía de mejores prácticas que se ocupa del intercambio de información (es decir, consulta) entre los Estados miembros

[27] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 19.

[28] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 20.

[29] Respuestas de las CE a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 44.

[30] Respuestas de las CE a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 45.

[31] Respuestas de las CE a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 47.

[32] Respuestas de las CE a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 58.

en relación con asesoramiento en materia de valoración, decisiones y auditoría (CE - Prueba documental 144)."[33] Sin embargo, el documento al que hacen referencia las CE es al parecer tan sólo un informe sobre "posibles instrumentos de trabajo para facilitar el intercambio de información en asuntos de valoración en aduana". El informe no deja constancia de que las ideas que en él se examinan hubieran adquirido la condición de una "guía de mejores prácticas", ni mucho menos que adquirieran un carácter vinculante en ningún sentido.

Asimismo, las CE se refieren a un reglamento que brinda "un marco general de cooperación y asistencia mutuas" en el que las autoridades aduaneras tienen "el derecho general de pedir información pertinente" a sus homólogas.[34] Como deja claro la descripción que las propias CE hacen de ese reglamento, no se trata de la puesta en práctica específica de un deber de aplicar la legislación aduanera comunitaria de manera uniforme. Es únicamente, según las palabras de las CE, "un marco general".

La respuesta de las CE a la pregunta 149 se refiere efectivamente a algunas obligaciones concretas de consulta mutua entre las autoridades aduaneras. No obstante, como se señala anteriormente, todas ellas suponen situaciones en las que dos o más autoridades aduaneras tienen necesariamente un interés reglamentario en una mercancía o medio de transporte. Por ejemplo, las CE se refieren a su respuesta a la pregunta 79 del Grupo Especial.[35] En ella, las CE citaron seis casos en los que el Reglamento de Aplicación del Código Aduanero Comunitario (RACAC) exige la consulta mutua entre autoridades aduaneras.[36] El primer caso que citaron fue el párrafo 2 del artículo 292 del RACAC. Ese artículo trata de una situación en la que a una mercancía se le concede tratamiento arancelario favorable al entrar en las CE "sujeta[s] a control aduanero en razón de su destino especial". Dicho de otro modo, el tratamiento arancelario favorable depende del destino especial de la mercancía, que está sujeto a verificación por la autoridad aduanera. Como el destino especial puede darse en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél al que se importó la mercancía, la concesión del tratamiento en cuestión tal vez exija la coordinación entre las autoridades aduaneras.

Otro ejemplo citado por las CE en el que el RACAC prescribe la consulta entre autoridades aduaneras es el de los artículos 313 *bis* y 313 *ter*, cuyas disposiciones se refieren al estatuto de un "servicio marítimo regular". Podrá obtener ese estatuto todo servicio que "efectúe regularmente transportes de mercancías en buques que circulen únicamente entre puertos situados en el territorio aduanero de la Comunidad."[37] Verificar el cumplimiento de esa condición exige forzosamente la coordinación entre las autoridades aduaneras de distintas partes del territorio de las CE. A este respecto, la obligación de consulta mutua ligada a la disposición sobre servicio marítimo regular es igual que la obligación de consulta mutua ligada a la disposición relativa al tratamiento favorable sujeto a verificación por la autoridad aduanera por razón del destino especial. Las otras disposiciones citadas en la respuesta de las CE a la pregunta 79 surten un efecto similar.

[33] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 21.

[34] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 24 (en referencia al Reglamento 515/97 (Prueba documental 42 de las CE)).

[35] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 19.

[36] Respuestas de las CE a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 148.

[37] RACAC, párrafo 1 del artículo 313 *bis* (Prueba documental 6 de los Estados Unidos).

Igualmente, todos los ejemplos de obligaciones específicas de consulta mutua que las CE presentan en las esferas de valoración y procedimientos aduaneros tienen que ver con situaciones en las que múltiples autoridades aduaneras intervienen en una determinada transacción.[38]

La respuesta de las CE a la pregunta 149 deja claro que es muy posible que las autoridades aduaneras de las CE ni siquiera sepan cómo aplican la legislación aduanera comunitaria otras autoridades aduaneras en otras partes de las CE. Los comerciantes no tienen ninguna obligación de informar a una autoridad de las decisiones adoptadas por otra, salvo en circunstancias muy limitadas. A falta de esa información, es casi imposible imaginar cómo podrían las 25 autoridades aduaneras independientes y regionalmente circunscritas aplicar la legislación aduanera comunitaria de manera uniforme.

En síntesis, la respuesta de las CE a la pregunta 149 demuestra que, con determinadas excepciones muy limitadas, no existen disposiciones vinculantes que prescriban específicamente la consulta mutua entre autoridades en el contexto de las aduanas. Existen prescripciones de carácter muy general (como las que se enuncian en el artículo 10 del Tratado CE) y directrices no vinculantes (como las directrices administrativas sobre el sistema EBTI). Pero esas prescripciones generales y directrices no vinculantes no se ponen en práctica mediante obligaciones específicas aplicables en el contexto de las aduanas. Por lo tanto, como hemos visto, si una autoridad aduanera de un Estado miembro clasifica una mercancía de una forma concreta, por ejemplo, y esa clasificación se señala a la atención de otra autoridad en un Estado miembro distinto, no existe una norma que obligue a esta última autoridad a adoptar ninguna medida concreta habida cuenta de esa información sobre lo que ha hecho anteriormente la primera autoridad.

Pregunta 151

En su respuesta a la pregunta 151, las CE se refieren de nuevo a la presunta obligación de que, para establecer una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, una parte debe demostrar no sólo que existe una falta de aplicación uniforme, sino también que la aplicación no uniforme constituye una "pauta".[39] Los Estados Unidos han demostrado en anteriores comunicaciones que el párrafo 3 a) del artículo X no contiene ninguna prescripción de esa índole relacionada con la "pauta".[40]

Pregunta 152 b)

Al responder a la pregunta 152 b), las CE afirman que el derecho aduanero comunitario "no deja mucho margen de discreción a las autoridades aduaneras de los Estados miembros."[41] Parece que las CE utilizan el término "discreción" en un sentido muy estricto, que no tiene en cuenta que cuando una autoridad aduanera decide cómo clasificar una mercancía o cómo valorar una transacción

[38] *Véase* Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 21 y 23. En cuanto a los procedimientos de domiciliación y de transformación bajo control aduanero, las CE declaran en particular que "si en ese procedimiento interviene más de un Estado miembro *se practica* el intercambio de información." *Íd.*, párrafo 23 (sin cursivas en el original). Las CE no indican ninguna prescripción específica relativa a ese intercambio de información; simplemente afirman que "se practica".

[39] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 31; *véase también íd.*, párrafo 37 (respuesta a la pregunta 153).

[40] *Véase* Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 17 a 19; Respuestas de los Estados Unidos a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 36 a 41; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 26 a 38.

[41] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 33.

ejerce forzosamente discreción en el sentido de que debe aplicar un juicio o criterio.[42] Por muy detallada que pueda ser la normativa aduanera comunitaria, no lo es tanto como para excluir la posibilidad de diferencias de opinión sobre la forma en que debe aplicarse en casos concretos. Si bien, en teoría, es muy posible que haya una sola "respuesta correcta" acerca de cómo clasificar o valorar una mercancía determinada, no suele ocurrir que cada una de las autoridades aduaneras llegue siempre forzosa y automáticamente a esa respuesta teóricamente correcta. Aplicar la legislación aduanera comunitaria exige que las autoridades aduaneras de las CE ejerzan sus facultades discrecionales. En el interior del territorio aduanero de las CE existen 25 autoridades independientes y geográficamente limitadas, con tradiciones jurídicas diferentes, que aplican esas facultades discrecionales, y existe una ausencia de instituciones o procedimientos que garanticen que esas autoridades ejerzan sus facultades discrecionales de la misma manera. La combinación de esas características da lugar a que las CE apliquen su legislación aduanera de manera no uniforme, en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Pregunta 155

En su respuesta a la pregunta 155, las CE afirman que la aplicabilidad del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 a las disposiciones que establecen sanciones "depende de que las disposiciones que establecen sanciones figuren entre las leyes mencionadas en el párrafo 1 del artículo X del GATT."[43] Los Estados Unidos ya han explicado en anteriores comunicaciones que este argumento confunde la distinción entre una medida que se aplica y una medida que efectúa la aplicación, en el sentido de que la última da efectividad a la primera. Para que una medida quede comprendida en el ámbito del párrafo 3 a) del artículo X, la medida que se aplica debe estar comprendida en el ámbito del párrafo 1 del artículo X, y no hace al caso si la medida por la que se aplica está también comprendida en el ámbito del párrafo 1 del artículo X. Lo que es pertinente es si esas medidas de aplicación (o sea, los instrumentos de aplicación) son distintas de una autoridad aduanera a otra en el territorio de un Miembro de la OMC. En la medida en que son distintas (como ocurre en el caso de las CE), demuestran la aplicación no uniforme de la legislación aduanera del Miembro.

Además, la tesis de las CE de que "los criterios de fondo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT se adaptan mal a la aplicación de sanciones"[44] hace caso omiso de la pertinencia del párrafo 3 a) del artículo X a la cuestión de las sanciones. Las CE explican que la aplicación de sanciones exige que la autoridad competente disponga de flexibilidad para tener en cuenta el grado de culpabilidad y otros factores. Sin embargo, la cuestión de la flexibilidad en la aplicación de sanciones no está en litigio en la presente diferencia. Lo que está en litigio es la disparidad de los instrumentos de que disponen las diferentes autoridades en el territorio del Miembro para hacer frente a infracciones idénticas. Esa disparidad es la que demuestra la falta de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera, independientemente de la manera en que se apliquen las disposiciones que establecen sanciones en cualquier caso concreto.

Por último, las CE siguen tratando de apoyarse en el contraste entre la referencia explícita a sanciones en el párrafo 3 del artículo VIII del GATT de 1994 y la ausencia de una referencia de esa índole en el artículo X. Ahora bien, los Estados Unidos explicaron en su segunda comunicación

[42] *Véase New Shorter Oxford English Dictionary*, Vol. I, páginas 668 y 669 (1993) (en el que se define "discretion", en el significado que guarda relación con el presente caso, como "[t]he action of discerning or judging; judgment; decision, discrimination" (el acto de discernir o juzgar; juicio, criterio; decisión, discriminación)); *véase también* Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 59 a 61.

[43] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 40.

[44] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 41.

escrita que el hecho de que el párrafo 3 del artículo VIII establezca parámetros sustantivos en relación con las sanciones por determinados tipos de infracciones de los reglamentos o los requisitos de procedimiento aduaneros -o sea, "infracciones leves"- no tiene nada que ver con que las sanciones se puedan considerar instrumentos para aplicar la legislación aduanera de un Miembro. Los Estados Unidos explicaron allí que el argumento de las CE conduciría a unos resultados absurdos, por ejemplo, al justificar la discriminación entre Miembros de la OMC en la aplicación de sanciones habida cuenta de la inexistencia de referencias a sanciones en el artículo I del GATT de 1994.[45] Igualmente, la lógica del argumento de las CE excluiría al parecer reclamaciones en virtud del artículo X relativas a la imposición de derechos antidumping o de derechos u otras cargas proporcionales al costo de los servicios prestados, ya que esos dos tipos de cargas están explícitamente previstos en otros artículos del GATT (artículo VI y párrafo 2 c) del artículo II, respectivamente) pero no en el artículo X. Como esos resultados serían absurdos a todas luces, debe rechazarse el argumento de las CE de que las sanciones no están comprendidas en el artículo X porque están previstas en otros artículos del GATT.

Pregunta 156

En su respuesta a la pregunta 156, las CE afirman que "[g]rado razonable de seguridad significa que el trato que un comerciante puede esperar de las autoridades de ese Miembro debe ser razonablemente previsible."[46] Para empezar, el Grupo Especial debe observar que no existe un criterio de "grado razonable de seguridad" en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Un Miembro podría aplicar su legislación aduanera de manera no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X, con independencia de que dé o no dé a los comerciantes un "grado razonable de seguridad" sobre la manera en que aplicará su normativa.

Habiendo afirmado sin ningún respaldo un criterio de "grado razonable de seguridad" que equiparan a un criterio de si el tratamiento que el comerciante puede esperar es "razonablemente previsible" o no, las CE declaran seguidamente que la previsibilidad debe evaluarse en función de "la pauta global de aplicación".[47]

Los Estados Unidos no entienden qué relación guarda la existencia de una "pauta" con la cuestión del carácter razonablemente previsible del trato. El trato que las autoridades otorguen a los comerciantes podrá no ser razonablemente previsible tanto si la aplicación de la legislación aduanera por las autoridades constituye una pauta como si no.

Los Estados Unidos están de acuerdo, como cuestión de hecho, en que si un Miembro aplica su legislación aduanera de manera uniforme, el trato que ese Miembro otorgue a los comerciantes debería ser razonablemente previsible. Cabe subrayar que la previsibilidad razonable que un comerciante debe esperar en el marco de un sistema de aplicación uniforme es la previsibilidad razonable de la manera en que el *Miembro* aplicará su legislación. No viene al caso que la autoridad aduanera de una región dentro del territorio de un Miembro pueda administrar la legislación de ese Miembro de una manera razonablemente previsible. No tendría mucho sentido una obligación de aplicar la legislación aduanera de manera uniforme si se pudiera cumplir sencillamente con que la autoridad aduanera de una región dentro del territorio de un Miembro otorgara un trato razonablemente previsible, independientemente de las medidas que adopten las autoridades fuera de esa región. Por ejemplo, si una autoridad aduanera de una región previsiblemente actúa de una manera, esa previsibilidad no altera para nada el hecho de que la actuación global no sea uniforme. Si

[45] Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 96 y 97.

[46] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 43.

[47] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 43.

un Miembro cumple con sus obligaciones en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, las expectativas razonables un comerciante se cumplirán si se le otorga el mismo trato en las mismas circunstancias en todo el territorio del Miembro y no sólo en una u otra parte de ese territorio. El sistema de administración aduanera de las CE no satisface esas expectativas totalmente razonables.

Pregunta 157

En su respuesta a la pregunta 157, las CE señalan que "no se impide que las autoridades de los Estados miembros emitan directrices administrativas y otros documentos no vinculantes a efectos administrativos."[48] Aunque las CE declaran seguidamente que esas directrices y documentos administrativos no pueden menoscabar la aplicación de la legislación aduanera comunitaria, ello no altera el hecho de que las directrices y documentos administrativos sean particulares del Estado miembro que los expide, al igual que lo es la interpretación de la legislación aduanera comunitaria que el Miembro aplica.

Sirve para ilustrar este aspecto la orientación impartida por la autoridad aduanera del Reino Unido y la autoridad aduanera de Francia, respectivamente, en cuanto a la aplicación de la legislación comunitaria sobre transformación bajo control aduanero. Como han demostrado los Estados Unidos, estas dos orientaciones, a primera vista, adoptan distintos enfoques de la aplicación de esa legislación.[49] Tanto si esa orientación se caracteriza como vinculante o no vinculante como si no, y tanto si se puede afirmar que la orientación menoscaba la aplicación de la legislación aduanera comunitaria o que no la menoscaba, la persona que solicite autorización para dedicarse a la transformación bajo control aduanero entendería razonablemente que la autoridad aduanera del Reino Unido observará las medidas indicadas en la orientación británica y la autoridad aduanera de Francia las indicadas en la orientación francesa. He aquí el motivo por el que los Estados Unidos sostienen que las diferencias en la orientación son prueba de aplicación no uniforme.

Pregunta 158

La respuesta de las CE a la pregunta 158 comienza recordando la declaración del Grupo Especial en *Canadá - Monedas de oro* de que "la finalidad del párrafo 12 del artículo XXIV [del GATT] es 'estipular una reserva a la obligación básica de garantizar la observancia del Acuerdo General por las autoridades y gobiernos regionales y locales, en el caso de las partes contratantes que tuvieran una estructura federal'".[50] Esa declaración es importante, porque pone de relieve por qué el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 *no* viene al caso en la presente diferencia. El párrafo 12 del artículo XXIV guarda relación con "la observancia del Acuerdo General por las autoridades y gobiernos regionales y locales". La presente diferencia, por el contrario, no concierne a la observancia de una obligación en el marco del GATT de 1994 por las autoridades de gobiernos regionales y locales sino, más bien, por las propias CE.[51] Son las CE las que tienen una obligación positiva en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 de aplicar la legislación aduanera comunitaria de manera uniforme. Por ese motivo, la presente diferencia se distingue de *Canadá - Monedas de oro*, que suponía la adopción por un gobierno provincial de una medida para recaudar ingresos provinciales -facultad que la constitución del Canadá otorga exclusivamente al

[48] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 45.

[49] *Véase* Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 71 y 72, 73 a 78.

[50] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 46 (citando el informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafo 53). El Grupo Especial debe observar que el informe del Grupo Especial en *Canadá - Monedas de oro* nunca fue adoptado.

[51] *Véase* Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 13 a 17.

legislativo provincial[52]- de manera que hizo incurrir al Canadá en infracción de su obligación en virtud del artículo III del GATT de 1994. En aquella diferencia, Sudáfrica reclamó que el Canadá había violado su obligación en el marco del artículo III del GATT de 1994 a causa de la legislación provincial. En el presente caso, en cambio, los Estados Unidos no alegan que el acto de un solo Estado miembro en sí mismo constituya una infracción por las CE de su obligación emanada del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Los Estados Unidos sostienen que las CE han incumplido su obligación emanada del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 por no aplicar su legislación aduanera -legislación "federal", por utilizar la expresión de las CE- de manera uniforme.

En segundo lugar, incluso si el párrafo 12 del artículo XXIV fuera pertinente a la presente diferencia, no exoneraría a las CE de su obligación en virtud del párrafo 3 a) del artículo X ni afectaría en forma alguna a su obligación en el marco de ese artículo. El párrafo 13 del *Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* ("Entendimiento relativo al artículo XXIV") aclara que "En virtud del GATT de 1994, cada Miembro es plenamente responsable de la observancia de todas las disposiciones de ese instrumento….". Es decir, el párrafo 12 del artículo XXIV impone a los Miembros que tengan estructuras federales la *obligación* de tomar "medidas razonables" para "lograr que" los gobiernos regionales y locales "observen" las obligaciones de un Miembro, pero esa disposición no pretende modificar el contenido de ninguna obligación en el marco del GATT de 1994 para esos Miembros. Además, incluso cuando está en litigio la observancia por gobiernos regionales o locales de las obligaciones emanadas de la OMC, el párrafo 14 del Entendimiento relativo al artículo XXIV y el párrafo 9 del artículo 22 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* ("ESD") disponen que "[e]n los casos en que no haya sido posible lograr[la] [observancia] … [serán aplicables] las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas en virtud del [ESD]" y "las disposiciones de los acuerdos abarcados y [el ESD]," respectivamente, "relativas a la compensación y a la suspensión de concesiones o de otras obligaciones". Por lo tanto, incluso si, en cumplimiento del párrafo 12 del artículo XXIV, la única obligación de las CE en el marco del párrafo 3 a) del artículo X fuera tomar "medidas razonables" para garantizar la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria, su omisión de aplicar en la práctica su legislación aduanera de manera uniforme no les exoneraría de las disposiciones pertinentes sobre compensación y suspensión de concesiones.[53]

En tercer lugar, los Estados Unidos observan que las CE declaran que "no ha[ya]n invocado el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT *como defensa principal* en el presente caso."[54] Esa declaración es importante, porque supone que las CE han invocado de hecho el párrafo 12 del artículo XXIV como defensa, pero no como defensa "principal". Anteriormente, las CE no habían efectivamente "invocado el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT como defensa…," sino que simplemente se habían referido a él como "apoyo" de su propuesta interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[55] Esa distinción es importante, porque invocar efectivamente el párrafo 12 del artículo XXIV como defensa conllevaría la carga de demostrar que las deficiencias en la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria conciernen a asuntos "que el gobierno central no puede controlar con arreglo a la distribución de competencias que establece la

[52] *Véase* Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Medidas que afectan a la venta de monedas de oro*, L/5863, párrafo 8 (17 de septiembre de 1985, no adoptado) ("*Canadá - Monedas de oro*").

[53] *Véase* Informe del Grupo Especial del GATT, *Canadá - Monedas de oro*, párrafos 61 a 65 (examinando la obligación del Canadá de compensar a Sudáfrica hasta que las medidas en virtud del párrafo 12 del artículo XXIV hagan cumplir al Canadá su obligación en el marco del artículo III).

[54] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 49 (sin cursivas en el original).

[55] Respuestas de las CE a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 113.

Constitución."[56] Si las CE aducen ahora que no pueden controlar la aplicación de la legislación aduanera por las autoridades aduaneras de los Estados miembros con arreglo a la distribución de competencias que establece su constitución, ello únicamente refuerza el argumento de que las CE no están cumpliendo con su obligación de aplicar su legislación aduanera de manera uniforme en el marco del párrafo 3 a) del artículo X.

Por último, en su respuesta a la pregunta 158, las CE dan por supuesto que las alegaciones de los Estados Unidos exigen "la creación de un organismo aduanero comunitario, y [sic] un tribunal aduanero comunitario, y la armonización de la legislación de los Estados miembros, especialmente en la esfera de las sanciones," y proceden a afirmar que no se trata de medidas razonables.[57] De hecho, las CE caracterizan incorrectamente las alegaciones de los Estados Unidos y responden de esa forma a un argumento que los Estados Unidos no han presentado. Los Estados Unidos no han insistido nunca en que las CE tengan que crear un organismo aduanero comunitario y un tribunal aduanero comunitario y armonizar las leyes de los Estados miembros. Los Estados Unidos sostienen sencillamente que las CE, como los demás Miembros de la OMC, deben aplicar su legislación aduanera de manera compatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 y mantener o instituir tribunales o procedimientos destinados a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras que cumplan las disposiciones del párrafo 3 b) del artículo X.

Pregunta 159 b)

En su respuesta a la pregunta 159 b), las CE declaran que "[n]o corresponde a las CE, sino a los Estados Unidos como demandante en el presente asunto, aportar pruebas" de que los dictámenes del Comité del Código Aduanero *no* suelen reflejar un enfoque común de los Estados miembros o de que *no* son adoptados por consenso.[58] La caracterización de la carga de la prueba que hacen las CE es errónea. Es "la parte que alega un hecho -sea el demandante o el demandado- [la que] debe aportar la prueba correspondiente."[59] En el presente caso, son las CE las que han afirmado en refutación que la emisión de dictámenes del Comité del Código Aduanero es un procedimiento que garantiza la aplicación uniforme porque esos dictámenes se adoptan por consenso. Ergo, son las CE las que tienen la obligación de demostrar esa tesis. De hecho, las CE se encuentran en una posición única para demostrar si los dictámenes del Comité del Código Aduanero suelen reflejar o no un enfoque común en el que han convenido todos los Estados miembros, pues son las únicas que tienen acceso a toda la documentación que atestigua las deliberaciones del Comité.

En cualquier caso, en la medida en que las pruebas obrantes en la presente diferencia han tratado de la relación entre los dictámenes del Comité del Código Aduanero y el enfoque de los Estados miembros, esas pruebas han puesto de manifiesto un ejemplo destacado de la falta de acuerdo entre los primeros y el último. Concretamente, en el caso de los monitores LCD, las autoridades aduaneras de

[56] Informe del Grupo Especial del GATT, *Estados Unidos - Medidas que afectan a las bebidas alcohólicas y derivadas de la malta*, BISD 39S/206, párrafo 5.79 (adoptado el 19 de junio de 1992); *véase también* Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 17 y nota 17.

[57] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 50.

[58] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 53.

[59] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India*, WT/DS33/AB/R y Corr.1, página 18 (adoptado el 23 de mayo de 1997).

dos Estados miembros por lo menos han adoptado enfoques de clasificación de las mercancías en litigio que no son acordes con el correspondiente dictamen del Comité del Código Aduanero.[60]

Pregunta 159 d)

En su respuesta a la pregunta 159 d), las CE declaran que "no están seguras de cómo afectará la caracterización del Comité del Código Aduanero al análisis del Grupo Especial" dado que los Estados Unidos "no impugn[aba]n la manera en que funciona el Comité del Código Aduanero."[61] Los Estados Unidos ya han explicado en su respuesta a la pregunta 134 que la manera en que funciona el Comité del Código Aduanero es pertinente a la alegación de los Estados Unidos en el marco del párrafo 3 a) del Artículo X porque el Comité es una de las instituciones que, según las CE, garantizan que éstas apliquen su legislación aduanera de manera uniforme. Los Estados Unidos remiten al Grupo Especial a su respuesta a esa pregunta donde figura un examen más a fondo de esta cuestión.[62]

Pregunta 161

En respuesta a la pregunta 161, las CE declaran que no les consta que las autoridades aduaneras de determinados Estados miembros hayan rehusado tratar como vinculante la IAV expedida por otras autoridades aduaneras en el caso de tarjetas de adaptación a la red y de productos para riego por goteo. El Grupo Especial debe observar, no obstante, que la respuesta de las CE se centra estrictamente en si la IAV expedida a un "titular" concreto para los productos en litigio no fue aceptada por autoridades aduaneras distintas de la autoridad expedidora. Hace más al caso el hecho innegable de que esos productos fueron objeto de clasificación divergente por distintas oficinas de aduanas dentro de las CE, y esas divergencias no se solucionaron prontamente de derecho. En el asunto *Peacock*, el Abogado General observó que "las autoridades aduaneras de varios Estados miembros de la Comunidad facilitaron IAV contradictoria en la que se clasificaban artículos de equipo para LAN indistintamente en las partidas 8471, 8473 y 8517."[63] Igualmente, respecto de los productos para riego por goteo, las CE no niegan que existiera una divergencia de clasificación entre autoridades aduaneras diferentes, sino que simplemente caracterizan la divergencia como "un caso de IAV temporalmente divergente".[64] "IAV temporalmente divergente" significa que las autoridades aduaneras de distintos Estados miembros clasificaron productos materialmente idénticos de manera diferente, de forma que es innegable que las CE no estaban aplicando la legislación aduanera de manera uniforme.

Pregunta 165

La respuesta de las CE a la pregunta 165 acerca de la función del Defensor del Pueblo Europeo debe interpretarse en el contexto del mandato de ese Defensor. En concreto, como explica la guía titulada "El Defensor del Pueblo Europeo - En pocas palabras…", "El Defensor del Pueblo no puede ocuparse de reclamaciones concernientes a las administraciones nacionales, regionales o locales de los Estados miembros[, aunque esas reclamaciones estén relacionadas con asuntos de la

[60] *Véase* Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 54 a 56.

[61] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 60.

[62] Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 42 a 44.

[63] *Peacock AG* contra *Hauptzollamt Paderborn*, Asunto C-339/98, Conclusiones del Abogado General, Recopilación de Jurisprudencia 2000, I-08947, párrafo 15 (Prueba documental 17 de los Estados Unidos).

[64] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 141.

Unión Europea]."[65] Este extremo queda confirmado en una reciente decisión del Defensor del Pueblo (presumiblemente una de las cuatro a las que se refirieron las CE en su respuesta a la pregunta 165).[66] La decisión se refería a la compra por una empresa de los Países Bajos de zapatos a un vendedor de Finlandia que iban acompañados de certificados de origen expedidos por la autoridad finlandesa en los que decía "Hong Kong, China". La autoridad aduanera de los Países Bajos no estaba segura de si eso significaba que los zapatos eran originarios de Hong Kong o de China (una diferencia importante, pues los zapatos originarios de China serían susceptibles de derechos antidumping). La autoridad de los Países Bajos puso en marcha una investigación sobre el origen de las mercancías. Posteriormente, la autoridad de Finlandia expidió certificados de origen revisados que decían "Hong Kong". Ahora bien, en lugar de limitarse a aceptar esos certificados, la autoridad de los Países Bajos continuó su investigación, y llegó a la conclusión de que los zapatos eran de origen chino, lo que dio lugar a una fijación de derechos antidumping y seguidamente a una serie de transacciones entre la empresa neerlandesa, la autoridad aduanera neerlandesa y la Comisión de las CE. Los actos de la Comisión condujeron a que la empresa finalmente interpusiera una reclamación ante el Defensor del Pueblo. En su decisión, éste aclaró que la reclamación de la empresa "no concierne a la decisión adoptada por las autoridades aduaneras neerlandesas o a los certificados de origen presuntamente erróneos expedidos por la Cámara de Comercio finlandesa. En cuanto a esos asuntos, el reclamante tiene la posibilidad de interponer reclamaciones ante los respectivos defensores del pueblo nacionales en los Países Bajos y en Finlandia".[67]

Pregunta 168 a)

En respuesta a la pregunta 168 a), las CE declaran que "el deber de cooperación vincula jurídicamente y es directamente aplicable a todos los Estados miembros. Se puede hacer cumplir, y se ha hecho cumplir."[68] Como explicaron los Estados Unidos en su observación sobre la respuesta de las CE a la pregunta 147, que el artículo 10 sea o no "jurídicamente vinculante y directamente aplicable" no viene al caso. La pregunta pertinente es si la obligación amplísima y general enunciada en el artículo 10 se pone en práctica en la esfera aduanera mediante reglas específicas que garanticen la aplicación uniforme. La respuesta es que no se pone en práctica. Para un examen completo de esta cuestión, los Estados Unidos remiten al Grupo Especial a su observación sobre la respuesta de las CE a la pregunta 147.

Pregunta 168 b)

En su respuesta a la pregunta 168 b), las CE pretenden describir lo que el Grupo Especial "declaró" en *Argentina - Pieles y cueros*. Concretamente, afirman que "[e]l Grupo Especial declaró que la resolución [2235 de la Argentina] constituía una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT porque hacía imposible que la Argentina aplicara sus normas aduaneras de manera razonable e imparcial."[69] Cabe destacar que la parte del informe *Argentina - Pieles y cueros* que las CE citan en apoyo de esta tesis no es la constatación del Grupo Especial, sino el resumen del argumento de las CE

[65] El Defensor del Pueblo Europeo - En pocas palabras …, página 2 (Estados Unidos - Prueba documental 82).

[66] Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 1817/2004/OV contra la Comisión Europea (7 de noviembre de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 83).

[67] Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 1817/2004/OV contra la Comisión Europea, La Decisión, párrafo 1.2 (7 de noviembre de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 83).

[68] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 78.

[69] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 79.

realizado por el Grupo Especial.[70] Fueron las CE en calidad de demandante, y no el Grupo Especial, quienes sostuvieron que la medida argentina en litigio hacía "imposible la aplicación imparcial de la normativa aduanera pertinente". En realidad, el hecho de que el Grupo Especial *no* adoptara la caracterización presentada por las CE de que la medida argentina hacía "imposible" que Argentina cumpliera su obligación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X sugiere que el Grupo Especial no se basó en esa caracterización. Este argumento se ve respaldado por el hecho de que, aunque el Grupo Especial determinara en última instancia que la administración de sus leyes aduaneras por la Argentina no era imparcial, lo hizo por razones distintas de las que adujeron las CE. Es significativo que no aceptara el argumento de las CE en el sentido de que la mera presencia de representantes de la industria curtidora nacional en el puerto en el momento de la exportación de pieles crudas daba lugar necesariamente a una infracción de la obligación de aplicación imparcial.[71]

En segundo lugar, la respuesta de las CE a la pregunta 168 b) indica que no están de acuerdo con la declaración de los Estados Unidos en el sentido de que, en *Argentina - Pieles y cueros*, las CE impugnaron la misma medida argentina desde la perspectiva de su fondo y desde la perspectiva de su carácter de instrumento para dar aplicación a otras leyes. A este respecto, los Estados Unidos remiten al Grupo Especial al párrafo 4.203 del informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*, que justifica la declaración estadounidense.[72]

Por último, en cuanto a la declaración de las CE de que "[e]l Informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros* no indica en ninguna parte que la medida argentina aplicara alguna otra medida"[73], los Estados Unidos remiten al Grupo Especial al párrafo 11.72 del informe *Argentina - Pieles y cueros*. En ese párrafo, el Grupo Especial concluye que la medida en litigio "se limita a establecer una cierta forma de aplicar esas normas sustantivas [es decir, la legislación aduanera argentina]. No cabe duda de que se trata de una medida de naturaleza administrativa."

Pregunta 168 c)

En su respuesta a la pregunta 168 c), las CE afirman que "el artículo X del GATT no establece una distinción entre "leyes" que sean de carácter "sustantivo" y otras que sean de carácter "administrativo".[74] No obstante, el párrafo 3 a) del artículo X se refiere claramente a determinadas "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas" y a la manera en la que un Miembro debe administrar tales "leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas". Una cuestión pertinente, así pues, es cómo se pone de manifiesto la manera de aplicar de esas leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas. El Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros* reconoció que la manera de aplicación se puede poner de manifiesto por otras medidas que prescriben la forma en que se da efectividad a las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas. Se podrá describir correctamente que esas otras medidas tienen carácter administrativo. Desde esta perspectiva, el carácter de las leyes,

[70] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, WT/DS155/R y Corr.1, párrafo 11.58 (adoptado el 16 de febrero de 2001) ("*Argentina - Pieles y cueros*").

[71] *Véase* Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.99 ("Sin perjuicio de nuestra preocupación general por la presencia de particulares con intereses comerciales en conflicto en los procesos aduaneros, el requisito de administración imparcial no se reduce, en nuestra opinión, en la presente diferencia a la mera presencia de representantes de la ADICMA en esos procesos.").

[72] *Véase también* Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 86.

[73] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 79.

[74] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 80.

reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que son objeto de aplicación podrá describirse correctamente como sustantivo. En el grado en que una medida que tiene carácter administrativo constituye una prueba de la aplicación no uniforme de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que tienen carácter sustantivo, la medida administrativa se puede considerar parte de una impugnación contra la omisión de un Miembro de aplicar sus leyes de manera uniforme en el marco del párrafo 3 a) del artículo X.[75]

A continuación, las CE introducen un nuevo argumento en el que sostienen que todas las leyes enumeradas en el párrafo 1 del artículo X se podrían considerar de carácter administrativo en el sentido de que "han de ser aplicadas".[76] Las CE tratan así de formular un argumento de *reductio ad absurdum*. Sin embargo, la premisa de que lo que confiere a una ley su carácter "administrativo" es que "ha de ser aplicada" no es correcta. En realidad, lo que confiere a una ley su carácter administrativo es el hecho de que estipule una cierta manera de aplicar normas sustantivas. Para un examen más extenso de este extremo, los Estados Unidos remiten al Grupo Especial a su respuesta a la pregunta 130.[77]

Las CE arguyen luego que las disposiciones que establecen sanciones no pueden tener carácter administrativo por que son "en sí mismas leyes que han de ser aplicadas".[78] A este respecto, las CE cometen el error de suponer que una ley que tiene carácter administrativo no puede ser objeto de aplicación en sí misma, lo que simplemente no es cierto.[79]

Por último, las CE expresan su confusión respecto del examen que hacen los Estados Unidos de los procedimientos de control como instrumentos que, al igual que las disposiciones que establecen sanciones, aplican la legislación aduanera comunitaria de manera no uniforme. Las CE afirman que no ven "el paralelismo" entre los procedimientos de control y las disposiciones que establecen sanciones.[80] En realidad, los Estados Unidos han articulado el paralelismo con suma claridad. Los procedimientos de control, al igual que las disposiciones que establecen sanciones, no prescriben normas aduaneras sustantivas, sino que son instrumentos para verificar y hacer cumplir normas sustantivas, que se enuncian en otras disposiciones. En la medida en que diferentes autoridades aduaneras de las CE utilizan diferentes procedimientos de control, aplican así normas aduaneras comunitarias sustantivas de manera diferente, como ocurre en el caso de diferentes disposiciones que establecen sanciones.[81] De hecho, las CE ni siquiera afirman que sus 25 autoridades aduaneras independientes y geográficamente limitadas apliquen la legislación aduanera comunitaria de manera uniforme mediante la utilización de procedimientos de control. Simplemente declaran con bastante

[75] *Véase* Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 85 a 95; Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 25 a 28, 35 a 41.

[76] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 81.

[77] Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 25 a 28.

[78] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 82.

[79] *Véase* Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 76 y 77; Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 26, nota 22.

[80] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 83.

[81] *Véase* Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 97 a 99.

imprecisión que "cuentan con los medios de control necesarios y se orientan por la Guía sobre auditorías de aduana de la Comunidad."[82]

Pregunta 168 d)

En su respuesta a la pregunta 168 d), las CE declaran que han calificado el párrafo 3 a) del artículo X de disposición "que establece normas mínimas" para aclarar "el objeto y fin de la disposición."[83] Los Estados Unidos discrepan de la sugerencia de las CE de que se pueda o se haya de atribuir un objeto y fin a una determinada disposición de un tratado. El párrafo 1) del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ("CVDT") dispone que "[u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin." Es aparente que "su" delante de "objeto y fin" se refiere al singular "tratado" y no al plural "términos del tratado". Esta opinión se ha visto confirmada, por ejemplo, por el Grupo Especial en *Estados Unidos - Examen por extinción: acero resistente a la corrosión*, que se refiere explícitamente al "objeto y fin del *tratado*"[84], y por el Órgano de Apelación en *CE - Hormonas*, que habla del "objeto y el fin de ese *tratado*".[85]

Habiendo pretendido concretar lo que denominan el "objeto y fin" del párrafo 3 a) del artículo X, las CE afirman luego que "[d]e conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados, el objeto y fin limitados del párrafo 3 a) del artículo X del GATT deben guiar al Grupo Especial en su interpretación de la disposición."[86] Sin embrago, como ya se ha señalado, el enfoque de las CE no es acorde con las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados, que prevén que un tratado se interprete teniendo en cuenta su objeto y fin de ese tratado. El enfoque de las CE, de hecho, pone del revés las normas consuetudinarias de interpretación. En lugar cerciorarse del sentido o el "propósito" o "fin" de una disposición concreta de un tratado examinando para ello el sentido corriente que se ha de atribuir a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin, las CE tratan *primero* de identificar *a priori* lo que denominan "el objeto y fin" del párrafo 3 a) del artículo X y luego instan a que este supuesto "objeto y fin" "guíe la interpretación de la disposición."

El enfoque de las CE también es preocupante porque plantea la posibilidad de añadir o sustraer derechos y obligaciones en el marco del acuerdo abarcado en litigio. No debe corresponder a las partes en una diferencia "adivinar" "propósitos" o "fines", puesto que una parte simplemente puede valerse de ello como oportunidad para redactar de nuevo la disposición - que es precisamente lo que hacen las CE al calificar el párrafo 3 a) del artículo X de disposición "que establece normas mínimas".

Ni el párrafo 3 a) del artículo X ni ninguna otra disposición del GATT de 1994 articulan un "objeto y fin" que respalde la caracterización del párrafo 3 a) del artículo X como disposición "que

---

[82] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 83.

[83] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 84.

[84] Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón*, WT/DS244/R, párrafo 7.44 (adoptado el 9 de enero de 2004, en su forma modificada por el Informe del Órgano de Apelación) (sin cursivas en el original) ("*Estados Unidos - Examen por extinción: acero resistente a la corrosión*").

[85] Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas)*, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, párrafo 104 (adoptado el 13 de febrero de 1998) (sin cursivas en el original) ("*CE - Hormonas*").

[86] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 84 (citando el párrafo 1) del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

establece normas mínimas". Al interpretar los acuerdos de la OMC, el Órgano de Apelación ha escrutado constantemente el texto del acuerdo pertinente para concretar su objeto y fin.[87] En este caso, no obstante, las CE pretenden derivar un "objeto y fin", no de un texto convenido, sino de una referencia de pasada en in informe del Órgano de Apelación en un contexto que no guarda relación con la presente diferencia, y en el que la frase "normas mínimas" no se utilizó en realidad para describir un supuesto "objeto y fin" del párrafo 3 a) del artículo X. He aquí un ejemplo perfecto del peligro que se corre al interpretar los tratados de la manera en que han propuesto las CE. Éstas han seleccionado una declaración aislada sobre el párrafo 3 a) del artículo X fuera del texto del GATT de 1994, han calificado esa declaración de "objeto y fin" del párrafo 3 a) del artículo X, y luego han tratado de aprovecharla con fines totalmente interesados. Debe rechazarse la caracterización de las CE de este "objeto y fin" por ser contraria a las reglas consuetudinarias de interpretación de los tratados.

Pregunta 168 e)

La respuesta de las CE a la pregunta 168 e) reitera su posición en el sentido de que los reenvíos prejudiciales al TJCE son un instrumento para garantizar la aplicación uniforme, pero no demuestra cómo se puede conciliar esa posición con la opinión de las CE de que los párrafos 3 a) y 3 b) del artículo X enuncian obligaciones diferenciadas entre las que no hay una relación intrínseca. De hecho, las CE han presentado al TJCE en anteriores comunicaciones como una entidad que mantiene una "relación de cooperación" con los tribunales de revisión de los Estados miembros y los "ayuda", colaborando con ellos para velar por que interpreten y apliquen el derecho comunitario correctamente.[88] Así pues, el TJCE desempeñaría al parecer un papel integral en el proceso de revisión. Al mismo tiempo, las CE describen las decisiones del TJCE como instrumentos importantes para lograr la aplicación uniforme. En este sentido, las CE parecen reconocer una clara relación entre la función de aplicación uniforme y la función de revisión de las medidas administrativas. Dado que las propias caracterizaciones de las CE apoyan la existencia de una relación entre la aplicación uniforme y la revisión y rectificación de medidas administrativas, su tesis de que el párrafo 3 a) del artículo X no aporta un contexto para el párrafo 3 b) del artículo X debe ser rechazada.

Pregunta 169

En su respuesta a la pregunta 169, las CE explican que los tribunales de los Estados miembros de las CE son "órganos de las CE" en virtud del "procedimiento de reenvío judicial al TJCE y … los principios básicos de primacía del Derecho comunitario y de efecto directo."[89] Se deduce, según el

[87] *Véase, por ejemplo*, Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Condiciones para la concesión de preferencias arancelarias a los países en desarrollo*, WT/DS246/AB/R, párrafo 92 (adoptado el 20 de abril de 2004) (se concretan el objeto y fin mediante el examen del preámbulo del Acuerdo sobre la OMC y el texto de la Cláusula de Habilitación); Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000*, WT/DS217/AB/R, párrafo 311 (adoptado 27 de enero de 2003) (el objeto y fin general del ESD se expresa en el párrafo 3 del artículo 3 de dicho Acuerdo); Informe del Órgano de Apelación, *Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas*, WT/DS207/AB/R, párrafos 140 a 142 (adoptado el 23 de octubre de 2002) (en referencia a los párrafos 4 y 7 del artículo 3 del ESD para describir su objeto y fin); Informe del Órgano de Apelación, *Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado*, WT/DS121/AB/R, párrafo 95 (adoptado el 12 de enero de 2000) (refiriéndose al preámbulo del Acuerdo sobre Salvaguardias para identificar su objeto y fin).

[88] Respuestas de las CE a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 174 ("el procedimiento [de reenvío judicial] se basa en una relación de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales"); Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 244 ("el TJCE no revisa decisiones de las administraciones aduaneras nacionales, sino que ayuda a los tribunales nacionales en la revisión."); Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 470 (ídem).

[89] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 87.

argumento de las CE, que estas características habilitan a los tribunales de los Estados miembros para ser los tribunales para la pronta revisión y rectificación que las CE mantienen a fin de cumplir su obligación en el marco del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

Lo que es notable de esta línea de razonamiento es que implica que las medidas que las CE adoptan para cumplir su obligación emanada del párrafo 3 b) del artículo X son indistinguibles de las que adoptan los Estados miembros de las CE para cumplir sus obligaciones emanadas del párrafo 3 b) del artículo X. Los mismísimos tribunales que los Estados miembros de las CE mantienen para la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relacionadas con las cuestiones aduaneras son los tribunales que las CE mantienen para esa misma finalidad, según las CE. Ergo, las CE parecen argumentar que si los distintos Estados miembros cumplen sus obligaciones emanadas del párrafo 3 b) del artículo X, las CE necesariamente cumplen con su obligación emanada del párrafo 3 b) del artículo X.

Sin embargo, el hecho de que el mismo tribunal se pueda considerar, como cuestión de derecho interno de las CE, tribunal tanto del Estado miembro como de las CE no quiere decir que cumpla las prescripciones del párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994 por lo que se refiere a las obligaciones tanto de las CE como del Estado miembro. Los Estados Unidos han observado en anteriores comunicaciones que una de las características que debe tener un tribunal para cumplir la obligación de un Miembro de la OMC emanada del párrafo 3 b) del artículo X es que sus decisiones deben "regir la práctica de" "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas."[90] Evidentemente, "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" tiene otro significado para un Estado miembro de las CE que para las CE.

En cuanto a Francia, por ejemplo, "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" son las autoridades aduaneras francesas. Por lo que se refiere a las CE, "los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas" son las 25 oficinas de aduanas independientes y geográficamente limitadas de las CE. Puede ser cierto que las decisiones de un tribunal de revisión francés rijan la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas en Francia. Ahora bien, es indiscutible que *no* rigen la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas de la legislación aduanera comunitaria en todo el territorio de las CE. En este sentido, el hecho de que el tribunal francés pueda cumplir la obligación de Francia emanada del párrafo 3 b) del artículo X no quiere decir que también cumpla la obligación de las CE. En síntesis, aunque de pleno derecho comunitario un tribunal pueda desempeñar una doble función, como tribunal de un Estado miembro y como tribunal de las CE, esto no significa que también cumpla la obligación del estado miembro emanada del párrafo 3 b) del artículo X tanto como la obligación de las CE emanada del párrafo 3 b) del artículo X.

Pregunta 173

Las CE comienzan su respuesta a la pregunta 173 estableciendo una distinción entre "la aplicación de la legislación aduanera" y "las medidas de aplicación general que constituyen el sistema de administración de aduanas de las CE," como si las dos cosas no guardaran ninguna relación entre sí.[91] En realidad, no son en absoluto inconexas. Hasta el punto en que las medidas de aplicación general que constituyen el sistema de administración de aduanas de las CE (o la inexistencia de determinadas medidas) tienen como resultado la aplicación no uniforme, demuestran

[90] *Véase* Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 81; Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 83 a 85; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 102 a 109; Respuestas de los Estados Unidos a la primera serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 135 a 140.

[91] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 93.

que las CE aplican su legislación aduanera de una manera incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Como se ha comentado en la respuesta estadounidense a la pregunta 126, el diseño y la estructura del sistema de administración de aduanas de las CE demuestran esa misma conclusión.[92]

Las CE proceden a afirmar que, para establecer que el sistema de administración de aduanas de las CE "como tal" da lugar a una aplicación no uniforme, los Estados Unidos deben aportar "pruebas relativas a la aplicación coherente de la legislación"[93], citando los informes del Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Acero al carbono*, *Estados Unidos - Exámenes por extinción: Artículos tubulares para campos petrolíferos*, y *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México*.[94] Sin embargo, eso no es lo que demuestra el razonamiento en esos informes. Incluso en la cita tomada de *Estados Unidos - Acero al carbono* a que se refieren las CE queda claro que, al examinar el sentido de una legislación interna, *no* es preciso aportar pruebas de la aplicación de la ley; las pruebas extraídas del texto de la propia legislación "puede[n] apoyarse, *según proceda*, con pruebas sobre la aplicación sistemática de esas leyes[]."[95] El hecho de que en las diferencias que citan las CE las partes demandantes presentaran tales pruebas (porque otras pruebas más directas no respaldaban su posición), y que en consecuencia hubiera que examinar la calidad de esas pruebas, no significa que sean necesarias (habida cuenta, en particular, de la declaración del Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Acero al carbono*).

En contraposición a diferencias en las que otros tipos de pruebas pueden haber resultado "idóneos", en la presente diferencia los Estados Unidos han demostrado que el diseño y la estructura del sistema de administración de aduanas de las CE forzosamente da lugar a la aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria, en violación del párrafo 3 a) del artículo X. En particular, el hecho de que las CE apliquen su legislación aduanera por conducto de 25 oficinas independientes y geográficamente limitadas, sin ninguna institución o procedimiento que garantice que no se produzcan divergencias de aplicación o que las subsane prontamente de pleno derecho cuando se producen, tiene forzosamente como resultado la aplicación no uniforme en violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Además, los Estados Unidos señalan que el análisis que hacen las CE de *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México* no guarda relación con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, sino con la alegación de México en el marco del párrafo 3 del artículo 11 del *Acuerdo Antidumping*. En realidad, México hizo valer un derecho en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 además de su reclamación en virtud del *Acuerdo Antidumping*. Al tratar de esa alegación, el Órgano de Apelación declaró:

> A nuestro juicio, una evaluación de las determinaciones del USDOC con miras a establecer si el USDOC aplica las leyes y reglamentos de los Estados Unidos sobre los exámenes por extinción de manera uniforme, imparcial y razonable de conformidad con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 *supone una investigación muy*

[92] Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 9 a 16.

[93] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 96.

[94] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 95 a 98.

[95] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Derechos compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes de Alemania*, WT/DS213/AB/R, párrafo 157 (adoptado el 19 de diciembre de 2002) (sin cursivas en el original) ("*Estados Unidos - Acero al carbono*").

> *distinta de la que se necesita para determinar si el SPB requiere que el USDOC considere que determinados supuestos son concluyentes o determinantes en contra de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping*. Por consiguiente, ante la falta de toda consideración de esta alegación por el Grupo Especial, no estamos en condiciones de resolver a ese respecto.[96]

Por este motivo asimismo, el informe en *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México* no respalda la caracterización que han hecho las CE de lo que es preciso para apoyar una alegación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Pregunta 174

En su respuesta a la pregunta 174, las CE reconocen que "el efecto de la aplicación en los comerciantes es un factor pertinente que ha de considerarse al interpretar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT," pero luego declaran que "eso no quiere decir que se pueda considerar que unos casos sueltos de error administrativo, que pueden subsanarse mediante mecanismos administrativos y judiciales previstos por el sistema de un Miembro de la OMC, constituyen una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT."[97] Sin embargo, *no* es una cuestión central de la presente diferencia que "se pueda considerar que unos casos sueltos de error administrativo ... constituyen una violación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT." Los Estados Unidos no han formulado ninguna alegación de esa naturaleza. Por lo que se refiere a errores, la cuestión es *quién decide* qué constituye un error.[98] En las CE, cada una de las 25 autoridades aduaneras independientes y geográficamente limitadas, con tradiciones jurídicas distintas, decide por sí sola qué constituye la interpretación correcta de la legislación aduanera comunitaria y qué constituye error. Es decir, no existe en las CE una institución o procedimiento que haga que las oficinas aduaneras de las CE tomen esas decisiones uniformemente en la totalidad de sus 25 Estados miembros. Si, en un caso determinado, una persona afectada opina que una de esas 25 autoridades ha incurrido en error, podrá recurrir a un tribunal que, a su vez, está limitado geográficamente. Únicamente si un representante de la Comisión o de un Estado miembro ejerce su facultad discrecional de remitir una cuestión al TJCE podrá una entidad con autoridad en todo el territorio de las CE pronunciarse definitivamente sobre lo que es correcto y lo que constituye error. Este aspecto del sistema de administración de aduanas de las CE -las CE no aplican su legislación aduanera de manera uniforme en todo su territorio aduanero en primer lugar- es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Además, las CE sostienen que los efectos en los comerciantes son un factor pertinente a la carga de la prueba y seguidamente declaran que los Estados Unidos no han demostrado la existencia de efectos en los comerciantes y por lo tanto no han satisfecho la carga de la prueba.[99] Este cargo es infundado por dos motivos al menos. Ante todo, como las CE reconocen en su respuesta a la pregunta 175, los Estados Unidos no tienen obligación de demostrar la existencia de perjuicios para que prevalezca su reclamación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X.[100] En segundo lugar, el análisis que hacen las CE de los efectos en el comercio constituye una interpretación errónea del

[96] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México*, WT/DS282/AB/R, párrafo 218 (adoptado el 28 de noviembre de 2005) ("*Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México*").

[97] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 100.

[98] *Véase en general* Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 60.

[99] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 101.

[100] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 103.

informe del Grupo Especial en *Argentina - Pieles y cueros*. En su relación con el presente caso, el citado informe señalaba que una reclamación en el marco del párrafo 3 a) del artículo X requiere "un examen de los efectos reales que una medida *puede* tener sobre los agentes que desarrollan sus actividades en la esfera del comercio."[101] El Grupo Especial no se refería necesariamente a efectos mensurables, como mayores derechos aduaneros, sino a un impacto cualitativo en el entorno competitivo, lo que se desprende claramente de las dos frases siguientes del informe del Grupo Especial. Éste reconoció que no se exige que se demuestre la existencia de perjuicios comerciales. Pero, afirmó, determinar si se ha producido una infracción del párrafo 3 a) del artículo X "puede suponer un examen de la existencia de *posibles* repercusiones en la situación de competencia de la supuesta parcialidad, irrazonabilidad o falta de uniformidad en la aplicación de las leyes, reglamentos, decisiones, etc. aduaneros."[102]

En el propio asunto *Argentina - Pieles y cueros*, del informe del Grupo Especial no se desprendía con claridad que el derecho de los representantes de la industria nacional a estar presentes durante la tramitación de las formalidades aduaneras antes de la exportación de pieles en bruto aumentara los costos de los exportadores o de los compradores extranjeros de esas pieles. No obstante, este derecho modificaba el entorno competitivo, puesto que los representantes de la industria nacional podían ver información comercial confidencial de los exportadores. De forma similar, la falta de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria modifica el entorno competitivo sin tener que afectar forzosamente a la responsabilidad de los comerciantes en concepto de derechos de aduana en un caso determinado. Por ejemplo, es posible que efectivamente un comerciante se vea obligado a modificar sus prácticas de envío para tener en cuenta la aplicación no uniforme. Así ha ocurrido en especial respecto de las importaciones de monitores LCD a las CE.[103]

De hecho, la respuesta de las CE a la pregunta 174 se refiere al caso de los monitores LCD, y lo presenta como un ejemplo de la inexistencia de efectos para los comerciantes, habida cuenta de la norma de suspensión temporal de los derechos arancelarios. No obstante, como señalaron los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 137 b), considerar que el caso de los monitores LCD no acarrea efectos para los comerciantes exige que el observador adopte un criterio sumamente limitado de lo que constituye un efecto en los comerciantes.[104]

Pregunta 175

[101] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.77 (sin cursivas en el original).

[102] Informe del Grupo Especial, *Argentina - Pieles y cueros*, párrafo 11.77 (sin cursivas en el original).

[103] Véase Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 74 y nota 70; Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 52; *véase también íd.*, párrafo 21 (la divergencia en la clasificación de productos para riego por goteo efectivamente obligó al exportador a modificar sus prácticas de envío).

[104] Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafos 56 a 60; *véase también* Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 52 a 59. En su respuesta a la pregunta 174, las CE sugieren (como ya han hecho en anteriores comunicaciones) que el número de respuestas que recibieron los Estados Unidos a su invitación a que se formularan observaciones públicas sobre las cuestiones en litigio en la presente diferencia es un factor pertinente para el Grupo Especial. De hecho, carece en absoluto de pertinencia, motivo por el cual los Estados Unidos se han abstenido de responder a esas declaraciones. Los Estados Unidos se limitarían a señalar que son múltiples los métodos por los que los comerciantes se comunican con los organismos oficiales estadounidenses. Las comunicaciones por escrito en respuesta a las invitaciones oficiales para formular observaciones son tan solo uno de esos métodos. No es sorprendente que, dado el carácter público de esas observaciones y el hecho de que los interesados tengan que tratar todos los días con las autoridades aduaneras comunitarias, algunos de ellos prefieran transmitir sus opiniones por otros conductos.

La respuesta de las CE a la pregunta 175 comienza con la observación de que "no hay obligación de demostrar la existencia de "perjuicios comerciales" para poder establecer una infracción del párrafo 3 a) del artículo X del GATT",[105] afirmación con la que los Estados Unidos están de acuerdo.[106] Luego, las CE centran su atención en la cuestión de "si el demandante ha sufrido anulación o menoscabo en el sentido del artículo XXIII del GATT."[107] Después, las CE afirman erróneamente que la anulación o menoscabo se limita a los efectos en la responsabilidad de los comerciantes en concepto de derechos de aduana.[108] En efecto, las ventajas resultantes para los Estados Unidos en el marco del GATT de 1994 pueden verse anuladas o menoscabadas de muchas otras formas como consecuencia de la aplicación no uniforme por las CE de su legislación aduanera. Por ejemplo, las ventajas resultantes para los Estados Unidos sufren anulación o menoscabo si los comerciantes se ven efectivamente obligados a modificar sus prácticas de envío o a correr con costes suplementarios como consecuencia de las aplicación no uniforme por parte de las CE.

Asimismo, las CE se refieren en su respuesta al párrafo 54 de su declaración oral en la segunda reunión del Grupo Especial[109], en la que afirmaban que si los comerciantes "obtienen la clasificación óptima de sus mercancías" en el marco del sistema comunitario de aplicación no uniforme, no puede hablarse de anulación o menoscabo. Sin embargo, las CE no han aportado razones para que se pueda creer que los comerciantes, efectivamente, "obtienen la clasificación óptima de sus mercancías" en el marco del sistema comunitario de aplicación no uniforme. Por lo tanto, las CE no han refutado la presunción de que el incumplimiento de sus obligaciones emanadas del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 constituye un caso de anulación o menoscabo.[110]

Además, la línea de razonamiento de las CE en el sentido de que los comerciantes obtienen "la clasificación óptima de sus mercancías" conduce a resultados absurdos. En un sistema de aplicación no uniforme de la legislación aduanera, como ocurre en las CE, puede que exista una forma teóricamente óptima de aprovecharse del sistema. Un comerciante que disponga de tiempo y de recursos podrá tal vez encontrar la región que ofrezca el enfoque ideal en materia de clasificación y valoración, con el mínimo riesgo de que le impongan sanciones o cargue con otros costos. Por supuesto, en el caso de pequeños exportadores o de exportadores que realizan envíos con poca frecuencia, los costos de identificar el mejor método de aprovechar el sistema de aplicación no uniforme tal vez resulten excesivos. En síntesis, el simple hecho de que puede resultar teóricamente posible identificar un trato óptimo en un sistema de aplicación no uniforme no quiere decir que no exista anulación o menoscabo. Y, desde luego, tampoco significa que no se haya incurrido en incumplimiento de la obligación de aplicación uniforme prevista en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

Pregunta 176

La respuesta de las CE a la pregunta 176 gira alrededor de la pertinencia del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT de 1994 a la obligación de las CE en el marco del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Ese mismo tema se aborda en la respuesta de las CE a la pregunta 158.

[105] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 103.

[106] *Véase* Respuestas de los Estados Unidos a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 102.

[107] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 103.

[108] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 104.

[109] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 104, nota 87.

[110] Véase el párrafo 8 del artículo 3 del ESD.

En consecuencia, los Estados Unidos remiten al Grupo Especial a sus observaciones sobre la respuesta de las CE a dicha pregunta. La única observación complementaria que los Estados Unidos desean añadir es señalar que, en su respuesta a la pregunta 176, las CE plantean que la cuestión pertinente es si "éstos [los Miembros de la OMC], en el momento en que se concertó el Acuerdo de Marrakech, hubieran deseado someter a las CE a algunas normas especiales".[111] Los Estados Unidos están de acuerdo en que, al concertar el Acuerdo de Marrakech, los Miembros de la OMC no sometieron a las CE a "normas especiales". El corolario de ese hecho es que no sólo tienen las CE los mismos derechos que otros Miembros de la OMC, sino que también están sujetas a las mismas obligaciones que los demás Miembros de la OMC. Ese es precisamente el motivo por el que sería improcedente interpretar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 a través del prisma de la estructura constitucional singular de las CE.

[111] Respuestas de las CE a la segunda serie de preguntas del Grupo Especial, párrafo 109.

ANEXO B-4

OBSERVACIONES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOBRE LAS REPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

(14 de diciembre de 2005)

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ESTADOS UNIDOS

En la presente comunicación, las CE presentarán sus observaciones sobre las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial formuladas después de la segunda reunión sustantiva. Teniendo en cuenta la etapa avanzada en que se encuentra las actuaciones, las CE se referirán en esta comunicación a los argumentos que se presentan por primera vez en las respuestas de los Estados Unidos. El hecho de que las CE no formulen observaciones sobre determinada respuesta o argumento no supone que estén de acuerdo con ellos. En la medida en que los Estados Unidos reiteran argumentos a los que las CE ya han respondido en comunicaciones anteriores, las CE se remiten a ellas.

Pregunta 124

En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos repiten su afirmación, ya hecha en comunicaciones anteriores, de que están impugnando la aplicación de las leyes aduaneras de las CE "en su conjunto".[1] Además, los Estados Unidos añaden ahora que también "recibirían con satisfacción" constataciones sobre las esferas específicas de la administración aduanera de las CE indicadas en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, aunque también manifiestan que consideran que tales constataciones "no son estrictamente necesarias".[2] A continuación, los Estados Unidos presentan una enumeración de disposiciones respecto de las cuales alegan haber acreditado la falta de aplicación uniforme.[3]

Las CE ven con desconcierto estas respuestas de los Estados Unidos, que parecen destinadas a mantener todavía, en esta etapa avanzada de las actuaciones, el máximo de ambigüedad acerca de lo que impugnan exactamente.

Con respecto a la alegación de los Estados Unidos de que están impugnando "la aplicación de las leyes aduaneras de las CE en su conjunto", las CE ya han observado que semejante interpretación amplia de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no está en conformidad con los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, que exige que la medida concreta en litigio se identifique suficientemente.[4] Las CE han desarrollado esta cuestión en su comunicación complementaria sobre la Parte III de la segunda declaración oral de los Estados Unidos, a la que ahora se remiten.[5]

---

[1] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial, párrafos 2 y 3.

[2] *Ibid.*, párrafos 3 y 5.

[3] *Ibid.*, párrafo 4.

[4] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 13 y 14.

[5] Comunicación complementaria de las CE, sección II.B.

En cuanto a las esferas de la administración aduanera indicadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, y en especial en su tercer párrafo, las CE señalan que no queda claro lo que quieren decir los Estados Unidos cuando manifiestan que "recibirían con satisfacción" tales constataciones. Corresponde recordar que no es función de los grupos especiales formular constataciones sobre violación de normas por iniciativa propia, sino resolver una diferencia entre las partes. Los Estados Unidos, por lo tanto, deberían haber expresado claramente si piden o no tales constataciones.

Además, las CE desean recordar que el mandato del Grupo Especial incluye la cuestión de la aplicación no uniforme de la legislación aduanera de las CE únicamente en las esferas enumeradas en el párrafo 3 de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. Como indicaron las CE en su comunicación complementaria referente a la Parte III de la segunda declaración oral de los Estados Unidos[6], esto significa, en especial, que la alegación relativa a una supuesta falta de uniformidad en la aplicación del artículo 221 del CAC no está comprendida en el mandato del Grupo Especial. Las CE señalan que, en efecto, en la respuesta de los Estados Unidos no se menciona el artículo 221 del CAC entre las disposiciones respecto de las cuales los Estados Unidos alegan haber presentado pruebas en apoyo de constataciones accesorias de infracción.[7]

Por último, es oportuno recordar que el mandato del Grupo Especial sólo incluye, de conformidad con el artículo 7 del ESD, las medidas que estuvieran en vigencia en el momento en que el OSD le sometió el asunto. Esto significa que el Grupo Especial no puede formular constataciones sobre medidas que ya no estuvieran vigentes en el momento de su establecimiento.[8] Del mismo modo, tampoco puede tratar medidas que aún no hubieran estado en vigencia en ese momento.[9]

Se hace necesario recordar lo anterior en vista de que los Estados Unidos, a lo largo de sus comunicaciones, se han referido reiteradas veces a supuestos ejemplos de aplicación no uniforme que ellos mismos reconocen que han dejado de estar en vigencia. Son ejemplos de ello las referencias de los Estados Unidos a la clasificación de las tarjetas de red y los productos para riego por goteo.[10] Otro ejemplo es el de las persistentes referencias de los Estados Unidos a cuestiones planteadas en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración en aduana.[11] Por otro lado, los Estados Unidos también han mencionado ciertos hechos, en especial referentes a la clasificación de los monitores LCD, que son posteriores al establecimiento del Grupo Especial y, por esa razón, también están fuera de su mandato.[12]

---

[6] Comunicación complementaria de las CE, sección II.B.

[7] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial, párrafo 4.

[8] Véase el informe del Grupo Especial, *Japón - Películas*, párrafo 10.58; e informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Gasolina*, párrafo 6.19.

[9] Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Algodón americano (upland)*, párrafos 7.158 a 7.160.

[10] Véase la segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 21.

[11] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 21, donde los Estados Unidos se refieren a la cuestión de las garantías. Esto se manifiesta también en las referencias a diversas disposiciones en materia de valoración que figuran en el párrafo 4 de la respuesta de los Estados Unidos, todas las cuales parecen aludir a cuestiones tratadas en el informe del Tribunal de Cuentas pero que posteriormente dieron lugar a la adopción de medidas y, en cuanto era preciso, a que se resolvieran (véase ya la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 384 y siguientes).

[12] *Ibid.*, párrafos 55 a 57, y Pruebas documentales 76 a 78 presentadas por los Estados Unidos.

En conclusión, con respecto a la alegación de los Estados Unidos referente al párrafo 3 a) del artículo X del GATT, las CE entienden que el mandato del Grupo Especial comprende la aplicación de la legislación aduanera de las CE en el momento del establecimiento del Grupo Especial, en las esferas específicas de esa legislación enumeradas en el párrafo 3 de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos.

Pregunta 126

Las CE controvierten la afirmación de los Estados Unidos, hecha en su respuesta a esta pregunta, de que las CE carecen de "un procedimiento o institución que garantice que no se produzcan divergencias de aplicación entre las 25 autoridades aduaneras diferentes, o que las concilie sin demora y sistemáticamente cuando se produzcan".[13] Las CE ya han explicado los numerosos mecanismos del derecho comunitario que aseguran una aplicación uniforme del derecho aduanero de las CE. A fin de evitar repeticiones, las CE se remiten a sus comunicaciones precedentes.[14]

Lo notable de la respuesta de los Estados Unidos, sin embargo, es su afirmación de que esa supuesta falta de procedimientos o instituciones existe "con respecto a *todas* las esferas de la administración de aduanas por la misma razón", incluyendo la aplicación de las normas de clasificación, las normas de valoración y los procedimientos de aduana.[15] En otras palabras, las críticas de los Estados Unidos sobre determinados aspectos del sistema de las CE en esferas específicas, como el sistema EBTI, no parecen ser esenciales a los efectos de las alegaciones de los Estados Unidos. Por consiguiente, a pesar de las protestas de los Estados Unidos en sentido contrario, lo que parecen procurar los Estados Unidos es nada menos que una reforma fundamental del sistema de administración aduanera de las CE, y el único instrumento viable que los Estados Unidos han sugerido con ese fin parece consistir en la creación de un organismo aduanero comunitario.

Pregunta 127

En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos presentan en primer lugar una lista de los procedimientos e instituciones de las CE que aseguran, según éstas, la aplicación uniforme del derecho aduanero comunitario; pero a continuación los Estados Unidos se quejan de que "*ni siquiera uno solo* de los procedimientos o instituciones precedentes establece una rápida conciliación, de pleno derecho, de las divergencias".[16]

Como respuesta, las CE desean recordar ante todo que la apreciación acerca de si el sistema comunitario garantiza o no la aplicación uniforme debe efectuarse sobre la base del sistema en su conjunto, y no examinando determinadas medidas tomadas aisladamente.[17] Por lo tanto, la cuestión no consiste en determinar si uno u otro instrumento asegura por sí solo la aplicación uniforme, sino si la aseguran o no los instrumentos disponibles considerados en conjunto.

---

[13] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 del Grupo Especial, párrafo 12.

[14] Véase, en particular, la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo III.

[15] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 126 del Grupo Especial, párrafo 14 (las cursivas figuran en el original). Se observa que en su sentencia en el asunto *Intermodal Transport*, a la que hicieron referencia los Estados Unidos en su segunda declaración oral, el TJCE observó igualmente que existen diversos mecanismos para garantizar una práctica de clasificación uniforme en las CE (Estados Unidos - Prueba documental 71, párrafos 41 a 44).

[16] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 127 del Grupo Especial, párrafo 19 (las cursivas figuran en el original).

[17] Segunda declaración oral de las CE, párrafo 45; y primera declaración oral de las CE, párrafo 31.

En segundo lugar, los Estados Unidos parecen quejarse porque, con la posible excepción de la revisión judicial ante los tribunales de los Estados miembros, ninguno de los instrumentos ofrece una conciliación "de pleno derecho". A este respecto las CE desean destacar que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo exige que los Miembros de la OMC garanticen una aplicación uniforme, pero no prescribe la forma en que debe alcanzarse ese objetivo. Por consiguiente, ningún Miembro de la OMC está obligado a otorgar a los comerciantes ningún "derecho" respecto de la aplicación uniforme. La cuestión del grado en que un Miembro de la OMC garantiza la aplicación uniforme a través de medidas que pueden poner en funcionamiento los comerciantes "por derecho propio" o a través de medidas discrecionales de las autoridades constituye, pues, un asunto que corresponde a la estructura del sistema de cada Miembro, y el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prejuzga a ese respecto.

Pregunta 128

Las CE consideran digno de mención que los Estados Unidos, al responder a la pregunta del Grupo Especial, digan que "debido a su especificidad y a la diversidad de los temas que abarcan, resultaría imposible indicar la totalidad de [las medidas]" que complementan las mencionadas en la pregunta del Grupo Especial.[18] Esto contrasta agudamente con la afirmación de los Estados Unidos de que están impugnando "la aplicación de las leyes aduaneras de las CE en su conjunto", lo que constituye un conjunto de normas aún más vasto. Por lo tanto, la respuesta de los Estados Unidos apoya el criterio de las CE de que la referencia a "la aplicación de la legislación aduanera de las CE en su conjunto" no es una descripción suficiente de la medida concreta en litigio.[19]

Pregunta 129

Según la respuesta de los Estados Unidos, además de las disposiciones que establecen sanciones, "la información arancelaria vinculante, las disposiciones de auditoría de los Estados miembros, las directrices de los Estados miembros sobre la aplicación del criterio de los efectos económicos para decidir si se autoriza la transformación bajo control aduanero, y las directrices publicadas por instituciones comunitarias" son "disposiciones administrativas". En cambio, se supone que las normas del Reglamento del arancel, el CAC y el Reglamento de Aplicación no son "administrativas" porque contienen "normas aduaneras sustantivas".[20]

Las CE no advierten cuál puede ser el fundamento de esas distinciones, que son totalmente artificiales. La distinción pertinente no se plantea entre "disposiciones administrativas" y "disposiciones sustantivas", sino entre las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas que se mencionan en el párrafo 1 del artículo X del GATT y su aplicación mencionada en el párrafo 3 a) del mismo artículo.[21] A pesar de los malabarismos que han realizado los Estados Unidos para demostrar lo contrario[22], una ley no constituye la "aplicación" de otra ley.

Cabe señalar que la clasificación en cuestiones "administrativas" y "sustantivas", que proponen los Estados Unidos, es totalmente caprichosa. Por un lado no está claro qué tiene que ver la información arancelaria vinculante, que sin duda constituye una aplicación puesto que sólo se refiere a

[18] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 128 del Grupo Especial, párrafo 22.

[19] Observaciones sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial, *supra*.

[20] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 129 del Grupo Especial, párrafo 23.

[21] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 18 y siguientes.

[22] Véase, por ejemplo, la referencia extremadamente artificiosa que hacen los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 129 del Grupo Especial (párrafo 24) a "la disposición que lleva a cabo esa aplicación".

un titular determinado, con las directrices a que se refieren seguidamente los Estados Unidos.[23] Por otro lado, no es exacto que el Reglamento del arancel, el CAC y el Reglamento de Aplicación sólo contengan normas "de naturaleza sustantiva". Por el contrario, muchas de las disposiciones que contienen esas normas son de carácter procesal y, en consecuencia, según los Estados Unidos, tendrían que considerarse "de aplicación" y no medidas que deben aplicarse. La interpretación de los Estados Unidos, por lo tanto, conduce a resultados manifiestamente absurdos.

Pregunta 130

Como ya han explicado las CE, el término "administrativo" se empleó por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Argentina - Pieles y cueros* en un contexto diferente y no tiene pertinencia directa respecto de la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X del GATT en este caso.[24]

En su respuesta los Estados Unidos han presentado observaciones sobre el significado corriente del término "administrativo", que definen como "ejecutivo", es decir, algo que "tiene la función de poner en práctica alguna cosa".[25] Sin embargo, como ya han indicado las CE, no cabe afirmar que una ley de aplicación general "pone en práctica" otra ley de aplicación general. Además, todas las disposiciones del "derecho administrativo", que en muchos Estados Miembros de la OMC es la expresión empleada para caracterizar las normas que rigen la actuación de las autoridades públicas, tendrían que considerarse de lo contrario como "de administración". Por consiguiente, al margen por completo de que la distinción entre medidas "administrativas" y "sustantivas" carece de todo fundamento en el artículo X del GATT, la interpretación de los Estados Unidos no respeta el sentido corriente de la expresión "administrativo" y llevaría a resultados manifiestamente absurdos.

Pregunta 132

En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos afirman lo siguiente: "En un sistema que disponga la aplicación uniforme, toda diferencia que pueda surgir en la aplicación entre una región y otra debería resolverse sin demora y de pleno derecho. Si tal cosa ocurre, no habrá contradicciones que deban tolerase."[26]

Las CE no están seguras de haber comprendido la relación entre la primera y la segunda frase de la respuesta de los Estados Unidos. Por un lado los Estados Unidos parecen reconocer que pueden surgir "diferencias". Por otra, afirman que "no habrá contradicciones que deban tolerarse". No queda claro para las CE si a juicio de los Estados Unidos existe distinción entre "diferencias" y "contradicciones". Si la hay, las CE se preguntan en qué consiste. Si no la hay, entonces la segunda frase parecería contradecir la primera.

El único modo de conciliar las dos frases consistiría entonces en adoptar un significado de "pronta" que fuera equivalente a "instantánea". Pero las CE consideran que tal definición no sería razonable, ni siquiera en el más centralizado de los sistemas de administración aduanera. En efecto, en cualquier administración las medidas administrativas difícilmente pueden ser "instantáneas". Por consiguiente, tiene que bastar a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT que las diferencias se concilien en un tiempo razonable, teniendo en cuenta también las circunstancias de cada

[23] En lo que respecta a las "disposiciones de auditoría de los Estados miembros", los Estados Unidos no han especificado a qué disposiciones se refieren. Sin embargo, en la medida en que existan tales disposiciones a nivel de los Estados miembros, es indudable que tendrían que considerarse leyes y no su aplicación.

[24] Segunda declaración oral de las CE, párrafos 30 y 74.

[25] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 130 del Grupo Especial, párrafo 26.

[26] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 132 del Grupo Especial, párrafo 31.

caso concreto. Las CE observan que esto está en conformidad con lo que dicen los propios Estados Unidos acerca del párrafo 3 b) del artículo X del GATT, respecto del cual han alegado que la "prontitud" es "función, por ejemplo, de la complejidad del caso".[27]

Los propios Estados Unidos ilustran lo anterior al reconocer que, incluso en un sistema centralizado, pueden existir "contradicciones momentáneas entre las regiones", por ejemplo, debido a interrupciones de las comunicaciones. Como ejemplo de ello, los Estados Unidos mencionan que los funcionarios de un puerto del territorio de un Miembro pueden no tener conocimiento inmediato de una decisión en materia de clasificación dictada por la autoridad aduanera en otro puerto diferente.[28] Pero los Estados Unidos no explican por qué ha de presumirse que en un sistema centralizado de administración aduanera esas contradicciones necesariamente serían sólo "momentáneas" ni, en particular, cómo y por qué serían instantáneamente detectadas cuando se produjesen.

Los Estados Unidos también exigen una vez más que la conciliación de las diferencias se efectúe "de pleno derecho".[29] A este respecto las CE desean reiterar que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo exige que la aplicación sea uniforme, pero no que la conciliación de las divergencias tenga lugar necesariamente "de pleno derecho".[30]

Por último, los Estados Unidos también critican el hecho de que la conciliación tenga lugar en las CE en una forma que califican de "caótica" y que no haya "un camino claramente establecido" para resolver las diferencias.[31] Desde luego, los Estados Unidos están en lo cierto cuando dicen que en las CE existen diversos instrumentos, todos los cuales contribuyen a la aplicación uniforme, y por consiguiente puede haber distintos caminos por los que se resuelva cada caso. Cabe sostener que esto representa una diferencia con el sistema estadounidense, en que, debido a la existencia del Servicio de Aduana de los Estados Unidos como organismo centralizado, puede haber un número menor de instrumentos y vías procesales. Pero esta diferencia estructural entre el sistema de las CE y el de los Estados Unidos nada tiene que ver con el cumplimiento por las CE del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, ni determina que el sistema de las CE sea "caótico". El párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige que todas las diferencias se resuelvan siempre por "un único camino". Por el contrario, deja al arbitrio de los Miembros de la OMC la elección de los instrumentos que deseen emplear para garantizar la aplicación uniforme, y esos instrumentos pueden variar según las circunstancias de cada caso.

Pregunta 133

Las CE pueden remitirse a sus observaciones sobre las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 129 y 130 del Grupo Especial.

Pregunta 134

Las CE toman nota de que los Estados Unidos no impugnan la manera en que opera el Comité del Código Aduanero, en sí misma.[32] Sin embargo, los Estados Unidos repiten sus críticas en el

[27] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 40 del Grupo Especial, párrafo 152.

[28] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 132 del Grupo Especial, párrafo 32.

[29] *Ibid.*, párrafo 31.

[30] Tercer párrafo de las observaciones sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 127 del Grupo Especial, *supra*.

[31] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 132 del Grupo Especial, párrafo 34.

[32] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 134 del Grupo Especial, párrafo 42.

sentido de que los comerciantes no pueden someter sus asuntos al Comité del Código Aduanero "por derecho propio" para que se resuelvan allí.[33] A este respecto las CE sólo pueden repetir que, ante todo, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no exige que se dé a los comerciantes ningún derecho determinado, ante el Comité del Código Aduanero ni en otro lugar.[34] En consecuencia, el hecho de que la legislación comunitaria otorgue o no a los comerciantes o a la rama de producción el derecho de que se les escuche antes de adoptarse una medida como un reglamento sobre clasificación constituye una cuestión referente a la estructura interna del sistema comunitario que carece de toda pertinencia a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.[35]

Las CE también toman nota de las alegaciones de los Estados Unidos acerca de la Prueba documental 103 presentada por las CE, en el sentido de que "la comisión del Comité del Código Aduanero que se ocupa de la IAV sólo se ha reunido dos o tres veces [por año]".[36] Esta afirmación se basa en un malentendido. Los Estados Unidos se refieren a las reuniones de la subcomisión de "IAV" de la Comisión de Nomenclatura Arancelaria y Estadística del Comité del Código Aduanero. Pero esa comisión sólo se ocupa de los aspectos técnicos y generales del funcionamiento del sistema de IAV. Los casos de divergencia en la IAV se tratan en las tres subcomisiones sectoriales de la Comisión de Nomenclatura Arancelaria y Estadística (Agricultura y Productos Químicos, Aparatos Mecánicos y Textiles). Como puede observarse en la Prueba documental 103 presentada por las CE, entre 2002 y 2004 esas tres subcomisiones celebraron en total 13-14 reuniones por año.

Pregunta 135

En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos afirman que el "trato" que los exportadores e importadores esperan que sea del mismo tipo no se refiere solamente a la cuantía de los derechos liquidados sobre determinadas mercancías, sino que también incluye las sanciones a que pueden verse expuestos en diferentes lugares.[37] Sobre la base de esta respuesta, los Estados Unidos parecen interpretar que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT es una disposición general que garantiza la igualdad de trato a los comerciantes en todos los aspectos relacionados con sus operaciones.

Las CE desean recordar que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no es una norma general que estipule al igualdad de trato de los comerciantes, sino una disposición más limitada que exige la aplicación uniforme de determinado conjunto de normas. La interpretación de los Estados Unidos pasa por alto que el párrafo 3 a) del artículo X del GATT está, por consiguiente, limitado en dos formas: en primer lugar porque sólo se aplica a las normas enumeradas en el párrafo 1 del artículo X del GATT y, por lo tanto, no incluye disposiciones sobre sanciones; y en segundo lugar, porque el párrafo 3 a) del artículo X del GATT sólo se refiere a la aplicación de las normas, pero no a las diferencias sustanciales que pueden existir entre las leyes aplicables en diferentes partes del territorio de un Miembro de la OMC.

---

[33] *Ibid.*, párrafo 44.

[34] Véase el tercer párrafo de las observaciones sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 127 del Grupo Especial, *supra*.

[35] Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 272. Además, como ya han señalado las CE, el Comité del Código Aduanero efectivamente escucha en algunos casos a los comerciantes y a representantes de la rama de producción conforme al artículo 9 de su Reglamento (Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 87).

[36] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 134 del Grupo Especial, nota 32.

[37] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 135 del Grupo Especial, párrafo 49.

Pregunta 136

En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos contestan que otras personas distintas del destinatario de la resolución "tienen el derecho de invocar una resolución vigente como fundamento del principio enunciado en ella" y, en consecuencia, "pueden gozar de los beneficios que ella otorga".[38] Esta respuesta no parece exponer correctamente los efectos jurídicos de las resoluciones anticipadas en el orden jurídico estadounidense.

Ante todo es importante observar que las resoluciones anticipadas de la Aduana estadounidense no son jurídicamente vinculantes. Como declaró el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto *US* contra *Mead Corporation*, las resoluciones anticipadas no dan lugar a la "*deferencia de Chevron*", es decir, no son jurídicamente vinculantes para los tribunales en las actuaciones en que conocen.[39] El Tribunal Supremo declaró que las resoluciones anticipadas sólo dan lugar a la "*deferencia de Skidmore*", es decir, dan lugar a una deferencia "proporcional a su 'eficacia de persuasión'".[40] En otras palabras, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sólo asigna un grado de eficacia muy limitado a las resoluciones anticipadas de la Aduana de los Estados Unidos.

Además, debe señalarse que de conformidad con 19 CFR 177 (9) (c), ninguna otra persona distinta del destinatario de la notificación de una resolución debe invocarla ni presumir que los principios de la resolución han de aplicársele en relación con cualquier transacción distinta de la indicada en las notificaciones. Esta disposición ha sido aplicada reiteradas veces por los tribunales estadounidenses y las autoridades de los Estados Unidos para impedir que los comerciantes invocaran notificaciones de resoluciones no dirigidas a ellos.

Por ejemplo, el asunto *Fujitsu Compound Semiconductor, Inc.* contra *United States*[41] se refería a la importación de módulos de diodos para láser. En ese caso, Fujitsu importó los módulos, que se clasificaron en la subpartida arancelaria 8541.40.95, gravada al 4,2 por ciento *ad valorem*. Se efectuó la liquidación de los diodos para láser y Fujitsu no impugnó las resoluciones. Después de las liquidaciones, Toshiba importó el mismo producto. Posteriormente, en dos resoluciones de la Oficina Central de Aduanas se determinó que la clasificación correcta de los módulos de diodos para láser correspondía a la partida 8541.40.20, con un gravamen del 2 por ciento *ad valorem*. Frente a las resoluciones contradictorias, Fujitsu pidió entre otras cosas la revocación de la decisión definitiva sobre la liquidación. El tribunal, al llegar a su conclusión de que las resoluciones sobre clasificación de la Oficina Central no podían aplicarse a la liquidación no impugnada, señaló lo siguiente:[42]

> [l]a mera existencia de una notificación de la Oficina Central no significa que automáticamente pueda aplicarse a importaciones distintas de las comprendidas en la notificación. En este caso, la resolución se notificó a Toshiba respecto de un producto similar, y no a Fujitsu. El Reglamento de Aduanas dispone que ninguna otra persona distinta del destinatario de la notificación de una resolución debe invocarla ni presumir que los principios de la resolución han de aplicársele en relación con cualquier transacción distinta de la indicada en las notificaciones.

[38] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 136 del Grupo Especial, párrafo 52.

[39] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 103, y CE - Prueba documental 30.

[40] CE - Prueba documental 130.

[41] *Slip Op. 2003-6 (Ct. Int´l Trade 2003)* (CE- Prueba documental 161).

[42] CE - Prueba documental 161, páginas 7 y 8. Aunque el texto citado se refiere a un "producto similar", en una parte anterior del dictamen se indica que los productos, en realidad, eran idénticos (página 2).

También ilustra el mismo argumento la Resolución HQ 954622 de la Aduana de los Estados Unidos.[43] En ese caso, un comerciante pretendió aplicar retroactivamente una notificación de la Oficina Central de Aduanas a mercancías que había importado, basándose en que, en una resolución de la Aduana que había obtenido anteriormente, se había dado a productos similares una clasificación distinta. Aunque en la resolución se señalaba expresamente que lo dispuesto en 19 CFR § 177 (9) (c) no se aplica en general a ninguna transacción distinta de la indicada en la notificación, en ese caso la resolución de la Oficina Central de Aduanas podría aplicarse retroactivamente a una transacción de un tercero sobre la base del texto de la resolución respectiva. En particular, se establecía en ella: "queda revocada igualmente toda resolución dictada con anterioridad que se contradiga claramente con el análisis y el resultado aquí indicados". Por lo tanto, aunque las resoluciones pueden formularse en términos que les den efectos más amplios, lo dispuesto en 19 CFR § 177 (9) (c) normalmente excluye la aplicación vinculante de las resoluciones a terceros y a las transacciones no tratadas en ellas.

Por consiguiente, los Estados Unidos exageran enormemente la diferencia que existe entre las resoluciones anticipadas y las IAV de las CE. Además, los Estados Unidos desconocen el hecho de que, a diferencia de las resoluciones anticipadas en el sistema estadounidense, las IAV no son el único instrumento que existe para garantizar la aplicación uniforme de las normas de clasificación. Por ejemplo, como ya se ha explicado, las CE pueden dictar reglamentos sobre clasificación o notas explicativas comunitarias.[44] Los reglamentos sobre clasificación son jurídicamente vinculantes en toda la Comunidad conforme al artículo 249 del Tratado Constitutivo.[45] Además, aunque deben respetar la NC, cualquier cuestión referente a su validez tendría que someterse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para una decisión prejudicial, y el Tribunal examinaría si la Comisión ha cometido un "error manifiesto de apreciación".[46] Mientras el tribunal no ha declarado la nulidad de un reglamento sobre clasificación, éste debe ser aplicado por todas las autoridades aduaneras y puede ser invocado por los particulares. En consecuencia, parece justificado afirmar que la eficacia jurídica de los reglamentos sobre clasificación de las CE es considerablemente mayor que la que tienen las resoluciones de la Aduana estadounidense.

En general, sin embargo, la cuestión de los efectos jurídicos de la IAV y de las resoluciones anticipadas no es pertinente respecto del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Debe recordarse que esta norma no contiene absolutamente ninguna obligación de tener un sistema de resoluciones anticipadas. Menos aún prescribe precisamente en qué forma debe diseñarse tal sistema de resoluciones anticipadas desde el punto de vista de los efectos que hayan de tener. Si se deseara crear tales obligaciones específicas, ello debería hacerse a través de las negociaciones de Doha sobre facilitación del comercio y no a través del proceso de solución de diferencias.[47] Por consiguiente, aunque los Estados Unidos tenían perfecto derecho de optar por un sistema de resoluciones anticipadas organizado en la forma en que lo está, las CE tienen igual derecho de organizar en distinta forma su sistema de IAV.

[43] CE - Prueba documental 162.

[44] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 92 y siguientes.

[45] *Ibid.*, párrafo 93.

[46] *Ibid.*, párrafo 95.

[47] Cabe recordar que las resoluciones anticipadas son un tema de las negociaciones de Doha sobre facilitación del comercio, y que los Estados Unidos han presentado diversas propuestas a ese respecto (Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 227).

Pregunta 137 a)

Ante todo, las CE señalan que la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta del Grupo Especial no contesta las observaciones hechas por las CE en los párrafos 108 y 109 de su Segunda comunicación escrita: es decir, que la carta de la Prueba documental 50 presentada por los Estados Unidos, dirigida a Ornata GmbH, no parece tener relación alguna con el recurso administrativo decidido por la Oficina Principal de Aduana de Bremen en su comunicación que figura en la Prueba documental 23 presentada por los Estados Unidos.

En cambio, las CE no habían controvertido que ambas comunicaciones pueden referirse a importaciones del mismo tipo de producto. Sin embargo, como no existe ninguna contradicción sustantiva entre las dos decisiones de las autoridades de Alemania, ya que ambas excluyen la clasificación de los productos debido a la falta de una capa de tundizno perceptible a simple vista[48], sigue no resultando claro para las CE cuál es el argumento que pretendían hacer los Estados Unidos al presentar el segundo caso. En lo que respecta a las IAV dictadas por las autoridades aduaneras de los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido, las CE ya han explicado que las mercancías examinadas por las autoridades de Alemania no correspondían a las indicadas en la IAV, que daban de los productos una descripción uniforme que los presentaba con revestimiento visible de tundizno.[49]

A este respecto, en la respuesta de los Estados Unidos también se vuelve a hacer referencia a la declaración jurada de Mark J. Berman, Presidente de Rockland Industries, que los Estados Unidos presentaron con su segunda declaración oral como Prueba documental 79. Sin embargo, como ya han señalado las CE[50], esa declaración jurada no tiene absolutamente ninguna eficacia probatoria.

En primer lugar, se indica en la declaración jurada (punto 5) que "el producto a que se refiere la carta de ZPLA fue fabricado por Rockland y vendido a Ornata GmbH. Pero las CE nunca controvirtieron este punto. En cambio, la declaración jurada no da respuesta alguna acerca de si los productos para los cuales se dictó la IAV de las autoridades de los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido eran también productos de Rockland.

En segundo lugar, la cuestión referente a la correcta clasificación del producto no se refiere a que éste "contiene tundizno como parte del proceso de revestimiento", sino a la cuestión de si existe una capa de tundizno perceptible a simple vista. Mal puede ser esto una cuestión que se dilucide mediante la presentación de una declaración jurada del Presidente de la empresa fabricante del producto. También lo ilustra el hecho de que la propia Aduana de los Estados Unidos tuvo dificultades para clasificar el producto, y debió recurrir reiteradas veces a exámenes de laboratorio.[51]

En tercer lugar, no puede considerarse al Sr. Berman un testigo hábil a los efectos de este asunto. Los Estados Unidos han rechazado todas las dudas referentes al crédito del Sr. Berman argumentando que no tiene interés alguno en el resultado de esta diferencia de la OMC.[52] Aunque

[48] En su respuesta a la pregunta 137 a) del Grupo Especial (párrafo 55), los Estados Unidos alegan que la Oficina Principal de Aduanas de Bremen excluyó el producto de Rockland fundándose en que "el producto contenía sustancias plásticas en su revestimiento, independientemente de que se mezclaran o no en ese revestimiento tundizno u otros elementos". Esto representa otra nueva interpretación de la decisión que hacen los Estados Unidos, que carece sin embargo de todo fundamento en el texto de la decisión (véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 333 y siguientes).

[49] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 335 y siguientes.

[50] Declaración final de las CE, párrafo 16.

[51] Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 345.

[52] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 a) del Grupo Especial, nota 39.

puede ser exacto que el Sr. Berman no tiene interés directo en el resultado de esta diferencia de la OMC, no es menos cierto que tiene interés evidente en una clasificación favorable de los forros opacos para cortinas. Por lo tanto, resulta difícil imaginar que el Sr. Berman formulase una declaración jurada que tuviera consecuencias negativas para la clasificación arancelaria de los productos de Rockland.

Por consiguiente, la declaración jurada presentada por los Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna eficacia probatoria. Los Estados Unidos no han demostrado que exista falta de uniformidad respecto de la clasificación de los forros opacos para cortinas en las CE.

Pregunta 137 b)

En lo que respecta al Reglamento 493/2005, por el que se suspenden los tipos de derechos aplicables a ciertos tipos de monitores LCD, los Estados Unidos sostienen que ese reglamento no es satisfactorio porque no es más que una solución temporal que no resuelve el problema de clasificación.[53] En respuesta a las explicaciones de las CE de que éstas adoptarán, a más tardar antes de la expiración del Reglamento 493/2005, las medidas necesarias para asegurar la continuación de una aplicación uniforme, los Estados Unidos se limitan a afirmar que "no tienen conocimiento de ninguna disposición que imponga tal resultado". Además, los Estados Unidos alegan que "los comerciantes organizan sus actividades mercantiles con una perspectiva de largo plazo" y en consecuencia pueden estar adoptando sus decisiones en materia de envíos previendo la situación que podría existir después de la expiración del Reglamento 493/2005.

A juicio de las CE, estas críticas son infundadas. Una reclamación ante la OMC no puede basarse en especulaciones sobre actos u omisiones futuros de un Miembro de la OMC. Por lo tanto, carece de toda pertinencia que haya o no alguna disposición que "imponga" la adopción de las medidas necesarias por las CE después de la expiración del Reglamento 493/2005. Lo que importa es si las CE efectivamente habrán de hacerlo, y sólo si no aseguran una aplicación uniforme podrán los Estados Unidos formular una reclamación, pero no anticipándose a una omisión eventual.

La referencia a la planificación de largo plazo realizada por los comerciantes carece igualmente de pertinencia a los efectos del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Las CE aprecian, desde luego, que los comerciantes tienen interés en la estabilidad del entorno comercial. Pero el párrafo 3 a) del artículo X del GATT es una disposición que exige la aplicación uniforme. No es una disposición que prohíba modificaciones legislativas o proteja expectativas de los comerciantes en cuanto al mantenimiento de determinadas medidas. Por consiguiente, el párrafo 3 a) del artículo X del GATT no prejuzga acerca de la cuestión de las medidas que adoptarán las CE después de la expiración del Reglamento 493/2005 para garantizar la aplicación uniforme.

A continuación, los Estados Unidos pasan a la cuestión de los monitores no comprendidos en el límite de tamaño que fija el Reglamento 493/2005, y a ese respecto se remiten a su segunda declaración oral y a las Pruebas documentales 75 a 78 presentadas por los Estados Unidos.[54]

A este respecto, las CE desean señalar que algunas de las medidas mencionadas por los Estados Unidos datan de julio de 2005, por lo que no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.[55] Además, como ya han indicado las CE, la clasificación de los monitores LCD es una

[53] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial, párrafo 56.

[54] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial, párrafos 56 y 58 a 60.

[55] Estados Unidos - Pruebas documentales 77 y 78. Véase también el séptimo párrafo de las observaciones sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial, *supra*.

cuestión reciente y actual que las instituciones comunitarias mantienen en examen detenido.[56] Sobre la base de las consultas en curso con las autoridades aduaneras de los Estados miembros, así como con la rama de producción interesada, los servicios de la Comisión Europea han preparado un proyecto de reglamento de clasificación.[57] Esa medida se someterá al dictamen del Comité del Código Aduanero en su reunión del 16 de diciembre de 2005.[58]

Los Estados Unidos también presentan ahora una carta muy reciente, de 6 de diciembre de 2005, dirigida a la Comisión Europea por la asociación de la rama de producción europea (EICTA), en la que esa asociación protesta contra la adopción de un reglamento sobre clasificación de los monitores de que se trata, manifestando su discrepancia con la clasificación prevista.[59] Las CE no advierten cómo puede apoyar esta carta la posición de los Estados Unidos. En realidad, en su carta la EICTA exhorta expresamente a la Comisión a **aplazar** la discusión acerca del reglamento sobre clasificación. Esto puede ser comprensible desde el punto de vista de esa asociación, que discrepa con la Comisión sobre la cuestión de fondo de la clasificación. Lo que no se comprende es por qué consideran los Estados Unidos que esta carta de la asociación que reúne a la rama de producción, en que exhorta a aplazar una medida que contribuirá a la aplicación uniforme, apoya su propia posición según la cual las CE no aseguran una aplicación uniforme.

Con respecto a la carta de la EICTA, los Estados Unidos también han criticado que la Comisión no hubiera celebrado consultas con la rama de producción acerca del proyecto de reglamento.[60] A este respecto las CE desean señalar que el hecho de que un Miembro de la OMC consulte o no a la rama de producción antes de adoptar una medida reglamentaria, y la forma y oportunidad en que lo haga, son cosas que no tienen nada que ver con el requisito de aplicación uniforme establecido en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Además, no es exacto que la Comisión no haya consultado a la rama de producción. Los servicios de la Comisión han consultado en diversas formas a la rama de producción, y también la EICTA ha tenido ocasión de expresar sus puntos de vista acerca de la clasificación de los monitores LCD con interfaz videodigital ante el Comité del Código Aduanero.[61] Para información del Grupo Especial, las CE adjuntan también la respuesta de la Comisión Europea a la carta de la EICTA (CE - Prueba documental 165).

Pregunta 137 c)

En el párrafo 61 de sus respuestas los Estados Unidos repiten citas selectivas hechas antes acerca de normas de control y prácticas de trabajo, y sobre el trato que se da a los comerciantes con agentes en varios Estados miembros, pero no resulta evidente que esas referencias sean apropiadas al responder a la pregunta del Grupo Especial; en cualquier caso, las CE ya se han referido en su Primera comunicación escrita a la cuestión del trato dado a los comerciantes. Las CE también desean mencionar una vez más que es en la esfera de la auditoría donde se plantea la mayoría de los

[56] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 361; y declaración final de las CE, párrafo 15.

[57] CE - Prueba documental 163.

[58] CE - Prueba documental 164.

[59] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial, párrafo 59, y Estados Unidos - Prueba documental 81.

[60] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 b) del Grupo Especial, párrafo 59.

[61] Véase la Prueba documental 84 presentada por las CE, en que la EICTA reconoce que tuvo la posibilidad de presentar sus puntos de vista en la reunión del Comité de Nomenclatura del 8 de noviembre de 2004.

problemas prácticos referentes a las normas comunes de control y prácticas de trabajo, y la evolución de las CE en materia de auditoría ya ha sido expuesta.

Con respecto a la tercera aseveración que hacen los Estados Unidos en el párrafo 61, las CE desean subrayar que, aunque la legislación comunitaria no dispone actualmente decisiones sobre valoración de alcance comunitario, esta situación actual no determina en sí misma una falta de aplicación uniforme ni puede demostrar por sí sola la falta de aplicación uniforme prevista en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Pregunta 137 d)

En su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos se refieren a un "requisito de aprobación previa" aplicado "en la práctica".[62] A este respecto debe destacarse que la referencia a tal requisito proviene de un pasaje formulado en términos ambiguos del informe del Tribunal de Cuentas de 2000.[63] Las CE desean informar al Grupo Especial de que, sobre la base de un estudio de las prácticas de las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros, está en condiciones de confirmar que ningún Estado miembro aplica, por disposición legal ni en la práctica, un requisito de aprobación previa respecto de las condiciones en que puede establecerse el valor de transacción sobre la base de una venta anterior distinta de la última a los efectos de la valoración en aduana. Los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de lo contrario. En consecuencia, la alegación de los Estados Unidos es infundada.

Pregunta 137 e)

Los Estados Unidos no explican el significado de la expresión "parámetros más amplios", en que basan su breve respuesta a esta pregunta. Sin embargo, las CE desean señalar que la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos no ha demostrado que las autoridades aduaneras de las CE apliquen el procedimiento de domiciliación de manera no uniforme. La Primera comunicación escrita de los Estados Unidos sólo indica que los Estados Unidos se han basado en información confusa, de fuentes desconocidas. Además, durante todo el desarrollo de las actuaciones los Estados Unidos no han rebatido los argumentos presentados por las CE en su Primera comunicación escrita[64] ni han presentado ninguna prueba con ese fin, a pesar de que tales deficiencias ya fueron destacadas por las CE en su primera declaración oral.[65] Al responder a esta pregunta del Grupo Especial, nuevamente los Estados Unidos se abstienen de contestar.

Pregunta 138

Con respecto a esta pregunta, las CE desean aclarar que nunca han sostenido que los "procedimientos de control" fueran parte de las normas sobre valoración. Los procedimientos de control, en principio, pueden servir para verificar la correcta aplicación de numerosas normas aduaneras, que incluyen las normas sobre valoración, pero no exclusivamente. Las CE han respondido a los argumentos de los Estados Unidos acerca de la auditoría en relación con la discusión sobre la valoración en aduana porque es ése el contexto en que los Estados Unidos plantearon la cuestión: con referencia al informe del Tribunal de Cuentas sobre la valoración en aduana.[66] Del

[62] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 d) del Grupo Especial, párrafo 62.

[63] Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 395.

[64] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 419 a 427.

[65] Primera declaración oral de las CE, párrafo 49.

[66] Véase la Primera comunicación escrita de las CE, nota 197.

mismo modo, como ha señalado el Grupo Especial, los Estados Unidos, en su segunda declaración oral, se refirieron una vez más a la cuestión de las auditorías en la sección relativa a las normas de valoración.[67]

Sin embargo, las CE controvierten que las normas referentes a la auditoría con fines de aduana estén comprendidas en el párrafo 1 del artículo X. Esta disposición sólo abarca aquellas leyes y reglamentos que corresponden a la materia tratada en ella. Además, los Estados Unidos no han demostrado en modo alguno la existencia de falta de uniformidad en las CE en lo que respecta al control con fines aduaneros. Los Estados Unidos han aludido reiteradas veces a "diferentes disposiciones de auditoría" en los Estados miembros, pero nunca han aclarado a qué disposiciones se refieren, ni en qué sentidos serían diferentes. Los Estados Unidos tampoco han presentado ninguna prueba de que la realización de los controles de aduana en las CE no sea uniforme en la práctica.[68]

Pregunta 139

Con carácter de aclaración, las CE desean destacar que los documentos de Francia y el Reino Unido que se mencionan en la argumentación de los Estados Unidos no son "leyes". Su naturaleza es simplemente la de documentos de orientación, que siempre deben interpretarse en conformidad con la legislación comunitaria, que en este caso está constituida por el CAC y el Reglamento de Aplicación.

Los Estados Unidos impugnan lo que consideran una divergencia entre la orientación de Francia y la del Reino Unido acerca de la transformación bajo control aduanero. Las CE ya han explicado en sus comunicaciones que no existe divergencia alguna entre ambos documentos, y presentan algunos argumentos complementarios en sus observaciones a la pregunta 140. Además, como han explicado igualmente las CE[69], correspondería a los Estados Unidos demostrar la existencia de cualquier aplicación divergente de las condiciones para la transformación bajo control aduanero. Los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de esa clase.

Pregunta 140

Contrariamente a las alegaciones de los Estados Unidos[70], las CE no encuentran ninguna ambigüedad intrínseca del derecho comunitario sobre las condiciones económicas. El artículo 133 del CAC establece las condiciones económicas para el otorgamiento de autorización a los efectos de la transformación bajo control aduanero al exigir, en una frase, que se reúnan "las condiciones necesarias para que el régimen pueda contribuir a favorecer la creación y el mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en la Comunidad sin que se perjudiquen los intereses esenciales de los productores de mercancías similares (condiciones económicas)". El apartado 3) del artículo 502 del Reglamento de Aplicación repite esas condiciones económicas usando la primera parte de la frase. El hecho alegado por los Estados Unidos, de que el Reglamento de Aplicación presente en general un desarrollo más detallado de las disposiciones del CAC, carece de pertinencia

[67] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 67.

[68] Con respecto a la Guía comunitaria sobre auditorías de aduana, los Estados Unidos la han criticado porque sólo "se finalizó recientemente" y "simplemente está destinada a servir de ayuda a los Estados miembros" (segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 67). Sin embargo, las CE no advierten por qué el hecho de que la Guía sea reciente y no vinculante ha de significar que no sea pertinente. Además, como explicaron las CE en su respuesta a la pregunta 167 del Grupo Especial, hay también otras directrices sobre prácticas óptimas acerca de cuestiones pertinentes en materia de análisis y gestión de riesgos (respuesta de las CE a la pregunta 167 del Grupo Especial, párrafo 62).

[69] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 181 y siguientes.

[70] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 140 del Grupo Especial, párrafos 74 a 76.

porque lo que cuenta es la forma en que se distribuye entre las dos normas el marco reglamentario específico referente a la transformación bajo control aduanero. De este modo, la lista completa de las condiciones para el otorgamiento de autorización figura en el CAC, y no en el Reglamento de Aplicación, y está claro que el primero prevalece debido a su nivel jerárquico más elevado.

Por último, los Estados Unidos se equivocan al afirmar que la orientación impartida por Francia sólo exige "la creación o el mantenimiento de una actividad de transformación de mercancías en la Comunidad".[71] Las CE se remiten a este respecto a su Segunda comunicación escrita.[72] Además de estos argumentos, las CE desean añadir que en el segundo apartado del párrafo 78 y el párrafo 79 del documento de orientación de Francia se destaca la obligación de los solicitantes de presentar información sobre la inexistencia de efectos perjudiciales para los intereses esenciales de los productores comunitarios de mercancías similares.[73]

Pregunta 141

Sin perjuicio del marco analítico utilizado por los Estados Unidos para examinar la obligación que corresponde a las CE en virtud del párrafo 3 b) del artículo X del GATT, las CE observan que los Estados Unidos no formulan ninguna alegación acerca del alcance de la revisión exigida por esa disposición.

Los Estados Unidos confirman que sus alegaciones referentes al párrafo 3 b) del artículo X se relacionan con el requisito de que los tribunales o procedimientos rijan la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas.[74] Los argumentos complementarios de las CE sobre esta cuestión se desarrollarán en sus observaciones acerca de la pregunta 142.

Preguntas 142 a) y b)

La alegación de los Estados Unidos de que la revisión a nivel de los Estados miembros no satisface el requisito del párrafo 3 b) del artículo X del GATT, por el cual las decisiones adoptadas por los tribunales de primera instancia deben regir la práctica de los organismos encargados de aplicar las medidas administrativas, está basada en una interpretación sumamente restrictiva, literal y contextual, de dicha disposición.

A juicio de las CE, la posición de los Estados Unidos está basada en una interpretación radical del párrafo 3 b) del artículo X del GATT, cuyo único objetivo es atacar el sistema judicial de las CE. Tal actitud está en directa contradicción con la obligación que impone el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena, de interpretar los tratados de buena fe. Además, en el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Juegos de azar* se observó que "el principio de la

---

[71] *Ibid.*, párrafo 77.

[72] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 178 a 180.

[73] El segundo apartado del párrafo 78 dispone lo siguiente: "*Par conséquent* [referencia al requisito relativo a los intereses esenciales, establecido en el primer apartado], *le demandeur doit,* ***dans tous les cas****, préciser dans sa demande la raison économique pour laquelle il a recours à l'un de ces régimes* [que incluyen la transformación bajo control aduanero]".

El párrafo 79 dispone lo siguiente: "*Dans la rubrique n° 10 de la demande, le demandeur doit mentionner la raison économique du recours au régime sollicité*". Es importante destacar que los efectos económicos incluyen el requisito relativo a los intereses esenciales, derivado del segundo apartado del párrafo 78 del documento de orientación francés.

[74] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 141 del Grupo Especial, párrafo 81.

buena fe en el proceso de interpretación sustenta el concepto de que la interpretación no debe dar un resultado que sea manifiestamente absurdo o irrazonable".[75] Las CE ya han explicado que la interpretación de los Estados Unidos no corresponde a las tradiciones jurídicas de la mayoría de los Miembros de la OMC, si no de todos ellos.[76] Por lo tanto, la interpretación de los Estados Unidos acerca del requisito del párrafo 3 b) del artículo X del GATT referente a "regir la práctica administrativa" debe rechazarse por irrazonable.

Las CE insisten, en primer lugar, en que los Estados Unidos, al desarrollar la interpretación literal del término "*govern*" ("regir"), hacen una selección que no es aceptable.[77] Ese término abarca no sólo relaciones o instrumentos vinculantes (controlar, regular, determinar, constituir una ley, reglamento o norma), sino también otros que no tienen carácter vinculante, como "influir" o "servir para decidir".[78] Las CE consideran que estas dos acepciones están más en conformidad con la posición que ocupan los tribunales de primera instancia en el ordenamiento jurídico de la mayor parte de los Miembros de la OMC y, en cualquier caso, en aquellos que no tienen tribunales centralizados para la revisión en primera instancia de las decisiones administrativas en asuntos aduaneros, entre los que figuran las CE.[79] Los Estados Unidos no han rebatido estos argumentos.

En segundo lugar, la interpretación contextual del párrafo 3 b) del artículo X del GATT aplicada por los Estados Unidos (es decir, su pretendida vinculación con el apartado a))[80] también es equivocada. Las CE ya han indicado varias razones en respaldo de esta afirmación.[81] Además, el contexto pertinente para la interpretación del párrafo 3 a) del artículo X no es el apartado b) que le sigue, sino el párrafo 1 del artículo X, al que allí se hace referencia específica. El párrafo 1 incluye las "decisiones judiciales de aplicación general" entre los instrumentos que deben aplicarse de manera uniforme con arreglo al párrafo 3 a). Queda de manifiesto así que el artículo X del GATT abarca dos tipos de decisiones judiciales: las de aplicación general, cuya aplicación uniforme exige el párrafo 3 a), y las adoptadas por tribunales de revisión de primera instancia, en que no se exige la aplicación uniforme en todo el territorio del Miembro de la OMC. Esta interpretación contextual explica por qué no existe vinculación entre los apartados a) y b) del párrafo 3 en el artículo X del GATT. Por otra parte, como han destacado las CE en la argumentación precedente, el efecto

[75] Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Juegos de azar*, párrafo 6.49.

[76] Segunda declaración oral de las CE, párrafo 98, y declaración final de las CE, párrafo 30.

[77] Segunda declaración oral de las CE, párrafos 94 y 95.

[78] Los Estados Unidos no han presentado las páginas del *New Shorter Oxford Dictionary* a que hacen referencia en su Segunda comunicación escrita, párrafo 104. Para facilitar su consulta, las CE presentan las páginas respectivas (Prueba documental 166).

[79] Véanse algunos ejemplos en la segunda declaración oral de las CE, párrafo 96.

[80] La vinculación establecida por los Estados Unidos entre los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo X del GATT es mucho más sorprendente si se considera que, en el asunto *Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano* (informe del Órgano de Apelación, párrafos 79 y siguientes), los Estados Unidos sostuvieron la posición de que los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo XVII del GATT contienen obligaciones separadas e independientes. El Órgano de Apelación, y el Grupo Especial antes que él, rechazaron esa interpretación sobre la base del texto y el contexto de esas disposiciones, principalmente debido a la referencia expresa que en la segunda se hace a la primera. En el caso presente, la situación es exactamente inversa porque, como ya han explicado las CE en su Segunda comunicación escrita (párrafo 223), el párrafo 3 b) del artículo X del GATT no hace ninguna referencia al apartado a), a diferencia del apartado c), que contiene una vinculación explícita con el apartado b).

[81] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 461; primera declaración oral de las CE, párrafos 60 y 69; respuesta de las CE a la pregunta 87 del Grupo Especial, párrafo 172; segunda declaración oral de las CE, párrafo 100; y Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 222 y siguientes.

limitado que así se reconoce a las decisiones dictadas por tribunales de primera instancia está más en conformidad con la posición que ocupan en el ordenamiento jurídico de la mayor parte de los Miembros de la OMC.

Los argumentos desarrollados por los Estados Unidos en relación con el concepto de "decisión" muestran también su interpretación unilateral de otros sistemas jurídicos. Contrariamente a lo que alegan los Estados Unidos, en la mayoría de los Miembros de la OMC los tribunales de revisión no están facultados para decidir en qué partida debe clasificarse un producto. Por razones históricas, las facultades de los tribunales están limitadas a la anulación de las decisiones administrativas.[82] Esto limita claramente la posibilidad de que las decisiones judiciales se apliquen por aquellos organismos que se encuentran fuera del alcance geográfico, que no tendrían posibilidades reales de aplicar esas decisiones como vinculantes. El empleo del plural en todo el texto del párrafo 3 b) del artículo X del GATT constituye precisamente un reconocimiento de este equilibrio entre los poderes ejecutivo y judicial.

Pregunta 142 c)

Los Estados Unidos no se pronuncian en esta diferencia acerca de si una revisión es o no "pronta" en el caso de la revisión en primera instancia por los tribunales de un Estado miembro cuando el asunto no se remite al TJCE para una decisión prejudicial. Aunque los Estados Unidos destacan que "esto no equivale a decir que los Estados Unidos admiten que tal revisión sea pronta"[83], el hecho es que esa salvedad no viene al caso respecto de esta diferencia. Al no existir una alegación de los Estados Unidos referente a esas revisiones, el Grupo Especial no debe formular ninguna determinación sobre el asunto.

La alegación, por lo tanto, está limitada a las revisiones en primera instancia por tribunales de los Estados miembros de las CE cuando existe remisión del asunto al TJCE. Debe recordarse que, en las cuestiones de interpretación, los tribunales de primera instancia de los Estados miembros no están obligados a remitir el asunto al TJCE.

Los Estados Unidos consideran que las revisiones de esos asuntos en el plano nacional no son prontas porque "sólo para lograr que se plantee al TJCE una cuestión prejudicial, un comerciante puede tener que pasar por todo el proceso de recursos administrativos …, seguido por múltiples instancias de revisión judicial, que por sí solas pueden llevar años" y "cuando el asunto llega a remitirse al TJCE, su decisión lleva por término medio 19 ó 20 meses".[84]

Las CE no pueden admitir estos dos argumentos.

En primer lugar, las CE consideran que el tiempo que lleve tramitar recursos administrativos no independientes no puede tenerse en cuenta a los efectos de evaluar la "prontitud" de la revisión conforme al párrafo 3 b) del artículo X del GATT. Ello se debe a que los recursos administrativos de este tipo (que se resuelven por organismos que no son independientes de los encargados de aplicar las decisiones administrativas) no están abarcados por el párrafo 3 b) del artículo X del GATT, sino por

[82] Véanse, por ejemplo, las explicaciones acerca del sistema de las CE y sus Estados miembros que se ofrecen en la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 176, y la respuesta de las CE a la pregunta 71 del Grupo Especial, párrafo 127.

[83] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 142 del Grupo Especial, párrafo 90. La referencia de los Estados Unidos a la publicación del Sr. Vermulst está fuera de contexto porque el autor no hizo un análisis en relación con el párrafo 3 b) del artículo X del GATT.

[84] *Ibid.*, párrafo 91.

el apartado c) del mismo párrafo, lo que permite a los Miembros de la OMC mantener esos recursos si efectivamente ofrecen una revisión objetiva e imparcial de la decisión administrativa.

En segundo lugar, con respecto al tiempo que lleva la remisión de los asuntos al TJCE para una decisión prejudicial, los Estados Unidos alegan que "no cumpliría el requisito de prontitud si las CE sostuvieran que la revisión por el TJCE cumple la obligación que les corresponde en virtud del párrafo 3 b) del artículo X". Como no ocurre así, las CE consideran que la alegación no existe.

Sin embargo, como argumento subsidiario, las CE desean señalar que los Estados Unidos consideran que "pronto" significa "sin demora"; que "lo que significa actuar sin demora habrá de depender necesariamente del contexto"; y que "la palabra 'pronta', en sí misma, no denota un tiempo determinado que pudiera ser pertinente en todos los contextos".[85]

La aplicación de estos criterios a los casos en que un tribunal de primera instancia de un Estado miembro de las CE remite el asunto al TJCE debe llevar forzosamente a la conclusión de que la revisión es pronta, porque no existe demora alguna: el procedimiento prejudicial ante el TJCE está integrado en el procedimiento seguido ante el tribunal nacional a fin de cooperar en la solución del litigio por éste.

Pregunta 143

Las CE toman nota de que los Estados Unidos no impugnan el examen por el TJCE con arreglo al artículo 230 del Tratado Constitutivo de la CE.

Las observaciones de los Estados Unidos sobre la remisión prejudicial al TJCE está fuera del alcance de la pregunta del Grupo Especial, y las CE se remiten a su comunicación complementaria sobre la Parte III de la segunda declaración oral de los Estados Unidos.[86]

Pregunta 144

Las CE rechazan firmemente la caracterización que hacen los Estados Unidos del Convenio Europeo de Derechos Humanos como "obligación de índole muy general, del tipo de las garantías del debido proceso".[87] La observación de los Estados Unidos denota su falta de familiaridad con el sistema europeo de protección de los derechos humanos, cuyo respeto está garantizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como han explicado las CE al responder a una pregunta del Grupo Especial.[88]

Además, las CE rechazan la afirmación de los Estados Unidos según la cual han admitido que al Convenio Europeo de Derechos Humanos no está "puesto en práctica" en materia aduanera. El párrafo 1 del artículo 6 del Convenio, que establece el derecho a un juicio equitativo por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, abarca el derecho a la pronta protección judicial en todos los sectores[89], con la única excepción de los asuntos referentes a la función pública.

[85] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 40 del Grupo Especial, párrafo 152.

[86] Comunicación complementaria de las CE, sección III C.

[87] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 144 del Grupo Especial, párrafo 94.

[88] Respuesta de las CE a la pregunta 170 del Grupo Especial, párrafo 89.

[89] Respuestas de las CE a la pregunta 74 del Grupo Especial, párrafos 134 a 136, y a la pregunta 70 del Grupo Especial, párrafo 89.

De todos modos, las CE desean insistir en que no tienen conocimiento de que ningún Miembro de la OMC haya establecido en su legislación una disposición precisa que exija que la revisión independiente en primera instancia haya de ser pronta (y en cualquier caso no lo han hecho los Estados Unidos[90]).

Pregunta 145

Las CE ya han explicado que, contrariamente al requisito que establece el párrafo 3 b) del artículo X del GATT, la revisión administrativa que se efectúa en los Estados Unidos por el Servicio de Reglamentos y Resoluciones no es independiente, porque forma parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, que es el organismo de los Estados Unidos encargado de la aplicación de las decisiones administrativas en materia aduanera.[91]

De cualquier modo, suponiendo para los fines de la argumentación que tales decisiones de revisión estuvieran comprendidas en el párrafo 3 b) del artículo X, sus efectos no se ajustan a la interpretación que dan los Estados Unidos a la disposición que invocan para impugnar el sistema de las CE. Los Estados Unidos critican que las decisiones de primera instancia de los tribunales nacionales de las CE no sean vinculantes para los organismos de los demás Estados miembros. Sin embargo, los Estados Unidos explican que las decisiones de la Oficina en el procedimiento de "revisión ulterior" no constituyen más que un "fundamento" aplicable al despacho de mercancías idénticas de otras personas.[92] Esta expresión denota que las decisiones que se dictan en los Estados Unidos en el procedimiento de "revisión ulterior" no tienen efectos vinculantes, situación que equivale a la que existe entre los diferentes tribunales y organismos nacionales en las CE.[93]

Como los Estados Unidos alegan que "las decisiones que se dictan en virtud del procedimiento de revisión ulterior tienen la misma eficacia y los mismos efectos que las resoluciones anticipadas"[94], las CE se remiten, para otros argumentos, a sus observaciones sobre la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 136.

PREGUNTAS DIRIGIDAS A AMBAS PARTES

Pregunta 173

Las CE consideran que la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta del Grupo Especial es totalmente insuficiente y manifiesta una debilidad fundamental de la argumentación de los Estados Unidos.

En lugar de dar al Grupo Especial una respuesta sobre por qué habría de determinar si el sistema de las CE, como alegan los Estados Unidos, conduce "necesariamente" a una falta de uniformidad contraria al párrafo 3 a) del artículo X del GATT, los Estados Unidos se refieren vagamente a "algunos aspectos excepcionales" del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.[95] En cuanto a la cuestión de si es necesario tener en cuenta casos concretos de aplicación no uniforme, los Estados

[90] Respuesta de las CE a la pregunta 74 del Grupo Especial, párrafo 138.

[91] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 218.

[92] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 96 *in fine.*

[93] Segunda declaración oral de las CE, párrafos 98 y 99; y declaración final de las CE, párrafo 30.

[94] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 96.

[95] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 173 del Grupo Especial, párrafo 97.

Unidos contestan que "aunque resulta difícil responder en abstracto a esta pregunta, no es preciso darle respuesta en la presente diferencia".

Las CE discrepan fundamentalmente. No existe en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT nada cuya excepcionalidad sea tal que dejen de aplicarse las reglas normales de evaluación objetiva de los hechos conforme al artículo 11 del ESD. Por consiguiente, también se aplican en el presente caso los requisitos de prueba normales para establecer que la legislación de un Miembro, en sí misma, viola obligaciones del régimen de la OMC, conforme a lo determinado por el Órgano de Apelación en *Estados Unidos - Acero al carbono*.[96] Esto significa, en particular, que los Estados Unidos deben respaldar su alegación sobre una incompatibilidad del sistema de administración aduanera de las CE presentando pruebas sólidas de una pauta general efectiva de aplicación no uniforme. Con respecto a los detalles, las CE se remiten a su propia respuesta a la pregunta 173 del Grupo Especial.

La única jurisprudencia a que se remiten los Estados Unidos es el informe del Grupo Especial *Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano*.[97] Sin embargo, contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos, lo que cabe destacar en ese informe no es que el Grupo Especial "convino en tratar" la alegación de los Estados Unidos contra el régimen de la Junta del Trigo, sino que la rechazó porque los Estados Unidos no habían probado que la Junta del Trigo habría de actuar necesariamente en forma contraria al artículo XVII del GATT.[98] Por consiguiente, el asunto *Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano* constituye una ilustración más de que las alegaciones sobre las leyes de otro Miembro, en sí mismas, no pueden basarse simplemente en especulaciones sobre los posibles efectos en el sistema de otro Miembro de la OMC, sino que deben tener el respaldo de pruebas sólidas basadas en su aplicación efectiva.

Pregunta 176

Al responder a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos alegan que las CE están proponiendo interpretar el párrafo 3 a) del artículo X del GATT "a la luz de la estructura constitucional de cada Miembro, incluidas las CE".[99] Las CE, como han señalado, no pretenden en modo alguno estar sujetas a normas diferentes que los demás Miembros de la OMC.[100]

Pero la pregunta del Grupo Especial no se refería al párrafo 3 a) del artículo X del GATT, sino al párrafo 12 de su artículo XXIV. Como explicaron las CE en su propia respuesta a la pregunta del Grupo Especial, esta disposición es claramente aplicable a las CE. Por otra parte, como explicaron las CE al responder a la pregunta 158 del Grupo Especial, la disposición tiene que tener un significado útil. En relación con el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT es inevitable considerar si un Miembro de la OMC tiene o no gobiernos y autoridades regionales y locales en sus territorios con responsabilidad en la aplicación de las disposiciones del GATT. Si los tiene, el Miembro en cuestión debe "tomar las medidas razonables" para asegurar la observancia. Lo que constituye una medida razonable debe determinarse ponderando las dificultades internas que supone asegurar la observancia

[96] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 157.

[97] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 173 del Grupo Especial, párrafo 97.

[98] Informe del Grupo Especial, *Canadá - Importaciones de trigo y exportaciones de grano*, párrafo 6.148. Confirmado por el Órgano de Apelación, *Canadá - Importaciones de trigo y exportaciones de grano*, párrafo 196.

[99] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 174 del Grupo Especial, párrafo 103.

[100] Segunda declaración oral de las CE, párrafo 9.

en relación con los efectos de la inobservancia de las obligaciones de la OMC para los interlocutores comerciales.[101]

Los Estados Unidos, al negar simplemente que el párrafo 12 del artículo XXIV del GATT pueda tener alguna pertinencia respecto de esta diferencia, en lo esencial no dan ningún significado útil a esa disposición. Dicho esto, debe señalarse que las CE no propugnan ninguna interpretación del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT que equivalga a una norma especial para las CE, o que pueda poner en peligro la observancia de las obligaciones del régimen de la OMC por sus Miembros que tienen una estructura federal. Las CE simplemente destacan que algunas medidas que exigirían un cambio radical en el equilibrio federal de un Miembro de la OMC, como la creación de un organismo aduanero centralizado, un tribunal de aduana o la armonización de las leyes dentro de ese Miembro de la OMC, no pueden considerarse "medidas razonables" en el sentido del párrafo 12 del artículo XXIV del GATT.

[101] Véase la respuesta de las CE a la pregunta 158 del Grupo Especial, párrafo 48.

ANEXO C

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL EN RELACIÓN CON LA SECCIÓN III DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Índice		Página
Anexo C-1	Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial en relación con la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos	C-2
Anexo C-2	Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas complementarias formuladas por el Grupo Especial en relación con la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos	C-23
Anexo C-3	Respuestas de las Comunidades Europeas a las preguntas complementarias formuladas por el Grupo Especial en relación con la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos	C-37

ANEXO C-1

RESPUESTA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LA PREGUNTA 172 DEL GRUPO ESPECIAL EN RELACIÓN CON LA SECCIÓN III DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

(14 de diciembre de 2005)

Pregunta 172 (debe responderse el 14 de diciembre de 2005). Sírvanse formular observaciones sobre la sección III de la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva, con inclusión de las pruebas documentales a que se hace referencia en dicha sección.

I. INTRODUCCIÓN

1. De conformidad con la resolución del Grupo Especial de 23 de noviembre de 2005 así como del calendario modificado que se comunicó a las partes el 25 de noviembre de 2005, las CE presentan con esta comunicación la réplica a la sección III de la declaración inicial de los Estados Unidos en la segunda reunión con el Grupo Especial (Segunda declaración oral de los Estados Unidos). Al mismo tiempo, esta comunicación constituye la respuesta de las CE a la pregunta complementaria 172 del Grupo Especial.

2. En esta comunicación, las CE plantean en primer lugar algunas objeciones de procedimiento a la Segunda declaración oral de los Estados Unidos. Posteriormente, las CE responden al contenido de las alegaciones y argumentos que contiene la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos.

II. OBJECIONES DE PROCEDIMIENTO

3. En la presente sección, las CE plantean dos cuestiones de procedimiento en relación con la Segunda declaración oral de los Estados Unidos. Primero, las pruebas presentadas por los Estados Unidos en su Segunda declaración oral son inadmisibles por haberse presentado demasiado tarde. Segundo, algunos de los asuntos enumerados en la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos no pertenecen al ámbito del mandato del Grupo Especial.

A. LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS EN SU SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL SON INADMISIBLES

4. En la audiencia del Grupo Especial del 22 de noviembre de 2005, ya las CE se opusieron oralmente a la presentación tardía, con la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, de una cantidad sustancial de nuevas pruebas. Las CE agradecen la resolución del Grupo Especial de 23 de noviembre de 2005 y la decisión de conceder a las CE más tiempo para responder a los asuntos suscitados en la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos y a las pruebas presentadas en ella.

5. Sin embargo, las CE mantienen su opinión de que las tácticas procesales utilizadas por los Estados Unidos plantean graves cuestiones con respecto a las debidas garantías de procedimiento y la equidad procesal, así como con respecto al desarrollo ordenado de los procedimientos de solución de diferencias del ESD en general. Estas cuestiones sólo han sido abordadas parcialmente por el Grupo Especial en sus resoluciones. Además, las consecuencias de la conducta de los Estados Unidos trascienden el presente caso. Por este motivo, las CE desean reiterar, en la presente comunicación, sus opiniones sobre este asunto.

6. Según el párrafo 1 del artículo 12 del ESD, los procedimientos de los grupos especiales han de respetar en principio los procedimientos de trabajo que figuran en el Apéndice 3 del ESD. Es cierto que estos procedimientos de trabajo no establecen plazos específicos para la presentación de pruebas. Además, el Grupo Especial, tras celebrar consultas con las partes en la diferencia, puede establecer procedimientos más detallados o modificarlos.

7. A pesar de ello, según ha reconocido el Órgano de Apelación en el asunto *Argentina - Textiles y prendas de vestir*, los procedimientos de trabajo contemplan que puedan distinguirse dos etapas en el procedimiento de un grupo especial, a saber, la etapa de la primera audiencia, cuyo objetivo es permitir que se expongan los hechos, y la etapa de la segunda audiencia, cuyo objetivo es permitir que se presenten las réplicas[1]:

> Es verdad que los Procedimientos de Trabajo "no prohíben" la práctica de presentar una prueba adicional después de la primera reunión sustantiva de un grupo especial con las partes. Sin embargo, también es verdad que en los Procedimientos de Trabajo del Apéndice 3 se contemplan dos etapas diferenciadas en las actuaciones de un grupo especial. En los párrafos 4 y 5 de los Procedimientos de Trabajo se expone la primera etapa del modo siguiente:
>
> > 4. Antes de celebrarse la primera reunión sustantiva del grupo especial con las partes, las partes en la diferencia le presentarán comunicaciones escritas en las que expongan los hechos del caso y sus respectivos argumentos.
> >
> > 5. En la primera reunión sustantiva con las partes, el grupo especial pedirá a la parte reclamante que presente sus alegaciones. Posteriormente, pero siempre en la misma reunión, se pedirá a la parte demandada que exponga su opinión al respecto.
>
> La segunda etapa de las actuaciones del Grupo Especial se expone en el párrafo 7 del modo siguiente:
>
> > 7. Las réplicas formales se presentarán en la segunda reunión sustantiva del grupo especial. La parte demandada tendrá derecho a hablar en primer lugar, y a continuación lo hará la parte reclamante. Antes de la reunión, las partes presentarán sus escritos de réplica al grupo especial.
>
> En virtud de los Procedimientos de Trabajo del Apéndice 3, la parte reclamante deberá presentar todas sus argumentaciones, junto con una exposición cabal de los hechos acompañada de las pruebas pertinentes, durante la primera fase. La segunda fase está destinada por lo general a permitir que cada una de las partes presente "réplicas" a los argumentos y las pruebas aducidos por las otras partes.

[1] Informe del Órgano de Apelación, *Argentina - Textiles y prendas de vestir*, párrafo 79.

8. De acuerdo con estos principios generales del ESD, el párrafo 12 del Procedimiento de Trabajo del Grupo Especial establece las siguientes normas para la presentación de pruebas:

> Las partes presentarán todas las pruebas fácticas al Grupo Especial en el curso de la primera reunión sustantiva a más tardar, excepto en lo que respecta a las pruebas necesarias a efectos de las réplicas, las respuestas a preguntas o las observaciones destinadas a replicar a respuestas facilitadas por otros. Podrán establecerse excepciones a este procedimiento por causas justificadas. En ese caso, se concederá a la otra parte un plazo para que formule observaciones, según proceda.

9. Los Estados Unidos han presentado en su Segunda declaración oral 22 pruebas documentales que contienen nuevas pruebas fácticas. En gran parte, estas pruebas se relacionan con asuntos que no fueron planteados previamente en la comunicación de las partes.[2] Las CE consideran que este enfoque no se ajusta a los requisitos de debidas garantías de procedimiento y de equidad procesal que refleja el párrafo 12 del Procedimiento de Trabajo del Grupo Especial.

10. Las pruebas que se aportan en la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos se refieren a supuestos casos de aplicación no uniforme que no han sido aducidos antes por los Estados Unidos y por consiguiente constituyen pruebas totalmente nuevas. Como demostrarán posteriormente las CE, algunas de estas pruebas se relacionan incluso con asuntos que quedan fuera del ámbito del mandato del Grupo Especial.

11. Aun en caso de que las pruebas aportadas tuvieran relación con casos de aplicación debatidos anteriormente por las partes, principalmente las pruebas mencionadas en la sección V de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, no está claro por qué no se presentaron en comunicaciones anteriores.[3] En este contexto, hay que señalar que la posibilidad de que la presentación tardía de pruebas sea "necesaria a efectos de las réplicas" no depende únicamente de que éstas se relacionen con una "réplica" o un argumento presentado anteriormente, sino también de que no hubieran podido ser presentadas anteriormente.

12. Las CE consideran que no existe justificación suficiente para la presentación tardía de estas pruebas por los Estados Unidos. Las pruebas aportadas en la sección III se refieren a ejemplos que en algunos casos se remiten a varios años antes y pudieron ser presentadas por los Estados Unidos con su Primera comunicación escrita.[4] Los Estados Unidos ni siquiera han intentado indicar por qué no tenían acceso a las pruebas antes indicadas en la fecha de la primera reunión sustantiva, ni demostrar que hubiera justificación suficiente para la presentación tardía de las nuevas pruebas.[5]

---

[2] Las CE observan que el Grupo Especial dejó sin resolver, en su resolución del 23 de noviembre, si las pruebas en cuestión constituían "nuevas pruebas" o "pruebas necesarias a efectos de las réplicas".

[3] En lo que respecta a la declaración jurada presentada por los Estados Unidos como prueba documental 79, las CE han explicado ya que no tiene ningún valor probatorio en este asunto.

[4] En lo que respecta a las videocámaras, véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 26 y siguientes; para Sony PlayStation, Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 32 y siguientes. En lo que respecta a la "Presentación de DeBaere" (Estados Unidos - Prueba documental 59), esta presentación, como las CE explicarán posteriormente, no tiene absolutamente ningún valor probatorio.

[5] En el asunto *Canadá - Exportaciones de trigo e importaciones de grano*, párrafo 6.140, el grupo especial rechazó un artículo académico presentado por los Estados Unidos fuera de plazo, señalando que los Estados Unidos no habían ni siquiera intentado indicar por qué no disponían de la prueba en cuestión en la fecha de la primera reunión sustantiva ni que hubiera justificación suficiente para la presentación tardía de la nueva

13. La presentación tardía de estas nuevas pruebas es tanto más injustificable cuanto que los Estados Unidos se negaron rotundamente a presentar pruebas en sus comunicaciones anteriores. En efecto, cuando el Grupo Especial les pidió después de la primera audiencia que presentaran pruebas de nuevos casos de aplicación no uniforme, los Estados Unidos se negaron continuamente a presentar tales pruebas.[6] Más sorprendente es todavía que los Estados Unidos se abstuvieran totalmente de presentar en su Segunda comunicación escrita pruebas fácticas de cualquier tipo.

14. Este comportamiento de los Estados Unidos transmite la clara sensación de que han retenido deliberadamente las pruebas hasta la última etapa posible del procedimiento, cuando las posibilidades de las CE de responder a las mismas es mínima. Estas tácticas procesales no conducen a un desarrollo correcto del procedimiento de solución de diferencias previsto en el ESD.

15. La decisión del Grupo Especial de conceder a las CE un plazo adicional para formular observaciones sobre la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos no resuelve estos problemas. Primero, las CE, debido a la presentación tardía de estas nuevas pruebas por los Estados Unidos, tienen que presentar una tercera comunicación en paralelo con las respuestas a las preguntas del Grupo Especial y con las observaciones a las respuestas de los Estados Unidos. Segundo, la resolución del Grupo Especial sólo hace referencia a la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, pero no a las pruebas adicionales aportadas en otras partes de esta Segunda declaración oral. Por último, el enfoque de los Estados Unidos ha tenido ya repercusiones en el calendario general del Grupo Especial y puede tener otras repercusiones.

16. El enfoque de los Estados Unidos afecta al sistema de solución de diferencias de la OMC en general. Los grupos de trabajo tienen que actuar dentro de plazos muy estrictos, que imponen una carga considerable a las partes, el Grupo Especial y la Secretaría. Debido a estos requisitos, es importante que las partes actúen de forma tal que ayuden al Grupo Especial a respetar su calendario, más que a obstruir su labor.

17. El enfoque de los Estados Unidos es especialmente intranquilizador en el contexto del presente asunto. Los Estados Unidos piden al Grupo Especial que formule unas constataciones extremadamente generales, en concreto que todo el sistema de administración de aduanas de las CE es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Cabía esperar que el contenido de las pruebas, así como su forma de presentación, estarían a la altura de la gravedad de las alegaciones estadounidenses y de sus repercusiones. Sin embargo, lo que ha sucedido es lo contrario. Mientras que las CE han participado constructivamente en el proceso y presentaron ya con su Primera comunicación escrita una descripción general de su sistema de administración de aduanas y de revisión judicial a fin de proporcionar al Grupo Especial una base sólida de hechos, los Estados Unidos han abordado este caso como si fuera un juego de tácticas procesales. Las CE sostienen que este enfoque no conduce a permitir que el Grupo Especial proceda a una evaluación objetiva de los hechos, como establece el artículo 11 del ESD.

18. Por estos motivos, las CE mantienen su opinión de que las pruebas presentadas por los Estados Unidos en su Segunda declaración oral son inadmisibles.

---

prueba. En particular, este grupo especial rechazó el argumento de los Estados Unidos de que este artículo sólo era una réplica.

[6] Véanse las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 14, 24 y 33 del Grupo Especial; véase también la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 45.

B. DETERMINADOS ASUNTOS PLANTEADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PARTE III DE SU SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL SON AJENOS AL MANDATO DEL GRUPO ESPECIAL

19. En la sección III de su Segunda declaración oral los Estados Unidos plantean también la cuestión de la supuesta aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del CAC, que regula el plazo para comunicar la deuda aduanera al deudor.[7] Las CE sostienen que este asunto es ajeno al mandato del Grupo Especial.

1. El Grupo Especial sólo puede examinar los asuntos identificados en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos

20. El presente Grupo Especial ha sido establecido por el OSD con el mandato uniforme a que hace referencia el párrafo 1 del artículo 7 del ESD.[8] Por consiguiente, el mandato del Grupo Especial es examinar el asunto que se le ha sometido y que está descrito en la solicitud presentadas por los Estados Unidos de establecimiento de un grupo especial.[9]

21. Como ha confirmado el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*, la solicitud de establecimiento de un grupo especial constituye la base del mandato del mismo conforme al párrafo 1 del artículo 7 del ESD[10]:

> Existen, pues, dos requisitos independientes, a saber, la identificación de *las medidas concretas en litigio* y la presentación de *una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación* (o *alegaciones*). En conjunto comprenden "el asunto sometido al OSD", que constituye la base del mandato del Grupo Especial conforme al párrafo 1 del artículo 7 del ESD.

22. El párrafo 2 del artículo 6 establece los siguientes requisitos mínimos que ha de cumplir cualquier solicitud de establecimiento de un grupo especial:

> Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se identificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad.

[7] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 27 y 31. Los Estados Unidos describen incorrectamente el apartado 3 del artículo 221 del CAC al decir que es una disposición que "prescribe el plazo posterior a la importación durante el cual se puede percibir una deuda aduanera". Como demostrarán las CE en la siguiente sección, eso no es exacto.

[8] WT/DS315/9, párrafo 2.

[9] WT/DS315/8.

[10] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 125. Igualmente, Informe del Órgano de Apelación, *Guatemala - Cemento I*, párrafo 72.

23. En el asunto *Corea - Productos lácteos*, el Órgano de Apelación sostuvo que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD impone cuatro requisitos distintos[11]:

> Si analizamos sus elementos, podemos ver que el párrafo 2 del artículo 6 establece varios requisitos. Es necesario: i) que las peticiones se formulen por escrito; ii) que en ellas se indique si se han celebrado consultas; iii) que se identifiquen las medidas concretas en litigio; iv) que se haga una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad. En virtud de este cuarto requisito, el párrafo 2 del artículo 6 exige únicamente que se haga una exposición -que puede ser breve- de los fundamentos de derecho de la reclamación; pero, en todo caso, esa exposición ha de ser "suficiente para presentar el problema con claridad". Dicho de otro modo, no basta identificar brevemente "los fundamentos de derecho de la reclamación", sino que la exposición debe "presentar el problema con claridad".

24. El objeto y fin del párrafo 2 del artículo 6 del ESD es garantizar un grado mínimo de equidad en todas las etapas del procedimiento. Ello tiene especial importancia para el demandado, que tiene que basarse en la solicitud de establecimiento del grupo especial para empezar a preparar su defensa. Igualmente, los Miembros de la OMC que pretendan participar como terceros tienen que ser informados del motivo de la diferencia. Esta justificación básica del párrafo 2 del artículo 6 ha sido explicada por el Órgano de Apelación en el asunto *Tailandia - Vigas doble T*[12]:

> El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige una claridad suficiente con respecto al fundamento jurídico de la reclamación, es decir, con respecto a las "alegaciones" que haga valer el reclamante. La parte demandada tiene derecho a conocer los argumentos a los que debe responder, así como cuáles son las infracciones que han sido alegadas, a fin de poder comenzar a preparar su defensa. Asimismo, los Miembros de la OMC que se proponen participar como terceros en las actuaciones de un grupo especial deben ser informados del fundamento jurídico de la reclamación. Este requisito de las debidas garantías procesales es fundamental para asegurar la sustanciación equitativa y regular del procedimiento de solución de diferencias.

25. En el asunto *CE - Bananos III*, el Órgano de Apelación aclaró que hay que distinguir las alegaciones que se especifican en la solicitud de establecimiento de un grupo especial de los argumentos posteriores de las partes para apoyar esas alegaciones. En consecuencia, el Órgano de Apelación sostuvo que no se pueden "subsanar" posteriormente los defectos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial a través de una comunicación escrita de las partes[13]:

> No compartimos la opinión del Grupo Especial de que "incluso si hubiera alguna duda respecto de si la solicitud de establecimiento de un grupo especial había cumplido los requisitos del párrafo 2 del

[11] Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 120.

[12] Informe del Órgano de Apelación, *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 88 (sin subrayados en el original). Véase también el Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 126.

[13] Informe del Órgano de Apelación, *CE - Bananos III*, párrafo 143.

> artículo 6, las primeras comunicaciones escritas de los reclamantes habían "subsanado" esa duda porque sus comunicaciones eran suficientemente detalladas y presentaban claramente todas las cuestiones de hecho y de derecho". El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se especifiquen no los *argumentos*, pero sí las *alegaciones*, de forma suficiente para que la parte contra la que se dirige la reclamación y los terceros puedan conocer los fundamentos de derecho de la reclamación. En caso de que no se especifique en la solicitud una *alegación*, los defectos de la solicitud no pueden ser "subsanados" posteriormente por la argumentación de la parte reclamante en su primera comunicación escrita al Grupo Especial o en cualesquiera otras comunicaciones o declaraciones hechas posteriormente en el curso del procedimiento del Grupo Especial.

26. Por consiguiente, el único fundamento para determinar si una solicitud de establecimiento de un grupo especial cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 es el texto de la propia solicitud. Así lo ha confirmado el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*[14]:

> Como hemos indicado en casos anteriores, el cumplimiento de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 debe demostrarse a la luz de la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Los defectos de la solicitud no pueden ser "subsanados" en las comunicaciones posteriores de las partes durante las actuaciones del Grupo Especial.[15] No obstante, al examinar si una solicitud de establecimiento de un grupo especial es o no suficiente, pueden consultarse las comunicaciones presentadas y las declaraciones hechas durante el curso de las actuaciones, en particular la primera comunicación escrita de la parte reclamante, con el fin de confirmar el sentido de los términos empleados en la solicitud de establecimiento del Grupo Especial y como parte de la evaluación acerca de si el demandado ha sufrido o no perjuicios en sus posibilidades de defensa.[16] Además, el cumplimiento de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 debe determinarse sobre la base de los fundamentos de cada caso, examinando el conjunto de la solicitud de establecimiento del Grupo Especial y a la luz de las circunstancias respectivas.

2. La alegación de los Estados Unidos con respecto a la aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del CAC no está incluida en el ámbito del mandato del Grupo Especial

27. Según el tercer párrafo de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos, éstos alegan que existe una falta de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria en las siguientes esferas:

- la clasificación y valoración de mercancías;

[14] Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 127.

[15] Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *CE - Bananos III*, párrafo 143.

[16] Véanse, por ejemplo, el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Corea - Productos lácteos*, párrafo 127, y el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 95.

- los procedimientos para la clasificación y valoración de mercancías, incluida la facilitación a los importadores de información vinculante sobre clasificación y valoración;

- los procedimientos para la entrada y despacho de mercancías, incluidas las prescripciones diferentes en materia de certificados de origen, los criterios diferentes entre los Estados miembros respecto de la inspección física de mercancías, las prescripciones diferentes en materia de licencias para la importación de productos alimenticios y los procedimientos diferentes para tramitar envíos de entrega urgente;

- los procedimientos para controlar las declaraciones de entrada una vez que se ha permitido la incorporación de las mercancías al circuito comercial de las Comunidades Europeas;

- las sanciones y los procedimientos de imposición de sanciones por infracción de las normas aduaneras; y

- las prescripciones para mantenimiento de registros.

28. La cuestión planteada por los Estados Unidos con respecto a la supuesta aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del CAC no tiene relación con ninguna de estas esferas. El artículo 221 del CAC es una disposición relativa a la comunicación de la deuda aduanera al deudor. El texto del artículo 221 del CAC es el siguiente:

> 1. Desde el momento de su contracción deberá comunicarse el importe de los derechos al deudor, según modalidades apropiadas.
>
> 2. Cuando, en la declaración en aduana y a título indicativo, se haya hecho mención del importe de derechos a liquidar las autoridades aduaneras podrán disponer que la comunicación mencionada en el apartado 1 sólo se efectúe cuando el importe de derechos que se indique no corresponda al que dichas autoridades hubieren determinado.
>
> Sin perjuicio de la aplicación del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 218, cuando se haga uso de la posibilidad establecida en el párrafo primero del presente apartado, la concesión del levante de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras servirá de comunicación al deudor del importe de derechos contraído.
>
> 3. La comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera. Dicho plazo se suspenderá a partir del momento en que se interponga un recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 y hasta que finalice el procedimiento de recurso.
>
> 4. Cuando la deuda aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente en el momento en que se cometió, la comunicación al deudor podrá efectuarse, en las condiciones

> previstas por las disposiciones vigentes, después de la expiración del plazo de tres años previsto en el apartado 3.

29. El artículo 221 está incluido en el Título VII del CAC, titulado "Deuda aduanera", y más en concreto en su capítulo 3, dedicado al cobro del importe de la deuda aduanera. En este contexto, el artículo 221 del CAC establece que deberá comunicarse al deudor el importe de los derechos. El párrafo 3 de este artículo establece un plazo de tres años para la comunicación de la deuda, pero también establece que este plazo se suspende, si se interpone un recurso, hasta que finalice el procedimiento. El apartado 4 establece que cuando la deuda aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente en el momento en que se cometió, la comunicación al deudor podrá efectuarse, en las condiciones previstas por las disposiciones vigentes, después de la expiración del plazo de tres años previsto en el apartado 3.

30. La cuestión del cobro de los derechos aduaneros después del despacho de aduana, y más en concreto cuál es el plazo para comunicar al deudor el importe de un derecho aduanero, no es reducible a ninguna de las cuestiones planteadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. No tiene nada que ver con la clasificación y valoración de mercancías; no es un procedimiento para la entrada y despacho de mercancías; no es un procedimiento para controlar las declaraciones de entrada; y tampoco se relaciona con las sanciones o con las prescripciones para mantenimiento de registros.

31. Los Estados Unidos han alegado que las cuestiones mencionadas en el párrafo 3 de su solicitud de establecimiento de un grupo especial son simplemente "ejemplos" y que su alegación se refiere a la falta de aplicación uniforme de la "normativa aduanera comunitaria en general".[17] Como ya señalaron las CE en su Segunda comunicación escrita[18], esta interpretación de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos no es conforme con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. La legislación aduanera comunitaria es un cuerpo legislativo muy amplio y por consiguiente no basta para describir las "medidas concretas en litigio" una simple referencia a la "aplicación de la normativa aduanera comunitaria" en general.

32. Así lo han reconocido implícitamente los Estados Unidos en el tercer párrafo de su solicitud de establecimiento de un grupo especial al referirse a las esferas concretas en las que alegan que hay una falta de aplicación uniforme. Esta enumeración ha de tener alguna utilidad. En particular, debe permitir que el Grupo Especial sepa cuáles son las cuestiones que están incluidas concretamente en su mandato. Igualmente debe permitir que las CE, como demandado en el presente procedimiento, preparen adecuadamente su defensa. Establecer una lista de medidas y a continuación decir vagamente "incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva", debe considerarse un intento fallido de plantear un asunto "abierto". De acuerdo con la pretensión de los Estados Unidos, sería posible que un reclamante presentara una solicitud de establecimiento de un grupo especial en unos términos extremadamente vagos, presentara algunas cuestiones como "ejemplos" y a continuación sometiera un asunto referente a cuestiones totalmente distintas. Además, los Estados Unidos aparentemente creen que estas cuestiones se pueden introducir incluso en la última etapa del procedimiento. Esta "táctica de sorpresa" no es compatible con las debidas garantías de procedimiento que establece el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

33. La interpretación de las CE encuentra una nueva confirmación en las circunstancias que concurren en el presente caso, y principalmente en la secuencia de las comunicaciones de los Estados Unidos. Hasta su Segunda declaración oral, los Estados Unidos nunca mencionaron un problema de

[17] La última vez en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial, párrafos 1 y 2. Véase también la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 3 del Grupo Especial, párrafo 7.

[18] Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 13 y 14.

aplicación no uniforme del artículo 221 del CAC. Más en concreto, cuando el Grupo Especial les pidió después de la primera audiencia que presentaran una lista exhaustiva de todos los procedimientos aduaneros[19] impugnados al amparo del párrafo 3 a) del artículo X del GATT, los Estados Unidos no lo hicieron.[20] Si los Estados Unidos creían que la aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del CAC formaba parte de sus alegaciones debieron haber planteado la cuestión en aquel momento.

34. Las CE encuentran una nueva confirmación de lo dicho en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial, en la que enumeran diversas disposiciones respecto de las cuales sostienen que han establecido la falta de una aplicación uniforme.[21] Es significativo que esta lista no incluya el artículo 221 del CAC ni ninguna disposición del Titulo VIII del CAC. Esto quiere decir que los Estados Unidos o bien no creen que hayan fundamentado una alegación con respecto a la aplicación no uniforme del artículo 221 del CAC o bien admiten que esta alegación no pertenece al ámbito del mandato del Grupo Especial.

35. Por estos motivos, las CE someten al Grupo Especial que la alegación de los Estados Unidos con respecto a la aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del CAC no está incluida en el ámbito de su mandato.

III. LOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN NO UNIFORME DE LA SECCIÓN III DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

36. En esta sección las CE procederán a impugnar los ejemplos sustantivos de supuesta aplicación no uniforme presentados por los Estados Unidos en la sección III de su Segunda declaración oral, es decir, el caso de las videocámaras, el caso de la consola PlayStation2 de Sony y la sentencia del TJCE en el asunto *Intermodal Transports*.[22] Sobre esta base, las CE añadirán una conclusión general sobre las pruebas presentadas por los Estados Unidos en apoyo de sus alegaciones con respecto al párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

A. VIDEOCÁMARAS

37. En lo que respecta a la clasificación de las videocámaras, los Estados Unidos alegan que el "efecto retroactivo" de las notas explicativas de las CE plantea un problema de aplicación no uniforme de la normativa aduanera comunitaria.[23] Estas alegaciones carecen de fundamento. Además, las

[19] Cabe señalar que el cobro de la deuda aduanera después del despacho no es un "procedimiento aduanero" según los términos del párrafo 16 del artículo 4 del CAC. Sin embargo, las CE entienden que el Grupo Especial ha utilizado estos términos en un sentido amplio.

[20] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 6 del Grupo Especial, párrafo 31.

[21] Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial, párrafo 4.

[22] Las CE observan que dos de los tres ejemplos están extraídos de una exposición del Sr. Philippe de Baere, que es calificado por los Estados Unidos como "avezado especialista en legislación aduanera comunitaria" (Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 24, y Estados Unidos - Prueba documental 59). El Sr. de Baere es miembro de un bufete de abogados de Bruselas con una gran experiencia práctica en la esfera de la legislación aduanera, que representa frecuentemente a la industria y los comerciantes frente a las autoridades e instituciones aduaneras comunitarias. El Sr. de Baere ha intervenido también personalmente en los dos casos mencionados por los Estados Unidos. Las CE quisieran poner de manifiesto que no cabe sorprenderse de que un abogado mercantilista en activo defienda una postura que es útil para los intereses de sus clientes. Sin embargo, las CE consideran que una exposición de un abogado interesado no se puede considerar una descripción objetiva de los hechos. El valor probatorio de la exposición del Sr. de Baere en la presente diferencia, por consiguiente, es nulo.

[23] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 26 y siguientes.

alegaciones estadounidenses parecen relacionarse principalmente con la cuestión del cobro de la deuda aduanera después del despacho de aduana, asunto que como ya han demostrado las CE24, no está incluido en el ámbito del mandato del Grupo Especial.

38. Los Estados Unidos han presentado su referencia al caso de las videocámaras como una réplica a la referencia de las CE a las notas explicativas como instrumento para garantizar la aplicación uniforme de las normas de clasificación comunitarias.[25] Sin embargo, a continuación plantean la cuestión de si los Estados miembros pueden decidir, después de la publicación de una nota explicativa de las CE, cobrar retroactivamente derechos adicionales por importaciones realizadas antes de la publicación de esa nota explicativa.[26]

39. Esta cuestión no tiene nada que ver con el valor de las notas explicativas como instrumentos para asegurar la aplicación uniforme de las normas de clasificación arancelaria. Ni que decir tiene que una nota explicativa sólo si ha sido aprobada puede ser eficaz para asegurar la aplicación uniforme de los aranceles. La cuestión de cuál puede ser su efecto sobre el cobro de derechos aduaneros relacionados con importaciones que se realizaron antes de la aprobación de la nota explicativa se relaciona con el cobro de la deuda aduanera después del despacho de aduana, que es una cuestión distinta de la clasificación arancelaria.

40. Los Estados Unidos no han demostrado que haya una falta de uniformidad en la clasificación arancelaria de las CE después de la publicación de la nota explicativa presentada por ellos mismos como prueba documental 61. Las IAV expedidas por las autoridades españolas y presentadas por los Estados Unidos como prueba documental 65 son todas ellas plenamente conformes con las normas de clasificación comunitarias. Los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de que otro Estado miembro haya clasificado las videocámaras de forma contradictoria con las normas de clasificación comunitarias. Simplemente han afirmado, sin presentar ninguna prueba o documentación de apoyo, que "la autoridad francesa informó a la empresa de que se proponía percibir retroactivamente derechos adicionales sobre algunas videocámaras, incluidas las cámaras, es decir, modelos abarcados por las IAV españolas".[27] Por tanto, parece que la cuestión abordada por las autoridades francesas era el cobro de los derechos aduaneros después del despacho de aduana y no la clasificación arancelaria. Además, los Estados Unidos no han aportado ninguna prueba de cuándo se realizó la importación en cuestión y de si en efecto los productos en cuestión se correspondían con los descritos en las IAV expedidas por las autoridades españolas.

41. Como la cuestión, por consiguiente, no se relaciona con la aplicación uniforme de las normas de clasificación arancelaria sino más bien con el cobro de las deudas aduaneras después del despacho de aduana las CE consideran que es ajena al ámbito del mandato del Grupo Especial. Por tanto, las CE no responderán a estas alegaciones en detalle. Sin embargo, las CE quisieran señalar que el contenido de la exposición estadounidense de los hechos es tan confuso e incompleto que hace muy difícil, si no imposible, una réplica significativa en esta etapa. Además, los Estados Unidos no han presentado ninguna información sobre las circunstancias concretas de los casos en que se pretendió el cobro de los derechos aduaneros. Por este motivo, las CE se limitarán a continuación a algunas observaciones generales.

[24] Véase *supra*, sección II.B.

[25] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 26.

[26] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 29 y 31.

[27] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 30.

42. Primero, los Estados Unidos se refieren a un problema relativo a la aplicación uniforme del apartado 3 del artículo 221 del CAC que describen como una disposición que "prescribe el plazo posterior a la importación durante el cual se puede percibir una deuda aduanera".[28] Sin embargo, eso no es correcto. El apartado 3 del artículo 221 del CAC sólo regula de forma muy parcial la cuestión del cobro de los derechos aduaneros después del despacho de aduana, incluida la cuestión del efecto de la aprobación de notas explicativas después de la importación. De hecho, el apartado 3 del artículo 221 sólo regula el período durante el cual se puede comunicar una deuda aduanera al deudor. En cambio, la cuestión de las condiciones sustantivas bajo las cuales se puede cobrar retroactivamente la deuda aduanera es abordada en el artículo 220 del CAC, y en particular en el apartado 2 a) del mismo.

43. Esta confusión por parte de los Estados Unidos es puesta de nuevo de manifiesto por la referencia que hacen éstos a una directriz administrativa de Alemania que, en su opinión, sirve de ejemplo para su alegación de aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del CAC.[29] Sin embargo, esta directriz administrativa no se refiere al artículo 221 del CAC, sino a los artículos 220 y 236 del CAC. Además, frente a lo que sugieren los Estados Unidos, esta directriz no es una invención alemana sino la trasposición de una carta dirigida a las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros, incluida Alemania, por la Comisión Europea en 1996.[30] Existe también un documento informativo elaborado por los servicios de la Comisión Europea sobre la aplicación del apartado 2 b) del artículo 220 y el artículo 239 del CAC, que transmite nuevas directrices a las autoridades de los Estados miembros.[31]

44. Segundo, los Estados Unidos alegan que la única excepción permitada al apartado 3 del artículo 221 del CAC es la interposición de un recurso, que suspende el plazo de tres años para comunicar la deuda aduanera.[32] Esto es igualmente incorrecto. Otra excepción importante es la que establece el apartado 4 del artículo 221 del CAC, según el cual cuando la deuda aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente en el momento en que se cometió, la comunicación al deudor podrá efectuarse, en las condiciones previstas por las disposiciones vigentes, después de la expiración del plazo de tres años. Como ha aclarado el Tribunal de Justicia, la cuestión de si un acto puede ser perseguible judicialmente es una cuestión que depende de la legislación de los Estados miembros y no del derecho comunitario.[33] Además, la longitud del plazo durante el cual se puede comunicar la deuda en el caso previsto en el apartado 4 del artículo 221 del CAC ha de ser establecida igualmente por la legislación de los Estados miembros. Por tanto, las diferencias resultantes que pudiera haber son diferencias entre las legislaciones, no ejemplos de una aplicación no uniforme.

---

[28] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 27.

[29] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 29 y Estados Unidos - Prueba documental 63.

[30] Las CE adjuntan, como prueba documental 153, las cartas dirigidas a Alemania y el Reino Unido. Salvo las direcciones, ambas cartas son idénticas.

[31] CE - Prueba documental 154. El documento puede consultarse también en el portal de la DG TAXUD (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/ customs/procedural_aspects/ general/debt/guidelines_en.pdf)

[32] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 31.

[33] Asunto C-273/90, *Meico-Fell*, [1991] ECR I-5569, párrafo 13 (CE - Prueba documental 155).

45. En conclusión, el caso de las videocámaras no demuestra ninguna falta de uniformidad en la práctica comunitaria de clasificación. En cuanto a la cuestión del cobro de la deuda aduanera después del despacho de aduana, esta cuestión está fuera del ámbito del mandato del Grupo Especial.

B. PLAYSTATION2 DE SONY

46. En su Segunda declaración oral, los Estados Unidos plantean un supuesto problema de aplicación no uniforme relacionado con la clasificación de la consola PlayStation2 (PS2) de Sony.[34] Sin embargo, la exposición de los hechos por los Estados Unidos es incompleta e induce a error. Los Estados Unidos afirman que el procedimiento seguido en el Reino Unido demuestra cómo la decisión del TJCE sobre el asunto *Timmermans* puede menoscabar la uniformidad en lugar de favorecerla[35], pero su utilización por el Alto Tribunal de Justicia (*High Court of Justice*) del Reino Unido como base para confirmar la interpretación ofrecida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) y otras instituciones comunitarias clave demuestra en realidad cómo el asunto *Timmermans* puede operar de forma que promueve la uniformidad.

47. En último extremo, se necesita un examen más detallado de los hechos que concurren en el caso para demostrar cómo la norma establecida en el asunto *Timmermans* fomenta en realidad, en lugar de menoscabarla, una interpretación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria. Ese caso se originó a raíz de una solicitud presentada por Sony Europe Ltd. a las autoridades del Reino Unido de una IAV que clasificara su consola PS2. A resultas de esta primera solicitud, las autoridades aduaneras del Reino Unido clasificaron las consolas PS2 en la partida CN 9504 1000, que abarca los "videojuegos del tipo de los utilizados con receptor de televisión"[36], porque concluyeron que la consola PS2 no era programable libremente.[37] Esta clasificación fue confirmada en un examen departamental.[38]

48. Posteriormente, la cuestión fue sometida al Comité del Código Aduanero de las CE (Sección de Nomenclatura).[39] El Comité consideró unánimemente que las consolas PS2 en efecto estaban incluidas en la partida CN 9504 1000, pero por un motivo diferente. En concreto, aunque consideró que las consolas PS2 estaban clasificadas correctamente en la partida CN 9504 1000, concluyó que el artículo era libremente programable. A continuación, la Comisión aprobó el 10 de julio de 2001 un reglamento de clasificación de las consolas PS2 que las incluía en la partida 9504.[40] Basándose en la norma general interpretativa 3 b), el reglamento indicaba como fundamento que "entre las diferentes funciones del aparato … la de videojuego constituye la característica esencial".

49. En apelación, el Tribunal del Reino Unido anuló la decisión de las autoridades del Reino Unido a la vista del hecho de que el fundamento jurídico de la denegación de la IAV solicitada era incorrecto.[41] Por consiguiente, pendiente todavía de publicación el reglamento de la Comisión, Sony

[34] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 32 a 34.

[35] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 32.

[36] CE - Prueba documental 156.

[37] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafo 4.

[38] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafo 4.

[39] Asunto T-243/01, *Sony* (CE - Prueba documental 24).

[40] Reglamento 1400/2001, CE - Prueba documental 157.

[41] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafo 4.

pidió una nueva IAV, y la autoridad aduanera del Reino Unido expidió una IAV que clasificaba la consola PS2 en la partida CN 8471 49 00 (que abarca las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus partes)[42], pero dejando claro que esta clasificación sería revocada cuando entrara en vigor el reglamento de clasificación.[43] El 25 de julio de 2001, a raíz de la entrada en vigor del reglamento, la autoridad del Reino Unido revocó la IAV y, de conformidad con el derecho comunitario, la consola PS2 fue clasificada en la partida CN 9504 1000, la misma clasificación de la IAV original.[44]

50. Después de la revocación de la IAV que clasificaba la consola PS2 en la partida 8471 49 90 00, Sony impugnó la validez del reglamento ante el Tribunal de Primera Instancia.[45] Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2003, el TPI invalidó el reglamento. Sin embargo, en lo que respecta a la clasificación sustantiva, el TPI confirmó expresamente que el artículo se podía clasificar en la partida 9504 1000.[46] Lo que más bien determinó es que los motivos dados para la clasificación, a saber, utilizar como base la norma general interpretativa 3 b), había sido un error.[47] También observó expresamente que la clasificación de la consola PS2 en la partida CN 9504 1000 se podía basar correctamente en las características objetivas del producto.[48] En particular, el Tribunal constató que[49]:

> Tal razonamiento puede trasladarse a un caso como el de autos. Así, a falta de definición de "videojuegos", en el sentido de la subpartida 9504 10, procede considerar que lo es todo producto destinado a ser utilizado, exclusiva o esencialmente, para la utilización de videojuegos, aun cuando pueda utilizarse para otros fines.
>
> Pues bien, es indiscutible que, tanto por la manera como se importa, se vende y se presenta al público como por la manera como está configurada, la consola PlayStationR2 se destina a ser utilizada esencialmente para la utilización de videojuegos, aunque, como se deduce del Reglamento impugnado, pueda también utilizarse para otras funcionalidades, como la lectura de DVD video y de CD audio, así como el tratamiento automático de datos.

51. Después de esta sentencia, las autoridades aduaneras del Reino Unido solicitaron a la Comisión Europea, mediante carta de fecha 21 de octubre de 2003, asesoramiento respecto de la clasificación de la consola PS2 de Sony. En respuesta, la Comisión envió una carta a todas las autoridades aduaneras de las CE (incluidas las autoridades aduaneras de los nuevos Estados miembros), de fecha 8 de enero de 2004, confirmando que, sobre la base de la sentencia del TPI, la

[42] CE - Prueba documental 156.

[43] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafos 5, 50 y 51.

[44] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafo 6.

[45] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafo 6.

[46] CE - Prueba documental 24, párrafo 119.

[47] CE - Prueba documental 24, párrafo 133.

[48] CE - Prueba documental 24, párrafo 110.

[49] CE - Prueba documental 24, párrafos 111 y 112.

consola PS2 no se podía clasificar en la partida 8471, sino que tenía que ser clasificada en la partida 9504.[50]

52. Después de la decisión del TPI, Sony intentó "recuperar" la IAV que había clasificado la consola PS2 en la partida CN 8471 49 90 00 emitida por las autoridades del Reino Unido antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento de clasificación. Merece la pena señalar que Sony no solicitó una nueva IAV, sino que se limitó simplemente a "recuperar" la antigua IAV. Por consiguiente, Sony centró sus argumentos ante el *VAT and Duties Tribunal* del Reino Unido exclusivamente en la recuperación de la IAV revocada y no abordó la cuestión de la clasificación sustantiva del artículo.[51] El Tribunal del Reino Unido rechazó la apelación de Sony y mantuvo la revocación de la IAV en vigor.[52]

53. En apelación, el Alto Tribunal del Reino Unido denegó igualmente la recuperación de la IAV referente a la partida CN 8471 49 90 00. Sus motivos se basaban en los objetivos y principios de la Comunidad.[53] En concreto, el Alto Tribunal del Reino Unido consideró evidente, tras un examen más detallado de la cuestión y teniendo en cuenta, entre otras cosas, la decisión del TPI, una carta de la Comisión defendiendo la interpretación del TPI, las conclusiones unánimes del Comité del Código Aduanero y otras interpretaciones de organizaciones internacionales posteriores a la decisión -todas las cuales clasificaban el artículo en la partida 9504 1000[54]- que la IAV que clasificaba las consolas PS2 en la partida CN 8471 49 90 00 era errónea y por consiguiente el demandante no tenía derecho a recuperar esa IAV.[55] Con respecto a la revocación original de la IAV que clasificaba las consolas PS2 en la partida CN 8471 49 90 00, el Tribunal concluyó, sobre la base del asunto *Timmermans*, que las autoridades nacionales tienen derecho a revocar la clasificación como acto independiente del reglamento y, por consiguiente, la revocación de la IAV que clasificaba la consola PS2 en la partida 8471 49 90 00 seguía siendo válida a la vista del hecho de que el fundamento de la revocación seguía siendo válido.[56]

54. Por último, la declaración de los Estados Unidos aludiendo al hecho de que el Alto Tribunal de Justicia revocó la IAV basándose en su "propia reevaluación de las normas de clasificación"[57] induce claramente a error. La revocación del 25 de julio de 2001 se debió a la entrada en vigor de un reglamento de clasificación de las CE. Por consiguiente, más que seguir su "propia interpretación de las normas de clasificación", la autoridad del Reino Unido de hecho aplicó debidamente la legislación comunitaria. El Alto Tribunal del Reino Unido confirmó la validez de la revocación haciendo expresa referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Timmermans* y sobre la base de las pruebas claras que servían de fundamento para el razonamiento en que se basaba la revocación.[58]

---

[50] CE - Prueba documental 158.

[51] CE - Prueba documental 159.

[52] CE - Prueba documental 159.

[53] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafo 118.

[54] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafos 141 a 146.

[55] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafos 97 y 147.

[56] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafos 132 y 133.

[57] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 33.

[58] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafo 118.

De nuevo se trata de otro ejemplo del hecho de que el precedente del asunto *Timmermans*, más que menoscabar la uniformidad, en realidad la fomenta.

55. Además, los Estados Unidos han criticado también al Alto Tribunal del Reino Unido por no haber remitido la cuestión al TJCE.[59] Esta crítica carece totalmente de justificación. En primer lugar, el Alto Tribunal no es un tribunal de última instancia y, por consiguiente, no está obligado a remitir cuestiones al TJCE. En segundo lugar, en lo que respecta a la cuestión de la clasificación sustantiva, esta cuestión había sido suficientemente aclarada por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Además, los elementos de apoyo, como la carta de la Comisión, la opinión del Comité y las opiniones de la OMA, apuntaban todos en la misma dirección.[60] Sony, presumiblemente reconociéndolo, ni siquiera intentó plantear directamente la cuestión de la clasificación. Por consiguiente, el tribunal del Reino Unido no se equivocó al considerar que la cuestión estaba suficientemente clara y que podía decidir sobre ella por sí mismo.

56. En conclusión, el caso de la consola PlayStation2 de Sony no es un caso de falta de uniformidad del sistema de clasificación arancelaria comunitario. Al contrario, se trata de un caso en que un "avezado especialista en legislación aduanera comunitaria"[61] intentó, sin éxito, mediante contorsiones jurídicas sin precedentes, recuperar una IAV que hubiera entrado en colisión con la práctica de clasificación uniforme de las CE. El hecho de que este intento fracasara dice mucho sobre la eficacia del sistema comunitario. En cambio, resulta irónico que los Estados Unidos se conviertan en abogados de un comportamiento que claramente hubiera dificultado la aplicación uniforme de la legislación comunitaria.

C. INTERMODAL TRANSPORTS

57. Los Estados Unidos presentan la sentencia del TJCE sobre el asunto *Intermodal Transports* diciendo que deja una "amplia capacidad discrecional" a los tribunales de los Estados miembros con respecto a si remiten o no una cuestión prejudicial al TJCE.[62] Según los Estados Unidos, esta capacidad discrecional aumentaría las divergencias entre los Estados miembros en la aplicación de la legislación aduanera.[63]

58. Sin embargo, estos dos argumentos se basan en una lectura incompleta e incorrecta de la sentencia.

59. En lo que respecta al primer argumento (relativo a la capacidad discrecional), las CE han explicado ya en su Primera comunicación escrita que las posiciones de los jueces o tribunales nacionales varían en función de que el derecho nacional interno reconozca o no un recurso judicial.[64]

60. Los jueces o tribunales nacionales contra cuyas decisiones el derecho interno reconoce la posibilidad de recurso judicial, tienen derecho, pero en principio no están obligados, a someter cuestiones al Tribunal de Justicia para que éste pronuncie una decisión prejudicial sobre la

[59] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 34.

[60] Estados Unidos - Prueba documental 70, párrafos 143 y 144.

[61] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 24.

[62] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 37, al final.

[63] También en la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 37, al final.

[64] Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 180.

interpretación.[65] La justificación de esta norma evidentemente es que, en caso de que un juez o tribunal decida no someter una cuestión, la decisión de este juez o tribunal podrá ser recurrida y corresponde al juez o tribunal contra cuyas decisiones no existe posibilidad de recurso judicial en el marco del derecho interno la obligación de someter la cuestión.

61. En efecto, en lo que respecta a los jueces o tribunales nacionales contra cuyas decisiones no existe la posibilidad de recurso judicial en el marco del derecho interno, el Tribunal afirma de nuevo en el asunto *Intermodal Transports* que "el artículo 234 CE, párrafo tercero, debe interpretarse en el sentido de que, cuando se suscita ante ellos [los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas resoluciones no pueden ser objeto de recurso judicial de Derecho interno] una cuestión de Derecho comunitario, están obligados a someterla al Tribunal de Justicia".[66]

62. El asunto *Intermodal Transports* demuestra precisamente que esta obligación es respetada por los jueces o tribunales nacionales más altos. El "Hoge Raad" de los Países Bajos es el tribunal de última instancia en asuntos aduaneros relacionados con la clasificación y, cuando tuvo que resolver sobre la clasificación de un vehículo, pidió una decisión prejudicial al TJCE sobre la clasificación correcta de la mercancía en cuestión.[67] Los Estados Unidos no mencionaron esta cuestión en su Segunda declaración oral.

63. Aunque haya excepciones a la obligación de someter una cuestión, estas excepciones están sometidas a las estrictas condiciones que estableció el TJCE en el asunto *Cilfit*.[68] Las excepciones son las siguientes[69]:

- la cuestión suscitada no es pertinente; o,
- la disposición comunitaria controvertida ya ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia; o,
- la correcta aplicación del Derecho comunitario se impone como una evidencia tal que no deja lugar a ninguna duda razonable.

[65] La declaración del Sr. Vermulst que figura en el artículo citado por los Estados Unidos en el párrafo 38 de su Segunda declaración oral se refiere en concreto a la posición de los tribunales nacionales de primera instancia (Estados Unidos - Prueba documental 72). Por consiguiente, este artículo no sirve de apoyo para el argumento general y exagerado expuesto por los Estados Unidos en su Segunda declaración oral de que los tribunales de los Estados miembros disponen de una "amplia capacidad discrecional" con respecto a si someten o no una cuestión al TJCE.

[66] Párrafo 33.

[67] Párrafos 3 y 46 a 64.

[68] Asunto 283/81, *Cilfit*, [1982], ECR página 3415 (CE - Prueba documental 160).

[69] Párrafo 33 de la sentencia sobre el asunto *Intermodal Transports* y, con más detalle, párrafos 10 a 16 de la sentencia sobre el asunto *Cilfit*.

64. En lo que respecta al último criterio (no deja lugar a ninguna duda razonable), que ha atraído la atención de los Estados Unidos, el TJCE ha repetido en el asunto *Intermodal Transports* que[70]:

> […] antes de llegar a la conclusión de que la correcta aplicación del Derecho comunitario se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda alguna razonable sobre la manera de resolver al cuestión suscitada y de abstenerse, por lo tanto, de plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional nacional debe llegar a la convicción de que esta evidencia se impondría igualmente a los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros, así como al Tribunal de Justicia (sentencia CILFIT y otros, antes citada, apartado 16).

65. Sin embargo, como ya se ha indicado, las excepciones están sometidas a condiciones estrictas. Hablando en términos generales, deben valorarse "en función de las características propias del Derecho comunitario, de las dificultades concretas que presente su interpretación y del riesgo de divergencias jurisprudenciales dentro de la Comunidad".[71]

66. Las dos primeras condiciones generales fueron ya desarrolladas por el TJCE en el asunto *Cilfit*[72]:

> […] hay que tener en cuenta que la legislación comunitaria está redactada en varios idiomas y que las versiones en estos diferentes idiomas son todas ellas igualmente auténticas. Por consiguiente, la interpretación de una disposición del Derecho comunitario implica una comparación de las versiones en los diferentes idiomas.
>
> También hay que tener en cuenta que, aunque las versiones en los diferentes idiomas sean totalmente conformes entre sí, el Derecho comunitario utiliza una terminología que le es peculiar. […].
>
> Por último, todas las disposiciones del Derecho comunitario se han de situar en su contexto y han de ser interpretadas teniendo en cuenta las disposiciones del Derecho comunitario en su conjunto, teniendo presentes los objetivos del mismo y el estado de su evolución en la fecha en que ha de aplicarse la disposición en cuestión.

67. Además, en la sentencia sobre el asunto *Intermodal Transports* se añade que las excepciones a la obligación de someter una cuestión prejudicial se han de utilizar de forma muy restrictiva en los casos relacionados con la clasificación arancelaria en que otro Estado miembro haya expedido a un tercero una IAV. El Tribunal señaló que[73]:

> La circunstancia de que las autoridades aduaneras de otro Estado miembro hayan expedido a un tercero en el litigio de que conoce dicho órgano jurisdiccional una IAV, respecto a una mercancía determinada, que parezca reflejar una interpretación de las partidas

[70] Estados Unidos - Prueba documental 71, párrafo 39.

[71] Estados Unidos - Prueba documental 71, párrafo 33.

72 CE - Prueba documental 160, párrafos 18 a 20.

[73] Estados Unidos - Prueba documental 71, párrafo 34 (sin subrayado en el original).

> de la NC distinta de la que dicho órgano jurisdiccional considera que debe aplicar a un producto similar controvertido en ese litigio, debe, sin duda alguna, incitar a dicho órgano jurisdiccional a extremar la atención en su apreciación de la posible inexistencia de toda duda razonable en cuanto a la correcta aplicación de la NC, teniendo en cuenta, en particular, los tres elementos de la evaluación citados en el apartado anterior (sin subrayados en el original).

68. Por consiguiente, induce a error afirmar, como hacen los Estados Unidos, que el asunto *Intermodal Transports* "demuestra […] la amplia capacidad discrecional de que disponen los tribunales de los Estados miembros para someter o no someter cuestiones prejudiciales al TJCE".[74] Sólo los jueces o tribunales nacionales contra cuyas decisiones haya la posibilidad de recurso judicial en el marco del derecho interno disponen de este margen de capacidad discrecional. Cuando se trata de tribunales o jueces nacionales contra cuyas decisiones no hay posibilidad de recurso judicial en el marco del derecho interno, la norma general es que tienen la obligación de someter una cuestión prejudicial al TJCE, con unas pocas excepciones muy concretas y limitadas. La sentencia sobre el asunto *Intermodal Transports* ha hecho todavía más restrictivas estas excepciones en la esfera de la clasificación arancelaria.

69. Por último, en lo que respecta al segundo argumento presentado por los Estados Unidos en su Segunda declaración oral, merece la pena señalar que, frente a lo que pretenden, el asunto *Intermodal Transports* no demuestra ninguna falta de uniformidad en la práctica de clasificación arancelaria comunitaria, sino que, al contrario, demuestra claramente cómo contribuyen las decisiones prejudiciales a la aplicación uniforme por las CE de sus leyes.

70. En efecto, el TJCE ha aclarado en la sentencia que la partida 8709 de la Nomenclatura Combinada se ha de interpretar que no abarca el vehículo en cuestión. Esto significa que, según el precedente *Timmermans*, han de revocarse todas las IAV emitidas por las autoridades aduaneras nacionales que clasificaran ese vehículo en esa partida.[75] Además, debido al efecto vinculante de las decisiones prejudiciales[76] y en ausencia de cambios en las normas de clasificación pertinentes, las autoridades aduaneras nacionales no están facultadas para seguir clasificando esa mercancía en la partida 8709.

71. En el caso actual, la IAV expedida por Finlandia el 14 de mayo de 1996 expiró, de conformidad con las disposiciones del apartado 4 del artículo 12 del CAC, en mayo de 2002, y no ha sido renovada. Por consiguiente, no hay ninguna cuestión de aplicación no uniforme que haya de resolverse. En cambio, si la IAV finlandesa siguiera siendo válida o si hubiera sido renovada, las autoridades finlandesas la hubieran revocado de conformidad con el precedente del asunto *Timmermans*.

72. En conclusión, frente a las afirmaciones de los Estados Unidos, el asunto *Intermodal* sirve de ejemplo de que el procedimiento de presentación de cuestiones prejudiciales constituye un instrumento eficaz para garantizar una clasificación arancelaria uniforme.[77]

---

[74] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 37, al final.

[75] Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 326 y siguientes, y Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 99.

[76] Respuesta de las CE a la pregunta 73, párrafos 131 y 132, y a la pregunta 163, párrafo 67.

[77] Merece la pena señalar que esta conclusión cuenta también con el apoyo del artículo del Sr. Vermulst, citado únicamente de forma muy selectiva por los Estados Unidos en el párrafo 38 de su Segunda declaración oral. Después del pasaje citado por los Estados Unidos, el Sr. Vermulst dice lo siguiente:

D. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO AL PÁRRAFO 3 A) DEL ARTÍCULO X DEL GATT

73. Las CE ya señalaron en sus observaciones finales en la segunda audiencia del Grupo Especial la falta de pruebas fácticas que sirvieran de apoyo a las alegaciones de los Estados Unidos de aplicación no uniforme.[78] En la esfera de la clasificación arancelaria[79], los Estados Unidos se refirieron inicialmente a dos casos, y en ninguno de ellos lograron demostrar una falta de uniformidad. En su Segunda declaración oral, los Estados Unidos hicieron un esfuerzo tardío para presentar tres nuevos ejemplos de supuesta no uniformidad. Sin embargo, como las CE han demostrado, ninguno de ellos es un ejemplo de falta de uniformidad y uno de ellos ni siquiera está dentro del ámbito del mandato del Grupo Especial. Resulta más irónico todavía que en determinados casos, y muy destacadamente en el caso de la consola PlayStation2 de Sony, los Estados Unidos se conviertan en abogados del comportamiento que en realidad menoscabaría la uniformidad en lugar de fomentarla.

74. En todas sus comunicaciones, las CE han subrayado que corresponde a los Estados Unidos demostrar que el sistema comunitario implica una falta de administración uniforme. En respuesta a la pregunta 173 del Grupo Especial, las CE han comentado también los requisitos que han de cumplir las pruebas para que establezcan que el sistema comunitario "en cuanto tal" conduce a una falta de aplicación uniforme.

75. Un punto de referencia útil para el presente asunto sigue siendo el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Tuberías para perforación petrolera procedentes de México*.[80] En ese asunto, el Órgano de Apelación revocó la constatación del Grupo Especial de que el *Sunset Policy Bulletin* de los Estados Unidos en sí mismo violaba el Acuerdo Antidumping porque consideró que una muestra de más de 20 casos de aplicación extraídos entre los más de 200 casos presentados por México no bastaba para una evaluación objetiva de los hechos.

76. En el presente asunto, los Estados Unidos piden al Grupo Especial que formule la constatación de que todo el sistema comunitario de administración de aduanas es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Pide al Grupo Especial que llegue a esta conclusión sobre la base de unos casos que no llegan a sumar un puñado y que los propios Estados Unidos seleccionaron. Sostenemos que una muestra tan pequeña y muy selectiva no es base suficiente para evaluar si el sistema comunitario, o componentes individuales del mismo, son compatibles con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Esta conclusión es tanto más necesaria si se observa que del puñado de casos seleccionados por los Estados Unidos ni uno solo demuestra realmente una falta de uniformidad del sistema comunitario de administración de aduanas.

77. En términos generales, las CE sostienen, por consiguiente, que los Estados Unidos no han establecido que haya una falta de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria en las esferas indicadas en la solicitud de establecimiento del Grupo Especial.

"Evidentemente, el TJCE está por tanto preparado para intervenir con profundidad en esta esfera de la legislación comercial comunitaria. […] Una explicación de esta diferencia podría ser que una clasificación aduanera uniforme y correcta es uno de los pilares del éxito de una unión aduanera". (Estados Unidos - Prueba documental 72, párrafo 21).

[78] Declaración final de las CE, párrafos 19 y 20.

[79] La alegación de los Estados Unidos en la esfera de la valoración en aduana carece totalmente de pruebas que le sirvan de fundamento ya que parece basarse enteramente en suposiciones y extrapolaciones del Informe de 2000 del Tribunal de Cuentas de las CE.

[80] Respuesta de las CE a la pregunta 173 del Grupo Especial, párrafo 98.

IV. CONCLUSIÓN

78. Por los motivos antes indicados, las CE reiteran la conclusión expuesta en su Primera comunicación escrita.

ANEXO C-2

RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL EN RELACIÓN CON LA SECCIÓN III DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

PREGUNTAS PARA LOS ESTADOS UNIDOS

177. Sírvanse explicar por qué los Estados Unidos no se refirieron antes de la segunda reunión sustantiva a las pruebas contenidas en la sección III de su declaración en esa reunión.

Los Estados Unidos tuvieron conocimiento de los ejemplos recogidos en la sección III de su declaración oral en la segunda reunión sustantiva gracias a la exposición que hizo el Sr. Philippe De Baere el 27 de octubre de 2005 en un simposio de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos (ABA).[1] Los Estados Unidos propusieron estos ejemplos porque ayudan a impugnar argumentos concretos expuestos por las CE en anteriores comunicaciones y porque, en términos más generales, impugnan la afirmación de las CE de que los Estados Unidos basan sus alegaciones en supuestos "teóricos".[2]

Cuando los Estados Unidos tuvieron conocimiento de la existencia de casos de aplicación no uniforme, identificaron algunos concretos que ponían de manifiesto cuestiones que se habían planteado en anteriores etapas de la diferencia y que ayudarían al Grupo Especial a examinarlas. No cabe sorprenderse de que los Estados Unidos, al identificar ejemplos de aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria, se centraran en particular en la información aportada por empresas, y sus representantes, que tienen una experiencia real y directa de trato con el sistema de aplicación de las leyes aduaneras comunitarias. Obtener información de estas fuentes no siempre fue fácil pues las personas que tienen que relacionarse habitualmente con la Comisión y con las 25 oficinas de aduanas independientes y delimitadas geográficamente muchas veces (lo que es comprensible) se resisten a criticar abiertamente el sistema comunitario. Como demuestra la aguzada crítica de las CE a la exposición del Sr. De Baere en su respuesta a la pregunta 172 del Grupo Especial, las preocupaciones no son infundadas.[3]

---

[1] Véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 24 y siguientes; Philippe De Baere, *Coping with customs in the EU: The uniformity challenge: Judicial review of customs decisions and implementing legislation*, presentación en la sección de Derecho Internacional de la ABA (27 de octubre de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 59). Como punto de referencia, debe recordarse que los Estados Unidos presentaron su Primera comunicación escrita el 12 de julio de 2005 e hicieron su declaración oral en la primera reunión del Grupo Especial el 14 de septiembre de 2005.

[2] Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 314; véase también *id*., párrafos 244 a 246; Primera declaración oral de las CE, párrafos 28 y 29; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 45 y 54.

[3] Comunicación adicional de las Comunidades Europeas de réplica a la sección III de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 36, nota 22 (14 de diciembre de 2005) (en adelante "Comunicación adicional de las CE"). Paradójicamente, las CE afirman que las declaraciones de las personas que personalmente han padecido las consecuencias de la aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria (o su representante) no son creíbles porque supuestamente tienen un interés personal. Véase *id*., Declaración final de las CE en la segunda reunión del Grupo Especial, párrafo 16 (afirmando que la declaración jurada del presidente de Rockland Industries "no tiene absolutamente ningún valor probatorio"). Los Estados Unidos consideran esta afirmación sorprendente. Las personas cuyas declaraciones están en cuestión no tienen absolutamente nada que ganar del hecho de relatar abiertamente sus experiencias directas con la aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria. En todo caso, las declaraciones críticas de personas que tienen un conocimiento directo de la aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria son *perjudiciales*

Los ejemplos expuestos en la sección III de la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión sustantiva se refieren todos ellos a hechos relativamente recientes. Ello ayuda a explicar el momento en que se presentaron estos casos en esta diferencia y contradice la acusación sin fundamento de las CE de que los Estados Unidos "han retenido deliberadamente las pruebas hasta la última etapa posible del procedimiento".[4] Por ejemplo, en el asunto de las videocámaras, las autoridades aduaneras de Francia sólo en noviembre de 2005 informaron al importador francés de que pretendían cobrar derechos adicionales sobre importaciones anteriores de ciertos modelos de videocámaras, a pesar de la IAV expedida a la filial española de la empresa francesa clasificando estos modelos en la partida 8525.40.91.[5] En el asunto de la consola PlayStation2 de Sony, el Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido sólo publicó a finales de julio de 2005 su decisión de renunciar a someter al TJCE una cuestión prejudicial sobre el alcance de los poderes de una autoridad aduanera y (de conformidad con la decisión del TJCE sobre el asunto *Timmermans*) de afirmar la facultad de esa autoridad para mantener revocada la IAV a pesar de la anulación del reglamento de las CE que había dado lugar previamente a esa revocación.[6] Por último, la decisión del TJCE sobre el asunto *Intermodal Transports* (Estados Unidos - Prueba documental 71) no se publicó hasta mediados de septiembre de 2005 (de hecho, al mismo tiempo que tenía lugar la primera reunión sustantiva de la presente diferencia).

Además, los ejemplos que los Estados Unidos presentaron impugnan argumentos concretos expuestos por las CE en anteriores comunicaciones. Las CE han afirmado que las notas explicativas, las IAV y las decisiones adoptadas por el TJCE a través del procedimiento de remisión de cuestiones prejudiciales son todas ellas instrumentos importantes para asegurar la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria.[7] Los ejemplos que los Estados Unidos expusieron en la segunda reunión del Grupo Especial ayudan a impugnar los argumentos de las CE con respecto a cada uno de estos instrumentos.

El caso de las videocámaras, por ejemplo, muestra la falta de uniformidad en la aplicación que produce la publicación de una nota explicativa, pues mientras algunos Estados miembros revisan la clasificación de importaciones anteriores teniendo en cuenta la nota (y, por consiguiente, cobran derechos adicionales), otros sólo atribuyen a la nota un efecto de cara al futuro.[8] El caso muestra

---

para sus intereses personales ya que pueden considerarse negativas para sus relaciones corrientes con las instituciones comunitarias y con las 25 oficinas aduaneras independientes y geográficamente delimitadas de las CE. El único interés personal que empresas y abogados tienen en personarse es el que deriva de su interés por mejorar el sistema de aplicación de la legislación aduanera comunitaria a fin de evitar problemas futuros. Por último, los Estados Unidos observan una clamorosa incoherencia entre la crítica de las CE de las declaraciones de personas que tienen un conocimiento directo de la aplicación no uniforme de las leyes aduaneras comunitarias calificándolas de no creíbles, por un lado, y su (errónea) afirmación de que no hay pruebas de anulación o menoscabo, por otro (véase la Segunda declaración oral de las CE, párrafo 54), dado que algunas de las pruebas más firmes de anulación y menoscabo son declaraciones de personas que han sido perjudicadas por la aplicación no uniforme por las CE de su legislación aduanera.

[4] Comunicación adicional de las CE, párrafo 14.

[5] Véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 30.

[6] Véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 33 y 34.

[7] Véase, por ejemplo, Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 93 a 104 y 244; Respuestas de las CE a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafos 55, 71 y 175.

[8] Véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 27 a 29. Las CE intentan restar importancia al asunto de las videocámaras alegando que no se relaciona con las "notas explicativas como instrumentos para asegurar la aplicación uniforme de las normas de clasificación arancelaria". Comunicación adicional de las CE, párrafo 39. En su opinión, pues, el ejemplo se relaciona con el efecto de las notas explicativas sobre el cobro de la deuda aduanera después del despacho de aduana. Lo que las CE ocultan

también una importante limitación de las IAV como supuesto instrumento para asegurar la aplicación uniforme. Por ejemplo, en una auditoría de una empresa, realizada en Francia, las autoridades aduaneras pudieron rechazar la clasificación de unas mercancías establecida en una IAV expedida a una empresa filial por las autoridades aduaneras de España.[9] Por último, el asunto muestra una importante limitación de las decisiones del TJCE como instrumentos que supuestamente pueden asegurar la aplicación uniforme. En efecto, el tribunal más alto de Francia sencillamente se negó a plantear una cuestión prejudicial al TJCE (con respecto a las circunstancias en que se puede suspender el plazo de tres años previsto en el Código Aduanero Comunitario para la comunicación de la deuda aduanera al deudor), a pesar de la aplicación divergente de las diferentes autoridades aduaneras de las CE.[10]

El caso de las consolas PlayStation2 de Sony es otro ejemplo que permite recusar dos argumentos planteados por las CE. Las CE han intentado alegar que la decisión del TJCE sobre el asunto *Timmermans* de enero de 2004, promueve la aplicación uniforme en lugar de menoscabarla.[11] La decisión sobre el asunto *Timmermans* permite que cada una de las 25 oficinas aduaneras independientes y geográficamente delimitadas de las CE pueda revocar o enmendar IAV a iniciativa propia y con independencia del efecto que hayan atribuido otras oficinas aduaneras de las CE a esas IAV. Los Estados Unidos han recusado la descripción de la decisión sobre el asunto *Timmermans* hecha por las CE como si se tratara de una decisión que promueve la uniformidad llamando la atención, entre otras cosas, sobre el caso de la consola PlayStation2 de Sony.[12] El caso de la consola PlayStation2 de Sony ayuda también a refutar la descripción de las CE del mecanismo de planteamiento de cuestiones prejudiciales como instrumento que supuestamente puede asegurar la aplicación uniforme, dado el respeto de los tribunales de los Estados miembros, como el tribunal del Reino Unido en el presente caso, a la petición del Abogado General de las CE de que se actúe con moderación al utilizar ese mecanismo en la esfera aduanera, según puede comprobarse en su opinión sobre el asunto *Wiener*.[13]

---

presentando el ejemplo de este modo es el punto básico de que distintas autoridades aduaneras de las CE atribuyen un efecto diferente a estos instrumentos, lo que socava la sugerencia de que "aseguran" la aplicación uniforme.

[9] Véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 30.

[10] Véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 31.

[11] Véase, por ejemplo, Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 99; Respuestas de las CE a las primeras preguntas del Grupo Especial, párrafo 30.

[12] La cuestión en ese caso era qué podía hacer una autoridad aduanera individual, a la vista del asunto *Timmermans*, si se producía la anulación de un reglamento de clasificación con efecto para todas las CE. En concreto, la cuestión era la situación de la IAV revocada por la autoridad sobre la base de un reglamento ahora anulado. ¿La autoridad tiene que recuperar la IAV (acto que, en teoría, puede promover la clasificación uniforme de la mercancía en cuestión, si bien en una partida distinta de la establecida en el reglamento ahora anulado)? ¿O puede la autoridad mantener revocada la IAV, basándose en motivos nuevos e independientes para hacerlo, en lugar de basarse en la existencia del reglamento ahora anulado? Citando el asunto *Timmermans*, el Alto Tribunal del Reino Unido constató que las autoridades aduaneras del Reino Unido podían mantener revocada la IAV, basándose para ello en motivos nuevos e independientes. Los Estados Unidos sostienen que el caso PlayStation2 demuestra que, aunque una oficina aduanera de las CE haya expedido una IAV supuestamente introduciendo un grado limitado de uniformidad en la clasificación de la mercancía en cuestión (al menos para el titular de la IAV), el precedente *Timmermans* autoriza a dicha oficina de aduanas a modificar o revocar la IAV por sus propios motivos independientes, de forma que se socava totalmente la aplicación uniforme.

[13] Véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 33 y 34.

Por último, la decisión sobre el asunto *Intermodal Transports* ayuda también a refutar la descripción de las CE de la utilidad del mecanismo de planteamiento de cuestiones prejudiciales como instrumento para garantizar la aplicación uniforme. Si el mecanismo de planteamiento de cuestiones prejudiciales sirviera realmente de instrumento para asegurar la aplicación uniforme, un caso evidente para utilizar ese instrumento sería que se diera a conocer al tribunal de un Estado miembro la clasificación divergente del producto en cuestión por la autoridad aduanera de otro Estado miembro. De hecho, la propia Comisión de las CE evidentemente sometió este argumento (sin éxito) al TJCE.[14] No obstante, el TJCE constató que ni siquiera esas circunstancias obligan a la utilización del mecanismo si el tribunal del Estado miembro cree que la clasificación correcta es "tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable".[15]

En resumen, cada uno de los ejemplos expuestos en la sección III de la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión del Grupo Especial ayuda a recusar los argumentos expuestos por las CE en sus anteriores comunicaciones. Lejos de dedicarse a un "juego de tácticas procesales"[16], los Estados Unidos han utilizado los ejemplos expuestos en la sección III de su declaración precisamente según lo previsto en el párrafo 12 del procedimiento de trabajo del Grupo Especial, a saber, "a efectos de las réplicas". Que hayan presentado estas pruebas de réplica en esta etapa del procedimiento no es de ningún modo insólito en el procedimiento de solución de diferencias de la OMC. En efecto, en este mismo procedimiento las CE presentaron seis nuevas pruebas documentales en apoyo de sus observaciones sobre las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión. Dado que dos de estas pruebas documentales (CE - Pruebas documentales 161 y 162) se refieren a la aplicación de la legislación aduanera estadounidense, que ni siquiera está en discusión en la presente diferencia, resulta difícil comprender cómo pueden satisfacer el criterio de ser "necesarias a efectos de las réplicas". En otras diferencias también las CE han presentado con frecuencia pruebas (manifiestamente a efectos de las réplicas) en la segunda reunión del Grupo Especial o posteriormente.[17]

178. En el párrafo 19 y siguientes de la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas sostienen que el párrafo 3 del artículo 221 no afecta a ninguna de las esferas de la administración de aduanas a las que se

---

[14] Véase *Intermodal Transports BV* v. *Staatssecretaris van Financiën*, asunto C-495/03, párrafo 35 (15 de septiembre de 2005) (relativo a la argumentación de la Comisión) (Estados Unidos - Prueba documental 71) ("*Intermodal Transports*").

[15] *Intermodal Transports*, párrafos 33 y 45 (Estados Unidos - Prueba documental 71).

[16] Comunicación adicional de las CE, párrafo 17.

[17] En la diferencia *CE - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios* (DS174 y DS290), las CE presentaron 31 nuevas pruebas documentales, que totalizaban 108 páginas, relacionadas con sus respuestas a preguntas formuladas después de la segunda reunión sustantiva con el grupo especial. En esa misma diferencia, las CE presentaron cinco nuevas pruebas documentales, que totalizaban 93 páginas, relacionadas con sus observaciones sobre las respuestas de los reclamantes a las preguntas. Aunque esa diferencia se relacionaba con medidas de las CE, algunas de las pruebas documentales presentadas por las CE en esa etapa del procedimiento se referían a acuerdos en los que las CE no eran parte (a saber, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte) y a la legislación interna de las partes reclamantes. En la diferencia *CE - Denominación comercial de sardinas*, las CE intentaron incluso introducir nuevas pruebas en la etapa de reexamen intermedio del procedimiento de los grupos especiales. Véase el Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Denominación comercial de sardinas*, WT/DS231/AB/R, párrafo 301 (adoptado el 23 de octubre de 2002). El Órgano de Apelación concluyó que la etapa de reexamen intermedio no era el momento adecuado para presentar nuevas (supuestas) pruebas de réplica.

hacía referencia en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos. Sírvanse formular observaciones al respecto.

La afirmación de las CE de que el apartado 3 del artículo 221 del Código Aduanero Comunitario ("CAC") no afecta a ninguna de las esferas de la administración de aduanas a las que se hacía referencia en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos parece que confunde las *alegaciones* hechas por los Estados Unidos con los *argumentos* expuestos en apoyo de esas alegaciones. Es una práctica firmemente establecida que, en virtud del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, la solicitud de establecimiento de un grupo especial ha de especificar las alegaciones de la parte reclamante pero no necesita detallar sus argumentos.[18]

Las alegaciones de los Estados Unidos con respecto al párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 están detalladas claramente, y en concreto en el primer párrafo de su solicitud de establecimiento de un grupo especial (WT/DS315/8). En dicho párrafo, los Estados Unidos alegan que "la manera en que las Comunidades Europeas ("CE") aplican las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* ("GATT de 1994") no es uniforme, imparcial y razonable, y, por lo tanto, es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994". La solicitud de establecimiento de un grupo especial pasa a continuación a identificar exactamente las leyes, reglamentos, decisiones y disposiciones del tipo descrito en el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 que las CE no aplican de la manera exigida por el párrafo 3 a) del artículo X. La primera medida identificada es el CAC, del que forma parte claramente el apartado 3 de su artículo 221.

El tercer párrafo de la solicitud de establecimiento de un grupo especial contiene una lista de ejemplos de algunas manifestaciones importantes de la falta de aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria. No se trata de una lista exhaustiva como deja claramente de manifiesto la frase introductoria "incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva". En su respuesta a la pregunta 172 del Grupo Especial, las CE argumentan que no se debe interpretar que esta frase abarca la esfera de la administración de aduana a que hace referencia el apartado 3 del artículo 221 del CAC (es decir, la comunicación de la deuda aduanera).[19]

Para presentar este argumento, las CE tratan los ejemplos incluidos en el tercer párrafo de la solicitud de establecimiento de un grupo especial como si fueran las alegaciones de los Estados Unidos, y no ejemplos que fundamentan la alegación de los Estados Unidos de que las CE están incumpliendo las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994 al no aplicar su legislación aduanera de manera uniforme. Aunque quizá sea inadecuado utilizar la frase "incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva" para incluir en una diferencia medidas o disposiciones de acuerdos no enumerados expresamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial[20], su utilización en conexión con un resumen de *argumentos* en apoyo de una alegación no tiene ninguna

[18] Véase, por ejemplo, Informe del Órgano de Apelación *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos*, WT/DS98/AB/R, párrafo 125 (adoptado el 12 de enero de 2000); Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, WT/DS27/AB/R, párrafo 141 (adoptado el 25 de septiembre de 1997); Informe del Órgano de Apelación, *Brasil - Medidas que afectan al coco desecado*, WT/DS22/AB/R, página 27 (adoptado el 20 de marzo de 1997).

[19] Comunicación adicional de las CE, párrafo 32.

[20] Véase el Informe del Órgano de Apelación, *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, WT/DS50/AB/R, párrafo 90 (adoptado el 16 de enero de 1998).

repercusión en el derecho de la parte reclamante de presentar otros argumentos a lo largo de una diferencia.[21]

Los Estados Unidos debatieron el apartado 3 del artículo 221 del CAC (una disposición de una medida identificada en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por los Estados Unidos por no ser aplicada por las CE de manera uniforme) en su declaración oral en la segunda reunión del Grupo Especial como parte de una réplica a la afirmación de las CE de que determinados instrumentos, es decir, las notas explicativas, las IAV y las sentencias del TJCE, aseguraban la aplicación uniforme. Como se indicó en la respuesta a la pregunta 177, *supra*, la aplicación divergente del apartado 3 del artículo 221 en el caso de las videocámaras pone de manifiesto que estos instrumentos *no* garantizan la aplicación uniforme. Así, por ejemplo, aunque diferentes oficinas aduaneras de las CE hubieran adoptado enfoques diferentes sobre las circunstancias que justifican la suspensión del plazo de tres años para la comunicación de la deuda aduanera previsto en el apartado 3 del artículo 221 (un claro ejemplo de que las CE no aplican de manera uniforme su legislación aduanera), por lo menos un tribunal de última instancia de un Estado miembro se negó continuamente a plantear al TJCE una cuestión prejudicial que podría conducir a la eliminación de la divergencia.[22] De conformidad con el sistema de la aplicación de la legislación aduanera comunitaria, la existencia de tal divergencia dentro de las CE no obliga por sí misma a un tribunal de un Estado miembro a plantear una cuestión prejudicial al TJCE.

Los Estados Unidos no estaban obligados a presentar este argumento en su solicitud de establecimiento de un grupo especial. Todo lo que tenían que hacer (en lo que ahora concierne) era respetar la disposición según la cual "En ellas [las peticiones de establecimiento de grupos especiales] … se identificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad"[23], que fue lo que hicieron, con creces.

179. En el párrafo 34 de la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas señalan que la lista de casos de aplicación no uniforme que figura en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124 del Grupo Especial no se refiere al artículo 221 del Código aduanero comunitario. Sírvanse formular observaciones al respecto, indicando, en su caso, la importancia que debe atribuirse a la observación de las Comunidades Europeas.

No debe atribuirse ninguna importancia al hecho de que no haya ninguna referencia al artículo 221 del CAC en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124. En particular, frente a lo que afirman las CE, no refleja ninguna admisión de que los Estados Unidos no demostraron la aplicación no uniforme del artículo 221 por las CE ni de que la aplicación no uniforme del artículo 221 esté fuera del ámbito del mandato del Grupo Especial.

La pregunta 124 no pedía a los Estados Unidos que enumeraran todos los ejemplos que servían de apoyo a su alegación de que el hecho de que las CE no aplicaran su legislación aduanera de

[21] Véase, por ejemplo, Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos*, WT/DS27/AB/R, párrafo 141 (adoptado el 25 de septiembre de 1997) ("[H]ay una importante diferencia entre las *alegaciones* identificadas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial, que determinan el mandato del grupo especial de conformidad con el artículo 7 del ESD, y los *argumentos* que apoyan esas alegaciones, que se exponen y aclaran progresivamente en las primeras comunicaciones escritas, los escritos de réplica y la primera y segunda reuniones del grupo especial con las partes").

[22] Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 31.

[23] ESD, párrafo 2 del artículo 6.

manera uniforme constituía un incumplimiento de las obligaciones que correspondían a las CE en virtud del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Al contrario, los Estados Unidos entendieron que la pregunta 124 pretendía que se confirmara que la principal constatación solicitada por los Estados Unidos era la de que las CE incumplían las obligaciones dimanantes del párrafo 3 a) del artículo X debido a la falta de uniformidad en la aplicación de la legislación aduanera comunitaria en su totalidad. Los Estados Unidos confirmaron que esa era la constatación principal que solicitaban con respecto a su alegación en relación con el párrafo 3 a) del artículo X. En su respuesta a la pregunta 124 y en sus respuestas a otras preguntas (principalmente la pregunta 126), los Estados Unidos mostraban que servían de apoyo a tal constatación pruebas sin refutar sobre el diseño y estructura del sistema comunitario de aplicación de la legislación aduanera. Los Estados Unidos a continuación añadían (en su respuesta a la pregunta 124) que las pruebas de aplicación no uniforme en esferas concretas corroboraban la constatación de que la aplicación no uniforme derivaba necesariamente del diseño y estructura del sistema comunitario. Como se sabe, los Estados Unidos han enumerado las esferas en que las pruebas demuestran una aplicación no uniforme.

El artículo 221 es un ejemplo que se añade a los incluidos en la enumeración. Como los demás ejemplos incluidos en la enumeración, las pruebas demuestran claramente que el artículo 221 se aplica de manera no uniforme, en contradicción con las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X. Como se explicó en la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión del Grupo Especial, el apartado 3 del artículo 221 del CAC establece un plazo de tres años contados a partir del nacimiento de una deuda aduanera para comunicar al deudor el importe de la deuda.[24] También prevé la suspensión del plazo mientras esté pendiente de decisión un recurso. No establece ninguna circunstancia más que permita suspender el plazo de tres años. No obstante, la oficina de aduanas de las CE en Francia ha adoptado la posición (posteriormente confirmada por una enmienda del código aduanero francés) de que el plazo de tres años se puede suspender si se ha iniciado un procedimiento administrativo (procès-verbal) a fin de investigar una posible infracción aduanera, aun en caso de que tal procedimiento no dé lugar a la imposición de una sanción contra el deudor.[25] Las autoridades aduaneras de otras partes de las CE no adoptan la misma posición, es decir, no aplican el apartado 3 del artículo 221 del CAC de la misma manera que las autoridades aduaneras de Francia.

De hecho, las CE admiten efectivamente que el artículo 221 se aplica de manera no uniforme (aunque por motivos diferentes de los expuestos por los Estados Unidos) y, por consiguiente, era un ejemplo adecuado a incluir en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 124. Las CE señalan que, en virtud del párrafo 4 del artículo 221, se podrá comunicar el importe de la deuda aduanera al deudor después del plazo de tres años previsto en el apartado 3 "[c]uando la deuda aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguible judicialmente en el momento en que se cometió". A continuación explican que cada Estado miembro puede decidir por sí mismo qué constituye un acto perseguible judicialmente así como "la longitud del período durante el cual se puede comunicar la deuda" si ésta ha nacido como resultado de tal acto.[26] Así pues, si un acto determinado que da lugar a una deuda aduanera (por ejemplo, clasificación errónea de mercancías por negligencia) da origen únicamente a sanciones administrativas en un Estado miembro pero está sancionado penalmente en otro, las autoridades aduaneras del primer Estado miembro estarán sometidas a la limitación del plazo

[24] Véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 31.

[25] Véase, por ejemplo, fallo del Tribunal de Casación, asunto nº 143, 13 de junio de 2001, páginas 439 a 440 (Estados Unidos - Prueba documental 67) (que corrobora la suspensión del plazo de tres años para la empresa Saga Méditerranée, aunque ésta hubiera sido exculpada de cualquier responsabilidad de carácter penal); fallo del Tribunal de Casación, asunto nº 144, 13 de junio de 2001, página 448 (Estados Unidos - Prueba documental 68) (que corrobora la suspensión del plazo de tres años para la empresa Saupiquet y sus agentes aduaneros, aunque hubieran sido exculpados de cualquier responsabilidad penal).

[26] Comunicación adicional de las CE, párrafo 44.

de tres años para la comunicación de la deuda aduanera, mientras que las autoridades aduaneras del segundo Estado miembro estarán sometidas únicamente a la limitación (en su caso) que establezca su legislación nacional.[27] Se trata de un claro ejemplo de cómo las CE, a través de sus oficinas aduaneras en los diferentes Estados miembros, no aplica su legislación aduanera de manera uniforme.

180. En el párrafo 42 de la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, las Comunidades Europeas afirman que los Estados Unidos utilizan el ejemplo *Camcorders* para ilustrar la supuesta falta de uniformidad en la aplicación con respecto al período posterior a la importación durante el que debe percibirse una deuda aduanera. ¿Es correcta esta caracterización de las alegaciones de los Estados Unidos? En caso contrario, sírvanse explicar concretamente cómo deben caracterizarse los argumentos de los Estados Unidos a este respecto.

La descripción que hacen las CE del motivo por el que los Estados Unidos utilizaron el ejemplo de las videocámaras no es correcta. Los Estados Unidos utilizaron el ejemplo de las videocámaras para ilustrar cuatro puntos distintos. Primero, el ejemplo ilustra, frente a lo que argumentan las CE, que las notas explicativas no son instrumentos eficaces para asegurar la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria. Así lo demuestra el hecho de que las autoridades aduaneras de dos Estados miembros por lo menos (España y Francia) decidieran dar efecto retroactivo a la nota explicativa sobre las videocámaras (Estados Unidos - Prueba documental 61). Es decir, a la vista de la nota explicativa, revisaron la clasificación de mercancías que ya habían sido importadas y cobraron los consiguientes derechos aduaneros adicionales. En cambio, las autoridades aduaneras de otros Estados miembros se abstuvieron de dar efecto retroactivo a la nota explicativa porque dicha nota explicativa establecía efectivamente una nueva norma sustantiva (es decir, convertía en criterio para la clasificación de las videocámaras la posibilidad de modificar su modo de utilización después de la importación). Así lo prueba, por ejemplo, el anuncio de las autoridades aduaneras del Reino Unido de la nota explicativa, en el que indicaban que "supone un cambio de la práctica [del] Reino Unido".[28] Por tanto, diferentes oficinas de aduanas de las CE recibieron la misma nota explicativa y

[27] Debe observarse que se trata de otra manifestación de cómo las diferentes sanciones que se aplican en los Estados miembros de las CE demuestran que no hay una aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria. No es necesario que se imponga efectivamente una sanción para que se manifieste esta aplicación no uniforme. La única condición para evitar el plazo de tres años establecido en el apartado 3 del artículo 221 del CAC es que el acto que dio lugar a la deuda aduanera sea "perseguible judicialmente", y no que realmente haya sido motivo de un procedimiento judicial penal. Así pues, aun en el caso hipotético de que dos autoridades aduaneras de dos Estados miembros diferentes trataran una infracción idéntica del mismo modo y renunciaran a imponer una sanción de cualquier tipo, el hecho de que las autoridades de un Estado miembro pudieran tratar la infracción como un asunto penal, mientras que las otras no, querría decir que las primeras estarían autorizadas expresamente a ampliar el plazo para la comunicación de la deuda aduanera, mientras que las segundas no.

[28] *HM Customs & Excise, Tariff Notice 19/01* (julio de 2001) (Estados Unidos – Prueba documental 63); véase también *Vorschriftensammlung Bundesfinanzverwaltung, VSF-Nachrichten N 46 2003*, sec. I(3) (5 de agosto de 2003) (aviso aduanero de Alemania sobre la aplicación de las disposiciones de las CE relativas al reembolso/desgravación y recaudación de derechos de importación, con la traducción no oficial al inglés) (Estados Unidos - Prueba documental 64) (donde se indica que cuando una nota explicativa introduce un cambio sustancial no se aplica retroactivamente). En su respuesta a la pregunta 172 del Grupo Especial, las CE equivocan el motivo que llevó a los Estados Unidos a referirse a la directriz administrativa alemana y presentada por los Estados Unidos como prueba documental 64. Frente a lo que afirman las CE (Comunicación adicional de las CE, párrafo 43), los Estados Unidos citaron esta directriz no para ilustrar una observación sobre el artículo 221 del CAC sino más bien para poner de manifiesto el trato divergente dado a las notas explicativas por unas oficinas de aduanas (principalmente las de España y Francia), de un lado, y por otras (principalmente las de Alemania y el Reino Unido), de otro.

Además, los Estados Unidos señalan a la atención del Grupo Especial la prueba documental 153 que las CE presentaron para demostrar que la directriz alemana era de hecho "la trasposición de una carta dirigida a las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros … por la Comisión Europea en 1996". Comunicación

la aplicaron de forma diferente en la misma situación, lo que demuestra que las CE no aplican su legislación aduanera de manera uniforme.

Segundo, el ejemplo de las videocámaras ilustra que, frente a lo que argumentan las CE, las IAV no son un instrumento eficaz para asegurar la aplicación uniforme de las normas de clasificación. En el presente caso, una oficina de aduanas comunitaria (la de España) había expedido una IAV que clasificaba 19 modelos de videocámaras (Estados Unidos - Prueba documental 65). La filial francesa del titular de la IAV informó a otra oficina de aduanas comunitaria (la de Francia) de la existencia de esa IAV en el curso de una auditoría de dicha oficina. No obstante, la oficina de aduanas comunitaria de Francia informó a la empresa de que había decidido no respetar la clasificación establecida en la IAV sino cobrar los derechos en función de su propia determinación de la clasificación correcta de los modelos de videocámaras en cuestión. Las CE describieron incorrectamente estos hechos al señalar que "la cuestión … era el cobro de los derechos aduaneros después del despacho de aduana y no la clasificación arancelaria".[29] Es cierto que el contexto en que se suscitó este asunto incluía el cobro de derechos después del despacho de aduana. Sin embargo, para determinar el importe de los derechos a cobrar se necesita determinar la clasificación. Las CE admiten abiertamente que "[l]as IAV expedidas por las autoridades españolas y presentadas por los Estados Unidos como prueba documental 65 son todas ellas conformes plenamente con las normas de clasificación comunitarias".[30] Por consiguiente, es totalmente sorprendente que una segunda oficina de aduanas comunitaria indicara su decisión de no respetar la clasificación establecida en esas IAV. Su decisión negativa ilustra que las IAV no aseguran la aplicación uniforme de la legislación comunitaria aduanera por las 25 oficinas aduaneras independientes y delimitadas geográficamente de las CE.

Tercero, el ejemplo de las videocámaras ilustra la aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del CAC, como se expuso en la respuesta a la pregunta 179 *supra*. La oficina aduanera de Francia de las CE no sólo adopta la posición (a diferencia de las oficinas aduaneras de otras partes de las CE) de que la nota explicativa sobre las videocámaras puede aplicarse a las importaciones anteriores a su fecha de publicación sino que además adopta la posición (a diferencia también de las oficinas aduaneras de otras partes de las CE) de que la nota se puede aplicar a las importaciones aun en caso de que la deuda aduanera atribuible a las mismas naciera más de tres años antes. Así pues, el importador de videocámaras de Francia sigue expuesto a que se le apliquen derechos adicionales por importaciones realizadas en 1999, aun a pesar de que las oficinas aduaneras de otras partes de las CE consideren que el paso del tiempo prohíbe el cobro de esos derechos adicionales.[31]

---

adicional de las CE, párrafo 43. Primero, la carta presentada por las CE como prueba documental 153 no dice nada sobre los efectos de las notas explicativas. Al contrario, su objeto es el impacto de los reglamentos de clasificación arancelaria en el cobro de derechos aduaneros. Segundo, la carta se centra en la situación que se produce cuando, antes de la publicación de un reglamento de clasificación arancelaria, algunos importadores han pagado por las mercancías en cuestión un derecho equivalente al que hubieran tenido que pagar de acuerdo con el nuevo reglamento, mientras que otros han pagado menos. En la carta se indica que "los comerciantes que, en caso de manifestarse disparidades de aplicación entre las diferentes oficinas de aduanas de la Comunidad, hayan pagado el mismo importe de derechos que hubieran tenido que pagar en aplicación del nuevo reglamento no pueden invocar los principios de certidumbre jurídica y expectativas legítimas". Carta de James Currie a la Sra. Strachan CB, V.P.M., página 2 (CE - Prueba documental 153). En otras palabras, las CE reconocen que, cuando unas normas de clasificación han sido aplicadas de manera no uniforme de forma tal que los importadores de algunos Estados miembros han pagado derechos más elevados que los importadores de mercancías idénticas de otros Estados miembros, el nuevo reglamento de clasificación no remedia esa falta de uniformidad.

[29] Comunicación adicional de las CE, párrafo 40.

[30] Comunicación adicional de las CE, párrafo 40.

[31] En su declaración oral en la segunda reunión del Grupo Especial, los Estados Unidos describieron este aspecto del ejemplo de las videocámaras como un caso de aplicación no uniforme en lo que respecta al

Por último, el ejemplo de las videocámaras ilustra, frente a lo que argumentan las CE, que el mecanismo de sometimiento de cuestiones prejudiciales al TJCE no garantiza efectivamente la aplicación uniforme de la legislación aduanera comunitaria. Este aspecto del ejemplo de las videocámaras se relaciona con la aplicación no uniforme del apartado 3 del artículo 221 del CAC. Si el mecanismo de reenvío prejudicial fuera un instrumento eficaz para remediar situaciones en las que las CE no aplican de manera uniforme su legislación aduanera cabría esperar que ese instrumento se utilizaría precisamente cuando un tribunal de un Estado miembro se encuentra con pruebas sólidas de una aplicación no uniforme, por ejemplo, cuando la oficina aduanera de las CE de Francia considera que la iniciación de una investigación administrativa suspende el plazo de tres años establecido en el apartado 3 del artículo 221, mientras que otras oficinas aduaneras de las CE no lo hacen. Sin embargo, como los Estados Unidos han demostrado, hasta el más alto tribunal francés se ha negado continuamente a remitir esta cuestión al TJCE, a pesar de la clara divergencia de aplicación en diferentes regiones de las CE.[32]

181. Con respecto a los argumentos expuestos por los Estados Unidos en el párrafo 31 de su declaración oral en la segunda reunión sustantiva, sírvanse identificar claramente el tipo o tipos de aplicación no uniforme que se alega.

En el párrafo 31 de su declaración oral en la segunda reunión sustantiva, los Estados Unidos alegan que las CE no aplican el apartado 3 del artículo 221 del CAC de manera uniforme. Este artículo establece que "[l]a comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda aduanera". Sólo se identifica una circunstancia en que podría suspenderse el plazo de tres años: la interposición de un recurso. No obstante, una oficina aduanera comunitaria (la de Francia) aplica el apartado 3 del artículo 221 suspendiendo el plazo de tres años cuando se inicia un procedimiento administrativo (procès-verbal) para investigar una posible infracción aduanera, con independencia de si llega a imponerse realmente una sanción a la parte investigada. Otras oficinas aduaneras comunitarias no aplican el apartado 3 del artículo 221 de la misma manera, es decir, no consideran que el plazo de tres años previsto en el apartado 3 del artículo 221 quede suspendido cuando se inicia un procedimiento administrativo (procès-verbal) para investigar una posible infracción arancelaria. Así pues, como muestra el ejemplo de las videocámaras, un importador de videocámaras en una parte de las CE (Francia) seguirá expuesto en el año 2005 al cobro de derechos adicionales por importaciones realizadas en 1999, aunque las oficinas aduaneras comunitarias en otras partes de las CE consideren que el paso del tiempo prohíbe tal cobro de derechos adicionales. Por consiguiente, la aplicación del apartado 3 del artículo 221 es un ejemplo clamoroso de aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria, incumpliéndose así las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.[33]

"período posterior a la importación durante el cual se puede cobrar una deuda aduanera". En su respuesta a la pregunta 172, las CE aclaran que el apartado 3 del artículo 221 hace referencia "al período durante el cual se puede comunicar al deudor una deuda aduanera". Los Estados Unidos están de acuerdo con esta declaración sobre el contenido del apartado 3 del artículo 221. Sin embargo, los Estados Unidos no están de acuerdo con la consecuencia de que no tiene nada que ver con el cobro de la deuda aduanera. El plazo para comunicar la deuda aduanera al deudor es evidentemente fundamental para el cobro de esa deuda pues si hubiera expirado el plazo para tal comunicación también habría expirado la posibilidad de cobrar cualquier deuda que no hubiera sido comunicada anteriormente.

[32] Véase la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 31.

[33] Como se indicó en la respuesta a la pregunta 179 *supra*, la respuesta de las CE a la pregunta 172 pone de manifiesto una nueva forma de aplicación de manera no uniforme del artículo 221 del CAC. En concreto, según el párrafo 4 del artículo 221, la longitud del plazo para comunicar la deuda aduanera al deudor puede variar de una oficina de aduanas a otra, dentro de las CE, si concurre la circunstancia de que una oficina de aduanas determine (según sus propios criterios nacionales) que un acto que ha dado origen a una

Independientemente, los Estados Unidos también llamaron la atención, en el párrafo 31 de su declaración en la segunda reunión sustantiva, sobre la negativa del más alto tribunal de Francia a remitir al TJCE la cuestión de si una investigación administrativa puede suspender el período de tres años a tenor del apartado 3 del artículo 221. Los Estados Unidos sostuvieron que si el más alto tribunal de un Estado miembro puede negarse a remitir una cuestión al TJCE, aun encontrándose ante pruebas claras de que la oficina aduanera comunitaria de ese Estado miembro está aplicando la legislación aduanera comunitaria de manera diferente a otras oficinas aduaneras comunitarias de otros Estados miembros, este hecho refuta la afirmación de las CE de que el mecanismo de planteamiento de cuestiones prejudiciales garantiza una aplicación uniforme.

PREGUNTA PARA AMBAS PARTES

184. Con respecto al párrafo 49 de la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, el hecho de emitir información arancelaria vinculante que, en el momento de su emisión no sea incompatible con la legislación aduanera de las CE pero respecto de la cual la autoridad que la emite es consciente de que se convertirá seguramente en incompatible con esa legislación (una vez que entre en vigor un reglamento no compatible con ella) ¿podría constituir una prueba que apoyara una alegación de aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X? De ser así, sírvanse facilitar explicaciones al respecto, con referencia a los términos del párrafo 3 a) del artículo X.

En respuesta a la pregunta 184, es importante distinguir entre la situación hipotética que plantea, es decir, los hechos conocidos del asunto PlayStation2 de Sony ("PS2"), y el significado más amplio del asunto PS2. Primero, en lo que respecta a la situación hipotética que plantea la pregunta, efectivamente es posible que el hecho de que una oficina aduanera comunitaria expida una IAV clasificando una mercancía de un modo, a pesar de que dicha oficina aduanera sepa que está en proceso de aprobación un reglamento válido para todas las CE que clasifica la mercancía de manera diferente, constituya una prueba que apoya una alegación de aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Este párrafo obliga a los Miembros a aplicar "de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo". Nadie discute que las normas de clasificación comunitarias (el contenido de las IAV) sean leyes o reglamentos del tipo descrito en el párrafo 1 del artículo X. Además, el sentido corriente de "*administer*" (aplicar), en lo que aquí importa, es "*carry on or execute (an office, affairs, etc.)*" (llevar a cabo o ejecutar (una función, negocios, etc.)).[34] El sentido corriente de "*uniform*" (uniforme), en lo que aquí importa, es "*[o]f one unchanging form, character, or kind; that is or stays the same in different places or circumstances, or at different times*" (de la misma forma, naturaleza o tipo; que es o que sigue siendo el mismo en distintos lugares o circunstancias, o en ocasiones distintas).[35] Al expedir una IAV la oficina aduanera comunitaria "aplica" las normas de clasificación comunitarias según el sentido corriente de ese término. Es decir, la oficina de aduanas comunitaria determina a través de la IAV la partida del Arancel Aduanero Común en que se clasificará una mercancía particular al aplicarse las normas generales interpretativas del Arancel.

---

deuda aduanera es un acto "*perseguible* judicialmente" (con independencia de que efectivamente *dé* origen a un procedimiento penal). Comunicación adicional de las CE, párrafo 44 (sin cursivas en el original).

[34] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 28 (1993) (Estados Unidos - Prueba documental 3).

[35] *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen II, página 3488 (1993) (Estados Unidos - Prueba documental 4).

La cuestión, pues, es si la aplicación de las normas de clasificación a través de una IAV es igual en diferentes lugares en las circunstancias expuestas. Si la clasificación establecida en la IAV expedida por una oficina de aduanas comunitaria "se convertirá seguramente en incompatible con esa legislación (una vez que entre en vigor un reglamento no compatible con ella)", habrá que preguntarse cuál es el motivo de que se prevea la entrada en vigor de un reglamento no compatible. Cabe destacar que es bastante posible que otras oficinas aduaneras comunitarias hubieran estado clasificando la mercancía en cuestión de la manera prevista en el reglamento anunciado y que estas oficinas aduaneras comunitarias instaran la aprobación de un reglamento válido para todas las CE a la vista de la actuación no compatible de la oficina aduanera comunitaria cuya IAV está en cuestión. Esta posibilidad encuentra apoyo en la función fundamental que desempeña el Comité del Código Aduanero en el proceso de adopción de reglamentos de clasificación[36], y el hecho de que el Comité esté formado por representantes de los 25 Estados miembros de las CE. Dicho en otros términos, si el reglamento anunciado clasificaba la mercancía en cuestión de manera contradictoria con la clasificación utilizada en otros Estados miembros, parece difícil obtener el apoyo del Comité para el reglamento, lo que obligaría a remitirlo al Consejo de la Unión Europea (el cual podría rechazar en último extremo el reglamento).[37] Si, de hecho, la preparación del reglamento comunitario refleja la manifestación de una pluralidad de opiniones entre las oficinas aduaneras comunitarias sobre cómo debe clasificarse la mercancía en cuestión, la expedición de una IAV no compatible por una sola oficina aduanera comunitaria demostraría que la aplicación de las normas de clasificación a través de las IAV es *diferente* en diferentes lugares, es decir, no es "uniforme" de conformidad con el sentido corriente de este término según se utiliza en el párrafo 3 a) del artículo X.

Una vez dicho esto, los hechos admitidos en las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las CE (Estados Unidos - Prueba documental 12) y el Alto Tribunal de Justicia del Reino Unido (Estados Unidos - Prueba documental 70) no permiten establecer claramente si, aparte de la oficina aduanera comunitaria del Reino Unido, otras oficinas aduaneras comunitarias tuvieron la ocasión de clasificar la consola PS2 antes de la publicación del reglamento de la Comisión.[38]

---

[36] Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 92; Respuestas de las CE a las segundas preguntas del Grupo Especial, párrafo 61 (la adopción de reglamentos de clasificación requiere que el Comité mantenga consultas).

[37] Véase la Decisión 1999/468/CE del Consejo por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, artículo 4 (que establece cuál es el "procedimiento de gestión", que es el aplicable para la aprobación de reglamentos de clasificación) (Estados Unidos - Prueba documental 10).

[38] Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia señala que "… las partes están de acuerdo en que, en el momento en que se adoptó el Reglamento impugnado, sólo dicha IAV [a saber, la IAV expedida por la oficina aduanera del Reino Unido] clasificaba la consola PlayStationR2 en la partida 8471". *Sony Computer Entertainment Europe Ltd.* contra *Comisión de las Comunidades Europeas*, asunto T-243/01, párrafo 68 (Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, 30 de septiembre de 2003) (Estados Unidos - Prueba documental 12).

Tampoco está claro que la clasificación establecida en la IAV del Reino Unido fuera conforme con la legislación comunitaria aun antes de la publicación del reglamento de la Comisión. La decisión de la oficina aduanera comunitaria del Reino Unido de clasificar la consola PS2 en la partida 8471.49.00 se basaba en la opinión de que la cuestión determinante para esta clasificación era si se podía programar libremente. El Comité del Código Aduanero, aunque constató que era libremente programable, aprobó un reglamento que establecía una clasificación diferente basándose en que esta característica no era determinante. Véase *Sony Computer Entertainment Europe Ltd.* contra *Comisión de las Comunidades Europeas*, asunto T-243/01, párrafos 23 y 24 (Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, 30 de septiembre de 2003) (Estados Unidos - Prueba documental 12) (donde se indica que el fundamento para la clasificación del 12 de junio de 2001 era que la consola PS2 podía ser libremente programada); *Sony Computer Entertainment Europe Ltd.* v. *Commissioners of Customs and Excise*, Judgment of the High Court of Justice, Chancery Division, [2005] EWHC 1644 (Ch),

Por último, y sobre todo, no se debe confundir la respuesta anterior con el significado más amplio del asunto de las consolas PS2 y la explicación de que se mencionara en la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión del Grupo Especial. El principal punto que hay que extraer del asunto de las consolas PS2 *no* tiene ninguna relación con la clasificación correcta de estas consolas. Frente a lo que afirman las CE, los Estados Unidos no se están convirtiendo en "abogados de un comportamiento que claramente hubiera dificultado la aplicación uniforme de la legislación comunitaria".[39] No están alegando que debiera haberse recuperado la IAV de junio de 2001 expedida por la oficina aduanera del Reino Unido después de la anulación del reglamento de clasificación de las CE porque esa IAV clasificaba correctamente las consolas PS2.

Se trata más bien de que el significado más amplio del asunto de las consolas PS2, y ese es el motivo de que se mencionara en la segunda reunión del Grupo Especial, es que demuestra el poder de cada una de las 25 oficinas aduaneras independientes y delimitadas geográficamente de las CE para alejarse a iniciativa propia del camino de la aplicación uniforme. La expedición en junio de 2001 de la IAV que clasificaba las consolas PS2 en la partida 8471 del Arancel fue un acto que, al menos según la opinión de las CE sobre las IAV, debió haber conducido a la aplicación uniforme de las normas de clasificación respecto de ese producto. La publicación de un reglamento comunitario en julio de 2001 fue un acto que debió haber mantenido la aplicación uniforme de las normas de clasificación respecto de las consolas PS2, si bien en una partida diferente del Arancel (la 9504, en lugar de la 8471). Aplicando el criterio de mantenimiento de la aplicación uniforme, la IAV de junio de 2001 fue revocada cuando el reglamento entró en vigor.

Cuando el reglamento de las CE fue anulado por la sentencia de septiembre de 2003 del Tribunal de Primera Instancia, cabía esperar que se recuperaría la IAV de junio de 2001, lo cual (de nuevo, según la opinión de las CE sobre las IAV) hubiera mantenido la uniformidad de la aplicación de las normas de clasificación en lo que respecta a las consolas PS2. De hecho, antes de la sentencia de enero de 2004 del TJCE sobre el asunto *Timmermans*, la autoridad aduanera del Reino Unido evidentemente creía que estaba obligada a recuperar la IAV y que, a la vista de la opinión del Abogado General de septiembre de 2003 sobre el asunto *Timmermans*, no podía enmendar la IAV sobre la base de su propia reinterpretación independiente de las normas de clasificación aplicables.[40]

Sin embargo, después de la sentencia sobre el asunto *Timmermans*, la autoridad aduanera del Reino Unido quedó en libertad para mantener la IAV revocada no apoyándose en el reglamento de las CE (que, por supuesto, había sido anulado) sino ahora sobre la base de su propia reinterpretación de las normas de clasificación aplicables. Por eso, pudo interrumpir la serie de actos que, en teoría, habían promovido la clasificación uniforme de las consolas PS2 desde junio de 2001. Tanto si la IAV clasificaba correctamente las consolas PS2 como en caso contrario, este asunto sirve de fundamento para afirmar en términos más generales que, en virtud de la sentencia *Timmermans*, cada una de las 25 oficinas aduaneras independientes y delimitadas geográficamente de las CE está facultada para

---

párrafo 99 (27 de julio de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 70) (donde se resumen los argumentos de la autoridad aduanera y se observa que "el Comité de Nomenclatura [CE] reconoció unánimemente en sus reuniones de abril y mayo de 2001" que la clasificación de la consola PS2 en la partida 8471 "era incorrecta").

Los Estados Unidos destacan los aspectos que acaban de exponer del asunto PlayStation2 en aras de la claridad. Sin embargo, estos aspectos no influyen en la respuesta a la pregunta del Grupo Especial que ya se ha examinado.

[39] Comunicación adicional de las CE, párrafo 56.

[40] *Sony Computer Entertainment Europe Ltd.* v. *Commissioners of Customs and Excise*, Judgment of the High Court of Justice, Chancery Division, [2005] EWHC 1644 (Ch), párrafos 68 y 69 (27 de julio de 2005) (Estados Unidos - Prueba documental 70); véase también la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 63 y 64 (en los que se examina la opinión del Abogado General sobre el asunto *Timmermans*).

desviarse de un camino de aplicación teóricamente uniforme de las normas de clasificación basándose para ello en su propia reconsideración de dichas normas.

Esta afirmación tiene un significado que no se limita a los hechos del asunto de las consolas PS2. Demuestra que, frente a lo que argumentan las CE, las IAV no aseguran la aplicación uniforme de las normas de clasificación comunitarias. Fue este el motivo de que los Estados Unidos debatieran el asunto de las consolas PS2 en la segunda reunión del Grupo Especial. Los Estados Unidos subrayan este punto para evitar cualquier confusión entre la primera parte de su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, que se refiere a un aspecto del asunto de las consolas PS2, y el significado más general del asunto de las consolas PS2.

En resumen, el ejemplo de las consolas PS2 (como los demás ejemplos expuestos en la parte III de la declaración oral de los Estados Unidos en la segunda reunión del Grupo Especial) confirma el punto principal de la alegación de los Estados Unidos con respecto al párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El diseño y la estructura del sistema comunitario de aplicación de la legislación aduanera tienen por resultado necesario la aplicación no uniforme de la legislación aduanera comunitaria, infringiendo así las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X. En particular, el hecho de que las CE apliquen su legislación aduanera a través de 25 oficinas independientes y delimitadas regionalmente, sin ninguna institución o procedimiento que asegure que no se producen divergencias en la aplicación o, si se producen, que las concilie con prontitud por una vía ordinaria, necesariamente da lugar a una aplicación no uniforme, incumpliéndose así las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Ni las IAV ni las notas explicativas ni el procedimiento de remisión de cuestiones prejudiciales al TJCE alteran esta conclusión.

ANEXO C-3

RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL EN RELACIÓN CON LA SECCIÓN III DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

PREGUNTAS PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS

182. Con referencia al párrafo 15 de la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, sírvanse identificar claramente las "pruebas adicionales a que se hace referencia en otras partes de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos" que las Comunidades Europeas califican de "nuevas pruebas".

Las CE se refieren a las pruebas documentales 73 a 80 presentadas por los Estados Unidos.

183. Con respecto a los párrafos 47 y 48 de la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, sírvanse aclarar el origen del criterio de "libremente programables" (al que hicieron referencia tanto las autoridades del Reino Unido cuando Sony solicitó inicialmente la clasificación del producto en cuestión como posteriormente el Comité del Código Aduanero).

El criterio se basa en la nota 5 a) del Capítulo 84 de la NC, que define, a los efectos de la partida 8471, las "máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos" del siguiente modo (Estados Unidos - Prueba documental 46, sin subrayado en el original):

> En la partida 84.71, se entiende por máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos:
>
> a) las máquinas digitales capaces de:
>
> 1) registrar el programa o programas de proceso y, por lo menos, los datos inmediatamente necesarios para la ejecución de ese o esos programas;
>
> 2) ser programadas libremente de acuerdo con las necesidades del usuario;
>
> 3) realizar cálculos aritméticos definidos por el usuario; y
>
> 4) ejecutar, sin intervención humana, un programa de proceso en el que puedan, por decisión lógica, modificar su ejecución durante el mismo;
>
> b) las máquinas analógicas capaces de simular modelos matemáticos que tengan, por lo menos: órganos analógicos, órganos de mando y dispositivos de programación;
>
> c) las máquinas híbridas que comprendan una máquina digital asociada con elementos analógicos o una máquina analógica asociada con elementos digitales.

PREGUNTA PARA AMBAS PARTES

184. Con respecto al párrafo 49 de la respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 172 del Grupo Especial, el hecho de emitir información arancelaria vinculante que, en el momento de su emisión no sea incompatible con la legislación aduanera de las CE pero respecto de la cual la autoridad que la emite es consciente de que se convertirá seguramente en incompatible con esa legislación (una vez que entre en vigor un reglamento no compatible con ella) ¿podría constituir una prueba que apoyara una alegación de aplicación no uniforme en el sentido del párrafo 3 a) del artículo X? De ser así, sírvanse facilitar explicaciones al respecto, con referencia a los términos del párrafo 3 a) del artículo X.

No, el hecho de que se expida una IAV y luego se revoque no constituye en sí mismo prueba de una aplicación no uniforme. El hecho de que en el momento en que se expidió la IAV pudiera ser previsible que posteriormente tendría que ser revocada no modifica esta valoración.

En lo que respecta al caso concreto mencionado en el párrafo 49 de la comunicación adicional de las CE, debe observarse que las autoridades del Reino Unido expidieron la IAV clasificando la mercancía en la partida 8471 49 00 como reacción a una sentencia que había anulado una IAV expedida anteriormente que clasificaba la mercancía en la partida 9504 1000.

Además, debe observarse que la IAV así expedida sólo era aplicable durante un breve plazo y no daba lugar a una aplicación no uniforme. Además, fue revocada con prontitud en cuanto entró en vigor el reglamento de clasificación de la Comisión. Por consiguiente, la IAV en cuestión no se puede considerar como prueba de una falta de uniformidad.

Además, aunque no debió haberse expedido la IAV en cuestión, se trata de un caso aislado, debido a las circunstancias muy concretas que concurrían en él. Un problema aislado y temporal no se puede considerar prueba de una pauta de no uniformidad en el sistema comunitario de aplicación de la legislación aduanera. En cambio, lo que sí es preocupante es que los Estados Unidos apoyen ahora a una parte que está intentando recuperar el efecto de la IAV en cuestión, defendiendo así una situación que puede dar lugar efectivamente a una aplicación no uniforme.[1]

[1] Comunicación adicional de las CE, párrafo 56.

ANEXO D

SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR LOS ESTADOS UNIDOS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS315/8
14 de enero de 2005

(05-0192)

Original: inglés

COMUNIDADES EUROPEAS - DETERMINADAS CUESTIONES ADUANERAS

Solicitud de establecimiento de un grupo especial
presentada por los Estados Unidos

La siguiente comunicación, de fecha 13 de enero de 2005, dirigida por la delegación de los Estados Unidos a la Presidenta del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

Los Estados Unidos consideran que la manera en que las Comunidades Europeas ("CE") aplican las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 del artículo X del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* ("GATT de 1994") no es uniforme, imparcial y razonable, y, por lo tanto, es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. A los efectos de la presente solicitud, las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas (colectivamente, "medidas") que las Comunidades Europeas no aplican de tal manera se refieren a la clasificación y valoración de productos a efectos aduaneros y a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación. Las medidas son las siguientes:

- Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, incluidos todos sus anexos, modificado (el "Código");

- Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, incluidos todos sus anexos, modificado (el "Reglamento de la Comisión");

- Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, incluidos todos sus anexos, modificado (el "Reglamento del arancel");

- el arancel integrado de las Comunidades Europeas establecido en virtud del artículo 2 del Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, incluidos todos sus anexos, modificado (el "TARIC"); y

- todas las modificaciones, medidas de aplicación y demás medidas conexas respecto de cada una de las leyes y reglamentos mencionados *supra*.

Llevan a cabo la aplicación de esas medidas en las Comunidades Europeas las autoridades aduaneras nacionales de los Estados miembros de las CE. Tal aplicación adopta numerosas formas diferentes. Los Estados Unidos entienden que las incontables formas de aplicación de esas medidas incluyen, sin que la enumeración sea exhaustiva, las leyes, reglamentos, guías, manuales y prácticas administrativas de las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las Comunidades Europeas.

La falta de una aplicación uniforme, imparcial y razonable de las medidas identificadas *supra* es evidente en las diferencias entre los Estados miembros en diversas esferas, incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva, las siguientes:

- la clasificación y valoración de mercancías;

- los procedimientos para la clasificación y valoración de mercancías, incluida la facilitación a los importadores de información vinculante sobre clasificación y valoración;

- los procedimientos para la entrada y despacho de mercancías, incluidas las prescripciones diferentes en materia de certificados de origen, los criterios diferentes entre los Estados miembros respecto de la inspección física de mercancías, las prescripciones diferentes en materia de licencias para la importación de productos alimenticios y los procedimientos diferentes para tramitar envíos de entrega urgente;

- los procedimientos para controlar las declaraciones de entrada una vez que se ha permitido la incorporación de las mercancías al circuito comercial de las Comunidades Europeas;

- las sanciones y los procedimientos de imposición de sanciones por infracción de las normas aduaneras; y

- las prescripciones para mantenimiento de registros.

Además, las Comunidades Europeas no mantienen, ni han instituido tan pronto como fuera posible, tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otras cosas, a la pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones aduaneras. Las medidas identificadas *supra*, incluidos, en particular, los artículos 243 a 246 del Código, disponen expresamente que los Estados miembros de las CE son responsables de la implantación del procedimiento de recurso de las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros. En consecuencia, la posibilidad de lograr que un tribunal de las Comunidades Europeas revise una decisión aduanera no se presenta sino después de que un importador u otra parte interesada haya tratado de conseguir esa revisión en tribunales nacionales administrativos y/o judiciales. Por esta razón, las Comunidades Europeas infringen el párrafo 3 b) del artículo X del GATT de 1994.

Las medidas de las CE también son incompatibles con el párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994.

El 21 de septiembre de 2004, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con las Comunidades Europeas de conformidad con los artículos 1 y 4 del *Entendimiento relativo a las*

normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") y el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994. Los Estados Unidos celebraron consultas con las Comunidades Europeas el 16 de noviembre de 2004, en Ginebra. Lamentablemente esas consultas no resolvieron la diferencia.

En consecuencia, los Estados Unidos solicitan respetuosamente al Órgano de Solución de Diferencias que establezca un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del ESD para examinar este asunto, con el mandato uniforme enunciado en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD.

ANEXO E

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DEL GRUPO ESPECIAL

6 de julio de 2005

CONFIDENCIAL

***COMUNIDADES EUROPEAS - DETERMINADAS CUESTIONES ADUANERAS* (*WT/DS/315*)**

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

1. El Grupo Especial proporcionará a las partes un calendario del procedimiento y actuará de conformidad con los procedimientos de trabajo normales establecidos en el ESD y su Apéndice 3, más los siguientes procedimientos adicionales:

2. El Grupo Especial se reunirá a puerta cerrada. Las partes en la diferencia y los terceros sólo estarán presentes en las reuniones cuando aquél las invite.

3. Las deliberaciones del Grupo Especial, y los documentos que se hayan sometido a su consideración, tendrán carácter confidencial. Ninguna de las disposiciones del ESD impedirá a una parte en la diferencia hacer públicas sus posiciones. Los Miembros considerarán confidencial la información facilitada al Grupo Especial por otro Miembro a la que éste haya atribuido tal carácter. Según lo previsto en el párrafo 2 del artículo 18 del ESD, cuando una parte en la diferencia facilite una versión confidencial de sus comunicaciones escritas al Grupo Especial, también facilitará, a petición de cualquier Miembro, un resumen no confidencial de la información contenida en esas comunicaciones que pueda hacerse público.

4. Antes de celebrarse la primera reunión sustantiva del Grupo Especial con las partes, las partes en la diferencia le presentarán comunicaciones escritas en las que expongan los hechos del caso y sus argumentos.

5. En la primera reunión sustantiva con las partes, el Grupo Especial pedirá a la parte reclamante que presente sus alegaciones. Posteriormente, en la misma reunión, se pedirá a la parte demandada que exponga su opinión.

6. Los terceros serán invitados por escrito a exponer sus opiniones durante una sesión de la primera reunión sustantiva del Grupo Especial reservada para tal fin. Los terceros podrán estar presentes durante la totalidad de dicha sesión.

7. Las réplicas formales se presentarán en la segunda reunión sustantiva del Grupo Especial. La parte demandada tendrá derecho a hablar en primer lugar, y a continuación lo hará la parte reclamante. Antes de la reunión, las partes presentarán sus escritos de réplica al Grupo Especial.

8. El Grupo Especial podrá en todo momento hacer preguntas a las partes y pedirles explicaciones, ya sea durante una reunión con ellas o por escrito. Las respuestas a las preguntas se presentarán por escrito en las fechas que haya señalado el Grupo Especial en su calendario.

9. Las partes y los terceros pondrán a disposición del Grupo Especial y de las otras partes una versión escrita provisional de las declaraciones que hagan en las audiencias. Las versiones escritas definitivas de las declaraciones orales habrán de presentarse en las fechas previstas en el apartado c) del párrafo 18 de este Procedimiento de Trabajo.

10. En interés de una total transparencia, las exposiciones, las réplicas y las declaraciones mencionadas en los párrafos 5 a 9 se harán en presencia de las partes. Además, las comunicaciones escritas de cada parte, incluidas las respuestas a las preguntas del Grupo Especial, las observaciones sobre esas respuestas, los resúmenes, las observaciones sobre la parte expositiva del informe y las observaciones sobre el informe provisional, se pondrán a disposición de la otra parte.

11. Las solicitudes de resolución preliminar (incluidas las resoluciones sobre cuestiones jurisdiccionales) que haya de aprobar el Grupo Especial se someterán a más tardar en la primera comunicación escrita de la parte que las presente. Si la parte reclamante es la que solicita tal resolución, el demandado responderá a la solicitud en su primera comunicación escrita. Si el demandado es quien solicita la resolución, la parte reclamante responderá a la solicitud antes de la primera reunión sustantiva del Grupo Especial. La parte reclamante presentará su respuesta en la fecha que determine el Grupo Especial después de recibir la solicitud del demandado y teniéndola en cuenta. Podrán establecerse excepciones a este procedimiento por causas justificadas.

12. Las partes presentarán todas las pruebas fácticas al Grupo Especial en el curso de la primera reunión sustantiva a más tardar, excepto en lo que respecta a las pruebas necesarias a efectos de las réplicas, las respuestas a preguntas o las observaciones destinadas a replicar a respuestas facilitadas por otros. Podrán establecerse excepciones a este procedimiento por causas justificadas. En ese caso, se concederá a la otra parte un plazo para que formule observaciones, según proceda.

13. Para facilitar la constitución del expediente de la diferencia y en particular las referencias a las pruebas documentales presentadas por las partes, éstas numerarán consecutivamente sus pruebas documentales durante todas las etapas de la diferencia.

14. Las partes y los terceros presentarán resúmenes en las fechas previstas en el calendario del Grupo Especial. Los resúmenes que presenten las partes no excederán de 10 páginas. Los resúmenes que presenten los terceros no excederán de cinco páginas. Los resúmenes no se utilizarán en ningún caso en sustitución de las comunicaciones de las partes o los terceros. Sin embargo, el Grupo Especial reproducirá los resúmenes presentados por las partes y los terceros en la parte expositiva de este informe, con las modificaciones que considere convenientes.

15. Las partes y los terceros en este procedimiento tendrán el derecho de determinar la composición de sus propias delegaciones. Las delegaciones podrán incluir, como representantes del gobierno de que se trate, consejeros y asesores privados. Las partes y los terceros serán responsables de todos los miembros de sus delegaciones y se asegurarán de que todos ellos actúan de conformidad con las normas del ESD y el Procedimiento de Trabajo de este Grupo Especial, en particular en lo que respecta a la confidencialidad de las actuaciones. Antes de cada reunión del Grupo Especial, las partes facilitarán una lista de los integrantes de su delegación.

16. Una vez que se les haya dado traslado del informe provisional, las partes dispondrán al menos de dos semanas para presentar por escrito solicitudes de revisión de aspectos concretos del informe provisional y solicitar una nueva reunión con el Grupo Especial. El derecho de solicitar esa reunión deberá ejercerse a más tardar en el momento en que se presente la solicitud escrita de revisión. Una vez recibida una solicitud escrita de revisión, si no se solicita una nueva reunión con el Grupo Especial, las partes dispondrán al menos de siete días para presentar observaciones por escrito sobre las peticiones de revisión formuladas por escrito por las otras partes. Estas observaciones se limitarán estrictamente a las solicitudes escritas de revisión presentadas por escrito por las otras partes.

17. El Grupo Especial hará todo lo posible por facilitar a las partes versiones electrónicas de la parte expositiva de su informe, de su informe provisional y de su informe definitivo. En cualquier caso se facilitará a las partes copia en papel. En caso de que haya una diferencia entre la versión electrónica y la versión en papel de los documentos, prevalecerá la versión en papel.

18. Se aplicarán los siguientes procedimientos para la entrega de documentos:

a) Cada parte y cada tercero entregará todas sus notificaciones, incluidos los resúmenes mencionados en el párrafo 14 *supra*, directamente a todas las demás partes, incluidos los terceros cuando proceda, y confirmará que así lo ha hecho en el momento en que facilite esas comunicaciones al Grupo Especial.

b) Las partes y los terceros presentarán sus comunicaciones y sus respuestas escritas a las preguntas a más tardar a las 17.30 h del día en que venza el plazo que establezca el Grupo Especial, salvo que éste fije una hora diferente.

c) Las partes y los terceros facilitarán a la Secretaría copia de la versión escrita definitiva de sus declaraciones orales antes de las 17.30 h del primer día laborable posterior al último día de la reunión sustantiva de que se trate.

d) Las partes y los terceros facilitarán al Grupo Especial 10 copias de cada una de sus comunicaciones, incluidas las versiones escritas de las declaraciones orales y las respuestas a las preguntas. Todas estas copias se entregarán al Encargado del Registro de Solución de Diferencias, Sr. XXX (despacho xxxx).

e) Cuando las partes y los terceros entreguen una copia en papel de sus comunicaciones, entregarán también al Grupo Especial una copia electrónica de las mismas en un disquete o en un archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico en un formato compatible con el sistema informático de la Secretaría. Los correos electrónicos con los archivos adjuntos se enviarán al Registro de Solución de Diferencias (DSRegistry@wto.org) con copia a XXXXX (correo electrónico: XXXXX@wto.org.) y a XXXXX (XXXXX@wto.org).

ANEXO F

LISTAS DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS POR LAS PARTES

Índice		Página
Anexo F-1	Lista de pruebas documentales presentadas por los Estados Unidos	F-2
Anexo F-2	Lista de pruebas documentales presentadas por las Comunidades Europeas	F-8

ANEXO F-1

LISTA DE PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
1	László Kovács, Comisario de Fiscalidad y Unión Aduanera, discurso pronunciado en la Conferencia Internacional sobre el Código Aduanero Modernizado, (9 a 11 de marzo de 2005).
2	Timmermans Transport & Logistics BV v. Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal and Hoogenboom Production Ltd v. Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam, asuntos acumulados C-133/02 y C-134/02, 2004 ECR I-01125 (22 de enero de 2004) ("Timmermans").
3	The New Shorter Oxford English Dictionary, volumen I, página 28 (1993).
4	The New Shorter Oxford English Dictionary, volumen II, página 3488 (1993).
5	Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, incluidos todos sus anexos, modificado ("Código Aduanero Comunitario" o "CAC").
6	Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, incluidos todos sus anexos, modificado ("Reglamento de Aplicación" o "Reglamento de Aplicación del CAC").
7	Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC), establecido en virtud del artículo 2 del Reglamento (CEE) 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al Arancel Aduanero Común, introducción, *Diario oficial de la Unión Europea* C 103 (30 de abril de 2003).
8	Timothy Lyons, *EC Customs Law*, página 85 (2001).
9	Comisión Europea, Reglamento Interno del Comité del Código Aduanero, aprobado por la Sección de Legislación Aduanera General del Comité del Código Aduanero el 5 de diciembre de 2001, TAXUD/741/2001 Final ("Reglamento del Comité del Código Aduanero").
10	Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de julio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ("Decisión sobre Comitología").
11	Guenther F. Schaefer, "Committees in the EC Policy Process: A First Step Towards Developing a Conceptual Framework," en *Shaping European Law and Policy: The Role of Committees and Comitology in the Political Process*, página 14 (Robin H. Pedler y Guenther F. Schaefer, eds., 1996).
12	*Sony Computer Entertainment Europe Ltd. contra la Comisión de las Comunidades Europeas,* asunto T-243/01, párrafo 25 (Tribunal de Primera

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
	Instancia de las Comunidades Europeas, 30 de septiembre de 2003).
13	American Chamber of Commerce to the EU, Customs & Trade Facilitation Committee, documento sobre el proyecto de Código Aduanero Modernizado (30 de agosto de 2004).
14	Tribunal de Cuentas, Informe especial Nº 23/2000 sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana (valoración en aduana), junto con las respuestas de la Comisión, reimpreso en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C 84 (14 de marzo de 2001) ("informe sobre valoración del Tribunal de Cuentas").
15	Michael Lux, Jefe de la Unidad de Legislación Aduanera, Comisión Europea, *EU enlargement and customs law: What will change?* (Taxud/463/2004, Rev. 1) (14 de junio de 2004).
16	*Wiener S.I. GmbH* v. *Hauptzollamt Emmerich*, asunto C-338/95, Opinión del Abogado General, 1997 ECR I-06495 (10 de julio de 1997) ("*Wiener*, Op. del AG").
17	*Peacock AG* v. *Hauptzollamt Paderborn*, asunto C-339/98, Opinión del Abogado General, 2000 ECR I-08947 (28 de octubre de 1999).
18	*Vtech Electronics (UK) plc* v. *Commissioners of Customs & Excise*, [2003] EWHC 59 (Ch) (29 de enero de 2003).
19	Comisión Europea, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, página de consulta sobre las IAV, http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/ebtiquer?Lang=EN, consultada por última vez el 10 de julio de 2005.
20	*Commissioners of Customs and Excise* v. *Anchor Foods, Ltd.*, [1999] V & DR 425 (1998).
21	*Timmermans Transport & Logistics BV* v. *Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal* y *Hoogenboom Production Ltd* v. *Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam*, asuntos acumulados C-133/02 y C-134/02, Opinión del Abogado General, 2003 ECJ CELEX LEXIS 663 (11 de septiembre de 2003) ("*Timmermans*, Op. del AG").
22	IAV expedida en 1999, y con validez hasta 2002, por las autoridades aduaneras del Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos.
23	Hauptzollamt Bremen, carta a Bautex-Stoffe GmbH, de 22 de septiembre de 2004, con la Decisión (original y traducción al inglés) ("Decisión Bautex-Stoffe ").
24	Carta del Sr. Chriticles Mwansa, Director, Organización Mundial de Aduanas, Dirección de Asuntos Arancelarios y Comerciales, al Sr. Myles B. Harmon, Director de la Oficina de Reglamentos y Resoluciones del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, 26 de octubre de 2004.

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
25	Carta de Marc De Schutter, Servicios del Gobierno Federal, Sección Financiera, Administración de Policía de Fronteras e Impuestos a la Importación, Costa Occidental, al Inspector de Policía de Fronteras e Impuestos a la Importación en Amberes - C.T.D.A.I. (26 de noviembre de 2004) (original y traducción al inglés).
26	Reglamento 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, por el que se modifica el Anexo I del Reglamento (CEE) 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al Arancel Aduanero Común, *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 30 de octubre de 2004, páginas 575 y 576
27	Reglamento 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, por el que se modifica el Anexo I del Reglamento (CEE) 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al Arancel Aduanero Común, *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 30 de octubre de 2004, páginas 544 y 545.
28	Reglamento (CE) 493/2005 del Consejo, de 16 de marzo de 2005, *Diario Oficial de la Unión Europea* L 82/1 (31 de marzo de 2005).
29	*Additional tax assessments again reveal the Netherlands to be the odd one out in the EU*, Comunicado de prensa de Greenberg Traurig (24 de mayo de 2005).
30	*Foreign Trade Association* (Asociación de Comercio Exterior), Cuestionario sobre el tema "Facilitación del comercio: facilitación del comercio en los Estados Miembros de la OMC" (marzo de 2005) ("Cuestionario de la FTA ").
31	*Jose Teodoro de Andrade* v. *Director da Alfândega de Leixões*, asunto C-213/99, 2000 ECR I-11083 (7 de diciembre de 2000).
32	Comisión Europea, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, TAXUD/447/2004 Rev 2, *An Explanatory Introduction to the Modernized Customs Code* (24 de febrero de 2005).
33	Comisión Europea, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera TAXUD/458/2004 - Rev 4, *Draft Modernized Customs Code* (11 de noviembre de 2004).
34	HM Customs & Excise, Notice 237, "Processing Under Customs Control (PCC)" (junio de 2003).
35	Bulletin officiel des douanes no. 6527 (31 de agosto de 2001, modificado por el BOD Nº 6609, de 4 de noviembre de 2004).
36	*Customs & Excise Commissioners* v. *Bantex Ltd*., [2003] EWHC 3009 (CH) (10 de diciembre de 2003).
37	Tribunal de Cuentas, Informe especial Nº 8/99 sobre las fianzas y garantías previstas en el Código Aduanero Comunitario para proteger la percepción de los recursos propios tradicionales, acompañado de las respuestas de la Comisión, *reimpreso en el Diario Oficial* C 70/1 (10 de marzo de 2000).
38	Office of the Revenue Commissioners, Appeal Procedure Relating to Customs Matters (enero de 1996).

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
39	HM Customs and Excise, Notice 990, Excise and Customs Appeals (marzo de 2003).
40	Wet van 2 juli 1959, houdende regelen, welke aan een aantal rijksbelastingen gemeen zijn.
41	Carta de la Oberfinanzdirektion Hamburg a HZA Bremen, relativa al recurso de Bautex-Stoffe GmbH, 3 de febrero de 2003 (original y traducción al inglés).
42	Versión consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, *reimpreso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C 325/33 (24 de diciembre de 2002) ("Tratado de la CE").
43	Decisiones y directrices nacionales de acompañamiento al capítulo 59 del Arancel de Aduanas alemán (original y traducción al inglés).
44	Examen de las Políticas Comerciales, Unión Europea, Acta de la Reunión, Addendum, WT/TPR/M/102/Add.2, páginas 36 y 37 (31 de marzo de 2003); Examen de las Políticas Comerciales, Unión Europea, Acta de la Reunión, Addendum, WT/TPR/M/72/Add.1, páginas 4 y 5 (26 de octubre de 2000); Examen de las Políticas Comerciales, Unión Europea, Acta de la Reunión, WT/TPR/M/30, para. 37 (26 de enero de 1998).
45	Examen de las Políticas Comerciales, Comunidades Europeas, Acta de la Reunión, Addendum, WT/TPR/M/136/Add.2, p. 17 (24 de enero de 2005).
46	Reglamento (CE) Nº 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) Nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al Arancel Aduanero Común, *Diario Oficial de la Unión Europea*, 30 de octubre de 2004, páginas 503 a 505 (notas al capítulo 84).
47	Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por la otra, artículo 79 (concluido el 26 de abril de 2002).
48	Sistema Armonizado, Nota explicativa, partida 59.07.
49	Documento *Elements of Potential EC Customs Reform* (22 de diciembre de 2004).
50	Carta de la Oficina Principal de Aduanas de Hamburgo-Waltershof a ORNATA GmbH, 29 de julio de 1998 (original y traducción al inglés).
51	IAV número UK103424227 (fecha de inicio de la validez, 17 de marzo de 1999).
52	Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 128/2004/OV contra la Comisión Europea (2 de junio de 2004).
53	*The New Shorter Oxford English Dictionary*, Vol. II, páginas 2144-45 (1993).
54	*The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 28 (1993)
55	*The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 877 (1993)

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
56	*The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen II, página 2173 (1993)
57	*The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 35 (1993)
58	*The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen I, página 516 (1993)
59	Philippe De Baere, *Coping with customs in the EU: The uniformity challenge: Judicial review of customs decisions and implementing legislation*, presentación en la sección de Derecho Internacional de la ABA (27 de octubre de 2005).
60	Reglamento (CE) Nº 1810/2004 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2004, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) Nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al Arancel Aduanero Común, *Diario Oficial de la Unión Europea*, 30 de octubre de 2004, página 573.
61	Aplicación uniforme de la Nomenclatura Combinada (NC), *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 6 de julio de 2001, C 190/10.
62	Notas explicativas de la Nomenclatura Combinada de las Comunidades Europeas, *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 13 de julio de 2000, página 316.
63	HM Customs & Excise, Tariff Notice 19/01 (julio de 2001).
64	Vorschriftensammlung Bundesfinanzverwaltung, VSF-Nachrichten N 46 2003 (5 de agosto de 2003) (aviso aduanero de Alemania sobre la aplicación de las disposiciones de las CE relativas al reembolso/desgravación y recaudación de derechos de importación, con la traducción no oficial al inglés).
65	IAV emitida por las autoridades aduaneras españolas, que clasifica a las cámaras de video en la subpartida 8525.40.91, con fecha inicial de validez de junio de 2004.
66	Fallo de la *Cour de Cassation*, asunto Nº 35, 29 de enero de 1998.
67	Fallo de la *Cour de Cassation*, asunto Nº 143, 13 de junio de 2001.
68	Fallo de la *Cour de Cassation*, asunto Nº 144, 13 de junio de 2001.
69	Loi de finances rectificative pour 2002 (No. 2002-1576 du 30 décembre 2002). J.O. No. 304 du 31 décembre 2002, p. 22070 texte Nº 2, Art. 44 (enmienda del Código Aduanero, Art. 354).
70	*Sony Computer Entertainment Europe Ltd. v. Commissioners of Customs and Excise*, fallo de la High Court of Justice, Chancery Division, [2005] EWHC 1644 (Ch) (27 de julio de 2005) ("*Sony v. Commissioners*").
71	*Intermodal Transports BV v. Staastsecretaris van Financiën*, asunto C-495, página 3 (15 de septiembre de 2005).
72	Edwin A. Vermulst, *EC Customs Classification Rules: Does Ice-Cream Melt?*, páginas 20 y 21, http://www.vvg-law.com/publications.htm.
73	Comisión Europea, *External and intra-European Union trade*, páginas 94 y 95 (septiembre de 2005).

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
74	Edwin A. Vermulst, *EC customs Classification Rules: Should Ice Cream Melt?*, 15 Mich. J. Int'l L. 1241, 1314-15 (1994).
75	Carta de Mark MacGann, Director General, EICTA, a Manuel Arnal Monreal, Director Internacionales y Cuestiones Arancelarias, Comisión Europea (2 de septiembre de 2005).
76	HM Customs & Excise, Tariff Notice 13/04.
77	Douanerechten. Indeligen van bepaalde LCD monitoren in de gecombineerde nomenclatuur, No. CPP2005/1372M (8 de julio de 2005) (texto original y traducción no oficial al inglés).
78	IAV DEM/2975/05-1 (fecha inicial de validez, 19 de julio de 2005).
79	Declaración jurada de Mark R. Berman, Presidente y Director Ejecutivo de Rockland Industries, Inc. (10 de noviembre de 2005).
80	Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, publicado en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, páginas C 80/22 a C 80/24 y C 80/80 (10 de marzo de 2001).
81	Carta de Mark MacGann, Director General, EICTA, a Manuel Arnal Monreal, Director Internacionales y Cuestiones Arancelarias, Comisión Europea (6 de diciembre de 2005).
82	El Defensor del Pueblo Europeo - En pocas palabras …, página 2.
83	Decisión del Defensor del Pueblo Europeo sobre la reclamación 1817/2004/OV contra la Comisión Europea (7 de noviembre de 2005).

ANEXO F-2

LISTA DE PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
1	Inside US Trade, 12 de noviembre de 2004, "US Dispute on EU Customs Garners Little Industry Reaction".
2	Reglamento standard - Decisión 1999/468/CE del Consejo.
3	Lista de los Comités que ayudan a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución.
4	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 6/64, Costa/E.N.E.L.
5	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 106/77, Simmenthal.
6	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 11/70, Internationale Handelsgesellschaft.
7	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 26/62, van Gend & Loos.
8	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 103/88, Fratelli Costanzo.
9	Opinión 1/91 del Tribunal de Justicia, Espacio Económico Europeo I.
10	Koen Lenaerts/Piet van Nuffel, Constitutional Law of the European Union, 2ª edición, páginas 606 a 611.
11	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre relaciones con el reclamante respecto de infracciones del derecho comunitario.
12	Reglamento de la Comisión Europea.
13	Opinión 1/75 del Tribunal de Justicia, Norma sobre gastos locales.
14	Decisión del Consejo sobre la conclusión del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Estados Unidos de América sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera.
15	Decisión del Consejo sobre la conclusión del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre la intensificación y ampliación del Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera para incluir la cooperación en relación con la seguridad de los contenedores y cuestiones conexas.
16	Reglamento (CEE) Nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y el Arancel Aduanero Común.
17	Reglamento Nº 1810/2004 de la Comisión por el que se modifica el Anexo I del Reglamento (CE) Nº 2658/87 del Consejo.
18	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 38/76, Luma.
19	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-233/88, Gijs van de Kolk.
20	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-130/02, Krings.

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
21	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-401/93, GoldStar.
22	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-265/89, Vismans.
23	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-40/84, Casteels.
24	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asunto T-243/01, Sony.
25	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-396/02, DFDS.
26	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 14/70, Deutsche Bakels.
27	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 183/73, Osram.
28	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 149/73, Witt.
29	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 259/97, Clees.
30	Notas explicativas a la Nomenclatura Combinada de las Comunidades Europeas.
31	Sentencia del Tribunal de Justicia, asuntos acumulados 69 y 70/76, Dittmeyer.
32	Directrices administrativas sobre el sistema europeo de información arancelaria vinculante (IAV-EBTI).
33	Lista de las autoridades aduaneras competentes a efectos de recibir solicitudes de información arancelaria vinculante o de expedir esta información.
34	Interfaz de búsqueda de la base de datos EBTI reservada a las autoridades aduaneras de los Estados miembros y a la Comisión.
35	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asuntos acumulados T-133/98 y T-134/98, Hewlett Packard.
36	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-219/88, Malt.
37	Compendio de textos relativos al valor en aduana.
38	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 68/88, Comisión/Grecia.
39	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-326/88, Hansen.
40	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-36/94, Siesse.
41	Resolución del Consejo, de 29 junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior.
42	Reglamento (CE) Nº 515/97 del Consejo relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria.
43	Decisión 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad (Aduanas 2007).
44	Decisión del Consejo 2000/597 sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas.
45	Reglamento 1150/2000 del Consejo de aplicación de la Decisión 2000/597.

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
46	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-460/01, Comisión/Países Bajos.
47	Páginas de Internet dedicadas a las consultas públicas sobre el Código Aduanero Modernizado.
48	Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
49	Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
50	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-366/88, Francia/Comisión.
51	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 25/62, Plaumann.
52	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-142/00 P, Comisión/Nederlandse Antillen.
53	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 294/83, Les Verts.
54	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 314/85, Foto-Frost.
55	Nota informativa sobre las peticiones de los tribunales nacionales de decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia.
56	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-224/01, Köbler.
57	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 244/80, Foglia v Novello.
58	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf.
59	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 29/68, Milchkontor v Hauptzollamt Saarbrücken.
60	Sentencia del Tribunal de Justicia, asuntos acumulados C-485/93 y C-486/93, Simitzi.
61	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-453/00, Kühne & Heitz.
62	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asunto T-195/97, Kia Motors.
63	Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Printz v. United States.
64	Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, The Federalist Papers, páginas 130 a 133.
65	19 US Code 1514.
66	19 US Code 1515.
67	28 US Code 1581.
68	28 US Code 1295.
69	Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Claflin v. Houseman.
70	Aclaración y mejora de los artículos V, VIII y X del GATT y de las cuestiones relacionadas con el trato especial y diferenciado - Propuestas presentadas por los Miembros de la OMC. Recopilación de la Secretaría, TN/TF/W/43/Rev. 1.
71	Comunicación de los Estados Unidos, TN/TF/W/11.

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
72	Comunicado de prensa del USTR, "Los Estados Unidos solicitan el establecimiento de un grupo especial de la OMC contra la Unión Europea por el sistema aduanero europeo.
73	Registro de Comitología de la Comisión Europea, portal de Internet.
74	Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
75	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-338/95, Wiener.
76	HM Customs and Excise, Decisión de 23 de marzo de 2004.
77	Reglamento 1810/2004 de la Comisión (extractos).
78	Reglamento 1458/97 de la Comisión.
79	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-161/88, Binder.
80	Resolución NY H81427 de Aduanas de los Estados Unidos.
81	Resolución HQ 965343 de Aduanas de los Estados Unidos.
82	Resolución HQ 966508 de Aduanas de los Estados Unidos.
83	Resolución HQ 967030 de Aduanas de los Estados Unidos.
84	Carta de EICTA, 16 de noviembre de 2004.
85	Reglamento 634/2005 de la Comisión.
86	Resolución HQ 966270 de Aduanas de los Estados Unidos.
87	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-339/98, Peacock.
88	Reglamento 763/2002 de la Comisión.
89	Reglamento 444/2002 de la Comisión.
90	Guía sobre auditorías de aduana.
91	Comité del Código Aduanero, resumen de las conclusiones de la reunión celebrada el 1º de octubre de 2004.
92	Comité del Código Aduanero, resumen de las conclusiones de la reunión celebrada el 20 de diciembre de 2004.
93	Artículo 8 de la Douanewet (Ley de Aduanas).
94	Tratado de la Unión Europea.
95	The New Shorter Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1993.
96	María Moliner, Diccionario del uso del español, Editorial Gredos, Madrid, 1988.
97	Le nouveau petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2003.
98	Reglamento de la Ley fiscal general (Países Bajos) (Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997).
99	Sentencia del USCIT de 1º de septiembre de 2005, Simon Marketing, Inc v. United States, asunto 00-332.

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
100	Sentencia USCIT de 12 de agosto de 2005, Conair Corporation v. United States, asunto 02-383.
101	Sentencia USCIT de 13 de junio de 2005, BASF Corp., v. United States, asunto 01-118.
102	Orden del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 2000, asunto C-17/98, Emesa Sugar.
103	Número de reuniones del Comité del Código Aduanero, por secciones.
104	Cuestiones examinadas por el Comité del Código Aduanero - Sección de Valoración.
105	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 272/86, Comisión/Grecia.
106	Nota de las Aduanas de los Estados Unidos a la Comisión Europea de fecha 14 de julio de 2005.
107	Reglamento del Tribunal de Justicia.
108	Reglamento del Tribunal de Primera Instancia.
109	Instrucciones prácticas del Tribunal de Justicia.
110	Instrucciones prácticas del Tribunal de Primera Instancia.
111	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 66/80, Spa International Chemical Corporation.
112	Sentencia del Tribunal de Justicia, asuntos acumulados 28 a 30/62, Da Costa.
113	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-71/02, Karner.
114	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 230/78, Eridania-Zuccherifici.
115	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 93/71, Leonesio.
116	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 94/77, Fratelli Zerbone.
117	Lista de medidas previstas en el programa Aduanas 2007.
118	Anexo II del Reglamento 1810/2004 de la Comisión.
119	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-149/96, Portugal/Consejo.
120	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 377/02, Van Parys.
121	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asunto T-19/01, Chiquita/Comisión.
122	Elements of Potential EC Customs Reform, documento enviado por los Estados Unidos a las CE el 22 de diciembre de 2004.
123	The New Shorter Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1993 (extractos).
124	María Moliner, Diccionario del uso del español, Editorial Gredos, Madrid, 1988 (extractos).
125	Le nouveau petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2003 (extractos).
126	Lista de las organizaciones presentes en las reuniones del Comité.

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
127	Nota explicativa de la partida 5907 del SA.
128	Acuerdo de cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera entre la Comunidad Europea y la República de Corea.
129	19 CFR 177.9, Effect of Ruling Letters.
130	Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, United States v. Mead Corp.
131	Carta de Ornata GmbH de 16 de septiembre de 1998.
132	Extracto del Arancel Aduanero Comunitario.
133	US Customs, Ruling Letter de 27 de octubre de 2004 (HQ 967013).
134	US Customs, Classification of Flat Panel Displays, enero de 2004.
135	Reglamento (CE) Nº 1165/95 de la Comisión.
136	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-463/98, *Cabletron.*
137	US Customs, Modification/Revocation of Ruling Letters and Revocation of Tariff Treatment Relating to Tariff Classification of Certain Networked Equipment.
138	Carta de la Comisión Europea de 20 de diciembre de 2000.
139	Carta de Ernst and Young de 23 de diciembre de 2003.
140	Carta de anuncio formal a España, 21 de marzo de 2005.
141	Resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
142	Orden del Tribunal, asunto C.206/03, SmithKline Beecham.
143	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-91/02, Hannl + Hofstetter.
144	Informe Final del Grupo del Proyecto Aduanas 2002 encargado de examinar posibles instrumentos de trabajo para ayudar al intercambio de información en asuntos de valoración en aduana.
145	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-150/94, Reino Unido/Consejo.
146	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asunto T-13/09, Pfizer Animal Health.
147	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-192/01, Comisión/Dinamarca.
148	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asunto T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd.
149	Cuadros de correspondencia 2002 - 2005, DG TAXUD
150	Una Guía de Análisis de Riesgos y Controles Aduaneros.
151	Marco Unificado de Gestión de Riesgos.
152	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asuntos acumulados T-44/01, T-119/01 y T-126/01, Vieira.

PRUEBA DOCUMENTAL	TÍTULO
153	Cartas de la Comisión, de 1996, relativas al reembolso y recuperación de derechos aduaneros cuando se publica un reglamento de clasificación arancelaria.
154	Documento informativo sobre la aplicación de los artículos 220 2) b) y 239 del Código Aduanero Comunitario.
155	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-273/90, Meico-Fell.
156	Reglamento 1810/2004 de la Comisión (extractos).
157	Reglamento 1400/2001 de la Comisión.
158	Cartas de la Comisión a las autoridades aduaneras de los Estados miembros relativa a la clasificación de la consola PlayStation2 de Sony.
159	Sentencia del VAT and Duties Tribunal del Reino Unido.
160	Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 283/81, CILFIT.
161	Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, Slip Op. 03-6.
162	Resolución HQ954622 de las Aduanas de los Estados Unidos.
163	Proyecto de reglamento de clasificación, documento TAXUD/573/2005/Rev.2EN/FR/DE
164	Programa de la 286ª reunión del Comité del Código Aduanero, Sección de la Nomenclatura Arancelaria y Estadística (mecánica/varios).
165	Carta de la Comisión Europea a EICTA, 14 de diciembre de 2005.
166	The New Shorter Oxford Dictionary (extractos).